

## “ANEXO 2 FICHAS ANÁLISIS DE SENTENCIAS”

### SENTENCIAS DE 1994

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-519/94
Fecha de la sentencia	veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
Demandante	Carlos Eduardo Medellín Becerra, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República
Demandado	
Conoció en primera instancia	Magistrado Ponente:
	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLE el Convenio sobre Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, así como su ley aprobatoria, esto es, la Ley 165 del nueve (9) de noviembre de 1994.
Conoció en segunda instancia	NO
Decision	NO
Hechos jurídicos	<p>MEDIO AMBIENTE SANO-Protección/BIODIVERSIDAD</p> <p>Esta Corporación es consciente de que si bien la protección jurídica del derecho a gozar un ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los cuales constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general. Colombia es uno de los países que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor diversidad.</p> <p>RECURSOS NATURALES-Desarrollo sostenible</p> <p>La Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no sólo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales sino que además, al establecer el llamado tríptico económico determinó en él una función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y del bienestar comunitario. Del contenido de las disposiciones constitucionales citadas se puede concluir que el Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre compatibles el</p>

	<p>desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico.</p> <p><b>CALIDAD DE VIDA-Mejoramiento</b></p> <p>Nuestra Carta Política interpreta cabalmente la obligación de hacer del mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, un propósito central del Estado colombiano. Así, el Preámbulo y los artículos 1o. y 2o. superiores, prevén la vigencia de un orden justo en el cual los derechos de las personas se encuentren protegidos por las autoridades y respetados por los demás ciudadanos. De igual forma, la Constitución hace un especial énfasis en el papel interventor del Estado en la economía, a través de la ley, con el fin de que por intermedio de diferentes acciones, se procure una mejor calidad de vida. Dentro de esas acciones, cabe destacar el deber de regular el control de la calidad de bienes y servicios prestados a la comunidad, la racionalización de la economía y el cumplimiento de las finalidades sociales del Estado, en particular, la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Si el mejoramiento de la calidad de vida es una de las principales metas del Estado colombiano, entonces el amparo y cuidado de las condiciones ecológicas son el pilar esencial sobre el cual deben recaer todas las acciones que para ese efecto se implementen.</p> <p><b>TRATADO INTERNACIONAL-Vicio de Procedimiento subsanable/CONVENIO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA</b></p> <p>La Corporación determinó que el vicio de procedimiento era subsanable, razón por la cual, con fundamento en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución Política y en el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, ordenó al h. Congreso de la República, y en particular a la plenaria de la Cámara de Representantes, presentar ponencia y dar último debate al proyecto de ley No. 25/94 Senado y 44/94 Cámara, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, dentro de los términos señalados por la Constitución Política (Art. 160). Asimismo, al tratarse de un vicio en la formación de una ley, la Corte consideró necesario disponer que, una vez aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley mencionado, el señor presidente de la República procediera a impartir la sanción correspondiente a la ley.</p> <p><b>CONVENIO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA-Realización de objetivos</b></p> <p>La Corte reconoce que la realización de los objetivos contenidos en el Convenio bajo estudio, depende de los acuerdos multi o bilaterales que se desarrollen por parte de los Estados contratantes, ya sea a través de la suscripción de actas, de protocolos o de convenios, en los cuales Colombia debe jugar un importante papel en el ámbito internacional, pues sin duda alguna el Convenio contiene disposiciones de sumo interés para los Estados en vía de desarrollo que son propietarios de una considerable riqueza genética</p>
--	--

	y que, además, son catalogados como los de mayor biodiversidad en el mundo. Por ello, hoy en día se discute la necesidad de establecer compromisos reales en los cuales la transferencia de tecnología o de información a que hace alusión los artículos 17, 18 y 19 del Convenio, implique también la preparación científica de los miembros de los países en desarrollo.
Decision de la Corte	Declarar EXEQUIBLE el Convenio sobre Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, así como su ley aprobatoria, esto es, la Ley 165 del nueve (9) de noviembre de 1994.
Tiene salvamento	NO
Resumen del mismo	NO
Tiene aclaraciones	NO
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-353/94
Fecha de la sentencia	Diez días de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Demandante	Presidencia del Senado de la República
Demandado	
Conoció en primera instancia	Magistrado Ponente:Dr. Jorge Arango Mejía.
Decision	<p>Primero.- Decláranse EXEQUIBLES los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 del proyecto de ley estatutaria número 214/94 Cámara y 183/94 Senado "Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral."</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 4o. del mismo proyecto, salvo la expresión "Los nativos del Departamento Archipiélago, podrán votar con la sola presentación de su cédula de ciudadanía." del inciso cuarto, que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Tercero.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 15 del mismo proyecto.</p> <p>Cuarto.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 16 del mismo proyecto, salvo las expresiones "de un familiar " y "y sus familiares" contenidas en el inciso primero y en parágrafo que se declaran INEXEQUIBLES.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>LEY ESTATUTARIA ELECTORAL</p> <p>ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES-Requisitos aplicables a los votantes</p> <p>Habrá de declararse la inconstitucionalidad de la última frase del inciso cuarto del artículo que dice "Los nativos del Departamento Archipiélago, podrán votar con la sola presentación de su cédula de ciudadanía.", porque, de no hacerlo, dichos nativos podrían permanentemente votar con la sola presentación de la cédula de ciudadanía, y tal cosa iría en contradicción respecto del artículo 36 del decreto 2762 de 1991, decreto expedido con base en el artículo 310 de la Constitución. El mencionado artículo 36, que hace parte de una serie de medidas de control a la densidad poblacional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declarado exequible por esta Corporación, ordena a todas las autoridades del Archipiélago (sin exceptuar a las electorales) exigir el porte de la tarjeta de residente o residente temporal para la identificación de quienes allí se encuentren.</p> <p>SANCION A JURADO</p> <p>Para el caso de los jurados que no concurran a la mesa correspondiente, o que la abandonen, o que no firmen las actas de</p>

	<p>escrutinio, la Corte hace la misma observación que para el caso de los nominadores o jefes de personal: antes de imponer las sanciones a que haya lugar, se debe garantizar el debido proceso.</p> <p><b>FAX-Envío de actas electorales</b></p> <p>Por la ubicación del inciso, parecería que se refiere sólo a las actas enviadas por fax en las votaciones realizadas en el exterior, pero como dentro del mismo párrafo se fijan procedimientos para resolver desacuerdos entre delegados; la forma como se notificará la declaración de resultados y la proclamación de la elección de Presidente y Vicepresidente, no se puede simplemente limitar por el aspecto de ubicación el alcance del mencionado inciso. Además, en la primera parte del párrafo se le concede facultad al Registrador para que "los resultados consolidados de la respectiva embajada o consulado, (sean) enviados por cualquier medio viable para la transmisión de datos, que el Registrador del Estado Civil considere confiable, según el estado de la tecnología." Y uno de tales medios tecnológicos actuales, es el fax. La Corte considera que lo que quiso decir el legislador en este preciso aspecto, es que las actas que se envíen por fax dentro del país y desde el exterior, tendrán el mismo valor que las originales.</p> <p><b>PROBLEMAS DE TECNICA LEGISLATIVA/LEY ESTATUTARIA-Materia propia de Ley ordinaria</b></p> <p>El hecho de haberse regulado una materia propia de una ley ordinaria en una ley estatutaria, no la hace por si inconstitucional, pues, en últimas, es un problema de técnica legislativa. Sin embargo, se advierte que esta norma, por haber sido incluída en una ley estatutaria, para su reforma requerirá de una ley de igual carácter, es decir, por una ley estatutaria. Lo anterior, por razones de seguridad jurídica.</p> <p><b>ENCUESTAS ELECTORALES</b></p> <p>Esta Corporación ha sostenido en varios de sus fallos, que el día de las elecciones, por ser un día donde la democracia alcanza su más alta expresión al permitir al pueblo elegir a sus representantes, sin más condicionamientos que su propia conciencia, deben tomarse las medidas necesarias para que el elector no se vea constreñido al momento de tomar su decisión. Por esa razón, en la sentencia C-089 de 1994, se declaró constitucional la restricción según la cual, en el día de las elecciones, el suministro de datos provenientes de los medios de comunicación, tales como encuestas o muestreos sobre el comportamiento electoral no está permitido, al considerar que ellas podían interferir "en el desarrollo normal y espontáneo del respectivo certamen y dar lugar a equívocos o informaciones que desorienten o desalienten a los votantes."</p> <p><b>CONSULTAS INTERNAS DE LOS PARTIDOS</b></p> <p>La norma sólo puede tener operancia para las elecciones que deben realizarse este año, pues en él, coincidieron los plazos constitucionales para la elección de Presidente, gobernadores y alcaldes. Para próximas elecciones, será necesario fijar nuevos</p>
--	--

	<p>términos para la realización de estas consultas, teniendo en cuenta las previsiones que al respecto hace la ley estatutaria sobre partidos políticos, en lo que toca con las consultas internas.</p> <p>CIRCUNSCRIPCION ESPECIAL DE PAZ/FACULTAD TRANSITORIA-Término</p> <p>Basta comparar las dos normas para concluir que el último versa sobre materias diferentes. Por lo mismo, no puede pretenderse que con base en él se faculte al Gobierno Nacional para reglamentar unas "Circunscripciones Especiales para la Paz para los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales", que no se previeron por el Constituyente, y ni siquiera por el legislador. Además, la facultad concedida por el artículo transitorio 13, ya venció, pues se confirió por tres años contados a partir de la entrada en vigencia de la Constitución. No existe disposición constitucional, permanente ni transitoria, que permita dictar normas excepcionales en relación con la elección de Concejales y Diputados. Ninguna de las normas citadas en la disposición que se examina, permite al Gobierno Nacional dictar esta reglamentación excepcional.</p>
Decision de la Corte	<p>Primero.- Decláranse EXEQUIBLES los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 del proyecto de ley estatutaria número 214/94 Cámara y 183/94 Senado "Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral."</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 4o. del mismo proyecto, salvo la expresión "Los nativos del Departamento Archipiélago, podrán votar con la sola presentación de su cédula de ciudadanía." del inciso cuarto, que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Tercero.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 15 del mismo proyecto.</p> <p>Cuarto.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 16 del mismo proyecto, salvo las expresiones "de un familiar " y "y sus familiares" contenidas en el inciso primero y en parágrafo que se declaran INEXEQUIBLES.</p>
Tiene salvamento	NO
Resumen del mismo	NO
Tiene aclaraciones	SI
Resumen de las aclaraciones	<p>ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES-Autonomía/DERECHOS POLITICOS-Excepciones (Aclaración de voto)</p> <p><i>La Constitución autoriza al Legislador, en relación con el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para expedir normas especiales en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico. Por otra parte, permite al Legislador limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad poblacional, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles, con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el medio ambiente y los recursos naturales del Archipiélago. La Carta Política, en ningún momento y</i></p>

	<p><i>de ninguna manera, confiere facultades al Legislador para establecer excepciones a los derechos políticos. Al hacerlo, la norma demandada vulnera el artículo 310 de la Constitución.</i></p> <p>GOBERNADOR DE SAN ANDRES-Domicilio/DERECHO A LA IGUALDAD-vulneración (Aclaración de voto)</p> <p>Al fijar como requisito para ser elegido gobernador del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la condición de tener domicilio en el territorio del Departamento, por más de diez (10) años, cuando el candidato no ha nacido en el mismo, viola el derecho fundamental a la igualdad, principalmente por establecer una diferencia específica irrelevante que rompe con el principio de homogeneidad en materia de elección de los Gobernadores. La estructura política del Estado no debe ser afectada por las características singulares de una zona o territorio del país. No existe, una razón válida que justifique la desproporción entre el término de tres años para poder ejercer el derecho a elegir, y el plazo triplicado que la norma demandada establece para poder ser elegido Gobernador.</p>
--	--

## SENTENCIAS DE 1995

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-423/95
Fecha de la sentencia	Septiembre veintiuno (21) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Demandante	JORGE CHILD, JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA Y CARLOS OSSA ESCOBAR.
Demandado	Acci3n p3blica de inconstitucionalidad contra el numeral 2.7 (parcial), del art3culo 1 de la Ley 168 de 1994. Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995.
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	DECLARAR INEXEQUIBLE el numeral 2.7 del art3culo 1 de la ley 168 de 1994, en lo correspondiente a la partida equivalente a \$ 872.8 mil millones de pesos, correspondiente a los recursos incorporados como otros recursos de capital excedentes financieros de la Naci3n, recaudados en 1994, por concepto de los contratos de concesi3n a particulares del servicio p3blico de telefon3a m3vil celular.  El Gobierno Nacional deber3 darle cumplimiento al art3culo 15 de la Ley 179 de 1994, a partir de la vigencia fiscal de 1995, en relaci3n con la ejecuci3n de este fallo y para determinar la cuota m3nima anual que corresponde distribuir entre las entidades beneficiarias del situado fiscal y de las transferencias a los municipios.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	A. Normas Constitucionales que se Consideran Infringidas.  Los demandantes consideran que las disposiciones acusadas vulneran los art3culos 356, 357 y 358 de la Constituci3n Nacional.  B. Los Fundamentos de la Demanda.  Se3alan los demandantes que la incorporaci3n de los recursos percibidos por el Estado por concepto de los contratos de concesi3n a particulares de la telefon3a m3vil celular, en el rubro de recursos de capital, excedentes financieros de la Naci3n, es equivocada y contraria a lo dispuesto en los art3culos 356 y 357 de la C.N., por cuanto dichos recursos corresponden a lo definido como rentas contractuales constitutivas de ingresos corrientes de la Naci3n, seg3n lo dispuesto en el art3culo 20 de la Ley 38 de 1989, Ley Org3nica del Presupuesto.



	<p>En su opinión, la norma es inconstitucional específicamente en la parte correspondiente a "OTROS RECURSOS DE CAPITAL", por cuanto en ella se incluyen \$ 872.8 MIL MILLONES DE PESOS provenientes de los contratos de concesión a particulares del servicio de telefonía móvil celular celebrados en 1994, los cuales se incorporaron equivocadamente como excedentes financieros de la Nación, según se desprende del numeral 2.4.3.3. del documento PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1995. (pág. 47), cuando en realidad ellos configuraban rentas contractuales y por lo tanto constituían ingresos corrientes no tributarios, al tenor de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38 de 1989, Ley Orgánica del Presupuesto, vigente en la época en que se causaron y recaudaron dichos recursos.</p> <p>Tal disposición, arguyen los demandantes, es contraria a lo dispuesto en los artículos 357 y 358 de la C.N., los cuales determinan el porcentaje del situado fiscal de los departamentos y distritos y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.</p> <p>Señalan los demandantes que siendo la concesión un contrato tipificado y regulado en la legislación colombiana, los ingresos que provengan de aquellos que se celebraron para adjudicar a particulares el servicio de telefonía móvil celular, incuestionablemente deben ingresar al presupuesto como ingresos corrientes de la Nación y no como recursos de capital, asignación ésta que implica para los departamentos y municipios la pérdida de significativos recursos, que debían destinarse a financiar áreas prioritarias de inversión social como educación y salud.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES.</p> <p>INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION/EXCEDENTES FINANCIEROS (Salvamento de voto)</p> <p><i>Cuando los artículos 356, 357 y 358 de la Constitución se refieren a los "ingresos corrientes" de la Nación, se están refiriendo a los que usualmente nutren sus arcas. Una de las acepciones de la palabra "corriente", según el diccionario de la Academia, es ésta: "Medio común, regular, no extraordinario". No puede ser ingreso corriente uno que, como éste, originado en la concesión de la telefonía celular, sólo se da una vez en muchos años. Y que nunca antes se había presentado.</i></p>

	<p>PRESUPUESTO NACIONAL-Ejecución de conformidad con norma derogada (Salvamento de voto)</p> <p><i>La equivocada decisión que no compartimos, se ha basado en la circunstancia de estar vigente, al momento de aprobarse la ley demandada, una norma de la ley 38 de 1989, anterior ley orgánica del Presupuesto. Se olvida, sin embargo, que al momento de ejecutarse el Presupuesto de la Nación, ya la norma ha sido derogada, y está vigente la ley 179 de 1994, que no menciona para nada las rentas contractuales como rentas ordinarias. Y, según el artículo 352 de la Constitución, la ley orgánica regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de todos los presupuestos a que se refiere la misma norma. Al declarar la inexequibilidad, se ha decidido que el presupuesto de 1995 se ejecute de conformidad con una norma derogada.</i></p> <p>CONTRATO DE CONCESION A PARTICULARES DE TELEFONIA MOVIL CELULAR (Salvamento de voto)</p> <p><i>En la sentencia se nos da toda la razón en lo que sostenemos: que las participaciones que mandan los artículos 356 y 357 se causan sobre los ingresos corrientes, sobre los ingresos ordinarios. ¿Por qué? La sentencia ordena aplicar el artículo 15 de la ley 179 de 1994, que versa sobre las rentas que se originan en "circunstancias extraordinarias". No pueden ser "ingresos corrientes" los que la Nación percibe "por circunstancias extraordinarias", como éstos de la telefonía celular. Si los ingresos corrientes sólo se produjeran "por circunstancias extraordinarias", la Nación, por el aspecto fiscal, no podría existir. Lo lógico, lo práctico, lo que obedece a sanas técnicas de hacienda pública, es conceder participaciones permanentes a las entidades territoriales sobre los ingresos de la Nación que usualmente, regularmente, se producirán. Con base en esas participaciones ordinarias, corrientes, previsibles, se organizan, se proyectan, las finanzas de los departamentos y municipios. Por el contrario, es absurdo sostener que en el mediano y largo plazo las finanzas de los departamentos y municipios no se basen en los ingresos que ordinariamente tendrán, sino en aquéllos que sólo percibirán "por circunstancias extraordinarias".</i></p> <p>RENTAS ORIGINADAS EN EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (Salvamento de voto)</p> <p><i>Se ha reconocido que las rentas originadas en la explotación de recursos naturales no renovables, generalmente rentas contractuales, no son ingresos corrientes de la Nación, precisamente porque no son ordinarios, no son regulares.</i></p>
--	---

	<p>Magistrado ponente: Dr. Fabio Morón Díaz</p> <p>Bogotá, D.C., septiembre 21 de 1995</p> <p>Con nuestro acostumbrado respeto, exponemos las razones que nos llevaron a disentir en el asunto de la referencia.</p> <p>Primera.- Cuando los artículos 356, 357 y 358 de la Constitución se refieren a los "ingresos corrientes" de la Nación, se están refiriendo a los que usualmente nutren sus arcas. Una de las acepciones de la palabra "corriente", según el diccionario de la Academia, es ésta: "Medio común, regular, no extraordinario". No puede ser ingreso corriente uno que, como éste, originado en la concesión de la telefonía celular, sólo se da una vez en muchos años. Y que nunca antes se había presentado.</p> <p>Todos los tratadistas de la hacienda pública, entre ellos Esteban Jaramillo y Abel Cruz Santos, coinciden al afirmar que la principal característica del ingreso corriente es su regularidad, el producirse anualmente.</p> <p>Segunda.- La equivocada decisión que no compartimos, se ha basado en la circunstancia de estar vigente, al momento de aprobarse la ley demandada, una norma de la ley 38 de 1989, anterior ley orgánica del Presupuesto. Se olvida, sin embargo, que al momento de ejecutarse el Presupuesto de la Nación, ya la norma ha sido derogada, y está vigente la ley 179 de 1994, que no menciona para nada las rentas contractuales como rentas ordinarias. Y, según el artículo 352 de la Constitución, la ley orgánica regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de todos los presupuestos a que se refiere la misma norma.</p> <p>Al declarar la inexequibilidad, se ha decidido que el presupuesto de 1995 se ejecute de conformidad con una norma derogada.</p>
--	---

	<p>Tercera.- En la sentencia se nos da toda la razón en lo que sostenemos: que las participaciones que mandan los artículos 356 y 357 se causan sobre los ingresos corrientes, sobre los ingresos ordinarios. ¿Por qué? La sentencia ordena aplicar el artículo 15 de la ley 179 de 1994, que versa sobre las rentas que se originan en "circunstancias extraordinarias". No pueden ser "ingresos corrientes" los que la Nación percibe "por circunstancias extraordinarias", como éstos de la telefonía celular. Si los ingresos corrientes sólo se produjeran "por circunstancias extraordinarias", la Nación, por el aspecto fiscal, no podría existir.</p> <p>Cuarta.- No hay la menor duda en que el legislador, al fijar los porcentajes a que se refieren los artículos 356 y 357, ha interpretado el artículo 358 en el sentido de considerar "ingresos corrientes" a los ingresos ordinarios, regulares. No de otra manera se explica que haya fijado los altísimos porcentajes, crecientes además, que al comienzo del siglo XXI ascenderán casi al 50% de los ingresos ordinarios o corrientes de la Nación.</p> <p>Quinta.- Lo lógico, lo práctico, lo que obedece a sanas técnicas de hacienda pública, es conceder participaciones permanentes a las entidades territoriales sobre los ingresos de la Nación que usualmente, regularmente, se producirán. Con base en esas participaciones ordinarias, corrientes, previsibles, se organizan, se proyectan, las finanzas de los departamentos y municipios.</p> <p>Por el contrario, es absurdo sostener que en el mediano y largo plazo las finanzas de los departamentos y municipios no se basen en los ingresos que ordinariamente tendrán, sino en aquéllos que sólo percibirán "por circunstancias extraordinarias". ¿Puede, acaso, calcularse el futuro sobre lo incierto, sobre lo que no se sabe si ocurrirá o no?</p> <p>Sexta.- En el proyecto que se sometió a la consideración de la Sala, se consideraban ingresos corrientes de la Nación los derivados de la explotación de los petróleos, es decir de un recurso natural no renovable. Se olvidada que a estos recursos se refieren expresamente los artículos 360 y 361 de la Constitución.</p> <p>La existencia de estas últimas dos normas, confirma también nuestra tesis: los artículos 356 y 357 consagran las participaciones sobre ingresos corrientes, ordinarios, que se causan regularmente. Los artículos 360 y 361, por el contrario, consagran participaciones que sólo excepcionalmente se dan. ¿Por qué excepcionalmente? Por varias razones:</p> <p>Porque no en los territorios de todos los departamentos y</p>
--	---

	<p>municipios se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables, ni todos los departamentos y municipios tienen puertos por los cuales se exporten tales productos.</p> <p>Porque la misma naturaleza del recurso natural no renovable hace que las rentas originadas en él, sólo existan temporalmente.</p> <p>Por fortuna, se aceptaron nuestras objeciones y se hizo a un lado el que habría sido tremendo error.</p> <p>En consecuencia, contradiciendo la tesis fundamental de la sentencia, se ha reconocido que las rentas originadas en la explotación de recursos naturales no renovables, generalmente rentas contractuales, no son ingresos corrientes de la Nación, precisamente porque no son ordinarios, no son regulares.</p> <p>Séptima.- Interpretaciones exageradas como ésta, podrían conducir a que el Congreso adoptará medidas extremas para salvar a la Nación de la ruina fiscal que ya se vislumbra. Entre tales medidas, podrían estar éstas, entre otras: reformar la Constitución, concretamente los artículos 356, 357 y 358, o reducir los porcentajes fijados en la ley 60 de 1993, lo mismo que su progresión. De lo contrario, el país enfrentará una crisis nunca vista: por una parte, la Nación carecerá de los recursos fiscales suficientes; por la otra, algunos departamentos y municipios, prevalidos de su autonomía y carentes de controles, gastarán desordenada e injustificadamente los dineros del Estado, como ya se ha visto.</p> <p>Nada más inconveniente que la atomización de los recursos fiscales, al entregarlos a más de un millar de departamentos y municipios que, en su gran mayoría, no tienen la organización que les permita invertirlos racionalmente.</p> <p>El aparato estatal puede resistir a muchos peligros, pero no al que resulta de cegar las fuentes de los recursos fiscales, o de la dilapidación de éstos.</p> <p>Por todo lo anterior, discrepamos de la sentencia referida.</p> <p>JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado.</p>
--	---

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-073/95
Fecha de la sentencia	Febrero veintitrés (23) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Demandante	Presidencia de la República
Demandado	
Conoció en primera instancia	EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	DECLARAR EXEQUIBLES la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, así como la Ley 164 del 27 de octubre de 1994, aprobatoria de la misma".
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	<p>Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y de su ley aprobatoria (L.164 de 1994), de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución.</p> <p>Según el Ministerio del Medio Ambiente, los principales causantes de la contaminación atmosférica en el país corresponden a "material particulado, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno", causados por fuentes fijas y móviles. Se destacan dentro de las primeras, las emisiones de óxido de azufre, material particulado y monóxido de carbono, como consecuencia de la combustión incompleta de combustibles fósiles, principalmente en la generación de energía eléctrica.</p> <p>Respecto de la responsabilidad sectorial en las emisiones, el Ministerio informa que, con base en datos de 1989, la industria de productos minerales generó el 53% de la contaminación por "material particulado"; la refinación del petróleo, el 45% de las emisiones de dióxido de azufre; y, las industrias manufactureras de productos no metálicos, el 56% del óxido de nitrógeno presente en el aire.</p> <p>En cuanto a las medidas adoptadas para contrarrestar la contaminación atmosférica, el Ministerio del Medio Ambiente señala que actualmente se prepara un decreto que reglamenta la</p>

	<p>protección de la calidad del aire, con miras a controlar los procesos industriales en el país, así como la emisión de contaminantes producto de la utilización de combustibles. Además, informa que se han fijado parámetros jurídicos, acompañados de medidas de cumplimiento, a fin de que el sector industrial colombiano se someta a las indicaciones gubernamentales.</p> <p>El Ministerio de Minas y Energía, por su parte, describe las medidas tomadas en relación con los combustibles utilizados en el sector automotriz, las cuales se pueden dividir en dos grupos: primero, las acciones destinadas a reducir el uso de combustibles generadores de gases propiciadores del efecto invernadero, y, segundo, las medidas tomadas para reducir los efectos contaminantes de gasolina, A.C.P.M. y lubricantes.</p> <p>La información remitida por las dependencias oficiales, permite vislumbrar una preocupante panorámica en materia de contaminación atmosférica para el país. La presencia de los elementos químicos señalados, muestra que hasta ahora se están diseñando y poniendo en ejecución controles ambientales de las fuentes de contaminación que generan la destrucción de la capa de ozono y productoras del efecto invernadero y la lluvia ácida.</p> <p>De acuerdo con lo estipulado en el Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno y de azufre, sustancias presentes en la atmósfera del país, son considerados agentes potencialmente destructores de la capa de ozono y generadores de la lluvia ácida. Estas sustancias inciden negativamente en la calidad del medio ambiente y propician el cambio climático. La lluvia ácida, entre otros efectos, modifica el Ph de las tierras, disminuyendo el potencial agrícola del suelo, la capa vegetal y el follaje arbóreo. El efecto invernadero, por su parte, según algunos analistas, podría ser la causa del "fenómeno del niño", cuyas consecuencias son bien conocidas en el país, debido, entre otras, al racionamiento eléctrico del año 1992.</p> <p>Todo lo anterior, a la luz de las normas constitucionales de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, ilustra sobre la necesidad de que Colombia apruebe la Convención Marco sobre cambio climático, de manera que se potencialicen los esfuerzos para prevenir y controlar el deterioro ambiental.</p>
Decision de la Corte	DECLARAR EXEQUIBLES la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, así como la Ley 164 del 27 de octubre de 1994, aprobatoria de la misma".
Tiene salvamento	NO
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO
Resumen de las	NO APLICA

aclaraciones	
--------------	--



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-396/95
Fecha de la sentencia	Septiembre siete (7) de mil novecientos noventa y cinco (1.995).
Demandante	Presidencia de la República
Demandado	
Conoció en primera instancia	HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	<p>Declárase EXEQUIBLE la Ley No. 169 del 6 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Prevención y el Castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos”, por no ser contraria a la Constitución ni en su contenido material ni en su trámite de expedición.</p> <p>Declárase EXEQUIBLE la “Convención sobre la Prevención y el Castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos”, suscrita en Nueva York, el 14 de diciembre de 1973, con las reservas que formulan tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República de Colombia, en los términos de que trata esta providencia.</p>
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	Efectuar la revisión constitucional de la "CONVENCION SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUSIVE LOS AGENTES DIPLOMATICOS", suscrita en Nueva York el 14 de diciembre de 1973, y de su Ley Aprobatoria No. 169 de diciembre 6 de 1994, según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Carta Política.
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	NO
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO
Resumen de las aclaraciones	NO

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-178/95
Fecha de la sentencia	abril veinticinco (25) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Demandante	Presidencia de la República
Demandado	
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 172 de 1994 (22 de diciembre), "Por medio de la cual se aprueba el TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN CARTAGENA DE INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994." y este mismo Tratado de libre Comercio denominado G-3., que aparecen publicados en el diario oficial No. 41.671 Bis del jueves 5 de enero de 1995, al cual se remite esta decisión para que se tenga como incorporado a esta providencia, dada su extensión y volumen y en atención a la necesidad de mantener plena identificación literal del texto. La exequibilidad del anexo del artículo 17-08 se declara en los términos consignados en la parte motiva.
Conoció en segunda instancia	NO
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	El examen de la constitucionalidad de la Ley 172 de 1994, "Por medio de la cual se aprueba el TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN CARTAGENA DE INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994."
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	NO
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	NO
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-402/95
Fecha de la sentencia	siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Demandante	Presidencia de la República
Demandado	
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Decision	Declarar exequible el "Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños", suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, así como la Ley 173 del 22 de diciembre de 1994 aprobatoria del mismo.
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	El examen de la constitucionalidad de la Ley 173 del 22 de diciembre de 1994 aprobatoria del Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, para efectos de su revisión constitucional.
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	NO
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	NO
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-418/95
Fecha de la sentencia	veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Demandante	Presidencia de la República
Demandado	
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLE el “Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, suscrito en Madrid el 7 de octubre de 1992”, así como su ley aprobatoria, esto es, la Ley 176 de 1994.
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	El examen de la constitucionalidad de la Ley 176 de 1994, “por medio de la cual se aprueba el Tratado constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, suscrito en Madrid el 7 de octubre de 1992.”
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	NO
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	NO
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-353/95
Fecha de la sentencia	nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Demandante	FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO, JOAQUIN CASTRO SOLIS y LUIS ANTONIO ZORRO CAMARGO
Demandado	Acciones de inconstitucionalidad intentadas contra los artículos 26 -inciso 3º- y 27 de la Ley 179 de 1994.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Primero.-Decláranse INEXEQUIBLES las expresiones "cuartas", contenidas en los artículos 26, inciso 3º, y 27 de la Ley 179 de 1994. Segundo.- En aplicación de lo dispuesto por el artículo 346, inciso 3º, de la Constitución Política, debe entenderse que cuando las indicadas normas se refieren a "las comisiones", aluden a "las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras", que lo son las terceras y cuartas, de conformidad con el artículo 4º de la Ley 3a de 1992.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<i>Cuando la Ley de Presupuesto -en este caso la Ley 179 de 1994- estableció cuál de las comisiones en Cámara y Senado habría de ocuparse en dar primer debate a los proyectos de ley anual correspondiente, no podía fijar el alcance del artículo 346, inciso 3º, de la Constitución Política, diciendo que las comisiones de asuntos económicos lo eran las terceras, toda vez que ya el Congreso lo había hecho, mediante ley, disponiendo que cumplirían tal papel las terceras y cuartas de cada una de las cámaras, deliberando en forma conjunta. Así, pues, los artículos demandados desconocieron el perentorio mandato del artículo 346 de la Constitución, al confiar el primer debate sobre el proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones a unas comisiones -las cuartas- que no son de manera exclusiva las de asuntos económicos, según la previa definición hecha por la Ley 3a. de 1992. Pero, ante todo, fueron puestos en vigencia mediante una ley cuyo objeto no podía ser el de regular las comisiones del Congreso, asunto éste reservado a la normatividad orgánica que expida el Congreso para instituir su propio reglamento.</i>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO
Resumen de las aclaraciones	NO

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-137/95
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Demandante	Control Automático
Demandado	ley 170 de diciembre 15 de 1994
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJIA.
Decision	<p>Primero.- Decláranse EXEQUIBLES el Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio, suscrito en Marraketch (Marruecos), el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos sobre el comercio de mercancías, el comercio de servicios, los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias y el mecanismo de examen de las políticas comerciales, así como el acuerdo plurilateral anexo sobre la carne de bovino, recogidos en el acta final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Acuerdos todos aprobados por la ley 170 de 1994.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE la ley 170 de 1994, sancionada el 15 de diciembre de 1994, aprobatoria de los acuerdos sobre los cuales versa esta sentencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO aplica
Decision	NO aplica
Hechos jurídicos	Revisión oficiosa de la ley 170 de diciembre 15 de 1994 " Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marraketch (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de Bovino."
Decision de la Corte	
Tiene salvamento	No
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-225/95
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Demandante	Revisión oficiosa de Constitucionalidad
Demandado	
Conoció en primera instancia	ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)" hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)".</p>
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	Revisión constitucional del "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)" hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, y de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	No aplica
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-541/95
Fecha de la sentencia	
Demandante	JORGE GARCÍA HURTADO y ELSA VICTORIA GARCÍA DIAZ.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra de los artículos 17 (parcial); 54 y 66 (parcial) de la ley 179 de 1994 "Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto."
Conoció en primera instancia	Dr. Jorge Arango Mejía
Decision	Primero.- Declárase EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 17 de la ley 179 de 1994. Segundo.- Declárase INHIBIDA la Corte para fallar en relación con el párrafo del artículo 17 de la ley 179 de 1994, porque los actores no sustentaron cargo alguno en su contra. Tercero.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 54 de la ley 179 de 1994. Cuarto.- Declárase EXEQUIBLE la siguiente frase del inciso tercero del artículo 66 de la ley 179 de 1994 "Cualquier disposición en contrario quedará derogada"; y se declara INEXEQUIBLE la siguiente frase, con que termina el mismo inciso tercero del artículo 66 de la ley 179 de 1994: "...y la que se dicte no tendrá ningún efecto."
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	No aplica
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	No aplica
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-596/95
Fecha de la sentencia	siete (7) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Demandante	Maximiliano Echeverri Marulanda
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 70 (parcial) de la ley 179 de 1994 "Por la cual se introducen algunas modificaciones a la ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto."
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.
Decision	Decláranse INEXEQUIBLES los incisos primero, segundo y tercero del artículo 70 de la ley 179 de 1994.
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	No aplica
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	No aplica
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-401/95
Fecha de la sentencia	
Demandante	Presidencia de la República
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 183 de 1995 "por medio de la cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperaci3n entre la Comunidad Econ3mica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus pa3ses miembros, la Rep3blica de Bolivia, la Rep3blica de Colombia, la Rep3blica de Ecuador, la Rep3blica del Per3 y la Rep3blica de Venezuela, hecho en Copenhague el 23 de abril de 1993".
Conoci3 en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	PRIMERO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD del Convenio Marco de Cooperaci3n entre la Comunidad Econ3mica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus pa3ses miembros, la Rep3blica de Bolivia, la Rep3blica de Colombia, la Rep3blica del Ecuador, la Rep3blica del Per3 y la Rep3blica de Venezuela, hecho en Copenhague el 23 de abril de 1993. SEGUNDO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la Ley 183 de 1995, aprobatoria del citado Convenio.
Conoci3 en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jur3dicos	No aplica
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	No aplica
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-354/95
Fecha de la sentencia	(9) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Demandante	
Demandado	Revisión oficiosa de la ley 189 de junio 6 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el ACUERDO DE CREACION DE LA ASOCIACION DE PAISES PRODUCTORES DE CAFE, suscrito en Brasilia el 24 de septiembre de 1993", y del mencionado tratado.
Conoció en primera instancia	Dr. Jorge Arango Mejía
Decision	Decláranse exequibles el ACUERDO DE CREACION DE LA ASOCIACION DE PAISES PRODUCTORES DE CAFE, suscrito en Brasilia, el 24 de septiembre de 1993, y la ley 189 de 1995, aprobatoria de tal acuerdo.
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	Revisión oficiosa de la ley 189 de junio 6 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el ACUERDO DE CREACION DE LA ASOCIACION DE PAISES PRODUCTORES DE CAFE, suscrito en Brasilia el 24 de septiembre de 1993", y del mencionado tratado.
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	No aplica
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-468/95
Fecha de la sentencia	Octubre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Demandante	Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley N° 43/94 Senado - 118/95 Cámara "Por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994, proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante decreto N° 1178 del 9 de junio de 1994 y se dictan otras disposiciones".
Demandado	
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el Proyecto de Ley N° 43/94 Senado - 118/95 Cámara desde el punto de vista formal, por haberse subsanado el vicio dentro del término indicado en la sentencia C-407 de 1995. SEGUNDO.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-407 de 1995 en la que se declararon infundadas las objeciones formuladas por el Presidente de la República a los artículos los artículos 1 a 8 y 10 a 12 del Proyecto de Ley N° 43/94 Senado - 118/95 Cámara, en cuanto no se vulneraron los artículos 151, 154 y 215-6 de la Constitución.
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley N° 43/94 Senado - 118/95 Cámara "Por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994, proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante decreto N° 1178 del 9 de junio de 1994 y se dictan otras disposiciones".
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	No aplica
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-407/95
Fecha de la sentencia	Septiembre once (11) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Demandante	Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley N° 43/94 Senado - 118/95 Cámara "Por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994, proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante decreto N° 1178 del 9 de junio de 1994 y se dictan otras disposiciones".
Demandado	
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES, desde el punto de vista material, los artículos 1 a 8 y 10 a 12 del Proyecto de Ley N° 43/94 Senado - 118/95 Cámara, por haberse encontrado infundadas las objeciones formuladas por el Presidente de la República, en cuanto no se vulneraron los artículos 151, 154 y 215-6 de la Constitución.</p> <p>SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE el Proyecto de Ley N° 43/94 Senado - 118/95 Cámara desde el punto de vista formal, por haberse encontrado fundada la objeción formulada por el Presidente de la República, toda vez que entre el primero y segundo debate del proyecto en la Cámara de Representantes no medió el término exigido en el artículo 160 de la Constitución.</p> <p>TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución Política, devolver al presidente del Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 43/94 Senado - 118/95 Cámara, para lo de su competencia, por tratarse de un vicio de procedimiento subsanable, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.</p> <p>CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, fijar el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que se reciba el expediente, para que el Congreso de la República subsane el vicio observado, de conformidad con lo dispuesto por la Corte en sus consideraciones respecto de la cuarta objeción, ejecutado lo cual se enviará inmediatamente el proyecto a la Corte, para que ésta proceda a decidir sobre la exequibilidad del mismo.</p>
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	No aplica

Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	No aplica
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica

## SENTENCIAS DE 1996

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-709 de 1996
<b>Fecha de la sentencia</b>	
<b>Demandante</b>	Jose Euripides Parra Parra
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 24 de la Ley 190 de 1995, que modificó el artículo 143 del Decreto 100 de 1980 (Código Penal).
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
<b>Decision</b>	Declarar <b>INEXEQUIBLE</b> el Parágrafo del artículo 24 de la ley 190 de 1995, que modificó el artículo 143 del decreto 100 de 1980 (Código Penal).
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>Según el actor, la disposición acusada vulnera los artículos 4, 6, 13, 29, 113, 121, 250, 277 y 278 de la Constitución Política. Como argumentos para sustentar su pretensión, en resumen, expuso los siguientes:</p> <p>En la realización de ciertas conductas delictivas relativas al ofrecimiento o entrega de dineros o bienes para la omisión, retardo o cumplimiento de actos oficiales intervienen particulares y servidores públicos, eventos en los cuales todos los implicados merecen el reproche punitivo "porque es tan responsable quien ofrece como quien recibe, quien pide como quien da", sin que sea posible eximir de responsabilidad penal al denunciante por el solo hecho de la denuncia, pese a estar involucrado en la comisión de un delito.</p> <p>El principio de igualdad ante la ley impone castigar a quien</p>



	<p>ofrece y a quien recibe dichos dineros o bienes o acepta la promesa remuneratoria, es decir, a "las dos personas" que intervienen en el ilícito, sin perjuicio de los beneficios a que pueda hacerse el acreedor el denunciante; en consecuencia, es contrario a la igualdad que en relación con uno de los autores se extinga la pena mientras que se castiga al otro, ya que ambos incurrieron en una de las modalidades del hecho punible denominado cohecho.</p> <p>No es admisible, entonces, que quien participa en el ilícito y denuncia al resto de los transgresores de la ley penal resulte premiado con la extinción de la acción penal; en tal virtud, es necesario "establecer mecanismos más adecuados" para descubrir la comisión del delito y para evitar que los servidores públicos y los particulares quebranten la ley. Además, la norma acusada, al favorecer al denunciante participante en el hecho ilícito con la extinción de la acción penal, induce a que reitere su nocivo comportamiento.</p> <p>La norma cuestionada propicia la figura del "agente provocador" y genera impunidad, pues "queda libre quien comete el acto y denuncia" y también "quien se dice provocado por la conducta de la otra persona" e igualmente denuncia, lo cual contradice el aforismo romano que impide alegar la propia culpa.</p> <p>El debido proceso impone la vinculación de "todas las personas que incurrieron en la vulneración del régimen penal", y por lo tanto cuando no se ha adelantado un proceso en contra de la totalidad de los implicados "es nulo el acto de autoridad judicial que no haya cumplido este propósito del Estado Social de Derecho".</p> <p>En este orden de ideas, apunta que no se puede confundir "lo que es una denuncia y lo que es una confesión", enfatiza que "la decisión que no este tomada con base en un proceso se</p>
--	--

	<p>convierte en arbitraria" y puntualiza que se debe legislar no para premiar a los transgresores de la ley penal sino para sancionarlos, "dentro de un proceso y contra cada uno de los copartícipes, determinador, autor material, cómplices y encubridores".</p> <p>Finalmente, dice que la norma acusada cercena las competencias de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto a que desconoce las facultades de policía judicial que ésta tiene y la obligación de investigar lo favorable y lo desfavorable en relación "con todos y cada uno de los que cometieron un hecho punible". Asimismo, desatiende las competencias del Ministerio Público y en concreto de la Procuraduría General de la Nación, a la que priva de "su capacidad disciplinaria establecida en los artículos 277 y 278 de la Constitución Nacional y de su función de defensora de la sociedad...".</p>
<b>Tiene salvamento</b>	<b>Si Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</b>
<b>Resumen del mismo</b>	<p><b>EXTINCION DE LA ACCION PENAL</b>-Reducción corrupción administrativa (Salvamento de voto)</p> <p><i>La extinción de la pena que se decreta en favor de quien delinque y con posterioridad denuncia el hecho y aporta la prueba respectiva, puede ser altamente eficaz para reducir y combatir la corrupción administrativa. En principio, la idoneidad y eficacia de las normas penales, no son motivos válidos para declarar su inconstitucionalidad. Para que ella se decrete es necesario que se compruebe que los principios constitucionales y las garantías del debido proceso se vulneran por la norma "eficaz e idónea". En este caso, la Corte no expone el argumento de orden constitucional para sustentar la inconstitucionalidad. Han debido explorarse de manera minuciosa los límites constitucionales o cotas máximas aplicables a las estrategias de una determinada política criminal. En este sentido, el examen forzosamente tenía que llegar a establecer si a través de normas procesales -como la extinción de la pena- era viable en el plano constitucional articular medios destinados a disolver y desestimular el concierto criminal, especialmente en tipos penales que lo requieren sustancialmente y cuya persecución</i></p>

	<i>resulta extremadamente necesaria, pero también extremadamente difícil. Si no cabe negar al legislador la acción estratégica para cumplir objetivos sociales deseables y constitucionales, el análisis ha debido recaer sobre la constitucionalidad del medio empleado para el efecto. La amnistía no agota el fenómeno de la extinción de la acción penal. La norma no pretende amnistiar a las personas que cometen el delito de cohecho. Corresponde, en efecto, a la ley establecer las condiciones de ejercicio de la acción penal.</i>
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	C-255 de 1996
Fecha de la sentencia	(6) de junio de mil novecientos noventa y seis
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional de la "Convención de Viena sobre El Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986" y de la Ley 194 del 6 de julio de 1995 por medio de la cual se aprueba dicha Convención. Temas: La presentación incompleta de un tratado para su aprobación es un vicio de procedimiento. Inconstitucionalidad por falta de corrección de vicios subsanables.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: Declarar INEXEQUIBLE la Ley 194 del 6º de julio de 1995, "por medio de la cual se aprueba la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986."</p> <p>Segundo: Declararse INHIBIDA para conocer de la constitucionalidad de "la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986".</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA

Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia auténtica de la Ley 194 del 6 de julio de 1995, "Por medio de la cual se aprueba la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986", proceso que fue radicado con el No. L.A.T.-047.</p> <p>El veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y seis (Flios 222 y ss), la Corte constató que el Gobierno había presentado a la aprobación del Congreso un texto incompleto de la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986". Por las razones desarrolladas en la parte motiva de esta sentencia, la Corte consideró que se trataba de un vicio de procedimiento subsanable en la formación de la Ley 194 de 1995, por lo cual esta Corporación devolvió la citada ley a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que se corrigiera el vicio de procedimiento. Igualmente, la Corte señaló un término de siete (7) días para que el Ejecutivo presentara el proyecto corregido al Congreso, y treinta (30) días, el término máximo autorizado por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, para que se surtieran los debates en las Cámaras y se sancionara nuevamente la ley. En ese mismo auto la Corte advirtió que, según lo ordenado por el parágrafo del artículo 241 de la Constitución y por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, el incumplimiento de los términos obligaba a la Corporación a pronunciarse en forma definitiva respecto de la constitucionalidad de la Ley 194 de 1995.</p> <p>Según constancia secretarial del tres (3) de junio de 1996 (Flio 236), se encuentran vencidos los términos establecidos por el auto del veintiuno (21) de marzo, sin que se hubiese recibido documento alguno de parte del Congreso ni de la Presidencia de la República que mostrara que se había corregido el vicio señalado por la Corte. La única comunicación recibida fue una solicitud del Presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Rivera, del treinta y uno (31) de mayo (Flio 237), por medio de la cual solicita a la Corte la ampliación del término.</p> <p>Cumplidos, como están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.</p>
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-655 de 1996
<b>Fecha de la sentencia</b>	Noviembre veintiocho (28 ) de mil novecientos noventa y seis (1996).
<b>Demandante</b>	
<b>Demandado</b>	Revisión de constitucionalidad de la Ley 285 del 14 de junio de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en la ciudad de Madrid entre el Gobierno de la República de Colombia y el Reino de España, el 28 de abril de 1993.
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. FABIO MORON DIAZ.
<b>Decision</b>	
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>El 21 de junio de 1996, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a través de oficio No. 004467, remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley 285 de 14 de junio de 1996, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas, suscrito entre la República de Colombia y el Reino de España, en la ciudad de Madrid el 28 de abril de 1993.</p> <p>El día 4 de julio de 1996, el Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión de la Ley 285 del 14 de junio de 1996 y del tratado que la misma aprobó, para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: solicitó a las Secretarías Generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, el envío de la copia del correspondiente expediente legislativo, y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado correspondiente al Despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia, informándole que al mismo se le</p>

	daría trámite de urgencia nacional, según decisión de la Sala Plena de esta Corporación, adoptada el 27 de junio de 1996. Una vez cumplidos todos los trámites indicados para esta clase de actuaciones procesales de control de constitucionalidad, procede la Corte a pronunciar su decisión.
<b>Decision de la Corte</b>	Primero: <b>DECLARAR EXEQUIBLES</b> la ley 285 de 14 de junio de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas, suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y el Reino de España, en la ciudad de Madrid, el 28 de abril de 1993", y el tratado mismo, salvo el numeral 3 del artículo tercero, que se declara <b>INEXEQUIBLE</b> .
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-525/96
Fecha de la sentencia	diez (10) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Jaime Córdoba Triviño
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad del artículo 52 de la ley 241 de 1995, "Por la cual se prorroga la vigencia, se modifica y adiciona la ley 104 de 1993."
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	Declárase INEXEQUIBLE el artículo 52 de la ley 241, del 26 de diciembre de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Para el demandante, la disposición acusada infringe directamente el artículo 243 de la Carta Política, y también los artículos 1o., 3o., 40, 133, 260, 303 y 314 de la misma. El concepto de la violación puede resumirse así:

	Mediante sentencia C-586 de 1995, con ponencia de los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional declaró inexecutable por razones de fondo, el artículo 114 de la ley 104 de 1993. Después de la declaración de inconstitucionalidad, exactamente a los 19 días de ésta, el Congreso de la República reprodujo el contenido de la disposición declarada inexecutable, a través de la norma demandada, desconociéndose así, la prohibición constitucional de reproducir normas declaradas inexecutables (artículo 243), además de la vulneración de principios constitucionales como la soberanía del pueblo y la democracia participativa.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-334/96
Fecha de la sentencia	Primero (1º) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Arturo Besada Lombana.
Demandado	Normas acusadas: Artículos 135 (parcial), 136 (parcial), 137 (parcial) y 180 (parcial) de la Ley 201 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y Dr. JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLES las expresiones "De libre nombramiento y remoción" del artículo 135, y "La provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción se hará por nombramiento ordinario" de los artículosb 137 y 180 de la Ley 201 de 1995.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLES las siguientes expresiones del literal a) del artículo 136 de la Ley 201 de 1995: "Viceprocurador General", "Secretario General", "Procurador Auxiliar", "Procurador Delegado", "agentes del ministerio público", "Director Nacional de Investigaciones Especiales", "Asesores del Despacho", "Veedor", "Secretario Privado", "Procurador Departamental", "Procurador Provincial", "Procurador Regional", "Procurador Distrital", "Procurador Metropolitano", "Jefe de Planeación", "Jefe de</p>

	<p>Control Interno”, “Jefe de Oficina de Prensa”, “El Jefe de la Sección de seguridad, los agentes adscritos al Despacho, y todos los servidores que tengan funciones de seguridad, cualquiera que sea la denominación del cargo”, por las razones expuestas en esta sentencia.</p> <p>Tercero: Declarar EXEQUIBLES las siguientes expresiones del literal b) del artículo 136 de la Ley 201 de 1995: “Secretario General”, “Veedor”, “Defensor Delegado”, “Director Nacional”, “Secretario Privado”, por las razones expuestas en esta sentencia.</p> <p>Cuarto: Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones del literal a) del artículo 136 de la Ley 201 de 1995: “Director Ejecutivo del Instituto de Estudios del Ministerio Público”, “y los demás empleos que integren la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales”, por las razones expuestas en esta sentencia.</p> <p>Quinto: Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones del literal b) del artículo 136 de la Ley 201 de 1995: “Subdirector de Servicios Administrativos”, “Subdirector Financiero”, “Jefe de Oficina”, por las razones expuestas en esta sentencia.</p> <p>Sexto: Declarar INEXEQUIBLE el párrafo del artículo 12 de la Ley 201 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano Arturo Besada Lombana considera que la norma demandada viola los artículos 125, 278 inciso 6º y 279 de la Carta. Según su criterio, el artículo 125 C.P. consagró como regla general la carrera administrativa para los empleos del Estado y excepcionalmente cargos de libre nombramiento y remoción, pero sólo en el caso de los inmediatos colaboradores del Presidente de la República y de los Gobernadores de Departamento. A juicio del actor, la facultad de libre nombramiento y remoción corresponde al ejercicio de una función política, que implica un poder exorbitante relacionado con el que tienen el Presidente y los Gobernadores, y cuyo ejercicio se encuentra limitado para ciertos funcionarios como los ministros, jefe de departamento administrativo y demás agentes de dichas dignidades.</p> <p>Considera el demandante que la Constitución autoriza al Legislador para indicar cuales otros empleos son de libre nombramiento y remoción, atribución que debe cumplirse con sujeción a los dictados legales, porque “supeditar, como lo hace la Carta a la ley, las condiciones para nominar y remover significa precisamente que el nominador no tiene el poder discrecional para hacer lo uno o lo otro sino que está sometido a lo que la ley establezca”.</p>



	<p>Agrega que si la fuente normativa de una función es la ley, estamos en presencia de un poder reglado y por ende la función es de carácter administrativo; pero si la fuente es la Constitución, la función es de carácter político y, por lo tanto, de índole discrecional.</p> <p>Finalmente, el demandante sostiene que la Procuraduría General de la Nación no puede sustraerse a la aplicación del principio de la carrera administrativa, además por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque en todos los órganos de control los empleos son eminentemente técnicos y no políticos; y en segundo lugar, porque el artículo 279 de la Constitución preceptúa que el ingreso a la Procuraduría se realiza por concurso de méritos.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO</p> <p>CARRERA ADMINISTRATIVA-Excepciones (Salvamento de voto)</p> <p>El legislador no es absolutamente libre en este campo, pues no puede excluir cualquier cargo de la carrera administrativa sino únicamente aquellos en donde exista un principio de razón suficiente que justifique tal decisión legislativa. Y la Corte ha precisado, en reiterada jurisprudencia, que ello sólo es admisible en los cargos que, “según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, cumplen un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidad”. Como la carrera administrativa es la regla y los cargos de libre nombramiento y remoción son la excepción, la Corte debe interpretar de manera restrictiva los alcances de la excepción, por lo cual, como bien lo señala la sentencia, si la justificación de la decisión legislativa no aparece claramente entonces prima la regla general establecida por la Constitución, esto es, la carrera administrativa. La Corte no aplicó con suficiente rigor las reglas que ella misma ha precisado para determinar sin un cargo puede ser excluido de la carrera administrativa, con lo cual se podían estar desvirtuando los nobles propósitos del Constituyente en este campo: garantizar la existencia de una administración pública eficaz y eficiente, libre de indebidas interferencias políticas, y a la cual puedan acceder todos los colombianos, de manera igualitaria, sin mediar otras variables diferentes a los méritos y calidades.</p>

	<p>PROCURADOR JUDICIAL-Naturaleza del cargo (Salvamento de voto)</p> <p>Los procuradores judiciales que actúan ante tribunales judiciales o juzgados ejecutan un trabajo técnico en desarrollo de una función antes que en nombre del propio Procurador General, lo que les impide tener una relación inmediata con el mismo, ausentándose en ellos actividades de dirección general, asesoría directa o confianza objetiva y criterio alguno que indique la aptitud del cargo mencionado para ser considerado por el Legislador de libre nombramiento y remoción. Por ello creemos que no es razonable constitucionalmente la inclusión de los procuradores judiciales como empleados de libre nombramiento y remoción, por lo cual la expresión “Agentes del Ministerio Público” debió ser declarada inexecutable.</p> <p>PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Jefe de oficina de prensa (Salvamento de voto)</p> <p>No encontramos una justificación para la exclusión de la carrera del Jefe de la Oficina de Prensa, pues si bien éste tiene dentro de sus funciones la de “asesorar al Procurador General en todo lo referente a la imagen institucional y actividades de divulgación”, lo cierto es que su labor central es de carácter técnico y ejecutivo, pues se trata del manejo y la difusión de las informaciones periodísticas relacionadas con la entidad. En efecto, según nuestro criterio, la oficina de prensa está al servicio de la institución y no del Procurador como tal, por lo cual es necesaria la profesionalización de esa oficina, lo cual supone la necesaria inclusión de este cargo en la carrera administrativa.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-443/96
Fecha de la sentencia	Septiembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Jaime Enrique Lozano
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 201 de 1995, "por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.

instancia	
Decision	Declarar EXEQUIBLE la Ley 201 de 1995 en cuanto al cargo formulado.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Estima el demandante que la ley acusada vulnera los artículos 4, 150, 154 y 163 de la Carta Política, pues en su concepto esta debió ser "de exclusiva iniciativa Ejecutiva", es decir que sólo podía el Gobierno Nacional presentar el respectivo proyecto a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por ser éste el encargado del manejo de las finanzas nacionales, como así lo establece el inciso 2o. del artículo 154 de la Constitución.</p> <p>Expresa que no tendría razón de ser lograr la aprobación de una ley, si ella no podrá ejecutarse por falta de recursos presupuestales, ya que no se contó con la previa aprobación del funcionario encargado legalmente de conseguir y distribuir en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, los recursos fiscales. De ser ello así, estima que se deslegitima la acción de los poderes públicos, se pierde eficacia legislativa y ejecutiva, y se desautoriza implícitamente al Estado mismo.</p> <p>Afirma que lo anteriormente expuesto es tan cierto, que la misma Ley 201 de 1995, en su artículo 202 dispone: "Operaciones Presupuestales. El Gobierno Nacional realizará las operaciones presupuestales necesarias al desarrollo y aplicación de la presente Ley".</p> <p>Agrega que la ley demandada crea cargos nuevos e incrementa el número de algunos ya existentes, lo cual conlleva al incremento del presupuesto de la Procuraduría en relación con los últimos años, y que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tuvo iniciativa ni avaló el proyecto que hoy es la Ley 201 de 1995, para poder solventar los gastos que estos cambios generan.</p> <p>Con fundamento en las premisas anteriores, concluye manifestando que el principio constitucional de la prevalencia del interés general, resulta menoscabado al tener el Gobierno que reasignar forzosamente y en contravía de la Carta Fundamental, unos recursos fiscales inicialmente destinados a otros objetivos.</p> <p>Por las razones expuestas, solicita que la ley acusada sea declarada inexecutable, por cuanto quebranta el ordenamiento constitucional.</p>

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-627/96
Fecha de la sentencia	noviembre veintiuno (21) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Juan Carlos Arias Duque.
Demandado	Normas Acusadas: Artículo 21 (parcial) de la Ley 228 de 1995.  Artículos 87 (parcial), 152 (parcial), y 154 de la Ley 200 de 1995.  Artículo 75 del Decreto 196 de 1971.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Decision	Declarar EXEQUIBLES el inciso 3o del artículo 21 de la Ley 228 de 1995, los artículos 87 y 154 y la expresión acusada " <i>o de la desfijación del edicto</i> " del artículo 152 de la Ley 200 de 1995, y el artículo 75 del decreto-ley 196 de 1971.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Considera el actor que las normas demandadas desconocen abiertamente los derechos consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política. Por lo tanto, advierte "que lo que se demanda es la posibilidad de condenar, ya sea en proceso adelantado con ocasión de contravenciones especiales, o en proceso disciplinario contra funcionarios públicos, o en proceso disciplinario contra abogados, a personas consideradas o declaradas ausentes y en contumacia y por tanto sin la posibilidad de defenderse de manera efectiva". En las condiciones anotadas, concreta los cargos de la demanda de la siguiente manera: - Se viola el principio de la igualdad (art. 13 C.P.), toda vez que se

	<p>permite vincular como persona ausente a quien ignora una investigación en su contra, pues de esta forma se le cercenan derechos de los que si gozan quienes por habilidad o mera coincidencia conocen de la existencia del proceso respectivo, los cuales si pueden participar como sujetos procesales.</p> <p>- No se puede dejar que el proceso se desarrolle solamente de acuerdo a la perspectiva probatoria ofrecida por el querellante, quien es generalmente perjudicado con la acción presuntamente reprochable. Por lo tanto se debe garantizar la igualdad frente a aquél quien si bien es cierto no siempre es sujeto procesal, es indescionocible que su versión como única dentro del investigativo coloca en condición de desigualdad manifiesta al declarado ausente.</p> <p>La sola citación por medio de edictos o de escritos que se colocan en oscuros rincones de las dependencias judiciales o administrativas, no garantizan la comparecencia de quien ignora que en su contra se adelanta investigación.</p> <p>- Se vulnera el debido proceso cuando no se da la posibilidad de ejercer el derecho a la contradicción, el cual comporta, entre otras, las siguientes posibilidades: el derecho de comparecer a la práctica de la prueba, vigilar la legalidad de la misma, comprobar que lo que se consigne en las diligencias sea lo correcto, solicitar pruebas que conduzcan a favorecer la situación defensiva del encartado, contradecir las probanzas que se producen en su contra. El desarrollo de todas estas actividades que comportan medios o instrumentos de defensa no las puede desplegar un defensor de oficio ignorante de la realidad que favorece al implicado.</p> <p>De este modo se desconoce no sólo el derecho de defensa material sino el derecho a la defensa técnica, pues la actividad del defensor oficioso está dirigida por la postura procesal del encartado, la cual se sienta en la diligencia de indagatoria o de descargos, de tal suerte que ante la ausencia de éstas, se hace imposible la actividad defensiva de manera técnica, reduciéndose dicha actividad, en la mayoría de los casos, a una pasiva vigilancia del proceso, el cual ha de tomar el rumbo que el denunciante determine o que el investigador le imprima.</p> <p>"Cada uno de los estatutos demandados, tanto el regente de la actividad del Abogado, como del Código Disciplinario Unico y también el Estatuto de Seguridad Ciudadana contienen la obligatoriedad de la indagación tanto de lo favorable como lo desfavorable al implicado. Sin embargo, con la ausencia de las manifestaciones de descargos imposible resulta para el instructor dirigir la indagación de las circunstancias favorables, precisamente por ignorarlas. Y de otra parte, también resulta imposible para el oficioso defensor proponer la perspectiva favorable también por no estar incorporada dentro de su conocimiento, llevándose de paso la lealtad con los sujetos procesales".</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DRES. JORGE ARANGO MEJIA, ANTONIO BARRERA CARBONELL, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO</p> <p>PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Decisión de naturaleza administrativa(Aclaración de voto)</p> <p>El acto de la Corte Suprema de Justicia que decide de fondo el proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación es de naturaleza administrativa y no jurisdiccional.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-317/96
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	Ramiro Rodríguez López
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40 (parcial) y 44 (parcial) de la ley 200 de 1995, y los artículos 6 (parcial) y 35 (parcial) de la ley 201 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>PRIMERO: Declarar INEXEQUIBLE la palabra “universitaria” contenida en los artículos 40 ordinal 11 (parcial), y 44 ordinal segundo (parcial) de la ley 200 de 1995, y en el artículo 6° (parcial) de la Ley 201 de 1995.</p> <p>SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 35 de la ley 201 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p><i>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</i></p> <p>Estima el actor que las disposiciones acusadas son violatorias del artículo 13 de la Constitución Política que consagra el derecho a la igualdad.</p>

	<p><i>2. Fundamentos de la demanda</i></p> <p><u>A. Cargos contra los artículos 40 ordinal 11 (parcial), y 44 ordinal segundo (parcial) de la ley 200 de 1995, y contra el artículo 6° (parcial) de la ley 201 de 1995.</u></p> <p>Afirma el actor que la palabra "universitaria", contenida en los artículos demandados, es violatoria del artículo 13 de la Constitución Política porque establece una discriminación de trato entre los docentes universitarios y los que ejercen sus funciones en otras instituciones educativas. En su opinión y con fundamento en la sentencia C-231 de la Corte Constitucional (Magistrado ponente, doctor Hernando Herrera Vergara), es evidente que carece de justificación legal el hecho de que se excluya únicamente a los docentes de educación superior y a los profesores universitarios del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los concejales, y no a los demás que ejercen sus funciones dentro de los otros diferentes niveles de educación.</p> <p>Exponiendo sobre el particular los argumentos de la Corte Constitucional, el demandante manifiesta que la similitud que existe entre el caso analizado por la Corte en su sentencia C-231/95 y el caso que consignan los artículos demandados, amerita que la decisión sobre éstos se adopte en el mismo sentido, y en consecuencia que se declare su inexequibilidad-.</p> <p><u>B. Cargos contra el artículo 35 (parcial) de la ley 201 de 1995.</u></p> <p>Afirma el actor que el Congreso de la República, mediante la ley 80 de 1993, en ejercicio de las facultades que le confiere el inciso final del artículo 150 de la Constitución Política, dictó el estatuto general de contratación de la administración pública, en cuyo artículo primero determinó la aplicabilidad del régimen a la totalidad de los organismos del Estado que tuviesen capacidad para contratar, incluyendo de manera expresa a la Procuraduría General de la Nación y a las unidades administrativas especiales. Asegura además que, pese a la existencia de dicha disposición, la norma demandada establece con criterio contrario, que el Instituto de Estudios del Ministerio Público se le aplicará en lo general el régimen de la ley 80, pero el régimen contractual contenido en las normas sobre ciencia y tecnología en los demás aspectos.</p> <p>Así las cosas -asegura el demandante- "bien puede sostenerse que en primer término se está sustrayendo de un régimen con claro origen constitucional a una institución que deberá estar íntegramente regida por el mismo y, en segundo término, se está estableciendo una diferencia de tratamiento entre entidades iguales (las unidades administrativas especiales), lo cual implica una discriminación, con lo cual (sic) se violan los cánones constitucionales arriba anotados; ..."</p>
--	--

	<p>Puntualiza que, precisamente, la mayoría de las normas sobre ciencia y tecnología fueron derogadas por el artículo 81 de la ley 80 de 1993, con lo cual la reglamentación contractual específica resulta ser casi inexistente y su aplicación no tiene sustento constitucional. Para corroborarlo, adjunta las motivaciones que expusiera el Gobierno ante el Congreso de la República con ocasión de los debates que dieron origen a la ley 80 de contratación, y que se refieren al carácter general y obligatorio del estatuto contractual; y concluye con que las normas del estatuto general derogaron las del estatuto particular, al desvertebrarlo.</p> <p>En su parecer "...no es aventurado sostener que el régimen contractual determinado por la norma demandada deviene inconstitucional y, además inaplicable, ya que se contrae a normas que fueron expresamente derogadas por el estatuto general que debe aplicarse a los contratos del Estado".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-280/96
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Andrés de Zubiría Samper y Carlos Fernando Muñoz Castrillón.
Demandado	Normas acusadas: Artículos 20 (parcial), 22 (parcial), 25 (parcial), 27 (parcial), 29 (parcial), 31 (parcial), 32 (parcial), 41 (parcial), 43 (parcial), 52, 61, 66 (parcial), 73 (parcial), 79 (parcial), 82 (parcial), 110, 115, 116 y 177 (parcial) de la Ley 200 de 1995, "por la cual se adopta el Código Disciplinario Único".
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLES:</p> <p>a) Las expresiones "empleados y trabajadores" del artículo 20, "antes de la formulación de cargos" del artículo 27, "con destino a la entidad correspondiente" del numeral 2º del artículo 29, "y a favor de la entidad" del inciso tercero del artículo 31, "con la correspondiente indexación" del inciso primero del artículo 32, "o suspensión del contrato de trabajo (...) hasta por tres (3) meses" del</p>



	<p>inciso segundo del artículo 32, "en única instancia" del artículo 61, "o sancionados con pérdida de investidura" del literal 4º del artículo 79, "sin excepción alguna" y "o especiales" del artículo 177 de la Ley 200 de 1995, "por la cual se adopta el Código Disciplinario Único"</p> <p>b) El numeral 9º del artículo 29; el inciso segundo del artículo 31; el numeral 28 del artículo 41; el inciso primero del artículo 52; el inciso primero del numeral 2º del artículo 66; los literales e) y f) del artículo 73; y los artículos 110, 115 y 116 de la Ley 200 de 1995, "por la cual se adopta el Código Disciplinario Único"</p> <p>c) Los numerales 5º y 6º del artículo 29, salvo las expresiones "o de prestación de servicios personales", las cuales se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLES, en los siguientes términos:</p> <p>a) La expresión "terminación del contrato de trabajo" del inciso tercero del artículo 32 de la Ley 200 de 1995, siempre y cuando se entienda que en estos casos es también aplicable el artículo 110 de la Constitución.</p> <p>b) La expresión "o pérdida de investidura" del inciso tercero del artículo 32 de la Ley 200 de 1995, siempre y cuando se entienda que no se aplica a los Congresistas y que para los miembros de las Corporaciones Públicas de las entidades territoriales son causas constitucionales autónomas de pérdida de investidura las previstas por los artículos 110 y 291 inciso primero de la Constitución.</p> <p>c) El numeral 8º del artículo 41 de la Ley 200 de 1995, siempre y cuando se entienda que los paros, las suspensiones de actividades o disminuciones del ritmo laboral que se efectúen por fuera de los marcos del derecho de huelga no son admisibles constitucionalmente y, por ende, están prohibidas para todos los servidores públicos y no sólo para aquellos que laboren en actividades que configuren servicios públicos esenciales.</p> <p>d) La expresión "haya afectado la administración pública" del literal a) del artículo 43 de la Ley 200 de 1995, siempre y cuando se entienda que ésta hace referencia a los delitos contra el patrimonio del Estado.</p> <p>e) El inciso segundo del artículo 52 del de la Ley 200 de 1995, siempre y cuando se entienda que se trata de situaciones de urgencia en las cuales la conducción forzada del testigo es necesaria para evitar la pérdida de pruebas.</p>
--	--

	<p>Tercero: Declarar INEXEQUIBLES:</p> <p>a) Las expresiones "o en su defecto, a una de mayor entidad" del artículo 22, "o por quien tenga la facultad legal para hacerlo" del artículo 25, "o de prestación de servicios personales" de los numerales 5º y 6º del artículo 29 y del inciso tercero del artículo 32, "o de prestación de servicios" del inciso segundo del artículo 32, "autenticada" del artículo 82 de la Ley 200 de 1995, "por la cual se adopta el Código Disciplinario Único"</p> <p>b) El numeral 29 del artículo 41, el inciso segundo del numeral 2º del artículo 66 de la Ley 200 de 1995, "por la cual se adopta el Código Disciplinario Único"</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>2.1 El artículo 20.</p> <p>El artículo 20 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 20.- DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son destinatarios de la Ley Disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitorias (sic), los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión de Lucha ciudadana contra la corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional."</p> <p>El demandante Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que el aparte impugnado viola los artículos 53, 55 y 150 ordinal 23 de la Carta. Según su criterio, los trabajadores del Estado se vinculan por medio de un contrato de trabajo, en el cual las partes acuerdan libremente las condiciones, dentro de las cuales se entiende incluido el régimen sancionatorio. Por ello considera que la expresión desconoce el derecho de los empleados y las organizaciones sindicales, así como de la administración en todos sus órdenes, de pactar libremente las condiciones de trabajo y establecer el respectivo régimen sancionatorio. Señala entonces el actor:</p> <p>"Con la ley, entonces, se violenta el derecho de la Administración Central, descentralizada territorialmente o por servicios y de quienes la trabajan a pactar libremente las condiciones del contrato de trabajo.</p>

	<p>De igual modo, se violenta el derecho de los trabajadores, organizados en sus organizaciones sindicales, a negociar con la entidad empleadora, por medio de convención colectiva, las condiciones de trabajo, lo que incluye pactar sanciones y procedimientos para su aplicación."</p> <p>El ciudadano Silva Peñaranda, representante del Ministerio del Interior, comienza su análisis con algunas consideraciones generales sobre los fundamentos de la potestad disciplinaria y sobre las justificaciones para la expedición de un código disciplinario único, para lo cual transcribe algunos apartes de la exposición de motivos del proyecto para aprobar el mencionado código. Según su criterio, debido a la importancia que tiene que los servidores públicos cumplan con eficiencia y eficacia sus funciones, se hizo necesario recopilar en el Código Único, "normas comunes para todos los servidores públicos, atendiendo principios de equidad e igualdad que no imperaban" pues las numerosas reglamentaciones establecían tratamientos muy diferentes. Es más, según el ciudadano, la normatividad anterior a la ley 200 de 1995 "no pasaba de ser una colcha de retazos, formada por disposiciones anacrónicas, incoherentes, sin unidad conceptual, huérfanas de armonía y generalidad, que para algunos servidores habían creado sistemas de aberrantes privilegios, al paso que a otros los dejó por fuera de sus previsiones". Esta nueva ley era entonces necesaria, pues la potestad disciplinaria está sometida al principio de legalidad ya que "el Estado debe actuar siempre con sometimiento a la ley, al derecho y al ordenamiento jurídico vigente". Concluye entonces este interviniente que "la Constitución de 1991 abrió las puertas para la consolidación de un nuevo y autónomo derecho, EL DISCIPLINARIO, en el cual, igual que los demás, el principio de legalidad debe imperar no sólo con el objeto de darle un efectivo y preciso marco de control estatal sino también para proporcionar seguridad jurídica a los sujetos a quien exclusivamente se dirigen, los servidores públicos."</p> <p>Luego de esas consideraciones generales, el interviniente considera que la norma impugnada se ajusta a la Carta, pues la ley disciplinaria recae sobre todos los servidores públicos, concepto que, al tenor del artículo 123 superior incluye a los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas.</p> <p>Por su parte, la Vista Fiscal también considera que la expresión acusada se ajusta a la Carta pues los trabajadores oficiales y estatales son servidores públicos, por lo cual no puede admitirse "que un aspecto trascendental como lo es el atinente a su régimen disciplinario, sea materia de acuerdo entre las partes de la relación laboral de derecho público porque a diferencia de lo que sucede con la actividad que desarrollan los trabajadores del sector privado</p>
--	--

	<p>-que también es de vital importancia para la vida económica nacional-, la actividad que aquéllos despliegan está llamada a cumplir unas finalidades especiales". Según su criterio:</p> <p>"Los trabajadores del sector público ejercen lo que se ha denominado la 'función pública', un tipo de actividad personal que está al servicio de los intereses generales toda vez que representa una de las más notables herramientas a través de las cuales el Estado persigue la obtención de los altos cometidos sociales para los cuales fue constituido. Para alcanzarlos, la Ley Fundamental ordena (art. 209 de la C.P.) que la función pública se desarrolle con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.</p> <p>(...)</p> <p>Así pues, dejar a la libre determinación de los trabajadores y empleadores del sector público el establecimiento del régimen disciplinario, a más de ser un contrasentido, resulta una pretensión contraria a los dictados superiores, en particular de los que tengan que ver con la consecución de los fines esenciales del Estado."</p> <p>2.2 El artículo 22.</p> <p>El artículo 22 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 22.- CONCURSOS DE FALTAS DISCIPLINARIAS. El que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o en su defecto, a una de mayor entidad. (Se subraya la parte demandada)".</p> <p>El ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que la expresión acusada viola el artículo 29 de la Carta, que establece el principio de tipicidad. Según su criterio, la norma impugnada no hace "un señalamiento preciso de la sanción a aplicar a quien incurra en el concurso material de faltas disciplinarias", por lo cual es necesaria la declaración de inexequibilidad pues de esa manera queda precisada la sanción imponible en tales casos.</p> <p>Por el contrario, el Viceprocurador no juzga que el precepto "vulnere mandato alguno de la Carta, porque es evidente que la sanción de mayor entidad a la cual alude debe estar previamente definida en la ley, como en efecto lo prevén los Capítulos I, II, del Título III del mismo Ordenamiento, pues de lo contrario si se le estarían desconociendo al implicado las garantías constitucionales contempladas en el canon 29 del Estatuto Superior". Bajo tal entendido, el Ministerio Público solicita a la constitucionalidad de la expresión acusada.</p>
--	--

	<p>2.3. El artículo 25.</p> <p>El artículo 25 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 25.- FALTAS GRAVÍSIMAS. Se consideran faltas gravísimas: (...)</p> <p>9. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por la ley o por quien tenga la facultad legal para hacerlo. (Se subraya lo demandado)."</p> <p>El Ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) estima que el fragmento acusado transgrede el artículo 74 de la Constitución porque, en su parecer, "es la ley la que puede señalar las excepciones para acceder a documentos públicos. Así mismo, sólo puede ser la Ley la que señale los asuntos sometidos a reserva, entendiéndose que todo lo demás es público, y como tal puede ser divulgado."</p> <p>Por su parte, el Ministerio Público estudia la constitucionalidad de esta disposición, en armonía con el ordinal 18 del artículo 41, acusado por el ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067), pues considera que "sólo el análisis integral de las disposiciones parcialmente transcritas, puede mostrar el verdadero sentido de las mismas y por ende su valor constitucional." Según su criterio ambas normas se ajustan a la Carta pues no "pugna con el Ordenamiento Superior la prohibición de dar noticias o informes sobre asuntos de la administración cuando no se está facultado para hacerlo." Según la Vista Fiscal "de lo que se trata es de que quienes ejerzan la función pública lo hagan ciñéndose a las instrucciones razonadas impartidas por los superiores jerárquicos, en orden a garantizar la disciplina que debe imperar en el aparato estatal con miras al logro de los cometidos sociales señalados en la Constitución. Por eso, de no existir la prohibición que se acusa, se llegaría al absurdo del caos administrativo en detrimento de los derechos de los asociados." Concluye entonces el Viceprocurador:</p> <p>"Respecto a esta preceptiva no se advierte que esté afectada de inconstitucionalidad, por cuanto el sentido de la misma estriba, se repite, en la debida lealtad y obediencia que deben observar los servidores públicos hacia sus superiores jerárquicos, quienes pueden determinar razonadamente que en un momento dado sus subordinados guarden sigilo y prudencia en el manejo de los asuntos sometidos a su conocimiento. Por ello, la violación a esta medida debe acarrearle al servidor público la respectiva responsabilidad disciplinaria. Y todavía es más evidente la infracción, cuando es la propia Ley la que ordena que determinado asunto tenga el carácter de secreto oficial."</p>
--	--

	<p>2.4. El artículo 27.</p> <p>El artículo 27 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 27.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA. Se determina si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: (...) 7. f) El confesar la falta antes de la formulación de cargos. (Se subraya la parte demandada)"</p> <p>El ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que el aparte acusado viola los artículos 2º, 33 y 29 de la Constitución, pues si al implicado se le exige confesar su falta antes de la formulación de los cargos, prácticamente se le está compeliendo a que declare en contra de sí mismo. Señala entonces el actor:</p> <p>"En efecto, si se exige al funcionario público confesar hechos antes de la formulación de cargos se le está compeliendo a declarar en su propia contra y se le esta llevando a pensar en su propia culpabilidad antes de ser, al menos, llamado a rendir cuentas. Así las cosas, tal como ocurre en el proceso penal, cuyos principios y garantías son aplicables en el proceso disciplinario del empleado público que esta ley establece, la confesión debe tenerse como tal cuando se presenta antes de que se dicte sentencia (fallo) de primera instancia."</p> <p>Contrariamente al actor, para la Vista Fiscal la norma no establece una obligación del disciplinado de confesar su falta antes de la formulación de los cargos. Según el Viceprocurador:</p> <p>"La lectura del artículo 27 de la ley 200 de 1995, enseña que de lo que se trata es de establecer unos criterios que le sirvan de utilidad al fallador disciplinario para efectos de la calificación de las faltas, y, por ende, de la dosificación de las sanciones. Y un criterio que indudablemente favorece al implicado es el cuestionado, toda vez que quien confiese su falta antes de que se le formulen cargos admite los hechos y sus consecuencias, entre ellas su responsabilidad y evidencia su colaboración con la administración, porque ya no será menester agotar otras diligencias en el proceso disciplinario -que eventualmente pueden resultar onerosas- para deducirle responsabilidad al implicado. Su confesión en este evento, contribuye a la racionalización del aparato de justicia disciplinaria ya que se ahorrarán el tiempo y dinero que bien pueden emplearse en otras investigaciones, por lo cual el beneficio de la calificación de la falta que incide en la sanción específica, y en el proceso a seguir, resultan relevantes y favorables para el investigado y para la investigación con lo cual se justifica su trato</p>
--	---

	<p>diferente."</p> <p>2.5. El artículo 29.</p> <p>El artículo 29 preceptúa (se subrayan las partes demandadas):</p> <p>"Artículo 29.- SANCIONES PRINCIPALES. Los servidores públicos estarán sometidos a las siguientes sanciones principales:</p> <p>(...)</p> <p>2. Multa con destino a la entidad correspondiente, hasta el equivalente de noventa (90) días de salarios devengado en el momento de la comisión de la falta. En los casos que se haya decretado la suspensión provisional la multa será pagada con el producto de los descuentos que se le hayan hecho al disciplinado.</p> <p>(...)</p> <p>5. Suspensión del contrato de trabajo o de prestación de servicios personales, hasta por noventa (90) días.</p> <p>6. Terminación del contrato de trabajo o de prestación de servicios personales.</p> <p>(...)</p> <p>9. Pérdida de la investidura para los miembros de las corporaciones públicas, de conformidad con las normas de la Constitución y la ley que la regule."</p> <p>- El ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) impugna parcialmente el numeral segundo pues considera que el mandato según el cual las multas se deben destinar a la entidad correspondiente desconoce uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, cual es la vigencia de un orden justo, y viola el artículo 150-12 de la Carta Superior por cuanto solamente la ley puede establecer contribuciones fiscales o parafiscales. Dice al respecto el actor:</p> <p>"La expresión CON DESTINO A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE atenta contra la vigencia de u orden social justo, ordenado por el artículo 2º de la Carta política, pues así las entidades podrían ver notoriamente incrementados sus presupuestos , al dedicarse a "gravar" con multas a sus servidores.</p> <p>Adicionalmente se violenta el artículo 150-12 de la Carta, pues la ley sólo puede establecer en favor de las entidades contribuciones Fiscales y, excepcionalmente, parafiscales.</p> <p>Como bien se señala en el Código Laboral Vigente, las multas deben consignarse en una cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento.</p>
--	--

	<p>En la administración pública, este principio no puede ser exceptuado, so pena de invitarse a la vulneración de la justicia que debe regir las relaciones de la administración con quienes le entregan su fuerza de trabajo."</p> <p>El Viceprocurador, por su parte, considera que el actor sustenta su acusación en una concepción equivocada sobre las multas. Según su criterio:</p> <p>"Las multas constituyen sanciones pecuniarias que generalmente son impuestas por la autoridad facultada para ello con ocasión de la violación de una prohibición o el incumplimiento de un deber legal, y previo el adelantamiento de un proceso disciplinario o administrativo. No son ellas una manifestación de la potestad impositiva del Estado sino de su poder punitivo, que está obligado a ejercer en forma con lo dispuesto en el canon 124 de la Ley Fundamental.</p> <p>Ahora bien, lo que caracteriza a la facultad impositiva del Estado es la existencia de la correlativa obligación constitucional que les asiste a todas las personas y ciudadanos residentes en el país de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (art. 95-9 de C.P.).</p> <p>De otra parte, yerra el libelista cuando afirma que las multas carecen de una finalidad específica porque ignora que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. del Decreto 2170 de 1992 - que suprimió el Fondo Nacional de Bienestar Social-, las multas por sanciones disciplinarias que se impongan a los servidores públicos, se cobrarán por cada una de las entidades a las cuales pertenezca el servidor sancionado, y se destinarán a financiar programas de bienestar social de los empleados de las entidades."</p> <p>- El mismo demandante Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que los numerales 5º y 6º vulneran el principio de la libertad contractual previsto en los artículos 53, 55 y 123 de la Carta. Además, según su criterio, esos numerales ignoran que, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el contrato de prestación de servicios personales no genera una relación de dependencia con la Administración, porque además ésta "no es un verdadero patrón , por lo tanto no puede la ley entregarle atribuciones de tal. "</p> <p>El Viceprocurador no acoge los anteriores argumentos y solicita a la Corte que declare exequibles estos numerales. Según su criterio, no es admisible que las partes, en una relación que implica el ejercicio de funciones públicas, puedan libremente pactar los alcances del régimen disciplinario. Por ello tampoco le parece admisible el argumento de que no se puede sancionar a quien efectúe un</p>
--	---



	<p>contrato de prestación de servicios, pues si éste implica el ejercicio de funciones públicas, es lógico que también se le aplique al contratista la ley disciplinaria. Concluye al respecto la Vista Fiscal:</p> <p>"Independientemente de la naturaleza del vínculo contractual o del nexo laboral predicable o no en punto al contrato de prestación de servicios, lo que interesa como objeto para el derecho disciplinario es que a través de éste se puede verificar el ejercicio efectivo de funciones públicas, sea que éste se realice en forma temporal o transitoria. Y es con este criterio, que los numerales impugnados establecen las sanciones de suspensión y terminación de los contratos de trabajo o de suspensión y terminación de los contratos de trabajo o de prestación de servicios, en este último caso sin perjuicio de las medidas que el Estado de la Contratación Estatal contemple para los eventos del incumplimiento de las cláusulas contractuales."</p> <p>- El ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067) cuestiona el numeral noveno pues considera que viola el artículo 237 ordinal 5º de la Carta, que consagra que la pérdida de investidura de los congresistas es una facultad propia del Consejo de Estado. Igualmente según su criterio, conforme al artículo 291, desarrollado por la Ley 136 de 1994, la pérdida de investidura de los otros miembros de las corporaciones públicas es una atribución de los tribunales contencioso-administrativos, por lo cual es violatorio de la Carta conferir esa facultad disciplinaria al Procurador.</p> <p>Por su parte, el ciudadano Silva Peñaranda, apoderado del Ministerio del Interior considera que este numeral 9º es constitucional, por cuanto la Carta defirió a la ley la regulación de la pérdida de investidura de los miembros de las Corporaciones Públicas.</p> <p>En el mismo sentido se pronuncia el Ministerio Público, para quien la pérdida de la investidura es una sanción de tipo disciplinario que, conforme a la Carta, es competencia del Consejo de Estado en relación con los congresistas. Por ende, "nada se opone a que aparezca en la lista de las sanciones principales de su clase, en el Estatuto que con carácter generalizante y único regula la materia máxime cuando el mismo numeral 9) acusado preceptúa que en su aplicación se respetarán las normas de la Constitución y la Ley que regulan esa figura, entre las cuales lógicamente se cuentan las relativas a la competencia."</p> <p>2.6. El artículo 31.</p> <p>El artículo 31 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p>
--	---

	<p>Artículo 31.- PLAZO Y PAGO DE MULTA. Cuando la sanción consista en multa que exceda de diez (10) días del salario devengado en el momento de la comisión de la falta y el sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse proporcionalmente durante los ocho (8) meses inmediatamente siguientes a su imposición.</p> <p>Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado sus servicios de conformidad con el decreto 2170 de 1992.</p> <p>Si el sancionado no se encontrare vinculado, podrá consignarla en el Banco Popular en el plazo de 30 días y a favor de la entidad. De no hacerlo, se recurrirá de inmediato ante la jurisdicción coactiva correspondiente.</p> <p>Vencido el plazo señalado en el inciso anterior el moroso pagará el monto de la multa con intereses comerciales. (Se subrayan los apartes demandados).</p> <p>Los cargos del ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) contra los apartes demandados, así como las consideraciones del Ministerio Público, son idénticos que aquellos esgrimidos en contra del numeral 2º del artículo 29.</p> <p>2.7. El artículo 32.</p> <p>El artículo 32 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 32.- LIMITE DE LAS SANCIONES. Las faltas leves dan lugar a la aplicación de las sanciones de amonestación escrita con anotación en la hoja de vida o multa hasta 10 días del salario devengado en el momento de cometer la falta, con la correspondiente indexación.</p> <p>Las faltas graves se sancionan con multa entre once (11) y noventa (90) días del salario devengado al tiempo de cometerlas, suspensión en el cargo hasta por el mismo término o suspensión del contrato de trabajo o de prestación de servicios hasta por tres (3) meses, teniendo en cuenta los criterios señalados en el artículo 27 de esta ley.</p> <p>Las faltas gravísimas serán sancionadas con terminación del contrato de trabajo o de prestación de servicios personales, destitución, desvinculación, remoción o pérdida de investidura."</p> <p>- El ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067) ataca la expresión "o pérdida de investidura" del último inciso, por las mismas</p>
--	--

	<p>razones por las cuáles impugna el numeral 9º del artículo 29 anteriormente estudiado. Por su parte, el ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) acusa parcialmente los incisos segundo y tercero, con base en las mismas consideraciones sobre libertad contractual efectuadas a propósito del artículo 29. La respuesta del Ministerio Público a ambos cargos es también idéntica a la desarrollada anteriormente, por lo cual resulta innecesario repetir los correspondientes argumentos.</p> <p>- Este mismo ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) acusa la expresión "con la correspondiente indexación" del inciso primero del artículo 32, pues considera que desconoce el orden social justo que propugna la Constitución. Además, según su criterio, esa expresión desconoce el artículo 29 superior, que exige la definición inequívoca de las faltas y de sus correspondientes sanciones disciplinarias, por cuanto no señala la norma "desde que momento se empiezan a contar los términos de la indexación, pudiendo, entonces, contarse en algunas entidades desde la fecha de consumación de la falta, y, en otras, desde la fecha de aplicación de la sanción".</p> <p>El Viceprocurador, por su parte, considera que el mecanismo de la indexación armoniza con la Carta pues de esa manera "se evita la ruptura de la debida proporcionalidad que debe existir entre la falta cometida por el servidor público y la condigna sanción, con lo cual se hace más funcional y equitativo el régimen disciplinario." Tampoco le parece que la norma desconozca el principio de tipicidad pues la sanción hace referencia a un valor del salario mínimo legal diario devengado en el momento de la infracción. En todo caso caso, añade la Vista Fiscal, "la definición de este aspecto de la norma es un asunto que bien puede reglamentar el Gobierno en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, quedando en claro sí que el momento a partir del cual se debe tomar en cuenta la indexación es obviamente el de la imposición de la sanción disciplinaria de la multa."</p> <p>2.8. El artículo 41.</p> <p>El artículo 41 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>Artículo 41.- PROHIBICIONES (...)</p> <p>8. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. (...)</p> <p>28. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración cuando no estén facultados para hacerlo.</p>
--	--

	<p>(...)</p> <p>29. Solicitar u obtener préstamos o garantías, de los organismos crediticios, sin autorización escrita y previa del jefe del respectivo organismo, o de quien éste delegue.</p> <p>- El ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067) considera que el numeral 8º del artículo 41 es inconstitucional, por cuanto vulnera la protección constitucional a los derechos de asociación y huelga de los servidores públicos, consagrada por los artículos 39 y 53 de la Carta. Según su criterio, la Constitución no prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales sino que se limita a no garantizarla, por lo cual concluye:</p> <p>"Entonces, debe quedar claro que lo que hizo la constitución de 1991 (al igual como sucedía en el ordenamiento jurídico precedente, la carta Fundamental de 1886, modificada en el acto legislativo Nº 1 de 1936), fue el establecer unas garantías al derecho de huelga de los trabajadores, mientras que cuando se produzca una huelga en los llamados servicios públicos esenciales aquella no estará garantizada, pero bajo ningún supuesto esta última no está prohibida. Y, por tanto entonces el artículo 41.8 de la ley 200/95 viola lo establecido en el ordenamiento superior: el artículo 56, de la C. P. de 1991."</p> <p>Por el contrario, el interviniente Silva Peñaranda, invocando la sentencia C-473/94 de esta Corporación, considera que esa prohibición se ajusta a la Carta, criterio que comparte la Vista Fiscal. Así, según el Viceprocurador, el derecho de huelga "puede ser legítimamente ejercido por los servidores públicos, siempre y cuando estén vinculados a actividades que no constituyan servicios públicos definidos por el Legislador como esenciales, con la salvedad de que en ningún caso los empleados públicos pueden hacer huelga ya que la función pública que desempeñan se constituye en un servicio público esencial."</p> <p>- El mismo ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067) considera que el numeral 28 infringe el mandato del artículo 20 de la Carta, que consagra el derecho de recibir información veraz e imparcial. La Vista Fiscal responde a esa impugnación y defiende la constitucionalidad de la prohibición, con los mismos argumentos invocados en relación con los cargos contra el artículo 25, por lo cual la Corte considera innecesario repetir sus consideraciones.</p> <p>- Finalmente, el ciudadano De Zubiría acusa el numeral 29 pues considera que vulnera no sólo al derecho a la intimidad personal de los servidores públicos sino también el derecho de propiedad porque "dentro de sus derechos está el de solicitar libremente y sin limitación alguna, los créditos bancarios que necesite, para el pleno</p>
--	---

	<p>desarrollo de sus derechos personales y familiares”.</p> <p>El Defensor del Pueblo coadyuda ese cargo, pues considera que ese numeral no sólo desconoce los límites que la Carta establece a la facultad reglamentaria de los poderes constituidos sino que viola varios derechos constitucionales de los servidores públicos. Según este interviniente, los servidores públicos tienen cargas especiales, por la función que ejercen, pero ello no significa "que el servidor público o el particular que desempeña funciones públicas tengan que sacrificar sus derechos a la igualdad, a la personalidad jurídica, a la intimidad personal y a la autonomía, en aras de respetar una prohibición expresamente regulada." Concluye entonces el Defensor:</p> <p>"Aparte de ser inconstitucional la prohibición contenida en el numeral 29 del artículo 41 de la ley 200 de 1995, es además inútil e inconducente.</p> <p>La libertad de opciones y toma de decisiones, propias del derecho a la autonomía -art. 16 C.N.-, son sacrificadas por un excesivo celo del legislador de intentar controlar una conducta que hace más parte del ámbito privado de las personas que de su vida pública y que para nada incide en el desempeño de la función.</p> <p>La prohibición contenida en la norma, traspasa además la barrera donde se inicia el derecho a la intimidad -art. 15C.N.-, por cuanto sin mucho esfuerzo se deduce que, la solicitud de un préstamo que hace un servidor público a una entidad crediticia, es a título personal exclusivamente, circunstancia ésta que lo autoriza para tener este hecho por fuera del conocimiento público.</p> <p>De otra parte, la personalidad jurídica, entendida como la capacidad para ser sujeto de derechos y contraer obligaciones, ha dejado de ser una institución meramente de creación legal para ser de reconocimiento constitucional -art. 14 C.N.-. Como tal es un derecho inherente y un atributo de la persona humana que también se ve desnaturalizado específicamente con la norma demandada, ya que al condicionar su ejercicio “a la autorización escrita y previa del respectivo organismo”, menoscaba la capacidad de obrar de las personas, específicamente de los servidores públicos.</p> <p>También consideramos que la norma transgrede el derecho a la igualdad -art 13 C.N.- de los servidores públicos, con respecto a los particulares que pudieran encontrarse en la misma situación fáctica, más cuando la incursión en este tipo de prohibiciones por parte de aquellos, puede conducir a que se configure una falta disciplinaria y a la imposición de una sanción.</p>
--	---

	<p>En este caso, personas con vínculos laborales diferentes, por ejemplo, un empleado del sector privado y otro del sector oficial, que acudan a una entidad crediticia a solicitar un préstamo sin la autorización de sus respectivos superiores, el segundo podrá ser objeto de una sanción disciplinaria mientras el primero no.</p> <p>Como se indicó además de ser inconstitucional la norma demandada es inútil e inconducente. Inútil porque una medida de este tipo no contribuye a la eficacia, a la moralización o a la competitividad de los servidores públicos. Inconducente porque muy al contrario podría dar lugar a efectos contraproducentes al colocarse cortapisas no razonables al ejercicio de una actividad lícita."</p> <p>Por su parte, la Vista Fiscal defiende la legitimidad constitucional de esa prohibición pues considera que ella deriva de la "necesidad que le asiste al Estado y a la Administración Pública en todos sus niveles, de estar al tanto de las situaciones patrimoniales de quienes ejercen la función pública" debido a "la desafortunada mutación en no pocos casos, de los valores éticos de quienes tienen la responsabilidad del ejercicio de tal función en donde, las posibilidades de obtención de dineros fáciles repercutía en detrimento de los recursos públicos."</p> <p>2.9. El artículo 43.</p> <p>El artículo 43 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 43.- OTRAS INHABILIDADES.- Constituyen además inhabilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:</p> <p>1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública."</p> <p>(...)</p> <p>El ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067) considera que el supuesto de hecho de la norma acusada "... es excesivamente general, prácticamente gaseoso..." ya que no hay delito culposo que no afecte a la administración pública, lo cual vulnera el principio constitucional de la legalidad de los delitos y de las penas consignado en el artículo 29</p> <p>El Viceprocurador comienza el análisis de la norma señalando que ésta consagra "dos inhabilidades y una excepción. Las inhabilidades son el haber sido condenado el servidor público a pena privativa de la libertad, y haber sido condenado a esa misma pena por delitos</p>
--	---

	<p>políticos o culposos que hayan afectado a la administración pública. La excepción se predica de estos últimos delitos, los culposos, siempre y cuando afecten a la administración pública." Preciado así el sentido de la disposición, la Vista Fiscal considera que es exequible por cuanto es un desarrollo del artículo 122 de la Carta, según el cual "el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado -sean estos dolosos o culposos-, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. Esta inhabilidad de rango constitucional carece de término de duración, es decir que es indefinida, en razón a la entidad del atentado." Concluye entonces la Vista fiscal que "cuando el numeral impugnado alude al hecho de haber sido condenado por delitos culposos que atentan contra la administración pública, como causal de inhabilidad para desempeñar un destino público, debe entenderse que se trata de aquellos que implican un perjuicio para su patrimonio económico, porque es en este sentido como adquiere su valor constitucional y así se le solicitará a la Corte que lo declare."</p> <p>2.10. El artículo 52.</p> <p>El artículo 52 preceptúa:</p> <p>"Artículo 52.- CIUDADANO RENUENTE.- Salvo las excepciones constitucionales o legales a su favor cuando el testigo sea un particular y se muestre renuente a comparecer podrá imponérsele multa de cinco (5) a ciento ochenta (180) salarios mínimos diarios, previa explicación sobre su no concurrencia, que deberá presentar dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha señalada para la declaración mediante resolución contra la cual sólo cabe recurso de reposición, quedando con la obligación de rendir declaración.</p> <p>Si la investigación cursa en la Procuraduría podrá disponerse, además, la conducción del renuente por la fuerza pública, para efectos de la recepción inmediata de la declaración sin que esta conducción implique privación de la libertad."</p> <p>El ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067) reconoce que todas las personas tienen el deber de colaborar con las autoridades de justicia, pero sostiene que la multa y la conducción del testigo renuente violan el artículo 28 de la Constitución, según el cual toda privación de la libertad requiere de la existencia de un mandamiento escrito de la autoridad judicial competente, con las formalidades legales.</p> <p>Por el contrario, para la Vista Fiscal la disposición se ajusta a la Carta porque es un desarrollo "del deber constitucional de todos los ciudadanos de colaborar con el buen funcionamiento del</p>
--	--

	<p>Estado" y una expresión del principio de solidaridad. Obviamente, señala el Viceprocurador, las multas deben respetar el debido proceso y no pueden imponerse sobre aquellos que no tienen el deber de testificar. Finalmente, según el Ministerio Público, "la atribución exclusiva de la Procuraduría para ordenar la conducción del testigo renuente, se justifica en razón del poder disciplinario preferente que constitucionalmente se le reconoce (art. 277 de C.P.), el cual, sin instrumentos para su cabal cumplimiento haría nugatoria la labor de control a ella asignada."</p> <p>2.11. El artículo 61.</p> <p>El artículo 61 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 61.- COMPETENCIA FUNCIONAL. Corresponde al jefe inmediato del investigado, cuando la falta sea leve, fallar el proceso en única instancia."</p> <p>El ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que la expresión "en única instancia" vulnera el debido proceso (CP art. 29), pues es derecho de toda persona impugnar la sentencia condenatoria, principio que es aplicable al proceso disciplinario ya que el fallo que allí se dicta es similar en sus efectos a una sentencia penal.</p> <p>Para el Viceprocurador, la consagración de procesos disciplinarios de única instancia, por faltas leves, no vulnera la Carta "por cuanto representa una forma efectiva de racionalizar el poder disciplinario del Estado, permitiendo que comportamientos de menor entidad puedan ser conocidos por el inmediato superior del servidor público." Además, señala la Vista Fiscal, "el principio de la doble instancia no es absoluto, dado que su aplicación práctica queda supeditada a los eventos previstos en el artículo 31 de la Carta Política, según el cual la ley establecerá los asuntos de doble y única instancia." Claro, precisa el Ministerio Público, que debe entenderse que la imposición de la falta debe estar precedida de un proceso en donde el disciplinado tenga la oportunidad de defenderse .</p> <p>2.12. El artículo 66.</p> <p>El artículo 66 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 66.- COMPETENCIAS ESPECIALES.- (...)</p> <p>2. Corresponde al Procurador General de la Nación investigar, por el procedimiento ordinario previsto en este Código y en única instancia a los Congresistas, sea que la falta se haya cometido con</p>
--	---



	<p>anterioridad a la adquisición de esta calidad o en ejercicio de la misma y aunque el disciplinado haya dejado de ser congresista.</p> <p>Cuando la sanción a imponer, por la naturaleza de la falta, sea la de pérdida de investidura, de competencia del Consejo de Estado, la investigación podrá adelantarse por el Procurador General de la Nación. (...)"</p> <p>El ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067) acusa las expresiones señaladas pues considera que ellas vulneran la naturaleza restrictiva de los fueros constitucionales. Según su criterio, la calidad de congresista se tiene desde el momento del reconocimiento de la elección y se prolonga hasta el vencimiento del período o la aceptación de la renuncia, por lo cual la expresión acusada desconoce el alcance del fuero de estos servidores. Además, considera el actor que la norma desconoce el fuero de juzgamiento de los congresistas, que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, así como "la facultad del procurador general de conocer de las faltas disciplinarias de los miembros del legislativo nacional (art. 277)".</p> <p>La Vista Fiscal no comparte la opinión del demandante, según la cual el fuero de los congresistas se limita "a los casos de infracciones cometidas en ejercicio de esa investidura, por cuanto en tales eventos la Carta Política ha dispuesto que a éstos, al igual que al Presidente de la República, el fuero los cobija en infracciones cometidas con anterioridad al ejercicio de sus funciones, y obviamente se prolonga después del cese de la función pública cuando la falta se ha cometido en ejercicio de éste". Igualmente considera el Ministerio Público que es constitucionalmente legítimo que la ley confiera al Procurador la facultad de adelantar la investigación en los casos de pérdida de investidura. Según su criterio:</p> <p>"Si bien aquel proceso es de naturaleza jurisdiccional disciplinario autónomo de competencia exclusiva de la Sala Contencioso-Administrativa del Consejo de Estado, lo cual se persigue deducir una responsabilidad política a dichos servidores por las causales contempladas taxativamente en la Constitución (art. 183), y que por tal razón no es supeditable a ningún tipo de pronunciamiento, ello no implica que la investigación no pueda ser adelantada por el Procurador, quien al detentar un poder prevalente de carácter disciplinario está habilitado constitucionalmente para ejercer "vigilancia superior sobre la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular" y en tal virtud para indagar disciplinariamente por la conducta de los Congresistas, aún cuando se limita el poder sancionador en relación</p>
--	---

	<p>con los mismos, cuando deba imponerse a éstos la pérdida de su investidura."</p> <p>2.13. El artículo 73.</p> <p>El artículo 73 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>Artículo 73.- DERECHOS DEL DISCIPLINADO . (...) Son derechos del disciplinado:</p> <p>(...)</p> <p>e) Designar apoderado, si lo considera necesario.</p> <p>f) Que se le expidan copias de la actuación, salvo las que por mandato constitucional o legal tengan carácter reservado, siempre y cuando dicha reserva no surja de la misma investigación que contra él se siga. (se subrayan los apartes demandados).</p> <p>- El ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) estima que el literal e) es inconstitucional por cuanto sólo admite la posibilidad de que el procesado designe un apoderado, es decir, un abogado, con lo cual excluye la opción del asesoramiento por parte de la respectiva organización sindical, lo cual viola los artículos 29, 38 y 39 de la Carta. Por el contrario, según el Viceprocurador, el literal es exequible porque la asistencia de un apoderado escogido por el disciplinado es una expresión del derecho "a la defensa técnica que no podía ser ignorado por el régimen disciplinario, como que no excluye el asesoramiento sindical letrado, o el iletrado con tal que sea extraprocesal."</p> <p>- El mismo ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que el literal f) viola el artículo 29 de la Constitución, pues al limitar la expedición de copias a aquellas que no estén sometidas a reserva, desconoce la publicidad que debe imperar en esa clase de juicios. Para la Vista Fiscal, en cambio, la norma es exequible, pues lejos de restringir el derecho de defensa, lo fortalece, por cuanto si no existiera esta disposición, se podría argumentar que el procesado no podría conocer ciertas probanzas que sirven de fundamento a la investigación pero que tienen carácter reservado. Concluye entonces al respecto el Viceprocurador:</p> <p>"De esta manera, el legislador dirime esa tensión valorativa que se presenta entre la reserva legal documental y derecho de defensa, prefiriendo este último. Claro está, que la reserva se levanta para el implicado respecto de aquéllos documentos en los cuales se apoya la investigación, quedando a salvo su deber de mantener el debido sigilo en relación con terceros, cuando se trate de documentos reservados por mandato constitucional o legal.</p>
--	---

	<p>Ahora bien, lo que es incuestionable al tenor del artículo 74 Superior es que el derecho de acceso a los documentos públicos no es un derecho absoluto, toda vez que dicho precepto defiere a la Ley la regulación de los eventos en los cuales no se puede acceder a los documentos públicos."</p> <p>2.14. El artículo 79.</p> <p>El artículo 79 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>Artículo 79.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.- En virtud del principio de publicidad: (...)</p> <p>4. La Procuraduría General de la Nación, semestralmente publicará los nombres de los servidores públicos que hayan sido desvinculados o destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria o sancionados con pérdida de investidura, una vez que esté en firme sin perjuicio del correspondiente archivo y antecedentes disciplinarios. Copia de esta publicación se enviará a todos los organismos públicos"</p> <p>El ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067) invoca los argumentos precedentes sobre la exclusividad de la función del Consejo de Estado en relación con la pérdida de investidura. Por su parte, la Vista Fiscal reitera que, según su criterio, la pérdida de la investidura es a la vez una sanción jurisdiccional y disciplinaria, por lo cual "nada se opone a que sea incluída en el catálogo de las sanciones que trae la Ley 200 de 1995 y menos a que sea dado a la publicidad el nombre de los servidores públicos a quienes se les ha impuesto mediante decisión judicial firme."</p> <p>2.15. El artículo 82.</p> <p>El artículo 82 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>Artículo 82.- ADUCCIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos que se aporten a las investigaciones disciplinarias lo serán en original o copia autenticada, de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia. (Se subraya el aparte demandado).</p> <p>El ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que la expresión desconoce el derecho de defensa del disciplinado pues no se permite la presentación de fotocopias simples, mientras que eso es posible en el procedimiento civil. El Viceprocurador considera que el argumento del actor no es constitucional sino legislativo ya que s funda en la idea de que "la tendencia consagrada en la reforma procesal civil de 1991 debe primar sobre la previsión del código Disciplinario". Esta tesis no es admisible para</p>
--	--

	<p>el Viceprocurador pues "el legislador goza de libertad formadora para regular el aspecto probatorio del proceso sin menoscabo de principios como el de la inocencia y el de la buena fe de quienes actúan ante las autoridades públicas, los que no se desconocen cuando se establece en el Código la exigencia de autenticar los documentos que no reposan en la Entidad y se aportan al proceso disciplinario."</p> <p>De otro lado, la Vista Fiscal precisa que la norma acusada está vigente, por lo cual procede un pronunciamiento de fondo de la Corporación, pues ella no fue derogada por el Decreto-Ley 2150 de 1995. En efecto, el artículo 150 de ese cuerpo normativo señala explícitamente que "nada de lo dispuesto en el presente Decreto afectará las disposiciones vigentes cuando las regulaciones, trámites o procedimientos se encuentren consagrados en códigos, leyes orgánicas o estatutarias", por lo cual se concluye que el artículo 82 del Código Disciplinario Único no ha sido derogado.</p> <p>2.16. El artículo 110.</p> <p>El artículo 110 preceptúa:</p> <p>Artículo 110.- FALLOS CONSULTABLES. Son consultables los fallos absolutorios de primera instancia y los que impongan como sanción amonestación escrita.</p> <p>En relación con la consulta dentro de la ejecutoria del fallo absolutorio el disciplinado podrá solicitar mediante petición debidamente fundamentada, su confirmación.</p> <p>El ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que este artículo implica una presunción de culpabilidad en contra del funcionario absuelto, que no sólo contraviene el principio universal de la presunción de inocencia, sino que además desconoce los principios constitucionales de la reformatio in pejus y de la buena fe. Según su criterio;</p> <p>"Lo dispuesto en este artículo (110) violenta la prohibición de la reforma en peor establecida en el artículo 31 de la Constitución. Los posibles yerros o actuaciones dolosas de funcionarios investigadores, no pueden corregirse violentando mandatos constitucionales. La ley disciplinaria señala los mecanismos para sancionar al investigador que actúe dolosamente, así se garantiza una actuación disciplinaria transparente."</p> <p>El Ministerio Público discrepa del parecer del actor pues considera que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, "el grado de consulta es perfectamente admisible en las actuaciones administrativas, en</p>
--	---

	<p>tanto que se la establece en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales."</p> <p>2.17. Los artículos 115 y 116.</p> <p>Los artículos 115 y 116 preceptúan:</p> <p>"Artículo 115.- SUSPENSIÓN PROVISIONAL.- Cuando la investigación verse sobre faltas gravísimas o graves, el nominador, por su iniciativa o a solicitud de quien adelanta la investigación, o el funcionario competente para ejecutar la sanción a solicitud del Procurador General de la Nación, o de quien delegue, podrán ordenar la suspensión provisional del investigado por el término de tres (3) meses, prorrogables hasta por otros tres (3) meses, siempre y cuando existan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.</p> <p>El auto que ordene o solicite la suspensión provisional será motivado, tendrá vigencia inmediata y contra él no procede recurso alguno.</p> <p>Artículo 116.- REINTEGRO DEL SUSPENDIDO.- El disciplinado suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir, durante el período de suspensión en los siguientes casos:</p> <p>a) Cuando la investigación termine porque el hecho investigado no existió, la ley no lo considera como falta disciplinaria, o se justifica, o el acusado no lo cometió, o la acción no puede proseguirse o haberse declarado la nulidad de lo actuado incluido el auto que decretó la suspensión provisional;</p> <p>b) Por la expiración del término de suspensión sin que hubiere terminado la investigación, salvo que esta circunstancia haya sido determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o su apoderado;</p> <p>c) Cuando la sanción impuesta fuere de amonestación, multa o suspensión.</p> <p>PARÁGRAFO.- Cuando la sanción impuesta fuere la multa se ordenará descontar de la cuantía la remuneración que deba</p>
--	--

	<p>pagarse correspondiente al término de suspensión, el valor de la multa hasta su concurrencia.</p> <p>Cuando el disciplinado fuere sancionado con suspensión de funciones o del contrato, en el fallo se ordenarán las compensaciones que correspondan, según lo dejado de percibir durante el lapso de la suspensión provisional.”.</p> <p>Según el ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067), la facultad contemplada en estas normas es inconstitucional porque la Carta no habilitó la Procuraduría para suspender a los funcionarios públicos, como sí lo hizo respecto del Contralor de la República. En sus palabras:</p> <p>"De todo lo anterior cabe concluirse que el único autorizado en Colombia, que puede suspender funcionarios es el Contralor General de la República y los otros a quienes delegue la misma potestad, como en forma diáfana lo señala la precitada norma constitucional “la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios” y, por ende, es abiertamente contrario al ordenamiento superior la atribución por vía de analogía otorgada por la ley 200/95 al Procurador General de la Nación."</p> <p>Por el contrario, para la Vista Fiscal la suspensión provisional prevista encuentra fundamento constitucional en los artículos 60. 121, 122, 123, y 124 de la Carta "toda vez que constituye un mecanismo del cual se vale el Legislador para cumplir con el mandato contenido en los aludidos preceptos, que le ordenan determinar la responsabilidad de los servidores públicos". Concluye entonces el Viceprocurador:</p> <p>"Dicha medida, según lo ha dejado establecido esa H. Corporación en las sentencias C-108 y C-406 de 1995, es un elemento normativo de carácter preventivo con el cual se garantiza la buena marcha y la continuidad en el ejercicio de la función pública, que en ningún momento implica la pérdida del empleo ni atenta contra la honra ni el debido proceso del disciplinado, porque en el curso de éste se tiene la oportunidad de desvirtuar la acusación que se le imputa.</p> <p>Pero no es una medida absolutamente discrecional, como que sólo procede respecto de faltas gravísimas - taxativamente descritas- o graves; que competen al nominador, al Procurador General de la Nación o a quien delegue; temporalmente hasta seis meses, si por cierto se dan los elementos de juicio que permitan inferir lesión en el derecho de defensa, interferencia en la función disciplinaria, la continuidad o reiteración de la falta."</p>
--	---

	<p>2.18. El artículo 177</p> <p>El artículo 177 preceptúa (se subraya la parte demandada):</p> <p>"Artículo 177.- VIGENCIA. Esta ley regirá cuarenta y cinco (45) días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la nación, por los Personeros, por las Administraciones Central y Descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria; se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y derogan las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, Departamental, Distrital, Municipales, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código."</p> <p>El ciudadano Muñoz Castrillón (Exp D-1076) considera que las expresiones impugnadas violan los artículos 152 y 153 de la Constitución, los cuales regulan lo atinente a las leyes estatutarias, por cuanto en su criterio, una ley ordinaria como es la Ley 200 de 1995 no puede derogar el proceso disciplinario previsto para los maestros en la Ley 155 de 1994, que es ordenamiento que ostenta la aludida jerárquica legal.</p> <p>Según la Vista fiscal, el actor se equivoca cuando afirma que la Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación es estatutaria pues se trata de una ley ordinaria, "de tal forma que las regulaciones sobre régimen disciplinario de los maestros bien podían ser derogadas por el Código Único Disciplinario." La norma es pues exequible pues el Congreso, respecto de las leyes ordinarias, tiene la potestad "para derogarlas expresamente así como para excepcionar sus mandatos temporal o totalmente y de igual manera para acabar con la vigencia de mandamientos especiales."</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, JULIO CESAR ORTIZ GUTIERREZ</p> <p>CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Destinatarios (Salvamento de voto)</p> <p>El Código del que se trata, como conjunto ordenado y armónico de disposiciones atinentes a una materia no requería, para serlo, arrasar con los regímenes disciplinarios especiales. Por ello, el calificativo de "único", a él asignado por el legislador, resulta inapropiado y hasta inconstitucional, por cuanto delata la</p>

	<p>pretensión de incorporar dentro de un texto de rango legislativo toda la normatividad disciplinaria, olvidando que el Constituyente destinó varias normas del Estatuto Fundamental -no susceptibles de ser derogadas por la ley y con vigencia autónoma (es decir, que no necesitan ser reproducidas en preceptos legales para imperar)- a señalar que determinados servidores del Estado tienen un régimen disciplinario propio y, por tanto, de suyo reacio a la uniformidad buscada por el estatuto materia de examen. El Código ha debido denominarse "general", en vez de "único".</p> <p>REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL (Salvamento de voto)</p> <p>Se nos hace evidente que -para mencionar apenas dos de los regímenes disciplinarios de origen constitucional- el Código Unico no podía pretender el señalamiento de las mismas reglas y procedimientos en lo concerniente a los asuntos disciplinarios de competencia del Consejo Superior de la Judicatura ni tampoco en lo relacionado con el trámite y decisión sobre pérdida de investidura de los congresistas, cuyas normas están consagradas en leyes independientes, que a nuestro entender no podían ser derogadas por la Ley 200 de 1995 y que fueron declaradas exequibles en su mayor parte por esta Corte. Resulta claro, entonces, que la aspiración omnicomprendensiva del legislador vulneraba en esta materia los preceptos constitucionales, al desconocer la existencia, fundada en la Carta, de regímenes propios o especiales.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. HERNANDO HERRERA VERGARA</p> <p>CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Destinatarios/REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL (Aclaración de voto)</p> <p>A pesar de que se señala que dicho estatuto es aplicable a todos los servidores públicos, sin excepción alguna y que expresamente se consideran derogadas las disposiciones que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la Fuerza Pública, ello no se opone a la subsistencia de otros regímenes disciplinarios especiales reconocidos por la misma Constitución, tales como por ejemplo, el de la Fiscalía General de la Nación.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-326/96
Fecha de la sentencia	julio veinticinco (25) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	Hernan Darío Escobar Restrepo
Demandado	Acción de inconstitucionalidad contra el art. 44 num. 1o. literal b) de la Ley 200 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. JULIO CESAR ORTIZ GUTIERREZ
Decision	ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-307 de julio 11 de 1996, de la Sala Plena de esta Corporación, proferida dentro del proceso D-1099.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A. Normas que se estiman violadas          Considera el actor que las normas demandadas vulneran los artículos 25, 52, 53 y 312 inciso segundo de la Constitución Política.</p> <p>B. Concepto de la violación          Para el demandante la norma acusada impide el ejercicio profesional a los concejales y miembros de juntas administradoras locales en el caso de los profesionales en derecho y ciencias afines. Señala que los concejales no tienen la calidad de empleados públicos, y que si bien hacen parte de una corporación administrativa elegida popularmente, no perciben una remuneración fija o determinada para el cargo, ni gozan de estímulos e incentivos laborales.</p> <p>Los concejales y miembros de juntas administradoras locales, no tienen relación laboral con el municipio donde desempeñan su función y no perciben salario; sólo reciben honorarios por asistir a sesiones las cuales se encuentran limitadas por el artículo 36 de la Ley 136 de 1994; advierte el demandante que estos honorarios no tienen carácter de remuneración laboral ni implican el derecho al reconocimiento de prestaciones sociales.</p> <p>En su concepto, la incompatibilidad que consagra la norma acusada viola el derecho al trabajo que tienen los abogados que pertenecen a aquellas corporaciones en razón a que instituye una violación en detrimento de los concejales y miembros de juntas administradoras locales consistente en ser apoderado o gestor ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, impidiéndoles el aprovechamiento del tiempo libre. En consecuencia, en su opinión, se vulneran los principios constitucionales básicos que prevén la</p>

	protección especial que el estado social de derecho debe otorgar a todos los trabajadores, entre ellos la igualdad de oportunidades y la remuneración mínima vital y móvil.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-156/96
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Alfonso Portella Herrán
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º (parcial), 5º (parcial) y 21 de la Ley 199 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que las transcritas normas vulneran los artículos 152, literales c) y d), y 265 de la Constitución Política.</p> <p>En criterio del demandante, el artículo 2º de la Ley 199 de 1995 en su parte demandada, invade la competencia constitucional del Consejo Nacional Electoral, el cual, de acuerdo con el artículo 265, "debe velar por el normal desarrollo de los procesos electorales".</p> <p>Ahora bien -continúa-, si lo que pretende la disposición impugnada es asegurar la presencia del Ministerio del Interior en el desarrollo de los procesos electorales en cuanto al orden público se refiere, debió haberlo manifestado en esos términos.</p> <p>El mismo argumento invoca cuando se refiere al artículo 5º, numeral 2, literal l), al compararlo con la norma constitucional contenida en el artículo 265, numeral 5.</p> <p>Por otra parte, en cuanto al artículo 5º, numeral 2, literal f), impugnado, señala que vulnera la Carta pues ésta ordena al Congreso regular lo concerniente a instituciones y mecanismos de participación ciudadana a través de leyes estatutarias (artículo 152, literal d)). Invocando la Sentencia C-180 de 1994, proferida por la Corte Constitucional, manifiesta el demandante que "la atribución de difundir los procedimientos y capacitar al ciudadano para la utilización de los mecanismos de participación ciudadana está radicada en el Consejo Nacional Electoral... y que si se pretende atribuirle a otra entidad dicha facultad, se deberá utilizar el</p>

	<p>mecanismo de la ley estatutaria".</p> <p>Sobre el artículo 21 demandado asevera que vulnera la Constitución, ya que, en desarrollo del artículo 152, literal d), de la misma, fue dictada la Ley Estatutaria número 134 de 1994, la cual en su artículo 104 manifiesta que el Fondo de Participación Ciudadana de que trata la norma acusada tendrá personería jurídica.</p> <p>En su criterio, "resulta incomprensible que mediante ley ordinaria se pretenda reformar una ley estatutaria", señalando que el Fondo se transformará en un sistema de manejo de cuenta sin personería jurídica.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-559/96
Fecha de la sentencia	Octubre veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	Martín Juviano Díaz-granados
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b) del numeral 1) del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico).
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-307 de 1996 en relación con las expresiones “concejales y miembros de las juntas administradoras locales” y el literal b), del numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-426 de 1996, en relación con la expresión “diputados” y el literal b), del numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “gobernadores” y “alcaldes” y el literal b), del numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. La disposición, en la parte acusada, contempla un trato desigual entre quienes ocupan alguno de los cargos previstos en el numeral 1° del artículo 44 y son abogados y aquellas personas que se desempeñan en las mismas posiciones y tienen otras profesiones. Respecto de éstos últimos no opera restricción alguna para ocupar el cargo en cuestión y ejercer su profesión.</p> <p>2. Los concejales y los diputados, de acuerdo con la Carta no son empleados públicos, en cuanto no perciben un salario fijo. Al impedírseles litigar en todo el territorio nacional, quedan sin posibilidad alguna de obtener ingreso alguno. En consecuencia, se viola el derecho al trabajo.</p> <p>3. Por último, se consagra una restricción inconstitucional al derecho a ser elegido, los abogados que litiguen en la respectiva circunscripción, en efecto, estarían sujetos a una particular causal de inhabilidad o incompatibilidad.</p>

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-307/96
Fecha de la sentencia	once (11) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	LUIS FERNANDO COTE PEÑA
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el literal b del numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, por medio de la cual se expide el código único disciplinario
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLES las expresiones “ <i>concejales y miembros de las juntas administradoras locales</i> ” y el literal b), del numeral primero (1o.), del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, bajo el entendido de que subsisten las incompatibilidades y las excepciones a éstas, legalmente establecidas.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. <i>Normas constitucionales que se consideran infringidas</i></p> <p>Estima el actor que la disposición acusada es violatoria de los artículos 13, 25, 26, 40 y 58 de la Constitución Política.</p> <p>2. <i>Fundamentos de la demanda</i></p> <p>Considera el demandante que la disposición impugnada contiene preceptos contrarios al espíritu de la Constitución Política (específicamente en lo relativo al derecho a la igualdad, al trabajo y a la libertad para escoger profesión u oficio), por cuanto dicha norma crea una incompatibilidad injusta entre el ejercicio de las funciones de Concejal Municipal o miembro de Juntas Administradoras Locales y las funciones de abogado, cuando éstas se ejercen como apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales. Estima el actor que dicha incompatibilidad establece una clara discriminación entre los concejales o miembros de Juntas Administradoras que ejercen su profesión de abogados, y los que, ocupando el mismo cargo, se desempeñan en otras profesiones, pues a los primeros les resulta imposible ejecutar las actividades propias de su oficio, máxime cuando la ley no especifica cuáles son las entidades de tipo administrativo o jurisdiccional ante las cuales no pueden intervenir los mencionados funcionarios.</p>

	<p>Es claro para el demandante que con la disposición que se consigna en la norma, los abogados en ejercicio, cuando asumen una curul en el Concejo o en la Junta administradora local, deben cesar su actividad profesional, so pena de incurrir en falta gravísima contra el régimen disciplinario. Sobre el particular considera que dicho dilema no parece presentarse a los profesionales de otras carreras, para quienes son perfectamente compatibles el ejercicio de la actividad política con el ejercicio de su ocupación privada.</p> <p>La injusticia se incrementa, en su opinión, cuando se sabe que los concejales municipales reciben únicamente honorarios por concepto de las sesiones desplegadas en cada período bimensual, las cuales no podrán ser más de veinte para cada lapso; y que los miembros de las juntas administradoras locales no reciben ningún tipo de contraprestación por sus servicios a la comunidad. La discriminación esbozada con anterioridad "... condena a los abogados que han recibido el honroso cargo de representar a su comunidad ya como concejales, ya como miembros de las juntas administradoras locales, a la imposibilidad de ganar, legalmente, el sustento familiar con el ejercicio de su profesión durante los períodos que ejercen sus cargos o peor aún, cuando ni siquiera están en los períodos de sesiones, épocas durante las cuales los concejales no reciben remuneración alguna."</p> <p>Finalmente, esto constituye, a su parecer una violación del derecho legítimo al trabajo y del derecho a la libertad para escoger libremente profesión, pues se les impide a quienes decidieron prestar sus favores a la comunidad desde una curul en el concejo o en la junta local de su municipio, ejercer legítimamente el oficio para el cual se formaron.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-426/96
Fecha de la sentencia	Septiembre doce (12) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Orlando Santana Bohórquez
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra el literal b) del numeral 1o. del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 "por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Declarar EXEQUIBLE el literal b) del numeral 1o. del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, siempre que se entienda que la incompatibilidad allí establecida para los Diputados, se refiere a las controversias y asuntos en los que se discutan intereses del Departamento, o aquellas que deban ser decididas por una entidad administrativa del orden departamental.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del demandante, la norma cuya constitucionalidad cuestiona, viola los artículos 13, 25, 26, 58 y 299 de la Carta Política.</p> <p>Señala que la disposición demandada consagra la prohibición a los Diputados de ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales, cuando el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado.</p> <p>Manifiesta que en virtud de esta prohibición, se vulnera el derecho fundamental al trabajo de los abogados que tengan la calidad de Diputados a la Asamblea Departamental. Sustenta tal afirmación, en el hecho de que esta limitante opera únicamente frente a los profesionales del derecho, quienes en el evento de ser elegidos diputados, tienen que subsistir con los ingresos que reciben por concepto de los honorarios correspondientes a los seis (6) meses de sesiones a las que asisten durante el año, con desconocimiento “por el Estado de la obligación fundamental a su cargo, referente a la protección especial que debe brindar al trabajo”.</p> <p>Afirma que de ser así, los Diputados que sean abogados estarían</p>

	<p>condenados a subsistir únicamente con los emolumentos que reciben durante seis meses en el año, y que esto los llevaría a renunciar a su investidura para recobrar la habilitación profesional, pero aún así, también estarían inhabilitados porque el mismo artículo 44 de la Ley 200 de 1995, es enfático al prolongar en el tiempo la incompatibilidad por el término legal del período.</p> <p>Ahora bien, considera que la norma acusada viola igualmente el derecho fundamental que tiene toda persona a escoger profesión u oficio -artículo 26 CP.-, en razón a que muchos ciudadanos en el país escogieron libremente como profesión la de abogado y posteriormente, como un servicio a la comunidad, presentaron su nombre para la conformación de las Asambleas Departamentales, pero después de ser elegidos como diputados, una ley sin ninguna fórmula de juicio los excluye del ejercicio profesional, so pena de incurrir en falta gravísima.</p> <p>Estima que la disposición acusada trasgredió la facultad contenida en el artículo 26 de la Carta Magna, en razón a que el legislador no se ocupó de exigir títulos de idoneidad, o de inspeccionar o vigilar el ejercicio de la profesión, y aquella excluyó el ejercicio de la profesión a los abogados que de manera altruista prestaran un servicio a su respectivo Departamento.</p> <p>Así también, para el demandante se quebranta el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, en la medida en que el mandato acusado lleva en sí una discriminación para los profesionales del derecho. Por mandato legal, señala, sólo los profesionales del derecho pueden ser apoderados y por lo tanto representar a personas naturales o jurídicas ante las autoridades jurisdiccionales (Decreto 196 de 1971), lo que llevaría al desconocimiento del mencionado derecho.</p> <p>Advierte que la disposición consagrada en el artículo 58 de la Carta Política es considerada como el pilar fundamental de nuestro sistema socio-económico y político, al prever el respeto a la propiedad privada como garantía inalienable, salvo por motivos de utilidad pública o interés social.</p> <p>Finalmente, aduce el actor que el legislador no tuvo en cuenta la propiedad intelectual de los profesionales del derecho, al excluirllos del ejercicio de su profesión por el simple hecho de haber obtenido la investidura de Diputados, así como también de los derechos patrimoniales que tienen los abogados derivados de los contratos de prestación de servicios como profesionales del derecho que deben gozar de la garantía constitucional mencionada.</p>
--	---

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-594/96
Fecha de la sentencia	Noviembre seis (6) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	Esperanza Espinosa Muñoz
Demandado	Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 66 (parcial) de la Ley 200 de 1995 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C- 244 de 1996, en cuanto declaró exequible la expresión "la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y en el evento de que haya sido postulado por esta Corporación, lo hará la Sala Plena del Consejo de Estado", del numeral 1º del artículo 66 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Segundo.- En los términos de esta sentencia, declarar EXEQUIBLES la expresión "conocerán del proceso disciplinario que se adelanta contra el Procurador General de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este Código" y el inciso segundo del numeral 1º del artículo 66 de la Ley 200 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. De acuerdo con el artículo 280 de la Carta, manifiesta el demandante, los agentes del Ministerio Público tienen los mismos derechos, calidades y categorías que los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.</p> <p>La Carta ha establecido que corresponde al Senado de la República, previa acusación de la Cámara de Representantes, conocer de los procesos, ente ellos los disciplinarios (C.P. art. 178 numeral 4º), contra Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de la Nación (C.P. arts. 174 y 178).</p>

	<p>2. “(N)o podía el legislador atribuirle competencia de investigación y juzgamiento disciplinario a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para llenar un supuesto vacío constitucional, pues, como quedó establecido, el Procurador General de la Nación, como supremo Director del Ministerio Público, goza, a la luz de lo ordenado por el artículo 280 de la Carta Política, de los mismos derechos y garantías de los Magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerce el cargo, como es el caso de los derechos y garantías de que gozan los Magistrados de la Corte Constitucional ante quienes debe obligatoria e indelegablemente, por ordenarlo así el numeral 5º del artículo 278 de la Constitución Política, ‘rendir concepto en los proceso de control de constitucionalidad’,... por lo que no me cabe la menor duda de que la competencia disciplinaria por actos y omisiones cometidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio de su cargo, recae exclusivamente en la Cámara de Representantes, para lo relativo a la instrucción y en el Senado de la República en lo correspondiente al juzgamiento y aplicación de las sanciones condignas, si a ello hubiere lugar”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. JORGE ARANGO MEJÍA, ANTONIO BARRERA CARBONELL, JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.</p> <p>PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Juzgamiento disciplinario administrativo/PROCESO DISCIPLINARIO-Naturaleza administrativa (Salvamento de voto)</p> <p>Es claro que el llamado "Código Disciplinario Único" establece un procedimiento disciplinario de carácter administrativo, con posterior revisión judicial ante la jurisdicción contenciosa. Cuando el artículo impugnado señala que el proceso disciplinario contra el Procurador se adelanta "mediante el procedimiento ordinario previsto en este Código", la norma legal está estableciendo que se trata de un procedimiento de naturaleza administrativa, que por ende está sujeto a la revisión por lo contencioso administrativo. No todos los actos que efectúa un órgano judicial o las altas corporaciones son de naturaleza judicial. En ninguna parte la Constitución señala que la función disciplinaria ejercida por los funcionarios judiciales únicamente es administrativa cuando se ejerce contra sus subalternos, de suerte que se pueda concluir que en todos los otros casos es judicial. Por el contrario, la norma que se desprende de la Constitución es otra, esto es, que la función disciplinaria es por regla general administrativa y que sólo excepcionalmente adquiere naturaleza judicial, cuando la Carta así</p>

	lo establece.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-244/96
Fecha de la sentencia	mayo 30 de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Marcela Adriana Rodríguez Gómez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2o. del artículo 2o., artículo 6o, parágrafo 1o. del artículo 34, inciso 3 parcial del artículo 61, numeral 1o parcial del artículo 66 y artículo 135 parcial de la ley 200 de 1995 "Código Disciplinario Unico".
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	<p>PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES las siguiente disposiciones de la ley 200 de 1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El inciso segundo del artículo 2o.;</li> <li>- El artículo 6o.;</li> <li>- El inciso final del artículo 61, que prescribe: "Respecto de los funcionarios de la Rama Judicial serán competentes para investigar y sancionar las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales, según el caso. A los empleados de la misma Rama los investigará y sancionará el respectivo superior, en ambos casos sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación."</li> <li>- El aparte del numeral 1o. del artículo 66, que dice: ".....la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y en el evento de que haya sido postulado por esta Corporación, lo hará la Sala Plena del Consejo de Estado."; y</li> <li>- El artículo 135.</li> </ul> <p>SEGUNDO- Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 1o. del artículo 34 de la ley 200 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La demandante considera que el inciso 2o. del artículo 2o. de la ley 200 de 1995 viola el artículo 29 de la Carta, disposición que prohíbe juzgar a una misma persona dos veces por el mismo hecho y, "precisamente en el inciso demandado se permite juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos, de un lado por el aspecto penal y de otro por el aspecto disciplinario".</p> <p>En lo que respecta al artículo 6o. impugnado, manifiesta que también lesiona el artículo 29 de la Ley Suprema, que consagra la</p>

	<p>presunción de inocencia mientras no se haya declarado a la persona judicialmente culpable; entonces "no tiene sentido que la duda se resuelva en favor de quien constitucionalmente es inocente. Admitir la duda sería dar paso a dos clases de sentencias absolutorias: una en donde la persona es absuelta por ser inocente y la otra por ser resuelta la duda en su favor. Esta última significaría que la persona no sería inocente ni responsable, pero que la duda la favoreció. No es entendible cómo a un inocente la duda lo favorece, cuando por encima de todo es inocente. Por esta razón el in dubio pro reo debe desaparecer tanto del Código disciplinario como del Código de Procedimiento Penal. Los efectos sociales de las sentencias absolutorias son gravísimos, tan iguales, casi, a las sentencias condenatorias".</p> <p>Sobre el párrafo 1o. del artículo 34 dice la accionante, que vulnera el artículo 29 de la Constitución, por cuanto el debido proceso debe adelantarse sin dilaciones injustificadas. El término máximo legal para adelantar un proceso disciplinario es de tres años y, "no obstante, se consagra un término de prescripción de la acción disciplinaria de 5 años, es decir, dos (2) años por encima del término máximo del proceso, y no obstante todo ese tiempo, el párrafo demandado establece que si el término de prescripción coincide con el de notificación del fallo, la inercia del Estado la debe asumir, como responsabilidad y como sanción, el individuo y por eso el término de prescripción se prorroga por seis (6) meses o más. En un Estado social y democrático, como se dice en el art. 1o. de la C.N., las instituciones son y están en función de los individuos, pero con la norma demandada, se entiende lo contrario, todo en función del Estado, aún la mora y la pereza para concluir investigaciones".</p> <p>En lo atinente a la parte demandada del inciso tercero del artículo 61, se sostiene que infringe el numeral 3o. del artículo 256 de la Constitución, por cuanto el único organismo con competencia para examinar y sancionar las faltas de los funcionarios judiciales es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o en su defecto, las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales, "sin que para esos funcionarios se pueda alegar un poder preferente por parte de la Procuraduría General de la Nación".</p> <p>En cuanto atañe al numeral 1o. del artículo 66, manifiesta la demandante que lesiona el artículo 267 de la Carta, pues si el Procurador General de la Nación es elegido de ternas elaboradas por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, "no queda muy imparcial e independiente que uno de esos organismos investigue y juzgue disciplinariamente a ese funcionario de control. Además que los tres organismos mencionados tienen ordinariamente funciones diferentes a la de la función disciplinaria,</p>
--	---

	<p>ya que el primero es cabeza de la jurisdicción constitucional, la segunda de la jurisdicción ordinaria y la tercera de la jurisdicción contenciosa administrativa; mientras que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de un lado, no ha intervenido en su elección y de otra parte su función ordinaria, natural y permanente es la disciplinaria, por eso es que a este último organismo es a quien se le debe dejar el juzgamiento disciplinario del Procurador General de la Nación."</p> <p>En cuanto a la acusación contra el artículo 135, dice la demandante, que lesiona los artículos 113, 116 y 117 de la Carta, al asignar a la Procuraduría General de la Nación atribuciones jurisdiccionales. "La policía judicial cumple funciones de auxiliar y colaborador de los funcionarios judiciales, pero no por esa función se puede concluir que tenga atribuciones jurisdiccionales, de ser así llegaremos a la dictadura de la policía judicial...."</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. JULIO CESAR ORTIZ GUTIERREZ PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA-Prórroga del término (Salvamento de voto)</p> <p>Creo que el legislador bien puede establecer, por razones que obedecen a las enseñanzas que deja la experiencia universal, que el término de prescripción se prorrogue por un breve lapso (en este caso por seis meses), cuando la prescripción ocurra una vez notificado el fallo de primera instancia en asuntos disciplinarios; en mi opinión, tiene pleno fundamento racional y es apenas razonable y plausible que así lo disponga el legislador para asegurar los fines de la corrección y de la moralidad disciplinaria de los servidores públicos, y para garantizar la efectividad y la eficacia de la acción disciplinaria y los fines constitucionales y legales correspondientes.</p> <p>REGIMEN DISCIPLINARIO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES/CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia disciplinaria (Salvamento de voto)</p> <p>Considero que el inciso tercero del artículo 61 de la ley 200 de 1995, es inconstitucional en la parte que se demanda inicialmente, la cual dice que "...en ambos casos sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación...", pues, en mi opinión, ni el Procurador General de la Nación, ni el organismo que dirige han sido atribuidos de competencia ordinaria prevalente ni preferente para investigar y sancionar la conducta de los funcionarios judiciales, si acaso, únicamente, en la hipótesis de la llamada vigilancia oficial y superior de quienes ejercen funciones públicas según el artículo 277 numeral 6o. que le permiten poner</p>



	<p>en movimiento las instancias correspondientes del Consejo Superior de la judicatura o de la Cámara de Representantes formulando quejas, denuncias o presentando informes preliminares sobre la conducta de estos, y en la facultad de desvinculación del cargo según los términos del artículo 278 de la Carta Política, pero no en el desarrollo de la función jurisdiccional disciplinaria ordinaria que corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En este sentido estimo que la mencionada disposición de la ley 200 de 1995 entre otras cosas y entre otros graves defectos de constitucionalidad que también aparecen en los artículos 2o., 3o. y 20 entre otros, se arroga una fuerza que no puede tener, y que en su pretendida aplicación y extensión a los funcionarios de la Rama Judicial, desconoce la existencia de disposiciones constitucionales expresas y específicas que entregan dicha competencia a un órgano constitucional diferente a la Procuraduría General de la Nación, por lo que resulta incompatible con la Carta Constitucional.</p> <p><b>JURISDICCION DISCIPLINARIA-Alcance/ACTO JURISDICCIONAL (Salvamento de voto)</b></p> <p>Los funcionarios judiciales están sometidos a la Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los actos de ésta no son susceptibles de revisión contencioso administrativa dada su naturaleza jurisdiccional, por ello esa función se atribuye a las Salas Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura cuando se trata de los funcionarios judiciales; así, los Jueces y Magistrados de los tribunales están sometidos al escrutinio y juzgamiento del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales exclusivamente, es decir, a la Jurisdicción Disciplinaria. Por tanto, el desplazamiento de la Jurisdicción Disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, así sea por virtud de la interpretación corregida que se desarrolla en la sentencia sobre la Ley Estatutaria de la Justicia y que ahora reitera la Corte, es contrario a la Carta Política.</p> <p><b>PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Competencia respecto a empleados judiciales (Salvamento de voto)</b></p> <p>Es indudable que el poder disciplinario preferente del Procurador se circunscribe, en el caso de la Rama Judicial, al ámbito establecido en el artículo 115 de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que radica la competencia disciplinaria sobre los empleados judiciales en el superior jerárquico, "sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere al Procurador General de la Nación, de ejercer preferentemente el poder disciplinario, conforme al procedimiento que se establezca en leyes especiales.</p>
--	---

	<p>CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Improcedencia de la expresión/CODIGO DISCIPLINARIO DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL (Salvamento de voto)</p> <p>No cabe duda de que ningún juez o funcionario judicial es "dependiente" de la Rama Judicial porque no puede quedar comprendido bajo los efectos de las disposiciones de la mencionada ley, que se ocupa de regular los regímenes disciplinarios de otros servidores que arriban a la administración mediando otras formas de vinculación al servicio público. En este sentido pienso que las nociones de "Ley Disciplinaria y Código Disciplinario Unico", no son de origen ni de rango constitucional, sin embargo, si una disposición legal llegare a tener semejante extensión, en todo caso deberá respetar los distintos regímenes propios y el fuero constitucional disciplinario de los funcionarios de la Rama Judicial; no es, pues, constitucional que se pretenda aplicar el mismo régimen legal a funcionarios dependientes de la administración pública y especialmente de la Rama Ejecutiva, y a los de la Rama Judicial del Poder Público, a quienes les corresponde las funciones de administración de justicia. Lo anterior me hace concluir que los funcionarios de la Rama Judicial deben obedecer a un código disciplinario propio, o a uno solo pero que respete sus especificidades normativas como quiera que algunas de sus reglas y principios hallan su espacio normativo en la ley estatutaria de administración de justicia y no en un Código de rango legal ordinario.</p> <p>PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Ejercicio del poder disciplinario preferente(Salvamento de voto)</p> <p>El adverbio de modo “preferentemente”, empleado por el Constituyente significa, en mi opinión, que el ejercicio del poder disciplinario radicado en cabeza del señor Procurador debe cumplirse con primacía y ventaja sobre el de otras personas o titulares del mismo poder disciplinario; es decir, sobre los superiores jerárquicos de los empleados de las distintas ramas del poder público. Además, este adverbio de modo también significa, en una segunda acepción, inclinación favorable o predilección del titular del poder disciplinario hacia su ejercicio frente a otros poderes suyos. En ningún caso esta expresión del Constituyente de 1991 significa el reconocimiento o la atribución de un poder de exclusión, de absorción, de atracción, ni de imposición ante los otros poderes disciplinarios; eventualmente podría predicarse dicho entendimiento del poder disciplinario de carácter administrativo que ejercen los superiores jerárquicos frente a sus subordinados o dependientes, pero nada más.</p>
--	---

	<p>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia en materia disciplinaria (Salvamento de voto)</p> <p>La disposición que en esta oportunidad examinó la Corte (inciso segundo del artículo 61 de la Ley 200 de 1995), debió ser declarada inexecutable, pues ella incluye, en el ámbito de aplicación de los poderes discrecionales de atracción de la competencia disciplinaria administrativa del Procurador General y de sus delegados y agentes, a los funcionarios judiciales o de la Rama Judicial, sin tener en cuenta las disposiciones de la Carta que aseguran la existencia de una entidad judicial especializada en aquella función; en verdad, como las reglas de la hermenéutica enseñan que el Constituyente no es disipador y, por el contrario, su actividad debe examinarse de tal manera que las disposiciones expedidas cumplan una función coherente y racional, es preciso concluir que en este caso se trata de una evidente invasión de las atribuciones que el Constituyente asignó al Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, como cabeza de un órgano constitucional con el mismo nivel jerárquico de las más altas corporaciones judiciales, según se desprende de lo dispuesto en el Capítulo Séptimo del Título Octavo de la Carta. Así, es imperativo hacer las salvedades que corresponden dado que se trata de dos entidades que cumplen funciones constitucionales diferentes entre sí, en atención a la naturaleza administrativa de la Procuraduría y a la expresa naturaleza jurisdiccional disciplinaria de la sala disciplinaria mencionada y del objeto de sus competencias.</p> <p>DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>PRINCIPIO DE IGUALDAD-Distinción irrazonable o desproporcionada/CADUCIDAD DE LA ACCION DISCIPLINARIA-Término (Salvamento de voto)</p> <p>El reparo central que en mi criterio puede formularse a la decisión de la cual me aparto, radica en la equivocada realización del juicio de igualdad. Como lo ha señalado reiteradamente esta Corporación, para que una norma sea expulsada del ordenamiento por vulneración del artículo 13 de la Carta se requiere que introduzca una distinción irrazonable o desproporcionada. En consecuencia, si existe una razón suficiente para diferenciar las circunstancias tratadas de manera disímil, y si dicho tratamiento se ajusta al grado de la diferencia, el juez constitucional debe respetar la decisión del legislador. En la norma acusada el legislador diferenció dos hipótesis, para efectos de fijar el término de caducidad - mal llamado prescripción - de la acción disciplinaria. El criterio adoptado por el legislador para realizar la diferenciación fue la existencia de un fallo de primera instancia debidamente notificado. El efecto de la diferenciación consistía en la ampliación</p>
--	---

	del mencionado término, en seis meses. En punto a la norma parcialmente demandada la distinción establecida por el legislador no sólo resultaba razonable sino proporcionada.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-614/96
Fecha de la sentencia	trece (13) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	José Hervin Suárez Tapiero
Demandado	Norma acusada: Artículo 177 -parcial- de la Ley 200 de 1995 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Primero.- ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia No. C-280 del 25 de junio 1996 que declaró exequible la expresión "o especiales" del artículo 177 de la Ley 200 de 1995, "por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".  Segundo.- INHIBIRSE para fallar sobre la constitucionalidad de los demás contenidos normativos del artículo 177 de la Ley 200 de 1995, por carencia del concepto de la violación.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Según lo señala el actor, el artículo 6o., inciso final de la Ley 60 de 1993 <sup>1</sup> dispone un régimen especial para los docentes de los servicios educativos estatales cuando consagra " <i>...que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial...</i> " (subraya fuera del texto). Ese régimen, en su opinión, comprende adicionalmente la materia disciplinaria de los docentes mediante aplicación que efectúa del capítulo 5o. del D.L. 2277 de 1979 (Estatuto Docente), en cuanto lo regula; por lo tanto, un régimen disciplinario especial consagrado en una ley de rango legal orgánico, como en su concepto cataloga a la Ley 60 de 1993, no puede ser derogado por una ley de rango legal ordinario, como es

<sup>1</sup> Ley 60 de 1993 "por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151o. y 288o. de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356o. y 357o. de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".

	<p>la Ley 200 de 1995 o Código Disciplinario Unico, sin violar el cánón 151 superior, que establece la superioridad jerárquica de las leyes orgánicas.</p> <p>Adicionalmente, aclara que los artículos 2,2 numeral 1o. y 3 numeral 5o inciso a) de la Ley 60 de 1993 atribuyen la administración de los servicios educativos estatales a los municipios y departamentos con sujeción a la Constitución y a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, que para el efecto serían el Decreto Ley 2277 de 1979 (Estatuto Docente) y la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), lo cual reitera su aplicabilidad. Además, la misma Ley 115 ratifica la vigencia y aplicación del Estatuto Docente y, a su vez, de la Ley 60 de 1993, lo cual lo lleva a concluir que <i>"la Ley 200 no podía desconocer los contenidos y fines de la ley 60 y ley 115"</i> y, por lo tanto, tampoco derogar el mencionado régimen especial de los docentes, allí contenido.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-286/96
Fecha de la sentencia	veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Alba Nelly Obando Reyes y Darío Correa Uribe
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 20 -parcial- de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, la palabra "permanente", del artículo 20 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Consideran los actores que con la norma acusada se vulneran los artículos 4, 123 y 124 de la Constitución Política.</p> <p>En primer término dicen que cuando la Ley 200 de 1995 señala quiénes son sus destinatarios, incluye a los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente, expresión esta última que da lugar a entender que se está introduciendo una nueva especie o clase de servidor público, no contenido en el artículo 123 de la Carta.</p> <p>En su criterio, el artículo 123 superior faculta a la ley para determinar el régimen aplicable a los particulares que desempeñen funciones públicas en forma "transitoria" y no "permanente".</p> <p>Señalan también que la norma impugnada determina la responsabilidad de los particulares que "permanentemente" ejerzan funciones públicas y la forma de hacerla efectiva, para lo cual el legislador tampoco estaba facultado, razón que implica quebranto del artículo 124 de la Carta.</p> <p>Además -añaden- es necesario precisar que no existe persona que de manera permanente desempeñe funciones públicas; ni siquiera los servidores públicos, pues éstos ejercen las funciones públicas en días y horas hábiles y durante su permanencia en el servicio público. Es decir que se ejercen funciones para satisfacer necesidades permanentes del Estado por lo que la característica de permanencia le es aplicable a la actividad estatal mas no a la de sus servidores.</p>

	Finalmente advierten que en la única parte donde se hace mención a los particulares que en forma permanente ejerzan funciones públicas es en el artículo demandado
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-341/96
Fecha de la sentencia	agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Jairo Villegas Arbeláez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 20 (parcial) de la Ley 200 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>PRIMERO. En relación con la pretensión de inexecutable de la expresión "en forma permanente" del art. 20 de la ley 200 de 1995, ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia C-286/96.</p> <p>SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE la expresión "y trabajadores" , contenida en el art. 20 de la ley 200 de 1995</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante formula dos cargos con respecto a los apartes de las normas que se acusan. Uno hace relación a los particulares que ejerzan funciones públicas y el otro alude a los trabajadores del Banco de la República.</p> <p>En lo que concierne a los mencionados particulares dice el demandante que el ejercicio de funciones públicas en forma permanente es atribución del Estado, de su Rama Ejecutiva, como titular natural, ordinario y permanente de la Función Pública en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento, a través de los servidores públicos.</p> <p>En forma excepcional y por ello temporalmente la Constitución autoriza a los particulares para el ejercicio de funciones públicas. Luego, la Ley 200 de 1995, al disponer en los apartes acusados que los particulares ejerzan en forma permanente funciones públicas, viola las disposiciones de los arts. 113, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución.</p> <p>En lo que alude a los trabajadores del Banco de la República, precisa el demandante que lo demandado no es lo que se refiere a los "Funcionarios" sino a los "Trabajadores" de dicho Banco, pues su Estatuto Orgánico, (art. 38 de la ley 31/92) establece la</p>



	<p>diferencia entre las dos categorías de servidores: los funcionarios públicos, integrados por los miembros de la Junta Directiva (excepto el Ministro de Hacienda), cuya forma de vinculación laboral es de índole administrativa, y los demás trabajadores del Banco que están sometidos a un régimen laboral propio consagrado en dicha ley, en los estatutos del Banco, en el reglamento interno de trabajo, en la convención colectiva, en los contratos de trabajo y de manera supletoria en las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.</p> <p>Estima el demandante, en consecuencia, que estando delimitadas expresamente las fuentes que rigen las relaciones contractuales entre el Banco de la República y sus trabajadores, en virtud de las cuales se ha expedido el reglamento interno de trabajo que contiene el régimen disciplinario aplicables a éstos. El aparte normativo acusado es inconstitucional al incluir los trabajadores del Banco como destinatarios de la ley disciplinaria. Sobre el punto agrega el demandante:</p> <p>"Adviértese que por disposición legal, el reglamento interno "hace parte del contrato individual de trabajo" (CST, art. 107), formando así el patrimonio contractual del trabajador como derecho adquirido con justo título contractual (C.P. art. 58)...."</p> <p>Con fundamento en las consideraciones precedentes considera el actor que el aparte acusado en referencia viola el derecho adquirido con justo título contractual-legal, que no puede ser menoscabado por la ley (arts. 53 y 58), de no ser disciplinado sino por las normas aplicables a su relación contractual, y el derecho de asociación y representación sindical (art. 39), al omitirse y no autorizarse en la ley 200 la representación sindical del inculcado sindicalizado.</p> <p>Adicionalmente afirma, que el aparte normativo en cuestión al someter a los trabajadores del Banco de la República al poder disciplinario de la Procuraduría viola los arts. 122, 123, 209, 277 y 278 de la Constitución, porque las atribuciones disciplinarias de aquélla sólo cobijan a los funcionarios públicos, es decir, a los titulares de la función pública. Dicha potestad no puede ser ejercida con respecto a los trabajadores del referido Banco, porque estos tienen un vínculo laboral contractual diferente al de los empleados públicos.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI DRES. HERNANDO HERRERA VERGARA JULIO CESAR ORTIZ GUTIERREZ.

	<p>En la Sentencia No. C-341/96 de la cual nos separamos en lo concerniente al punto segundo de la parte resolutive, se declaró exequible la expresión “y trabajadores”, contenida en el artículo 20 de la ley 200 de 1995, en virtud del cual se establece que los servidores del Banco de la República, sin excepción alguna son destinatarios de la ley disciplinaria y por consiguiente le son aplicables las disposiciones del Código Disciplinario Unico consagrado en la referida ley.</p> <p>En anteriores oportunidades hemos sostenido el criterio según el cual el Código Disciplinario Unico no constituye un régimen disciplinario extensivo a todos los servidores del Estado ya que por eso es posible la configuración de situaciones excepcionales que dan lugar a la aplicación de un régimen especial con respecto a quienes prestan servicios en algunas entidades estatales.</p> <p>La sentencia en referencia parte del criterio según el cual los trabajadores del Banco de la República son servidores públicos y por consiguiente necesariamente se encuentran sometidos al poder disciplinario del Procurador General de la Nación en los términos de los artículos 277-6 y 278-1 de la Carta.</p> <p>Empero, es preciso tener en cuenta que el consitutyente de 1991 estableció un régimen normativo especial en relación con el Banco de la República que hace viable una conjunción entre la ley y los estatutos, para el adecuado ejercicio de las funciones de la banca central, entre los cuales se encuentra la prerrogativa de adoptar un régimen legal propio, autónomo e independiente del que rige las relaciones entre el Estado y sus servidores.</p> <p>De ahí que el artículo 372 de la Carta Fundamental señala que:</p> <p>“El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos del Banco en los que se determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal...”.</p> <p>La misma sentencia de la cual nos separamos admite que como ya la había señalado la Corporación en la Sentencia C-521/94, en los estatutos del Banco de la República se podrían establecer regulaciones concernientes al régimen laboral para los empleados del Banco, “en lo no previsto por la ley”, lo que indica que siendo ello así, es procedente que dentro de la estructura de las relaciones laborales entre el Banco de la República y sus trabajadores se puedan consagrar normas referentes al régimen disciplinario de los trabajadores del mismo, para los efectos de la aplicación de sanciones por faltas en que pudiesen incurrir en el desempeño de la</p>
--	---

	<p>labor contratada o en el ejercicio de las funciones inherentes al empleo o al contrato de trabajo.</p> <p>La misma sentencia mencionada afirma que en el reglamento interno de trabajo del Banco de la República, se reguló lo atinente al régimen disciplinario de sus trabajadores en diferentes disposiciones, entre las cuales se encuentran, las “faltas, sanciones, reclamos, procedimientos (artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67)”, lo que está en consonancia con la regulación constitucional consagrada en el artículo 372 de la C.P., que le permite al Banco mencionado la expedición de estatutos que determine la forma de su organización y la adopción de un régimen legal especial.</p> <p>Además de lo anterior, no puede olvidarse que de acuerdo con el artículo 53 de la misma Carta Fundamental, la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores, y uno de esos derechos en el caso del Banco de la República para algunos de sus servidores es precisamente el de tener un reglamento interno que les permita adoptar un régimen especial de carácter disciplinario, en lo concerniente a las faltas, sanciones, reclamos, procedimientos, etc.</p> <p>Por lo anterior consideramos que ha debido declararse inexecutable la expresión “y trabajadores” contenida en el artículo 20 de la ley 200/95, demandada en el proceso de la referencia.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO</p> <p>BANCO DE LA REPUBLICA-Régimen disciplinario especial para empleados (Salvamento de voto)</p> <p>Es procedente que dentro de la estructura de las relaciones laborales entre el Banco de la República y sus trabajadores se puedan consagrar normas referentes al régimen disciplinario de los trabajadores del mismo, para los efectos de la aplicación de sanciones por faltas en que pudiesen incurrir en el desempeño de la labor contratada o en el ejercicio de las funciones inherentes al empleo o al contrato de trabajo. No puede olvidarse que de acuerdo con el artículo 53 de la misma Carta Fundamental, la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores, y uno de esos derechos en el caso del Banco de la República para algunos de sus servidores es precisamente el de tener un reglamento interno que les permita adoptar un régimen especial de carácter disciplinario, en lo concerniente a las faltas, sanciones, reclamos, procedimientos, etc. Consideramos que ha debido declararse inexecutable la expresión “y trabajadores”.</p>

	<p>EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Aplicación del Código Disciplinario (Aclaración de voto)</p> <p>He votado por la constitucionalidad del artículo ahora demandado - relativo a los empleados del Banco de la República-, puesto que, en mi sentir, nada hay en la Carta Política que autorice a sostener la existencia de un régimen propio o especial para ellos en la materia.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-338/96
Fecha de la sentencia	agosto primero (1º) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	Carmen Veloza Monteiro y Otro.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 109 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 109 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Consideran los actores que la norma acusada viola los artículos 4, 13 y 29 de la Constitución, con fundamento en las consideraciones que textualmente expone en su demanda, así:</p> <p>"....La Constitución Política consagra que el DEBIDO PROCESO debe aplicarse a toda clase de actuación judicial y administrativa, es así que en nuestro concepto se viola este mandato constitucional, por cuanto la administración ya le siguió un proceso al investigado, para concluir si debe o no ser sancionado el respectivo funcionario. Es mas, si no se tiene certeza de que determinada conducta es constitutiva de falta disciplinaria pues debe abrirse una indagación preliminar".</p> <p>"Lo cual significa que la administración cuenta con todos los medios posibles para investigar y sancionar, en cambio el investigado a pesar de contar con garantías procesales la potestad investigativa la tiene la administrativa".</p>

	<p>"No es equitativo ni justo que después de haber iniciado una indagación preliminar, posteriormente una investigación disciplinaria formal en donde se profiere una decisión, ésta quede en suspenso por seis (6) meses más".</p> <p>"Se vulnera el principio de COSA JUZGADA ya que nadie puede ser investigado dos veces por un mismo hecho".</p> <p>"Se vulnera el principio de la REFORMATIO IN PEJUS pues si la decisión consiste en no sancionar al funcionario, no podría la administración entrar a hacer más gravosa la situación del investigado, en contrario, si este resulta sancionado cuenta con los elementos procesales para tratar de cambiar la decisión, como sería el caso de la interposición de el recurso de apelación":</p> <p>"Si se llegare a admitir este recurso de CONSULTA contemplado en el CODIGO DISCIPLINARIO UNICO, dónde quedaría el principio de INDUBIO PRO REO? mediante el cual toda duda debe resolverse en favor del investigado, en tal situación se desconoce completamente este principio universal de derecho":</p> <p>"Además la Constitución Política nos dice que todos somos iguales ante la ley, esta igualdad consiste; en que las partes dentro del proceso tienen los mismos derechos y oportunidades".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-630/96
Fecha de la sentencia	veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Carlos Flórez Loaiza y Alvaro Panesso
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Primero.- ESTESE a lo resuelto por la Corte en Sentencia C-280 del 25 de junio de 1996 sobre la exequibilidad de los artículos 20 y 177 de la Ley 200 de 1995, en cuanto hicieron aplicable su régimen a todos los empleados y trabajadores del Estado.

	Segundo.- La Corte Constitucional se declara INHIBIDA para conocer sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las demás normas integrantes de la Ley 200 de 1995, por ineptitud sustancial de la demanda.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	<b>Sentencia No. C-084/96</b>
Fecha de la sentencia	veintinueve (29) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Alfonso Cruz Zamora
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2o. de la Ley 192 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 2o. de la Ley 192 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>5.1. Primer cargo</p> <p>A pesar de que el demandante impugnó únicamente el artículo 2o. de la Ley 192 de 1995, los vicios formales a que hace alusión los predica del artículo 1o.; en consecuencia, este cargo no debe ser estudiado, puesto que la demanda se admitió solamente contra la norma primeramente citada.</p>

	<p>5.2. Segundo cargo</p> <p>La legislación, la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en afirmar que la competencia para determinar el momento de iniciación de la vigencia de la ley está atribuida al Congreso de la República y no al Gobierno, como lo afirma el demandante. La sanción y la promulgación de la ley no están sujetas a las razones de conveniencia que pueda tener el Gobierno Nacional; por el contrario, el artículo 166 de la Constitución Política establece los términos precisos en los que tales actuaciones deben realizarse y en el artículo 168 ibidem. se consagra que si el Gobierno no cumple esas obligaciones, corresponde sancionar y promulgar la ley al Presidente del Congreso.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
<b>Identificar la sentencia</b>	<b>Sentencia C-615/96</b>
Fecha de la sentencia	Noviembre trece (13) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Luis Giovanny Barbosa Becerra.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el párrafo del artículo 11 y los párrafos 1 y 3 del artículo 21 de la Ley 191 de 1995 "Por el cual se dictan disposiciones sobre fronteras".
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión "El Gobierno, previa autorización de" del párrafo del artículo 11 de la Ley 191 de 1995.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el párrafo 1º del artículo 21 de la Ley 191 de 1995.</p>

	Tercero.- Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 3º del artículo 21 de la Ley 191 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Para una mayor claridad expositiva, se resumirán, en primer término, los cargos que el actor endilga a las normas acusadas y, en segundo término, se presentarán las tesis y argumentaciones de los intervinientes y del Ministerio Público. Si respecto de un cargo en particular no se menciona la posición de cualquiera de las personas nombradas, ello obedece a que en su respectivo escrito no se encontró el correlativo argumento.</p> <p>1. Cargos contra el parágrafo del artículo 11 de la Ley 191 de 1995. Violación de los artículos 6, 113, 136 numeral 1, 150 numeral 22, 158, 371, 372 y 373 de la Carta.</p> <p>El actor sostiene que el legislador, mediante la norma acusada, facultó al Gobierno Nacional para regular materias atribuidas constitucionalmente a otra autoridad estatal.</p> <p>A su juicio, al Banco de la República le compete, de acuerdo con los artículos 371 y 372 de la Carta, el manejo del crédito. Tal atribución es exclusiva de la Junta Directiva del Banco y no puede ser compartida con ningún otro ente. El Banco, destaca, es una entidad autónoma tanto en el aspecto administrativo como en el patrimonial, razón por la cual no es admisible injerencia alguna del Ejecutivo. El Banco, en su actuación, sólo se encuentra sujeto a lo ordenado en la Constitución, la ley, la política económica general y el interés de la Nación, pero en ningún caso a los mandatos del Gobierno Nacional.</p> <p>El actor recalca que la Corte Constitucional, en fallo C-021 de 1994, delimitó, de manera clara, las órbitas de acción del Ejecutivo y del Banco de la República y estableció que el manejo e implantación de programas de crédito no puede realizarse sin la participación del Banco de la República.</p> <p>Estima que la norma acusada vulnera el artículo 113 de la Carta, que establece la separación de funciones de los órganos estatales, toda vez que contempla la coexistencia de competencias entre el Ejecutivo y el Banco de la República.</p> <p>En este mismo orden de ideas, expresa, la norma demandada vulnera, además, el artículo 121 de la Carta que prohíbe a toda autoridad del Estado ejercer funciones diversas a las que le fueron atribuidas en la Constitución y en la ley. El Gobierno Nacional no puede, en consecuencia, ejercer funciones fijadas por la propia</p>



	<p>Constitución en cabeza del Banco de la República.</p> <p>Adicionalmente, la norma acusada contraría lo dispuesto en el artículo 150 numeral 22 de la Carta, toda vez que defiere competencias atribuidas constitucionalmente a un ente - Junta del Banco de la República - a otro órgano - Gobierno Nacional -. El artículo constitucional vulnerado estipula que el legislador puede fijar los contornos generales para la regulación del crédito; sin embargo, de ello no se deriva que puede mutar una competencia constitucionalmente establecida.</p> <p>De igual forma, el artículo 136 numeral 1 de la Constitución resulta conculcado, ya que el Congreso al expedir la norma cuestionada se inmiscuyó en la órbita privativa de otra autoridad estatal, la Junta Directiva del Banco de la República, a la que le corresponde regular el crédito, entre otras funciones.</p> <p>Los artículos 371, 372 y 377 de la Carta son, asimismo, objeto de violación por parte del artículo parcialmente demandado, toda vez que éste desconoce el carácter de autoridad crediticia, monetaria y cambiaria del Banco. A su juicio, lo dispuesto en la norma sobre la autorización previa de la Banca Central al Gobierno para efectos de que éste último establezca líneas de crédito no purga la inconstitucionalidad de la norma. Anota el actor que la intención del constituyente fue la de dotar de autonomía al Banco, a fin de que ejerza su función con independencia, y que la norma demandada desvirtúa dicho objetivo.</p> <p>De otra parte, estima el demandante que el artículo 11 parcialmente acusado desconoce el principio de unidad de materia (C.P art. 158), por cuanto el establecimiento de líneas de crédito agropecuario resulta ajeno a la materia que la Ley 191 de 1995 pretende regular.</p> <p>Intervención del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</p> <p>1. Los artículos 371 y 372, en concordancia con el numeral 22 del artículo 150 y los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, de manera clara sujetan el ejercicio de las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República, en cuanto a la política crediticia, a la ley, a la política económica y a la existencia de condiciones especiales para el sector agropecuario.</p> <p>Sobre el particular, es importante destacar que el ejercicio de tales funciones, y de todas en general, se sujeta a los lineamientos fijados en la ley. En cuanto al artículo 11 parcialmente acusado, su</p>
--	---

	<p>expedición se explica por la necesidad del legislador de regular, de manera general, la materia crediticia para el sector agrícola (C.P. arts. 64, 65 y 66).</p> <p>Ahora bien, el papel del Gobierno en la materia es el de “coordinar y armonizar la situación del sector agropecuario frente a la regulación del crédito, cumpliendo de esta manera uno de los fines esenciales del Estado”. De ahí que, en consideración de la función prevalente del Banco en materia crediticia, la norma acusada no convierte al Gobierno en autoridad decisoria para regular el crédito, sino en el “hilo conductor necesario para coordinar con la Junta la política del Estado en esta materia”.</p> <p>2. En cuanto a la unidad de materia, es innegable la relación del artículo 11 acusado con la materia de la ley. En efecto, el objetivo de la Ley 191 de 1995 es, entre otros, lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades ubicadas en zonas de frontera, entre las cuales, indudablemente, se encuentran numerosos grupos de campesinos.</p> <p>Intervención del Ministerio de Desarrollo Económico</p> <p>Mediante la expedición de la Ley 191 de 1995, el Congreso de la República desarrolla el artículo 337 de la Carta, guardando armonía, en cuanto a los artículos acusados, con las funciones del Banco de la República, como quiera que para cada uno de los casos contemplados en las disposiciones objeto de control constitucional se requiere una autorización previa del Banco. En ejercicio de dicha autorización previa puede la Junta Directiva del Banco de la República manifestarse y en cada campo expedir las respectivas regulaciones.</p> <p>Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p> <p>1. Debe distinguirse entre el “establecimiento de líneas de crédito” y la “determinación de las condiciones de tales líneas de crédito”. La primera es una función atribuida al Gobierno Nacional, en tanto que la segunda es de competencia de la Junta Directiva del Banco de la República. La norma en cuestión no otorga, en sentido estricto, funciones del Banco al Gobierno, sino que le permite a éste establecer líneas de crédito que corresponderá coordinar con el Banco de la República (C.P art. 371). Por otra parte, la jurisprudencia que cita el demandante se refiere a los casos en que se ha estudiado el tema de la determinación de las condiciones del crédito, pero no el del establecimiento de las mismas.</p>
--	--

	<p>2. La pretendida violación de la unidad de materia se desprende de una lectura exegética de la ley que no tiene en cuenta el título de la misma. La definición del campo de aplicación de la ley se realiza mediante su título y en este caso concreto, al considerar la norma acusada junto al título, se aprecia claramente que su aplicación se restringe a las zonas de frontera. Exigir que “en cada una de las disposiciones de una ley determinada se tuviera que hacer referencia a que las mismas sólo tienen aplicación en cuanto se refieren al objeto propio de la ley”, resultaría antitécnico e innecesario.</p> <p>Concepto del Procurador General de la Nación (E)</p> <p>1. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “el alcance de la función reguladora del Banco de la República en materia crediticia” significa que “a esa Institución corresponde establecer los parámetros normativos de acuerdo a los cuales ha de encauzarse la actividad crediticia en el país”. Habida consideración de ello, la facultad del Gobierno para establecer líneas de crédito en nada afectan la competencia del Banco de la República, en la medida que su ejercicio no tiene la “connotación de política normativa del crédito en el sector agropecuario”, sino que se limita a una evidente función administrativa de establecimiento de créditos a determinados sectores de la economía, cuya regulación corresponderá al Banco de la República.</p> <p>2. En cuanto a la unidad de materia, no es admisible el argumento del demandante “pues un tema como el establecimiento de líneas de crédito en condiciones especiales para el sector agropecuario de zonas de frontera, no puede considerarse, en sana lógica, ajeno a un objetivo como es el de promover y facilitar el desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural de esas zonas”.</p> <p>2. CARGOS CONTRA LOS PARAGRAFOS 1 y 3 DEL ARTICULO 21 DE LA LEY 191 DE 1995.</p> <p>Manifiesta el actor que el texto definitivo del artículo 21 de la Ley 191 de 1995 fue sustancialmente modificado por la Plenaria del Senado, puesto que no coincide con el texto aprobado por las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara. Aduce que se pretermitió el trámite establecido en el artículo 161 de la Carta, que obliga a conformar comisiones conjuntas cuando se presentes discrepancias en las cámaras sobre algún proyecto.</p> <p>Asimismo, al desconocer este trámite se vulneró lo preceptuado en el artículo 157 de la Carta Política, pues en la práctica la norma fue aprobada exclusivamente por el Senado.</p>
--	--

	<p>De otra parte, en materia de vicios de fondo encuentra el accionante que el artículo 21 demandado desconoce los artículos 6, 113, 121, 150 numeral 19, 371 y 372 de la Constitución Política.</p> <p>Sostiene que el artículo 150, en sus numerales 19 y 22, diferencia las funciones que, en materia cambiaria, le corresponden al Gobierno Nacional y a la Junta Directiva del Banco. En su concepto, al Gobierno Nacional le corresponde, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 9ª de 1991, determinar las operaciones sujetas al régimen cambiario y las operaciones cuyo producto en moneda extranjera no debe ser transferido o negociado a través del mercado cambiario. Por su parte, a la Junta Directiva del Banco de la República le compete la expedición de las reglamentaciones con sujeción a las cuales debe operar el mercado cambiario y se deben desarrollar las diferentes categorías de operaciones de cambio. De esta forma, la Junta Directiva del Banco de la República actúa como ejecutor en las materias previamente definidas por el Gobierno Nacional, conforme a la Ley Marco de Cambios Internacionales.</p> <p>Lo anterior se desprende, en su opinión, del análisis sistemático de los artículos 150 numeral 19, 371 y 372 de la Carta Política, así como de los artículos 3º de la Ley 9ª de 1991, y 16 literal h de la Ley 31 de 1992.</p> <p>En consecuencia, encuentra que "es indiscutible que no es el Congreso Nacional la autoridad competente para regular la materia que reguló mediante el parágrafo 1 demandado, ni puede el Gobierno atribuirse tal competencia, como se hace en el parágrafo 3, igualmente demandado". El Gobierno Nacional debe, en su entender, limitarse a dictar las normas generales que precisen los objetivos y criterios con base en los cuales debe establecerse el régimen de cambios. Los párrafos acusados desconocen el artículo 6 de la Constitución Nacional, por cuanto el Congreso no puede abrogarse la función de expedir normas asignadas por la Constitución a la Junta Directiva del Banco de la República.</p> <p>Asimismo, con su actuación, el Congreso desconoció la separación de funciones entre los órganos estatales y ejerció funciones ajenas a su competencia, vulnerando con ello los artículos 113 y 121 de la Carta Política.</p> <p>El legislador, con la expedición del parágrafo 1º del artículo 21 demandado, terminó, a juicio del actor, regulando materias cuya competencia le está atribuida a la Junta Directiva del Banco, con lo cual conculca el artículo 150 numeral 19 de la Carta.</p>
--	---

	Por último, considera que la norma vulnera los artículos 371 y 372 de la Carta, en cuanto desconoce el carácter de autoridad cambiaria de la Junta.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-413/96
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Diego Mauricio Bejarano Daza
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 49 de la Ley 191 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declárase EXEQUIBLE el artículo 49 de la Ley 191 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-138/96
Fecha de la sentencia	del nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Fanny Jaramillo Tovar
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 174 de 1994.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Primero. Declárase INEXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 174 de 1994. Segundo. La presente Sentencia surte efectos a partir de su notificación y no afecta situaciones jurídicas consolidadas a la luz del precepto que se declara inexequible.
Conoció en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jurídicos	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 174 de 1994.
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	No aplica
Resumen del mismo	No aplica
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-002/96
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 178 del 30 de agosto de 1995, que haba sido numerada como Ley 178 del 22 de diciembre de 1994, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Par3s para la protecci3n de la propiedad industrial", hecho en Par3s el 20 de marzo de 1883, con las respectivas revisiones posteriores.
Conoci3 en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Decl3ranse EXEQUIBLES el Convenio de Par3s para la protecci3n de la propiedad industrial, hecho el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979, as3 como la Ley 178 del 30 de agosto de 1995, que lo aprueba. La exequibilidad del art3culo primero se declara sobre el supuesto de que no pugne con las normas dictadas al amparo del Pacto Andino en los art3culos 6º y 7º de la Decisi3n 344 de la Comisi3n del Acuerdo de Cartagena, "R3gimen Com3n de Propiedad Industrial". En caso de discrepancia con tales normas, el Presidente de la Rep3blica, al adherir al tratado revisado, deber3 formular la correspondiente reserva.
Conoci3 en segunda instancia	No aplica
Decision	No aplica
Hechos jur3dicos	
Decision de la Corte	No aplica
Tiene salvamento	SI
Resumen del mismo	Me aparto de la decisi3n adoptada por la Sala en el sentido de condicionar la exequibilidad del Tratado materia de revisi3n. El motivo de mi disentiimiento es muy sencillo: la funci3n de la Corte en relaci3n con tratados p3blicos consiste en examinar si se ajustan o no a la Constituci3n Pol3tica. Lo relativo a posibles discrepancias entre un Tratado Internacional y otro no es algo que deba resolverse en estos estrados. Al respecto deben aplicarse las reglas y procedimientos del Derecho Internacional, dentro del 3mbito de competencia del Presidente de la Rep3blica en su condici3n de Jefe del Estado.
Tiene aclaraciones	No aplica
Resumen de las aclaraciones	No aplica

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-023/96
Fecha de la sentencia	
Demandante	Jorge García Hurtado, Enrique Gómez Hurtado y Gonzalo García Gutiérrez.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 1o, 4o, 9o, 15, 21, 38 (parcial), 45 (parcial), 58, y 64 (parcial), de la ley 179 de 1994 "Por la cual se introducen algunas modificaciones a la ley 38 de 1989, orgánica de presupuesto".
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE la ley 179 de 1994, en lo que se refiere a vicios de forma, pues en su tramitación no se incurrió en irregularidades.</p> <p>Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES los artículos 1o., 4o., 9o. 15, 21, inciso primero, y 38, incisos 3° y 4°, de la ley 179 de 1994.</p> <p>Tercero.- Declárase INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 21 de la ley 179 de 1994.</p> <p>Cuarto.- Declárase EXEQUIBLE la frase final del artículo 45 de la ley 179 de 1994, que dice: "En todo caso, las operaciones de compra, venta y negociación de títulos que realice directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se sujetarán a las normas del derecho privado".</p> <p>Quinto.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 58 de la ley 179 de 1994, excepto la frase que dice: "Estos ingresos se podrán sustituir de acuerdo con el respectivo reglamento", frase que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Sexto.- Estése a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-541 del 23 de noviembre de 1995, sobre la siguiente frase del artículo 64 de la ley 179 de 1994: "... y los que se dicten no tendrán ningún efecto"</p> <p>Séptimo.- Declárase INHIBIDA para decidir sobre la exequibilidad de los artículos 64, 65 y 70 de la ley 38 de 1989.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>a) Cargos contra toda la ley 179 de 1994, por violación, en general, del artículo 352 de la Constitución.</p> <p>Primer cargo.- La ley 179 de 1994 es inconstitucional porque el Congreso se limitó a introducir modificaciones a la ley 38 de 1989, ley orgánica del presupuesto expedida con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, contrariando el mandato del artículo 352 de la Constitución que ordenó al legislador expedir una ley orgánica del presupuesto para regular todo lo relacionado con la aprobación, modificación y ejecución del presupuesto.</p> <p>Intervención del ciudadano designado por el Ministerio de</p>



	<p>Hacienda y Concepto del Viceprocurador.</p> <p>Con fundamento en variada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, afirman que la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, no derogó el ordenamiento jurídico preconstitucional existente, razón por la que el legislador podía introducir sólo algunas modificaciones a la ley 38 de 1989, ley orgánica del presupuesto expedida con anterioridad a la Constitución de 1991, con el único propósito de adecuarla a la nueva preceptiva constitucional, sin que por ello el legislador hubiese quebrantado el artículo 352 de la Constitución.</p> <p>Segundo cargo.- La obligación del legislador era expedir una ley orgánica del presupuesto, con los requisitos especiales exigidos en la Carta para esta clase de leyes. Por tanto, el Congreso no podía introducir sólo modificaciones a una ley que por haber sido expedida bajo la Constitución de 1886, no cumplía con tales requisitos. Los actores en ningún momento hacen mención del artículo 151 de la Constitución, que establece las formalidades que se deben agotar para la expedición de las leyes orgánicas.</p> <p>Tercer cargo.- La ley 179 de 1994, según la definición que ella misma hace en su artículo 1o., es una ley estatutaria y no orgánica. Por tanto, se desconoce el artículo 352 de la Constitución, que exige la expedición de una ley orgánica y no estatutaria. Con el mismo argumento, solicitan la inexequibilidad del artículo 1o.</p> <p>Cuarto cargo.- La ley orgánica del presupuesto no podía dictarse sin que se hubiese dictado el Plan Nacional de Desarrollo, pues, por mandato expreso del artículo 352 de la Constitución, la ley orgánica del presupuesto debe estar en coordinación con dicho plan. La ley 179 entró a regular materias relacionadas con el gasto social sin tener en cuenta los parámetros establecidos por la misma Carta para la distribución de los recursos públicos entre los distintos organismos.</p> <p>Quinto cargo.- El legislador omitió derogar algunos artículos de la ley 38 de 1989 que son inconstitucionales, tales como el 64, 65 y 70 que facultan al Gobierno para realizar ciertas operaciones que están expresamente prohibidas en la Constitución de 1991, hecho éste que hace inconstitucional la ley en su integridad.</p> <p>b) Cargos específicos contra los artículos 4, 9, 15, 21,38 (parcial), 45 (parcial), 58 y 64 (parcial), de la ley 179 de 1994.</p> <p>1. El artículo 4o., desconoce el artículo 341 de la Constitución que hace referencia, en su inciso final, a la facultad que tiene el Congreso de modificar el plan de inversiones públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. En concepto de los demandantes, el artículo acusado no podía excluir de los principios que rigen el sistema presupuestal el del equilibrio, porque " si el plan de inversiones públicas que constituye una parte fundamental del presupuesto anual, debe expedirse manteniendo el equilibrio financiero, la ley orgánica de presupuesto no puede excluir este principio fundamental...".</p>
--	--

	La Constitución, dicen los actores, exige que se mantenga el equilibrio presupuestal, pues, a pesar de que el artículo 347 de la Constitución, permite la aprobación de la ley de apropiaciones sin que existan los ingresos suficientes para financiar la totalidad de los gastos proyectados en ella, ordena igualmente, la tramitación y aprobación de una ley que autorice obtener los recursos adicionales para financiar los gastos estimados. Por tanto, el principio del equilibrio presupuestal no podía ser excluido del régimen presupuestal.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-306/96
Fecha de la sentencia	
Demandante	Dario Giovanni Lara
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54 de la Ley 179 de 1994 y contra la Ley 179 de 1994, "por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto".
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C-541 de 1995, en relación con el artículo 54 de la Ley 179 de 1994.</p> <p>SEGUNDO.- Declararse INHIBIDA para conocer de los cargos en contra de la Ley 179 de 1994 en relación con artículo 158 de la Constitución Política, en lo referente a la publicación de la ley objeto de reforma parcial en un solo texto, por carecer de competencia.</p> <p>TERCERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C-540 de 1994, en relación con el artículo 71 de la Ley 179 de 1994 respecto de la derogación del artículo 163 de la Ley 5ª de 1992.</p> <p>CUARTO.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 179 de 1994.</p> <p>QUINTO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-546 de 1995, en relación con los incisos primero, segundo y tercero del artículo 70, y declarar EXEQUIBLE el inciso cuarto del artículo 70.</p> <p>SEXTO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-023 de 1996, que declaró la exequibilidad de la parte final del artículo 45, y declarar EXEQUIBLE la parte restante del artículo 45.</p> <p>SEPTIMO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 68 y 71 de la Ley 179 de 1994. Este último, en relación con la derogación de los artículos 264, 265 y 266 de la Ley 100 de 1993.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A. Cargos contra el artículo 54 de la Ley 179 de 1994</p> <p>El demandante señala que la autorización legal otorgada al Gobierno Nacional para compilar las normas de las leyes 38 de 1989 y 179 de 1994 en un Estatuto Orgánico del Presupuesto, viola los artículos 150 numeral 10, 151 y 158 de la Constitución. Toda compilación de leyes debe ser realizada por el legislador. Las normas que se ordenó compilar son de naturaleza orgánica por lo que el Legislador no podía autorizar su compilación por el Gobierno sin violar la prohibición contenida en el inciso final de artículo 150-10 de la C.P. y el mandato constitucional que faculta exclusivamente al Congreso de la República para expedir las leyes</p>

	<p>orgánicas (C.P., art. 151). La norma vulnera igualmente el artículo 158 de la Carta Política, puesto que la ley citada modifica la Ley 38 de 1989 y ha debido, por ende, ser publicada en un sólo texto y no delegarse dicha función, como en efecto se hizo.</p> <p>B. Cargos contra la Ley 179 de 1994</p> <p>La Ley 179 de 1994 es acusada de violar el artículo 158 de la Constitución. El actor evoca el sano propósito del Constituyente de intentar depurar la técnica legislativa en la elaboración de las leyes, mediante la consagración, entre otros, de los principios de unidad de materia y de "integralidad" de la ley (C.P., art. 158).</p> <p>A su juicio, el Congreso omitió integrar en un solo texto las modificaciones introducidas a la Ley 38 de 1989 (Ley Orgánica del Presupuesto) y, por tal motivo, violó la Constitución (C.P., art. 158). Además, los artículos 37, 45, 54, 68, 70 y 71 de la Ley 179 de 1994 violan el principio de unidad de materia al regular aspectos no relacionados con la ley de presupuesto.</p> <p>"La Ley acusada, no sólo modifica sin incorporar en un solo texto normativo la totalidad del nuevo cuerpo jurídico, sino que adiciona la ley anterior, y decreta artículos "nuevos" que indican cómo debe quedar ... .</p> <p>"Por otra parte, la Ley acusada viola el principio de unidad de materia, al regular aspectos no relacionados con la Ley que pretende modificar, como es la Ley 38 de 1989. ... La Ley 179/94 no es simplemente modificadora de la Ley 38 de/89, sino que también de otras leyes (Estatuto de contratación, la Ley de seguridad social) y reglamentaria de la Constitución (art. 60), por lo que no guarda unidad de materia".</p>
Decision de la Corte	
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-008/96
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de enero de mil novecientos noventa y seis (1.996).
Demandante	Alejandro Angel Peñaranda Narváez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley 181 de 1.995 (enero 18), “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ.
Decision	PRIMERO. Declarar exequibles los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 181 de 1.995, “por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”. SEGUNDO. Declarar inexecutable el artículo 22 de la Ley 181 de 1.995, por violar la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de la República de Colombia, como quedó expuesto en la parte considerativa.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El demandante afirma que los artículos acusados de la Ley 181 de 1.995 violan lo dispuesto por la Constitución sobre la libertad de cátedra y de estudio, pues “mal podría el legislador a través de una ley obligar a quien por garantía constitucional tiene la potestad de elegir qué actividad del saber científico desea explotar en beneficio de su estudiantado. Entonces no podemos generalizar en la obligación de crear facultades o cursos de post-grado, ni mucho menos clubes deportivos; cuando por ejemplo muchas de nuestras universidades desarrollan disciplinas académicas que no tocan un ápice de la fibra muscular del ser humano, sino que solamente lo forman intelectualmente” (folio 3). Por otra parte, considera que el pleno ejercicio de la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, es requisito indispensable para que las instituciones de educación superior cumplan con su misión, por lo que el alcance de la ley en estas materias es, necesariamente, de carácter limitado, a fin de permitir que la autonomía se manifieste en las libertades de autoorganización y autorregulación.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las	NO APLICA

aclaraciones	
--------------	--

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-625/96
Fecha de la sentencia	Noviembre veintiuno (21) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	José Leonidas Vargas
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 65 y 67 de la Ley 181 de 1995 "por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte."
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Primero.- En los términos de esta sentencia, declárase EXEQUIBLE el artículo 65 de la Ley 181 de 1995, salvo los siguientes apartes del párrafo que dicen: "calificación del Ministerio de Educación Nacional", y "sobre el cumplimiento de los requisitos que por reglamento establezca el Gobierno Nacional para este efecto", los cuales se declaran INEXEQUIBLES. Segundo.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 67 de la Ley 181 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Según manifiesta el actor, las normas acusadas vulneran la Constitución Política en sus artículos 1o., 4o., 248, 287, 298, 300 numeral 7o. y 305 numerales 1o. y 7o. por cuanto atentan contra el principio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales al disponer la incorporación de las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes -que son dependencias del orden nacional- como entes departamentales, dejando sin efecto la función de las Asambleas consagrada en el numeral 7o. del artículo 300 de la Carta, para establecer la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración de acuerdo a las diferentes categorías de empleo, así como para crear los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.  Las disposiciones demandadas en su criterio, limitan la facultad que otorga la Constitución a las Asambleas Departamentales en el numeral 7o. del citado artículo para crear los organismos o entes deportivos como dependencias del departamento, es decir como Secretaría, Subsecretaría, División, Unidad o cualquier otra similar, ya que al incorporarse las actuales Juntas Administradoras

	<p>Seccionales de Deporte, como entes del respectivo departamento, como se dispone en los artículos cuestionados, deberá hacerse como establecimiento público del orden departamental, con autonomía administrativa y financiera, patrimonio público independiente y personería jurídica.</p> <p>Señala que con esto se vulneran también las atribuciones consagradas para las Asambleas en los numerales 1o. y 10 del artículo 300 de la Carta, relativas a la facultad de reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo de un departamento, así como de regular en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los términos legales.</p> <p>Afirma así mismo, que de acuerdo con estas normas, los departamentos, independientemente de que ostentan con una infraestructura para el fomento del deporte y la recreación, tienen que recoger las actuales Juntas Seccionales del Deporte, así sus estructuras, plantas de personal y escalas de remuneración no correspondan a las vigentes para las demás dependencias del nivel departamental, las cuales han sido establecidas de conformidad con las necesidades del ente territorial y sus posibilidades económicas.</p> <p>Finalmente, estima que por estas mismas razones las normas acusadas infringen el numeral 7o. del artículo 305 de la Carta que consagra una facultad nominadora para los Gobernadores, al imponer la incorporación a la nómina del departamento de los funcionarios vinculados a las referidas Juntas Seccionales de Deportes, cuya designación no ha sido hecha por el respectivo Gobernador.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI, DR. HERNANDO HERRERA VERGARA
Resumen del mismo	De una parte las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses “dentro de los límites de la Constitución y la ley” y corresponde a las Asambleas Departamentales “regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, y de la otra, por cuanto la norma acusada en este acápite se limita a fijar unos parámetros mínimos que permiten desarrollar el Sistema Nacional del Deporte permitiendo así una verdadera integración en el adecuado funcionamiento para el fomento del mismo. La razón de ser del precepto deriva en una necesaria coordinación que debe existir entre el momento en que desaparezcan las antiguas Juntas Administradoras Seccionales de Deportes y el nacimiento jurídico de los nuevos entes departamentales, que en adelante asuman sus funciones
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las	NO APLICA

aclaraciones	
--------------	--

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-310/96
Fecha de la sentencia	once (11) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Bernardo Antonio García Hernández a través de apoderado judicial (José Lucas Cantor Wilches)
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5o. literal f) y h) parcialmente, 12 num. 3o. parcialmente, 23 parcialmente y 48 literal n), de la ley 182 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	1. Declarar EXEQUIBLES las partes demandadas de los artículos 5o., 12, 23 de la Ley 182 de 1995, bajo el entendido de que la coordinación a que se refieren dichos preceptos es sólo de carácter técnico. 2. Declara INEXEQUIBLE la expresión “condiciones a las cuales se les debe conceder el 70% al registro de empresas concesionarias”, contenida en el literal n) del artículo 48 de la ley 182 de 1995
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	1. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima el actor que las disposiciones acusadas son violatorias del preámbulo y los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 16, 75, 76 y 77 de la Constitución Política. 2. Fundamentos de la demanda Del análisis de la demanda, se concluye que son dos los argumentos fundamentales con los cuales el actor pretende demostrar la inconstitucionalidad de las normas acusadas; el primero se dirige contra las disposiciones de la ley 182 de 1995, que le asignan funciones a la Comisión Nacional de Televisión para que éstas se adelanten en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, cuando, según el actor, por mandato constitucional la Comisión ejerce de manera autónoma la regulación y el manejo del servicio público de televisión. Sobre el particular sostiene el demandante que "mal puede (sic) existir dos (2) entes jurídicos que velen por la Televisión Nacional y tenemos al Ministerio de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión. La primera con mayor influencia que la segunda; la Comisión Nacional de Televisión sujeta a las condiciones impuestas por el Ministerio de Comunicaciones; la Comisión Nacional de Televisión atada a lo que le otorgue el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión dependiente del Ministerio de Comunicaciones, etcétera."



	<p>Afirma, igualmente, que estos dos entes jurídicos contradicen los artículos 76 y 77 de la Constitución Política y 3o. y 4o. de la Ley 182 de 1.995, pues ellos indican que la televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional sujeta a su propio régimen. Así, entonces, en su concepto existe flagrante violación e intromisión del Ministerio de Comunicaciones en la televisión nacional, pues a partir de la vigencia de la ley 182 de 1995 se despojó de esas funciones a dicho Ministerio, otorgándole plenas facultades y autonomía a la Comisión Nacional de Televisión en materia de televisión nacional, exclusivamente.</p> <p>Sostiene que no deben existir dos entidades que regulen, desarrollen, y designen las frecuencias de la televisión nacional, ya que entran en contradicciones la una con la otra, generándose un conflicto de intereses que sólo lleva a un caos en materia de televisión.</p> <p>En lo que se refiere al segundo cargo de la demanda, considera el demandante que el literal n) del artículo 48 de la ley 182 de 1995, viola el derecho a la igualdad al conceder un beneficio porcentual del 70% al registro de empresas concesionarias por acreditar dentro del pliego de condiciones los requisitos de experiencia, capacidad y profesionalismo, pues son criterios que únicamente reúnen las empresas que actualmente se encuentran prestando el servicio de televisión y no las otras personas naturales o jurídicas que participen de la licitación pública.</p> <p>Se trata entonces, de una prerrogativa especial que la ley otorga a dichas empresas en perjuicio de "aquellas personas naturales o jurídicas que deseen participar en el desarrollo de la televisión privada y ante todo en la licitación pública que en su debida oportunidad realizará la Comisión Nacional de televisión..." Dicha disposición, genera igualmente, una intromisión en las funciones de la Comisión Nacional de Televisión, ya que es ésta quien señala las condiciones, requisitos y parámetros que deben cumplir quienes desean participar en la licitación pública.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-015/96
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Vicente Ramírez Garzón
Demandado	Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 188 de 1995, "Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998".
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.-Declárase EXEQUIBLE la Ley 188 de 1995, "Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998", en cuanto al vicio de forma señalado en la demanda, relativo a una posible presentación extemporánea del proyecto consolidado de Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo Nacional de Planeación.</p> <p>Segundo.- SE INHIBE la Corte de fallar en cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley 188 de 1995, planteada por concepto del proceso de integración del Consejo Nacional de Planeación y por incluir anexos extraños al Plan.</p> <p>Tercero.- SE INHIBE la Corte de fallar, por falta de competencia, sobre la exequibilidad de la Ley 188 de 1995, respecto a los cargos de no favorecer la paz, de no haber asegurado la estabilidad macroeconómica y financiera y de no haber garantizado "una adecuada oferta ambiental".</p> <p>Cuarto.- Por ineptitud sustancial de la demanda, SE INHIBE la Corte de fallar respecto de la inconstitucionalidad alegada contra los artículos 20, 33, 36, 37, 39, 40, 43, 45 y 46 de la Ley 188 de 1995.</p> <p>Quinto.- Se declaran EXEQUIBLES, pero únicamente en relación con los cargos formulados en la demanda, los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 188 de 1995.</p> <p>Sexto.- Se declara EXEQUIBLE el artículo 21 de la Ley 188 de 1995 en relación con el cargo de haber omitido dar prelación al gasto público social.</p> <p>Por ineptitud sustancial de la demanda, la Corte SE INHIBE de fallar sobre los demás cargos formulados contra la mencionada norma</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>- Sin decir cuáles son, el demandante señala que la Ley 188 de 1995 presenta anexos, contenidos y artículos extraños al Plan, no contemplados por la Ley Orgánica.</p> <p>- Considera que la normatividad demandada vulnera y desconoce</p>

	<p>principios constitucionales como los de equilibrio, "sustentabilidad" ambiental, primacía del gasto social y participación ciudadana y que, además, atenta contra la paz.</p> <p>- Sin precisar cuáles podrían ser los vicios de trámite de la Ley, salvo en lo relativo al Consejo Nacional de Planeación, afirma que ella es "un habilidoso producto que, al ropaje de un velo demagogo, desacata el proceso jurídico obligatorio de su formación para dar paso a uno de carácter autoritario e ilustrado".</p> <p>- Sostiene que el Plan no da prioridad al gasto público social. Sus argumentos al respecto son del siguiente tenor:</p> <p>"En el mismo se presenta una acomodación y un cruce de cuentas nacionales amañado que objetivamente burlan el mandato constitucional y legal.</p> <p>Así, por ejemplo, si al llamado por el Plan Sector Social 1 se le hacen los ajustes y se sitúan correctamente los recursos y la constitución de los ingresos, que lógicamente, siendo cuentas nacionales, no corresponden al Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra que las transferencias nacionales en educación, que llegan a \$7.997.622 millones, y las transferencias para salud, que llegan a \$2.466.973 millones, suman un total de \$10.464.595 millones, cifra que no puede legalmente presentarse como GASTO PUBLICO SOCIAL sino como GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD. Es decir, esta asignación debe aparecer en el Sector 4 y no en el 1. Y así debe ser porque es el gran acumulado nacional en educación y salud previsto por disposiciones legales anteriores al Plan y con base en el que, y sobre el que se hace, ahí sí, el gasto público social en educación y salud.</p> <p>Sin la anterior asignación en infraestructura de educación y salud sería un absurdo financiero estatal hacer gasto público social en dichas áreas".</p> <p>(...)</p> <p>"En concreto: el gasto público en infraestructura educativa y de salud, técnicamente llamado transferencia y que asciende a \$10.464.595 millones no tiene porqué, constitucional y legalmente, presentarse como gasto público social, tal como lo hace la Ley 188 de 1995 en su artículo 21, sino que tal asignación corresponde a infraestructura".</p> <p>Afirma, entonces, que el gasto público social no es de \$21.847.670 millones, como dice la Ley acusada, sino de \$11.383.075 millones, con lo cual se vulnera el artículo 366 de la Constitución. La Ley del Plan no cumplió con dar prioridad al gasto social, que llegó sólo al 24% del Plan.</p>
--	---

	<p>- El Plan es inconstitucional, según la demanda, por cuanto introdujo un objetivo adicional no contemplado en la Constitución: el de la sociedad civil.</p> <p>En el sentir del demandante, la Constitución Política ordena que el Plan se limite a la acción del Estado, pero la Ley 188 de 1995 orienta tal acción "hacia el crecimiento integral de la persona humana y el desarrollo solidario de la comunidad colombiana" (artículo 1º) y dispone que "para realizar los propósitos del Plan, el Estado y la sociedad civil deben..." (artículo 4º).</p> <p>El artículo 3º, por su parte, establece abruptamente unos "propósitos del pueblo colombiano", en lugar de "propósitos de la acción estatal", según el mandato constitucional.</p> <p>"La historia muestra -asegura- que generalmente no coinciden los propósitos del Estado con los del pueblo, caso marcadamente dramático en Colombia".</p> <p>Dice que, por esas mismas razones, los artículos 5º y 6º de la Ley son inconstitucionales. Por eso también son contrarios a la Carta los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, pues no son "estrategias estatales" como lo establece el artículo 399 de la Constitución sino que dentro de la Ley derivan en estrategias "de la sociedad civil".</p> <p>- De acuerdo con lo expresado por el impugnante, debido a la confusión introducida en la Ley 188 de 1995, que conduce a establecer principios nuevos y deberes y reconocimientos reservados constitucionalmente a la Ley Orgánica, también son inconstitucionales los artículos 7, 8 y 9 de la normatividad demandada.</p> <p>- Además -manifiesta- el artículo 16 es inexecutable por cuanto dispone estrategias reservadas a la filosofía y a la axiología sobre la ética y los valores espirituales, penetrando en esferas como la moral, que ni siquiera toca el Constituyente.</p> <p>- Argumenta también que la Ley 188 de 1995 es inconstitucional por cuanto a partir del artículo 19 se desconoce el imperativo de que el Plan de Inversiones es de las entidades públicas del orden nacional.</p> <p>No aparece en la Ley un responsable claro del Plan de Inversiones Públicas. No se sabe, dado el texto legal, si es la sociedad civil, el Estado, el Gobierno o el pueblo.</p> <p>- Dice sobre los artículos 20 y 21 de la Ley que son</p>
--	--

	<p>inconstitucionales porque no presentan "los proyectos" sino algunos de ellos, "los principales", cuyo monto asciende a "\$5.531.799 millones del Plan".</p> <p>- Igualmente pide que se declare la inconstitucionalidad del Plan porque "no asegura la estabilidad macroeconómica y financiera". El Plan de Gastos no es consistente con la proyección de ingresos y financiación.</p> <p>Es el mismo Presidente de la República -señala- quien presenta la prueba de la inconsistencia del Plan, de su inevitable desequilibrio financiero en términos reales, cuando al momento de sancionar la Ley expresó:</p> <p>"De no aprobarse la referida reforma tributaria en el próximo semestre, nos veríamos obligados a recortar las inversiones en cerca de 3.3 millones de pesos".</p> <p>- Se contraría, según la demanda, lo previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Planeación -Ley 152 de 1994- sobre los procedimientos de participación.</p> <p>Tal es el caso del Consejo Nacional de Planeación, que debía integrarse por personas designadas por el Presidente de la República de listas que le presentaran las correspondientes autoridades y organizaciones.</p> <p>No obstante, el Departamento Nacional de Planeación convocó para enviar listas a "personas jurídicas", desvirtuando los textos constitucionales y legales, que se refieren a "organizaciones" de los sectores por convocar.</p> <p>- Sostiene el demandante que en la formación de la Ley se desconoció el mandato según el cual a más tardar el 15 de noviembre (de 1994) el Presidente debía someter al Consejo Nacional de Planeación el proyecto del Plan como documento consolidado en sus diferentes componentes.</p> <p>La inconstitucionalidad radica, según su dicho, en que el Consejo Nacional de Planeación fue integrado tan sólo hasta el día 15 de noviembre de 1994, mediante Decreto 2528, por lo cual su publicación fue posterior a esa fecha, que era límite.</p> <p>En consecuencia, el Presidente de la República no pudo someter a consideración de ningún Consejo el proyecto de Plan y, si se hizo, ello fue extemporáneo.</p> <p>- Expresa también que el documento denominado "Bases para el</p>
--	---

	<p>Plan Nacional de Desarrollo" no era un proyecto consolidado, a tal punto que el Programa 3, que aparece en el artículo 3 del proyecto del Gobierno, no estaba contemplado en dicho documento. Por otra parte -dice- el aludido programa fue incrementado en un 25% durante su trámite en el Congreso.</p> <p>- Señala que el desarrollo económico planteado en el Plan no está en armonía con el medio ambiente y en lugar de garantizar una adecuada oferta ambiental a las generaciones actuales y futuras, lo que sí garantiza "es un desierto y hambruna, como en el caso de algunas regiones en el Departamento de Boyacá".</p> <p>De la cifra total de 38'121.116 millones en que prima la inversión en infraestructura, sólo se asigna para el sector ambiental la irrisoria cifra de \$510.645 millones, que, por demás, están condicionados en alto porcentaje al endeudamiento internacional.</p> <p>- El artículo 33 de la Ley 188 es inconstitucional porque el Fondo Prestacional allí previsto no es programa ni proyecto.</p> <p>- Según el demandante, el artículo 36 Ibídem es ajeno a la Ley Orgánica y a la Constitución, pero no indica las razones.</p> <p>- El artículo 37 es inconstitucional, en su entender, porque lo relativo al seguimiento del Plan fue reservado por la Constitución a la Ley Orgánica y ésta ya lo asignó a Planeación Nacional.</p> <p>- El artículo 39 -agrega- es inconstitucional porque expresamente, en la misma Ley del Plan, el Fondo Nacional de Regalías está excluido del Plan.</p> <p>- Los artículos 40 y 43, a su juicio, son contrarios a la Constitución por ser ajenos a la Ley del Plan. No manifiesta la razón.</p> <p>- Finalmente, indica la demanda que los artículos 45 y 46 corresponden a temas reservados por la Constitución a la Ley Orgánica. En consecuencia, también son inconstitucionales.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-254/96
Fecha de la sentencia	Junio seis ( 6 ) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	Luis Alberto Villamizar Contreras.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículo 20 y 21 (parcial) de la Ley 188 de 1995 “Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998”.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES el numeral 9.1 del artículo 20 y el numeral 9.1 del artículo 21 de la Ley 188 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Cargo primero. Violación de los artículos 13, 136 y 355 de la Constitución</p> <p>1. El mecanismo previsto en las normas acusadas corresponde a un subsidio prohibido por la Constitución. El sistema adoptado consiste en que BANCOLDEX otorga préstamos en condiciones competitivas, de manera que la tasa de colocación sea menor a la de captación. Para financiar este tipo de actividades, se prevé la transferencia de partidas del Presupuesto de la Nación para cubrir los menores ingresos derivados de la operación bancaria.</p> <p>2. La Carta prohíbe la liberalidad, “es decir la ausencia de deber de realizar la respectiva erogación, que es enteramente voluntaria para quien dispone de sus bienes. La connotación negativa radica en que el Estado, por regla general, no puede disponer de sus bienes gratuitamente, es decir sin contraprestación”. La excepción a la prohibición de otorgamiento de auxilios se ha reglamentado en el Decreto 777 de 1992, el cual no contempla en parte alguna entidades con ánimo de lucro como las empresas exportadoras, por lo que ha de concluirse que se trata de un auxilio prohibido por la Constitución.</p> <p>3. Las normas acusadas directamente no contemplan una partida presupuestal calificable de auxilio - materia que corresponde a la Ley de Presupuesto -. Sin embargo, se autoriza una partida presupuestal que, de producirse, sería un auxilio. Así, tanto las normas como las partidas que se decretan con su autorización, constituyen auxilios prohibidos por la Constitución.</p> <p>4. La autorización de partidas, en el sentido indicado, viola el artículo 13 de la Constitución, toda vez que se trata de una</p>

	distribución de recursos fiscales escasos en favor de los grupos más poderosos de la sociedad.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-109/96
Fecha de la sentencia	marzo veintiuno (21) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 197 de 12 de julio de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Programa Mundial de Alimentos P.M.A. de las Naciones Unidas", firmado el 21 de julio de 1994
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	DECLARAR EXEQUIBLES el Acuerdo entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Programa Mundial de Alimentos -PMA- de las Naciones Unidas", firmado el 21 de julio de 1994, y la ley 197 de 1995 que lo aprueba.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurìdicos	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 197 de 12 de julio de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Programa Mundial de Alimentos P.M.A. de las Naciones Unidas", firmado el 21 de julio de 1994
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-110/96
Fecha de la sentencia	veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la ley 205 de agosto 3 de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio Cultural entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Hel3nica", suscrito en Roma el 20 de diciembre de 1990.
Conoci3 en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJIA.
Decision	Declarar EXEQUIBLES el Convenio de Cooperaci3n Cultural entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Hel3nica, suscrito en Roma el 20 de diciembre de 1990, y la ley 205 de agosto 3 de 1995, que lo aprueba.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional de la ley 205 de agosto 3 de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio Cultural entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Hel3nica", suscrito en Roma el 20 de diciembre de 1990.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-152/96
Fecha de la sentencia	abril dieciocho (18) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	
Demandado	Revisi3n previa de la constitucionalidad de la Ley 207 de 1995 (9 de agosto), "Por medio de la cual se aprueba el CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA PARA LA DETECCION, RECUPERACION Y DEVOLUCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO Y ACUATICO, suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993."
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	<p>Primero. DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 207 de 1995 (9 de agosto), "Por medio de la cual se aprueba el ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA PARA LA DETECCION, RECUPERACION Y DEVOLUCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO Y ACUATICO, suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993." y el tratado mismo, salvo las siguientes normas que se declaran inexecutable:</p> <p>a) Art3culo III: las expresiones del inciso primero: "que adopte la Comisi3n Binacional de Alto Nivel para la Recuperaci3n de Veh3culos de Transporte Terrestre, A3reo y Acu3tico".</p> <p>Las expresiones del inciso segundo "de acuerdo con el procedimiento indicado en el par3grafo anterior y".</p> <p>b) El art3culo XIII que dice as3:</p> <p>"Las Partes Contratantes se comprometen a aplicar para la detecci3n, recuperaci3n y devoluci3n de los veh3culos a que se refiere el presente Acuerdo, el procedimiento que adopte la Comisi3n Binacional de Alto Nivel para la Recuperaci3n de Veh3culos de Transporte Terrestre, A3reo y Acu3tico."</p> <p>c) El art3culo XIV que dice:</p> <p>"Las Partes Contratantes se comprometen a no iniciar ning3n procedimiento encaminado a modificar la propiedad de los veh3culos de este acuerdo, sin que se haya cumplido con el procedimiento establecido por la Comisi3n Binacional de Alto Nivel para la Recuperaci3n de Veh3culos de Transporte Terrestre, A3reo y Acu3tico."</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	Revisión previa de la constitucionalidad de la Ley 207 de 1995 (9 de agosto), "Por medio de la cual se aprueba el CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA PARA LA DETECCION, RECUPERACION Y DEVOLUCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO Y ACUATICO, suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993."
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-187/96
Fecha de la sentencia	mayo ocho (8) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional de la Ley 210 del 15 de septiembre de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos 'Protocolo de Washington', suscrito en Washington el 14 de diciembre de 1992".
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Decision	Declarar exequible el "Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, 'Protocolo de Washington', suscrito en Washington el 14 de diciembre de 1992, así como la ley 210 del 15 de septiembre de 1995 aprobatoria del mismo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional de la Ley 210 del 15 de septiembre de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos 'Protocolo de Washington', suscrito en Washington el 14 de diciembre de 1992".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-172/96
Fecha de la sentencia	veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisiòn oficiosa de la ley 213 de octubre 26 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integraciòn Econòmica" -BCIE- suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960 y el "Protocolo de Reformas al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integraciòn Econòmica", suscrito en Managua el 2 de septiembre de 1989.
Conociò en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLE el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integraciòn Econòmica, BCIE, suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960 y el Protocolo de reformas al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integraciòn Econòmica, suscrito en Managua el 2 de diciembre de 1989, así como su ley aprobatoria, esto es, la Ley 213 del 26 de octubre de 1995.
Conociò en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisiòn oficiosa de la ley 213 de octubre 26 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integraciòn Econòmica" -BCIE- suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960 y el "Protocolo de Reformas al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integraciòn Econòmica", suscrito en Managua el 2 de septiembre de 1989.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-260/96
Fecha de la sentencia	trece (13) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).

Demandante	
Demandado	Revisión constitucional del "Convenio Internacional del Azúcar, 1992" aprobado en Ginebra el 20 de marzo de 1992 y de la Ley 214 de 1995, aprobatoria del mismo.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Declarar exequible el "Convenio Internacional del Azúcar, 1992", suscrito en Ginebra el 20 de marzo del mismo año, así como la Ley 214 de 1995, aprobatoria del mismo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional del "Convenio Internacional del Azúcar, 1992" aprobado en Ginebra el 20 de marzo de 1992 y de la Ley 214 de 1995, aprobatoria del mismo.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-283/96
Fecha de la sentencia	
Demandante	
Demandado	Revisión previa de la constitucionalidad de la Ley 215 de noviembre 7 de 1995, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos - Protocolo de Managua-, suscrito en Managua el 10 de junio de 1993.
Conoció en primera instancia	Dr. JULIO CESAR ORTIZ GUTIERREZ
Decision	Declarar exequible la Ley 215 de noviembre 7 de 1995, "por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos -Protocolo de Managua-, suscrito en Managua el 10 de junio de 1993" y el tratado mismo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión previa de la constitucionalidad de la Ley 215 de noviembre 7 de 1995, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos - Protocolo de Managua-, suscrito en Managua el 10 de junio de 1993.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-331/96
Fecha de la sentencia	., Agosto (1º) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 216 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION DE LOS ESTADOS DEL CARIBE', suscrito en Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994"
Conoci3 en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	DECLARAR EXEQUIBLES el CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION DE LOS ESTADOS DEL CARIBE, suscrito en Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994, as3 como la Ley 216 de 1995, aprobatoria del mismo.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional de la Ley 216 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION DE LOS ESTADOS DEL CARIBE', suscrito en Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994"
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-625/96
Fecha de la sentencia	Noviembre veintiuno (21) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	José Leonidas Vargas
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 65 y 67 de la Ley 181 de 1995 "por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte."
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	En los términos de esta sentencia, declárase EXEQUIBLE el artículo 65 de la Ley 181 de 1995, salvo los siguientes apartes del parágrafo que dicen: "calificación del Ministerio de Educación Nacional", y "sobre el cumplimiento de los requisitos que por reglamento establezca el Gobierno Nacional para este efecto", los cuales se declaran INEXEQUIBLES. Segundo.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 67 de la Ley 181 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Según manifiesta el actor, las normas acusadas vulneran la Constitución Política en sus artículos 1o., 4o., 248, 287, 298, 300 numeral 7o. y 305 numerales 1o. y 7o. por cuanto atentan contra el principio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales al disponer la incorporación de las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes -que son dependencias del orden nacional- como entes departamentales, dejando sin efecto la función de las Asambleas consagrada en el numeral 7o. del artículo 300 de la Carta, para establecer la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración de acuerdo a las diferentes categorías de empleo, así como para crear los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.  Las disposiciones demandadas en su criterio, limitan la facultad que otorga la Constitución a las Asambleas Departamentales en el numeral 7o. del citado artículo para crear los organismos o entes deportivos como dependencias del departamento, es decir como Secretaría, Subsecretaría, División, Unidad o cualquier otra similar,

	<p>ya que al incorporarse las actuales Juntas Administradoras Seccionales de Deporte, como entes del respectivo departamento, como se dispone en los artículos cuestionados, deberá hacerse como establecimiento público del orden departamental, con autonomía administrativa y financiera, patrimonio público independiente y personería jurídica.</p> <p>Señala que con esto se vulneran también las atribuciones consagradas para las Asambleas en los numerales 1o. y 10 del artículo 300 de la Carta, relativas a la facultad de reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo de un departamento, así como de regular en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los términos legales.</p> <p>Afirma así mismo, que de acuerdo con estas normas, los departamentos, independientemente de que ostentan con una infraestructura para el fomento del deporte y la recreación, tienen que recoger las actuales Juntas Seccionales del Deporte, así sus estructuras, plantas de personal y escalas de remuneración no correspondan a las vigentes para las demás dependencias del nivel departamental, las cuales han sido establecidas de conformidad con las necesidades del ente territorial y sus posibilidades económicas.</p> <p>Finalmente, estima que por estas mismas razones las normas acusadas infringen el numeral 7o. del artículo 305 de la Carta que consagra una facultad nominadora para los Gobernadores, al imponer la incorporación a la nómina del departamento de los funcionarios vinculados a las referidas Juntas Seccionales de Deportes, cuya designación no ha sido hecha por el respectivo Gobernador.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI. DR. HERNANDO HERRERA VERGARA
Resumen del mismo	<p>AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Regulación mínima legislativa en deporte (Salvamento parcial de voto)</p> <p>De una parte las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses “dentro de los límites de la Constitución y la ley” y corresponde a las Asambleas Departamentales “regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, y de la otra, por cuanto la norma acusada en este acápite se limita a fijar unos parámetros mínimos que permiten desarrollar el Sistema Nacional del Deporte permitiendo así una verdadera integración en el adecuado funcionamiento para el fomento del mismo. La razón de ser del precepto deriva en una necesaria coordinación que debe existir entre el momento en que desaparezcan las antiguas Juntas Administradoras Seccionales de Deportes y el nacimiento jurídico de los nuevos entes departamentales, que en adelante asuman sus funciones</p>

Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-137/96
Fecha de la sentencia	Abril nueve (9) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	
Demandado	Revisi3n de la Ley 208 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto del Centro Internacional de Ingenieria Genetica y Biotecnologia' hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983"
Conoci3 en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>PRIMERO.- Con la salvedades que se seÑalan en los artculos siguientes, declarar EXEQUIBLE el "Estatuto del Centro Internacional de Ingenieria Genetica y Biotecnologia" hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983, as3 como la Ley 208 de 1995, aprobatoria de los mismos.</p> <p>SEGUNDO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del literal a) del artculo 3 del tratado por el cual se aprueba el "Estatuto del Centro Internacional de Ingenieria Genetica y Biotecnologia", bajo el entendido de que la instalaci3n de las plantas piloto en territorio colombiano, se sujeta a las normas vigentes sobre manejo de los recursos geneticos, bioseguridad, salvaguarda de la vida, la salud, la producci3n alimentaria, y la integridad cultural de las comunidades indigenas, negras y campesinas, conforme qued3 establecido en el fundamento 13 de esta providencia.</p> <p>TERCERO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del literal a) del numeral 2 del artculo 6, as3 como del literal e) del numeral 4 del artculo 7, bajo el entendido de que las pol3ticas y principios que rigen las actividades del Centro, as3 como las normas de seguridad para el trabajo de investigaci3n, que deban aplicarse en territorio colombiano, no contravengan las disposiciones vigentes - internas, supranacionales o internacionales - en materia de bioseguridad, manejo de recursos geneticos, protecci3n de la diversidad biol3gica, 3tnica y cultural, de la vida, la salud y la producci3n de alimentos.</p> <p>CUARTO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del literal e) del numeral 2 del artculo 6, bajo el entendido de que la disciplina sobre propiedad intelectual e industrial de que trata la citada disposici3n se someta a la reglamentaci3n nacional, supranacional e internacional en materia de propiedad industrial e intelectual y, especialmente, al respeto por los derechos de las minor3as 3tnicas y culturales sobre los productos derivados de sus conocimientos propios.</p> <p>QUINTO.- Los numerales 2 y 3 del artculo 14 son EXEQUIBLES bajo el entendido de que se observen las reglas vigentes en el</p>

	<p>ordenamiento interno, supranacional e internacional en materia de propiedad industrial e intelectual y en todo caso, siempre que respeten los derechos constitucionales de las comunidades indígenas, negras y campesinas, conforme quedo establecido en el fundamento 27 de la presente providencia.</p> <p>SEXTO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del numeral 4 del artículo 14 siempre que se entienda que el acceso a los derechos de propiedad intelectual emanados de las investigaciones del Centro debe ser razonablemente favorable a Colombia, cuando los mencionados derechos recaen sobre desarrollos o productos obtenidos a partir de material biológico o genético colombiano</p> <p>SEPTIMO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del numeral 2 del artículo 13 siempre que en el evento en que surja una disputa jurídica entre un habitante del territorio nacional y el Centro, cuando este actúe como un particular o sometido a las normas de derecho interno o supranacional, podrá apelarse a los mecanismos judiciales consagrados por el ordenamiento nacional e internacional a fin de que el conflicto se resuelva según las normas vigentes en el territorio nacional.</p> <p>OCTAVO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del numeral 3 del artículo 13 en el entendido de que la mencionada norma no inhibe a las autoridades colombianas para establecer mecanismos eficaces de control y vigilancia que permitan al Estado cumplir con su deber ineludible de fiscalizar el respeto de las normas nacionales, supranacionales e internacionales sobre bioseguridad y protección de los recursos naturales, la diversidad cultural, la vida, la salud, y la producción de alimentos en territorio colombiano, en los términos del numeral 36 de la presente providencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de la Ley 208 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología' hecho en Madrid el 13 de septiembre de 198
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-685/96
Fecha de la sentencia	cinco (5) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Angel Castañeda Manrique y Juan Camilo Restrepo.
Demandado	Normas acusadas: Artículo 121 (parcial) del decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), artículo 18 (parcial) de la Ley 225 de 1995 y artículo 59 de la Ley 224 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Decision	Primero: Declarar INEXEQUIBLES los artículos 59 de la Ley 224 de 1995, 18 de la Ley 225 de 1995 y 121 del decreto 111 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Normas acusadas: Artículo 121 (parcial) del decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), artículo 18 (parcial) de la Ley 225 de 1995 y artículo 59 de la Ley 224 de 1995.</p> <p>Ley orgánica del presupuesto, disposiciones transitorias y vigencias fiscales específicas</p> <p>Legalidad del gasto, traslados presupuestales, decreto de liquidación y fondos de cofinanciación.</p> <p>Cosa juzgada constitucional y objeción presidencial.</p> <p>Los actores consideran que las normas demandadas violan los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, en la medida en que facultan al Gobierno para que a través del decreto de liquidación del presupuesto modifique la ley anual del mismo, y ordene gasto público por medio de traslados presupuestales entre los fondos de cofinanciación, con lo cual se desconoce la atribución constitucional del Congreso en este campo.</p> <p>Los demandantes comienzan por señalar las características y la importancia del presupuesto, y el reparto de competencias entre el Gobierno y el Congreso en este campo, sobre todo en materia de gastos públicos. Así, según su criterio, al Ejecutivo corresponde presentar el proyecto de presupuesto, el cual debe contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar en la vigencia fiscal respectiva. Igualmente, durante el trámite del proyecto, "corresponde a cada ministro autorizar el aumento de las partidas incluidas en el presupuesto de gastos asignadas a su ramo". Por ende, señalan los actores, sólo "excepcionalmente, la Carta Política consagra la posibilidad de que el Gobierno decrete gastos", esto es, de un lado, cuando el Congreso no aprueba el</p>

	<p>proyecto de ley anual de presupuesto, caso en el cual rige el presentado por el gobierno nacional y del otro, "cuando, de acuerdo con las causas excepcionales, se decreta el estado de Emergencia Económica o el de Conmoción Interior".</p> <p>Por ello, señalan los demandantes, es el Congreso quien tiene como papel fundamental la aprobación de los gastos de la administración, lo cual es expresión de la clásica doctrina constitucional según la cual "sólo los representantes del pueblo pueden disponer de la propiedad del pueblo". El Congreso ejerce así una función doble, pues controla el gasto público y participa en la forma como el mismo se gasta, por lo cual su papel "en el trámite del presupuesto, es uno de los fundamentos de control y participación de los entes del Estado". Por ende, concluyen en este punto los actores, "es claro que el Congreso a través de la ley anual de presupuesto aprueba los gastos y no compete al Gobierno ir más allá de estos, salvo cuando expresamente lo señale la Constitución Política", pues "en tiempos de paz, el Congreso es el único que puede decretar gasto, el cual se incluye en la ley anual de presupuesto".</p> <p>Luego los demandantes analizan las características del decreto de liquidación del presupuesto y resaltan que "no es un acto creativo de ninguna disposición legal" sino una simple "operación técnica y material" para presentar en mejor forma el presupuesto y hacerlo más "comprensible para el público y útil para los funcionarios ordenadores". Este decreto de liquidación se justifica, según su parecer, porque de las cámaras el presupuesto sale disperso en cuatro documentos, a saber, el proyecto original presentado por el gobierno, el pliego de contracréditos aprobados por el Congreso, el pliego de créditos aprobados por el Congreso, y finalmente, las disposiciones generales y modificaciones de redacción. Esto lo explican los actores así:</p> <p>El presupuesto tiene la particularidad, respecto a las demás leyes, de que los legisladores no superponen sus modificaciones sobre el proyecto original del gobierno, el cual, aunque proyecto, tiene cierto valor prenatal como presupuesto. Por el sistema especialísimo de los contracréditos, en pliego separado, se eliminan o disminuyen las partidas presentadas por el gobierno para utilizarlas luego total o parcialmente, mediante la apertura de créditos en pliego separado también. Por esta razón el presupuesto no sale del parlamento unificado, sino compuesto del proyecto original del gobierno y de los créditos y contracréditos aprobados por el parlamento. El ejecutivo, por decreto especial, llamado de liquidación del presupuesto, reajusta el proyecto original, refundiéndose con las modificaciones parlamentarias, mediante una labor material que se asimila a la que desarrollan los secretarios de las cámaras cuando pasan a limpio los proyectos de ley aprobados por el parlamento con las modificaciones que éste les hubiere introducido. la liquidación del presupuesto es, pues, una</p>
--	--



	<p>labor técnica material, y no un acto legal, creador de la ley de presupuesto.</p> <p>Con base en tales criterios, los actores consideran que la norma acusada del estatuto orgánico viola la Constitución, de un lado, por cuanto una disposición de "naturaleza orgánica, no puede pronunciarse sobre una ley anual de presupuesto de carácter particular", ya que su función es la de "dictar los parámetros dentro de los cuales deben elaborarse las leyes anuales de presupuesto". Además, consideran que esa disposición "está dando la facultad al Gobierno para que a través del decreto de liquidación, cree un gasto, es decir que lo decrete", cuando esa función corresponde al Congreso, salvo "las contadas excepciones" establecidas por la Carta. Según su criterio, la posibilidad de que el Ejecutivo cree gasto es clara pues la norma "faculta para gastar en los proyectos de cofinanciación, autorizándoles su viabilidad, sin que se conozca la destinación específica del gasto y mucho menos el monto de la misma".</p> <p>Igualmente los actores consideran que el artículo 59 de la ley 224 de 1995, ley anual de presupuesto, "tiene vicios de inconstitucionalidad aún más flagrantes", por dos razones que exponen así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al permitir que el Gobierno mediante el decreto de liquidación modifique la destinación de los fondos de cofinanciación, descritos en el artículo mismo y sobre los cuales el Congreso se pronuncia en la ley anual de presupuesto, definiendo el monto y el destino de los mismos. Con esta facultad, que no corresponde a las excepciones bajo las cuales el gobierno pueda decretar gasto, se está modificando mediante decreto una disposición cuyo origen exclusivo es la ley, y violentando competencias y facultades de la rama legislativa.</li> <li>2. Al facultar al gobierno para modificar "otros gastos de inversión", con los que ni siquiera se limita el espectro en cuanto a la naturaleza del gasto como es el caso de los fondos de cofinanciación. Los gastos de inversión pueden ser cualquiera que no este dentro de los propios de funcionamiento del Estado. Es claro que al igual que el numeral primero, se está facultando al Gobierno ya sea para decretar gasto, mediante la creación, la modificación del que se decreto por ley o mediante la supresión del mismo.</li> </ol> <p>Según los actores, las normas son no sólo inconstitucionales por violar las competencias del congreso sino que, además, en la práctica han permitido revivir los llamados "auxilios parlamentarios" sobre los cuales "la Constitución de 1991 estableció una clara prohibición". Así, estas disposiciones permiten que exista "un sistema irregular en el cual el gobierno le confiere a los parlamentarios unos "cupos" para que estos postulen proyectos ante los diversos fondos del sistema nacional de cofinanciación. Dichos proyectos, que desde el punto de vista técnico son</p>
--	--

	<p>apropiaciones presupuestales de gasto que aparecen relacionadas en el decreto de liquidación y no en la ley anual de presupuesto como sería lo que se ajusta a la carta política, según se explica en esta demanda".</p> <p>Finalmente los actores reiteran la importancia del tema de la presente demanda pues consideran que "el presupuesto es uno de los principales elementos a través de los cuales el Estado Colombiano se puede consolidar como tal, y como Estado Social y de Derecho". Por ello consideran que si bien es posible que "para cuando la sentencia que se produzca con ocasión de la presente acción pública, la ley 224 de 1995 ya no tenga vigencia", el pronunciamiento de la Corte debe ser de fondo a fin de que la "misma sentencia sirva de sendero para el respeto de las normas constitucionales".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-384/96
Fecha de la sentencia	veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	Maximiliano Echeverri Marulanda.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 (parcial) de la Ley 226 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 14 de la Ley 226 de 1995, en el entendido de que las medidas que puede adoptar el Gobierno en virtud de ellas son de carácter puramente administrativo.</p> <p>Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES las palabras "sin perjuicio de las limitaciones que se puedan imponer a los destinatarios de condiciones especiales", pertenecientes al inciso 3º de la misma norma, siempre que se entienda que el único facultado por la Constitución para imponer las limitaciones en cuestión es el legislador.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que con la norma acusada se vulneran los artículos 60, inciso segundo, y 83 de la Constitución Política.</p> <p>Manifiesta el actor que la transcrita disposición faculta al Gobierno para actuar sobre la base de la presunción consistente en que los titulares del derecho que nace del artículo 60 constitucional habrán de abusar de él, lo que supone de antemano que el particular actuará de mala fe frente a la administración, violando así el artículo 83 de la Carta.</p> <p>La vulneración del artículo 60 se produce -dice- porque la norma permite que mediante reglamento se fijen condiciones y limitaciones al ejercicio de un derecho, cuando tales condiciones y limitaciones deben estar consideradas en la ley, y no puede ésta habilitar al Gobierno para que mediante decreto modifique unas condiciones especiales de acceso a la propiedad estatal enajenada, cuyo ámbito de regulación corresponde en todos sus aspectos a la ley.</p> <p>En su criterio, "no puede haber discrecionalidad para el Ejecutivo en materia de condiciones especiales de acceso a la propiedad estatal enajenada, porque tales condiciones corresponden al ámbito de la ley; no se cumple el mandato constitucional que defiende el tema a la ley cuando faculta al Ejecutivo para restringir lo</p>

	que esa misma ley acaba de señalar, ni menos para restringirlo sobre la hipótesis de que el titular del derecho habrá de actuar de mala fe".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-343/96
Fecha de la sentencia	cinco (5) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Maximiliano Echeverry.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15 y 24 de la Ley 226 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 226 de 1995, con excepción de las expresiones "sólo", de la primera parte de su primer inciso; "sólo" y "cuando el órgano público vendedor así lo solicite", de la primera parte de su segundo inciso, y "por ser de carácter procedimental", de su inciso tercero, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Es entendido que la nulidad absoluta de los contratos previstos en la norma que se declara exequible también podrá ser alegada por quien tenga un interés legítimo, que hubiere participado en el proceso de enajenación, o hubiere sufrido lesión o perjuicio dentro del mismo por violación de la normatividad constitucional aplicable. En los aludidos términos se condiciona la exequibilidad declarada.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 24 de la Ley 226 de 1995, salvo las expresiones "vendida, y podrá propiciar la continuidad de la participación privada en las mismas", las cuales se declaran INEXEQUIBLES.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que con las normas acusadas se vulneran los artículos 29, 40, numeral 6, 60, 122, 123 y 237, numeral 1, de la Constitución Política.</p> <p>En primer término dice que la Constitución de 1991 estableció que toda persona puede interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, por lo que tiene origen constitucional la posibilidad de que, con tal objeto, todo ciudadano interponga acciones públicas contra los actos administrativos, sin que pueda reservarse esa posibilidad únicamente a las partes contratantes o al Ministerio Público.</p> <p>Por lo tanto, dice, el primer inciso del artículo 15 de la Ley 226 de 1995, es inconstitucional.</p> <p>Ataca luego el inciso 2º de la misma norma, señalando que los efectos propios de la declaración de nulidad no pueden depender de la voluntad de una de las partes contratantes. Sería risible -</p>

	<p>afirma el demandante- que el tribunal "supremo" de lo contencioso administrativo declarara una nulidad pero a renglón seguido el efecto claro y obvio de la nulidad no se produjera porque una de las partes en el contrato nulo no lo quisiera así, a su libre juicio.</p> <p>Continúa aseverando que el mismo artículo 15 vulnera el debido proceso pues, en criterio del actor, intenta restringir la posibilidad que la Constitución Política abre a todos los ciudadanos, de controvertir judicialmente la validez de las actuaciones de las entidades públicas y la constitucionalidad de la ley.</p> <p>Afirma que la tercera parte de la norma demandada en comento, en su último inciso, pretende que tales asuntos "son de carácter procedimental". "Acto seguido -añade- el redactor de la norma explica para qué quiere tal ilógica y desproporcionada afirmación: pretende su aplicación inmediata. ¿Se tratará de una defensa de las privatizaciones ya hechas al amparo de una ley declarada inexecutable?".</p> <p>Refiriéndose al artículo 24 acusado, manifiesta que una vez declarada la nulidad de los actos de enajenación de la propiedad estatal vendida, no puede el Gobierno estar habilitado para "adoptar las medidas que estime convenientes, sino solamente las medidas que estime convenientes para lo que sea, siempre que la Constitución o la ley lo habiliten expresamente para adoptar unas medidas en el marco de sus capacidades y competencias como funcionario o autoridad".</p> <p>Así, en su sentir, no puede la ley habilitar al Gobierno para adoptar medidas que no queden detalladas, como dice la Constitución, en la ley habilitante. Menos puede -continúa- facultarlo para modificar, corregir, incumplir, o variar los efectos de las sentencias judiciales que afectan sus actos administrativos.</p> <p>Concluye su argumentación exponiendo que "el cargo de inconstitucionalidad queda ligado al artículo 60 de la Constitución Política. Declarada la nulidad de la venta de la propiedad estatal, las personas mencionadas en dicha norma no por ello pierden la preferencia y los derechos que allí se garantizan. Lo que hay que propiciar es el cumplimiento de la sentencia, del mandato constitucional y de la ley, y no la garantía de unos derechos nacidos nulos y que las normas demandadas en su conjunto pretenden proteger a toda costa.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA

Resumen aclarações	de las	NO APLICA
-----------------------	--------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia No. C-038/96
Fecha de la sentencia	Febrero cinco (5) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Santiago Salah Argüello, Claudia Mercedes Penagos Correa, Marcela Adriana Rodríguez Gómez, Eduardo Pizano de Narváez, Alirio Uribe Muñoz, German Suárez Castillo, Manuel Manotas Manotas, Luis Antonio Vargas Alvarez.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial), 6, 17 (parcial), 33, 36, 78 (parcial) y 82 de la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa en Colombia"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>PRIMERO.- Declarar INEXEQUIBLE la parte demandada del primer inciso del artículo 3, que dispone: "dicha información no podrá utilizarse como prueba en los procesos judiciales o administrativos de carácter laboral y de ella sólo se comunicarán la identificación del funcionario y las causales de su desvinculación del servicio o de la terminación anormal de sus contratos".</p> <p>SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE el inciso 2 del artículo 6º de la Ley 190 de 1995, pero únicamente bajo el entendido de que la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes no se hayan generado por dolo o culpa imputables al nombrado o al funcionario público a los que se refiere dicho precepto.</p> <p>TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, sólo por razones de fondo, los incisos 1º y 2º del artículo 33 de la Ley 190 de 1995, pero únicamente bajo el entendido de que la reserva que en ellos se consagra se ha de levantar tan pronto se practiquen las pruebas decretadas en la oportunidad legal y, en todo caso, una vez expire el término señalado en la ley para la investigación.</p> <p>CUARTO.- Declarar EXEQUIBLES los párrafos primero y tercero del artículo 33 de la Ley 190 de 1995.</p> <p>QUINTO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 36 y 82 de la Ley 190 de 1995, así como la parte demandada del artículo 78 de la misma Ley.</p> <p>SEXTO.- Declarar INEXEQUIBLE el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley 190 de 1995, así como la expresión "sin perjuicio del derecho de rehabilitación que contempla el Código de Procedimiento Penal y en concordancia con el inciso final del artículo 28 de la Constitución Política", contenida en el artículo 17 de la Ley 190 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA



Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano LUIS ANTONIO VARGAS ALVAREZ (Exp. N° D-995) solicita la declaratoria de inexecuibilidad del aparte subrayado del artículo 3° de la Ley 190 de 1995, por considerarlo violatorio del Preámbulo y los artículos 1°, 2°, 15, 25 y 29 de la Carta. Según el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, en la hoja de vida del funcionario deben constar los motivos por los cuales se declaró la insubsistencia, a pesar de ser ésta un acto discrecional. Con base en lo anterior, algunos nominadores han aplicado el Decreto 1950 de 1973, declarando insubsistencias, tras cuya discrecionalidad se ocultan las verdaderas causas del despido que, por lo general, no se derivan del "buen servicio" sino de espúreos intereses personales (nepotismo, favores políticos, sexuales, etc.). En opinión del demandante, las razones que sustentan una declaratoria de insubsistencia deben constar en la hoja de vida del empleado, y tener carácter probatorio, si se quiere proteger el buen nombre y la honra de los funcionarios afectados, en la medida en que "existe el concepto general de que 'todo echado' lo ha sido por una causa contraria a derecho". Los derechos al debido proceso (C.P., artículo 29) y al trabajo (C.P., artículo 25) también resultan vulnerados por la disposición acusada, toda vez que restringe las facultades de las partes trabadas en un proceso laboral para probar sus pretensiones.</p> <p>La eficacia probatoria de los motivos por los cuales un servidor público fue declarado insubsistente no sólo favorece a éste, sino a la administración que lo desvinculó, como quiera que ésta puede demostrar que su decisión fue justa y no desbordó los parámetros de la discrecionalidad.</p> <p>En su demanda, el ciudadano LUIS ANTONIO VARGAS ALVAREZ (Exp. N° D-995) plantea que el artículo 6° de la Ley 190 de 1995 regula de manera equivalente la situación de aquellos servidores públicos que presentan inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio de su cargo, y de aquellos en quienes no concurren este tipo de prohibiciones. Con esto, no sólo se atenta contra el derecho a la igualdad - en tanto debió otorgárseles un tratamiento diferenciado -, sino también, se burlan las disposiciones sobre deberes y obligaciones de los servidores públicos y el interés general (C.P., artículo 1°). En opinión del actor, la norma demandada debió prever la suspensión automática de los actos administrativos de nombramiento, como quiera que su actual redacción permitiría la presencia en la Administración de personas incursas en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en especial cuando éstas provienen de sanciones disciplinarias o penales.</p> <p>La ciudadana MARCELA ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ (Exp. N° D-982) impugnó la frase "sin perjuicio del derecho de rehabilitación que contempla el Código de Procedimiento Penal", del inciso 2°, del</p>

	<p>artículo 17 de la Ley 190 de 1995, por encontrarla violatoria del artículo 122 de la Constitución Nacional. Según la demandante, el citado artículo de la Carta Política consagra una inhabilidad perpetua para desempeñar la función pública. El derecho de rehabilitación establecido en el artículo 17 de la Ley 190 de 1995 viola, por tanto, lo establecido en la norma constitucional.</p> <p>En su demanda, el ciudadano ALIRIO URIBE MUÑOZ (Exp. N° D-988) plantea que el artículo 17 de la Ley 190 de 1995 es íntegramente inconstitucional por cuanto vulnera los artículos 1°, 2°, 28 y 29 de la Carta. En efecto, para el libelista el Estatuto Fundamental es claro al establecer que en Colombia no existirán penas o medidas de seguridad imprescriptibles, lo cual se viola al consagrar, en la disposición acusada, una especie de "muerte civil" que no tiene por qué soportar ni "el peor de los corruptos". De igual modo, la norma demandada contraviene el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública.</p> <p>Por su parte, el ciudadano LUIS ANTONIO VARGAS ALVAREZ (Exp. N° D-995) considera que el artículo 17 de la Ley 190 de 1995 vulnera el artículo 122 de la Carta, al permitir que un condenado por delitos contra la Administración Pública pueda regresar a la misma una vez obtenga la rehabilitación de que trata el Código de Procedimiento Penal. Para el libelista, el artículo 122 constitucional es claro al establecer que quien sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.</p> <p>El ciudadano SANTIAGO SALAH ARGÜELLO (Exp. N° D-980) considera que la norma demandada viola los artículos 20, 25, 73 y 95-7 de la Constitución. Si la censura se entiende "en su acepción más elemental como la intervención del Estado para calificar, restringir, o reprimir la información", se concluye que el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 viola la prohibición contenida en el artículo 20 constitucional. Por su parte, la independencia y libertad profesional del periodista (C.P., artículo 73) resultan conculcadas cuando la norma acusada restringe el periodismo investigativo y su función social en la lucha contra la corrupción, en la medida en que no permite que la ciudadanía fiscalice y vigile la utilización de los dineros públicos, objetivo que sólo puede lograrse si ésta se mantiene informada a través de los periodistas. De igual forma, el artículo 33 demandado viola el derecho al trabajo de los comunicadores, toda vez que la esencia del periodismo es informar y comunicar a la opinión pública en forma libre, imparcial e independiente. A juicio del demandante, el artículo 33 vulnera, también, el numeral 7°, del artículo 95 de la Carta, al restringir el ejercicio de la función social de la profesión periodística, que "coadyuva al orden social y la administración de justicia". El libelista concluye su demanda afirmando que "no se</p>
--	---

	<p>puede admitir que silenciar la prensa sea en instrumento para proteger posibles abusos a los derechos de las personas, cuando de por medio está el interés general que fundamenta el derecho del pueblo a tener una información oportuna y veraz".</p> <p>En opinión de la ciudadana CLAUDIA MERCEDES PENAGOS CORREA (Exp. N° D-981), el control de la opinión pública sobre las investigaciones disciplinarias y fiscales es necesario para "afianzar la esperanza de que se haga verdadera justicia". Si bien la publicación de este tipo de informaciones acerca de estas investigaciones puede llegar a ser violatoria de ciertos derechos, debe prevalecer el interés general (C.P., artículo 1°) que, en este caso, consiste en que la opinión pública esté "pendiente de que las investigaciones sean efectivas". El artículo demandado crea, también, una situación de desigualdad (C.P., artículo 13) entre los honestos y los corruptos, toda vez que éstos últimos, en vez de verse constreñidos a no continuar con sus conductas, "encontrarán de ahora en adelante alivio, por la ausencia de información de sus conductas". Por otra parte, el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 conculca el artículo 20 de la Carta, en cuanto coarta el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial. Opina la libelista que "la administración pública y sus lamentables desaciertos, no será ya más la noticia, lo cual, generará un efecto totalmente contrario a lo que pretende el estatuto contra la corrupción. No hay nada más ominoso para un funcionario público que no respeta las leyes, que el juicio de la opinión pública". De igual forma, la demandante considera que la disposición demandada estableció requisitos adicionales (C.P., artículo 84) al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta. Por último, considera que el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 atenta contra el deber ciudadano de colaborar al buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., artículo 95-7).</p> <p>En su demanda, el ciudadano EDUARDO PIZANO DE NARVAEZ (Exp. N° D-986) solicita se declare la inexequibilidad del Parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley 190 de 1995. En primera instancia, la norma acusada viola la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Carta Política, al limitar la publicación de la información atinente a investigaciones disciplinarias o de responsabilidad fiscal. Con esto, el Legislador excedió su potestad de limitar el acceso de las personas a los documentos públicos (C.P., artículo 74), que no puede llegar al extremo de prohibir la publicación de información que bien pudo haber sido conseguida a través de fuentes distintas a la consulta en la respectiva oficina pública. La ley no puede presumir que la información obtenida por los periodistas lo fue del expediente o la investigación pues, de hacerlo, estaría censurando al respectivo medio de comunicación. Además, el Parágrafo demandado es contradictorio con las normas</p>
--	---

	<p>subsiguientes de la Ley 190 de 1995, que autorizan a los periodistas y medios de comunicación a adelantar investigaciones acerca de los actos de las autoridades públicas, garantizándoles su protección y apoyo. Por otra parte, también resulta violado el artículo 152 de la Constitución, en donde se establece como reserva de ley estatutaria la regulación de los derechos fundamentales.</p> <p>El ciudadano ALIRIO URIBE MUÑOZ (Exp. N° D-988) considera que "la prensa hablada y escrita constituye en una democracia el pilar sobre el que se asienta el mejor control sobre el ejercicio del poder. Una opinión pública informada de manera franca y oportuna puede aplaudir y apoyar los actos de Gobierno cuando este se conduce dentro de los parámetros del bienestar general y el interés colectivo". Con la reserva consagrada en el artículo 33 de la Ley 190 de 1995, se atenta contra la participación y el pluralismo establecidos en el artículo 1° de la Carta Fundamental. De igual forma, la norma acusada desconoce los fines del Estado, uno de los cuales es el de facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan (C.P., artículo 2°). En opinión del demandante, esta participación sólo puede ser efectiva si los administrados cuentan con una información adecuada y completa (C.P., artículo 20). Con la censura establecida en la norma demandada, la actividad periodística pierde su razón de ser y, por lo tanto, resulta vulnerado el artículo 73 de la Constitución. En concepto del libelista, los Estados democráticos se distinguen de los autoritarios en que los primeros permiten la visibilidad del poder. Por contra, "la característica de un Estado despótico y autoritario es la reserva, el secreto, las decisiones tomadas en conciliábulos a espaldas de los gobernados". De otra parte, "uno de los factores o estimulantes de la corrupción administrativa es precisamente la invisibilidad del poder por ello es un contrasentido que en un estatuto contra la corrupción se plantee una censura general a la prensa en defensa del honor y la intimidad del presunto infractor o corrupto, no se puede en una ley general dar prelación a estos últimos derechos fundamentales sobre el derecho fundamental de información y expresión". Para el demandante, la sociedad se autorregula y "cuasiadministra justicia", al rechazar determinadas conductas que, si bien no constituyen delitos, sí son reprochables, frente a las cuales la comunidad impone sanciones que permiten la convivencia social. Con esto, "se crea una cultura que permite el respeto por los demás y el cultivo de muchos valores sin los cuales vivir en sociedad sería un imposible". Los servidores públicos no están exentos de este control social que se manifiesta a través de los medios de comunicación. Por último, el libelista considera que, si en el proceso penal la etapa de juzgamiento es pública, con mayor razón debe serlo la de las investigaciones disciplinarias y fiscales. En este orden de ideas, la reserva es constit</p>
--	---

	<p>ucionalmente viable hasta antes de proferirse el pliego de cargos que, "extrapolando podríamos decir, que equivale a la resolución de acusación o llamamiento a juicio", luego de lo cual no es posible el secreto.</p> <p>Para el ciudadano GERMAN SUAREZ CASTILLO (Exp. N° D-992) el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 contraviene el Estatuto Fundamental en sus artículos 20, 74 y 158. Sostiene que el derecho a la información (C.P., artículo 20) tiene una doble función (transmisión y recepción de información) basada en el principio de publicidad y de participación, en tanto permite a ciudadanos y periodistas el ejercicio del control sobre las actuaciones de las autoridades públicas. Para que este derecho a la información sea efectivo, es necesario que la ciudadanía pueda acceder a los documentos que reposan en los despachos públicos. En opinión del demandante, la prohibición contenida en el artículo acusado es una "clara y abierta forma de censura que se impone a la prensa". Por otra parte, en la medida en que se trata de un recorte a la libertad de prensa y al derecho a la información, éste debía haberse regulado a través de ley especial y no a través de una ley ordinaria. El artículo 74 de la Carta resulta vulnerado en cuanto en éste se consagra, como regla general, el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos y, como excepción, el carácter reservado de éstos. Igualmente, "aquello que la Constitución autorizó tener con carácter reservado es todo asunto que escape al interés general y el interés público, que no pueda ser conocido por el ciudadano en el ejercicio de sus derechos". La actuación de quien resultare investigado disciplinaria o fiscalmente no es ajena al interés público y, por lo tanto, no puede estar sometida a reserva. Esto se hace evidente con las disposiciones de la Ley 57 de 1985, que regula el acceso a los documentos públicos, en donde se considera a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República como oficinas públicas, para efectos del ejercicio del derecho ciudadano allí regulado. Por último, el artículo 158 de la Carta Política resulta vulnerado por la disposición acusada, como quiera que ésta no se refiere a la materia general de que trata la Ley 190 de 1995, cuyo objetivo principal es la adopción de medidas tendientes a la erradicación de la corrupción administrativa, y a la preservación de la moralidad en la Administración Pública.</p> <p>El ciudadano MANUEL MANOTAS MANOTAS (Exp. N° D-994) considera que el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 "viola flagrantemente el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución". Considera que la protección al derecho a la honra no puede "llevarse a límites extremos que permitan ocultar la comisión de delitos y actos de indisciplina", "lo contrario sería permitir que los funcionarios públicos estuvieran tutelados bajo un plastrón o cota de malla para cometer toda clase</p>
--	--

	<p>de infamias". En conclusión, el derecho a la información es un freno a las prácticas de funcionarios corruptos que "sentirían el temor de verse expuestos a la vergüenza pública".</p> <p>En su demanda, la ciudadana MARCELA ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ (Exp. N° D-982) sostiene que el artículo 36 de la Ley 190 de 1995 es contrario al artículo 268, numeral 5°, de la Constitución en cuanto faculta a la Rama Ejecutiva para buscar el resarcimiento de los perjuicios por la comisión de delitos contra la Administración Pública, cuando esta función pertenece exclusivamente a la Contraloría General de la República, tal como lo consagraba el artículo 87 de la Ley 42 de 1993 (sic).</p> <p>La ciudadana CLAUDIA MERCEDES PENAGOS CORREA (Exp. N° D-981) considera que la parte subrayada del artículo 78 de la Ley 190 de 1995 contraviene la Carta Constitucional por las mismas razones que sostuvo al acusar el artículo 33 de la Ley 190. Precisa, sin embargo, que con la salvedad atinente a que la medida de aseguramiento debe haberse hecho efectiva, se promueve la impunidad al incentivar a quienes se vean afectados por este tipo de medidas, "a esconderse, para esconder su crimen".</p> <p>Las razones que sostuvo la demandante para pedir la inexequibilidad del artículo 33, extensivas, según su criterio, al artículo 78, son, en suma, las siguientes:</p> <p>Si bien la publicación de este tipo de informaciones puede llegar a ser violatoria de ciertos derechos, debe prevalecer el interés general (C.P., artículo 1°) que, en este caso, consiste en que la opinión pública esté "pendiente de que las investigaciones sean efectivas". El artículo demandado crea, también, una situación de desigualdad (C.P., artículo 13) entre los honestos y los corruptos, toda vez que éstos últimos, en vez de verse constreñidos a no continuar con sus conductas, "encontrarán de ahora en adelante alivio, por la ausencia de información de sus conductas". Por otra parte, la norma demandada conculca el artículo 20 de la Carta, en cuanto coarta el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial. De igual forma, la demandante considera que la disposición demandada estableció requisitos adicionales (C.P., artículo 84) al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta. Por último, considera que atenta contra el deber ciudadano de colaborar al buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., artículo 95-7).</p> <p>En su demanda, la ciudadana CLAUDIA MERCEDES PENAGOS CORREA (Exp. N° D-981) considera que el artículo 82 de la Ley 190 de 1995 es violatorio de los artículos 13, 29, 31, 228, 249, 250 y 251 de la Carta Política, en la medida en que crea una tercera instancia, establece una desigualdad frente a los demás tipos de procesos y afecta la independencia de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, la norma acusada torna cuestionables las decisiones de la</p>
--	---

	Fiscalía por parte de los jueces de conocimiento, quienes "hablando vulgarmente, pueden 'meter la mano' en la etapa instructiva, lo cual generará más de un problema".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI Dres.JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, HERNANDO HERRERA VERGARA, VLADIMIRO NARANJO MESA LIBERTAD DE INFORMACION-Restricciones/ESTATUTO ANTICORRUPCION/PROCESO DISCIPLINARIO-Publicidad (Salvamento de voto)</p> <p>El tema desarrollado en el artículo 33 no solamente es ajeno al citado encabezamiento, que según la Constitución vincula la totalidad del articulado de la Ley, sino que se aparta de la materia propia del conjunto normativo al que se integra, ya que ninguna relación guardan las restricciones a la libertad de información con las medidas que adopta el Estado para evitar las prácticas corruptas e ilícitas de sus propios funcionarios, y -todavía más, en lo que constituye una inexplicable paradoja- con la aludida disposición se contradice frontalmente el espíritu y el sentido de la Ley, denominada "Estatuto Anticorrupción", puesto que la reserva absoluta allí consagrada despoja a la ciudadanía de un valioso instrumento de vigilancia sobre quienes pueden estar implicados precisamente en las conductas que el ordenamiento en cuestión condenó y buscó perseguir. El derecho a la información, que se concibe como "de doble vía", puesto que en él no sólo están interesados los medios y los periodistas, como emisores de la noticia, sino la comunidad, como receptora de la información, que según el artículo 20 de la Carta tiene derecho a recibirla veraz e imparcial.</p> <p>SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Improcedencia (Salvamento de voto)</p> <p>La Corte ha debido limitarse a verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, sin agregar un condicionamiento que -en esta ocasión, a diferencia de otras, en las que sí se ha justificado- implica un verdadero ejercicio legislativo, que no está a cargo de esta Corporación.</p> <p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Salvamento de voto a la Sentencia No. C-038/96 RESERVA DEL SUMARIO/LIBERTAD DE INFORMACION (Salvamento de voto)</p> <p>Ua cosa es la reserva del sumario, que cobija los elementos de fondo de la investigación penal para impedir que la misma tarea investigativa se vea entorpecida y hasta frustrada por el conocimiento público de todo aquello que la integra, y otra muy distinta la plasmada en esta norma. Aquí se trata de impedir que antes de la medida de aseguramiento se sepa lo elemental e</p>

	<p>indispensable: que hay una investigación penal, el delito por el cual se lleva a cabo, el nombre del procesado y la entidad a la que pertenece.</p> <p>Ref.: Expedientes Acumulados Nº D-980, D-981, D-982, D-986, D-988, D-992, D-994 y D-995.</p> <p>También me aparto de la decisión de la Corte en cuanto declaró exequibles las expresiones demandadas del artículo 78 de la Ley 190 de 1995, a cuyo tenor los datos sobre existencia de un proceso penal, el delito por el cual se investiga, la entidad a la cual pertenecen los procesados y el nombre de éstos únicamente se pueden informar "siempre y cuando se haya dictado medida de aseguramiento".</p> <p>A mi juicio, obran aquí las mismas razones expuestas en relación con el artículo 33, pues se trata de una forma de censura, y, adicionalmente, se supedita esa información mínima a un requisito que en la mayor parte de los casos hace imposible cumplir con el mandato legal.</p> <p>En efecto, de conformidad con la norma que ha quedado en firme, los medios de comunicación no pueden informar que se ha cometido un ilícito, ni tampoco quién pudo cometerlo y ni siquiera que se ha iniciado la correspondiente indagación. Tienen que esperar a que se dicte -y, según la providencia aprobada, que se haga efectiva- una medida de aseguramiento.</p> <p>De modo que, si se perpetra un delito que por su propia naturaleza atrae la atención pública o afecta de manera ostensible intereses de la colectividad -piénsese, por ejemplo, en los delitos financieros-, nada se puede decir a través de los medios mientras alguno de los implicados no sea efectivamente capturado.</p> <p>La sociedad, entonces, contra lo expresamente establecido en el artículo 20 de la Carta, no tiene derecho a una información veraz en torno a aspectos tan escuetos como los indicados, que desde luego le interesan y la afectan.</p> <p>Considero que una cosa es la reserva del sumario, que cobija los elementos de fondo de la investigación penal para impedir que la misma tarea investigativa se vea entorpecida y hasta frustrada por el conocimiento público de todo aquello que la integra, y otra muy distinta la plasmada en esta norma. Aquí se trata de impedir que antes de la medida de aseguramiento se sepa lo elemental e indispensable: que hay una investigación penal, el delito por el cual se lleva a cabo, el nombre del procesado y la entidad a la que pertenece.</p> <p>Esos datos, conocidos públicamente antes de la medida de aseguramiento, en nada obstaculizan la investigación y en cambio permiten a la colectividad conocer elementos de gran importancia para la lucha contra la corrupción, que es el objeto de la Ley a la cual pertenece el artículo.</p>
--	---



	Es un contrasentido pasar de un régimen de mayor transparencia, que permitía conocer los aludidos datos sin perjuicio de la reserva del sumario, a uno de absoluta restricción y prohibición, que implica la total oscuridad para el público, todo con el fin aparente de enfrentar las prácticas corruptas, especialmente en el campo de la administración.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-626/96
Fecha de la sentencia	veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	José Fernando Reyes Cuartas
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 y 16 de la Ley 228 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte, en sentencias anteriores, proferidas por la Sala Plena, así:</p> <p>-En cuanto al artículo 3 de la Ley 228 de 1995, se acatará lo dispuesto por la sentencia C-542 del 16 de octubre de 1996.</p> <p>-En lo relativo a los artículos 5, inciso 1º, 7 y 8 de la misma Ley, se remite la Corte a lo decidido por sentencia C-430 del 12 de septiembre de 1996.</p> <p>-En lo referente a las expresiones "que se cometan a partir de su vigencia", del artículo 16 de la indicada Ley, se estará a lo resuelto en sentencia C-364 del 14 de agosto de 1996.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el primer inciso del artículo 4 de la Ley 228 de 1995, salvo las expresiones "De conformidad con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley" y "al momento de iniciación de la judicatura", que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Tercero.- Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta sentencia, el inciso 2 del artículo 5 y el artículo 14 de la Ley 228 de 1995.</p> <p>Cuarto.- Declárase INEXEQUIBLE en su totalidad el artículo 9 de la Ley 228 de 1995.</p> <p>Quinto.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 16 de la Ley 228 de 1995, salvo las expresiones "que se cometan a partir de su vigencia", que ya fueron declaradas INEXEQUIBLES según fallo C-364 del 14 de agosto de 1996.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que la transcrita normatividad vulnera los artículos 1, 2, 13, 29, 93, 94, 228, 229, 250 y 252 de la Constitución Política.</p> <p>Afirma el demandante que la Ley objeto de estudio convirtió en legislación permanente el Decreto 1410 de 1995, por medio del cual "el Gobierno Nacional pretendió dar seguridad a los</p>

	<p>ciudadanos".</p> <p>A su juicio, se reducen al máximo las oportunidades probatorias y se niegan los beneficios de liberación provisional y condena de ejecución condicional.</p> <p>Manifiesta que, con la vigencia de las disposiciones atacadas, las conductas de menor entidad tienen beneficios liberatorios más restringidos que aquéllas para las cuales se han previsto sanciones mayores.</p> <p>Critica los artículos 7º y siguientes de la Ley, al no definir cuál es el bien jurídico que resulta afectado con las conductas descritas. Además -dice-, se desconoce el principio de la tipicidad, pues en la mencionada norma y en los artículos 8º y 14 se consagran tipos abiertos que dejan al intérprete la definición de la materia de prohibición, cuando disponen que se castigue a quien "porte escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas". Así, se vulnera también el principio de proporcionalidad al restringir el derecho a la libertad de una persona por la sola circunstancia de portar una ganzúa.</p> <p>En su criterio, con el trámite acelerado previsto en la Ley para cuando opere captura en flagrancia, se da pie para la comisión de innumerables injusticias, tanto más cuanto que se excluye la posibilidad de atenuar penas por confesión.</p> <p>En relación con el derecho fundamental de controvertir pruebas, considera el impugnante que también resulta transgredido, ya que "puede suceder que si al agente de la policía -o, en todo caso, al servidor público autor de la captura- no le apetece ir a la diligencia, le bastará rendir un informe escrito; y se pregunta dónde queda el derecho del sindicado, por voz de su abogado, a contrainterrogarlo, a preguntarle acerca de los pormenores de la captura, a indagarle cómo supo o llegó a su convicción que era precisamente el procesado, el autor del ilícito que se indaga; en fin, todos aquellos aspectos que permitan criticar la prueba testimonial.</p> <p>Reprocha también el que con el ordenamiento objeto de estudio se haya dejado en manos de los jueces penales y promiscuos municipales la instrucción y juzgamiento de los hechos punibles en él tipificados, "además de todos aquellos otros confinados con pena de arresto en la Ley 30 de 1986 y 23 de 1991".</p> <p>Citando el artículo 252 de la Carta, dice que no sólo el Gobierno sino también el legislador ordinario están en absoluta imposibilidad de suprimir y modificar los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento.</p> <p>En materia del derecho a la defensa técnica, manifiesta que al autorizar la Ley en cuestión, a través de sus artículos 3º y 4º, que la defensa sea ejercida por abogados no titulados, está violando el mismo artículo 29 de la Carta, pues -dice- ellos, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sólo pueden actuar en situaciones excepcionales y extremas.</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-542/96
Fecha de la sentencia	dieciseis (16) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	Jaime Enrique Lozano
Demandado	Referencia: Expediente D-1297 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3° y 5° (primer inciso) de la ley 228 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 3° de la ley 228 de 1995, en el entendido de que la facultad concedida a los estudiantes de los consultorios jurídicos para ejercer la función de defensores en procesos contravencionales, sólo puede ejercerse en caso de inexistencia de abogados titulados en algún municipio del país, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia. Segundo: En relación con el inciso primero del artículo 5° de la ley 228 de 1995, ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia número C- 430 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	2.1.Cargos formulados contra el artículo 3° de la ley 228 de 1995. Estima el actor que la norma demandada es violatoria de los principios constitucionales citados, porque permite que los estudiantes de derecho, que no ostentan la calidad de abogados, asuman la defensa de personas vinculadas a procesos contravencionales, con lo cual también se vulnera el derecho a la igualdad, pues para los procesos penales sí se exige la presencia de un abogado titulado. Agrega que no existe justificación para la discriminación hecha por el legislador, pues en ambos tipos de proceso es necesario el respeto de las garantías constitucionales. 2.2. Cargos formulados contra el primer inciso del artículo 5° de la ley 228 de 1995. De la misma forma, considera el actor que el inciso primero del artículo 5° es violatorio del derecho a la igualdad, porque sólo permite la posibilidad de conceder el subrogado de la pena de ejecución condicional en los procesos penales y no en los contravencionales. El demandante reitera que "...resulta llamativo el que resulte odiosamente discriminado quien comete una CONTRAVENCIÓN policiva, de indudable menor repercusión social, que quien ha incurrido en un DELITO que obviamente tiene mayor incidencia y daño en el cuerpo social, máxime cuando la misma

	condición de la cuantía sirve para medir de alguna forma el mayor daño individual y colectivo del DELITO." (Mayúsculas del actor)
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-689/96
Fecha de la sentencia	cinco (5) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	María Carola Zuluaga Zuluaga.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 7, 8, 9, 13, 18 y 19 de la Ley 228 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en las sentencias C-430 del 12 de septiembre y C-626 del 21 de noviembre de 1996, en lo referente a los apartes normativos demandados, pertenecientes a los artículos 5, 7, 8, 9, 13 y 18 de la Ley 228 de 1995.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE, en el artículo 19 de la Ley 228 de 1995, la frase "y expedirá mandamiento escrito al director del correspondiente establecimiento de detención, para legalizar la privación de la libertad".</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Según la demandante, las disposiciones impugnadas vulneran los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 83, 93 y 94 de la Constitución Política, por las siguientes razones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La condena de ejecución condicional no es una gracia sino un beneficio que a la vez tiene el carácter de derecho que se otorga cuando se dan ciertas condiciones no susceptibles de ser desconocidas por el legislador.</li> <li>- El artículo 5 de la Ley 228 de 1995 introduce una discriminación odiosa y sin fundamento entre dos tipos de sujetos merecedores de sanción penal y, por tanto, plasma un privilegio que viola la Constitución.</li> <li>- El aludido precepto, según la actora, desconoce también el artículo 93 de la Constitución Política, pues lesiona la dignidad humana que se encuentra reconocida en tratados internacionales ratificados por Colombia.</li> <li>- Los artículos 7, 8 y 9 acusados se hallan, en el sentir de la demandante, en evidente contradicción con los postulados fundamentales del Estado Social de Derecho y del principio de legalidad.</li> <li>- El artículo 13 de la Ley 228 de 1995 quebranta el primero de la Constitución en lo relacionado con el orden justo, toda vez que - piensa la impugnante- la pena debe ser proporcional con el comportamiento del enjuiciado y una sanción desproporcionada,</li> </ul>

	<p>como la que apareja el indicado precepto, "llevaría al Estado a enterrar antes que a reforzar su autoridad".</p> <p>- Los artículos 18 y 19 de la citada Ley desconocen, según la demanda, el debido proceso y la presunción de inocencia, pues parten del supuesto de la responsabilidad del infractor.</p> <p>Afirma la actora que, al desconocer el beneficio de la libertad provisional, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en el Pacto de San José de Costa Rica, los indicados mandatos violan compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.</p> <p>- Por último, la accionante señala que la demanda parcial incoada contra el artículo 18 de la Ley 228 de 1995 consiste en que, al consagrar la prohibición de la segunda instancia frente a la resolución que niega la práctica de pruebas, la que califica los cargos y el estado de flagrancia, se atenta contra el derecho de defensa, manifestación primordial del debido proceso.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-431/96
Fecha de la sentencia	doce (12) septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Rafael Barrios Mendivil
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 7, 8, 18 parcial, 23 parcial, 24 parcial, y 26 de la ley 228 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	<p>Primero. Estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-430 del 12 de septiembre de 1996 con respecto a las siguientes disposiciones de la ley 228 de 1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-El inciso primero del artículo 5;</li> <li>-El artículo 7;</li> <li>-El artículo 8;</li> <li>-El numeral 3 del artículo 18 y,</li> <li>-El párrafo 2 del artículo 18,</li> </ul> <p>Segundo. Declarar exequibles las siguientes disposiciones de la ley 228 de 1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-El numeral 2 del artículo 18;</li> <li>-El numeral 4 del artículo 18;</li> <li>-El numeral 5 del artículo 18;</li> <li>-El inciso primero del artículo 23;</li> <li>-La expresión "contra la cual procede el recurso de reposición que debe resolverse en el mismo acto", contenida en el inciso 3 del artículo 23;</li> <li>-El inciso 4 del artículo 23;</li> <li>-La expresión "Terminada la diligencia, el funcionario decidirá si el procesado es o no responsable" contenida en el inciso primero del artículo 24;</li> <li>-El inciso 3 del artículo 24;</li> <li>-El inciso 4 del artículo 24 y,</li> <li>-El artículo 26.</li> </ul>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor acusa las siguientes disposiciones de la ley 228 de 1995, con fundamento en las consideraciones que se resumen así:</p> <p>1. Artículo 5o. Según el actor, la prohibición de conceder el subrogado de la condena de ejecución condicional a las personas condenadas por las contravenciones de que trata la ley 228 de 1995, viola los artículos 12 y 28 de la Carta, que consagran, respectivamente, el derecho a la libertad y la prohibición de</p>

	<p>imponer penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.</p> <p>-Igualmente considera que el artículo 5o. al disponer que el juez de ejecución de penas podrá después del año siguiente a la aprehensión ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia, desconoce el derecho a la igualdad de los condenados por las contravenciones de que trata la ley, en relación con las personas condenadas por delitos, pues a éstas puede concedérseles la suspensión de la ejecución de la sentencia en el mismo momento de imponerse la sanción; en tanto que aquéllos deben sufrir, como mínimo, un año de reclusión.</p> <p>-Agrega también que dejar al juez la facultad de interpretar los términos 'personalidad' y 'buen comportamiento, para efecto de la suspensión de la ejecución de la sentencia, puede convertirse en un abuso de poder de los funcionarios del Estado, al impedir que "se cumpla con el fin resocializador y rehabilitador de la pena, transgrediéndose el mandato constitucional sobre la prohibición de imponer penas irredimibles".</p> <p>-Finalmente señala que la disposición demandada aumentará el problema de hacinamiento de la población carcelaria con la consiguiente violación de los derechos humanos de los reclusos, sin que ello implique solucionar el problema real de la delincuencia.</p> <p>2. Artículos 7 y 8. El actor acusa estas normas por violar los principios de legalidad, en cuanto no establecen de modo claro y preciso los elementos del tipo penal, y de culpabilidad, pues contemplan una responsabilidad objetiva, ya que "¿Quién va a considerar el aspecto subjetivo de portar injustificadamente llaves maestras o ganzúas, escopolamina o cualquier otra sustancia semejante?. ¿El agente de policía que realiza la aprehensión?. ¿El juez ante quien se pone a disposición el encartado?. Porque la ley no habla de quién debe emitir el dictamen técnico, además que en un procedimiento tan sumario no hay tiempo para ello". Las disposiciones citadas violan también la garantía de la presunción de inocencia, y "son inconvenientes al constituirse en una amenaza contra todos los ciudadanos en su seguridad jurídica".</p> <p>3. Los artículos 18 parcial, 23 parcial, 24 parcial y 26 desconocen el artículo 29 de la Carta, en cuanto establecen un "procedimiento breve y sumario" para el conocimiento de las contravenciones especiales, en el que se dificulta el ejercicio del "derecho de defensa, la contradicción probatoria, la doble instancia -en casos de flagrancia- y, la legalidad de la detención", pues se excluye el recurso de apelación para las resoluciones mediante las cuales el juez califica la situación de flagrancia, formula los cargos, o niega la práctica de pruebas; no se contempla la resolución que define la situación jurídica de los procesados, además, la única medida de aseguramiento que procede, en casos de flagrancia, es la privación de la libertad; se niega a los sancionados la condena de ejecución condicional y, se condiciona la suspensión de la ejecución de la sentencia para las contravenciones sancionadas con dos años de</p>
--	--

	<p>arresto o más, a la valoración que haga el juez sobre la personalidad y conducta del procesado.</p> <p>-El párrafo 2 del artículo 18 infringe también los artículos 13 y 31 de la Constitución, por cuanto niega a los procesados por las contravenciones especiales de que trata la ley, la posibilidad de recurrir las decisiones, permitiendo que un juez de mayor jerarquía pueda corregirlas, sin embargo, esta garantía sí se le otorga a los que cometen delitos, que son hechos de mayor impacto social.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-430/96
Fecha de la sentencia	doce (12) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Jorge Enrique Figueroa Morantes y Alejandro Decastro González
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5 parcial, 7, 8, 10 parcial, 13, 18 parcial, 31, y 36 parcial de la ley 228 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	<p>Primero. Declarar exequible el inciso primero del artículo 5 de la ley 228 de 1995, salvo la parte que dice: "Las personas condenadas por las contravenciones a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a la condena de ejecución condicional", que se declara inexecutable.</p> <p>Segundo. Declarar inexecutable el artículo 7 de la ley 228 de 1995.</p> <p>Tercero. Declarar exequible en forma condicionada el artículo 8 de la ley 228 de 1995, en el entendido de que la expresión "o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas", se refiere a aquellas sustancias que producen los mismos efectos de la escopolamina y no se utilizan como medicamentos ni como estupefacientes.</p> <p>Cuarto. Estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-364 del 14 de agosto de 1996, en relación con el artículo 10 de la ley 228 de 1995.</p> <p>Quinto. Declarar exequible el artículo 13 de la ley 228 de 1995.</p> <p>Sexto. Declarar exequible el numeral 3 del artículo 18 de la ley 228 de 1995.</p> <p>Séptimo. Declarar exequible el parágrafo 2 del artículo 18 de la ley 228 de 1995.</p> <p>Octavo. Declarar exequible el artículo 31 de la ley 228 de 1995.</p> <p>Noveno. Declarar exequible el aparte del inciso segundo del artículo 36 de la ley 228 de 1995 que establece: "A esta disminución punitiva no tendrán derecho las personas que hayan sido condenadas por delitos o contravenciones dolosos durante los cinco (5) años anteriores".</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>EL Ciudadano Jorge Enrique Figueroa Morantes formula los siguientes cargos:</p> <p>1. El tratamiento dado a los sindicatos de las contravenciones de "hurto calificado" (art.10) y "lesiones personales culposas agravadas" (art. 13) en casos de flagrancia, es "más gravoso" que el que se concede a los mismos hechos punibles cuando son delitos, lo</p>

	<p>cual vulnera derechos fundamentales del procesado, por las siguientes razones: a) al excluirse la posibilidad de conceder la libertad provisional al inculpado se desconoce el principio del "favor libertatis", consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (arts. 5 y 9 ley 74 de 1986) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6 ley 16 de 1972); b) se menoscaba el derecho constitucional a la doble instancia, "aspecto tan importante para el procedimiento mismo y para la persona del enjuiciado", ya que sólo procede el recurso de reposición, pues el de apelación queda reservado únicamente para la sentencia; c) no se permite la terminación anticipada de la acción penal, pues el artículo 27 de la ley 228 de 1995 se aplica sólo en caso de que ésta se inicie por querrela de parte, y las acciones por los punibles mencionados se inician oficiosamente; d) se excluye la posibilidad de la extinción de la acción por reparación integral del daño; e) "Para el hurto calificado se sustrajo del cerco del tipo penal delictual una parte de las posibles conductas para crear un tipo contravencional que no existía, de contera logrando desabrigar de las garantías mínimas constitucionales a los presuntos contraventores...El mal rotulado tipo contravencional de 'lesiones personales culposas agravadas' es igualmente dañino", en cuanto se incluyó el consumo de estupefacientes -alcohol- como componente de la descripción de la norma; f) la pena imponible resulta más gravosa en los casos de la contravención de lesiones personales culposas agravadas, que la que habría de aplicarse a quien ejecute el mismo hecho, cuando la incapacidad de la víctima sea mayor (entre 61 y 90 días); g) el hurto calificado aparece sancionado con mayor severidad -arresto (sic) de 2 a 8 años-, superando el tope máximo previsto en el artículo 28 de la ley 40 de 1993, además de que se niegan al sindicado arrepentido los beneficios legales; h) se excluye la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional y sólo se permite la concesión de la suspensión de la ejecución de la sentencia, transcurrido un año de la aprehensión, para el caso del hurto calificado, y la libertad condicional cuando hayan transcurrido las dos terceras partes de la condena, para ambas hipótesis contravencionales, siempre que se reúnan los requisitos subjetivos exigidos en la norma.</p> <p>2. El artículo 31 de la ley 228 de 1995 viola el derecho a la igualdad de las personas que resulten perjudicadas con el hecho contravencional, frente a los ofendidos con la comisión de un delito, pues aquéllos no pueden reclamar dentro del proceso los perjuicios causados, sino que deben hacerlo por separado a través de las acciones civiles respectivas, lo cual les impide participar en la investigación, aportar pruebas, controvertir las existentes e impugnar las decisiones que afecten sus intereses, como la eventual absolución por atipicidad de la conducta; además deben esperar los resultados de la decisión del proceso contravencional para poder iniciar la acción civil.</p>
--	--

	<p>B. El ciudadano ALEJANDRO DE CASTRO GONZALEZ fundamenta su demanda en las siguientes consideraciones:</p> <p>1. En relación con el artículo 5 de la ley 228 de 1995, que prohíbe la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional para las personas condenadas por las contravenciones de que trata la ley, señala a) "la presunción colectiva de necesidad de tratamiento penitenciario desconoce la individualidad jurídica y ontológica propias de cada uno de los sujetos de derecho que resulten condenados por las contravenciones a que se refiere la ley...en la medida en que no particulariza la responsabilidad penal en la fase post procesal o de ejecución de la sanción penal. De contera y por esa misma vía se desconoce el principio de dignidad humana en la medida que se cosifica y se estigmatiza a las personas condenadas... pues no se les trata como personas (con capacidad de autodeterminación) sino como entes que, en abstracto, necesitarán siempre de resocialización mediante el tratamiento penitenciario"; b) "desconoce la separación de poderes en la medida en que el órgano legislativo le usurpa a la rama jurisdiccional la función de establecer cuándo un condenado necesita o no de tratamiento penitenciario. Dicha usurpación de funciones es más grave aún si se tiene en cuenta que la necesidad de tratamiento penitenciario la establece el legislador de manera general o abstracta para un grupo de condenados, haciendo a un lado el hecho de que los funcionarios judiciales, en ejercicio de su independencia y autonomía (art. 28 C.P.), deben valorar la situación de cada condenado de manera particular conforme a pautas generales subsumibles en casos específicos"; c) "los condenados por infracción a la ley 228 de 1995 reciben un tratamiento distinto al que se les otorga a los condenados por infracción de las demás leyes penales, en punto al derecho de la condena de ejecución condicional"; no obstante, no existe una diferencia "ontológica o real" entre ambas situaciones, sino tan sólo "nominal o formal", pues "ambos supuestos son en esencia lo mismo: infracciones a la ley penal"; la finalidad perseguida con la norma es la de someter a tratamiento penitenciario a los condenados por las contravenciones previstas en la ley. Esa finalidad "es inconstitucional por cuanto desconoce que el tratamiento penitenciario no puede nunca establecerse o negarse de manera colectiva o a priori para un grupo de personas. Dicha finalidad es irracional en la medida en que no permite estudiar, en cada caso, si la ejecución de la pena es o no necesaria" y, en consecuencia, la disposición viola el derecho a la igualdad.</p> <p>2. El subrogado penal creado por el mismo artículo 5 denominado suspensión de la ejecución de la sentencia, es "una figura sin efecto útil alguno", pues se concede cuando el procesado cumpla el año de detención, pero para ese momento éste ya tendrá derecho a la condena de ejecución condicional, teniendo en cuenta que la pena mayor de arresto prevista en la norma es de 18 meses. Se trata</p>
--	---

	<p>entonces de una norma meramente simbólica, sin eficacia alguna, por lo que contraviene los artículos 150-2 y 158 de la Constitución, en cuanto se desconoce la esencia misma de la función de legislar, cual es la de expedir leyes que produzcan efectos, y por que "una de las causales materiales por las que una disposición legislativa no puede relacionarse con la materia regulada en un proyecto de ley, puede ser la inaplicabilidad por inutilidad práctica de la disposición". Además, la disposición viola el principio de igualdad "en la medida en que se excluye del beneficio de la suspensión de la ejecución de la sentencia a los condenados a pena de prisión, sin ninguna justificación objetiva y razonable".</p> <p>3. A juicio del actor, el numeral 3 del artículo 18, que prevé la detención preventiva como única medida de aseguramiento, es inconstitucional por omisión, pues no hace extensivas al procedimiento contravencional las disposiciones sobre medidas de aseguramiento y libertad provisional contenidas en el Código de Procedimiento Penal y, por tanto, viola los siguientes principios: a) el de la libertad personal consagrado en el artículo 9- 3 de la ley 74 de 1968, que establece como regla general la libertad y como excepción la detención preventiva, durante el trámite del proceso; b) el de la igualdad en cuanto equipara el tratamiento dado a los contraventores con el establecido para los delitos de competencia de los juzgados regionales, que conocen de las conductas delictivas de mayor gravedad y, "si se trata de supuestos de hecho esencialmente distintos, resulta necesario y justo que reciban distinto tratamiento procesal"; c) presunción de inocencia, buena fe y autodeterminación de la persona humana (arts. 12, 16, 29-4 y 83 de la Carta), puesto que "la norma atacada presume de derecho que la persona capturada en flagrancia no va a comparecer al proceso, razón por la cual se la mantiene detenida preventivamente hasta que se dicte sentencia o venza el término de 45 días sin que ello suceda". Este juicio es contrario a la Constitución porque desconoce la libre "autodeterminación de la persona humana", a quien se la juzga como "un autómatas que funcionará a partir del esquema estímulo-respuesta, captura en flagrancia-no comparecencia al juicio"; d) la imparcialidad e independencia judicial (arts. 214-3 Y 228), ya que al "otorgarle de plano el carácter de indicio grave de responsabilidad a la detención en situación de flagrancia, independientemente de toda consideración particular, se le obstaculiza al juez su obligación constitucional de 'evaluar en cada caso concreto y de manera razonable la situación a la cual aplica la normatividad que le permite optar por la detención preventiva u otra garantía de aseguramiento". En estos términos solicita a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de la norma "en el sentido de que es exequible sólo si se entiende que el funcionario judicial puede aplicar las disposiciones que sobre libertad provisional y medidas de aseguramiento consagra el Código de Procedimiento Penal".</p>
--	---

	<p>4. El inciso segundo del artículo 36 que priva de la diminuyente punitiva por confesión a quienes hayan sido condenados por delitos o contravenciones durante los cinco años anteriores, viola el artículo 29-4 de la Constitución que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo. Aunque la norma no lo defina así, ella es de clara estirpe sancionatoria, ya que "la privación de un beneficio concedido a todos por vía general implica un castigo para quien, en particular, se le niega aquel". En los términos de la norma, "el delito o contravención doloso tiene dos efectos sancionatorios: la pena que se impuso en el pasado y la privación del beneficio en el presente". Además, la disposición viola el derecho de igualdad ya que "no existe una justificación objetiva y razonable para otorgar un tratamiento diferenciado consistente en la privación de un beneficio".</p> <p>5. Los artículos 7 y 8 acusados, violan el artículo 28 de la Carta "que consagra la exigencia de que los motivos de detención sean previamente definidos por la ley", y las normas atacadas son tipos abiertos, elaborados a partir de dos elementos valorativos: a) la conducta objeto de la punición -portar en lugar público o abierto al público llaves maestras o ganzúas (art.7) o, escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas-, está descrita en términos tan amplios que puede cubrir una gran gama de hechos y, b) la justificación de las conductas, cuya determinación se delega al juez de turno. "Las normas atacadas dejan al ciudadano corriente en la incertidumbre, pues no sabe a ciencia cierta y con antelación qué es lo que el juez encontrará penalmente justificado o qué constituirá motivo 'definido' de detención". En última instancia la facultad de cerrar el tipo "quedará radicada en los miembros de la policía nacional, o en manos de quien realice la captura".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-364/96
Fecha de la sentencia	agosto catorce (14) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Darío Garzón Garzón
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10, 11 y 16 (parcial) de la Ley 228 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Primero: DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 228 de 1995. Segundo: DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 11 de la Ley 228 de 1995. Tercero: DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión "que se cometan a partir de su vigencia" consagrada en el inciso primero del artículo 16 de la Ley 228 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor parte en su exposición de calificar la política criminal del Estado, en relación con el manejo de los delitos de "hurto calificado" y "hurto agravado" como inconsistente, aunque advierte que esta no es una objeción de inconstitucionalidad. Luego señala que tales hechos punibles no fueron incluidos en la ley 23 de 1991 como contravenciones, a diferencia de lo que ocurrió con el "hurto simple", porque en ellos "intervenían circunstancias de mayor gravedad, como la violencia", que obligaba a tratarlos como delitos; no obstante, en la ley 228 de 1995, parcialmente acusada, que desarrolla el artículo 28 transitorio de la Constitución, se les da el tratamiento de contravenciones; pero se mantiene la pena señalada para los delitos, cualitativa y cuantitativamente, y se niega la posibilidad de la libertad provisional y la condena de ejecución condicional para los procesados, con lo cual se desconoce el criterio diferenciador entre estos dos tipos de hechos punibles, que se fundamenta en el tratamiento más benigno para las contravenciones.</p> <p>El cargo de inconstitucionalidad contra los artículos 10 y 11 de la ley 228 de 1995 lo concreta el actor diciendo que al cambiar los hechos punibles de hurto calificado y agravado de delito a contravención, "se suprimen y se modifican los organismos de acusación y juzgamiento, porque mientras era delito, la instrucción y la calificación correspondía a la Fiscalía, al paso que el juzgamiento a los jueces; cuando se convierte en contravención, su instrucción y</p>

	<p>juzgamiento corresponde a los Jueces Penales Municipales. Con esa política, de aquí a mañana, sin cambiar las penas, el legislador puede cambiar de delitos a contravenciones conductas como el homicidio, o el secuestro, o el tráfico de estupefacientes, burlando el mandato del artículo 252 de la Constitución Política".</p> <p>Respecto a la expresión "que se cometan a partir de su vigencia", contenida en el artículo 16 señala el demandante que viola el derecho fundamental a la igualdad, pues respecto de unos mismos hechos unos infractores se someten a los jueces, en tanto que otros quedan bajo la competencia de inspectores de policía. "Además, no tiene sentido que si con esta ley se desarrolla la facultad del artículo 28 transitorio de la C.P. se deje a medio desarrollar, porque eso significaría que respecto de unos hechos seguiría la competencia Inspectores, mientras que otros la competencia la tendrían los jueces".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-378/96
Fecha de la sentencia	Agosto veintidos (22) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n Oficiosa del "Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I", suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988 y de su Ley Aprobatoria n3mero 230 de diciembre 26 de 1995.
Conoci3 en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Primero. Decl3ranse EXEQUIBLES el "Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I", suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988, as3 como su Ley Aprobatoria No. 230 del 26 de Diciembre de 1995. Segundo. Comun3quese al Gobierno Nacional -Presidencia de la Rep3blica y Ministerio de Relaciones Exteriores- para los fines contemplados en el art3culo 241 numeral 10 de la Constituci3n Pol3tica.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n Oficiosa del "Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I", suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988 y de su Ley Aprobatoria n3mero 230 de diciembre 26 de 1995.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-195/96
Fecha de la sentencia	veintidós (22) de la Sala Plena, en Santafé de Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisión oficiosa de la ley 233 de diciembre 26 de 1995 por medio de la cual se aprueba el "CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ", adoptado en Londres el 30 de marzo de 1994.
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	Decláranse EXEQUIBLES el Convenio Internacional del Café, adoptado en Londres el 30 de marzo de 1994, y la ley 233 de diciembre 26 de 1995, que lo aprueba.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión oficiosa de la ley 233 de diciembre 26 de 1995 por medio de la cual se aprueba el "CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ", adoptado en Londres el 30 de marzo de 1994.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-332/96
Fecha de la sentencia	
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 240 de 26 de diciembre de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Federativa del Brasil sobre sanidad animal para intercambio de animales y productos de origen animal", suscrito en Bogot3 el 9 de febrero de 1988.
Conoci3 en primera instancia	Dr. JULIO CESAR ORTIZ GUTIERREZ
Decision	Primero. DECLARAR EXEQUIBLES el Acuerdo entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Federativa del Brasil, firmado el 9 de febrero de 1988, y la Ley 240 de 1995 que lo aprob3. Segundo. Comuníquese esta decisi3n al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretar3a General de la Presidencia de la Rep3blica, y envi3sele copia aut3ntica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del art3culo 241 de la Carta Pol3tica.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 240 de 26 de diciembre de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Federativa del Brasil sobre sanidad animal para intercambio de animales y productos de origen animal", suscrito en Bogot3 el 9 de febrero de 1988.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-262/96
Fecha de la sentencia	Junio trece (13) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	
Demandado	Revisi3n de la Ley 243 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-' del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978".
Conoci3 en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES el "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES - UPOV - del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978", y la Ley 243 de 1995 que lo aprueba.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n de la Ley 243 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-' del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-448/96
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	Hugo Hernán Garzón Garzón
Demandado	Norma acusada: Artículo 3º párrafo transitorio de la Ley 244 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Decision	Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el párrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-379/96
Fecha de la sentencia	Agosto veintidos (22) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 245 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de la Repùblica de Cuba sobre promoci3n y protecci3n recìproca de inversiones", suscrito en Santafé de Bogotá el 16 de julio de 1994.
Conoci3 en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	<p>PRIMERO: Declarar EXEQUIBLES el "Convenio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de la Repùblica de Cuba sobre promoci3n y protecci3n recìproca de inversiones", suscrito en Santafé de Bogotá el 16 de julio de 1994, así como la ley 245 del 29 de diciembre de 1995 aprobatoria del mismo, salvo el artículo 7o. de aquél, que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, el Presidente de la Repùblica, al manifestar el consentimiento de Colombia en obligarse por el tratado, ùnicamente podrá ratificar las cláusulas del mismo que, según esta sentencia, se ajustan a la Carta.</p> <p>SEGUNDO: De acuerdo con lo advertido en la parte motiva de esta providencia, las cláusulas de tratamiento nacional y de la Naci3n más favorecida, contenidas en el Convenio citado, quedan sujetas a las restricciones que el artículo 100 de la Constitución consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros. Sólo en este sentido podrá manifestar el Gobierno el consentimiento del Estado en obligarse por el Tratado.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI, DR. ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, CARLOS GAVIRIA DIAZ PRINCIPIO DE EQUIDAD-Err3nea interpretaci3n/EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION (Salvamento de voto)



	<p>Los magistrados que suscribimos el presente salvamento de voto estimamos que la posición de la Corte es errónea, como quiera que el inciso 5° del artículo 58 de la Constitución utiliza, claramente, la primera de las acepciones del concepto de equidad. Esto es, la equidad en su acepción aristotélica, sólo es aplicable a la actividad que llevan a cabo los jueces y administradores, a quienes corresponde la aplicación del tenor general de la ley a los casos y eventos particulares. De esta forma, es necesario concluir que todos los poderes públicos operan de conformidad con los postulados de la equidad, pero que este criterio tiene un contenido y una proyección diferentes según se trate del Legislador o de los administradores y jueces. El error en que incurre la sentencia de la cual nos apartamos consiste en haber otorgado a la noción de equidad, en materia de expropiación sin indemnización - ámbito de clara configuración por parte del Legislador -, el sentido y alcance que este concepto ostenta dentro del ámbito de operación de jueces y administradores.</p> <p><b>EXPROPIACION-Pago de indemnización justa (Salvamento de voto)</b>  La condición sobre la que existe un consenso absoluto es aquella que se relaciona con el pago de una indemnización justa. En efecto, la jurisprudencia y la doctrina internacionales no dudan en afirmar que sin el pago de una indemnización, las medidas de expropiación se convierten, pura y simplemente, en una confiscación, acto ilícito en el ámbito del derecho internacional que compromete, automáticamente, la responsabilidad del Estado que lo lleva a cabo. Es así como el pago de una indemnización justa, como condición sine qua non de la licitud del ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de los Estados, puede considerarse sin vacilaciones como un principio de derecho internacional consuetudinario, vinculante para cualquier Estado, independientemente de su inclusión en instrumentos de carácter convencional.</p> <p><b>CONVENCION INTERNACIONAL/INVERSION EXTRANJERA-Protección judicial (Salvamento de voto)</b>  El Convenio, en materia de protección judicial a los inversionistas internacionales, determina que esta protección sea competencia, en forma primaria, de los tribunales internos y se haga de conformidad con las normas nacionales del Estado que adopta las medidas de desposesión. Lejos de ser inconstitucional en esta materia, el Tratado es particularmente respetuoso con las normas y procedimientos judiciales internos del Estado colombiano.</p> <p><b>EXPROPIACION/NACIONALES COLOMBIANOS/SOBERANIA DEL ESTADO-Extranjeros(Salvamento de voto)</b>  Los extranjeros se encuentran en una situación distinta a la de los nacionales colombianos en materia de ejercicio de los derechos políticos. Los extranjeros no tienen ningún tipo de participación en la conformación de la decisión de expropiar que adopte el Congreso de la República, en donde carecen de cualquier tipo de representación. Sin embargo, tienen la obligación de acatar la</p>
--	---

	<p>decisión expropiatoria con la misma intensidad con que deben hacerlo los nacionales colombianos.</p> <p>INTERNACIONALIZACION DE LAS RELACIONES ECONOMICAS/SOBERANIA DEL ESTADO (Salvamento de voto)</p> <p>El proceso de globalización e internacionalización de las economías mundiales apareja, una nueva concepción de la soberanía estatal, cuya defensa se traduce en mecanismos completamente distintos a los utilizados por el viejo Estado nación. La soberanía sólo puede defenderse a cabalidad a través de una política económica que concilie los intereses y necesidades nacionales con la tendencia ineludible hacia la internacionalización de las economías.</p> <p>Referencia: Expediente L.A.T. 061</p> <p>Revisión constitucional de la Ley 245 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre promoción y protección recíproca de inversiones", suscrito en Santafé de Bogotá el 16 de julio de 1994.</p> <p>Con el acostumbrado respeto por los fallos adoptados por la Sala Plena de esta Corporación, los suscritos magistrados nos permitimos salvar nuestro voto en el asunto de la referencia, por no compartir la declaratoria de inexequibilidad del artículo 7o. del "CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA SOBRE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES", suscrito en Santa Fe de Bogotá, el 16 de julio de 1994 y aprobado por la Ley 245 de 1995.</p> <p>Las razones por las cuales nos apartamos de la sentencia proferida por la Corte en el presente caso quedan consignadas en nuestro salvamento de voto a la sentnecia C-358 de 1996, por medio de la cual fue declarado inexequible el artículo 6o. del "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR EL CUAL SE PROMUEVEN Y PROTEGEN LAS INVERSIONES", suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994 y aprobado por la Ley 246 de 1995.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-358/96
Fecha de la sentencia	catorce (14) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR EL CUAL SE PROMUEVEN Y PROTEGEN LAS INVERSIONES", suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994, y de la Ley 246 de 1995, que lo aprueba.
Conoci3 en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ y Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero. DECLARAR EXEQUIBLES el "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE POR EL CUAL SE PROMUEVEN Y PROTEGEN LAS INVERSIONES", suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994, y la Ley 246 de 1995 que lo aprueba, con excepci3n del art3culo 6º de aquel, que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el art3culo 241, numeral 10, de la Constituci3n Pol3tica, el Presidente de la Rep3blica, al manifestar el consentimiento de Colombia en obligarse por el Tratado, 3nicamente podr3 ratificar las cl3usulas del mismo que, seg3n esta Sentencia, se ajustan a la Constituci3n Pol3tica.</p> <p>Segundo. De acuerdo con lo advertido en la parte motiva de esta providencia, las cl3usulas de tratamiento nacional y de la Naci3n m3s favorecida, contenidas en el Convenio bajo examen, quedan sujetas a las restricciones que el art3culo 100 de la Constituci3n consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros.</p> <p>S3lo en este sentido podr3 manifestar el Gobierno el consentimiento del Estado en obligarse por el Tratado.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional del "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR EL CUAL SE PROMUEVEN Y PROTEGEN LAS INVERSIONES", suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994, y de la Ley 246 de 1995, que lo aprueba.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	Si. Dr. TRATADO INTERNACIONAL/EXPROPIACION EN LA CONSTITUCION

	<p>POLITICA-Compatibilidad/EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION (Salvamento de voto)</p> <p>Es evidente que el repertorio de garantías - principio de legalidad, compensación y defensa judicial -, dispuesto por el Tratado, se ajusta al esquema ordinario de la expropiación contenido en la Constitución que, en lo sustancial, descansa sobre un sistema análogo de protección. Las precisiones que se hacen en el convenio, en relación con cada una de las salvaguardias mencionadas, son compatibles con dicho régimen expropiatorio. La compensación pronta, adecuada y efectiva, postulada en el Tratado, no riñe con la Constitución que establece como derecho del titular del bien a expropiar y requisito sine qua non de la expropiación, la indemnización previa. Precisamente, por tratarse de un derecho constitucional este debe ser efectivamente protegido, lo que pretende hacerse a través del Tratado al disponerse que se tome en consideración su valor genuino y que su monto expresado en divisas, dado el origen de la inversión, sea libremente transferible al exterior.</p> <p>EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION-Libertad del legislador en ordenarla (Salvamento de voto)</p> <p>Lo que ciertamente se descubre en el precepto constitucional es una norma permisiva que autoriza positivamente al Legislador para optar en determinados eventos por imponer una expropiación sin indemnización. Si la Constitución no hubiese previsto expresamente la expropiación sin indemnización, es claro que no podría ésta nunca verificarse; pero, la facultad concedida al Legislador, indica que esta modalidad no está prohibida, de modo que aunque no sea obligatorio decidirse por ella, puede aquél órgano ordenarla o abstenerse de hacerlo.</p> <p>PRINCIPIO DE EQUIDAD-Errónea interpretación (Salvamento de voto)</p> <p>Los magistrados que suscribimos el presente salvamento de voto estimamos que la posición de la Corte es errónea, como quiera que el inciso 5° del artículo 58 de la Constitución utiliza, claramente, la primera de las acepciones del concepto de equidad. Esto es, la equidad en su acepción aristotélica, sólo es aplicable a la actividad que llevan a cabo los jueces y administradores, a quienes corresponde la aplicación del tenor general de la ley a los casos y eventos particulares. De esta forma, es necesario concluir que todos los poderes públicos operan de conformidad con los postulados de la equidad, pero que este criterio tiene un contenido y una proyección diferentes según se trate del Legislador o de los administradores y jueces. El error en que incurre la sentencia de la cual nos apartamos consiste en haber otorgado a la noción de equidad, en materia de expropiación sin indemnización - ámbito de clara configuración por parte del Legislador -, el sentido y alcance que este concepto ostenta dentro del ámbito de operación de jueces y administradores.</p>
--	---

	<p>EXPROPIACION-Pago de indemnización justa (Salvamento de voto)</p> <p>La condición sobre la que existe un consenso absoluto es aquella que se relaciona con el pago de una indemnización justa. En efecto, la jurisprudencia y la doctrina internacionales no dudan en afirmar que sin el pago de una indemnización, las medidas de expropiación se convierten, pura y simplemente, en una confiscación, acto ilícito en el ámbito del derecho internacional que compromete, automáticamente, la responsabilidad del Estado que lo lleva a cabo. Es así como el pago de una indemnización justa, como condición sine qua non de la licitud del ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de los Estados, puede considerarse sin vacilaciones como un principio de derecho internacional consuetudinario, vinculante para cualquier Estado, independientemente de su inclusión en instrumentos de carácter convencional.</p> <p>CONVENCION INTERNACIONAL/INVERSION EXTRANJERA-Protección judicial (Salvamento de voto)</p> <p>El Convenio, en materia de protección judicial a los inversionistas internacionales, determina que esta protección sea competencia, en forma primaria, de los tribunales internos y se haga de conformidad con las normas nacionales del Estado que adopta las medidas de desposesión. Lejos de ser inconstitucional en esta materia, el Tratado es particularmente respetuoso con las normas y procedimientos judiciales internos del Estado colombiano.</p> <p>EXPROPIACION/NACIONALES COLOMBIANOS/EXTRANJEROS-Relaciones de igualdad (Salvamento de voto)</p> <p>Los extranjeros se encuentran en una situación distinta a la de los nacionales colombianos en materia de ejercicio de los derechos políticos. Los extranjeros no tienen ningún tipo de participación en la conformación de la decisión de expropiar que adopte el Congreso de la República, en donde carecen de cualquier tipo de representación. Sin embargo, tienen la obligación de acatar la decisión expropiatoria con la misma intensidad con que deben hacerlo los nacionales colombianos.</p> <p>INTERNACIONALIZACION DE LAS RELACIONES ECONOMICAS/SOBERANIA DEL ESTADO (Salvamento de voto)</p> <p>El proceso de globalización e internacionalización de las economías mundiales apareja, una nueva concepción de la soberanía estatal, cuya defensa se traduce en mecanismos completamente distintos a los utilizados por el viejo Estado nación. La soberanía sólo puede defenderse a cabalidad a través de una política económica que concilie los intereses y necesidades nacionales con la tendencia ineludible hacia la internacionalización de las economías.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-380/96
Fecha de la sentencia	veintidos (22) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996)
Demandante	
Demandado	Revisi3n oficiosa de la ley 247 del 29 de diciembre de 1995, " Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE LOS GOBIERNOS DE BELICE Y COLOMBIA', suscrito en Belmopan el 12 de Diciembre de 1983"
Conoci3 en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Convenio de Intercambio Cultural entre los gobiernos de Belice y Colombia", suscrito en Belmopan el doce de diciembre de 1983, as3 como su ley aprobatoria, esto es, la Ley 247 de diciembre 29 de 1995.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n oficiosa de la ley 247 del 29 de diciembre de 1995, " Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE LOS GOBIERNOS DE BELICE Y COLOMBIA', suscrito en Belmopan el 12 de Diciembre de 1983"
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-408/96
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la "Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Bel3n Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994" y de la Ley N3 248 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba dicha convenci3n.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MART3NEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: DECLARAR EXEQUIBLE la Ley N3 248 del 29 de diciembre de 1995, "Por medio de la cual se aprueba la Convenci3n Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Bel3n Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994"</p> <p>Segundo: DECLARAR EXEQUIBLE la "Convenci3n Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Bel3n Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994".</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional de la "Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Bel3n Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994" y de la Ley N3 248 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba dicha convenci3n.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-216/96
Fecha de la sentencia	
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del "Convenio comercial entre el Gobierno de la rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Hungr3a", suscrito en Budapest el 18 de junio 1993 y de la ley 249 de 1995 aprobatoria del mismo.
Conoci3 en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES el "Convenio Comercial entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Hungr3a", suscrito en Budapest el 18 de junio de 1993 y la ley 249 del 29 de diciembre de 1995, aprobatoria del mismo.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional del "Convenio comercial entre el Gobierno de la rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Hungr3a", suscrito en Budapest el 18 de junio 1993 y de la ley 249 de 1995 aprobatoria del mismo.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-261/96
Fecha de la sentencia	trece (13) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del "Tratado entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Venezuela sobre traslado de personas condenadas", y de la Ley 250 de 1995 por medio de la cual se aprueba dicho tratado.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE la Ley 250 de 1995 "por medio de la cual se aprueba el Tratado entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Venezuela sobre traslado de personas condenadas, suscrito en Caracas el 12 de enero de 1994". Segundo: Declarar EXEQUIBLE el "Tratado entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Venezuela sobre traslado de personas condenadas, suscrito en Caracas el 12 de enero de 1994".
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional del "Tratado entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Venezuela sobre traslado de personas condenadas", y de la Ley 250 de 1995 por medio de la cual se aprueba dicho tratado.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-381/96
Fecha de la sentencia	Agosto veintidos (22) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la "Convenci3n para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, hecha en La Haya el 18 de Octubre de 1907" y de su Ley Aprobatoria número 251 de diciembre 29 de 1995.
Conoci3 en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Primero. DECLARAR EXEQUIBLES la "Convenci3n Para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales", hecha en La Haya el 18 de Octubre de 1907, así como su Ley Aprobatoria No. 251 del 29 de Diciembre de 1995. Segundo. COMUNÍQUESE al Gobierno Nacional -Presidencia de la Repúbrica y Ministerio de Relaciones Exteriores- para los fines contemplados en el artículo 241 numeral 10 de la Constituci3n Política.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisi3n constitucional de la "Convenci3n para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, hecha en La Haya el 18 de Octubre de 1907" y de su Ley Aprobatoria número 251 de diciembre 29 de 1995.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-382/96
Fecha de la sentencia	
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba la "Constituci3n de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones" y el "Protocolo facultativo sobre la soluci3n obligatoria de controversias relacionadas con la constituci3n de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones y los reglamentos administrativos" adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992.
Conoci3 en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- DECLÁRANSE EXEQUIBLES la "Constituci3n de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones" y el "Protocolo Facultativo sobre la soluci3n obligatoria de controversias relacionadas con la Constituci3n de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones y los Reglamentos Administrativos", instrumentos adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992, así como la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, dictada por el Congreso de Colombia con el objeto de aprobarlos, con excepci3n de los artículos 34 y 36 de la Constituci3n de la UIT, que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constituci3n Política, el Presidente de la Repúblics sólo podrá manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por los mencionados instrumentos internacionales formulando la correspondiente reserva en cuanto a los artículos declarados inexecutable.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba la "Constituci3n de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones" y el "Protocolo facultativo sobre la soluci3n obligatoria de controversias relacionadas con la constituci3n de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Uni3n Internacional de Telecomunicaciones y los reglamentos administrativos" adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992.

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-377/96
Fecha de la sentencia	agosto veintidós (22) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisión de la constitucionalidad de la Ley 253 de diciembre 29 de 1995 "Por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación", celebrado en Basilea el 22 de marzo de 1989.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>Primero: DECLARAR EXEQUIBLE el "Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación" hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 y la Ley 253 de 1995 aprobatoria del mismo, bajo la condición de que el Gobierno de Colombia, formule una declaración o manifestación, acogién dose al artículo 26 de dicho Convenio, en el sentido de que el artículo 81 de la Constitución prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.</p> <p>Segundo: ORDENAR la comunicación de la presente decisión a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de la constitucionalidad de la Ley 253 de diciembre 29 de 1995 "Por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación", celebrado en Basilea el 22 de marzo de 1989.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-359/96
Fecha de la sentencia	agosto catorce (14) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 257 de enero 15 de 1996 por medio del cual se aprueba "El Convenio Internacional de Constituci3n de un Fondo Internacional de Indemnizaci3n de Daños Causados por la Contaminaci3n de Hidrocarburos".
Conoci3 en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Decision	Primero. DECLARAR EXEQUIBLES el Convenio Internacional de Constituci3n de un Fondo Internacional de Indemnizaci3n de Daños Causados por la Contaminaci3n de Hidrocarburos, suscrito en Bruselas el 18 de diciembre de 1971, y su Protocolo Modificatorio del 19 de noviembre de 1976. Segundo. DECLARAR EXEQUIBLE la ley 257 de 1996, por medio de la cual se aprueban los referidos Convenio y Protocolo
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 257 de enero 15 de 1996 por medio del cual se aprueba "El Convenio Internacional de Constituci3n de un Fondo Internacional de Indemnizaci3n de Daños Causados por la Contaminaci3n de Hidrocarburos".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-383/96
Fecha de la sentencia	agosto veintidós (22) de mil novecientos noventa y seis (1996),
Demandante	
Demandado	Revisión de la constitucionalidad de la Ley 265 de enero 25 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el "CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL", suscrito en la Haya el 29 de mayo de 1993".
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional", suscrito en la Haya el 29 de mayo de 1993. Segundo: Declarar EXEQUIBLE la ley 265 de 1996 por medio de la cual se aprobó el "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional", suscrito en la Haya el 29 de mayo de 1993. Tercero: Ordenar la comunicación de la presente decisión a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de la constitucionalidad de la Ley 265 de enero 25 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el "CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL", suscrito en la Haya el 29 de mayo de 1993".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-442/96
Fecha de la sentencia	Septiembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 267 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS', hecho en Washington el 18 de marzo de 1965"
Conoci3 en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p><b>DECLARAR EXEQUIBLE</b> el "CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS", hecho en Washington el 15 de marzo de 1965 y la Ley 267 de 1995 que lo aprueba.</p> <p>Aclarar la Sentencia C-442 de 1996 en el sentido de que la Ley 267, "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS', hecho en Washington el 18 de marzo de 1965", fue sancionada y publicada en el a1o de 1996 y, en consecuencia, toda referencia a la Ley 267 de 1995 debe entenderse hecha a la Ley 267 de 1996.</p> <p>Segundo.- El presente auto se publicar1 en la Gaceta de la Corte Constitucional, conjunto a la Sentencia C-442 de 1996.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	SENTENCIA No. C-037/96
Fecha de la sentencia	cinco (5) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del proyecto de ley n3mero 58/94 Senado y 264/95 C3mara, "Estatutaria de la Administraci3n de Justicia".
Conoci3 en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, desde el punto de vista formal, el proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 C3mara, "Estatutaria de la Administraci3n de Justicia".</p> <p>SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES el art3culo 1o; el art3culo 2o; el art3culo 4o, salvo el par3grafo; el art3culo 6o, salvo la expresi3n "que habr3n de liquidarse en todos los procesos sin excluir a las entidades p3blicas"; el art3culo 7o; el art3culo 9o, salvo la expresi3n "De todas maneras se preservar3 la diversidad cultural de las comunidades ind3genas"; el art3culo 11, salvo el numeral 2o del literal c), el literal f) y el Par3grafo 3; el art3culo 13; el art3culo 15, salvo la expresi3n "para un per3odo de un a3o"; el art3culo 18; el art3culo 19; el art3culo 20, salvo la expresi3n "para per3odos de un a3o" del numeral 2o y la totalidad del numeral 3o; el art3culo 22; el art3culo 26; el art3culo 27; el art3culo 28; el art3culo 29, salvo el inciso tercero; el art3culo 30; el art3culo 33; el art3culo 34; el art3culo 35, salvo la expresi3n "al igual que autorizar los traslados de Consejeros, entre las Salas o Secciones, con car3cter temporal o definitivo, cuando a ello hubiere lugar", contenida en el numeral 1o; el art3culo 39; el art3culo 40; el art3culo 41, salvo el segundo inciso del numeral 2o, los numerales 5o y 6o y la expresi3n "o el reglamento" del numeral 7o; el art3culo 43; el art3culo 44, salvo el 3ltimo inciso; 3nicamente la expresi3n "Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a control en los t3rminos del art3culo 241 de la Constituci3n Pol3tica, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario" del art3culo 45; el art3culo 53, salvo las expresiones "dentro de las cuales por lo menos la mitad deber3n pertenecer a carrera judicial", "por la llegada a la edad de retiro forzoso" y "o por renuncia"; el art3culo 54, salvo las expresiones "salvo lo previsto en el art3culo 37-7 de la presente Ley o cuando se trate de elecciones, en cuyo caso se efectuar3 por las dos terceras partes de los integrantes de la Corporaci3n"; el art3culo 59; el art3culo 60, salvo la expresi3n "o de suspensi3n sin derecho a sueldo hasta por cinco d3as, trat3ndose de funcionarios o empleados"; el art3culo 61; el art3culo 65; el art3culo 72, salvo el 3ltimo inciso; el art3culo 75; el art3culo 76; el art3culo 77;</p>

	<p>el artículo 78; el artículo 81; el artículo 82; el artículo 84; el artículo 86; el artículo 87; el artículo 88; el artículo 89; el artículo 90; el artículo 92; el artículo 93; el artículo 94; el artículo 98, salvo las expresiones “así: uno” y “unos por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y uno por la Academia Colombiana de Jurisprudencia”; el artículo 102; el artículo 110; el artículo 113; el artículo 115; el artículo 120, salvo la expresión “La función jurisdiccional disciplinaria, de acuerdo con el plan que deberá adoptarse para el efecto, se realizará también en forma oficiosa y sistemática, en forma tal que en el curso del año todos los despachos judiciales sean objeto de supervisión adecuada”; el artículo 121; el artículo 122; el artículo 126, salvo los dos últimos incisos; el artículo 128, salvo el Parágrafo 2o; el artículo 129, salvo la expresión “o los reglamentos”; el artículo 131; el artículo 132; el artículo 133; el artículo 135; el artículo 137; el artículo 138; el artículo 139; el artículo 141; el artículo 142; el artículo 143; el artículo 145; el artículo 146; el artículo 147; el artículo 148; el artículo 152; el artículo 156; el artículo 157; el artículo 158, salvo la expresión “Disciplinarias” y el último inciso; el artículo 160; el artículo 161; el artículo 162; el artículo 163, salvo la expresión “de los recursos humanos”; el artículo 165; el artículo 170; el artículo 171; el artículo 172; el artículo 173; el artículo 174; el artículo 175; el artículo 176; el artículo 177; el artículo 178; el artículo 179, salvo las expresiones “La Comisión está integrada por quince (15) miembros elegidos por la Cámara de Representantes, por el sistema del cuociente electoral” y “para lo cual se correrá traslado por el término de veinte (20) días”; el artículo 183, salvo el último inciso; el artículo 194; el artículo 195; el artículo 197, salvo la expresión “La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los aspectos procesales de esta última atribución”; el artículo 198; el artículo 200; el artículo 203, salvo la expresión “en los términos del parágrafo del artículo 312 del Decreto 663 de 1993”; únicamente el primer inciso del artículo 205, así como el último inciso del Parágrafo 1o; el artículo 208, salvo la expresión “El incumplimiento de esta obligación, constituye causal de mala conducta”; y el artículo 210 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.</p> <p>TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, el artículo 3o; el artículo 5o; el artículo 8o; el artículo 12; el artículo 16, salvo los incisos 3o y 4o; el artículo 17, salvo el numeral 6o; el artículo 21; el artículo 23, salvo la expresión “El Fiscal General de la Nación podrá delegar, bajo su responsabilidad, las funciones especiales de que trata el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”; el artículo 31; el artículo 36, salvo la expresión “Con todo, la Sala Plena de la Corporación podrá habida cuenta de las necesidades de trabajo y</p>
--	---

	<p>del servicio, reagrupar las dos subsecciones en una sola sección”; el artículo 37, salvo las expresiones “las dos terceras partes de” y “el artículo 183 de” del numeral 7o, “de Apelación” del numeral 8o e “y el reglamento” del último inciso; el artículo 38 salvo las expresiones “de carácter constitucional y administrativo” y “por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia” del numeral 1o, así como “y el reglamento” del numeral 6o; el artículo 42; el artículo 46; el artículo 47; el artículo 48, salvo las expresiones “Sólo” y “el Congreso de la República” del numeral 1o; únicamente las expresiones “El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo” y “la decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado” del artículo 49; el artículo 50; el artículo 52; el artículo 55 salvo las expresiones “En desarrollo del principio de eficiencia, en las providencias no se podrá hacer la transcripción integral de las diligencias judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso. Así mismo en ningún caso le será permitido al funcionario ni a los sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ellos se deriven”, “y su rigorismo jurídico”, e “y las conclusiones jurídicas a que haya lugar, así como el aporte razonado a la ciencia jurídica”; el artículo 56; el artículo 57; el artículo 58, salvo el Numeral 2o, y las expresiones “tanto a los funcionarios y empleados de su dependencia”, prevista en el inciso primero y “disciplinarias ni”, contenida en el parágrafo; el artículo 61; el artículo 63; el artículo 66; el artículo 67; el artículo 68; el artículo 69; el artículo 70; el artículo 71, salvo la expresión “En aplicación del inciso anterior, lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación equivaldrá a condena”; el artículo 73, salvo el Parágrafo Transitorio; el artículo 74; el artículo 79, salvo la expresión “para períodos de un año” del numeral 5o; el artículo 85, salvo la expresión “dentro de las cuales por lo menos la mitad deberá incluir a funcionarios de la Carrera Judicial” contenida en el numeral 10o; el artículo 91; el artículo 95; el artículo 96; el artículo 97, salvo la referencia al número “6” contenida en el numeral 3o, así como el numeral 6o; el artículo 99, salvo la expresión “los reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura” del numeral 9o; el artículo 100; el artículo 101; el artículo 103; el artículo 104; el artículo 105; el artículo 106; el artículo 107; el artículo 108, salvo la expresión “El incumplimiento o la demora en el envío de dicha información por parte de los funcionarios responsables en cada entidad, será causal de mala conducta”; el artículo 109; el artículo 111; el artículo 114, salvo el numeral 1o; el artículo 127; el artículo 134; el artículo 136; el artículo 140, salvo las</p>
--	---

	<p>expresiones “Previa aprobación de” y “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”; el artículo 144, salvo la expresión “tres días de”; el artículo 150; el artículo 151; el artículo 153, salvo las expresiones “Su incumplimiento constituye causal de mala conducta” del numeral 7o y “haciendo testar las frases inconvenientes” del numeral 21, así como los numerales 16 y 17; el artículo 154, salvo la expresión “o cualquier actividad lucrativa” contenida en el numeral 17; el artículo 155; el artículo 159; el artículo 164; el artículo 166; el artículo 167; el artículo 168; el artículo 169; el artículo 180, salvo los numerales 1o, 2o, 3o y 7o; el artículo 181; el artículo 182, salvo la expresión: “y hará tránsito a cosa juzgada. A partir de la vigencia de la presente ley, el mismo efecto tendrán los autos inhibitorios que se dicten respecto de los funcionarios con fuero constitucional de juzgamiento”; el artículo 199; el artículo 202; y el artículo 204 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.</p> <p>CUARTO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 51 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, bajo el entendido de que las decisiones que sobre el particular adopte la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no cobijan la organización básica interna de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.</p> <p>QUINTO.- Declarar EXEQUIBLE, bajo las condiciones expuestas en esta providencia, el artículo 64 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, salvo las expresiones “una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada”, “En todo caso, no podrán emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos. La infracción a la norma contenida en este artículo constituye causal de mala conducta”, e “y bases de datos”, que se declaran INEXEQUIBLES. La exequibilidad del artículo igualmente se condiciona a que el respectivo reglamento interno de cada Corporación judicial defina lo concerniente a la obtención y suministro de copias de las providencias y demás documentos judiciales.</p> <p>SEXTO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 80 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, bajo el entendido de que la invitación a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura por parte del Congreso de la República, únicamente cobija a los magistrados de la Sala Administrativa de dicha Corporación judicial.</p> <p>SEPTIMO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 83 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, salvo la expresión “para un período de cuatro años. Estos funcionarios podrán ser reelegidos” que se declara</p>
--	---

	<p>INEXEQUIBLE. En consecuencia, se entiende que los magistrados de las salas administrativas de los Consejos seccionales de la judicatura, deben pertenecer al sistema de carrera.</p> <p>OCTAVO.- Declarar EXEQUIBLE, pero bajo las condiciones expuestas en esta providencia el artículo 112 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, salvo la expresión “los directores nacional y regionales mientras existan y seccionales de fiscalías, el director ejecutivo y directores seccionales de la administración judicial y de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura”, que se declara INEXEQUIBLE. En consecuencia, se entiende que el control disciplinario sobre el director ejecutivo lo ejercerá la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y este, a su vez, lo ejercerá sobre los directores seccionales de administración judicial. En cuanto a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura, el control le corresponde ejercerlo al respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de la actuación preferente del jefe del Ministerio Público.</p> <p>NOVENO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 125 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, bajo el entendido de que los magistrados auxiliares que pertenecen a las altas cortes de la rama judicial, habida cuenta de la naturaleza de las responsabilidades legales que les corresponde desempeñar, se encuentran facultados para la práctica de las pruebas que les sean comisionadas por el titular del despacho judicial.</p> <p>DECIMO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 130 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, salvo las expresiones “de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura”, prevista en el inciso 1o, “y Directores Administrativos”, “los empleados de confianza y manejo de las Divisiones y Unidades de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura”, “jefes de Oficina de la Fiscalía General”, y “jefes de División de la Fiscalía General; Director de Escuela”, de que trata el inciso 4o, e “y empleados” señalada en el Parágrafo Transitorio que se declaran INEXEQUIBLES. En cuanto a la expresión “o lleguen a la edad de retiro forzoso”, contenida en el inciso segundo, deberá interpretarse según los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia No. C-351/95.</p> <p>UNDECIMO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 149 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, bajo el entendido de que el numeral 4o deberá interpretarse según los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia No. C-351/95.</p> <p>DUODECIMO.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 193 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, salvo el Parágrafo que se declara</p>
--	---

	<p>EXEQUIBLE, bajo el entendido de que sus efectos sólo recaen sobre los funcionarios y empleados que al momento de expedición de la ley, hubiesen sido vinculados a la rama judicial a través de concurso de méritos. En este caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deberá adelantar todos los trámites necesarios para incorporarlos al régimen de carrera, siempre y cuando reúnan los requisitos adicionales que la ley hubiese previsto para tales eventos.</p> <p>DECIMOTERCERO.- Declarar INEXEQUIBLES el parágrafo del artículo 4o; la expresión “que habrán de liquidarse en todos los procesos sin excluir a las entidades públicas” del artículo 6o; la expresión “De todas maneras se preservará la diversidad cultural de las comunidades indígenas” del artículo 9o; el artículo 10o; el numeral 2o del literal c), el literal f) y el Parágrafo 3 del artículo 11; el artículo 14; la expresión “para un período de un año” del artículo 15; los incisos 3o y 4o del artículo 16; el numeral 6o del artículo 17; la expresión “para períodos de un año” del numeral 2o y la totalidad del numeral 3o del artículo 20; la expresión “El Fiscal General de la Nación podrá delegar, bajo su responsabilidad, las funciones especiales de que trata el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia” del artículo 23; el artículo 24; el artículo 25; el inciso tercero del artículo 29; el artículo 32; la expresión “al igual que autorizar los traslados de Consejeros, entre las Salas o Secciones, con carácter temporal o definitivo, cuando a ello hubiere lugar”, contenida en el numeral 1o del artículo 35; la expresión “Con todo, la Sala Plena de la Corporación podrá habida cuenta de las necesidades de trabajo y del servicio, reagrupar las dos subsecciones en una sola sección” del artículo 36; las expresiones “las dos terceras partes de” y “el artículo 183 de” del numeral 7o, “de Apelación” del numeral 8o e “y el reglamento” del último inciso del artículo 37; las expresiones “de carácter constitucional y administrativo” y “por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia” del numeral 1o, así como “y el reglamento” del numeral 6o del artículo 38; el segundo inciso del numeral 2o, los numerales 5o y 6o y la expresión “o el reglamento” del numeral 7o del artículo 41; el último inciso del artículo 44; el artículo 45, salvo la expresión “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”; las expresiones “Sólo” y “el Congreso de la República” del numeral 1o del artículo 48; el artículo 49, salvo las expresiones “El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo” y “la decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso</p>
--	---

	<p>Administrativo del Consejo de Estado”; las expresiones “dentro de las cuales por lo menos la mitad deberán pertenecer a carrera judicial”, “por la llegada a la edad de retiro forzoso” y “o por renuncia” del artículo 53; las expresiones “salvo lo previsto en el artículo 37-7 de la presente Ley o cuando se trate de elecciones, en cuyo caso se efectuará por las dos terceras partes de los integrantes de la Corporación” del artículo 54; las expresiones “En desarrollo del principio de eficiencia, en las providencias no se podrá hacer la transcripción integral de las diligencias judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso. Así mismo en ningún caso le será permitido al funcionario ni a los sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ellos se deriven”, “y su rigorismo jurídico”, e “y las conclusiones jurídicas a que haya lugar, así como el aporte razonado a la ciencia jurídica” del artículo 55; el Numeral 2o, y las expresiones “tanto a los funcionarios y empleados de su dependencia”, prevista en el inciso primero; y “disciplinarias ni”, contenida en el párrafo del artículo 58; la expresión “o de suspensión sin derecho a sueldo hasta por cinco días, tratándose de funcionarios o empleados” del artículo 60; el artículo 62; la expresión “En aplicación del inciso anterior, lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación equivaldrá a condena” del artículo 71; el último inciso del artículo 72; el Párrafo Transitorio del artículo 73; la expresión “para períodos de un año” del numeral 5o del artículo 79; la expresión “dentro de las cuales por lo menos la mitad deberá incluir a funcionarios de la Carrera Judicial” contenida en el numeral 10o del artículo 85; la referencia el número “6” contenida en el numeral 3o, así como el numeral 6o del artículo 97; las expresiones “así: uno” y “unos por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y uno por la Academia Colombiana de Jurisprudencia” del artículo 98; la expresión “los reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura” contenida en el numeral 9o del artículo 99; la expresión “El incumplimiento o la demora en el envío de dicha información por parte de los funcionarios responsables en cada entidad, será causal de mala conducta” del artículo 108; el numeral 1o del artículo 114; el artículo 116; el artículo 117; el artículo 118; el artículo 119; la expresión “La función jurisdiccional disciplinaria, de acuerdo con el plan que deberá adoptarse para el efecto, se realizará también en forma oficiosa y sistemática, en forma tal que en el curso del año todos los despachos judiciales sean objeto de supervisión adecuada” del artículo 120; el artículo 123; el artículo 124; la expresión “De los recursos humanos de la Rama Judicial”, enunciada en el Título Sexto; los dos últimos incisos del artículo 126; el Párrafo 2o del artículo 128; la expresión “o los reglamentos” del artículo 129; las expresiones “Prevía aprobación de” y “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”</p>
--	--



	del artículo 140; la expresión “tres días de” del artículo 144; las expresiones “Su incumplimiento constituye causal de mala conducta” del numeral 7o y “haciendo testar las frases inconvenientes” del numeral 21, así como los numerales 16 y 17 del artículo 153; la expresión “o cualquier actividad lucrativa” contenida en el numeral 17 del artículo 154; la expresión “Disciplinarias” y el último inciso del artículo 158; la expresión “de recursos humanos” del artículo 163; las expresiones “La Comisión está integrada por quince (15) miembros elegidos por la Cámara de Representantes, por sistema del cociente electoral” y “para lo cual se correrá traslado por el término de veinte (20) días” del artículo 179; los numerales 1o, 2o, 3o y 7o del artículo 180; la expresión: “y hará tránsito a cosa juzgada. A partir de la vigencia de la presente ley, el mismo efecto tendrán los autos inhibitorios que se dicten respecto de los funcionarios con fuero constitucional de juzgamiento” del artículo 182; el último inciso del artículo 183; el artículo 184; el artículo 185; el artículo 186; el artículo 187; el artículo 188; el artículo 189; el artículo 190; el artículo 191; el artículo 192; el artículo 196; la expresión “La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los aspectos procesales de esta última atribución” del artículo 197; el artículo 201; la expresión “en los términos del parágrafo del artículo 312 del Decreto 663 de 1993” contenida en el artículo 203; el artículo 205, salvo el inciso primero y el último inciso del Parágrafo 1o; el artículo 206; el artículo 207; la expresión “El incumplimiento de esta obligación, constituye causal de mala conducta” del artículo 208; y el artículo 209 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI.DR. HERNANDO HERRERA VERGARA. El suscrito Magistrado se permite consignar el salvamento de voto parcial formulado en su oportunidad en relación con el artículo 130 del proyecto de ley Estatutaria de la Administración de Justicia en sus incisos 4o.y 5o., en cuanto señalan algunos cargos como de libre nombramiento y remoción y otros de carrera dentro de la Fiscalía General de la Nación. La discrepancia del suscrito consiste en que, de acuerdo al artículo 159 del mismo proyecto, se establece que la Fiscalía General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de carrera, orientado a

	<p>garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman.</p> <p>Igualmente, en el mismo precepto declarado exequible por la Corte en la sentencia en referencia, se expresa que “los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera, serán los previstos en la ley”. Lo anterior indica que como es fácil de observar, al declararse exequible la norma contenida en el artículo 159 mencionado, según la cual corresponde a la ley determinar los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera en la Fiscalía General de la Nación, resulta contradictorio que en el artículo 130 numerales 4o. y 5o., se haga el señalamiento de los cargos que son de libre nombramiento y remoción y de carrera en la Fiscalía General de la Nación, cuando en el artículo 159 ibídem se le dejó dicha prerrogativa “a la ley”, más aún cuando es bien sabido, y se ha expresado en la misma sentencia, una ley estatutaria como la que es materia de revisión que realiza dicha clasificación, no puede ser modificada por una ley ordinaria, a la que se refiere el artículo 159 de la ley Estatutaria de la Administración de Justicia.</p> <p>SI, DR. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO</p> <p>Con el debido respeto me permito consignar a continuación las razones por las cuales disiento de la decisión de esta Corporación que declaró exequible el último inciso del parágrafo del artículo 205, según el cual "en todo caso la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999".</p> <p>1- La justicia regional está estructurada, en gran parte, en torno a la reserva de la identidad de los testigos y de los funcionarios judiciales. Mi objeción a la decisión de la Corte es que considero que la reserva de identidad de los funcionarios judiciales vulnera la Carta, por lo cual la Corte no podía declarar exequible, en forma simple, el mantenimiento, aun cuando sea temporal, de la justicia regional. La Corporación debió señalar que la justicia regional se mantenía a más tardar hasta el 30 de junio de 1999, salvo en lo relativo al carácter secreto de los funcionarios judiciales, por ser tal regulación violatoria de la Carta.</p> <p>2- En otras decisiones he aceptado que, por las muy difíciles condiciones que vive el país, la reserva de la identidad de testigos es un mecanismo constitucional válido, a fin de proteger la vida y la seguridad personal de los testigos. Sin embargo siempre he entendido que, conforme a la propia doctrina de esta Corporación, la reserva de la identidad de los testigos sólo es constitucional en la medida en que sea excepcional y compatible con el debido proceso. Así frente a los testigos, es necesario que el procesado goce "de todas las posibilidades de controvertir las pruebas que se esgrimen en su contra y de hacer valer aquellas que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido proceso en lo relativo al régimen probatorio ". Con base en tal criterio apoyé, por</p>
--	--

	<p>ejemplo, la decisión de la Coporación de declarar inexequibles los incisos 2º y 3º del artículo 293 del C.P.P, que extendían la reserva a apartes de la declaración, cuando ello permitiera la identificación del testigo, pues esos incisos "violan el derecho de defensa del sindicado, toda vez que al imponerse la reserva a algunos apartes de la declaración del testigo no puede ejercer adecuadamente su derecho a controvertir las pruebas allegadas en su contra (art. 29 C.P) ". Considero entonces que, con esas limitaciones, la reserva de la identidad de los testigos se ajusta a la Carta.</p> <p>3- En cambio, me parece que la reserva de la identidad de los funcionarios judiciales desconoce la Constitución, pues limita al procesado el derecho a examinar la imparcialidad del juez (CP art. 29), con lo cual también se violan los artículos 8º de la Convención Interamericana y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que consagran que el tribunal debe ser independiente e imparcial, por lo cual el justiciable tiene derecho a que se examine si quien lo juzga reúne tales características. En efecto, si el funcionario judicial es secreto, ¿cómo puede el procesado tener una garantía de su imparcialidad?</p> <p>4- Podría sostenerse que es incongruente aceptar la constitucionalidad -con las limitaciones señaladas- de la reserva de identidad de los testigos y -al mismo tiempo- impugnar la legitimidad de esa misma reserva para los funcionarios judiciales. Sin embargo no lo creo pues la situación de unos y otros es diversa, tanto por la calidad jurídica de las personas como por sus implicaciones sobre el debido proceso.</p> <p>De un lado, el testigo es un ciudadano ordinario que, por situaciones coyunturales, conoce del desarrollo de un ilícito. Esta persona tiene el deber de colaborar con las autoridades (CP art. 95 ord 7º), y por ende debe informarles de lo que sabe, salvo si ello implica una declaración contra sí mismo o contra sus familiares cercanos (CP art. 33). Pero resulta desproporcionado exigir de ese ciudadano que cumpla con ese deber constitucional de colaboración con la justicia, poniendo en riesgo su vida o la de sus familiares. Esa persona no tiene por qué soportar esa carga, pues ella dista de ser una exigencia ordinaria de la vida en sociedad. Además, la Constitución ordena expresamente a la Fiscalía proteger a estos testigos (CP art. 250 ord 4º), por lo cual se justifica que, dentro de las diversas medidas de protección, se consagre la reserva de identidad, siempre y cuando ella sea compatible con el debido proceso. En cambio, el juez o fiscal es un funcionario público que ha aceptado, al asumir tal función, ciertas cargas que van más allá de las que deben soportar los ciudadanos ordinarios, por lo cual la reserva de identidad frente a ellos no me parece justificada.</p> <p>De otro lado, la propia Corte ha señalado que la prueba con base en testigos secretos no puede ser determinante en el proceso, y que precisamente eso es lo que justifica su constitucionalidad. Por ello la Coporación declaró inexequible la posibilidad de que se</p>
--	--

	<p>condenara a un procesado únicamente con base en testigos secretos, pues ello "vulnera los principios de la seguridad jurídica y publicidad de la sentencia, las garantías mínimas del procesado y el derecho al debido proceso" . En cambio, el funcionario judicial con reserva de identidad es determinante en las decisiones y dirige enteramente el proceso. Por consiguiente el procesado queda totalmente sometido a un funcionario, con respecto al cual no puede examinar la imparcialidad y que, sin embargo, será quien tome todas las decisiones relativas a su libertad, tanto provisionales -medidas de aseguramiento- como definitivas -sentencias-. Eso me parece que vulnera el derecho de toda persona a que se le garantice un tribunal imparcial e independiente.</p> <p>5- Una precisión final: no desconozco los enormes riesgos que enfrentan, en forma valerosa, los funcionarios judiciales que investigan delitos de la criminalidad organizada. Por ello, al considerar inexequible la reserva de la identidad de esos funcionarios, no lo hago para pedir el heroísmo y sacrificio de tales funcionarios, ni menos aún para que ellos queden inermes ante las amenazas de poderosas organizaciones delincuenciales. Es deber del Estado brindarles una especial protección, que asegure no sólo su vida e integridad sino también su imparcialidad, pues ésta se puede ver afectada por las presiones criminales. Simplemente creo que esa necesaria protección no puede hacerse a expensas del debido proceso y del derecho de defensa del procesado pues, como ya lo ha señalado esta Corporación, en las democracias constitucionales, los derechos de las personas son el "fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius punendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas ."</p> <p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.</p> <p>Me separo parcialmente de la decisión adoptada por la Corte en cuanto a la exequibilidad del inciso primero del artículo 64 del proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia.</p> <p>Los motivos que me llevan a discrepar de la Sentencia son básicamente los mismos que aparecen consignados en el salvamento de voto depositado por el suscrito, junto con los magistrados Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa, en lo relativo a la reserva en procesos disciplinarios, y en la adición que a ese salvamento presenté de manera individual, en lo referente a la reserva en procesos penales.</p> <p>Unas breves consideraciones son suficientes para entender mi posición:</p> <p>1. En cuanto a los procesos disciplinarios, la prohibición a todo servidor público (en las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales, según lo ha entendido la Corte en la Sentencia) de divulgar, revelar o publicar las</p>
--	--

	<p>actuaciones que conozca en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad mientras no se encuentre en firme el fallo disciplinario, equivale a la prohibición, también absoluta y a mi juicio inconstitucional, que se plasmó en el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y, por tanto, caben aquí las mismas glosas que en ese caso dejamos consignadas los magistrados que salvamos el voto.</p> <p>Me permito repetir algunos de los argumentos:</p> <p>"...nos lleva a discrepar de lo fallado la circunstancia incontrovertible de que con esta disposición se afecta de manera grave la libertad de información y se plasma, quíerese o no, una inconcebible censura de prensa.</p> <p>Nuestra certidumbre a ese respecto se deriva del mismo tenor literal de la norma, que, más allá de cualquier precaución enderezada a preservar la honra y el buen nombre de los implicados en la investigación y mucho más lejos de lo previsto en la normatividad ordinaria para los procesos penales (que contemplan un etapa pública, como es la del juicio), impone, para los asuntos disciplinarios, una reserva absoluta desde las primeras diligencias hasta el momento del fallo.</p> <p>Bien conocido es el criterio de la Corte Constitucional, al parecer olvidado en este caso, acerca de la esencia del derecho a la información, que se concibe como "de doble vía", puesto que en él no sólo están interesados los medios y los periodistas, como emisores de la noticia, sino la comunidad, como receptora de la información, que según el artículo 20 de la Carta tiene derecho a recibirla veraz e imparcial.</p> <p>En el presente caso, la norma examinada cercenó de tajo el derecho a la información en los dos sentidos expuestos; privó a los medios de la posibilidad lícita de buscar la información en los entes investigativos; hizo posible que se instauraran los procesos disciplinarios secretos; y, por contera, cerró toda posibilidad de que la ciudadanía pudiera conocer desde el principio que tales procesos se adelantan, cuándo, contra quiénes y porqué.</p> <p>Con disposiciones como la analizada se evita sin duda que sobre los funcionarios públicos pueda ejercerse un control social, que en nuestro criterio resulta imperativo en un medio como el nuestro, en el cual se hace visible un grave y progresivo mal que los colombianos denominamos "corrupción administrativa" y que cabalmente constituye objeto de estatutos como el consagrado en la Ley 190 de 1995".</p> <p>No puedo dejar que pase inadvertida la inconsistencia entre los dos fallos -éste que ahora nos ocupa y el relativo al Estatuto Anticorrupción-, pues mientras en lo referente al artículo 33 de la Ley 190 de 1995 la Corte Constitucional condiciona la exequibilidad a la posibilidad de divulgar informaciones sobre el proceso disciplinario una vez efectuada la práctica de pruebas, ese mismo condicionamiento no se hace en esta oportunidad, de lo cual</p>
--	--

	<p>resulta el contrasentido de que unos procesos disciplinarios -los relativos a funcionarios de la Rama Judicial sometidos a la jurisdicción de las salas disciplinarias del Consejo de la Judicatura a nivel nacional y seccional- son reservados en su totalidad hasta el momento del fallo, mientras que otros procesos disciplinarios -los que se adelantan contra funcionarios administrativos- solamente son reservados hasta el momento de la práctica de pruebas, sin ninguna razón plausible que justifique la diferencia.</p> <p>2. En cuanto a los procesos penales, reitero mi personal criterio, en el sentido de que la reserva del sumario no puede implicar una prohibición absoluta de divulgar datos básicos, de gran valor para la sociedad, como son los referentes a que hay un proceos en marcha, unos sindicados y la entidad a la cual pertenecen y unos delitos por los cuales se investiga (artículo 78 de la Ley 190 de 1995), sin necesidad de que se haya dictado medida de aseguramiento.</p> <p>Si ello es así -como creo que es-, también es violada la libertad de información plasmada en el artículo 20 de la Carta cuando se dispone de manera absoluta que ningún servidor público podrá en materia penal divulgar, revelar o publicar las actuaciones que conozca en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad mientras no se encuentre en firme la resolución de acusación.</p> <p>No es que el suscrito estime que la reserva del sumario es inconstitucional, pues poderosos motivos la hacen indispensable en cuanto al fondo mismo de la investigación que se adelanta, para no entorpecerla ni frustrarla, sino que resulta inaceptable la oscuridad absoluta, que implica -en esta norma, a diferencia de la del artículo 78 del Estatuto Anticorrupción- la imposibilidad de conocer inclusive los aludidos datos (que hay una investigación, los delitos por los cuales se adelanta, los nombres de los investigados y la entidad a la que pertenecen), ni siquiera en el evento de que se haya dictado medida de aseguramiento.</p> <p>Si me pareció inconstitucional la restricción en cuanto a esos datos por ser supeditada a la efectividad de la medida de aseguramiento, es natural que sostenga la inexequibilidad de la norma estatutaria ahora examinada, pues es más restrictiva que la otra.</p> <p>Ahora bien, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia es posterior a la Ley 190 de 1995. Me pregunto si, respecto de las informaciones en cuestión, la norma del artículo 78 del Estatuto Anticorrupción ha sido derogada por el artículo 64 del que se ocupa la Corte.</p> <p>SI DRES. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO y VLADIMIRO NARANJO MESA</p> <p>Los suscritos magistrados, , salvan parcialmente su voto respecto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena de la Corporación, a propósito de la declaración de exequibilidad del artículo 61 del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, el cual fue revisado por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. C-037 del cinco</p>
--	---

	<p>(5) de febrero de 1996.</p> <p>En primer lugar, consideran los suscritos magistrados que los conjuces son personas que administran justicia, pues al ser transitoriamente miembros de una corporación judicial -tribunales o cortes-, participan, al igual que cualquier otro magistrado, en la toma de decisiones respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento, a tal punto que ellos deben igualmente firmar las providencias que se profieran.</p> <p>De acuerdo con lo señalado, cabe preguntarse: ¿Los conjuces, en el ejercicio de administrar justicia, son particulares o son servidores públicos? Al respecto, el artículo 123 de la Carta, establece:</p> <p>“Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.</p> <p>“Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.</p> <p>“La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”.</p> <p>A la luz de este precepto resulta claro que los conjuces no pueden revestir la categoría de servidores públicos, toda vez que no son miembros de las corporaciones públicas, ni empleados o trabajadores del Estado. Debe incluso aclararse que el hecho de que una corporación judicial elija una lista de conjuces, no significa que ellos, por ese simple hecho, sean servidores públicos, pues de ser ello así, entonces debería aplicárseles igualmente todo el régimen previsto en la Constitución para estos funcionarios, lo cual constituye un despropósito de tal magnitud que no resiste ninguna consideración jurídica y menos una de orden constitucional. Por tales motivos, debe aceptarse que los conjuces serían en realidad particulares que desempeñan transitoriamente funciones públicas.</p> <p>Visto lo anterior, surge entonces la necesidad de enmarcar la figura de los conjuces dentro de los órganos o personas que la Carta Política faculta para administrar justicia. El artículo 116 de la Constitución se ocupa de estos asuntos, y señala, como competentes para ejercer la función judicial en Colombia, a los órganos que hacen parte de la rama judicial, al Congreso de la República en las condiciones que determina la Carta y a las autoridades administrativas de acuerdo con las prescripciones legales. Igualmente, el último inciso de la mencionada norma superior prevé:</p> <p>“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.</p> <p>Debe advertirse que esta disposición fue consecuencia de diversos debates en la Asamblea Nacional Constituyente, los cuales llevaron</p>
--	--

	<p>a que esa Corporación determinara en forma expresa las circunstancias en las cuales los particulares deberían administrar justicia, esto es, sólo como conciliadores o cómo árbitros.</p> <p>De otra parte, para efectos de responder al cuestionamiento anterior, se considera pertinente transcribir las consideraciones expuestas en una de las sentencias de la Corte, a propósito de la naturaleza jurídica de los jurados de derecho, los cuales se encontraban previstos en los artículos 66 y 74 del Código de Procedimiento Penal. Dijo, entonces, la Corte:</p> <p>“Ahora bien, se pregunta de nuevo la Corte, ¿los jurados de derecho son particulares o son servidores públicos?</p> <p>“Como administradores de justicia los jurados de derecho serían particulares que transitoriamente son investidos de funciones públicas, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución, que dice (...).</p> <p>“Se observa pues que el constituyente separó intencionalmente los servidores públicos de los particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas. En otras palabras, del hecho de que la ley -arts. 66, 74 y 458 a 466 CPP- regule el ejercicio de los jurados de derecho en términos muy similares o equivalentes o compatibles con la calidad de los servidores públicos no se sigue, por ese solo hecho, que aquéllos ostenten ésta calidad. En realidad ante la claridad del texto constitucional no queda sino concluir que una cosa son los servidores públicos -como los jueces, por ejemplo-, y otra cosa son los particulares ejerciendo transitoriamente funciones públicas -como los jurados de derecho-.</p> <p>“Por último, la Corte se pregunta ¿cuál es el efecto jurídico de considerar que los jurados de derecho son particulares que administran justicia?</p> <p>“La respuesta es simple: estándole constitucionalmente vedado a los particulares ejercer justicia en calidad diferente a la de conciliador o árbitro, la norma que consagra que los particulares podrán administrar justicia en condición de jurados de derecho es una norma contraria a la Constitución. Así lo declarará esta Corporación en la parte resolutive de esta sentencia”.</p> <p>Los argumentos precedentes, resultan también aplicables al caso de la norma en consideración. En efecto, al admitirse que los conjuces administran justicia y que no son servidores públicos en los términos del artículo 123 superior, entonces se trataría de particulares que temporalmente desempeñarían una función pública -la judicial-, situación ésta, que como se ha demostrado, encuentra constitucionalmente vedada por el artículo 116 de la Carta Política.</p> <p>En consecuencia, carece de fundamento el considerar que la figura de los conjuces cuenta con asidero constitucional.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA



Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-682/96
Fecha de la sentencia	diciembre cinco (5) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 280 del 22 de mayo de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Amistad y Cooperaci3n" suscrito entre la Rep3blica de Colombia y la Rep3blica de Suriname en la ciudad de Paramaribo, el 11 de noviembre de 1993.
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	PRIMERO. DECLARAR EXEQUIBLES el Convenio de Amistad y Cooperaci3n entre los Gobiernos de las Rep3blicas de Colombia y Suriname, firmado el 11 de noviembre de 1993, y la ley 280 del 22 de mayo de 1996 que lo aprueba. SEGUNDO. Comuníquese esta decisi3n al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretar3a General de la Presidencia de la Rep3blica, y envíesele copia aut3ntica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del art3culo 241 de la Carta Pol3tica.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 280 del 22 de mayo de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Amistad y Cooperaci3n" suscrito entre la Rep3blica de Colombia y la Rep3blica de Suriname en la ciudad de Paramaribo, el 11 de noviembre de 1993.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-656/96
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Panam3, suscrito en Medell3n el 23 de febrero de 1994 y de la Ley 291 del 16 de julio de 1996 por medio de la cual se aprueba dicho Tratado.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MART3NEZ CABALLERO
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Panam3", suscrito en Medell3n el 23 de febrero de 1994. Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 291 del 16 de julio de 1996, "por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Panam3, suscrito en Medell3n el 23 de febrero de 1994".
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Panam3, suscrito en Medell3n el 23 de febrero de 1994 y de la Ley 291 del 16 de julio de 1996 por medio de la cual se aprueba dicho Tratado.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-315/97
Fecha de la sentencia	junio veinticinco (25) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Germán Eduardo Palacio Zúñiga
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 63 (parcial) de la Ley 38 de 1989
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 63 de la Ley 38 de 1989, modificado por el artículo 34 de la Ley 179 de 1994, en el entendido de que la reducción o aplazamiento total o parcial de las apropiaciones presupuestales no implica la modificación del presupuesto ; y que, además, el Gobierno debe ejercer dicha facultad en forma razonable y proporcionada, respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder y de las entidades autónomas, en los términos consignados en la parte motiva de esta providencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que la norma cuya constitucionalidad cuestiona es violatoria del principio de autonomía administrativa y presupuestal de la Contraloría General de la República, consagrado en el artículo 267 de la Carta Política, en cuanto limita la capacidad de distribución de los recursos.</p> <p>Señala que no obstante que, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 111 de 1996, la Contraloría General de la República hace parte del Presupuesto General de la Nación de conformidad con los artículos 44 y 47 ibídem, dicha entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, y por consiguiente tiene la facultad para ejecutar libremente su presupuesto. Para justificar dicha afirmación, cita el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 23 de noviembre de 1993, CP. Dr. Jaime Betancur Cuartas.</p> <p>Agrega el demandante que la Constitución concibe en el artículo 267 a la Contraloría como un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, proscribiendo la posibilidad de atender funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización y funcionamiento. Dicha autonomía implica la facultad de administrar las partidas asignadas</p>

	<p>para su funcionamiento sin intromisión alguna de funcionario u órgano ajeno o extraño a la entidad.</p> <p>La autonomía presupuestal de la Contraloría consiste, según el actor, en que las partidas asignadas para su funcionamiento se administren sin intromisión de ningún funcionario u órgano extraño a la entidad. Por lo tanto, las partidas asignadas para el funcionamiento de la Contraloría deben ser independientes de las correspondientes a las demás entidades y órganos.</p> <p>Según el demandante, el Gobierno Nacional con la expedición del Decreto 126 de 1995 vulneró el núcleo esencial de la autonomía presupuestal de la Contraloría, al limitar la ejecución y control del presupuesto, funciones estas que competen al ordenador del gasto. Con fundamento en ello, concluye que la Contraloría goza de autonomía presupuestal para contratar, comprometer los recursos propios previamente asignados en la ley de presupuesto, y de ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del mismo, como garantía de su independencia para el ejercicio del control fiscal.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

### SENTENCIAS DE 1997

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	<b>Sentencia C-156/97</b>
<b>Fecha de la sentencia</b>	diez y nueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).
<b>Demandante</b>	Hugo Yesid Suárez Sierra
<b>Demandado</b>	Norma acusada: Artículo 66 (parcial) de la Ley 200 de 1995.
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
<b>Decision</b>	ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en sentencia No. C-594 de noviembre 6 de 1996, que declaró exequible la expresión "conocerán del proceso disciplinario que se adelanta contra el Procurador General de la Nación, en única y mediante el procedimiento ordinario previsto en este Código", contenida en el inciso primero del numeral primero del artículo 66 de la Ley 200 de 1995.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>El actor considera que el aparte de la norma demandada viola los artículos 29 y 279 de la Constitución Política.</p> <p>Según criterio del actor, la facultad legislativa para regular el régimen disciplinario de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, lo que incluye al Jefe del Ministerio Público, se agotó con la expedición del artículo 173 de la Ley 201 de 1995, norma que definió el régimen y procedimiento disciplinario aplicable a dichos servidores públicos. Así las cosas, a juicio del demandante, la Ley 200 de 1995 no podía señalar procedimiento adverso al consagrado en la Ley 201 de ese mismo año.</p> <p>Por último, el actor opina que una ley general expedida con fundamento en los artículos 6 y 124 de la Carta, esto es la Ley 200 de 1995, no puede derogar otra norma de carácter especial, también expedida con base en otra disposición Superior.</p>

Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
Identificar la sentencia	C-646 DE 1997
Fecha de la sentencia	tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1.997).
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 370 del 16 de mayo de 1997 <i>“Por medio del cual se somete el “Convenio marco entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República helénica sobre Cooperacion economica, Cientifica y Tecnológica”, suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1994.”.</i>
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Decision	Declarar <b>EXEQUIBLES</b> el <i>“Convenio Marco Entre El Gobierno de la Republica de Colombia y el Gobierno de la Republica Helenica sobre Cooperacion economica, Cientifica Y Tecnologica”, suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1994.”</i> , así como la Ley 370 del 16 de mayo de 1997 que lo aprobó.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 370 del 16 de mayo de 1997 <i>“Por medio del cual se somete el “CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HELENICA SOBRE COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA”,</i>

	<p><i>suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1994.”.</i></p> <p>El Magistrado Ponente, mediante auto del 6 de junio de 1997, avocó el conocimiento del examen de constitucionalidad de la Ley en referencia así como del Convenio sometido por ésta, para lo cual ordenó practicar las pruebas pertinentes, fijar el negocio en lista, dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y llevar a cabo las comunicaciones constitucional y legalmente pertinentes.</p> <p>Adelantados los trámites y cumplidos los requisitos requeridos en la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1.991 para esta clase de procesos, procede la Corte Constitucional a pronunciarse sobre los actos jurídicos objeto del presente control de constitucionalidad.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-490/97
Fecha de la sentencia	
Demandante	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 12 (parcial) ; 31, parágrafo ; 46, literal e) ; 48, literal e), y 63 de la ley 336 de 1996 “Por el cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”.
Demandado	Ramiro Rodríguez López
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	<p>Primero.- DECLÁRANSE EXEQUIBLES los apartes acusados de los artículos 12, 31, 48 y 63 de la ley 336 de 1996, con la aclaración de que el literal e) del artículo 48 del mencionado Estatuto, se refiere al literal d) del artículo 46 y no al literal d) del artículo 49.</p> <p>Segundo.- DECLÁRASE EXEQUIBLE el literal e) del artículo 46 de la ley 336 de 1996, con la advertencia de que, dentro de la escala prevista por el artículo 46, las sanciones deberán ser razonables y proporcionales a la gravedad de la infracción.</p>



Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>a.) La demanda</p> <p>Considera que las disposiciones acusadas quebrantan los artículos 1, 4, 6, 29 y 158 de la Carta Política. El concepto de la violación puede resumirse así:</p> <p>Primer cargo.</p> <p>El aparte acusado del artículo 12, contraría el artículo primero de la Constitución, al brindarle al ser humano el tratamiento de simple recurso, tema tratado por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996.</p> <p>Segundo cargo.</p> <p>El párrafo del artículo 31 demandado, no se ajusta a lo establecido en el artículo 158 de la Carta, teniendo en cuenta que una ley denominada Estatuto Nacional de Transporte, no puede abarcar normas relativas al tránsito, que constituye una materia diferente, imponiendo al Congreso, además, unas obligaciones propias de una ley orgánica.</p> <p>Tercer cargo.</p> <p>Considera que lo estipulado en el artículo 46, transgrede los principios de legalidad y debido proceso, por cuanto establece sanciones para conductas indeterminadas que no se identifican en el Estatuto de Transporte.</p> <p>Cuarto cargo.</p> <p>El artículo 48 del Estatuto, en su literal e), es vulneratorio del debido proceso, ya que no existe claridad en la norma aplicable para afectos de la cancelación de licencias, registros, habilitaciones o permisos de las empresas transportadoras, teniendo en cuenta que equivocadamente, se hace remisión a un artículo que no consagra multa alguna.</p> <p>Quinto cargo.</p>

	El principio de unidad de materia se ve quebrantado por el artículo 63, por cuanto se suprime un impuesto en una ley destinada a regular el transporte.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-603/97
Fecha de la sentencia	veinte (20) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Hugo Palacios Mejía y Juan Manuel Charry Urueña
Demandado	Norma acusada: artículo 63 de la Ley 336 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Decision	ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en sentencia No. C-490 de octubre 2º de 1997, que declaró EXEQUIBLE el artículo 63 de la Ley 336 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Como primera medida, los actores realizan un repaso por la normatividad precedente a la disposición que se demanda, para concluir que el sujeto activo del impuesto de timbre de vehículos, desde 1983, dejó de ser el ente nacional, pues pasó a ser un tributo de las entidades territoriales, el cual representa un porcentaje importante para el fisco local. Los demandantes opinan entonces que la norma acusada transgrede el artículo 294 de la Constitución, pues la Carta prohíbe que el Legislador realice tratamientos preferenciales respecto de impuestos de propiedad de las entidades territoriales, el cual impone una comparación con el régimen tributario previo e impide una disminución de recursos fiscales de la periferia. Por consiguiente, a juicio de los actores, si una actividad era gravable y deja de serlo, surgen dos consecuencias inmediatas e inescindibles. La primera, es la

	<p>disminución de las rentas locales y la segunda es la dificultad de cumplir con el desarrollo económico planificado en el presupuesto plurianual. Por ello, los actores concluyen que la potestad tributaria limitada de las entidades territoriales no significa que el Legislador pueda desconocerla, como quiera que el Congreso no puede reducir atribuciones fiscales de las entidades territoriales sin proporcionar rentas suficientes para afrontar sus responsabilidades, o si ello no fuere posible, debe disminuirse la responsabilidad que en precedencia fue otorgada.</p> <p>De otra parte, los actores consideran que la disposición impugnada contraría el artículo 362 de la Constitución. Según sus criterios, lo acusado afecta el patrimonio de las entidades territoriales y crea una “expropiación ipso jure” sin juicio ni indemnización, toda vez que priva a la periferia de un bien incorporal sobre el que tenía plena propiedad, el cual consistía “en el derecho personal a cobrar a ciertos contribuyentes un tributo en relación con tales vehículos.”</p> <p>Los demandantes sostienen que la norma acusada también viola los artículos 1º y 287 de la Constitución, en la medida en que desconoce el principio de la autonomía de las entidades territoriales, “dado que el grado de autonomía de un ente territorial se relaciona proporcionalmente con la cantidad de recursos con los que cuenta”. Así mismo, los actores afirman que en el Estado Social de Derecho el éxito de la descentralización de responsabilidades se logra con la suficiente asignación de los recursos para el cabal cumplimiento de los servicios que prestan las entidades territoriales. De la misma manera, según su criterio, el principio de la autonomía económica permite que las entidades territoriales puedan determinar autónomamente sus prioridades económicas y los métodos más adecuados para llevar a cabo sus metas, dentro de parámetros que armonicen el carácter unitario del Estado.</p> <p>Por último, los demandantes consideran que la disposición acusada vulnera el artículo 154 de la Constitución, toda vez que se desconoce que, en materia de tributos, el proyecto de ley debe iniciar su trámite en la Cámara de Representantes y que la iniciativa legislativa, en caso de exenciones de impuestos, debe ser gubernamental. Así pues, para uno de los demandantes, la norma impugnada no establece verdaderamente una supresión sino una exención del impuesto de timbre para el servicio público del transporte automotor, pues las exenciones “desgravan actividades que a pesar de reunir los requisitos para ser gravadas, han sido excluidas del impuesto por política fiscal”, mientras que la supresión “consiste en la eliminación de la contribución para todos los elementos que la componen”. Por consiguiente, a juicio del ciudadano, “es claro que la disposición acusada excluye del</p>
--	---

	impuesto de timbre una actividad que estaba y puede ser gravada, mientras que el impuesto sigue existiendo y no ha sido eliminado". Por lo cual, es un asunto cuya iniciativa legislativa está atribuida, de manera exclusiva, al gobierno
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-560/97
Fecha de la sentencia	los seis (6) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Andres De Zubiria Samper
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 203 (parcial) de la Ley 115 de 1994.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 203 de la Ley 115 de 1994, excluidas las expresiones "salvo la excepción contemplada en el inciso segundo de este artículo", que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Segundo.- Decláranse INEXEQUIBLES los demás incisos del artículo 203 de la Ley 115 de 1994, en su totalidad, que dicen:</p> <p>"Sólo los establecimientos educativos privados sin ánimo de lucro, podrán establecer un bono como aporte de capital, con destino al mejoramiento del proyecto educativo institucional, siempre y cuando se encuentren bajo el régimen controlado establecido en el artículo 202. En este caso se deberá expedir el título correspondiente.</p> <p>Los establecimientos educativos que en la fecha tengan adoptados sistemas de financiación mediante bonos o aportes de capital tendrán un período de cinco (5) años para ajustarse gradualmente a lo dispuesto en este artículo.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional expedirá la reglamentación respectiva".</p>

	El presente fallo surte la plenitud de sus efectos a partir del día siguiente a su notificación por edicto (artículo 16 del Decreto 2067 de 1991).
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano demandante solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de los incisos 2 y 3 del artículo 203 de la Ley 115 de 1994, por considerar que violan los preceptos constitucionales 13, 67 y 68 de la Carta Política.</p> <p>Afirma que la disposición demandada desconoce el principio de igualdad, ya que no autoriza el cobro de bonos o aportes de capital a aquellas entidades educativas públicas y privadas con ánimo de lucro.</p> <p>Manifiesta que se vulnera el postulado constitucional del artículo 67, al establecer el régimen transitorio, ya que se permite a los establecimientos educativos seguir cobrando bonos o aportes de capital, y asevera que es "un chantaje el que se realiza en algunos colegios privados, puesto que primero debe pagarse el bono o aporte de capital voluntario (que oscila entre uno y diez millones de pesos) a la junta o asociación de padres de familia para obtener el cupo escolar y, posteriormente, pasar satisfactoriamente las pruebas de conocimientos, sicológicas y de aptitudes. Puesto que lo aparentemente voluntario del bono es pagarlo, pero si éste no se cancela de contado o en módicos plazos, no se obtiene el cupo escolar, es decir, es un aporte voluntario totalmente obligatorio". Igualmente, aduce que dicho régimen transitorio avaló una situación antijurídica ya existente, pues no estableció los requisitos de creación y gestión del mismo.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRA. ADELAIDA ANGEL ZEA DERECHOS DE LOS PARTICULARES A FUNDAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (Aclaración de voto)</p> <p>El análisis de constitucionalidad de las normas que fueron declaradas inexequibles se centró principalmente en el derecho fundamental a la educación que por mandato del artículo 67 de la Constitución Nacional tienen en Colombia todas las personas y en la calificación de servicio público que la Constitución da a la actividad educativa. Se dejaron de lado, en la valoración de constitucionalidad otros derechos que interactúan en la relación jurídica educativa. Así, se ignoró el derecho-libertad que tienen los particulares de fundar establecimientos educativos, derecho-</p>

	<p>libertad que está estrechamente ligado al que también tiene todas las personas de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, al tenor del artículo 20 de la Constitución Nacional. Este análisis unilateral condujo a limitar en el fallo la acción pedagógica de los particulares a la simple colaboración con el estado para suplir las necesidades de educación en Colombia, posición ésta que no comparto.</p> <p>BONOS EDUCATIVOS/ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO (Aclaración de voto)</p> <p>La generalización en cuanto al sentido mercantilista de los bonos educativos y a su carácter limitante del acceso a la educación para quienes no dispone de recursos económicos distorsiona el papel que en Colombia han desempeñado las entidades sin ánimo de lucro en la atención de las necesidades generales. La apreciación de la Corte Constitucional no tiene matices y de ella es fácil concluir, de manera general, que si las entidades sin ánimo de lucro son las únicas habilitadas para cobrar bonos, y si los bonos son necesariamente mercantilistas, las entidades sin ánimo de lucro en Colombia carecen de ánimo altruista y son simples formas jurídicas propicias para escapar de los controles de precios que faciliten el acceso a la educación. Este enfoque es, en mi opinión, contraria a la realidad y al significado que la propia Constitución asigna a la entidades sin ánimo de lucro dentro de la vida social colombiana (artículos 103 y 355 de la Constitución Política). La posición de la Corte deja de lado el deber constitucional que tiene el Estado de garantizar el acceso a la educación y lo desplaza hacia los particulares que fundan establecimientos educativos.</p> <p>SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Fijación y control de precios y tarifas (Aclaración de voto)</p> <p>No considero que la fijación y el control de precios y tarifas sean obligaciones del legislador y de la administración respecto del servicio público de educación, tal como se expresa en la sentencia. En mi opinión, de la interpretación sistemática de los artículos 68, 366 y 367 de la Constitución Nacional surge que esta obligación sólo se predica respecto de los servicios públicos domiciliarios.</p> <p>BONOS EDUCATIVOS-Naturaleza (Aclaración de voto)</p> <p>Una de las razones de la inconstitucionalidad de las normas declaradas inexecutable radica precisamente en el carácter obligatorio que como posibles donaciones entrañaba los bonos educativos. Esta obligatoriedad es contraria al derecho de libre disposición y a la autonomía de la voluntad que consagra el</p>
--	--

	<p>sistema constitucional colombiano. Aún cuando en la ley estos bonos se asimilan a "aportes de capital" al proyecto educativo, el significado de este término ha de buscarse en la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico vigente, particularmente en cuanto regula la naturaleza y el funcionamiento de las diversas modalidades de personas jurídicas sin ánimo de lucro que, en los términos de la disposición acusada, eran las beneficiarias posibles de los bonos educativos. Así, en mi opinión, pretender que el pago de los bonos educativos equivalga a convertir a quien lo hace en asociado de una entidad sin ánimo de lucro implica dejar de lado, por ejemplo, las normas sobre las fundaciones (especialmente los artículos 650 y 652 del Código Civil), así como las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinarias que de tiempo atrás vienen fortaleciendo a estos sujetos de derecho como la personificación de un patrimonio para la consecución de un fin de interés general de acuerdo con unas reglas básicas de administración que pueden o no emanar de la voluntad del fundador y donde el elemento personal es absolutamente secundario, al punto de que no quepa hablar de miembros, socios o asociados de una fundación.</p> <p>Aún cuando comparto la decisión de la Corte Constitucional en el presente fallo, discrepo de algunas de las consideraciones que le sirven de fundamento. Muy respetuosamente expreso los motivos de mi desacuerdo en los siguientes términos:</p> <p>1.- El análisis de constitucionalidad de las normas que fueron declaradas inexecutable se centró principalmente en el derecho fundamental a la educación que por mandato del artículo 67 de la Constitución Nacional tienen en Colombia todas las personas y en la calificación de servicio público que la Constitución da a la actividad educativa. Se dejaron de lado, en la valoración de constitucionalidad otros derechos que interactúan en la relación jurídica educativa. Así, se ignoró el derecho-libertad que tienen los particulares de fundar establecimientos educativos, derecho-libertad que está estrechamente ligado al que también tiene todas las personas de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, al tenor del artículo 20 de la Constitución Nacional. Este análisis unilateral condujo a limitar en el fallo la acción pedagógica de los particulares a la simple colaboración con el estado para suplir las necesidades de educación en Colombia, posición ésta que no comparto.</p> <p>La responsabilidad de garantizar la instrucción y la educación en Colombia, dentro de los parámetros mínimos que señalala la Constitución, principalmente en su artículo 68, es primordialmente del Estado. Igualmente surge para él, del artículo 366 de la Constitución, la obligación de atender las necesidades insatisfechas en materia de educación. Y cuando son las instituciones del Estado</p>
--	--

	<p>las que imparten educación, la remuneración del servicio está claramente señala en el artículo 67 de la Constitución Nacional” la educación pública será gratuita, salvo para quienes puedan sufragar los costos del servicio, a quienes sólo se les podrá exigir el pago de los derechos académicos.</p> <p>Dentro de este contexto, en mi opinión, solo cobra sentido el derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos cuando se abre para ellos la posibilidad de involucrar dentro del proceso pedagógico la transmisión y la expresión de sus propios valores de su manera de ver y descubrir la realidad, de su particular idea sobre el conocimiento y, muchas veces, de su propia experiencia sobre cómo llevar una vida digna y creativa, todo ello dentro de los parámetros que señala la Constitución. En síntesis, la educación privada tiene su razón de ser en lo que la ley 115 de 1994 ha resumido, en mi opinión con total claridad y precisión jurídicas, en el concepto de proyecto educativo.</p> <p>Y ese proyecto educativo a cargo de los particulares, aún en aquellos casos en que se lleva a cabo por establecimientos educativos pertenecientes a personas que no han renunciado al ánimo de lucro, tiene un sentido altruista que encuentra su principal respaldo en el artículo 27 de la Constitución Nacional y que garantiza en gran medida el pluralismo de la sociedad colombiana.</p> <p>2. La unilateralidad en el análisis de los derechos fundamentales de los sujetos que interactúan en la relación jurídica educativa se refleja en la sentencia en la consideración de que la institución de los bonos educativos es de por sí una limitante para acceder a la educación limitante que tiene para la Corte un contenido claramente mercantilista.</p> <p>Se trata de una generalización que, quizá determinada por el conocimiento que de la realidad ha tenido la Corte Constitucional a través de los fallos de tutela, no encuentra en mi opinión respaldo en el texto de la normatividad vigente que constituye el objeto posible de análisis en el control de constitucionalidad.</p> <p>Además, la generalización en cuanto al sentido mercantilista de los bonos educativos y a su carácter limitante del acceso a la educación para quienes no dispone de recursos económicos distorsiona el papel que en Colombia han desempeñado las entidades sin ánimo de lucro en la atención de las necesidades generales. La apreciación de la Corte Constitucional no tiene matices y de ella es fácil concluir, de manera general, que si las entidades sin ánimo de lucro son las únicas habilitadas para cobrar bonos, y si los bonos son necesariamente mercantilistas, las</p>
--	--



	<p>entidades sin ánimo de lucro en Colombia carecen de ánimo altruista y son simples formas jurídicas propicias para escapar de los controles de precios que faciliten el acceso a la educación.</p> <p>Este enfoque es, en mi opinión, contraria a la realidad y al significado que la propia Constitución asigna a la entidades sin ánimo de lucro dentro de la vida social colombiana (artículos 103 y 355 de la Constitución Política).</p> <p>3. De otra parte, no comparto la forma como se analiza en el fallo la condición de las instituciones de educación como prestadoras de un servicio público y encuentro particularmente delicada la interpretación del factor económico como limitante del acceso a la educación; como lesivo del derecho a la educación que tienen todas las personas.</p> <p>En mi opinión, la posición de la Corte deja de lado el deber constitucional que tiene el Estado de garantizar el acceso a la educación y lo desplaza hacia los particulares que fundan establecimientos educativos. En efecto si bien se expresa en la parte motiva de la sentencia que las expensas que se cobran por la prestación del servicio educativo deben ser proporcionadas a los costos, la idea de que el acceso a los planteles educativos debe estar únicamente ligada a la idoneidad académica e intelectual del educando, unidad al criterio sobre control de tarifas al que me referiré más adelante, lleva a concluir que aquellos proyectos educativos que pretendan aplicar tecnologías costosas, que asuman cargas laborales altas para elevar el nivel académico y personal de sus docentes, que realicen investigación en el mundo de la pedagogía, que busquen avanzar en los métodos propicios para formar estudiantes más capaces en los términos del propio inciso primero de la Constitución Nacional, están destinados a fracasar en Colombia por cuanto los costos académicos pueden llegar a constituir en sí mismos una limitante a individuos dotados de enormes capacidades intelectuales y académicas, pero de recursos económicos insuficientes.</p> <p>Así, de arraigarse esta orientación de la Corte constitucional en la práctica legislativa y en el ejercicio de las funciones de las autoridades administrativas, la educación privada en Colombia llegaría a limitarse a un modelo básico, general, poco diferenciado en sus contenidos y aplicaciones del modelo de educación pública, todo ello en aras de evitar una estratificación social que se califica en la sentencia como contraria a la Constitución.</p> <p>Respecto de esta estratificación social debo expresar lo siguiente mientras el Estado se ocupe de garantizar que la educación que se imparta en Colombia obedezca a los postulados democráticos que</p>
--	--

	<p>señala la Constitución, la existencia de grupos más capacitados que otros promoverá el avance cultural y tecnológico necesario para lograr niveles de desarrollo que permitan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país.</p> <p>4. De otra parte, no considero que la fijación y el control de precios y tarifas sean obligaciones del legislador y de la administración respecto del servicio público de educación, tal como se expresa en la sentencia. En mi opinión, de la interpretación sistemática de los artículos 68, 366 y 367 de la Constitución Nacional surge que esta obligación sólo se predica respecto de los servicios públicos domiciliarios.</p> <p>5. Finalmente, disiento de la mayoría en la apreciación de que los bonos educativos son contrarios al derecho de asociación y que no constituyen donaciones.</p> <p>En mi opinión una de las razones de la inconstitucionalidad de las normas declaradas inexecutable radica precisamente en el carácter obligatorio que como posibles donaciones entrañaba los bonos educativos. Esta obligatoriedad es contraria al derecho de libre disposición y a la autonomía de la voluntad que consagra el sistema constitucional colombiano. Aún cuando en la ley estos bonos se asimilan a “aportes de capital” al proyecto educativos, el significado de este término ha de buscarse en la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico vigente, particularmente en cuanto regula la naturaleza y el funcionamiento de las diversas modalidades de personas jurídicas sin ánimo de lucro que, en los términos de la disposición acusada, eran las beneficiarias posibles de los bonos educativos.</p> <p>Así, en mi opinión, pretender que el pago de los bonos educativos equivalga a convertir a quien lo hace en asociado de una entidad sin ánimo de lucro implica dejar de lado, por ejemplo, las normas sobre las fundaciones (especialmente los artículos 650 y 652 del Código Civil), así como las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinarias que de tiempo atrás vienen fortaleciendo a estos sujetos de derecho como la personificación de un patrimonio para la consecución de un fin de interés general de acuerdo con unas reglas básicas de administración que pueden o no emanar de la voluntad del fundador y donde el elemento personal es absolutamente secundario, al punto de que no quepa hablar de miembros, socios o asociados de una fundación.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-444/97
Fecha de la sentencia	diez y ocho (18) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Humberto Fernández Vega
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 1º (parcial) de la ley 332 de 1996 “Por la cual se modifica la ley 4ª de 1992 y se dictan otras disposiciones.”
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	Decláranse EXEQUIBLES los apartes acusados del artículo 1º de la ley 332 de 1996, por no desconocer el principio a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En concepto del actor, los apartes acusados desconocen el principio a la igualdad, al excluir a los jubilados bajo el imperio de la ley 4ª de 1992, del beneficio que crea el artículo 1º de la ley acusada. Beneficio que consiste en darle el carácter de salario a la prima técnica de carácter especial que reciben algunos servidores públicos, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, carácter del que carecía por disposición expresa del artículo 14 de la ley 4ª de 1992.</p> <p>Todos los servidores públicos que reciben la prima técnica de que trata la ley 4ª de 1992, ostentan las mismas condiciones para que tal prima tenga efectos prestacionales. Por tanto, no existe razón que justifique que sólo los funcionarios que se jubilen con posterioridad a la publicación de la ley acusada, o que teniendo reconocida su pensión aún se encuentren en servicio, puedan solicitar que esa prima se compute como factor salarial. Según el demandante, los apartes acusados introducen “una discriminación irracional, entre pares, por simples motivaciones temporales, y aún podría serlo, también, por consideraciones fiscales que de todos modos no pueden ser imputables a los funcionarios públicos protegidos por el status de 1992, y que deben continuar siéndolo, por los efectos que tiene la reforma de 1996”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA

Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-648/97
Fecha de la sentencia	diciembre tres (3) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Cesar Augusto Castillo Dussan
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el capítulo II y los artículos 8°, numeral 1° y 13, numerales 1° y 2° de la Ley 318 de 1996, "Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, se crea la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y se dictan otras disposiciones para el fomento de la cooperación internacional"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE el capítulo II de la Ley 318 de 1996 por no presentar vicios de forma y por no violar el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por las razones expresadas en esta providencia, los artículos 8°, numeral 1° y 13, numerales 1° y 2° de la Ley 318 de 1996.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. El primer cargo de la demanda se dirige contra los artículos 8-1 y 13-1 y 2 de la Ley 318 de 1996. El demandante considera que estas normas contravienen el artículo 189-2 de la Constitución Política, en el cual se establece que la dirección de las relaciones internacionales del Estado colombiano, el nombramiento de agentes diplomáticos y consulares y la celebración de tratados o convenios internacionales son competencia del Presidente de la República.</p> <p>A su juicio, las normas demandadas, al disponer que la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y su junta directiva tienen funciones en relación con la coordinación, administración, promoción y articulación de todas las acciones de cooperación internacional, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país, así como en la fijación de los lineamientos</p>

	<p>generales y de las prioridades en esta materia, desconocen el papel que le corresponde cumplir al Presidente de la República en materia de relaciones internacionales. En efecto, la cooperación internacional constituye una forma de ejercicio de las relaciones internacionales que se hace efectiva por medio de tratados internacionales, los cuales sólo pueden ser celebrados por el Presidente de la República.</p> <p>Sobre este particular, el actor asegura que la "Junta Directiva de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, usurpa las funciones constitucionales del Presidente de la República en la dirección de las relaciones internacionales y las del Ministro de Relaciones Exteriores, a quien como jefe de la administración en su respectiva dependencia, (bajo la dirección del Presidente de la República) le corresponde, al tenor del artículo 208 de la Constitución Política, '...formular las políticas atinentes a su Despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley'".</p> <p>El libelista concluye la formulación del primer cargo, afirmando que "por su contenido mismo, la Ley 318 está en manifiesta contradicción con las disposiciones constitucionales enunciadas".</p> <p>2. En un segundo cargo, el demandante plantea que la creación de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, a través del Capítulo II de la Ley 318 de 1996, vulnera el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 del Estatuto Superior.</p> <p>Según el actor, el proyecto de ley (Proyecto de Ley 26/94) originalmente presentado por el Gobierno Nacional a la consideración del Congreso de la República sólo se refería a la creación del Fondo de Organismos Financieros Internacionales (Ley 318 de 1996, capítulo I) y del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996, capítulo III). El Senado de la República aprobó este proyecto con algunas modificaciones "que no alteraron su contenido y objetivo". Sin embargo, en el primer debate en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes el proyecto fue modificado en el sentido de agregar un capítulo referente a la creación de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento Administrativo Nacional de Planeación (Ley 318 de 1996, capítulo II). Finalmente, el proyecto fue aprobado como ley de la República con la modificación antes anotada.</p> <p>En opinión del demandante, la modificación introducida al proyecto de ley por la Cámara de Representantes no tiene relación alguna con la materia a la que éste se refería en un principio. Señala que "al incluirse en un proyecto de ley, disposiciones relativas a la creación de una Agencia de Cooperación, cuando inicialmente éste</p>
--	---

	<p>se refiere a Fondos de Financiamiento es inconstitucional, porque los temas deben referirse a una misma materia, según se establece en el precepto 158 de la Constitución Política".</p> <p>Así mismo, afirma que se incurrió en violación de lo dispuesto por el artículo 148 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992), en donde se establece que es deber de los presidentes de las comisiones constitucionales permanentes rechazar todas aquellas disposiciones o modificaciones a un proyecto de ley que tiendan a desconocer el principio de unidad de materia.</p> <p>3. Por último, el libelista indica que en el trámite dado por el Congreso de la República a la Ley 318 de 1996 se incurrió en un vicio de forma, como quiera que la inclusión de una materia nueva, como era la creación de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, implicaba una reasignación de competencias entre las comisiones constitucionales encargadas de conocer del trámite de la mencionada ley en la Cámara de Representantes.</p> <p>En efecto, el proyecto fue discutido y aprobado por la Comisión Cuarta de la Cámara, la cual, a tenor de lo dispuesto por la Ley 3ª de 1992 - que tiene jerarquía de ley orgánica -, no tiene competencia para dar trámite a proyectos de ley que se refieran a la modificación de la estructura y organización de la Administración Pública, los cuales deben ser tramitados por la Comisión I (Ley 3ª de 1992, artículo 2º).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO</p> <p>INICIATIVA GUBERNATIVA-Alcance/PROYECTO DE LEY-Modificaciones (Aclaración de voto)</p> <p>En mi criterio, la coadyuvancia o, como en este caso, la solicitud posterior de uno de los ministros, ya en el curso del trámite legislativo, no sana la inconstitucionalidad del proyecto de ley, que debiendo haber tenido origen en el Gobierno según las reglas del mencionado artículo 154 de la Carta, lo tuvo en el Congreso. Menos todavía es admisible esa forma de sanear el vicio inicial cuando se trata de introducir modificaciones a un proyecto de ley de mayor amplitud y de iniciativa congresional, pues la visión del Gobierno sobre el tema pierde el carácter integral y armónico que debería tener y que justifica que ciertas materias, debidamente pensadas y analizadas en el seno del Ejecutivo, se hayan reservado a éste en</p>

	cuanto al impulso legislativo de nuevas normas. Con la tesis que prohija la sentencia, el Gobierno no tiene en realidad la iniciativa privativa sino que se limita a añadir un elemento más dentro de un contexto en cuyo origen no tuvo participación. Y ello, aunque parezca que es lo mismo, difiere bastante del sentido que el Constituyente, desde 1968, quiso dar a la aludida reserva, como prenda de garantía sobre el carácter técnico de ciertos asuntos que deben encajar en su integridad dentro de la política económica que el Gobierno dirige.
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-657/97
Fecha de la sentencia	tres (3) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Saúl Humberto Ruiz, Adriana Maria Duque y Ricardo Ordoñez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 (parcial) y 8 de la Ley 311 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	Primero. Declárase EXEQUIBLE el inciso 1 del artículo 6 de la Ley 311 de 1996, en el entendido de que el conocimiento al que se refiere, sobre la existencia de procesos alimentarios pendientes, es únicamente el que adquiere el demandado por notificación de la demanda correspondiente, en los términos previstos por el Código de Procedimiento Civil.  segundo Declárase INEXEQUIBLE el artículo 8 de la Ley 311 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Los ciudadanos demandantes manifiestan que los apartes normativos acusados son violatorios de los artículos 25 y 53 de la Constitución.  A su juicio, se atenta contra el derecho al trabajo, por cuanto éste queda condicionado a una declaración juramentada que debe hacer el aspirante, la cual no incide directamente en la relación laboral, ni constituye elemento esencial del contrato.  Afirman, igualmente, que el artículo 8 demandado, desconoce el principio constitucional del debido proceso (art. 29 C.P.), en cuanto que al trabajador que sea despedido por los motivos allí señalados,

	no se le garantiza su derecho de defensa, al igual que se está creando una nueva causal de despido, por justa causa, que no está contemplada en la legislación laboral y es ajena a la persona misma.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-384/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Milán Díaz García.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 314 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	Decláranse EXEQUIBLES las expresiones "del sector de las comunicaciones", que hacen parte del párrafo del artículo 10 de la Ley 314 de 1996
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que la disposición impugnada infringe el artículo 13 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que se impide a los pensionados que no sean del sector de las comunicaciones intervenir en la dirección de Caprecom, pues no pueden enviar ternas.</p> <p>Manifiesta el demandante que Caprecom, como E.P.S. e I.P.S., afilia en gran cantidad a pensionados que no son "propiamente del sector de las comunicaciones" y con la norma acusada se les estaría colocando en un plano de inferioridad frente a los que sí son del sector.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>CAPRECOM-Participación de afiliados y pensionados en la gestión de la entidad (Salvamento de voto)</p>



	<p>La razón de ser de que tres representantes de los afiliados figuren como miembros de la Junta Directiva de la institución, obedece a la necesidad de que los afiliados y pensionados, participen en la gestión del ente que frente a ellos ha asumido una delicada responsabilidad jurídica y social. Marginar del proceso de elección de representantes de los afiliados y pensionados, a los afiliados y pensionados que pertenezcan o hayan pertenecido a otro sector, es ignorar que ellos se encuentran en la misma situación y que son portadores del mismo interés de intervenir en la administración de la mencionada caja.</p> <p>DERECHO A LA IGUALDAD-Condición de afiliados y pensionados para participar en las elecciones de junta directiva (Salvamento de voto)</p> <p>El mero arraigo histórico de este grupo de afiliados, no es suficiente para excluir teóricamente la participación de otros afiliados y pensionados en las respectivas elecciones, independientemente de su número. La simple condición de afiliado o pensionado, en aras de la igualdad y del derecho de participación, debería servir de título suficiente para intervenir en las elecciones de representantes para ocupar los tres escaños en la Junta.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-209/97
Fecha de la sentencia	veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Jairo Villegas Arbeláez
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 55, literal e) y parágrafo, 101, 102, 103, 104 -parcial-, y 108 -parcial- de la Ley 300 de 1996 “por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones”.
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Primero.- Declarar EXEQUIBLES la expresión “planta de personal” contenida en el literal e) del artículo 55 y el parágrafo del mismo artículo, así como los artículos 101, 102 y 103 de la Ley 300 de 1996.

	<p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 108 de la Ley 300 de 1996, siempre y cuando la prohibición de vinculación a dichos organismos se refiera a aquellas labores relacionadas con las funciones que sirvieron de fundamento para pagar la indemnización a los funcionarios de que trata el artículo 103 de la misma Ley.</p> <p>Tercero.- Declarar INEXEQUIBLES los apartes demandados del artículo 104 y la expresión “No obstante lo anterior” del inciso segundo del mismo, de la Ley 300 de 1996.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se estiman violadas.</p> <p>El demandante considera que las normas acusadas vulneran lo dispuesto en el preámbulo y en los artículos 1, 13, 25, 48, 53, 55, 58, 93, 121, 122, 125, 128, 136, 150-17, y 189-14 de la Constitución Política.</p> <p>2. Concepto de la violación.</p> <p>Parte el actor de la premisa según la cual la Corporación Nacional de Turismo es una Empresa Industrial y Comercial del Estado “ esto es regida por el Derecho Privado o Contractual y no por el Derecho Público o Administrativo”, debido a la naturaleza industrial y comercial de sus actividades, las cuales no comprenden funciones públicas o administrativas, de conformidad con el D.L. 1050 de 1968, en sus artículos 5. y 6o. En virtud de esto, entiende que el concepto de planta de personal utilizado en el artículo 55, literal e), de la Ley 300 de 1996 no es aplicable en el derecho privado que rige esas entidades, sino que, solamente, se predica de los empleos públicos de aquellas mencionadas en el D. L. 1042 de 1978, artículos 1o., 84 y 101 y demás normas concordantes.</p> <p>Frente al párrafo de ese artículo 55, el accionante sostiene que se viola el artículo 113 constitucional por desconocimiento del principio de “la separación de funciones entre la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva”, ya que opera una intromisión indebida del Legislador en una función administrativa propia de la respectiva entidad descentralizada, como es la de determinar acerca de la planta de personal, violándose, además, la autonomía administrativa reconocida por esa misma Ley a la Corporación Nacional de Turismo, con transgresión del artículo 136, numeral 1o., de la Carta.</p> <p>Seguidamente, el demandante formula reparo al cuestionar que los</p>

	<p>artículos 101, 102 y 103 de la Ley 300 de 1996 adopten como motivo de retiro de los trabajadores oficiales la reestructuración de la Corporación Nacional de Turismo, vulnerando el artículo 121 constitucional, por cuanto se consagra con ello una nueva causal de retiro para la terminación de los contratos de los trabajadores oficiales, adicional a las establecidas en el artículo 47 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, como sería la reestructuración de la Corporación Nacional de Turismo, estableciéndose de esta manera una “...Función Laboral distinta de la que se le atribuye a la Ley Laboral”.</p> <p>Así mismo, señala que el mencionado retiro por reestructuración de una entidad, aplicable en tan sólo algunos de los trabajadores, consagra una discriminación frente a la ley laboral que transgrede los artículos 13 y 53 superiores. Además, precisa que dicha desvinculación estaría trasladando a los trabajadores los riesgos de la administración de la empresa, de responsabilidad del patrono según el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, violando el preámbulo y el artículo 1o. de la Constitución Política, en lo referente a la equidad propia de un Estado Social de Derecho.</p> <p>En lo que respecta al artículo 104, inciso 1o., el actor manifiesta su inconformidad con la disposición por cuanto prohíbe a un trabajador desvinculado con derecho de pensión de jubilación, causado a recibir una indemnización por dicho retiro, y argumenta que la Constitución no impide devengar esos dos montos en razón a que el derecho de pensión causado no supone su disfrute; es decir, que no se estaría desconociendo el mandato del artículo 128 superior que no permite devengar más de una asignación del tesoro público de manera simultánea y por la misma persona. Por lo tanto la indemnización por reestructuración y la futura pensión son derechos autónomos compatibles, de no aceptarse esta interpretación -opina- se violaría el principio de igualdad de los trabajadores con derecho pensional causado frente a los demás trabajadores beneficiados con la indemnización (C.P., arts 13 y 53).</p> <p>De otro lado, establece que la desvinculación de la empresa de trabajadores con derecho pensional causado no constituye una justa causa legal laboral para la terminación de sus contratos, de las consagradas en el D.R. 2127 de 1945, ni, tampoco, una obligación legal laboral de retiro exigible al trabajador, quien sólo con su consentimiento expreso y escrito podrá jubilarse antes de la edad de sesenta años, según lo dispone la Ley 33 de 1985.</p> <p>Más adelante, el demandante expresa que los incisos 1o., 2o. y 3o. del mismo artículo 104 se contradicen, en cuanto el inciso 2o. termina por establecer una compatibilidad entre la indemnización por retiro y la pensión de jubilación que el inciso 1o. prohíbe y que,</p>
--	--

	<p>además, la orden de descuento de las mesadas pensionales por concepto de la indemnización pagada, establecida en el inciso 3o., desconoce el artículo 48 de la Constitución, que protege la mesada pensional, al no tener dicho descuento ninguna causa legal laboral, violando así el D.R. 2127 de 1945 y Convenio OIT No. 95 de 1949.</p> <p>En relación con el artículo 108 demandado, indica que el mismo viola el artículo 29 constitucional en lo referente al principio de legalidad en materia punitiva, ya que se estaría configurando una pena accesoria al despido de los trabajadores, no prevista en la legislación laboral, al prohibir la vinculación de funcionarios que hayan sido indemnizados; prohibición que ningún modo ha sido consagrada como inhabilidad en la ley para efectos del ingreso a la función pública. Adicionalmente, insiste en que el establecimiento de dicha pena no es consecuencia de la conducta ni responsabilidad del trabajador sino del patrono, y que el despido sin causa legal laboral no está consagrado como inhabilidad para acceder a un empleo público.</p> <p>Finalmente, plantea que “al excluir e inhabilitar por razones discriminatorias distintas al mérito” se transgreden los artículos 13, 53 y 125 de la Norma Superior, que tratan de la igualdad de trato y de mérito.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>REESTRUCTURACION DE ENTIDAD DEL ESTADO-Distinta situación de quien tiene derecho pensional a indemnización (Salvamento parcial de voto)</p> <p>No obstante que la pensión constituye un derecho distinto de la indemnización que se contempla en favor de los trabajadores desvinculados por causa de la reestructuración de la corporación estatal, la situación de los trabajadores no es semejante. Quienes ya tienen consolidado su derecho a la pensión, no afrontan en estricto rigor las secuelas económicas propias del desempleo ni su daño teórico tiene la misma dimensión del que ostenta el de los demás trabajadores. En este orden de ideas, no era del caso exigir al Legislador que otorgue el mismo trato a las dos categorías de trabajadores. El patrón de comparación no puede ser el hecho de la desvinculación, sino el daño económico que ésta causa. Desde este punto de vista, la condición de quien puede entrar a disfrutar de una pensión, no es en modo alguno equiparable a la de quien carece de esta posibilidad. Cuando se pretende hacer justicia con los recursos del erario, resulta obligatorio distinguir las diferentes</p>

	situaciones con el objeto de evitar dilapidarlos bajo el pretexto de una equidad mal entendida y peormente aplicada.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-356/97
Fecha de la sentencia	cuatro (4) agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	César Augusto Rey Ramos y Diego Fernando Trujillo Marín
Demandado	Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 12 de la ley 218 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Estar a lo resuelto en las sentencias C-256 de mayo 28 de 1997 y C-353 de agosto 4 del mismo año.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Para el ciudadano César Augusto Rey Ramos las normas acusadas vulneran los artículos 1, 2, 334, 335, 337, 339 y 341 de la Constitución, por las razones que a continuación se resumen :</p> <p>☐ La unidad de mercado nacional “exige como conditio sine qua non la suspensión de aduanas o barreras internas que limitan la libertad de circulación de los productos o géneros, en razón a que el arancel es el elemento que proporciona la protección del mercado frente a terceras economías”. La unidad de mercado “es consustancial a la unidad política de un Estado, razón por la cual el profesor Marshall, ha señalado que las naciones europeas son un producto de las aduanas, porque al trasladar las aduanas a las fronteras políticas se crea la unidad de mercado en el seno del Estado Nación.”</p> <p>☐ La ley 218 de 1995 “vulnera la unidad de la economía nacional, porque crea una zona especial comprendida dentro del ámbito territorial de los departamentos de Huila y Cauca, sometida a un régimen tributario y aduanero privilegiado, diferente al del resto del territorio nacional, olvidando que cualquier excepción a esa unidad económica debe estar señalada en la Constitución. Y, por tanto, al no existir ninguna norma constitucional que faculte al</p>

	<p>Congreso de la República para establecer zonas económicas especiales, con excepción de las zonas de frontera y el archipiélago de San Andrés, no es acorde con los principios en que se funda nuestro sistema jurídico, que se establezca un régimen privilegiado para los departamentos del Huila y Cauca”. Es que “cuando un producto, equipo o materia prima se introduce a los territorios del Huila y Cauca y proviene de cualquier país, que sea un tercero con respecto a los signatarios del grupo, ingresará a esos territorios con un arancel cero, mientras que si ingresara a cualquier otro espacio del territorio nacional, el arancel que se le aplica sería el que corresponda a terceros países dentro del mecanismo de arancel externo común, produciéndose así lo que en el lenguaje arancelario y de los expertos se conoce como una perforación del arancel.”</p> <p>Por otra parte, el ciudadano Diego Fernando Trujillo Marín sólo se refiere a los artículos 1, 6 y 12 de la ley 218 de 1995, los que considera violatorios de la Constitución por las siguientes razones:</p> <p>☐ Uno de los valores de nuestro sistema político es el de la integración de la comunidad latinoamericana, consagrado en el artículo 227 de la Constitución, cuyo desarrollo le corresponde al Congreso. En ejercicio de él dicha corporación está autorizada para expedir leyes que aprueben tratados con otros Estados o entidades de derecho internacional, e inclusive puede transferir algunas funciones a organismos multinacionales. Entonces cuando el Estado colombiano suscribe un tratado como el Acuerdo de Cartagena o el Pacto Subregional Andino y son aprobados por el Congreso de la República, las autoridades nacionales pierden competencia para regular las materias objeto del convenio, dada la necesidad de promover y consolidar la integración económica con otros Estados. El Acuerdo de Cartagena tiene una supremacía normativa sobre las leyes que expide el Congreso y los decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de la República, los cuales no podrán contrariarlas por tratarse de normas de mayor rango.</p> <p>El Acuerdo de Cartagena se adoptó en nuestro país mediante la ley 8 de 1993 y desde esa fecha tiene pleno vigor jurídico, con todas las consecuencias que de ello se deriva, como son las disposiciones expedidas por la Junta y la Comisión las cuales se incorporan automáticamente a nuestro derecho. En dicho Acuerdo se estableció el arancel externo común con el fin de promover e impulsar la integración subregional, cuyos elementos estructurales han sido aprobados por la decisión 370 de la Comisión, expedida el 26 de noviembre de 1994, siendo incuestionable que desde esta fecha, esa Decisión incorporó a nuestro ordenamiento el régimen jurídico del arancel externo común, en virtud del mandato consagrado en el artículo 2o. del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y que textualmente señala: “Las</p>
--	---

	<p>Decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión”. Ante esta circunstancia “la Decisión 370 tiene supremacía normativa en el derecho interno y, en consecuencia, las exenciones arancelarias creadas para los departamentos de Cauca y Huila, en el artículo 6o. de la ley 218 de 1995, deben respetar el ordenamiento jurídico subregional, so pena de que se genere un vicio de inconstitucionalidad en la ley”. También se viola “el artículo 227 de la Constitución Nacional que consagra el principio de la integración latinoamericana, que implica la supremacía jurídica del ordenamiento andino en nuestro derecho interno.”</p> <p>El artículo 5 de la Decisión 370 de la Junta del Acuerdo de Cartagena “indica cómo los países podrán diferir la aplicación del arancel externo por un período máximo de tres meses prorrogables, a juicio de la Junta, para atender situaciones de emergencia nacional calificadas previamente por la misma, en un plazo de quince (15) días. Si la Junta no se pronuncia en ese lapso el país solicitante queda autorizado para diferir el arancel externo común de los productos cuyo diferimiento haya solicitado, hasta tanto la Junta se pronuncie. Así las cosas la norma andina transcrita nos permite formular el siguiente análisis: a) El arancel externo sólo se puede diferir por un máximo de tres meses, b) si hay prórroga esta procede a juicio de la junta. c) El diferimiento es procedente sólo para atender situaciones de emergencia nacional, cuando ellas sean previamente calificadas por la Junta. d) Es posible solicitar el diferimiento respecto del arancel externo común para algunos productos respecto de los cuales haya procedido la solicitud. La ley 218 de 1995 va mucho más lejos en los beneficios otorgados a las empresas instaladas en los departamentos de Huila y Cauca, pues concedió una exención por cinco (5) años y no un simple diferimiento. La exención fue para todos los productos del universo arancelario. No hubo solicitud ni calificación previa de la Junta. Todos esos requisitos son lógicos y procuran evitar que los países miembros no hagan de las catástrofes ‘loterías siniestras’, que fue lo que ocurrió con la avalancha del río Páez.”</p> <p>El artículo 3o. de la Decisión le indica a los países cómo deben obrar cuando acudan a la Junta de Calificación frente a una situación de emergencia nacional, lo que en nuestro caso no se cumplió, pues allí expresamente se señala que el plazo del diferimiento, es decir, de la no aplicación del Arancel Externo Común no podrá exceder de tres (3) meses.</p> <p>El artículo 4o. de la resolución reitera el principio de la vinculación causal entre los productos por los cuales se solicita el diferimiento y la naturaleza y alcances de la situación de emergencia que se pretende conjurar.</p>
--	---

	<p>Es claro también que “en los artículos 5 a 7 de la resolución se establece que no puede haber prórrogas tácitas de diferimiento y que si subsiste la situación que dio origen al diferimiento, la Junta previa la opinión del Consejo de Coordinación Arancelaria, propondrá las medidas que considere más apropiadas para resolver el asunto. Y como se puede observar en el procedimiento de expedición de la ley 218 de 1995 y en el contenido de la misma, se concluye que el artículo 6o. consagra no sólo un simple diferimiento del arancel externo común sino una exención y por un período de cinco años, en una parte del territorio nacional, sin que se cumplieran los criterios, requisitos y procedimientos señalados en la Decisión 370 de la Comisión y en la Resolución 364 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. “En consecuencia, el artículo 6o. de la ley 218/95 es ostensiblemente contrario a la Constitución, al haber sido expedido por las autoridades nacionales sin respetar el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, que goza de supremacía normativa en virtud del principio de integración de la comunidad latinoamericana consagrado en el preámbulo y en los artículos 150, numeral 16 y 227 de la Carta, y en las técnicas de transferencias de competencias nacionales a organismos internacionales, instituidas en el artículo 150, inciso 16 del mismo ordenamiento fundamental.”</p> <p>La Decisión 370 del Acuerdo de Cartagena que estableció el arancel externo común sólo permite en su artículo 5o, un diferimiento en la aplicación de dicho arancel, previo concepto de la Junta, en los casos específicamente establecidos en ese artículo, entre ellos sin lugar a dudas, los de tragedias como la del río Páez. Dice la norma: “Los países miembros podrán diferir la aplicación del Arancel Externo Común por un período máximo de tres meses, prorrogables a juicio de la Junta, para atender situaciones de emergencia nacional calificadas previamente por la Junta, en un plazo de 15 días. De no pronunciarse en ese plazo, el país solicitante quedaría autorizado a diferir el Arancel Externo Común de los productos cuyo diferimiento haya sido solicitado, hasta tanto se pronuncie la Junta.”</p> <p>Nótese cómo lo permitido, y dentro de circunstancias muy excepcionales, es un simple diferimiento y nunca una exención, dado que dentro de la estructura de un arancel externo común, permitir la no causación de tributos arancelarios sería una forma de ‘autoperforación del arancel común’, efecto nocivo que no se presenta en el diferimiento que implica simplemente una suspensión en la aplicación de la tarifa.</p> <p>La ley 218/95 en su artículo 5o. establece una exención de gravámenes arancelarios para las materias primas importadas a los</p>
--	---



	<p>territorios de Huila y Cauca por un período de cinco años, violando doblemente las disposiciones de la Decisión 370 del Acuerdo de Cartagena, pues por un lado el gobierno colombiano no obtuvo el previo concepto de la Junta del Acuerdo, tal como sin duda lo dispone el artículo 7 de la citada Decisión, y por el otro lado estableció una exención por cinco años cuando la Decisión, aún en los casos de tragedias naturales, apenas y de manera absolutamente excepcional, permite un diferimiento del arancel que en ningún caso por regla general, se puede extender a más de tres meses.</p> <p>Así las cosas, es claro “que hoy en día, y a partir de la Decisión 370, bajo el sistema normativo del Grupo Andino, ningún signatario puede conceder exenciones de arancel, sin violar las disposiciones del Acuerdo y obvio, en el caso de Colombia, sin violar la Constitución Nacional.”</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-353/97
Fecha de la sentencia	los cuatro (4) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Luis Angel Esguerra Morales y Juan Manuel Charry Urueña.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 de la ley 218 de 1995 " Por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994 proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante decreto 1178 del 9 de junio 1994 y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.
Decision	<p>Primero.- ESTÉSE a lo resuelto en las sentencias C-407 y C-468 de 1995, y C-256 de 1997.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 1º de la ley 218 de 1995, salvó su parágrafo que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Tercero.- Decláranse EXEQUIBLES los artículos 2º; 3º; 4º, 5º; 6º y 12</p>

	de la ley 218 de 1995, pero sólo por las razones analizadas en la parte motiva de este fallo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Cargo por violación del artículo 215 de la Constitución.</p> <p>La función del Congreso, en desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 215, se limita a otorgar carácter permanente a las medidas adoptadas por el Gobierno durante el estado de emergencia, por medio de leyes que deben tener relación directa y específica con las causas que dieron origen a su declaración.</p> <p>En el caso del terremoto y avalancha del río Páez, el Gobierno expidió el decreto 1264 de 1994, por medio del cual se adoptaron medidas tendientes a enfrentar la magnitud de los problemas que esa tragedia produjo, previendo mecanismos para que la población damnificada obtuviera recursos y medios que le permitieran no sólo satisfacer sus necesidades básicas sino el restablecimiento de la actividad económica y social de la zona afectada (así lo reconoció la Corte, al declarar la exequibilidad del decreto 1264 de 1994).</p> <p>Sin embargo, el Congreso excedió la facultad que se le reconoce en el artículo 215, al crear un régimen especial en materia tributaria, aduanera y de comercio, para algunas regiones del Cauca y Huila, sin conexidad alguna con los decretos legislativos que dictó el Gobierno, pues se benefician sin haber sufrido perjuicio alguno. El único objetivo de la ley acusada es lograr el desarrollo y promoción económica de dichas zonas.</p> <p>Cargo por violación del artículo 334 de la Constitución.</p> <p>Se desconoce el principio de solidaridad territorial que implícitamente consagra este precepto constitucional, pues si bien el Estado puede o debe intervenir en la economía con el fin de lograr la productividad y competitividad que permitan el desarrollo armónico de todas las regiones, dicha intervención no se puede realizar en detrimento de algunas zonas o sectores de la población.</p> <p>La ley 218 de 1995, creó mecanismos para lograr el desarrollo económico de sólo dos regiones, el Cauca y el Huila, cuando existen otras que requieren de igual o mayor estímulo por su situación económica y social, como es el caso específico del departamento del Chocó.</p> <p>Cargo por violación de los artículos 356, 357 y 362 de la</p>

	<p>Constitución.</p> <p>Las exenciones que se establecen en los artículos acusados, afectan los recursos que por concepto de transferencias deben recibir las distintas entidades territoriales. De esta manera, la ley acusada está comprometiendo recursos destinados a otras áreas del país que requieren del apoyo estatal.</p> <p>Cargo por violación de los artículos 13; 95, numeral 9; y 363 de la Constitución.</p> <p>Las exenciones que consagran las normas acusadas desconocen el derecho a la igualdad y equidad tributarias. La mayoría de autores coinciden en afirmar que las exenciones deben garantizar el trato igualitario y no generar situaciones de inequidad, como acontece con las normas acusadas, al beneficiar a una determinada zona del territorio sin causa justificable para ello.</p> <p>En materia arancelaria, se busca no sólo la protección de la producción nacional sino que exista competitividad en las mismas condiciones para unos y otros. Por esa razón, no pueden existir aranceles diferentes, según la zona del país para la cual vayan dirigidos los productos, porque ello desconoce el derecho a la igualdad y la unidad territorial en materia arancelaria.</p> <p>Expediente D- 1523. Demandante Juan Manuel Charry Urueña.</p> <p>Este ciudadano sólo demandó el artículo 6º.</p> <p>Cargo por violación del artículo 13 de la Constitución.</p> <p>Se hace necesaria la distinción entre la exención a los impuestos y a los aranceles. En los primeros, el Estado es el perjudicado por la reducción de sus ingresos; en los segundos, sólo un sector de la producción es el que recibe los efectos de tal decisión, pues la entrada de determinados productos o materias primas que también se producen en el país, sin ningún arancel, incide significativamente en la producción, en razón a los costos y a la competitividad desigual que genera.</p> <p>De esta manera, el Gobierno, so pretexto de proteger regiones como el Cauca y el Huila, ha puesto en peligro la economía de otras, al eliminar los aranceles para productos, materias primas, equipos, etc., que lleguen a estas zonas.</p> <p>Cargo por violación del artículo 226 de la Constitución.</p> <p>Se desconoce la equidad que debe existir en materia de comercio</p>
--	--

	<p>exterior y la reciprocidad que ella debe generar frente a las relaciones internacionales, porque cuando se decide desgravar unilateralmente productos procedentes de un Estado, éste no puede invocar la reciprocidad que en estos casos exige la Constitución.</p> <p>Cargo por violación del artículo 65 de la Constitución.</p> <p>En caso de conflicto entre la protección de ciertas actividades, y la producción de alimentos, debe darse prioridad a ésta. Por tanto, debe declararse la inexequibilidad del artículo 6º, en la medida que desconoce este precepto constitucional, cuando permite la libre importación de materias primas agrícolas y pone en peligro la producción nacional.</p> <p>Cargo por violación de los artículos 150, numeral 19, y 158 de la Constitución.</p> <p>En materia arancelaria, el legislador sólo debe señalar los criterios generales que el Gobierno está obligado a observar para el establecimiento de aranceles y su regulación. El único caso en que puede intervenir directamente, es por razones de política comercial, aspecto éste que no está presente en la ley 218 de 1995. Por tanto, esta ley no podía establecer exención arancelaria alguna.</p> <p>Así las cosas, se violó el principio de unidad de materia que exige el artículo 158 de la Constitución, al incluirse una norma que sólo compete expedirla al Presidente de la República.</p> <p>Finalmente, se afirma que existe un vicio en la aprobación de este artículo, toda vez que la expresión “materia prima” no fue aprobada en segundo debate por la plenaria del Senado de la República.</p> <p>C. Intervención ciudadana.</p> <p>De conformidad con el informe secretarial del diez y ocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997), en el término constitucional establecido para intervenir en la defensa o impugnación de las normas parcialmente acusadas, presentó escrito el ciudadano Saul Sanabria Gómez.</p> <p>Este ciudadano coadyuva las demandas presentadas en contra de algunas normas de la ley 218 de 1995, pero, en especial, se refiere al artículo 5º, frente al cual hace las siguientes precisiones.</p> <p>La primera, se refiere a la violación de los artículos 154 y 215 de la Constitución, pues la materia de que trata requería de iniciativa</p>
--	--

	<p>gubernamental, toda vez que el Congreso expidió la ley 218 de 1995, vencido el término de un año que le concede el inciso sexto del artículo 215 para reformar, modificar, derogar los decretos legislativos dictados por el Gobierno, y que son de su iniciativa.</p> <p>El segundo, se relaciona con la violación del artículo 355 de la Constitución, pues, en la práctica, el tratamiento tributario que consagra el artículo 5º, se convierte en una donación o auxilio para las empresas que se ven beneficiadas con las exenciones que establece este artículo.</p> <p>En últimas, la norma consagra una real transferencia de recursos públicos a los particulares.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-031/97
Fecha de la sentencia	enero treinta (30) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Raúl Yesid Molano Rodríguez.
Demandado	Norma acusada: Artículo 153 de la Ley 201 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 153 de la Ley 201 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Según el actor, la norma demandada resulta violatoria de los artículos 4, 125, 158, 279 y 280 de la Constitución Política, pues en su concepto los mandatos constitucionales establecen como regla general el sistema de carrera para los empleos de los órganos y entidades del Estado y no existe ninguna razón valedera que autorice darle a los agentes del Ministerio Público el carácter de empleados de libre nombramiento y remoción. En efecto:

	<p>La norma acusada no se ajusta a los criterios expuestos por la Corte en la sentencia C-514 del 16 de noviembre de 1994, según la cual los "cargos, de libre nombramiento y remoción, no pueden ser otros que los creados de manera específica, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades" pues las tareas desempeñadas por dichos agentes se contraen al desarrollo de una simple función legal. Las labores políticas o de confianza les son ajenas.</p> <p>La norma acusada viola el principio de igualdad al dar a dichos funcionarios un tratamiento legal diferente al consagrado para los funcionarios judiciales, pues estima que aquéllos constituyen una categoría especial de funcionarios dentro de la estructura interna de la Procuraduría General, dada la naturaleza de las funciones a ellos asignadas.</p> <p>La norma impugnada es además violatoria de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, toda vez que a los agentes del Ministerio Público se les debe aplicar lo consagrado para magistrados y jueces en ese estatuto y es en él precisamente donde se regula lo concerniente a la estabilidad como un derecho íntimamente ligado a la carrera administrativa.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-283/97
Fecha de la sentencia	cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 115, literal h (parcial) y 147 (parcial) de la Ley 201 de 1995, "Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General

	de la Nación y se dictan otras disposiciones"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE el literal h) del artículo 115 de la Ley 201 de 1995.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el segundo inciso del artículo 147 de la Ley 201 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del demandante, el aparte acusado del literal h) del artículo 115 de la Ley 201 de 1995 vulnera el artículo 275 de la Constitución que establece que "el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público". El actor considera que la función de ordenación del gasto en la Procuraduría General de la Nación es responsabilidad exclusiva del Procurador, en su calidad de supremo director de ese organismo de control. Agrega que, "el gasto no puede ordenarlo y menos ejecutarlo funcionario distinto del señor Procurador General de la Nación, porque la Carta no lo precisó de esa manera; y no podía preverlo así, porque en el caso que nos ocupa, el señor Secretario General del ente fiscalizador, es un funcionario administrativo cuyas responsabilidades son meramente administrativas y de ninguna manera de carácter fiscal, como sí se le reconocen y deducen al señor Procurador General de la Nación".</p> <p>De otro lado, el actor estima que el inciso segundo del artículo 147 de la Ley 201 de 1995 también viola el artículo 275 de la Carta, como quiera que si el Procurador es "quien nombra y remueve el personal del ente fiscalizador, es a él a quien corresponde dirigir en forma directa el trámite consecuencial del escalafonamiento de los servidores con derecho a éste". Igualmente, considera que la norma legal antes mencionada conculca el numeral 6° del artículo 278 de la Carta, en el cual se establece que corresponde al Procurador General de la Nación el nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados de su dependencia. A su juicio, el Procurador es el único funcionario con competencia para crear, modificar o concluir las situaciones administrativas del personal a su cargo. Por consiguiente, no es viable que el Secretario General sea quien determine el ingreso a la carrera administrativa de los servidores vinculados a la Procuraduría. Según el libelista, "el secretario cumple la función refrendadora de lo que sobre el personal de la Procuraduría disponga el señor Procurador, para que ejercido por el Secretario ese control interno, los actos que así se produzcan tengan el control jurisdiccional de la justicia contencioso-administrativa".</p>

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-443/97
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Jorge Enrique Lozano Zamudio.
Demandado	Normas acusadas: Artículos 8, 12, 45, 80, 136, 173 y 178 (todos parcialmente) de la Ley 201 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Decision	<p>Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en sentencia No. C-334 de agosto 1º de 1996 que:</p> <p>a) declaró exequibles las expresiones "agentes del Ministerio Público", "los agentes adscritos al Despacho, y todos los servidores que tengan funciones de seguridad, cualquiera que sea la denominación del cargo", contenidas en el literal a) del artículo 136 de 1995.</p> <p>b) declaró inexecutable el parágrafo del artículo 12 de la Ley 201 de 1995 y la expresión "y los demás empleos que integren la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales" del literal a) del artículo 136 de esa misma ley.</p> <p>Segundo.- DECLARAR EXEQUIBLES las expresiones "en el Decreto 3404 de 1983, de acuerdo con los artículos 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 169 a 177 del Decreto 1660 de 1978, o con base" contenida en el artículo 8º de la Ley 201 de 1995; "por el procedimiento establecido en el Decreto 3404 de 1983, de acuerdo con los artículos 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 169 a 177 del Decreto 1660 de 1978, o las normas que les sustituyan" contenida en el artículo 45 de la Ley 201 de 1995; y "el Decreto 250 de 1970 y en el 1660 de 1978 y en" contenida en el artículo 173 de la Ley 201 de 1995.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión "y variar las sedes", contenida en el artículo 80 de la Ley 201 de 1995.</p> <p>Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE la expresión "o donde las necesidades del servicio así lo exijan", contenida en el artículo 178 de la Ley 201 de 1995, en el entendido de que la facultad del traslado de los empleados de carrera administrativa deberá surtir de conformidad con los límites del poder discrecional organizativo de la administración.</p>
Conoció en segunda	NO APLICA

instancia	
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Según criterio del actor, la inclusión de normas de naturaleza disciplinaria en la ley que regula la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación infringe las reglas de la unidad de materia contempladas en el artículo 158 de la Constitución. Así mismo, el demandante sostiene que los artículos 8º, 45 y 173 impugnados contrarían el principio de legalidad que garantiza el artículo 29 de la Constitución pues, a su juicio, la inclusión de normas derogadas por la Ley 200 de 1995 desconoce el deber de tipificar en forma clara, rigurosa y taxativa las conductas reprochables disciplinariamente. De otra parte, el actor considera que los artículos 80 y 178 de la Ley 201 de 1995 infringen los artículos 42, 44 y 53 de la Carta, toda vez que la amplia facultad del ente nominador de modificar las sedes de los servidores públicos al servicio de la Procuraduría General de la Nación es arbitraria, pues desconoce los derechos mínimos del trabajador y de su familia en el desarrollo de las actividades cotidianas.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-655/97
Fecha de la sentencia	tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	María Lucía Posada Isaacs y Felipe Andrés Ramírez Suárez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 de la ley 201 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. Carlos Gaviria Díaz
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 72 de la ley 201 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>Citando jurisprudencia de esta Corte, los demandantes sostienen que una de las garantías más importantes que contempla el derecho al debido proceso, es que toda actuación judicial o administrativa debe tramitarse ante la autoridad competente. Disposición que infringe la norma acusada, puesto que no señala con claridad cuál es el funcionario público que debe investigar, en primera instancia, las faltas disciplinarias cuya competencia no esté prevista expresamente en la ley de la cual forma parte.</p> <p>Para los actores, el precepto demandado es de "carácter abierto", porque los tres factores que consagra para poder determinar la competencia son vagos y, en últimas, quedaría a discreción del juzgador hacerlo.</p> <p>De otra parte, consideran que el legislador al no señalar en forma clara y precisa la competencia, violó también el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 10 y 11), la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, proclamada el mismo año y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, arts. 8 y 9).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-568/97
Fecha de la sentencia	noviembre seis (6) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Alvaro Palacios Sánchez
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 107 de la ley 201 de 1995, "por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORÓN DÍAZ.
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 107 de la ley 201 de 1995 en lo relativo a los cargos formulados.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>Estima el actor que la preceptiva acusada vulnera los artículos 158, 169 y 277-10 de la Carta.</p> <p>A juicio del demandante la ley 201 de 1995, de acuerdo con su título, debe referirse, exclusivamente, a materias relacionadas con la estructura y organización de la Procuraduría y, sin embargo, la norma acusada modifica algunos procedimientos del derecho de familia, como acontece con el literal a), cuyo carácter genérico es capaz de “alterar la competencia para cualquier proceso debiendo intervenir el Procurador Judicial de Familia; con el literal b), que altera la competencia en los trámites administrativos de resolución de abandono e introduce modificaciones al decreto 2737 de 1989 que también resulta variado por el literal c), en relación con el proceso de adopción.</p> <p>En criterio del actor es inconstitucional el literal d), pues autoriza al Procurador General para asignar competencias a los procuradores judiciales de familia, “cuando esto le corresponde a la ley, al tenor del numeral 10 del artículo 277 de la Constitución Nacional”.</p> <p>Considera inadmisibile el demandante que, “por una ley de carácter orgánico” se alteren competencias y se dicten disposiciones que no tienen relación con el título, “creando, además, la posibilidad de producir nulidad de toda la actuación cuando el procurador judicial no es notificado...”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-012/97
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Hernán Antonio Barrero Bravo.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 158 de la ley 200 de 1995, “por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”.

Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 158 de la ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único), advirtiendo que en su aplicación el superior no podrá, en ningún caso, agravar la pena impuesta al apelante único, haya o no una pluralidad de disciplinados.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLE el inciso 3o. del artículo 103 de la ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único), excepto la palabra “no” y la expresión “, excepto que el objeto de la apelación sea diferente”, que se declaran INEXEQUIBLES.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>a. La demanda.</p> <p>En opinión del demandante, la norma impugnada viola los artículos 6, 29 y 31 de la Constitución, porque permitir que el funcionario de segunda instancia revise el proceso disciplinario en su integridad, es autorizarlo para reformar y enmendar la providencia recurrida, <i>“aún con perjuicio para el apelante único en aquellos aspectos no impugnados por éste y que le sean favorables, hasta permitir agravar la pena impuesta como sanción disciplinaria”</i>.</p> <p>Como el servidor público que expide el acto en primera instancia, en desarrollo del principio de legalidad, lo debe hacer dando estricto cumplimiento a la ley, no se justifica lo dispuesto en el artículo demandado, esto es, permitir que se revise el proceso disciplinario en su integridad.</p> <p>Así mismo, la prohibición de la <i>reformatio in pejus</i> es una garantía extensiva, por afinidad estructural, a las sanciones disciplinarias administrativas, así éstas no surjan de sentencias judiciales.</p> <p>En este sentido, el actor manifiesta que las sanciones disciplinarias y penales comparten elementos comunes, tales como el sometimiento al principio de legalidad, la necesidad de un proceso previo y el respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.</p> <p>En apoyo de sus aseveraciones, cita dos sentencias de esta Corte: la número T-233 de 1995, que dice que <i>“la prohibición de reformar la condena en perjuicio del apelante único no solamente es aplicable en materia penal, ni tampoco está limitada a las sentencias judiciales, sino que, por el contrario, cubija otras ramas del Derecho y se hace exigible en las actuaciones administrativas y particularmente en las disciplinarias, las cuales -se repite- son de clara estirpe sancionatoria”</i>; y la número SU-327 del mismo año,</p>

	uno de cuyos apartes dice que <i>“tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional”</i> .
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-012/97</p> <p>UNIDAD NORMATIVA-Conexidad (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>La unión que puede efectuarse entre la norma objeto de la demanda y aquella no acusada, solamente podría llevar a constituir una unidad normativa sobre la base de una necesaria e íntima conexión que no sólo no ha sido planteada por el actor, sino que además no existe. Adicionalmente, la unidad normativa sólo se estructura cuando, tanto el precepto demandado como el de cuya vinculación se trata, son contrarios a la Constitución por las mismas razones encontradas respecto del otro o es accesorio al que se declare inexecutable.</i></p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-430/97
Fecha de la sentencia	septiembre cuatro (4) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	David de Jesús Gómez Cárdenas
Demandado	Normas Demandadas: Artículos 77 (parcial), 130 (parcial) y 147 (parcial) de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Primero. Declarar EXEQUIBLES los artículos 77-2 y 130 de la ley 200/95 "por el cual se adopta el Código Disciplinario Unico".

	<p>Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión <i>"Oportunidad para rendir exposición. Quien tenga conocimiento de la existencia de una investigación disciplinaria en su contra y antes de que se le formulen cargos, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba la exposición espontánea"</i>, del art. 147 de dicha ley, bajo la condición de que se entienda que la oportunidad para rendir la exposición voluntaria se contrae no sólo a la etapa de la investigación sino de la indagación preliminar.</p> <p>Tercero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión <i>"aquél la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario negará la solicitud con auto de trámite"</i>, del art. 147 de la referida ley.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Según el demandante las normas acusadas infringen los artículos 29, 33 y 83 de la Constitución Política. El concepto de la violación lo expone de la siguiente manera :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conforme con el artículo 29 superior, quien sea sindicado tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Ese derecho lo adquiere el investigado desde el momento en que se entera o es informado de que una autoridad jurisdiccional o administrativa ha iniciado una investigación o indagación en su contra.</li> <li>Negarle al disciplinado o investigado la posibilidad de acceder al informativo, alegando que sólo se le puede permitir dicho acceso a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de cargos, según los términos del numeral 2 del artículo 77 acusado, es una conducta que desconoce los derechos de contradicción y defensa del disciplinado en cuanto le impide a este conocer las pruebas allegadas en su contra, entre éstas, el escrito de queja o su eventual ampliación.</li> <li>- Por razones similares, el artículo 130 acusado es violatorio del derecho de defensa en razón de que condiciona la contradicción de la prueba a partir de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria; de manera que el investigado no podrá discutir las pruebas en la etapa de la investigación preliminar, sino durante la investigación propiamente dicha.</li> <li>- El demandante encuentra una evidente contradicción de los artículos 77 y 130 de la ley 200/95 con el artículo 80 de la misma ley, porque mientras el numeral 2 del primer artículo dispone que el investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del</li> </ul>

	<p>momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de los cargos, y el 130 señala que se podrá controvertir la prueba a partir de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria, el artículo 80 es mucho más amplio, al punto que extiende la facultad del investigado para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar las que estime el caso, tanto en la etapa de la indagación preliminar como en la de la investigación disciplinaria.</p> <p>Para el actor no es admisible aplicar el artículo 5o. de la ley 57 de 1887, según el cual, en caso de que varias disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallen en un mismo código se preferirá la norma posterior porque, a su juicio, en el caso <i>sub lite</i> debe aplicarse el artículo 80 aunque sea anterior al 130, ya que en el enfoque moderno de interpretación normativa, "es preciso examinar las normas incompatibles bajo el lente purificador de la Constitución Política para determinar cuál de ellas, sea anterior o posterior, realiza en mejor medida el derecho fundamental consagrado en la Carta Magna, de manera que el precepto que guarde con el texto constitucional la mayor correspondencia y armonía prefiere al otro a pesar de que, se insiste, éste se encuentre consagrado en artículo posterior".</p> <p>- También el numeral 2o. del artículo 77 de la ley 200/95 vulnera los artículos 29 y 83 de la Constitución, en cuanto establecen que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable y que las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.</p> <p>En efecto, al aplicar el numeral 2o. del referido artículo 77 de manera estricta, necesariamente se parte de la base de que el indagado es culpable, que actuó con dolo y mala fe y que no se le puede permitir el acceso a las diligencias preliminares, "pues dan por sentado que el fin que pretende el investigado, al conocer el averiguatorio es el de fabular una coartada en su favor, presumiendo así la peor mala fe ostensible del indagado".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-656/97
Fecha de la sentencia	tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Actores: Liliana Rodríguez González y Alvaro Hernán Echeverry Cabrera
Demandado	Demandas de inconstitucionalidad contra los numerales 4° y 5° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero: Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-564 de 1997 del 13 de noviembre de 1997 que declaró exequible el numeral 5° del artículo 44 de la ley 200 de julio 28 de 1995.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 44 de la ley 200 de julio 8 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estiman los demandantes que las normas acusadas son violatorias de los artículos 158, 169, 298, 299, 311 y 312 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>Los cargos formulados por los demandantes coinciden en que los numerales 4° y 5° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, vulneran el principio constitucional de la unidad de materia, según el cual es inadmisibles que dentro de una ley se hallen disposiciones o modificaciones que no tengan relación de fondo con su contenido material. En este sentido, los numerales acusados, insertos en la Ley 200 de 1995 por la cual se regula el Régimen Disciplinario Único de los servidores públicos, nada tiene que ver con dicha normatividad, pues desarrollan asuntos atinentes al régimen Municipal y Departamental y al sistema electoral, temas para cuya regulación la Constitución Política ha previsto la expedición de leyes especiales y expresas, como lo es la Ley 136 de 1994.</p> <p>Dentro de ese contexto, el demandante Echeverry Cabrera asegura que las normas acusadas desconocen el principio constitucional de la jerarquía normativa, pues regulan un asunto que le es propio a las leyes especiales sobre organización del régimen de inhabilidades de los miembros de las corporaciones públicas territoriales. En este</p>

	<p>sentido afirma que “...es indiscutible la ausencia de relación causal entre las normas antes descritas, toda vez que de ninguna manera puede entenderse que constituya infracción al comportamiento de los servidores públicos, el hecho de renunciar a su cargo o empleo público y formular sus aspiraciones tendientes a ocupar cargos de elección popular, pues en caso de admitir semejante postura, ello significaría sin lugar a dudas una violación a los derechos políticos consagrados en el mandato 40 de la Carta Política.”</p> <p>De otro lado, el mismo demandante considera que las normas referenciadas van en contravía del artículo 5° de la Ley 57 de 1887, según el cual, las disposiciones relativas a asuntos especiales prefieren a las de carácter general.</p> <p>Por último, y con base en las Sentencias C-531/95 y C-025/93 de la Corte Constitucional, el demandante considera que la vulneración al principio constitucional de la unidad de materia no constituye un vicio de forma de la ley, sino un verdadero vicio de fondo, y que por lo tanto, la oportunidad para interponer la acción de inexequibilidad no ha caducado.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-564/97
Fecha de la sentencia	noviembre seis (6) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Jorge Humberto Valero
Demandado	Normas Demandadas: Ley 200 DE 1995 Artículo 44, Numeral 5.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Declarar EXEQUIBLE el numeral 5 del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano Jorge Humberto Valero, demandó ante la Corte Constitucional la declaración de inexecutable del numeral 5 del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, por Aduce el considerar que viola los artículos 13, 40-1, 127 inciso 3° y 243 de la Constitución.</p> <p>demandante que las normas impugnadas son violatorias de la Constitución, porque el derecho a elegir y ser elegido es uno solo y no puede ser restringido por el legislador al otorgarle a algunos ciudadanos la oportunidad de elegir, pero no la de ser elegidos, con lo cual, se viola el derecho a la igualdad, pues se discrimina cuando ante situaciones iguales se da un tratamiento jurídico diferente.</p> <p>Por otra parte, argumenta que el legislador al emitir el numeral 5 del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, transgredió el artículo 243 de la Constitución, debido a que la Corte Constitucional en sentencia C-454 de 1993 declaró inexecutable los numerales 16 y 17 del artículo 7 del Decreto 1647 de 1991, y parcialmente inconstitucionales el artículo 10 del Decreto 2400 de 1968, el numeral 20 del artículo 15 de la Ley 13 de 1984 y el artículo 158 del Código Penal. Es decir, que violando el principio de la cosa juzgada el legislador reprodujo una norma que había sido declarada inexecutable.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-564/97 INHABILIDADES TEMPORALES-Inconstitucionalidad (Salvamento parcial de voto)</p>

	<p><i>El artículo 28 del Estatuto Superior es tajante al afirmar que "en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles". De igual modo, la Constitución es expresa al señalar, en su artículo 122, que la única inhabilidad de carácter intemporal para desempeñar empleos públicos es aquella que se deriva de la condena por delitos contra el patrimonio del Estado. De la lectura concordada de las normas constitucionales antes mencionadas se deduce con absoluta claridad que no pueden existir penas ni medidas de seguridad de carácter eterno, salvo la inhabilidad que surge de la condena por delitos contra el patrimonio del Estado. A juicio del suscrito magistrado disidente, la Carta establece una prohibición absoluta frente a la cual no es posible, por vía de interpretación judicial, establecer excepciones distintas a la establecida en su artículo 122, con el argumento de proteger o hacer efectivos bienes constitucionalmente tutelados tales como la protección de la confianza de la ciudadanía en una determinada categoría de servidores públicos o la importancia y trascendencia pública de las funciones desempeñadas por algún servidor del Estado.</i></p> <p><b>INHABILIDADES PARA DIPUTADO Y CONCEJAL/LIBERTAD PERSONAL (Salvamento parcial de voto)</b></p> <p><i>La importancia de la función que corresponde desempeñar a los diputados y a los concejales, por ser representantes de la voluntad popular a nivel departamental y municipal y, además, por el altísimo valor social que revisten las funciones que tales servidores públicos desempeñan. Sin embargo, la preservación de tales valores, así como el logro de una administración pública enmarcada dentro de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, no pueden obtenerse al costo de sacrificar el derecho fundamental a la libertad personal y los límites del debido proceso.</i></p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-650/97
Fecha de la sentencia	diciembre tres (3) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	José Alberto García Cortes
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 49 (parcial) de la Ley 200 de 1995 “por la cual se expide el Código Disciplinario Unico”.
Conoció en primera instancia	José Alberto García Cortes
Decision	Declararse INHIBIDA para fallar en el presente proceso.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. El demandante considera que la Carta ha asignado al término “control interno” un significado específico, que no puede equipararse, como lo hace la disposición acusada, al control disciplinario que realiza cada entidad estatal.</p> <p>La asimilación introducida desconoce el alcance del artículo 209 de la Carta, en el cual se prescribe la existencia de organismos de control interno en las entidades estatales, con el objeto de atender a los fines de la administración pública. El demandante precisa que “ese sistema de control obedece al desarrollo, desempeño o cumplimiento de la actividad que realizan los entes administrativos”.</p> <p>Así, el legislador confunde conceptos distintos - control disciplinario y control interno -, y trastoca el sentido de las funciones disciplinarias violando los artículos 118 y 277 de la C.P.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-157/97
Fecha de la sentencia	
Demandante	Santiago González Angarita.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° y 2° de la Ley 308 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	En los términos de esta Sentencia, decláranse EXEQUIBLES los artículos 1 y 2 de la Ley 308 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que las normas acusadas vulneran los artículos 29, 51, 58, 60 y 64 de la Constitución Política.</p> <p>Manifiesta que la disposición acusada vulnera el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que desconoce lo establecido en el artículo 762 del Código Civil colombiano, relativo a la posesión, el cual contempla distintas situaciones administrativas, cuya competencia corresponde a las autoridades de policía, con el propósito de amparar y legitimar la mera tenencia o la posesión de inmuebles.</p> <p>De otra parte, afirma que el artículo constitucional, que consagra el derecho que le asiste a todos los colombianos a tener vivienda digna, resulta violado por la norma legal demandada, teniendo presente que el Estado colombiano ha sido inoperante al no desarrollar con eficacia y amplitud un verdadero programa de vivienda social que solucione las necesidades económicas de la población colombiana.</p> <p>En relación con la violación al precepto constitucional que garantiza el derecho a la propiedad privada (artículo 58 C.P.) y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, menciona que el artículo 367A del Código Penal, modificado por una de las normas atacadas, olvida, desconoce y desacata los preceptos establecidos en el Código Civil, en el de Policía y en la legislación agraria, así como en la normatividad administrativa, disposiciones todas éstas que amparan, protegen y legalizan la tenencia y posesión de bienes</p>

	<p>inmuebles. Así mismo, considera el impugnante que el legislador, al expedir la ley demandada, no hace otra cosa que impedir el disfrute y goce del derecho a la propiedad, al establecer requisitos adicionales para su garantía, infringiendo principios constitucionales, civiles y procedimentales.</p> <p>Por último, argumenta el demandante que sancionar penalmente la conducta de parcelar bienes inmuebles en zonas rurales implica el desconocimiento de la realidad social que enfrentan los campesinos colombianos, y, por otra parte, el quebranto de la legislación agraria creada mediante Decreto 2303 de 1989, y su régimen normativo anterior, como son las leyes 200 de 1936 y 4ª de 1973.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-381/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Luz Angela Hermida y otros
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-310 del 25 de junio de 1997, en lo referente a la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>Estiman los actores que la disposición acusada es violatoria de los</p>

	<p>artículos 2, 11, 13, 25, 29, 83 y 124 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>Según los demandantes, la norma acusada es violatoria de los principios constitucionales arriba señalados, porque no hace distinción alguna entre el incremento patrimonial obtenido por medios lícitos y el que deriva de una actividad ilegal, omisión esta que conduciría a considerar como constitutivo de falta “gravísima” en materia disciplinaria, cualquier incremento en el patrimonio de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas.</p> <p>Estiman, por demás, que el artículo acusado prescribe una forma de responsabilidad objetiva, pues penaliza los incrementos patrimoniales sin que se le conceda al sancionado la posibilidad de controvertir la medida disciplinaria.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-310/97
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Carlos Mario Isaza Serrano
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25-4, 26 inciso primero (parcial), 30-1, y 175 (parcial) de la ley 200 de 1995 - Código Disciplinario Unico-
Conoció en primera instancia	Carlos Mario Isaza Serrano
Decision	Primero : Declarar EXEQUIBLE el numeral 4o. del artículo 25 de la ley 200 de 1995, bajo el entendido de que el incremento patrimonial debe ser aquél que no tiene causa justificada, o es indebido o ilícito.



	<p>Segundo : Declarar EXEQUIBLE el aparte que dice: "...Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Contador General, Procurador General e la Nación, Auditor general y miembros del Consejo Nacional Electoral", del artículo 26 de la ley 200 de 1995</p> <p>Tercero : Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 30 de la ley 200 de 1995.</p> <p>Cuarto : Declarar EXEQUIBLE el artículo 175 de la ley 200 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Señala el demandante que el numeral 4o. del artículo 25 de la ley 200 de 1995, vulnera el Preámbulo y el artículo 13 de la Constitución, porque si bien podía "prohibir el incremento patrimonial indebido o injustificado" no podía hacerlo frente al "incremento lícito, como se desprende del texto de la norma acusada, que puede originarse entre las múltiples circunstancias existentes, de la percepción de la remuneración y las consiguientes prestaciones sociales a que tiene derecho el servidor público cuanto éstas le permiten gradualmente ir adquiriendo bienes de fortuna. Con la vigencia de la norma demandada podemos vernos abocados, entonces, a enfrentar la paradójica situación de que como consecuencia de la investidura que ostenta el servidor público o del mismo ejercicio lícito de funciones públicas sea procesado y sancionado como destinatario de la ley disciplinaria, por usufructuar el derecho a la remuneración y percepción de sus prestaciones sociales, circunstancia que de hecho le implica según la cantidad de salario devengado, un incremento patrimonial justificado o debido."</p> <p>Según el actor, dicho incremento patrimonial puede también estar relacionado con hechos ajenos al ejercicio de funciones públicas, como por ejemplo, cuando se recibe una herencia o se resulta favorecido con un juego de azar, sin que por ello se ponga en entredicho la moralidad y el correcto funcionamiento de la Administración Pública. En consecuencia, considera que la norma acusada consagra un "medio legal desproporcionado que bajo un injusto factor de diferenciación que no tiene asidero o soporte, impone a los servidores públicos y a quienes desempeñan funciones públicas, por razón de su investidura o de las especiales tareas que cumplen, una carga sin objetividad ni razonabilidad frente a los particulares, privándolos así del ejercicio de actividades lícitas o de ser favorecido, igualmente, por circunstancias lícitas propias de la dinámica económica de un orden social justo, que en nada afecta el correcto funcionamiento y la moralidad de la Administración."</p>

	<p>- Para el actor, el inciso primero del artículo 26, objeto de demanda, contraría los artículos 121, 174, 175-2 y 178-3 de la Carta, al hacer extensivo el fuero constitucional a funcionarios no contemplados en las normas constitucionales citadas, pues solamente el Constituyente es quien debe determinar cuáles servidores públicos distintos de los mencionados en los artículos 174 y 178-3 de la Carta, pueden ser investigados y juzgados por el Congreso de la República.</p> <p>- De la misma manera, considera que el numeral 1o. del artículo 30, materia de impugnación, lesiona el artículo 29 de la Constitución, pues desconoce el principio de legalidad de las faltas y sanciones en materia disciplinaria, al hacer una remisión a la ley 190 de 1995, la cual "no hace referencia clara a inhabilidades como consecuencia de sanciones disciplinarias sino a interdicción de funciones públicas como consecuencia de sanciones de orden penal. En el caso penal la interdicción genera la inhabilidad mientras que en el caso disciplinario la inhabilidad es generada por la sanción principal. Es decir, en el primer evento la interdicción es el contenido de la inhabilidad, mientras que en el segundo, la inhabilidad es consecuencia directa de la sanción principal."</p> <p>- La parte acusada del artículo 175, según el demandante, viola el artículo 13 de la Ley Suprema, al disponer que "en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los miembros de la fuerza pública se apliquen las normas sustantivas contenidas en sus respectivos estatutos disciplinarios especiales con observancia de los principios rectores y el procedimiento señalado en el código disciplinario único cualquiera sea la autoridad que adelante la investigación, excluyendo la aplicación de la restante preceptiva del mismo código. La violación radica en carencia de justificación objetiva y razonable que permita exceptuar a los miembros de la fuerza pública de la cobertura de la parte general del Estatuto Disciplinario Unico, independientemente de que por razón de su formación especializada, del rigor monástico y jerárquico que caracteriza sus organizaciones, exista una tipificación de conductas disciplinarias que respondan a este sistema organizativo".</p> <p>Para terminar, dice el actor que no existe razón alguna "para diferenciar a los miembros de la fuerza pública, de los restantes servidores del Estado para aplicar sólo respecto de éstos, tipos disciplinarios como el genocidio y la desaparición forzada cuando es un hecho notorio que los agentes estatales mayoritariamente comprometidos en violaciones a los derechos humanos, son los pertenecientes a la fuerza pública o, como la obstaculización de investigaciones judiciales o disciplinarias."</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	SI DRES. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado  Nos remitimos -en lo pertinente- a los argumentos expuestos a propósito de la sentencia C-319 de 1996, los que reiteramos en el presente caso.
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	<b>Sentencia C-616/97</b>
Fecha de la sentencia	veintisiete (27) de noviembre mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	José Filadelfo Mercado Alvarez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 166, 167 y 172 (todos parcialmente) del Decreto 100 de 1980; 27, 46, 266, 279, 282, 285, 287, 288, 292, 295, 316, 393, 432 (todos parcialmente) del Decreto 2700 de 1991; 94 (parcial) de la Ley 136 de 1994; 524, 528 y 529 (todos parcialmente) del Decreto 2550 de 1988; 71 y 129 (todos parcialmente) de la Ley 200 de 1995; 37 (parcial) del Decreto 2591 de 1991, y 47, 55, 75, 78, 80, 92, 101, 133, 161, 192, 202, 208, 211, 212(total), 222, 223, 227, 228, 236, 243, 273, 274, 298, 299, 315, 318, 320, 338, 417, 418, 446, 476, 495, 513, 514, 570, 592, 600, 620, 659 y 681 (todos parcialmente) del Código de Procedimiento Civil.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Primero : Declarar EXEQUIBLES las expresiones “juramento”, “bajo juramento”, “bajo la gravedad del juramento”, “juramentadas”, “jura”, “jura en falso” o “jurada”, contenidas en los artículos 166, 167 y 172 del Decreto 100 de 1980; 27, 46, 266, 279, 282, 285, 287, 288, 292, 295, 316, 393, 432 del Decreto 2700 de 1991; 524, 528 y 529 del Decreto 2550 de 1988; 71 y 129 de la Ley 200 de 1995; 37 del Decreto 2591 de 1991, y 47, 55, 75, 78, 80, 92, 101, 133, 161, 192, 202, 208, 211, 222, 223, 227, 228, 236, 243, 273, 274, 298,

	<p>299, 315, 318, 320, 338, 417, 418, 446, 476, 495, 513, 514, 592, 600, 620, 659 y 681 del Código de Procedimiento Civil, así como la totalidad del artículo 212 del mismo ordenamiento y 94 de la Ley 136 de 1994.</p> <p>Segundo : Declararse INHIBIDA en relación con el literal d) del artículo 570 del Código de Procedimiento Civil .</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima el demandante que la disposición acusada es violatoria de los artículos 5, 13, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda Los cargos formulados por el actor pueden sintetizarse en uno solo: la institución del juramento, al ser exigida por los artículos demandados como requisito en el trámite de ciertos procedimientos administrativos y judiciales, coarta la libertad religiosa y la libertad de conciencia de los individuos a los que, por convicciones íntimas de orden moral y religioso, les está vedado manifestar su voluntad por esta vía. Por las mismas razones, las expresiones demandadas van en contravía de los derechos inalienables de las personas, de la igualdad de los individuos ante la ley, del libre desarrollo de la personalidad y de la libertad de opinión.</p> <p>Adicionalmente, el demandante solicita a esta Corporación que, atendiendo a los argumentos de inconstitucionalidad esgrimidos respecto de los apartes acusados, se declaren contrarias a la Carta Política las demás normas que contengan dicha figura jurídica.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-076/97

Fecha de la sentencia	veinte (20) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Luis Carlos Gaitánn Gómez.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 191 de 1995 "por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera" y, específicamente, en contra del artículo 24.
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	Primero: Declárase EXEQUIBLE la ley 191 de 1995, pero sólo por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  Segundo: Declárase EXEQUIBLE el artículo 24 de la ley 191 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-236/97
Fecha de la sentencia	mayo veinte (20) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Jairo Villegas Arbelaez.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6o. y 44o. (parcial) de la Ley 300 de 1996, "por la cual se expide la ley general del turismo y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL

Decision	Declararse INHIBIDA, por las razones expuestas en la parte motiva, para decidir en relación con la demanda de inconstitucionalidad formulada contra los apartes señalados de los artículos 6 y 44 inciso 2 de la Ley 300 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que los segmentos normativos acusados violan los artículos 113, 121, 136-1, 150-7 y su inciso final.</p> <p>El concepto de la violación lo expone de la siguiente manera:</p> <p>En los artículos 6 y 44 de la ley 300 de 1996 se regulan los contratos entre la Corporación Nacional del Turismo y el Fondo de Promoción Turística, estableciéndose que aquélla "destinará no menos del 40% de su presupuesto de inversión", con la finalidad de celebrar contratos de promoción del turismo. Pero acontece, que la función administrativa de promoción del turismo está atribuida por la propia ley 300 al Ministerio de Desarrollo Económico a través de la División de Investigación de Mercados y Promoción Turística de la Dirección de Estrategia Turística, y al Fondo de Promoción turística (art.s 4, numerales 1 y 1.1, 6 y 43).</p> <p>Es decir, que a juicio del actor entre las funciones de la Corporación Nacional de Turismo que se señalan en el artículo 52 de la Ley 300 de 1996, no esta la de adelantar programas de "promoción turística", sino "proyectos turísticos". La función de "promoción" por parte de la Corporación Nacional de Turismo tan solo es residual, exceptiva y transitoria, puesto que en el parágrafo del artículo 52 de la referida ley se expresa que esta entidad "podrá seguir ejecutando los proyectos de promoción que tenga programados con cargo a los recursos que le fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 1996".</p> <p>Con fundamento en las consideraciones precedentes, el demandante estructura los cargos de inconstitucionalidad de los apartes normativos acusados, en los siguientes términos:</p> <p>"Siendo ello así, carece de causa o función, el que el legislador mediante las normas acusadas, le imponga a la CORPORACION NACIONAL DE TURISMO la obligación de contratar con el FONDO DE PROMOCION TURISTICA, para cumplir una función: la de promoción turística que legalmente no le corresponde y lo que es más grave, imponiéndosele a la C.N.T. que para la ejecución de programas de promoción (art. 44 inc. 1°), como fuente de otros recursos para la promoción turística según lo indica el título del artículo 44, la C.N.T. destinará no menos del 40% de su presupuesto de inversión. (art. 44 inciso final)".</p>

	<p>"Se violan así los siguientes artículos Constitucionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 121, al atribuírsele a las autoridades de la C.N.T. funciones distintas de las señaladas por la propia ley 300 de 1996.</li> <li>- Se viola la autonomía administrativa y patrimonial de la Empresa Industrial y Comercial: CORPORACIÓN NACIONAL DE TURISMO (ley 300, art. 51) al imponerle el legislador la obligación de contratar para una función que no le corresponde y de destinar para ello el 40% de su presupuesto de inversión, con infracción del artículo 150 numeral 7 dado que el legislador carece de esas atribuciones; usurpando el legislador funciones propias y exclusivas de la Rama Ejecutiva según la separación de las Ramas de Poder (C.P. arts. 113 y 136 num. 1) y desbordando el legislador su atribución en materia de leyes de Contratación, para singularmente imponer y discriminar sin causa (C.P. art. 150 inciso final)".</li> </ul>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-320/97
Fecha de la sentencia	tres (3) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Carlos Enrique Marín Vélez
Demandado	Norma acusada: Artículos 34 (parcial) y 61 literal 8º de la Ley 181 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO

Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 32 de la Ley 181 de 1995, en el entendido de que ese mandato no se aplica a los propios jugadores, quienes pueden ser entonces titulares de sus derechos deportivos, en los términos de esta sentencia.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la frase inicial “Entiéndese por derechos deportivos de los jugadores o deportistas, la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos de registrar, inscribir, o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación respectiva” del artículo 34 de la Ley 181 de 1995, salvo la expresión “exclusiva”, que es INEXEQUIBLE, en el entendido de que los propios jugadores pueden ser titulares de sus derechos deportivos, en los términos de esta sentencia.</p> <p>Tercero: Declarar EXEQUIBLE la frase final “Ningún club profesional podrá transferir más de dos jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo” del artículo 34 de la Ley 181 de 1995, siempre y cuando se entienda que se debe contar con el consentimiento del deportista y no se puede desmejorar su situación laboral, conforme a lo señalado en esta sentencia.</p> <p>Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 35 de la Ley 181 de 1995, salvo la expresión “dentro de un plazo no mayor de seis meses”, que es INEXEQUIBLE, en el entendido de que no puede haber derechos deportivos sin contrato de trabajo vigente, en los términos de esta sentencia.</p> <p>Quinto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 61 literal 8º de la Ley 181 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-282/97
Fecha de la sentencia	cinco (5) días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Herberth Vásquez Pinzón



Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 83 de la Ley 300 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	En los términos y por las razones expresadas en esta Sentencia, declárase EXEQUIBLE el artículo 83 de la Ley 300 de 1996, excepto las palabras "Para los efectos del artículo 44 de la Ley 23 de 1982...", que se declaran INEXEQUIBLES.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que la norma acusada vulnera los artículos 61, 157, numerales 2 y 3, 158 y 161 de la Constitución Política, el Convenio de Berna y la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.</p> <p>Manifiesta el demandante que el artículo 44 de la Ley 23 de 1982, al hablar sobre los derechos de autor, dispone que es libre la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en el domicilio privado sin ánimo de lucro. Este derecho protege las obras del intelecto, sin mirar su destinación y la facultad de sus titulares para recibir contraprestación por la autorización que hagan. Es más, el mismo artículo 61 constitucional, al consagrar la protección a la propiedad intelectual, hace referencia no sólo a lo que se establezca en las leyes, sino en los tratados y convenios internacionales.</p> <p>A juicio del impugnante, la disposición acusada consagra una excepción al principio de que toda utilización de obras en sitios públicos debe ser previamente autorizada por sus titulares. Si bien es cierto se establece que las habitaciones de los hoteles y hospedajes que se alquilen para fines de alojamiento se asimilan a un domicilio privado, también lo es que el hotel es por naturaleza comercial, con ánimo de lucro, y por tanto es inadmisibles que en dichos lugares no se requiera de la autorización previa de los titulares de derechos de autor para que se utilicen sus obras sin límite alguno y éstos no perciban remuneración por ello.</p> <p>Por otra parte -afirma-, la norma impugnada no cumplió con los requisitos de formación de las leyes establecidos en el artículo 157 de la Carta Política, pues ésta no se discutió ni incluyó en las Gacetas 475 y 435 del 23 de octubre y 19 de diciembre de 1995, donde se publicaron las ponencias para primer y segundo debate, respectivamente, en el Senado de la República.</p> <p>Por último manifiesta que se violó el principio de la unidad de materia, por cuanto la disposición acusada no guarda relación con las demás normas de la Ley 300 de 1996.</p>

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-569/97
Fecha de la sentencia	seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Beatriz Garzón de Quiroz
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2° y 16 (parcial) de la Ley 335 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-350 de 1997, en relación con el artículo 2° de la ley 335 de 1996.</p> <p>Segundo : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-350 de 1997, en relación con la expresión “determinación de la programación” contenida en el inciso primero del artículo del artículo 16 de la ley 335 de 1996.</p> <p>Tercero : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-350 de 1997, en relación con el párrafo 1° del artículo 16 de la ley 336 de 1996.</p> <p>Cuarto : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-445 de 1997, en relación con la expresión “previo visto bueno del Ministerio de Comunicaciones”, contenida en el inciso segundo del párrafo 2° del artículo 16 de la ley 336 de 1996.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-445/97
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Julio César Torres Saboya
Demandado	Parágrafo 2o. (parcial) del artículo 16 de la Ley 335 de 1996 “por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.”
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Decision	<p>Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “previo el visto bueno del Ministerio de Comunicaciones” contenida en el parágrafo 2o. del artículo 16 de la Ley 335 de 1996.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “..pudiendo hacer cambios dentro de las bandas del VHF, pero en todo caso sin desmejorar las condiciones que tienen los operadores públicos de televisión a la vigencia de la presente ley...” consagrada en el parágrafo 2o. del artículo 16 de la Ley 335 de 1996, con base en las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, la norma demandada, en las expresiones que se señalan, vulnera los artículos 4, 75, 76 y 77 de la Constitución Política.</p> <p>A manera de introducción, el demandante presenta unas consideraciones sobre la necesidad técnica y jurídica de realizar el reordenamiento del espectro electromagnético con una debida asignación de frecuencias, a fin de hacer viable el ejercicio del derecho fundamental a fundar medios masivos de comunicación (C.P., art. 20), a través de un uso racional, eficaz y económico con acceso equitativo de las mismas, según lo dispuesto en el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aprobado mediante la Ley 252 de 1995, lo que en su concepto no se está cumpliendo por INRAVISION y los Canales Regionales, actuales operadores de televisión.</p> <p>En seguida, el actor hace alusión a las funciones de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como organismo encargado de intervenir a nombre del Estado en el espectro electromagnético destinado al servicio de televisión (C.P., art. 76 y Ley 182 de 1995, art. 23), y del Ministerio de Comunicaciones, como entidad que realiza la gestión y el control del espectro en general (Ley 182 de 1995, art. 23), para señalar que dichas labores deben ejercerse en forma coordinada, y así, con base en esta precisión, entrar a formular su inconformidad contra la norma acusada con los</p>

	<p>siguientes cargos :</p> <p>1. De un lado, el actor manifiesta que si bien corresponde al legislador la función de determinar la política general en materia de televisión, su ejecución es del resorte exclusivo de la Comisión, unido al hecho de que a ésta además compete la intervención estatal en el espectro electromagnético. Por lo tanto, el Congreso al determinar las pautas generales a las cuales debe sujetarse la entidad rectora de la televisión no puede desconocer las facultades exclusivas y la autonomía de la CNTV subordinándola a la decisión de otra entidad estatal y establecer una intromisión indebida del ejecutivo, como considera ocurre en el párrafo 2o. del artículo 16 de la Ley 335 de 1996 acusado, cuando se atribuye el reordenamiento final de las frecuencias a la Comisión “previo el visto bueno del Ministerio de Comunicaciones”, fórmula que el accionante impugna por vulnerar los artículos 76 y 77 de la Carta, que consagran una coparticipación de esas entidades sin restricciones a la autonomía de la CNTV.</p> <p>2. De otro lado, el demandante considera que cuando el legislador establece en la norma demandada, que la CNTV adelantará el reordenamiento final del espectro electromagnético utilizado para la televisión con cambios en la banda del VHF pero “en todo caso sin desmejorar las condiciones de los operadores públicos”, segmento censurado, no asegura un acceso equitativo al mismo, con lo cual se vulnera el artículo 75 de la Carta Política que garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso del espectro y la facultad de intervención en el mismo, para asegurar el pluralismo informativo y la competencia, como también las disposiciones de convenios internacionales como el suscrito con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que exige a los estados miembros permitir el acceso equitativo a las frecuencias.</p> <p>A su juicio, con esa disposición INRAVISION en forma preferencial continuaría con las frecuencias que ha venido utilizando en la banda del VHF, desvirtuándose la garantía de acceso igualitario que el artículo 75 quiso imponer al uso del espectro, pues se mantendría una prerrogativa para el operador público de televisión en el uso del espectro, que en ningún momento fue contemplada por el Constituyente de 1991.</p> <p>En conclusión, para el actor con lo demandado se desconocen los principios de autonomía de la CNTV y de igualdad de oportunidades para el acceso y competencia, que exige la declaratoria de inexequibilidad.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-567/97
Fecha de la sentencia	noviembre seis (6) de mil novecientos noventa y siete (1997). Aprobada por acta N° 52
Demandante	Carlos Mario Isaza Serrano Y Carlos Alberto Paz Lamir
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 190 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar INEXEQUIBLE el numeral 5º del artículo 1º de la Ley 190 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los demandantes consideran que la norma acusada vulnera el artículo 15 de la C.P. que consagra el derecho fundamental a la intimidad porque “difiere a la autoridad administrativa, la competencia para requerir información, adicional, a la establecida por la ley en el formato único de hoja de vida que todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración, debe presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad”.</p> <p>Señalan que el artículo 15 de la C.P impone al Estado la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la intimidad personal y familiar, hasta el punto de consagrar “la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan aun cuando no exista una pretensión subjetiva por arte del ciudadano”.</p> <p>De otro lado, sostienen que el legislador tiene el deber de precisar los derechos fundamentales y, en concreto frente al derecho a la intimidad, “diseñar un marco jurídico-legal preciso con el propósito de evitar toda intromisión arbitraria en el ámbito propio y reservado de la persona y la familia frente a la acción y conocimiento del Estado o de un tercero con el fin de mantener condiciones de respetabilidad mínima de la vida gestada en sociedad”.</p> <p>Asimismo señalan que las precisiones de este derecho al ser de orden restrictivo “se constituyen en un requerimiento necesario por razones de técnica legislativa y de seguridad jurídica”. La seguridad jurídica para los demandantes, está concebida como “una garantía de confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y como una expectativa razonablemente fundada en cuál ha de ser la actuación de la autoridad pública, en aplicación del derecho”.</p> <p>Sostienen que la norma acusada no garantiza este tipo de seguridad</p>

	<p>jurídica porque la exigencia y configuración de datos adicionales a los que integran, por disposición legal, el formato único de hoja de vida, lleva a que se invada lo que se ha denominado “el núcleo duro del derecho a la intimidad”, por cuanto se podrían exigir datos relacionados con la ideología, la religión o creencias de las personas, ámbitos en los cuales no puede existir una penetración legítima del Estado. Señalan que en virtud de ese núcleo duro del derecho a la intimidad, el ciudadano puede legítimamente abstenerse de suministrar determinada información a la administración pública.</p> <p>En resumen, los demandantes sostienen que la norma acusada al permitir a la instancia administrativa “ir más allá de la autorización dada por la preceptiva legal en relación con la recolección de información personal, puede suponer la invasión del núcleo duro del derecho a la intimidad”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JORGE ARANGO MEJÍA</p> <p>RESERVA DE LEY ESTATUTARIA PARA BANCOS DE DATOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (Salvamento de voto)</p> <p>Consideramos que la Corte ha incurrido en una contradicción. Por una parte, se sostiene lo siguiente: "Corresponde a la ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, ocuparse específicamente de determinar la forma y procedimientos conforme a los cuales la administración puede proceder a la recolección, tratamiento y circulación de datos personales, de modo que se respete la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución (C.P. art. 15). Al margen de la respectiva ley estatutaria -general o especial-, no podría la administración dar vida a un banco de datos personales destinados a la circulación ya sea dentro de la órbita pública o por fuera de ella. Según la Constitución, la recolección de datos, su tratamiento y, particularmente, su circulación, constituyen acciones que pueden afectar de manera profunda la libertad personal y, por consiguiente, están sujetas a reserva de ley estatutaria, por lo menos, en lo que atañe a la fijación de sus contornos esenciales". Esta declaración tendría una consecuencia inevitable: la declaración de inexequibilidad de todo el artículo 1º de la ley 190 de 1995, por no haberse tramitado como ley estatutaria. Sin embargo, solamente se declara inexecutable el numeral 5, olvidando que también los demás numerales se refieren a datos personales. No nos queda duda que la declaración de inexequibilidad que se ha hecho, deja aún más desprotegida la administración pública en el proceso de vincular personal apto para el cumplimiento de todas sus tareas.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las	NO APLICA

aclaraciones	
--------------	--

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-196/97
Fecha de la sentencia	quince (15), a los diez y siete (17) días del mes de abril, de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	José Flavio Acosta Torres.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 81; 89, literal a); 90 (parcial); 98; 99; 100, literales a) y b) y 175, literal d), de la ley 201 de 1995 “Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones”.
Conoció en primera instancia	Dra. Carmenza Isaza de Gómez
Decision	Primero: Decláranse EXEQUIBLES, en los apartes demandados, el literal a) del artículo 89; el artículo 90; el artículo 98; 99; los literales a) y b) del artículo 100 y el literal d) del artículo 175 de la ley 201 de 1995. Segundo: INHÍBESE de pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 81 de la ley 201 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que las normas mencionadas vulneran los artículos 13, 221 y 277, numeral 7, de la Constitución, y el Código Penal Militar.</p> <p>Las razones de su afirmación las desarrolla en dos formas. De una parte, hace consideraciones generales sobre lo que es el fuero militar y cómo debe entenderse el artículo 221 de la Constitución, de conformidad con la reforma contenida en el acto legislativo 02 de 1995; y, de otra, expresa el concepto de violación constitucional de cada uno de los artículos demandados a la luz de lo que en su opinión es el fuero militar. Por consiguiente, se resumirán en este mismo orden las razones expresadas por el demandante.</p> <p>Primero.- Sobre las consideraciones generales, el demandante estima que el acto legislativo Nro. 2 del 21 de diciembre de 1995, consagró en forma clara e inequívoca el fuero militar, según el cual corresponde a las cortes marciales o tribunales militares, adelantar el conocimiento y juzgamiento de los asuntos seguidos contra militares en servicio activo, por la comisión de delitos que se relacionen con el servicio, sea cual sea el tiempo de consumación y las condiciones de normalidad que atravesase el país.</p>

	<p>Por consiguiente, las normas demandadas además de violar el artículo 221, vulneran también el artículo 13 de la Constitución, al no aplicarse el principio de igualdad de la ley.</p> <p>Para el demandante, el privilegio o garantía contenido en el fuero se ve no sólo en el sometimiento de las causas militares a las cortes o tribunales militares, sino en el hecho de que dichas cortes o tribunales estén integradas exclusivamente por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Además, el artículo 221 de la Constitución establece expresamente que el procedimiento en estos casos debe ceñirse a las prescripciones del Código Penal Militar.</p> <p>El demandante observa que los artículos 291, 656, 14, 362, 363, 364, 365, 366, 367 y 368 del Código Penal Militar están vigentes, pues no han sido derogados. Estas normas corresponden al juez natural; la integración del consejo verbal de guerra; quiénes ejercen el ministerio público; las atribuciones de los procuradores delegados y los requisitos para su designación; el ministerio público en el tribunal superior militar; el ministerio público ante los jueces de primera instancia; la jerarquía del ministerio público ante la justicia penal militar; y la designación de procurador especial.</p> <p>En dichas normas se establece que quienes, según la ley, intervienen en el proceso penal militar son: el juez, el fiscal, el procesado y su defensor. Por consiguiente, si respecto de los procesos penales militares, el juez del conocimiento debe ser un miembro de la fuerza militar, con mayor razón, el ministerio público, por expreso mandato del Código Penal Militar, también debe serlo, teniendo en cuenta que se están protegiendo idénticos principios dentro de la misma clase de procesos.</p> <p>Además, el Código Penal Militar es ley especial, que debe prevalecer sobre la general, que es la que contiene los artículos demandados.</p> <p>De otra parte, el artículo 277, numeral 7o., de la Constitución, faculta a los funcionarios de la Procuraduría para intervenir en los procesos cuando sea necesario, para defender el orden jurídico, el patrimonio público, o los derechos y garantías fundamentales. Sin embargo, la ley 201 contradice este precepto constitucional, pues faculta a la Procuraduría para intervenir de manera permanente tanto en la instrucción como en el juicio de los procesos penales militares, convirtiéndose también en juez y parte en la administración de justicia.</p> <p>Segundo.- Sobre los conceptos de inconstitucionalidad de cada artículo que hace el demandante, cabe advertir que algunas de sus explicaciones son muy generales, pero se pueden resumir así:</p> <p>El artículo 81 vulnera los preceptos del artículo 221 de la Constitución, especialmente en lo que dice: “Las Cortes Marciales estarán integradas por oficiales en servicio activo o en retiro.”</p> <p>El artículo 89, literal a); 98 y 100, literales a) y b), violan también el artículo 221 mencionado, por disponer que pueden intervenir en</p>
--	--



	<p>los procesos quienes no sean miembros oficiales en servicio activo o en retiro. Además, violan el Código Penal Militar.</p> <p>El artículo 100 viola el citado artículo 221, y los 365 y 366 del Código Penal Militar.</p> <p>El artículo 99, al predicar que la intervención del ministerio público en los procesos penales militares es permanente, viola el artículo 277, numeral 7, de la Constitución que consagra dicha intervención sólo cuando sea necesaria.</p> <p>En cuanto al artículo 175 de la ley 201, en el numeral demandado, al establecer la incompatibilidad de acceder a cargos en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo, se olvidó que la Corte Constitucional en la sentencia C-37 de 1996, ley estatutaria de la justicia, en su artículo 151, señaló que la condición de miembro de la fuerza pública no es incompatible con la administración de justicia.</p> <p>Además, observa que en la misma sentencia C-37, al mencionar que los jueces penales militares no hacen parte de la rama judicial, la Corte está considerando que la justicia penal militar es especializada, y, como tal, debe estar contenida íntegramente en el Código Penal Militar, por lo que su referencia en la ley 201 resulta inexecutable.</p> <p>Finalmente, el demandante considera que por ser el acto legislativo 002 del 21 de diciembre de 1995 posterior a la ley 201, el acto legislativo prevalece sobre la ley, quedando por consiguiente derogadas las normas que violan la justicia penal militar.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-356/97
Fecha de la sentencia	cuatro (4) agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	César Augusto Rey Ramos y Diego Fernando Trujillo Marín
Demandado	Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 12 de la ley 218 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ

Decision	Estar a lo resuelto en las sentencias C-256 de mayo 28 de 1997 y C-353 de agosto 4 del mismo año.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-353/97
Fecha de la sentencia	los cuatro (4) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Luis Angel Esguerra Morales y Juan Manuel Charry Urueña.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 de la ley 218 de 1995 " Por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994 proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante decreto 1178 del 9 de junio 1994 y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.
Decision	Primero.- ESTÉSE a lo resuelto en las sentencias C-407 y C-468 de 1995, y C-256 de 1997. Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 1º de la ley 218 de 1995, salvó su parágrafo que se declara INEXEQUIBLE. Tercero.- Decláranse EXEQUIBLES los artículos 2º; 3º; 4º, 5º; 6º y 12 de la ley 218 de 1995, pero sólo por las razones analizadas en la parte motiva de este fallo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Cargo por violación del artículo 215 de la Constitución. La función del Congreso, en desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 215, se limita a otorgar carácter permanente a las medidas adoptadas por el Gobierno durante el estado de emergencia, por medio de leyes que deben tener relación directa y específica con las causas que dieron origen a su declaración. En el caso del terremoto y avalancha del río Páez, el Gobierno expidió el decreto 1264 de 1994, por medio del cual se adoptaron medidas tendientes a enfrentar la magnitud de los problemas que esa tragedia produjo, previendo mecanismos para que la población damnificada obtuviera recursos y medios que le permitieran no sólo satisfacer sus necesidades básicas sino el restablecimiento de la actividad económica y social de la zona afectada (así lo reconoció la Corte, al declarar la exequibilidad del decreto 1264 de 1994). Sin embargo, el Congreso excedió la facultad que se le reconoce en el artículo 215, al crear un régimen especial en materia tributaria, aduanera y de comercio, para algunas regiones del Cauca y Huila, sin conexidad alguna con los decretos legislativos que dictó el Gobierno, pues se benefician sin haber sufrido perjuicio alguno. El único objetivo de la ley acusada es lograr el desarrollo y

	<p>promoción económica de dichas zonas.</p> <p>Cargo por violación del artículo 334 de la Constitución.</p> <p>Se desconoce el principio de solidaridad territorial que implícitamente consagra este precepto constitucional, pues si bien el Estado puede o debe intervenir en la economía con el fin de lograr la productividad y competitividad que permitan el desarrollo armónico de todas las regiones, dicha intervención no se puede realizar en detrimento de algunas zonas o sectores de la población. La ley 218 de 1995, creó mecanismos para lograr el desarrollo económico de sólo dos regiones, el Cauca y el Huila, cuando existen otras que requieren de igual o mayor estímulo por su situación económica y social, como es el caso específico del departamento del Chocó.</p> <p>Cargo por violación de los artículos 356, 357 y 362 de la Constitución.</p> <p>Las exenciones que se establecen en los artículos acusados, afectan los recursos que por concepto de transferencias deben recibir las distintas entidades territoriales. De esta manera, la ley acusada está comprometiendo recursos destinados a otras áreas del país que requieren del apoyo estatal.</p> <p>Cargo por violación de los artículos 13; 95, numeral 9; y 363 de la Constitución.</p> <p>Las exenciones que consagran las normas acusadas desconocen el derecho a la igualdad y equidad tributarias. La mayoría de autores coinciden en afirmar que las exenciones deben garantizar el trato igualitario y no generar situaciones de inequidad, como acontece con las normas acusadas, al beneficiar a una determinada zona del territorio sin causa justificable para ello.</p> <p>En materia arancelaria, se busca no sólo la protección de la producción nacional sino que exista competitividad en las mismas condiciones para unos y otros. Por esa razón, no pueden existir aranceles diferentes, según la zona del país para la cual vayan dirigidos los productos, porque ello desconoce el derecho a la igualdad y la unidad territorial en materia arancelaria.</p> <p>Cargo por violación del artículo 13 de la Constitución.</p> <p>Se hace necesaria la distinción entre la exención a los impuestos y a los aranceles. En los primeros, el Estado es el perjudicado por la reducción de sus ingresos; en los segundos, sólo un sector de la producción es el que recibe los efectos de tal decisión, pues la entrada de determinados productos o materias primas que también se producen en el país, sin ningún arancel, incide significativamente en la producción, en razón a los costos y a la competitividad desigual que genera.</p> <p>De esta manera, el Gobierno, so pretexto de proteger regiones como el Cauca y el Huila, ha puesto en peligro la economía de otras, al eliminar los aranceles para productos, materias primas, equipos, etc., que lleguen a estas zonas.</p> <p>Cargo por violación del artículo 226 de la Constitución.</p>
--	--

	<p>Se desconoce la equidad que debe existir en materia de comercio exterior y la reciprocidad que ella debe generar frente a las relaciones internacionales, porque cuando se decide desgravar unilateralmente productos procedentes de un Estado, éste no puede invocar la reciprocidad que en estos casos exige la Constitución.</p> <p>Cargo por violación del artículo 65 de la Constitución.</p> <p>En caso de conflicto entre la protección de ciertas actividades, y la producción de alimentos, debe darse prioridad a ésta. Por tanto, debe declararse la inexequibilidad del artículo 6º, en la medida que desconoce este precepto constitucional, cuando permite la libre importación de materias primas agrícolas y pone en peligro la producción nacional.</p> <p>Cargo por violación de los artículos 150, numeral 19, y 158 de la Constitución.</p> <p>En materia arancelaria, el legislador sólo debe señalar los criterios generales que el Gobierno está obligado a observar para el establecimiento de aranceles y su regulación. El único caso en que puede intervenir directamente, es por razones de política comercial, aspecto éste que no está presente en la ley 218 de 1995. Por tanto, esta ley no podía establecer exención arancelaria alguna. Así las cosas, se violó el principio de unidad de materia que exige el artículo 158 de la Constitución, al incluirse una norma que sólo compete expedirla al Presidente de la República.</p> <p>Finalmente, se afirma que existe un vicio en la aprobación de este artículo, toda vez que la expresión “materia prima” no fue aprobada en segundo debate por la plenaria del Senado de la República.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-256/97
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Juan Pablo Giraldo Puerta
Demandado	Acción de inconstitucionalidad ejercida por Juan Pablo Giraldo Puerta contra los artículos 6, 7 y 12 de la Ley 218 de 1995

Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- ESTÉSE A LO RESUELTO por la Corte en la Sentencia C-407 del 11 de septiembre de 1995, en cuanto a la constitucionalidad material de los artículos demandados, pero solamente respecto de las razones expresadas por el Gobierno al objetarlos, es decir, en torno a que no fueron violados los artículos 151, 154 y 215-6 de la Constitución Política (Aspecto temporal de la ampliación de la iniciativa legislativa del Congreso en los asuntos que ordinariamente deben tener origen en la iniciativa del Gobierno).</p> <p>Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES los artículos 6 y 12 de la Ley 218 de 1995, en cuanto las materias en ellos abordadas no son ajenas al control político que ejerce el Congreso, por iniciativa propia, sobre los decretos legislativos dictados al amparo de la Emergencia Económica declarada mediante Decreto 1178 del 9 de junio de 1994 (Aspecto material de la ampliación transitoria de la iniciativa del Congreso en los asuntos que ordinariamente deben tener origen en la iniciativa del Gobierno).</p> <p>Tercero.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 7 de la Ley 218 de 1995, por cuanto viola la Constitución en un aspecto que no había sido examinado por la Corte en la Sentencia C-407 del 11 de septiembre de 1995.</p> <p>La inexequibilidad declarada no afectará los créditos ya otorgados con base en el artículo 7 de la Ley 218 de 1995, ni las solicitudes que se encuentren en trámite al momento de notificar esta sentencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que las disposiciones acusadas infringen el artículo 215 de la Constitución Política y, en consecuencia, también los artículos 154, 158, 371 y 372 Ibídem.</p> <p>A su juicio, si bien es cierto dentro de las facultades asignadas al Congreso de la República por el artículo 215 constitucional está la de adicionar los decretos dictados por el Gobierno en virtud del Estado de Emergencia, esa facultad de adicionar no le permite incluir, en el presente caso, exenciones no consagradas en aquéllos, tal como ocurrió con la normatividad impugnada, donde "se creó una nueva exención por fuera del marco de la Constitución".</p> <p>Manifiesta que la atribución del Congreso para adicionar el Decreto 1264 de 1994 se circunscribía únicamente a introducirle nuevos elementos referentes exclusivamente a la materia por él regulada, es decir a las exenciones en relación con el impuesto sobre la renta y complementarios, pero nunca podía estar enderezada a crear</p>

	nuevas exenciones ni a establecer líneas de crédito de fomento.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-152/97
Fecha de la sentencia	diez y nueve (19) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Luis Carlos Gómez Jaramillo.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 182 de la ley 223 de 1995 "Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	<p>Primero.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 182 de la ley 223 de 1995.</p> <p>Segundo.- Decláranse INEXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la ley 219 de 1995:</p> <p>a) El siguiente aparte del artículo 2o. "...al medio por ciento (0,5%) del valor a bordo en puerto de origen (FOB) de cada kilogramo de fibra de algodón importado, el cero punto veinticinco por ciento (0,25%) del valor en puerto de origen (FOB) de cada kilogramo de hilaza de algodón importado al país y al cero punto veinticinco por ciento (0,25%) del valor en puerto de origen (FOB) de cada kilogramo de fibra de algodón contenido en hilaza con mezcla de otras fibras, que se importe al país."; y el PARÁGRAFO del mismo artículo, en su integridad, parágrafo que dice:</p> <p>"PARÁGRAFO: Para efectos de la contribución sobre el valor del contenido en algodón de las hilazas con mezclas de fibra, importadas, se presume que este valor es directamente proporcional al porcentaje de fibra de algodón en la mezcla, según la posición arancelaria y la descripción de la mercancía en el registro de importación respectivo."</p> <p>b) El siguiente aparte del artículo 4o. : "...o importe fibra o hilaza de algodón o con mezcla de algodón..."</p> <p>c) Del artículo 5o., el siguiente aparte del inciso primero: "... o</p>

	<p>importe fibra o hilaza de algodón o con mezcla de algodón..."; y este aparte del PARÁGRAFO del mismo artículo 5o.: "...o importación..."</p> <p>d) Del artículo 8o., el numeral 7, que dice: "Dos (2) representantes de los importadores de fibras e hilazas de algodón o con mezcla de algodón, elegidos por el Ministro de Comercio Exterior, de ternas presentadas por sus respectivas organizaciones o empresas."</p> <p>Tercero.- De la ley 272 de 1996, se declaran INEXEQUIBLES las siguientes disposiciones:</p> <p>a) Del artículo 2o., el inciso segundo, que dice: "Esta misma suma se pagará por cada sesenta kilos de carne de cerdo importada, cualquiera que sea su origen".</p> <p>b) Del artículo 4o., inciso tercero, el aparte que dice: "... y los importadores de carne de cerdo..."</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La norma acusada, infringe los artículos 359; 158; 150, numeral 12; 338; 95, numeral 9o. y 363 de la Constitución Política. El concepto de la violación puede resumirse así:</p> <p>1o. El artículo 182 de la ley 223 de 1995, al incluir a los importadores de productos agropecuarios y pesqueros como sujetos de la contribución parafiscal que en ella se establece, desconoce el principio de que, debe existir una correlación entre el sujeto gravado y el beneficio que directa o indirectamente éste pueda recibir con la correspondiente contribución, tal como lo ha desarrollado la Corte en su jurisprudencia, y la misma ley de la cual hace parte el artículo acusado, que expresamente han identificado como características de las contribuciones parafiscales, el afectar a un determinado y único sector social o económico, y que los recursos que genere esa carga, se perciban por el mismo sector al que pertenecen los sujetos gravados (artículo 2o. de la ley 225 de 1993).</p> <p>Antes de la expedición del artículo acusado, los sectores agropecuarios y pesqueros gravados con una contribución parafiscal, eran sus beneficiarios (los fondos de fomento creados para el efecto). Sin embargo, la norma acusada introdujo un nuevo sujeto pasivo, los importadores, quienes están excluidos de los beneficios que se pueden derivar de la contribución que están obligados a aportar, pues éstos siguen en cabeza del sector productor, cuyos intereses son disímiles a los de aquéllos, y quienes lo integran, son un grupo heterogéneo.</p> <p>De esta manera, la norma acusada no regula una contribución parafiscal sino un renta con destinación específica, prohibida expresamente por el artículo 359 de la Constitución, porque grava a los importadores de productos agropecuarios o pesqueros, genéricamente, con un impuesto que tiene como beneficiario a los</p>



	<p>fondos de los productores nacionales, en los mencionados sectores.</p> <p>2o. Se desconoce el artículo 158 de la Constitución, porque una ley sobre racionalización tributaria, cuyos objetivos son la adopción de medidas que permitan el perfeccionamiento de los sistemas para evitar la evasión y elusión fiscal, así como adaptar el sistema impositivo a los principios de la tributación, su simplificación y la eliminación de vacíos legales, entre otros, no podía referirse a las contribuciones parafiscales, cuya regulación requiere un tratamiento distinto al de las materias tributarias, en general.</p> <p>3o. Se vulnera el artículo 150, numeral 12 de la Constitución, que establece que las contribuciones parafiscales son excepcionales y sólo pueden imponerse bajo las condiciones y los casos que establezca la ley. Para el caso agrícola y pesquero, la ley 101 de 1993, en sus artículos 29 a 35, fija un marco general dentro del cual se pueden establecer contribuciones parafiscales para estos sectores. Sin embargo, esta ley no puede ser aplicada a los importadores, pues no existe razón que justifique la creación de una contribución parafiscal para éstos. Para el efecto, se requiere de una ley que autorice la creación de la contribución.</p> <p>4o. No puede equipararse la contribución que debe pagar el productor nacional de productos agropecuarios y pesqueros, con la de quienes los importan, pues ni el hecho generador ni la destinación son los mismos, mucho menos las características del sujeto pasivo. Para unos, el hecho generador es la producción, para los otros, es la importación misma, donde la contribución se paga como una adición al arancel correspondiente.</p> <p>5o. Se desconocen los artículos 2o. y 338 de la Constitución, que obligan a la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como la representatividad que debe existir en la imposición de los tributos. En el caso de la norma acusada, si se analiza la conformación del Comité Especial Directivo, la representación que se da a los importadores en dicho organismo es “irrisoria”, frente a la que tienen el sector agropecuario y el Gobierno Nacional. Por tanto, se viola el principio de representatividad que exige la Constitución en esta clase de órganos, principio que ha sido desarrollado por la Corte en sentencia C-191 de 1996, que señaló la necesidad de que los intereses de los aportantes de una contribución parafiscal estén representados en las entidades que manejan los recursos provenientes de ellas.</p> <p>6o. Si se concluye que la contribución de que trata el artículo 182 de la ley 223 de 1995, es parafiscal, ella desconoce el principio de equidad al que hacen referencia los artículos 95, numeral 5o. y 363 de la Constitución, pues los importadores “no encuentran ninguna retribución que compense en forma alguna sus aportes... (En) equidad y justicia, no puede establecerse a cargo de nadie un gravamen con el nombre de cuota parafiscal, cuando su pago no guarda ninguna relación directa e inmediata con un beneficio derivado para el contribuyente”.</p>
--	--

	7o. Si bien el Estado está obligado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materia prima de origen agropecuario ( artículo 65 de la Constitución), esto puede hacerlo vía impuestos o contribuciones parafiscales, siempre que, en este último caso, se grave sólo a quienes reciben los beneficios por la implementación de esas técnicas.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI. DRES, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero disientimos de la decisión de la Corporación que declaró inexecutable la norma acusada y efectuó unidad normativa con varios apartes de las leyes 219 de 1995 y 272 de 1996. Según nuestro criterio, algunas de las consideraciones de la parte motiva de la sentencia son muy discutibles, por lo cual no podemos compartirlas. Además, si bien coincidimos con la sentencia en que la norma acusada tenía problemas de constitucionalidad, consideramos que no era necesario declararla inexecutable, pues era perfectamente posible conservarla en el ordenamiento con base en una constitucionalidad condicionada, por lo cual no podemos compartir las determinaciones tomadas por la Corporación en el presente caso.</p> <p>Los fundamentos discutibles del fallo.</p> <p>1- La norma acusada establece que los importadores son también sujetos pasivos de las contribuciones parafiscales sobre productos de origen agropecuario y pesquero, extensión que la sentencia considera inconstitucional por desfigurar la naturaleza de estas cuotas de fomento. Según la Corte, la disposición desconoce la excepcionalidad de las contribuciones parafiscales y termina por crear un impuesto nacional con destinación específica, lo cual está prohibido por la Carta (CP art. 359). Para la Corte esa desfiguración se da esencialmente por tres motivos. De un lado, por la definición de los sujetos pasivos de la contribución pues, según la sentencia, los importadores son un grupo heterogéneo que no puede identificarse con ningún subsector de la producción agropecuaria o pesquera. Segundo, debido a que la destinación de los recursos no beneficia a los importadores sino a los productores nacionales, lo cual es inadmisibile. Finalmente, por la ausencia de participación representativa suficiente de los importadores en la entidad administradora de los recursos, pues la sentencia considera que “en tal administración deben participar los representantes del sector o grupo que aporta los recursos y tiene derecho a beneficiarse exclusivamente de la inversión de los mismos”.</p> <p>2- Coincidimos con la sentencia en que las contribuciones parafiscales tienen naturaleza excepcional. En primer término, el artículo 150 ordinal 12 señala que el Congreso puede genéricamente establecer contribuciones fiscales, pero en cambio establece, en forma explícita, que sólo excepcionalmente puede</p>

	<p>imponer contribuciones parafiscales. De otro lado, la destinación específica es uno de los elementos que definen la parafiscalidad, por lo cual esta Corporación ha señalado que ella debe ser entendida como una excepción a la prohibición constitucional de que existan impuestos nacionales con destinación específica, pues la contribución parafiscal es admitida por la Carta, a pesar de ser fruto de la soberanía fiscal y tener una destinación específica. Finalmente, la parafiscalidad no afecta genéricamente a todas las personas con igual capacidad de pago, pues la ley obliga sólo a un grupo de personas a pagar la cuota. La singularidad de tales contribuciones podría entonces afectar la equidad e igualdad tributarias (CP arts 13, 95 y 363), pero ello no ocurre precisamente por la destinación sectorial de los beneficios de la cuota, por lo cual la Corte ha considerado que "el pago de la contribución otorga al contribuyente el derecho a percibir los beneficios provenientes del servicio, pero la tarifa del ingreso parafiscal no se fija como una contraprestación equivalente al servicio que se presta o al beneficio que se otorga".</p> <p>Esta excepcionalidad de la parafiscalidad obliga entonces a un examen constitucional más estricto que en relación con otros tributos, pues estas cuotas están determinadas por elementos que las configuran y sin los cuales esta figura tributaria altera su esencia, pierde su finalidad y puede confundirse con un impuesto común. Por tal razón creemos que la Corte debe estudiar si la imposición de una contribución a un cierto grupo de personas o actividades con la obligatoria asignación a un determinado sector económico constituye efectivamente una contribución parafiscal, pues en caso de no ser así, se podría estar vulnerando la prohibición del artículo 359 de la Constitución o se podría estar afectando la equidad tributaria. Por ello, si bien, como regla general, no se puede señalar "como inconstitucional la creación de un tributo por figurar bajo determinado nombre que pueda no corresponder a clasificaciones doctrinarias", ya que "la denominación tributaria usada por el legislador es indiferente", en el caso de la parafiscalidad la situación es diversa, no sólo por la excepcionalidad de este mecanismo -que obliga a interpretar restrictivamente su alcance- sino por la inescindible relación entre sus elementos constitutivos. En efecto, si la cuota se cobra a toda la sociedad para asignarla a un sector determinado, estaríamos en frente de una renta de destinación específica prohibida constitucionalmente. En ese mismo orden de ideas, si la contribución se exige a un sector económico pero su producto se asigna a otro sector, entonces no sólo estaríamos también frente a una renta con destinación específica sino que se estaría afectando la igualdad y la equidad tributarias.</p> <p>3- Coincidimos pues con la sentencia en que la Corte debe ser cuidadosa en el examen de estas contribuciones. Sin embargo, nuestro primer desacuerdo con la parte motiva del fallo es en</p>
--	--

	<p>relación con la imposibilidad que aparentemente se establece de que el Legislador incluya en un mismo grupo a importadores y productores nacionales, a fin de sujetarlos a una cuota parafiscal. La sentencia presupone que existen en la realidad, independientemente de las definiciones legislativas, sectores de la producción homogéneos que tienen intereses comunes, que es lo que posibilita las contribuciones parafiscales. En cambio caracteriza a los importadores como un grupo heterogéneo cuyos intereses nunca pueden coincidir con determinados sectores agrícolas o pesqueros nacionales.</p> <p>No podemos compartir esos criterios, pues no creemos que existan en la realidad sectores económicos ontológicamente definidos, con intereses totalmente armónicos, así como tampoco creemos que haya sectores que tengan entre sí una incompatibilidad absoluta de intereses, de tal suerte que no puedan obtener ningún provecho común. En la mayoría de los casos, la comunidad o la oposición de intereses entre distintos agentes y grupos económicos es relativa, pues depende de las circunstancias y de los tipos de medidas que pueden ser adoptadas. Por ejemplo, los trabajadores y los empresarios colombianos tienen intereses divergentes en relación con el monto de los salarios, pero pueden tener intereses comunes en la protección de la industria nacional. No es pues razonable afirmar -como equivocadamente lo hace la sentencia- que en ningún caso los importadores pueden formar parte de un subsector agropecuario o pesquero, pues creemos que en determinados eventos pueden tener intereses comunes, que justifican que se los clasifique en un mismo grupo.</p> <p>Nos explicamos: no desconocemos que los productos agropecuarios y pesqueros son típicos bienes "transables" o "comercializables", según la terminología económica, esto es, bienes en donde hay una permanente competencia entre el producto nacional y extranjero, que puede llegar a que los consumidores sustituyan la demanda de un bien nacional por uno importado, y viceversa, por lo cual existe una competencia potencial entre importadores y productores por el control del mercado. Sin embargo, lo anterior no significa que no puedan existir intereses comunes que permitan que ambos se beneficien de determinadas medidas o proyectos. Por ejemplo, un importador de leche y un productor nacional de leche se benefician igualmente de campañas destinadas a estimular y diversificar el consumo de ese producto, o de proyectos que busquen mejorar las estructuras de comercialización, o de planes que pretendan establecer mejores formas de almacenamiento. En ese orden de ideas, si pueden obtener beneficios comunes de esos programas ¿cuál es el impedimento constitucional para que la ley establezca una contribución parafiscal a los productores nacionales y a los importadores de leche destinada a estimular el consumo de ese producto y mejorar su almacenamiento y su comercialización?</p>
--	---

	<p>En ese orden de ideas, creemos que la sentencia consagra una tesis absolutista que desconoce la libertad que tiene el Legislador de determinar los límites de un determinado sector económico sujeto a una contribución parafiscal. Nosotros no creemos que existan en la realidad sectores o subsectores económicos ontológicamente diferenciados, como si hubiese grupos de personas con intereses totalmente homogéneos, y que fueran los únicos susceptibles de ser gravados por la respectiva cuota de fomento. Según nuestro criterio, la ley puede definir los sectores gravados, y reducir o ampliar su cobertura, siempre y cuando tal delimitación corresponda a los criterios y finalidades de la respectiva cuota de fomento, esto es, que haya motivos constitucionales razonables que autoricen la imposición de la contribución parafiscal y se respeten sus características esenciales. Por ello consideramos que la inclusión de los importadores en cuotas agropecuarias o pesqueras no es en sí misma cuestionable.</p> <p>4- No podemos tampoco admitir la tesis de que en la administración de los recursos parafiscales por entidades que no hagan parte del presupuesto nacional necesariamente tienen que participar representantes del sector gravado. Creemos que ese argumento confunde el principio de que los impuestos sólo pueden ser decretados por órganos representativos, consagrado en el artículo 338 de la Carta, con el problema de la participación en la gestión de los recursos parafiscales. Así, es obvio que el artículo 338 fue respetado, pues el Congreso -órgano representativo por excelencia- fue quien decretó la contribución parafiscal, por lo cual no hubo ninguna violación del principio de que no puede haber impuestos sin representación. Otra cosa bien diferente es que la ley ordene una gestión participativa en la administración de los recursos parafiscales. Así, un requisito legal de esa naturaleza armoniza con el espíritu democrático de la Carta y es posible que sea conveniente , pero no creemos que sea una exigencia constitucional. En ninguna parte la Carta, ni la jurisprudencia de la Corte sobre parafiscalidad, han señalado que obligatoriamente las entidades que administran esos recursos deben ser representativas del sector gravado. Los elementos definitorios de la parafiscalidad son otros, a saber la obligatoriedad, la singularidad y la destinación sectorial, tal y como la han señalado numerosas sentencias de esta Corporación .</p> <p>Pero incluso si se aceptara que la Carta exige la representación del sector gravado, creemos que la norma acusada consagra mecanismos suficientes. En efecto, el sector importador se representa en el mencionado comité a través de dos delegados, uno de las comercializadoras importadoras y otro de las agroindustrias importadoras, los cuales cuentan con voz y voto en las determinaciones, por lo cual la participación del sector importador en la toma de decisiones del comité que aprueba los programas, será tan eficiente como competentes sean sus</p>
--	---

	<p>delegados.</p> <p>El vicio constitucional real de la norma acusada.</p> <p>5- Por tal razón, consideramos que el verdadero vicio de la norma acusada es que ésta no consagraba un beneficio siquiera indirecto que pudieran obtener los importadores por el pago de la contribución pues, conforme al artículo impugnado, los recursos eran asignados de manera exclusiva a actividades que beneficiaban esencialmente a los productores. En efecto, la norma hablaba de "apoyar programas y proyectos de investigación, transferencia de tecnología, y control y vigilancia sanitarios", en los cuáles no parecen recibir ninguna contraprestación los importadores. La norma no respetaba entonces un elemento esencial de las contribuciones parafiscales, a saber, el derecho que tienen los sujetos gravados a percibir ciertos beneficios, siquiera indirectos, por el pago de la cuota. De esa manera la disposición desfiguraba la naturaleza parafiscal de la contribución y desconocía la Carta, pues los importadores se veían obligados a contribuir a unos fondos de los cuáles no sólo no obtenían beneficios, siquiera mediatos, sino que precisamente estaban destinados a fomentar la producción de quienes son su competencia potencial. El artículo impugnado establecía entonces una inequitativa renta con destinación específica.</p> <p>Y frente a esa inequidad no creemos que se pudiera argumentar que esta ampliación del sujeto pasivo de estas contribuciones parafiscales no hacía sino restablecer la igualdad entre los productores nacionales y los extranjeros, lo cual favorecía la igualdad de trato entre agentes del ciclo económico que se lucran con la misma actividad, a saber la venta del producto agrícola y pesquero. Según este argumento, la imposición de una contribución parafiscal a los productos nacionales y no a los productos extranjeros implicaba un trato preferente a costa del sacrificio desproporcionado de los productores nacionales, por lo cual la norma acusada simplemente estimulaba un sector económico y restablecía la igualdad en el reparto de la carga tributaria, lo que encuentra pleno sustento constitucional. Sin embargo el argumento no es de recibo, porque si bien los productores nacionales se encontraban gravados por esa carga, lo cierto es que también se beneficiaban de tales recursos, mientras que al importador se le imponía una cuota similar para financiar precisamente a sus competidores. Además, bien puede el Estado proteger a los productores nacionales con otros instrumentos económicos, como los aranceles, que permiten alcanzar el objetivo propuesto sin violar mandatos constitucionales.</p> <p>Sin embargo, a pesar de ese vicio del artículo acusado, consideramos que no procedía declarar su inconstitucionalidad, por las razones que a continuación señalamos.</p> <p>La especial protección a la producción alimentaria, el principio de conservación del derecho y la constitucionalidad condicionada de la</p>
--	---

	<p>contribución.</p> <p>6. Creemos que es necesario tener en cuenta que la norma acusada perseguía una finalidad que no es sólo constitucionalmente legítima sino a la cual la Carta confiere una particular importancia. Así, nuestra Constitución establece de manera expresa la dirección del Estado en la economía, (C.P. art. 334) pues es una forma de garantizar la efectividad del principio del orden económico y social justo (Preámbulo), que es un criterio rector de nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, el Estado debe intervenir activamente con el objeto de asegurar un desarrollo económico al servicio de la persona y, en particular, debe intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes. Así mismo, de acuerdo con el artículo 65 de la Carta, la producción de alimentos goza de la especial protección del Estado, para lo cual las autoridades otorgarán prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas y pesqueras, y promoverán la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos. El Estado no sólo tiene entonces la facultad de regular el funcionamiento del sistema económico sino que también tiene a su cargo sectores de la producción social para conseguir ciertas metas u objetivos que el Constituyente consideró de esencial importancia, como es garantizar la producción y seguridad alimentaria de nuestro pueblo.</p> <p>Ahora bien, en razón a que el artículo 65 de la Constitución no tiene eficacia positiva directa, sino que consagra lo que la doctrina extranjera denomina una "cláusula de la prosperidad" , pues puntualiza una serie concreta de políticas de fomento o de desarrollo del país, es una norma que en general requiere un desarrollo legislativo. En ese orden de ideas, resulta adecuada la utilización de la parafiscalidad para fomentar la actividad agropecuaria y pesquera, pues de esa manera los recursos son obligatoriamente destinados al desarrollo de este sector, a diferencia de lo que sucede con los impuestos o aranceles, que son tributos generales, y que por ello ingresan al presupuesto de la Nación en donde la asignación se somete a los planes que cada programa de gobierno considere pertinente desarrollar. Por ello, consideramos que la contribución parafiscal que fue declarada inexequible se destinaba a fomentar una actividad económica que tiene especial condición en la Constitución.</p> <p>7. Esta importancia de la finalidad de la norma acusada confiere aun mayor relevancia a uno de los criterios que, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, debe orientar las decisiones en materia de control constitucional, a saber, el llamado "principio de la conservación del derecho", según el cual los tribunales constitucionales deben siempre buscar preservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al principio democrático . Por ello si una disposición admite una interpretación acorde con la Carta, es deber de la Corte</p>
--	--

	<p>declararla exequible de manera condicionada, y no retirarla del ordenamiento. Ahora bien, si tal principio opera en relación con cualquier disposición emanada del poder legislativo, debido a que todo desarrollo normativo de los representantes del pueblo merece particular respeto en una democracia (CP art. 3º), su incidencia es aún mayor cuando se trata de leyes que buscan dar cumplimiento a mandatos constitucionales, como el consagrado en el artículo 65 superior. En tales casos, es aún más imperioso el deber del juez constitucional de eliminar, en lo posible, los defectos constitucionales de las normas acusadas, a fin de conservar una obra del Legislador que ha precisamente querido desarrollar la propia Constitución.</p> <p>En ese orden de ideas, creemos que la Corte debió analizar si la disposición impugnada admitía una inexequibilidad parcial o una exequibilidad condicionada, a fin de evitar la expulsión del ordenamiento de una norma que persigue importantes finalidades constitucionales.</p> <p>8- Ahora bien, como se vio anteriormente, el problema esencial de la regulación legal acusada es que ella no establecía una contrapartida para los importadores, pues en caso de que este grupo también se beneficiara, siquiera mediatamente, por el pago de la contribución parafiscal, creemos que la disposición se ajustaba plenamente a la Carta. Igualmente, conviene recordar que para que se configure la parafiscalidad no es necesario que el provecho que obtengan los importadores sea necesariamente directo y en proporción a la cuota que aportan. Esta Corporación ha señalado con claridad que el pago de la contribución parafiscal no genera un derecho subjetivo de las personas gravadas sino una contraprestación para el sector. Así, la Corte en una de sus primeras sentencias sobre el tema, mostró que las contribuciones a las cajas de compensación son aportes parafiscales. Y en relación con el subsidio de vivienda que podían obtener los trabajadores señaló:</p> <p>...la situación jurídica de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar corresponde a un interés legítimo mas no a un derecho subjetivo -como la propiedad- ni a una mera expectativa.</p> <p>No es un derecho adquirido del trabajador porque el subsidio aún no ha entrado en su patrimonio personal e individual.</p> <p>Y es, por el contrario, un interés legítimo del trabajador, porque él puede beneficiarse solamente en la medida en que las normas que regulan el subsidio así lo permitan para un grupo determinado de la sociedad, como en efecto lo hace la Ley 49 atacada en esta acción pública de inconstitucionalidad, de suerte que sólo por reflejo las normas terminan protegiendo a una persona individual, ya que el objeto propio de su protección eran intereses generales del sector laboral .</p> <p>No es pues necesario un beneficio directo de los importadores individualmente considerados, sino una contraprestación general</p>
--	--



	<p>para este sector. Es más, el carácter sui generis de las contribuciones parafiscales en la historia económica de Colombia, las cuales surgen -no con este nombre- a partir de la Ley 76 de 1927 con la creación de cuotas de fomento que aporta el sector cafetero, muestra los recursos de las contribuciones parafiscales no están dirigidos única y exclusivamente a los productores gravados, sino que permiten financiar servicios e inversiones en sectores sociales más amplios. Así por ejemplo, el artículo 3º de la Ley 128 de 1941 y el artículo 5º de la Ley 66 de 1942, disponen la destinación de recursos para la realización de campañas de sanidad rural. Igualmente, el Decreto 444 de 1967, en su artículo 227 destina dineros del Fondo Nacional del Café a campañas para progreso social y económico de las zonas cafeteras. Y, el Decreto 444 de 1980 para préstamos de reconstrucción de viviendas e infraestructura básica para el sector cafetero, igualmente para la reconstrucción de hospitales y centros de salud. Esto muestra que la parafiscalidad no se dirige al sujeto gravado, sino al fomento de una actividad que se busca privilegiar, en donde se colocan diferentes agentes económicos que interactúan.</p> <p>En ese orden de ideas, no creemos que fuera inconstitucional que los recursos recaudados se dirigieran a apoyar "programas y proyectos de investigación, transferencia de tecnología, y control y vigilancia sanitarios", por cuanto ésta es una destinación posible de estos fondos, ya que el beneficio de los importadores no tiene que ser directo y proporcional. El problema constitucional de la norma es que el inciso tercero señalaba que esos dineros serían asignados "exclusivamente" a tales propósitos, con lo cual los importadores quedaban excluidos de la obtención de servicios por el pago de la cuota. Por consiguiente, una primera posibilidad que parecía existir para conservar la disposición es que la Corte hubiera retirado del ordenamiento la palabra "exclusivamente", pues de esa manera se flexibilizaba la destinación de los fondos, con lo cual los importadores hubiesen podido obtener alguna contraprestación.</p> <p>9- Sin embargo, la anterior solución tenía problemas constitucionales por cuanto la ley debe fijar la destinación de las contribuciones parafiscales, pues no se trata de que entidades privadas -como son las que usualmente manejan muchas de estas cuotas de fomento- puedan disponer de los dineros libremente, como si se tratara de fondos privados, ya que los recursos mantienen su carácter público, y por ende su utilización está sujeta al principio de legalidad. Ya esta Corporación había señalado con claridad que "la Constitución no autoriza el que se exija una contribución parafiscal para que el Estado la entregue directamente a los particulares". No podía entonces la Corte conferir una atribución abierta a los administradores de estos recursos parafiscales pues ello equivalía a la privatización de los mismos. Tampoco podía la Corporación definir motu proprio el empleo de los dineros, pues estaría invadiendo las competencias propias del</p>
--	---

	<p>Legislador, ya que a este órgano compete establecer los propósitos de las contribuciones parafiscales (CP art. 150 ord. 12).</p> <p>¿Significa lo anterior que no existía posibilidad de conservar la norma impugnada y que entonces era necesario excluirla del ordenamiento, como lo hizo la sentencia? Creemos que no, por cuanto el artículo acusado se remitía expresamente a las otras leyes que regulan las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras. Ahora bien, el propio Congreso ha expedido la Ley 101 de 1991 o "Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero", la cual dedica el capítulo V a la regulación de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras". El artículo 31 de esa ley señala la destinación que se debe dar, como regla general, a tales contribuciones. Dice la norma:</p> <p>"Destinación de los recursos. Los recursos que se generen por medio de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras deben ser invertidos en los subsectores agropecuario o pesquero que los suministra, con sujeción a los objetivos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigación y transferencia de tecnología, y asesoría y asistencia técnicas.</li> <li>2. Adecuación de la producción y control sanitario.</li> <li>3. Organización y desarrollo de la comercialización.</li> <li>4. Fomento de las exportaciones y promoción del consumo.</li> <li>5. Apoyo a la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un ingreso remunerativo.</li> <li>6. Programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio del subsector respectivo."</li> </ol> <p>Nótese que se trata de una norma general en relación con todas las contribuciones parafiscales del sector agropecuario y pesquero, lo cual tiene consecuencias importantes. En efecto, si la disposición acusada no hubiese señalado cuál es la destinación de los recursos recaudados a los importadores, se entendería que esos dineros deben dedicarse a los objetivos señalados por el artículo 31 de la Ley 101 de 1991, que es la norma general en esta materia. En ese orden de ideas, si la Corte hubiese declarado la inexequibilidad de la destinación de las contribuciones cobradas a los importadores, ello no hubiera significado que las entidades administradoras podían disponer libremente de tales recursos, pues no habría vacío legal en este campo, ya que se aplicaría la norma legal general que regula la materia, esto es, el artículo 31 de la Ley 101 de 1991. Ahora bien, dos aspectos merecen ser destacados de esta última disposición. De un lado, esa norma es más general que la disposición acusada, pues no sólo todas las destinaciones previstas por el inciso tercero del artículo impugnado se encuentran también en el artículo 31 de la Ley 101 de 1991 sino que, además, esa norma prevé otras finalidades para las contribuciones parafiscales. De otro lado, consideramos que, precisamente por esa razón, si el artículo 31 de la Ley 101 de 1991 fuera la norma reguladora de las</p>
--	---

	<p>finalidades de las contribuciones parafiscales cobradas a los importadores, se eliminaría el vicio de inconstitucionalidad, pues los importadores obtendrían servicios por el pago de la cuota, ya que parte los recursos serían dedicados, en particular, a la promoción del consumo, a la organización y desarrollo de la comercialización, y a programas de infraestructura y, en general, a toda la actividad importadora, pues el subsector importador hace parte de la cadena productiva y no puede extraerse de ella.</p> <p>En ese orden de ideas, era posible conservar el sentido esencial de la norma acusada y subsanar su inconstitucionalidad, sin que la Corte se convirtiera en legisladora, pues para ello bastaba declarar la inexequibilidad de la expresión "de investigación, transferencia de tecnología, y control y vigilancia sanitarios," pues en tal caso el inciso correspondiente hubiera quedado del siguiente tenor:</p> <p>"Estos recursos se destinarán exclusivamente a apoyar programas y proyectos elaborados por el Ministerio de Agricultura y la entidad administradora del fondo respectivo, y deberán ser aprobados por el Comité Especial Directivo de que trata el Parágrafo siguiente."</p> <p>Así, con base en esa decisión, se entendía que la disposición pertinente para regular la destinación de estos recursos era la norma general en esta materia, esto es, el artículo 31 de la Ley 101 de 1991. De esa manera se subsanaba la inconstitucionalidad de la disposición, ya que los importadores obtenían una contraprestación por su contribución. Igualmente, se conservaban las finalidades señaladas por la ley para los recursos parafiscales, pues el artículo 31 de la Ley 101 de 1991 engloba las destinaciones previstas por la norma acusada. En tercer término, la Corte no definía ex nihilo los objetivos de las contribuciones sino que simplemente fundamentaba su decisión en la disposición legal general que regula la materia, con lo cual se respeta perfectamente la voluntad del Legislador y el principio democrático. Por último, esa decisión no implicaba que el Congreso hubiese perdido su facultad de regular estas contribuciones en otra forma, o que no pueda utilizar otros instrumentos para proteger la producción de alimentos en Colombia, como los aranceles, pues en este campo opera en principio la libertad de configuración política del Legislador, por lo cual puede la ley -como es obvio, dentro de los marcos de la Carta- determinar los elementos que definen una contribución parafiscal.</p> <p>10- Por todo lo anterior, creemos que la decisión correcta en este caso era que la Corte declarara inexecutable la expresión "de investigación, transferencia de tecnología, y control y vigilancia sanitarios" del inciso tercero de la disposición impugnada, en el entendido de que los recursos recaudados debían ser utilizados para alcanzar los objetivos señalados por el artículo 31 de la Ley 101 de 1993, a fin de que esa manera los importadores pudieran también beneficiarse del pago de la respectiva contribución parafiscal. En ese mismo orden de ideas, no creemos que procediera tampoco declarar inconstitucionales los apartes de las</p>
--	---

	<p>leyes 219 de 1995 y 272 de 1996 en relación con los cuales la sentencia efectuó unidad normativa pues, por las consideraciones efectuadas en el tercer párrafo de este salvamento, no creemos que la Carta prohíba incluir en una misma contribución parafiscal a productores nacionales e importadores de un determinado bien. Por consiguiente, si en relación con esas dos leyes el problema era también la ausencia de contraprestación para los importadores, como podría ser el caso, creemos que procedía también una sentencia condicional que permitiera conservar normas que buscan proteger un adecuado suministro de alimentos para todos los colombianos, no sólo porque la seguridad alimentaria es un componente esencial de la seguridad nacional de cualquier país sino, además, por su importancia para la realización de los derechos de las personas, todo lo cual justifica la importancia constitucional de este renglón de la actividad económica (CP art. 65).</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-150/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Ramiro Rodríguez López
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 (parcial) del artículo 9º de la ley 223 de 1995 "Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras disposiciones", numeral que constituye el numeral 2 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE, dentro de los términos expuestos en la presente sentencia, la expresión "...y los que mediante resolución de la DIAN se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.", contenida en el numeral segundo del artículo 9 de la Ley 223 de 1995, que fue incorporado al Estatuto Tributario como el inciso segundo del artículo 437-2.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El demandante considera que el texto acusado es violatorio del inciso primero del artículo 338 de la Constitución Política, que establece que las leyes, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar

	<p>directamente los sujetos pasivos de los impuestos. La atribución que concede la norma acusada a la Administración de Impuestos para designar nuevos agentes de retención del impuesto sobre las ventas atenta contra el mencionado precepto constitucional, por cuanto "tales agentes de retención adquieren el carácter de sujetos pasivos respecto de dichos tributos, al convertirse en responsables de los mismos".</p> <p>Fundamenta su aserto en los artículos 4° del Estatuto Tributario, el cual preceptúa que "para fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los términos contribuyente y responsable"; 370, que consagra la obligación del agente de retención de responder por las sumas que habría debido retener o percibir, aun cuando dicho agente conserva el derecho de exigir al contribuyente el reembolso de lo pagado; y 371 y 372, que señalan varios eventos de responsabilidad solidaria respecto de las sanciones por retención y de las sumas retenidas y percibidas.</p> <p>El actor sintetiza de la siguiente forma su acusación contra la norma demandada: "La Constitución Política exige la determinación de los sujetos pasivos de los impuestos en forma concreta por parte de la ley, las ordenanzas o los acuerdos; los agentes de retención son contribuyentes y responsables del IVA, es decir que se trata de sujetos pasivos del mismo; la norma demandada faculta a autoridades administrativas para designar personas que serán agentes de retención del IVA, luego, la disposición impugnada es inconstitucional y debe ser retirada del ordenamiento".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	
Fecha de la sentencia	
Demandante	
Demandado	
Conoció en primera instancia	

Decision	
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-158/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Dora Mariño Flórez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 numeral 4° (parcial) de la Ley 223 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLES las expresiones “domiciliario ya sea” y “o distribuido en cilindros”, contenidas en el numeral 4° del artículo 13 de la ley 223 de 1995, por no infringir los artículos 158 y 169 de la Constitución Política.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas  Estima la actora que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 158 y 169 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda  Afirma la demandante que el artículo 158 de la Constitución Política exige que todo proyecto de ley deba referirse a una misma materia, so pena de que tengan que inadmitirse las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. En su sentir, dicho requisito no lo cumple la ley 223 de 1995, la cual fue promulgada</p>

	<p>para regular materias tributarias, pero al entrar a definir lo relativo al servicio público de distribución de gas en cilindros, se extralimitó en su contenido, pues a su juicio, esa distribución sí corresponde a un servicio público, pero no de carácter domiciliario, y al imprimirle tal categoría, la norma en cita está legislando sobre una materia diferente, pues los servicios públicos domiciliarios, por mandato expreso de la Carta Política, están sujetos a una normatividad especial, sin que fuera esta la oportunidad para definir este tema-. Con apoyo en la Sentencia C-025 de 1993 de la Corte Constitucional, que se refiere a la transgresión del principio de unidad de materia, considera que no es posible establecer una relación causal o teleológica entre el artículo 13 numeral 4° de la ley 223 de 1995 y el resto del articulado de la misma ley, en cuanto no le correspondía a la norma demandada definir como un servicio público de carácter domiciliario la distribución, en cilindros, del gas propano so pretexto de excluirlo de la causación del impuesto al valor agregado (IVA). La norma idónea para regular esta última materia no debe ser de carácter tributario, sino una de carácter especial, encaminada a regular materias inherentes al régimen de prestación de los servicios públicos domiciliarios, contenido en el artículo 367 de la Constitución Política.</p> <p>La demandante también encuentra vulnerado el artículo 169 de la Carta Política, pues, según ella, el título de la norma transcrita no corresponde exactamente a su contenido y texto, pues, en su concepto, la citada ley se tituló: "Por la cual se expiden normas sobre la Racionalización Tributaria y se dictan otras disposiciones" lo cual significa que debe tratar sólo sobre materias tributarias y no corresponde a ella definir cuales son las empresas de servicios públicos, pues tal materia fue regulada por la ley 142 de 1994 que definió lo relativo a la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible así: "Es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición." Estas condiciones, según la demandante, no son cumplidas por la distribución de gas propano en cilindros, como lo reconoció el Ministerio de Minas y Energía en el concepto No. 82976 de mayo 3 del mismo año en el cual expresó que la definición que trae el artículo 14 numeral 28 de la ley 142 de 1994 "no incluye la distribución de GLP por cilindros, toda vez que esta actividad se reduce unas veces a entregar en la puerta del domicilio del usuario el cilindro de gas proveniente de la planta de almacenamiento de gas; otras, a la venta que desde el camión se hace del cilindro y otras a la venta autorizada a través de expendios, lo que excluye la entrega desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación del consumidor final, incluyendo su conexión y medición.". Asegura que en igual sentido se pronunció la</p>
--	--

	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Comunicación No. 042243, dirigida al secretario jurídico de la Presidencia de la República.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-067/97
Fecha de la sentencia	(11) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Pedro Jaime García Hernández
Demandado	Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 228 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	ESTESE A LO DECIDIDO por la Corte en sentencias C-430 del 12 de septiembre de 1996 y C-626 del 21 de noviembre del mismo año, sobre la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley 228 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que con la norma acusada se vulnera el artículo 13 de la Constitución Política.</p> <p>Manifiesta que la repercusión social de las contravenciones es menor que la de los delitos y es por ello que se les da un tratamiento más benigno. Señala -sin embargo- que, cuando el artículo 5o. de la Ley 228 de 1995 prohíbe el otorgamiento de la condena de ejecución condicional para las contravenciones allí indicadas, no guarda armonía con el principio expuesto.</p> <p>En su criterio, existe una incongruencia en la norma demandada y por consiguiente resulta contraria al artículo 13 de la Carta, por cuanto, si una persona comete una infracción menor (contravención), resulta siendo tratada en forma más rigurosa que quien incurre en una infracción mayor (delito), siendo los hechos punibles de la misma naturaleza.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

  

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-033/97

Fecha de la sentencia	treinta (30) de enero de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Julian Andrés Fernández
Demandado	Norma acusada: Artículos 7º y 8º de la Ley 228 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Estar a lo resuelto en la sentencia C-430 de 1996, que declaró INEXEQUIBLE el artículo 7º de la Ley 228 de 1995 y EXEQUIBLE el artículo 8º de esa misma ley, bajo el entendido de que la expresión "o cualquier otra sustancia que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas", se refiere a aquellas sustancias que producen los mismos efectos de la escopolamina y no se utilizan como medicamentos ni como estupefacientes.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que las normas demandadas violan los artículos 2, 5, 6, 29 y 93 de la Constitución . Según su criterio, la Constitución consagra un derecho penal de acto y no de autor, por lo cual la culpabilidad es un presupuesto para que se pueda sancionar a alguien. Así, según el actor:</p> <p>La culpabilidad dentro del Estado Social de Derecho, aparece como un desarrollo filosófico del derecho penal de acto (artículo 29 de la C. P.) y como una prohibición de la responsabilidad objetiva, conlleva a la consagración de un riguroso sistema de responsabilidad subjetiva, pero no una responsabilidad subjetiva en grado absoluto o ética en sentido voluntarista, sino una responsabilidad subjetiva fundada y determinada por una relación jurídica concreta que es lesionada de manera efectiva, es decir de un sistema de culpabilidad por el hecho y no por el autor.</p> <p>El fundamento de la punición es, en todo caso, la realización voluntaria del injusto penal tipificado. La culpabilidad es el límite dentro del cual se imputa penalmente la realización.</p> <p>Lo anterior, según el demandante, se liga a la necesidad de que el derecho penal únicamente sancione conductas que efectivamente vulneren o pongan en peligro real bienes jurídicos esenciales, esto es, que sean materialmente antijurídicas, lo cual constituye un límite a la potestad punitiva del Legislador, ya que como el derecho penal es la técnica de control social más gravosamente lesiva de la libertad y la dignidad de los ciudadanos, sólo debe acudir a ella como remedio extremo, como ultima ratio. Por ello, señala el actor, no se pueden sancionar las conductas que no afecten "un bien jurídico, pues un derecho penal garantista no puede penalizar los pensamientos ni las ideas". Señala entonces al respecto:</p> <p>El derecho penal no busca sancionar los pensamientos o deseos</p>

	<p>internos. El fin de derecho penal no es moralizador, sino de evitar el mal social (impidiendo ciertos daños a bienes jurídicos determinados, para esa manera garantizar la paz social).</p> <p>Uno de los fines del derecho penal es la garantía de los bienes jurídicos de las personas, logrando la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2º de la C.P.) para de esa manera lograr la paz colectiva (art. 22 de la C.P. y 95 numeral 6).</p> <p>El derecho penal no puede penalizar pensamientos o ideas, que por muy “desestabilizadoras” o macabras que puedan parecer, pues no logran afectar en ningún nivel de agresión los bienes jurídicos protegidos y considerados necesarios para la sociedad.</p> <p>Ahora bien, según el criterio del actor, los artículos demandados desconocen el derecho penal de acto y desbordan el principio de necesidad pues las conductas penalizadas no pueden denotar ni siquiera una potencial lesividad. Así, según su criterio:</p> <p>De la estructura de los tipos penales demandados podemos concluir que no garantizan en debida forma el derecho penal del acto, ni mucho menos posibilitan una discusión sobre la lesión al bien jurídico, la conformación normativa de los mismos es totalmente desconocedora de los derechos fundamentales.</p> <p>La característica normativa principal (como elemento del tipo) de los tipos demandados es la definición legal de: “el que porte”, lo que significa llevar consigo. Portar implica una relación de posesión material de determinados elementos, quizá sin ningún fin lesivo a bien jurídico determinado.</p> <p>El derecho penal no puede en ningún momento entrar a penalizar el solo portar, pues si aceptamos que dentro de la estructura del derecho penal de acto, toda acción del individuo esta motivada con referencia a fines y para la responsabilidad penal debe tener la intención real, materializada en el mundo objetivo, de desconocer el orden jurídico.(....)</p> <p>La redacción en el título de este tipo, nos penaliza la posesión injustificada de instrumentos para atentar, contra la propiedad y el desarrollo de la norma nos habla “del que porte”.</p> <p>Dentro de la perspectiva de la lesión a un bien jurídico, ni poseer, ni portar, instrumentos, llaves o ganzúas para atentar contra la propiedad, implican una lesión efectiva al bien jurídico, ni siquiera acarrea el grado mas bajo de ejecutoriedad del injusto en el atentado de lesión al bien, cual es la tentativa. (Artículo 22 del Código Penal).</p> <p>El solo hecho de portar o de poseer instrumentos (llaves maestras o ganzúas) no colocan en peligro material lo protegido como necesario, todo lo anterior dentro de una concepción garantista del bien jurídico y ni siquiera implica el comienzo en la ejecución de actos idóneos (considerados de manera material, objetiva o real) para la lesión al bien jurídico.</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-535/97
Fecha de la sentencia	Octubre veintitrés (23) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Rodrigo Noguera Calderón
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la Ley 256 de 1996 "por la cual se dictan normas sobre competencia desleal".
Conoció en primera instancia	Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
Decision	Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el artículo 19 de la Ley 256 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante, antes de sustentar sus cargos, hace una exposición sobre la manera en que considera deben interpretarse las disposiciones constitucionales de índole económico.</p> <p>A su juicio el artículo 333 de la Carta, por regular asuntos económicos, debe interpretarse de conformidad con las reglas de la ciencia económica, la cual en su sentir “revela unos principios o verdades de aplicación universal”. A través de la ciencia económica, es posible establecer la intención del constituyente al estatuir normas reguladoras de la actividad económica.</p> <p>Atendiendo a este postulado del constitucionalismo económico, resulta evidente, indica el actor, que la libre competencia no puede</p>

	<p>exigirse a partir de la asunción de la existencia de la competencia perfecta. La ciencia económica tiene bien averiguado el carácter utópico de dicha condición del mercado y reconoce únicamente la teoría de la mayor competencia posible.</p> <p>El Estado no puede desconocer esta connotación intrínseca del mercado y pretender establecer regulaciones ajenas a dicha realidad. Lo anterior implica admitir la existencia de privilegios y barreras naturales en el mercado.</p> <p>La libre competencia -agrega- debe entenderse como la garantía de que quien aspira a participar en el mercado, lo puede hacer asumiendo sus condiciones reales y con una mínima interferencia del Estado. Así, el empresario podrá realizar la función social de la empresa (lograr ganancias gracias a la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, no deducidos de privilegios como el monopolio o los subsidios estatales). Por su parte, el consumidor podrá formarse una opinión sobre los bienes ofrecidos y decidir de acuerdo con sus intereses.</p> <p>Cargo 1º. Violación de los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 333 de la C.P.</p> <p>De acuerdo con lo señalado por el demandante, el legislador entiende que libre competencia significa igualdad de oportunidades, lo que obliga a considerar a los pactos de exclusividad, en todo caso, como desleales.</p> <p>Desde el punto de vista extremadamente purista, como el que subyace a la norma, es evidente que cualquier tipo de barreras de entrada supone menos oportunidades para que nuevos competidores ingresen al mercado. Sin embargo, el modelo de competencia perfecta que inspira la norma en su “construcción teórica, abstracta y artificial carece de verdadera significación y alcance para comprender el funcionamiento real de los procesos de mercado”.</p> <p>A diferencia de lo que considera el legislador, la libertad (para efectos del concepto de libre competencia) “está limitado por realidades y factores de tipo puramente económico”. Para la ciencia económica es evidente que las restricciones a la libertad, conaturales al mercado, no constituyen limitaciones sino que definen su propio alcance.</p> <p>Existe una amplia gama de restricciones a la libertad de competencia, todas ellas propias del mercado: los costos iniciales de un proyecto productivo, las franquicias, las patentes, la economía de escala, la integración vertical, la posesión de factores de producción escasos, etc.</p> <p>La presencia de estas barreras no impide que se hable de libre competencia. En lugar de proscribir su existencia, que no es perjudicial para el mercado, deben ser objeto de regulación a fin de evitar que se produzcan abusos.</p> <p>De lo anterior se desprende que es errónea la apreciación del</p>
--	--

	<p>Congreso de que las cláusulas de exclusividad tienen por objeto impedir el “ingreso de nuevos competidores y productos al mercado, en detrimento de la libre competencia y del bienestar de los consumidores, los cuales se ven privados de la oportunidad de acceder a una mayor cantidad de bienes y servicios”.</p> <p>Los pactos de exclusividad favorecen una mayor oferta de bienes y servicios por efecto de la mayor eficiencia económica que generan. El legislador únicamente esta autorizado, como se desprende de los incisos 4 y 5 del artículo 333 de la Carta, para “señalar límites de su ejercicio (libertad de competencia) en aquellos casos en que evidentemente su abuso pueda producir alteraciones a la libertad económica”.</p> <p>Cargo 2° Violación de los incisos 4 y 5 del artículo 333 de la Constitución</p> <p>Considerando que por prácticas desleales se entienden los “comportamientos inmorales o deshonestos por parte de los empresarios, que afectan a los competidores o que se traducen en la producción de bienes y servicios de baja calidad, o que afectan desfavorablemente los precios, o la salud o que tiendan a evitar el adecuado aprovisionamiento del mercado, en contra de los derechos de los consumidores”, ellas no pueden confundirse con las prácticas restrictivas de la competencia, que son autorizadas por la C.P. (como se desprende del tratamiento que la Carta da a los monopolios). En relación con estos últimos, el legislador ha de limitarse a regularlas a fin de evitar abusos.</p> <p>El legislador incurre en una grave confusión al clasificar una práctica restrictiva de la competencia (pactos de exclusividad) como competencia desleal y, al prohibir tal conducta, viola la Carta.</p> <p>Cargo 3° Violación del inciso 1° del artículo 78 de la C.P.</p> <p>El inciso primero del artículo 78 de la C.P. define el alcance de la responsabilidad de los empresarios frente a los consumidores. Las normas sobre competencia dirigidos a garantizar la calidad de bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, desarrollando el indicado precepto.</p> <p>En la medida en que únicamente el abuso de los pactos de exclusividad, -“cuando ellos abarcan un volumen apreciable o sustancial del mercado, en forma tal que lleguen a restringir inconvenientemente el acceso de la competencia al mismo”, cuando afecten los derechos de los consumidores a productos y servicios a precios económicos y a un mejor aprovisionamiento del mercado-, puede ser objeto de reproche, al contemplar el artículo 19 acusado la prohibición genérica de los pactos de exclusividad, la norma viola el artículo 78-1 de la C.P.</p> <p>Cargo 4° Violación de los incisos 3, 4 y 5 del artículo 333 de la C.P.</p> <p>La función social de la empresa implica que ésta debe “producir mayor cantidad de bienes y servicios que los que utilizó en el proceso productivo”, y siempre que tales bienes y servicios sean de la mejor calidad, y se ofrezcan “al más bajo costo posible y con el</p>
--	--

	<p>mejor servicio, a fin de beneficiar a la comunidad en general".</p> <p>Para lograr esta meta es necesario que la empresa pueda buscar las oportunidades que el mercado le ofrece, "pero si una cualquiera de las alternativas que allí se ofrecen de manera natural le son cerradas ab initio por el legislador, es claro que la norma legal que así lo disponga es contraria a la función social asignada por el Constituyente a la empresa".</p> <p>Cargo 5° Violación del artículo 158 de la C.P.</p> <p>El legislador violó el principio de unidad de materia al asimilar la competencia desleal y los pactos de exclusividad, que "se fundan en conceptos totalmente distintos", y no obstante, los regula la misma ley.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-423/97
Fecha de la sentencia	septiembre cuatro (4) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Alexandra Mazuera Vargas, Cristina Monzón Ortega y Juan Carlos Portilla.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 264 de 1996, "por medio de la cual se conceden algunos beneficios a los reservistas del Ejército, Armada Nacional, fuerzas de policía y de la Fuerza Aérea Colombiana".
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el artículo 1º de la Ley 264 de 1996, salvo la expresión "del Ejército, de la Armada o de la Policía", la cual se declara inconstitucional
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Consideran los demandantes que la norma acusada vulnera el preámbulo y los artículos 2, 13 y 43 de la Constitución Política. Con respecto a los principios del preámbulo manifiestan que la norma demandada genera un tratamiento diferencial entre la población campesina por tres razones, a saber: porque los llamados a prestar el servicio militar son exclusivamente los hombres; porque los

	<p>mayores de 28 años no pueden cumplir con el mismo por los mecanismos ordinarios de enlistamiento; y porque las personas con limitaciones físicas (discapacitados físicos) tampoco pueden ingresar a las Fuerzas Militares. Sostienen que la Ley 264 de 1996 producirá efectos desestabilizadores y generará violencia en el sector campesino, en razón de que discrimina a los no reservistas y a las mujeres en punto al acceso a los programas de Reforma Agraria y Vivienda de Interés Social. Agregan que “el fin buscado por el Estado en los programas mencionados ha tenido y tiene por objeto beneficiar a los campesinos en general, tanto reservistas como no reservistas, tanto hombres como mujeres por igual. La facultad discrecional del legislador y del gobierno no puede crear diferencias ni elementos limitativos al ejercicio del derecho de los campesinos de acceder a los programas que lo benefician”.</p> <p>Manifiestan que la norma acusada desconoce el fin esencial del Estado de proveer por la prosperidad general, pues ella tiende a beneficiar a un grupo reducido. El artículo demandado consagra un privilegio en favor de un grupo minoritario de campesinos y dispensa un trato inequitativo para las mujeres, los no campesinos, y los campesinos no reservistas.</p> <p>Los actores aseveran que la norma acusada vulnera el derecho a la igualdad, por las siguientes razones:</p> <p>“1. Las características de ser campesino reservista de las FFAA no son relevantes para diferenciarlo de quienes no son reservistas o de las mujeres campesinas frente al acceso de las políticas de Reforma Agraria y de los Programas de Interés Social.</p> <p>“2. Cumplir con los deberes que establece la Constitución y la Ley frente al servicio militar obligatorio no debe dar mayores prerrogativas de quienes por igual siguen cumpliendo la Constitución y las leyes, pero fuera de las FFAA y en medio de otras circunstancias en la mayoría de los casos menos favorables.</p> <p>“3. Generar discriminación entre los campesinos con la clase de beneficios que incorpora la Ley 264 de 1996, no es el único camino para que a través del legislador o de la administración se generen incentivos para el cumplimiento de los deberes que la patria nos impone, existen otros medios alternos y menos perjudiciales”.</p> <p>Expresan, además, que la disposición acusada establece criterios diferenciadores sobre los cuales la doctrina ha considerado que se debe practicar un examen de igualdad muy riguroso, como ocurre con la condición de reservista y el género.</p> <p>Por último, consideran que la norma viola el artículo 43 de la Constitución Política, que establece que la mujer y el hombre tendrán iguales derechos y que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Ello por cuanto el otorgamiento de prerrogativas a los reservistas de las Fuerza Armadas para acceder a los programas de reforma agraria y de vivienda de interés social constituye un obstáculo para que las mujeres puedan obtener los mencionados beneficios.</p>
--	---



Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-148/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Alberto Rojas Ríos
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 329(parcial), 331 (parcial), 332(parcial), 333 (parcial), 334, 336(parcial), 337(parcial), 338(parcial), 339, 340, 341, 342, 343(parcial), 345(parcial), 346, 347 y 353 de la ley 5a de 1992; los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 de la ley 273 de 1996 y contra los artículos 467 y 489 del Decreto 2700 de 1991. - Código de Procedimiento Penal.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero: Respecto de los artículo 331, 333, 336, 338, 339, 340 y 345 de la ley 5a de 1992, ESTARSE a lo resuelto en la Sentencia C-563 de 1996.</p> <p>Segundo: En cuanto al artículo 332 de la ley 5a de 1996, DECLARARSE INHIBIDA por carencia actual de objeto.</p> <p>Tercero: Declarar EXEQUIBLE la expresión “o por delitos comunes” contenida en el artículo 329 de la ley 5a de 1992.</p> <p>Cuarto: Con respecto al artículo 346, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-222 de 1996.</p> <p>Quinto: Declarar INEXEQUIBLE la expresión “o revocada por vía de apelación la cesación de procedimiento proferida por la comisión de instrucción”, contenida en el inciso primero del artículo 347 de la Ley 5a de 1992, el cual fue modificado por el artículo 4° de la ley 273 de 1996, que también es INEXEQUIBLE.</p> <p>Sexto: Declarar EXEQUIBLES, el inciso tercero (3°) del artículo 347 y el artículo 353 de la ley 5a de 1992.</p> <p>Séptimo: INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo contra los incisos segundo (2°) y cuarto (4°) del artículo 347 de la ley 5a. de 1992, por ausencia de cargos.</p> <p>Octavo: Declarar EXEQUIBLES las expresiones “investigadores para un asunto determinado” e “ investigador ” del artículo 1° de la ley</p>

	<p>273 de 1996.</p> <p>Noveno: Declarar EXEQUIBLES los artículos 2°, y 3° de la ley 273 de 1996.</p> <p>Décimo: Declarar EXEQUIBLES, la expresión “que en tal caso actúa como fiscal” del artículo 467 y el artículo 489 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>2.1 Cargos contra los artículos 331 (parcial); 332 (parcial); 333 (parcial), 334; 336; 337; 338; 339; 340 (parcial); 341; 342: 343 (parcial); 345; 346 (parcial); y 353 de la ley 5a de 1992. Artículos 1 (parcial); 2; 3 y 5 de la ley 273 de 1996. Artículos 467 y 489 del decreto 2700 de 1991.</p> <p>Estima el demandante, que las normas acusadas violan la Constitución Política, por cuanto atribuyen al "representante-investigador" la facultad de investigar las conductas cometidas por los altos funcionarios del Estado lo cual, a su juicio, constituye una clara usurpación de la jurisdicción y la competencia propias del Senado en lo atinente al juzgamiento por indignidad por mala conducta, y de la Corte Suprema de Justicia, en lo que se refiere a la comisión de hechos punibles. También considera el demandante que es una intromisión en la órbita de competencia de la Corte Suprema de Justicia en lo que se refiere a la investigación por la comisión de hechos punibles; es decir, según el demandante se contradicen los postulados del Estatuto Superior, cuando se le confieren a la Cámara de Representantes facultades investigativas como si se tratara del fiscal de la causa, facultad reservada exclusivamente al fiscal general de la Nación.</p> <p>2.2. Cargos contra el artículo 329 (parcial) y 347 de la ley 5a de 1992 y 4° de la ley 273 de 1996.</p> <p>El demandante estima que los dos primeros incisos del artículo 347 de la ley 5a de 1992 resultan inanes por cuanto son repetitivos de la Carta política; en cuanto al inciso tercero y al artículo 329 de la ley 5a de 1992, contravienen abiertamente, en su parecer, los artículos 175 y 235 de la Carta política, pues el juez natural de los altos funcionarios del Estado es la Corte Suprema de Justicia, a la cual se le ha otorgado la competencia para conocer de los procesos por la comisión de hechos punibles -delitos comunes- por parte de éstos, para lo cual no se requiere la acusación por parte de la Cámara de Representantes ni la declaración del Senado sobre si hay lugar o no a seguimiento de causa.</p> <p>Según el demandante, ello quiere decir que la facultad acusadora de la Cámara y la inestructiva del Senado, no cobija a los funcionarios que gozan de fuero especial, pues de ellos debe conocer en forma exclusiva la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>Finalmente, refiriéndose al conjunto normativo que reglamenta los procedimientos judiciales adelantados ante el Congreso de la</p>

	República y contenidos en las leyes 5a de 1992 y 273 de 1996, el actor considera que no es materia que deba hacer parte de la ley orgánica que establece el Reglamento del Congreso, pues ésta, de conformidad con el artículo 151 de la C.P. debe referirse de manera exclusiva al ejercicio de la actividad legislativa. A su juicio, dicha ley se inmiscuye en temas propios del Código de Procedimiento Penal, totalmente reglamentados en un capítulo especial de dicho estatuto.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-008/97
Fecha de la sentencia	veintitres (23) de enero de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisiòn constitucional del "Convenio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de la Repùblica del Perú sobre Promociòn y Protecciòn Reciproca de Inversiones", suscrito en lima el 26 de abril de 1994" y de la Ley 279 del 13 de mayo de 1994 por medio de la cual se aprueba dicho Convenio.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: DECLARAR EXEQUIBLE la Ley 279 del 13 de mayo de 1995, "por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de la Repùblica del Perú sobre Promociòn y Protecciòn Reciproca de Inversiones, suscrito en lima el 26 de abril de 1994."</p> <p>Segundo: DECLARAR EXEQUIBLE el Convenio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de la Repùblica del Perú sobre Promociòn y Protecciòn Reciproca de Inversiones, suscrito en lima el 26 de abril de 1994", salvo el artículo 7º del mismo, el cual se declara INEXEQUIBLE, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, el Presidente de la República, al manifestar el consentimiento de Colombia en obligarse por el Tratado, únicamente podrá ratificar las cláusulas del mismo que, según esta</p>

	<p>Sentencia, se ajustan a la Constitución Política.</p> <p>Tercero. De acuerdo con lo advertido en la parte motiva de esta providencia, las cláusulas de tratamiento nacional y de la Nación más favorecida, contenidas en el Convenio bajo examen, quedan sujetas a las restricciones que el artículo 100 de la Constitución consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros.</p> <p>Sólo en este sentido podrá manifestar el Gobierno el consentimiento del Estado en obligarse por el Tratado.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional del “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, suscrito en Lima el 26 de abril de 1994" y de la Ley 279 del 13 de mayo de 1994 por medio de la cual se aprueba dicho Convenio.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO</p> <p>Con el acostumbrado respeto por los fallos adoptados por la Sala Plena de esta Corporación, los suscritos magistrados nos permitimos salvar nuestro voto en el asunto de la referencia, por no compartir la declaratoria de inexecutable del artículo 7o. del “CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES”, suscrito en Lima el 26 de abril de 1994 y aprobado por la Ley 279 de 1996.</p> <p>Las razones por las cuales nos apartamos de la sentencia proferida por la Corte en el presente caso quedan consignadas en nuestro salvamento de voto a la sentencia C-358 de 1996, por medio de la cual fue declarado inexecutable el artículo 6o. del “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR EL CUAL SE PROMUEVEN Y PROTEGEN LAS INVERSIONES”, suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994 y aprobado por la Ley 246 de 1995.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-047/97
Fecha de la sentencia	seis (6) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).

Demandante	
Demandado	Revisión constitucional de la ley 283 de junio 7 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos", suscrito en Santafé de Bogotá, el 19 de octubre de 1992.
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJIA
Decision	Declarar EXEQUIBLE la ley 283 de junio 7 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos", suscrito en Santafé de Bogotá, el 19 de octubre de 1992, lo mismo que este Acuerdo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional de la ley 283 de junio 7 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos", suscrito en Santafé de Bogotá, el 19 de octubre de 1992.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-029/97
Fecha de la sentencia	enero treinta (30) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional de la ley 284 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y Rumania", suscrito en Santafé de Bogotá el 5 de agosto de 1993 y del Acuerdo que se aprueba.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ

Decision	Primero. DECLARAR EXEQUIBLE el "Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y Rumania", suscrito en Santafé de Bogotá el 5 de agosto de 1993. Segundo. DECLARAR EXEQUIBLE la ley 284 de junio 14 de 1996, aprobatoria del Acuerdo antes mencionado. Tercero. ENVÍAR copia de la presente sentencia al Presidente de la República y a la Ministra de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el artículo 241-10 de la Constitución.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional de la ley 284 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y Rumania", suscrito en Santafé de Bogotá el 5 de agosto de 1993 y del Acuerdo que se aprueba.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-140/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	
Demandado	Revisión oficiosa de la ley 292 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el 'TRATADO SOBRE LAS BASES DE LAS RELACIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA', suscrito en Moscú el 8 de Abril de 1994"
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLE el Tratado sobre las bases de las relaciones entre la República de Colombia y la Federación de Rusia, suscrito en Moscú el ocho de abril de 1994, así como su ley aprobatoria, esto es, la Ley 292 de julio 16 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	Revisión oficiosa de la ley 292 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el 'TRATADO SOBRE LAS BASES DE LAS RELACIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA', suscrito en Moscú el 8 de Abril de 1994"
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-141/97
Fecha de la sentencia	marzo diecinueve (19) de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 293 del 16 de julio de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Mandato del Grupo Internacional de Estudio Sobre el Níquel", adoptado el 2 de mayo de 1986 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Níquel, 1985.
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	Primero. DECLARAR EXEQUIBLES el Mandato del Grupo Internacional de Estudio Sobre el Níquel, adoptado el 2 de mayo de 1986 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el níquel, 1985 y la Ley 293 del 16 de julio de 1996 que lo aprobó, salvo el artículo 2 y el parágrafo del artículo 3 que se declaran INEXEQUIBLES.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de constitucionalidad de la Ley 293 del 16 de julio de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Mandato del Grupo Internacional de Estudio Sobre el Níquel", adoptado el 2 de mayo de 1986 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Níquel, 1985.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI. DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Atribución

	<p>presidencial de dirigir las relaciones internacionales /MANDATO DEL GRUPO INTERNACIONAL DE ESTUDIO SOBRE EL NIQUEL-Representación del país (Aclaración de voto)</p> <p>Por la ley aprobatoria de un tratado internacional no puede modificarse la atribución presidencial de dirigir las relaciones internacionales del Estado colombiano. Pero no creo que las normas legales declaradas inexecutable hubieran consagrado en realidad facultades a favor del IFI para sustituir al Jefe del Estado en esa "dirección" de las relaciones internacionales. La representación de Colombia, allí estatuida, correspondía más al aspecto técnico que al político. En todo caso, aún aceptando la hipótesis de la cual partió la Corte, los preceptos en cuestión no eran inconstitucionales en su totalidad. Aunque se hubiera entendido que plasmaban, en cabeza del IFI, una dirección en el manejo de las relaciones exteriores de Colombia, sólo la parte relativa a la "representación del país" merecía ser retirada de la Ley aprobatoria. No parece que el resto de facultades conferidas al IFI fuera contraria a la Constitución.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-285/97
Fecha de la sentencia	cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Gloria Guzmán Duque
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 22 y 25 de la ley 294 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Primero. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 22 de la ley 294 de 1996. Segundo. DECLARAR INEQUIBLE el artículo 25 de la ley 294 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	La acusación formulada contra los artículos 22 y 25 de la ley 294 de 1996 se centra en que dichas normas no cumplen los objetivos de "prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar", que inspiraron su creación, ni protegen "la armonía y la unidad de la familia", bienes jurídicos que están llamadas a garantizar, dado que la leve sanción punitiva genera, como efecto negativo, un estímulo



	<p>a la comisión de las conductas proscritas en las normas acusadas, por las siguientes razones:</p> <p>1. Se trata de tipos penales abiertos, cuyo contenido, al ser llenado por el intérprete, puede abarcar desde conductas inocuas hasta violaciones graves a la salud, la integridad física y la libertad sexual de las sujetos pasivos de los hechos descritos en tales disposiciones.</p> <p>2. El error de técnica legislativa consistente en omitir en los tipos penales la expresión "siempre y cuando este hecho no constituya delito sancionado con pena mayor", y la exigencia constitucional de la aplicación de los principios de favorabilidad y tipicidad, obligan a imponer las sanciones menores previstas en las normas acusadas, en vez de las penas más graves establecidas en el Código Penal, lo cual resulta desproporcionado, si se tiene en cuenta que la comisión de actos contra las personas que se hayan unidas al autor de los agravios por vínculos naturales o legales es más grave.</p> <p>3. Las definiciones de "familia" y "cónyuge" que contempla la misma ley 294 posibilitan la aplicación de las sanciones previstas en las normas acusadas, y no las asignadas en el Código Penal, a hechos cometidos contra hijos, hijastros y nietos, que son las víctimas más comunes en estos casos, y a quienes, en estas circunstancias, no se estaría dando la protección ordenada en el artículo 44 de la Constitución.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-142/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional de la Ley 295 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el 'PROTOCOLO SOBRE EL PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENOMENO EL NIÑO EN EL PACIFICO SUDESTE', suscrito en Puerto Callao, Perú el 6 de noviembre de 1992"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Decision	Declarar EXEQUIBLES el "PROTOCOLO SOBRE EL PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENOMENO EL NIÑO EN EL PACIFICO SUDESTE", suscrito en Puerto Callao, Perú el 6 de noviembre de 1992 y la Ley 295 de 1996 que lo aprueba.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional de la Ley 295 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el 'PROTOCOLO SOBRE EL PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENOMENO EL NIÑO EN EL PACIFICO SUDESTE', suscrito en Puerto Callao, Perú el 6 de noviembre de 1992"
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-143/97
Fecha de la sentencia	marzo diez y nueve (19) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Norma Acusada: Ley No. 296 de julio 17 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Suplementario Revisado sobre la Prestación de Asistencia Técnica por el Organismo Internacional de Energía Atómica al Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Viena-Austria el 11 de enero de 1993.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Acuerdo suplementario revisado sobre la prestación de asistencia técnica por el organismo internacional de energía atómica al Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Viena -Austria el 11 de enero de 1993 y de su ley aprobatoria, y la Ley 296 de 1996 aprobatoria del mismo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	Norma Acusada: Ley No. 296 de julio 17 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Suplementario Revisado sobre la Prestación de Asistencia Técnica por el Organismo Internacional de Energía Atómica al Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Viena-Austria el 11 de enero de 1993.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-144/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional del "Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de Diciembre de 1989 y de la Ley 297 del 17 de julio de 1996 por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Primero: DECLARAR EXEQUIBLES el "Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de Diciembre de 1989", y la Ley 297 del 17 de julio de 1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo. Segundo: COMUNIQUESE al Presidente de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines contemplados en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política. Tercero: ADVERTIR al Gobierno Nacional, que de conformidad con el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias deben ser remitidos a esta Corporación dentro de los seis días siguientes a su sanción.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	Revisión constitucional del “Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de Diciembre de 1989 y de la Ley 297 del 17 de julio de 1996 por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-487/97
Fecha de la sentencia	Octubre dos (2) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 2, literales a y d; 3, literales d y k; 4, literales f, m, q y t; 5 y 12, de la Ley 298 de 1996, "Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	DECLARAR EXEQUIBLES los literales d) del artículo 2 ; d) y k) del artículo 3; f), m), q) y t) del artículo 4; y los artículo 5 y 12 de la ley 298 de 1996; así mismo el literal a) del artículo 2º de dicha ley, salvo la expresión “...de nacimiento” que se declara INEXEQUIBLE.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El actor presenta los siguientes cargos de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley 298 de 1996: 1. Las exigencias de ser colombiano por nacimiento y acreditar un mínimo de diez años de experiencia, profesional o docente, para acceder al cargo de Contador General de la Nación, consignadas en los literales a y d del artículo 2 de la ley 298 de 1996, son violatorias de principios y derechos fundamentales consagrados en la C.P. En efecto, la primera acusación del actor se dirige contra la disposiciones contenidas en los literales a y d del artículo 2 de la Ley

	<p>impugnada, por considerar que ellas violan los artículos 13, 40 numeral 7, y 100 de la Constitución Política. Sustenta el demandante su afirmación en los siguientes argumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La exigencia de ser colombiano por nacimiento para acceder al cargo de Contador General de la Nación, no se ajusta a las normas de la contabilidad ni a las normas de la función pública, únicas que pueden servir de fundamento para establecer criterios de diferenciación, en este caso entre nacionales por nacimiento y nacionales por adopción.</li> <li>- Tal exigencia restringe una disposición superior, la contenida en el artículo 40 de la Carta Política, al impedir que colombianos por adopción participen en el ejercicio, conformación y control del poder político, en la modalidad de acceso a los cargos públicos, lo que implica la violación de un derecho fundamental que la Carta Política le reconoció a todos los ciudadanos sin distinción.</li> <li>- En opinión del actor no existe ninguna razón de orden público que pueda justificar de manera razonable la medida adoptada a través de la norma impugnada, única que podría sustentar la limitación de los derechos civiles de aquéllos que, en principio, gozan de los mismos derechos que se predicen de los nacionales colombianos por nacimiento.</li> <li>- Considera el demandante que la disposición impugnada vulnera también el artículo 13 superior, pues establece para quien aspire a desempeñarse como Contador General de la Nación, exigencias que exceden en gran medida, de una parte las finalidades propias de esa entidad, a la que le corresponde realizar apenas una de las dimensiones de lo que es el universo de la hacienda pública, y de otra, los requisitos que se exigen para quien sería su superior funcional, esto es el Ministro de Hacienda, lo que no solo es injustificado sino contrario al principio de igualdad.</li> </ul> <p>2. Al atribuir al Contador General de la Nación y a la Contaduría General de la Nación respectivamente, la función de elaborar el Balance General de la Nación y presentarlo al Congreso de la República para su conocimiento y análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, el legislador violó el parágrafo del artículo 354 de la C.P., pues esa es una función que el Constituyente le atribuyó directamente al Gobierno Nacional, que el Congreso no podía delegar en una entidad distinta.</p> <p>El segundo cargo de inconstitucionalidad lo dirige el actor contra los apartes subrayados del literal d del artículo 3 y del literal f del artículo 4 de la ley 298 de 1996, señalando que la función de presentar el Balance General de la Nación al Congreso de la República, para su conocimiento y análisis a través de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 354 de la Constitución Política, le fue atribuida por el Constituyente al Gobierno Nacional, el cual en términos del artículo 115 superior, "lo</p>
--	--

	<p>forman el Presidente de la República y el ministro o director del departamento correspondiente, en cada negocio particular", luego el legislador no podía trasladar la función a una entidad diferente, en el caso que se analiza a la Contaduría General de la Nación, sin violar con ello el precepto superior que el actor considera transgredido.</p> <p>3. Cuando el legislador le atribuyó como una de sus funciones al Contador General de la Nación, la de diseñar, implementar y establecer políticas de control interno conforme a la ley, desconoció normas constitucionales que ordenan que esa función la cumpla el Congreso de la República.</p> <p>La disposición citada se encuentra consignada en el literal k del artículo 3 de la ley 298 de 1996, en opinión del actor ella es contraria a los mandatos de los artículos 209 inciso segundo, 269 y 354 inciso segundo de la Carta Política, toda vez que si el legislador le impone, como lo hizo a través de la norma impugnada, al Contador General de la Nación la obligación de establecer políticas de control interno, lo que hizo fue atribuirle una de las funciones que el Constituyente, a través de las normas señaladas como infringidas, confirió expresamente al Congreso de la República, para que por intermedio de leyes establezca los parámetros generales que las diferentes entidades públicas deben seguir para aplicar métodos y procedimientos de control interno.</p> <p>4. La expedición de los certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes financieros, con base en la información suministrada en los estados financieros de la Nación, de las entidades u organismos, es una función que de conformidad con las disposiciones del artículo 84 del Estatuto Orgánico de Presupuesto le corresponde cumplir al Contador General de la Nación y no a la Contaduría General de la Nación.</p> <p>En opinión del actor lo que hizo el legislador a través del literal m del artículo 4 de la ley 298 de 1996, fue, a través de una norma ordinaria modificar una de carácter orgánico, desplazando la responsabilidad que la segunda, de mayor jerarquía, radicó en cabeza de un funcionario a la entidad que éste dirige, con lo cual además de desconocer los mandatos de los artículos 151 y 352 de la C.P., diluyó las responsabilidades que se originan en el cumplimiento de esa función.</p> <p>5. La facultades para inspeccionar y sancionar a las entidades públicas y a los funcionarios de las mismas que desconozcan o vulneren las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, atribuida por el legislador a esa entidad, violan el ordenamiento superior en cuanto le atribuyen a esa institución funciones que la Constitución radicó en cabeza de otros organismos.</p> <p>El impugnante sostiene que las disposiciones de los literales q y t del artículo 4 de la ley 298 de 1996, son contrarias a los artículos 121, 267, 268, 277-1 y 354 superiores, dado que trasladan a la</p>
--	---

	<p>Contaduría General de la Nación las facultades atribuidas por el Constituyente a "otros organismos del Estado".</p> <p>Anota, que las funciones de inspección y vigilancia dirigidas a verificar el cumplimiento de las normas jurídicas expedidas por organismos del Estado y la imposición de sanciones fiscales, disciplinarias o penales a los servidores públicos que las desconozcan, son atribuciones que la Constitución asignó de manera expresa a la Contraloría General de la República, a las superintendencias, a la Procuraduría General de la Nación y a los jueces de la república, respectivamente, "...cuya reproducción no cabe dentro del especial marco establecido en el artículo 354 de la Carta."</p> <p>6. Reestructurar la administración pública o los organismos que la integran, cuando la necesidad lo exija y la conveniencia pública lo aconseje, es competencia exclusiva del Congreso de la República y excepcionalmente del Presidente de la República cuando aquél lo faculta; en consecuencia, es inconstitucional cualquier norma legal que ordene que un órgano distinto de los señalados sea investido de dicha facultad.</p> <p>Considera el demandante que el legislador, a través de la norma impugnada, violó lo dispuesto en los numerales 7 y 10 del artículo 150 de la C.P., pues le ordena a las entidades administrativas del orden nacional, departamental y municipal reestructurarse a sí mismas, sin tener en cuenta que esa función es, como se dijo, exclusiva del legislador, el cual previo cumplimiento de los presupuestos consignados en el numeral 10 del artículo 150 de la Carta Política y de manera excepcional puede atribuirla al Presidente de la República.</p> <p>Ordenar, como lo hace el legislador a través del numeral impugnado, que cada entidad u organismo que integre la administración pública reestructure sus áreas financieras y contables, con el objeto de que cada una de ellas asuma la función de contaduría que le corresponde, implica, según el actor, el traslado de una función que el Constituyente radicó de manera expresa en cabeza del legislador -la cual sólo puede delegar excepcional y concretamente en el Presidente de la República-, en entidades de carácter administrativo que carecen de competencia para hacerlo.</p> <p>En consecuencia, señala el actor, esa disposición además de violar los numerales citados del artículo 150 de la C.P., contradice también los artículos 300-7 y 313-6 de la misma, que atribuyen la función de determinar la estructura de la administración departamental y municipal a las Asambleas y Concejos respectivamente, no pudiendo la ley, sin resquebrajar el principio constitucional de autonomía de las entidades territoriales, imponerles disposiciones que trasladen sus competencias a los organismos administrativos de las mismas.</p> <p>7. El desarrollo legal del artículo 354 de la C.P., que creó la figura</p>
--	---

	<p>del Contador General de la Nación y le atribuyó a ésta la función de llevar la contabilidad general de la misma y de consolidarla con la de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, no admite que se incluya en su contenido una modificación a la integración de la Junta Central de Contadores, disposición que hace parte de la ley que reglamentó la profesión de contador, pues ello rompe el principio de unidad de materia que consagra el artículo 158 de la Constitución, y obstaculiza la realización de los principios de transparencia e imparcialidad que consagra el artículo 209 superior.</p> <p>Tal disposición, afirma el actor, es contraria al principio de imparcialidad que rige la función pública, pues la participación del Contador General como miembro de dicha junta, que "...cumple las funciones de tribunal disciplinario de esa profesión", permitirá "...un ejercicio parcializado de las funciones administrativas a cargo de aquel", que se traducirá necesariamente en la violación de los preceptos que consagra el artículo 209 de la Carta Política.</p> <p>Con base en las anteriores acusaciones, el actor solicita a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de los apartes subrayados de las disposiciones transcritas de la Ley 298 de 1996.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-176/97
Fecha de la sentencia	diez (10) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional de las enmiendas al Tratado de Tlatelolco, adoptadas en México D.F. el 3 de Julio de 1990, 10 de Mayo de 1991 y 26 de Agosto de 1992 y de la Ley aprobatoria No. 303 del 5 de agosto de 1996, por medio de la cual se aprueban dichas enmiendas.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLES las Enmiendas al Tratado de Tlatelolco, adoptadas en México D.F. el 3 de julio de 1990, el 10 de mayo de 1991 y el 26 de agosto de 1992.



	Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley No. 303 del 5 de agosto de 1996 "por medio de la cual se aprueban las Enmiendas al Tratado de Tlatelolco, adoptadas en México D.F. el 3 de Julio de 1990, 10 de Mayo de 1991 y 26 de Agosto de 1992".
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional de las enmiendas al Tratado de Tlatelolco, adoptadas en México D.F. el 3 de Julio de 1990, 10 de Mayo de 1991 y 26 de Agosto de 1992 y de la Ley aprobatoria No. 303 del 5 de agosto de 1996, por medio de la cual se aprueban dichas enmiendas.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-145/97
Fecha de la sentencia	marzo diez y nueve (19) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Ley 304 del 5 de agosto de 1996. "Por medio de la cual se aprueba el 'ACUERDO PARA LA CREACION DEL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-' suscrito en Montevideo el 13 de mayo de 1992.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la investigación del cambio Global -IAI-" suscrito en Montevideo el 13 de mayo de 1992. Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 304 del cinco (5) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), por medio de la cual se aprueba "Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la investigación del cambio Global -IAI-".
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	Ley 304 del 5 de agosto de 1996. "Por medio de la cual se aprueba el 'ACUERDO PARA LA CREACION DEL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-' suscrito en Montevideo el 13 de mayo de 1992.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-104/97
Fecha de la sentencia	seis (6) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisiòn constitucional de la ley 305 de agosto 5 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperaciòn Tècnica y Científica en entre la Repùblica de Colombia y la Repùblica de Chile", suscrito en Santafé de Bogotá, el 16 de julio de 1991, y del Convenio que por ella se aprueba.
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJIA.
Decision	Declarar EXEQUIBLE la ley 305 de agosto 5 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de cooperaciòn tècnica y científica entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y la Repùblica de Chile", suscrito en Santafé de Bogotá, el 16 de julio de 1991, lo mismo que este Convenio.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisiòn constitucional de la ley 305 de agosto 5 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperaciòn Tècnica y Científica en entre la Repùblica de Colombia y la Repùblica de Chile", suscrito en Santafé de Bogotá, el 16 de julio de 1991, y del Convenio que por ella se aprueba.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA

Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-146/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1997).
Demandante	
Demandado	Revisiòn constitucional de la "ENMIENDA DE COPENHAGUE AL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO", suscrito en Copenhague el 25 de noviembre de 1992, y de la Ley 306 del 5 de agosto de 1996, que la aprueba.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Decláranse EXEQUIBLES la "Enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono", suscrita el 25 de noviembre de 1992 ; y la Ley 306 del 5 de agosto de 1996, que la aprueba.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisiòn constitucional de la "ENMIENDA DE COPENHAGUE AL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO", suscrito en Copenhague el 25 de noviembre de 1992, y de la Ley 306 del 5 de agosto de 1996, que la aprueba.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-157/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).

Demandante	Santiago González Angarita.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° y 2° de la Ley 308 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	En los términos de esta Sentencia, decláranse EXEQUIBLES los artículos 1 y 2 de la Ley 308 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que las normas acusadas vulneran los artículos 29, 51, 58, 60 y 64 de la Constitución Política.</p> <p>Manifiesta que la disposición acusada vulnera el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que desconoce lo establecido en el artículo 762 del Código Civil colombiano, relativo a la posesión, el cual contempla distintas situaciones administrativas, cuya competencia corresponde a las autoridades de policía, con el propósito de amparar y legitimar la mera tenencia o la posesión de inmuebles.</p> <p>De otra parte, afirma que el artículo constitucional, que consagra el derecho que le asiste a todos los colombianos a tener vivienda digna, resulta violado por la norma legal demandada, teniendo presente que el Estado colombiano ha sido inoperante al no desarrollar con eficacia y amplitud un verdadero programa de vivienda social que solucione las necesidades económicas de la población colombiana.</p> <p>En relación con la violación al precepto constitucional que garantiza el derecho a la propiedad privada (artículo 58 C.P.) y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, menciona que el artículo 367A del Código Penal, modificado por una de las normas atacadas, olvida, desconoce y desacata los preceptos establecidos en el Código Civil, en el de Policía y en la legislación agraria, así como en la normatividad administrativa, disposiciones todas éstas que amparan, protegen y legalizan la tenencia y posesión de bienes inmuebles. Así mismo, considera el impugnante que el legislador, al expedir la ley demandada, no hace otra cosa que impedir el disfrute y goce del derecho a la propiedad, al establecer requisitos adicionales para su garantía, infringiendo principios constitucionales, civiles y procedimentales.</p> <p>Por último, argumenta el demandante que sancionar penalmente la conducta de parcelar bienes inmuebles en zonas rurales implica el desconocimiento de la realidad social que enfrentan los campesinos colombianos, y, por otra parte, el quebranto de la legislación agraria creada mediante Decreto 2303 de 1989, y su régimen normativo anterior, como son las leyes 200 de 1936 y 4ª de 1973.</p>

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-658/97
Fecha de la sentencia	tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Orlando Muñoz Neira
Demandado	Referencia: Expediente D-1720 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2° de la Ley 308 de 1996, que adicionó el artículo 367 del Código Penal.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLES las expresiones “el capítulo VII del título XIV”, “el cual quedará inserto a continuación del artículo 367 de la obra citada :”, y “Artículo 367A”, contenidas en el artículo 2° de la Ley 308 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima el demandante que la norma acusada es violatoria de los artículos 51, 58, 63, 82, 313-7, 339, 366 y 367 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda Luego de hacer un extenso análisis sobre el desarrollo legislativo que ha vivido el país en relación con el control y la vigilancia del uso del suelo, con las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a la vivienda y, en general, con el tema del desarrollo urbanístico, el demandante considera que la norma acusada, al ubicar el tipo penal llamado “Urbanizador ilegal” dentro de los delitos querellables, desconoce la importancia que la Carta Fundamental le concede a la vivienda digna, así como a la inalienabilidad del espacio público.</p> <p>Para el actor resulta absurdo que el delito de urbanización ilegal, que por sus características especiales afecta no sólo intereses privados sino públicos, pues genera consecuencias perjudiciales</p>

	<p>para el servicio de planeación de la ciudad, para el entorno arquitectónico, para el espacio público y el bienestar general, esté incluido en el capítulo de los llamados delitos querellables del Código Penal; delitos que por definición sólo pueden ser investigados mediante queja del afectado, la cual, además, puede ser desistida, y cuya estimación de perjuicios puede ser transigida. Esta posibilidad, la de que el delito sea desistido o conciliado, permite, al parecer del demandante, que entre el comprador y el constructor se decidan temas propios de planeación municipal, lo cual va en contravía evidente del artículo 313-7 de la Constitución Política según el cual, a los concejos municipales les compete “Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.”</p> <p>En últimas, considera la demanda que “si la oficina de planeación de cualquier municipio quiere denunciar penalmente a un urbanizador ilegal, como no es querellante legítimo, su libelo está destinado a una fácil y rápida resolución inhibitoria. Ello es así, porque el delito de “Urbanizador Ilegal”, por virtud de la inteligencia de la Ley 308 de 1996, quedó inserto en un título de hechos punibles que atentan contra el patrimonio económico, y no, como debió serlo, en el título de delitos que atacan el orden económico y social.”</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-177/97
Fecha de la sentencia	diez (10) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	
Demandado	Revisión oficiosa de la ley 313 de 1996. "Por medio de la cual se aprueba el 'ACUERDO CONSTITUTIVO DEL CENTRO DEL SUR', suscrito en Ginebra, el 1º de septiembre de 1994
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA

Decision	Declarar EXEQUIBLE el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, suscrito en Ginebra el primero de septiembre de 1994, así como su ley aprobatoria, esto es, la Ley 313 de agosto 12 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión oficiosa de la ley 313 de 1996. "Por medio de la cual se aprueba el 'ACUERDO CONSTITUTIVO DEL CENTRO DEL SUR', suscrito en Ginebra, el 1° de septiembre de 1994
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-347/97
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Juan Pablo Cárdenas Mejía.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1º (parcial) y 4º (parcial) de la ley 315 de 1996 “Por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones”
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE, en los precisos términos de la parte motiva de esta sentencia, el numeral 3 del artículo 1o. De la ley 315 de 1996, “Por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones.”</p> <p>Segundo.- Declárase INEXEQUIBLE la siguiente expresión del artículo 4o. de la ley 315 de 1996, que modificó el último inciso del artículo 70 de la ley 80 de 1993: “... como también en aquellos con persona nacional...”.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>La ley de la que hacen parte las normas acusadas, establece los criterios que se deben tener en cuenta para la constitución de un tribunal de arbitramento de carácter internacional. Si se analiza cada uno de los casos previstos, a excepción del demandado, en ellos hay un elemento objetivo que involucra la aplicación de dos o más leyes de distintos Estados, hecho que hace necesario que las partes acuerden la ley sustancial que habrá de aplicarse en caso de conflicto.</p> <p>Dentro de este contexto, las normas acusadas desconocen los artículos 4º; 6º y 95 de la Constitución, que establecen el deber de nacionales y extranjeros de acatar la Constitución y las leyes, pues permiten que las partes en una relación contractual, sin ningún elemento que permita presumir que ella es de carácter internacional, puedan pactar el arbitraje de esta naturaleza, y por ende, la ley sustancial que se aplicará en caso de que se produzca una controversia, sustrayéndose así al deber constitucional de cumplir con la legislación colombiana.</p> <p>Sólo las controversias que involucren la aplicación de leyes de distintos Estados, son susceptibles de ser resueltas por un tribunal arbitral de carácter internacional, pero no aquellas donde la voluntad de las partes es la que determina la aplicación de una determinada ley internacional, sin existir razón objetiva para ello. Esto, además, desconoce el derecho a la igualdad, pues sólo aquellos que tienen los medios para asumir los costos de un tribunal de esta naturaleza, podrán pactar su conformación.</p> <p>El artículo 4º es inconstitucional, además, porque la contratación en donde el Estado es parte, debe sujetarse al principio de legalidad. Por tanto, no puede existir un contrato del Estado con un nacional al que no pueda aplicársele el estatuto general de contratación, por el sólo hecho de pactarse la cláusula de arbitramento de carácter internacional.</p> <p>Mientras no exista un elemento en la relación contractual que permita inferir que se está en presencia de un conflicto que involucra la aplicación de leyes de dos o más Estados, las partes están obligadas a solucionar sus diferencias según la ley interna. Por esta razón, el aparte acusado del artículo 4º desconoce, además, el artículo 150, numeral 25 de la Constitución, pues es el Congreso, y no las partes, el que establece las normas que han de regir la contratación estatal.</p> <p>El artículo 4º acusado, sería constitucional, en la medida en que se interprete que la cláusula arbitral de carácter internacional sólo puede pactarse cuando el contrato se va a ejecutar en el exterior, o si se cumple con alguno de los criterios que se señalan en el artículo 1º de la ley acusada, o si se prevé financiación a largo plazo por entidades de carácter internacional. Así mismo, sería constitucional pactar la constitución del tribunal internacional, pero sin que las partes puedan escoger la ley sustancial que habrá de aplicarse.</p>
------------------	---



Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>PRINCIPIO DE SOBERANIA POPULAR-Alcance/PRINCIPIO DE SOBERANIA POPULAR-Legislator no puede trasladar facultades normativas a autoridades extranjeras (Salvamento de voto)</p> <p>El ejercicio de la soberanía popular, significa, sobre todo, la capacidad exclusiva del pueblo colombiano, bien directamente, ora a través de los órganos constitucionalmente habilitados para ello, de hacer y aplicar el derecho, pues de esta manera se ejerce el poder de supraordenación consustancial a la condición de soberano. No obstante, mientras se mantenga el modelo constitucional, tal poder de mando se ejerce a través de los mecanismos de participación directa e indirecta que ha diseñado el constituyente y, en este último evento, se delega a los órganos que conforman el poder público, para que éstos lo ejerzan en los términos que la Constitución establece. Al amparo del principio de soberanía popular, puede afirmarse que la obligación de obedecer el derecho se deriva de la legitimidad constitucional que ostenta la fuente de la cual emana. En estas condiciones, no puede el legislador, so pena de violar la soberanía, trasladar, en todo o en parte, sus facultades normativas propias a otros órganos o entidades, nacionales o extranjeros, que no encuentran habilitación constitucional para producir derecho. En general, afecta la soberanía la norma infra-constitucional que traslada la competencia de crear, ejecutar o aplicar el derecho, a órganos distintos de los que han sido constitucionalmente facultados para ello, o aquella que vacía de contenido las competencias de las instituciones que integran el poder público y, en suma, la que dota a ciertas entidades de facultades de mando que corresponden directamente al pueblo o a los órganos públicos que emanan de la voluntad popular.</p> <p>ARBITRAJE INTERNACIONAL-Legislator convierte en facultativo ordenamiento jurídico mercantil/PREEMINENCIA A LIBERTAD CONTRACTUAL EN MATERIA MERCANTIL-Sometimiento a Tribunal de Arbitramento ubicado por fuera del domicilio/LIBERTAD CONTRACTUAL EN MATERIA MERCANTIL-Existencia de un interés público constitucional (Salvamento de voto)</p> <p>El legislador considero que era conveniente convertir en facultativo todo el ordenamiento jurídico mercantil, en el caso en el cual las partes de un negocio de esta naturaleza apelaran a un arbitraje con sede en un lugar distinto a aquél en el cual tienen su domicilio. En este evento, los contratantes quedan en plena libertad para pactar las leyes del contrato, las que serán obligatorias, no por provenir de uno u otro órgano, sino por virtud de su voluntad contractual. A través de las normas demandadas, el legislador no está cediendo, a otra autoridad, su facultad de hacer las leyes. Lo que en realidad</p>

	<p>sucede es que está adoptando, al amparo de la cláusula general de competencia, la decisión de otorgar preeminencia a la libertad contractual y, para ello, transforma ciertas normas de orden legal que tienden a la protección de otros bienes y valores, en facultativas, lo que, prima facie, no viola la Constitución. Ciertamente, en principio, nada en el texto fundamental permite afirmar que en ejercicio de sus facultades, le está proscrito al legislador "desregular" ciertos ámbitos o convertir en facultativas, normas que otrora tenían carácter de obligatorias. No obstante, debe preguntarse si puede el legislador proteger, de manera exclusiva, el derecho fundamental a la libertad en órbitas en las cuales, si bien hay un predominio de los intereses individuales, puede fácilmente identificarse la existencia de un interés público constitucional.</p> <p>ESTADO SOCIAL DE DERECHO-La libertad no es el único bien constitucional relevante en el ámbito mercantil/APLICACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA CONSTITUCION/NORMA FACULTATIVA-Excede las facultades del legislador por convertir en facultativos imperativos constitucionales (Salvamento de voto)</p> <p>So pretexto de ejercer las competencias que le son propias, no puede el legislador excluir de ciertos ámbitos constitucionalmente relevantes, la aplicación directa o indirecta de la Constitución. En efecto excede la competencia puramente legislativa y viola los artículos 4, 6 y 95 de la Carta, la decisión que pretende restar eficacia a la Constitución, bien por que impide su aplicación directa, ya porque somete a la autonomía de la voluntad, la aplicación de normas legales que garantizan la protección de valores, bienes y derechos constitucionales. En este sentido, puede afirmarse que convertir en facultativa, en forma indiscriminada, una parcela del ordenamiento jurídico que regula ámbitos constitucionalmente relevantes, equivale a convertir en facultativa la aplicación - directa o indirecta - de la Constitución, lo que a todas luces supera las facultades del legislador. En un Estado orientado por el principio de la autonomía de la voluntad, el ámbito de libertad negocial de las personas, en cuanto respecta a bienes transables, es apreciable. En estas materias, el derecho debe limitarse a regular aquellos aspectos que se consideran de interés constitucional y que, por lo tanto, no son internamente negociables o disponibles, pues garantizan los mínimos que se consideran indispensables para la promoción del orden justo de que trata el artículo 2° de la Carta. No obstante, las normas restantes, pueden ser libremente acordadas por las partes. Lo dicho hasta ahora, tampoco permite afirmar que deban expulsarse del sistema jurídico las normas facultativas. El hecho de que el ordenamiento sea obligatorio no implica, necesariamente que cada una de las normas que lo componen deba establecer una disposición imperativa. Por el contrario, son comunes y legítimas las normas facultativas que establecen "lo jurídicamente permitido". No obstante, excede las facultades del</p>
--	--

	<p>legislador, la decisión a través de la cual se convierten en facultativos los imperativos constitucionales o las disposiciones legales que garantizan que, en el tráfico jurídico privado, se respeten los valores, principios y derechos que la Carta consagra.</p> <p>PRINCIPIO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY EN MATERIA MERCANTIL-Carácter facultativo de normas con interés público constitucional sometida a las partes/LIBERTAD CONTRACTUAL-Ley no puede establecer zonas inmunes a la aplicación de restantes disposiciones constitucionales (Salvamento de voto)</p> <p>Lo que resulta francamente contrario al principio de aplicación territorial de la ley, es que todo el sistema de normas llamado a regular relaciones privadas respecto de las cuales, no obstante, existe un interés público constitucional -como las relaciones mercantiles- adquiera el carácter de facultativo, sometiendo su aplicación al libre albedrío de las partes. Ello equivale a admitir que el único interés público relevante en tales relaciones es el de proteger la libertad, olvidando los valores, principios y derechos constitucionales que han de ser garantizados por el legislador al reglamentar tales relaciones. En efecto, en nombre de la libertad contractual, la ley no puede establecer zonas inmunes a la aplicación directa o indirecta de las restantes disposiciones constitucionales, pues el legislador no está habilitado para restringir la fuerza normativa del derecho constitucional en aquellos espacios en los cuales, por su naturaleza y por los intereses en juego, ello resulta pertinente.</p> <p>PRINCIPIO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY-Excepción por asunto mercantil de carácter internacional/PRINCIPIO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY-No se vulnera por arbitramento internacional de negocios jurídicos mercantiles internacionales (Salvamento de voto)</p> <p>En tratándose de un asunto mercantil de carácter internacional, concurren, normalmente, dos o más ordenamientos jurídicos de estados soberanos e independientes, con igual derecho a regular el asunto. En estas condiciones, no existe una regla de preferencia que ordene resolver el conflicto de leyes a favor del ordenamiento colombiano, pues no puede predicarse de éste un "mejor derecho" de aquél que ostenta el ordenamiento extranjero, para imponerse a las partes al momento de resolver una eventual controversia. En estos eventos, admitir el desplazamiento de las leyes nacionales, no entraña renuncia a la soberanía. Simplemente se acepta que, no existiendo reglas unívocas para solucionar los eventuales conflictos que pueden originarse a raíz de negocios de naturaleza internacional, las partes definan, en uso de su autonomía, pero dentro de un marco predeterminado por el derecho interno e internacional, las reglas que habrán de aplicarse para solucionar tales controversias. Se trata, en suma, de aceptar una excepción al principio de aplicación territorial de la ley, en los eventos en los cuales se verifican elementos internacionales respecto de las</p>
--	--

	<p>personas, los bienes, las relaciones o los efectos de contratos mercantiles que, por esa misma circunstancia, pueden ser regulados por dos o más ordenamientos jurídicos. Se trata, simplemente, de aceptar que si bien la soberanía implica hacia adentro de las fronteras del Estado el poder de mandar sin excepción, hacia afuera, sólo se traduce en una garantía de independencia, pero de ninguna manera de superioridad. La figura del arbitramento internacional respecto de negocios jurídicos mercantiles de carácter internacional no viola el principio de aplicación territorial de la ley.</p> <p><b>ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL-Controversias mercantiles de carácter internacional (Salvamento de voto)</b></p> <p>El arbitraje comercial internacional como mecanismo de solución de controversias mercantiles de carácter internacional, encuentra fundamento en las normas constitucionales que patrocinan la internacionalización de las relaciones económicas. Ciertamente, para que este postulado constitucional resulte realmente efectivo, es necesario que el poder público reconozca la vigencia de los principios de derecho internacional privado en los cuales se funda la denominada “sociedad internacional de comerciantes”, uno de los cuales es la aceptación del arbitramento internacional para resolver aquellos conflictos de naturaleza comercial y de carácter internacional, respecto de los cuales existe un conflicto de leyes o de intereses de dos o más estados soberanos. La adopción de mecanismos diseñados por el derecho internacional privado para solucionar problemas propios de esta disciplina, en lugar de afectar la soberanía, responde a una urgente exigencia de principios constitucionales, como la seguridad jurídica y el fomento de la internacionalización de las relaciones comerciales. Existen razones constitucionales que justifican que el legislador habilite a las partes para someter un conflicto a arbitramento internacional, siempre que el respectivo conflicto se enmarque en el ordenamiento mercantil, se relacione con bienes transables y tenga carácter internacional.</p> <p><b>ARBITRAJE INTERNACIONAL-Inexistencia de elemento internacional por domicilio y negocio comercial en el país (Salvamento de voto)</b></p> <p>Personas domiciliadas en Colombia, que son parte de un negocio jurídico comercial, celebrado, ejecutado y liquidado en Colombia, que en nada afecta los intereses de otros estados ni compromete los intereses del comercio internacional, no reúnen las condiciones que justifican constitucionalmente el arbitramento internacional. En efecto, el conflicto que, en virtud de tales disposiciones, puede someterse a conocimiento de un arbitramento internacional y sustraerse de la aplicación de la ley y la Constitución colombiana, no tiene un elemento internacional a partir del cual pueda predicarse que necesariamente surgirá un conflicto de leyes o derivará amenaza para los intereses de dos o más estados o del comercio internacional.</p>
--	--

	<p>UNCITRAL-Objeto básico (Salvamento de voto)</p> <p>La UNCITRAL es una comisión de la Organización de las Naciones Unidas cuyo objeto básico consiste en proponer normas que unifiquen el derecho comercial internacional. De esta forma, esa comisión recoge las que, a su juicio, constituyen las tendencias más relevantes del derecho comercial internacional en torno a un punto específico, las plasma en un proyecto que las codifica y, luego, las somete a la consideración de la comunidad de naciones, recomendando su aprobación o incorporación a los respectivos derechos internos.</p> <p>PRINCIPIO GENERAL DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY-No puede quedar librado a la mera voluntad de particulares/ARBITRAJE INTERNACIONAL-Renuncia injustificada a protección de derechos de conformidad con legislación colombiana (Salvamento de voto)</p> <p>El sometimiento al principio general de territorialidad de la ley - entendiendo por esta expresión tanto al derecho legislado como al derecho constitucional -, en el cual se funda la propia existencia del ordenamiento jurídico colombiano, no puede quedar librado a la mera voluntad de los particulares, quienes, en virtud de una simple cláusula arbitral, podrían evadir el cumplimiento de la Constitución y las leyes que la desarrollan sin que exista una razón suficiente para ello. En este orden de ideas, debe afirmarse que la limitación del principio de territorialidad del ordenamiento jurídico colombiano, constituye, claramente, una excepción a la que puede recurrirse sólo en aquellos casos en los cuales existan situaciones que, en forma razonable, puedan ser contempladas por el derecho internacional. Adicionalmente, no sobra advertir que las normas estudiadas estarían autorizando a las partes de un contrato mercantil a renunciar al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico interno. Tal renuncia se justifica, entonces, en el caso de un conflicto de leyes, en el cual, el sujeto opta por la protección jurídica que le confiere otro ordenamiento, como único medio para solucionar problemas relativos a la seguridad sobre la norma aplicable. Sólo en circunstancias excepcionales como la descrita puede tolerarse una renuncia al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva de los derechos sustantivos que le confiere el ordenamiento colombiano. En suma, los pactos arbitrales, suscritos al amparo de las normas demandadas, implican un desconocimiento del principio constitucional de territorialidad de la ley - y la Constitución - y, en especial, una renuncia injustificada al derecho fundamental a la protección judicial de los derechos surgidos de conformidad con la legislación colombiana.</p> <p>CARACTER INTERNACIONAL DE UN CONTRATO-Nacionalidad de las partes no es condición suficiente para determinarlo (Salvamento de voto)</p> <p>No parece claro que el hecho de que una de las partes de un contrato mercantil tenga nacionalidad extranjera, implique, a su</p>
--	---

	turno, que el citado contrato adquiere carácter internacional. A la luz de todos los criterios que han sido acogidos por la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional, definitivamente puede afirmarse que, a diferencia del domicilio, la nacionalidad de las partes no es una condición suficiente para determinar el carácter internacional de un contrato. Sin embargo, nada obsta para que la Corte proponga innovaciones jurídicas que pueden resultar más o menos sugestivas, para lo cual la propuesta deberá, por lo menos, justificarse adecuadamente en los motivos de la providencia.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-218/97
Fecha de la sentencia	veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Referencia: Expediente LAT-090 Revisión constitucional del la Ley 316 del 13 de septiembre de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Interpretativo del artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980".
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Decláranse EXEQUIBLES el "Protocolo interpretativo del artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980", hecho en la ciudad de Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994, y la Ley 316 del 13 de septiembre de 1996, que lo aprueba.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Referencia: Expediente LAT-090 Revisión constitucional del la Ley 316 del 13 de septiembre de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Interpretativo del artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA

Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
-----------------------------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-251/97
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional del Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, y de la Ley aprobatoria No. 319 del 20 de septiembre de 1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 319 del 20 de septiembre de 1996, por medio de la cual se aprueba el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-280/97
Fecha de la sentencia	cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisiòn oficiosa de la Ley 320 de septiembre 20 de 1996 "Por medio de la cual se somete: el "Convenio 174 sobre la prevenciòn de accidentes industriales mayores" y la "Recomendaciòn 181 sobre la prevenciòn de accidentes industriales mayores, adoptados en la 80a. Reuniòn de la Conferencia General de la Organizaciòn Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993."
Conociò en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Primero. Declàranse EXEQUIBLES el Convenio 174 "sobre la prevenciòn de accidentes industriales mayores", y la Recomendaciòn 181 "sobre la prevenciòn de accidentes industriales mayores", adoptados en la 80a. Reuniòn de la Conferencia General de la Organizaciòn Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993, así como de su ley aprobatoria No. 320 de 1996.
Conociò en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-231/97
Fecha de la sentencia	mayo quince (15) de mil novecientos noventa y siete (1997)



Demandante	
Demandado	Revisión de la Ley 323 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996".
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el 'Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)", suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996, y la Ley 323 de 1996 por medio de la cual se aprueba el protocolo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de la Ley 323 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-379/97
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 327 del 4 de diciembre de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en la ciudad de Puerto España, el 17 de agosto de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Decision	Primero.- Declárase EXEQUIBLE el "Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Puerto España el 17 de agosto de 1995, y la Ley 327 del 4 de diciembre de 1996, que lo aprueba.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de constitucionalidad de la Ley 327 del 4 de diciembre de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en la ciudad de Puerto España, el 17 de agosto de 1995.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-402/97
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Luis Antonio Vargas Alvarez
Demandado	Norma acusada: Artículo 40 de la Ley 331 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 40 de la Ley 331 de 1996, bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. Segundo: Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 331 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA

Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que la norma demandada viola los artículos 1º, 2º, 13, 209, 228, 229, 230, 346 y 351 de la Constitución Política. Según su criterio, esa disposición contradice la consagración de Colombia como un Estado Social de Derecho pues permite a las autoridades incumplir sus obligaciones, ya que la prohibición de que “se puedan llevar a cabo medidas cautelares, indica claramente que cualquier acción judicial es inocua” frente al Estado. De esa manera, la inembargabilidad presupuestal vulnera la igualdad “puesto que se constituye en un claro inconveniente para hacer efectivo el pago de las obligaciones pecuniarias del Estado”. Concluye entonces al respecto el actor :</p> <p>Los acreedores del Estado, ya sea en virtud de actos administrativos a los cuales no se les ha dado cumplimiento - y se presentan infinidad de casos de esta naturaleza -, ya lo sea en razón de sentencias en firme, están en precarias condiciones, con respecto a los acreedores de personas naturales, o de personas jurídicas de derecho privado, para quienes sí operan las medidas precautelativas. Podría decirse que la norma acusada, cierra el caso a toda posibilidad de obtener el pago de obligaciones adquiridas. Esta situación es aún más inequitativa con los créditos laborales, pues “si el derecho al trabajo, es un derecho fundamental, no existe razón ni derecho para que se autorice al Estado el incumplimiento de sus obligaciones laborales a través de la puerta que se cierra a la ejecución de las obligaciones laborales”.</p> <p>De otro lado, según el demandante la disposición acusada también vulnera la independencia de la administración de justicia ya que subordina a los jueces a los criterios del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría, que “se convierten en jueces de los jueces”. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que los funcionarios judiciales terminarían por “responder patrimonialmente por aplicar los códigos que consagran las medidas cautelares”.</p> <p>Por todo lo anterior, el actor concluye que una norma como la acusada “sería aceptable, en gracia de discusión, si el Estado fuera buen pagador, o si la administración no fuera tramposa en el cumplimiento de sus obligaciones”. Sin embargo, según su criterio, ése no es el caso, pues “no existe justificación de ninguna naturaleza para que el Estado, que después de ejecutoriado un fallo tiene 18 meses para pagar de acuerdo al Código Contencioso Administrativo, transcurrido dicho término, que se presume se le ha dado para finiquitar todos los procedimientos requeridos, pueda burlar el incumplimiento de sus obligaciones amparado en el principio de la inembargabilidad”. Por ello el actor también cuestiona que la ley de presupuesto guarde silencio respecto de la negligencia de los ordenadores del gasto o pagadores que incumplan las obligaciones adquiridas por la administración, lo que en su entender está autorizando el desconocimiento de los</p>

	principios constitucionales que orientan el desarrollo de la función administrativa.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-409/97
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Pedro Pablo Camargo, Edgar Augusto Moreno Blanco Y Mauricio Galarza Jaramillo.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 333 del 19 de diciembre de 1996, "por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita".
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE el texto íntegro de la Ley 333 de 1996, "Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita", respecto del cargo genérico formulado sobre posible violación del derecho de propiedad y de la garantía de no ser afectado por confiscación.</p> <p>Segundo.- La Corte se declara INHIBIDA para proferir fallo de mérito sobre el artículo 10 -incisos 2 y 3- de la Ley 333 de 1996, por ineptitud sustancial de la demanda.</p> <p>Tercero.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 8 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Cuarto.- Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 14 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Quinto.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, en relación con los artículos 1, 2, 5, 6, 9, 10 - inciso 1- y 33 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Sexto.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, en relación con la parte, de nuevo demandada, del artículo 7 de la Ley 333 de 1996 que dice: "Artículo</p>

	<p>7º. De la Naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes ..."</p> <p>Decláranse EXEQUIBLES, por las mismas razones expuestas en dicho fallo y en el presente, las palabras "independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido", ahora acusadas, pertenecientes al mismo artículo.</p> <p>Séptimo.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 31 de la Ley 333 de 1996.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano PEDRO PABLO CAMARGO solicita que se declare la inconstitucionalidad total de la Ley 333 de 1996, o en su defecto la de los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14 y 33, inciso 3, pues considera que vulnera disposiciones constitucionales y pactos internacionales, entre ellos el de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos (expediente D-1582).</p> <p>Afirma que la ley deberá ser declarada inconstitucional en su totalidad, toda vez que restringe, limita y menoscaba el derecho fundamental a la propiedad privada y garantías constitucionales como la prohibición de la pena de confiscación, el principio según el cual la pena no debe trascender de la persona del delincuente, el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos y la prohibición de aplicar retroactivamente las leyes, según lo dispuesto en el texto constitucional y en los pactos internacionales.</p> <p>En su criterio, el artículo primero del texto demandado denomina a la confiscación "extinción del dominio", vulnerando lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 34 de la Constitución Política, que sí prevé esta figura. Considera que se modificó la Constitución, violando el procedimiento contemplado en los artículos 374 y 375, al tiempo que se confundió la confiscación prohibida en el artículo 34 con el comiso, institución consagrada en el artículo 110 del Código Penal. Igualmente considera que los artículos primero y segundo demandados vulneran el artículo 58 de la Constitución Política.</p> <p>Así mismo, el artículo quinto demandado, transgrede, según el actor, los artículos 34 y 58 de la Carta Política, ya que impone la pena de confiscación a los herederos del de cujus y por ende en ellos recaería la acción penal, que no se extinguiría por la muerte de aquél, lo cual desconoce los derechos adquiridos con arreglo a la sucesión por causa de muerte contemplada en el Código Civil. Tal situación, en su criterio, contraría los derechos fundamentales de la familia y del menor.</p> <p>En relación con el artículo 7 de la Ley 333 de 1996, considera que el</p>

	<p>legislador confundió la naturaleza de la acción, al otorgar el carácter de jurisdiccional y real a un asunto que, en su opinión, corresponde a una típica acción penal y personal, cuya titularidad es del Estado, quien la ejerce a través de la Fiscalía General de la Nación.</p> <p>Cuestiona la legitimación otorgada a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para ejercer la acción de extinción del dominio prevista en el artículo 8 de la Ley demandada, pues considera que tales instituciones no ejercen funciones jurisdiccionales, por mandato expreso del artículo 116 de la Constitución Política. Ahora bien, en cuanto a la misma facultad otorgada a las entidades o autoridades extranjeras u organismos internacionales, afirma que éstas no pueden cumplir tareas jurisdiccionales dentro del Estado colombiano, toda vez que estarían violando la soberanía nacional, garantizada en el artículo noveno del texto constitucional.</p> <p>En relación con el tema de la prescripción, desarrollado por el artículo 9 demandado, sostiene que modificó lo dispuesto en el Código Civil en sus preceptos 2529 y 2531.</p> <p>Manifiesta que, al disponer el artículo 10 de la Ley demandada que "la acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones penales", se viola el artículo 29 de la Constitución Política, que garantiza a toda persona el derecho fundamental a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho.</p> <p>En opinión del demandante, la competencia prevista en el artículo octavo de la Ley vulnera el principio non bis in idem, ya que el juez competente para declarar la extinción del dominio tiene que ser necesariamente el mismo que dictó la sentencia por el delito de enriquecimiento ilícito.</p> <p>Por último, sostiene que el inciso segundo del artículo 33 de la Ley 333 de 1996 constituye una modificación a lo dispuesto en el 58 de la Carta Política, para lo cual el legislador debió someterse al procedimiento reformativo contemplado en ésta. Así mismo, concluye que se establece una pena perpetua al consagrar que la adquisición ilícita de bienes es una conducta con efectos permanentes.</p> <p>El ciudadano EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO solicita se declare inconstitucional por su contenido material el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 333 de 1996, por considerarlo contrarios a las disposiciones de los artículos 4, 29, 34, 58, 83, 91, 114 y 374 de la Constitución Política (expediente D-1588).</p> <p>Afirmar que la Carta en su artículo 34 inciso 2, se limita a señalar que se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, pero en ningún caso señala a los servidores públicos como sujetos activos del hecho punible. Por lo tanto, concluye, mal puede la Ley 333 disponerlo, pues estaría</p>
--	---

	<p>reformando la Constitución Política.</p> <p>Por su parte, MAURICIO GALARZA JARAMILLO, pretende que se declare inexecutable el artículo 6, alegando que vulnera lo dispuesto en los artículos 34 y 58 de la Constitución Política. Considera que es necesario establecer el límite entre lo sano y lo proveniente de actividades prohibidas. Afirma que mal podrían los particulares soportar la deficiente actividad del Estado, si éste incautara, ubicara o aprehendiera bienes que sí pudieron ser adquiridos válidamente, con arreglo a las leyes civiles, y sin el lastre y sustento del enriquecimiento ilícito, perjudicándose de esta manera a terceros de buena fe (expediente D-1612).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JORGE ARANGO MEJIA</p> <p>Por las mismas razones expuestas en el salvamento de voto a la sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, salvo parcialmente mi voto en relación con lo decidido en esta oportunidad, exceptuando únicamente la declaración de inexecutable del artículo 31 de la ley 333 de 1996, inexecutable que propuse y con la cual estuvieron de acuerdo todos los magistrados.</p> <p>SI DRES. CARLOS GAVIRIA DIAZ, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO</p> <p>Dado que los suscritos magistrados salvamos el voto en el proceso que culminó con la sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, que resolvió la demanda presentada por distintos ciudadanos contra varios preceptos de la ley 333 de 1996 "por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita", entre otras razones, por considerar que la extinción del dominio es una pena por la comisión de delitos y, por tanto, no puede ser retroactiva ni independiente del proceso penal, consideramos que estos mismos argumentos unidos a los demás allí expuestos, son aplicables al caso que en esta oportunidad se decide y a ellos nos remitimos.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-374/97
Fecha de la sentencia	trece (13) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Luis Antonio Vargas Alvarez, Jorge E. Peñuela García, Ramiro Basili Colmenares Sayago, Carlos Enrique Martínez Palacio, Jose Gustavo Villamizar Santacruz, Marlon Yovanni Colmenares Velosa, Andrés

	De Zubiria Samper, Jose Luis Roys Aguilar, Soledad Arias Ramírez, Gustavo Salazar Pineda, Jose William Gonzalez Zuluaga, Franky Urrego Ortiz, Pedro Pablo Camargo, German Navarro Palau, Raul Duarte Fajardo
Demandado	Demandas de inconstitucionalidad instauradas contra la Ley 333 de 1996, "Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita".
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE la Ley 333 de 1996, "por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita", en cuanto no se configuraron los vicios de procedimiento alegados.</p> <p>Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta Sentencia, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 10, inciso 1, 21 (parágrafo), 24 y 32 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Tercero.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 3 de la Ley 333 de 1996, excepto las expresiones "con excepción de los derechos personalísimos", que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Cuarto.- Decláranse EXEQUIBLES los siguientes apartes del artículo 7 de la Ley 333 de 1996:</p> <p>" Artículo 7º. De la Naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes (...)</p> <p>Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.</p> <p>(...)"</p> <p>Quinto.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 9 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Sexto.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 33 de la Ley 333 de 1996, excepto la expresión "siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9º de esta Ley", perteneciente a su inciso 2, que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Primero.- Corregir el numeral segundo de la parte resolutive de la Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, que debe leerse así:</p> <p>"Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta Sentencia, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 10, inciso 1, 21 (parágrafo) y 24 de la Ley 333 de 1996".</p>



	<p>Segundo.- Adicionar la parte resolutive de la Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997 así:</p> <p>"Séptimo.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 333 de 1996".</p> <p>Tercero.- Para todos los efectos, este Auto se entenderá incorporado y deberá acompañar la Sentencia número C-374 del 13 de agosto de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los ciudadanos PEDRO PABLO CAMARGO, GERMAN NAVARRO PALAU y RAUL DUARTE FAJARDO solicitan a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la Ley 333 de 1996 por existir vicios de forma y por violar los artículos 152, 153, 157, 163 y 169 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que no se le dio el trámite de ley estatutaria, que era obligatorio, ya que regula derechos fundamentales como la propiedad privada y la prohibición de la confiscación (artículos 58 y 34 C.P.). Así mismo -aseguran-, se le cambió el nombre al proyecto de ley, que inicialmente decía "por la cual se desarrollan los artículos 34 y 58 de la Constitución Política en materia de extinción del dominio", dejando el actual, que no corresponde al contenido material de ella.</p> <p>Afirman que la Comisión Primera del Senado votó a favor de que el trámite de la ley fuera el de estatutaria, mientras que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votó en el sentido de que se hiciera como ley ordinaria, pero dichas decisiones fueron por simple mayoría y no por mayoría absoluta.</p> <p>Por último, manifiestan que el Gobierno solicitó trámite de urgencia para la mencionada ley y pasados los 30 días establecidos en el artículo 163 constitucional, ésta no se aprobó en primer debate (expediente D-1571).</p> <p>El ciudadano GUSTAVO SALAZAR PINEDA demanda la totalidad de la Ley 333 de 1996, argumentando que es ambigua, inocua y superflua, además de que atenta contra el principio de la irretroactividad de la ley, cuya única excepción es la favorabilidad para el acusado, y desconoce los derechos de terceros de buena fe (expediente D-1562).</p> <p>El ciudadano LUIS ANTONIO VARGAS ALVAREZ solicita la inconstitucionalidad de los siguientes artículos de la Ley, por considerarlos contrarios a los cánones 1, 13, 22, 29, 34, 95, 230 y 380 constitucionales (se subraya lo demandado):</p> <p>"Artículo 2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades son:</p>

	<p>1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.</p> <p>2. Perjuicio del Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.</p> <p>3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de (sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferro, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.</p> <p>4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del proceso penal mediante providencia en firme.</p> <p>5. También procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.(...)</p> <p>Artículo 4º. De los bienes adquiridos por acto entre vivos. Tratándose de bienes transferidos por acto entre vivos, procederá la extinción del dominio cuando un tradente los haya adquirido en los casos contemplados en el artículo 2º y los adquirentes hubieren actuado con dolo o culpa grave respecto del conocimiento de las causales allí contempladas.</p> <p>En los casos en que se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia que alguna de las causales señaladas en el artículo 2º sea predicable del encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren actuado con dolo o culpa grave.</p> <p>Las disposiciones de esta Ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las profesiones liberales.(...)</p> <p>Artículo 6º. De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento de la sentencia</p>
--	---

	<p>podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.</p> <p>Parágrafo. Antes de la sentencia de primera instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes equivalentes.(...)</p> <p>Artículo 21. De la sentencia. Si la sentencia declara la extinción del dominio, ordenará la cancelación de las limitaciones, desmembraciones, gravámenes, embargos e inmovilizaciones e inscripciones que recaigan sobre los bienes y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el Estado.</p> <p>Cuando los bienes objeto de extinción se encuentren gravados con prenda, hipoteca o recaiga sobre éstos algún otro derecho real accesorio distinto del dominio o medida cautelar de embargo o secuestro decretado por autoridad competente y debidamente inscrito con fecha anterior al decreto de medida preventiva o de suspensión del poder dispositivo dentro del proceso de extinción, la sentencia se pronunciará respecto de la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los títulos y derechos de conformidad con las disposiciones civiles y establecidas en la presente Ley.</p> <p>Si la sentencia declara la ilicitud o ineficacia de los títulos y derechos de que trata el inciso anterior, decretará igualmente su extinción y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el Estado.</p> <p>En caso contrario, se decretará la venta en pública subasta conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil y con su producto se pagarán las acreencias correspondientes. Los remanentes corresponderán al Estado en los términos de la presente Ley.</p> <p>Los titulares de los derechos contemplados en esta norma deberán comparecer al proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley. Quienes tengan legitimación para concurrir al proceso podrán impugnar la eficacia y licitud de los títulos y derechos a que se refiere este precepto.</p> <p>Parágrafo. También procederá la extinción del dominio sobre bienes equivalentes, en el evento de que el Estado tuviere que reconocer a un tercero el derecho que se hubiere probado en el proceso, respecto del cual se haya establecido limitación, gravamen o desmembración, embargo, registro de demanda, inmovilización e inscripción sobre los bienes materia del proceso.(...)</p> <p>Artículo 32. Protección a la vivienda familiar. Sin perjuicio de disposición legal en contrario, la acción de extinción de dominio no procederá respecto del bien inmueble amparado por el régimen de patrimonio de familia inembargable, o sobre bien afectado a vivienda familiar, siempre y cuando dicho bien sea el único inmueble en cabeza de su titular y su valor no exceda de quinientos salarios mínimos legales mensuales al momento de la declaración</p>
--	---

	<p>de extinción.</p> <p>Artículo 33. De la vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.</p> <p>No obstante, la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9º de esta Ley.</p> <p>En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes".</p> <p>Manifiesta el actor que, de acuerdo con el artículo 29 de la Carta, la ley penal no puede ser retroactiva, principio que se violó con la Ley 333 de 1996, que es de carácter eminentemente penal, y no garantiza la seguridad jurídica.</p> <p>En cuanto al artículo 2, afirma que es contradictorio y absurdo, confunde la obligación de reparar con la figura de extinción del dominio y se incluyen delitos que "autónomamente no generan incremento patrimonial". Respecto de éstos manifiesta que en caso de probarse la responsabilidad penal en cuanto a su comisión, habría lugar a la acción civil, bien tramitada en forma independiente o dentro del proceso penal, con el fin de obligar al responsable a la reparación por los perjuicios ocasionados. Lo que se trató de hacer en este caso -agrega-, fue disfrazar la confiscación bajo el nombre de extinción del dominio, estando la primera figura erradicada de nuestro ordenamiento jurídico.</p> <p>Es igualmente ilógico, a su juicio, que los delitos políticos se equiparen a los delitos comunes, pues los primeros se caracterizan por el altruismo y por la ausencia de la búsqueda de beneficio propio. Ello genera -según su argumento- que quienes se encuentren descontentos deban expresarse de manera diferente, so pena de verse inmersos como sujetos pasivos de la acción de extinción del dominio. De otro lado y en cuanto al numeral 4 de la misma norma, aduce que se crea una confusión para los jueces sobre la forma de castigar el crimen y se torna inaplicable, porque se está dejando por fuera de la acción de extinción del dominio a aquéllos bienes objeto de comiso o incautación, que son las figuras que debían haber continuado vigentes.</p> <p>Respecto del artículo 4 demandado, manifiesta el actor que los hechos culposos se están equiparando a los dolosos, violando el artículo 34 constitucional. Los primeros -dice- no son manifestación de mala fe, sino que corresponden a una actuación negligente o imprudente, que ni siquiera en los delitos de narcotráfico se consagran en la modalidad culposa.</p>
--	---

	<p>Afirma, además, que lo que da origen a la extinción del dominio es lo relativo a los bienes de mala procedencia y es absurdo que, si el Estado no puede demostrar que los bienes de determinada persona tienen ese carácter, se deba acudir a la confiscación de los bienes legítimamente adquiridos, o que se obtuvieron en forma lícita, con el fruto de su trabajo, o como producto de una herencia recibida. Los mismos argumentos son utilizados por el demandante para atacar el artículo 21, agregando que si existen derechos de terceros, una vez reconocidos, éstos pueden ejercer las acciones pertinentes.</p> <p>Sobre la solicitada inconstitucionalidad del artículo 32, argumenta que en un Estado Social de Derecho donde se pregona la igualdad, el marco jurídico y la prevalencia del interés general, resulta a todas luces inadmisibles y contrario al artículo 13 C.P. que aquellos bienes que favorecen a la familia no sean objeto de la medida consagrada en la Ley 333 de 1996, además de que ello daría lugar a que bienes adquiridos ilícitamente, se legitimen, con el único objeto de que no fueren confiscados.</p> <p>En lo atinente al artículo 33, el actor expresa que no puede considerarse que la adquisición de un bien sea un delito autónomo de carácter permanente, dando lugar a la imprescriptibilidad de la acción de extinción del dominio. Igualmente, al establecerse el carácter retroactivo de la ley, se viola el debido proceso y se desconocen los derechos que tienen los antisociales (expediente D-1551).</p> <p>Los ciudadanos JOSE WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA y FRANKY URREGO ORTIZ demandan la inconstitucionalidad de los siguientes artículos (se subraya lo demandado):</p> <p>"Artículo 6º. De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.</p> <p>Parágrafo. Antes de la sentencia de primera instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes equivalentes.(...)</p> <p>Artículo 21. De la sentencia. Si la sentencia declara la extinción del dominio, ordenará la cancelación de las limitaciones, desmembraciones, gravámenes, embargos e inmovilizaciones e inscripciones que recaigan sobre los bienes y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el Estado.</p> <p>Cuando los bienes objeto de extinción se encuentren gravados con prenda, hipoteca o recaiga sobre éstos algún otro derecho real accesorio distinto del dominio o medida cautelar de embargo o secuestro decretado por autoridad competente y debidamente inscrito con fecha anterior al decreto de medida preventiva o de</p>
--	--

	<p>suspensión del poder dispositivo dentro del proceso de extinción, la sentencia se pronunciará respecto de la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los títulos y derechos de conformidad con las disposiciones civiles y establecidas en la presente Ley.</p> <p>Si la sentencia declara la ilicitud o ineficacia de los títulos y derechos de que trata el inciso anterior, decretará igualmente su extinción y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el Estado.</p> <p>En caso contrario, se decretará la venta en pública subasta conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil y con su producto se pagarán las acreencias correspondientes. Los remanentes corresponderán al Estado en los términos de la presente Ley.</p> <p>Los titulares de los derechos contemplados en esta norma deberán comparecer al proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley. Quienes tengan legitimación para concurrir al proceso podrán impugnar la eficacia y licitud de los títulos y derechos a que se refiere este precepto.</p> <p>Parágrafo. También procederá la extinción del dominio sobre bienes equivalentes, en el evento de que el Estado tuviere que reconocer a un tercero el derecho que se hubiere probado en el proceso, respecto del cual se haya establecido limitación, gravamen o desmembración, embargo, registro de demanda, inmovilización e inscripción sobre los bienes materia del proceso.(...)</p> <p>Artículo 32. Protección a la vivienda familiar. Sin perjuicio de disposición legal en contrario, la acción de extinción de dominio no procederá respecto del bien inmueble amparado por el régimen de patrimonio de familia inembargable, o sobre bien afectado a vivienda familiar, siempre y cuando dicho bien sea el único inmueble en cabeza de su titular y su valor no exceda de quinientos salarios mínimos legales mensuales al momento de la declaración de extinción.</p> <p>Artículo 33. De la vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.</p> <p>No obstante, la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9º de esta Ley.</p> <p>En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes".</p> <p>A juicio de los actores, las disposiciones atacadas infringen los artículos 5, 13, 16, 29, 42, 58 y 83 de la Constitución. Los</p>
--	---

	<p>argumentos son similares a los expuestos en la demanda incluida en el expediente D-1551.</p> <p>En cuanto al aparte demandado del artículo 32, exponen que la garantía al patrimonio de familia inembargable no puede ser limitado a una suma específica de dinero. Con dicho precepto se viola el principio de la igualdad, por cuanto "sería hacer una legislación para los pobres y otra para los ricos" (expediente D-1568).</p> <p>El ciudadano JORGE E. PEÑUELA GARCIA demanda la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley 333 de 1996 (se subraya lo demandado):</p> <p>"Artículo 33. De la vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.</p> <p>No obstante, la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9º de esta Ley.</p> <p>En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes".</p> <p>Considera el actor que con esta disposición se violan los artículos 4, 28 y 29 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que no pueden existir penas ni medidas de seguridad imprescriptibles. De igual forma, se presenta una contradicción respecto de su vigencia, entre el inciso primero y el segundo, en tanto que inicialmente se dice que la Ley rige a partir de su promulgación, es decir el 23 de diciembre de 1996 y posteriormente se la quiere aplicar en forma retroactiva.</p> <p>La Ley 333 de 1996, a su juicio, no sólo adolece de falta de técnica jurídica, sino que además es inconveniente por cuanto las conductas allí señaladas ya están tipificadas en nuestro ordenamiento penal, artículo 340, que desarrolla el artículo 34 de la Carta (expediente D-1553).</p> <p>Los ciudadanos PEDRO PABLO CAMARGO, GERMAN NAVARRO PALAU y RAUL DUARTE FAJARDO, solicitan se declare inexecutable el artículo 33 de la mencionada Ley (se subraya lo demandado):</p> <p>"Artículo 33. De la vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.</p> <p>No obstante, la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que dicha</p>
--	---

	<p>adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9º de esta Ley.</p> <p>En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes".</p> <p>Según concepto de los actores, la norma demandada viola los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Manifiestan que la irretroactividad de la ley se predica no sólo en materia penal, sino también en las demás ramas del Derecho (expediente D-1570).</p> <p>El ciudadano ANDRES DE ZUBIRIA SAMPER solicita la inconstitucionalidad de las siguientes normas, por considerarlas contrarias de los artículos 29, 83, 228 y 230 de la Carta Política (se subraya lo demandado):</p> <p>"Artículo 2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.</li> <li>2. Perjuicio del Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.</li> <li>3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de (sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferro, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.</li> <li>4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del</li> </ol>
--	---



	<p>proceso penal mediante providencia en firme.</p> <p>5. También procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.(...)</p> <p>Artículo 7º. De la Naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo (sic) tenga su poder o lo (sic) haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.</p> <p>Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.</p> <p>Si terminado el proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente.(...)</p> <p>Artículo 24. De la suspensión del poder dispositivo. Desde la providencia que ordena el trámite de extinción, no podrá adquirirse ni transferirse el dominio de los bienes provenientes de actividades ilícitas, ni constituirse derecho alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio jurídico alguno respecto de éstos, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.</p> <p>(...)</p> <p>Artículo 33. De la vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.</p> <p>No obstante, la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9º de esta Ley.</p> <p>En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes".</p> <p>Expone el actor que, con las disposiciones acusadas, se está aboliendo el concepto jurídico de los delitos políticos, al equiparárselos a los comunes, teniendo aquéllos fines distintos a los segundos. Así mismo, se están desconociendo los principios generales del Derecho Penal y Procesal Penal, al señalarse que la</p>
--	---

	<p>Ley 333 tiene efectos retroactivos. En cuanto al artículo 7, también demandado, aduce que genera serias dudas, pues no se sabe si el proceso penal y el de extinción del dominio son independientes o dependientes el uno del otro. Si es de naturaleza real, se pregunta el demandante, por qué no se le otorga la competencia a los jueces civiles y no a los penales. Dice que se modifica aquel enunciado del Código Penal vigente desde 1980, que expresa que la muerte del sujeto activo genera la extinción de la acción penal.</p> <p>Por último, manifiesta que la Ley impugnada, al invertir la carga de la prueba, presume la mala fe, contrariando lo dispuesto por el artículo 83 de la Carta. (expediente D-1556).</p> <p>El ciudadano JOSE LUIS ROYS AGUILAR demanda por inconstitucionales los siguientes artículos (se subraya lo demandado):</p> <p>"Artículo 2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.</li> <li>2. Perjuicio del Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.</li> <li>3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de (sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.</li> <li>4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del proceso penal mediante providencia en firme.</li> <li>5. También procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.(...)</li> </ol> <p>Artículo 33. De la vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su</p>
--	--

	<p>promulgación.</p> <p>No obstante, la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9º de esta Ley.</p> <p>En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes".</p> <p>Manifiesta el actor que las disposiciones demandadas contrarían el principio constitucional de la irretroactividad de la ley, desconocen los derechos adquiridos, y violan el artículo 13 de la Carta, por cuanto únicamente se refieren a algunos delitos y no a todos los contemplados en la ley penal (expediente D-1559).</p> <p>Los ciudadanos RAMIRO BASILI COLMENARES SAYAGO, CARLOS ENRIQUE MARTINEZ PALACIO, JOSE GUSTAVO VILLAMIZAR SANTACRUZ y MARLON YOVANNI COLMENARES VELOSA, presentan demanda contra la totalidad de los artículos que a continuación se transcriben:</p> <p>"Artículo 1º. Del concepto. Para los efectos de esta Ley, se entiende por extinción del dominio la pérdida de este derecho en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.</p> <p>Artículo 2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.</li> <li>2. Perjuicio del Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.</li> <li>3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de (sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferro, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos</li> </ol>
--	--

	<p>contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.</p> <p>4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del proceso penal mediante providencia en firme.</p> <p>5. También procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.</p> <p>Artículo 3º. De los bienes. Para los efectos de esta Ley se entenderá por bienes susceptibles de extinción del dominio todo derecho o bien mueble o inmueble, con excepción de los derechos personalísimos.</p> <p>La extinción del dominio también se declarará sobre el producto de los bienes adquiridos en las circunstancias de que trata esta Ley, los derivados de éstos, sus frutos, sus rendimientos, y sobre los recursos provenientes de la enajenación o permuta de bienes adquiridos ilícitamente o destinados a actividades delictivas o considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. Cuando se mezclen bienes de ilícita procedencia con bienes adquiridos lícitamente, la extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito.</p> <p>Artículo 4º. De los bienes adquiridos por acto entre vivos. Tratándose de bienes transferidos por acto entre vivos, procederá la extinción del dominio cuando un tradente los haya adquirido en los casos contemplados en el artículo 2º y los adquirentes hubieren actuado con dolo o culpa grave respecto del conocimiento de las causales allí contempladas.</p> <p>En los casos en que se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia que alguna de las causales señaladas en el artículo 2º sea predicable del encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren actuado con dolo o culpa grave.</p> <p>Las disposiciones de esta Ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las profesiones liberales.</p> <p>Artículo 5º. De los bienes adquiridos por causa de muerte. Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, cuando dichos bienes hayan sido adquiridos por el causante en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 2º de la presente Ley.</p>
--	--

	<p>En el evento de haberse efectuado la partición y realizado el pago del impuesto por el adjudicatario, así como la ganancia ocasional si la hubiere, el Estado deberá devolverlos para que sea procedente la ejecución de la sentencia.</p> <p>Artículo 6º. De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.</p> <p>Parágrafo. Antes de la sentencia de primera instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes equivalentes".</p> <p>Respecto de las disposiciones acusadas, manifiestan los demandantes que vulneran el artículo 34 de la Constitución Política, al establecer la pena de confiscación, que atenta arbitrariamente contra la propiedad privada, la cual es inviolable de acuerdo con el artículo 58 constitucional. El legislador ordinario al dictar esta ley y determinar como causales de extinción del dominio otras distintas al enriquecimiento ilícito, desconoció la Carta que "estableció como única excepción al principio de la pena de confiscación, sabiamente, la extinción del dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social, declarándose mediante sentencia judicial".</p> <p>Los artículos 4, 5 y 6 de la Ley demandada violan también el artículo 83 de la Carta Política, pues a quienes se quiere castigar es a los responsables del delito de enriquecimiento ilícito y no a los adquirentes, herederos y terceros, presumiéndose su mala fe (expediente D-1554).</p> <p>La ciudadana SOLEDAD ARIAS RAMIREZ presenta demanda de inconstitucionalidad contra los artículos siguientes (se subraya lo demandado):</p> <p>"Artículo 2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.</li> <li>2. Perjuicio del Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado;</li> </ol>
--	---

	<p>utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.</p> <p>3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de (sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferro, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.</p> <p>4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del proceso penal mediante providencia en firme.</p> <p>5. También procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.(...)</p> <p>Artículo 6º. De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.</p> <p>Parágrafo. Antes de la sentencia de primera instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes equivalentes.</p> <p>Artículo 7º. De la Naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo (sic) tenga su poder o lo (sic) haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.</p> <p>Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.</p> <p>Si terminado el proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente</p> <p>Artículo 10. De la autonomía. La acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y</p>
--	---

	<p>complementaria de las actuaciones penales.</p> <p>La declaración de extinción del dominio corresponderá a los jueces competentes para conocer de las actuaciones penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte. Por las demás causales, dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta independencia de la actuación penal.</p> <p>La providencia que declare la ilicitud de la adquisición del dominio de los bienes en un proceso penal y la sentencia condenatoria que así lo establezca constituye prueba de la ilícita procedencia de los bienes.(...)</p> <p>Artículo 33. De la vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.</p> <p>No obstante, la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9º de esta Ley.</p> <p>En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes".</p> <p>A su juicio, los artículos 7 y 10 acusados violan los cánones 29 y 34 de la Constitución, pues el último precepto enunciado consagra únicamente un tipo de acción, entendida ésta "como la facultad de dar el primer impulso a la actividad jurisdiccional"; la acción civil resarcitoria es solamente una pretensión de carácter patrimonial, de tal forma que no se puede hablar de una acción de carácter real. La extinción del dominio consagrada en el artículo 34 ibídem, requiere previamente que la conducta delictiva esté demostrada y exista una sentencia condenatoria. "Por lo tanto -aduce la demandante- es abiertamente inconstitucional el cambiar de naturaleza la extinción del dominio y darle un carácter de acción real". Manifiesta que no se entiende cómo se puede extinguir el dominio sobre unos bienes, si previamente no se ha demostrado la adquisición ilícita de los mismos y no se ha dictado la sentencia condenatoria respectiva.</p> <p>Dice la demandante que el título de la Ley 333 se refiere a los bienes adquiridos en forma ilícita (artículo 34 C.P.), pero no guarda</p>
--	---

	<p>unidad de materia con el articulado de la misma. En efecto, el citado precepto constitucional reprocha la adquisición de bienes de procedencia ilícita, mientras que el numeral 4 del artículo 2 demandado, se refiere a la utilización o destinación del bien a actividades ilícitas., De lo anterior, concluye que el legislador desbordó sus atribuciones.</p> <p>Expone igualmente que la pena no puede trascender la persona del delincuente y por ello resulta abiertamente inconstitucional el inciso 1 del artículo 7. Señala: "si los bienes se extinguen con anterioridad a la muerte, éstos no tienen por qué ser transmitidos a los causantes". Con las disposiciones acusadas se está desconociendo el principio de la seguridad jurídica frente al condenado y ante la misma sociedad.</p> <p>En cuanto a la equivalencia señalada en el artículo 6 de la ley, afirma la demandante que ella sólo podría proceder sobre aquellos bienes que se adquiriesen con posterioridad al delito del cual se derivó ilícitamente el patrimonio. Además, dicho precepto resulta contradictorio, pues no es posible establecer una equivalencia sobre bienes que ni siquiera están determinados.</p> <p>Por último, asegura que resulta a todas luces inconstitucional aplicar dicha ley en forma retroactiva, cuando la irretroactividad está proscrita del ordenamiento jurídico (expediente D-1561).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. JORGE ARANGO MEJIA, CARLOS GAVIRIA DÍAZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO</p> <p>CONDUCTA HUMANA-Control/CONTROL NORMATIVO-Alcance/CONDUCTA OBLIGATORIA-Acance (Salvamento de voto)</p> <p>La conducta humana puede ser controlada, en vista de alguna finalidad, de múltiples maneras. Para nuestro propósito podemos hablar de dos: una que suprime la libertad del agente, como cuando se encierra a alguien o se le ata para que no se mueva de un lugar; y la otra cuando, asumiendo que el agente es libre, y respetando esa libertad, se le estimula su voluntad para que observe un comportamiento que se juzga deseable (ofreciéndosele un premio, por ejemplo) o se desestimula una opción, que se estima indeseable, asociándole un castigo. Esa segunda forma de control es la que se denomina normativa, y la última de las modalidades descritas, es la que usualmente emplea el derecho. A la conducta desestimulada mediante la amenaza de una sanción, se le llama obligatoria. Cuando a alguien se le impide actuar de un cierto modo o se le compele por medios a los que no es posible resistir, es claro que no nos encontramos frente a esa técnica específica de control que llamamos normativa. La conducta que se prescribe ha de observarse en el futuro, es decir, después de</p>



	<p>formulada la norma.</p> <p><b>NORMA LEGAL-Conducta de la comunidad (Salvamento de voto)</b>  El Estado de derecho regula la conducta de su comunidad mediante normas, pues asume que tal comunidad está constituida por sujetos libres que sólo de ese modo pueden ser dignamente tratados. Renuncia, por principio, a cualquier técnica diferente de control, que implique un avasallamiento brutal de la voluntad humana y, en consecuencia, un desconocimiento de la condición de persona en tanto que sujeto libre. Esas simples observaciones subyacen a los principios del derecho penal humanitario: "nullum crimen, nulla poena sine previa lege".</p> <p><b>EXTINCION DE DOMINIO-Es una pena/EXTINCION DE DOMINIO-Efectos futuros (Salvamento de voto)</b>  No es cierto, como se dice en la sentencia, que el dominio nunca nació. La misma ley dice que la acción tiende a extinguir el dominio de los bienes adquiridos de un cierto modo. Se decreta su extinción por haber sido adquirido por medios que el Estado juzga indeseables y, por tanto, la consecuencia es sin duda sancionatoria. Pero como dicho efecto negativo específico no se había contemplado antes de expedirse la ley él, jurídicamente sólo podría tener lugar hacia el futuro, asociado a adquisiciones ocurridas en adelante. La extinción del dominio tuvo que establecerla la ley cuya constitucionalidad se examina y, por tanto, es apenas un efecto contingente atribuido a ciertos hechos que, con toda razón, quiere el legislador desestimular, pero que sólo pueden regir hacia el futuro. Se trata de una típica sanción penal que, como tal, no puede ser aplicada a conductas anteriores a la ley que la contempla, so pena de cambiar el control normativo de la conducta por un control brutal, que nada tiene que ver con el Estado de derecho que nuestra Constitución consagra.</p> <p><b>NORMA LEGAL-Clasificación (Salvamento de voto)</b>  <b>ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-No es independiente de la responsabilidad penal/PRESUNCION DE INOCENCIA-Demostración comisión del delito (Salvamento de voto)</b>  La acción de extinción del dominio no puede ser independiente de la responsabilidad penal. Una acción cuya existencia está subordinada a la comisión de un delito, no puede jamás ser "independiente de la responsabilidad penal". Por el contrario, su nacimiento depende de ella: si no se demuestra la comisión del delito, no hay lugar a la extinción del dominio. Establecer que la acción de extinción del dominio es independiente de la responsabilidad penal, es contrariar ostensiblemente la presunción de inocencia consagrada por el artículo 29 de la Constitución. Es claro que solamente cuando el proceso penal termina por sentencia condenatoria ejecutoriada, es procedente adelantar la extinción del dominio: se ha demostrado jurídicamente la comisión del delito que es el origen de los bienes mal habidos.</p> <p><b>EXTINCION DE DOMINIO-Procede si proceso penal termina con</b></p>
--	---

	<p>sentencia condenatoria firme (Salvamento de voto)</p> <p>Solamente cuando el proceso penal termina por sentencia condenatoria firme, hay lugar a adelantar la extinción del dominio. En los demás casos (sentencia absolutoria y extinción de la acción penal por prescripción o por la muerte del procesado), la norma que permite ejercer la acción de extinción del dominio "con absoluta independencia de la actuación penal", quebranta los artículos 29 y 248 de la Constitución.</p> <p>PRESCRIPCION DE LA ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Constitucionalidad del término (Salvamento de voto)</p> <p>Si la extinción de dominio es una sanción penal, su imprescriptibilidad quebranta el artículo 28 de la Constitución, citado. Pero si, como lo afirma la sentencia, es una acción civil, correspondiente a un derecho de la misma naturaleza, ¿cómo aceptar que si la acción penal y la pena, aun en los delitos más graves, se extinguen por el paso del tiempo, no se extingan este derecho y esta acción de naturaleza civil? Pero, al establecer la imprescriptibilidad de la acción de extinción del dominio, asimilándola indebidamente a la reivindicatoria, olvidó la mayoría una diferencia fundamental y elemental: la acción de dominio es imprescriptible porque éste también lo es; en cambio el Estado jamás ha sido dueño de los bienes que adquiere por la extinción del dominio de los particulares sobre los mismos. Y como jamás fue dueño, no puede sostenerse que tenga un derecho de dominio imprescriptible y una acción para recobrar la posesión, que tampoco se extinga por el paso del tiempo. La declaración de inexequibilidad del artículo 9º., parte de un supuesto falso: que la calidad de dueño de quien ha poseído un bien por veinte años, se origina en un título viciado, que no es título justo. Se olvida, sin embargo, que en este caso (el de quien ha poseído por veinte años), la adquisición del dominio se ha realizado por prescripción adquisitiva extraordinaria, cuyo único título es la ley.</p> <p>EXTINCION DE DOMINIO-Exclusión retroactividad por recaer sobre instrumentos del delito (Salvamento de voto)</p> <p>Si la Corte quería ser consecuente con sus premisas, debió excluir la retroactividad de la extinción del dominio cuando ésta recae sobre los instrumentos del delito, pues en tal caso, no es válido afirmar que no se había consolidado un derecho de propiedad sobre el respectivo bien.</p> <p>EXTINCION DE DOMINIO-Aplicación a bienes adquiridos con posterioridad a existencia de delitos (Salvamento de voto)</p> <p>La Corte es totalmente inconsistente cuando declara la inexequibilidad del límite establecido por el artículo 33 a los efectos retroactivos de la ley, a saber que, la acción sólo podía aplicarse a bienes que hubieran sido adquiridos con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esa medida de extinción. No hemos logrado entender cómo del principio de que el delito no genera nunca derechos, la Corte dedujo que era posible que el</p>
--	---

	<p>Estado pudiera extinguir el dominio de un bien proveniente de una actividad que no era entonces delictiva. ¿O es que puede haber delitos sin ley previa que los defina? Como vemos, el argumento es lógicamente inconsistente y muy peligroso para la seguridad jurídica y las garantías constitucionales, pues permite que la criminalización de una conducta en 1997, y su incorporación como causal de extinción de dominio, pueda tener efectos en el pasado sobre la licitud de los bienes obtenidos por alguien al realizar ese comportamiento, que entonces era perfectamente lícito, conforme a ese principio esencial del constitucionalismo, según el cual los particulares pueden realizar todas aquellas conductas que no se encuentren prohibidas por el ordenamiento.</p> <p>EXTINCION DE DOMINIO-Retroactividad a los casos de dolo en el adquirente (Salvamento de voto)</p> <p>Si la sentencia quería ser consistente, debió al menos limitar la retroactividad a los casos de dolo en el adquirente y excluir los eventos de culpa grave. Es cierto que en el campo del derecho civil esos conceptos a veces se asimilan. Sin embargo, la diferencia es nítida, pues el dolo siempre exige el conocimiento de la ilicitud de una conducta, y la voluntad, o al menos la aceptación, de su realización, mientras que la culpa, incluso si es grave, se funda en la negligencia o imprudencia de quien no evita el evento antijurídico previsible.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-539/97
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Ernesto Amezquita Camacho, Ramiro Colmenares Sayago, Carlos Martinez Palacio, Jose Gustavo Villamizar Santacruz Y Samuel Ramiro Guzman Castañeda.
Demandado	Demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 333 del 19 de diciembre de 1996, "Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita".
Conoció en primera instancia	Dr. José Gregorio Hernández Galindo
Decision	Primero.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en la Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997 sobre los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 - inciso 1-, 21 -parágrafo- y 33 de la Ley 333 de 1996 y acerca de la integridad de dicha Ley, en cuanto no requería trámite de ley estatutaria. Asimismo, ESTESE A LO RESUELTO en la misma

	<p>sentencia, en el sentido de que el conjunto de la Ley no vulneró el principio de unidad de materia.</p> <p>Segundo.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en las sentencias C-374 del 13 de agosto de 1997 y C-409 del 28 de agosto de 1997 en cuanto a los siguientes apartes del artículo 7 de la Ley 333 de 1996: "Artículo 7º. De la Naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo (sic) tenga en su poder o lo (sic) haya adquirido...(…)</p> <p>Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.</p> <p>Tercero.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en la Sentencia C-409 del 28 de agosto de 1997, respecto de la exequibilidad de los artículos 8 y 14 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Cuarto.- Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta Sentencia, los artículos 11, 15, 16, 22, 23, 25 y 27 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Quinto.- Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta Sentencia, los siguientes apartes del artículo 7 de la Ley 333 de 1996:</p> <p>"y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.(…)</p> <p>Si terminado el proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente".</p> <p>Sexto.- Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta Sentencia, los incisos 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 333 de 1996. La constitucionalidad de las expresiones "por las demás causales, dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta independencia de la actuación penal", pertenecientes al inciso 2, se condiciona en el sentido de que, en guarda del principio de legalidad, mientras las causales que hoy señalan los artículos 2 de la Ley 333 de 1996 y 14 de la Ley 365 de 1997 no sean adicionadas por el legislador, no se podrán iniciar procesos de extinción del dominio sino con base en los delitos que dichas normas contemplan.</p> <p>Séptimo.- Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 21 de la Ley 333 de 1996, salvo su parágrafo, respecto del cual deberá acatarse lo resuelto en Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997.</p> <p>Octavo.- Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta Sentencia, los siguientes apartes del artículo 26 de la Ley 333 de</p>
--	---

	<p>1996:</p> <p>"Artículo 26. De la disposición y destinación de los bienes. Los bienes y recursos sobre los cuales se declare la extinción del dominio, sin excepción alguna ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de conformidad con los reglamentos...(…)</p> <p>Parágrafo. Las tierras aptas para la producción y que ingresen al Fondo que se crea en la presente Ley, se adjudicarán a los campesinos e indígenas que cumplan los requisitos establecidos. La adjudicación se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 160 de 1994. Los desplazados por la violencia y los involucrados en los programas de erradicación de cultivos ilícitos tendrán prioridad para la adjudicación".</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los ciudadanos Ernesto Amézquita, Ramiro Colmenares, Carlos Martínez y Gustavo Villamizar, miembros activos de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes -ANDAL-, solicitan, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (expediente D-1654), que se declare la inexequibilidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 33 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Afirman los demandantes que, además de vulnerar algunas disposiciones constitucionales, la Ley viola apartes de instrumentos jurídicos de Derecho Público Internacional, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica".</p> <p>Sostienen que las causales contempladas en el artículo 2 demandado, desbordan en su integridad al artículo 34 de la Constitución Política, en su espíritu y contenido material, hasta el punto de haber institucionalizado la pena de confiscación para delitos distintos al de enriquecimiento ilícito. Es decir que bastaría la simple denuncia del ejercicio de una actividad ilícita para que procediera la acción de extinción del dominio, a pesar de no haberse comprobado penalmente la existencia del delito y la responsabilidad del autor mediante sentencia judicial.</p> <p>Por su parte, el artículo 3 de la Ley 333 de 1996, según los actores, se aparta del Ordenamiento constitucional, al establecer que pueden ser objeto de la declaración de extinción de dominio no sólo aquellos bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, sino todos los bienes "adquiridos ilícitamente".</p> <p>En relación con la procedencia de la acción de extinción del dominio frente a los bienes adquiridos por acto entre vivos, afirman que la normatividad acusada transgrede presupuestos constitucionales, al pretender extender los efectos de la sentencia penal a terceros adquirentes, desconociendo que únicamente la</p>

	<p>pena confiscatoria excepcional es aplicable al sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito, vulnerándose de esta manera el principio de la presunción de buena fe.</p> <p>Al contemplar la extinción del dominio para los bienes adquiridos por causa de muerte -alegan los demandantes- se ignora lo dispuesto en el artículo 58 de la Carta Política, hasta el punto de trascender la pena a los herederos del causante no sentenciado, haciendo imprescriptible la pena y la acción penal, con lo cual se vulneraría también el artículo 28, inciso final, ibídem.</p> <p>En cuanto a la facultad legal del juez para declarar extinguido el dominio sobre un valor equivalente, ante la imposibilidad de ubicar, incautar o aprehender los bienes, sostienen los demandantes que vulnera el principio constitucional al debido proceso, cuando la norma pretende "concluir derechos reales litigiosos", sin que se haya establecido la existencia del objeto discutido dentro de la causa, teniendo en cuenta que la sentencia necesariamente deberá recaer sobre bienes determinados. Consideran que en tal evento puede aplicarse la figura del decomiso contemplada en la Convención de Viena.</p> <p>Respecto de la naturaleza jurisdiccional y real de la acción de extinción de dominio, sostienen en primer lugar que es reprochable el hecho de que se extiendan los efectos sancionatorios a terceras personas que hayan adquirido bienes del tradente condenado por la ilicitud, cuando los bienes son enajenados en legal forma antes de la declaración de ejecutoria del ilícito.</p> <p>En segundo término -añaden-, el inciso 2 del artículo 7 en comentario vulnera el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, toda vez que no puede prosperar la acción de extinción del dominio si previamente no se ejerció la acción penal, o bien no existió el derecho confiscatorio en cabeza del Estado.</p> <p>Los impugnantes consideran que el artículo 8 demandado vulnera lo dispuesto en el 116 de la Carta Política, al legitimar a autoridades administrativas para que ejerzan la acción cuando se conoce que la naturaleza de la extinción de dominio es jurisdiccional.</p> <p>Así mismo resulta inconstitucional, en criterio de los libelistas, la facultad otorgada a la Fiscalía General de la Nación, ya que por expreso mandato constitucional a esta institución le compete adelantar acciones penales contra los infractores de la Ley y no acciones reales contra sus bienes.</p> <p>Para los impugnantes, el artículo 9 resulta contrario a lo dispuesto en el 34 de la Carta Fundamental, en la medida en que fija un término de prescripción de la acción de extinción de dominio distinto al fijado en la acción penal, el cual corre desde la última adquisición o destinación ilícita de los bienes.</p> <p>Contradicen los impugnantes lo relativo a la competencia por parte de los jueces penales en materia de acción de extinción de dominio, ya que no tiene sentido que un juez que sanciona delitos termine investigando y juzgando sobre bienes. Consideran que la</p>
--	--

	<p>jurisdicción civil o contencioso administrativa son las competentes para conocer al respecto, pues se trata de una típica acción civil.</p> <p>En criterio de los accionantes, lo dispuesto en el artículo 15 demandado vulnera los preceptos constitucionales 29, 34 y 58, ya que al no presentarse la pena confiscatoria en el mismo fallo penal, mal podría ejercerse esta acción, sin que medie el justo título que declare ese derecho.</p> <p>Fundamentan la vulneración del artículo 58 de la Constitución por parte de las disposiciones 21, 22 y 23 de la Ley, al afirmar que no es aplicable la acción de extinción de dominio para determinados bienes, cuando éstos ya no hacen parte del patrimonio de la persona del demandado, contra quien procede la sentencia declaratoria de la extinción del dominio, pues aceptar lo contrario sería desconocer los derechos adquiridos conforme a la ley civil.</p> <p>Aseguran los miembros de la ANDAL que la vigencia de la Ley 333 de 1996 choca con el principio de la irretroactividad de la Ley, toda vez que los incisos 2 y 3 consagran efectos retroactivos en relación con situaciones jurídicas pasadas, las cuales tuvieron ocurrencia bajo el imperio de la ley civil. De esta manera, se configura la violación al preámbulo y algunos artículos de la Constitución Política.</p> <p>Por último, argumentan la justificación de la inconstitucionalidad de las normas demandadas, al considerar que la Ley reguló de manera conjunta aspectos propios de asuntos penales y civiles, lo cual pone en evidencia que con ellas se ha transgredido el principio de la unidad de materia que inspira al artículo 158 de la Constitución Política, convirtiendo la Ley demandada en un estatuto confuso, absurdo e incoherente, debido a la carencia de técnica en la redacción de sus postulados normativos.</p> <p>El ciudadano SAMUEL RAMIRO GUZMAN CASTAÑEDA, en demanda independiente, luego acumulada a la anterior, solicitó a esta Corte (Expediente D-1661) que declare inexecutable en su totalidad el texto de la Ley 333 de 1996 por haber sido expedida con violación de los procedimientos formales exigidos en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, y en caso de no prosperar su petición principal, solicita se declaren inconstitucionales los artículos 5 en su totalidad, 7, 10, y 33, parcialmente, del mencionado estatuto legal.</p> <p>En primer lugar señala que la Ley presenta vicios formales, al no haberse expedido cumpliendo los requisitos exigidos para el trámite de una Ley Estatutaria, toda vez que el proyecto presentado por el Gobierno regula materias referidas a los derechos y deberes fundamentales de las personas, independientemente de que su encabezado o título haya sido modificado durante su debate.</p> <p>A su juicio, el artículo 5 de la Ley vulnera los preceptos 29, 34, 42, 44 y 45 de la Constitución Política, pues considera que se traslada la responsabilidad personal e individual del causante a sus herederos, configurándose un tipo de responsabilidad objetiva y colectiva. De</p>
--	--

	<p>esta manera los herederos se hacen responsables penalmente por los hechos ajenos cometidos por el causante, sin que medie en su contra algún tipo de declaración judicial. La anterior circunstancia quebranta la protección constitucional otorgada a la familia como núcleo de la sociedad.</p> <p>El impugnante considera que la extinción del dominio es una sanción de carácter confiscatorio, autorizada excepcionalmente por el artículo 34 de la Constitución Política para sancionar las conductas punibles relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito, previa la realización de las circunstancias previstas en la propia Ley.</p> <p>Contradice el artículo 7 demandado, al afirmar que la acción de extinción de dominio no puede ser de carácter real sino personal, pues procede contra el titular de los bienes y no contra los bienes mismos. Además sostiene que se deben perseguir los bienes del responsable penalmente y no los de los titulares y adquirentes de buena fe.</p> <p>Según afirma el actor, resulta inconstitucional el artículo 10 parcialmente demandado, al otorgarle autonomía e independencia a la acción de extinción del dominio, cuando es precisamente con ocasión de la responsabilidad penal que resulta aplicable la sanción confiscatoria.</p> <p>Por último, al solicitar la declaración de inconstitucionalidad de algunos apartes del artículo 33 de la Ley, sostiene que no se fundamenta en el quebranto al concepto mismo de irretroactividad o retrospectividad de las normas legales, suficiente para la declaratoria de inconstitucionalidad, sino en el respeto debido y tutelado de las situaciones jurídicas concretas y consolidadas al amparo de una ley anterior.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. JORGE ARANGO MEJIA, CARLOS GAVIRIA DIAZ</p> <p>Dado que los suscritos magistrados salvamos el voto en el proceso que culminó con la sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, que resolvió la demanda presentada por distintos ciudadanos contra varios preceptos de la ley 333 de 1996 "Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita", entre otras razones, por considerar que la extinción del dominio es una pena por la comisión de delitos y, por tanto, no puede ser retroactiva ni independiente del proceso penal; consideramos que estos mismos argumentos unidos a los demás allí expuestos, son aplicables al caso que en esta oportunidad se decide y a ellos nos remitimos.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las	NO APLICA



aclaraciones	
Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-488/97
Fecha de la sentencia	dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Carlos Eduardo Martinez Merizalde, Juan Pablo Ferreira Ortiz y Mario Alejandro Delgadillo Otero.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos segundo y tercero del artículo 33 de la ley 333 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr.CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Estar a lo resuelto en la sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, mediante la cual se declaró EXEQUIBLE el artículo 33 de la ley 333 de 1996, con excepción del aparte del inciso segundo que dice: "siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9o. de esta ley", que fue declarado INEXEQUIBLE.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La Corte haciendo un gran esfuerzo interpretativo debido a la deficiente redacción de la demanda, considera que los cargos formulados se dirigen a demostrar tanto la violación de derechos adquiridos como del principio de irretroactividad de la ley, dada la alusión que hacen los accionantes sobre que las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de una ley determinada no pueden ser desconocidas por leyes posteriores, y al hecho de que no es posible ordenar la extinción del dominio sobre los bienes o derechos, cualquiera que sea la época de la adquisición o destinación ilícita, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de la ley.</p> <p>Luégo señalan que el artículo 33 de la ley 333 de 1996, "al determinar que el dominio se extinguirá incluso antes de la vigencia de esta ley, atenta contra principios del debido proceso tales como el de la irretroactividad de la ley, más cuando la extinción del dominio se instituye como una sanción independientemente de la naturaleza penal o civil que pueda revestir. Y es que, sin duda, esta ley no se ocupa de regular simplemente una situación jurídica preexistente, caso en el cual se podría tratar de un efecto retrospectivo, sino que modifica de manera radical la situación jurídicamente consolidada convirtiéndola en objeto de la sanción y,</p>

	por ende, aplicándola de manera retroactiva sin tratarse de la aplicación de una ley más favorable."
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-350/97
Fecha de la sentencia	julio veintinueve (29) de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Gustavo Petro Urrego, José del Carmen Cuesta Novoa, Andrés Martínez, José Angel Fonseca Cadena, Luis Antonio Vargas Alvarez, Marcela Monroy Torres, María Teresa Garces Lloreda, Carlos Dario Barrera Tapias, Javier Dario Restrepo, María Teresa Herrán de Restrepo, Augusto Ramírez Ocampo y Armando Novoa García
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (parcial), 2, 8, 10 (parcial), 11 (parcial), 13 (parcial), 16 (parcial), 20 (parcial), 21 (parcial), 25, 26, 28 (parcial) de la Ley 335 de 1996, "Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	<p>Primero. Declarar desvirtuados los cargos de violación del artículo 152 de la C.P. formulados contra la ley 335 de 1996, la cual se tramitó como ley ordinaria, conforme a las normas y procedimientos consagrados en la Constitución Política.</p> <p>Segundo. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “reglamentará y” de los literales c y d del artículo 1 de la ley 335 de 1996.</p> <p>Tercero. Declarar EXEQUIBLES, en los términos de esta providencia, las disposiciones impugnadas de los artículos 2, 10, 21 y 28 de la ley 335 de 1996.</p> <p>Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el párrafo primero del artículo 8 de la ley 335 de 1996, en los apartes demandados.</p> <p>Quinto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 11 de la ley 335 de 1996, en</p>

	<p>el entendido de que dicha norma no se refiere a ninguna forma de participación ciudadana, para la gestión y fiscalización del servicio público de la televisión, ni la desarrolla. Dicha forma de participación deberá ser regulada por el legislador en el menor tiempo posible.</p> <p>Sexto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 13 de la ley 335 de 1996, siempre que la conformación accionaria a la que alude el inciso segundo, en términos de sus beneficiarios reales, no de lugar a una práctica monopolística en el uso del espectro electromagnético.</p> <p>Declarar EXEQUIBLE, así mismo, el inciso final del artículo 13 de la ley 335 de 1996.</p> <p>Séptimo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 16 de la ley 335 de 1996, a condición de que en la determinación de la programación se sigan las directrices de la Comisión Nacional de Televisión, con el fin de garantizar la objetividad en la información y el interés general.</p> <p>También se declara EXEQUIBLE el párrafo primero de dicha norma, con el mismo condicionamiento.</p> <p>Octavo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 20 de la Ley 335 de 1996, en el entendido de que las obligaciones que dicha norma impone a los concesionarios de las cadenas 1 y A, también cubren a los concesionarios de canales privados y deberán fijarse por parte de la CNTV, en una razonable proporción, en los contratos de concesión que con ellos se celebren, por tratarse de la prestación de un servicio público.</p> <p>Noveno. Declarar INEXEQUIBLES los incisos primero, segundo, tercero y cuarto y el párrafo del artículo 25 de la ley 335 de 1996, salvo el último inciso del párrafo que se declara EXEQUIBLE.</p> <p>Décimo. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 26 de la ley 335 de 1996</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, VLADIMIRO NARANJO MESA.</p> <p>COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Autonomía (Salvamento</p>

	<p>parcial de voto)</p> <p>La autonomía de la Comisión Nacional de Televisión es una garantía institucional que asegura a los habitantes del territorio que la dirección de la política de televisión se orienta a la protección de los derechos, principios y valores constitucionales - es decir, al llamado interés general - y no al servicio de intereses particulares, políticos, económicos, religiosos, ideológicos o de cualquiera otra índole. Como lo ha sugerido esta Corporación, sólo una garantía tal asegura la existencia de un libre mercado de ideas en el proceso de comunicación social, patrocina la fiscalización y control del poder político y la formación plural de culturas, credos o ideologías, al margen de la preferencia del gobernante de turno. No parece pues que la mencionada autonomía constituya un bien constitucional de poca monta.</p> <p>COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Juicio de proporcionalidad por injerencia del legislador en autonomía (Salvamento parcial de voto)</p> <p>En las condiciones descritas, una injerencia del legislador en la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión, debe estar sometida al más estricto juicio de proporcionalidad. Como lo ha indicado esta Corporación, las decisiones del Congreso de la República que restrinjan o limiten bienes constitucionalmente protegidos, deben ser evaluadas mediante un juicio de proporcionalidad, cuya intensidad será mayor cuanto más valioso resulte el bien afectado. Así, para que una ley pueda comprometer un bien constitucional, es necesario (1) que persiga una finalidad legítima; (2) que sea útil para alcanzar el objetivo buscado; (3) que resulte necesaria para el logro de la finalidad y (4) que el costo - daño - que procura sea menor que el bien que seguramente habrá de alcanzar.</p> <p>COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Existencia medidas menos lesivas para autonomía por presencia Ministro de Comunicaciones (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Resulta claro que si bien la disposición demandada busca una finalidad legítima - la coordinación entre las distintas entidades - y es idónea para alcanzar tal objetivo, lo cierto es que para ello no era necesario autorizar la presencia del Ministro de Comunicaciones en todas las reuniones de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Existen medidas menos gravosas para la autonomía de la Junta. Es evidente la gran injerencia que, a través del Ministro de Comunicaciones, puede poner en acción el Gobierno Nacional en el análisis, debate y adopción de las políticas de dirección de la televisión, las cuales - según la Constitución - deben ser adoptadas en un espacio de plena independencia y autonomía del poder político. El grado de afectación que se ha producido respecto de la autonomía o independencia de los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, es mucho mayor que el beneficio que eventualmente se</p>
--	--

	<p>logra, consistente en la coordinación de las políticas sobre asuntos comunes. Beneficio que, de otra parte, como se mencionó, hubiera podido ser alcanzado a través de otras medidas menos lesivas para la independencia de la Comisión.</p> <p>COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Presencia del Ministro de Comunicaciones para asuntos de su cartera (Salvamento parcial de voto)</p> <p>No pugna una interpretación que, en atención a la autonomía que la Constitución asegura a la Comisión Nacional de Televisión, sostenga que el Ministro de Comunicaciones sólo debe ser invitado a la sesiones de la Junta en las cuales se debatan asuntos que revistan objetivamente un interés para la cartera de la cual es titular y, exclusivamente, durante el tiempo en que se debatan tales asuntos. Una posición contraria no sólo contraviene el artículo 77 de la Carta sino que, además, no puede sustentarse en los motivos que expresa la mayoría para declarar, "en los términos de esta providencia", la exequibilidad de la norma impugnada.</p> <p>CONCESIONARIOS DE CANALES NACIONALES DE OPERACION PUBLICA Y PRIVADA-Similitud y necesidad de un juicioso análisis de constitucionalidad (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Aunque, existen diferencias entre los concesionarios de canales nacionales de operación privada y los concesionarios de espacios de televisión en canales de operación pública, en ciertos aspectos los dos tipos de contratistas mencionados guardan enormes similitudes. Estos dos grupos de personas se encuentran en las mismas condiciones y que una ley que interfiera en la libre competencia, favoreciendo a unos respecto de los otros, debe someterse a un juicioso análisis de constitucionalidad en orden a verificar: (1) que el trato diferente se funda en una justificación objetiva y razonable y (2) que respeta el grado de la diferencia entre los dos grupos que están siendo objeto de trato de una disciplina diferente. Lamentablemente el examen anterior dejó de realizarse. En consecuencia, se optó por mantener dentro del ordenamiento una disposición que, en nuestro criterio, compromete la igualdad, lesiona la libre competencia y amenaza seriamente el pluralismo informativo.</p> <p>LIBERTAD DE INFORMACION-Contenido plural y múltiple/DERECHO A INFORMAR-Alcance/DERECHO A INFORMARSE-Alcance/DERECHO A SER INFORMADO-Alcance (Salvamento parcial de voto)</p> <p>La libertad de información tiene un contenido plural y múltiple. En efecto, a su amparo se protege tanto el derecho a informar, como a informarse y a ser informado. El primero de ellos, el derecho a informar, supone necesariamente la garantía simultánea de otros derechos, como la libertad de expresión y la libertad de conciencia e, incluso, la defensa de las condiciones operativas necesarias para que pueda producirse de manera estable, segura y profesional el proceso comunicativo. A su turno, el derecho a informarse se relaciona directamente, con el derecho de petición, y con otros</p>
--	---

	<p>bienes constitucionales como la defensa de la profesión del periodista o la "reserva de la fuente". Por último, el derecho a ser informado, supone la posibilidad de acceder a los medios de comunicación y se asegura mediante el pluralismo informativo, así como a través de los límites que la propia Constitución establece a las libertades de expresión e información.</p> <p><b>DERECHO A LA INFORMACION-Dimensiones (Salvamento parcial de voto)</b></p> <p>En general, el derecho a informar tiene dos dimensiones distintas pero complementarias: (1) sustantiva, que implica el ejercicio de los derechos de libertad y autonomía, así como la posibilidad de difundir hechos noticiosos sin que pueda censurarse la información; y (2) operativa o funcional, que supone la garantía de las condiciones estructurales u operativas necesarias para el ejercicio pleno, sin restricciones, de esta libertad. De esta segunda dimensión forma parte, por ejemplo, el derecho de acceso democrático e igualitario al espectro electromagnético, en condiciones tales que aseguren que el reto empresarial que acompaña necesariamente la fundación del medio de comunicación, no será asaltado o minado desde el propio Estado.</p> <p><b>CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS DE TELEVISION-Medios necesarios para ejercicio de derechos fundamentales (Salvamento parcial de voto)</b></p> <p>Los contratos de concesión de espacios de televisión no constituyen fines en sí mismos, sino medios necesarios para el ejercicio de todos los derechos constitucionales involucrados en la libertad de información. El contrato de concesión en este caso no es un contrato administrativo más y no puede, simplemente, someterse a las reglas generales de los contratos administrativos. En efecto, este tipo de contrato constituye la condición de posibilidad para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales que han sido considerados por esta Corporación, como derechos dignos de preferencia por su carácter de nutrientes esenciales del proceso democrático.</p> <p><b>CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS DE TELEVISION-Juicioso estudio de constitucionalidad por la prohibición de prórroga (Salvamento parcial de voto)</b></p> <p>La regulación legal de este tipo de contratos debe merecer un juicioso estudio de constitucionalidad, pues ellos se erigen en presupuesto jurídico y material de un derecho constitucional que resulta esencial para el funcionamiento del sistema democrático. La tarea que en esta oportunidad tenía la Corte, era la de verificar si la medida impugnada violaba el derecho de informar o la libertad de información. Para ello, debía analizar si se trataba de una afectación arbitraria de la dimensión operativa del derecho a informar, vale decir, si la medida tenía una finalidad legítima y si resultaba razonable y proporcionada en relación con el fin perseguido. De la misma manera, quebrantar la seguridad jurídica</p>
--	--

	<p>que debe rodear el proceso de formación de una empresa comunicativa cuando existen medidas menos costosas en términos de la lesión a la confianza y a la estabilidad, o cuando la decisión no es susceptible de alcanzar la finalidad perseguida o cuando el costo es superior al beneficio que se obtiene, resulta abiertamente inconstitucional.</p> <p><b>CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS DE TELEVISION-</b>Verificación constitucional finalidad legítima de medida por prohibición de prórroga (Salvamento parcial de voto)</p> <p>La ley que se estudia, se enmarca en el contexto de la fuerte tensión, necesaria e incluso deseable en una democracia, entre el ejercicio del poder y la libertad de información. En estas condiciones, más que en cualesquiera otras, el juez constitucional debe verificar que la finalidad de la medida sea, en realidad, legítima. El análisis de proporcionalidad deberá realizarse a partir de los elementos formales que fueron los únicos identificados por la mayoría. En estos términos, debe sostenerse, como lo afirma la sentencia, que la finalidad de la norma estudiada es la de abrir los espacios de participación de los ciudadanos en el proceso de distribución del uso del espectro electromagnético. Se trata entonces de un objetivo que no sólo no pugna con la Constitución sino que desarrolla los imperativos fijados en los señalados 13, 20, 74 y 75 de propia Carta, a tenor de los cuales, el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y la democratización en el acceso al uso del espectro como medio para el ejercicio de las libertades y los derechos constitucionales. No puede afirmarse, como lo hace la mayoría, que la finalidad de la disposición demandada sea imperativa o urgente. A lo sumo se trataba de un objetivo deseable.</p> <p><b>DERECHOS FUNDAMENTALES-</b>Condiciones que deben darse para su restricción (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Conforme al juicio de proporcionalidad, debió la Corte preguntarse si la medida era adecuada o útil para lograr el objetivo perseguido, ya que como ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el legislador sólo puede afectar el ejercicio de los derechos fundamentales cuando, entre otras condiciones, la restricción resulte útil para el logro de una finalidad legítima. Una restricción inútil o caprichosa siempre resulta inconstitucional. No basta que una medida que restringe los derechos fundamentales, tenga una finalidad legítima y resulte útil para alcanzarla. Se requiere, adicionalmente, que sea necesaria, vale decir, que no exista ninguna otra, menos restrictiva de los derechos constitucionales, que sea susceptible de alcanzar el mismo efecto.</p> <p><b>CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS DE TELEVISION-</b>Afectación derechos por modificación de reglas anteriores sobre prórroga (Salvamento parcial de voto)</p> <p>La modificación de las reglas legales que reglamentan, por ejemplo, los contratos de concesión de espacios de televisión o de cadenas y</p>
--	--

	<p>programas radiales sólo puede operar, en principio, hacia el futuro, sin que esté permitido que se afecten las condiciones bajo las cuales originalmente fueron pactados tales contratos. Sin embargo, en algunos eventos resulta indispensable modificar las reglas originalmente pactadas, cuando ellas vulneran mandatos constitucionales imperativos e inaplazables. La intención de lograr una mejor adecuación de las normas legales a los mandatos constitucionales, no es suficiente para justificar el cambio de reglas anteriores, al amparo de las cuales los concesionarios celebraron los contratos y calcularon sus expectativas. Para intervenir en esa órbita contractual constitucionalmente protegida se requiere que exista un imperativo constitucional de urgente aplicación. De otra forma, bajo el fácil expediente del "interés general" y de la promoción de valores, principios o derechos que siempre admiten una más adecuada regulación, se auspiciaría un peligroso espacio de control y fiscalización del poder político sobre los medios de comunicación social. En estas condiciones, se amenaza hasta extremos impensables la libertad del individuo, sometido a la información oficial avalada por el poder, y se menoscaba gravemente la legitimidad del sistema democrático. El interés de la disposición estudiada no era otro distinto que el de permitir que en el proceso de adjudicación de los contratos que empezarán a ejecutarse, hubiere mayor participación. Este objetivo no puede desestimarse, pues patrocina la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no se trataba de un objetivo constitucional inaplazable o urgente. Una prórroga de seis años, cuando los contratistas han sido objetivamente seleccionados y han cumplido satisfactoriamente sus obligaciones legales y constitucionales, no viola ningún principio constitucional. Así las cosas, resulta claro que un juicioso análisis de constitucionalidad de la disposición estudiada, habría conducido inexorablemente a su declaración de inconstitucionalidad. El principio de efectividad y de aplicación del derecho sustancial, por encima de las formas, surge, a nuestro juicio, como imperativo que la Corte no puede olvidar tan fácilmente, máxime cuando de manera patente bajo el manto de la ley abstracta se esconde en este caso una de las violaciones más afrentosas a la libertad de expresión y a la democracia. La Corte ha debido introducir un examen severo de constitucionalidad, dadas las trazas de singularidad de la ley y la sospecha de que ella articulaba un ominoso mecanismo de censura.</p> <p>DR. HERNANDO HERRERA VERGARA</p> <p>JUNTA DIRECTIVA DE COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Autonomía/JUNTA DIRECTIVA DE COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Participación del Ministro de Comunicaciones es inconstitucional (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>Pienso que la obligada presencia de un funcionario de la Rama Ejecutiva, en especial si se trata de un ministro, en las sesiones en</p>
--	---



	<p>las cuales el órgano independiente adopta sus decisiones recorta enormemente su autonomía y coarta la libertad de quienes lo integran. Por eso, salvo que la estructura misma del ente involucre a miembros ajenos a su composición, según la misma Carta Política, el legislador no está autorizado para romper la independencia que de las normas constitucionales resulta. Cuando la Constitución ha querido permitir tal presencia, lo ha expresado directamente. Si se constata en los preceptos constitucionales que crearon tal organismo y en los antecedentes de su establecimiento, lo que se hizo en 1991 no fue nada distinto de quitar, precisamente al Ministerio de Comunicaciones, la función de intervenir en la televisión, para que eso lo hiciera el nuevo ente. Se buscó sustraer el desarrollo de la política de televisión al manejo del Ejecutivo y confiarlo a una institución cuyas características dos artículos de la Carta se ocuparon en señalar. La participación del Ministro de Comunicaciones en las sesiones de Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión implica no solamente la posibilidad de influjo en la toma de decisiones sino el condicionamiento de todas y cada una de las actuaciones de ese organismo y la recepción de informaciones que sólo la Junta, en ejercicio de sus funciones, debería conocer y evaluar.</p> <p>PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS PUBLICOS DE TELEVISION-Vulneración por desconocimiento derecho a prórroga/NORMA LEGAL-Generalidad/LIBERTAD DE INFORMACION EN CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEVISION-Cambio de las reglas de juego contractuales/CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS PUBLICOS DE TELEVISION-Vulneración de derechos por desconocimiento de prórroga (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>La lectura del texto indica a las claras: 1) Que no se trataba de una norma general y abstracta, sino de un precepto con alcances circunscritos directamente a unos ciertos destinatarios; 2) Que mediante esa disposición se modificaron las reglas de juego que tales personas tenían por ciertas a la luz de la legislación en cuya vigencia se celebraron los contratos; 3) Que a esas mismas personas se les quitó la posibilidad de una prórroga que la normatividad les había otorgado y en la cual confiaban, si se cumplían las condiciones en ella previstas. La sentencia no cuestionó -como correspondía a la Corte- la validez constitucional de la norma. La oposición entre el artículo impugnado y los postulados y preceptos constitucionales era ostensible. Fue violado, y de manera flagrante, el artículo 83 de la Constitución. No me cabe duda de que, si bien es discutible un derecho adquirido a la prórroga en todos los casos, lo que sí plasmaba la legislación a cuyo amparo ellos fueron perfeccionados era una certeza mínima de que quien fuera evaluado y obtuviera determinado puntaje gozaría del derecho a la prórroga. Y eso no se lo podía quitar abruptamente el legislador a los particulares, sin traicionar grave y flagrantemente el</p>
--	--

	<p>postulado de la buena fe. Pero la violación que resulta más flagrante y más grave, por lo que significa en cuanto precedente, y por la capacidad altamente corruptora que demuestra, es la del artículo 20 de la Constitución Política. La absoluta pérdida de objetividad del legislador, en la cual ha debido fundarse para proferir una ley cuyos alcances abstractos, si lo eran en verdad, han debido reflejarse en la consagración de normas que regularan situaciones futuras e impersonales, hizo perder a la norma una de sus notas esenciales -la generalidad-, trocándose en peligroso instrumento de retaliación y de castigo político. Tampoco puede pensarse en una auténtica libertad de información, ni desde el punto de vista de los informadores ni bajo la perspectiva del público, si la objetividad tiene unos costos tan altos como los del inopinado y brusco cambio de las reglas de juego contractuales, en cuya virtud el medio goza de eficacia para llegar a los destinatarios de lo que informa. Las entidades públicas han obtenido patente de corso para exigir a los comunicadores una conducta servil y abyecta en el ejercicio de su función profesional, bajo el apremio y la amenaza de aplicarles cláusulas contractuales de ese linaje -que en materia de libertad informativa no son otra cosa que expresión bárbara de dictadura-, en virtud de las cuales, oculta por la apariencia externa de una medida jurídica referente a la prórroga del vínculo jurídico que aquéllos mantienen con el Estado, se les aplica en realidad la más cruda censura de prensa. Finalmente, estimo violado el artículo 73 de la Constitución Política, de ahora en adelante romántica teoría, según el cual "la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional".</p> <p>SERVICIO DE TELEVISION POR SUSCRIPCION-Alcance de la exigencia de asociarse/LIBERTAD DE FUNDAR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION-Modificación del alcance/LIBERTAD DE ASOCIACION-Modificación del alcance (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>He votado favorablemente la exequibilidad del artículo 13 de la Ley 335 de 1996, a cuyo tenor "los concesionarios de los canales nacionales de operación privada deberán ser sociedades anónimas con un mínimo de trescientos accionistas", sociedades que deberán inscribir sus acciones en bolsas de valores, por cuanto acato la jurisprudencia ya sentada por la Corte en Sentencia C-093 de 1996. Pero aclaro mi voto en el sentido de que, a partir de tal providencia, como lo expresé en el respectivo salvamento, se modificaron los alcances del artículo 20 de la Constitución, según el cual toda persona tiene derecho a fundar medios masivos de comunicación. Y pienso que también, en virtud de la misma doctrina, hoy ratificada, se cambió el concepto de la libertad de asociación, que debería permitir a las personas asociarse cuando quisieran hacerlo y no cuando se lo impusiera la ley, condicionando así el ejercicio de un derecho fundamental a la obligatoria renuncia de otro.</p>
--	---

	<p>COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Violación autonomía para determinar programación de televisión cultural y educativa (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>A pesar del condicionamiento que plasmó la Corte, en el sentido de que al respecto se sigan las directrices de la Comisión Nacional de Televisión, ha sido ignorada la autonomía de este último organismo, convirtiendo todo un canal de televisión en instrumento de propaganda del Gobierno de turno, puesto que el contenido de sus programas será íntegramente oficial, sujeto a la voluntad de Inravisión, entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-569/97
Fecha de la sentencia	seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Beatriz Garzón de Quiroz
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2° y 16 (parcial) de la Ley 335 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-350 de 1997, en relación con el artículo 2° de la ley 335 de 1996.</p> <p>Segundo : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-350 de 1997, en relación con la expresión “determinación de la programación” contenida en el inciso primero del artículo del artículo 16 de la ley 335 de 1996.</p> <p>Tercero : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-350 de 1997, en relación con el párrafo 1° del artículo 16 de la ley 336 de 1996.</p> <p>Cuarto : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-445 de 1997, en relación con la expresión “previo visto bueno del Ministerio de Comunicaciones”, contenida en el inciso segundo del párrafo 2º del artículo 16 de la ley 336 de 1996.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima la demandante que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 76, 77 y 113 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>2.1 Cargos formulados contra el artículo 2° de la Ley 335 de 1997 Considera la impugnante que la norma demandada es inconstitucional al permitir la presencia del ministerio de Comunicaciones en la Junta Directiva de la CNTV, porque vulnera la autonomía que los artículos 76 y 77 de la Constitución Política le concedieron al máximo ente regulador de la televisión en el país. En concepto de la demandante, el legislador, al incluir en la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión al ministro de Comunicaciones, aumentó indebidamente la composición de dicho ente puesto que la Constitución Política en su artículo 77 restringió su número al de cinco (5) miembros.</p> <p>2.2. Cargos Formulados contra los apartes demandados del artículo 16 de la Ley 335 de 1997 Estima la demanda que el hecho de que la norma acusada hubiera</p>

	<p>conferido a Inravisión la facultad de determinar la programación de la Televisión Cultural y Educativa, constituye una nueva violación de los artículos 76 y 77 de la Constitución Política que expresamente le asignan a la CNTV la dirección, reglamentación y ejecución de las políticas en materia de televisión. En su concepto, el legislador excedió la facultad de fijar políticas en materia de televisión cuando decidió la forma en que habría de fijarse la programación del Canal de Interés Público, pues esta función fue reservada por la Constitución Política a la CNTV.</p> <p>En cuanto al párrafo 1° del artículo 16 demandado, señala la demandante : “La determinación de la programación en el Canal de Interés Público, que es un designio político, corresponde por disposición constitucional a la Comisión Nacional de Televisión ; la producción, realización y emisión de la programación, que son conceptos técnicos, o la explotación de la programación, que es un concepto económico, corresponden por ley a Inravisión”</p> <p>En cuanto a la expresión acusada del segundo inciso del párrafo 2° del artículo 16, la ciudadana considera que nuevamente infringe la autonomía que los artículos 76 y 77 de la Constitución Política le confieren a la CNTV, autonomía reconocida por la misma Corte Constitucional, pues, en su parecer, el visto bueno que debe dar el Ministerio de Comunicaciones para la asignación de bandas del VHF por parte de dicha Comisión implica un sometimiento de las decisiones de dicho organismo a la voluntad del Ejecutivo, lo cual riñe con su naturaleza jurídica especial. Adicionalmente la CNTV no se halla adscrita a esa Rama del Poder Público, y en esto, la norma es vulneratoria del artículo 113 de la Carta Fundamental.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-445/97
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Julio César Torres Saboya.
Demandado	Norma acusada: Párrafo 2o. (parcial) del artículo 16 de la Ley 335 de 1996 “por la

	cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.”
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Decision	<p>Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “previo el visto bueno del Ministerio de Comunicaciones” contenida en el parágrafo 2o. del artículo 16 de la Ley 335 de 1996.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “..pudiendo hacer cambios dentro de las bandas del VHF, pero en todo caso sin desmejorar las condiciones que tienen los operadores públicos de televisión a la vigencia de la presente ley...” consagrada en el parágrafo 2o. del artículo 16 de la Ley 335 de 1996, con base en las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, la norma demandada, en las expresiones que se señalan, vulnera los artículos 4, 75, 76 y 77 de la Constitución Política.</p> <p>A manera de introducción, el demandante presenta unas consideraciones sobre la necesidad técnica y jurídica de realizar el reordenamiento del espectro electromagnético con una debida asignación de frecuencias, a fin de hacer viable el ejercicio del derecho fundamental a fundar medios masivos de comunicación (C.P., art. 20), a través de un uso racional, eficaz y económico con acceso equitativo de las mismas, según lo dispuesto en el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aprobado mediante la Ley 252 de 1995, lo que en su concepto no se está cumpliendo por INRAVISION y los Canales Regionales, actuales operadores de televisión.</p> <p>En seguida, el actor hace alusión a las funciones de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como organismo encargado de intervenir a nombre del Estado en el espectro electromagnético destinado al servicio de televisión (C.P., art. 76 y Ley 182 de 1995, art. 23), y del Ministerio de Comunicaciones, como entidad que realiza la gestión y el control del espectro en general (Ley 182 de 1995, art. 23), para señalar que dichas labores deben ejercerse en forma coordinada, y así, con base en esta precisión, entrar a formular su inconformidad contra la norma acusada con los siguientes cargos :</p> <p>1. De un lado, el actor manifiesta que si bien corresponde al legislador la función de determinar la política general en materia de televisión, su ejecución es del resorte exclusivo de la Comisión, unido al hecho de que a ésta además compete la intervención estatal en el espectro electromagnético. Por lo tanto, el Congreso al determinar las pautas generales a las cuales debe sujetarse la</p>

	<p>entidad rectora de la televisión no puede desconocer las facultades exclusivas y la autonomía de la CNTV subordinándola a la decisión de otra entidad estatal y establecer una intromisión indebida del ejecutivo, como considera ocurre en el párrafo 2o. del artículo 16 de la Ley 335 de 1996 acusado, cuando se atribuye el reordenamiento final de las frecuencias a la Comisión “previo el visto bueno del Ministerio de Comunicaciones”, fórmula que el accionante impugna por vulnerar los artículos 76 y 77 de la Carta, que consagran una coparticipación de esas entidades sin restricciones a la autonomía de la CNTV.</p> <p>2. De otro lado, el demandante considera que cuando el legislador establece en la norma demandada, que la CNTV adelantará el reordenamiento final del espectro electromagnético utilizado para la televisión con cambios en la banda del VHF pero “en todo caso sin desmejorar las condiciones de los operadores públicos”, segmento censurado, no asegura un acceso equitativo al mismo, con lo cual se vulnera el artículo 75 de la Carta Política que garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso del espectro y la facultad de intervención en el mismo, para asegurar el pluralismo informativo y la competencia, como también las disposiciones de convenios internacionales como el suscrito con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que exige a los estados miembros permitir el acceso equitativo a las frecuencias.</p> <p>A su juicio, con esa disposición INRAVISION en forma preferencial continuaría con las frecuencias que ha venido utilizando en la banda del VHF, desvirtuándose la garantía de acceso igualitario que el artículo 75 quiso imponer al uso del espectro, pues se mantendría una prerrogativa para el operador público de televisión en el uso del espectro, que en ningún momento fue contemplada por el Constituyente de 1991.</p> <p>En conclusión, para el actor con lo demandado se desconocen los principios de autonomía de la CNTV y de igualdad de oportunidades para el acceso y competencia, que exige la declaratoria de inexequibilidad</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-601/97
Fecha de la sentencia	noviembre veinte (20) de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Adelia Rocio Cardozo Romero, Jhon Fredy Romero Y Jhoana Arango
Demandado	Acci3n p3blica de inconstitucionalidad contra el par3grafo del art3culo 25 de la Ley 335 de 1996, "Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisi3n privada en Colombia y se dictan otras disposiciones".
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	En lo referido al par3grafo del art3culo 25 de la ley 335 de 1996, estarse a lo resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la Sentencia C - 350 de 29 de julio de 1997.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	A. Normas constitucionales que se consideran infringidas. Los demandantes consideran que la disposici3n acusada vulnera los art3culos 20 y 93 de la C.P. B. Fundamentos de la demanda. La demandante ADELIA ROCIO CARDOZO ROMERO se3ala que las disposiciones impugnadas del art3culo 25 de la ley 335 de 1996, violan el derecho a la libertad de expresi3n, el cual quedar3a supeditado a la evaluaci3n y calificaci3n que a los informadores les imponga la CNTV. Los ciudadanos JHON FREDY ROMERO y JHOANA ARANGO, coinciden en los cargos formulados contra el mencionado par3grafo del art3culo 25 y solicitan tambi3n que se declare inexecutable.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-467/97
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).



Demandante	
Demandado	Revisión constitucional de “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro 1954 y de la Ley aprobatoria No 340 del 26 de diciembre de 1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLES la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954).</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley No 340 del 26 de diciembre de 1996, "por medio de la cual se aprueban la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954)”.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional de “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro 1954 y de la Ley aprobatoria No 340 del 26 de diciembre de 1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-323/97
Fecha de la sentencia	julio diez (10) de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	
Demandado	Revisi3n de Constitucionalidad de la Ley 341 de 1996, de 27 de diciembre de 1996, por medio de la cual se aprob3 el “Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Checa”, suscrito en Santaf3 de Bogot3, D.C., el 2 de Mayo de 1995.
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	Primero. Declarar EXEQUIBLE el Acuerdo comercial entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Checa, suscrito en Santaf3 de Bogot3, D.C., el 2 de mayo de 1995 y la Ley 341 de 27 de diciembre de 1996, que lo aprob3.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n de Constitucionalidad de la Ley 341 de 1996, de 27 de diciembre de 1996, por medio de la cual se aprob3 el “Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Checa”, suscrito en Santaf3 de Bogot3, D.C., el 2 de Mayo de 1995.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-428/97
Fecha de la sentencia	cuatro (4) d3as del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	LUIS ANTONIO VARGAS ALVAREZ y otros.
Demandado	Demandas de inconstitucionalidad contra los art3culos 13, 14, 15, 18, 22, 26, 29 y 30 de la Ley 344 de 1996.

Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE, en los términos de este fallo, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, excepto el último inciso que dice: " El Gobierno Nacional podrá establecer programas de incentivos con la finalidad de propiciar que los servidores públicos que en el momento de la publicación de la presente Ley tengan régimen de cesantías con retroactividad, se acojan a lo dispuesto en el presente artículo", que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el artículo 14 de la Ley 344 de 1996, excepto las expresiones "reconocerse, liquidarse y", que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Tercero.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 344 de 1996.</p> <p>Cuarto.- Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta sentencia, los artículos 18, 22, 26, 29 y 30 de la Ley 344 de 1996.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los ciudadanos LUIS ANTONIO VARGAS ALVAREZ y CLAUDIA MERCEDES PENAGOS CORREA demandan la inconstitucionalidad de los artículos 13, 14, 18 y 29 transcritos, por ser violatorios de los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 46, 48, 53, 54, 90, 228, 229 y 230 de la Carta Política.</p> <p>Manifiestan que las cesantías no son salario, pero sí una prestación muy importante para el trabajador, quien al retirarse del empleo encuentra en ellas el único medio para subsistir mientras logra ubicarse nuevamente.</p> <p>Deducen de lo dicho que el artículo 13 demandado, al querer desaparecer esta prestación, es violatorio de la dignidad humana, del derecho al trabajo y de la seguridad social. Los incentivos que se ofrecen a los trabajadores que han adquirido el derecho a que se les liquiden las cesantías en la forma tradicional, son inconstitucionales, pues son mecanismos de presión, aprovechándose de "las situaciones de emergencia económica de las personas, para obtener de éstas la renuncia a derechos que por su naturaleza son irrenunciables".</p> <p>En cuanto a las cesantías parciales, tal como están concebidas en el artículo 14 demandado, aduce que se está entorpeciendo su trámite y pago, y los trabajadores no tienen por qué soportar las improvisaciones que se hagan al aprobarse la ley de presupuesto.</p>

	<p>En relación con el artículo 18, afirman que se está desconociendo el principio que ordena reconocer "a trabajo igual salario igual", y es inadmisibles que si se encarga a una persona, para que cumpla unas determinadas funciones, no se le pague la remuneración correspondiente por ello, por el sólo hecho de que el titular la esté percibiendo. Estas -expone- son circunstancias extrañas que no tienen por qué ser asumidas por el trabajador.</p> <p>Finalmente manifiestan que se está desconociendo la autonomía de la Rama Judicial, pues con la redacción del artículo 29, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "se constituye en juez de los jueces", desconociendo las sentencias judiciales. Se atenta contra el debido proceso, pues una vez proferida una sentencia hay que cumplirla y no con posterioridad a ella condicionar su cumplimiento a una previa investigación tributaria. El Estado ya tuvo su oportunidad de defenderse y demostrar la existencia de una compensación y no puede iniciar nuevo proceso para ello (expediente D-1590).</p> <p>Los ciudadanos ARMANDO JOSUE DUARTE GOMEZ y MANUEL ANTONIO APONTE AVELLA, demandan la inconstitucionalidad del artículo 18 aduciendo iguales razones (expediente D-1613).</p> <p>La ciudadana MARIA ELENA VEGA VALCARCEL solicita se declaren inexecutable los artículos 14 y 15, el inciso primero del 18, el inciso segundo del 29, el inciso primero del 30 y el párrafo del artículo 22.</p> <p>En cuanto al artículo 14, manifiesta su inconformidad, señalando que las cesantías forman parte de las prestaciones sociales del trabajador. Son -expresa- un ahorro que él hace durante su relación laboral, y por tanto le pertenecen únicamente a él y no al Estado. Son -termina diciendo- un derecho adquirido y el ente estatal no puede condicionar su pago a la existencia de apropiación presupuestal disponible.</p> <p>El artículo 15 viola los artículos 1, 2, 5, 16, 28, 29 y 83 de la Constitución Política, pues se establece una conducta que debe hacer parte de un ordenamiento disciplinario. Además se desconoce el principio de la buena fe, lo cual atenta contra la libertad de la persona, y al trabajador se le tiene como responsable anticipadamente, sin que se le hubiese oído y vencido en juicio.</p> <p>Afirma que, con la redacción del primer inciso del artículo 18, se desconoce el principio de la prevalencia del interés general, pues un trabajador no va a querer ascender dentro una entidad mientras no se le reconozca una contraprestación económica por su trabajo, quedando el cargo vacante y causando perjuicio a los ciudadanos</p>
--	---

	<p>que demanden el servicio.</p> <p>A su juicio, con el párrafo del artículo 22 se rompe el concepto de igualdad y se consagra un indebido privilegio para las I.P.S oficiales, impidiendo que los trabajadores escojan el médico y el centro asistencial donde desean ser atendidos.</p> <p>Los argumentos para justificar la inconstitucionalidad del artículo 29 son los mismos expuestos por los actores LUIS ANTONIO VARGAS ALVAREZ y CLAUDIA MERCEDES PENAGOS CORREA.</p> <p>Respecto al artículo 30, afirma que se están violando los artículos 4, 6 y 121 constitucionales, pues la facultad en ellos contemplada es del Congreso, de acuerdo con el artículo 150 C.P. (expediente D-1607).</p> <p>El ciudadano DARIO GIOVANNI TORREGROZA LARA demanda la inconstitucionalidad del artículo 26, manifestando que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, no son, de acuerdo con el artículo 286 de la Carta Política, entidades territoriales. Por tal motivo, con dineros del Fondo Nacional de Regalías no se pueden financiar sus proyectos, por expresa prohibición del artículo 361 constitucional (expediente D-1599).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI, DRES. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO</p> <p>REGIMEN DE CESANTIAS-Inconstitucionalidad de fijación de mínimo de rezago (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Aunque la Corte ha manifestado con razón que el diez por ciento no es un tope sino un mínimo, la inconstitucionalidad de la norma resultaba, a mi juicio, incontrovertible, ya que, a su amparo, puede la Administración seguir en la censurable conducta omisiva que viene observando, sólo que ahora deberá reducirla al noventa por ciento anual de las solicitudes de cesantías parciales, aplazando su trámite indefinidamente, en detrimento de claros derechos de los trabajadores. La disposición viola, en mi criterio, el artículo 209 de la Constitución, pues, contrariando su tenor obligatorio, conduce a que la función administrativa se ejerza sin tener en cuenta los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad. No entiendo cómo la Corte declara exequible la norma pero advierte que debe ser investigada la conducta de los servidores públicos que no tramiten con celeridad las solicitudes de cesantías parciales, si según aquélla han quedado autorizados legalmente para demorar, sin sanción, el noventa por ciento de las que están</p>

	<p>represadas.</p> <p>ENCARGO TEMPORAL-Remuneración (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Trabajo igual merece salario igual, y no por el título del cargo ni por su carácter permanente o transitorio, sino por su contenido; en razón de su ejercicio material y concreto, aunque se cumpla por encargo. Cabe preguntar si, para la Corte, el trabajo que desempeña el encargado es, por definición, de inferior categoría al que cumpliría, si estuviera ejerciéndolo, el titular. O si la Corporación presume que ser titular de un empleo al servicio del Estado comporta necesariamente el derecho a una menor remuneración, lo cual no tiene sentido, por cuanto tal elemento es ajeno a la cantidad y calidad del trabajo y constituye una forma nada plausible de justificar la discriminación.</p> <p>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Naturaleza/FONDO NACIONAL DE REGALIAS-Destino de recursos (Salvamento parcial de voto)</p> <p>La Corte ha resuelto utilizar en esta oportunidad un criterio de interpretación de la Carta Política que no puedo compartir: el de hacer decir a sus normas lo que no dicen. Con base en ese criterio, se otorga a las corporaciones autónomas regionales el carácter de entidades territoriales. Considero que -por elemental que parezca- debe insistirse en que no es lo mismo destinar unos recursos -los del Fondo Nacional de Regalías- a las entidades territoriales que a las corporaciones autónomas regionales. Son entes distintos desde el punto de vista constitucional.</p> <p>DEUDA JUDICIAL-Facultad inconstitucional del Ministro/SENTENCIA-Incumplimiento (Salvamento parcial de voto)</p> <p>El Ministro de Hacienda podrá reservarse la facultad inconstitucional de reconocer, en vez de cumplir, las sentencias y conciliaciones judiciales, dando lugar a una artificiosa distinción entre su contenido y el concepto de deuda pública. Con ello -por otra parte-, se quita el carácter de tal a las obligaciones derivadas de providencias judiciales que el funcionario mencionado, en ejercicio de la facultad otorgada, decida no reconocer.</p> <p>COMPENSACION POR ACREENCIAS TRIBUTARIAS (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Además, se permite a las entidades y organismos obligados a cancelar sumas de dinero en virtud de decisiones judiciales, eludir su cumplimiento, forzando una compensación derivada de la facultad potestativa y unilateral de la autoridad tributaria, en</p>
--	---

	abierta violación al debido proceso y ocasionando que el Estado aproveche su propia responsabilidad pecuniaria, su negligencia o su culpa, deducidas judicialmente, para recaudar las acreencias tributarias.  PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL (Salvamento de voto)
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-584/97
Fecha de la sentencia	
Demandante	Juan Manuel Gutierrez Peñuela, Gerardo Gutierrez Bravo, Jose Dario Cediell Serrano, Luis Guillermo Ospina Gardezabal, David García Vanegas, Hugo Junior Carbone Ariza, Nestor Hugo Chaves Quintero, Carlos Fabian Peña Suarez, Alfredo Duque Rojas, Luis Eduardo Cortina Peñaranda, Doris Garzon Monastoque, Maria Wbaldina Benitez Sarmiento, Edgar Efrain Gonzalez Gomez, Jose Reyes Rodriguez Casas, Nancy Peña Joven Y Mauricio Alfonso Senejoa Venegas
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 18 y 19 de la Ley 344 de 1996, "Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades y se expiden otras disposiciones"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-428 de 1997. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 19 de la Ley 344 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	1. El ciudadano Juan Miguel Gutiérrez Peñuela, quien demanda el artículo 14 de la Ley 344 de 1996, considera que esta norma vulnera el artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que establece un régimen discriminatorio entre aquellos servidores públicos que se acogieron al régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 057 y 110 de 1993 y aquellos trabajadores que optaron por el régimen de cesantías retroactivas vigente hasta la expedición de los anotados decretos.  De igual modo, señala que la discriminación antes anotada entraña

	<p>una violación al artículo 53 de la Carta, en los apartes que señalan que el Estado debe garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones y que establecen la igualdad de oportunidades para los trabajadores, proscribiendo toda forma de discriminación entre éstos. En efecto, la norma acusada hace nugatorio el derecho al pago de cesantías parciales de aquellos servidores públicos que decidieron continuar sometidos al régimen de cesantías retroactivas. A juicio del demandante, "no es permitido que una reforma al sistema jurídico en el campo laboral propicie la pérdida o la discriminación del derecho que tiene el trabajador. Pues el pago de sus cesantías y prestaciones no es una nueva carga del patrón o empleador, sino una prestación diferida que nace y se adquiere a partir del momento de la iniciación de la relación laboral".</p> <p>Por último, manifiesta que el artículo 14 de la Ley 344 de 1996 conculca el artículo 23 del Estatuto Superior, toda vez que, a su amparo, la Administración puede dilatar indefinidamente las peticiones de pago de cesantías parciales que eleven los servidores públicos, con lo cual resulta afectado el mandato constitucional que dispone la resolución pronta y oportuna de las peticiones de los ciudadanos por parte de las autoridades públicas.</p> <p>2. El grupo de ciudadanos que demanda el artículo 18 de la Ley 344 de 1996 estima que esta norma contraviene el principio de igualdad (C.P., artículo 13) y, en particular, el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Efectivamente, el artículo acusado implica una infracción al principio del "salario igual por trabajo de igual valor" y, por ende, establece un trato discriminatorio que no cumple ninguna de las exigencias establecidas por la Corte Constitucional para justificar la consagración de tratamientos desiguales.</p> <p>Según los demandantes, la norma atacada viola los artículos constitucionales señalados cuando determina, por una parte, que aquellos servidores públicos que ocupen temporalmente cargos de mayor jerarquía, en casos de ausencia del titular, no podrán percibir el salario que éste último devengaba y, de otro lado, al establecer que la posibilidad de efectuar encargos se supedita a la existencia de una disponibilidad presupuestal previa.</p> <p>Consideran que si un trabajador, por razones del servicio, se ve obligado a ocupar temporalmente un cargo de mayor jerarquía que implica el desempeño de labores de mayor responsabilidad, tiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente a esas funciones. El pago de una remuneración de menor cuantía conlleva una violación a los derechos mínimos que la Constitución otorga a</p>
--	---



	<p>los trabajadores y, en particular, del principio "a trabajo igual salario igual". Sobre este particular, manifiestan que la mencionada discriminación "atenta contra la dignidad de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, (...). (E)n criterio de los suscritos demandantes no se ajusta a las normas de equidad y de justicia, que se le niegue a un magistrado(e) o juez (e), o cualquier otro de los cargos de la administración de justicia, el pago de la remuneración establecida por el Gobierno nacional para esos empleos, por el simple hecho de que lo haya desempeñado transitoriamente".</p> <p>Por otra parte, indican que la complejidad e importancia de las labores que corresponde desempeñar a las autoridades públicas, y a la administración de justicia en particular, exigen que, en caso de vacancia temporal de algún cargo, éste deba ser ocupado necesariamente por otro funcionario. Si ello no es posible, los principios orientadores de la administración de justicia y aquellos que rigen la función administrativa (celeridad, eficacia y cumplimiento) resultan quebrantados. Así mismo, al supeditar la realización de encargos a la existencia de la correspondiente disponibilidad presupuestal, se obliga al funcionario titular a permanecer en su cargo sin la posibilidad de ejercer derechos tales como las vacaciones o la solicitud de licencias que implican una desvinculación temporal del servicio.</p> <p>Por último, los actores señalan que el artículo acusado contraviene normas expresas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996, artículos 132 y 138) que establecen la posibilidad de efectuar encargos y de que el encargado perciba el salario correspondiente al cargo que ocupa temporalmente.</p> <p>3. En su demanda, el ciudadano Gerardo Gutiérrez Bravo manifiesta que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 vulnera el principio de dignidad humana (C.P., artículo 1º) y la finalidad esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales (C.P., artículo 2º), toda vez que "condiciona el derecho al trabajo a la renuncia del disfrute de la pensión de los servidores públicos, es decir, se limita uno cualquiera de dos derechos, el del disfrute de la pensión o el del trabajo".</p> <p>Señala que las personas, una vez han cumplido los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión, adquieren este derecho en forma incondicional, el cual entra a formar parte de su patrimonio, pudiéndolo disfrutar de manera inmediata, sin condicionamiento ni limitante algunos. Sin embargo, la norma acusada impone unos límites que equivalen a la renuncia del mencionado derecho. En efecto, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 supedita la adquisición del derecho a la pensión a una renuncia al derecho al trabajo, toda vez que el trabajador que opta</p>
--	--

	<p>por el primero de estos derechos no puede continuar vinculado al servicio público. De igual modo, si el servidor decide continuar en su empleo, ello implica una renuncia a su derecho a la pensión, pese a haber cumplido con los requisitos señalados por ley para disfrutarlo.</p> <p>Opina, así mismo, que el límite impuesto por el artículo demandado al derecho a la pensión de los servidores públicos vulnera el artículo 58 del Estatuto Superior, en el sentido de que se trata de un derecho adquirido que ha perdido su principal garantía, la cual consiste en ser respetado.</p> <p>A juicio del demandante, la norma acusada viola el principio de igualdad (C.P., artículo 13), como quiera que establece una discriminación "odiosa e injustificada" entre los servidores públicos y los trabajadores privados en punto al acceso al derecho a la pensión. Efectivamente, mientras la Ley 100 de 1993 no consagra diferencia alguna entre las dos categorías de trabajadores antes mencionadas a efectos de adquirir los derechos que ella consagra, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 quebranta la igualdad, toda vez que los servidores públicos no pueden disfrutar de su derecho adquirido a la pensión mientras continúen laborando, en tanto que los trabajadores privados sí pueden hacerlo. Considera que, si bien existen diferencias entre los servidores públicos y los trabajadores privados, ello no puede llegar hasta el punto de que éstos últimos tengan "mayores y mejores beneficios, cuando lo lógico sería lo contrario, toda vez que aquellos por mandato constitucional tienen mayores obligaciones y deberes que estos".</p> <p>Por otra parte, el libelista considera que la norma demandada entraña una vulneración al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P., artículo 16), como quiera que obliga indebidamente al servidor público que desea disfrutar de su derecho a la pensión a renunciar a su derecho al trabajo o, al contrario, presiona al trabajador a renunciar a su derecho a la pensión si desea seguir laborando.</p> <p>Así mismo, estima que el artículos 25 y 53 de la Carta resultan quebrantados, por cuanto "el derecho a recibir la pensión, una vez se haya adquirido el derecho conforme a la ley que lo creó, no puede condicionarse al retiro del trabajador, y tampoco se puede constituir la renuncia al disfrute de la pensión de los servidores públicos, como una obligación para ejercer el trabajo, (...)". De igual manera, afirma que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 desconoce los principios mínimos fundamentales en materia del derecho al trabajo consagrados en el artículo 53 de la Constitución (igualdad de oportunidades para los trabajadores; estabilidad; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas</p>
--	---

	<p>laborales; facultad de transigir sobre derechos "ciertos y no discutibles"; situación más favorable para el trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; y, pago oportuno de pensiones) y el principio según el cual "la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".</p> <p>En opinión del libelista, el artículo acusado desconoce los derechos de las personas de la tercera edad (C.P., artículo 46), toda vez que cuando se obliga a los servidores públicos a retirarse de su cargo para poder disfrutar de su derecho a la pensión se contraviene el deber estatal de promover la integración de estas personas a la vida activa y comunitaria. Sobre este punto señala que "una de las formas de mantener y desarrollar el mandato constitucional del artículo 46, es precisamente permitiendo que los servidores públicos que adquieran legalmente su derecho pensional puedan continuar laborando, lógicamente sin sobrepasar la edad de retiro forzoso, (...)".</p> <p>Plantea, también, que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 vulnera el artículo 158 de la Constitución Política, en cuanto desconoce el principio de unidad de materia. En efecto, si la finalidad de la Ley 344 de 1996 consiste en la racionalización del gasto público, el artículo 19 en nada contribuye a este objetivo, como quiera que el cargo que deja vacante el servidor público que opta por su derecho a la pensión debe ser ocupado por un nuevo trabajador que lo reemplaza y que, por tanto, tiene derecho a recibir el salario correspondiente. De otro lado, la pensión que recibe el trabajador no se paga con recursos del Estado sino del propio servidor, los cuales - según el nuevo régimen pensional de la Ley 100 de 1993 - provienen del ahorro que el trabajador ha efectuado durante su vida laboral. Por estas razones, la norma demandada ni racionaliza ni ahorra recursos estatales y, por ende, es "inane para el Tesoro Nacional".</p> <p>Acerca de la vulneración al principio de unidad de materia, el demandante también anota que "al señalarse en una ley que tiende a racionalizar el gasto público, un nuevo requisito para el disfrute de las pensiones de los servidores públicos, el mandato superior resultó violado, pues en una ley como la 344/96, no se podían tratar o incluir aspectos distintos a los que tienden a racionalizar el gasto público, y como el condicionamiento efectuado en el artículo 19 de la ley 344/96 modificó el régimen pensional de esos servidores, que es tema de la órbita natural de la seguridad social, conclúyase que se violó la Constitución en su artículo 158".</p> <p>En relación con la violación al artículo 150 de la Carta por parte de</p>
--	--

	<p>la norma demandada, el actor puntualizó que ésta se producía a raíz de la fijación del régimen prestacional de los servidores públicos, que es una materia que debe ser desarrollada por el Ejecutivo, con base en una ley marco expedida por el Congreso de la República (C.P., artículo 150-19, literales e) y f)). En efecto, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, que es una ley ordinaria, no podía regular un asunto que es materia de ley cuadro.</p> <p>Por último, manifestó que las disposiciones contempladas por el artículo acusado no tienen relación alguna con la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución, según el cual nadie puede desempeñar más de un empleo público en forma simultánea ni puede percibir más de una asignación proveniente del tesoro nacional. Ciertamente, "la mesada pensional no puede asimilarse a la asignación (remuneración) que recibe un funcionario por sus servicios, pues ella tiene causa y fines distintos; la mesada pensional no se reconoce como contraprestación a un servicio actual como es el sueldo, sino que se reconoce como una devolución de los ahorros que el trabajador y el empleador han efectuado por mandato legal para materializar la protección que brinda el servicio público de la seguridad social a las personas que durante mucho tiempo han aportado al sistema; (...)".</p> <p>Con base en estas consideraciones, el actor concluye que la pensión y el salario son dos asignaciones de naturaleza distinta a las cuales no es aplicable la prohibición contenida en el artículo 128 del Estatuto Superior. En efecto, las cotizaciones por concepto de la seguridad social no son ni tasas ni contribuciones sino recursos de propiedad de los trabajadores, incluso en el caso de aquellas pensiones administradas por el Instituto de los Seguros Sociales.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-586/97
Fecha de la sentencia	trece (13) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Manuel Augusto López Noriega
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 (parcial) de la Ley 344 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-428/97 del 4 de septiembre de 1997, en lo referente a la constitucionalidad del artículo 18 de la Ley 344 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima la demandante que la disposición acusada es violatoria de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>El demandante considera que el inciso primero del artículo 18 de la Ley 344 de 1996 vulnera el artículo 13 de la Constitución Política porque consagra un trato desigual para los servidores públicos que, por razón de la ausencia del titular de un cargo público, deben desempeñar este cargo de manera provisional, pues la disposición demandada les niega la remuneración correspondiente a dicho cargo, pasando por alto que para ejercerlo han debido cumplir con los mismos requisitos legales y asumido las mismas responsabilidades del titular.</p> <p>Adicionalmente, el inciso demandado vulnera el artículo 53 de la Carta Fundamental que establece la retribución proporcional de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo, pues le niega a los servidores públicos el acceso a la diferencia salarial existente entre el cargo del cual son titulares y aquél de mayor jerarquía que se les encarga, desconociendo flagrantemente que la cantidad, calidad y responsabilidad laborales se incrementan en el encargo.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-468/97
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 347 de 1997. "Por medio de la cual se aprueban las "Recomendaciones 171 sobre los servicios de salud en el trabajo; 172 sobre la utilizaci3n del asbesto en condiciones de seguridad; 173 sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto; 174 sobre la repatriaci3n de la gente de mar; 176 sobre el fomento del empleo y la protecci3n contra el desempleo; 178 sobre el trabajo nocturno; 179 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares y 180 sobre la protecci3n de los cr3ditos laborales en caso de insolvencia del empleador", adoptadas por la Conferencia General de la Organizaci3n Internacional del Trabajo."
Conoci3 en primera instancia	Alejandro Mart3nez Caballero
Decision	<p>Primero: Declarar INEXEQUIBLE la Ley 347 del 16 de enero de 1997, "por medio de la cual se aprueban las Recomendaciones 171 sobre los servicios de salud en el trabajo; 172 sobre la utilizaci3n del asbesto en condiciones de seguridad; 173 sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto; 174 sobre la repatriaci3n de la gente de mar; 176 sobre el fomento del empleo y la protecci3n contra el desempleo; 178 sobre el trabajo nocturno; 179 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares y 180 sobre la protecci3n de los cr3ditos laborales en caso de insolvencia del empleador", adoptadas por la Conferencia General de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, por vicios de forma.</p> <p>Segundo: INHIBIRSE para conocer del contenido sustancial de las Recomendaciones 171 sobre los servicios de salud en el trabajo; 172 sobre la utilizaci3n del asbesto en condiciones de seguridad; 173 sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto; 174 sobre la repatriaci3n de la gente de mar; 176 sobre el fomento del empleo y la protecci3n contra el desempleo; 178 sobre el trabajo nocturno; 179 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares y 180 sobre la</p>

	protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador", adoptadas por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional de la Ley 347 de 1997. "Por medio de la cual se aprueban las "Recomendaciones 171 sobre los servicios de salud en el trabajo; 172 sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad; 173 sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto; 174 sobre la repatriación de la gente de mar; 176 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo; 178 sobre el trabajo nocturno; 179 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares y 180 sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador", adoptadas por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo."
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI. DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO</p> <p>LEY APROBATORIA DE RECOMENDACION DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Improcedencia de la inconstitucionalidad/Aprobación de tratados internacionales</p> <p>Señalar, como lo ha hecho la Corte, que la ley aprobatoria es inconstitucional por recaer sobre una Recomendación, con el sólo argumento de que no se trata de un instrumento vinculante para el Estado colombiano, implica -a mi modo de ver- la deducción de una consecuencia exagerada, que repercute en los alcances de la función de guarda de la supremacía e integridad de la Constitución, pues, si bien es cierto son las cláusulas de los tratados internacionales las que constituyen objeto primordial del control previsto en el artículo 241-10 Ibídem, el examen previo de los instrumentos internacionales, en su sentido amplio, asegura la intangibilidad de la Carta Política y previene hacia el futuro eventuales choques entre la órbita internacional y la interna. Y en verdad no queda muy claro el motivo por el cual -según la Corte- el Congreso violó las normas constitucionales por el sólo hecho de haber aprobado la Recomendación, que le fue remitida por el Gobierno justamente para ese efecto. Ninguna disposición constitucional prohíbe que el Congreso ejerza su función en este aspecto de manera integral, cobijando con su previo estudio y aprobación todos los instrumentos jurídicos inherentes al desarrollo y aplicación de los tratados internacionales, entre otras razones por la muy importante de que, bajo la apariencia de otros actos no denominados "tratados", pueden ser éstos modificados o adicionados "de hecho", o en tales instrumentos pueden aparecer</p>

	<p>en realidad reglas que deberían ser propias de ellos.</p> <p>RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Exclusión de control de constitucionalidad</p> <p>En una Recomendación de la O.I.T o de cualquier otro organismo internacional pueden existir proposiciones, propuestas o llamados que el Gobierno Nacional u otras autoridades tomen como facultades o atribuciones que les permitan actuar en determinado sentido opuesto a la Constitución Política. El no pasar por el tamiz de la aprobación del Congreso y, en consecuencia, al estar excluidas del control constitucional que ejerce la Corte, se tendría expedita la vía para superponer los contenidos de las recomendaciones, aplicándolos en la práctica por encima de la Constitución o sin importar sus mandatos.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-421/97
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del Acuerdo de cooperaci3n en materia de turismo entre la Rep3blica de Colombia y el Reino de Espa1a, firmado en Santaf3 de Bogot3 el 9 de junio de 1995 y de la Ley 350 del 16 de enero de 1997, aprobatoria del mismo
Conoci3 en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES el Acuerdo de cooperaci3n en materia de turismo entre la Rep3blica de Colombia y el Reino de Espa1a, suscrito en Santaf3 de Bogot3, el 9 de junio de 1995, y la Ley 350 del 16 de enero de 1997, aprobatoria del mismo.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional del Acuerdo de cooperaci3n en materia de turismo entre la Rep3blica de Colombia y el Reino de Espa1a, firmado en Santaf3 de Bogot3 el 9 de junio de 1995 y de la Ley 350 del 16 de enero de 1997, aprobatoria del mismo
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-422/97
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	
Demandado	Revisi3n oficiosa de la “Ley 354 del 20 de enero de 1997, por medio de la cual se aprueba el ‘Estatuto del Centro de Ciencia y Tecnolog3a del Movimiento de los Pa3ses no Alineados y otros pa3ses en

	Desarrollo', hecho en Nueva York el 4 de febrero de 1985"
Conoció en primera instancia	VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLE el "Estatuto del Centro de Ciencia y Tecnología del movimiento de los países no alineados y otros países en desarrollo", suscrito en Nueva York el 4 de febrero de 1985, así como su ley aprobatoria, esto es, la ley 354 de enero 20 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión oficiosa de la "Ley 354 del 20 de enero de 1997, por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto del Centro de Ciencia y Tecnología del Movimiento de los Países no Alineados y otros países en Desarrollo', hecho en Nueva York el 4 de febrero de 1985"
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-401/97
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1.997).
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 356 del 21 de enero de 1997 “por medio de la cual se aprueban el “Protocolo relativo a las 1reas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protecci3n y el desarrollo del medio marino de la regi3n del Gran Caribe” hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos al Protocolo relativo a las 1reas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la protecci3n y el desarrollo del medio marino de la regi3n del Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991.”.
Conoci3 en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Declarar EXEQUIBLES el “Protocolo relativo a las 1reas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protecci3n y el desarrollo del medio marino de la regi3n del Gran Caribe” hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos al protocolo relativo a las 1reas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protecci3n y el desarrollo del medio marino de la regi3n del Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991, as3 como la Ley 356 de 1997 del 21 de enero de 1997.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 356 del 21 de enero de 1997 “por medio de la cual se aprueban el “Protocolo relativo a las 1reas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protecci3n y el desarrollo del medio marino de la regi3n del Gran Caribe” hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos al Protocolo relativo a las 1reas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la protecci3n y el desarrollo del medio marino de la regi3n del Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991.”.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA

Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-582/97
Fecha de la sentencia	trece (13) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 357 del 21 de enero de 1997, por medio de la cual se aprueba la "Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas", suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971.
Conoció en primera instancia	Dr. José Gregorio Hernández Galindo
Decision	Primero.- Decláranse EXEQUIBLES la Ley 357 del 21 de enero de 1997 y la "CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS", suscrita en Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971, que mediante ella se aprueba
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de constitucionalidad de la Ley 357 del 21 de enero de 1997, por medio de la cual se aprueba la "Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas", suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-446/97
Fecha de la sentencia	diez y ocho (18) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Javier Antonio Villanueva y Luis Fernando Aguirre
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 226 (parcial) del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, modificado por la ley 81 de 1993.
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA
Decision	Declárase EXEQUIBLE el artículo 226 del decreto 2700 de 1991.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>a. La demanda.</p> <p>Se plantea la incompatibilidad del artículo 226, parcialmente acusado, con el artículo 228 de la Carta Política.</p> <p>Según los demandantes, la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación por incumplimiento de los requisitos legales, hace que prevalezca lo formal sobre lo sustancial, lo que en su concepto, constituye una clara violación del precepto constitucional que consagra la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.</p> <p>Además, consideran que quien sufre el castigo, consistente en declarar desierto el recurso de casación, es el condenado, en desmedro de su derecho de defensa, cuando la responsabilidad sería del abogado que cometió el yerro.</p> <p>Con base en estos argumentos, solicitan se declare la inexequibilidad del aparte acusado de la norma.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-157/97

Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Demandante	Santiago González Angarita.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° y 2° de la Ley 308 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	En los términos de esta Sentencia, decláranse EXEQUIBLES los artículos 1 y 2 de la Ley 308 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que las normas acusadas vulneran los artículos 29, 51, 58, 60 y 64 de la Constitución Política.</p> <p>Manifiesta que la disposición acusada vulnera el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que desconoce lo establecido en el artículo 762 del Código Civil colombiano, relativo a la posesión, el cual contempla distintas situaciones administrativas, cuya competencia corresponde a las autoridades de policía, con el propósito de amparar y legitimar la mera tenencia o la posesión de inmuebles.</p> <p>De otra parte, afirma que el artículo constitucional, que consagra el derecho que le asiste a todos los colombianos a tener vivienda digna, resulta violado por la norma legal demandada, teniendo presente que el Estado colombiano ha sido inoperante al no desarrollar con eficacia y amplitud un verdadero programa de vivienda social que solucione las necesidades económicas de la población colombiana.</p> <p>En relación con la violación al precepto constitucional que garantiza el derecho a la propiedad privada (artículo 58 C.P.) y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, menciona que el artículo 367A del Código Penal, modificado por una de las normas atacadas, olvida, desconoce y desacata los preceptos establecidos en el Código Civil, en el de Policía y en la legislación agraria, así como en la normatividad administrativa, disposiciones todas éstas que amparan, protegen y legalizan la tenencia y posesión de bienes inmuebles. Así mismo, considera el impugnante que el legislador, al expedir la ley demandada, no hace otra cosa que impedir el disfrute y goce del derecho a la propiedad, al establecer requisitos adicionales para su garantía, infringiendo principios constitucionales, civiles y procedimentales.</p>

	Por último, argumenta el demandante que sancionar penalmente la conducta de parcelar bienes inmuebles en zonas rurales implica el desconocimiento de la realidad social que enfrentan los campesinos colombianos, y, por otra parte, el quebranto de la legislación agraria creada mediante Decreto 2303 de 1989, y su régimen normativo anterior, como son las leyes 200 de 1936 y 4ª de 1973.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-658/97
Fecha de la sentencia	tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Orlando Muñoz Neira
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2° de la Ley 308 de 1996, que adicionó el artículo 367 del Código Penal.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLES las expresiones “el capítulo VII del título XIV”, “el cual quedará inserto a continuación del artículo 367 de la obra citada :”, y “Artículo 367A”, contenidas en el artículo 2° de la Ley 308 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>Estima el demandante que la norma acusada es violatoria de los artículos 51, 58, 63, 82, 313-7, 339, 366 y 367 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>Luego de hacer un extenso análisis sobre el desarrollo legislativo que ha vivido el país en relación con el control y la vigilancia del uso del suelo, con las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a la vivienda y, en general, con el tema del desarrollo urbanístico, el demandante considera que la norma acusada, al ubicar el tipo penal llamado “Urbanizador ilegal” dentro de los delitos querellables, desconoce la importancia que la Carta Fundamental le concede a la vivienda digna, así como a la inalienabilidad del espacio público.</p> <p>Para el actor resulta absurdo que el delito de urbanización ilegal, que por sus características especiales afecta no sólo intereses privados sino públicos, pues genera consecuencias perjudiciales para el servicio de planeación de la ciudad, para el entorno arquitectónico, para el espacio público y el bienestar general, esté incluido en el capítulo de los llamados delitos querellables del Código Penal; delitos que por definición sólo pueden ser investigados mediante queja del afectado, la cual, además, puede ser desistida, y cuya estimación de perjuicios puede ser transigida. Esta posibilidad, la de que el delito sea desistido o conciliado,</p>



	<p>permite, al parecer del demandante, que entre el comprador y el constructor se decidan temas propios de planeación municipal, lo cual va en contravía evidente del artículo 313-7 de la Constitución Política según el cual, a los concejos municipales les compete “Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.”</p> <p>En últimas, considera la demanda que “si la oficina de planeación de cualquier municipio quiere denunciar penalmente a un urbanizador ilegal, como no es querellante legítimo, su libelo está destinado a una fácil y rápida resolución inhibitoria. Ello es así, porque el delito de “Urbanizador ilegal”, por virtud de la inteligencia de la Ley 308 de 1996, quedó inserto en un título de hechos punibles que atentan contra el patrimonio económico, y no, como debió serlo, en el título de delitos que atacan el orden económico y social.”</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-604/97
Fecha de la sentencia	veinte (20) de mil novecientos noventa y siete (1997)
Demandante	Luis Simon Sierra Benitez Y Otros, Sabel Reinerio Arevalo Arevalo Y Jorge Mario Arias Davila
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 61 de la Ley 383 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Primero. - Declarar INEXEQUIBLE el artículo 61 de la Ley 383 de 1997
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Proceso D-1835</p> <p>Los actores, quienes se encuentran vinculados a la rama judicial, señalan que la directora ejecutiva de la administración judicial, con sede en Santa Fe de Bogotá, dispuso, mediante la circular N°091 del 28 de agosto de 1997, que el descuento de los tres días de la prima de vacaciones que ordena el artículo objeto de este proceso se efectúe también a los servidores de la rama judicial.</p> <p>Sostienen que durante muchos años, hasta que se dictó la sentencia C-273 de 1996 de la Corte Constitucional, se descontó de sus primas de vacaciones el valor correspondiente a tres días de trabajo - destinado, inicialmente, al Fondo Nacional de Bienestar Social y, luego, a la Cooperativa de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público. Afirman que “ese dinero todo se perdió porque la verdad sea dicha, ninguno de nosotros disfrutó de esos dineros y hasta el momento no SABEMOS QUE OCURRIO con esos aportes que por largo tiempo nos DESCONTARON”.</p> <p>Expresan que el aporte obligatorio que se establece en el artículo acusado, en favor de PROSOCIAL y a cargo de todos los servidores públicos del orden nacional, vulnera los artículos 16, 58, 334 y 336 de la C.P.</p> <p>Afirman que en la sentencia C-273/96 de esta Corporación se declaró la inexequibilidad del artículo 1° de la Ley 54 de 1983, el cual tenía un contenido similar al del artículo 61 de la Ley 383 de 1997. Solicitan que se acate dicho fallo y se respeten los derechos</p>

	<p>adquiridos por los trabajadores a recibir la totalidad del valor de las primas vacacionales, “sin hacer los aportes obligatorios de tres días a Prosocial dinero éste que a la larga se pierde porque en ningún momento será reintegrado”.</p> <p>Proceso D -1840</p> <p>El actor considera que la disposición acusada vulnera el preámbulo de la Constitución y los artículos 2, 13, 53, 58, 158, 333 y 338 de la misma. Sostiene que las prestaciones sociales son obligaciones a cargo del empleador y en favor del trabajador, que han sido reconocidas a través de la ley. Es entonces obligación del Estado velar permanentemente por su protección.</p> <p>Afirma que la norma acusada desconoce el derecho del trabajador a las prestaciones sociales, puesto que ordena que de la prima de vacaciones que se cancela a los servidores públicos del orden nacional se descuenta lo correspondiente al valor de tres días. Ello constituye una clara violación del artículo 53 de la Carta.</p> <p>Expresa, además, que la norma introduce diferenciaciones inaceptables entre los trabajadores, pues el descuento solamente se aplica a los trabajadores públicos del orden nacional, dejando de lado a los demás trabajadores públicos y a los trabajadores del sector particular.</p> <p>Alega que no puede sostenerse que la prima de vacaciones sea una expectativa y que, por lo tanto, el Estado puede disponer sobre una parte de ella. La prima de vacaciones es un derecho adquirido del trabajador. Por lo tanto, “no está legitimado el Estado para pretender arrebatarse a sus trabajadores del orden nacional el producido de su esfuerzo tanto material como intelectual so pretexto de que perseguirá con ese ‘ASALTO’ unos fines sociales como son los de la recreación”.</p> <p>De otro lado, expresa que Prosocial fue creada mediante el Decreto 1250 de 1974, “con el objeto de promocionar y financiar programas destinados a proporcionar descanso durante las vacaciones y la recreación de toda clase de asalariados tanto del sector público como privado.” Manifiesta que se constituyó como una empresa industrial y comercial del Estado y que para su financiación no se pensó en acudir a contribuciones parafiscales. Sostiene que ello habría sido un absurdo, pues no es de la esencia de las empresas industriales y comerciales del Estado financiarse con tributos de sus beneficiarios. Además, habría colocado al Estado “en notoria posición ventajosa frente a las Cajas privadas que cumplen la misma finalidad, que se financian con los aportes de los empleadores y la rentabilidad de los servicios que ofrecen tanto a</p>
--	---

	<p>sus afiliados como a la ciudadanía en general”.</p> <p>De otra parte, asevera que las contribuciones parafiscales solo pueden estar dirigidas a usuarios y aforados, “situación que no se da para muchos servidores del Estado del orden nacional (...) lo que conlleva a presumir más bien que no es el fin social el que se persigue sino el de salvar las finanzas de Prosocial a cargo de los trabajadores”.</p> <p>Finalmente, en relación con la violación del principio de la unidad de materia, consagrado en el artículo 158 de la C.P, sostiene que el objetivo de la Ley 383 de 1997, es la lucha contra la evasión y el contrabando y que el artículo 61 de la misma “no tiene relación de causalidad tanto temática como sistemática en el logro del objetivo a cargo del Estado de controlar la evasión y el contrabando”.</p> <p>El 11 de noviembre, el actor envió al Magistrado Ponente un escrito en el que le solicita que al declarar la inexequibilidad de la norma acusada “[se] disponga en la parte resolutive de la decisión que el fallo produce efectos retroactivos”.</p> <p>Proceso D-1850</p> <p>El demandante considera que la norma atacada vulnera los artículos 16, 53 y 158 de la C.P. Expresa que vulnera el derecho de las personas a “decidir la forma y lugar como quieran disfrutar sus vacaciones, pues consagra la expedición de un certificado sobre el valor que aporte cada persona para obtener bajos costos en sus planes vacacionales, esto es, reduce el espacio dentro del cual cada aportante, podría recrearse o descansar, pues es bien sabido que Prosocial cuenta con muy pocos centros vacacionales, y los que existen son de baja calidad y se encuentran en completo abandono por parte del Estado, por lo que los mismos no pueden brindar al contribuyente un servicio que satisfaga sus primarias necesidades recreacionales, lo cual es fundamental para todo ser humano”.</p> <p>Sostiene que la recreación es un derecho personal, y que el legislador no puede a través de una ley o un decreto restringir su goce a un determinado lugar o institución: “cada individuo gozará como mejor le plazca sus vacaciones. Algunos querrán únicamente dormir, otros ver televisión, otros pescar, caminar o leer, y habrá otros que ni siquiera podrán desplazarse a dichos centros recreacionales por cuestiones de salud.”</p> <p>Considera, igualmente, que la norma vulnera los derechos adquiridos del trabajador a recibir 15 días de vacaciones remuneradas por año servido. Adicionalmente, manifiesta que el principio de la unidad de materia es conculcado, puesto que la</p>
--	--

	norma demandada no “tiene ninguna relación objetiva y razonable con la temática general y la materia dominante de la ley de la cual hace parte”. En efecto, la Ley 383 de 1997 está destinada a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando. Así, el actor se pregunta: “en qué contribuye el obligado descuento a la lucha contra la evasión y el contrabando, pues el mismo irá a las arcas de Prosocial, entidad que nada tiene que ver con la DIAN o cualquier otro establecimiento dependiente de ésta? Existirá en este país una persona capaz de probar cuál es la relación existente entre el citado canon y el título de la ley para que así no se infrinja la unidad de materia a que alude el artículo 158 de la Carta Política?”.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

### SENTENCIAS DE 1998

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C – 140 de 1998
<b>Fecha de la sentencia</b>	quince (15) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).
<b>Demandante</b>	Jorge Enrique Ibañez Najar
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 de la ley 344 de 1996 y el decreto 1670 de 1997.
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
<b>Decision</b>	<p>Primero: Declarar <b>EXEQUIBLE</b> la ley 344 de 1996 y el artículo 30 de la misma, únicamente en relación con los cargos analizados en esta sentencia.</p> <p>Segundo: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-428/97 sobre la precisión de las facultades extraordinarias.</p> <p><b>TERCERO:</b> Declarar <b>INEXEQUIBLE</b> el decreto 1670 del 27 de junio de 1997, "Por el cual se suprime la Oficina del Comisionado Nacional de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional". La presente</p>

	decisión rige a partir del día siguiente al de la notificación.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p><b>1. Inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 344 de 1996</b></p> <p>El demandante considera que el artículo 30 de la ley 344 de 1996 viola el artículo 150-10 de la Constitución, al desconocer algunos de los requisitos exigidos en dicha norma, a saber:</p> <p><i>1.1 El Gobierno no justificó la necesidad y la conveniencia</i></p> <p>Dice el actor que en el caso objeto de demanda, el Gobierno al presentar el proyecto de ley 89/96 Senado, "planteó varias alternativas para solucionar la crisis fiscal por la que atraviesa el país principalmente para atacar en forma frontal los problemas estructurales del gasto público que llevó a un creciente deterioro del ahorro corriente, entendido como la diferencia de los ingresos corrientes, menos los gastos de funcionamiento e intereses de la deuda, que pasó de una situación positiva equivalente al 0.8% del PIB en 1990, a una negativa de 2.4% del PIB en 1996..... en el caso de los servicios personales, el crecimiento proviene de las nuevas instituciones creadas en la Constitución (0.47 puntos), de la nivelación salarial de la fuerza pública (0.28 puntos), de la rama judicial (0.1 puntos) y otras provenientes de reclasificaciones de plantas (0.1 puntos)."</p> <p>Para resolver tal problema el Gobierno señaló algunas alternativas que aparecen consignadas en la exposición de motivos del proyecto de ley y solicitó al Congreso facultades para: "cambiar la naturaleza jurídica y suprimir, fusionar o reestructurar órganos y entidades del orden nacional con el propósito de racionalizar y reducir el gasto público. De la fusión de órganos y entidades puede surgir una tercera sin que ello se considere la creación de una nueva."</p> <p>En consecuencia, sostiene que para justificar la concesión de facultades, el Gobierno al solicitarlas y el Congreso al concederlas ha debido tener en cuenta "si existían dependencias, órganos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que desarrollaran las mismas funciones o trataran las mismas materias, para demostrar la necesidad y conveniencia de fusionarlas o suprimirlas con el fin de</p>

	<p>reducir o racionalizar el gasto público". Igualmente, debía estudiar "existían algunas de esas mismas entidades que cumplieran en forma ineficiente sus funciones, utilizando indicadores para medir la eficiencia o ineficiencia, como también establecer si con la fusión o supresión de dependencias se obtendría la finalidad de racionalizar el gasto público".</p> <p>En conclusión a lo expuesto señala el accionante que "el Gobierno reconoció en la exposición de motivos del proyecto que los problemas fiscales originados por los servicios personales provenían de factores distintos al tamaño de la rama ejecutiva del orden nacional, al tiempo que simplemente solicitó facultades extraordinarias para cambiar la naturaleza de entidades, suprimirlas, fusionarlas o reestructurarlas con el propósito de racionalizar y reducir el gasto público, sin que se hubiera demostrado, para que se aprobara esta norma, la necesidad o la conveniencia pública de pedir las con el objeto de que el Congreso otorgara las facultades solicitadas, razón por la cual ello debe conducir a que se declare la inexequibilidad del artículo acusado".</p> <p><i>1.2 Las facultades conferidas para suprimir o fusionar entidades no son precisas</i></p> <p>Afirma el demandante que las facultades conferidas en el artículo 3 de la ley 344/96 al Presidente de la República, "son imprecisas porque aunque se señaló un límite orgánico -las entidades, órganos o dependencias de la rama ejecutiva del Poder Público del orden nacional-, el es tan amplio como infinito, puesto que nadie sabe cuántas entidades, órganos o dependencias de la rama ejecutiva del poder público existen en Colombia. La afirmación es aterradora, pero es cierta. Ninguna autoridad pública sabe cuántos órganos y entidades existen y cuántas dependencias de éstas."</p> <p><i>1.3 No podían conferirse facultades para fusionar o suprimir dependencias u oficinas de una misma organización administrativa</i></p> <p>Sostiene el accionante que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150-7 de la Constitución, corresponde al Congreso "determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica. La Facultad que incluye la de señalar las dependencias que componen</p>
--	---

	<p>cada una de esas entidades. Entonces, "creada una entidad por la ley definida en ella su estructura básica, la modificación de dicha estructura ya no corresponde al Congreso sino al Gobierno, el cual debe obrar para tal efecto con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley, según lo ordena el artículo 189 de la Constitución Política..... Dicha ley es una ley marco que debe definir los principios y reglas generales para que el Gobierno proceda de conformidad". Por tanto, si el Congreso no tiene competencia para modificar la estructura de una entidad administrativa del orden nacional y, por ende, para crear, suprimir, fusionar o reestructurar las dependencias que la integran, no puede conferir facultades extraordinarias al Gobierno para trasladarle, pro tempore, una competencia legislativa de que carece. Hacerlo implica arrebatársela al Congreso y trasladársela al Gobierno y trasladársela para que la ejerza sólo temporalmente, con franca violación de la Constitución Política."</p> <p><i>1.4 La aprobación de la disposición acusada no se hizo por mayoría calificada</i></p> <p>La concesión de facultades, de acuerdo con el artículo 150-10 de la Carta, requiere de la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras. El artículo 30 de la ley, según el acta de la sesión plenaria del 11 de diciembre de 1996 del Senado de la República, no fue aprobado, puesto que luego de realizada la votación nominal, obtuvo 40 votos a favor y 16 en contra. Ello significó que dicho artículo no fue aprobado por no tener la votación reglamentaria, según se lee en la Gaceta del Congreso No. 615 del 2 de diciembre de 1996". Sin embargo, posteriormente se presentó un artículo sustitutivo que es igual al texto del artículo 30 de la ley, el cual también fue aprobado irregularmente por 56 votos afirmativos y 16 negativos, puesto que el artículo en estudio era el aprobado por las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, pero al presentarse el artículo sustitutivo que propuso la supresión de aquél, era éste el que estaba en consideración. Entonces "siendo éste un artículo sustitutivo se votó primero en la sesión del 11 de diciembre y se negó, por lo cual se pasó a discutir el artículo 30 del proyecto, el cual no fue aprobado en la sesión del 11 por no alcanzar la votación reglamentaria, razón por la cual fue negado. La revocatoria de esta decisión y la reapertura de la discusión no fue aprobada reglamentariamente, razón por la cual, no podía existir un artículo sustitutivo como el que se votó. En consecuencia, el artículo 30 del proyecto que otorgaba las facultades</p>
--	---



	<p>extraordinarias fue negado y el artículo sustitutivo no fue aprobado reglamentariamente, razón por la cual el trámite del proyecto, en cuanto se refiere a este artículo adolece de un vicio insubsanable, por lo cual debe ser declarado inexecutable."</p> <p><i>1.5 No se cumplieron los términos establecidos en el artículo 160 de la Constitución</i></p> <p>Manifiesta el actor que la Plenaria del Senado de la República terminó de evacuar el trámite del proyecto de ley, en segundo debate, el 12 de diciembre de 1996 y la Cámara de Representantes inició ese mismo día el trámite del segundo debate, lo cual es inconstitucional. Además la discusión se inició sin que los miembros de la Cámara tuvieran copia de la Gaceta en la que aparece el proyecto o fotocopia de éste, pues ella se publicó el 27 de diciembre de 1996.</p> <p><i>1.6 La norma acusada se aprobó sin existir el quórum reglamentario</i></p> <p>La Cámara de Representantes aprobó el artículo 30 del proyecto de ley conforme a una propuesta sustitutiva que contenía tres alternativas, sin indicar el número de votos a favor, pues sólo se indicaron los votos en contra (5). Dicho artículo requería de la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es decir, 83 votos. Aunque aparentemente había quórum decisorio y votaron el número de representantes requerido, este aspecto, según el actor, debe verificarse "porque no hay claridad al respecto".</p> <p><i>1.7 No se aprobó el acta de conciliación en forma debida</i></p> <p>Durante las sesiones ordinarias que culminaron el 16 de diciembre de 1996, el Senado de la República no alcanzó a aprobar el texto del acta de conciliación, razón por la cual el Gobierno expidió el decreto 2273/97 convocando a sesiones extraordinarias al Congreso para los días 17, 18 y 19 de diciembre del mismo año, para que, entre otros asuntos, continuara con el trámite del proyecto de ley de racionalización del gasto público. Según el acta 001 de diciembre 17/96 de la plenaria del Senado, el acta de conciliación no fue presentada ni discutida en esa fecha por dicha corporación convocándose para el 16 de marzo de 1997. Entonces, sostiene el actor que al no aprobarse el acta de conciliación no se produjo la decisión final mediante la cual se haya repetido el segundo debate.</p>
--	---

	<p>según la exigencia prevista en el artículo 161 de la Carta. Por tanto, "el artículo e inclusive todo el texto de la ley debe ser declarado inexecutable por existir un vicio insubsanable."</p> <p><b>2. Inconstitucionalidad del decreto 1670 de 1997</b></p> <p><b>3.</b></p> <p>En lo que respecta a la inconstitucionalidad del decreto 1670 de 1997, manifiesta el actor que si el artículo 30 de la ley 344 de 1996, por las razones antes expuestas, es declarado inconstitucional igualmente deben serlo todos los decretos dictados en ejercicio de tales facultades, motivo por el cual solicita se declare inexecutable el decreto 1670 de 1997. Sin embargo, expone otros argumentos de inconstitucionalidad, a saber:</p> <p>El demandante hace una introducción en la que alude a las actividades que ha debido desarrollar el Gobierno para el debido ejercicio de las facultades. Igualmente, señala el alcance de cada una de las atribuciones conferidas, para concluir que la facultad para fusionar entidades comprendía la autorización para integrar o unir dos o más entidades que cumplieran las mismas funciones o materias. Y la de suprimir debía ejercerse respecto de aquellas entidades u órganos que cumplieran ineficientemente sus funciones, "y tenía que ser así porque no es posible agregar, integrar, unir o fusionar una entidad que cumple ineficientemente sus funciones a otra que sí las cumple eficientemente, por los riesgos que corre la segunda de contaminarse con la ineficiencia de la que recibe."</p> <p>Tampoco era posible trasladar funciones a organismos autónomos como ocurrió en el presente caso, pues se trasladaron "las funciones de veeduría ciudadana que cumplía la oficina del Comisionado Nacional de la Policía a la Procuraduría General de la Nación", lo cual afecta "funcionalmente la estructura y organización de una entidad respecto de la cual no se confirió facultad extraordinaria de ninguna naturaleza."</p> <p>2.1 Según el actor, el artículo 30 de la ley 344/96 no facultó al Gobierno para que en virtud de la fusión o supresión de entidades suprimiera cargos, ni para hacer erogaciones presupuestales por concepto de indemnizaciones de ninguna clase, pues si así hubiera sido se violaría la finalidad de la misma ley que era racionalizar y reducir el gasto público.</p> <p>2.2 El Gobierno mediante el decreto 218/97 conformó el Comité para la Reforma de la Administración Pública Nacional al que le trasladó "</p>
--	---

	<p>responsabilidad legal para el ejercicio de la función constitucional delegada por el Congreso de la República, concretamente de fusionar o suprimir entidades públicas, de la cual no hizo parte el Presidente de la República, ningún ministro sino solamente el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Dicho decreto fue reformado 38 días antes de vencerse las facultades para incluir al Consejero Presidencial para la Política Social, el director de la Misión Social del Departamento de Planeación Nacional y tres representantes de los movimientos sindicales."</p> <p>2.3 El Decreto 1670/97 al trasladar las funciones que cumplía la oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional a la Procuraduría General de la Nación, excedió las facultades extraordinarias conferidas, pues no existe duplicidad de funciones entre esas dos dependencias, por cuanto "la figura del Comisionado Nacional es algo así como un auditor de gestión al interior de la institución y tal como lo califica la ley un veedor en favor de la ciudadanía, que en ningún caso puede iniciar investigaciones disciplinarias por carecer de competencia para ello. El comisionado una vez recibida la queja de cualquier ciudadano debe darle traslado a la autoridad competente para investigarla que puede ser el oficial de la Policía que la ley determine o la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, considera que el Comisionado "no desarrolla las mismas funciones o trata las mismas materias que correspondan ni a la Procuraduría General de la Nación, ni a la Defensoría del Pueblo, ni a la Contraloría General de la República, ni a ninguna entidad, órgano o dependencia de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, entre ellas la oficina de Inspección General de la Policía Nacional que cumple funciones disciplinarias o cualquiera otra del Ministerio de Defensa Nacional". Además, señala que no existe ningún estudio que demuestre que la Oficina del Comisionado cumple ineficientemente sus funciones, por el contrario, se ha demostrado su eficacia, eficiencia y moralización en la Policía Nacional.... El hecho de que existieran roces, explicables o no, entre la Dirección General de la Policía y el Comisionado Nacional para la Policía, no significa que la solución jurídica fuera la supresión de la entidad."</p> <p>2.4 Dada la pluralidad de materias, surgía la necesidad de dictar pluralidad de decretos, pero tal pluralidad no admitía sino la expedición de uno para suprimir, otro para fusionar y otro para separar la dirección de impuestos y aduanas. "En consecuencia, dictado el primero de los decretos en virtud del cual se desarrolló</p>
--	---

	<p>materia de las supresiones, esto es, el decreto 1668/97, las facultades para suprimir entidades se agotaron, razón por la cual, los demás decretos, entre ellos el que es motivo de acusación (1670/97), se dictaron cuando ya se había agotado la competencia para ello por haber hecho el Gobierno uso de las facultades para suprimir y, por lo mismo, son inconstitucionales y así deberá declararlo la Corte Constitucional."</p> <p>2.5 Agrega el demandante que de acuerdo con los antecedentes de la ley 62/93 que creó la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía ésta cumple funciones de veeduría como expresión de la veeduría ciudadana, y cumple las funciones señaladas en los decretos 2203/93, 2584/93 y 1588/94 todas ellas de control y no disciplinarias. Además dicha oficina no forma parte de la estructura de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa pues es una entidad independiente que goza de autonomía y su creación tiene fundamento en el artículo 27 Superior y, por tanto, no cumple funciones que estén asignadas a otras entidades públicas.</p> <p>Para finalizar, el actor pide que los efectos de la sentencia de inexequibilidad se retrotraigan a la fecha de expedición de la ley 344/96 (diciembre 27) y del decreto 1670 de 1997 (junio 27) respectivamente.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-017 de 1998
<b>Fecha de la sentencia</b>	cuatro (4) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).
<b>Demandante</b>	Andrés Caicedo Cruz.
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la ley 344 de 1996.

Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ.
Decision	Declarar <b>INEXEQUIBLE</b> el artículo 41 de la ley 344 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor formula los siguientes cargos contra la norma acusada:</p> <p><b>1. Violación del principio de unidad de materia.</b></p> <p>En su criterio, la norma acusada vulnera el artículo 158 de la Carta por cuanto no corresponde a la materia de la ley que ésta regula. Efecto, dice que la ley, de acuerdo con su título y contenido, tiene por objeto la racionalización del gasto público, pero el artículo 41 de la ley 344 de 1996 “prevé el régimen de seguridad social en salud pensiones para los congresistas y empleados del Congreso y del Fondo, sin introducirle modificaciones que tengan por objeto hacer más racional el gasto público” y, por el contrario, puede generar mayores gastos, porque en el sistema de seguridad social “las entidades promotoras de salud se financian con los recursos provenientes de la unidad de pago por capitación que les reconoce el sistema por cada una de las personas afiliadas o beneficiarias... En la norma acusada se rompe dicho esquema porque además de las cotizaciones que recibe el Fondo, se prevé la obligación del Gobierno de trasladar los recursos necesarios para asegurar el equilibrio de la entidad. De este modo la entidad puede gastar más de lo que anteriormente podía hacer, lo cual es claramente contrario a los principios de racionalización del gasto público”.</p> <p><b>2. Violación de los principios que rigen la seguridad social.</b></p> <p>“Al prever el parágrafo 1o. de la norma acusada que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República no queda obligado a trasladar recursos al sector salud, con carácter de compensación al Fondo de Solidaridad y Garantía, se sustrae al Fondo del Congreso del cumplimiento del principio de solidaridad establecido en la Constitución. No sobra señalar que los afiliados al Fondo son personas con ingresos muy superiores al promedio de los afiliados al sistema de seguridad social; por consiguiente, si no existiera la norma, se trasladarían recursos significativos al sistema para atender a las personas de menores ingresos”.</p>

### **3. Eliminación de la vigilancia estatal.**

En tanto que los artículos 48 y 189-22 de la Constitución consagra que el sistema de seguridad social debe estar sujeto al control estatal y que corresponde al Presidente de la República ejercer vigilancia sobre la prestación de los servicios públicos, el parágrafo 2 del artículo 41 de la ley 344 “establece que el Fondo estará sujeto al control que establece el artículo 7 del decreto 1050 de 1968, el cual corresponde al denominado control de tutela, que no está dirigido a velar por el cumplimiento de las normas de seguridad social en materia pensional”; y además dispone que el Fondo no estará sujeto a la vigilancia establecida en el artículo 52 de la ley 100 de 1993, esto es, la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, contrariando así la Constitución que previó la existencia de dicho control en materia de seguridad social.

No obstante, advierte el actor que dada la defectuosa redacción de la norma, podría entenderse que “en la medida en que la Superintendencia Bancaria no ejerce control fiscal, el parágrafo acusado no elimina la vigilancia prevista por la ley 100 de 1993” y, en consecuencia, solicita que si la Corte interpreta la disposición en este sentido, se declare la exequibilidad condicionada de la parte correspondiente de la norma.

### **4. Violación del derecho a la igualdad.**

Dice el actor que “En materia de seguridad social en salud, todas las entidades promotoras de salud reciben el mismo tratamiento, todas son delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía y todas se financian con los recursos provenientes de la unidad de pago por capitación. En el presente caso, el Fondo de Previsión Social del Congreso recibe un tratamiento diferente, pues no tiene que participar en la compensación y por ello no está obligado a financiarse con la unidad de pago por capitación... Tratamiento diferenciado que no tiene justificación razonable. En efecto, el propósito de la norma no es otro que permitir al Fondo del Congreso disponer de excedente para desarrollar otras actividades que no tienen la importancia de la garantía del plan obligatorio de salud a toda la población”.

Adicionalmente, considera que, “al sustraer al Fondo del Congreso de la vigilancia estatal en materia pensional, cuando todas las demás entidades que administran dicho régimen están sometidas a la vigilancia, se viola igualmente la Constitución”.

<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-710 de 1998
<b>Fecha de la sentencia</b>	noviembre veinticinco (25) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
<b>Demandante</b>	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 438 del 25 de marzo de 1998 <i>“por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y la Universidad para la paz para la creaci3n de un centro mundial de investigaci3n y capacitaci3n para la soluci3n de conflictos”, suscrito en Bogot3, el 30 de julio de 1986.</i>
<b>Demandado</b>	
<b>Conoci3 en primera instancia</b>	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
<b>Decision</b>	Declarar <b>EXEQUIBLES</b> el Convenio suscrito entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y la Universidad para la Paz "para la Creaci3n de un Centro Mundial de Investigaci3n y Capacitaci3n para la Soluci3n de Conflictos", suscrito en Bogot3, el 30 de julio de 1986, as3 como la Ley 438 del 25 de marzo de 1998 por medio de la cual se aprueba dicho Convenio.
<b>Conoci3 en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jur3dicos</b>	En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 10 del art3culo 241 de la Constituci3n Pol3tica, el Gobierno Nacional, por conducto de la Secretar3a Jur3dica de la Presidencia de la Repùblica, remiti3 a esta Corporaci3n el d3a 14 de abril de 1998, copia aut3ntica de la Ley 438 del 25 de marzo de 1998 <i>“por medio de la cual se aprueba</i>

	<p><i>el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y la Universidad para la paz para la creación de un centro mundial de investigación y capacitación para la solución de conflictos”, suscrito en Bogotá, el 30 de julio de 1986.</i></p> <p>El Magistrado Ponente, mediante auto del 30 de abril de 1998, avocó el examen de constitucionalidad de la Ley 438 de 1998 y del Convenio aprobado por ésta, para lo cual ordenó practicar las pruebas pertinentes, fijar el negocio en lista, correr traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y llevar a cabo las comunicaciones constitucional y legalmente exigidas.</p> <p>Cumplidos como están los trámites y requisitos requeridos en la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991 para esta clase de procesos, procede la Corte Constitucional a pronunciarse sobre los actos jurídicos objeto del presente control de constitucionalidad.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-109 de 1998
<b>Fecha de la sentencia</b>	veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998)
<b>Demandante</b>	Revisión oficiosa de la “Ley 378 del 9 de julio de 1997, por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio N° 161, sobre servicios de salud en el trabajo’, adoptado por la 71ª Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, Ginebra, 1985”
<b>Demandado</b>	
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
<b>Decision</b>	Declarar <b>EXEQUIBLE</b> el ‘Convenio N° 161, sobre servicios de salud en el trabajo’, adoptado por la 71ª Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, llevada a cabo en Ginebra en 1985,” así como su Ley aprobatoria, esto es la



	Ley 378 de Julio 9 de 1997.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 241-10 de la Constitución Política, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República hizo llegar a la Corte Constitucional el día 15 de julio de 1997, copia del texto de la “Ley 378 del 9 de julio de 1997, por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio N° 161, sobre servicios de salud en el trabajo’, adoptado por la 71ª Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, Ginebra, 1985”, con el fin de que se someta al estudio de constitucionalidad reservado a esta Corporación.</p> <p>Mediante Auto del 4 de agosto de 1997, el suscrito magistrado ponente asumió el conocimiento de la disposición enviada por la Presidencia de la República y ordenó oficiar a la Secretaría General de la Cámara de Representantes y a la del Senado de la República para que remitieran a esta Corporación los antecedentes legislativos de la norma en comento, con el fin de verificar el procedimiento mediante el cual fue aprobada. Así mismo, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores las Certificaciones de los funcionarios que intervinieron en las negociaciones del instrumento internacional.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-625/98
Fecha de la sentencia	cuatro (4) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Juan Carlos Durán Echeverri.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (parcial), 2

	(parcial), 3 (parcial), 4 (parcial), 5 (parcial), 6 (parcial), 7 (parcial), 8 (parcial), 9 (parcial), 11 y 12 de la ley 432 de 1998 "Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones"
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA.
Decision	Primero : Decláranse EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los artículos 11 y 12 de la Ley 432 de 1998 <i>"Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones."</i> Segundo : Inhibirse en relación con el inciso segundo y literales a), b) y c) del artículo 7o. de la Ley 432 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que las normas acusadas violan los artículos 13, 115, 136, numeral 1, 333, 372 Y 115 de la Constitución. Las razones de la demanda, las explica el actor haciendo, en primer lugar, un planteamiento general sobre la actividad financiera que desarrolla el Fondo Nacional de Ahorro y la de los fondos de cesantía, y, luego, pasa a analizar cada uno de los preceptos demandados.</p> <p>Intervinieron en este proceso, además del Procurador, por parte de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, la doctora Nohora Inés Matiz Santos ; por parte del Ministerio de Desarrollo Económico, el doctor Carlos Eduardo Serna Barbosa ; y el representante legal del Fondo Nacional de Ahorro, doctor Alvaro Villota Bernal. Extemporáneamente, intervino la doctora Gloria Teresa Cifuentes de Huertas, apoyando la constitucionalidad de la ley.</p> <p>Para facilitar el estudio de este proceso, en razón de la extensión de la demanda y de las intervenciones, se expondrá, para cada punto, en primer lugar, el cargo presentado por el demandante, lo que al respecto dijeron los intervinientes y el señor Procurador, y, a continuación, se hará el análisis de constitucionalidad correspondiente, por parte de esta Corporación.</p> <p>Primero.- Cargo general planteado por el demandante sobre los aspectos generales de la ley:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descentralización por servicios y la actividad particular. La transformación del Fondo Nacional de Ahorro de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado, significaba que debía entrar a competir, en igualdad de condiciones, con las empresas particulares, sin aprovecharse de su posición privilegiada,</li> </ul>

	<p>en detrimento de los derechos de los particulares. Sin embargo, este propósito no se cumplió, ya que la ley 432 le otorgó al Fondo privilegios injustificados frente a las administradoras de fondos de cesantías, como lo explicará en detalle.</p> <p>- La actividad financiera y los fondos de cesantías. Con la ley 50 de 1990, se crearon las llamadas administradoras de fondos de cesantías. Posteriormente, la ley 100 de 1993 autorizó que estas sociedades pudieran administrar, simultáneamente, fondos de cesantías y fondos de pensiones.</p> <p>Actualmente existen 8 sociedades administradoras de cesantías, todas con capital privado y sometidas a un régimen legal muy estricto.</p> <p>Sin embargo, con la expedición de la Ley 432 se permitió el ingreso de un nuevo competidor, el Fondo Nacional de Ahorro, en condiciones de privilegio que viola los artículos 13 y 333 de la Constitución.</p> <p>Para ilustrar sus afirmaciones, el demandante acompañó un cuadro que muestra gráficamente las diferencias, favorables al Fondo, en las siguientes materias : impuestos, regulaciones sobre patrimonio técnico, operaciones activas de crédito, administración de los recursos nacionales del subsidio de vivienda, restricciones en materia de traslados de afiliados, afiliados forzosos, rentabilidad mínima, forma de recibir las cesantías de los afiliados por parte de los empleadores, captación de recursos distintos de las cesantías, sanciones por la mora en cumplimiento de las obligaciones de los empleadores.</p> <p>Señala el demandante que aunque desde antes de la ley 432 de 1998, ya el Fondo competía con los establecimientos que otorgan créditos de vivienda, esta competencia se limitaba sólo a los servidores de la rama ejecutiva, pero, con la expedición de esta ley, se amplía la afiliación voluntaria, a todos los trabajadores del país.</p> <p>- El demandante antes de analizar cada norma, divide su estudio en la violación del derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución, y la libertad económica y la libre iniciativa privada, artículo 333 de la Carta, y otros preceptos constitucionales que estima vulnerados (arts. 115, 136, numeral 1, y 372).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-432/98
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Luis Giovanny Barbosa Becerra
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el literal d) del artículo 2 de la Ley 425 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declárase EXEQUIBLE el literal d) del artículo 2 de la Ley 425 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que la norma acusada vulnera los artículos 150, numeral 3; 136, numeral 1; 371 y 372 de la Constitución Política.</p> <p>Dice el actor que la disposición impugnada contraría la distribución de competencias que, en materia monetaria, fijó la Carta de 1991.</p> <p>Lo anterior significa que al Banco de la República, de acuerdo con los artículos 371 y 373 de la Constitución, le corresponde, entre otras funciones, la de "emitir la moneda legal" y "velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva". Así mismo el Congreso, según el artículo 150, numeral 13, "determina la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio...".</p> <p>De esta forma -dice el actor-, una vez definida por el Congreso la moneda legal, es al Banco de la República al que le corresponde autónomamente emitirla, entendiéndose por emisión, no sólo el acto de poner a disposición del sistema financiero la moneda, sino todas las actividades tendientes a su diseño, entre ellas, la producción o importación y su posterior puesta en circulación. Es precisamente de esta manera como el Constituyente distribuyó,</p>

	<p>entre el legislativo y el Banco Emisor, lo atinente a la "soberanía monetaria del Estado".</p> <p>Afirma el demandante que, precisamente dando aplicación directa al artículo 150, numeral 13, de la Constitución, el Congreso expidió la Ley 31 de 1992, que en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 reconoce y desarrolla la autonomía del Banco de la República. Estas disposiciones determinan el ejercicio del atributo de emisión, características de la moneda, producción y destrucción de las especies que constituyen la moneda legal y el retiro de billetes y de moneda metálica, respectivamente.</p> <p>Destaca que la autonomía del Banco de la República no sólo se limita a la facultad de emitir la moneda legal, sino también a la función de producirla, para lo cual ha de determinar sus características, tales como diseño, tamaño, color, peso, tipo de papel, aleaciones, medidas de seguridad, entre otras.</p> <p>Por esta razón, sostiene el demandante que la norma acusada reguló materias que son de exclusiva competencia del Banco de la República, y que ninguna autoridad, ni siquiera el Congreso de la República, puede disponer la acuñación de moneda metálica o la impresión de billetes en las denominaciones que sean necesarias.</p> <p>A renglón seguido expresa que, en contraposición al hecho de que el legislador sólo puede autorizar -no imponer- la emisión de moneda conmemorativa, la disposición acusada impone al Banco de la República una obligación expresa de emitir billetes con determinadas características; con claro desconocimiento de su autonomía. Además -continúa el demandante-, la Ley 31 de 1992 sólo se refiere a la acuñación "de moneda metálica de curso legal para fines conmemorativos o numismáticos" y no a la impresión de billetes.</p> <p>Finaliza el actor la presentación de su demanda, planteando que, como para épocas cercanas no se requiere ni está previsto emitir especies con denominaciones distintas a las que se encuentran actualmente en circulación, se concluiría que el billete que ordena emitir la norma demandada tendría que llevar necesariamente la misma denominación de uno de los que actualmente se encuentran en circulación, situación a todas luces inconveniente pues podría confundir a los ciudadanos y socavar la confianza o fe pública en los billetes del Banco.</p> <p>En igual sentido, expresa que resulta imposible el cumplimiento de la norma demandada, toda vez que el lapso de dos meses y 27 días -contados a partir de la fecha de expedición de la Ley 425 del 27 de enero de 1998 y hasta el 9 de abril del mismo año, día en que según</p>
--	--

	la norma debe salir a circular el billete-, es insuficiente para adelantar un proceso que normalmente toma entre 24 y 30 meses.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-477/98
Fecha de la sentencia	nueve (9) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Pedro A. Herrera Miranda.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 416 de 1997, "Por medio de la cual se modifica (sic) parcialmente los Estatutos de al Carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional."
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Decision	Declárase EXEQUIBLE la ley 416 de 1997
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor estima que la ley demandada viola los artículos 2, inciso segundo, 13, 188 y 209 de la Constitución Política. Por ello solicita que se declare la inexequibilidad de la ley. En el evento de que sea declarada exequible, la Corte debe hacerlo bajo el entendido de que se extiende a todos los miembros de la Fuerza Pública. Explica así las razones de su demanda:</p> <p>a) El artículo 2, inciso segundo, resulta vulnerado, pues, con la expedición de esta ley se menoscaba la creencia del personal de la Fuerza Pública de que los ascensos sólo se otorgan una vez se hayan cumplido todos los requisitos establecidos en los estatutos de carrera, y que los miembros de tales Fuerzas son ajenos a las influencias políticas.</p> <p>b) Se viola el artículo 13 de la Constitución al consagrar una odiosa discriminación a favor de los Comandantes a los que se refiere la</p>

	<p>ley y en contra de los demás miembros de la Fuerza Pública, olvidando, de esta manera, el esfuerzo que éstos últimos hacen para mantener la paz y el orden en el país.</p> <p>El demandante se pregunta por qué razón sólo se asciende a los Comandantes, y no a los otros Oficiales, Suboficiales, agentes y soldados, quienes, en su concepto, también merecen estímulos.</p> <p>c) El artículo 188 de la Constitución resulta vulnerado, pues, allí se establece que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional. Sin embargo, la Ley demandada menoscaba la unidad de los miembros de la Fuerza Pública, pues, al desconocer los estatutos que reglamentan los ingresos y ascensos, se vulnera la disciplina y las creencias de tales servidores.</p> <p>En opinión del demandante, esta ley terminará <i>"convirtiendo a los Oficiales de la Fuerza Pública en unos lagartos sin sentido de la jerarquía y termina en una constelación de Generales ascendidos a dedo y sin ninguna autoridad jerárquica frente a sus subalternos."</i></p> <p>Por esta razón, ha habido numerosas protestas por parte de la opinión pública, que merecen ser tenidas en cuenta por la Corte.</p> <p>d) Se vulnera el artículo 209 de la Constitución, pues la ley demandada no observa los principios rectores de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad. Explica este asunto el actor, de la siguiente manera:</p> <p>El principio de igualdad se rompe pues <i>"un gobernante que no actúe observando este principio sencillamente es un Dictador, y parece que Colombia es un Estado de Derecho."</i></p> <p>El principio de moralidad pública también se quebranta en razón de que <i>"para nadie es un secreto que como se ha concebido la Ley 416 sólo se expidió para pagar favores individuales que no responden al interés de la comunidad; por lo tanto esta ley debe ser aplicada a todos los miembros de la Fuerza Pública como un estímulo a los riesgos que cada uno de ellos afrontan (sic) en la lucha contra la guerrilla, los paramilitares, los coqueros y la delincuencia organizada y la común. Estimular solo (sic) a los Comandantes señalados en las normas es una inmoralidad."</i></p> <p>En cuanto al principio de eficacia, como éste debe medirse por los resultados, no es cierto que los actuales Comandantes ascendidos sean los más eficaces, y esto lo comprueban las estadísticas.</p> <p>Finalmente, el principio de imparcialidad se viola, ya que quienes promovieron la expedición de la ley se constituyeron en los más parcializados de la Administración Pública.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-352/98
Fecha de la sentencia	quince (15) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Felipe Pérez Cabrera
Demandado	Demanda De Inconstitucionalidad Contra Los Artículos 2º (Parcial), 3º (Parcial), 4º, 13 (Parcial), 15 Y 17 (Parcial) De La Ley 401 De 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL y Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA.
Decision	<p>Primero. En cuanto al cargo de falta de unidad de materia, decláranse EXEQUIBLES los artículos 2, en relación con la creación del Centro de Coordinación de Transporte de Gas Natural, 4, 13, inciso primero, 15 y 17 de la ley 401/97.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas de los incisos primero y tercero del art. 2, los literales a) a g) y el parágrafo 3º del art. 3, y el art. 15 de la ley 401/97.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>3.1. Cargo por violación del principio de unidad de materia.</p> <p>El demandante considera que los artículos 2, en relación con la creación del Centro de Coordinación de Transporte de Gas Natural, 4, 13, inciso primero, 15, y 17, en cuanto a la creación del Viceministerio de Hidrocarburos, violan el artículo 158 de la Constitución que consagra el principio de la unidad de materia.</p> <p>a) Según el demandante, la ley 401 de 1997 "debió referirse exclusivamente a la creación de ECOGAS y a aquellos temas que hacen relación a la constitución de una Empresa Comercial e Industrial del Estado, tales como su objeto, capacidad, domicilio, duración, capital y patrimonio, órganos de dirección y administración, régimen laboral".</p> <p>En efecto, en el texto de la ley se incorporaron materias ajenas a la creación y organización de ECOGAS, como son las relacionadas con la creación del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, del Instituto de Capacitación e Investigación de Casanare, del</p>



	<p>Viceministerio de Hidrocarburos, del Centro de Coordinación de Transporte de Gas Natural, del Fondo Especial para la promoción y financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso de gas natural y, en fin, con el establecimiento de un impuesto para financiar el Fondo mencionado.</p> <p>b) Tanto los intervinientes como el Procurador General de la Nación coinciden en afirmar que no se ha violado el principio de la falta de unidad de materia, porque la regulación contenida en la ley guarda armonía con su materia predominante.</p> <p>c) Contrario a lo que se piensa por el actor, los asuntos que contemplan las normas acusadas concurren a dar unidad a un fin común como es el de regular y organizar la operación y explotación comercial del transporte de gas natural, dentro de un sistema integral de servicio a nivel nacional.</p> <p>La idea rectora del legislador en el presente caso, no fue simplemente la de constituir una empresa que atendiera el manejo de un servicio público, sino la de organizar todo un sistema de regulación del transporte del gas natural, para lo cual la ley debía tener en cuenta, como lo hizo, tanto las fases de planeación y organización de dicho sistema como la coordinación y manejo consecuentes de las actividades de operación y explotación comercial de los gasoductos.</p> <p>Desde esa perspectiva los contenidos legales son coherentes en la medida en que están íntimamente vinculados para dar lugar al propósito central de establecer el Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural. En efecto, los distintos organismos y unidades de acción creados por la ley, se vinculan de tal forma que las funciones de unos tienen relación o se apoyan en las funciones de los otros. ECOGAS, es la cabeza administradora del sistema; pero también importa que se ofrezca asesoría por el Consejo Nacional de Operación de gas natural, CNO; que el Centro de Coordinación, CTG lleve a cabo las actividades de planeación del transporte de gas, asigne cupo a los remitentes, etc., todo lo cual confluye a la consecución de los fines previstos con la creación del sistema. Pero de igual modo la presencia y actividad del Instituto de Capacitación e Investigación de Casanare, del Fondo Especial para promover los proyectos de infraestructura para el uso del gas natural en el sector rural y los recursos que se pretenden arbitrar mediante la contribución parafiscal a que se refiere la ley, evidencian una relación muy clara y compatible con la existencia y operación del referido sistema.</p> <p>Aun cuando en principio pudiera pensarse que la creación del Viceministerio de Hidrocarburos resulta ser una materia extraña al</p>
--	---

	<p>asunto central que regula la ley, tal idea se desvanece si se tiene en cuenta que a dicho organismo se le asignan funciones encaminadas a la formulación de políticas y planes encaminados al desarrollo del subsector de los hidrocarburos, entre los cuales por supuesto se cuenta el gas natural.</p> <p>En repetidas oportunidades la Corte ha señalado que el concepto de unidad de materia<sup>2</sup> a que se refiere el artículo 158 de la Constitución no puede entenderse dentro de un sentido estrecho y rígido al punto que se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre las diferentes normas que surgen en virtud de las finalidades que persiguen y que, por lo mismo, razonablemente se integran o resultan ser complementarias para lograr el diseño de la cuestión de fondo del proyecto legal. Además, que dicha unidad sólo se rompe cuando existe absoluta falta de conexión o incongruencia causal, temática, sistemática y teleológica entre las distintas aspectos que regula la ley y la materia dominante de la misma.</p> <p>Conforme a lo anterior, no es admisible el cargo por falta de unidad de materia. En consecuencia, por este aspecto se declararán exequibles los arts. 2, en relación con la creación del Centro de Coordinación de Transporte de Gas Natural, 4, 13, inciso primero, 15 y 17 de la ley 401/97.</p> <p>3.2. Cargos por violación del derecho de propiedad y la constitución de un monopolio.</p> <p>Considera el demandante que las disposiciones normativas acusadas de los artículos 2, 3 y 8, inciso segundo y parágrafo, infringen los artículos 58 y 336 de la Constitución Política.</p> <p>El concepto de violación lo expone de la siguiente manera:</p> <p>La ley acusada quebranta el derecho de propiedad, cuando se asigna a ECOGAS, como administrador del Centro de Coordinación de Transporte de Gas Natural, CTG, la facultad de fijar la capacidad de transporte de todos los usuarios del servicio de los diferentes gasoductos establecidos en el país, quienes deben seguir sus directrices y someterse a sus reglas y condiciones operativas, negándoseles por esta vía a sus dueños la facultad de disposición sobre sus gasoductos, con lo cual se "desplaza de plano de su labor a los actuales propietarios de gasoductos" y con ello, "entonces los derechos de propiedad adquiridos legalmente los perderán quienes ostenten la calidad de propietarios de gasoductos, pues tales facultades serán administradas y regladas por ECOGAS".</p>
--	--

<sup>3</sup> Sentencias C-390/96, C-435/96, 428/97 y 584/97, entre otras.

	<p>Pero lo dicho no es todo, porque con el otorgamiento de las referidas atribuciones a ECOGAS, a través del CTG, dicha empresa se convierte en la práctica en titular de un monopolio, por cuanto la ley les niega a los particulares la facultad de ejercer la actividad de transporte de gas y operar sus gasoductos, sin que la medida se hubiera adoptado con fines rentísticos. Además, se desconoce el supuesto necesario de que el monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados quienes en virtud de su establecimiento resulten privados del ejercicio de una actividad económica lícita, pues la ley 401 no consideró el reconocimiento de indemnización en favor de "las personas que en virtud de la creación del Centro de Coordinación de Transporte de Gas Natural quedarán privadas del ejercicio de su actividad económica lícita".</p> <p>- En relación con el segundo inciso y el párrafo del art. 8 de la ley el demandante formula un específico cargo de violación del art. 58 de la Constitución que enuncia de la siguiente manera:</p> <p>En las referidas normas se menciona el contrato de construcción, operación, mantenimiento y transferencia de gasoductos y se alude a la concesión de otro.</p> <p>Los referidos contratos y concesión tienen como objeto el transporte de gas por medio de ductos; igualmente, dichos contratos y concesión facultan a sus titulares para construir gasoductos, contratar su capacidad de transporte, operarlos y mantenerlos con autonomía técnica y directiva, de lo cual se derivan los correspondientes derechos adquiridos.</p> <p>Con motivo de la atribución que se da a ECOGAS para administrar el Centro de Coordinación del Transporte de Gas Natural -CTG se afectan los derechos de propiedad adquiridos legalmente por los titulares de contratos y concesiones.</p> <p>- En su intervención el Ministro de Minas y Energía sostiene que el actor está confundiendo la función meramente administrativa asignada a Ecogas, que se concreta o materializa en el suministro de las instalaciones de la empresa, elementos y dotación para las oficinas, etc, con el manejo del sistema de transporte de gas natural, que está a cargo del Centro de Coordinación de Transporte -CTG- como organismo directamente responsable de su funcionamiento, sin que Ecogas tenga relación alguna de orden jerárquico sobre el CTG.</p> <p>El CTG, es una unidad manejada por ECOGAS, a la cual la ley le asignó las funciones de planear, supervisar y coordinar el transporte de gas. "A este Centro llegan el remitente -persona que</p>
--	---

	<p>contrata el servicio de transporte- y el transportador- que puede ser ECOGAS o un transportador privado-. En este contrato se determina el volumen de gas que se va a transportar. Corresponde al CTG asignar la capacidad de transporte a cada uno de los remitentes, según el tipo de servicio contratado y las condiciones operacionales del sistema (art. 3 numeral c). Esta función se tiene que realizar respetando estrictamente los contratos suscritos por los interesados”.</p> <p>“De esta manera queda claro que no existe violación de los derechos de los propietarios privados de los gasoductos y que ellos son quienes siguen suscribiendo los contratos de transporte de gas libremente como lo venían haciendo hasta el momento de la expedición de la ley, contrario a lo que afirma el demandante”.</p> <p>Sobre la alegada violación del artículo 336 de la Constitución, considera que no es cierta la afirmación del demandante cuando habla del establecimiento de un monopolio, porque la prestación de los servicios públicos es una obligación a cargo del Estado y es éste el que autoriza a los particulares para que puedan prestarlos, pero bajo su regulación, control y vigilancia.</p> <p>La creación de Ecogas se encuentra enmarcada legalmente en la Constitución y la ley 142 de 1994, la cual establece que corresponde en forma privativa a la Nación planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea económicamente posible a través de empresas oficiales, mixtas o privadas, así como el desarrollo de actividades tales como la comercialización, construcción y operación de los gasoductos a través de tales empresas. En consecuencia, no estamos en presencia de un monopolio, sino planificando un servicio de acuerdo con la ley.</p> <p>- En su intervención el ciudadano Camilo González Chaparro, en representación de la Empresa Colombiana de Gas, manifiesta:</p> <p>Cuando el actor afirma que se afecta el derecho de propiedad con las atribuciones que se dan a ECOGAS a través del CTG, confunde las facultades referidas a la administración del sistema de transporte de gas natural, con las facultades jurídicas que ostentan los propietarios de gasoductos. El CTG no administra ni tiene poder de disposición sobre los gasoductos privados, sólo contribuye con su actividad a asegurar la prestación eficiente de un servicio público</p> <p>“La asignación de la capacidad de transporte ‘a cada uno de los remitentes, según el tipo de servicio contratado y las condiciones operacionales del Sistema’, que la ley formula de modo general y abstracto como le corresponde, no cercena la autonomía de la</p>
--	--

	<p>voluntad contractual de los propietarios de gasoductos, en contra de lo que afirma la demanda”.</p> <p>“.....lejos de cercenar los derechos de propiedad o la autonomía de la voluntad contractual de los agentes económicos involucrados, la ley impugnada da lugar a que se registren los contratos libremente celebrados entre transportadores y usuarios, a que haya participación activa de unos y otros en la ejecución de esos contratos y a que la información que ellos producen sobre sus necesidades de transporte diarias sea la base de la planeación, supervisión y coordinación que encomienda la ley al CTG”.</p> <p>“Por lo demás, de conformidad con la ley 142 de 1994 (art. 8.2), que es ley de intervención económica, compete en forma privativa a la Nación planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible y, como consecuencia necesaria, el transporte para el uso”.</p> <p>Considera igualmente el interviniente que al no tener dependencia funcional el Centro de Coordinación de Transporte de Ecogas, mal puede pregonarse que el Estado propenda la creación de un monopolio, figura que por su propia naturaleza, atentaría contra la propiedad que los particulares pudieran tener en gasoductos o medios de transporte de este hidrocarburo para llevarlo hasta el consumidor final. Tanto es así, que la misma ley define a los particulares involucrados en el negocio como “remitentes”, o sea aquellas personas naturales o jurídicas que pueden utilizar las redes de distribución estatales o privadas para el transporte del gas.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. ANTONIO BARRERA CARBONELL Y EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.</p> <p>Salvamento de voto a la Sentencia C-352/98</p> <p>PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA-Empresa industrial y comercial del Estado no puede ejercer y reglamentar una misma actividad/ECOGAS-Centro de coordinación de transporte de gas (Salvamento de voto)</p> <p><i>Estamos en presencia, indudablemente, de un conflicto de intereses fuerte, en que se confunde la gestión privada del Estado, desarrollada por una empresa industrial y comercial de éste, con la asignación de competencias administrativas, cuyo ejercicio concreto necesariamente constituye una amenaza virtual y potencial de determinar que se coloque a ECOGAS en una posición dominante en</i></p>

	<p><i>el mercado. Quien por razones de hecho o autorizadas por la ley se coloca en la referida situación, se enfrenta contra la voluntad constitucional que reprueba la concentración de poder con el que se pueda controlar el mercado y quebranta principios básicos del sistema como son los de la libertad económica y la libre competencia consagradas por la Carta Política. No es viable, como lo hace la mayoría, establecer una especie de lindero infranqueable entre lo que es la actividad social de ECOGAS y la que desarrolla una dependencia de la misma, como es el CTG, con las funciones de regulación e intervención administrativas que le han sido asignadas, pues las reglas de juego del mercado deben ser esencialmente iguales para todos los competidores. No le es permitido, por consiguiente, al legislador, al señalar el alcance de la libertad económica crear mecanismos que confieran poderes de acción a determinados agentes económicos cuyo ejercicio práctico tenga como resultado afectar la libre competencia económica y generar una potencial posición dominante en el mercado. Por las razones expuestas, consideramos que han debido declararse inexecutable las expresiones antes mencionadas, en forma temporal, mientras el legislador determinaba a que entidad debía adscribirse el Centro de Coordinación de Transporte de Gas -CTG, como una unidad administrativa especial de gestión y control, realmente autónoma e independiente.</i></p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-678/98
Fecha de la sentencia	
Demandante	Pablo Cárdenas Pérez
Demandado	<p>Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º (parcial) y 7º de la Ley 89 de 1993, “Por la cual se establece la cuota de Fomento Ganadero y Lechero y se crea el Fondo Nacional del Ganado”, y el párrafo 2º del artículo 16 (parcial) de la Ley 395 de 1997, “Por la cual se declara de interés general nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio colombiano y se dictan otras medidas encaminadas a este fin”.</p>
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.

Decision	<p>Primero: Declárase EXEQUIBLE el artículo 2 de la Ley 89 de 1993.</p> <p>Segundo: Declárase EXEQUIBLE el artículo 7 de la Ley 89 de 1993, bajo la condición de que se garantice la estructura democrática de la Federación Colombiana de Ganaderos -Fedegan-, que permita a los gravados con la contribución parafiscal de Fomento Ganadero y Lechero creada por la citada ley, su participación en lo atinente a la administración y recaudo de este gravamen parafiscal, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.</p> <p>Tercero: Declárase EXEQUIBLE el parágrafo 2° del artículo 16 de la Ley 395 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que el inciso primero del artículo 2 de la Ley 89 de 1993 no se ajusta a lo preceptuado por el Preámbulo de la Carta, ni a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 13, 95-9, 150-12, 333, 334, 338 y 363 de la Constitución Política, siendo violatorio de estas normas, como quiera que la cuota de fomento ganadero y lechero “es discriminatoria, no se ajusta a los principios de justicia, equidad y progresividad, a la igualdad en cuanto a las cargas públicas, restringe la libertad y la iniciativa privadas, y no atiende a la distribución equitativa de las oportunidades entre dos sectores agropecuarios”.</p> <p>Manifiesta el demandante, que cuando la Corte Constitucional decidió las demandas presentadas contra la Ley 89 de 1993, no se hizo una total confrontación con el Preámbulo y con las demás normas que cita como violatorias del inciso primero del artículo 2 de la citada ley.</p> <p>Considera que las distintas Ramas del Poder Público, en el ejercicio de sus funciones y competencias, deben expedir normas ajustadas al artículo 1 de la C.P. “Colombia es un Estado Social de Derecho”, en especial el legislador, el cual en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 150-12, debe consultar el principio fundamental citado.</p> <p>Igualmente, en tratándose del artículo 1 de la normatividad superior, señala que el legislador al imponer las cargas públicas, debe tener en cuenta la justicia distributiva “que debe predominar en el derecho público”, con el objeto de que cada quien contribuya de conformidad con sus capacidades, consultado el principio de progresividad, de manera que tenga cumplido efecto el Estado Social de derecho.</p> <p>Señala que la contribución parafiscal establecida en la norma en</p>

	<p>estudio (0.5% sobre el precio del litro de la leche vendida por el productor y al 50% del salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al momento del sacrificio) no asegura la justicia, la igualdad, ni garantiza la vigencia de un orden social justo, como quiera que esta contribución especial no se ajusta a los principios establecidos en el Preámbulo y en el artículo 2 .de la Carta, ni con el contenido fundamental del artículo 4 de la misma, el cual es de aplicación preferente.</p> <p>De otra parte, expresa el demandante, el Congreso en el ejercicio de su función legislativa debe ajustarse a lo dispuesto por el artículo 13 superior, y en ese sentido expedir normas que no discriminen ni autoricen tratos diferentes para distintos sectores, como lo sucedido con la contribución parafiscal objeto de la presente demanda, cuando fija los sujetos pasivos de la obligación tributaria y determina las respectivas cuotas, creando un trato discriminatorio para dos sectores agropecuarios semejantes (cuota de fomento ganadero y lechero) resultando más gravado el sector lechero que el de producción de ganado, infringiéndose así mismo el artículo 363 que establece como principios esenciales de la tributación la equidad y la progresividad.</p> <p>Igualmente se lesionan los principios de equidad y proporcionalidad, cuando se le exige al propietario del ganado el pago de una cantidad uniforme que equivale al 50% del salario mínimo legal vigente sin tener en consideración el precio de la cabeza de ganado sacrificado. El contenido de estos principios lo sustenta ampliamente el demandante, con varias citas de tratadistas especialistas en la materia, así como con transcripción de apartes de sentencias de esta Corporación que considera pertinentes.</p> <p>Por otra parte, considera que el párrafo 2º del artículo 16 de la Ley 395 de 1997, viola también el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13,95-9, 333, 334 y 363 de la C.P., al disponer un incremento en la contribución establecida en el artículo 2 de la Ley 89 de 1993. En efecto, se mantiene el carácter discriminatorio de la contribución parafiscal, contrariando los principios de equidad y progresividad, por cuanto no toma como base de la liquidación el precio de la respectiva cabeza de ganado, y también porque el ganado de leche resulta gravado dos veces, cuando se vende la leche, y cuando se sacrifica.</p> <p>Indica el actor, que el legislador no esta facultado constitucionalmente para determinar específicamente con quien se debe celebrar el contrato, la duración mínima del mismo y la remuneración o compensación al contratista, y señala que, por lo tanto, el artículo 7 de la Ley 89 de 1993 infringe el Preámbulo y los</p>
--	--



	<p>artículos 2, 3, 4, 6, 29, 38, 95-5, 113, 114, 115, 121, 123, 136-1-4, 150-1-9-12-21 y su inciso final, 189-23, 209, 210, 273, 333 y 334 de la C.P.</p> <p>La Constitución Política establece en su artículo 3 que el pueblo ejerce la soberanía a través de sus representantes, y el artículo 4 enmarca la responsabilidad de los servidores públicos por infracción de las normas superiores. Por lo tanto, si el legislador, agrega el demandante, en el ejercicio de sus funciones no se sujeta a lo dispuesto en las normas superiores citadas, no solamente la viola, sino que las normas que expida en ejercicio de su función, son contrarias al estatuto superior (art. 4).</p> <p>El Congreso tiene la atribución de expedir "...el estatuto general de contratación de la administración pública..." (art 150 inc. final), competencia ejercida al expedir la Ley 80 de 1993 -Estatuto General de la Contratación Pública- pero esta función, expresa el actor, no ha de entenderse agotada con la expedición de la citada ley, como quiera, que el numeral 1 del artículo 150 en concordancia con el 114 de la C.P. lo faculta para reformar las leyes, tarea esta que si considera pertinente debe realizar con sujeción a los principios de la generalidad de la ley, y en especial teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 209 de la Carta, y sin violar el artículo 113 superior (separación de funciones), ni inmiscuirse en asuntos de competencia privativa del Presidente de la República tal como lo ordena el numeral 1 del artículo 136 de la C.P., y respetando sus competencias (arts. 115 y 189-23 C.P.), ya que en materia contractual la competencia del Congreso, además de lo previsto por el artículo 150-14 C.P., se limita a la autorización que en materia de contratos consagra el numeral 9 del mismo artículo. Por ello, atendidas todas las normas superiores citadas, no puede el legislador determinar la entidad o persona con quien se debe celebrar el contrato, la duración mínima de éste y la remuneración o compensación al contratista, habida cuenta que la administración es reglada (arts. 121 y 123 C.P.), y sin que en el proceso de adjudicación de un contrato se tenga en cuenta lo previsto en el artículo 273 de la Constitución Política.</p> <p>Por último, el artículo 7 de la Ley 89 de 1993 viola los artículos 333 y 334 de la Constitución Política que consagran los principios fundamentales de libre iniciativa y actividad económica, la libre competencia como un derecho de todos y la intervención del Estado para racionalizar la economía, al determinar la contratación del Estado con FEDEGAN, sin dar oportunidad a otras agremiaciones privadas o entidades, de prestar el servicio de administración y recaudo de las cuotas parafiscales fijadas por la misma ley.</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO PARAFISCALIDAD-Regulación por ley orgánica (Aclaración de voto) <i>Las contribuciones parafiscales son excepcionales y la actividad del Congreso al crearlas debe estar previamente delimitada por una ley, que no es la misma que en concreto establece cada gravamen. Creo, además, que tal ley debe ser orgánica.</i>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-043/98
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Jorge Eliécer Granados Manchola.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 336 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLE la expresión “y los prestadores del servicio público de transporte que se encuentren con licencia de funcionamiento tendrán dieciocho (18) meses a partir de la reglamentación para acogerse a ella.”, contenida en el párrafo del artículo 11 de la ley 336 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	1. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima el actor que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 2º, 4º, 29 y 58 de la Constitución Política.  2. Fundamentos de la demanda Afirma el demandante que las empresas de transporte que operan en Colombia adquirieron su respectiva licencia de funcionamiento conforme a las exigencias contenidas en los diferentes decretos que han regulado la actividad del transporte en el país, licencias que, según la especialidad, tenían un término de duración

	<p>preestablecido y cuya revocatoria procedía frente a causales previamente definidas.</p> <p>Sin embargo, la norma acusada, al imponerles a los transportadores la obligación de cumplir en el término de dieciocho (18) meses con los requisitos exigidos por la Ley 336 para obtener la respectiva licencia de funcionamiento, desconoce el término de duración de las que fueron adquiridas de acuerdo con las exigencias preexistentes, y por lo tanto, vulnera los derechos adquiridos de los empresarios del transporte, así como transgrede el derecho al debido proceso, pues esta exigencia, en la práctica, es una revocatoria abusiva de las licencias de funcionamiento vigentes.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>EMPRESAS DE TRANSPORTE-Actividad queda comprendida dentro de libertad económica y libre iniciativa privada (Aclaración de voto)</p> <p><i>Creo que la actividad que realizan las empresas transportadoras resulta comprendida dentro de la libertad económica y la libre iniciativa privada. La libertad económica puede ser objeto de variadas restricciones por parte de la ley, siempre que ellas sean razonables y proporcionadas y no afecten su núcleo esencial. La intervención del Estado en la economía, por lo demás, constituye suficiente título de intervención en esta materia, desde luego teniendo presente las cautelas referidas. El control de constitucionalidad de este tipo de leyes, adicionalmente, debe ocuparse de examinar si la respectiva ley interventora ha precisado de manera satisfactoria sus fines y alcances, y los límites a la libertad económica. De este conjunto de disposiciones pueden extraerse dos principios rectores: la interdicción a la desmesura (restricciones desproporcionadas e irrazonables a la libertad económica) y la protección de la seguridad (estabilidad y claridad de las reglas), como bien constitucional sin el cual los agentes económicos y los mercados difícilmente pueden operar.</i></p> <p>SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE-Criterio que no sirve para justificar medidas de intervención (Aclaración de voto)</p> <p><i>La sentencia ha debido adelantar el escrutinio constitucional con base en los criterios referidos, lo que habría conducido la misma declaración de exequibilidad, máxime si se repara en que la exigencia de un permiso y la renovación del mismo en un término de</i></p>

	<i>18 meses, no representa una restricción que viole la Constitución y afecte el núcleo esencial de la libertad económica. Sin embargo, se ha preferido el tortuoso camino, a mi juicio dogmáticamente equivocado, de justificar las medidas de intervención en el carácter de servicio público dado por la ley a esta suerte de transporte y en los poderes de la autoridad concedente. Se trata de dos argumentos, no de orden constitucional, sino legal.</i>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-520/98
Fecha de la sentencia	
Demandante	Luis Antonio Zorro Camargo.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso tercero del artículo 35 de la ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte."
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Decision	Declárase EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 35 de la ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte", en el entendido que la capacitación a que él se refiere, puede ser prestada por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- o las entidades especializadas autorizadas por el Ministerio de Transporte.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor estima que el inciso acusado del artículo 35 de la ley 336 de 1996, desconoce los artículos 13, 68, 84 y 158 de la Constitución. Los cargos de la demanda pueden sintetizarse, así:</p> <p>La autorización que el Ministerio de Transporte debe otorgar a las entidades que desarrollarán la capacitación de los operarios de que trata el artículo 35 parcialmente acusado, desconoce que sólo corresponde al Ministerio de Educación conferir autorizaciones a los establecimientos educativos para que puedan desarrollar esta función, tal como lo señalan las leyes generales que regulan la actividad de estos establecimientos. Por esta razón, considera violado el artículo 68 de la Constitución, según el cual "Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión". Por la</p>

	<p>misma razón, afirma que se desconoce el mandato constitucional contenido en el artículo 84, porque una vez reglamentada la actividad educativa, en las leyes correspondientes, no es admisible que una ley como la acusada imponga un nuevo requisito a los establecimientos educativos para ejercer su objeto, como lo es, en este caso, la autorización que debe otorgar el Ministerio de Transporte.</p> <p>Con el mismo razonamiento, esboza su cargo de violación del artículo 158 de la Constitución, al considerar que la ley 336 de 1996, en el aparte acusado, se refiere a una materia que en nada se relaciona con su objeto: la expedición de un estatuto nacional del Transporte, hecho que lo lleva a afirmar que existe un “mico” en el inciso acusado.</p> <p>Finalmente, de la demanda se desprende que el derecho a la igualdad también resulta vulnerado, pues la norma parcialmente acusada está otorgando una prerrogativa y un derecho especial al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, discriminando a las restantes instituciones educativas, al permitir que sólo ese instituto desarrolle los programas de capacitación de que trata el inciso acusado.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-129/98
Fecha de la sentencia	primero (1) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Everardo Venegas Avilan, Ruben Dario Correa Leal Y Joel De Jesus Arbelaez Arbelaez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 (parcial) de la Ley 332 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Decision	Decláranse EXEQUIBLES las palabras "...con la excepción allí consagrada...", del artículo 1 de la Ley 332 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Manifiestan los actores que el aparte normativo acusado es violatorio de los artículos 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política.</p> <p>Consideran que el artículo 1 demandado trató de subsanar el inconveniente que se presentaba con la base salarial de liquidación de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Pero también estiman que la referencia a la excepción contemplada en dicho precepto para el caso de aquellos funcionarios que provenían de la Rama Judicial y se acogieron al régimen salarial integral previsto para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, atenta contra el derecho a la igualdad, pues el motivo que inspiró al legislador de 1992 para consagrar tal excepción ha sido superado por normas posteriores y ya aquélla no se justifica.</p> <p>Afirman que, al expedir la Ley 332 de 1996, el legislador olvidó que luego de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 el Gobierno Nacional había dictado varios decretos en los cuales dio el carácter de prima especial de servicios al equivalente del 30% del sueldo para algunos funcionarios de la Fiscalía General, sin conferirle la calidad de salario. Mencionan específicamente los decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y 52 de 1997. En su criterio, mal podía el legislador mantener la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues su fundamento ya desapareció: no subsiste el salario integral para los funcionarios de la Fiscalía General cobijados por los señalados decretos.</p> <p>Ello hace -según la demanda- que los antiguos servidores de la Rama Judicial que son exceptuados del régimen general, por haberse acogido al de la Fiscalía, queden discriminados, toda vez que a los funcionarios de dicho organismo se les ha venido a reconocer la prima especial como salario para los efectos de liquidación de pensión.</p> <p>Conforme a lo anterior, alegan que el aparte acusado del artículo 1 carece de justificación y razonabilidad, y que el tratamiento diferenciado no es admisible.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-197/98
Fecha de la sentencia	trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Objeciones presidenciales
Demandado	Objeciones Presidenciales por inconstitucionalidad en relación con el artículo 1 del proyecto de ley número 48/97 Senado, 151-190/96 Cámara de Representantes, "Mediante la cual se aclaran los artículos 146 de la Ley 100 de 1993 y 1 de la Ley 332 de 1996".
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO y Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Decláranse FUNDADAS las objeciones presidenciales formuladas por motivos de inconstitucionalidad en relación con el artículo 1 del proyecto de ley 48/97 Senado y 151-190/96 Cámara "Mediante la cual se aclaran los artículos 146 de la Ley 100 de 1993 y 1 de la Ley 332 de 1996", precepto que, por tanto, se declara INEXEQUIBLE.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que contemplan los artículos 166, 167 y 200, numeral 1, de la Constitución Política, se abstuvo de sancionar el proyecto de ley en referencia, que le había sido enviado por el Congreso para su sanción, y lo objetó parcialmente por los siguientes motivos, que a su juicio configuran la inconstitucionalidad total de lo aprobado:</p> <p>1. Considera el Presidente que el artículo 1 del proyecto de ley vulnera el artículo 151 de la Constitución, que expresamente sujeta la actividad legislativa a las leyes orgánicas que expida el Congreso.</p> <p>El Ministerio de Hacienda no ha otorgado el aval necesario para el trámite de esta clase de proyectos de ley, con clara incidencia en el presupuesto de funcionamiento de la Nación, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 39 y 40 del Decreto 111 de 1996, por medio del cual se cumplen las normas orgánicas del presupuesto.</p> <p>2. Ante las restricciones fiscales de las entidades territoriales, no es procedente que se les aumenten las cargas a través de un proyecto</p>

	<p>de ley como el que nos ocupa, pues en tal evento, la Nación (en desarrollo del principio de universalidad que rige al sistema en materia de manejo de pensiones), tendría que asumir el pago de las obligaciones que estos entes no estarían en condiciones de pagar.</p> <p>3. El artículo 1 del proyecto viola el 13 de la Constitución (derecho a la igualdad): las situaciones jurídicas definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, con base en las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, continúan vigentes (art. 146 de la Ley 100 de 1993); tienen derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones quienes con anterioridad a la vigencia del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 cumplan los requisitos exigidos por dichas normas.</p> <p>"De esta manera -dice el Presidente-, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 sólo cubre las situaciones jurídicas definidas al amparo de las normas anteriores a la fecha de su entrada en vigencia, esto es, la sanción de la Ley. Las personas que no se encontraban en una situación jurídica concreta, porque no habían cumplido los requisitos previstos por las normas anteriores, no tienen derecho al tratamiento previsto por el artículo 146 de la Ley".</p> <p>Añade el Jefe del Estado que, como el objeto del artículo 146 en mención es regular la transición entre normas legales, es claro que la norma hace referencia al régimen legal anterior al cual se encontraban afiliados sus destinatarios al entrar en vigencia el Sistema.</p> <p>"Por consiguiente -concluye- dichas normas territoriales mencionadas no pueden continuar rigiendo, toda vez que el artículo 146 sólo cubre situaciones jurídicas concretas al momento de entrar a regir la ley y en razón a que el régimen de transición no las incluye".</p> <p>Y termina diciendo:</p> <p>"Si las situaciones extralegales no se encuentran contenidas en los artículos 146 o en el 36 de la Ley 100 de 1993, el párrafo agregado revive unas disposiciones que dejaron de producir efectos a partir de la entrada en vigencia de la referida Ley, disposiciones que por consagrar privilegios en favor de un sector de los servidores públicos sin el debido fundamento de racionalidad y proporcionalidad constituye ostensible vulneración del principio constitucional de la igualdad de las personas ante la ley".</p> <p>3. Para el Presidente de la República, el artículo 1 del proyecto de ley no es realmente aclaratorio, si se tiene en cuenta lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 (tal como quedó el texto</p>
--	--



	después de la Sentencia C-410 de 1997, por medio de la cual se declaró inexecutable la expresión "dentro de los dos años siguientes", toda vez que ésta quebrantaba el ordenamiento superior porque equiparaba una mera expectativa a un derecho adquirido) y lo dispuesto por el artículo 36 de la misma ley que rige el régimen de transición".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.</p> <p>OBJECION PRESIDENCIAL-Improcedencia/SERVIDOR PUBLICO DE ENTIDADES TERRITORIALES-Régimen jubilatorio de transición (Salvamento de voto)</p> <p>La norma objetada no es una norma nueva, pues no crea una nueva prestación; tampoco es una norma interpretativa, en sentido estricto, sólo busca que con base en el art. 36 de la ley 100/93 se aplique el régimen de transición en pensiones en forma igualitaria para todos los empleados y trabajadores, incluyendo a aquéllos a que alude el art. 146 de la misma ley. En tal virtud, es indiscutible que el Congreso si disponía de iniciativa para crearla.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-770/98
Fecha de la sentencia	diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Walter Francisco Paz Salazar
Demandado	Normas acusadas: Artículo 15 (parcial) de la Ley 322 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 322 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>El actor considera que el aparte acusado vulnera los artículos 13, 16, 103 de la Constitución, pues establece que el Consejo de Oficiales es la autoridad máxima del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y será quien elija al comandante y al representante legal de la institución, con lo cual atenta contra el derecho a elegir y ser elegido, de los demás bomberos, a participar democráticamente en la reforma de los estatutos, a vigilar el fiel cumplimiento de los mismos y por ende a participar en las decisiones trascendentales de la institución. El demandante señala que anteriormente esta función correspondía al Consejo General de Bomberos, conformado por la totalidad de los miembros, a diferencia de lo que ocurre con el Consejo de Oficiales, el que se encuentra conformado por personas que ostentan el grado de Capitán, Teniente y Subteniente.</p> <p>Por otra parte, el actor considera que la norma acusada, al conferir a los Consejos de Oficiales la calidad de máxima autoridad de estas instituciones, coarta la libertad de las demás unidades que lo conforman, en la medida en que estas últimas no gozan de los mismos derechos libertades y oportunidades.</p> <p>Finalmente, según su criterio, la disposición impugnada atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, ya que los suboficiales y bomberos rasos nunca podrán elegir y ser elegidos dentro de los diferentes cargos a que se pueda aspirar dentro de la institución, pues a éstos sólo pueden acceder los oficiales, quienes obtienen el cargo gracias a sus estudios, nivel profesional o por méritos en el servicio, pero de ninguna manera a través de un mecanismo de participación democrática, por lo cual no representan las aspiraciones y el pensamiento de muchas de las personas que conforman la institución.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-002/98
Fecha de la sentencia	veintidós (22) días del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Ninfa Rosa Campo de López.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 321 de 1996, "Por la

	cual se fijan condiciones para la administración de la Cuota de Fomento Cacaotero, establecida por las leyes 31 de 1965 y 67 de 1983.”
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.
Decision	En los términos de esta sentencia, declárase EXEQUIBLE, en su integridad, la ley 321 de 1996, “Por la cual se fijan condiciones para la administración de la Cuota de Fomento Cacaotero, establecida por las leyes 31 de 1965 y 67 de 1983.”
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>a.- La demanda.</p> <p>En su criterio, la ley demandada viola el preámbulo y los artículos 1o., 2o., 6o., 13, 26, 29, 39, 40, 58, 83, 103, 150, numeral 12, y 154, numerales 2o. y 4o., de la Constitución.</p> <p>En cuanto al concepto de la violación, dice que el antecedente más próximo sobre elección de cuerpos directivos en entidades de derecho privado administradoras de contribuciones parafiscales, está en la sentencia de esta Corte C-191 de 1996, providencia en la que se declaró exequible el artículo 43 de la ley 188 de 1995, disposición que, por cierto, la ley demandada ordena cumplir en su artículo 5o.</p> <p>Del mencionado fallo, la demanda destaca varios apartes que, en resumidas cuentas, sostienen lo siguiente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- que la norma acusada se refería a contribuciones parafiscales, las cuales, según reiterada jurisprudencia de la Corporación, son de naturaleza pública, porque son fruto de la soberanía fiscal del Estado, "aun cuando puedan ser administradas por entidades privadas" ;</li> <li>- que los recursos parafiscales pueden servir para financiar determinados servicios o inversiones, pues al ser contribuciones forzosas para ciertos sectores de la sociedad, su "finalidad es la reversión de tales recursos en ese mismo sector" (sentencias C-040/93, C-308/94 y C-546/94) ;</li> <li>- que la norma pretendía la democratización de la forma de elección de las directivas de las entidades que administran recursos parafiscales ;</li> <li>- que uno de los "principios medulares de la Constitución de 1991 es la participación democrática", principio que busca facilitar -y que el Estado posibilite- la participación de todos en "las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa de la Nación" ;</li> </ul>

	<p>- que la Corte no tiene reparo alguno en relación con la exigencia legal de que los entes que administran recursos parafiscales deban elegir a sus representantes y directivos en forma democrática, pues así "se busca que todos los intereses que conforman el sector gravado parafiscalmente se encuentren adecuadamente representados y puedan incidir en la forma de manejo de tales recursos".</p> <p>- la obligación de dicha elección democrática no es una injerencia indebida de las autoridades, sino una expresión legítima del carácter democrático que, por mandato de la Constitución (artículos 26, 38, 39 y 103) ciertos entes tienen que tener.</p> <p>Con base en lo anterior, la actora estima que puesto que ya hay una ley general para todos los gremios, ley que, por su carácter democrático, fue declarada exequible, "no se entiende, pues, cómo ahora se expide una ley particular, dictada exclusivamente para un solo gremio, que obliga antidemocráticamente, y en contravía de la constitucionalidad analizada por la Corte Constitucional en el pronunciamiento citado, a elegir los directivos de la Federación Nacional de Cacaoteros teniendo como fundamento representativo en la participación, la producción del grano, para, consecuentemente y en forma inconstitucional, cercenar el derecho de las minorías conformadas por los pequeños productores que, sustancialmente, constituyen la mayoría.". Este es, a juicio del actor, el fundamento de la violación de los artículos de la Constitución atrás citados.</p> <p>Por lo demás, la ley demandada adiciona el estatuto de contratación de la ley 80 de 1993, confiriendo al Estado poderes exorbitantes "para revocar un contrato legalmente celebrado conforme a leyes preexistentes ; es decir, dándole a la ley impugnada un efecto retroactivo para violar los derechos adquiridos, lo cual también es violatorio de la Constitución, particularmente su artículo 58".</p> <p>El artículo 1o. de la ley impugnada modificó las leyes 31 de 1965 y 67 de 1983 en cuanto en éstas se ordenaba que la administración de la cuota de fomento cacaotero se contrataría con la Federación Nacional de Cacaoteros. Ahora, dicha administración puede hacerse con entidades privadas en cuyas asambleas generales y órganos directivos todos los departamentos tengan representación en proporción a su participación en la producción nacional del grano. En otras palabras, en tales entidades los pequeños productores no podrán tener nunca representación. Además, como resultado de la reforma legal, la Federación Nacional de Cacaoteros tendrá que alterar sus estatutos para consagrar la antidemocrática fórmula.</p>
--	---

	<p>El artículo 2o. reforma las leyes mencionadas, introduciendo una "desmesurada" competencia al Ministerio de Agricultura para revocar el contrato de administración en caso de que, durante su vigencia, se afecte la representación basada en la participación en la producción.</p> <p>El artículo 3o. también modifica dichas leyes, pues fija un procedimiento y un término para el cumplimiento de las nuevas condiciones de administración de la contribución parafiscal. Y, además, consagra la retroactividad para revisar y revocar, sin indemnización, el contrato pactado según las normas reformadas, y da la posibilidad de que el Estado celebre un nuevo contrato de administración con una nueva entidad gremial. Con esto se afectan la técnica legislativa, la democracia participativa, la contratación estatal, la autonomía de la voluntad, el derecho de asociación, el derecho de defensa y el debido proceso en la aplicación de procedimientos administrativos.</p> <p>Vulnera el preámbulo de la Carta porque no asegura a los miembros de la Federación Nacional de Cacaoteros, la igualdad para participar democráticamente en la dirección de la asociación. Y tampoco asegura la igualdad de la Federación "cuando autoriza al Ministro para revocar unilateralmente sin consentimiento del contratista".</p> <p>La violación del artículo 83 de la Constitución la explica así : "La ley demandada viola el artículo 83 de la C.P. por recortar su sentido, al establecer una presunción, dejando abierta la posibilidad de que existan casos en que la ley pueda establecer una presunción contraria a la buena fe".</p> <p>Finalmente, considera la demandante que la ley 321 viola el inciso segundo del artículo 154 de la Constitución, pues éste ordena que las leyes que se refieren a contribuciones, únicamente pueden ser dcitadas por iniciativa del Gobierno, iniciativa que en este caso no existió.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO</p> <p>CUOTA DE FOMENTO CACAOTERO-Representación inequitativa de los departamentos (Salvamento de voto)</p> <p>El patrón de representación consagrado por la ley acusada se basa en el monto de la producción de los distintos departamentos, lo</p>

	<p>cual significa que los grandes productores tendrán una mayor representación en los órganos directivos que los pequeños productores. Este criterio me parece contrario a la regla establecida en ese mismo aspecto por la Ley del Plan. De todos modos el tratamiento inequitativo para ciertos productores subsiste, pues el diverso peso que la ley acusada confiere a las distintas representaciones departamentales en la junta directiva implica una especie de voto cualificado en favor de los productores de aquellos departamentos con mayor producción de cacao.</p> <p>LEY GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO- Desconocimiento/CONTRIBUCION PARAFISCAL-Función redistributiva (Salvamento de voto)</p> <p>Creo que la ley acusada es inconstitucional ya que desconoce los mandatos prevalentes de la ley del plan. Además, por violar los principios de solidaridad (CP art. 1º) y de equidad y progresividad tributarias (CP art. 365), así como por desconocer la naturaleza misma de la parafiscalidad y la función solidaria y redistributiva que la Constitución confiere a esta figura. En efecto, como se ha visto, la sentencia justifica el sistema de representación según producción consagrado por la norma acusada, con base en argumentos más propios del derecho comercial que del derecho constitucional, puesto que la idea central del razonamiento de la Corte es que es justo que quien más paga, mayor poder decisorio deba tener en la entidad administradora de una cuota parafiscal. Sin embargo, considero que ese principio, totalmente válido en el plano comercial, es inadmisble en el campo parafiscal, por la sencilla razón de que las entidades que administran contribuciones parafiscales no son sociedades comerciales ya que esos dineros son fruto de la soberanía fiscal y son cobrados coactivamente. Por consiguiente, estas entidades no están administrando recursos privados sino dineros públicos. En efecto, si conferimos mayor poder decisorio a quienes cuantitativamente más contribuyen, esto es, a los grandes productores, entonces es muy difícil que la cuota parafiscal cumpla su función redistributiva en favor de los pequeños productores, por cuanto las juntas directivas estarían controladas por los grandes productores que, obviamente, y por la natural tendencia a defender los intereses propios, orientarán las inversiones en su favor. La presente sentencia olvidó entonces que la función redistributiva y solidaria es una de las justificaciones esenciales de la parafiscalidad.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-086/98
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Andrés Botero Bernal.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad del artículo 5° de la ley 286 de 1996 "Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142 y 143 de 1994".
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.
Decision	Declárase EXEQUIBLE el artículo 5º de la ley 286 de 1996, únicamente por los cargos examinados en esta sentencia.
Conoció en segunda instancia	
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor estima que el artículo demandado viola los artículos 58, 362, 365 y 367 de la Constitución Política.</p> <p>Considera el demandante que las contribuciones que pagan los usuarios de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios son rentas tributarias que pertenecen a los municipios, cuando estos servicios son prestados directamente por la entidad territorial o empresas de carácter oficial. Razón por la que la norma acusada no podía transferir su producto a la Nación, porque ello desconoce lo preceptuado en el artículo 362 de la Constitución. Para el demandante, estas contribuciones hacen parte de las rentas de las entidades territoriales, que gozan de las mismas garantías otorgadas a la propiedad privada (artículo 58).</p> <p>Así mismo, afirma que la Constitución, en el artículo 367, facultó al legislador para fijar las competencias y las responsabilidades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, norma ésta que, sin embargo, no autoriza a la Nación para apropiarse de los dineros que reciben las distintas empresas de servicios públicos por concepto del servicio que prestan.</p>
Decision de la Corte	
Tiene salvamento	
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-198/98
Fecha de la sentencia	mayo trece (13) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Rafael Galvis Jaramillo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 286 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 286 de 1996, únicamente en relación con la materia estudiada en la presente sentencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que la norma acusada vulnera los artículos 41 transitorio y 322 de la C.P. Manifiesta que en el momento de su expedición el legislador “olvidó que existe un régimen integral y único para el Distrito Capital que obliga a determinar su régimen político, fiscal y administrativo de conformidad a la Carta y que las leyes especiales que se aplican al Distrito Capital determinan que solo éstas - las leyes - pueden regular las condiciones y el propio régimen de las empresas y entes descentralizados del Distrito”.</p> <p>Sostiene que el Decreto 1421 de 1993, el Estatuto Orgánico del Distrito Capital, dictado por el Gobierno Nacional en uso de las facultades que le confirió el artículo 41 transitorio de la Constitución, reguló la naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Públicos del Distrito. En efecto, en el artículo 164 del mencionado decreto se estableció:</p> <p>“Artículo 164. Naturaleza de las empresas de servicios públicos. Cuando el Distrito preste directamente los servicios públicos domiciliarios y de teléfonos, lo hará a través de entidades que tengan el carácter de empresas industriales y comerciales del Estado. Igualmente, con autorización del Concejo Distrital podrá hacerlo a través de sociedades entre entidades públicas o sociedades de economía mixta, las cuales podrán tener la naturaleza de anónimas.</p> <p>“Cuando una entidad de servicios públicos se transforme en empresa industrial y comercial del Estado, la misma continuará siendo titular de todos los derechos y responsable de todas las</p>



	<p>obligaciones que tenía antes de su transformación. La transformación no libera a los garantes de sus obligaciones ni perjudica en ninguna forma las garantías.</p> <p>“Sin perjuicio de las atribuciones del Concejo Distrital, corresponderá a las juntas directivas de la entidad que se transforma en empresa industrial y comercial del Estado, reformar los estatutos y autorizar todos los demás actos y contratos que deban realizarse para efectos de la transformación.</p> <p>“Con autorización del Concejo Distrital las empresas de servicio público en las que el Distrito tenga capital podrán participar como socias en otras empresas de servicios públicos. De la misma manera podrán asociarse, en desarrollo de su objeto, con particulares o formar consorcio con ellos o subcontratar con particulares sus actividades”.</p> <p>Como se observa, el mencionado Estatuto precisó que las empresas distritales que presten servicios públicos domiciliarios deben constituirse como empresas industriales y comerciales del Estado. Solamente con autorización expresa del Concejo Distrital se podrá prestar el servicio a través de sociedades entre entidades públicas o sociedades de economía mixta, caso en el cual podrán asumir la naturaleza de sociedades anónimas.</p> <p>El actor estima que, de acuerdo con los artículos 41 transitorio y 322 de la Carta, las disposiciones transcritas solamente pueden ser modificadas o derogadas mediante una ley especial referida al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. En atención a lo anterior, resulta violatorio de la Constitución Política y del Estatuto Orgánico aplicar a las empresas de servicios públicos del Distrito Capital - y entre ellas a la Empresa de teléfonos de Bogotá - la obligación que impone la norma acusada de transformarse en empresas de servicios públicos - esto es, en sociedades por acciones. Expresa entonces: “la conversión de la empresa en sociedad por acciones tal como lo presenta la norma acusada fundada en la transformación en sociedad por Acciones para la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, es contraria a la Constitución Nacional y el Estatuto Distrito Capital por su regulación especial y debe ser declarada inconstitucional”.</p> <p>Agrega el demandante que la disposición atacada vulnera los artículos 13, 55 y 12, numeral 9, del Decreto 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico del Distrito Capital. Con respecto al artículo 55, manifiesta que éste señala que únicamente el Concejo Distrital, por iniciativa del Alcalde Mayor, puede crear, suprimir, y fusionar establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y</p>
--	--

	<p>autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Por lo tanto, concluye:</p> <p>“la transformación en sociedad por acciones de que trata la norma acusada no podía operar de manera obligante e imperativa por cuanto la transformación en sociedad por acciones implica una intervención del Concejo quien por mandato expreso del Estatuto Distrito Capital, puede introducir las modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde en esas materias (...) En consecuencia, la violación aparece manifiesta porque la norma acusada pretende transformar automáticamente las entidades descentralizadas y demás empresas que estén prestando los servicios a los que se refiere la ley 142 de 1994, en sociedades por acciones, haciendo caso omiso de las facultades o funciones legislativas que en el marco del Estatuto Distrito Capital tiene el Concejo Distrital por cuanto a este ente le corresponde dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo - el de telefonía es uno de ellos - del Distrito (numeral 1º, art. 12, decreto 1421 de 1193), no podía entonces la norma acusada transgredir la competencia del H. Concejo en la determinación de la naturaleza jurídica de las entidades descentralizadas y demás empresas que estén prestando esos servicios”.</p> <p>Finalmente, cita dos pronunciamientos del Consejo de Estado sobre el alcance del Estatuto Orgánico del Distrito Capital. En el primero - emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el día 9 de febrero de 1995, M.P. Miguel González Rodríguez -, se señala que, tal como lo dispuso el artículo 322 de la C.P, “a falta de disposición constitucional para el régimen especial del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, son aplicables las normas especiales que para el mismo se dicten, como en este caso lo es el artículo 18, del Decreto 1421 de 1993, que es ley. De tal suerte que como la Constitución no se refirió a los efectos en que deben concederse los recursos en materia disciplinaria, pero el decreto 1421 de 1993, que es ley especial, sí lo hace, las disposiciones aplicables en este caso son las reguladas en él, pues sólo en defecto de éstas se aplican las vigentes para los municipios”.</p> <p>De su parte, en el segundo pronunciamiento a que hace referencia el actor - dictado el 27 de enero de 1995, M.P. Jaime Abella Zárate - se establece que “en obediencia a lo dispuesto en el artículo transitorio 41, fue expedido el Decreto 1421 de 1993, que es un cuerpo normativo especial, con rango y fuerza de ley dictado en ejercicio de las atribuciones legislativas especiales, que por una sola vez, le otorgó directamente la Constitución al gobierno, para que actuara en sustitución del órgano legislativo”.</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-130/98
Fecha de la sentencia	primero (1) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Luis Fernando Henao Montoya
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 218 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia y por los motivos en ella analizados, el artículo 5 de la Ley 218 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Manifiesta el actor que la disposición acusada vulnera el artículo 363 de la Constitución, por cuanto se desconoce el principio de equidad que debe regir el sistema tributario.</p> <p>A su juicio, la opción que otorga la norma a los inversionistas arroja resultados diferentes, según sea el sistema al cual se acojan. Para demostrar sus argumentos da un ejemplo, luego del cual concluye: "mientras la deducción genera un beneficio de \$35 en el mismo año en que se realiza la inversión de \$100, la renta exenta genera un beneficio de \$35 en el año siguiente, y el descuento tributario un beneficio de \$100 en el mismo año de la inversión".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-044/98
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de Febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Alba Nelly Obando Reyes
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 57 (parcial) y 61 (parcial) de la Ley 200 de 1995, "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declararse INHIBIDA para conocer de la demanda presentada por Alba Nelly Obando Reyes contra las expresiones <i>"investigación"</i> y <i>"de la dependencia"</i> de los artículos 57 y 61, respectivamente, de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En opinión de la demandante, el aparte acusado del artículo 57 del Código Disciplinario Único (Ley 200 de 1995) vulnera el artículo 29 de la Constitución Política y, en especial, la garantía del juez natural allí contenida. Señala que la disposición del artículo 48 de la Ley 200 de 1995, según la cual la unidad u oficina de control interno disciplinario de cada entidad pública es la encargada de conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se surtan en contra de los empleados que allí laboren, se contradice con lo dispuesto en la norma demandada que dispone que la oficina de control interno sólo es competente para llevar a cabo la etapa de investigación del procedimiento disciplinario. A juicio de la libelista, "este (...) enfrentamiento de las dos disposiciones mencionadas del mismo Código Disciplinario violan (...) el artículo 29 sobre el debido proceso en su aparte correspondiente a la autoridad competente, y generan incertidumbre jurídica y cuestionamientos sobre el alcance de las atribuciones de la unidad de control interno disciplinario". Agrega que "cómo se podría aceptar que la unidad de control interno disciplinario solamente investigue o instruya y que el jefe de la dependencia falle sin estar legalmente definidas las facultades y atribuciones de cada uno, o sin romper la unidad procesal como tal".</p> <p>De igual forma, indica que el fraccionamiento de la competencia en el procedimiento disciplinario entre la oficina de control interno</p>

	<p>que investiga y el jefe de la dependencia quien falla, es vulneratorio del principio de la doble instancia (C.P., artículo 31) toda vez que "en materia disciplinaria, los fallos de única instancia son consultables y los de primera son apelables y la competencia para resolver de fondo en ambos casos es del nominador y sobre ello no hay duda. Sin embargo cómo preservar este canon si se fracciona la instancia en investigación y fallo de primera y se habilita a autoridades diferentes para conocer de uno y de otro, como si se pretendiera generar el errado concepto de una tercera instancia".</p> <p>En relación con el aparte demandado del artículo 61 de la Ley 200 de 1995, la actora considera que éste viola la garantía del juez natural contenida en el artículo 29 de la Carta Política, como quiera que también contradice lo dispuesto en el artículo 48 del Código Disciplinario Único. En efecto, señala que mientras esta última norma establece que la oficina de control interno conoce de los procesos disciplinarios en primera instancia, el artículo 61 determina que en el caso de las faltas graves y gravísimas el jefe de la dependencia fallará el proceso en primera instancia.</p> <p>La libelista estima que la disposición contenida en el artículo 61 de la Ley 200 de 1995 determina una proliferación de los funcionarios competentes para fallar los procesos disciplinarios relativos a faltas graves y gravísimas en primera instancia, toda vez que, a la luz del Decreto-Ley 1050 de 1968, un jefe de dependencia puede ser jefe de división, director, secretario general, viceministro, ministro, etc., mientras que el artículo 48 del Código Disciplinario Único pretendía, precisamente, concentrar la competencia para fallar procesos disciplinarios en primera instancia en la oficina de control interno de las entidades públicas.</p> <p>Para concluir, la demandante afirma que "estas disposiciones encontradas frontalmente en una contradicción de fondo, permiten vislumbrar la flagrante transgresión del artículo 29 constitucional que contempla dentro de sus componentes la determinación de la autoridad competente como uno de los importantes ingredientes de este preceptos que contiene no solamente una garantía procesal sino un derecho fundamental".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-057/98
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Roberto Bornacelli
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 94 (parcial) de la ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto salvo la expresión "y de los contratos de prestación de servicios" que se declara INEXEQUIBLE, sexto, séptimo y octavo del artículo 94 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Según el actor los incisos demandados del artículo 94 de la ley 200 de 1995, desconocen el poder preferente que en materia disciplinaria le otorga la Constitución al Procurador General de la Nación y a sus delegados o agentes, en virtud del cual es competente no sólo para imponer sanciones disciplinarias sino también para hacerlas efectivas. Al ser ésta una facultad propia de los funcionarios citados no puede ser ejercida por otra autoridad, como bien lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-229 de 1995.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-448/98
Fecha de la sentencia	veintiseis (26) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Luis Eduardo Montoya Medina
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 42 y 44-5 (parcial) de la Ley 200 de 1.995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico” y el numeral 5o. del artículo 28 del Decreto 1421 de 1993.
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 42 de la Ley 200 de 1995, salvo la expresión "y los reglamentos administrativos", que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Segundo. Declararse INHIBIDA para resolver sobre la demanda presentada contra el artículo 28 numeral 5o. del Decreto 1421 de 1993, por falta de competencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, las normas acusadas, en los apartes transcritos, vulneran los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 28, 29, 34, 40, nums. 1o. y 7o., 98, 99, 116, 121, 122, 123, 150 num. 23, 152 literal a, 179 num. 1o., 209, 248, 293, 299, 312, 322 y 41 transitorio de la Constitución Política.</p> <p>El demandante al sustentar la demanda, señala que el artículo 41 transitorio de la Constitución Política habilitó con poderes legislativos al Presidente de la República, para establecer el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en caso de que el Congreso no lo hiciera dentro de los dos (2) años siguientes a la promulgación de la misma, situación que culminó con la expedición, por parte del Ejecutivo, del Decreto 1421 de 1993, normatividad que el accionante equipara con una ley ordinaria y que, en lo atinente a su artículo 28-5, sobre inhabilidades para ser elegido concejal en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, manifiesta que fue incorporado al Código Unico Disciplinario por mandato del artículo 42 de la Ley 200 de 1995, lo relativo a las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos, en desarrollo del propósito unificador de regímenes disciplinarios, convirtiéndose, de esta manera, en objeto de control constitucional</p>

	<p>por parte de la Corte Constitucional, y ya no del Consejo de Estado, al presentar entonces un rango legal.</p> <p>De esta manera, el citado artículo 42, en cuanto al contenido normativo incorporado -Decreto 1421 de 1.993, art. 28-5-, así como el artículo 44 de esa Ley 200 de 1995, son objeto de demanda constitucional, de conformidad con los cargos que a continuación se sintetizan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violación de la reserva legal estatutaria, ya que según el demandante, mediante una disposición legal ordinaria, como la demandada, que inicialmente tuvo origen gubernamental, se expidió un régimen de inhabilidades que afectó el derecho político a elegir y ser elegido y de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos de los aspirantes a concejal en el Distrito Capital, sin tener en cuenta que por tratarse de un derecho fundamental, presentaba una reserva legal estatutaria, de competencia exclusiva del órgano legislativo (C.P., arts. 40-1 y 7, 152-a y 322).</li> <li>2. Extensión indebida de un régimen constitucional general de inhabilidades, por cuanto según el actor, existe un marco constitucionalmente establecido de inhabilidades para distintos cargos públicos (C.P. arts. 197, 179, etc.), constitutivo del límite máximo de restricción de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 40, numerales 1o. y 7o. del ordenamiento superior, aplicable a los aspirantes a servidores públicos, como es el caso de los concejales, quienes ostentan la inhabilidad para ser elegidos de la misma manera que los congresistas, conforme al artículo 179-1 superior. Por ello, estima que el legislador ha debido diseñar las inhabilidades contenidas en la norma acusada; de tal forma que, no le era posible ampliar el régimen a faltas éticas relativas a la profesión, así como de orden administrativo y disciplinario, por hechos que no presentaban una naturaleza penal, juzgados por autoridades disciplinarias y no judiciales y con sanciones que no comprenden la privación de la libertad, como lo exige dicho canon constitucional, en contradicción con lo establecido en los artículos 40, 98, 99, 116, 121, 122, 123, 150-23, 179-1, 204, 209, 248, 293 299 y 312 de la Carta Política.</li> <li>3. Quebrantamiento del límite temporal de las potestades punitivas del Estado, con violación al derecho al debido proceso y al principio de la cosa juzgada. Al respecto, el accionante expresa que el señalamiento de inhabilidades por sanciones éticas y disciplinarias sin importar la época de su imposición, atenta contra ese límite y les confiere efectos retroactivos, con desconocimiento, por una parte, de la prevalencia en materia punitiva de las leyes permisivas o favorables, aun cuando sean posteriores, sobre las restrictivas o desfavorables; y de la otra, de la obligación de juzgamiento de las</li> </ol>
--	---



	<p>faltas disciplinarias de conformidad con las normas preexistentes a su comisión, so pena de incurrir en una extinción de los derechos políticos ya mencionados; al igual que, del principio de la cosa juzgada de las decisiones judiciales y administrativas, en cuanto resultan modificadas al imprimirles una consecuencia jurídica nueva al hecho o a la falta disciplinada, alterando así, el contenido material de la decisión que ya adquirió fuerza vinculante, haciendo más gravosa la situación del sancionado, con vulneración de lo establecido en los artículos 28, 29, y 34 de la Carta Política.</p> <p>El anterior cuestionamiento acerca de la intemporalidad de las inhabilidades, igualmente, se plantea en relación con el artículo 44-5 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>4. Vulneración del derecho a la igualdad, de los candidatos a concejales del Distrito Capital, frente a los demás aspirantes a concejales en el resto del país, pues no obstante el ejercicio de funciones constitucionales idénticas, se establece un tratamiento desigual y discriminatoriamente irrazonable para ellos, con las inhabilidades allí contenidas; así como, respecto de los ciudadanos que no han obtenido formación profesional, en lo que concierne a la inhabilidad por exclusión de la profesión o con aquellos sancionados por faltas a la ética profesional, a pesar de que el ejercicio del derecho de participación está ligado, exclusivamente, a la condición de ciudadano (CP., arts. 13, 26, 40, 98 y 99), cuya argumentación también se expone para sostener la inconstitucionalidad del artículo 44-5 de la Ley 200 de 1995.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Aclaración de voto a la Sentencia C-448/98</p> <p>ESTATUTO DE BOGOTÁ-Disposiciones con categoría de ley/ESTATUTO DE BOGOTÁ-Competencia de la Corte Constitucional (Aclaración de voto)</p> <p><i>Resulta incuestionable que el Decreto 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá, D.C.), aún cuando formalmente fue expedido por el Gobierno Nacional, desde el punto de vista material, sus disposiciones tienen el rango y la categoría de ley, razón ésta por la cual las controversias en relación con su inexequibilidad o exequibilidad, corresponde conocerlas, a mi juicio, a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, por cuanto no se trata de un acto administrativo.</i></p>

	<p>El suscrito Magistrado, con profundo respeto por la decisión contenida en la sentencia aludida, mediante la cual se declara exequible el artículo 42 de la Ley 200 de 1995, salvo la expresión “y los reglamentos administrativos”, que se declara inexecutable, sentencia en la cual, además, la Corte Constitucional se declara inhibida para resolver sobre la exequibilidad del artículo 28, numeral quinto del Decreto 1.421 de 1993, “por falta de competencia”, manifiesto que aclaro el voto, por las siguientes razones:</p> <p>Primera.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 322, 323 y 324 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso Nacional, por medio de una ley dictar las normas pertinentes al “Régimen Especial”, conforme al cual deba regirse la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital.</p> <p>Segunda.- El artículo transitorio 41 de la Constitución de 1991, dispuso que “si durante los dos años siguientes” a la promulgación de la Carta Política “el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324 sobre Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes”.</p> <p>Tercera.- Por haber transcurrido los dos años a que se refiere el artículo transitorio 41 de la Carta Política, sin que el Congreso expidiera la ley a que se ha hecho referencia, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1421 de 1993, que constituye el “Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá, D.C.”.</p> <p>Cuarta.- En tal virtud, resulta incuestionable que el Decreto 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá, D.C.), aún cuando formalmente fue expedido por el Gobierno Nacional, desde el punto de vista <u>material</u>, sus disposiciones tienen el rango y la categoría de <u>ley</u>, razón ésta por la cual las controversias en relación con su inexecutable o executable, corresponde conocerlas, a mi juicio, a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, por cuanto no se trata de un acto administrativo.</p> <p>Quinta.- No obstante lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en auto de 13 de octubre de 1994 (acta No. 62, al desatar un conflicto de jurisdicción entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, resolvió declarar “que la competencia para conocer de las demandas presentadas contra el Decreto 1421 de 1993, en todo o en parte, corresponde al H. Consejo de Estado”, decisión ésta que se acata por la Corte Constitucional en la sentencia respecto de la cual aclaro el voto, por cuanto por las razones constitucionales ya</p>
--	---

	expresadas, no la comparto.
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-620/98
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	<i>Nelson Ivan Zamudio Arenas.</i>
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 175 y 177 (parciales) de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar EXEQUIBLES las expresiones acusadas de los artículos 5° y 177 de la Ley 200 de 1995, <i>"Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico"</i> (C.D.U.).
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima el demandante que la disposición acusada es violatoria de los artículos 29 y 217 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>El actor estima que las normas demandadas son violatorias de la Carta Política, por cuanto a su juicio, el régimen disciplinario especial previsto por el artículo 217 de la Constitución Política para los miembros de las Fuerzas Militares, no puede ser restringido ni modificado por el legislador a quien, por el contrario, le asiste la obligación de desarrollarlo con estricta sujeción al mandato constitucional.</p> <p>Sostiene el demandante que dentro de una interpretación armónica de las expresiones acusadas del artículo 5 y 177 de la ley 200 de 1995 con aquellas del artículo 175 <i>ibídem</i>, debe entenderse que el <u>procedimiento</u> establecido para juzgar las faltas disciplinarias que cometan los miembros de las Fuerzas Militares es el señalado en la ley 200 de 1995, presentándose entonces una flagrante violación de los artículos 29 y 217 de la Carta Política, pues se les está aplicando a éstos servidores públicos un régimen general a pesar de estar cobijados, en razón de sus funciones, por un régimen especial integral.</p> <p>Haciendo referencia al contenido del artículo 217 constitucional, explica el actor que "Lo que quiso el constituyente aquí fue que</p>

	<p>para los miembros de las Fuerzas Militares, el legislador determinara un régimen disciplinario especial, esto es, una norma que fijara la parte sustancial, procedimental y de competencia, propia para las Fuerzas Militares, convalidando el ya existente decreto 085 de 1989, sin perjuicio de que pueda expedir otra norma especial que lo derogue o modifique, pero, en todo caso, como excepción, por propia fuerza constitucional, a cualquier otro régimen disciplinario igualmente especial o general”.</p> <p>No ignora el demandante que los artículos 175 y 177 del C.D.U., ya fueron examinados por la Corte Constitucional -el primero en su totalidad y el segundo parcialmente- encontrándolos ajustados a la Carta Política. Sin embargo, considera que la Corporación no fijo su verdadero alcance en las respectivas sentencias (C-080/96 y C-310/97) y, además, ignorando el contenido del artículo 217 de la Carta, se equivocó al “...pensar que el legislador podía decidir o considerar el establecimiento de un procedimiento general para juzgar faltas de una normatividad especial, dentro de un régimen disciplinario especial por mandato Constitucional.”</p> <p>Por eso, de no prosperar la nueva acción de inconstitucionalidad contra el artículo 175, el actor solicita como petición subsidiaria la aclaración o nulidad de la Sentencia C-310 del 25 de junio de 1995, motivada, precisamente, en la supuesta contradicción e incongruencia en que incurrió dicha providencia al permitir que los miembros de las Fuerzas Militares sean juzgados disciplinariamente conforme al procedimiento general contenido en el C.D.U..</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-187/98
Fecha de la sentencia	seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Roberto Bornacelli Guerrero.
Demandado	Norma acusada: Parágrafo (parcial) del numeral 1o. del artículo 30 de la Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”.
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Decision	Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados del parágrafo del numeral 1o. del artículo 30 de la Ley 200 de 1995, con la advertencia de que trata la parte motiva de esta providencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, la preceptiva legal demandada, en los apartes transcritos, vulnera la Constitución Política en los artículos 4, 29, 124 y 277-6, por cuanto desborda el ámbito de interpretación y supremacía de la Carta Política, en su contenido material, con base en los siguientes argumentos:</p> <p>El derecho al debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas (art. 29) y por ende al proceso disciplinario; de manera que, para la determinación de la responsabilidad de los servidores públicos y la forma de hacerla efectiva (C.P., art. 124), debe existir una definición anticipada de las faltas disciplinarias y sus correspondientes correctivos y sanciones con vigencia del principio de la tipicidad, en desarrollo del principio de legalidad, lo cual obliga a la individualización o determinación de la respectiva pena a imponer.</p> <p>Es precisamente por la violación del principio de legalidad, en lo referente a la tipicidad de la sanción accesoria de inhabilidad para ejercer funciones públicas consagrada en las disposiciones acusadas, que el accionante formula su queja, por cuanto, en su concepto, constituyen verdaderas cláusulas abiertas que adolecen de un marco mínimo y máximo de referencia para la aplicación de dicha sanción, pudiendo dar paso a la arbitrariedad del fallador y, así mismo, a la restricción de la facultad del Procurador General de la Nación para imponer, por si o por medio de sus delegados, sanciones conforme a la ley (C.P., art. 277-6).</p> <p>Por último, señala que si bien la inhabilidad derivada de una falta disciplinaria constituye una pena, la cual en términos del Código</p>

	<p>Penal (artículos 42, ordinal 3o. y 44) puede derivarse de la comisión de un hecho punible, con un máximo de 10 años y límites precisos según los tipos penales que la tengan prevista como accesoria, no significa que el jefe del ministerio público pueda imponerla haciendo uso de la legislación penal, ya que estaría dando lugar a una</p> <p>interpretación carente de fundamento dentro del marco de un estado social de derecho.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-234/98
Fecha de la sentencia	mayo veinte (20) de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Carlos Mario Serrano Isaza Y Otro.
Demandado	Normas Demandadas: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 (p) de la Ley 200 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Estése a lo resuelto por la Corte en la sentencia C-187 de 1998, mediante la cual se declaró exequible el aparte demandado del artículo 30 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-111/98
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Alirio de Jesús Tobón Duque
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 del Decreto 1888 de 1989, 1 del Decreto 2281 de 1989 y 43 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- ESTESE a lo resuelto por la Corte en Sentencia C-558 del 6 de diciembre de 1994, acerca del literal h) del artículo 3 del Decreto 1888 de 1989.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el artículo 43 de la Ley 200 de 1995, excepto las expresiones "hayan afectado la administración pública", que fueron declaradas exequibles por Sentencia C-280 del 25 de junio de 1996.</p> <p>Tercero.- Decláranse INCONSTITUCIONALES los literales a), b), e), f) y g) del artículo 3 del Decreto 1888 de 1989, por exceso en el uso de las facultades extraordinarias.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del demandante, y en cuanto a los apartes acusados de los decretos 1888 y 2281 de 1989, el Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias conferidas, violando el artículo 76 de la Constitución de 1886, en cuanto creó inhabilidades "para los condenados para acceder a las ramas de la administración pública" y las extendió a los particulares que no son sujetos del régimen disciplinario de la Rama Judicial, olvidando que todas las personas, sin distinción alguna tienen derecho a laborar en la Rama y los abogados per se no hacen parte de ella.</p> <p>Considera que las disposiciones acusadas también son violatorias de los artículos 13, 25, 53 y 152 de la actual Constitución Política, pues desconocen la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho fundamental al trabajo con iguales oportunidades y no se tramitaron como ley estatutaria, en cuanto regulan derechos fundamentales de las personas.</p> <p>Afirma que el artículo 43 de la Ley 200 de 1995 vulnera aún más la</p>

	<p>Carta, al establecer inhabilidades para desempeñar todos los cargos que existan en el Estado.</p> <p>Por último manifiesta que "la Constitución faculta la sanción penal pero no autoriza la disminución de la capacidad civil para ninguno de los ciudadanos".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-769/98
Fecha de la sentencia	diciembre diez (10) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Carlos Fernando Muñoz Castrillón
Demandado	Norma Demandada: Numeral 8, Del Artículo 25, De La Ley 200 De 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Declarar EXEQUIBLE el numeral 8º del artículo 25 de la ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que el numeral 8º del artículo 25 de la ley 200 de 1995 desconoce el derecho al debido proceso, consagrado en el art. 25 de la Constitución, con fundamento en las siguientes consideraciones:</p> <p>Todas las actuaciones, tanto judiciales como administrativas, deben adelantarse respetando el debido proceso; uno de los elementos de esta garantía, consiste en la consagración del principio de legalidad,</p>

	<p>según el cual el Estado sólo puede juzgar a las personas por delitos preexistentes al hecho que se imputa.</p> <p>El principio de legalidad, contiene otra serie de principios-garantías, entre los que se encuentra el de la tipicidad, el cual se encuentra consagrado en el artículo 3 del Código Penal, que dice: "La ley definirá el hecho punible de manera inequívoca"</p> <p>La ley penal debe señalar en forma clara e inconfundible qué es lo que prohíbe, de manera tal que la conducta descrita no pueda ser confundida con otra prohibida o permitida. "Se apunta, entonces, a que haya certidumbre o certeza en cuanto al hecho punible, lo que excluye, por consiguiente, el criterio caprichoso o limitado del juzgador (fallador) y, por el contrario, le obliga a estar ceñido a claros cauces de normación positiva y a parámetros indubitables".</p> <p>El artículo 25-8 de la ley 200 de 1995 no cumple a cabalidad con el principio de la tipicidad, porque dicha prescripción es vaga, dado que no contiene una descripción precisa y concreta de lo que se entiende por abandono injustificado del cargo o del servicio, lo que naturalmente da lugar a diversas interpretaciones acerca de lo que implica la dejación del cargo o del servicio.</p> <p>En razón de la gravedad de las sanciones previstas para las faltas gravísimas, en las cuales se incluye el abandono del cargo o del servicio, se imponía al legislador el deber de ser mas explícito en la tipificación de dicha conducta, pues en la forma como aparece descrita ésta surgen problemas, tales como los siguientes:</p> <p>"Se requerirá que para que se produzca el abandono que las funciones o deberes se dejen tirados en forma definitiva, esto es, que no se regrese nunca más a atenderlos; o basta que la desatención (por inasistencia al lugar de trabajo o desidia en el cumplimiento del deber) sea mas o menos prolongada."</p> <p>"Pero en este último caso, se generará un nuevo interrogante".</p> <p>"Qué habrá de entenderse por un periodo más o menos prolongado de tiempo".</p> <p>En la forma como esta redactado el segmento normativo acusado, cualquier situación que implique inasistencia al sitio de trabajo, v.gr. no concurrir al trabajo durante uno o varios días, o llegar tarde o salirse del sitio de trabajo, puede ser considerada como abandono del cargo o del servicio. En tal virtud, se denota la falta de seguridad de los administrados frente a lo que habrán de entender por dicho abandono para que puedan ajustar su conducta a lo que la norma prescribe. Se demuestra así que la conducta</p>
--	--

	prescrita como prohibida "carece de descripción esquemática y por lo tanto es atípica", y la tipicidad lesiona el mandato constitucional del debido proceso, porque afecta en forma grave el derecho de defensa al no saberse, en últimas qué es lo prohibido y, por lo tanto, lo que se debe sancionar.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-095/98
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra el inciso 1o. del artículo 113 de la Ley 200 de 1995 "por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico."
Conoció en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Decision	Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 113 de la Ley 200 de 1995 "por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, la preceptiva legal acusada vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.</p> <p>El accionante estima que el inciso 1o. del artículo 113 de la Ley 200 de 1995 viola las normas superiores mencionadas, por cuanto con la improcedencia que allí se establece para solicitar la revocatoria directa, se niega en forma rotunda la oportunidad que tiene el servidor público, sujeto a esa normatividad, para demostrar su inconformidad respecto de la sanción disciplinaria que le ha sido impuesta, puesto que se le impide el ejercicio de su derecho de defensa en el evento de que haya hecho uso de los recursos</p>

	<p>ordinarios, con claro desconocimiento de lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto 01 de 1984, que la consagra en cualquier tiempo y sin prescripción alguna, inclusive en relación con los actos en firme o aún cuando se haya acudido a los tribunales contenciosos administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.</p> <p>Además, según lo expone, no resulta jurídicamente admisible lo estipulado en la norma demandada, en razón a que dicho contenido normativo se encontraba regulado en el artículo 70 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 10 del Decreto 2304 de 1989, que fue declarado inexecutable por la Corte Suprema de Justicia, el día 20 de junio de 1990, con lo cual, en su concepto, se derivó la posibilidad de utilizar la revocatoria directa coetáneamente con el ejercicio de los recursos de la vía gubernativa, por lo que el legislador al expedir el artículo 113 de la Ley 200 de 1995 desconoció la mencionada providencia de la Corte Suprema de Justicia, produciendo una discriminación del servidor público regulado por dicha Ley, en contraposición a otros funcionarios que se encuentran bajo el amparo del Decreto 01 de 1984.</p> <p>En conclusión, el demandante reitera que la norma cuestionada cercena al disciplinado el derecho a impugnar decisiones del nominador que se encuentren en abierta oposición constitucional o legal, lo que hace necesario su retiro del ordenamiento jurídico.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-661/98
Fecha de la sentencia	noviembre doce (12) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Demandante	María Olga Rojas Melo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 de la Ley 191 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 55 de la ley 191 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>- El artículo 55 de la ley 191 de 1995 en esencia obliga a Ecopetrol a asumir el costo del transporte de los combustibles entre las plantas de abasto o mayoristas y las capitales de departamento ubicadas en zonas de fronteras y comunicadas por carretera con dichas plantas, mientras la Nación construye la red de poliductos prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que la disposición censurada establece una especie de subsidio a dicho transporte.</p> <p>Lo relacionado con el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles constituye un servicio público que se regula por la leyes 39 de 1987 y 26 de 1989 y sus decretos reglamentarios 283 de 1990 y 353 de 1991.</p> <p>Conforme a dichas disposiciones, el manejo de los combustibles derivados del petróleo se efectúa a través de tres tipos de intermediarios: a) Gran distribuidor mayorista, que corresponde a Ecopetrol; b) Distribuidor mayorista, que es cualquier persona, natural o jurídica, que almacene y distribuya al por mayor el combustible a través de una planta de abastecimiento; c) Distribuidor minorista, que está constituido por cualquier persona, natural o jurídica, que suministre directamente al consumidor el combustible.</p> <p>En el sistema económico nacional el costo de transporte de los bienes desde el sitio donde se produce hasta los lugares donde se efectúa su comercialización deben asumirlo los particulares que hagan parte de la respectiva cadena de distribución y mercadeo.</p> <p>De lo anterior se infiere que una norma legal que obliga al Estado a asumir el costo de transporte de determinados bienes, simplemente, como una excepción, envuelve el decreto de un subsidio o auxilio en favor de unos particulares, quienes son los que deben cargar con el costo del transporte. En tal virtud, se viola el artículo 355 de la Constitución, porque se concede un auxilio a favor de particulares, sin que tal erogación tenga apoyo en alguna</p>

	<p>prestación obligatoria del Estado para el cumplimiento de sus fines ni se trate de ayudas, estímulos o incentivos económicos que se otorguen en cumplimiento de deberes o principios de origen constitucional.</p> <p>Si bien el legislador, con apoyo en el artículo 337 Superior, puede adoptar decisiones económicas que incentiven el desarrollo en zonas de frontera, cuando se decreten auxilios en favor de particulares, deben establecerse las correspondiente condiciones y contraprestaciones que aseguren dicho desarrollo.</p> <p>- La demandante, con el fin de fundamentar la acusación alude a la manera como se ha dado aplicación práctica a la norma cuestionada y, en tal virtud, se refiere a algunas resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, aportadas al proceso, mediante las cuales se ha dispuesto que Ecopetrol asuma el pago de una compensación por el transporte de cada galón de combustible entre la planta de abasto de Yumbo y la ciudad de Pasto, "con destino a los municipios del departamento de Nariño", pues, según el razonamiento de la actora, la norma acusada y los desarrollos prácticos de ésta contenidos en los actos administrativos emanados del referido Ministerio constituyen una unidad normativa.</p> <p>- La norma acusada quebranta el artículo 158 de la Constitución Política. En efecto:</p> <p>La ley en cuestión se expidió en desarrollo de los artículos 25, 289 y 337 de la Constitución, con el objeto de "establecer un régimen especial para las zonas de frontera, con el fin de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural". Es decir, que conforme a dicho objetivo la normatividad acusada sólo podía "promover el desarrollo de zonas de frontera".</p> <p>No obstante, por interpretación del Consejo de Estado contenida en el fallo del 16 de octubre de 1997 (expediente 4269: actor Diego Cuesta Mesa) que avaló la legalidad de las resoluciones del Ministerio de Minas, antes mencionadas, hay que entender que esta entidad "podía seleccionar los municipios que, aún no siendo zonas de frontera, podían ser beneficiados por esta norma decretando un subsidio al transporte de combustibles que se llevaran con destino a ellos, siempre y cuando que la ruta desde la planta de abasto desde donde se surtieran pasara por una capital de departamento, zona de frontera, con derecho al subsidio".</p> <p>Según lo anterior, si el artículo 55 de la ley 191 de 1995 debe ser entendido con el mencionado alcance, forzoso es concluir que, además de propender por el desarrollo económico de unas</p>
--	--

	<p>capitales de departamento, zonas de frontera, extendió su objeto a otra materia, como es la relativa al desarrollo de determinadas áreas o municipios del territorio nacional que no tienen la categoría de zonas de fronteras, quebrantando así el principio de unidad de materia.</p> <p>- El artículo 334 de la Constitución fue violado, porque el objeto de la intervención que se autoriza debe contribuir a racionalizar la economía, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.</p> <p>Según lo anterior, "es una exigencia de la Constitución la de que las leyes que otorguen un mandato al Estado para intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, efectivamente conduzcan a la racionalización de la economía y por ende se obtengan fines que la misma Carta atribuye a la intervención. Contrario sensu, también es válido concluir que una ley que intervenga en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, que efectivamente no racionalice la economía, no cumplirá con la exigencia constitucional comentada, ni contribuiría a los fines que la Carta atribuye a la intervención".</p> <p>La aplicación práctica que por el Ministerio de Minas y Energía se ha dado a la disposición acusada, a través de las aludidas resoluciones, ha conducido a que varios municipios de Nariño reciban el servicio a un mayor costo o que no se benefician del subsidio, y que Ecopetrol tenga que asumir mayores costos. De este modo, la ley lejos de racionalizar la economía contribuye a un uso irracional de recursos públicos que es contrario a los fines que a la intervención del Estado asigna la Constitución.</p> <p>" Lo visto se magnificará en lo futuro en la medida en que se extienda la aplicación de la ley a otras cuatro capitales de departamento, zonas de frontera, adicionales a Pasto, pues como lo expresó el doctor Parmenio Cuéllar, quien introdujo el proyecto de ley lo que finalmente fue el artículo 55 de la misma, ella pretendía servir por el momento a 5 capitales de departamento, zonas de frontera, lo cual quiere decir que el gobierno está en mora de conceder el subsidio de transporte a las capitales que aún faltan por privilegiar y naturalmente a los municipios del respectivo departamento que de igual manera tendrían el mismo derecho a recibir el auxilio de transporte parcial que fue concedido a los de Nariño. Ante tamaña perspectiva puede sólo concluirse que la norma legal demandada careció de la técnica legislativa que el numeral 21 de l artículo 150 de la Constitución exige a las leyes que ordenan la intervención del Estado en la economía pues no precisó sus alcances, ni sus propios destinatarios, ni, como ya se explicó, las</p>
--	--



	contraprestaciones que debían corresponder a los particulares beneficiarios de los auxilios a cambio del recibo de éstos".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI, DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado, HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado, VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado</p> <p>ECOPETROL-Inconstitucionalidad del subsidio temporal al transporte de combustibles (Salvamento de voto)</p> <p>El subsidio que crea la norma, dadas las condiciones que ella establece, sólo se extiende a una capital de departamento ubicada en zona de frontera y beneficia directamente a un grupo reducido de distribuidores de combustibles derivados del petróleo. De otro lado, la ausencia de suficientes precisiones en la norma, no asegura que el beneficio por vía indirecta se traslade a los consumidores e, inclusive, que aún produciéndose ese efecto no excluya a los nacionales de otros países que se movilizan en zonas de frontera. La norma legal puntualmente introduce supuestos abstractos y generales que, sin embargo, fatalmente se traducen en el beneficio de un círculo reducido de personas. La circunstancia anotada, obliga a considerar que la norma es "singular" - "norma-medida" -, lo que no conduce necesariamente a estimarla inconstitucional, sino a realizar por parte de la Corte un escrutinio estricto tendente a verificar si ella viola el principio de igualdad. Por el contrario, la sentencia no ensaya ni siquiera el "test" débil de igualdad. En últimas, el raciocinio de la Corte se inscribe en la lógica causa-efecto, y escamotea toda consideración de justicia distributiva (principio de igualdad): el subsidio es una medida (medio) que favorece el desarrollo económico de una zona de frontera (fin) ; luego, el legislador, podía adoptarla con fundamento en el artículo 337 de la Constitución Política.</p> <p>AUXILIOS O DONACIONES-Excepción a la prohibición (Salvamento de voto)</p> <p>Pese a que la Corte no niega que el subsidio que concede la norma legal, tenga el carácter de auxilio o donación, considera que en este caso - por tratarse de un beneficio destinado a una zona de frontera -, la excepción a la perentoria prohibición contenida en el artículo 355 de la C.P., es plenamente válida. No militan las razones que en otras oportunidades tuvo presente la Corte para avalar excepciones, por lo demás estrictamente configuradas, en relación</p>

	con la referida prohibición. Baste recordar que se trataba de actividades identificadas por el mismo constituyente y, en relación con las cuales, parecía indiscutible que él mismo había autorizado la medida de fomento. Las zonas de frontera, terrestres y marítimas del país, cubren una porción significativa del territorio nacional, donde sus pobladores se entregan a las más variadas actividades. La interpretación de la Corte, en estas condiciones, produce un cambio constitucional manifiesto al reducir el ámbito territorial de una de las más importantes prohibiciones que contempla la Constitución Política.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-317/98
Fecha de la sentencia	junio treinta (30) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Carlos Mario Isaza y Carlos Alberto Paz Lamir
Demandado	Normas acusadas: Artículos 4º (parcial) y 75 (parcial) de la Ley 181 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y constituyen gasto público social” del artículo 4º de la Ley 181 de 1995. Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 75 de la Ley 181 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Los demandantes consideran que la norma demandada viola los artículos 341, 350, 352, 356, 357 y 359 de la Constitución. Según su criterio, la competencia para definir qué se entiende por gasto social corresponde a la ley orgánica del presupuesto, y ésta ya lo hizo, pues el artículo 41 del decreto 111 de 1996 lo caracteriza como “aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión”. Por consiguiente, el artículo acusado, al establecer que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen gasto social está

	<p>desconociendo la definición de la ley orgánica, con lo cual viola la Carta.</p> <p>De otro lado, los demandantes distinguen entre gasto público social e inversión social, en los siguientes términos:</p> <p>“Por gasto público puede entenderse toda erogación que efectúe el Estado con dineros públicos, que se contabiliza mediante la aprobación correspondiente, para una determinada vigencia fiscal, dentro de la ley anual del presupuesto. La inversión, por su parte, constituye una forma especial del gasto público, cuya particularidad reside en que se espera recuperar el monto del gasto efectuado en el mediano o largo plazo; y se prevé, además, que el proyecto en el cual se invierte a través de un determinado gasto, genere, rendimientos que pueden medirse ya en términos financieros, ya desde el punto de vista de la externalidades que cause para una determinada colectividad o para la sociedad en su conjunto. El concepto de inversión no podría entenderse sin el de gasto, lo que no ocurre en sentido contrario, ya que el gasto público se divide usualmente en gasto de funcionamiento y en gasto de inversión.”</p> <p>A partir de esa distinción, los actores consideran que la excepción a la prohibición constitucional de que no hay rentas nacionales de destinación específica se predica “respecto a una de las formas del gasto público social, cual es en este caso la inversión (social) y no al género, que en este caso es el gasto social.” En ese orden de ideas, como el artículo 75 impugnado obliga a destinar al deporte un componente del impuesto al valor agregado (IVA), entonces está creando una renta de destinación específica contraria a la Carta, ya que el deporte constituiría a lo sumo gasto social, pero no una forma de inversión social. De esa manera se viola, además, el principio de unidad de caja consagrado en la ley orgánica del presupuesto, según el cual, todos los ingresos del Estado forman un fondo común que sirve para el pago oportuno de todos los gastos públicos.</p> <p>En tercer término, según los actores, el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes son “rentas de destinación específica permitidas expresamente por la Constitución”, que responden a la descentralización del Estado y a la autonomía financiera concedida a las entidades territoriales, mediante las cuales se busca que éstas atiendan algunos servicios que anteriormente eran prestados por la Nación. Ahora bien, la Carta definió las áreas que pueden ser financiadas con el situado fiscal y autorizó al legislador para que señale las áreas de inversión social a cargo de los ingresos provenientes de la participación de los municipios, lo cual fue efectuado por el Congreso mediante la Ley 60 de 1993, que debe entenderse que tiene entonces un carácter</p>
--	---

	<p>preeminente. Por ende, consideran los demandantes, si “mediante una ley ordinaria se amplían las materias objeto de financiación con cargo a los recursos que deberían transferirse a las entidades territoriales, se viola el artículo 356 superior”, ya que “la participación de la entidad territorial (entidad beneficiaria de las transferencias) opera automáticamente, de forma que le asiste un derecho público subjetivo frente a la entidad titular de la totalidad del recurso (Nación), con la consiguiente asignación de competencias sobre los recursos.” Los demandantes concluyen entonces al respecto:</p> <p>“Es así como la ley orgánica de presupuesto establece de manera perentoria el descuento previo de los recursos correspondientes a estas transferencias, previamente a cualquier otro cálculo de rentas de destinación específicas. El artículo 28 del Decreto 111 de 1996 dispone: ‘Las rentas de destinación específica autorizadas en los numerales 2 y 3 del artículo 359 de la Constitución se harán efectivas sobre los ingresos corrientes que correspondan a la nación, después de descontar el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación ordenados por los artículos 356 y 357 de la Constitución.’</p> <p>De esta forma se consagra, tanto en la Carta Política como en la ley orgánica de presupuesto, ésta última de rango semiconstitucional, el carácter preeminente de la ley 60 de 1993, por encima de otras asignaciones presupuestales, como una garantía para las entidades territoriales frente al legislador, quien no podrá por medio de ley ordinaria ensanchar o reducir la cobertura de materias objeto de atención en el área de inversión social, con recursos nacionales, de manera que se restrinjan los ingresos corrientes de la nación, en cuanto al volumen que debe transferir a las entidades territoriales. Sostener lo contrario, además de la vulneración de las normas constitucionales aludidas, supondría una disminución de la base de cálculo de los recursos de la Ley 60 de 1993.”</p> <p>Finalmente, según los actores, la aplicación obligatoria de los gastos públicos consagrados en las normas acusadas “vulnera la preeminencia de la ley del Plan de Inversiones sobre las demás leyes” ya que obstaculiza la realización de los objetivos “especificados en la ley del plan”, en la medida en que se disminuye la capacidad de maniobra y de disposición de recursos por parte del Estado.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI DRES. CARLOS GAVIRIA DÍAZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, FABIO MORÓN DÍAZ GASTO PUBLICO SOCIAL-Concepto jurídico indeterminado

	<p>(Salvamento de voto)</p> <p>La propia Carta delimita entonces parcialmente la noción de gasto público social, de suerte que el legislador orgánico no puede desconocer esos elementos mínimos fijados por el Constituyente. Por ello, la Corte considera que estamos en frente de un concepto jurídico indeterminado, que configura un conjunto con límites elásticos, aun cuando no arbitrarios. En efecto, no es posible hacer a priori un listado definitivo de las partidas que configuran gasto social, pero ello no quiere decir que exista una total indefinición del concepto, ya que estas erogaciones deben cumplir las finalidades señaladas por las normas constitucionales anteriormente citadas. Además, lo propio de estos conceptos indeterminados es que, frente al caso concreto, ellos son determinables por la vía de la interpretación jurídica y judicial.</p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Respecto de concepto jurídico indeterminado (Salvamento de voto)</p> <p>Esta naturaleza indeterminada del concepto de gasto social permite establecer los alcances y límites del control constitucional material de las definiciones del Legislador. Para ello es necesario tener en cuenta que, a nivel global y en materia de conceptos indeterminados, la relación del ejecutivo con la ley no es la misma que la del Congreso con la Constitución. En efecto, la administración está sometida a la ley por lo cual, cuando ella se encuentra frente a un concepto jurídico indeterminado, ella está obligada a adoptar la solución más acorde con la ley. En cambio, el legislador tiene frente a la Constitución una relación más compleja puesto que ésta es tanto de libertad como de subordinación. El legislador no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas. Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Además, frente a este concepto constitucional indeterminado, la propia Constitución ha preferido que exista una definición previa por el Legislativo y que sobre ella -ex post- ejerza su control el juez constitucional.</p> <p>LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO-Define el gasto social (Salvamento de voto)</p> <p>La Constitución no establece que el Legislador orgánico debe realizar un listado de las actividades o de los sectores económicos cuya financiación representa gasto social sino que dispone simplemente que la definición de ese concepto constitucional es competencia de la ley orgánica. Por consiguiente, lo que la Carta ordena es que la ley orgánica debe establecer una definición del</p>
--	---

	<p>gasto social, de tal manera que se pueda saber cuáles partidas concretas deben ser incluidas dentro de ese componente del presupuesto, a fin de que gocen de la prevalencia ordenada por la Constitución. En el fondo, la Carta atribuye entonces a la ley orgánica la definición del conjunto de partidas que pueden ser agrupadas como gastos sociales.</p> <p>RESERVA DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO-Ley ordinaria precisa partidas del gasto social (Salvamento de voto)</p> <p>Una vez establecida por una disposición orgánica una definición conceptual, es perfectamente válido que una ley ordinaria precise si una partida específica constituye gasto social, siempre y cuando ese tipo de apropiación respete claramente los criterios señalados por la legislación orgánica, de conformidad con la Carta. En ese caso no hay violación de la reserva de ley orgánica, pues la norma orgánica ha definido conceptualmente el gasto social, mientras que la ley ordinaria se limita a mostrar que una determinada partida se debe entender incluida dentro de esa definición.</p> <p>GASTO PUBLICO SOCIAL-Debe interpretarse restrictivamente (Salvamento de voto)</p> <p>La Corte precisa que la expresión "tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida" debe ser interpretada restrictivamente, pues en principio todas las erogaciones estatales buscan finalidades de ese tipo. Por ende, para que el concepto de gasto público social no se confunda con el de gasto público en general, debe entenderse que en el primero se incluyen únicamente aquellas erogaciones que pretenden mejorar la calidad de vida en forma directa, esto es, facilitando a todas las personas, y en especial a aquellas de escasos recursos económicos, el acceso concreto a ciertos bienes o servicios específicos que se consideran indispensables para llevar una vida digna, por lo cual estos gastos permiten, en concreto, la formación de capital humano y la satisfacción de derechos sociales prestacionales reconocidos por la Constitución.</p> <p>DERECHO A LA RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-Integrante del gasto público social/GASTO SOCIAL-Incluye recreación y deporte (Salvamento de voto)</p> <p>La definición legal del fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como gasto público social armoniza con la Carta. Así, como bien lo señalan los intervinientes, con estas partidas se permite que el Estado cumpla con obligaciones constitucionales expresas pues las autoridades deben fomentar esas actividades. De otro lado, estas erogaciones</p>
--	--

	<p>se encuentran destinadas a satisfacer derechos sociales expresamente reconocidos por la Carta pues la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre es un derecho de todas las personas. Finalmente, estos gastos se encuentran orientados a un mejoramiento directo de la calidad de vida de la población, pues desarrollan necesidades básicas del ser humano, como lo ha reconocido esta Corporación desde sus primeras decisiones.</p> <p>RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-Compatibilidad con gastos de funcionamiento en materia social (Salvamento de voto)</p> <p>La Corte considera que en materia social, la distinción entre gastos de inversión y gastos de funcionamiento no es pertinente, en términos constitucionales, pues conduce a resultados inaceptables. Así, se llegaría al absurdo de que podrían asignarse rentas de destinación específica para hacer escuelas o construir hospitales, pero no para pagar maestros o médicos, con lo cual esas construcciones no cumplirían su finalidad constitucional, que es satisfacer las necesidades de salud y de educación de la población. Por ello hay que compaginar la noción de inversión social con la finalidad social del Estado. La Corte reitera entonces que la noción constitucional de "inversión social" no se opone a los gastos de funcionamiento siempre y cuando estos se efectúen también en el sector social, puesto que debe entenderse que todos ellos contribuyen a realizar la finalidad social del Estado, a satisfacer los derechos sociales de la población y a incentivar la formación del llamado capital humano. Por ende, es admisible que se creen rentas de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento en materia social.</p> <p>INVERSION SOCIAL Y GASTO PUBLICO SOCIAL-Contenido material/RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-Puede financiar deporte (Salvamento de voto)</p> <p>Una vez mostrado que en materia social la oposición entre gastos de inversión y de funcionamiento no es relevante, entonces una conclusión inevitable se sigue: las nociones de "inversión social" y de "gasto público social" adquieren un contenido material muy similar. Esto no significa que estos dos conceptos se vuelvan equivalentes pues juegan papeles constitucionales diversos. Así, la incorporación de una partida como "gasto público social" tiene efectos sobre su prioridad sobre otras asignaciones presupuestales, mientras que las definiciones legales sobre inversión social están destinadas a permitir la constitución de rentas nacionales de destinación específica o a señalar las actividades prioritarias que los municipios deben financiar con su participación en los ingresos corrientes de la Nación. Una</p>
--	--

	<p>conclusión obvia se desprende: la financiación y estímulo al deporte configuran una forma de inversión social, por lo cual bien puede la ley consagrar rentas nacionales de destinación específica en este campo sin violar la prohibición del artículo 359 superior. Por ende, en principio la Corte no encuentra ninguna objeción a que la ley asigne rentas de destinación específica para financiar la actividad deportiva</p> <p>RESERVA DE LEY ORGANICA-Se aplica a porcentaje de transferencias a los municipios (Salvamento de voto)</p> <p>La determinación de los porcentajes de los ingresos corrientes nacionales que deben ser transferidos a las entidades territoriales tiene reserva de ley orgánica, pues no sólo toca con uno de los elementos más importantes para que exista verdadera autonomía territorial, a saber, que los departamentos y municipios tengan una protección efectiva de sus recursos económicos sino que, además, la tesis contraria, esto es, que esas definiciones se efectúan por leyes ordinarias, conduce a resultados constitucionalmente inaceptables. En efecto, ¿de qué serviría que una determinada ley señale el monto de esos porcentajes, si la ley del presupuesto, en la medida en que es una norma periódica que tiene como cometido establecer la cuantía de las apropiaciones, podría, todos los años, modificar esos porcentajes? Por ende, la Corte coincide con los actores en que la ley 60 de 1993, que fue tramitada como ley orgánica, tal y como la Corte lo constató en decisiones precedentes, tiene la preeminencia de ese tipo de leyes en aquellos apartes en donde define la evolución del porcentaje en que el situado fiscal y los municipios participan en los ingresos corrientes de la Nación, por lo cual esas determinaciones deben ser respetadas por las leyes ordinarias.</p> <p>RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-No afectan preeminencia del Plan de Inversiones (Salvamento de voto)</p> <p>Toda renta de destinación específica limita, por definición, la capacidad de maniobra fiscal de las autoridades ya que constituye una especie de gasto atado pues implica que determinados recursos tienen que ser dedicados exclusivamente a financiar un asunto particular. Precisamente la Constitución prohibió en general ese tipo de rentas por cuanto consideró que pueden introducir en el proceso presupuestal una gran rigidez, en detrimento del principio de unidad de caja, lo cual podría afectar la racionalidad no sólo de la planificación a largo plazo sino incluso de la ejecución fiscal en cada período. Sin embargo, y en desarrollo de las finalidades propias del Estado social (CP art. 1º), la propia Carta admite las rentas de destinación específica para inversión social.</p>
--	--



	<p>RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-Deben ser compatibles con el Plan de Inversiones/COLDEPORTES-Financiación con recursos del IVA (Salvamento de voto)</p> <p>Si es evidente que un determinado tipo de rentas específicas afecta en forma intensa la viabilidad financiera del plan, o distorsiona abiertamente su filosofía, podría llegar a declararse su inconstitucionalidad por desconocer la preeminencia de la ley del plan. Sin embargo, ello no ocurre en el presente caso, puesto que, desde el punto de vista cuantitativo, la norma acusada destina a COLDEPORTES algunas pocos recursos del IVA. Y, desde el punto de vista cualitativo, esa asignación es compatible con la orientación del Plan de Inversiones, el cual prevé específicamente inversiones en materia de deporte y recreación.</p> <p>PRINCIPIO DEL EFECTO UTIL-Alcance/RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-Sustento constitucional (Salvamento de voto)</p> <p>Es cierto que en general se deben preferir aquellas interpretaciones que confieren eficacia normativa a todas las cláusulas de la Carta. Pero este principio no puede llegar al extremo de atribuir a una cláusula constitucional un sentido contrario al que se desprende de su sentido natural. Además, en este caso, esa regla hermenéutica es aplicada en forma extraña, ya que el ordinal del artículo 359 de la Carta que podría carecer de eficacia normativa es el primero, que exceptúa de las rentas de destinación específica a las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios, puesto que si todas esas transferencias están destinadas a financiar la inversión social, entonces esa excepción parece innecesaria pues se subsume en la prevista en el numeral segundo, que admite cualquier renta destinada a inversión social. Por ende, en función del principio del efecto útil, habría que encontrar un sentido autónomo es a ese ordinal primero, y no intentar atribuir otro significado al ordinal segundo, puesto que este último tiene una eficacia normativa propia ya que cubre una excepción más amplia. Y no parece razonable intentar encontrar un efecto útil a un texto normativo por medio de la restricción del alcance de otro texto que tiene un sentido propio. No es en manera alguna inconstitucional que una determinada renta específica pueda encontrar justificación simultáneamente en los dos primeros ordinales del artículo 359 superior, pues esa norma no está señalando que las excepciones deben aplicarse de manera excluyente. Es más, no son extraños los casos de otras rentas específicas, distintas de las transferencias, que podrían encontrar sustento constitucional en varias de las tres excepciones previstas por esa disposición constitucional, sin que ello afecte en nada su legitimidad.</p>
--	--

	<p>COLDEPORTES-Financiación con recursos del IVA/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Procede cuando una disposición admita una interpretación acorde con la Constitución Política (Salvamento de voto)</p> <p>Creemos que es perfectamente válido que la ley establezca rentas de destinación específica en el campo deportivo, por cuanto se trata de una forma de inversión social. Con todo, consideramos que existía una objeción en parte válida a la norma impugnada, y es la siguiente: el literal acusado atribuía ciertos recursos del IVA directamente a COLDEPORTES, esto es, a un establecimiento público. Ahora bien, es cierto que, conforme al artículo 61 de la Ley 181 de 1995, esta institución es el máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del deporte formativo y comunitario, por lo cual tiene a su cargo, entre otras funciones, la promoción del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Sin embargo, esa institución tiene funciones muy amplias, por lo cual los recursos del IVA podían disolverse en el presupuesto general de la entidad, con lo cual, pero por otras razones, adquieren alguna validez los cargos de los actores relativos a la utilización de rentas específicas para financiar gastos de funcionamiento de una entidad. Sin embargo, esto no conducía inexorablemente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues bien hubiera podido la Corte condicionar su alcance, aplicando el principio de conservación del derecho, según el cual los tribunales constitucionales deben siempre buscar preservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al principio democrático. Por ello si una disposición admite una interpretación acorde con la Carta, es deber de esta Corte declararla exequible de manera condicionada, y no retirarla del ordenamiento. Por ende, bien hubiera podido la sentencia señalar que el ordinal acusado era exequible, siempre y cuando esos recursos del IVA no se disolvieran en el presupuesto general de COLDEPORTES ya que debían ser dedicados específicamente a la realización de programas de fomento al deporte.</p> <p>RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-Control de constitucionalidad (Salvamento de voto)</p> <p>No sólo la decisión sino la argumentación misma de la sentencia nos parece discutible ya que prácticamente conduce a una eliminación de las rentas específicas para inversión social. La sentencia está estableciendo que las rentas de destinación específica estarán sometidas a un escrutinio judicial muy estricto por la Corte, puesto que el juez constitucional debe examinar no sólo que la renta financie una inversión social sino además que su consagración sea imperativa y necesaria, por cuanto el derecho social no puede ser satisfecho por medio del gasto público en</p>
--	--

	<p>general. Esto significa que si el juez constitucional considera que una necesidad social puede ser cubierta por el proceso presupuestal general, entonces deberá proceder a declarar inconstitucionales todas las rentas de destinación específica que pretendan satisfacer la necesidad en cuestión. La Corte introduce un escrutinio intenso de constitucionalidad en un campo, como el económico y el tributario, en donde la jurisprudencia comparada, y la propia práctica de esta Corporación, han considerado que los jueces constitucionales deben autorrestringirse, pues la decisión sobre la manera como se asignan los recursos públicos es más propia de los órganos políticos y del proceso democrático que de los jueces.</p> <p>RECURSOS PUBLICOS-Injerencia de la Corte en la asignación (Salvamento de voto)</p> <p>Los criterios introducidos por la sentencia nos parecen problemáticos, pues no sólo comportan una importante injerencia de la Corte en la asignación de recursos públicos sino que, además, conducen al siguiente dilema: o la Corte es consecuente con esos criterios, y entonces las rentas específicas para inversión social prácticamente desaparecen; o por el contrario se introduce una gran inseguridad jurídica, puesto que el futuro de las rentas para inversión social queda sujeto a que el juez constitucional las considere necesarias, pero con un concepto laxo de necesidad, que no se sabe muy bien en que consiste. Como es obvio, ninguna de esas alternativas parece deseable para la consolidación del Estado social de derecho en nuestro país.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-495/98
Fecha de la sentencia	septiembre quince (15) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Demandante	Marcela Tamayo Arango
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 257 (parcial) del Decreto 1344 de 1970; 48 de la Ley 14 de 1983; 6o. de la Ley 23 de 1986; 235 (parcial) del Decreto 1333 de 1986; 56 (parcial) de la Ley 9a. de 1989; 7o. de la Ley 44 de 1990; 21 (parcial) de la Ley 3a. de 1991; 9o. (parcial) de la Ley 6a. de 1992; 45 (parcial) y 111 (parcial) de la Ley 99 de 1993; 184 (parcial) de la Ley 136 de 1994; 77 (parcial) de la Ley 181 de 1995; 25 (parcial) de la Ley 300 de 1996; 37 (parcial), 85 y 104 (parcial) de la Ley 388 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>Primero. Declararse INHIBIDA para fallar en relación con el art. 29 de la ley 105/93, por haberse operado el fenómeno de la cosa juzgada.</p> <p>Segundo. Declarar INEXEQUIBLES las siguientes normas:</p> <p>a) El artículo 7 de la ley 44 de 1990.</p> <p>b) La expresión demandada del párrafo 2o. del artículo 104 de la ley 388/97, que dice "y se destinará a la financiación del programa de reubicación de los habitantes en zonas de alto riesgo, si los hubiere"</p> <p>c) El literal a) del artículo 21 de la ley 3 de 1991.</p> <p>d) El inciso 3 del artículo 184 de la ley 136 de 1994.</p> <p>TERCERO. En relación con el literal b) del art. 21 de la ley 3 de 1991, ESTESE A LO RESUELTO en esta misma sentencia con respecto a la declaración de inexequibilidad del aparte acusado del párrafo FCC2 del art. 104 de la ley 388 de 1997 que reformó el artículo 66 de la ley 9 de 1989.</p> <p>CUARTO. Declaránse EXEQUIBLES las siguientes normas:</p> <p>a) El art. 48 de la ley 14 de 1983</p> <p>b) La expresión demandada del art. 77 de la ley 181 de 1995 que dice "El valor efectivo del impuesto será invertido por el municipio o distrito de conformidad con lo establecido en el art. 70 de la presente ley".</p> <p>c) El aparte acusado del inciso 3 del art. 9 de la ley 6 de 1992, en cuanto expresa "en todo caso, tales ingresos estarán destinados exclusivamente al servicio de salud".</p>

	<p>d) El párrafo 1 del art. 257 del decreto ley 1344 de 1970, modificado por el art. 112 de la ley 33 de 1986.</p> <p>e) La expresión acusada del inciso 4 del art. 56 de la ley 9 de 1989 que dice "y se destinarán para financiar los programas de reubicación de los habitantes en zonas de alto riesgo".</p> <p>f) El art. 6 de la ley 23 de 1986.</p> <p>g) Las expresiones acusadas del literal b) numeral 2, b) del numeral 3 y párrafo 1 del art. 45, de la ley 99 de 1993. Así mismo el inciso 2 del art. 111 de esta ley.</p> <p>h) La expresión acusada del art. 235 del decreto 1333 de 1986, que dice " y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente".</p> <p>i) La expresión demandada del art. 37, que se precisa en la parte motiva de esta sentencia, lo mismo que el art. 85 de la ley 388 de 1997.</p> <p>j) la expresión demandada del inciso 4 del art. 25 de la ley 300 de 1996 que dice "y se deberán destinar exclusivamente a obras de limpieza y ornato que conduzcan a preservar o mejorar los sitios, construcciones y monumentos históricos del municipio".</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que los segmentos normativos contra los cuales dirige la acusación violan los artículos 1, 287 y 359 de la Constitución Política.</p> <p>Invocando la doctrina de esta Corporación contenida, entre otras, en las sentencias C-517/92, 467/93, 520/94, 219/97, estructura el concepto de la violación bajo la idea de que se trata de regulaciones normativas que en relación con rentas propias de las entidades territoriales establecen destinaciones específicas, y que desconocen, además, el principio de la autonomía fiscal de dichas entidades, según el cual éstas pueden determinar la forma como dichas rentas deben ser invertidas, según lo demande la satisfacción de los intereses regionales y locales.</p> <p>Destaca la Corte los siguientes apartes de la demanda de la actora:</p> <p>"No son pues, en consecuencia, criterios admisibles para la asignación específica de recursos por parte del legislador, entre</p>

	<p>otros:</p> <p>"1 El supuesto despilfarro de los Municipios. Lo Corte no admite como principio de hermenéutica constitucional la desconfianza institucional en estos entes. (Salvamento de voto a la sentencia C-520 de 1994)".</p> <p>"2. La adecuación de la finalidad perseguida por la destinación forzosa a los postulados constitucionales. De esta forma, las asignaciones para salud, educación, vivienda digna, etc. si no se encuentra dentro de las causales reseñadas no se tienen como injerencias permitidas".</p> <p>"Los apartes de las normas y las normas demandadas son una clara vulneración al principio de la autonomía fiscal contenido en las normas de la Constitución ya aludidas, como quiera que en ninguno de los casos es permisible afirmar que el desconocimiento de esos porcentajes pondría en riesgo la economía nacional o el orden público del país, y mucho menos que se encuentra autorización de raigambre constitucional".</p> <p>"La situación se torna particularmente dramática, cuando además de la destinación forzosa de los ingresos propios, se comprometen cifras tan importantes del presupuesto como lo hacen las disposiciones atacadas de las Leyes 3 de 1991, 99 de 1993 y 136 de 1994, quedando la entidad territorial prácticamente sin margen de acción".</p> <p>"No es para nadie un secreto que son las autoridades del Municipio, y no el legislador, quienes mejor conocen las necesidades de la comunidad; fue precisamente el Alcalde quien inscribió su plan de gobierno, con el que a la postre resultó victorioso en la contienda electoral, en donde consignó las esperanzas del electorado; son los concejales quienes pueden apreciar, evaluar y decidir respecto de las necesidades de sus comunidades, vertiendo sus conclusiones en los planes de desarrollo y en los acuerdos de presupuesto; son ellos y únicamente ellos quienes pueden gestionar sus intereses, estando la actuación del legislador conminada a trazar pautas o directrices".</p> <p>(...)</p> <p>"La vigencia de las normas que son objeto de esta acción convierte el principio de la autonomía municipal es quimera, al reemplazar el poder de decisión de las autoridades municipales, por la facultad uniformadora y adoctrinante del Congreso de la República".</p> <p>"Son las comunidades y sus dirigentes quienes tienen la facultad constitucional de decidir que hacer con sus propios dineros".</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-539/98
Fecha de la sentencia	primero (1) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Gilberto Elías Murillo Valencia.
Demandado	Artículo 10 de la Ley 190 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.
Decision	Primero: Declarar INEXEQUIBLE el artículo 10° de la Ley 190 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que la norma demandada viola el Preámbulo y los artículos 13 y 40-7 de la Constitución, así como los artículos 166, 167 y 175 de la ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.</p> <p>El demandante considera que la norma atacada vulnera el principio de igualdad ya que permite que quienes sean seleccionados como mejor empleado ocupen en propiedad empleos de superior categoría, con lo cual se desconocen las posibilidades de los aspirantes que hayan superado las pruebas de conocimiento y entrevista, y hayan obtenido un mayor puntaje que aquel de quien fue distinguido como el mejor funcionario de la entidad.</p> <p>El demandante manifiesta entonces que la “igualdad consiste en no conceder prerrogativas a determinados funcionarios, y garantizar el concurso de méritos de acuerdo con las capacidades y las condiciones de los aspirantes.” Por ello, según su criterio, la disposición impugnada “vulnera el artículo 40-7 de la Constitución Política, por cuanto el derecho del ciudadano a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, se ve afectado, al ser tenidos en cuenta con prelación para el desempeño de funciones y cargos públicos, a aquellos que resulten seleccionados como mejor funcionario de la entidad.”</p> <p>El demandante considera además que la norma acusada desconoce los artículos 166, 167 y 175 de la ley 270 de 1996, ya que la lista de</p>

	elegibles en los concursos que se realicen para proveer los cargos vacantes en las entidades públicas quedan sin efecto, pues se da prelación a quien estando incluido en la lista haya sido seleccionado como mejor funcionario. De esa manera, según su parecer, la norma genera una discriminación frente a los demás integrantes de la lista pues, recuerda el actor, “ de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional se debe dar prelación a quien ocupe el primer puesto de la lista”.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-446/98
Fecha de la sentencia	veintiseis (26) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Carlos Mario Isaza Serrano y Carlos Alberto Paz Lamir.
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º y 3º (totales) de la ley 190 de 1.995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.”
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 190 de 1995, con excepción de las siguientes expresiones : “o a celebrar un contrato de prestación de servicios”, contenida en el inciso primero del artículo 1º; “o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración”, contenida en el numeral primero del artículo 2º; “ o de quienes celebren contratos de prestación de servicios con la administración”, contenida en el inciso primero del artículo 3º; “o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración” , contenida en el inciso segundo del artículo 3º; “celebrado contrato de prestación de servicios con la administración”, contenida en el inciso cuarto del mismo articulo; “Las hojas de vida de los aspirantes no seleccionados serán enviadas al Sistema Unico de Información de Personal del



	Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que sean incorporadas a los bancos de datos allí existentes,” que corresponde al inciso quinto del artículo 3°; “Los demás datos que se soliciten en el formato único”, contenida en el inciso 5° del artículo 1° ; y “dicha información no podrá utilizarse como prueba en los procesos judiciales o administrativos de carácter laboral y de ella sólo se comunicarán la identificación del funcionario y las causales de su desvinculación del servicio o de la terminación anormal de sus contratos”, contenida en el primer inciso del artículo 3°, respecto de las cuales se ordena ESTARSE A LO RESUELTO en las Sentencias C-038 de 1996, C-326 de 1997 y C-567 de 1997, en lo correspondiente.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas.</p> <p>Los demandantes consideran que las normas acusadas vulneran los artículos 15, 16 y 152 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda.</p> <p>Afirman los actores, que las normas acusadas infringen los artículos constitucionales anteriormente nombrados y fundan sus pretensiones en los argumentos que serán expuestos a continuación:</p> <p>2.1. Las normas acusadas violan los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, consagrados en el artículo 16 de la C.P.</p> <p>Explican los demandantes que “lo que se quiere hacer defensible no es solo el carácter estrictamente privado del dato personal, su ámbito de confidencialidad, sino el control efectivo de la información individual, que trasciende la idea de la intimidad ”.</p> <p>Fundamentan esta afirmación con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que sostiene que el libre desarrollo de la personalidad presupone la protección del individuo contra la recolección, el almacenamiento, la utilización y la transmisión ilimitadas de datos concernientes a la persona.</p> <p>Plantean que “el derecho a la intimidad excluye del tratamiento informático asuntos o informaciones que solo conciernen a la vida privada del sujeto. Por su parte, el derecho a la autodeterminación informativa, incorpora al sujeto cuyos datos se hacen circular como actor de este mismo proceso con el objeto de que no discorra sin su</p>

	<p>conocimiento y control”.</p> <p>Los demandantes concluyen que las normas atacadas permiten a la Administración inmiscuirse en asuntos íntimos de las personas, mediante manipulaciones tecnológicas que pueden ser llevadas a cabo por agentes del Estado.</p> <p>2.2. Las normas acusadas violan la reglamentación sobre los temas que deben ser regulados por leyes estatutarias, consagrada en el artículo 152 de la C.P.</p> <p>Por último, los demandantes citando jurisprudencia de esta Corporación, argumentan que “corresponde a la ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, ocuparse específicamente de determinar la forma y procedimientos conforme a los cuales la administración puede proceder a la recolección, tratamiento y circulación de datos personales...” Además, consideran que “la recolección de datos, su tratamiento y, particularmente, su circulación, constituyen acciones que pueden afectar de manera profunda la libertad personal y, por consiguiente, están sujetas a reserva de ley estatutaria”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-338/98
Fecha de la sentencia	ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Yolanda Obando M.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 175 (parcial) de la Ley 201 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, la expresión “Con la gestión en nombre propio o ajeno ante las entidades públicas”, contenida en el literal b) del artículo 175 de la Ley 201 de 1995.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, la expresión “... y el ejercicio de la abogacía o de cualquiera otra profesión u oficio”, contenida en el literal e) del artículo 175 de la Ley 201 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima la demandante que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 13, 23, 20, 26 y 229 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda Para la impugnante, “las limitaciones que las normas acusadas imponen a los empleados y funcionarios de la Procuraduría y de la Defensoría del pueblo constituyen una transgresión a los principios constitucionales citados, por cuanto se da un tratamiento desigual y discriminatorio sin una causa justa, razonada y proporcional.”.</p> <p>La prohibición contenida en el literal b), es para la demandante una restricción al derecho fundamental de petición, pues llega incluso a impedirle al funcionario respectivo, elevar solicitudes ante las autoridades del Estado, hacer reclamaciones o pedir información sobre asuntos que pueden ser totalmente ajenos a su labor pública.</p> <p>El literal e), en su parecer, le vulnera a los funcionarios que son abogados y pertenecen a la Procuraduría General o a la Defensoría del Pueblo, el derecho de acceder en casos especiales a la</p>

	administración de justicia, como, por ejemplo, en la reclamación judicial de derechos laborales o defensa de intereses propios o familiares, en procesos civiles o penales. Como la norma está redactada de un modo que no admite excepciones, coarta el derecho a escoger una profesión y a expresarse libremente de los funcionarios que adelantan gestiones ajenas a sus compromisos públicos.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-183/98
Fecha de la sentencia	mayo seis (6) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Patricia Mier Barros
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 476 (parcial) del Decreto 624 de 1989, "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 3° del artículo 476 del Estatuto Tributario, tal como quedó modificado por el artículo 13 de la Ley 223 de 1995.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 11 del artículo 476 del Estatuto Tributario, tal como quedó modificado por el artículo 13 de la Ley 223 de 1995, bajo el entendido de que la expresión "las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por concepto de la administración de fondos comunes", se interprete, en los términos de esta sentencia, en el sentido de que la exención allí contemplada se hace extensiva a las comisiones que cobren las sociedades fiduciarias por concepto de (1) servicios de asesoría financiera; (2) servicios de administración de valores; y, (3) fiducia mercantil -sin utilización de fondos comunes- para estructurar procesos de titularización de activos.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	A juicio de la demandante, los numerales 3° y 11 del artículo 476 del Decreto 624 de 1989, modificados por el artículo 13 de la Ley 223 de 1995, son violatorios del principio de igualdad (C.P., artículo 13), como quiera que "omiten incluir en su texto a la totalidad de los sujetos que desarrollan la misma actividad que se exceptúa o exenciona del impuesto sobre las ventas o, en los casos en que los considera, restringe el beneficio a una sola de las actividades desarrolladas por ellos, excluyendo los demás que participan de la misma naturaleza de los que son objeto de la exención, creando con ello un 'beneficio parcial' que no encuentra justificación constitucional".

	<p>La actora señala que los numerales demandados del artículo 476 del Estatuto Tributario exceptúan del pago del impuesto sobre las ventas a aquellos servicios y actividades de intermediación financiera y a los intereses derivados de operaciones de crédito. Sin embargo, no todas las entidades o personas que desarrollan las anotadas actividades u obtienen los mencionados intereses fueron incluidas en las normas acusadas lo cual, en opinión de la libelista, genera un beneficio fiscal que favorece a entidades y personas que desarrollan el mismo género de actividades y se encuentran en la misma situación de hecho que aquellas que resultaron excluidas. Opina que lo anterior no sólo atenta contra el principio de igualdad sino, también, contra la libertad económica (C.P., artículo 333), toda vez que hace más gravoso el ejercicio de las actividades llevadas a cabo por las personas y entidades no cobijadas por el beneficio fiscal establecido en el artículo 476 del Decreto 624 de 1989.</p> <p>En particular, la demandante considera que la exclusión antes mencionada se produjo con respecto a las sociedades fiduciarias, las cuales sólo resultaron exentas de pagar el impuesto sobre las ventas en punto a "las comisiones que obtengan por concepto de la administración de fondos comunes, y fueron expresamente excluidas las demás comisiones que estas sociedades puedan percibir por actividades que legalmente le están permitidas y que son de la misma naturaleza de las beneficiadas con la exención". Señala que la norma original del Decreto 624 de 1989, antes de su modificación por el artículo 13 de la Ley 223 de 1995, exceptuaba del pago del impuesto sobre las ventas a todas las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias, sin limitar tal exención a las comisiones obtenidas por la administración de fondos comunes.</p> <p>La actora manifiesta que el objeto legal que el artículo 1226 del Código de Comercio asigna a las sociedades fiduciarias, es decir, la administración o enajenación de bienes específicos afectos al cumplimiento de una finalidad determinada, permite a éstas "desarrollar múltiples actividades iguales o afines a las cobijadas por el beneficio fiscal consagrado en los numerales 3 y 11 del artículo 476 del Estatuto Tributario, calificadas como servicios financieros". En efecto, los artículos 3° y 149 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) determinan que las sociedades fiduciarias son sociedades de servicios financieros a las cuales está autorizado ejecutar las operaciones señaladas en el artículo 29 del mismo Estatuto (celebración de encargos fiduciarios para la realización de inversiones, administración de bienes, otorgamiento de garantías; obrar como agente de transferencia y registro de valores; obrar como representante de tenedores de bonos; prestar servicios de asesoría financiera; etc.). A este respecto, la libelista agrega que "por su propia naturaleza, y en</p>
--	---

	<p>desarrollo de su objeto legal, [las sociedades fiduciarias] podrán igualmente realizar todas aquellas [actividades] permitidas a los comisionistas en materia de inversión, administración o emisión de títulos e intermediación por concepto de la colocación de los mismos, u operaciones de crédito. En tal virtud y bajo el mismo supuesto, deben, las sociedades fiduciarias estar igualmente cobijadas por el beneficio fiscal de la exención del impuesto sobre las ventas, en todas aquellas actividades que adelanten bajo permisión de la ley, de las que puedan derivar las comisiones o intereses que expresamente excluyen del impuesto mencionado los numerales 3 y 11 del artículo 476 del Estatuto Tributario".</p> <p>De otro lado, la demandante señala que la exención del pago del impuesto sobre las ventas concedida a la actividad financiera por los numerales 3 y 11 del artículo 476 del Decreto 624 de 1989 obedece al carácter instrumental de la misma. En efecto, la actividad financiera es un instrumento que posibilita el desarrollo de otras actividades económicas que se encuentran gravadas por el impuesto sobre las ventas. Por esta razón, y con el fin de evitar que las actividades económicas resultaran doblemente gravadas, la actividad financiera, en tanto meramente instrumental, no fue sujeta al pago del mencionado tributo. A juicio de la libelista, las actividades desarrolladas por las sociedades fiduciarias gozan del carácter instrumental que cobija a la generalidad de la actividad financiera y, por lo tanto, su exclusión del beneficio fiscal consagrado en las normas acusadas constituye una inequidad que vulnera el principio de neutralidad tributaria. Agrega que, con lo anterior, "lo único que se logra es lesionar la economía nacional y el libre mercado, en cuanto significa, desde el punto de vista de las operaciones activas, el encarecimiento de las fuentes de financiación de los programas empresariales; y desde el punto de vista de las operaciones pasivas constituye un injustificado castigo al ahorro. Ello es así porque quien en últimas sufraga el impuesto a las ventas es el usuario del servicio gravado y no su prestador, quien necesariamente debe incluirlo dentro del valor final del servicio prestado".</p> <p>Por otra parte, la actora manifiesta que, aún cuando el materia tributaria el juicio de igualdad que debe realizar el juez constitucional es más "flexible", ello no autoriza al legislador a establecer discriminaciones carentes de fundamento objetivo y razonable consistentes en gravar u otorgar beneficios a una determinada actividad económica sin incluir a todos los entes o personas que la desarrollan.</p> <p>Para concluir, afirma que "la exclusión de las entidades fiduciarias (...) del beneficio fiscal de la exclusión o exención al impuesto de venta que hacen las normas demandadas, resulta inconstitucional</p>
--	--

	por violación del principio de igualdad en materia tributaria, por cuanto dicha omisión no encuentra, como lo ha estatuido la Corte Constitucional, la razonabilidad o proporcionalidad equivalente alguna".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO</p> <p>SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Improcedencia en caso concreto para exención de impuestos (Salvamento de voto)</p> <p>Lo que no se comparte en este caso es que, por sentencia judicial, se extienda, mucho más allá de los confines señalados por el Congreso, la cobertura de una exención tributaria, indicando no solamente el tipo de sociedades exentas sino los servicios materia de aquélla, en una enunciación taxativa y precisa, propia de la función legislativa. Como varias veces lo he repetido, los fallos de constitucionalidad que modulan sus propios efectos son perfectamente admisibles en ejercicio de la tarea que corresponde a la Corte, y en esa virtud le es posible interpretar los alcances de las disposiciones legales que examina para fijar de manera obligatoria, conforme a la Constitución, los que se avienen a los postulados y mandatos fundamentales y los que, por desconocerlos, ignorarlos o violarlos, deben ser desechados. En ese orden de ideas, el condicionamiento de la sentencia implica celoso y diligente ejercicio de la función de control de constitucionalidad, con miras a que toda la normatividad se sujete sustancialmente al ordenamiento básico plasmado por el Constituyente. ¿Como puede, entonces, tener origen una exención, no creada por el Congreso ni propiciada por la iniciativa del Gobierno, en una extensión normativa de la cosecha de la Corte Constitucional, y no por la supresión de palabras o frases inconstitucionales usadas en el texto legal sino por proposiciones nuevas, nacidas en la propia sentencia?</p> <p>PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA CARGA TRIBUTARIA-Test fuerte (Salvamento de voto)</p> <p>La Corte ha fundado su decisión en este caso en un test intermedio de constitucionalidad. Sea esta la oportunidad para expresar que no creo en esa artificial clasificación de la función confiada a la Corte Constitucional por la Constitución Política. La Corte no puede -por cuanto ello iría en detrimento de su altísima responsabilidad- escoger si examina una norma objeto de su control con mayor o menor rigor, ni con un rigor medio. A mi juicio, el llamado "test" de constitucionalidad debe ser siempre fuerte. Es decir, la Corte tiene</p>



	que exigir en todos los casos el ajuste estricto de las normas que examina a los postulados y mandatos de la Constitución Política, sin entrar en consideraciones sobre conveniencia, oportunidad, impacto económico o de opinión, aceptación o no aceptación social de las determinaciones que adopta sobre la constitucionalidad de las disposiciones sometidas a su control. ¿Qué son los "test" intermedios o débiles de constitucionalidad sino la expresa declaración de la Corte en el sentido de que, mediante ellos, no examinará las normas sujetas a control con la severidad que le corresponde? Si a ellos se atiende, habrá de concluirse en que existen disposiciones "un poco inconstitucionales" pero que pasan la prueba en el Tribunal Constitucional y que se declaran exequibles, a pesar de ello, o exequibles con condicionamientos que implican la creación de nuevas reglas por fuera del trámite legislativo, todo para disminuir el impacto del fallo.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-094/98
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Lucy Cruz De Quiñones
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 53 y 56 (parciales) de la Ley 223 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte sobre la exequibilidad de la contribución prevista en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 06 de 1992 (Sentencia C-430 del 28 de septiembre de 1995), cosa juzgada que, desde el punto de vista material, se extiende a la recepción normativa que de la misma contribución hacen los artículos demandados.</p> <p>Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES los artículos 52 y 53, en los apartes demandados, y 56, en su totalidad, de la Ley 223 de 1995, pero únicamente por los motivos considerados en esta Sentencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Según la actora, los artículos transcritos, en sus apartes acusados, son violatorios de los preceptos constitucionales 13, 95, 360 y 363.</p> <p>Manifiesta que, de acuerdo con el artículo 332 de la Carta Política, el Estado es dueño del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y que, según el artículo 360 ibídem, por la explotación de dichos recursos se causa una contraprestación económica, es decir un recurso fiscal denominado regalía, de la cual tienen derecho a participar los departamentos, los municipios productores, y los puertos por donde aquéllos se transporten. Agrega que deben excluirse otros ingresos fiscales de naturaleza tributaria que se causen por razón del mismo hecho generador, y que la disposición acusada desvirtúa el querer del Constituyente al consagrar un impuesto adicional, pues está disfrazando las regalías en detrimento de las entidades territoriales mencionadas, así como los puertos, toda vez que no tendrían derecho a recibir participación alguna por ese concepto.</p> <p>Considera que las regalías se pagan como una contraprestación a un beneficio recibido por parte del Estado, mientras que en el impuesto se valora la capacidad contributiva del ejecutante del</p>

	<p>hecho generador, motivo por el cual se presenta una incompatibilidad entre los dos. "En resumen -afirma- el artículo 360 constitucional indica al legislador una dirección que debe seguir en su actividad de imposición de obligaciones pecuniarias a quienes explotan recursos naturales no renovables".</p> <p>Recuerda que la Corte Constitucional en Sentencia C-221 de 1997 consideró que la ley puede gravar las actividades relacionadas con los recursos no renovables, pero no puede establecer como hecho gravable la explotación que por mandato de la Carta está sujeta al pago de regalías.</p> <p>Relata que la disposición acusada modificó la contribución especial creada por la Ley 6 de 1992, la cual en su artículo 15 disponía que los nuevos explotadores estarían obligados a pagar la misma contribución durante los seis primeros años de producción, y que esta medida, general y profuturo, podría justificarse "bajo la premisa de equiparar las condiciones de los nuevos explotadores con la de los antiguos, quienes habían sufragado el tributo desde 1991 hasta 1997 y con ello habían satisfecho su carga tributaria o su cuota de sacrificio contributivo". Pero alega que esa filosofía se desconoce con la disposición atacada porque "no sólo se elimina el gravamen para los antiguos que hubiesen satisfecho en el pasado la exacción durante todo el plazo de vigencia de la ley, sino para los que hubieran iniciado producción antes del 31 de diciembre de 1994, sin importar si sólo pagaron durante tres años o cuatro años; de igual modo se elimina para los nuevos que descubran u obtengan declaratoria de comercialidad de yacimientos después del 1 de enero de 1995 y, en cambio, se prorroga exclusivamente para los de un período intermedio, es decir, para los que antes de la vigencia de la ley acusada hubieran descubierto un yacimiento y hubieran recibido declaratoria de comercialidad, pero en todo caso iniciaren producción después del 1 de enero de 1995".</p> <p>Estima que los apartes normativos impugnados son arbitrarios, irrazonables, desproporcionados y atentan contra el principio de igualdad, ya que consagran una disminución del impuesto sólo para quienes iniciaron la producción desde el 1 de enero de 1995, sin que exista una justificación razonable para ello.</p> <p>Afirma que la irrazonabilidad de los preceptos atacados se puede apreciar en la exposición de motivos de la ley, en la cual se anuncia una supuesta disminución gradual del gravamen para no comprometer las finanzas públicas, "pero no dispone esa disminución gradual para todos, o por lo menos para todos los que a partir de 1992 entraron a producir, sino sólo para los que lo hicieron a partir de 1995", y agrega que "si el objetivo era establecer un régimen transitorio para los que ya se encontraban</p>
--	---

	<p>en producción, tendría que haber cobijado a todas las explotaciones comerciales nuevas y no sólo a unas muy limitadas".</p> <p>Asegura que la hipótesis de la norma es discriminatoria, ya que circunscribe el tributo "para un campo petrolero en el país que cumple la hipótesis muy particular del nuevo artículo, puesto que se trata del único descubrimiento petrolero acaecido en el país en el período señalado, que inició producción después del 1 de enero de 1995. Se trata de un caso único sometido a gravamen, puesto que para los demás campos explorados y explotados con antelación, o con posterioridad al campo en cuestión, se elimina el gravamen, en tanto que se prorroga en el tiempo sólo para un sujeto pasivo: la asociación del campo de Cupiagua".</p> <p>Por último, estima que en el presente caso no existe cosa juzgada material, toda vez que en la Sentencia C-430 de 1995 se juzgaron normas diferentes -varios artículos de la Ley 6 de 1992- y por motivos diversos a los que ahora se exponen.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>CONTRIBUCION ESPECIAL POR EXPLOTACION DE PETROLEO-Carga de la prueba sobre proporcionalidad corresponde al Congreso (Aclaración de voto)</p> <p>Demostrado el efecto absolutamente insular de una determinada ley, generadora de una carga pública, lo propio sería trasladar al autor de la norma la carga de la prueba sobre su estricta proporcionalidad.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-746/98
Fecha de la sentencia	diciembre dos (2) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Dario Garzón Garzón
Demandado	Ley 228 De 1995, Artículo 28 Parcial.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "salvo cuando existan circunstancias de agravación" y "o hurto simple con el que concurren circunstancias de agravación", empleadas, en su orden, en los incisos primero y tercero del art. 28 de la ley 228/95.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que el segmento normativo acusado, no se encuentra acorde con el artículo 13 de la Constitución Política, el cual consagra el derecho a la igualdad, porque "hace más gravosa la situación de los contraventores, si se compara con los infractores de la ley penal, sencillamente porque el articulo 39 del C.P.P solamente excluye la preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral a los comportamientos de hurto calificado y extorsión".</p> <p>Sostiene así mismo, que si dos individuos cometen, por separado, cada uno un hurto agravado, siendo el valor del bien inferior a diez salarios mínimos en el primer caso, y en el segundo, excede dicha cuantía, el último podrá beneficiarse de la extinción de la acción penal por reparación integral, en tanto que el primero recibirá una pena mayor.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-192/98
Fecha de la sentencia	seis (6) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	José Eurípides Parra Parra Y Fabián López Guzmán
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8 (parcial) de la Ley 258 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Sólo en los términos de esta Sentencia, decláranse EXEQUIBLES, en el artículo 8 de la Ley 258 de 1996, la frase "...y permitirá el levantamiento judicial de este gravamen para hacer posible la expropiación", y en el 4, numeral 2, de la Ley 284 de 1996, la expresión "Cuando la autoridad competente decreta la expropiación del inmueble...", en el entendido de que la indemnización correspondiente no puede pagarse a la familia mediante bonos o documentos de deuda pública, sino en dinero, por igual valor al del inmueble expropiado, en su totalidad y de manera previa a cualquier acto que pretenda hacer efectiva la expropiación.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Manifiestan los actores que la disposición demandada vulnera los artículos 5, 13, 42, 44 y 45 de la Constitución Política, y 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño del 2 de septiembre de 1990.</p> <p>Consideran que se atenta contra la familia, que es la institución básica de la sociedad, y contra el patrimonio de familia, que de acuerdo con la Carta Política, es inalienable e inembargable.</p> <p>Afirman que los fundamentos del Estado Social de Derecho deben estar al servicio de la familia, que se traduce en algo concreto, tangible y no en la utilidad pública o el interés social que es algo difícil de determinar.</p> <p>Aducen que el patrimonio de familia, que de por sí cumple una función social, hace posible una "cohesión familiar", y permite salvaguardar la propiedad del mal manejo que sus integrantes hagan de ella. Por tanto -expresan- se desconoce el principio de igualdad y el derecho de los niños cuando el Estado permite que se</p>

	levante dicho gravamen sin motivo alguno justificado por vía judicial.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-664/98
Fecha de la sentencia	doce (12) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Jorge Vera Vargas y Diego Buitrago Florez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley 258 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 7 de la Ley 258 de 1996, en el entendido de que las excepciones contempladas al principio de la inembargabilidad únicamente tienen aplicabilidad sobre el supuesto de que la hipoteca anterior al gravamen de vivienda haya sido previamente registrada.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Consideran los actores que con la norma acusada se vulneran los artículos 13, 58, inciso 2, y 158 de la Constitución Política.</p> <p>Afirman que el derecho fundamental a la igualdad resulta violado por tal disposición, ya que ésta determina un tratamiento abiertamente discriminatorio. En su criterio, reconoce excepciones a la inembargabilidad sólo para cierto tipo de obligaciones garantizadas con hipoteca sobre el bien objeto de afectación, independientemente de que se trate de obligaciones contraídas o no por el cónyuge propietario.</p> <p>Según expresan, si el espíritu de la ley es el de proteger al cónyuge no propietario, incluso contra los acreedores del cónyuge propietario, carece de total sentido y es contrario al derecho a la igualdad que las excepciones a la inembargabilidad se funden en el simple hecho de que el inmueble se encuentre gravado con hipoteca constituida para garantizar cualquier tipo de obligaciones, incluso las contraídas por personas distintas a los cónyuges beneficiados con la afectación del inmueble.</p> <p>A su juicio, no existe razón válida alguna para que el bien bajo afectación a vivienda familiar no pueda ser embargado por una obligación que, aunque no garantizada con hipoteca, sea contraída por ambos cónyuges.</p> <p>Los demandantes solicitan subsidiariamente a esta Corporación que</p>



	<p>declare exequible la disposición demandada, pero en el entendido de que también son embargables los bienes inmuebles bajo afectación a vivienda familiar cuando se trate de obligaciones contraídas por ambos cónyuges.</p> <p>Respecto del artículo 58, inciso 2, manifiestan los impugnantes que la violación se presenta al desconocer el precepto demandado la función social de la propiedad que implica obligaciones, dado que estimula el incumplimiento de las obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges, incluso por el cónyuge propietario del bien inmueble afectado y hasta las contraídas por ambos cónyuges, obligaciones que hacen parte del derecho o prenda general de los acreedores.</p> <p>Sostienen que no es posible establecer una relación de conexidad causal, temática, sistemática o teleológica, entre la materia regulada en la disposición acusada con la materia dominante en la Ley 258 de 1996 que la contiene, por lo cual resulta vulnerado el principio de la unidad de materia, consagrado en el artículo 158 de la Carta Política.</p> <p>Finalmente, destacan que por esta razón no era procedente que la Ley 258, sobre la afectación a vivienda familiar, concebida ésta como la protección del cónyuge no propietario frente al propietario, se ocupara de la inembargabilidad, por parte de los acreedores de los dos cónyuges, o de cualquiera de éstos, del bien inmueble bajo afectación a vivienda familiar.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-085/98
Fecha de la sentencia	Marzo dieciocho (18) de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Hidelbrando Ortiz Lozano
Demandado	Acci3n p3blica de inconstitucionalidad contra la Ley 273 de 1996, "Por la cual se modifica el Reglamento del Congreso en cuanto al juzgamiento de altos funcionarios
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	<p>Primero. En lo relacionado con los art3culos 1, 2, 3 y 4 de la ley 273 de 1996, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-148 de 1997.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLE el art3culo 5 de la ley 273 de 1996, en el entendido de que para los casos a los que se refiere dicha norma, la representaci3n del Ministerio P3blico le corresponder3 directamente al Procurador General de la Naci3n, tal como lo ordena el art3culo 278-2 de la C.P.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	<p>a. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>El demandante considera que las disposiciones acusadas vulneran lo dispuesto en los art3culos 29, 151, 152, 153, 158 y 278 de la Constituci3n Pol3tica.</p> <p>b. Fundamentos de la demanda.</p> <p>La demanda del actor contra la Ley 273 de 1996 presenta los siguientes cargos:</p> <p>1. El articulado de la Ley 273 de 1996 modifica normas de una ley org3nica, la Ley 5a. de 1992 que contiene el Reglamento del Congreso, las cuales, dada su superior jerarqu3a, no pueden ser modificadas por las disposiciones de una ley ordinaria sin violar el art3culo 151 de la Constituci3n.</p> <p>Adem3s, dice el actor, las normas acusadas no regulan el ejercicio de la actividad legislativa como les corresponde a los preceptos de car3cter org3nico, pues ellas son normas procedimentales de la administraci3n de justicia, espec3ficamente normas de</p>

	<p>procedimiento penal, que como tales debieron consignarse en una ley estatutaria.</p> <p>2. El legislador al tramitar la Ley 273 de 1996 como ley ordinaria, durante sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno nacional, violó las disposiciones del literal b del artículo 152 de la C.P., que le ordenan al Congreso regular la materia de administración de justicia a través de leyes estatutarias.</p> <p>Señala el demandante, que el contenido de las normas impugnadas se refiere a la actividad judicial que el Constituyente radicó de manera excepcional en el Congreso de la República a través del artículo 116 superior, y que dado ese carácter dichas disposiciones debieron consignarse en una ley estatutaria, la cual debió tramitarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Carta Política: aprobación por mayoría absoluta de los miembros del Congreso; trámite dentro de una sola legislatura y revisión previa por parte de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del proyecto; anota el demandante que omitir uno o todos esos requisitos, como, según él, ocurre en el caso sub-examine, implica desconocer y por lo tanto vulnerar el mencionado artículo de la C.P.</p> <p>3. La ley demandada viola el artículo 158 de la C.P., que establece el principio de unidad de materia, al introducir en una ley orgánica, la ley 5a. de 1992, normas de procedimiento penal que como tales deben hacer parte de una ley estatutaria, lo que implica que se regulen en la primera dos materias totalmente diferentes, las cuales incluso, según los mandatos del Constituyente, han de desarrollarse en leyes de diferente tipo.</p> <p>4. La Ley 273 de 1996 violó el artículo 29 de la C.P., pues fue expedida en la mitad de un proceso penal y aplicada al mismo de manera inmediata, contradiciendo el principio fundamental del debido proceso, que señala que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.</p> <p>5. El artículo 5 de la Ley 273 de 1996, contradice y reforma “disimuladamente” el artículo 278-2 de la C.P., pues le atribuye al Ministerio Público, es decir al Procurador o sus delegados, una función que el Constituyente radicó de manera expresa en el Procurador General de la Nación, quien deberá ejercerla directamente.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

	<p>PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Casos en que se exige actuación directa son taxativos (Aclaración de voto)</p> <p>Los casos en que la Carta exige la actuación directa del Procurador son taxativamente los enumerados en el artículo 278. Ese carácter taxativo excluye las interpretaciones analógicas o extensivas, como la que intenta el demandante. Así, pues, no comparto el condicionamiento plasmado en el Fallo, pues en el fondo acepta la tesis del actor aunque no declare la inexequibilidad de la disposición acusada. Además, en últimas, la Corte extiende los alcances del artículo 278-2 de la Constitución -que, repito, son taxativos y de interpretación estricta- a todos los procesos, aun los no disciplinarios.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-665/98
Fecha de la sentencia	noviembre doce (12) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Benjamin Ochoa Moreno
Demandado	Acci3n de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art3culo 2o. de la Ley 50 de 1990.
Conoci3 en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del art3culo 2o. de la Ley 50 de 1990, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	<p>El accionante demanda el inciso segundo del art3culo 2o. de la Ley 50 de 1990 por quebrantar los art3culos 13, 25 y 53 de la Constituci3n Pol3tica.</p> <p>A su juicio, dicho precepto limit3 el alcance de la presunci3n de contrato de trabajo, consagrando dos casos que quedan exceptuados de ella, a saber: las personas que habitualmente presten servicios personales remunerados en ejercicio de una profesi3n liberal, y aquellos que lo hagan en desarrollo de un contrato civil o comercial.</p> <p>De esta manera se3ala que la Ley 50 de 1990 contiene dos tratamientos distintos para quienes presten servicios personales: a) para la generalidad de los trabajadores basta probar la prestaci3n del servicio para que se presuma la existencia de contrato de trabajo, es decir, para que se presuma la protecci3n de la ley laboral, y b) para quienes ejercen las profesiones liberales, as3 como para las personas que prestan servicios bajo contrato civil o comercial, no se predica la protecci3n presunta de la ley laboral con la sola prueba de la prestaci3n del servicio, sino que deben probar adem3s, la continuada subordinaci3n o dependencia que define el art3culo 23 b) del C3digo del Trabajo.</p> <p>Agrega el demandante, que la Ley 50 de 1990 en el precepto acusado ha propiciado toda clase de abusos en la relaci3n de trabajo, colocando a inmensos grupos de profesionales liberales (m3dicos, odont3logos, enfermeros, abogados, entre otros), en situaci3n de burlarles su protecci3n laboral, haciendo m3s dif3cil la</p>

	<p>demostración de su contrato de trabajo y en ocasiones imposible respecto del común de los trabajadores (inversión de la carga de la prueba de la continuada subordinación o dependencia), lo cual ha conducido a toda clase de maniobras de muchos empleadores para no dejar pruebas de este elemento esencial del contrato de trabajo.</p> <p>En consecuencia, estima el actor que a los dos grupos discriminados de que trata la disposición demandada, de manera injustificada se los excluye de la presunción legal de la existencia del contrato de trabajo de que trata el inciso 1o. de la misma norma, y por ende no se les aplica con el carácter de presunción, la ley laboral (artículos 5 y 24 del C.S.T.), sino que para obtener esa prerrogativa, deben probar además, la continuada subordinación o dependencia que define el artículo 23 b) del C.S.T., vale decir, se les hace más gravosa la carga de la prueba y la demostración del contrato de trabajo.</p> <p>Así pues, señala que la subordinación ya no opera como elemento esencial presunto para las dos categorías de trabajadores consagradas en la norma sub examine, en forma discriminada, y que deben probarla, con lo cual se les hace más gravosa que para el común de los trabajadores la demostración del contrato de trabajo y la protección de la ley laboral.</p> <p>Además, considera que se desconoce el artículo 53 superior, pues al excluir de la mencionada presunción a los servicios prestados en desarrollo de un contrato civil o comercial, se hacen prevalecer los acuerdos de voluntades, los documentos y las formalidades sobre la realidad, y se altera igualmente la regla de la carga de la prueba, haciéndola más gravosa para el trabajador con el simple propósito de hacer suscribir a este un contrato de naturaleza distinta para poder obtener un trabajo y por ende su sustento.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-273/98
Fecha de la sentencia	tres (3) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Fabián López Guzmán y José Eurípides Parra Parra
Demandado	Norma acusada: Artículo 15 (parcial) de la Ley 294 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "Si la víctima no compareciere, se entenderá que desiste de la petición", "excepto" y "casos en los cuales", contenidas en el artículo 15 de la Ley 294 de 1996.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLES las expresiones "si la víctima fuere un menor de edad o un discapacitado" y "no podrá haber desistimiento" contenidas en el artículo 15 de la Ley 294 de 1996, en el entendido de que, en los términos de esta sentencia, las víctimas que sean capaces pueden desistir de manera expresa.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En criterio de los actores, la disposición acusada transgrede los artículos 13, 23, 42 y 228 de la Constitución. A su juicio, la ausencia de la víctima en la audiencia especial no debe entenderse como desistimiento, como quiera que la no asistencia puede producirse como "fruto de la presión psicológica, física, o incluso económica, por parte del agresor". Por consiguiente, si el Estado permite el desistimiento de la solicitud de la medida de protección en casos de violencia interfamiliar, elude el deber de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, pues la Constitución obliga a "concretar la protección a las víctimas del maltrato psicológico y/o físico en la familia". En el mismo sentido, los ciudadanos consideran que la protección especial a que se refiere el último inciso del artículo 13 constitucional "significa no sólo el acceso a las instituciones jurídicas, sino el compromiso y verdadero garantismo, que se traduce en continuar la acción, en perseverar en ella".</p> <p>De otra parte, los demandantes opinan que la norma acusada vulnera el derecho de petición, toda vez que si se extingue la acción a partir de la no comparecencia de la víctima a la audiencia, se elude una respuesta definitiva y de fondo de la cuestión planteada.</p> <p>Los ciudadanos consideran que es legítimo que a través de los</p>

	<p>procedimientos sumarios se aspire a conseguir una administración de justicia eficaz y eficiente; sin embargo aquellos "no pueden ni deben atentar contra las garantías fundamentales" ni están facultados para "sacrificar el derecho sustancial y la justicia material". Por lo tanto, los jueces deben entender que su tarea es garantizar y hacer efectivos "los cánones constitucionales que establecen derechos en pro y para el desarrollo familiar".</p> <p>Finalmente, los actores opinan que la norma acusada transgrede el artículo 229 de la Carta, el cual garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia, pues afirman que "el significado de acceder más que de ingresar lo que busca es que la justicia material sea una realidad."</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-053/98
Fecha de la sentencia	marzo cuatro (4) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Marta Nora Palacio Escobar y Luis Carlos Alvarez Machado.
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la ley 331 de 1996, "Por medio de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997."
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 13 de la Ley 331 de 1996, "Por medio de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997".</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLES las siguientes expresiones del inciso segundo de la norma impugnada, "Las autoridades descentralizadas acordarán el aumento salarial de los trabajadores oficiales dentro de los límites de la ley 4a. de 1992." ; las expresiones "...que no tengan convención colectiva, ... los contratos, los fijados por el gobierno nacional y por las disposiciones legales; aquellos que</p>



	<p>tengan convención colectiva se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 9...”, se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Tercero. Declarar la unidad normativa del artículo 13 de la Ley 413 de 1997, con el artículo 13 de la Ley 331 de 1996, en los términos de esta sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A. Normas constitucionales que se consideran infringidas.</p> <p>Los demandantes consideran que la disposición impugnada viola los artículos 69, 150-19, 158, 298 y 311 de la C.P.</p> <p>B. Los fundamentos de la demanda</p> <p>1. El primer cargo que presentan los actores contra el artículo 13 de la ley 331 de 1996, señala que su contenido viola el artículo 158 de la Constitución, por cuanto dicho precepto regula un asunto que es totalmente extraño al tema de la ley que lo contiene, la ley anual de presupuesto, como es el que tiene que ver con los niveles salariales y las prestaciones sociales de algunos empleados públicos, lo que implica que el legislador incurrió en la transgresión del principio de unidad de materia.</p> <p>La ley anual de presupuesto y ley de apropiaciones, sostienen los demandantes, le corresponde elaborarla al Congreso en desarrollo de la cláusula general legislativa contenida en el artículo 150 de la Constitución, no obstante, dicha Corporación en ese caso particular debe producir una norma que no es otra cosa que una relación de ingresos y gastos del Estado para un período de tiempo determinado, pues en esa materia su competencia está delimitada específicamente en ese sentido en el artículo 346 superior.</p> <p>Para los demandantes, lo referente a la regulación de salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos es un tema que si bien es competencia del legislador, el cual está habilitado para expedir normas marco sobre esa materia con fundamento en el numeral 19 del artículo 150 superior, no puede éste desarrollarlo en la ley anual de presupuesto, cuyo contenido está claramente predeterminado en la Constitución, pues ello implicaría violar el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Carta Política.</p> <p>2. El segundo cargo que presentan los demandantes contra la norma impugnada se puede sintetizar de la siguiente manera: la disposición atacada impone una restricción a las entidades descentralizadas, que incluye a los establecimientos públicos, cuya creación, supresión, fusión, señalamiento de objetivos y estructura le corresponde al legislador de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Carta. Es claro que tales facultades no contemplan lo relativo al régimen salarial y prestacional de sus servidores públicos, materia en la cual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, la</p>

	<p>competencia del legislador se limita a la formulación de una “ley marco” a través de la cual se fijan los objetivos y criterios a los que debe someterse el ejecutivo. En consecuencia, el Congreso en el caso que se analiza excedió sus facultades en esa materia, pues reguló aspectos respecto de los cuales tan solo podía establecer pautas generales.</p> <p>3. En tercer lugar, en concepto de los actores la norma impugnada también viola las disposiciones de los artículos 298 y 311 de la C.P., normas que les atribuyen autonomía a los departamentos y a los municipios en lo que tiene que ver con la determinación de la estructura de la administración local y con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales, correspondiéndole a sus autoridades adoptar las medidas pertinentes en relación con dichos asuntos, específicamente a través de sus respectivos presupuestos anuales. En consecuencia, señalan, el legislador se excedió en sus funciones cuando a través de la ley anual de presupuesto reguló un asunto cuya competencia el Constituyente radicó expresamente en las autoridades del orden territorial.</p> <p>4. Por último, consideran los demandantes que la disposición objeto de impugnación contraría también el artículo 69 de la Constitución, que consagra la autonomía universitaria, pues el legislador, al imponer la restricción contenida en la disposición demandada a los entes universitarios, les impide a éstos ejercerla en materia administrativa y presupuestal, inmiscuyéndose indebidamente en la conformación de sus presupuestos, materia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 30 de 1992 le corresponde desarrollar a los máximos órganos de gobierno de dichos entes, sin interferencias por parte de los poderes públicos.</p> <p>“...el Congreso -anotan los demandantes- no tiene competencia para introducir prohibiciones a los “entes universitarios” sobre todo los del Estado (sic) , en materias tales como sus presupuestos o sus políticas salariales, mucho menos a través de la ley que fija el presupuesto anual, porque tales entes no son equiparables ni asimilables a establecimientos públicos, no están sometidos al régimen administrativo general del Estado y, sobre todo, no están sometidos por tanto, a ningún control de tutela, incluyendo el nivel departamental, para el caso.”</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, CARLOS GAVIRIA DIAZ ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO</p> <p>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA/LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO-Ejecución (Aclaración de voto)</p>

	<p>Creo, con los demandantes, que la disposición impugnada presenta un problema de unidad de materia, y que eso ha debido conducir a una inexequibilidad total de la misma. No me parece satisfactoria ni ajustada a la Carta la argumentación con base en la cual se desecha el mencionado cargo: que lo que se busca es "una adecuada ejecución del presupuesto, al garantizar coherencia y coincidencia entre los gastos programados por el ejecutivo y autorizados por el legislador, impidiendo que instancias distintas modifiquen las asignaciones definidas..."; o, en otros términos, "...una medida de disciplina fiscal, que contribuye eficazmente a que el presupuesto se ejecute fluida y adecuadamente". Todo eso corresponde justamente a la Ley orgánica de presupuesto y de ninguna manera a la anual, que debe aprobarse, modificarse y ejecutarse con arreglo a aquélla. No se pueden confundir las normas orgánicas de presupuesto con los componentes de la ley anual. Y menos pretender que las leyes anuales de presupuesto rijan indefinidamente como las ordinarias.</p> <p>LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO-Regulación respecto a entidad pública (Aclaración de voto)</p> <p>En la Ley Orgánica de Presupuesto sí se podían establecer reglas aplicables a las universidades públicas y al manejo de su presupuesto, sin que ello implicara, como entonces lo entendió la Corte, un desconocimiento de la autonomía universitaria. Lo contradictorio reside en que la Corte haya excluido a las universidades públicas del régimen contemplado en la Ley Orgánica para los establecimientos públicos, supeditando a esa exclusión la constitucionalidad de la norma entonces demandada, y ahora acepte que una norma de jerarquía inferior y de vigencia precaria, al establecer reglas generales propias de la Ley Orgánica, introduzca limitaciones y prohibiciones a esos mismos entes educativos, sin que ahora se estime que está lesionada la autonomía universitaria. Claro que no lo está puesto que se trata de evitar gastos exagerados que afecten un presupuesto público que debe obedecer a los indicados criterios de austeridad y razonabilidad, y el señalamiento de las pertinentes reglas, cuando se hace como la Constitución lo ordena, no representa indebida interferencia del poder público en el manejo financiero del ente educativo. Este, en el caso de las universidades públicas, tiene necesariamente un carácter relativo, limitado por las normas presupuestales (de Ley Orgánica) y por el propio presupuesto desde el punto de vista cuantitativo, y no puede entenderse ni aplicarse en términos equivalentes a los que rigen para los planteles superiores de naturaleza privada.</p> <p>Referencia: Expediente D-1753</p>
--	--

	<p>Expreso a continuación las razones por las cuales aclaro mi voto en el asunto de la referencia:</p> <p>1. La norma demandada, que hacía parte de la Ley Anual de Presupuesto correspondiente al año de 1997, rigió solamente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, tal como resulta del título mismo de la Ley.</p> <p>Por lo tanto, en estricto sentido, tal disposición había salido del orden jurídico y se configuraba la sustracción de materia. Carecía de objeto actual una definición de la Corte acerca de su constitucionalidad o inconstitucionalidad.</p> <p>El mismo texto ahora acusado ha sido reproducido en la Ley Anual de Presupuesto de 1998 (art. 13), como se pone de presente en la Sentencia, lo que demuestra que el propio legislador era consciente del carácter precario de la norma.</p> <p>Lo único que justifica que la Corte adopte decisión de mérito es la posibilidad de que el precepto esté produciendo efectos, es decir, siendo aplicado a procesos en curso iniciados contra personas que, bajo la indicada vigencia de la disposición, hayan infringido su mandato.</p> <p>2. Ya en el supuesto de que haya lugar a una decisión de fondo, estimo que, según el estricto sentido de normas constitucionales como las contenidas en los artículos 150 -numeral 11-, 346, 347, 350 y 351 de la Carta, entre otros, la Ley Anual de Presupuesto - como su misma denominación lo indica- tiene por objeto único la formulación, para el período correspondiente, del Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiações, es decir, las partidas de ingresos, gastos e inversiones que se prevén, y de ninguna manera puede el Congreso, mediante ella, establecer normas de carácter permanente, prescribir conductas o señalar prohibiciones, menos si están destinadas a regir más allá del tiempo en que rija el presupuesto aprobado.</p> <p>Es claro que el objeto propio de estas leyes se agota con la formulación del presupuesto, y que es inconstitucional que el Congreso, al expedirlas, pretenda introducir reglas sobre ejecución presupuestal, las cuales deben ser puestas en vigencia mediante Ley Orgánica, de acuerdo con el perentorio texto de los artículos 151 y 352 de la Constitución.</p> <p>En tal sentido creo, con los demandantes, que la disposición impugnada presenta un problema de unidad de materia (artículos</p>
--	---

	<p>158 y 169 C.P.), y que eso ha debido conducir a una inexequibilidad total de la misma.</p> <p>No me parece satisfactoria ni ajustada a la Carta la argumentación con base en la cual se desecha el mencionado cargo: que lo que se busca es "una adecuada ejecución del presupuesto, al garantizar coherencia y coincidencia entre los gastos programados por el ejecutivo y autorizados por el legislador, impidiendo que instancias distintas modifiquen las asignaciones definidas..."; o, en otros términos, "...una medida de disciplina fiscal, que contribuye eficazmente a que el presupuesto se ejecute fluida y adecuadamente" (he subrayado). Todo eso corresponde justamente a la Ley orgánica de presupuesto y de ninguna manera a la anual, que debe aprobarse, modificarse y ejecutarse con arreglo a aquélla.</p> <p>No es que me parezcan poco plausibles o inoportunas las normas legales que busquen realizar los propósitos de racionalización del gasto público, austeridad y sanidad fiscal. Como tales, las comparto enteramente, pero pienso que, con arreglo a la Constitución, deben consagrarse en los ordenamientos previstos para ese fin -con el lleno de los requisitos exigidos- y no en los que, por mandato de la Carta, tienen un objeto diferente y trámite menos riguroso. No se pueden confundir las normas orgánicas de presupuesto con los componentes de la ley anual. Y menos pretender que las leyes anuales de presupuesto rijan indefinidamente como las ordinarias.</p> <p>3. Observo que en la redacción final, tanto de la parte motiva como de la resolutive, de la Sentencia, se declara la unidad normativa del artículo 13 de la Ley 413 de 1997 con el artículo 13 de la Ley 331 de 1996, pero no se dice expresamente que, respecto de la norma de la actual Ley de Presupuesto, se declare la inexequibilidad de los apartes declarados inexequibles en el mismo texto de la anterior.</p> <p>A mi juicio, la unidad de materia, que se construye por la propia Corte entre normas demandadas y otras no demandadas que sustancialmente reproducen sus dictados, es apenas un presupuesto para establecer la competencia de la Corte Constitucional en cuanto a las disposiciones no impugnadas, con el objeto de que el fallo, especialmente si es de inexequibilidad total o parcial, no sea inútil. Pero la Sentencia debe señalar inequívocamente si tales normas, ya vinculadas al proceso por la unidad de materia, son o no inexequibles.</p> <p>Pienso, no obstante, que este es un defecto de técnica en el texto de la providencia, que no modifica en nada la clara y evidente decisión de la Corte de declarar inexequibles, también en el artículo 13 de la Ley 413 de 1997, aquellos apartes que fueron hallados</p>
--	--

	<p>contrarios a la Constitución, pertenecientes al artículo 13 de la Ley 331 de 1996.</p> <p>4. Finalmente, debo recordar que en mi salvamento de voto respecto de la Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, del mismo ponente, H. Magistrado Dr. Fabio Morón Díaz, expresé que en la Ley Orgánica de Presupuesto sí se podían establecer reglas aplicables a las universidades públicas y al manejo de su presupuesto, sin que ello implicara, como entonces lo entendió la Corte, un desconocimiento de la autonomía universitaria. Por eso consideré que, al contrario de lo dicho en esa Sentencia, que condicionó la exequibilidad del artículo 4 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996 (artículo 63 de la Ley 179 de 1994), su avenimiento a la Constitución era total, puro y simple, precisamente para no romper la unidad ni la universalidad presupuestales, que en el presente fallo se quieren preservar.</p> <p>Lo contradictorio reside en que la Corte haya excluido a las universidades públicas del régimen contemplado en la Ley Orgánica para los establecimientos públicos, supeditando a esa exclusión la constitucionalidad de la norma entonces demandada, y ahora acepte que una norma de jerarquía inferior y de vigencia precaria, al establecer reglas generales propias de la Ley Orgánica, introduzca limitaciones y prohibiciones a esos mismos entes educativos, sin que ahora se estime que está lesionada la autonomía universitaria. Claro que no lo está puesto que se trata de evitar gastos exagerados que afecten un presupuesto público que debe obedecer a los indicados criterios de austeridad y razonabilidad, y el señalamiento de las pertinentes reglas, cuando se hace como la Constitución lo ordena, no representa indebida interferencia del poder público en el manejo financiero del ente educativo. Este, en el caso de las universidades públicas, tiene necesariamente un carácter relativo, limitado por las normas presupuestales (de Ley Orgánica) y por el propio presupuesto desde el punto de vista cuantitativo, y no puede entenderse ni aplicarse en términos equivalentes a los que rigen para los planteles superiores de naturaleza privada.</p> <p>Me ratifico, pues, en el ya citado salvamento de voto, y subrayo las dificultades lógicas y jurídicas que surgen, al analizar la jurisprudencia de la Corte, cuando se examina el presente fallo.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-201/98
Fecha de la sentencia	
Demandante	: Juan Humberto Meza Giraldo
Demandado	Acci3n p3blica de inconstitucionalidad contra el art3culo 48 de la ley 331 de 1996, "Por medio de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997."
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE, en los t3rminos de esta Sentencia, el inciso primero del art3culo 48 de la Ley 331 de 1996, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de Capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997", en el entendido de que se trata de una norma de car3cter temporal.</p> <p>Segundo. Declarar INEXEQUIBLE el par3grafo del mismo art3culo 48 de la ley 331 de 1996.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	<p>A. Normas constitucionales que se consideran infringidas.</p> <p>El demandante considera que la disposici3n impugnada viola los art3culos 113, 151, 189, 288, 349 y 352 de la C.P..</p> <p>B. Los fundamentos de la demanda</p> <p>El actor manifiesta, que de conformidad con lo establecido en el art3culo 151 de la C.P., le corresponde al Congreso expedir la ley org3nica de presupuesto, a cuyo contenido, dada la superior jerarqu3a de dicha norma, se debe sujetar el ejercicio de la actividad legislativa en la materia.</p> <p>Eso implica, anota, que la ley anual de presupuesto que expide cada a3o el legislador, cuyos mandatos rigen 3nicamente durante el correspondiente a3o fiscal y deben asegurar la correcta ejecuci3n del Presupuesto General de la Naci3n, est3 supeditada a la ley org3nica, y que sus disposiciones no pueden derogar o modificar leyes vigentes, ni producir una nueva normativa en sentido material.</p> <p>Con base en lo anterior, afirma, de conformidad con lo establecido en los art3culos 73 y 89 del Estatuto Org3nico de Presupuesto, normas que establecen que las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Naci3n son autorizaciones m3ximas de</p>

	<p>gastos, que el Congreso aprueba para que sean ejecutadas o comprometidas durante la respectiva vigencia fiscal, y que al cierre de la mismas es posible constituir las reservas presupuestales correspondientes a los compromisos legalmente contraídos, que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre, no le estaba permitido al legislador, a través de la ley anual de presupuesto y específicamente de la norma impugnada, ordenar que las partidas de cofinanciación forzosamente deban ser utilizadas en su totalidad durante la vigencia en que se asignan, que es lo que sucede cuando dispone que dichos recursos, necesariamente, deberán ser girados durante la misma, lo que implica una clara violación de las disposiciones orgánicas y en consecuencia de los artículos 150-11, 151 y 349 de la Constitución.</p> <p>En cuanto al párrafo de la norma acusada, en concepto del demandante éste también es inconstitucional, pues al establecer porcentajes de concurrencia para las entidades territoriales, aplicables a los proyectos de desarrollo regional financiados a través de los fondos de cofinanciación, lo que hizo fue derogar normas de carácter sustantivo, tales como las contenidas en el Decreto Extraordinario 2132 de 1992, las cuales no los establecen, el artículo 87 de la ley 99 de 1993 que regula lo correspondiente a dichos proyectos en materia de medio ambiente, que tampoco los señala, y la ley 105 de 1993, cuyos artículos 24 y 25 regulan lo correspondiente al Fondo de Cofinanciación de vías e infraestructura sin imponer porcentajes.</p> <p>De otra parte, agrega, el párrafo vulnera también las disposiciones del artículo 69 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece porcentajes de concurrencia para las entidades territoriales cuando se trata de proyectos cofinanciados, lo que se traduce en la derogatoria de una disposición de carácter orgánico por una de carácter ordinario, es decir de menor jerarquía.</p> <p>Por último, en opinión del actor el mecanismo de la cofinanciación para el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo regional, sólo es aplicable entre entidades territoriales, concepto en el cual no está incluida la Nación.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. CARLOS GAVIRIA DIAZ, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.</p> <p>LEY ANUAL DE PRESUPUESTO-No debe establecer reglas sobre ejecución presupuestal (Salvamento de voto)</p> <p>El contenido de las leyes anuales de presupuesto no puede ser otro que el relativo a la previsión de los ingresos, gastos e inversiones del período correspondiente. La ley anual -ha sostenido la Corte- "no tiene, en sentido estricto, una función normativa abstracta sino</p>



	un contenido concreto". Así las cosas, nos parece que la ley anual de presupuesto no está llamada a establecer reglas sobre cómo debe llevarse a cabo la ejecución presupuestal, asunto que, en nuestro criterio, corresponde únicamente a la normatividad orgánica.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-200/98
Fecha de la sentencia	trece (13) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Clara Stella Ramos Sarmiento
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 335 de 1996 "por la cual se modifican parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Decision	Declárase EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 335 de 1996, en el entendido de que la facultad que otorga a los concesionarios no constituye una excepción al principio de que debe repararse el daño causado, cuando se ha incurrido en alguna de las hipótesis que conforme a nuestro ordenamiento dan lugar a la reparación
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Para la actora, el inciso demandado viola el artículo 58 de la Constitución, pues faculta a los titulares de contratos de concesión de espacios de televisión para que "unilateralmente puedan terminar con la prestación del citado servicio público sin indemnizar al Estado por razón de los perjuicios que cause tal determinación". Además, la disposición demandada afecta la garantía constitucional de los derechos adquiridos por la CNTV frente a los contratos de concesión en beneficio injustificado de los contratistas.</p> <p>La norma acusada viola también el artículo 77 de la Carta Política puesto que, según la demanda, otorga una facultad a los concesionarios "que es materia de la ejecución de la actividad contractual, la cual sólo compete a las partes contratantes".</p> <p>De acuerdo con la demanda, el artículo 209 Superior también resulta vulnerado en este caso, puesto que el inciso acusado pone la función administrativa al servicio de los intereses particulares de los concesionarios, y no al de los generales previstos en la Carta.</p> <p>Según la actora, a través de la norma acusada se decretó una condonación en favor de particulares que está claramente prohibida por el artículo 355 de la Constitución; así, si el particular decide no prestar más el servicio en franco incumplimiento de sus</p>

	obligaciones contractuales y perjudicando a los usuarios, puede hacerlo sin que haya lugar a indemnización.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-497/98
Fecha de la sentencia	quince (15) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Luis Enrique Olivera Petro.
Demandado	Normas acusadas: artículo 3º (parcial) de la Ley 344 de 1996 y artículo 53 (parcial) de la Ley 141 de 1994.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: INHIBIRSE de conocer de la constitucionalidad del parágrafo del artículo 53 de la Ley 141 de 1994, por tratarse de un cargo por vicios de forma y haber caducado la acción.</p> <p>Segundo: Declarar INEXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 344 de 1996. Esta declaración de inexequibilidad sólo tendrá efectos hacia el futuro, a partir de la notificación del presente fallo, y por tanto no afecta las situaciones jurídicas consolidadas en desarrollo del artículo declarado inexequible.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que los apartes demandados del artículo 3º de la Ley 344 de 1996 violan los artículos 1º, 13, 29, 294, 362 y 366 de la Carta pues asignan parte de los recursos del Fondo Nacional de Regalías para expandir la red vial municipal, con lo cual financian una actividad que no forma parte del “gasto público social”. De esa manera, según su criterio, la disposición acusada desconoce además la autonomía fiscal y la igualdad de las entidades territoriales, que quedan sujetas a los porcentajes de las regalías asignados para el desarrollo de estas obras, cuando las necesidades particulares pueden exigir distintos montos de inversión. Según el actor “al suplir el gasto público social en educación, salud, agua, saneamiento básico, medio ambiente y vivienda, por un gasto en vías o carreteras, se viola claramente el principio de la autonomía fiscal de las entidades territoriales, consignado en los artículos 1º y 287 de la Constitución”, fuera de que se desconoce “el artículo 366 de la Carta, puesto que las vías no corresponden al ‘Gasto Público Social’”. El ciudadano considera que por tal razón también se afectó el debido proceso jurídico administrativo pues el Congreso, “de la noche a la mañana y a sólo dos años y medio de aprobada la Ley 141 de 1994 y ante la evidencia de deterioro y atraso del progreso social, se sorprende a Colombia con una ley que tumba de tajo el gasto público social”. Por ello califica de “esperpento jurídico” esa</p>

	<p>regulación y sugiere la existencia de intereses clientelistas turbios en su aprobación, destinados a violar los derechos de las entidades territoriales, pues el legislador no puede disponer que rentas que son de las entidades territoriales sean transferidas a la Nación o sean trasladadas a otras entidades territoriales. Por ello sugiere que existen irregularidades que deberían ser investigadas por la Procuraduría y la Fiscalía.</p> <p>De otro lado, según el demandante, en la aprobación del párrafo del artículo 53 de la Ley 141 de 1994 hubo vicios de procedimiento pues se omitió una parte fundamental del texto inicialmente aprobado, que se encontraba relacionado con los derechos de las entidades territoriales. Según el ciudadano, ese párrafo establecía que “el remanente por regalías y compensaciones provenientes de la aplicación de este artículo se distribuirá así: treinta por ciento (30%) para el fondo Nacional de Regalías y setenta por ciento (70%) para ser utilizado según lo establecido en el artículo 56 de la presente ley.” Sin embargo, el texto final, que es el acusado, es diferente, con lo cual el Congreso dejó sin regalías a ciertos municipios del mismo departamento del municipio portuario, como sería el caso de Tolú.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO</p> <p>Reitero aquí mis argumentos acerca de que el hecho de no haberse aprobado una determinada ley de la República con los trámites especiales previstos por la Constitución es un vicio de forma y no de fondo.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-045/98
Fecha de la sentencia	a los veinticinco (25) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Ramiro Rodríguez López.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 10, 11 (parcial) y 29 (parcial) de la ley 344 de 1996, “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.”
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el artículo 10 de la ley 344 de 1996.</p> <p>Segundo.- En los términos de esta sentencia, declárase EXEQUIBLE la expresión “recursos humanos” contenida en el inciso primero, del artículo 11 de la ley 344 de 1996.</p> <p>Tercero.- Decláranse INEXEQUIBLES el inciso segundo y el primer párrafo del artículo 11 de la ley 344 de 1996.</p> <p>Cuarto.- En relación con el inciso segundo del artículo 29 de la ley 344 de 1996, ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia C-428 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Se resumen a continuación los cargos contra cada una de las normas acusadas.</p> <p>1. El cargo en contra del artículo 10º, consiste en el desconocimiento del principio de autonomía universitaria que consagra la Constitución (artículo 69), en favor de las instituciones de educación superior, al exigirse a las universidades que reciben aportes del Presupuesto Nacional solicitar “un permiso al Ministerio Hacienda para abrir nuevos programas académicos”.</p> <p>2. En relación con la expresión “recursos humanos” que emplea el inciso primero del artículo 11, afirma el demandante que es contraria a la jurisprudencia constitucional (sentencia C-037 de 1996), según la cual el ser humano no puede ser definido como un “recurso”, pues ello desconoce su dignidad, fundamento del</p>

	<p>Estado Social de Derecho.</p> <p>3. La inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 11, y su primer párrafo, se fundamenta en el desconocimiento del precepto constitucional que consagra el sistema de concurso, como el mecanismo que debe ser utilizado para la vinculación de personal a la administración (artículo 125). En concepto del demandante, la norma acusada autoriza el ingreso automático de determinados docentes a la carrera administrativa, hecho que contraría el mandato constitucional citado, así como la jurisprudencia de la Corte sobre la materia.</p> <p>4. El artículo 29 de la ley 344 de 1996, se considera contrario a los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al imponer a los administrados la obligación de estar al día con las obligaciones fiscales, para tener derecho a que el Estado pague las sumas que, por decisión judicial, está obligado a sufragar. Para el demandante, esta norma hace nugatorio los derechos que por sentencia judicial, puedan llegarse a reconocer a una persona.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-061/98
Fecha de la sentencia	marzo cuatro (4) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Jesús María Méndez Zambrano.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 344 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Estése a lo resuelto por la Corte en la sentencia C-428 del 4 de septiembre de 1997, mediante la cual se declaró EXEQUIBLE el artículo 14 de la Ley 344 de 1996, excepto las expresiones "reconocerse, liquidarse y", que se declararon INEXEQUIBLES.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Considera el demandante que la norma acusada viola los artículos 53 inciso final y 345 inciso final de la Constitución Política, según los conceptos de violación que expone en detalle.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-089/98
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	José Salvador Roncancio y Jorge Arturo Lemus Montañez
Demandado	Demandas de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley 352 de 1997
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>1. El artículo 2 es EXEQUIBLE;</p> <p>2. El artículo 4 es EXEQUIBLE en los apartes demandados;</p> <p>3. El artículo 5 es EXEQUIBLE;</p> <p>4. El artículo 6 es EXEQUIBLE en lo demandado;</p> <p>5. Del artículo 7 son INEXEQUIBLES los literales g) y k);</p> <p>6. Del mismo artículo 7 son EXEQUIBLES su encabezamiento y los literales e), f) e i);</p> <p>7. El artículo 9 es EXEQUIBLE;</p> <p>8. El artículo 10 es EXEQUIBLE, excepto su literal j), que se declara INEXEQUIBLE;</p> <p>9. El artículo 11 es EXEQUIBLE;</p> <p>10. El artículo 12 es EXEQUIBLE en lo demandado;</p> <p>11. El artículo 13 es EXEQUIBLE;</p> <p>12. El artículo 14 es EXEQUIBLE;</p> <p>13. El artículo 15 es EXEQUIBLE;</p> <p>14. El artículo 16 es EXEQUIBLE, excepto su literal j), que se declara INEXEQUIBLE;</p> <p>15. El artículo 17 es EXEQUIBLE;</p> <p>16. El artículo 18 es EXEQUIBLE;</p>

	<p>17. El artículo 19 es EXEQUIBLE;</p> <p>18. El artículo 20 es EXEQUIBLE, con excepción de las palabras "...numerales 1, 2, 3, 4 y 7...", que se declaran INEXEQUIBLES;</p> <p>19. El artículo 24 es EXEQUIBLE en lo demandado, únicamente bajo los entendidos y condicionamientos contemplados en la parte considerativa de esta Sentencia, salvo la parte que dice: "Durante estos períodos, el CSSMP podrá establecer que para acceder a dichos servicios, los usuarios deberán sufragar total o parcialmente los costos de los mismos". Esta se declara INEXEQUIBLE;</p> <p>20. El artículo 29 es EXEQUIBLE, pero solamente en las condiciones y con las advertencias que contempla la parte motiva de esta providencia;</p> <p>21. El artículo 32 es EXEQUIBLE en lo demandado;</p> <p>22. El artículo 36 es EXEQUIBLE, únicamente bajo los entendidos y condicionamientos contemplados en la parte motiva de este fallo, excepto las expresiones "...según lo determine el CSSMP...", del inciso, "Para ..." y "...el CSSMP...", del párrafo, que se declaran INEXEQUIBLES;</p> <p>23. El artículo 61 es EXEQUIBLE; y</p> <p>24. El artículo 63 es EXEQUIBLE.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano JOSE SALVADOR RONCANCIO solicita la inconstitucionalidad de los artículos 6, 10, 24, 29, 32 y 36 de la Ley 352 de 1997, algunos de ellos parcialmente.</p> <p>Considera que el artículo 6 acusado vulnera la Carta Política en sus artículos 2, 13, 49 y 258, pues, según su criterio, dio una representación mínima al personal retirado de las Fuerzas Militares, sin tener en cuenta que son aproximadamente ochenta mil afiliados, lo cual implica desconocer sus derechos a la igualdad y a la participación.</p> <p>Expone que la Junta Directiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante boletín 2 de febrero de 1997 reglamentó el párrafo 3 de la Ley 352 de 1997, estableciendo que el voto debe llevar la firma, el grado y el nombre del votante, vulnerando así el precepto constitucional que establece que el voto debe ser secreto. Además, en el Boletín 6, se contempla una segunda vuelta que la</p>

	<p>citada ley no consagra.</p> <p>Manifiesta que los apartes impugnados de los artículos 10 y 24 son violatorios de los preceptos constitucionales 58, 216 y 217, ya que a los afiliados al sistema se les están aplicando los artículos 164, 180 y 187 de la Ley 100 de 1993, olvidando que los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el personal regido por el Decreto 1214 de 1990 tienen un régimen excepcional. Así mismo - señala-, se pretende hacer una diferenciación entre aquel personal anterior a la vigencia del Decreto 1301 y los que ingresaron con posterioridad a la citada Ley, desconociendo el principio de igualdad.</p> <p>Por otra parte argumenta que además de ser ambiguo, el artículo 24 acusado no puede aplicarse en materia de preexistencias, toda vez que no han sido practicados exámenes médicos para el ingreso al sistema.</p> <p>Afirma que los artículos 29, 32 y 36 también desconocen los derechos adquiridos por los usuarios del sistema, pues con anterioridad a la ley demandada el servicio de salud se había reglamentado por la Ley 95 de 1989 y por el Decreto 1211 de 1990, al paso que en las disposiciones acusadas se les quiere hacer aplicable la Ley 100 de 1993.</p> <p>El ciudadano JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4 (parcial), 5, 6 (parcial), 7 (parcial), 9, 10, 11, 12 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (parcial), 20 (parcial), 61 y 63 de la Ley 352 de 1997, por cuanto a su juicio vulneran la Carta Política en sus artículos 1, 2, 13, 48, 49, 95, 123, 151, 158, 189, 208, 217, 218 y 338.</p> <p>Afirma que el Sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no cumple con la función de solidaridad social, ya que establece la primacía del interés de unos pocos sobre el general, y no se permite el acceso a la salud sino exclusivamente para el personal que tenga una cierta calidad, lo cual viola el derecho a la vida de una persona ajena al núcleo que solicite atención médica.</p> <p>Manifiesta que resulta violado el principio de igualdad cuando se establece que sólo pueden ser atendidas terceras personas una vez el Consejo Superior de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional otorgue su autorización. Además los beneficiarios y afiliados que no pertenecen a la Fuerza Pública sólo tienen que cotizar 80 semanas en tratándose de enfermedades de alto costo, mientras que el ciudadano común debe cotizar 100 semanas, olvidando que aquéllos al no pertenecer realmente a la Fuerza Pública, no se les</p>
--	--

	<p>debe dar un trato especial. Se está colocando en el mismo plano a los miembros de la Fuerza Pública y a las personas que no lo son (beneficiarios y personal civil).</p> <p>Considera que el sistema es ineficiente e ineficaz y quebranta la autonomía financiera y administrativa de las entidades y unidades que conforman el sistema, ya que éstas requieren autorizaciones del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.</p> <p>A su juicio, los artículos 4 -literales e) e i)-, 7 -literales e), f) y g)- y 16 -literales b) y c)-, regulan lo relativo al manejo del presupuesto, lo cual resulta inconstitucional, por cuanto dicha materia debe sujetarse a la Ley Orgánica correspondiente. Afirma el accionante que se desconocen, por ello, los artículos 15, 17 y 18 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto).</p> <p>De otro lado aduce que los artículos 61 y 63 acusados no guardan unidad de materia con el resto del articulado de la Ley 352 de 1997, teniendo en cuenta que ésta se refiere al sistema de salud y no a la vivienda ni al subsidio familiar para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.</p> <p>Manifiesta que el Congreso invadió la órbita del Presidente de la República, ya que en los artículos 15, 16, 17, 18 y 61 de la Ley modificó la estructura del Ministerio de Defensa, y de las entidades y organismos administrativos del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.</p> <p>Asegura que el artículo 5 demandado le atribuyó funciones al Ministro de Defensa, cuando ellas son propias del titular de la cartera de Salud. Por tal razón -afirma- debe hacerse valer el principio según el cual "la iniciativa legislativa y la facultad constitucional se radican en cabeza del Ministerio de Salud y del Presidente".</p> <p>Además asevera que "cuando las leyes ordenan gasto público como lo hace la presente, se requiere del concurso del Ministerio de Hacienda...".</p> <p>Afirma que los destinatarios del régimen prestacional especial a que se refiere la Ley demandada deben ser exclusivamente los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, es decir aquellos que están en servicio activo, y por tanto se quebranta la Carta Política cuando se hace extensivo a los pensionados, beneficiarios y personal civil, pues éstos desarrollan labores riesgosas.</p>
--	--

	<p>Por último asegura que el Congreso, al establecer en el literal g) del artículo 7 de la Ley demandada que el CSSMP tiene la facultad de aprobar los parámetros para la fijación de las tarifas internas y externas, está delegando una función que en tiempo de paz le es indelegable, según el artículo 338 de la Constitución Política, además de que dicha disposición "carece del sistema y método para aplicar tarifas internas y externas".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO</p> <p>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Alcance (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Estimo que, aun con la interpretación sustancial que esta Corte le ha dado al concepto de la unidad de materia que deben guardar entre sí los artículos integrantes de una ley de la República y ellos a su vez con el título de la misma, es muy difícil aceptar que la modificación de la estructura del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional con el solo objeto de que asuma una función relativa a planes de vivienda (artículo 61 acusado) y el señalamiento de la oficina que pagará el subsidio familiar al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, con la aneja autorización al Gobierno para hacer los traslados presupuestales correspondientes, puedan ser materias que guarden la debida conexidad con el tema de la seguridad social en salud.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-156/98
Fecha de la sentencia	abril veintiocho (28) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Publio Cesar Meza Hernández
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6 (parcial), 10 (parcial), 24 (parcial), 29, 32 (parcial) y 36 de la ley 352 de 1997 “por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia No. C-089 de 1998 en relación con los artículos 29 y 36, y con los apartes acusados de los artículos 6, 10, 24 y 32 de la Ley 352 de 1997
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-277/98
Fecha de la sentencia	tres (3) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Silvia Isabel Reyes Cepeda.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5° del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 12 de la Ley 365 de 1997
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	Declarar INEXEQUIBLE el numeral 5° del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, tal como fue modificado por el artículo 12 de la ley 365 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas  Estima la demandante que la disposición acusada es violatoria de los artículos 2° y 13 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda  Según la demanda, la norma acusada, al impedir que se defina la responsabilidad civil dentro de los procesos en los que los sindicatos se han acogido al beneficio de la sentencia anticipada, establece un privilegio discriminatorio en favor de los criminales confesos, perjudicando con ello a las víctimas que se han constituido en parte civil dentro del proceso penal.</p> <p>“Tamaño desequilibrio -agrega la impugnante- ocasionado por la modificación de la norma en comento, rompe el principio de igualdad ante la ley en perjuicio de la víctima del delito confesado y (sic) que tiene derecho a la reparación de los perjuicios que tal delito le ocasionó; y se rompe el principio de la igualdad en la medida en que se crea una situación de privilegio para el delincuente, frente a la evidente desmejora moral y material que el delito le ha ocasionado a la víctima, quien quedará obligada, por tal situación, a larguísimos trámites ante la justicia civil para intentar obtener la reparación del daño.”</p> <p>La demanda sostiene que al actor civil no se le están garantizando ni el principio de la igualdad ni su derecho a obtener una reparación de los daños derivados del delito, lo que constituye una violación del artículo 2° de la Carta Política y una evidente denegación de</p>

	<p>justicia.</p> <p>Adicionalmente, cree que los debates legislativos que dieron con la aprobación del artículo acusado, no fueron lo suficientemente profundos ni razonados frente a la posibilidad de impedir el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil en procesos con sentencia penal anticipada. Considera, en consecuencia, que la modificación introducida por la Ley 18 de 1996 carece de justificación pues, además de favorecer de manera desproporcionada al delincuente con la disminución de la pena, lo hace con el aplazamiento de su responsabilidad civil al obligar a la víctima a acudir a la jurisdicción ordinaria para definir por esa vía la responsabilidad de su victimario.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-065/98
Fecha de la sentencia	marzo cinco (5) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	María Uriza Pardo
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra del artículo 9 de la ley 366/97, “por la cual se regula la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias de las rentas originadas en la explotación de metales preciosos y se dictan otras disposiciones”.
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	Declarar INEXEQUIBLE el artículo 9º de la ley 366 de 1997 “Por la cual se regula la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias de las rentas originadas en la explotación de metales preciosos y se dictan otras disposiciones”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La actora considera que el artículo cuestionado quebranta los artículos 154, 158, 169 y 338 superiores, y expone el concepto de la violación de la siguiente manera:</p> <p>- A juicio de la demandante, el artículo 9 de la Ley 366 de 1997, contradice el artículo 154 de la Carta, porque el trámite legislativo que dió origen al actual artículo cuestionado, no tuvo como origen la Cámara de Representantes, a pesar de que la ley posee un claro carácter tributario. En efecto, expuso la demandante:</p> <p>“En el caso de la ley 366 de 1997, la inclusión en segundo debate en el Senado del texto que finalmente se convirtió en su artículo 9º., artículo mediante el cual se establece un impuesto por la explotación de los recursos naturales no renovables que no constituyen propiedad de la Nación, sin duda alguna genera la inconstitucionalidad de dicha norma por cuanto la misma surgió en desconocimiento del mandato constitucional consagrado en el inciso cuarto del artículo 154 mencionado.</p> <p>En efecto, según se deduce de la ponencia presentada para primer debate, el referido proyecto de ley estaba encaminado a regular la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencia de las regalías establecidas en la ley 141 de 1994, razón por la cual fue presentado y aprobado en la Comisión Tercera del Senado. Y ello estuvo bien, pues por la materia regulada podía haber sido</p>

	<p>presentado en cualquiera de las dos cámaras.</p> <p>Sin embargo, en el texto aprobado en la plenaria del Senado se incluyó el artículo demandado, el cual no era parte del proyecto inicial. Es decir, se incluyó una norma “relativa a tributos”, como indudablemente lo es la disposición impugnada, pues al decir de esa Corte, la utilización del término ‘tributos’ en el artículo 154 de la Constitución tiene ‘un alcance genérico y hace referencia a todo lo relacionado con los ingresos corrientes de la Nación -tributarios y no tributarios-. Incluye pues, impuestos, tasas y contribuciones como parece corresponder al sentido natural y obvio de la norma”.</p> <p>“Por consiguiente, ante una modificación de estas características sólo existían dos posibilidades, a saber: si se insistía en la inclusión del artículo, era necesario reiniciar el trámite del proyecto en la Cámara de Representantes por cuanto la inclusión del referido artículo inmediatamente lo convertía en un proyecto ‘relativo a tributos’, o simplemente, en consideración al trámite ya iniciado, es necesario concluir que la creación del referido impuesto es inconstitucional, por cuanto desconoció el mandato contenido en el inciso cuarto del artículo 154 de la Carta.”</p> <p>De otra parte, puntualiza la demandante que el artículo 9 de la ley 366 de 1997, contradice el principio constitucional de la legalidad tributaria, porque no reúne la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 338 de la Carta, pues si bien es cierto que el artículo cuestionado fija claramente el hecho gravable, así como la base gravable y las tarifas, no determina quienes son los sujetos activos y pasivos del impuesto, lo cual genera una gran incertidumbre jurídica entre los particulares vinculados a la actividad económica de la explotación del oro, plata y platino.</p> <p>En relación con los sujetos activo y pasivo de la obligación tributaria, expuso la actora sus criterios jurídicos sobre el alcance del artículo 9, concluyendo que el “Impuesto que en él se consagra es aplicable a las explotaciones de los recursos naturales renovables que no constituyen propiedad nacional y sobre los que no se aplican las regalías previstas en la ley 141 de 1994”.</p> <p>Finalmente, aduce la actora que el artículo 9 cuestionado, contradice los artículos 158 y 169 de la Constitución Política, ya que la ausencia de los sujetos activos y pasivos, denota la ausencia de unidad de materia entre el artículo demandado y la ley 366 de 1997, ello desde la insuficiencia de su titulación, ya que por esa falta de unidad no hubo lugar a la continuación del trámite legislativo, por lo tanto, hace imposible una interpretación adecuada dentro del contexto de la misma ley. A juicio de la</p>
--	---

	<p>demandante, no existe una relación de conexidad causal o temática entre el artículo 9 y el resto de la ley ya que en la práctica se están regulando situaciones totalmente diversas que incluso tienen destinatarios diferentes; pues los metales aquí regulados son, jurídicamente diferentes, ya que se encuentran en categorías diversas, pues mientras unos son de propiedad de la Nación, otros pertenecen a los particulares, por lo tanto, al referirse la ley a la “liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencia de las rentas originadas en la explotación de metales preciosos”, no existe una relación entre el título y el contenido de la ley, ya que es muy diferente crear un impuesto a regular su liquidación y recaudo, que fue lo que finalmente realizó el Congreso de la República.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, ALEJANDROMARTINEZ CABALLERO</p> <p>PROYECTO DE LEY-Adición de contenido tributario/PROYECTO DE LEY-Aprobación en la Cámara sin objeciones (Salvamento de voto)</p> <p>Acierta la Corporación al recordar que los proyectos de ley relativos a los tributos deben tener origen en la Cámara de Representantes. Ahora bien, en nuestro criterio, la regla de procedimiento mencionada se aplica en aquellos casos en los cuales el proyecto de ley es originalmente de naturaleza tributaria. Sin embargo, cuando se trata de un proyecto que no tiene ab initio dicha naturaleza, pero en cuyo trámite surge la necesidad de adicionarlo con una disposición de contenido tributario, resulta un exceso formalista aplicar indiscriminadamente la citada regla. En este último caso, será suficiente advertir, en primer término, que la disposición tributaria adicionada se encuentra estrechamente ligada con la materia regulada en el proyecto y, en segundo lugar, que dicha disposición fue aprobada por los miembros de la Cámara de Representantes sin que se hubiere objetado, en los correspondientes debates, por un eventual vicio de formación. Adicionalmente, dicho artículo, como quedó demostrado en el proceso, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes sin que aparezca objeción alguna por el hecho de que hubiere comenzado el trámite en el Senado de la República. En verdad, resultaba completamente razonable, que la norma accesoria hubiere seguido la suerte del proyecto principal del cual formaba parte y que, por no tener originalmente naturaleza tributaria, comenzara legítimamente su trámite en el Senado de la República.</p> <p>EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES-</p>

	<p>Coexistencia entre impuesto y regalías (Salvamento de voto)</p> <p>Consideramos que la norma acusada también es compatible con los criterios avanzados por esta Corporación en la sentencia C-221 de 1997 sobre la posible coexistencia entre impuestos y regalías. La sentencia precisó que la obligación de establecer regalías opera en los casos en que tales recursos son de propiedad estatal. En efecto, la sentencia claramente dijo que "las regalías son del Estado, el cual es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (CP art. 332), por lo cual la explotación de estos últimos causa en su favor una contraprestación económica definida por la ley (CP art. 360) (Fundamento Jurídico 15)". Por ende, en los casos en los que los recursos no renovables sean de propiedad privada, debe entenderse que no existe el deber del Estado de imponer las regalías, lo que no obsta, sin embargo, para que se consagre un impuesto por su extracción.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-041/98
Fecha de la sentencia	
Demandante	
Demandado	Revisi3n de la Ley 371 de 1997 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo cultural entre el gobierno de la Rep3blica de Colombia y el gobierno del Reino de Marruecos’, suscrito en Santa Fe de Bogot3 el 13 de diciembre de 1991”.
Conoci3 en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE la Ley 414 de 1997 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo cultural entre el gobierno de la Rep3blica de Colombia y el gobierno del Reino de Marruecos’, suscrito en Santa f3 de Bogot3 el 13 de diciembre de 1991”.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-251/98
Fecha de la sentencia	veintiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Nestor Raúl Correa Henao
Demandado	Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 372 de 1997, "Por la cual se reglamenta la profesión de optometría en Colombia y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO y Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE la Ley 372 de 1997, "Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de optometría en Colombia y se dictan otras disposiciones", únicamente en cuanto su aprobación no requería del trámite de ley estatutaria.</p> <p>Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES las expresiones "prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como el...", pertenecientes al artículo 2 de la Ley 372 de 1997, en el entendido de que tales acciones de los optómetras sólo están autorizadas en lo relativo al campo de su especialidad profesional, sin que puedan interferir ni duplicar las funciones propias de otras especialidades.</p> <p>Tercero.- Decláranse EXEQUIBLES el encabezamiento y los literales a), b), c) y d) del artículo 3 de la Ley 372 de 1997.</p> <p>Cuarto.- Declárase INEXEQUIBLE el inciso primero del párrafo del artículo 3 de la Ley 372 de 1997, que dice:</p> <p>"PARAGRAFO.- Los optómetras que obtengan la tarjeta profesional están autorizados para utilizar los medicamentos que el Consejo Técnico Nacional Profesional de Optometría establezca y reglamente de acuerdo con el artículo 8 de la presente Ley".</p> <p>Quinto.- Declárase EXEQUIBLE el inciso segundo del párrafo del artículo 3 de la Ley 372 de 1997, que dice:</p> <p>"Lo anterior no se aplica a los profesionales que a la fecha de promulgación de la presente Ley ostenten solamente el registro profesional vigente, quienes para obtener la tarjeta profesional, deberán acreditar la nivelación correspondiente".</p>

	<p>Es entendido que esta norma guarda relación con los requisitos que el artículo 3 de la Ley exige para ejercer la profesión de optómetra, y no con el acápite declarado inexecutable.</p> <p>Sexto.- Decláranse EXEQUIBLES los literales b) y e) del artículo 4 de la Ley 372 de 1997, bajo la condición de que el ejercicio de las actividades de los optómetras en tales aspectos están restringidas al campo de su especialidad profesional, sin que puedan interferir ni duplicar las funciones propias de otras especialidades.</p> <p>Séptimo.- Decláranse EXEQUIBLES los literales g), h), i) y j) del artículo 4 de la Ley 372 de 1997, bajo la condición de que las actividades en ellos previstas únicamente repercutan en aspectos profesionales internos, sin forzosa incidencia en la fijación de políticas y directrices que constitucionalmente correspondan al Gobierno y en general a las autoridades públicas competentes.</p> <p>Octavo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 6 de la Ley 372 de 1997, en el entendido de que la consulta y asesoría que el Consejo Técnico Nacional de Optometría presta al Gobierno Nacional se refiere exclusivamente a asuntos profesionales que de modo directo interesen a los optómetras</p> <p>Noveno.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 7 de la Ley 372 de 1997.</p> <p>Décimo.- Decláranse EXEQUIBLES los literales a), b), c), d) y e) del artículo 8 de la Ley 372 de 1997.</p> <p>Décimo primero.- Decláranse INEXEQUIBLES los literales f), g) y h) del artículo 8 de la Ley 372 de 1997, así como su parágrafo transitorio, que dice:</p> <p>"PARAGRAFO TRANSITORIO. El Consejo Técnico Nacional de Optometría expedirá, en un lapso de tiempo no mayor de seis (6) meses su posesión (sic), el Código de Ética Optométrica".</p> <p>Décimo segundo.- Declárase EXEQUIBLE la primera parte del parágrafo del artículo 8 de la Ley 372 de 1997, que dice:</p> <p>"PARAGRAFO. El requisito de tarjeta profesional no regirá para los integrantes del primer consejo, mientras dura la organización y trámite correspondiente.</p> <p>Décimo tercero.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 9 de la Ley 372 de 1997, en el entendido de que los optómetras que se encontraban registrados a la luz de las disposiciones anteriores, si no se someten al cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley para obtener nivelación, no pueden ampliar su radio de acción</p>
--	--

	profesional a los campos permitidos por el nuevo régimen.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Aclara el demandante que, como ya se dijo, si bien desde el punto de vista formal ataca toda la Ley, por el aspecto material sólo pone en tela de juicio algunos apartes específicos de la misma.</p> <p>Para el actor, la Ley 372 de 1997 vulnera los artículos 152, literal a), y 153 de la Constitución Política en cuanto ha debido ser tramitada como estatutaria y no lo fue.</p> <p>Afirma también el impugnador que varias de las disposiciones de la Ley atentan contra los artículo 26, que consagra la libertad de escoger profesión u oficio y la posibilidad de que el Estado regule el ejercicio de las profesiones; 49, que se refiere al derecho a la salud; 13, 25 y 53, que contemplan los derechos a la igualdad y al trabajo; y 93, a cuyo tenor los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Congreso prevalecen en el orden interno.</p> <p>En cuanto al artículo 2 de la Ley, dice el demandante que es inconstitucional por su amplitud, pues autoriza a los optómetras para realizar labores propias del campo de la medicina oftalmológica. Así ocurre con las expresiones "prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual" y "por medio del examen diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud ocular".</p> <p>Esa amplitud -observa- vulnera al mismo tiempo los derechos y deberes de tres destinatarios: los usuarios, los profesionales y el Estado.</p> <p>En el sentir del demandante, la normatividad acusada ha regulado la profesión a que se refiere de una manera tan amplia que un optómetra podría fácilmente dejar invidente a una persona, sin salirse de la ley.</p> <p>A su juicio, las enfermedades del ojo no conllevan únicamente a la formulación de gafas o lentes de contacto, sino que comprometen la salud, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad, la vida, la dignidad y el interés general, y, por tanto, deben ser atendidas por un médico oftalmólogo y no por un optómetra.</p> <p>Aduce que los optómetras, si ejercieran las actividades autorizadas por la Ley acusada, vulnerarían el artículo 95-1 de la Constitución,</p>



	<p>por cuanto estarían cumpliendo funciones ajenas a su especialidad.</p> <p>Afirma que mediante la Ley 372 de 1997 el Estado desconoce su deber constitucional de intervenir una profesión que supone alto riesgo social. Además, establece una discriminación en contra de los oftalmólogos y correlativamente un privilegio irrazonable a favor de los optómetras.</p> <p>Iguales argumentos expone el accionante, respecto de los literales b), e), g) y h) del artículo 4 de la norma en cuestión, en lo acusado.</p> <p>En relación con el párrafo del artículo 3, y el literal g) del artículo 8, también demandados, en virtud de los cuales se autoriza a los optómetras para que utilicen los medicamentos que el Consejo Técnico Nacional Profesional de Optometría determine, considera el actor que dicho órgano, de carácter estrictamente consultivo, no puede establecer ni reglamentar lo relativo a medicamentos, pues ello le compete al Presidente de la República y al Ministro de Salud.</p> <p>Así las cosas, como la Ley acusada no ha delegado en forma expresa la potestad reglamentaria del Presidente de la República, se está desconociendo el artículo 211 de la Carta Política, en concordancia con el 1 y el 6 Ibidem.</p> <p>En cuanto a las funciones del Consejo Técnico, el demandante aduce, respecto de la estipulada en el literal b) del artículo 8 de la Ley acusada, que la expedición de las tarjetas profesionales de optómetra y el registro correspondiente no es una función propia de un órgano consultivo. En cuanto al literal e), manifiesta que el legislador confunde dicho Consejo con un gremio profesional "al decir que es función suya velar por el continuo mejoramiento de la utilización de los optómetras".</p> <p>Considera que el artículo 9, en concordancia con el 2, el 3 y el 4 de la Ley 372, es totalmente irrazonable, ya que un médico oftalmólogo podría verse sancionado por ejercer ilegalmente la optometría. Agrega que las profesiones sólo pueden limitarse teniendo en cuenta el riesgo social, pero paradójicamente lo que la Ley hace es crear dicho riesgo y no controlar la actividad que lo genera.</p> <p>Expresa, además, que la amplitud de la norma atenta contra el debido proceso y específicamente contra el principio de tipicidad.</p> <p>Manifiesta el actor que los artículos 2 y 4, literales b), e), g), h) y m), vulneran el derecho a la igualdad en el trabajo (artículos 13, 25 y 53 C.P.), ya que "se aprecia una discriminación en contra de los médicos oftalmólogos y una equivalente preferencia en favor de los</p>
--	---

	<p>optómetras". Aduce que ello obedece a que se equiparan los campos de acción de las dos profesiones, sin tener en cuenta que los estudios y preparación son diferentes en cada caso.</p> <p>Alega que igualmente se desconoce el artículo 93 de la Carta, pues el Convenio 111 de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan los derechos a la igualdad de oportunidades y trato en el empleo, a la salud y la asistencia médica, y el principio según el cual los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. VLADIMIRO NARANJO MESA</p> <p>Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-251/98</p> <p>OPTOMETRIA-Normas invaden campos de medicina/OFTAMOLOGIA (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Las razones que mueven al suscrito magistrado a apartarse de la decisión mayoritaria se basan, fundamentalmente, en el hecho de que las normas citadas, al definir la profesión de optometría y fijar sus alcances, invaden campos reservados exclusivamente a la ciencia médica y, en particular, a la especialidad de la oftalmología, con lo cual se genera un enorme riesgo social para la población colombiana que confiaría sus derechos constitucionales a la salud, a la integridad física, e incluso a la vida, a personas que carecen de suficiente idoneidad profesional para cumplir actividades médicas. No ignora el suscrito que la Carta Política otorga amplias facultades al Estado para regular las profesiones u oficios y para organizar, dirigir y reglamentar los servicios de salud. Sin embargo, tampoco puede desconocerse el que, dentro de una interpretación armónica y sistemática de la Constitución Política -que le impone al Estado el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la garantía y efectividad de los derechos ciudadanos- dichas funciones deban cumplirse, precisamente, dentro del marco de respeto y protección de tales garantías y derechos; en el caso particular, dentro del marco de respeto y protección a los derechos constitucionales a la salud y a la integridad física de los pacientes, los cuales resultarían vulnerados si, como lo pretende la ley acusada, se habilita a los optómetras para cumplir funciones que son propias de los médicos oftalmólogos.</p> <p>SI DR. CARLOS GAVIRIA DIAZ</p>

	<p>PROFESION-Regulación legal (Salvamento de voto)</p> <p>Quiero sí, reiterar una dificultad que tuve ocasión de exponer en Sala y que no tiene que ver sólo con la ley específica que fue objeto de demanda, sino con muchas del mismo género, reglamentarias del ejercicio de algunas profesiones. En tales leyes se vierten en formas legales contenidos de reglas técnicas que se pretende válidas en el ámbito de las correspondientes disciplinas científicas o profesiones, y acerca de cuya validez el juez constitucional no tiene otra cosa que perplejidades. Por ejemplo: ¿cómo determinar si un cierto proceso terapéutico puede controlarlo competentemente un optómetra o un oftalmólogo? ¿cómo decidir si un médico general está o no habilitado para suministrar determinado tipo de anestesia? Pienso que esa clase particular de reglas deberían ser avaladas previamente por Comités altamente especializados, compuestos equitativamente por autoridades reconocidas en los ámbitos de las ciencias o disciplinas cuyo ejercicio pueda entrar en conflicto, y reducirse la reglamentación legal a aspectos atinentes a derechos, deberes y libertades, una vez delimitado claramente el ámbito sometido a otro tipo de verificación, ajena por completo al juez constitucional.</p> <p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>LEY DE OPTOMETRIA-Trámite como ley estatutaria (Salvamento de voto)</p> <p>Considero que la Ley 372 de 1997 ha debido tramitarse como ley estatutaria. La Corte, a mi juicio, persiste en el error conceptual de reservar la Ley Estatutaria para remitir a ella sólo las regulaciones que "afecten" el núcleo esencial de los derechos fundamentales, tal y como se asevera repetidamente en la sentencia. En realidad, el núcleo esencial de un derecho lo es porque resulta "inafectable". Entonces, si esa es la materia propia de la Ley Estatutaria, esta garantía de los derechos fundamentales, nunca podrá operar.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-042/98
Fecha de la sentencia	febrero veinticinco (25) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 381 del 10 de julio de 1997 “Por medio de la cual se somete el “Acuerdo de Cooperaci3n T3cnica, Cient3fica y Tecnol3gica entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de Rumania”, suscrito en Bucarest el 10 de abril de 1994.
Conoci3 en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Decision	Declarar EXEQUIBLES el “ACUERDO DE COOPERACION TECNICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE RUMANIA”, suscrito en Bucarest el 10 de abril de 1994, as3 como la Ley 381 del 10 de julio de 1997, aprobatoria del mismo.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-318/98
Fecha de la sentencia	treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Maximiliano Echeverri Marulanda y Francisco Prieto Uribe
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 867 (parcial) del Decreto 624 de 1989, modificado por el artículo 7 de la Ley 383 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Decision	Declarar INEXEQUIBLE en su integridad, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia, el artículo 7 de la ley 383 de 1997, que modificó el artículo 867 del decreto 624 de 1989.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los actores manifiestan que, según la jurisprudencia Constitucional, son violatorios del derecho fundamental al debido proceso (C.P., artículo 29), todos aquellos requisitos de rango no constitucional que tiendan a impedir u obstaculizar el acceso a la administración de justicia. Afirman que "el subterfugio legal de exigir una póliza o garantía bancaria, que tiene el mismo efecto práctico que el pago de la suma discutida (en cuanto es una carga procesal que se impone al demandante, cuyo efecto para la administración es obtener de una vez la seguridad del pago, como si fuera el pago), es una violación del derecho de defensa".</p> <p>A juicio de los demandantes, los apartes acusados del artículo 867 del Estatuto Tributario vulneran el derecho de acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política. Opinan que "la exigencia de una garantía que deba expedir un tercero, cuyo costo es tan evidente que la misma norma reconoce como tal en el parágrafo, al precisar que en caso de éxito de la demanda habrá lugar a su descuento, es una barrera de acceso a la administración de justicia, (...), toda vez que no está garantizado que toda persona estará en las condiciones económicas necesarias para pagar la garantía". Alegan que la efectividad del derecho de acceso a la administración de justicia no puede depender del "libre juego de la oferta y de la demanda de pólizas y garantías bancarias". En opinión de los actores, la norma demandada hace depender la efectividad del derecho antes anotado "de que terceros actores estén en disposición de expedir</p>

	<p>las garantías o las pólizas, dentro de las condiciones que ellos fijan, condiciones que para ellos nada tienen que ver con la garantía constitucional del libre acceso a la administración de justicia. Lo que ellos buscan o buscarían no es más que devengar el costo de la prima y tener cubierto el riesgo".</p> <p>Por último, los libelistas señalan que el principio de gratuidad en la administración de justicia, consagrado en el artículo 6° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), resulta vulnerado por las disposiciones demandadas. Consideran que "gratuidad para obtener acceso a la administración de justicia no sólo significa que ni el Estado ni los funcionarios de la administración de justicia habrán de devengar suma alguna por ese servicio público, sino que el acceso al mismo no estará entabado por costos ocultos, sean éstos directos o indirectos, salvo los que válidamente la Ley Estatutaria haya permitido o establecido". A su juicio, la consagración de aquellos costos que, de manera excepcional, hayan de sufragar los usuarios del servicio público de administración de justicia, debe hacerse por vía de una ley estatutaria. Al respecto señalan que ni el Estatuto Tributario ni la Ley 383 de 1997 (reformatoria del primero) son leyes estatutarias, razón por la cual no podían establecer disposiciones relativas a costos en la administración de justicia.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI. DRES. ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>EXPENSA JUDICIAL-Establecimiento mediante ley ordinaria (Salvamento de voto)</p> <p>Si se asumiere que la disposición demandada consagra una expensa judicial, nada obsta para que sea establecida mediante una ley ordinaria, siempre y cuando se adecue al principio de proporcionalidad y respete las restantes normas constitucionales.</p> <p>DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (Salvamento de voto)</p> <p>La regulación legal del derecho que se estudia supone la previa definición de las condiciones y requisitos que deben cumplirse para ejercer el derecho de acción o para promover e impulsar un proceso judicial. En efecto, son justamente tales reglamentaciones - o limitaciones - las llamadas a permitir la armonización de todos los derechos, valores y principios constitucionales que giran en torno a la idea de "una tutela judicial efectiva". En este sentido, mal puede afirmarse que sólo la Constitución puede establecer requisitos que limiten el derecho de acceso a los jueces y tribunales, pues si ello</p>

	<p>fuera así, sería tarea del constituyente elaborar cada uno de los códigos procesales, con la consecuencia natural y obvia de restringir irrazonablemente el principio democrático y desnaturalizar el texto constitucional.</p> <p>CAUCION PARA DEMANDAR ANTE EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Finalidad (Salvamento de voto)</p> <p>La Constitución admite el establecimiento de condicionamientos de naturaleza económica del derecho a demandar, siempre que resulten razonables y proporcionados en relación con la finalidad constitucional que deben perseguir y que no afecten el núcleo esencial de algún derecho constitucional. La disposición estudiada busca, al menos, dos finalidades complementarias. En primer lugar, persigue el cumplimiento del deber ciudadano de no acudir de manera injustificada ante la administración de justicia, lo que constituye un abuso del derecho de acción, que repercute negativamente sobre los principios de eficacia y eficiencia de la administración de justicia y, en últimas, sobre el derecho fundamental de otros ciudadanos a una tutela judicial efectiva. Adicionalmente, tiende a evitar que las personas hagan uso de sus propias prerrogativas o derechos - como el derecho de acción - con el fin de evadir el cumplimiento de una obligación tributaria, destinada a hacer realidad los postulados de justicia del Estado Social de Derecho. Como puede observarse, las finalidades perseguidas por la norma no sólo son legítimas, sino que, incluso, resultan constitucionalmente relevantes.</p> <p>JUICIO DE NECESIDAD-Contenido (Salvamento de voto)</p> <p>En los eventos en que el juez no esté obligado a realizar un test estricto de proporcionalidad, el juicio de necesidad de una norma legal implica, simplemente, la demostración de que no existe ninguna otra medida que, de manera clara y contundente, produzca en términos constitucionales, igual resultado a un menor costo. Si al evaluar las distintas alternativas resulta que cada una de ellas tiene múltiples aristas que tornan complejo el análisis, el juez debe optar por aplicar el principio democrático y avalar la selección realizada por el legislador.</p> <p>EVASION TRIBUTARIA-Medidas (Salvamento de voto)</p> <p>Las medidas que tiendan a evitar la evasión tributaria o, en general, el fraude a la ley fiscal, así como las que pretendan racionalizar la prestación del servicio público de la justicia, encuentran franco respaldo constitucional. De otra parte, la condición contemplada en la norma demandada no parece particularmente gravosa, pues no se trata de la cancelación - depósito o pago - integral y previo del</p>
--	--

	<p>monto discutido, ni siquiera de una parte del mismo. Lo que ordena la norma es, simplemente, la constitución de una garantía correspondiente a un porcentaje de la suma discutida, lo que implica el pago de una prima, cuyo valor será integralmente devuelto al contribuyente una vez se produzca un fallo favorable a sus intereses.</p> <p><b>PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO (Salvamento de voto)</b></p> <p>El principio de conservación del derecho constituye uno de los criterios que debe orientar la labor del juez constitucional. Efectivamente, el respeto por el principio democrático, impone al juez constitucional la tarea de conservar al máximo las decisiones del legislador. En consecuencia, si una norma resulta exequible aplicada a ciertas hipótesis pero, sin embargo, en otras su aplicación es inconstitucional, no puede la Corte, simplemente, declararla inexecutable. Su tarea, en estos eventos, será la más compleja de diferenciar unas y otras hipótesis y producir un fallo condicionado en el cual se indiquen, con claridad, las condiciones de vigencia de la norma legal.</p> <p><b>AMPARO DE POBREZA-Procedencia (Salvamento de voto)</b></p> <p>En el caso en el cual se trate de un ciudadano que no se encuentre en capacidad de constituir caución alguna sin comprometer los recursos necesarios para su congrua subsistencia, tendrá derecho al denominado "amparo de pobreza", reconocido en el artículo 2° de la LEAJ y en los artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil, ordenamiento que, como se sabe, se aplica al procedimiento contencioso administrativo en lo no previsto por las leyes especializadas en la materia.</p> <p><b>CORTE CONSTITUCIONAL-Cambio de jurisprudencia debe reconocerse y justificarse (Salvamento de voto)</b></p> <p>Nadie duda que la Corte Constitucional, como cualquier otro juez o tribunal, se encuentra en capacidad de variar su jurisprudencia. No obstante, de hacerlo, debe reconocerlo explícitamente y justificar suficientemente las razones del giro doctrinal. Ese ha sido el comportamiento habitual de esta Corporación. Sin embargo, la presente decisión aparea un cambio radical de jurisprudencia sin que en ninguna parte de su texto se haga referencia explícita a ello ni se justifique, siquiera someramente, una tal ruptura respecto de los precedentes anteriores.</p> <p><b>JUICIO DE NECESIDAD-Fundamento (Salvamento de voto)</b></p> <p>La sentencia retoma como elemento central del juicio de necesidad</p>
--	--



	<p>el criterio elaborado por el documento original, según el cual, en casos como el que se analiza, en los que el juez no está conminado a realizar un test estricto de proporcionalidad, "el juicio de necesidad de una norma legal implica, simplemente, la demostración de que no existe ninguna otra medida que, de manera clara y contundente, produzca en términos constitucionales, igual resultado a un menor costo. Si al evaluar las distintas alternativas resulta que cada una de ellas tiene múltiples aristas que tornan complejo el análisis, el juez debe optar por aplicar el principio democrático y avalar la selección realizada por el legislador."</p> <p>SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Falta de claridad conceptual (Salvamento de voto)</p> <p>No obstante, la Sentencia de la que nos apartamos, pese a reproducir literalmente la regla hermenéutica del artículo 140 del C.C.A., omite aplicarla al caso concreto, pues no evalúa si, verdaderamente la opción planteada por el artículo 140 del CCA logra el mismo resultado o si existen "aristas" que obligan al juez a respetar la opción democráticamente adoptada. En efecto, la decisión se limita a constatar que la opción contenida en el artículo 140 del CCA permite que el juez "tenga en cuenta las circunstancias de cada caso concreto", lo que podría ser relevante en un eventual juicio de igualdad, pero nada tiene que ver con los elementos centrales del llamado juicio de necesidad. La sentencia adolece de falta de claridad conceptual al momento de diferenciar el juicio de necesidad del juicio de estricta proporcionalidad.</p> <p>PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Desconocimiento (Salvamento de voto)</p> <p>La ponencia original, en desarrollo de otro principio cardinal de la hermenéutica constitucional - el principio de conservación del derecho -, optó por la constitucionalidad condicionada de la norma demandada. La sentencia, por el contrario, desconoció francamente la existencia de este principio y prefirió declarar la inexequibilidad de una disposición que hubiera podido permanecer en el ordenamiento si se somete a una decisión condicionada. Sería en extremo útil, como en efecto lo ha hecho esta Corporación en múltiples oportunidades, que las decisiones judiciales explicaran las razones por las cuales dejan de utilizar reglas de decisión, principios o precedentes que han sido consolidados por la propia doctrina constitucional.</p> <p>PRINCIPIO DE IGUALDAD-Aplicación indebida (Salvamento de voto)</p> <p>Hasta el fundamento jurídico 15, la sentencia entiende que la</p>
--	---

	<p>norma demandada es inconstitucional dado que se aplica, en igualdad de condiciones, a quienes se encuentran en capacidad de cumplirla y a aquellas personas que están en absoluta incapacidad de hacerlo. No obstante, al momento de hacer el juicio de igualdad, adopta, integralmente, las premisas de las que partía el proyecto derrotado, esto es que la norma sólo se aplica a los sujetos que se encuentran en capacidad de constituir la garantía exigida. En la ponencia derrotada las afirmaciones transcritas resultaban coherentes con la decisión de inaplicar la norma a quienes no pudieran cumplir el requisito en ella contenido. En ese evento, el juicio de igualdad debía realizarse solamente entre los sujetos que estaban sometidos a la regulación legal objeto de controversia, es decir, quienes podían cumplir con la caución. No obstante, una tal definición carece de lógica en el contexto de la sentencia de la que nos apartamos, pues contradice, nada más ni nada menos, que la razón por la cual, en páginas anteriores ha considerado que la disposición es inexecutable: su aplicación a quienes no están en capacidad de constituir la garantía exigida como condición para demandar. La sentencia cometió una grave imprecisión teórica y conceptual a la hora de aplicar el juicio de igualdad, tan detalladamente elaborado por esta Corporación en otras decisiones.</p> <p>CAUCION-Requisito para admitir demanda (Salvamento de voto)</p> <p>En alguna parte de la sentencia, parece afirmarse que la norma demandada es inconstitucional por exigir una caución como requisito de admisibilidad de la demanda. Este argumento, más bien opaco, hubiera merecido un más amplio desarrollo. Sin embargo, cabe afirmar que nada obsta para que exista un requisito de tal naturaleza, siempre que se asegure al demandante el derecho de alegar y probar, al momento de la presentación de la demanda, la imposibilidad de cumplirlo por razones ajenas a su voluntad. En estas condiciones, el juez competente para decidir sobre la admisión podría proceder a admitir la demanda a pesar de que no se hubiera cumplido el requisito en mención.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-341/98
Fecha de la sentencia	ocho (8) días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Ana Cristina Rincón de Cabrera, Gustavo Jaramillo Pelaez y Jorge Raúl Martínez
Demandado	Acción de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 37 de la Ley 383 de 1997
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- Declárase EXEQUIBLE, bajo condición de que se aplique sólo a hechos gravables que tengan lugar con posterioridad a su entrada en vigencia, el primer inciso del artículo 37 de la Ley 383 de 1997, que dice:</p> <p>"Artículo 37. La exención prevista en el artículo 6 de la Ley 218 de 1995, no cobija las materias primas agropecuarias o pesqueras, ni las materias primas industriales producidas en la Subregión Andina. Tampoco es aplicable a los equipos o enseres que no se destinen en forma directa a la producción, tales como los vehículos, muebles y otros elementos destinados a la administración de la empresa y a la comercialización de los productos".</p> <p>Segundo.- Declárase INEXEQUIBLE el segundo inciso del artículo 37 de la Ley 383 de 1997, que dice:</p> <p>"Cuando la producción Subregional Andina sea altamente insuficiente, el Consejo Superior de Comercio Exterior podrá establecer exenciones sobre las mercancías mencionadas en este artículo, caso en el cual dichos beneficios tendrán el tratamiento establecido en el artículo 6 de la Ley 218 de 1995".</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Para los demandantes, el artículo transcrito atenta contra garantías establecidas en el Preámbulo de la Constitución, tales como el orden económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana.</p> <p>Recuerdan que fueron muchos los efectos catastróficos ocasionados a una parte del territorio nacional por la avalancha del Río Páez; que, ocurrido tal suceso, se convocó al sector económico del país y de otras latitudes para que invirtieran en la zona; y que a</p>

	<p>los inversionistas les fueron ofrecidas numerosas ventajas tales como la exención prevista en el artículo 6 de la Ley 218 de 1995.</p> <p>Al limitar esa exención -sostienen-, sólo quedarán exentas de pagar impuesto arancelario y de IVA las importaciones de materias primas cuya producción andina sea altamente insuficiente y, entonces, los inversionistas atraídos por las ventajas otorgadas, si son obligados a cancelar tributos, pierden estímulo. Y se desvirtúan la razón de ser, la filosofía y el atractivo de las normas que se habían dictado, las cuales habían influido en la renovación industrial dentro de la zona afectada. En consecuencia, según su criterio, para los habitantes de la misma se genera ignorancia y desempleo, lo cual pone en peligro la convivencia y la vida.</p> <p>Por tanto -aseguran-, el orden económico y social justo se ve severamente afectado y se impide el desarrollo de la zona protegida por la Ley Páez.</p> <p>Para los actores, con la disposición atacada se afecta la dignidad de las personas que habitan la región aledaña del Río Páez y se viola la seguridad jurídica a la que tienen derecho los inversionistas, quienes tenían confianza en los beneficios consagrados por el artículo 6 de la Ley 218 de 1995.</p> <p>También se lesiona, a su juicio, la libertad de empresa de los aludidos inversionistas.</p> <p>Citan el artículo 254 de la Ley 223 de 1995, que dice: "El Gobierno Nacional no podrá presentar al estudio del Congreso un nuevo proyecto de racionalización o de reforma tributaria, antes de demostrarles a las Comisiones Terceras del Congreso que se ha disminuido en por lo menos un treinta por ciento (30%) la evasión fiscal. De este porcentaje, por lo menos la mitad deberá provenir de la ampliación de la base tributaria".</p> <p>De tal texto concluyen que el artículo impugnado es también inconstitucional por razones de forma, con el siguiente argumento: "Plenamente demostrado se halla que no se encuentra la evasión fiscal disminuida bajo ningún aspecto que facultara el estudio que se hiciera de la Ley 383 de 1997, la cual posee una naturaleza meramente tributaria.</p> <p>Ahora bien, la norma que estableció la prohibición -artículo 254 de la Ley 223 de 1995- no fue derogada con anterioridad al estudio mencionado, o la Ley 383 de 1997. Téngase en cuenta que dicha derogatoria se presentó con la misma Ley 383 en su artículo 39".</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-190/98
Fecha de la sentencia	mayo seis (6) de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Aurelio Alonso Echeverry Velez, Jorge Enrique Pradilla Ardila, Sergio Alejandro Rueda, Julian Murcia Ardila, Jorge Palacio Zuñiga.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 61 de la Ley 383 de 1997 “por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando”.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Estar a lo resuelto en la Sentencia C-604 1997, en la que se declaró inexecutable el artículo 61 de la Ley 383 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Proceso 1867</p> <p>El demandante considera que el legislador, al obligar a un grupo de ciudadanos a realizar aportes a una institución para que ésta defina la manera en que se deben disfrutar las vacaciones, constituye una violación del artículo 52 de la Carta. De la lectura de la norma se desprende que el legislador únicamente está facultado para fomentar el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.</p> <p>Proceso 1871</p> <p>En primer lugar, los demandantes señalan que el Congreso incurrió en una violación al principio de unidad de materia, toda vez que el artículo demandado “nada tiene que ver con la normatividad tributaria ni tiene vínculo alguno con los aspectos impositivos presentes en la Constitución Nacional”.</p> <p>En segundo lugar, se limita la autodeterminación de cada persona en materia de disfrute del tiempo libre, toda vez que se restringe “el ingreso destinado a la recreación suya y de su familia”.</p> <p>Proceso 1873</p> <p>La norma acusada desconoce el artículo 16 de la C.P., toda vez que mediante el aporte obligatorio, el Estado invade un terreno vedado, como es la escogencia de las formas de descanso. En definitiva, “el estado no puede inducir la asunción de formas de descanso y</p>

	recreación”
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-127/98
Fecha de la sentencia	primer (1) día del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Luis Eduardo Montoya Medina.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 22 (parcial) de la ley 9° de 1989, y artículos 70 (parcial) y 71 (parcial) de la ley 388 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.
Decision	<p>Primero.- Declárase INHIBIDA en relación con la siguiente expresión del artículo 22 de la ley 9 de 1989 : "El proceso contencioso - administrativo terminará si transcurrido el término anterior no se hubiere dictado sentencia", por existir cosa juzgada constitucional, pues la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia Número 56, del 14 de septiembre de 1989, en la que la declaró inexequible.</p> <p>Segundo.- Declaránse INEXEQUIBLES los apartes de los siguientes artículos : del 22 de la ley 9 de 1989, inciso segundo, que dice : "En estas acciones no procederá la suspensión provisional del acto demandado." ; del artículo 71 de la ley 388 de 1997, el numeral 3, que dice : "3. No podrá solicitarse la suspensión provisional del acto que dispuso la expropiación por vía administrativa."</p> <p>Tercero.- Declaránse EXEQUIBLES los numerales 1 y 3 del artículo 70 de la ley 388 de 1997, por las razones expuestas en esta sentencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor estima que los apartes demandados de los artículos 70 y 71 de la ley 388 de 1997, así como, los acusados del artículo 22 de la ley 9° de 1989, vulneran los artículos 4°, 29, 58, 113 inciso final, 121, 122, 123, 150, numerales 1 y 2, 228, 229, y 238 de la Constitución Política.</p> <p>a) El primer asunto gira en torno al desconocimiento de lo preceptuado en los artículos 4 y 228 de la Constitución, pues en el inciso 3° del artículo 71 de la ley 388 de 1997 y en uno de los apartes acusados del artículo 22 de la ley 9° de 1989, se consagra la improcedencia de la suspensión provisional del acto administrativo que ordena la expropiación, desconociendo que no corresponde a la ley determinar los eventos en los que no procede la medida</p>



	<p>precautelativa, pues ésta es una facultad constitucional atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.</p> <p>Considera que las normas demandadas vulneran, también, los artículos 121, 122 y 150 numeral 1 y 2, como quiera que el legislador, arbitrariamente, se está arrogando una competencia que le es ajena.</p> <p>b) El segundo tema consiste en el desconocimiento del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto el inciso 2° del artículo 22 de la ley 9° de 1989, establece que si dentro de los 8 meses siguientes a la presentación de la demanda, el tribunal no hubiere resuelto la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho, se dará por terminado el proceso, circunstancia que genera una carga excesiva para los particulares al extinguirse su derecho de dominio del bien objeto de la expropiación, a pesar de estar cuestionada la legalidad del acto que la ordena.</p> <p>A su juicio, el legislador, con la disposición legal mencionada, no sólo limita la posibilidad del particular de solicitar al juez contencioso la suspensión de los efectos del acto que se discute, sino que, adicionalmente, ante la tardanza de éste en resolver, sanciona al particular, indebidamente, con la pérdida de su demanda, por un hecho que le es ajeno.</p> <p>c) Y, en tercer lugar, considera que los numerales 1° y 3° del artículo 70 de la ley 388 de 1997, desconocen el inciso 4° del artículo 58 de la Constitución, al disponer que sin necesidad de intervención judicial, una vez ejecutoriada la resolución que ordena la expropiación por vía administrativa, se dará traslado del derecho de dominio u otros derechos reales, a la entidad que la ha dispuesto, siendo el registro de la decisión ante la Oficina de Instrumentos Públicos, el único requisito previo al traslado de la propiedad y la entrega material del bien.</p> <p>En concepto del demandante, la expropiación por vía administrativa no puede operar sin intervención judicial previa, razón por la que no puede transferirse el derecho de dominio, sin que hubiese mediado por lo menos el control de legalidad del acto que la ordena.</p> <p>Finalmente, afirma que, según el querer del constituyente, la expropiación por vía administrativa no fue abandonada al imperio unilateral de la administración, pues sujetó la eficacia del acto administrativo al control de legalidad que realice la jurisdicción de lo contencioso administrativo, motivo por el cual las normas acusadas son inexecutable, en tanto confieren al acto de</p>
--	--

	expropiación efectos extintivos del dominio u otros derechos reales, dejando desprotegido el derecho a la propiedad.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-193/98
Fecha de la sentencia	mayo siete (7) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Miguel Antonio Zamora Avila
Demandado	Acci3n p3blica de inconstitucionalidad contra los art3culos 2o., 3o., 5o., y 9o., todos parcialmente de la Ley 393 de 1997.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	<p>Primero. Estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-157 de abril 29 de 1998, respecto de los art3culos 2o, 3o, 5o y el inciso final del art3culo 9o de la Ley 393 de 1997.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del art3culo 9º de la Ley 393 de 1997, salvo la expresi3n “la norma o” que se declara INEXEQUIBLE.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	<p>El actor señaala que las normas acusadas vulneran el art3culo 87 de la Carta Pol3tica, con fundamento en las siguientes consideraciones:</p> <p>Sostiene el impugnante que la mencionada norma constitucional dispone que la autoridad competente para expedir la orden de cumplimiento de una ley o acto administrativo es la judicial, y establece sin distingos que puede ser dirigida contra cualquier autoridad.</p> <p>En lo atinente a la autoridad competente para conocer de estas acciones, expresa que “con sabidur3a el legislador tuvo en cuenta que la ley trata de temas de toda índole y que por ende, su incumplimiento debe ser conocido por la autoridad judicial, de modo que el accionante pueda escoger aquella m3s af3n a la materia objeto de la misma”. Aduce que la norma demandada, contrariando abiertamente la disposici3n del Constituyente, pretende restringir su alcance y determinar que solo son competentes los jueces administrativos para conocer y fallar la acci3n de cumplimiento.</p> <p>En cuanto al art3culo 9º de la norma demandada, señaala que al condicionar el inciso final la procedencia de la acci3n de cumplimiento a que no se tenga o se haya tenido otro instrumento judicial, se estar3a desnaturalizando el fin mismo del r3pido y eficaz</p>

	<p>instrumento que nos ocupa, ya que siempre tiene y ha tenido la vía ordinaria para demandar el cumplimiento de las normas.</p> <p>De ser así, aduce el demandante “la acción de cumplimiento se volvería subsidiaria e inoperante, porque si ya se utilizó el otro instrumento judicial, debió haber sentencia y se produce el fenómeno de la cosa juzgada, formal o material, según el caso”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. CARLOS GAVIRIA DIAZ, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, VLADIMIRO NARANJO MESA.</p> <p>ACCION DE TUTELA Y ACCION DE CUMPLIMIENTO-Naturaleza diferente (Salvamento de voto)</p> <p>Mientras la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, en cuanto, con miras a la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, opera solamente a falta de un medio judicial idóneo para el mismo fin, salvo el caso extraordinario del perjuicio irremediable, la de cumplimiento se consagró específica y deliberadamente con el objeto de asegurar que, mediante su uso, cualquier persona pudiera obtener, acudiendo a los estrados judiciales, la efectividad de las leyes y los actos administrativos. No se trata, entonces, de una acción supletoria sino principal. La persona debe poder emplear ese instrumento constitucional de manera directa. Es inoficioso buscar en el ordenamiento jurídico si existe o no otro mecanismo idóneo para el mismo fin, sencillamente porque el único específicamente enderezado a obtener el cumplimiento de las normas es el consagrado por el artículo 87 de la Constitución Política.</p> <p>ACCION DE CUMPLIMIENTO-Es pública/ACCION DE CUMPLIMIENTO-Improcedencia de exigir otro medio judicial (Salvamento de voto)</p> <p>La de cumplimiento es una acción pública que, si bien no goza de la naturaleza política de la acción de inconstitucionalidad -reservada por ello al ciudadano-, tiene por fundamento y por objetivo la vigencia y realización del orden jurídico a través del cumplimiento de las normas que lo integran. A la luz de la Constitución, no se necesita acreditar interés particular alguno para poder intentar la acción de cumplimiento, bien que se trate de una ley, ya de un acto administrativo. El interés protegido es público: el acatamiento a lo que la disposición correspondiente haya ordenado y que viene siendo desobedecido. Tampoco hay que probar afectación, daño o amenaza en cabeza propia, pues se parte del supuesto</p>

	constitucional de que todos los gobernados, por serlo, están perjudicados por el solo hecho de que un mandato en vigencia, integrante del orden jurídico, esté siendo desacatado. No puede hablarse de afectado, como lo hace el artículo objeto de controversia, para referirse a quien puede ejercitar la acción. Y, si ello es así, no puede la ley exigir, como requisito para que proceda, la búsqueda de procedimientos judiciales encaminados a la defensa del actor, como sí es normal que suceda en el caso de la acción de tutela.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-157/98
Fecha de la sentencia	abril veintinueve (29) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Francisco Cuello Duarte, Luis Alonso Colmenares Rodriguez, Jorge Leyva Valenzuela, Franky Urrego Ortiz, Luis Carlos Zamora Reyes, Jaime Enrigue Lozano Zamudio, Jorge Enrique Burgos Martinez Y Hector Garcia Garcia.
Demandado	Acciones Pùblicas De Inconstitucionalidad Contra Los Artículos 1o. (Parcial), 2o. Inciso Segundo, 3o. (Parcial), 5o. (Parcial), 9o. Parágrafo, Y Contra Toda La Ley 393 De 1997, "Por La Cual Se Desarrolla El Artículo 87 De La Constitución Política".
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE la Ley 393 de 1997, "por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política", en cuanto no se configuró el vicio de procedimiento alegado.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º y el artículo 3º de la Ley 393 de 1997, salvo la expresión "tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de un acto administrativo" a la cual alude el parágrafo de dicha disposición, que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Tercero. Declarar INEXEQUIBLES el inciso final del artículo 2º y la expresión "administrativa" contenida en el artículo 5o de la Ley 393 de 1997.</p> <p>Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 9o. de la Ley 393 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los ciudadanos demandantes solicitan en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, que se declare la inexequibilidad de los artículos 1o. (parcial), 2o. inciso segundo, 3o. (parcial), 5o. (parcial) y 9o. (parcial) de la Ley 393 de 1997.</p> <p>A continuación se resumen los cargos de las demandas.</p> <p>El ciudadano Jaime Enrique Lozano Zamudio demanda parcialmente los artículos 1o., 2o. y 3o. por quebrantar el artículo 87 constitucional, ya que según este precepto, se hace expresa referencia a la autoridad judicial, es decir, que todo juez es competente para asumir el conocimiento, trámite y decisión de la acción de cumplimiento. "Limitar a los jueces administrativos es</p>

	<p>vulnerar el artículo 228 superior, amen de restringir indebida, irrazonable y desproporcionadamente el acceso a la administración de justicia, menoscabando el derecho de todo ciudadano de instaurar acciones en defensa de la Constitución y la ley".</p> <p>Agrega el actor, que "al reglamentar el ejercicio de una acción pública constitucional como la que nos ocupa, no puede el legislador so pretexto de reglar su trámite, ir más allá de lo estatuido por el Constituyente, limitando en forma grave el acceso a tal medio constitucional para hacer valer la soberanía y la voluntad popular, estableciendo una cortapisa disimulada o que en forma sutil va a entorpecer el acceso del ciudadano a este tipo de mecanismos, primero porque los jueces administrativos todavía no existen, segundo porque por las limitaciones presupuestales de la rama judicial muy seguramente no se crearán en todos los municipios del país y, porque el Constituyente fue claro al hacer referencia a la autoridad judicial en general, sin restringir la competencia en una categoría de jueces en particular".</p> <p>Por su parte, el ciudadano LUIS CARLOS ZAMORA REYES acusa las expresiones "definida en esta ley" (contenida en el artículo 1o.), "administrativos" y "el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo" (que aparecen en el artículo 3o.), así como la integridad de los párrafos del mismo precepto, por vulnerar los artículos 40 numeral 6 y 87 de la Constitución Política, con fundamento en que, de una parte, la limitación establecida en el artículo 1o., al referirse al tipo de autoridad competente para conocer de la acción de cumplimiento y desarrollada luego al definir como única autoridad para conocer de esta acción la justicia de lo contencioso administrativo, va más allá de lo consagrado en el artículo 87 constitucional que hace referencia a la autoridad judicial en general y no a una en particular; de otro lado, afirma que no sólo el Congreso no estaba facultado para definir la clase de autoridad judicial a la cual se podía dirigir el ciudadano para exigir el cumplimiento de las leyes o de los actos administrativos, sino que además, al no existir los jueces administrativos y tener que acudir ante los Tribunales Administrativos de los Departamentos a ejercer dichas acciones, se impide a gran cantidad de personas interponerlas. Además, señala que son los jueces en general quienes deben, investidos de la autoridad que les da la Constitución y la ley, aplicar el derecho, y son quienes están en capacidad de defender los derechos, de conformidad con el texto superior. Ello se predica, señala, de cualquier juez y no sólo del juez administrativo; igualmente, agrega que los jueces ordinarios se encuentran discriminados por todo el país, lo que da mayores posibilidades para ejercer la acción.</p>
--	---

	<p>De otro lado, el ciudadano Franky Urrego Ortiz demanda la inconstitucionalidad de la expresión "administrativa" contenida en el artículo 5o. de la Ley 393 de 1997, por quebrantar los artículos 2, 87, 92 y 228 de la Carta Política.</p> <p>Señala el actor, que la limitación que la norma acusada hace respecto de la autoridad administrativa va en detrimento de uno de los fines del Estado, cual es garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, en este caso el derecho de hacer efectivo el cumplimiento de la ley o actos administrativos ante todas las autoridades, sin restricción alguna, tal como lo consagró el artículo 87 superior. Además, indica que "no se concibe que se restrinja el ámbito de ejecución del derecho de acción al arbitrio del legislador, cuando más bien debía ser él quien brindara a todos los asociados la posibilidad de materializar la abstracción y generalidad de la ley frente a todas las autoridades, tal como lo establece la Constitución". De esta manera, señala, no se garantizan los derechos en la forma que lo consagra la norma superior, es decir, sin restricción alguna, sino que se "parcializa su eficacia a lo resuelto por el legislador".</p> <p>Agrega el impugnante, que al disponer el artículo 5o. ibídem que respecto de las autoridades sólo podría dirigirse la acción de cumplimiento contra aquellas que tuvieran la calidad de administrativas, se hace una distinción que contraviene el inciso segundo del artículo 87 de la Carta Política. Así, con base en este precepto, es claro en su criterio que "la Constitución no hace ninguna diferenciación respecto de la autoridad contra la cual procede la mencionada acción".</p> <p>Se infiere, según él, que el Congreso desbordó en desarrollo de su función legislativa, tanto el texto como el espíritu de la Constitución que es brindar a toda persona la posibilidad de hacer efectivo el cumplimiento de las leyes y los actos administrativos frente a toda autoridad sin diferenciación alguna. "Es así como se nota la flagrante violación que hizo el legislador a la Constitución, distinguiendo a la autoridad contra quien procedía la acción de cumplimiento, distinción que reiteramos no encuentra asidero en ninguno de los artículos de la norma superior".</p> <p>Igualmente, señala el actor que el artículo 228 superior consagra que en las decisiones judiciales prevalecerá el derecho sustancial, y en virtud de que la acción de cumplimiento tiene carácter judicial, se quebranta la Constitución en el sentido de que el juez al decidir en base a la ley que desarrolla dicha acción, se limita a ordenar el cumplimiento frente a las autoridades exclusivamente administrativas, con lo cual infringe el precepto superior, puesto que la ley que la desarrolla sólo debía establecer el procedimiento y</p>
--	---



	<p>no hacer distinciones respecto de la autoridad a la cual debe ordenársele el cumplimiento de la ley o acto administrativo.</p> <p>Por su parte, los ciudadanos Francisco Cuello, Luis Alonso Colmenares, Jaime Enrique Lozano, Jorge Enrique Burgos y Hector Garcia demandan la inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 9o. de la Ley 393 de 1997, por desconocer el mandato del artículo 87 de la Constitución al limitar el ejercicio de la acción de cumplimiento, en la medida en que dispone que a través de ellas no se podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.</p> <p>Según los demandantes, esta acción en virtud de lo dispuesto por el precepto superior en mención, la puede incoar toda persona ante la respectiva autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, sin que se establezca limitación alguna respecto de las leyes o actos contra los cuales se pueden ejercer estas acciones, razón por la cual si la Constitución no consagra restricciones para invocar estas acciones, menos las podría determinar la ley que las reglamenta, dado que esta debe ser un desarrollo de la norma superior.</p> <p>Sostienen los citados ciudadanos, que el parágrafo acusado quebranta igualmente lo dispuesto en el artículo 4o. de la Carta Fundamental, ya que dicho precepto señala en contravía a lo dispuesto en el artículo 87 constitucional, al establecer excepciones para el ejercicio de la acción de cumplimiento sólo respecto de ciertos actos administrativos, cuando el querer del Constituyente de 1991 fue que dicha acción se pudiese dirigir a obtener el cumplimiento de cualquier ley o acto administrativo, sin restricción alguna.</p> <p>Agregan finalmente, que la vocación natural de la ley y de los actos administrativos, es que estos se cumplan; al establecer el Constituyente de 1991 la acción de cumplimiento, está dando por sentado que el mismo Estado puede incumplir las normas, pero en forma excepcional. "Pero al establecer el parágrafo del artículo 9o. que la acción de cumplimiento no puede perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos, está institucionalizando el no cumplimiento de dichos preceptos, situación que no parece consultar los principios consagrados en el artículo 2 de la Constitución, pero de manera especial aquel que propende por asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, y el atinente a que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus bienes y demás derechos".</p> <p>Además, concluyen que según se deduce de los textos de los</p>
--	---

	<p>diferentes debates sostenidos sobre el tema en la Asamblea Nacional Constituyente, no surge la voluntad de limitar el ejercicio de la acción de cumplimiento tan solo cuando se trate de normas que no implicaran gasto. No se ve entonces, agregan, razón valedera para que el legislador al desarrollar el ejercicio de la acción de cumplimiento, impida su ejercicio para lograr el cumplimiento de normas que establezcan gastos.</p> <p>Por último, el ciudadano Jorge Leyva Valenzuela acusa la totalidad de la Ley 393 de 1997 por violar los artículos 4 y 152 de la Constitución Política, pues en su concepto dicha ley debió tramitarse no como una ley ordinaria, sino como una estatutaria, por cuanto se trata de una de aquellas acciones consagradas en la Constitución para proteger los derechos fundamentales, uno de los cuales es el cumplimiento de las normas legales o administrativas. Agrega que ello asegura la convivencia en el grupo social en cuanto mediante estas se regula el ejercicio de la libertad, por lo que existe un verdadero derecho fundamental a dicha regulación y al cumplimiento de los actos a través de los cuales esta se lleva a cabo.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRA. CARMENZA ISAZA DE GÓMEZ</p> <p>ACCION DE CUMPLIMIENTO-Autoridad contra quien se dirige (Salvamento parcial de voto)</p> <p>En el proyecto de la sentencia sometido a la consideración de la Sala Plena, se proponía declarar exequible la expresión "autoridad administrativa", siempre y cuando se entendiera que la acción de cumplimiento podía dirigirse contra cualquier autoridad, a quien correspondiera el cumplimiento de una norma, con fuerza material de ley o acto administrativo. En mi concepto, bastaba esa condición para precisar este aspecto, pues en el propio encabezado del artículo 5o. se despejaba cualquier duda al respecto. En efecto, allí se dice : "Autoridad Pública contra quien se dirige", y es claro que autoridad pública es un concepto general que abarca a toda clase de autoridades, y no sólo a las administrativas. Además, con una interpretación sistemática de las normas que contiene la ley, y en el propio inciso del artículo 5o. citado, se despejaba cualquier equívoco al respecto. En este inciso se habla de las autoridades, de manera general. Es decir, en el sentido apropiado de la autoridad pública contra la que se dirige la acción de cumplimiento.</p> <p>PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA NORMA-Desconocimiento (Salvamento parcial de voto)</p>

	<p>No se tuvo en cuenta jurisprudencia reiterada de la Corte, sobre el principio de conservación de la norma, en el sentido de que el juez constitucional, en lo posible, debe respetar la decisión del legislador. Y que sólo cuando resulta claramente inconstitucional la norma o alguna de sus expresiones, y no es posible darle un contenido acorde con la Constitución, ella debe salir del ordenamiento jurídico. En la parte motiva del proyecto de sentencia, se explicaban las razones para declarar la exequibilidad condicionada de la expresión, dando aplicación a este principio. Razones que, en general, sirvieron para demostrar la inexequibilidad de la misma.</p> <p>Respetuosamente consigno mi salvamento parcial de voto en relación con la decisión de declarar inexecutable la palabra "administrativa" que estaba contenida en el artículo 5o. de la ley 393 de 1997. Las razones de mi discrepancia son las siguientes :</p> <p>El artículo 5o. dice :</p> <p>"Artículo 5o. Autoridad Pública contra quien se dirige. La Acción de Cumplimiento se dirigirá contra la autoridad (administrativa) a la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo.</p> <p>"..."</p> <p>En el proyecto de la sentencia sometido a la consideración de la Sala Plena, se proponía declarar executable la expresión "autoridad administrativa", siempre y cuando se entendiera que la acción de cumplimiento podía dirigirse contra cualquier autoridad, a quien correspondiera el cumplimiento de una norma, con fuerza material de ley o acto administrativo.</p> <p>En mi concepto, bastaba esa condición para precisar este aspecto, pues en el propio encabezado del artículo 5o. se despejaba cualquier duda al respecto. En efecto, allí se dice : "Autoridad Pública contra quien se dirige", y es claro que autoridad pública es un concepto general que abarca a toda clase de autoridades, y no sólo a las administrativas.</p> <p>Además, con una interpretación sistemática de las normas que contiene la ley, y en el propio inciso del artículo 5o. citado, se despejaba cualquier equívoco al respecto. En este inciso se habla de las autoridades, de manera general. Es decir, en el sentido apropiado de la autoridad pública contra la que se dirige la acción de cumplimiento.</p> <p>Por estas razones, apoyé el proyecto de sentencia, en este aspecto,</p>
--	---

	<p>como fue puesto a consideración de la Sala, (que no fue aprobado por la mayoría), pues era suficiente el condicionamiento propuesto en la parte resolutive, que decía :</p> <p>"Cuarto. Declárase EXEQUIBLE la expresión "autoridad administrativa" contenida en el artículo 5o, bajo la condición de que se entienda que la acción de cumplimiento no sólo puede dirigirse contra la autoridad administrativa sino contra cualquier autoridad a quien corresponda el cumplimiento de una norma con fuerza materia de ley o acto administrativo."</p> <p>Comparando este proyecto de decisión condicionada, con la decisión contenida en la sentencia, se puede decir que aquél ofrecía mayor claridad en la interpretación de la clase de autoridad contra la que se dirige la acción de cumplimiento.</p> <p>Por otra parte, no se tuvo en cuenta jurisprudencia reiterada de la Corte, sobre el principio de conservación de la norma, en el sentido de que el juez constitucional, en lo posible, debe respetar la decisión del legislador. Y que sólo cuando resulta claramente inconstitucional la norma o alguna de sus expresiones, y no es posible darle un contenido acorde con la Constitución, ella debe salir del ordenamiento jurídico. En la parte motiva del proyecto de sentencia, se explicaban las razones para declarar la exequibilidad condicionada de la expresión, dando aplicación a este principio. Razones que, en general, sirvieron para demostrar la inexequibilidad de la misma.</p> <p>SI DR. CARLOS GAVIRIA DIAZ</p> <p>ACCION DE CUMPLIMIENTO-Procedencia respecto de normas que establezcan gastos (Salvamento de voto)</p> <p>Lo que se buscó en 1991 con la aprobación del artículo 87 de la Carta fue, justamente, contrarrestar el fenómeno de las numerosas normas expedidas en el país y consuetudinariamente incumplidas, incluyendo las que ordenaban gastos. Un Estado serio y consecuente opta por una de dos vías: cumple las leyes que decretan gastos, las cuales, en cuanto normas jurídicas, constituyen mandatos que deben tener efectividad en la vida real, o se abstiene de aprobar leyes de gastos si no hay recursos para efectuarlos. Pero lo que resulta de la norma enjuiciada, y del Fallo que nos ocupa, es exactamente lo contrario: que el Estado decreta gastos, sin límite ni medida -para acallar, por ejemplo, reclamos regionales, protestas populares, huelgas o críticas de la opinión pública-, y que se reserve el derecho de cumplir o no los compromisos contraídos. En síntesis, es lícito y constitucional el engaño a los gobernados, a quienes se ilusiona primero con leyes aprobatorias de gastos, se los</p>
--	--

	<p>desilusiona después con el incumplimiento de las mismas, y finalmente se los despoja del único mecanismo judicial del que los dotó el Constituyente para su defensa.</p> <p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, HERNANDO HERRERA VERGARA.</p> <p>ACCION DE CUMPLIMIENTO-Autoridad contra quien se dirige/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA (Salvamento de voto)</p> <p>Consideramos que la decisión que ha debido adoptarse, conforme a lo propuesto inicialmente en la Ponencia, era la de declarar exequible la expresión "autoridad administrativa" contenida en el art. 5 de la ley 393/97, bajo la condición de que se entendiera que la acción de cumplimiento no sólo puede dirigirse contra la autoridad administrativa, sino contra cualquier autoridad a quien corresponda el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo. Por lo tanto, estimamos que no era procedente declarar inexecutable la aludida expresión "administrativa". No ofrece duda a la Sala que, conforme a esta disposición, la acción de cumplimiento tiene como destinatario o sujeto pasivo procesal a la autoridad renuente, en general, en el cumplimiento de la ley o del acto administrativo. En tal virtud, la norma no excluye a ninguna autoridad de la acción, como tampoco califica a la autoridad o sujeto contra el cual se dirige la pretensión correspondiente. En este orden de ideas y con las precisiones anotadas, se concluye que una interpretación armónica de las disposiciones antes mencionadas conduce a que la acción de cumplimiento procede de modo general contra cualquier autoridad que incumpla la ley o un acto administrativo, sin que importe la rama del poder público a la cual pertenezca. Por lo tanto, se declarará exequible el fragmento acusado del artículo 5o, bajo la condición de que se entienda que la acción de cumplimiento no sólo puede dirigirse contra la autoridad administrativa sino contra cualquier autoridad a quien corresponda el cumplimiento de una norma con fuerza materia de ley o acto administrativo.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-575/98
Fecha de la sentencia	catorce (14) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Hugo Carmona Gonzalez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 3 de la Ley 393 de 1997
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-157 del 29 de abril de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Teniendo en cuenta que mediante Sentencia C-157 del 29 de abril de 1998 (Ms.Ps.: Drs. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara), la Corte Constitucional ya se pronunció sobre las disposiciones ahora acusadas, ha operado entonces el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y por tanto no hay lugar a nuevo estudio y menos a adoptar decisión de fondo sobre lo ya resuelto.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-158/98
Fecha de la sentencia	veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Fabián López y otros.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° (parcial), 3°(total), 4°, 5° y 9° (parciales) de la Ley 393 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE la expresión “los servidores públicos”, contenida en el literal a) del artículo 4° de la ley 397 de 1997.</p> <p>Segundo: En los términos de ese pronunciamiento, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-157 de 1998 en relación con la expresión “ante la autoridad judicial definida en esta ley”, contenida en el artículo 1° de la Ley 393 de 1997, el artículo 3° de la misma, la palabra “administrativa,” contenida en el artículo 5° y el párrafo del artículo 9° de la referida Ley.</p> <p>Primero.- Corregir el párrafo contenido en el numeral 2° del capítulo VI de las consideraciones de la Sentencia C-158 de 1998, de manera que en lo sucesivo se lea de la siguiente forma:</p> <p>“El referido fallo declaró inexecutable la expresión “administrativa” contenida en el artículo 5° de la Ley 393 de 1997, y executable el párrafo del artículo 9° de la misma” .</p> <p>Segundo.- Corregir el numeral primero de la parte resolutive de la mencionada Sentencia, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:</p> <p>PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “los servidores públicos”, contenida en el literal a) del artículo 4° de la Ley 393 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>Estiman los demandantes que las normas acusadas son violatorias de los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 40, 87, 95, 103, 113, 116, 121, 123 y 229 de la Constitución Política, así como su preámbulo.</p>

	<p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>Sin tomar en consideración la autoría de los cargos formulados contra las normas acusadas, estos pueden resumirse de la siguiente forma:</p> <p>Cargos contra los artículos 1° y 3° de la Ley 393 de 1997.</p> <p>El hecho de que los artículos 1° y 3° de la Ley 393 de 1997 designen a los jueces administrativos, en primera instancia, y a los tribunales administrativos, en segunda, como las autoridades judiciales competentes para conocer de las acciones de cumplimiento, restringe, según la demanda, la posibilidad real de los ciudadanos para hacer cumplir el ordenamiento jurídico, pues desconoce la intención del constituyente de delegar en cualquier autoridad judicial la competencia para resolverlas. Esta restricción implica un recorte del derecho de acceso a la justicia, una violación del derecho a la igualdad y una limitante al Estado Social de Derecho. Para los demandantes, el legislador ha desconocido el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente al reducir la competencia de la acción de cumplimiento a la jurisdicción administrativa.</p> <p>2.2. Cargos contra el artículo 4°</p> <p>Al decir de los demandantes, resulta contradictorio que, mientras el artículo 87 de la Constitución Política concibe la acción de cumplimiento como un mecanismo jurisdiccional diseñado para la protección de los particulares frente a las omisiones de los servidores públicos, a estos se los designe, en el artículo 4° de la Ley 393, como titulares de la misma. En esa medida, el artículo demandado es violatorio del artículo 87 superior.</p> <p>Cargos contra el artículo 5°</p> <p>La objeción que los demandantes formulan radica en que esta norma restringió los alcances del artículo 87 de la Constitución Política al hacer viable la acción de cumplimiento únicamente frente a autoridades administrativas, dejando por fuera a las judiciales y legislativas. Como al cumplimiento de las normas no puede sustraerse ningún funcionario del Estado, la Ley no puede restringir la procedibilidad de la acción de cumplimiento sólo frente a los funcionarios administrativos.</p> <p>2.4 Cargos contra el párrafo del artículo 9°</p> <p>Para los demandantes, la norma legal estableció una restricción inconstitucional al impedir el ejercicio de la acción de cumplimiento para solicitar la aplicación de normas que establezcan gastos. Los impugnantes solicitan que en el caso del artículo 9°, se aplique el</p>
--	--



	antecedente jurisprudencial sentado por la Sentencia C-358 de 1994, según la cual, el legislador no puede recortar ni limitar lo que la Constitución consagró sin restricciones.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. CARLOS GAVIRIA DIAZ, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.</p> <p>Con nuestro acostumbrado respeto, disentimos de la presente decisión por las razones señaladas en nuestro salvamento a la sentencia C-157 de 1998. En efecto, consideramos que la Corte, al no condicionar el alcance de los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 393 de 1997, en el sentido de que la acción de cumplimiento puede también ser utilizada para hacer efectivos los mandatos constitucionales, en la práctica está restringiendo la eficacia de este mecanismo de protección judicial, ya que de esa manera se está admitiendo que éste no se puede invocar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales, lo cual desconoce la vocación normativa de la Carta (CP art. 4). Como lo señalamos en el mencionado salvamento, si las personas tienen un derecho a que la Constitución se cumpla efectivamente, pues ella es la norma de normas de nuestro ordenamiento. Sin embargo, con la presente ley, tenemos la paradoja de que la norma superior -la Constitución- carece de un mecanismo judicial para su realización mientras que disposiciones de menor jerarquía, como las leyes y los actos administrativos, sí son susceptibles de ser realizadas gracias a la acción de cumplimiento. Y lo más paradójico es que la Corte Constitucional, que es la guardiana de la integridad y supremacía de la Carta (CP. Art. 241), haya permitido esa especie de discriminación en contra del cumplimiento de la propia Constitución.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-155/98
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Claudia Blum de Barberi y otros
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 397 de 1997 (total, por vicios de forma) y contra los artículos 33 y 34.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Decision	<p>Primero : Declarar EXEQUIBLE la Ley 397 de 1997, en cuanto a la forma de su expedición y únicamente en relación con los cargos considerados en la presente Sentencia.</p> <p>Segundo : Declarar EXEQUIBLE artículo 33 de la Ley 397 de 1997, en el entendido de que los derechos patrimoniales de autor se pueden ceder o enajenar libremente, siempre y cuando la cesión o enajenación no afecte el derecho irrenunciable a la seguridad social de sus titulares.</p> <p>Tercero : Declarar INEXEQUIBLE la expresión “irrenunciable” contenida el artículo 34 de la Ley 397 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>La demanda D-1797 considera que en el procedimiento de aprobación de la ley la referencia se vulneraron los artículos 1°, 2°, 151, 157 y 241, numeral 4° de la Constitución Política. Por su parte, las demandas radicadas con los números D-1809, D-1813 y D-1818, estiman que los artículos 33 y 34 de la Ley 397 de 1997, son violatorios de los artículos 4°, 9°, 13, 16, 20, 27, 58, 61, 67, 70, 93 y 227 de la Carta.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>2.1 Cargos por vicios de forma en la expedición de la Ley 397 de 1997</p> <p>Los actores de la demanda D-1797 estiman que con las irregularidades cometidas en el trámite de discusión y aprobación de la ley de la referencia, se vulneraron preceptos de la</p>

	<p>Constitución Política, de la ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), y los principios democráticos que orientan el proceso legislativo en Colombia.</p> <p>En primer lugar, señalan los demandantes, la Mesa directiva del Senado de la República, a pesar de la aprobación de la solicitud que hiciera el h. senador Tito Edmundo Rueda Guarín para que los artículos de la ley fueran votados uno por uno, adoptó el procedimiento de votación en bloque y por “pupitrazo”, vulnerando así los preceptos pertinentes del Reglamento del Congreso que buscan garantizar la amplitud de los debates.</p> <p>En segundo lugar, los demandantes señalan que en el trámite del debate se distorsionó el orden de inscripción para las intervenciones, pues se le concedió el uso de la palabra, bajo la modalidad de interpelación, a ciertos grupos de congresistas que patrocinaban la iniciativa, en contravención de lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento del Congreso según el cual, las interpelaciones sólo podrán concederse para formular preguntas o solicitar aclaraciones.</p> <p>Adicionalmente, acusan a la Mesa directiva del Senado de la República de haber ordenado la discusión y votación de una proposición principal antes de la que el h. senador Tito Edmundo Rueda Guarín propusiera como sustitutiva, violando flagrantemente el artículo 114-2 del Reglamento del Congreso, que dispone la votación de las proposiciones sustitutivas antes que las principales.</p> <p>Por otra parte, señalan que la Mesa directiva “en sociedad” con el ponente del proyecto, dispuso lo necesario para acallar la voz de los grupos que se encontraban en desacuerdo con el articulado debatido, tal como se demuestra en la transcripción de las discusiones que se adjuntan con el escrito demandatorio.</p> <p>El artículo 62 de la ley demandada, dicen, fue aprobado sin discusión ni debate, pues así lo ordenó el presidente del Senado de la República al negarle el uso de la palabra a los congresistas que se inscribieron para participar en el mismo. Adicionalmente, se descartó una solicitud del h. senador Luis Guillermo Giraldo Hurtado para que no se cerrara el debate del proyecto como consecuencia de una proposición de “suficiente ilustración”, pues, en concepto suyo, el articulado no había sido discutido lo necesario.</p> <p>2.2. Cargos por vicios de fondo contra los artículos 33 y 34 de la Ley 397 de 1997.</p> <p>Los demandantes en los procesos D-1809, D-1813 y D-1818, consideran que los artículos 33 y 34 de la ley de la referencia son</p>
--	---

	<p>contrarios a los preceptos constitucionales, arraigados en las concepciones más tradicionales sobre la propiedad intelectual, y a los acuerdos internacionales suscritos por Colombia dirigidos a proteger, promover y garantizar los derechos patrimoniales derivados de las creaciones del intelecto, pues impiden que los titulares de los derechos de autor enajenen los derechos patrimoniales que se derivan de aquellos. Los impugnantes consideran que las normas de derecho internacional, incorporadas a la legislación doméstica y dotadas de fuerza vinculante, como son la Convención de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, así como las Convenciones de Montevideo, de México, de Río de Janeiro, de Buenos Aires, de Washigton, de Ginebra, y de Roma, entre otras, relativas a la protección de los derechos de autor y conexos, proporcionan suficientes elementos de juicio para concluir que los derechos patrimoniales inherentes a las creaciones de la inteligencia pueden ser enajenados por su titular como manifestación directa del ejercicio del derecho de propiedad.</p> <p>El Acuerdo de Cartagena, por su parte, destina una sección específica a los derechos de autor y sus conexos, en la cual se reconoce expresamente que los derechos patrimoniales son una dimensión de los derechos de autor, sobre los cuales el titular tiene plena capacidad de disposición.</p> <p>Según la demanda, el impedimento incluido en las normas acusadas recorta la autonomía de la voluntad de los individuos dedicados a la creación, quienes ya no pueden hacer disposición legítima de sus obras, y les cercena la capacidad laboral, en la medida en que les impide subsistir exclusivamente de su facultad creadora.</p> <p>Por demás, las normas acusadas atentan contra el derecho a la igualdad, porque dan un trato discriminatorio a las creaciones artísticas de actores, dramaturgos, directores, libretistas y guionistas, frente a las de otros artistas, como los músicos, bailarines e intérpretes, quienes no están cobijados por la prohibición de ceder y renunciar a sus derechos.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO DERECHOS DE AUTOR-Son irrenunciables (Salvamento de voto)</p> <p>Mediante el carácter irrenunciable de los derechos de actores, dramaturgos, directores, libretistas y guionistas a participar en las regalías, por reproducción de las obras en que actúan, no se introdujo, como lo entiende la sentencia, una regla contraria al artículo 21 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. Al contrario de lo deducido por la Corte, se tiene una norma</p>

	<p>internacional protectora de los derechos de autor ante las legislaciones internas, que si bien están facultadas para introducir limitaciones y excepciones al respecto, deben circunscribirse a establecer aquellas que "no atenten contra la normal explotación de las obras ni causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos" (he subrayado). La explotación "normal" de la obra -que corresponde al autor- no puede consistir en la explotación del autor, en términos económicos por parte del empresario. La disposición legal declarada parcialmente inexecutable era una norma tuitiva de tales legítimos derechos y no hacía otra cosa que evitar que las empresas productoras y exhibidoras de obras artísticas, en sus variadas formas, constriñeran a los actores, directores, dramaturgos, guionistas y libretistas a renunciar a sus derechos a las regalías por futuras exhibiciones, proyecciones, retransmisiones o presentaciones de las piezas artísticas en las cuales intervinieron, como condición previa indispensable para contratarlos.</p> <p>DERECHOS IRRENUNCIABLES-Naturaleza (Salvamento de voto)</p> <p>Hay en la Constitución derechos irrenunciables, como puede verse en su artículo 53, y ello, en vez de entenderse como limitación a la voluntad de la persona protegida, constituye una expresión de la función estatal de defenderla contra los actos que impliquen ataque a sus bienes y derechos (art. 2 C.P.), en especial cuando se trata de relaciones jurídicas en las que una de las partes domina a la otra por factores ajenos al pacto mismo, lo que hace necesaria la actividad suplementaria del Estado para generar un mínimo equilibrio, que es propio del orden justo proclamado por la Carta Política.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-226/98
Fecha de la sentencia	mayo veinte (20) mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 404 de 1997 "Por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecuci3n de sentencias penales entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Costa Rica", suscrito en Santaf3 de Bogot3 D.C. el 15 de marzo de 1996.
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE el tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecuci3n de sentencias penales entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Costa Rica, suscrito en Santaf3 de Bogot3, D.C., el 15 de marzo de 1996, y la ley 404 del 16 de septiembre de 1997 que lo aprueba.</p> <p>Segundo. Comuníquese esta decisi3n al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretar3a General de la Presidencia de la Rep3blica, y envíesele copia aut3ntica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del art3culo 241 de la C.P.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-268/98
Fecha de la sentencia	junio tres (3) de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	
Demandado	Revisi3n de la Ley 405 de 1997 "Por medio de la cual se aprueba la 'Enmienda al p1rrafo 7 del art1culo 17 y al p1rrafo 5 del art1culo 18 de la Convenci3n sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes' adoptado en Nueva York el 8 de septiembre de 1992 ".
Conoci3 en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES "La Enmienda al p1rrafo 7 del art1culo 17 y al p1rrafo 5 del art1culo 18 de la 'Convenci3n contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes', adoptada en Nueva York el 8 de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992)" y la Ley 405 de 1997 aprobatoria de la misma.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur1dicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-400/98
Fecha de la sentencia	diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la "Convenci3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales", hecha en Viena el 21 de marzo de 1986" y de la Ley No 406 del 24 de octubre de 1997 por medio de la cual se aprueba dicha Convenci3n.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE la Ley No 406 del 24 de octubre de 1997, "por medio de la cual se aprueba la Convenci3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales", hecha en Viena el 21 de marzo de 1986".</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Convenci3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, siempre y cuando el Gobierno de Colombia formule, al depositar el instrumento de ratificaci3n, las siguientes reservas y la siguiente declaraci3n interpretativa:</p> <p>a) En relaci3n con los artículos 11 a 17, y en consonancia con el artículo 46, Colombia precisa que el representante plenipotenciario de Colombia sólo podrá manifestar el consentimiento del Estado colombiano una vez que el tratado haya sido aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional.</p> <p>b) En relaci3n con el artículo 25, Colombia precisa que sólo son susceptibles de aplicaci3n provisional por Colombia, sin previa aprobaci3n por el Congreso y revisi3n por la Corte Constitucional, los tratados de naturaleza econ3mica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan.</p> <p>c) En relaci3n con el artículo 27-1, Colombia precisa que acepta que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci3n del incumplimiento del tratado, en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados.</p>
Conoci3 en segunda	NO APLICA



instancia	
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. VLADIMIRO NARANJO MESA</p> <p>COMPETENCIA CONSTITUCIONAL-Debe determinarse expresa y exclusivamente (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Así las cosas, mal puede sostenerse, como lo hace Sentencia de la cual me aparto, que la Constitución Política de 1991 admite, al margen del control previo, un control posterior de los tratados y sus leyes aprobatorias. Obsérvese que lo que el numeral 10° del artículo 241 consagra es una competencia especial de la Corte, por la vía de la revisión automática, para ejercer el control previo de constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias en los estrictos y precisos términos de ese artículo. Esta competencia, por ser exclusiva y encontrarse claramente definida en la norma, excluye aquella general que pudiera originarse en el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.</p> <p>PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA-No puede ser desconocido unilateralmente (Salvamento parcial de voto)</p> <p>El principio Pacta Sunt Servanda, que propende por la seguridad y estabilidad jurídica dentro del orden internacional, no puede ser desconocido unilateralmente por un Estado, bajo ningún pretexto. Por ello, pretender atenuarlo acudiendo como lo hace la Sentencia, a la llamada teoría "monista moderada" o "de la integración dinámica del derecho", no sólo va en contravía de las disposiciones constitucionales y supranacionales que regulan la materia, sino que además le resta validez, y de manera grave, a los compromisos adquiridos internacionalmente por Colombia, los cuales, en adelante, podrían ser desconocidos o modificados por vía judicial, generando como consecuencia la responsabilidad del Estado y su desprestigio ante la comunidad internacional.</p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD TRATADO INTERNACIONAL-Convenios perfeccionados antes de la vigencia de la C.P. son intangibles (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Los tratados que se encuentran perfeccionados por Colombia son intangibles e incontrovertibles. De ahí que no sea posible, en el evento de existir un cambio de normatividad interna que haga</p>

	<p>devenir en inconstitucional un convenio previamente definido, acudir al juicio de constitucionalidad para obtener su desconocimiento, sino a los mecanismos idóneos reconocidos por la propia Constitución y el derecho internacional público para proceder a su inaplicación. Así entonces, no le corresponde a la Corte, so pretexto de procurar la integridad y supremacía de la Constitución y la prevalencia de la misma, arrogarse la competencia para revisar los tratados perfeccionados con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, pues es claro que la finalidad perseguida por el Constituyente fue establecer un control automático y previo a la ratificación del instrumento, precisamente, en aras de respetar los principios de derecho internacional que gobiernan las relaciones entre Estados y organismos internacionales.</p> <p>SI DR. HERNANDO HERRERA VERGARA.</p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL- Debe ejercerse antes de su perfeccionamiento/PREVALENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO INTERNO- Fundamento constitucional (Salvamento parcial de voto)</p> <p>La Corte solamente es competente para ejercer el control de constitucionalidad con respecto a los tratados que dentro de la vigencia de la Constitución de 1991 no habían quedado perfeccionados, con la respectiva ratificación, de manera que aquellos que fueron sometidos con anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991, al respectivo canje de notas, carecen de dicho control de constitucionalidad. Si bien es cierto que el artículo 4o. de la Constitución Política de Colombia consagra la primacía constitucional, según la cual la Constitución es norma de normas, y de que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, no debe olvidarse que el artículo 9o. de la misma Carta señala que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, y que además según el artículo 93 ibídem, los derechos y deberes consagrados en el ordenamiento superior se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, lo que pone de presente la prevalencia de los tratados internacionales sobre las disposiciones del derecho interno, las cuales no pueden invocarse como justificación para el incumplimiento de un tratado, razón por la cual no ha debido determinarse lo contrario a la jurisprudencia de la Corporación en la parte motiva de la sentencia, ni en la resolutive, según la reserva consignada en el numeral c) del artículo 2o. de la misma sentencia.</p>
--	--

	<p>SI, DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.</p> <p>CONTROL CONSTITUCIONAL DE TRATADO INTERNACIONAL-Debe ejercerse antes de su perfeccionamiento/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Constitución Política adopta tesis intermedia (Salvamento de voto)</p> <p>Ese sistema de control sobre los tratados públicos y las leyes que los aprueban se introdujo, como es bien sabido, con el propósito de conciliar el ordenamiento jurídico interno, basado en la Constitución, y el internacional, acogiendo la denominada tesis intermedia que en su momento adoptara la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 6 de junio de 1985. Al tenor de esa doctrina, puede ejercerse la función de control constitucional sobre las leyes aprobatorias de tratados antes de que ellos sean perfeccionados con arreglo a las normas y principios del Derecho Internacional; pero no es posible cotejar su contenido con la Constitución después de tal perfeccionamiento, pues una eventual declaración de inexequibilidad total o parcial de las convenciones objeto de examen implicaría conflicto inevitable entre los dos órdenes normativos, con serio compromiso para la credibilidad internacional del Estado colombiano; y, por contera, colocaría al Presidente de la República en la disyuntiva de acatar lo resuelto por el organismo de control judicial, incumpliendo el tratado, o de ejecutar las cláusulas de éste, desobedeciendo una decisión jurisdiccional en el ámbito interno.</p> <p>TRATADO INTERNACIONAL-Su perfeccionamiento se supedita a la decisión de la Corte/COMPETENCIA DE LA CORTE-Límite temporal en cuanto a tratados internacionales (Salvamento de voto)</p> <p>La Carta supedita a la decisión de la Corte, en lo relativo a la constitucionalidad del tratado y de la ley que lo aprueba, el ejercicio de la función presidencial de efectuar el canje de notas o de proceder al depósito de instrumentos, en cuanto modalidades de asumir, más allá del ámbito interno, en el internacional, las obligaciones y compromisos propios de lo pactado. Precisamente por esa sujeción de los actos de perfeccionamiento del tratado a la sentencia de control de constitucionalidad, resulta evidente que el momento del mismo, en cuanto a la competencia de la Corte se refiere, es necesariamente anterior a aquel en que el tratado adquiere intangibilidad por razón de los actos jurídicos de su perfeccionamiento.</p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Competencia de la Corte (Salvamento de voto)</p> <p>Siendo esta norma especial, vale decir, plasmada en la Constitución</p>
--	--

	<p>para el caso particular y peculiar del control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, en los estrictos y precisos términos del artículo 241, no tiene fundamento alguno deducir la competencia de la Corte, sobre leyes aprobatorias de tratados que se perfeccionaron antes del 7 de julio de 1991, del inciso 4 Ibídem, que contempla en general la acción ciudadana contra las leyes.</p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL- Todos los tratados perfeccionados antes de la vigencia de la C.P. son intangibles (Salvamento de voto)</p> <p>Tampoco cabe distinguir, en el campo de esos tratados ya perfeccionados, los que se refieran a límites territoriales de los que toquen con otras materias, como lo sugiere la Sentencia de la cual discrepo. En mi criterio, todos los tratados que habían sido perfeccionados antes de entrar en vigor la Carta de 1991 deben entenderse intangibles, y por tanto, sin detrimento de la aplicación de figuras de Derecho Internacional como la denuncia (siempre que se cumplan los requisitos correspondientes) -que no compete a esta Corte-, ya no pueden ser objeto de control de constitucionalidad, al menos mientras siga vigente el sistema de control previo que consagró el numeral 10 del artículo 241 de la Carta.</p> <p>CONVENCION DE VIENA II-Exequibilidad pura y simple (Salvamento de voto)</p> <p>Creo que tales preceptos han debido ser declarados exequibles pura y simplemente, sin condicionamientos, y sin fundar la exequibilidad en tesis contrarias a los postulados que los inspiran, entre otras razones con base en el artículo 9 de la Carta, a cuyo tenor las relaciones exteriores del Estado se fundamentan, entre otros, en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-316/98
Fecha de la sentencia	treinta (30) días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 408 del 28 de octubre de 1997, por medio de la cual se aprueba "El Convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional, O.H.I.", suscrito en Mónaco el 3 de mayo de 1967.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Decláranse EXEQUIBLES la Ley 408 del 28 de octubre de 1997, aprobatoria del Convenio relativo a la "Organización Hidrográfica Internacional, OHI", suscrito en Mónaco el 3 de mayo de 1967, y el Convenio al cual ella se refiere.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-351/98
Fecha de la sentencia	julio quince (15) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 409 del 28 de octubre de 1997, "Por medio de la cual se aprueba la Convenci3n Interamericana para prevenir y sancionar la tortura", suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	<p>Primero. DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 409 del 28 de octubre de 1997, "Por medio de la cual se aprueba la Convenci3n Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita en la ciudad de Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985", y la Convenci3n misma.</p> <p>Segundo. COMUNÍQUESE esta decisi3n al Gobierno nacional por intermedio de la secretarí General de la Presidencia de la Repúbrica, y envíesele copia aut3ntica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídic	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 409 del 28 de octubre de 1997, "Por medio de la cual se aprueba la Convenci3n Interamericana para prevenir y sancionar la tortura", suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-376/98
Fecha de la sentencia	veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del “Convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover la aplicaci3n de las normas internacionales del trabajo”, adoptado en la 61ª reuni3n de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976, y de la Ley N° 410 de Noviembre 4º de 1997, por medio de la cual se aprueba dicho convenio.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover la aplicaci3n de las normas internacionales del trabajo”, adoptado en la 61ª reuni3n de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley N° 410 de Noviembre 4º de 1997, por medio de la cual se aprueba el “Convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover la aplicaci3n de las normas internacionales del trabajo”, adoptado en la 61ª reuni3n de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídic3s	Revisi3n constitucional del “Convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover la aplicaci3n de las normas internacionales del trabajo”, adoptado en la 61ª reuni3n de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976, y de la Ley N° 410 de Noviembre 4º de 1997, por medio de la cual se aprueba dicho convenio.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA

Resumen aclarações	de las	NO APLICA
-----------------------	--------	-----------



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-377/98
Fecha de la sentencia	veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del “Convenio 151 sobre la protecci3n del derecho de sindicaci3n y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administraci3n p3blica”, adoptado en la 64ª reuni3n de la conferencia general de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978, y de la Ley aprobatoria N° 411 del 5º de noviembre de 1997, por medio de la cual se aprueba dicho convenio.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Convenio 151 sobre la protecci3n del derecho de sindicaci3n y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administraci3n p3blica”, adoptado en la 64ª reuni3n de la conferencia general de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978, en los t3rminos expuestos por esta sentencia.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 411 del 5º de noviembre de 1997, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio 151 sobre la protecci3n del derecho de sindicaci3n y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administraci3n p3blica”, adoptado en la 64ª reuni3n de la conferencia general de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978”, de conformidad con lo seÑalado en la presente sentencia.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional del “Convenio 151 sobre la protecci3n del derecho de sindicaci3n y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administraci3n p3blica”, adoptado en la 64ª reuni3n de la conferencia general de la Organizaci3n Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978, y de la Ley aprobatoria N° 411 del 5º de noviembre de 1997, por medio de la cual se aprueba dicho convenio.
Decision de la Corte	NO APLICA

Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-397/98
Fecha de la sentencia	agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 412 del 6 de Noviembre de 1997, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra la corrupción”, suscrita en la ciudad de Caracas el 29 de marzo de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	<p>Primero. DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 412 del 6 de noviembre de 1997, “Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996” y la Convención misma.</p> <p>Segundo. COMUNÍQUESE esta decisión al Gobierno nacional por intermedio de la secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de constitucionalidad de la Ley 412 del 6 de Noviembre de 1997, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra la corrupción”, suscrita en la ciudad de Caracas el 29 de marzo de 1996.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-053/98
Fecha de la sentencia	marzo cuatro (4) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Marta Nora Palacio Escobar y Luis Carlos Alvarez Machado.
Demandado	Acci3n p3blica de inconstitucionalidad contra el art3culo 13 de la ley 331 de 1996, "Por medio de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997."
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del art3culo 13 de la Ley 331 de 1996, "Por medio de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997".</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLES las siguientes expresiones del inciso segundo de la norma impugnada, "Las autoridades descentralizadas acordar3n el aumento salarial de los trabajadores oficiales dentro de los l3mites de la ley 4a. de 1992." ; las expresiones "...que no tengan convenci3n colectiva, ... los contratos, los fijados por el gobierno nacional y por las disposiciones legales; aquellos que tengan convenci3n colectiva se sujetar3n a lo dispuesto en el art3culo 9...", se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Tercero. Declarar la unidad normativa del art3culo 13 de la Ley 413 de 1997, con el art3culo 13 de la Ley 331 de 1996, en los t3rminos de esta sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.</p> <p>Cuarto. Esta sentencia rige a partir de la fecha de su notificaci3n.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	<p>A. Normas constitucionales que se consideran infringidas. Los demandantes consideran que la disposici3n impugnada viola los art3culos 69, 150-19, 158, 298 y 311 de la C.P.</p> <p>B. Los fundamentos de la demanda</p> <p>1. El primer cargo que presentan los actores contra el art3culo 13 de la ley 331 de 1996, se3ala que su contenido viola el art3culo 158 de la Constituci3n, por cuanto dicho precepto regula un asunto que es totalmente extra3o al tema de la ley que lo contiene, la ley anual de presupuesto, como es el que tiene que ver con los niveles salariales</p>

	<p>y las prestaciones sociales de algunos empleados públicos, lo que implica que el legislador incurrió en la transgresión del principio de unidad de materia.</p> <p>La ley anual de presupuesto y ley de apropiaciones, sostienen los demandantes, le corresponde elaborarla al Congreso en desarrollo de la cláusula general legislativa contenida en el artículo 150 de la Constitución, no obstante, dicha Corporación en ese caso particular debe producir una norma que no es otra cosa que una relación de ingresos y gastos del Estado para un período de tiempo determinado, pues en esa materia su competencia está delimitada específicamente en ese sentido en el artículo 346 superior.</p> <p>Para los demandantes, lo referente a la regulación de salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos es un tema que si bien es competencia del legislador, el cual está habilitado para expedir normas marco sobre esa materia con fundamento en el numeral 19 del artículo 150 superior, no puede éste desarrollarlo en la ley anual de presupuesto, cuyo contenido está claramente predeterminado en la Constitución, pues ello implicaría violar el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Carta Política.</p> <p>2. El segundo cargo que presentan los demandantes contra la norma impugnada se puede sintetizar de la siguiente manera: la disposición atacada impone una restricción a las entidades descentralizadas, que incluye a los establecimientos públicos, cuya creación, supresión, fusión, señalamiento de objetivos y estructura le corresponde al legislador de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Carta. Es claro que tales facultades no contemplan lo relativo al régimen salarial y prestacional de sus servidores públicos, materia en la cual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, la competencia del legislador se limita a la formulación de una “ley marco” a través de la cual se fijen los objetivos y criterios a los que debe someterse el ejecutivo. En consecuencia, el Congreso en el caso que se analiza excedió sus facultades en esa materia, pues reguló aspectos respecto de los cuales tan solo podía establecer pautas generales.</p> <p>3. En tercer lugar, en concepto de los actores la norma impugnada también viola las disposiciones de los artículos 298 y 311 de la C.P., normas que les atribuyen autonomía a los departamentos y a los municipios en lo que tiene que ver con la determinación de la estructura de la administración local y con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales, correspondiéndole a sus autoridades adoptar las medidas pertinentes en relación con dichos asuntos, específicamente a través de sus respectivos presupuestos anuales. En consecuencia, señalan, el legislador se excedió en sus funciones cuando a través de la ley anual de presupuesto reguló un asunto cuya competencia el Constituyente radicó expresamente en las</p>
--	---

	<p>autoridades del orden territorial.</p> <p>4. Por último, consideran los demandantes que la disposición objeto de impugnación contraría también el artículo 69 de la Constitución, que consagra la autonomía universitaria, pues el legislador, al imponer la restricción contenida en la disposición demandada a los entes universitarios, les impide a éstos ejercerla en materia administrativa y presupuestal, inmiscuyéndose indebidamente en la conformación de sus presupuestos, materia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 30 de 1992 le corresponde desarrollar a los máximos órganos de gobierno de dichos entes, sin interferencias por parte de los poderes públicos.</p> <p>“...el Congreso -anotan los demandantes- no tiene competencia para introducir prohibiciones a los “entes universitarios” sobre todo los del Estado (sic)<sup>3</sup>, en materias tales como sus presupuestos o sus políticas salariales, mucho menos a través de la ley que fija el presupuesto anual, porque tales entes no son equiparables ni asimilables a establecimientos públicos, no están sometidos al régimen administrativo general del Estado y, sobre todo, no están sometidos por tanto, a ningún control de tutela, incluyendo el nivel departamental, para el caso.”</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, CARLOS GAVIRIA DIAZ ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA/LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO-Ejecución (Aclaración de voto)</p> <p>Creo, con los demandantes, que la disposición impugnada presenta un problema de unidad de materia, y que eso ha debido conducir a una inexequibilidad total de la misma. No me parece satisfactoria ni ajustada a la Carta la argumentación con base en la cual se desecha el mencionado cargo: que lo que se busca es "una adecuada ejecución del presupuesto, al garantizar coherencia y coincidencia entre los gastos programados por el ejecutivo y autorizados por el legislador, impidiendo que instancias distintas modifiquen las asignaciones definidas..."; o, en otros términos, "...una medida de disciplina fiscal, que contribuye eficazmente a que el presupuesto se ejecute fluida y adecuadamente". Todo eso corresponde justamente a la Ley orgánica de presupuesto y de ninguna manera a la anual, que debe aprobarse, modificarse y ejecutarse con arreglo a aquélla. No se pueden confundir las normas orgánicas de presupuesto con los componentes de la ley anual. Y menos</p>

	<p>pretender que las leyes anuales de presupuesto rijan indefinidamente como las ordinarias.</p> <p>LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO-Regulación respecto a entidad pública (Aclaración de voto)</p> <p>En la Ley Orgánica de Presupuesto sí se podían establecer reglas aplicables a las universidades públicas y al manejo de su presupuesto, sin que ello implicara, como entonces lo entendió la Corte, un desconocimiento de la autonomía universitaria. Lo contradictorio reside en que la Corte haya excluido a las universidades públicas del régimen contemplado en la Ley Orgánica para los establecimientos públicos, supeditando a esa exclusión la constitucionalidad de la norma entonces demandada, y ahora acepte que una norma de jerarquía inferior y de vigencia precaria, al establecer reglas generales propias de la Ley Orgánica, introduzca limitaciones y prohibiciones a esos mismos entes educativos, sin que ahora se estime que está lesionada la autonomía universitaria. Claro que no lo está puesto que se trata de evitar gastos exagerados que afecten un presupuesto público que debe obedecer a los indicados criterios de austeridad y razonabilidad, y el señalamiento de las pertinentes reglas, cuando se hace como la Constitución lo ordena, no representa indebida interferencia del poder público en el manejo financiero del ente educativo. Este, en el caso de las universidades públicas, tiene necesariamente un carácter relativo, limitado por las normas presupuestales (de Ley Orgánica) y por el propio presupuesto desde el punto de vista cuantitativo, y no puede entenderse ni aplicarse en términos equivalentes a los que rigen para los planteles superiores de naturaleza privada.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-562/98
Fecha de la sentencia	siete (7) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998),
Demandante	Eduber Rafael Gutiérrez Torres
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 44, 50, 52, 53, 55 y 59 de la Ley 413 de 1997 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaaciones para la vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Decision	<p>Primero.- Declaránse EXEQUIBLES los artículos 44, 50 y 58 de la Ley 413 de 1997, “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaaciones para la vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 1998”.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, bajo el entendimiento de que dicha norma sólo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998, y que, las sustituciones de activos autorizadas en dicha norma, quedan sujetas al control fiscal de la Contraloría General de la República, y a su anotación contable por la Contaduría General de la Nación.</p> <p>Tercero.- Decláranse INEXEQUIBLES el artículo 52, el artículo 53 y el parágrafo del artículo 55 de la Ley 413 de 1997 “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaaciones para la vigencia fiscal de 1º de enero al 31 de diciembre de 1998”.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que las normas cuya declaratoria de inexecutable solicita, son violatorias de los artículos 6, 13, 113, 151, 287, 345 y 346 de la Carta Política.</p> <p>En su orden, se sintetizan a continuación las razones en las cuales el actor funda la supuesta inexecutable de las normas demandadas.</p> <p>1. Artículo 44 de la Ley 413 de 1997.</p> <p>A juicio del demandante, el artículo 44 de la Ley 413 de 1997, resulta violatorio del artículo 151 de la Constitución Nacional, por</p>



	<p>cuanto con la norma acusada se vulneran los principios de universalidad, programación y legalidad del gasto público, en tanto autorizan que por vía general y sin que discriminen los montos respectivos se realicen gastos de inversión en proyectos viales de la red secundaria cuyo ejecutor sería el Instituto Nacional de Vías.</p> <p>El artículo 44 de la Ley 413 de 1997, de esta manera atribuyó nuevas funciones a cargo del Instituto Nacional de Vías, asignándole la atención de la red vial secundaria del País, sin que ello pudiera hacerse por el legislador al expedir la ley anual de presupuesto, pues el objeto para el cual fue creado el Instituto mencionado es el de construir y mantener la red vial primaria.</p> <p>Además, se quebranta también el artículo 346 de la Constitución, en cuanto en él se dispone que en la ley anual de presupuesto sólo pueden incorporarse partidas para el pago de créditos judicialmente reconocidos, o que tengan como fundamento leyes anteriores, o que sean necesarias para el funcionamiento de las ramas del estado, el servicio de la deuda o el cumplimiento del plan nacional de desarrollo.</p> <p>Finalmente, expresa el demandante que la norma contenida en el artículo 44 de la Ley 413 de 1997, es también contraria al artículo 158 de la Constitución Nacional, en razón de que no existe ninguna relación del artículo en cuestión con el objeto de la misma ley, cual es el de expedir el presupuesto de rentas y gastos para el año de 1998, lo que significa que se desconoció el principio de la unidad de materia en la expedición de la ley. (Folios 4 a 5 de la demanda)</p> <p>2. Artículo 50 de la Ley 413 de 1997.</p> <p>Según el demandante la citada disposición resulta contraria al ordenamiento constitucional, por cuanto no tuvo en cuenta que de acuerdo con los artículos 78 y 89 del Decreto-Ley 111 de 1996, norma orgánica del presupuesto nacional, en la ley anual de presupuesto, -que para el caso fue expedida en el mes de noviembre de 1997-, no era posible incluir “las reservas presupuestales y las reducciones que de ella se deduzcan”, por cuanto el monto de ellas solo puede conocerse, con exactitud, el 31 de diciembre de cada año. (Folios 5 a 7, de la demanda).</p> <p>Artículo 52 de la Ley 413 de 1997.</p> <p>Luego de transcribir el texto de la norma acusada, expresa el actor que el artículo 52 de la Ley 413 de 1997 quebranta el principio de legalidad del gasto establecido por el artículo 346 de la Constitución Política, en razón de que en éste último se prohíbe la inclusión de partidas en el presupuesto nacional que no se encuentren</p>
--	--

	<p>previamente autorizados por el legislador o que constituyan créditos judicialmente reconocidos. Por ello, -continúa el demandante-, la creación del Fondo de Seguridad del Congreso de la República no podía hacerse en la ley anual de presupuesto, y, por otra parte, en esta no puede excederse la anualidad respectiva, es decir, sus disposiciones no pueden estar destinadas a tener efectos permanentes, lo cual ocurre en este caso, sin que la ley de presupuesto pueda “crear órganos de la administración ni fondos sin personería jurídica”, pues “debe limitarse los montos de los gastos y rentas de los preexistentes” conforme a la ley.</p> <p>Por otra parte, la norma acusada resulta contraria a lo preceptuado por el artículo 18 del Decreto 111 de 1996, norma orgánica del presupuesto nacional, en la cual se dispuso que “las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas”. Por ello, se violó por el artículo 52 de la Ley 413 de 1997 la referida disposición del Estatuto Orgánico de Presupuesto, pues la creación del Fondo de Seguridad del Congreso de la República, como cuenta del presupuesto del mismo, “no se refiere a las funciones propias del órgano legislativo, sino a atribuciones de los organismos de seguridad del Estado”, lo que significa, que, además, se quebrantó el artículo 113, inciso tercero, de la Constitución, norma ésta que establece que “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas”.</p> <p>De la misma manera, el artículo 52 de la Ley 413 de 1997, resulta contrario al artículo 158 de la Carta Política, pues, en este último se ordena que todo proyecto de ley deba referirse a una misma materia y el texto de la norma impugnada es extraño al contenido mismo de la ley de presupuesto, pues no se refiere ni al cálculo de rentas y recursos de capital, ni a las apropiaciones presupuestales sino que, por su contenido se relaciona con una materia ajena por completo a la ley mencionada.</p> <p>Por último, -estima el impugnador-, el artículo 52 de la ley 413 de 1997 es violatorio del artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto como consecuencia de la expedición de la norma en mención se establecieron condiciones especiales de protección para quienes aspiran a ser reelegidos al Congreso de la República, las cuales no existen para los demás ciudadanos que figuren como candidatos a integrarlo. (Folios 7 a 9, cuaderno de la actuación).</p> <p>Artículo 53 de la Ley 413 de 1997.</p> <p>Según lo expresado por el demandante, el artículo acabado de mencionar quebrante el 287 de la Constitución Política, norma ésta que garantiza la autonomía de las entidades territoriales para la</p>
--	--

	<p>gestión de los asuntos que a ellas interesan, principio que se desconoce por el artículo 53 de la Ley 413 de 1997, según el cual los recursos de los fondos de cofinanciación asignados a proyectos de desarrollo de las localidades en la capital de la República podrán ser “cofinanciados con partidas de los fondos de desarrollo de las localidades respectivas”, en cuyo caso las “partidas de los fondos de cofinanciación se adicionan a los fondos de desarrollo locales”. Es decir, a juicio del recurrente la norma impugnada al disponer “la forma de distribuir esos recursos”, invadió “la competencia que corresponde a cada entidad territorial al momento de expedir sus presupuestos anuales”, lo que constituye una infracción al artículo 287 de la Constitución Nacional.</p> <p>Así mismo, se quebrantó también el artículo 104 del Decreto-Ley 111 de 1996, orgánico del presupuesto nacional, ya que las normas que “las normas de presupuesto del orden local deben expedirse de conformidad con las normas orgánicas que para tal fin se expidan”, atribución que entonces “corresponde al Concejo Distrital y no a las juntas administradoras locales, según se desprende del artículo 12 numeral 4º del Decreto Ley 1421 de 1993”. (Folios 9 a 10, cuaderno de la actuación).</p> <p>Artículo 55 de la Ley 413 de 1997.</p> <p>Luego de transcribir el texto de la norma mencionada y su párrafo, manifiesta el demandante que con ella se quebrantaron los artículos 158 y 346 de la Constitución Nacional.</p> <p>En cuanto hace referencia a la supuesta violación del artículo 158 de la Constitución Nacional, a juicio del impugnador el artículo 52 de la Ley 413 de 1997 lo infringe por cuanto al disponer que los proyectos específicos de desarrollo regional “serán viabilizados por los fondos de cofinanciación o las UDECOS y los recursos apropiados en la ley de presupuesto serán girados durante la vigencia del año fiscal a los fondos de cofinanciación”, así como al señalar que “para los recursos de destinación específica, la cofinanciación será del 55 al 10% por parte de las entidades territoriales” en los porcentajes allí indicados, ello no corresponde “a una orden legal previa”, lo que significa que la ley anual de presupuesto, en ningún caso puede “dictar normas administrativas para definir en la forma en que se gastan tales recursos, atribución que corresponde al Gobierno Nacional no al Congreso” con la expedición de dicha ley.</p> <p>Además, conforme al criterio del impugnador, la norma acusada es también violatoria del artículo 355 de la Carta Magna, como quiera que con ella, o con disposiciones similares expedidas por el Congreso, lo que en realidad se pretende es revivir “auxilios</p>
--	--

	<p>parlamentarios”, dándole vía libre a la inclusión “en el presupuesto nacional de proyectos regionales de inversión financiados con recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación, sin haber sido incluidos como prioritarios dentro de los planes de desarrollo territoriales y sin que se cumplan los requisitos que demanda dicho sistema”. (Folios 10 a 11, cuaderno de la actuación).</p> <p>Artículo 58 de la Ley 413 de 1997.</p> <p>Estima el demandante que el artículo acabado de mencionar, mediante el cual se autoriza a la Nación para asignar, durante la vigencia fiscal de 1998 “recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que trata el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993, es violatorio del artículo 151 de la Constitución Nacional, pues, pese a que el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional preceptúa que en la expedición del presupuesto anual regirán los principios de universalidad y programación integral (artículos 15 y 17), la ley 413 de 1997, en su artículo 58, autorizó “por vía general y sin que se encuentren discriminados en cuanto a sus montos, gastos para que sean efectuados por el Gobierno Nacional”, violando así el artículo 151 de la Constitución.</p> <p>Adicionalmente, se quebrantó también, al decir del impugnador el artículo 346 de la Carta Política, en cuanto en él se prescribe que solo pueden incorporarse al presupuesto nacional partidas que tengan por objeto gastos originados en créditos judicialmente reconocidos, leyes anteriores o propuestas del Gobierno para atender el funcionamiento de las ramas del Estado, servicio de la deuda o cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, principio éste de legalidad del gasto que con el artículo 58 de la Ley 413 de 1997 no se cumple, pues en él se autorizó “de manera general, al Gobierno Nacional” para realizar los gastos allí mencionados, “pero sin determinar sus montos”. (Folios 11 a 12, cuaderno de la actuación).</p> <p>Artículo 59 de la Ley 413 de 1997.</p> <p>Al decir del demandante, el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, en el cual se dispone que en desarrollo de los preceptos contenidos en los artículos 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley 255 de 1995, “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por obras necesarias para la adquisición terminación adecuación de los palacios de justicia sin operación presupuestal alguna”, resulta contrario al artículo 345 de la Constitución Nacional que establece, como uno de los principios básicos del presupuesto el de su universalidad, es decir que,</p>
--	--

	<p>conforme a tal principio en el presupuesto han de incorporarse todas las rentas por percibir y todos los gastos que se autoriza realizar durante la vigencia fiscal, con lo cual se permite que el control político y fiscal sobre el presupuesto operen a cabalidad.</p> <p>La norma cuya inexequibilidad se demanda en este caso, creo una “excepción para una especie de operaciones de carácter financiero por parte del Estado que implica, de manera efectiva, el pago de gastos en su contra, sin que ella deba hacerse a través de una operación presupuestal”. Además, “la norma acusada no corresponde al supuesto del artículo 12 de la Ley 255 de 1995, que permitía la celebración de contratos de permuta, en la medida que consideraba tales operaciones como presupuestalmente neutras”, ya que, de acuerdo con la autorización que se confiere al Consejo Superior de la Judicatura por el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, se permite la dación en pago por parte del Consejo Superior de la Judicatura, con bienes de propiedad de la Nación, en relación con obras destinadas a la adquisición, adecuación o terminación de palacios de justicia.</p> <p>Por último, manifiesta el demandante que el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, quebranta también el artículo 6º de la Constitución Política, que prohíbe a las autoridades la extralimitación en el ejercicio de sus funciones.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.</p> <p>LEY ANUAL DE PRESUPUESTO-Tiene objeto único y exclusivo/LEY ANUAL DE PRESUPUESTO-No debe establecer reglas sobre ejecución presupuestal (Aclaración de voto)</p> <p>Una vez más me permito expresar, con el debido respeto, que en mi sentir la Ley Anual de Presupuesto tiene un objeto único y exclusivo, previsto por los artículos 345 y 346 de la Constitución: establecer los rubros referentes a ingresos, gastos e inversiones a los que haya de someterse el manejo de los recursos públicos durante el siguiente período fiscal. No es propio de la Ley de Presupuesto el consagrar nuevas normas que se constituyan en fuentes de gastos o inversiones, ni tampoco reglas relativas a las competencias, deberes o facultades de quienes dirigen la actividad económica o financiera de las entidades públicas. Tampoco le corresponde a esa Ley -cuya materia se halla constitucionalmente definida- plasmar disposiciones por medio de las cuales se diga cómo se ha de ejecutar el presupuesto, ya que eso es propio de la Ley Orgánica.</p>

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-041/98
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Revisión de la Ley 371 de 1997 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo cultural entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno del Reino de Marruecos’, suscrito en Santa Fe de Bogotá el 13 de diciembre de 1991”.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE la Ley 414 de 1997 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo cultural entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno del Reino de Marruecos’, suscrito en Santa fé de Bogotá el 13 de diciembre de 1991”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de la Ley 371 de 1997 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo cultural entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno del Reino de Marruecos’, suscrito en Santa Fe de Bogotá el 13 de diciembre de 1991”.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-593/98
Fecha de la sentencia	veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Ricardo Manuel Lobaton y otros.
Demandado	Normas acusadas: Ley 415 de 1997 Artículo 1º (parcial).
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-592 de 1998, que declaró exequible la expresión acusada del primer párrafo del artículo 1º de la Ley 415 de 1997, la cual literalmente dice: “Con excepción de los delitos de: enriquecimiento ilícito; homicidio agravado o lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2, 3, 5 y 8 del artículo 30 de la ley 40 de 1993; secuestro, extorsión; hurto calificado; los delitos dolosos previstos en la ley 30 de 1986; los delitos previstos en el Decreto 2266 de 1991, excepto porte ilegal de armas de defensa personal, interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o insignias y amenazas personales o familiares; los delitos previstos en la ley 190 de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización indebida de información privilegiada; los delitos previstos en la ley 360 de 1997 y en la ley 365 de 1997; y los delitos conexos con todas las anteriores, los cuales continuarán bajo el régimen del artículo 72 del Código Penal, para los demás delitos”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Los actores consideran que los apartes demandados violan el artículo 13 de la Constitución y el artículo 3º de la Ley 74 de 1968 - aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, que garantiza a hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos. Según su criterio, la norma acusada consagra una discriminación, ya que a unos condenados se les concede el derecho a hacer uso de una libertad condicional en unos términos temporales, mientras que a otros se les prolonga el paso del tiempo para contar con el mismo beneficio. Por el contrario, señalan los actores, la política de alternatividad penal debe ser general, pues una condena debe ser redimida para todos en igualdad de condiciones sin que la ley pueda crear dos clases de presos, según el delito cometido.



	<p>Los demandantes consideran además que ese tratamiento discriminatorio en el fondo constituye la imposición de una nueva sanción, por el hecho de negar, para ciertos delitos, el acceso al subrogado de la libertad condicional, con lo cual se vulnera el principio del <i>non bis in ídem</i>, según el cual nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho.</p> <p>Con base en lo anterior, los demandantes consideran que cuando la ley regula la materia relacionada con la redención de la pena debe tomar en cuenta la conducta del condenado en su lugar de reclusión, ya que una cosa es el delito cometido y, otra bien diferente la redención punitiva. Para sustentar esta afirmación los actores transcriben apartes del salvamento de voto del Magistrado Alejandro Martínez Caballero a la sentencia C-394/95.</p> <p>Finalmente, los actores manifiestan que la política penitenciaria debe efectuarse partiendo de los lineamientos que da la Constitución, y no con base en normas que sean producto de presiones externas al Congreso de la República, ya que la ley debe ser justa porque es el elemento que permite la paz social.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO</p> <p>Voté favorablemente la parte resolutive de la presente decisión, de la cual soy ponente, en virtud del respeto a la cosa juzgada constitucional, puesto que la Corte ya había declarado la exequibilidad de los apartes acusados en la sentencia C-592 de 1998, aprobada en la misma sesión. Sin embargo, por las razones señaladas en mi salvamento de voto a esa sentencia, considero que esa expresión es materialmente contraria a la Carta y debió ser reitrada del ordenamiento por la Corporación.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-592/98
Fecha de la sentencia	octubre veintiuno (21) de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	Jaime Enrique Lozano, Aldemar Bustos Tafur, Pedro Pablo Camargo, Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos en la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, condenados por la justicia regional
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad en contra de la totalidad normativa de la ley 415 de 1997 y contra sus artículos 1º, (parcial), 2º,(parcial) y 3º. (parcial), respectivamente, “por la cual se consagran normas de alternatividad penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	<p>Primero.- Declárase INHIBIDA para proferir decisión de mérito en cuanto a la demanda de inconstitucionalidad promovida por JORGE ELIECER PINEDA LARGO y otros internos de la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, en su condición de condenados por la Justicia Regional.</p> <p>Segunda.- Decláranse EXEQUIBLES los segmentos acusados de los artículos 1º., 2º. y 3º., así como el artículo 4º. de la Ley 415 de 1997 “Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país.”</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante Jorge Eliécer Pineda Largo, coadyuvado por otros internos reclusos en la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, que fueron condenados a penas de prisión por la Justicia Regional, demandan la totalidad de la Ley 415 de 1997, por estimarla violatoria del principio de igualdad ante la Ley Penal.</p> <p>Los demandantes Jaime Enrique Lozano, Aldemar Bustos Tafur y Pedro Pablo Camargo acusan el inciso primero del artículo 1º. de la Ley 415 de 1997, que adiciona el Código Penal con un nuevo artículo, el 72º, por estimarlo violatorio de los artículos 1., 5, 13, 29, 93, 228 y 229 de la Constitución Política.</p>

	<p>El demandante Jaime Enrique Lozano acusa además el párrafo del mencionado artículo 72A, en la expresión “salvo que exista orden de captura vigente en su contra”; Igualmente, del artículo 2º. de la Ley 415 de 1997, que adiciona la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelario- con un nuevo artículo, el 99A impugna el aparte “que no excedan de cuatro (4) años” del inciso primero, y su inciso segundo, por encontrarlos violatorios de los artículos 1º,13, 28 y 29 de la Constitución Política.</p> <p>Por último, del numeral 3º del artículo nuevo artículo 147ª, con el cual el artículo 3º. de la Ley 415 de 1997 adiciona la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelario-, tacha las expresiones “judicial” y la frase “únicamente para efectos de este beneficio”, por estimarlas violatorias de los artículos 13 y 22 Constitucionales.</p> <p><b>1.- VIOLACION DEL DERECHO A LA IGUALDAD</b></p> <p>Todos los demandantes coinciden en afirmar que las normas acusadas transgreden el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 C.P., en el artículo 24 del Pacto de San José y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, al consagrar beneficios predicables tan sólo respecto de algunos condenados, atendida la naturaleza del delito que cometieron.</p> <p>En su opinión, los condenados excluidos del subrogado penal consagrado en el artículo 72A del Código Penal, resultarían recibiendo un trato discriminatorio por la sola circunstancia de revestir mayor gravedad los delitos que cometieron. La Constitución Política, afirman, impide al Legislador dar un tratamiento jurídico penal distinto a los condenados en función de la mayor o menor gravedad de los delitos cometidos.</p> <p>Igualmente estiman que el negar, para ciertos delitos, el beneficio de la libertad condicional se traduce en una transgresión al principio del <i>non bis in ídem</i>, pues tal tratamiento discriminatorio equivale a la imposición de una nueva sanción, y que para los procesados por los delitos no excluidos en el segmento atacado, es prácticamente automática, lo cual implica un claro deterioro de los derechos de los sentenciados por delitos excluidos <i>per se</i> del acceso al nuevo subrogado penal allí contemplado.</p> <p><b>2. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA JUDICIAL:</b></p> <p>El mismo razonamiento conduce a los demandantes a sostener que</p>
--	---

	<p>en virtud de lo previsto en el precepto tachado, la independencia y autonomía judicial que los artículos 228 y 230 del Estatuto Supremo consagran, sufren menoscabo, pues se mengua al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, los antecedentes, tanto del hecho punible cometido, como de la personalidad y buena conducta del reo, lo cual, a su juicio, recorta apreciablemente su potestad discrecional de valoración judicial.</p> <p>Con base en el artículo 93 de la Carta, arguyen que el acusado artículo 1º. de la Ley 415 contraría el artículo 10., numeral 3º. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, a cuyo tenor “ el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”, dando a entender que negar a algunos condenados el beneficio de la libertad condicional con fundamento en el delito cometido, riñe con la finalidad resocializadora que debe tener la pena para todo infractor de la ley penal.</p> <p>Así las cosas, de proseguir vigente la Ley, aseveran, sobraría cualquier intento de estructurar una política criminal seria, coherente y a largo plazo, en la que se tenga en cuenta la nueva axiología constitucional cuyo fin último es la persona. En su opinión, se olvidaría que el Derecho Penal, en tanto disciplina que se ocupa de los comportamientos humanos al consagrar el instituto de los subrogados penales (condena de ejecución condicional, libertad condicional, suspensión de la ejecución de la pena, etc.) otorga especial consideración al estudio progresivo y sistemático del comportamiento del sentenciado, para que, en específicos casos, se prescinda del total cumplimiento de la sanción privativa de la libertad trocándola en obligaciones que conllevan mayores y mejores beneficios tanto al penado como a la sociedad.</p> <p>Por último, consideran que siendo Colombia un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, el legislador no puede so pretexto de “descongestionar” las cárceles del país, desvertebrar una política criminal que en forma, por demás, incipiente, se ha querido estructurar desde los códigos básicos del ordenamiento penal.</p> <p><b>3. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA</b></p> <p>Para los demandantes la expresión “<i>salvo que exista orden de captura vigente en su contra</i>” contenida en el parágrafo del artículo 1º. de Ley 415, viola los artículos 29 y 248 de la Carta pues, para efectos de estudiar la viabilidad de acceder al goce de un subrogado penal, no le es dable al legislador asimilar una simple</p>
--	---

	<p>orden de captura a un “antecedente” en los términos del artículo 248 de la Carta Política.</p> <p>El párrafo citado, sostienen, invierte la carga de la prueba en desmedro del imputado o sindicado, quien es el que termina teniendo que demostrar que es inocente, cuando es al “aparato jurisdiccional” del Estado al que le compete desvirtuar tal presunción de inocencia, bajo las reglas del debido proceso, comprobándole fehacientemente su culpabilidad.</p> <p>En criterio de los demandantes, no es el funcionario <u>judicial</u> el competente para llevar registros de antecedentes y ordenes de captura expedidas ya que ello es función y competencia del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, de la DIJIN organismo adscrito a la Policía Nacional y del CISDAD organismo vinculado a la Fiscalía General de la Nación, según el Decreto 2398 de 1986, lo que torna ilógico que el numeral 3º del nuevo artículo 147ª, con el cual el artículo 3º de la acusada ley 425 de 1997 adiciona la ley 65 de 1993, hable de funcionario “judicial” en clara vulneración de los artículos 6º y 121 de la Constitución Política, sumado al hecho de que se presuma legislativamente que un condenado carece de antecedentes u órdenes de captura “únicamente para efectos <u>del beneficio establecido en la norma parcialmente acusada</u>, lo cual, estiman, carece de razonabilidad legislativa pues se legisló sólo para un grupo de ciudadanos en detrimento del derecho a la igualdad.</p> <p>En cuanto al “permiso de salida” ésta posibilidad riñe igualmente con el principio de la igualdad pues será para beneficio, únicamente, de unos cuantos, los cuales serán escogidos por los funcionarios administrativos que tramiten prontamente los antecedentes penales de cada condenado que escojan a su arbitrio, excluyendo a los que en cambio no se les respondió en tiempo la solicitud de antecedentes.</p> <p>Para los actores, dichos apartes vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que los subrogados y beneficios penales sólo tienen aplicación para algunos cuantos, discriminando a los demás condenados de su aplicación y beneficio. En su parecer, se trasladan funciones eminentemente jurídicas a funcionarios administrativos, quienes, por orden del legislador serían los encargados de determinar la clase de servicio comunitario, su intensidad horaria y la clase de vigilancia que se suministrará para cada caso específico. De esta manera, sostienen, usurpan las funciones judiciales que en los términos de los artículos 6º y 29 de la Carta Política, le competen de manera exclusiva a la Rama Judicial.</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO</p> <p>LIBERTAD CONDICIONAL-Exclusión de ciertos delitos (Salvamento de voto)</p> <p><i>Me veo obligado a apartarme de la presente decisión, en virtud de la cual la Corporación declaró la exequibilidad de aquellos apartes del artículo 1º de la Ley 415 de 1997 que excluyen ciertos delitos del nuevo régimen de libertad condicional. Según la sentencia, esa excepción no viola el principio de igualdad ni la función resocializadora de la pena por cuanto "atiende criterios de razonabilidad determinados por la mayor repercusión que la vulneración o afectación de los bienes tutelados tiene en elementos de importancia estratégica para la viabilidad y sostenibilidad del orden público social y económico." No puedo compartir la decisión ni la argumentación de la Corte.</i></p> <p>AUTONOMIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO PARA DESARROLLAR POLITICA CRIMINAL (Salvamento de voto)</p> <p><i>La Corte ha reconocido que el Congreso goza de una cierta libertad para desarrollar la política criminal pues la Constitución no ha definido de una vez por todas el derecho penal, por lo cual el Legislador, obviamente dentro de los marcos fijados por la propia Carta, tiene ante sí un espacio relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por unos valores, presupuestos y finalidades propios, pese a su acentuado grado de constitucionalización. Así, a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, el Estado tipifica las conductas prohibidas y fija las sanciones (principio de legalidad de la pena) y en este quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que pueden ser más o menos drásticas, según el propio Legislador lo considere políticamente necesario y conveniente.</i></p> <p>PENA-Función/PENA-Función en diferentes etapas de la acción punitiva del Estado (Salvamento de voto)</p> <p>IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-Violación por regímenes diferenciados de libertad condicional/FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA PENA-Desconocimiento por regímenes diferenciados de libertad condicional (Salvamento de voto)</p> <p><i>La norma parcialmente acusada precisamente niega de plano esa función, puesto que excluye de la nueva regulación de la libertad condicional a determinados condenados, no en razón de su comportamiento en los centros de reclusión sino únicamente debido</i></p>

	<p><i>al tipo de delito cometido. En efecto, esa disposición impide el acceso de tales internos a los beneficios del nuevo régimen de libertad condicional, que es más favorable a la resocialización de los condenados, exclusivamente con base en el tipo de delito cometido, con lo cual viola la igualdad, pues no importa que esas personas puedan ser presos ejemplares, no podrán nunca gozar del nuevo régimen de libertad condicional, lo cual es una demostración de una inaceptable estigmatización contra esas personas, incompatible con la función resocializadora de la pena y el respeto a su dignidad humana. La violación a la igualdad es clara, por cuanto el acceso a los beneficios penitenciarios debe derivar esencialmente del comportamiento penitenciario de los reclusos, y no de su pasado delincencial.</i></p> <p>PRINCIPIO DE IGUALDAD-Diferencia de trato en concesión libertad provisional y libertad condicional (Salvamento de voto)</p> <p><i>Las diferenciaciones en la concesión de la libertad condicional no pueden ser estudiadas de la misma manera que las diferencias de trato en materia de libertad provisional, por cuanto esta última se refiere a la suspensión de una medida de aseguramiento y no a un beneficio penitenciario, como la primera. Ahora bien, las medidas de aseguramiento buscan impedir que el imputado evada el cumplimiento de la pena, en caso de que ésta sea impuesta. Por ende, en tales eventos es razonable que la ley establezca diferenciaciones para la concesión de la libertad provisional según el delito investigado, por cuanto es factible suponer que quien cometió una conducta más grave estaría más dispuesto a evadir las sanciones penales. En cambio, la libertad condicional es un beneficio penitenciario, y por ello el criterio relevante debe ser el comportamiento del interno en el lugar.</i></p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-227/98
Fecha de la sentencia	veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 421 del 13 de enero de 1998 <i>“por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento mutuo de estudios y t3tulos de educaci3n superior entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Cuba”, suscrito en la Habana, el 4 de mayo de 1994.</i>
Conoci3 en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Decision	Declarar EXEQUIBLES el Convenio de reconocimiento mutuo de estudios y t3tulos de educaci3n superior suscrito entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Cuba, firmado en la Habana el 4 de mayo de 1994, as3 como la Ley 421 de 1998, que lo aprueba.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 421 del 13 de enero de 1998 <i>“por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento mutuo de estudios y t3tulos de educaci3n superior entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica de Cuba”, suscrito en la Habana, el 4 de mayo de 1994.</i>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ  Con el acostumbrado respeto, me permito brevemente aclarar mi voto. En mi opini3n, la posici3n adoptada por la sentencia es acertada, particularmente en lo que se refiere a la homologaci3n y reconocimiento de t3tulos universitarios, puesto que precisa los alcances de la doctrina sentada en la sentencia C-050 de 1997, de la cual en su oportunidad discrep3.



Resumen aclarações	de las	NO APLICA
-----------------------	--------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-771/98
Fecha de la sentencia	diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Francia Lucía Díaz Cardozo y Camilo Hernando Guáqueta Rodríguez.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 (parciales) de ley 430 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ.
Decision	Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la ley 430 de 1998, siempre y cuando se entienda que las sustancias peligrosas a que ellos aluden son, además de las señaladas expresamente en el artículo 81 de la Constitución, todas aquéllas que no pudiendo ser manejadas en una forma apropiada resulten lesivas de derechos fundamentales tales como la salud, vida e integridad física de las personas, el medio ambiente o cualquier otro. .
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los argumentos del demandante, se resumen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El legislador al expedir la ley 430 de 1998 y permitir en ella la importación de desechos peligrosos, lesiona el ordenamiento superior, concretamente el artículo 81, que prohíbe de manera absoluta la importación de residuos o sustancias peligrosas o tóxicas, y los artículos 79 y 80 que establecen el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y el deber del Estado de proteger el medio ambiente y prevenir los factores de deterioro ambiental. En consecuencia, los actores hacen esta pregunta: "¿No es suficientemente peligroso para nuestro medio ambiente y nuestra salud, los desechos y sustancias peligrosas y tóxicas que generamos en el país, como para facilitar, por medio de la ley que permite su importación, con violación de la Constitución Nacional, el aumento de este riesgo, con los provenientes del exterior? ¿Si no hemos logrado la aplicación efectiva y generalizada de tecnologías aptas para la minimización de los efectos nocivos de las sustancias peligrosas que son producidas en el país, cuál puede ser la justificación para permitir la importación de ellas.?"</li> <li>- Con tal decisión el legislador parece olvidar que la libertad</li> </ul>

	económica y la iniciativa privada, deben limitarse cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (art. 333 C.P.). Por tanto, si "la sola presencia de productos o desechos peligrosos en nuestro entorno constituye un grave peligro para la salud humana y la sanidad del medio ambiente", es claro que abrir la puerta para recibir ese tipo de desechos, es abiertamente inconstitucional.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-492/98
Fecha de la sentencia	septiembre quince (15) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 431 del 16 de Enero de 1998, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de Malasia”, hecho en Santafé de Bogotá, D.C. el 14 de Agosto de 1995.
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 431 del 16 de Enero de 1998, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de Malasia”, hecho en Santafé de Bogotá, D.C. el 14 de Agosto de 1995
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	<p>Primero. <b>DECLARAR EXEQUIBLES</b> “El Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de Malasia, hecho en Santa Fe de Bogotá el 14 de agosto de 1995”, y la Ley 431 del 16 de enero 1998, que lo aprob3.</p> <p>Segundo. <b>COMUNÍQUESE</b> esta decisi3n al se1or Presidente de la Repùblica, al se1or Ministro de Relaciones Exteriores y al Presidente del Congreso de la Repùblica y envíeseles copia autèntica de la misma, para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículu 241 de la Carta Políticu.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-493/98
Fecha de la sentencia	septiembre quince (15) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	
Demandado	Norma Revisada: Ley 436 de febrero 17 de 1998. "Por medio de la cual se aprueba el convenio 162 sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad", adoptado en la 72 reunión de la Conferencia General de la organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1986.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Convenio 162 sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad", adoptado en la 72 reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1986.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 436 del diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio de la cual se aprueba el "Convenio 162 sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad", adoptado en la 72 reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1986.</p> <p>Tercero. Ordenar que se comunique la presente decisión a la Presidencia de la República, al Presidente del Congreso de la República y a los Ministros de Relaciones Exteriores y Trabajo y Seguridad Social, para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA

Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-494/98
Fecha de la sentencia	quince (15) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1.998).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 437 del 17 de febrero de 1.998 <i>“por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para la promoci3n y protecci3n recíproca de inversiones entre la Repúblicade Colombia y el Reino de Espa±a”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1.995.” así como del citado Acuerdo.</i>
Conoci3 en primera instancia	Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Decision	
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Con el acostumbrado respeto, me permito presentar las razones que me llevan a aclarar el voto en la sentencia de la referencia. No comparto la decisi3n mayoritaria de declarar la inexequibilidad del artículo V, de la expresi3n "las indemnizaciones previstas en el artículo V" del numeral 1, y la totalidad del numeral 7, ambos del artículo VII del Acuerdo. Mi reparo a esta decisi3n es la misma que consigné en el salvamento de voto a la Sentencia C-358/96, al cual me remito.
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-543/98
Fecha de la sentencia	primero (1º) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Demandante	Karin Irina Kuhfeldt Salazar, Ricardo Cuervo Peñuela Claudia Blum de Barberi Luis Guillermo Giraldo Hurtado
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo No. 1 de 1997
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el Acto Legislativo No. 1 de 1997, únicamente por los vicios de forma dirigidos contra la totalidad del mismo que fueron analizados expresamente en esta sentencia.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 35 de la Constitución, tal como quedó modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, que reza: "No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma", únicamente por los cargos analizados en esta sentencia.</p> <p>Tercero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión "La ley reglamentará la materia", contenida en el inciso segundo del artículo 35 de la Constitución, tal como quedó modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>4.1 Primer cargo</p> <p>Dice el demandante que el informe de ponencia para segundo debate presentado por los Senadores Luis Guillermo Giraldo y Germán Vargas (Gaceta No. 137), en la primera vuelta, no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 175 del Reglamento del Congreso, aplicable al trámite legislativo por remisión de los artículos 221 y 227 de la ley 5 de 1992, "toda vez que en ella no se consigna: a) la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión en el primer debate; y b) las razones que determinaron su rechazo (ver actas del 22 y 30 de abril de 1997), en la Comisión Primera del Senado de la República. Además, no se "anexa, si las hubo, las constancias de los votos negativos, como lo dispone el artículo 167 del Reglamento del Congreso".</p>



	<p>4.2 Segundo cargo</p> <p>En criterio del demandante este cargo se deriva del anterior y lo fundamenta así: "El proyecto de Acto Legislativo fue considerado por la Plenaria del Senado en segundo debate, en la primera vuelta, estando imposibilitada para hacerlo porque la omisión de los requisitos del artículo 175 del Reglamento del Congreso no fue llenada. Por tanto, el trámite del Acto Legislativo tampoco cumplió con lo dispuesto en la parte final del artículo 175 del Reglamento. En otras palabras, al no advertir el Senado la omisión del informe de ponencia, omitió aplicar el mismo artículo 175 del Reglamento al permitir que el proyecto de Acto Legislativo se considerara sin haber llenado, valga la redundancia, la omisión del informe. De la lectura del acta de la sesión plenaria del Senado del 22 de mayo de 1997, se colige que se consideró y aprobó irreglamentariamente el proyecto."</p> <p>4.3 Tercer cargo</p> <p>Dice el demandante que el informe de ponencia presentado por los representantes Roberto Camacho, Jorge Carrillo y Jairo Chavarriaga para el segundo debate en la Cámara de Representantes, durante la primera vuelta, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Congreso, pues "los mencionados Congresistas no consignaron la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que determinaron su rechazo."</p> <p>4.4 Cuarto Cargo</p> <p>En la primera vuelta, la mesa directiva de la Cámara de Representantes no observó la falla del informe de ponencia y permitió que la Plenaria considerara el proyecto de Acto Legislativo, estando imposibilitada para hacerlo en este evento, según el artículo 175 del Reglamento del Congreso, de donde se deduce que el Acto Legislativo no fue aprobado, en segundo debate, en forma reglamentaria. En consecuencia, concluye el actor que "Habiendo sido considerado en plenaria de la Cámara el proyecto de Acto Legislativo No. 320 de 1997, pese al irreglamentario informe, se generó un vicio de trámite, que por no haber sido subsanado a tiempo, afecta la constitucionalidad de su formación."</p> <p>4.5 Quinto cargo</p> <p>En la primera vuelta, la Comisión Primera Constitucional de la Cámara al votar el proyecto de Acto Legislativo, "negó por mayoría de votos un texto que luego la plenaria revivió y aprobó, pese a no tener competencia para hacerlo, de acuerdo con el artículo 177 del Reglamento del Congreso", aplicable al proceso legislativo constituyente, circunstancia que genera vicio de inconstitucionalidad. En efecto, la Comisión negó los textos que decían: "o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a</p>
--	---

	<p>la vigencia del respectivo tratado" y "o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo Acto Legislativo." Y la Plenaria de la Cámara sin observar los artículos 177 y 185 del Reglamento aprobó uno de los textos negados por la Comisión que dice "o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado."</p> <p>Agrega el demandante que, "para remate, no se cumplió con el procedimiento que el mismo citado artículo señala cuando se presenta una discrepancia entre las Plenarias y sus Comisiones, como la que se presentó entre el texto negado en Comisión y aprobado en Plenaria, y que ordena, en estos casos, que la Corporación remita el proyecto a la Comisión para que reconsidere la novedad y decida sobre ella. Este cargo es de fácil comprobación si se comparan las actas de la sesión de la Comisión Primera de la Cámara del 10 de junio de 1997 y la de la Plenaria de la Cámara del 19 de junio de ese mismo año".</p> <p>4.6 Sexto cargo</p> <p>Dice el demandante que los Senadores ponentes del proyecto de Acto Legislativo, doctores Luis Guillermo Giraldo, Germán Vargas, Fabio Valencia, Carlos Espinosa y Jairo Escobar, en el informe de ponencia para primer debate en la segunda vuelta, omitieron dar aplicación al artículo 232 del Reglamento del Congreso, atentando contra el ejercicio del derecho de participación ciudadana en el estudio de los proyectos de actos legislativos (art. 230 del Reglamento del Congreso).</p> <p>Los citados senadores ponentes, según el actor, fueron informados por la secretaría de la Comisión Primera de las observaciones que tres ciudadanos, entre ellos el demandante, habían presentado en ejercicio del derecho contemplado en el artículo 230 del Reglamento del Congreso. Sin embargo, "los ponentes presentaron el respectivo informe el día 12 de agosto de 1997, sin cumplir con lo dispuesto por el artículo 232 del Reglamento del Congreso aplicable al trámite legislativo constituyente en la medida en que el artículo 230 permite a los ciudadanos presentar pliego de observaciones y ser escuchados en las Comisiones durante el trámite de actos legislativos, ya que los artículos 221 y 227 del Reglamento del Congreso así lo ordenan, al hacer la remisión a las normas sobre trámite de proyectos de ley, cuando sean compatibles" Esta violación del Reglamento configura la inconstitucionalidad del proyecto demandado.</p> <p>4.7 Séptimo cargo</p> <p>Afirma el demandante que el proyecto de Acto Legislativo no ha sido sancionado reglamentariamente, lo que sustenta de la siguiente manera: "Si la Corte ha aceptado que de las normas del título XIII de la Constitución y de lo establecido específicamente por</p>
--	---

	<p>su artículo 375, se desprende que el trámite legislativo constituyente debe reunir, además, los requisitos que para el efecto establece el Reglamento del Congreso, entonces el artículo 196 de la ley 5 de 1992 es aplicable a dicho proceso legislativo constituyente", tal como lo sostuvo la Corte en la sentencia C-222/97, en la que se basó la mesa directiva del Congreso para sancionar el Acto Legislativo acusado, en una ceremonia en la que el Presidente de la República y el Presidente del Congreso manifestaron que entraba en vigencia desde ese momento". Por ello considera que se ha presentado un vicio subsanable, al efectuarse en forma irreglamentaria la sanción presidencial</p> <p>5. Acusación contra el inciso final del artículo 35 de la Constitución, tal como quedó modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, por no haber cumplido los ocho debates y violar el artículo 375 de la Carta que prohíbe en la segunda vuelta estudiar iniciativas no consideradas en la primera.</p> <p>La ciudadana KARIN KUHfeldt demanda el inciso final del artículo 35 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, que prescribe:</p> <p><i>"No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma."</i></p> <p>5.1 Cargos</p> <p>5.1.1 Sostiene la ciudadana Karin Kuhfeldt que en el procedimiento para la aprobación del inciso final del artículo 35 de la Carta, se violó el artículo 375 del mismo ordenamiento, "en particular, las reglas relativas a la verificación de ocho debates y la imposibilidad de discutir en la segunda vuelta iniciativas que no hayan sido presentadas en la primera de ellas". Igualmente, señala que se infringieron algunas disposiciones de la ley 5 de 1992 -Reglamento del Congreso- "cuyo carácter orgánico la hace imperativa para el ejercicio de la función legislativa."</p> <p>En efecto, afirma que "si se contrasta el texto del proyecto de Acto Legislativo tal como fue aprobado en la primera vuelta constitucional en el Diario oficial No. 43.083 del 14 de julio de 1997, ordenada mediante el decreto 1765 de 1997, con el finalmente aprobado en la segunda vuelta, puede constatar la incorporación al texto del Acto Legislativo de una iniciativa nueva, no aprobada durante la primera vuelta, en franca contradicción con el mandato del inciso tercero de la pluricitada disposición superior (art. 375). Al culminar la primera vuelta del trámite, el proyecto no proscribía la aplicación anterior de la reforma constitucional, sino que preveía la inaplicabilidad de los tratados sobre extradición a conductas delictivas cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia del respectivo instrumento internacional. La referencia a la vigencia en</p>
--	--

	<p>el texto de la primera vuelta gira en torno a la aplicación temporal de los tratados internacionales para efectos de un instrumento penal convencional que se restablece en el orden jurídico interno para los colombianos de nacimiento. La regla del inciso cuarto actual es de naturaleza, alcances y efectos muy diversos, puesto que, con carácter general e incondicional, proscribía la extradición por hechos anteriores a la fecha de publicación del acto reformativo. Tan relevante y significativa es esta diferencia, que por esta vía nunca sería extraditable ningún colombiano por nacimiento por hecho delictivo alguno cometido con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo, mientras que por la otra, la extradición de nacionales colombianos por nacimiento estaría sujeta a la fecha de entrada en vigencia para los países signatarios del respectivo tratado, así como de su aplicabilidad en el orden jurídico interno."</p> <p>En cuanto a la afirmación de que no tuvieron lugar los ocho debates reglamentarios, manifiesta que "en el cuerpo del proyecto de Acto Legislativo No. 26 de 1997 Senado, presentado a consideración del Congreso por varios de sus miembros, el artículo 1o. se limitaba a derogar el artículo 35 de la Constitución Política (Gaceta del Congreso No. 23 /97). En el texto aprobado en la Comisión I del Senado, se incluyó un inciso tercero que proscribía la extradición de nacionales, por prescripción de la acción penal o de la pena o por hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo Acto Legislativo (Acta 29/97 Gaceta 137/97). Como se puede apreciar, en este debate no fue aprobada previsión alguna que se refiera a la inaplicabilidad de la reforma a hechos anteriores a su vigencia. El proyecto de Acto Legislativo, tal como fuera aprobado en la Comisión, fue igualmente avalado en sesión plenaria del Senado de la República en segundo debate (Gaceta 165/97). Cabe reiterar aquí nuevamente que no se dio segundo debate a la iniciativa relativa a la vigencia de la reforma constitucional frente a hechos anteriores a su expedición. En la Comisión Primera de la Cámara tampoco resultó aprobado este inciso.....En la plenaria, este inciso ni siquiera fue debatido y, por el contrario, se aprobó la previsión que sujetaba la extradición de nacionales a la vigencia de los correspondientes tratados internacionales. Aquí también debe reiterarse que el inciso no surtió el cuarto debate de toda disposición contenida en un Acto Legislativo (Gaceta 237/97). Tampoco al iniciarse la segunda vuelta, en el primer debate al interior de la Comisión I del Senado de la República, se discutió ni aprobó disposición alguna que sujetara la extradición a la vigencia del Acto Legislativo, con lo cual el inciso carece igualmente del quinto debate exigido, según se desprende del expediente legislativo. Fue en la votación en la Plenaria del Senado, en el sexto debate, que se incluyó la previsión sobre no aplicabilidad de la reforma constitucional a hechos anteriores a su vigencia, según consta en el correspondiente expediente legislativo.</p>
--	---

	<p>Se evidencia así la omisión de cinco de los ocho debates necesarios para la aprobación válida del inciso cuarto aquí demandado."</p> <p>La violación de la ley 5 de 1992, es sustentada así por la accionante: el inciso acusado no sólo violó los artículos 224 y 226 del Reglamento del Congreso, que señalan el trámite en dos períodos ordinarios consecutivos y circunscribe el debate en la segunda vuelta a las iniciativas presentadas en el primer período, proscribiendo la reconsideración de iniciativas negadas en la primera fase, sino también el artículo 135 de la misma ley que regula el procedimiento a seguir en caso de empate en las votaciones. "En la sesión ordinaria del 10 de junio de 1997 de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en la primera vuelta del trámite del Acto, se discutió el proyecto de reforma del artículo 35 constitucional, en punto del inciso tercero del primer artículo del proyecto, que se refería a la no extradición de nacionales con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo.... fue votada como propuesta sustitutiva de la relativa a la aplicabilidad de los tratados internacionales sobre extradición. Al verificarse la votación, se produjeron dos empates consecutivos (16 votos contra 16 en las dos ocasiones), lo cual llevó a la Comisión a determinar la negación del inciso al tenor del artículo 135 del Reglamento del Congreso..... este hecho fue expresamente reconocido por el Presidente de la Comisión Primera al concluir la doble votación sobre la proposición sustitutiva con el empate descrito, al indicar a los integrantes que la parte final del inciso tercero había sido negada. Como se puede concluir, la propuesta referida al aspecto temporal de la reforma constitucional fue negada por mandato legal y, en consecuencia, no podía ser considerada nuevamente en la segunda vuelta, sin desconocer con ello el mandato del artículo 226 de la ley 5 de 1992 que proscribe precisamente tal evento y que, al censurar la deliberación y aprobación de iniciativas negadas en la primera vuelta, no distingue entre aquéllas negadas por mayoría y aquéllas negadas por disposición reglamentaria. Finalmente, el inciso cuarto, dada su generalidad, puede derivar en una interpretación no deseada por el Constituyente, cual es la de que la extradición no procede en caso alguno, trátase de nacionales colombianos o de extranjeros, cuando se solicite por hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo, es decir, anteriores al 16 de diciembre de 1997."</p> <p>5.2.2 El ciudadano PEDRO PABLO CAMARGO interviene en este proceso para solicitar que se rechace la demanda presentada por KARIN IRINA KUHfeldt SALAZAR, en su condición de Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, "al no haber sido presentada por un ciudadano en su condición de tal". Y agrega que en caso de que la Corte no rechace la demanda deberá declarar la nulidad de lo actuado por violación del debido proceso "pues el</p>
--	---

	<p>derecho de impugnación de este ciudadano contra la demanda de la referencia sufre mengua al actuar como demandante no un ciudadano, sino un servidor público en los términos del artículo 123 de la Constitución Política. Esto, además, viola el principio de igualdad de todos ante la ley, amparado por los arts. 5 y 13 de la Constitución Política."</p> <p>Luego dice que "es grave que una alta funcionaria de la Presidencia de la República" acuda ante la Corte a solicitar la inconstitucionalidad del Acto Legislativo No. 1 de 1997, pues "esa intervención presidencial equivale a una <i>objeción parcial del acto legislativo</i>, lo cual no está previsto en la Constitución Política, pues el artículo 167 de la misma, en armonía con los arts. 165 y 166 ibidem, sólo facultan al Presidente de la República para objetar total o parcialmente un proyecto de ley, pero no un Acto Legislativo, que es la manifestación del poder constituyente delegado". Además, la declaración del Presidente de la República sobre la presentación de esta demanda contra tal acto sirve para afirmar que ésta es una objeción presidencial prohibida por la Constitución Política.</p> <p>5.2.3 La ciudadana ESPERANZA ESPINOSA MUÑOZ, solicita a la Corte rechazar el cargo formulado, puesto que en la primera vuelta sí se consideró la iniciativa de la irretroactividad "pues tanto en los cuatro primeros debates de la primera vuelta como en los cuatro debates de la segunda vuelta se aprobó el artículo 2 del proyecto de acto legislativo 'regirá a partir de su promulgación'. O sea tuvo los ocho debates. La vigencia del Acto Legislativo no puede separarse de la irretroactividad por cuanto el citado artículo 2 establece que el acto legislativo regirá hacia el futuro, no hacia atrás, a partir de la fecha de su promulgación. El legislador, sin embargo, quiso ser más preciso en cuanto a que la extradición de colombianos por nacimiento no podría aplicarse a hechos anteriores a la vigencia del acto legislativo. Fue así como el texto aprobado por la Comisión Primera del Senado de la República el 13 de mayo de 1997 es de este tenor: la extradición no procederá 'cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado'" (Gaceta 137/97 acta 29 mayo 13/97).</p> <p>En el decreto 1765/97 que contiene la publicación del proyecto de Acto Legislativo aprobado en primera vuelta, prescribe en su primer artículo, que la extradición no procederá en los casos de "prescripción de la acción penal o de la pena y cosa juzgada o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado" y en el artículo segundo dice "el presente acto legislativo regirá a partir de su promulgación". Luego la irretroactividad y vigencia en el acto legislativo son una misma cosa.</p>
--	---

	<p>En la segunda vuelta, según el acta No. 4 de agosto 20/97 la Comisión primera del Senado aprobó el artículo segundo, que dice: "El presente acto legislativo regirá a partir de su promulgación". La iniciativa de la retroactividad y la irretroactividad se mantiene activa. Sin embargo, la plenaria en el segundo debate de la segunda vuelta decidió debatir el tema de la irretroactividad, sin alterar la esencia de lo aprobado en primera vuelta, como es la irretroactividad del acto legislativo a partir de la fecha de su promulgación y aprueba un texto que refuerza el artículo segundo que es el acusado. Este texto fue aprobado en tercero y cuarto debates por la Cámara de Representantes. Luego el cambio, adición o modificación del contenido de las disposiciones aprobadas en primera vuelta, fueron considerados, debatidos y aprobados válidamente en la segunda vuelta, como lo ordena el artículo 226 del reglamento del Congreso "pues no se alteró la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política que se reforma, como es la extradición y su vigencia."</p> <p>En lo que respecta a que las iniciativas negadas en la primera vuelta no pueden ser consideradas en la segunda, señala que en la sesión del 10 de junio de 1997 de la Comisión Primera de la Cámara en la primera vuelta, se presentó una proposición sustitutiva que obtuvo 16 votos a favor y 16 en contra y, en consecuencia, no obtuvo la votación exigida, quedando entonces el texto original que corresponde a la norma demandada, la cual fue refrendada en la sesión plenaria de la Cámara celebrada el 19 de junio de 1997. No hay, por tanto, violación de la Constitución ni del Reglamento del Congreso.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, HERNANDO HERRERA VERGARA, VLADIMIRO NARANJO MESA</p> <p>JUEZ CONSTITUCIONAL-Función (Salvamento de voto)</p> <p>El Juez Constitucional tiene, como su primer deber, que inclusive justifica su existencia y da soporte a la necesidad de los poderes que se le otorgan, la preservación del Ordenamiento en que se funda el Estado, y mediante su actividad garantiza los valores, principios y normas que configuran el Estatuto supremo, resultado de la voluntad política del Constituyente, prenda insustituible de los derechos de los gobernados y límite esencial de las atribuciones de los gobernantes. En principio, debe ese Juez entrar en el análisis integral de las normas proferidas por los poderes constituidos para</p>

	<p>verificar que, en sus aspectos exteriores, procedimentales o formales, como en su contenido, respeten las disposiciones y los postulados de la Constitución. A menos que, como acontece en Colombia con los actos reformativos de la Carta Política, se le asigne únicamente una parte del control, la puramente formal, obligándolo a circunscribir su examen a la determinación de si, en el momento de enmendar parcialmente el articulado de aquélla, el Constituyente derivado se atuvo exactamente o no a las perentorias exigencias señaladas en el mismo texto del Estatuto Fundamental.</p> <p><b>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTOS LEGISLATIVOS (Salvamento de voto)</b></p> <p>No siendo de competencia de la Corporación lo relativo a la constitucionalidad de la materia de un Acto Legislativo (arts. 241-1 y 379 C.P.), su función, orientada a la defensa del Estatuto Supremo del Estado, consiste en establecer, mediante riguroso estudio, si la forma en que se tramitó, discutió y aprobó aquél se avino a las prescripciones constitucionales y, en lo pertinente, a las disposiciones del Reglamento del Congreso. Entonces, precisamente, la Corte debía interesarse en este caso en la forma, y sólo en la forma, y despreocuparse del fondo de la modificación constitucional, que no era de su incumbencia. De lo contrario, sobraría la función de guarda de la integridad de la Carta Política, reservada en esta materia a los posibles vicios de forma del acto modificatorio, pues, por no "sacrificar el fondo a la forma", toda violación del procedimiento de cambio constitucional sería admisible y cualquier vicio saneable, según la sustancia de lo aprobado, o de acuerdo con la visión política de los magistrados acerca del contenido objeto de la decisión del Constituyente Secundario.</p> <p><b>EXTRADICION-Irretroactividad respecto de tratado público y de Actos Legislativos (Salvamento de voto)</b></p> <p>En cuanto a la primera vuelta, en algunos de sus debates -no en todos- aparece como aprobado un texto alusivo a la no retroactividad, pero referida ella a los respectivos tratados internacionales y no al Acto Legislativo en sí mismo, algo bien diferente en su significado jurídico, en su alcance y en sus efectos. Basta ver que el asunto de la irretroactividad de un Tratado Público es de la esfera del Derecho Internacional y compromete tan sólo a los Estados Partes, con repercusión exclusiva -en materia de extradición- en los nacionales de uno y otro de los Estados Contratantes, mientras que la irretroactividad de un "Acto Legislativo", es un problema de Derecho interno, que afecta la base del orden jurídico de ese Estado, modulando erga omnes los</p>
--	---



	<p>efectos de la enmienda respecto de los destinatarios de la nueva concepción política fundamental y predicando que en ningún caso sus efectos jurídicos cobijarán situaciones anteriores.</p> <p>PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Texto aprobado debe conservar esencia de la reforma (Salvamento de voto)</p> <p>La Corporación ha dado un giro copernicano respecto de su inicial posición, entendiendo que basta la referencia a un "tema" en la primera vuelta para que pueda considerarse, en uno o varios debates de la segunda, un texto que ni pasó por aquella -por cuanto no fue presentado, discutido ni aprobado- ni fue incluido en la publicación. Cabe observar que la esencia de la reforma, al tenor del Reglamento del Congreso, tiene que permanecer durante los ocho debates constitucionales, ya que las modificaciones formales, menores o accidentales pueden siempre introducirse mientras lo fundamental pase rigurosamente y con éxito todos los obstáculos de trámite que el propio Constituyente introdujo para las enmiendas de la Carta. El observador más desprevenido estará de acuerdo en que, como ya dijimos, en su esencia, no es lo mismo hablar de irretroactividad respecto de la entrada en vigor de cada Tratado de extradición celebrado por Colombia, que de irretroactividad de la Reforma Constitucional aprobada en el Congreso sobre esa materia. Hay un cambio cualitativo insoslayable, que aun con los acuciosos esfuerzos de quien quiera cobijarlo por el amplio denominador común de la irretroactividad como "tema", arroja finalmente una norma constitucional ostensiblemente diversa de la que se había contemplado en los primeros debates. Además de lo anterior, cabe recordar que la proposición jurídica aprobada, es decir, la referida a la no extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo Acto Legislativo, fue presentada como una proposición sustitutiva en la primera vuelta ante la Comisión Constitucional de la Cámara de Representantes, resultando negada. Así las cosas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 375 de la C.P., desarrollado por el artículo 226 de la Ley 5 de 1992 arriba citado, esta proposición no podía ser discutida nuevamente en segundo debate so pena de ser declarada inexecutable por vicios en su formación.</p> <p>PROCESO LEGISLATIVO-Proposiciones sustitutivas y modificativas (Salvamento de voto)</p> <p>VOTO DEL CONGRESISTA-Es inmodificable (Salvamento de voto)</p> <p>Es claro que, independientemente de si la votación se ha cerrado o no -lo que apenas tiene relación con el momento procesal dentro</p>
--	---

	del trámite y por referencia a la cámara o comisión respectiva-, el voto depositado en un determinado sentido, públicamente o en secreto, no puede ya modificarse después de haber sido emitido y, si así ocurre, el nuevo voto es nulo. Lo anterior tiene todavía mayor importancia cuando, como en el presente caso, el voto que se modifica resulta decisivo en cuanto al sentido de lo resuelto. En el proceso del Acto Legislativo en discusión, es evidente, como lo muestran las pruebas, que si los tres congresistas que cambiaron su voto no lo hubieran hecho, el texto demandado no habría alcanzado la mayoría calificada exigida por la Carta Política.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-078/99
Fecha de la sentencia	febrero diecisiete (17) de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Demandante	Aldo Hernán Parada Galvis
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 177 de la Ley 201 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar la Inexequibilidad del artículo 177 de la Ley 201 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La Procuraduría General de la Nación, señala el demandante, es una entidad autónoma, con funciones de control, a cuya cabeza se encuentra el Procurador General de la Nación (C.P. art. 275). De ahí que, de acuerdo con la estructura estatal establecida en la Carta, no sea parte de la rama ejecutiva del Estado. Esta circunstancia explica que la Constitución haya fijado en el Congreso de la República la competencia para expedir las normas que fijan lo relativo a la estructura y funcionamiento de dicha entidad (C.P. art. 279), y en el Senado la facultad de designar al Procurador General (C.P. art. 276).</p> <p>La norma acusada radica en cabeza del Presidente de la República la competencia para crear empleos en la Procuraduría General de la Nación, y señalarles sus funciones, dotaciones y emolumentos. Con ello se desdibuja el modelo de estructura estatal fijado por la Constitución, en la medida en que se coloca bajo la tutela administrativa del Ejecutivo a un órgano al que, como ya se indicó, la Constitución le otorgó el rango de órgano autónomo. Además, el texto atacado extiende las competencias presidenciales hasta ámbitos no previstos por el constituyente - pues las facultades contempladas en el numeral 14 del artículo 189 de la Carta se limitan a los empleos de la administración central -, y despoja al Congreso de funciones que le fueron asignadas constitucionalmente.</p> <p>4. Por otra parte, el numeral 10 del artículo 150 de la Carta dispone que la asignación de facultades extraordinarias al Presidente de la República tiene un carácter temporal. La norma acusada se aparta</p>

	<p>de la preceptiva constitucional, otorgando a éste una facultad intemporal para legislar en materia de creación de empleos y de fijación de sus funciones, dotaciones y emolumentos.</p> <p>Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho</p> <p>5. La apoderada del ministerio defiende la constitucionalidad de la norma. Expone que el demandante interpreta de manera equivocada las normas constitucionales que considera vulneradas. Al respecto aclara, en primer lugar, que es el mismo Congreso de la República - tal como lo exige el demandante - el que ha regulado lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Procuraduría, en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 7 del artículo 150 de la C.P.</p> <p>Por otra parte, asegura que "la Constitución le otorga facultad al Presidente de regular todo lo concerniente a la planta de personal de dicho organismo [se refiere a la Procuraduría General de la Nación], por cuanto sería absurdo pretender que fuera la ley, la encargada de tal fin, en virtud de la constante movilidad que, de acuerdo con las necesidades del servicio, se puede ver en esta - la planta de personal - y, que haría necesaria la expedición de un sinnúmero de normas tendientes a regular esta materia". Para sustentar su posición recuerda que el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución prescribe que le corresponde al Presidente "crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos...", frase en la que - considera ella - la alusión a la administración central no se refiere "a la rama ejecutiva como tal, sino al conjunto de instituciones que conforman la organización del Estado...".</p> <p>Frente a la acusación de que la norma legal objeto de este proceso estaría otorgando facultades intemporales al Presidente de la República manifiesta que, en la medida en que la Constitución autoriza al Presidente para regular la estructura administrativa de ciertos organismos, no existe el alegado otorgamiento de facultades, sino que la posibilidad de expedir los respectivos decretos es el producto natural del ejercicio de una competencia constitucional.</p> <p>Por último, expone que la norma acusada en nada afecta la autonomía de la Procuraduría General de la Nación ni pone en entredicho la calidad de Supremo Director de la misma que ostenta el Procurador, sino que más bien constituye un desarrollo práctico del principio de colaboración armónica entre las entidades estatales.</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

## SENTENCIAS DE 1999

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-186 de 1999
<b>Fecha de la sentencia</b>	marzo veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
<b>Demandante</b>	Revisión de constitucionalidad de la Ley 460 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica", suscrito en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
<b>Demandado</b>	
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. FABIO MORON DIAZ.
<b>Decision</b>	<b>DECLARAR EXEQUIBLES</b> el Convenio Marco de Cooperación técnica y científica celebrado en Santa Fe de Bogotá entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica, el veinte (20) de abril de 1994, y la Ley 460 del 4 de agosto de 1998 que lo aprobó.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>El 11 de agosto de 1998, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a través de oficio sin número, remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley 460 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica", firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).</p> <p>El día 3 de septiembre de 1998, el Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión de la Ley 460 del 4 de agosto de 1998 y del Convenio que la misma aprobó, para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: solicitó a las Secretarías Generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, el envío de la</p>

	<p>copia del correspondiente expediente legislativo, y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado correspondiente al Despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia.</p> <p>Una vez cumplidos todos los trámites indicados para esta clase de actuaciones procesales de control de constitucionalidad, procede la Corte a pronunciar su decisión.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-783/99
Fecha de la sentencia	trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Patricia Mier Barros.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2o. (parcial) la Ley 448 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	Declarar EXEQUIBLE la expresión “ <i>administrada por la fiduciaria La Previsora</i> ” contenida en el artículo 2o. de la Ley 448 de 1998 “ <i>por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento</i> ”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	A juicio de la demandante, la asignación a la Fiduciaria La Previsora, “en forma exclusiva y excluyente”, de la administración del “Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales” (Ley 448 de 1998, art. 2o.), desconoce los siguientes principios constitucionales:

	<p>1. Libre competencia, libertad de empresa e igualdad (C.P., art. 333 y 13), por cuanto la actora considera que se institucionaliza una posición dominante en el mercado de bienes y servicios financieros en favor de la Fiduciaria La Previsora, con la configuración de un monopolio con recursos de entidades estatales dentro de un amplio sector del manejo de la deuda pública, para cuya constitución no se ha cumplido con los requisitos constitucionalmente establecidos para tal fin (C.P., art. 336), lo que, en su concepto, de un lado, atenta contra la libertad económica y de competencia de la actividad fiduciaria, en la medida en que sus posibles límites sólo están dados respecto del bien común, el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación y, de otro lado, desconoce la finalidad general, impersonal y abstracta que tiene la ley, por señalar un privilegio económico particular como éste.</p> <p>Adicionalmente, en opinión de la demandante, la extracción de los demás agentes fiduciarios existentes en el mercado, del ejercicio de una actividad lícita propia de su objeto social, con la creación de un beneficio individual sin fundamento objetivo y razonable, da lugar a un "...desequilibrio frente a la igualdad de condiciones que debe informar el mercado de bienes y servicios frente a similares o iguales actividades, que se desarrollan con fundamento en la libertad económica cuyo ejercicio garantiza el Constituyente...", con vulneración del principio de igualdad.</p> <p>2. Autonomía de las personas jurídicas y la libertad contractual. Derecho de propiedad (C.P., arts. 287 y 58). Para la libelista, con el mandato enjuiciado de la disposición censurada, el legislador desconoció el derecho patrimonial de la libertad negocial - corolario de la libertad de empresa (C.P., art. 58 y 333), constitucionalmente garantizado a las personas públicas a las cuales se refiere la Ley 448 de 1998 - y transgredió el artículo 2o. de la Constitución Política, por ignorar los fines del Estado, al seleccionar la sociedad fiduciaria que deberá manejar sus recursos, en cuanto se invadió la órbita de la autonomía de las entidades territoriales, la cual debe reflejarse en la administración, inversión y ejecución de dichos recursos (C.P., art. 287).</p> <p>Sobre ese último tema precisa que la única competencia que en esas materias definió el Constituyente al legislador, es la concerniente a las propias de la Ley Orgánica del Presupuesto y "sólo en lo previsto para la "programación, aprobación, modificación y ejecución" de los mismos (artículo 352)..."</p>
--	--



	<p>Igualmente, afirma que, en ese orden de ideas, la norma cuestionada conculca el derecho de propiedad de las personas jurídicas, adquirido o derivado del libre ejercicio de una actividad económica (C.P., arts. 58 y 333), el cual presenta la categoría de fundamental en cuanto se encuentra en relación de conexidad con los derechos fundamentales de aplicación directa, como el de la igualdad.</p> <p>3. Violación a la iniciativa gubernamental legislativa y a la reserva orgánica legal, habida cuenta que la preceptiva legal acusada requería de iniciativa gubernamental (C.P., art. 154) y porque, dada su naturaleza de ley ordinaria, no podía modificar el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ni presentar una temática propia de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (C.P., art. 288), como a juicio de la actora sucede con la distribución que allí se establece de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.</p> <p>En consecuencia, la demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad de la disposición demandada, con base en la prevalencia de la normativa constitucional vigente (C.P., art. 4o.) y en el sometimiento que a la misma debe el Congreso de la República en su actividad, como poder constituido que es (C.P., art. 6o. y 123).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-066/99
Fecha de la sentencia	diez (10) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Fajardo Glauser.
Demandado	Normas acusadas: Artículos 3º, numerales 5º y 6º (parciales); 6º parágrafos 1º, 2º y 3º (parcial) de la ley 105 de 1993, y contra los artículos 11, 12, 59, 60, 86 (parciales) y, 89 (parcial) de la ley 336 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORÓN DÍAZ Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.

Decision	<p>Primero.- ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia C-490 de 1997 que declaró la exequibilidad de la expresión “de selección del recurso humano” del artículo 12 de la Ley 336 de 1996.</p> <p>Segundo.- ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia C-043 de 1998, que declaró la exequibilidad de la expresión “y los prestadores del servicio público de transporte que se encuentren con licencia de funcionamiento tendran dieciocho (18) meses a partir de la reglamentación para acogerse a ella” del parágrafo del artículo 11 de la Ley 336 de 1996.</p> <p>Tercero.- Declárase INEXEQUIBLE la expresión “a través del Ministerio de Transporte o sus organismos adscritos”, contenida en el inciso tercero del numeral 5 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993.</p> <p>Cuarto.- Declaránse EXEQUIBLES el inciso cuarto del numeral 6 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993; los párrafos segundo y tercero del artículo 6 de la misma ley, modificado por el artículo 2 de la Ley 276 de 1996; el inciso tercero del artículo 11 de la Ley 336 de 1996; el artículo 12 de la Ley 336 de 1996; el artículo 57 de la Ley 336 de 1996; el parágrafo primero del artículo 59 de la Ley 336 de 1996; y el artículo 60 de la Ley 336 de 1996.</p> <p>Quinto.- Declaránse INEXEQUIBLES el parágrafo del artículo 11 de la Ley 336 de 1996; la expresión “única” del inciso segundo del artículo 86 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 89 de la Ley 336 de 1996.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La actora considera que las amplias facultades reglamentarias que el legislador concedió al Gobierno en materia de servicio público de transporte vulneran los artículos 150-23 y 365 de la Carta, por tratarse de una delegación de potestades legislativas no permitidas por la Constitución y, por quebrantar el principio de la autonomía territorial, al abarcar y centralizar funciones que son propias de los departamentos y municipios. Según su criterio, los diversos temas relativos al servicio público de transporte “son de naturaleza local por cuanto están ligados al tamaño del municipio, a las clases de servicios que existen, a la orientación que debe darse para garantizar una mayor calidad, y en general, a las necesidades particulares que solo las autoridades municipales y distritales pueden evaluar y satisfacer”. La demandante reconoce que en esta temática existen situaciones que son de interés nacional, pero en tal caso, según su parecer, la ley debe concretar criterios claros para no desconocer las facultades propias de las instancias</p>

	<p>regionales y locales.</p> <p>La actora anota que en el campo del servicio de transporte público terrestre existe una competencia concurrente de regulación normativa entre los departamentos y municipios, en “aquellos temas que particularmente atañen a las necesidades y condiciones de su territorio”, para lo cual se fundamenta en la sentencia C-539 de 1995 de la Corte, que establece la aplicación de los principios en materia de distribución de competencias entre las autoridades nacionales y locales. Según su parecer las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, en especial en lo que se refiere a los apartes demandados no establecen claramente cuáles son las competencias de reglamentación entre la nación y las entidades territoriales.</p> <p>La actora precisa además que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en especial la sentencia C-290/97, “ha sido clara en señalar que el ejercicio de la facultad reglamentaria está supeditado a unos contenidos mínimos establecidos por el legislador, pues de lo contrario, ante la falta de materia legal previa, al reglamentar se estaría legislando. Es así como, la potestad reglamentaria requiere un desarrollo legal antecedente, específico y concreto”. La demandante considera entonces que las amplias facultades que el legislador otorgó al Gobierno Nacional en las normas acusadas es inconstitucional, pues su generalidad y amplitud permiten que la facultad del ejecutivo abarque toda la materia y se desborde, de tal manera que invade competencias propias de los departamentos, municipios o distritos (art. 300 num 2 y Art. 301 C.P.). De igual forma, deja en manos del ejecutivo no sólo la legislación sobre aspectos estructurales, sino también la definición de la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Según su criterio:</p> <p><i>“La intención del Constituyente de 1991 fue recuperar la facultad legislativa del Congreso, que se había visto disminuida especialmente por la excesiva utilización de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo y por ello dicha institución fue restringida (Artículo 150-10 C.P.). Es inadmisibles que ahora frente a la restricción anotada, la vía a través de la cual se desconozca la legítima intención del Constituyente sea mediante una interpretación desnaturalizada de la potestad reglamentaria que traslada al Gobierno el ejercicio de la competencia legislativa. Todo ello con un agravante adicional: a diferencia de las facultades extraordinarias, la potestad reglamentaria no está sometida a los límites y controles de precisión y temporalidad que rigen a las primeras y que contribuyen a garantizar el principio según el cual el ejecutivo solo debe legislar por excepción”.</i></p> <p>De la misma manera, reitera la actora que al legislador le compete</p>
--	--

	<p>exclusivamente y, bajo parámetros muy concretos, expedir las normas y directrices generales que regulan el servicio público de transporte pero sin desconocer las facultades de las instancias regionales y locales. Por lo tanto, según su parecer, el ejecutivo debe limitarse a “reglamentar exclusivamente aspectos que sean considerados necesarios para la preservación del estado unitario, bajo parámetros muy concretos y específicos que le fije el legislador”.</p> <p>Con base en lo anterior, la actora entra a analizar la inconstitucionalidad de las distintas disposiciones acusadas.</p> <p>1- La demandante considera que la facultad atribuida en el artículo 3º numeral 5º inciso 3º de la Ley 105 de 1993 al Gobierno Nacional vulnera los artículos 150-23, 287, 300 num 2 y 301 de la Carta ya que desconoce la autonomía territorial y es una facultad exclusiva del legislador establecer la normatividad general en materia de transporte y de redistribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Además, según su criterio, la facultad delegada por el Congreso al ejecutivo en lo que respecta al transporte terrestre automotor parece una equivocación. Así, la misma norma estipula que uno de los criterios para señalar estas condiciones son “los estudios técnicos que se elaboren en énfasis en características de oferta y demanda”, los cuales obedecen a las particularidades propias de cada una de las entidades territoriales, por lo cual corresponde a las autoridades regionales y locales elaborarlos y determinar sus propias necesidades.</p> <p>2- En cuanto al artículo 3º numeral 6º inciso 4º de la Ley 105 de 1993, la demandante observa que se atribuye al Gobierno Nacional la facultad de reglamentar las condiciones de carácter técnico u operativo para la prestación del servicio, con base en estudios de oferta, demanda y capacidad transportadora, como aspecto propio de la libertad de empresa. Según su parecer el legislador tiene la facultad de garantizar la libertad de empresa y, por ende, le compete establecer éstas condiciones para determinar cuáles son las competencias de las autoridades locales.</p> <p>La actora estima entonces que ambas normas desconocen la situación particular de cada territorio e ignoran la existencia de “requisitos para otorgar rutas, o requisitos técnicos y operativos para la prestación del servicio, especialmente en materia de transporte público terrestre, que pueden ser diferentes en cada una de las entidades territoriales”. Por último, señala la ciudadana, que “no es válido contra argumentar que la inconstitucionalidad se presentaría en los decretos del Gobierno por extralimitación de funciones”, porque el problema radica en la omisión del legislador de establecer la normatividad general de transporte y la</p>
--	---

	<p>redistribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.</p> <p>3- La actora observa que el aparte demandado del párrafo 2 del artículo 6 de la Ley 105 faculta al Ministerio de Transporte para “definir, reglamentar y fijar” los requisitos para la transformación de vehículos del servicio público de pasajeros y/o mixto, con el objeto de ampliar su vida útil hasta por diez años más. Según su opinión, esta delegación de competencias del legislador al Ministerio es absoluta, pues la norma no establece ningún parámetro para la regulación de dichos requisitos e invade el ámbito de competencias propio de las autoridades regionales y locales, ya que impide a éstas ejercer los poderes de acción en materia de transporte dentro de sus territorios. Por ello considera que el legislador debió ser más estricto en relación con la reposición de vehículos del transporte público colectivo y/o mixto por cuanto la falta de precisión en este aspecto afecta la calidad del servicio y la seguridad de los pasajeros.</p> <p>4- En cuanto al artículo 11 y 12 de la Ley 336 de 1996, la demandante considera que viola los artículos 150-23 y 287 de la Constitución. Según su criterio, esa norma no sólo faculta al Gobierno a fijar las condiciones para el otorgamiento de la habilitación a las empresas prestadoras del servicio público de transporte, sino que permite abordar toda la materia, con lo cual desconoce las competencias propias de las entidades territoriales. Por ello, según su parecer, no se puede reglamentar a nivel nacional la situación particular de cada departamento, municipio o distrito, según las necesidades del servicio.</p> <p>5- En lo que respecta al aparte demandado del artículo 57 de la Ley 336 de 1996, estima la demandante que vulnera los artículos 288 y 300-2 de la Carta. Observa que el precepto acusado constituye de un lado, una intromisión indebida del Ministerio de Transporte en las competencias de las entidades territoriales ya que permite tomar decisiones relacionadas con la infraestructura de transporte en áreas metropolitanas o entre ciudades con alto grado de influencia recíproca. Por ello concluye que la competencia que esta disposición otorga al ministerio es inconstitucional, “en el supuesto previsto en la norma cuando el servicio sea intermunicipal, porque de esta manera se desconocen por completo las funciones de las Asambleas Departamentales en la regulación del servicio dentro de su jurisdicción”.</p> <p>6- La demandante observa que el artículo 60 de la ley 336 de 1996 vulnera las garantías propias del debido proceso, ya que permite revocar directamente los actos administrativos de carácter particular de las autoridades locales, quedando éstos en un limbo</p>
--	--

	<p>jurídico pues, “en cualquier momento pueden llegar a carecer de obligatoriedad, validez y fuerza jurídica”. De otro lado, según su parecer, la revocatoria directa de los actos de las entidades territoriales no garantiza derechos adquiridos y crea incertidumbre e incredulidad de los particulares sobre las decisiones de las autoridades locales.</p> <p>7- La actora observa que el artículo 86 inciso 2 de la Ley 336 de 1996 vulnera abiertamente la autonomía territorial, pues autoriza al Ministerio de Transporte a constituirse en la autoridad “única” de transporte para la administración de los sistemas de transporte masivo, estableciendo una competencia absolutamente excluyente respecto de las autoridades de las entidades territoriales. También desconoce “por completo el principio de concurrencia de competencia (Art. 288 C.P.) y vacía el ámbito que corresponde a las autoridades locales, frente a un tema como la planeación y organización del transporte masivo de pasajeros, que hacia el futuro es crucial para el desarrollo municipal, especialmente en las grandes ciudades”.</p> <p>8- Finalmente, el artículo 89 de la ley 336 de 1996 establece la facultad al Gobierno de expedir la reglamentación de cada uno de los modos de transporte. Según la demandante, la atribución concedida es bastante amplia, “en principio podría pensarse que se trata de la concesión de facultades extraordinarias por la fijación del termino (un año), dado que el ejercicio de la potestad reglamentaria no puede condicionarse en el tiempo como lo ha reconocido la Corte”, ya que no se encuentra sometida a los límites y controles de precisión y temporalidad que rigen a las facultades extraordinarias. Sin embargo, reitera la ciudadana, “la norma no respeta la fórmula expresa que se utiliza cuando se conceden las facultades extraordinarias y tampoco contempla el requisito de precisión, como se observa en su carácter genérico”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO</p> <p>ACTIVIDAD DE TRANSPORTE-Naturaleza (Salvamento de voto)</p> <p><i>El transporte consiste en la movilización de personas o de cosas de un lugar a otro, por distintos medios o modos, como pueden ser el transporte aéreo, terrestre, fluvial, férreo, etc. Esa movilización puede ser directamente realizada por el interesado, o por el contrario éste puede recurrir a personas o entidades que están</i></p>

	<p><i>dedicadas a prestar esos servicios. A su vez, estas empresas especializadas pueden ofrecer ese servicio de manera puntual a un usuario específico, o por el contrario brindarlo en forma masiva a la colectividad, por medio de sistemas de transporte público. El transporte es entonces una actividad material que a veces realizan las propias personas, como ocurre cuando un individuo desplaza directamente sus pertenencias de un lugar a otro. Pero no es sólo eso: el transporte es también un servicio comercial prestado por ciertas entidades especializadas y adquiere el carácter de servicio público en el caso de los transportes masivos. Es pues posible diferenciar, como lo señala la doctrina y lo establecen los artículos 4º y ss de la Ley 336 de 1996, entre la actividad transportadora como tal, el servicio privado de transporte, que satisface las necesidades de movilización de personas y de cosas, pero dentro del marco de las actividades exclusivas de los particulares, y, finalmente, el servicio público del transporte.</i></p> <p>ACTIVIDAD DE TRANSPORTE-Regulación encuentra fundamento en normas constitucionales (Salvamento de voto)</p> <p><i>La regulación del transporte encuentra fundamento en distintas disposiciones constitucionales. Así, en cuanto actividad económica y servicio comercial privado, el transporte cae bajo el ámbito de la intervención general del Estado en las distintas actividades económicas. Esta intervención puede además llegar a ser muy importante, si se tiene en cuenta el papel esencial que juegan los transportes en el dinamismo económico de las sociedades. Fuera de lo anterior, aquellas actividades de transporte que constituyen un servicio público se encuentran también reguladas por los mandatos constitucionales sobre la función social de estos servicios. Esto significa que el servicio público de transporte, si bien puede ser prestado por los particulares, su regulación, dirección, control y vigilancia corresponde expresamente al Estado, quien tiene la responsabilidad de garantizar una prestación eficiente del mismo.</i></p> <p>ACTIVIDAD DE TRANSPORTE-Competencia para regulación corresponde al legislador (Salvamento de voto)</p> <p><i>La única disposición constitucional que expresamente atribuye a una autoridad específica la regulación del transporte es el referido artículo 300 relativo a las funciones de las asambleas departamentales, por lo cual podría concluirse que sólo estos cuerpos administrativos departamentales tienen la capacidad de expedir normatividades sobre ese tema, por tratarse de una competencia exclusiva de esas entidades. Sin embargo esa conclusión es inadmisibles, no sólo por cuanto en general las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación,</i></p>
--	---

	<p><i>conurrencia y subsidiariedad, por lo cual "generalmente las competencias que se ejercen en los distintos niveles territoriales no son excluyentes", sino, además, porque desconoce los otros fundamentos constitucionales de la intervención reguladora del Estado en el transporte, ya señalados en esta sentencia, y que claramente muestran que otras autoridades públicas, y en especial el Congreso y el Gobierno Nacional, tienen competencias claras en esta materia. Así, si el transporte es en determinados casos un servicio público, es claro que su régimen jurídico debe ser fijado por la ley. Igualmente, si la idoneidad del transporte incide en el goce de los derechos fundamentales y en la preservación de la seguridad de las personas, es obvio que la regulación de esta materia no puede ser extraña a las autoridades nacionales ya que a éstas, como a las otras entidades territoriales, les corresponde garantizar el bienestar y la seguridad de todos los colombianos en igualdad de condiciones. Finalmente, la formación de un mercado nacional y la integración del territorio implican la articulación de los distintos modos de transporte en un verdadero sistema nacional de transporte que permita precisamente el intercambio de bienes y servicios en toda la geografía colombiana. La ley debe entonces regular la intervención estatal en esta materia para, entre otras cosas, fortalecer la integración económica del país y promover el desarrollo armónico de las regiones, por medio de la consolidación de un sistema nacional de transporte, cuya regulación es una competencia de las autoridades nacionales, y no de las entidades territoriales, en función del principio de unidad del mercado.</i></p> <p>ACTIVIDAD DE TRANSPORTE-Regulación por autoridades nacionales/PRINCIPIO DE UNIDAD DEL MERCADO/AUTONOMIA TERRITORIAL-Debe respetarse cuando se expiden reglas generales por legislador (Salvamento de voto)</p> <p><i>Las autoridades nacionales pueden regular el transporte cuando se vean involucrados intereses nacionales, como la preservación de la unidad del mercado o la protección de la igualdad de los derechos de todos los colombianos, pero sin vaciar de contenido las competencias sobre los asuntos locales de las entidades territoriales, salvo en aquellos casos en que, en función del principio de subsidiariedad, deba la autoridad de nivel superior intervenir. Por ello esta Corporación ha señalado que el establecimiento de reglas generales nacionales por el Legislador debe respetar los núcleos de autonomía territorial.</i></p> <p>SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE-Corresponde a la ley establecer régimen jurídico/RESERVA LEGAL (Salvamento de voto)</p> <p><i>La Corte recuerda las distintas dimensiones del transporte, que es actividad privada en ciertos casos, y servicio público en otros</i></p>
--	--



	<p><i>eventos. Ahora bien, en relación con aquellas actividades que configuran el servicio público de transporte, es claro que a la ley corresponde establecer el régimen jurídico, por lo cual la definición del mismo tiene reserva legal. Además, en función del principio democrático y de la cláusula general de competencia del Congreso, la ley puede entrar a regular otras materias de los servicios públicos, y entre ellos el transporte. De otro lado, en relación con aquellas actividades de transporte que no configuran un servicio público, la regulación nacional se encuentra enmarcada dentro de las amplias posibilidades que tiene el Estado de intervenir en la economía, por mandato de la ley. Por ende, tal y como esta Corte lo ha señalado, en estos eventos “la dirección estatal se efectúa por el Gobierno con base en leyes de intervención que deben precisar sus fines, sus alcances y los límites de la libertad económica.</i></p> <p>SERVICIOS PUBLICOS-Regulación no es necesariamente por ley (Salvamento de voto)</p> <p><i>La competencia de regulación de los servicios públicos es genéricamente estatal, lo cual obviamente no significa que esa facultad pueda ser atribuida por la ley a cualquier entidad estatal, por cuanto la Constitución delimita, en materia de servicios públicos, algunas órbitas específicas de actuación de las distintas ramas de poder, las cuales deben ser respetadas. Sin embargo, es claro que no toda competencia reguladora de los servicios públicos es necesariamente legal, pues el Congreso puede radicarla en otros entes estatales.</i></p> <p>SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE-Legitimidad constitucional de su existencia (Salvamento de voto)</p> <p><i>La Corte considera que no sólo no desconoce sino que desarrolla plenamente los principios y valores constitucionales que la ley pretenda establecer un sistema integrado de transporte, ya que de esa manera el Estado fortalece la integridad del territorio y la unidad del mercado, potencia la seguridad de los desplazamientos de las personas y las cosas, y favorece la libre circulación de todos los colombianos. Igualmente en principio es válido que se atribuya a un ministerio, en este caso al del transporte, la dirección del sistema y la formulación general de las políticas en este campo, puesto que claramente la Carta señala que a los ministros, como jefes de la administración en su respectiva dependencia, les corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, formular las políticas atinentes a su despacho. Sin embargo, lo anterior no significa que sean legítimas todas las atribuciones conferidas por la ley al Ministerio del Transporte como autoridad rectora del Sistema Nacional de Transporte, ya que algunas, como lo indica la actora, podrían desconocer la autonomía territorial o recaer sobre asuntos</i></p>
--	--

	<p><i>que tienen reserva de ley.</i></p> <p>SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE-Condiciones para el otorgamiento de rutas/SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Y AUTONOMIA TERRITORIAL-Rutas locales (Salvamento de voto)</p> <p><i>En principio es legítimo que, con base en estudios técnicos, las autoridades nacionales señalen unas condiciones generales básicas, de naturaleza operativa y técnica, que deben reunir las distintas rutas, según los diversos modos de transporte. Esta regulación nacional uniforme encuentra sustento en la búsqueda de una mayor seguridad y coherencia e integración entre los distintos medios de transporte, que son asuntos de interés nacional, que es legítimo que sean abordados por las autoridades nacionales. Además, debido a que las circunstancias relevantes son variables, puesto que dependen de la evolución de la oferta y demanda, es razonable que las condiciones para otorgar las rutas sean definidas por un acto administrativo, y no por la ley. Y además es válido que sea así, en el entendido de que se trata de condiciones de tipo técnico y operativo, y no materias propias del régimen jurídico del transporte, por cuanto estas últimas, en el caso del servicio público de transporte, tienen reserva legal. La Corte se ve obligada a condicionar el alcance de la disposición impugnada, la cual será declarada exequible, pero en el entendido de que se trata únicamente de la definición de condiciones operativas y técnicas básicas y generales, pero que corresponde a las entidades territoriales concretarlas en sus territorios y definir los trazados de las rutas locales.</i></p> <p>SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE-Condiciones para prestar servicio y habilitar empresas y formas asociativas de transporte (Salvamento de voto)</p> <p><i>La definición de condiciones generales nacionales, operativas y técnicas, para otorgar la habilitación o para que operen los prestadores del servicio de transporte, encuentra amplio sustento constitucional, en la protección de la seguridad, la prevalencia de la unidad de mercado y la garantía del derecho a la libre circulación. Nótese además que los artículos precisan que se trata de condiciones operativas, técnicas, económicas, o de organización, las cuáles no tienen obligatoriamente reserva legal, ya que no se refieren al régimen jurídico del servicio público del transporte. Además, esas condiciones son variables, por lo cual es razonable que sean definidas por una reglamentación administrativa, que puede ser más fácilmente adaptada a los cambios de circunstancias que la ley.</i></p> <p>VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO-Reposición y transformación</p>
--	---

	<p>(Salvamento de voto)</p> <p><i>La existencia de una reglamentación nacional para la conversión de los vehículos para que puedan seguir prestando el servicio de transporte terrestre encuentra sustento en la protección de la seguridad, el amparo al derecho a la circulación de los colombianos y la prevalencia de la unidad del mercado nacional. En efecto, es razonable que la ley señale que las exigencias técnicas para que un vehículo siga prestando un servicio de transporte terrestre sean nacionales, por cuanto está en juego la vida y la seguridad de los pasajeros, así como la coherencia de la red de transporte. Es más, en estos casos operan incluso importantes razones ecológicas que justifican estas regulaciones nacionales, pues los vehículos que no reúnen las condiciones técnicas adecuadas son altamente contaminantes, y esos daños ecológicos suelen proyectarse más allá del espacio puramente local. Por todo ello, en los procesos de integración económica, la tendencia dominante es a establecer requisitos uniformes supranacionales para todos los vehículos que quieran operar en el marco de un determinado mercado común, ya que sólo de esa manera se aseguran mercados dinámicos, seguros y ecológicamente sostenibles. De otro lado, es obvio que la normatividad expedida por el Gobierno Nacional para la transformación de los vehículos es de naturaleza eminentemente técnica, por lo cual es una materia que no tiene reserva legal, y puede entonces ser atribuida al Ministerio de Transporte.</i></p> <p>VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO-Fecha límite para retirar vehículos de reposición (Salvamento de voto)</p> <p><i>Esta Corporación mantendrá en el ordenamiento el parágrafo del artículo 59 de la Ley 336 de 1996, por cuanto esa norma se limita, de un lado, a ampliar las fechas límites para que los vehículos no transformados dedicados al servicio de transporte sean retirados y, de otro lado, reitera la competencia del Gobierno Nacional para expedir la reglamentación para la reposición de estos vehículos a fin de garantizar la seguridad del usuario. Es cierto que esa norma tiene problemas de redacción, de suerte que una primera lectura no permite determinar con claridad su sentido, y en especial hasta que momento se postergó la fecha límite para retirar los vehículos. En efecto, el parágrafo dice que esas fechas se amplían, y establece que la extensión se cuenta a partir de la vigencia de la ley, pero no señala un número de meses o años de ampliación, lo cual genera perplejidad sobre el sentido de la disposición. Sin embargo, si se suprime la expresión "contados a partir de la vigencia de la presente ley", una segunda lectura de la norma sugiere que ésta postergó la fecha hasta el año 1998 para que todos los vehículos modelo 1970 en adelante no transformados sean retirados del servicio, con lo cual carecería de todo efecto normativo la expresión "contados a</i></p>
--	--

	<p><i>partir de la vigencia de la presente ley". Este último sentido es el que efectivamente tiene la norma, no sólo porque es el único razonable sino porque así lo confirma el examen de sus antecedentes legislativos.</i></p> <p>NORMA LEGAL-Defectos de redacción no afectan constitucionalidad (Salvamento de voto)</p> <p><i>Lo cierto es que los defectos de redacción de la disposición no afectan en sí mismos su constitucionalidad, pues finalmente es posible desentrañar su sentido, aun cuando pueden dificultar notablemente su aplicación, debido a los problemas de interpretación legal que generan, por lo cual nuevamente la Corte insiste en la importancia que tiene una adecuada técnica normativa en los procesos de aprobación de las leyes.</i></p> <p>TRANSPORTE TERRESTRE-Competencia para determinar utilización de infraestructura/AUTONOMIA TERRITORIAL Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD (Salvamento de voto)</p> <p><i>En principio el cuestionamiento de la expresión acusada del artículo 57 de la Ley 336 de 1996 parece tener sustento ya que corresponde a las propias entidades territoriales determinar la utilización de su propia infraestructura de transporte, por tratarse de la gestión de un interés local. La norma restringe entonces la autonomía de los municipios. Sin embargo, también es cierto que las distintas redes locales de transporte se articulan de tal manera que se integran en un sistema nacional de transporte, que debe ser coherente, lo cual parece autorizar la intervención del Ministerio del Transporte en casos complejos, o en los eventos de servicios intermunicipales de transporte terrestre, por cuanto de esa manera se asegura una mayor coordinación entre las distintas infraestructuras municipales de transporte. La restricción a la autonomía municipal puede entonces ser adecuada para alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, como es asegurar una mayor armonía del sistema nacional de transporte. Con todo, lo que resulta constitucionalmente cuestionable es que la medida afecta de manera desproporcionada la autonomía territorial, por cuanto desconoce los principios constitucionales que gobiernan el reparto de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (CP art. 288), y en especial el principio de subsidiariedad. La expresión acusada persigue una finalidad constitucionalmente importante pero desconoce el principio de subsidiariedad. Por tal razón la Corte mantendrá en el ordenamiento esa disposición, pero en el entendido de que deberá ser aplicada teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad. Esto significa que el Ministerio del Transporte sólo puede legítimamente asumir conocimiento en caso de que ni las autoridades municipales ni las autoridades</i></p>
--	--

	<p><i>departamentales sean capaces de coordinar la utilización de la infraestructura de transporte de los distintos municipios, en los eventos previstos por la propia disposición.</i></p> <p>SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE Y REVOCATORIA OFICIOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE AUTORIDADES LOCALES (Salvamento de voto)</p> <p><i>Una interpretación sistemática de la norma acusada muestra que el Ministerio del Transporte sólo puede revocar los actos particulares de las autoridades locales con el consentimiento del afectado, lo cual protege suficientemente sus derechos e intereses, o en las dos hipótesis excepcionales anteriormente mencionadas, y que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que no desconocen en sí mismas el debido proceso, por cuanto encuentran una justificación razonable y son de interpretación estricta. Por ende, conforme a ese entendimiento, el artículo impugnado es compatible con el debido proceso. Para la Corte, el encabezado de la norma acusada es significativo. En efecto la disposición precisa que esa revocatoria de los actos administrativos de las autoridades locales de transporte terrestre es posible, "teniendo en cuenta su pertenencia al Sistema Nacional de Transporte", lo cual indica que es la pertenencia al sistema de transporte lo que justifica la revocación. Por ende, conforme al tenor de la propia disposición acusada, no todos los actos administrativos de las autoridades locales son revocables, sino que es necesario no sólo que se presenten las hipótesis previstas por los artículos 69 y 73 del C.C.A sino que, además, se trate de aquellos actos que estas autoridades locales han expedido como integrantes del Sistema Nacional de Transporte. Así interpretada, la disposición no afecta la autonomía territorial, pues si el Ministerio del Transporte actúa como órgano rector de ese sistema nacional, es factible que la ley le confiera la facultad de revocar los actos expedidos por los órganos subalternos.</i></p> <p>SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO-Ministerio de Transporte no puede ser autoridad única/PRINCIPIO DE CONCURRENCIA EN EL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA NACION Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES/PRINCIPIO DE COORDINACION INSTITUCIONAL (Salvamento de voto)</p> <p><i>Es válido que la ley atribuya a una entidad nacional, como el Ministerio del Transporte, el papel de autoridad rectora para la gestión de los transportes masivos, la cual podrá, dentro de la órbita de sus competencias, expedir regulaciones generales básicas para todo el país. Sin embargo, la expresión "Autoridad Unica" contenida en el precepto acusado es problemática y parece confirmar las acusaciones de la demandante, ya que la norma parece atribuir al Ministerio del Transporte -esto es, a una entidad</i></p>
--	---

	<p><i>nacional- la administración exclusiva de los sistemas de transporte masivo y la toma de todas las decisiones relevantes en este campo. La expresión "Autoridad Unica" plantea entonces problemas constitucionales. Es cierto que el propio artículo acusado parece matizar el alcance de esa denominación puesto que precisa que el Ministerio debe actuar con "los criterios de coordinación institucional". Ahora bien, esta Corte ha señalado que el principio de coordinación, que tiene raigambre constitucional, "no puede identificarse con el de control o tutela", por cuanto la coordinación "implica participación eficaz en la toma de decisiones, que es la única forma legítima, en un Estado democrático, de llegar a una regulación entre intereses diversos, así como la mejor manera de ponderar aquellos intereses que sean contradictorios". Por ende podría entenderse que la disposición ordena al ministerio concertar sus acciones con las autoridades de las distintas entidades territoriales, en función del principio de coordinación. Sin embargo, esta interpretación no sólo no es la única que admite la disposición sino que de todos modos el desconocimiento de la autonomía subsiste, pues la disposición impugnada confiere el papel de autoridad única al Ministerio de Transporte, con lo cual es evidente el vaciamiento de la competencia de regulación y actuación de las autoridades locales en un tema de vital trascendencia en el desarrollo urbano. Por el contrario, la Corte considera que la disposición deja de plantear esos problemas constitucionales, si se entiende que el Ministerio de Transporte es una autoridad nacional única en la Administración de Sistema de Transporte Masivo pero debe respetar las competencias de regulación concurrentes de las autoridades locales, en los asuntos locales, y sólo puede, de conformidad con el principio de subsidiariedad, intervenir en estas esferas estrictamente locales cuando las autoridades locales sean incapaces de administrar esos sistemas.</i></p> <p>POTESTAD REGLAMENTARIA EN TRANSPORTE/REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN TRANSPORTE/REGLAMENTACION GUBERNAMENTAL DE MODOS DE TRANSPORTE Y HABILITACION (Salvamento de voto)</p> <p><i>Los artículos 11 y 89 de la Ley 336 de 1996 no pueden establecer unas facultades extraordinarias, por cuanto estas no sólo excederían el tiempo constitucionalmente previsto en una de ellas sino, además, porque carecen de la suficiente precisión sobre la materia a ser desarrollada, y tampoco fueron solicitadas por el Gobierno al presentar el correspondiente proyecto. Por consiguiente, al no ser unas facultades extraordinarias, todo indica que se trata de una referencia al ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno. Así lo ha entendido el propio Gobierno que ha invocado la potestad reglamentaria -esto es, el artículo 189 ord 11- al expedir decretos relacionados con los mencionados</i></p>
--	---

	<p><i>artículos 11 y 89 de esa ley. Es más, en anterior oportunidad esta Corporación había estudiado la constitucionalidad de unos apartes del párrafo del artículo 11 y había concluido que los decretos expedidos con base en ese párrafo no eran decretos leyes. Estamos pues en presencia de reglamentos administrativos.</i></p> <p>POTESTAD REGLAMENTARIA-Características/POTESTAD REGLAMENTARIA-Plazo no es en si mismo inconstitucional (Salvamento de voto)</p> <p><i>Como bien lo tiene establecido esta Corporación, para el Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria es una atribución constitucional permanente radicada en su cabeza, la cual "no tiene límite temporal alguno". Por ello esta Corte había precisado que "la potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo". Por consiguiente, habría que concluir que es necesario declarar la inexequibilidad de las normas acusadas, que estarían desconociendo la naturaleza permanente e inagotable de la potestad reglamentaria del Gobierno. A pesar de lo anterior, la Corte considera que no resulta procedente retirar del ordenamiento esas disposiciones. En primer término, el mero señalamiento de esa posibilidad de reglamentación no es en sí misma inconstitucional, pues esta Corporación ya había establecido que si bien la potestad reglamentaria "no requiere, para su ejercicio, autorización de ninguna clase por parte del legislador", sin embargo "si el legislador hace referencia a esta facultad, tal mención no hace inconstitucional la norma, pues se debe entender sólo como el reconocimiento de la competencia constitucional del Ejecutivo". Con todo, se podría argumentar que lo que es contrario a la Carta es la fijación de un lapso determinado para ejercer esa potestad, y que por ende al menos ese aparte debe ser declarado inexecutable. Sin embargo, esta Corporación considera que esos plazos no son en sí mismos inconstitucionales, siempre y cuando se entienda que ellos no limitan temporalmente la potestad reglamentaria gubernamental como tal, la cual, por ser una atribución constitucional propia, no requiere de habilitación legislativa y puede ser ejercida por el Ejecutivo en cualquier momento, siempre y cuando exista un contenido legal a ser reglamentado.</i></p> <p>LEY-Plazo para reglamentación (Salvamento de voto)</p> <p><i>Cuando el Congreso establece un plazo para la reglamentación de una ley, está manifestando una voluntad de que ésta sea llevada a la práctica en un determinado término. Y si bien, ese plazo no puede limitar la potestad reglamentaria del Gobierno, quien podrá de todos modos reglamentar posteriormente la ley una vez vencido el</i></p>
--	--

	<p><i>término, sin embargo, tal referencia temporal mantiene efectos políticos y jurídicos. Así, el no cumplimiento de la reglamentación durante el plazo fijado por la ley podría dar lugar a responsabilidades del Gobierno, en especial políticas, pues estaría desconociendo una voluntad legislativa; o en otros eventos podría dar lugar incluso a que sean eficaces acciones judiciales destinadas a garantizar el cumplimiento de la norma legal en cuestión. En efecto, en reciente ocasión, el Consejo de Estado, con criterios que esta Corte comparte, señaló que no era procedente una acción de cumplimiento si la ley no fijaba un plazo para su reglamentación, ya que en tal evento "no se está ante la ocurrencia de un deber que esté en mora de ser realizado, como sí puede suceder, por ejemplo, cuando la ley fija un término perentorio para que se profieran los actos reglamentarios o de desarrollo de la misma, caso en el cual la decisión obedece al ejercicio de la potestad legislativa".</i></p> <p>RESERVA DE LEY ORGANICA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Salvamento de voto)</p> <p><i>En anterior oportunidad, esta Corporación estudió in extenso el alcance de la reserva de ley orgánica en materia de ordenamiento territorial y concluyó que "en general, la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales -tanto normativas como no normativas- es una materia propia de la ley orgánica". La Corte empero precisó en esa misma sentencia que no toda asignación específica de competencias entre la Nación y las entidades territoriales tiene que ser efectuada por una ley orgánica, por cuanto "en algunos casos la propia Constitución distribuye ella misma ciertas competencias, de suerte que una ley ordinaria puede desarrollar el tema con base en las prescripciones generales de la Carta" y, además, "también es posible que la ley orgánica se limite a establecer los principios generales de distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, de suerte que, con base en esa norma orgánica, la ley ordinaria puede asignar competencias específicas". Sin embargo, la sentencia fue clara en señalar que no es admisible "que la ley ordinaria distribuya o asigne competencias entre la Nación y las entidades territoriales, sin que una ley orgánica previa o la propia Constitución hayan establecido los principios generales de esa distribución".</i></p> <p>REPARTO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRANSPORTE/RESERVA DE LEY ORGANICA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA TERRITORIAL (Salvamento de voto)</p> <p><i>La Corte considera que la mejor decisión es la siguiente: en un primer momento, esta Corporación constata, como se hace en esta</i></p>
--	--



	<p><i>parte motiva, que las normas acusadas reparten competencias y violan la reserva de ley orgánica, pero no declara su inexecutable inmediate en la parte resolutive a fin de evitar un efecto desproporcionado, y por ende inconstitucional, debido al vacío normativo que se generaría. La Corte mantiene entonces las disposiciones acusadas dentro del ordenamiento. Esto significa que en ese primer momento, y teniendo en cuenta que a pesar de que la Carta fue expedida hace casi ocho años, de todos modos Colombia sigue viviendo un complejo proceso de transición constitucional, la Corte confiere prevalencia a la seguridad jurídica sobre la autonomía territorial y la conservación de las leyes producidas por el Congreso. Sin embargo, como es deber de esta Corporación proteger la especial jerarquía de la LOOT, esta constitucionalidad no puede ser sino temporal. De esa manera, se otorga al Congreso la posibilidad de que, en ejercicio de su libertad de configuración política, y dentro del plazo necesario, pueda expedir una LOOT que confiera sustento a los repartos de competencias adelantados por leyes ordinarias, como las demandadas en la presente ocasión. El plazo debe ser prudente, puesto que se trata de una materia compleja y difícil; sin embargo, no puede ser un plazo largo, por cuanto el propio Constituyente confirió en muchas de sus normas una importancia estratégica a esta LOOT, que debe entonces ser expedida lo más rápido posible, a fin de permitir la consolidación de los procesos de descentralización y de autonomía territorial. La Corte concluye entonces que, dadas las anteriores circunstancias, un término de dos años es entonces suficiente.</i></p> <p>POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO-Límites (Salvamento de voto)</p> <p><i>La Corte declara la inexecutable de la fijación de límites a la potestad reglamentaria, con el argumento de que ésta es inagotable. Nosotros coincidimos con la sentencia en que la reglamentación de las leyes es una facultad propia del Gobierno, que no puede ser restringida por las normas legales. Sin embargo, como lo mostraba el fundamento jurídico No 29 de la ponencia originaria, la fijación de un plazo es legítima, siempre y cuando se entienda que ésta no limita esa potestad sino que pretende garantizar el cumplimiento de las leyes. Y en tales eventos, esos plazos mantienen una eficacia normativa pues su desconocimiento podría dar lugar a imponer responsabilidades al Gobierno, en especial políticas, pues estaría incumpliendo una voluntad legislativa; o en otros eventos podría dar lugar incluso a que sean eficaces algunas acciones judiciales destinadas a garantizar el cumplimiento de la norma legal en cuestión. Por ello creemos que la decisión de la Corte de retirar del ordenamiento esas expresiones es contraria al principio de efectividad, que es propio del Estado social de derecho, y según el cual las normas legales se expiden para ser</i></p>
--	---

	<p><i>cumplidas. Igualmente, en relación con la potestad reglamentaria, consideramos que es contradictoria y desafortunada la declaración de inexequibilidad de la expresión "el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o de sus organismos adscritos" del inciso tercero del numeral 5º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993. El argumento de la sentencia, en la consideración No 6.1., es que la potestad reglamentaria es del gobierno, y "no puede desplazarse a uno de los ministerios, ni a ninguno otro de los organismos del Estado". Sin embargo esa tesis es inconsistente con el resto de la sentencia, pues no entendemos por qué en relación con esta facultad, la Corte retira del ordenamiento la atribución de esa competencia reguladora al Ministerio de Transporte, pero la mantiene en otros casos muy similares, a saber, para la reglamentación de las condiciones de carácter técnico u operativo para la prestación del servicio (numeral 6º de ese mismo artículo), o para la definición y reglamentación de los requisitos para la transformación de los vehículos terrestres que vienen operando en el servicio público de pasajeros (parágrafo 2º del artículo 6º de esa misma Ley 105 de 1993). No existe nada en la sentencia que permita comprender por qué la facultad reglamentaria del Ministerio es inconstitucional en un caso, mientras que se ajusta a la Carta en los otros dos casos, por lo cual creemos que la sentencia no es coherente en este aspecto.</i></p> <p><b>AUTONOMIA TERRITORIAL EN TRANSPORTE/RESERVA DE LEY ORGANICA Y REPARTO DE COMPETENCIAS (Salvamento de voto)</b></p> <p><i>La sentencia desconoce la autonomía territorial, ya que reserva a la ley y a las autoridades nacionales la regulación de prácticamente todo el tema del transporte. El argumento básico de la Corte es que el transporte es un servicio público, por lo cual su regulación corresponde casi en su totalidad al Congreso. Sin embargo, esa visión absoluta no es admisible, no sólo porque no toda la actividad transportadora constituye la prestación de un servicio público sino, además, por las siguientes razones literales y sistemáticas. Así, la sentencia minimiza el hecho de que el artículo 300 de la Carta atribuye expresamente competencias reguladoras a las asambleas departamentales en materia de transporte, lo cual significa que la Constitución reconoce una dimensión territorial de la normatividad en esta materia. La tesis general de la Corte en esta sentencia permite un vaciamiento de la competencia de las autoridades locales, en un tema esencial para el desarrollo de los municipios y las regiones, como es el transporte. Sorprende que la sentencia ni siquiera discuta si las disposiciones acusadas vulneran o no la reserva de ley orgánica en materia territorial. En efecto, uno de los problemas esenciales en el diseño de un Estado es el reparto espacial de competencias entre las distintas autoridades, locales,</i></p>
--	---

	<i>regionales y nacionales. La Carta reconoce la importancia estratégica de esas definiciones, y por ello precisa que todo reparto de competencias tiene reserva de ley orgánica, a fin de proteger los derechos de las entidades territoriales. Ahora bien, es evidente que la presente ley establece un reparto de competencias, pues nacionaliza la regulación del transporte, al conferir la casi totalidad de las atribuciones en este campo al Gobierno central. Es pues obvio que esas decisiones tienen reserva de ley orgánica, por lo cual creemos que la decisión adecuada era establecer una constitucionalidad temporal, tal y como lo proponía la ponencia originaria. Por el contrario, el silencio de la sentencia sobre el tema es desafortunado. Nos parece que la presente sentencia representa un paso atrás en la protección de la autonomía territorial, la descentralización y la democracia participativa.</i>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO  REVOCATORIA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR POR MINISTERIO DEL TRANSPORTE (Aclaración de voto)</p> <p><i>La revocación directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto adoptados por autoridades locales en materia de transporte, y ello sin el consentimiento de sus titulares, no podía dejarse en cabeza del Ministerio del Transporte sin vulnerar abiertamente el ámbito de autonomía de las entidades territoriales, específicamente la de los municipios, y sin desconocer los derechos de los titulares. Cabe preguntar: ¿puede el Ministerio, sí o no, revocar licencias otorgadas por autoridades locales que no hayan sido logradas por el transcurso del término para configurar el silencio administrativo positivo y que tampoco se hayan obtenido por medios ilegales o fraudulentos, alegando el Ministerio "la pertenencia al sistema nacional del Transporte"? La Corte dice que el artículo es de interpretación estricta, como también el del Código Contencioso Administrativo, luego no es posible. ¿En qué queda, entonces, esa restricción si se ha respaldado de manera íntegra la posibilidad de revocación habida cuenta de "la pertenencia al sistema nacional del transporte", declarando su exequibilidad?</i></p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-782/99
Fecha de la sentencia	trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Demandante	Gustavo Castilla Castilla
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra los artículos 123 de la Ley 104 de 1993, 62 de la Ley 241 de 1995 y 120 de la Ley 418 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- Declárase INHIBIDA para fallar respecto de los artículos 123 de la Ley 124 de 1993 y 62 de la Ley 241 de 1995, por presentarse sustracción de materia.</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 120 de la Ley 418 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que, en lo acusado, las transcritas normas vulneran el artículo 363 de la Constitución Política.</p> <p>El demandante afirma que las disposiciones impugnadas se refieren a la contribución especial denominada "impuesto de guerra", y manifiesta que este tributo, por haber sido expedido al amparo del estado de Conmoción Interior, mediante el Decreto Legislativo 2009 de 1992, fue objeto de control constitucional por parte de esta Corporación, la cual mediante Sentencia C-083 de 1993, lo declaró ajustado a la Carta Política.</p> <p>En la práctica contractual, según su argumento, las entidades del Estado obligan a los contratistas de obra pública a suscribir contratos adicionales que buscan apenas dejar constancia, para efectos presupuestales, del mayor valor que por obra ejecutada se le debe cancelar al contratista, sin que con ello se modifiquen en manera alguna los precios unitarios convenidos al suscribir el contrato principal.</p> <p>Manifiesta que los inconvenientes se presentan cuando, al suscribirse el contrato adicional y darle aplicación a las normas demandadas, que se refieren al impuesto de guerra por valor del 5% de ese adicional, se disminuye el precio unitario acordado entre las partes antes de la vigencia de cada una de esas normas, así estas fuesen anteriores al contrato adicional.</p> <p>A juicio del actor, si bien es cierto que cuando los contratistas suscribieron los contratos adicionales conocían la existencia de la ley que estableció la contribución especial o impuesto de guerra, también lo es que no podían tenerlo en cuenta al fijar los precios</p>

	<p>unitarios para los contratos adicionales, en atención a que en éstos no se les podían incluir factores diferentes a aquellos que el contratista tuvo en cuenta en el momento de presentar su propuesta, porque así lo ordenan las normas y el contrato principal.</p> <p>Considera violado el artículo 363 de la Constitución Política, en razón de la aplicación retroactiva del impuesto de guerra, en la medida en que los contratos anteriores -cuyo valor se determina multiplicando las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por sus precios unitarios-, quedan disminuidos en un porcentaje igual al 5%, que es el monto de la contribución especial.</p> <p>Finalmente solicita que si la Corte considera las normas demandadas ajustadas a la Constitución, condicione su exequibilidad en relación con el contrato a precios unitarios, entendiendo que el contrato de adición sujeto al tributo es el que se pacta en relación con un contrato inicial celebrado durante la vigencia de la norma que crea el impuesto.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-222/99
Fecha de la sentencia	catorce (14) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Demandante	Maria Cristina Riveros Ruiz y Yolanda Obando Montes
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 71, literal e), de la Ley 201 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el literal e) del artículo 71 de la Ley 201 de 1.995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>Consideran las impugnantes que la disposición parcialmente acusada vulnera los artículos 13 y 123 de la Constitución Política.</p> <p>Manifiestan que tanto la Ley 200 como la 201, ambas de 1995, respecto de las competencias en materia disciplinaria, señalan al sujeto pasivo en forma general como servidor público y excepcionalmente de acuerdo con la denominación del cargo que desempeñan.</p> <p>La disposición acusada establece, según ellas, lo contrario. Afirman que, al efectuar una interpretación armónica entre los ordenamientos relativos a la materia, se concluye que tal norma se destina a los servidores públicos del orden municipal, definidos por el artículo 123 de la Constitución Política, "pues el concepto funcionario se asimila únicamente al empleado público, es decir quien tiene una vinculación laboral con el Estado, sino a quien ejerce una función pública".</p> <p>De la expresión acusada se deduce, al tenor de la demanda, que, respecto de quienes ejercen las funciones contempladas en la norma dentro del territorio municipal, existe la competencia exclusiva en cabeza de las procuradurías provinciales.</p> <p>Finalmente afirman que esta situación ocasiona una discriminación y desigualdad frente a los concejales municipales, quienes, estando en igualdad de condiciones y en la misma comprensión territorial que los demás servidores públicos, no reciben el mismo trato en cuanto a la competencia disciplinaria.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-708/99
Fecha de la sentencia	veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Jorge Luis Pabón Apicella.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”.
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”, en lo referente al cargo estudiado.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del demandante, el desarrollo de la materia disciplinaria se sustenta, de un lado, en la responsabilidad de los servidores públicos por la violación de la Constitución o de la ley, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones y, de otro, en la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción a imponer por dicha violación, en la medida del “valor del interés afectado por la infracción disciplinaria” y en razón de “una razonable proporcionalidad del castigo”; esto, como garantía de los principios de igualdad y debido proceso del investigado y de las actuaciones debidas de la autoridad pública, mandatos constitucionales que deben prevalecer en la normatividad vigente (C.P., arts. 6o., 13 y 29, preámbulo, 2o., 230, 365 y 4o.).</p> <p>En apoyo de lo anterior, el demandante aduce que, en virtud del artículo 90 de la Carta Política, relativo a la responsabilidad de los agentes del Estado por los daños antijurídicos y el artículo 71 de la Ley 270 de 16996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, que trata de la responsabilidad del funcionario y empleado judicial, éste último, por cuanto su acusación se circunscribe a la responsabilidad disciplinaria de estos servidores, existen ciertas conductas consideradas como faltas disciplinarias que para la respectiva punición “no admiten reducción con base en causales de atenuación”, ni regulación sobre su gravedad o levedad, en la forma que lo permite la disposición demandada, en la medida en que “ya vienen constitucionalmente calificadas y asistidas de un criterio de gravedad extrema”, en lo que hace a los eventos de dolo o culpa grave en los cuales pueda incurrir el agente judicial.</p>

	<p>Un comportamiento en esas circunstancias, para el actor atenta gravemente contra los fines y deberes del Estado social de derecho, el servicio esencial de la administración de justicia (C.P., arts. 228, 229 y 230), como pilar de la efectividad de los derechos sustanciales de las personas (C.P., art. 2o.), así como la moral que se le exige a las autoridades judiciales en el ejercicio de sus funciones, que impide graduar la sanción, debiéndose, más bien, ordenar la destitución del empleo o la pérdida de investidura, como ocurre con los juicios de indignidad adelantados ante el Senado de la República (C.P., art. 175-2), toda vez que las actuaciones con dolo o culpa grave a que se refieren los artículos 90 de la C.P. y 71 de la Ley 270/96, el cual los presume, han de entenderse como faltas gravísimas constitutivas de “causales de mala conducta” (Ley 200/95, arts. 24 y 25).</p> <p>Lo antedicho por el accionante constituye el fundamento normativo de la real crítica que deja entrever su argumentación contra ciertas decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, al ejercer el control disciplinario sobre algunos magistrados de la República, las cuales detalla en su escrito, por haber atenuado las respectivas sanciones disciplinarias impuestas en forma proporcional al dolo o culpa grave divisados en la conducta desplegada por los mismos. En concepto del actor, dicho organismo carecía de esa competencia, por los aspectos enunciados, extralimitándose en el ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias (C.P., arts. 6o., 121, 122 y 123).</p> <p>Además, considera que, en ambas resoluciones disciplinarias, se desconoció el ordenamiento superior por no mantener un “nivel debido en la protección de las dimensiones de la ética, la dignidad, la moralidad, el interés general y el deber estatal de minimizar los riesgos de responsabilidad o indemnización sosteniendo o reeligiendo sólo a los agentes más adecuados, la efectividad y la protección de los derechos fundamentales y sustanciales de [que] las personas requerían”.</p> <p>En criterio esbozado por el libelista, la responsabilidad social de esos funcionarios es de tal envergadura que se exige una “mayor severidad en el juicio y en la tasación de la pena” (cita para el efecto la sentencia C-038 de 1998) y la condición de autoridad pública justifica la gravedad de la sanción o el tratamiento drástico ante el dolo o la culpa grave demostrado en sus actuaciones. Además, lo expuesto, en su sentir, viola el artículo 126 de la Ley 270 de 1996 sobre condiciones mínimas éticas del servidor judicial, al incurrir en las conductas descritas en los artículos 90 constitucional y 71 de la Ley 270 de 1996, desconociendo la función administrativa en su principio de moralidad (C.P., art. 209).</p>
--	--



	Por ello, concluye que la preceptiva legal censurada -por no haber excepcionado para la determinación de la gravedad o levedad de la falta disciplinaria, los casos fundados en los artículos 90 de la C.P. y 71 de la Ley 270 de 1996, “establecidos por norma superior como de extrema gravedad y no susceptibles de atenuación”, transgredió la Constitución Política, especialmente, en los artículos 2o., 4o., 6o., 13, 90, 209, 228, 230 y 365 y, en bloque de constitucionalidad, los artículos 9o., 71 y 126 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, según la sentencia C-191 de 1998.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-110/99
Fecha de la sentencia	veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Nelson Javier Salazar
Demandado	Norma Demandada: Artículo 140 (Parcial) De La Ley 201 De 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Declarar EXEQUIBLE el literal b) del artículo 140 de la Ley 201 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano demandante considera que el segmento normativo acusado viola el derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, conforme a los siguientes argumentos:</p> <p>Existe un trato discriminatorio dado por el legislador en la norma acusada, en favor de los empleados de la Procuraduría escalafonados en carrera administrativa, pues cuando se trata de proveer cargos vacantes únicamente ellos pueden participar en los concursos de ascenso, excluyendo a otras personas con suficientes</p>

	<p>méritos para acceder a dichos cargos.</p> <p>La norma demandada tiene como objetivo establecer un incentivo a los funcionarios de carrera de la Procuraduría. Bien puede decirse que esta norma tiene su apoyo en los arts. 25 y 125 de la Constitución, que consagran la protección al trabajo en condiciones dignas y justas y el ingreso a la carrera y el ascenso dentro de la misma con base en el reconocimiento del mérito. Pero la mera validez jurídica a la luz de las referidas normas no es suficiente, pues es necesario determinar si la norma acusada se adecua a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. En tal virtud, es preciso tener en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La norma acusada no es adecuada al fin que persigue, porque el medio escogido por el legislador no es idóneo para alcanzar aquél, esto es, excluir en el concurso de ascenso a las personas que no son empleados de la Procuraduría escalafonados en carrera.</li> </ul> <p>Si el legislador consideró oportuno crear una serie de incentivos para el personal de la Procuraduría, esta política debe hacerse de modo que no afecte el interés general, ni los principios de la carrera administrativa, particularmente la igualdad de oportunidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No era necesaria la distinción hecha en el art. 140 de la ley 201/95 entre concurso abierto y concurso de ascenso, porque:</li> </ul> <p>La selección de los funcionarios en las diferentes entidades del Estado debe obedecer a la preparación académica, la experiencia y la calidad humana, la honestidad, la iniciativa, la innovación, la eficiencia y la eficacia en el desempeño laboral; pero si bien el derecho a la estabilidad de quienes se encuentren en la carrera es un derecho, también lo es el de los ciudadanos a que en los organismos del Estado se vinculen a las personas mejor capacitadas.</p> <p>Los derechos de los funcionarios de carrera, no deben ser interpretados en el sentido de cerrar las puertas a que otras personas puedan aspirar a los cargos públicos, mas aún cuando la comunidad tiene el derecho al buen funcionamiento del servicio público.</p> <p>Es el concurso abierto y no el cerrado el que mejor garantiza la calidad de las personas que van a ocupar los respectivos cargos, pues aquél estimula el que puedan concurrir al concurso el mayor número de personas. Además, según el resultado del concurso será escogido siempre el mejor, sea un funcionario de carrera o una persona ajena a ésta que desee ingresar a la misma.</p>
--	---

	<p>El derecho que tienen los ciudadanos de participar como servidores del Estado, es un derecho democrático que no puede desconocerse, como en efecto lo hace el legislador con la norma acusada al configurar los llamados concursos de ascenso cerrados.</p> <p>No es necesaria la distinción hecha por el legislador en cuanto a los ascensos, pues los funcionarios escalafonados de la Procuraduría, pueden participar en el concurso abierto y hacer valer allí su experiencia en la entidad frente a los demás participantes.</p> <p>El concurso abierto es el único que garantiza el derecho a la igualdad y el derecho democrático de participación de los ciudadanos en la administración pública; el concurso de ascenso no es admisible, de conformidad con lo establecido por los artículos 13, 40-7 y 125 inc. 3 de la Constitución Política.</p> <p>El ascenso es un derecho de los servidores inscritos en la carrera administrativa, condicionado a que obtengan el primer lugar en un concurso de méritos, al cual también han tenido acceso particulares y otros servidores públicos, quienes han participado en igualdad de condiciones.</p> <p>Las norma acusada es desproporcionada en la medida en que el beneficio recibido por los funcionarios de la Procuraduría escalafonados en carrera administrativa implica sacrificar la posibilidad de que personas ajenas a la Procuraduría puedan ingresar al servicio público.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-892/99
Fecha de la sentencia	diez (10) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Ramón Esteban Laborde Rubio.

Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 77 numeral 2º, 84, 85, 92 numeral 7º, 99, 102, 111 (parcial), 119 inciso 1º, 130, 140 (parcial), 147 (parcial) y 150 de la Ley 200 de 1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”.
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLES los artículos 92 numeral 7º, 99, 102 y 150 de la Ley 200 de 1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLES las expresiones : “Los fallos disciplinarios serán revocables en los siguientes casos” contenida en el artículo 111 de la Ley 200 de 1995; “El disciplinado o quien haya rendido exposición podrá pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas” contenida en el artículo 119 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Tercero: Decláranse INEXEQUIBLES las expresiones “sólo” contenida en el artículo 84 de la Ley 200 de 1995; “si el interesado comparece ante el funcionario competente antes de que se surta otro tipo de notificación” contenida en el artículo 85 de la misma ley; y “que considere necesario” contenida en el artículo 140 de la Ley 200 de 1995, el cual es EXEQUIBLE en lo demás, en los términos de esta sentencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que las disposiciones legales demandadas, violan el Preámbulo y los artículos 2, 13, 29 y 209 de la Constitución Política.</p> <p>En primer término, señala el actor, que en los artículos 84 y 85 se establecen en forma taxativa las providencias que deben ser notificadas en forma personal, dejando las restantes providencias que se dicten dentro del proceso disciplinario sin la posibilidad de que se notifiquen, resultando por lo tanto, secretas o comunicadas informalmente, lo que implica que los investigados carecen de la oportunidad de tener un conocimiento adecuado y oportuno de las providencias interlocutorias que se profieran en el curso del proceso, para acceder a ejercer su derecho de controvertirlas y, consecuentemente, ejercer a plenitud su derecho de defensa.</p> <p>Así mismo, considera que el hecho de haberse restringido la procedencia de los recursos de reposición y apelación y, el derecho de ser oído en exposición espontánea durante el proceso disciplinario, conduce a situaciones en donde la primera notificación que recibe el investigado es la del auto de cargos, lo cual recorta sus posibilidades de defensa.</p>

	<p>En relación con el artículo 92-7 del Código Disciplinario Unico, se impone como uno de los requisitos formales del auto de cargos, la determinación provisional de la naturaleza de la falta y, entratándose de la conducta disciplinaria, se debe realizar una valoración probatoria tendiente a establecer los elementos que la estructuran, a saber, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad del hecho que se atribuye. Lo mismo, a juicio del actor, parece deducirse del artículo 150 ejusdem, por cuanto establece que habrá lugar a la formulación de cargos una vez se encuentre demostrada objetivamente la falta y, a la vez, existan medios de prueba que comprometan la responsabilidad del sujeto disciplinado, responsabilidad ésta, que se refiere al elemento subjetivo de la conducta, es decir a la culpabilidad.</p> <p>Sin embargo, agrega, que en la práctica se siguen formulando cargos sin que se establezca, a partir de la debida valoración probatoria, si las conductas por las cuales se investiga al disciplinado, lo son a título de dolo o de culpa, haciendo muy difícil, casi imposible que el servidor público asuma una defensa integral de los cargos que se le formulan.</p> <p>Entonces, si con fundamento en las normas acusadas no se puede deducir una obligación de señalar provisionalmente la forma de culpabilidad de la conducta, desde el momento de la formulación de los cargos, se debe proceder a su declaratoria de inconstitucionalidad o, condicionarse su exequibilidad, a que la responsabilidad consagrada en las normas, es de carácter subjetivo y, en consecuencia debe establecerse, así sea en forma provisional, la modalidad de la culpabilidad por la cual se formulan los cargos.</p> <p>Los artículos 99 y 102, limitan en extremo las posibilidades de ejercer los derechos de contradicción, defensa, doble instancia y publicidad, al señalar taxativamente, las providencias interlocutorias susceptibles de los recursos de reposición y apelación, razón por la cual, estas disposiciones resultan contrarias al Estatuto Fundamental.</p> <p>Por otra parte, el artículo 111 demandado, restringe el mecanismo de la revocatoria directa únicamente para los fallos disciplinarios manifiestamente opuestos a la Constitución o a la ley o cuando quebranten o amenacen los derechos del sancionado, dejando de lado la aplicación de esta figura en relación con otras providencias interlocutorias que se encuentren en las mismas condiciones, desconociendo por ende, la supremacía de la Constitución y el respeto absoluto a los derechos fundamentales.</p> <p>El artículo 119 inciso primero, es igualmente inconstitucional, en</p>
--	---

	<p>tanto que admite la solicitud de la práctica de pruebas siempre y cuando se tenga la calidad de disciplinado o, cuando se haya rendido versión espontánea, desconociendo que ese derecho le asiste al investigado, desde el momento mismo del inicio de dicha investigación como medio de contradicción y defensa.</p> <p>Por último, el artículo 140 del Código Disciplinario Unico, no se ajusta a los postulados del debido proceso, por cuanto el derecho a ser oído dentro de la investigación disciplinaria, es una de las formas del ejercicio del derecho de defensa en cualquier etapa procesal, por ello, su recepción no puede convertirse por ministerio de la ley, en un acto discrecional del investigador.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	<b>Sentencia C-956/99</b>
Fecha de la sentencia	primero (1o.) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Jorge Luis Pabón Apicella
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 151, parcial, de la ley 200 de 1995 <i>“por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”</i> y el artículo 327, parcial, del Decreto 2700 de 1991 <i>“por el cual se expiden normas de Procedimiento Penal”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 151 de la Ley 200 de 1995 <i>“por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”</i>, en lo referente al cargo por violación al ordenamiento superior analizado en la parte motiva de esta providencia.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 327 del Decreto 2700 de 1991 <i>“por el cual se expiden las normas de procedimiento Penal”</i>, exclusivamente, en lo relacionado con la acusación constitucional examinada en esta sentencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>El juicio de inconstitucionalidad de la demanda de la referencia se dirige contra disposiciones contenidas en estatutos normativos distintos, por lo tanto, la presentación del recuento de los fundamentos de esa acusación, se hará de acuerdo con la presentación de la norma censurada.</p> <p>Ley 200 de 1995, artículo 151.</p> <p>A juicio del demandante, si bien es cierto que el artículo 151 de la Ley 200 de 1995, en lo acusado, protege el interés general y otorga garantía de la buena marcha de la gestión pública y del cumplimiento de los fines y funciones del Estado, pues autoriza al respectivo quejoso de una investigación disciplinaria a apelar del auto que ordena el archivo provisional o definitivo de la misma, también lo es que la comunicación que allí se ordena librarle de esa providencia, no garantiza totalmente su “derecho de defensa”, pues no contiene el texto completo de las motivaciones de la decisión, lo que, en su opinión, dificulta la sustentación escrita y razonada del respectivo recurso y, en consecuencia, atenta contra el interés que lo llevó a presentar la queja o denuncia.</p> <p>Lo anterior, en criterio del accionante, quebranta diversos mandatos constitucionales, especialmente los relacionados con la prevalencia del interés general, el debido proceso, la doble instancia, la sujeción de los actos de los servidores públicos al ordenamiento jurídico vigente, los principios de publicidad, participación democrática e igualdad, en la medida en que “...igual derecho tienen los quejosos residentes en la sede del funcionario que emitió la providencia de archivo definitivo como los residentes fuera de tal sede a conocer cabalmente el texto de ella...”. Agrega que, de la misma manera, se contradice el principio de proporcionalidad y razonabilidad que debe existir en toda ley, el cual se traduce en un mínimo de claridad y congruencia entre la norma y la efectividad del derecho de los gobernados (C.P., arts. 1, 2, 6, 13, 29, 31 y 209).</p> <p>Por otra parte, el actor también considera vulnerado el ordenamiento superior por la preceptiva legal censurada, por cuanto no precisa la forma en que se debe adoptar la decisión de archivo de la investigación disciplinaria por un organismo colegiado, lo cual ha permitido que, en el Consejo Superior de la Judicatura, sea el magistrado ponente quien la profiera individualmente. De esta manera, señala que se impide la protección de los derechos fundamentales de las personas a través de las decisiones colectivas o grupales de fondo y se transgrede el mandato constitucional que ordena a los funcionarios realizar solamente aquello para lo cual están autorizados, limitando el acceso a la administración de justicia, entendida por el actor como un servicio público esencial (arts. 121, 122, 123, 228, 229, 230 y 365 superiores).</p>
------------------	--

	<p>2. Decreto 2700 de 1991<sup>4</sup> (Código de Procedimiento Penal), art. 327.</p> <p>El demandante considera que uno de los fines fundamentales del control por apelación o de segunda instancia, es el de garantizar la intervención de un funcionario superior como medida de protección a los derechos fundamentales y sustanciales de las personas, tanto que, en ocasiones, la ley procesal lo ha admitido en forma colectiva, a la manera de mecanismo de múltiple examen y decisión colectiva.</p> <p>No obstante, en criterio del actor, en la disposición acusada a pesar de que se autoriza el recurso de apelación contra la resolución inhibitoria en desarrollo del principio expuesto, no existe claridad respecto de quien deberá conocer de ese recurso cuando se formule para conocimiento de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia; ello ha permitido que por carecer dichos funcionarios de superior jerárquico corresponda al fiscal ponente que profirió la resolución inhibitoria admitir solamente el recurso de reposición, lo cual, a su entender, viola los derechos al debido proceso y defensa y la garantía de un control colectivo a esa decisión, la cual se obtiene con la emisión de la misma en forma colectiva por los demás fiscales delegados.</p> <p>Para el accionante la carencia de una regla jurídica clara en la disposición demandada y su falta de razonabilidad que resulta incongruente con las demás normas que otorgan a esos funcionarios la atribución y configura una omisión legislativa que atenta contra el interés general, los fines esenciales del Estado, la igualdad, el debido proceso, la doble instancia, la administración de justicia como servicio público esencial, y el mandato que somete a los jueces en sus actuaciones al imperio de la ley (C.P., arts. 1, 2, 6, 13, 29, 31, 121, 122, 123, 228, 229 y 230) y en bloque de constitucionalidad contradice los artículos 4 y 55 de la Ley 270 de 1996 “<i>Estatutaria de la Administración de Justicia</i>”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

<sup>4</sup> “por el cual se expiden normas de Procedimiento Penal”.



Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-251/99
Fecha de la sentencia	abril veintiuno (21) de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Demandante	Jose Alberto Martinez Menendez.
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 592 -parcial- y 594 -parcial del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 29 y 30 de la Ley 223 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORÓN DÍAZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES los segmentos demandados de los artículos 592 -parcial- y 594 -parcial- del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 29 y 30 de la Ley 223 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p><i>El demandante considera que los apartes acusados quebrantan los artículos 13, 100, 338 y 363 de la Constitución Política, “porque su finalidad es privar a las empresas extranjeras de transporte aéreo y marítimo, sin domicilio en el país, de la posibilidad de solicitar la devolución del excedente del impuesto sobre la renta, a la vez que dejan sin efecto práctico el artículo 203 del Estatuto Tributario que establece la forma como dichas empresas determinan su renta líquida gravable en el país, o sea, la base gravable del impuesto, con violación de las normas citadas, pues se infringe el principio de la igualdad de los contribuyentes ante la ley claramente establecidos en los artículos mencionados de la Carta, por razones de origen nacional de las personas, sin que existan razones de orden público que justifiquen un trato diferente.”</i></p> <p>Sostiene que “las empresas extranjeras de transporte aéreo y marítimo sin domicilio en el país determinan su renta líquida gravable originada en el país mediante la fórmula consagrada en el artículo 203 del Estatuto Tributario, pero en virtud de las normas acusadas, la disposición mencionada deja de tener efecto práctico, porque su impuesto sobre la renta será igual a las retenciones que se les practiquen, porque sus declaraciones tributarias no producen efecto legal alguno”.</p> <p>De otra parte, expresa que el artículo 594-2 del Estatuto Tributario, es inconstitucional, por violar igualmente los artículos 13, 100, 338 y 363 de la C.P., “porque este último no hace sino complementar y asegurar los efectos que se producen al trasladar a los contribuyentes señalados en el artículo 414-1 del Estatuto Tributario al grupo de los no obligados a declarar.”</p> <p>Asevera que el legislador no puede “suprimir la declaración de renta ni la liquidación, en ningún caso en vigencia del artículo 338</p>

	de la Constitución, porque la declaración no sólo es un deber del contribuyente, sino un derecho que él tiene a establecer la cuantía del crédito a su cargo y a solicitar la devolución de lo que quede a su favor por la aplicación de la ley al caso concreto. Resulta inconstitucional que el legislador por el sistema de excluir de la declaración de renta a un grupo de contribuyentes, les impida a éstos la aplicación de la ley al caso concreto y la posibilidad de utilizar los medios legales pertinentes para pedir la devolución de lo que resulte a su favor. Por este sistema el legislador, además de impedirle a una parte de los contribuyentes ejercitar los medios legales pertinentes para la exacta determinación de su crédito, se apropia indebidamente de unas sumas que, como la retención en la fuente, no son sino un anticipo al impuesto.”
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-301/99
Fecha de la sentencia	cinco (5) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Marcela Adriana Rodríguez Gómez.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 228 de 1995 “Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones”.
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Declarar INEXEQUIBLE la expresión “...siempre y cuando se repare íntegramente el daño”, del artículo 27 de la Ley 228 de 1995 “Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La demandante, señala que la Ley 228 de 1995, estableció el procedimiento para investigar los hechos punibles denominados contravenciones.</p> <p>Manifiesta la demandante, que el tratamiento que se le da a la figura del desistimiento en las contravenciones, que consagra el artículo 27 de la citada ley, es más gravoso que el desistimiento que se presenta en los delitos. Indica, que basta comparar la norma demandada, con el artículo 77 del Código Penal, en el cual se dispone que “El desistimiento aceptado por el querellado extingue la acción penal”, en tanto, que el desistimiento de que trata el artículo 27 demandado, exige la reparación íntegra del daño causado, por lo que “la regulación contravencional del desistimiento es más gravosa que la del delito”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-357/99
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Eudoro Echeverry Quintana
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 32 de la Ley 228 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declárase INEXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 228 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que la transcrita norma vulnera los artículos 29 y 228 de la Constitución Política.</p> <p>A juicio del demandante el impedimento contenido en la disposición acusada viola el principio del non bis in idem, según el cual un sujeto procesal no puede ser investigado y juzgado dos o más veces por la comisión de iguales hechos en circunstancias distintas, cuando en la práctica judicial se observa que esos procesos podrían en el mejor de los casos cursar en forma paralela y no independientemente como lo advierten los apartes acusados.</p> <p>De otro lado, manifiesta que en el evento de presentarse fallos contradictorios en las instancias jurídicas competentes para adelantar -bien el proceso penal o ya el contravencional-, puede resultar vulnerado el principio de la cosa juzgada y la inseguridad jurídica se hace palmaria.</p> <p>Sostiene que, al impedirse el trámite en un solo proceso de un delito y una contravención, a pesar de que entre ellos exista el hilo conductor de la conexidad, se sacrifica e impide la materialización del derecho a obtener de las autoridades judiciales una adecuada administración de justicia, toda vez que según lo dispuesto por el artículo 228 de la Constitución Política, prima el derecho sustancial frente al procedimental.</p>

	<p>Advierte el impugnante que según su criterio, el artículo 32 de la Ley 228 de 1995 derogó el artículo 18 del Decreto 800 de 1991, reglamentario de la Ley 23 de 1991. En tal evento, esta Corporación tendría que inhibirse de fallar por sustracción de materia, tal como la manifestó en la Sentencia C-581 del 31 de octubre de 1996. De lo contrario -afirma- es esta la oportunidad para declarar inconstitucionales los apartes demandados.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-369/99
Fecha de la sentencia	mayo veintiseis (26) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Carlos Adolfo Arenas Campo
Demandado	Acci3n p3blica de inconstitucionalidad contra los art3culos 339 (parcial), 341 (parcial), 353, 364 y 366 de la Ley 5 de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la C3mara de Representantes”; y contra el art3culo 6 de la Ley 273 de 1996 “Por la cual se modifica el Reglamento del Congreso en cuanto al juzgamiento de altos funcionarios”.
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	<p>Primero. Declararse INHIBIDA respecto de los cargos que por omisi3n legislativa present3 el actor contra los art3culos 364 y 366 de la Ley 5a. de 1992.</p> <p>Segundo. Declarar INEXEQUIBLE el art3culo 6º de la ley 273 de 1996.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	<p>a. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>El demandante considera que las disposiciones acusadas vulneran lo dispuesto en los art3culos 2, 4, 175, 178 y 278 de la Constituci3n Pol3tica.</p> <p>b. Fundamentos de la demanda</p> <p>El actor sustenta su demanda en los argumentos que se resumen a continuaci3n:</p> <p>Las normas demandadas, dice, devienen inconstitucionales, “...no por raz3n de su texto en si mismo considerado, sino como resultado de dos factores convergentes en el contexto normativo del cual hacen parte..”</p> <p>El primer factor, señaala, es una omisi3n que se configura dada la forma parcial e incompleta como el legislador regul3 lo concerniente al juicio especial que le corresponde adelantar al Congreso cuando se trata de altos funcionarios del Estado. En su opini3n, las normas del cap3tulo cuarto del Reglamento del</p>

	<p>Congreso, del cual hacen parte las disposiciones acusadas, circunscriben y limitan las facultades especiales de investigación y acusación que el Constituyente le atribuyó a la Cámara de Representantes, al ámbito del derecho penal, ignorando que el mismo ordenamiento superior, a través del artículo 175-2 de la C.P., "...prevé un proceso especial de "indignidad por mala conducta", que es autónomo en sí mismo, pues puede recaer sobre conductas no delictuosas ni disciplinables, pero sí atentatorias de la responsabilidad política inherente a la investidura de Presidente de la República, dando origen ...a una etapa investigativa en la Cámara, y llegado el caso a un eventual juzgamiento ante el Senado, [el cual] por su naturaleza jurídica no tiene por qué sujetarse necesariamente y en toda su extensión, a las normas del Código de Procedimiento Penal, como erróneamente lo pretenden las normas acusadas"</p> <p>El segundo factor lo denomina el actor "una distorsión consecucional, la cual explica de la siguiente manera: "...la omisión señalada produce en el contenido de determinadas disposiciones una alteración sobreviniente, dándoles un alcance que no tendrían si el conjunto normativo hubiera desarrollado en todos sus aspectos la norma superior. En efecto, aunque en su escueta literalidad los artículos demandados resulten ajustados a los preceptos constitucionales, tal como lo declaran formalmente las sentencias invocadas para justificar la causal de "cosa juzgada", lo cierto es que en la práctica, y ante la ausencia de normas regulatorias del ejercicio de las facultades de investigación y acusación de la Cámara en causas de indignidad presidencial, tales normas específicas se convierten en verdaderos obstáculos para que la voluntad del Constituyente, plasmada en una norma claramente preceptiva como el artículo 175-2 C.P., alcance su plena eficacia."</p> <p>Anota el demandante, que la omisión legislativa, según el derecho constitucional comparado, no puede reducirse a un simple "no hacer", su contenido, dice, se extiende a no hacer aquello a lo que constitucionalmente se estaba obligado, lo que implica que en el caso específico que se analiza se traduzca en desatender una "orden de legislar", esto es una exigencia única y concreta, "no indefinida en el tiempo ni en la materia".</p> <p>En esa perspectiva, agrega, se entiende por qué esa orden deberá cumplirla el legislador a través de una ley orgánica, a la cual, según el artículo 151 de la Constitución, "...debe sujetarse el Congreso para el ejercicio de la actividad legislativa en aquellas materias que la misma disposición señala en forma taxativa."</p> <p>Es claro pues, concluye el demandante, "...que la omisión del</p>
--	---



	<p>legislador al abstenerse de desarrollar a plenitud las normas a las cuales debe sujetarse el Congreso en ejercicio de las funciones judiciales que le corresponden y que deben incluir la regulación expresa de las facultades de investigación y acusación por hechos que pueden llegar a configurar en sí mismos -y no como efecto derivado de la comisión de delitos- , indignidad presidencial por mala conducta, da origen a la inconstitucionalidad del Estatuto o conjunto normativo en cuestión, que al resultar trunco o incompleto desconoce el mandato de organicidad impartido de manera concreta por el Constituyente.”</p> <p>Procede luego el demandante a presentar algunos cargos específicos contra las normas acusadas, distintos a los ya descritos :</p> <p>En el caso concreto del artículo 364 de la Ley 5a. de 1992, que establece que el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes, podrá intervenir en los procesos que adelanten las Cámaras contra altos funcionarios del Estado, para cumplir los fines señalados en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución, norma superior que le brinda la opción de intervenir por sí o por medio de aquellos, en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, manifiesta el actor, que su contenido desconoce el también mandato superior del numeral 2 del artículo 278 de la Carta, según el cual le corresponde directamente al Procurador emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial, pues la norma atacada confundió las dos modalidades de intervención en una sola, dejando a discreción del titular del Ministerio Público, una función que le es inherente y que le corresponde ejercer a él directamente.</p> <p>En lo relacionado con el artículo 366 de la Ley 5a. de 1992, que establece que todo vacío procedimental de esa ley se suplirá con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, manifiesta el demandante que dicho precepto constituye “...un cerrojo que coarta y limita el ejercicio del poder de investigación y acusación de la Cámara de Representantes y el de juzgamiento del Senado...”, pues reduce al ámbito de lo penal el carácter de la norma supletoria.</p> <p>Tal remisión se entendería -agrega el demandante- si el Estatuto orgánico del Congreso en materia del juicio especial previsto para los altos funcionarios del Estado, “...hubiera desarrollado en su integridad los mandatos del Constituyente, vale decir no solo en cuanto al de la acción disciplinaria y, en particular, en cuanto a la acción para indagar y deducir responsabilidad política al Presidente</p>
--	--

	<p>en caso de indignidad por mala conducta.”</p> <p>Dicho artículo, además, anota el actor, no contribuye a llenar vacíos normativos, como pretendió el legislador y por el contrario conduce directamente a que el ejercicio de la función de investigación y juzgamiento se restrinja al ámbito de lo penal, lo que implica que dado su carácter fragmentario y omisivo devenga inexequible, por violación directa de los artículos 175 y 178 de la Constitución, e indirecta de los artículos 2 y 4 del mismo ordenamiento.</p> <p>Por último, aunque el actor no presenta cargos concretos contra el artículo 6 de la Ley 273 de 1996, dada la estructura y contenido de la demanda, se concluye que en esencia son los mismos a los que alude al analizar el citado artículo 366 de la Ley 5a. de 1992.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>PROCESO POR INDIGNIDAD CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Desconocimiento (Salvamento de voto)</p> <p>Con todo respeto, me aparto de la sentencia. La doctrina sentada por la Corte Constitucional en esta materia había sido cuidadosa en distinguir los denominados juicios por indignidad, de los que por causas penales podían incoarse contra los altos dignatarios que gozaran de fuero constitucional. En relación con estos últimos, el reconocimiento de la reserva de ley, autoriza al Legislador para adoptar requisitos sustanciales similares a los previstos en el Código de Procedimiento Penal. No se trata en realidad de ningún gesto de generosidad constitucional, pues sustraer las formas legales del proceso a un juicio que tiene raíz penal, viola el debido proceso y desconoce la reserva de ley, además de que hacerlo sepulta la aludida distinción constitucional. A mi juicio, esta sentencia se inscribe en la línea de desconocimiento de la cosa juzgada constitucional.</p> <p>PROCESO POR INDIGNIDAD CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS-Aplicación de normas penales (Salvamento de voto)</p> <p>La Corte olvida su doctrina constante sobre la actuación del Congreso, a la que se otorgó el carácter de presupuesto de procedibilidad de la acción penal, en los juicios motivados por causas penales. En lo sucesivo, respecto de este tipo de juicios, en lugar de las formas establecidas por la ley, se impondrá la actuación libre de los investigadores, juzgadores y acusadores, que se moverán en el terreno de la pura política, esto es, al margen de cualquier cauce o procedimiento que no sea el que en cada</p>

	momento y en relación con cada caso impongan las mayorías.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-815/99
Fecha de la sentencia	veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Inés Jaramillo Murillo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 8 de la Ley 278 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Sólo en los términos de esta Sentencia, declarar EXEQUIBLE el artículo 8 de la Ley 278 del 30 de abril de 1996, en el entendido de que, al fijar el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos".
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Afirma la impugnante que la disposición parcialmente acusada vulnera el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53, 334 y 373 de la Constitución Política.</p> <p>La demandante, con base en decretos mediante los cuales el Gobierno Nacional ha señalado el salario mínimo legal en los últimos años y algunas certificaciones acerca del índice de precios al consumidor (IPC) suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, elabora cuadros</p>

	<p>paralelos cuya finalidad es ilustrar y confirmar lo que, a su juicio, constituye la pérdida paulatina del poder de compra del salario mínimo legal.</p> <p>Considera que, en la mayoría de las situaciones ilustradas, este salario ha sido ajustado en un porcentaje inferior respecto de la inflación causada en el año inmediatamente anterior.</p> <p>A juicio de la actora, al cotejar el aparte demandado del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 con los postulados señalados en la Constitución, lo que se está institucionalizando es la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo legal.</p> <p>En cuanto al término "indexación laboral", menciona que ya no es posible ignorar que ésta no implica un incremento en el valor real del salario, sino en mantener su poder adquisitivo mediante la aplicación del incremento anual del índice de precios al consumidor (IPC), que es el reflejo de la inflación del año anterior a aquel en que se va a hacer operante el ajuste.</p> <p>Considera la accionante que la aplicación del artículo demandado genera empobrecimiento y pérdida del poder adquisitivo del salario, pues impide que por lo menos mantenga su poder adquisitivo, y con ello contraría los postulados que plasma la Constitución.</p> <p>En su concepto, el Preámbulo de la Carta Política resulta vulnerado, toda vez que de ninguna manera se aseguran valores como el trabajo, la justicia, la paz y menos todavía, un orden económico y social justo.</p> <p>Afirma la demandante que el artículo primero del texto superior no se realiza, toda vez que el empobrecimiento anual de los trabajadores que devengan el salario mínimo legal aminora sus ingresos y por tanto les entorpece la posibilidad de atender y cubrir sus necesidades mínimas vitales.</p> <p>De otro lado, piensa que los fundamentos señalados para la actividad estatal por el artículo 2 de la Constitución tampoco se cumplen, ya que el Estado, al aplicar la norma demandada, no promueve la prosperidad general ni facilita la participación de la población con menores ingresos, lo que contradice los fundamentos de un orden económico justo.</p> <p>La violación al principio de igualdad consiste -a juicio de la demandante- en que, debido al hecho de la pérdida paulatina y anual del poder adquisitivo del salario mínimo, derivado de la aplicación de la norma acusada, se entroniza la desprotección de aquellas personas que por su condición económica reciben</p>
--	--

	<p>escasamente el salario mínimo y se hallan en francas circunstancias de debilidad.</p> <p>Entiende la actora que el derecho fundamental al trabajo, consagrado en el artículo 25 Ibídem, resulta violado por la norma acusada, ya que, siendo el trabajo una obligación social, a las personas que tienen este ingreso mínimo legal se las está desprotegiendo y, por tanto, se les impide tener una vida digna.</p> <p>Considera que la aplicación de la disposición parcialmente acusada contraría los artículos 48 y 53 de la Carta, al no mantenerse el poder adquisitivo constante en las pensiones ni tampoco efectuarse su reajuste periódico.</p> <p>Afirma que, si el salario mínimo legal se está devaluando anualmente, también las cotizaciones para la seguridad social se están efectuando sobre una base devaluada.</p> <p>Manifiesta que la violación a los artículos 334 y 373 Ibídem emana del hecho de no obtenerse el cometido según el cual el Estado, en su condición de director general de la economía, debe procurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades, circunstancia que se ve menguada cuando la norma demandada implica la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.</p> <p>Finalmente, para la demandante, “la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por el artículo 56 de la Carta Política para cumplir los mandatos constitucionales y legales y para moverse dentro de los parámetros de justicia y equilibrio social, no puede tomar como elemento de concertación LA INFLACION CAUSADA, en los términos de esta demanda; únicamente podrá concertar sobre aspectos diferentes a dicha inflación, siempre y cuando tiendan a favorecer a los trabajadores beneficiarios del salario mínimo legal”.</p> <p>Luego de proferido el auto admisorio de la demanda, la impugnante allegó escrito mediante el cual solicitó a esta Corporación que, con ocasión de la sentencia que proferirá, reitere lo relativo al tema de la indexación laboral, específicamente sobre el salario, pues en materia de las “cotizaciones sanción” de que trata el artículo 6 del Decreto 2879 de 1985, los patronos han efectuado las cotizaciones sobre salarios con valor histórico, es decir, sin efectuar los ajustes correspondientes a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA

<p>Tiene salvamento</p>	<p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, VLADIMIRO NARANJO MESA</p> <p>SALARIO MINIMO-Improcedencia de sentencia condicionada (Salvamento de voto)</p> <p>En nuestro concepto la norma demandada ha debido ser declarada exequible, sin ningún condicionamiento. El condicionamiento de la Corte no deja de ser censurable. Traslada a la parte resolutive de la sentencia el mismo contenido de la norma examinada. Adicionalmente, agrega sin ninguna elaboración ulterior como criterios a tener en cuenta por el Gobierno, las orientaciones más generales que se encuentran plasmadas en la propia Carta. En estricto rigor, en una sentencia condicionada, se selecciona una interpretación, entre las posibles alternativas hermenéuticas que pueden plantearse alrededor de un texto legal cuya constitucionalidad se presenta altamente controvertible, y a ella se restringe su alcance, pues se entiende que únicamente así interpretada la disposición se ajusta a la Constitución. La Corporación se limita a integrar en la parte resolutive el texto de la disposición acusada y a invocar los textos de varias normas constitucionales. Estas normas, de origen legal y constitucional respectivamente, de suyo son obligatorias y conforman el sistema jurídico, sin necesidad de que su fuerza jurídica y su aplicación dependan de una sentencia de la Corte. Si la Corte sigue por este camino, las partes resolutive de sus sentencias serán tan extensas como lo es la Constitución. Definitivamente, el proceso constitucional debe terminar con una sentencia y no con un acto judicial redundante.</p> <p>SALARIO MINIMO-Criterios para fijarlo (Salvamento de voto)</p> <p>Si el reajuste salarial nunca puede ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira, no será posible, “con el mismo nivel e incidencia”, estimar todos los demás factores, ni combinar aquél con éstos en términos de equilibrio. De otro lado, este condicionamiento puede en muchos casos contradecir los restantes parámetros. Contrariamente a lo que resulta deseable – mayor bienestar de los trabajadores y un aumento de participación de los salarios en el PIB –, la petrificación constitucional de este criterio en varios escenarios económicos puede incluso revelarse perjudicial para los trabajadores.</p> <p>SI DR. ALVARO TAFUR GALVIS</p> <p>SALARIO MINIMO-Improcedencia de sentencia condicionada/SALARIO MINIMO-Criterios para fijarlo (Salvamento de voto)</p>
-------------------------	---

	<p>Considero que la decisión que ha debido adoptar la Corte ha debido ser la de constitucionalidad sin condicionamiento alguno. En efecto, la disposición acusada en ninguno de sus elementos normativos contraría la Constitución; lo que puede resultar lesivo del ordenamiento es el entendimiento que de ella haga el ejecutivo al fijar anualmente, a falta de concertación, el salario. So pretexto de precaver la violación ulterior en la aplicación de la norma, no puede la Corte extender su decisión a la eventual aplicación que se haga de la norma legal. Este juicio corresponde no a la Corte Constitucional sino a la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, la cual establecerá, ante acción que al respecto puede promover todo ciudadano, si el Gobierno ha observado, en el caso específico referido a una anualidad determinada, todos los factores previstos en la ley, pues ésta no dispone discrecionalidad en cuanto a la aplicación de uno o unos y no de otro u otros de los factores. Lo anterior sin perjuicio de entender que el Gobierno en la consideración que haga de unos y otros ejerce competencia de apreciación, con fundamento en las propias disposiciones constitucionales que garantizan a los trabajadores “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo”( Artículo 53) y dentro del marco al efecto trazado por el legislador, precisamente en el artículo acusado de la ley 478 de 1.996.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-272/99
Fecha de la sentencia	abril veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Andrés Cardona Quintero
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 (parcial) de la Ley 282 de 1996, "Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar INEXEQUIBLE el artículo 14 de la Ley 282 de 1996
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del demandante, la norma acusada es inconstitucional, toda vez que "un procedimiento abreviado como el que se propone para un delito que puede aparejar una pena de hasta cuarenta (40) años de prisión no observa ningún criterio de razonabilidad, es desproporcionado y vulnera las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la igualdad y la presunción de inocencia".</p> <p>Señala que la duración del procedimiento contenido en el artículo 14 de la Ley 282 de 1996 no permite el ejercicio de todos los elementos y garantías (interrogatorio de testigos, presentación de testigos, solicitud, controversia e impugnación de pruebas, etc.) que integran el derecho fundamental al debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política y, al respecto, cita en su apoyo la sentencia C-427 de 1996, proferida por la Corte Constitucional. Así mismo, estima que la brevedad de los términos contemplados por la norma demandada, en la medida en que no permiten una adecuada contradicción del acervo probatorio, vulneran el mandato constitucional relativo a la necesidad de que, en los procesos penales, se lleve a cabo una investigación completa de los hechos (C.P., artículo 250) y el derecho de acceso a la administración de justicia (C.P., artículo 229).</p> <p>Así mismo, el actor manifiesta que el fundamento de la norma</p>

	<p>acusada, es decir, la captura del sindicato en flagrancia, no autoriza a una reducción tan radical en los términos del procedimiento, como quiera que la flagrancia no puede ser asimilada a una atribución de responsabilidad por la comisión del delito de que se trate. La flagrancia constituye un hecho que, como otros, debe ser investigado y probado a lo largo del proceso.</p> <p>De otra parte, el libelista considera que los apartes demandados del artículo 14 de la Ley 282 de 1996 son violatorios del principio de igualdad, como quiera que establecen un trato diferenciado de aquellos que prohíbe el artículo 13 de la Carta Política. Asevera que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el legislador está autorizado para establecer regímenes especiales para cierto tipo de delitos, siempre y cuando no infrinja el principio de igualdad (sentencia C-301/93). En particular, señala que la Corte ha considerado que el procedimiento abreviado sólo es un trámite adecuado para dar curso a los procesos contravencionales y no para delitos de mayor entidad (sentencia C-430/96).</p> <p>Por último, el demandante afirma que la disposición acusada desconoce la importancia de la etapa investigación dentro del proceso penal, más aún en el caso de delitos como el secuestro o la extorsión, en los cuales la pena a imponer puede ser extremadamente severa. Considera que la reducción de términos en la etapa de investigación, operada por el artículo 14 de la Ley 282 de 1996, determina un recorte de las garantías del debido proceso en la etapa de juzgamiento, toda vez que "el juicio es la reproducción de la investigación". Sobre este particular, manifiesta que la sentencia C-411 de 1993 estableció que "la ausencia de límite cronológico para la instrucción es violatoria del debido proceso", lo cual, interpretado a <i>contrario sensu</i>, determina que "la estrechez de ese límite también viola el debido proceso".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. VLADIMIRO NARANJO MESA</p> <p>PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN SECUESTRO Y EXTORSION (Salvamento de voto)</p> <p>No puede considerarse que el cierre prematuro de la investigación - "a más tardar pasados cinco (5) días de ejecutoriada la providencia en la que se resuelve la situación jurídica que imponga medida de aseguramiento al sindicato"-, comporte un desconocimiento del principio de contradicción de la prueba, pues de dicha expresión no se infiere una prohibición al sindicato para aportar pruebas o</p>

	solicitar la práctica de aquellas que considere pertinentes para su defensa. En este último caso, es evidente que el funcionario judicial, aplicando las normas generales de procedimiento e invocando el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo (C.P. art. 228), determinará la conducencia o inconducencia del medio probatorio y podrá ordenar su práctica. Así, resulta claro que la reducción de los términos procesales para los delitos de secuestro, extorsión y conexos no obedece a un capricho del legislador, pues la solidez que representa la flagrancia como prueba directa de cargo y la vigencia de las demás garantías procesales, aseguran un debido proceso y permiten darle mayor celeridad a la actuación en aras de una pronta y cumplida justicia. Así lo ha querido el legislador, actuando dentro de sus competencias constitucionales de fijar las formas propias del juicio, entratándose de delitos tan graves y execrables como el secuestro, cuya lamentable impunidad lo ha convertido en una industria de inmensa rentabilidad.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-893/99
Fecha de la sentencia	diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Julian Marulanda Calero, José Antonio Vargas Lleras y Enrique Vargas Lleras.
Demandado	Norma acusada: Artículos 4º parcial, 5º parcial, 6º parcial, 8º parcial, 20 parcial de la Ley 393 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Declarar EXEQUIBLES las expresiones acusadas " <i>con fuerza material</i> " de ley o " <i>con fuerza</i> " de ley, contenidas en los artículos 4º, 5º, 6º, 8º y 20 de la ley 393 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Según los actores, las disposiciones acusadas vulneran el artículo 87 de la Constitución, por cuanto restringen el ejercicio y el ámbito de aplicación de la acción de cumplimiento, por cuanto las

	expresiones “con fuerza material de ley” o “con fuerza de ley” generan confusión frente al contenido de esta acción, tal y como fue definida por la Constitución, la cual establece que este mecanismo procede frente a toda ley y no únicamente frente a aquellas que tengan fuerza material de ley. Según su parecer, al hacerse tal distinción, existirían leyes que no tendrían posibilidad de ser objeto de la acción, con lo cual las expresiones impugnadas limitan injustamente al individuo la facultad de exigir del Estado el cumplimiento de sus propias normas.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-506/99
Fecha de la sentencia	julio catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Demandante	Hugo Alejandro Jimenez Balcazar Arturo Besada Lombana Y Jose Trino Rangel Reyes
Demandado	Acci3n p3blica de inconstitucionalidad en contra de los art3culos 5 y 6 -parcial- de la Ley 443 de 1998, "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones".
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MOR3N D3AZ.
Decision	<p>Primero.- ESTESE A LO RESUELTO en Sentencia C-368 de 1999 en relaci3n con el literal a) del art3culo 5º. de la Ley 443 de 1998, en lo concerniente a los cargos de <i>"Juez de Instrucci3n Penal Militar, Auditor de guerra y Secretario de Tribunal Superior Militar"</i> de la Administraci3n Central del Nivel Nacional y los de <i>"Corregidor e Inspector de Tr3nsito y Transportes o el que haga sus veces"</i> de la Administraci3n Descentralizada.</p> <p>Segundo.- Del art3culo 5º. , literal a) de la Ley 443 de 1998, declarar EXEQUIBLES, en los t3rminos y bajo los condicionamientos consignados en la parte motiva de esta sentencia, las siguientes frases:</p> <p>"Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente Ley son de carrera, con excepci3n de:</p> <p>...</p> <p>Los empleos de libre nombramiento y remoci3n que correspondan a los siguientes criterios:</p> <p>Los de direcci3n, conducci3n y orientaci3n institucionales, que adelante se indican, cuyo ejercicio implica la adopci3n de pol3ticas o directrices, as3:</p> <p><u>En la Administraci3n Central del Nivel Nacional</u></p> <p>... Jefe de Oficinas Asesoras de Jur3dica, Planeaci3n, Prensa o de Comunicaciones ... y Capit3n de Puerto</p> <p>"En la Unidad Administrativa Especial de Aeron3utica Civil... Administrador Aeropuerto; Gerente Aeroportuario, Director Aeron3utico de Area y Jefe de Oficina Aeron3utica.</p>

	<p><u>En la Administración Central y Organos de Control del Nivel Territorial</u></p> <p>“...Jefe de Control Interno; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones... y Personero Delegado en los municipios de categoría especial y categorías uno, dos y tres”.</p> <p><u>En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial</u></p> <p>... Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o Comunicaciones y Jefe de Control Interno”.</p> <p>Tercero.- Del artículo 5º. , literal a) de la Ley 443 de 1998, declarar INEXEQUIBLES las siguientes frases:</p> <p><u>En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional</u></p> <p>Rector, Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior, distinta a los Entes Universitarios Autónomos.</p> <p><u>En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial</u></p> <p>Rector, Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior, distinta a los Entes Universitarios Autónomos.</p> <p>Cuarto.- Declarar INEXEQUIBLE del párrafo del artículo 66 de la Ley 30 de 1992, la frase que dice:</p> <p>“... por parte del Presidente de la República, el Gobernador, o el Alcalde, según el caso...”</p> <p>Quinto.- Del artículo 6º. de la Ley 443 de 1998, declarar EXEQUIBLE la frase <i>dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que se opere el cambio de naturaleza</i>”</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>Los ciudadanos ARTURO BESADA LOMBANA y JOSE TRINO RANGEL REYES fundamentan la inconstitucionalidad de los empleos que del numeral 2º, literal a) del artículo 5º de la Ley 443 de 1998 demandan, por considerar que al clasificarlos el Legislador en la categoría de libre nombramiento y remoción, se desconocen las prescripciones sobre carrera administrativa que consagra la Carta Política, pues según su aseveración, no desarrollan actividades que impliquen "políticas o directrices" que dependan de las decisiones autónomas del nominador ni de otras instancias superiores o entidades afines.</p> <p>Argumentan que los cargos de jefes de oficinas jurídica, planeación, prensa o comunicaciones, corregidores e inspectores de tránsito y transporte, jueces de instrucción militar, auditor de guerra, secretario de tribunal superior militar, capitán de puerto, administrador de aeropuerto, gerente de aeropuerto, director aeronáutico regional, director aeronáutico de área, jefe de oficina aeronáutica o jefes de control interno, son cargos exclusivamente técnicos.</p> <p>En su opinión, un abogado de la Asesoría Jurídica, un economista de Planeación, un comunicador de prensa o perito en comunicaciones, un juez penal o auditor de guerra, un secretario de tribunal superior militar, un capitán de puerto o cualesquiera de los administradores, gerentes, director de aeronáutica regional o de área o jefe de oficina de este tipo, son técnicos en su respectiva área o funciones y ejercen actividades técnicas.</p> <p>En cuanto al empleo de jefe de oficina de control interno, aducen en favor del cuestionamiento de constitucionalidad que plantean, que un órgano de control tiene como funciones exclusivas ejercer el control legal sobre los asuntos cuyo resorte le otorgan la Constitución o las leyes, vale decir que no traza directrices y que, por ende, no tiene funciones distintas a las de comprobación, inspección, fiscalización o intervención.</p> <p>Por su parte, el ciudadano HUGO ALEJANDRO JIMENEZ BALCAZAR considera que la frase que impugna del artículo 6º. de la Ley 443 de 1998 vulnera el Preámbulo y los artículos 1º., 4º., 25, 53 de la Carta Política de 1991.</p> <p>Sostiene que a causa de lo preceptuado en la norma que acusa, se produce <i>"... el despido masivo de empleados públicos, cuando dentro del marco jurídico supremo se consagra el derecho al trabajo, el cual gozará de especial protección del Estado."</i></p> <p>Su inconformidad con lo preceptuado en la disposición de la Ley que demanda, se debe a que, según su entendimiento, esta no</p>
------------------	---

	fomenta ni promueve el empleo en condiciones justas; por el contrario, en su parecer, incrementa la inestabilidad de los servidores públicos a los cuales les cambió la naturaleza de su cargo, quienes -según su criterio- gozaban de una estabilidad relativa, pues la administración solamente puede prescindir de ellos por razón del mejoramiento del servicio. Argumenta que con la expedición de la norma demandada, se elimina su vinculación indefinida y se le pone término final a la garantía de estabilidad en el empleo.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-368/99
Fecha de la sentencia	mayo veintiseis (26) de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Demandante	Andrés Zubiria Samper y Otros
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 10, 23 y 37 (parciales) de la Ley 443 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero. Declarar la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones “Juez de Instrucción Penal Militar, Auditor de Guerra, Secretario de Tribunal Superior Militar”, contenidas en el párrafo primero del aparte titulado “En la administración Central del Nivel Nacional”, del literal a), del numeral 2, del artículo 5, de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “Alcalde Local y Corregidor” y la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Inspector de Tránsito y Transporte o el que haga sus veces”, contenidas en el párrafo único del aparte titulado “En la Administración Central y órganos de control del Nivel Territorial”, del literal a), del numeral 2, del artículo 5, de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Tercero. Declarar la INEXEQUIBILIDAD del párrafo segundo del aparte titulado “En la Administración Central del Nivel Nacional”, del literal b), del numeral 2, del artículo 5, de la Ley 443 de 1998, el cual reza: “En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y sus entidades adscritas, todos los empleos, por la necesaria confianza que requiere el Presidente de la República en quienes los ejerzan, por cuanto se toman decisiones relacionadas con su calidad de jefe de Gobierno, jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa.”</p> <p>Cuarto. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “En el Ministerio de Relaciones Exteriores los del Servicio Administrativo en el exterior”, constitutiva del párrafo cuarto del aparte titulado “En la Administración Central del Nivel Nacional”, del literal b), del numeral 2, del artículo 5, de la Ley 443 de 1998, bajo el entendido de que esos cargos solamente podrán ser de libre nombramiento y remoción si son ocupados por personas que no sean ciudadanos colombianos.</p> <p>Quinto. Declarar la EXEQUIBILIDAD del texto legal que reza: “cuando la vacancia sea resultado del ascenso con periodo de</p>

	<p>prueba, de un empleado de carrera, el encargo o nombramiento provisional tendrán la duración de dicho período más el tiempo necesario para determinar la superación del mismo”, contenido en el primer inciso del artículo 10 de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Sexto. Declarar la EXEQUIBILIDAD de las frases “La persona seleccionada por concurso abierto será nombrada en período de prueba, por un término de cuatro (4) meses, al cabo del cual le será evaluado su desempeño laboral.” y “Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba”, contenidas en el artículo 23 de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Septimo. Declarar la EXEQUIBILIDAD del literal j) del artículo 37 de la Ley 443 de 1998, bajo el entendido de que esta norma solamente puede ser aplicada en relación con funcionarios no uniformados de carrera del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional - distintos a los empleados en sus entidades descentralizadas -, cuyas labores puedan afectar de manera directa la seguridad ciudadana o la seguridad del Estado.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Uno de los demandantes manifiesta que el artículo 125 de la Constitución Política dispone que, por regla general, la vinculación laboral al Estado debe tener lugar mediante el régimen de la carrera administrativa. De esta regla se exceptúan algunas categorías de empleos expresamente señaladas en la Constitución y los cargos que determine la ley. Sobre la atribución concedida al legislador para excluir del sistema de carrera algunos cargos, aclara, sin embargo, que esta facultad “por ningún motivo, puede vulnerar claros postulados de rango constitucional, como son: 1) la garantía de la estabilidad en el empleo (art. 53 C.P.); 2) los de no hacer inoqua la carrera administrativa en la práctica; 3) el deber que tiene el Estado para ‘... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...; y 4) La prevalencia de los convenios internacionales del trabajo, ratificados por el Congreso Nacional, que forman parte del ordenamiento jurídico colombiano, varios de los cuales consagran como un derecho fundamental de los servidores públicos el de acceder a la estabilidad en el empleo y a la carrera administrativa.”</p> <p>En este sentido, sostiene que distintas disposiciones de la norma acusada desconocen los postulados establecidos en la Constitución Política acerca de la carrera administrativa. Manifiesta que, si bien es comprensible que en la ley se haya exceptuado del régimen de carrera “los cargos que ocupen un lugar directivo en la organización estatal, lo cual resulta apenas lógico por la especial relación que</p>

	<p>debe existir entre el funcionario (alto dirigente público), con la cabeza de la rama ejecutiva nacional...", es inaceptable que en algunos casos se consagren cargos modestos de la administración pública colombiana como de libre nombramiento y remoción.</p> <p>Tales cargos serían: "Alcaldes locales (en el distrito capital), los corregidores, que dependen funcionalmente del respectivo alcalde distrital o municipal y los inspectores de tránsito que dirigen una función eminentemente administrativa y ejecutiva, pero, por ninguna parte pueden equipararse a un alto cargo directivo público."</p> <p>Así mismo, el demandante considera que la Ley 443 de 1998 sobrepasa los límites constitucionales al "expresar que todos los cargos de la Presidencia de la República y los servicios administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores son de libre nombramiento y remoción". Con base en lo anterior, plantea el siguiente interrogante: "¿Por qué el cargo de portero o empleado de servicio doméstico de la Casa de Nariño (o de cualquiera de las docenas de entidades adscritas a la Presidencia de la República), o de una embajada o consulado en cualquiera de los más de 140 Estados con los cuales Colombia tiene lazos internacionales se considera ahora como de <i>libre nombramiento</i>, mientras que el cargo análogo en el país, es de tipo técnico u operativo?"</p> <p>Otro demandante sostiene que el artículo 5 viola el derecho de igualdad cuando excluye de la carrera administrativa los cargos de juez de instrucción penal militar, auditor de guerra y secretario del tribunal superior militar. La vulneración del artículo 13 de la Constitución se consuma, por cuanto la Ley 270 de 1996 - la ley estatutaria de la administración de justicia - establece que los funcionarios y los empleados judiciales son de carrera. Así las cosas, y en atención a que los cargos que se excluyen de este régimen por obra del artículo 5 no ejercen funciones de adopción de políticas y directrices, no es lógico que sean clasificados como de libre nombramiento y remoción.</p> <p>Afirma el demandante que no entiende cómo un juez de instrucción - que se limita a perfeccionar una investigación cuando se viola la ley penal militar - puede ser considerado de libre nombramiento y remoción. Lo mismo asevera sobre los auditores de guerra. Ellos son asesores de los jueces de instancia "y su función única y exclusiva es el análisis de un conjunto de pruebas que ha recopilado el juez de instrucción, para llegar a una conclusión con base en todo ese acervo probatorio, de proyectar una resolución de convocatoria para un consejo de guerra o por el contrario la cesación de procedimiento". Puesto que la labor que desempeñan estos funcionarios es de simple sustanciación - de asesoría a un juez que</p>
--	---

	<p>carece de conocimientos jurídicos - no puede predicarse de ellos que ejercen un cargo de libre nombramiento y remoción.</p> <p>Finalmente, en relación con el Secretario del Tribunal Superior Militar señala que su función consiste en firmar las providencias de los magistrados del tribunal, los edictos y algunos autos de sustanciación, “lo que tampoco conlleva con su ejercicio adopción de políticas y directrices”.</p> <p>Adicionalmente, sostiene que la norma vulnera los artículos 25, 53 y 125 de la Constitución Política. Para concluir, expone que el artículo 230 de la Constitución establece que “los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”, afirmación que también se predica de los jueces de instrucción penal militar y que se hace extensiva a los auditores de guerra y al secretario del Tribunal Penal Militar.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>CARGO EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES-Es de carrera administrativa o de libre nombramiento dependiendo si es ocupado por nacional o extranjero (Salvamento de voto)</p> <p>La mayoría olvidó que la aceptación de la categorización de los cargos del servicio administrativo en el exterior del mencionado Ministerio como de libre nombramiento y remoción se basó en razones objetivas, las cuales son también aplicables a los colombianos residentes en el exterior. En la sentencia se señala que dadas las características de los cargos bajo análisis es comprensible que ellos sean ocupados frecuentemente por personas que residen en las naciones en donde se encuentran las misiones diplomáticas o consulares colombianas. Ese hecho genera dificultades y costos adicionales para la aplicación de los procedimientos propios del régimen de carrera y, por eso, se concluyó que era constitucional que esos empleos fueran retirados del sistema de carrera administrativa. Pues bien, entre las personas que residen en esas naciones se pueden encontrar ciudadanos colombianos. De acuerdo con la sentencia, ellos solamente podrán acceder a esas posiciones si cumplen con todos los trámites propios de la carrera. Eso significa que en la práctica estos cargos estarán vetados para los colombianos domiciliados en el exterior, por cuanto siempre será más sencillo nombrar directamente a una persona de ciudadanía distinta de la colombiana. La decisión resulta entonces absolutamente lesiva para los ciudadanos colombianos que residen</p>

	en el exterior, los cuales tienen todo el derecho a aspirar a ser nombrados en un cargo en las representaciones diplomáticas o consulares de su país.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-372/99
Fecha de la sentencia	veintiseis (26) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Edelmira Villarraga Gonzalez y Jairo Villegas Arbelaez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 14, 21, 24, 26, 27, 37, 38, 44, 45, 48 (todos en forma parcial), 51, 52, 73, 74, 75, 76, 77 y 79 de la Ley 443 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Primero.- ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-368 del 26 de mayo de 1999, en cuanto a la expresión "Inspector de Tránsito o el que haga sus veces", del numeral 2, literal a), del artículo 5 de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Segundo.- En relación con los artículos acusados y con las disposiciones que se integran como unidad normativa, pertenecientes a la Ley 443 de 1998, SE DECLARA:</p> <p>-Es INEXEQUIBLE la expresión "respectivas", del inciso primero del artículo 10.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE la palabra "respectiva", integrante de los incisos segundo y tercero del artículo 10.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE la expresión "respectiva", del artículo 11.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 14.</p> <p>-Es EXEQUIBLE, sólo en los términos de esta Sentencia, el inciso 4 del artículo 21, que dice:</p> <p>"La entrevista en el proceso de selección para cargos de carrera podrá tener un valor máximo del quince por ciento 15 % dentro de la calificación definitiva y el jurado calificador será plural".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE, en el artículo 24, la parte que dice:</p> <p>"El Gobierno Nacional reglamentará la materia, teniendo en cuenta la posibilidad de organizar cuadros profesionales y grupos ocupacionales".</p> <p>-Son INEXEQUIBLES las expresiones "que realicen las entidades",</p>

	<p>del último inciso del artículo 24.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE la palabra "respectivas", del artículo 25.</p> <p>-Son INEXEQUIBLES, en el artículo 26, los apartes que dicen: "Cada Departamento y el Distrito Capital llevarán en su jurisdicción el registro de la carrera, el cual se entenderá integrado al Registro Nacional" y "...su vigilancia inmediata corresponderá a la Comisión Departamental respectiva, o a la del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en los términos en que lo establezca la Comisión Nacional".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE, en el inciso primero del artículo 27, su parte final, que dice:</p> <p>"Cada Comisión del Servicio Civil dispondrá lo necesario para que las autoridades departamentales y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá conformen el Registro Público de su jurisdicción, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la Comisión Nacional del Servicio Civil".</p> <p>-Son INEXEQUIBLES, en el segundo inciso del artículo 27, las frases "...a través del Departamento Administrativo de la Función Pública..." y "...del personal de las entidades del orden nacional".</p> <p>-Son INEXEQUIBLES, en el artículo 29, las expresiones "...autoridad nacional, departamental o del Distrito Capital que lleve el Registro Público dentro de los parámetros establecidos por la..." y "...sin perjuicio de las certificaciones que puedan expedir las autoridades mencionadas".</p> <p>-Son INEXEQUIBLES, en el literal k) del artículo 37, las palabras "...y los reglamentos".</p> <p>-Es EXEQUIBLE, en el artículo 38, la parte que dice:</p> <p>"De igual manera, se producirá el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos de la misma, cuando el empleado tome posesión de un cargo de carrera, de libre nombramiento y remoción o de período, sin haber cumplido con las formalidades legales".</p> <p>La exequibilidad se declara bajo condición de que el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos de la misma en el evento que contempla la norma solamente tendrá lugar sobre la base de la probada mala fe del empleado.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el párrafo del artículo 41, que dice:</p> <p>"Párrafo. En el orden territorial, los estudios de justificación de</p>
--	--

	<p>reformas a las plantas de personal serán remitidas para su conocimiento a las Comisiones Departamentales del Servicio Civil y a las Comisiones Seccionales de Contralorías, según el caso".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el numeral 4 del artículo 43.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 44, en su totalidad.</p> <p>-Son EXEQUIBLES los vocablos "y Contralorías Territoriales", del artículo 45, en el entendido de que será el legislador el que expedirá el régimen especial que en materia de carrera les es aplicable, dentro de los criterios que este Fallo indica.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el numeral 3 del artículo 45, en la parte que dice: "...del Gobierno, por conducto del Departamento Administrativo de la Función Pública...".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE, en el numeral 7 del artículo 45, la frase que dice: "...y el de las Comisiones del Servicio Civil Departamentales y Distrital de Santafé de Bogotá".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el numeral 9 del artículo 45.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE, en el numeral 10.1 del artículo 45, la frase "en entidades del orden nacional".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE, en el numeral 10.2 del artículo 45, la frase "referidos a empleados del orden nacional".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE, en el numeral 10.3 del artículo 45, la frase "en entidades del orden nacional".</p> <p>-Son INEXEQUIBLES, en el numeral 10.4 del artículo 45, las expresiones "del orden nacional".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el numeral 11.1 del artículo 45.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE, en el numeral 11.2 del artículo 45, la frase "de las entidades del orden nacional".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 46</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 47.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 48.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 49.</p>
--	--



	<p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 50.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 51.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 52.</p> <p>-Son INEXEQUIBLES, en el artículo 61, numeral 12, las palabras "o los reglamentos".</p> <p>-Son INEXEQUIBLES, en el numeral 2.1 del artículo 66, los vocablos "Departamental, del Distrito Capital".</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 73.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 74.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 75.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 76.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 77.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE el artículo 79.</p> <p>-Es INEXEQUIBLE, en el tercer inciso del artículo 83, la frase "y las Comisiones Seccionales del Servicio Civil".</p> <p>Será la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuando el legislador la estructure, la encargada de continuar, directamente o a través de sus delegados, las actuaciones a que se refiere esta norma.</p> <p>Tercero.- Por unidad de materia, se declaran INEXEQUIBLES las siguientes normas de la Ley 27 de 1992:</p> <p>-El artículo 12.</p> <p>-El artículo 13.</p> <p>-Los literales g) e i) y las expresiones "y el de las comisiones seccionales", del literal h), así como las palabras "...y de sus Comisiones Seccionales", del párrafo, del artículo 14.</p> <p>-El artículo 15.</p> <p>-El artículo 16.</p> <p>-El encabezamiento del artículo 17, que dice: "Del apoyo a las Comisiones del Servicio Civil".</p>
--	---

	<p>-Las expresiones "Tanto...", "como las Comisiones Seccionales" y "del Departamento Administrativo del Servicio Civil", que hacen parte del artículo 17.</p> <p>-El inciso final del artículo 17, que dice:</p> <p>"Cada Comisión Seccional del Servicio Civil contará con un empleo de Asesor, que dependerá de la planta de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil. El personal adicional y los demás medios de apoyo que se requieran para el cumplimiento de las funciones que les corresponde a las Seccionales será suministrado por los respectivos Departamentos, previa la celebración de convenios con el Departamento Administrativo del Servicio Civil. Estos empleados actuarán bajo la subordinación y dependencia del funcionario de este Departamento, quien para todos los efectos actuará como superior inmediato".</p> <p>-Las frases "...y los integrantes de las Comisiones Seccionales del Servicio Civil...", del inciso primero, y las palabras "...y Seccionales del Servicio Civil...", del inciso segundo, del artículo 21.</p> <p>Cuarto.- Las referencias que en los distintos artículos de las leyes 27 de 1992 y 443 de 1998 se hacen a "las Comisiones del Servicio Civil" deben entenderse hechas exclusivamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, prevista en el artículo 130 de la Constitución Política.</p> <p>Quinto.- El Congreso Nacional, en desarrollo de los artículos 113 y 130 de la Constitución Política, señalará la estructura de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como órgano autónomo e independiente, responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan el carácter especial.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La ciudadana EDELMIRA VILLARRAGA GONZALEZ (Expediente D-2246) dirige su demanda de inconstitucionalidad únicamente contra el numeral 9 del artículo 45 transcrito, pues, en su criterio, vulnera los postulados consagrados en los artículos 13, 125, 209 y 243 de la Constitución Política.</p> <p>La violación de la Carta se configura, según ella piensa, en cuanto la norma acusada dispone, para determinadas personas, un mecanismo de ingreso a la carrera administrativa distinto al establecido en el artículo 125 de aquella y también diverso del previsto en el capítulo II del Título II de la Ley 443 de 1998, cuya</p>

	<p>vigilancia corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>Manifiesta que, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera y que los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por las disposiciones fundamentales o por la ley serán nombrados por concurso público.</p> <p>Considera que los concursos deberán efectuarse mediante la realización de procesos de selección previamente determinados por ley, pero que en ningún caso se le otorgó competencia a órgano distinto a la Comisión Nacional del Servicio Civil para adelantar dicha actividad.</p> <p>A juicio de la demandante, el sistema contemplado en la norma impugnada "no es otra cosa que un mecanismo extraordinario para ingresar a la carrera administrativa, simulado detrás de una aparente exigencia de comprobación del mérito tendiente a que quien lo esté ejerciendo ingrese a la carrera sin la necesaria confrontación frente a otros ciudadanos con iguales o mejores méritos. Con dicha norma se está liberando a las entidades de la obligación de convocar a concurso aquellos empleos de carrera que antes eran de libre nombramiento y remoción, y que ahora son ejercidos por personas seleccionadas por un mecanismo no reglado y por lo tanto, no hay oportunidad de que aspirantes que se consideren aptos para ejercerlos puedan demostrar sus méritos puesto que no podrán concursar...".</p> <p>Por su parte, el ciudadano JAIRO VILLEGAS ARBELAEZ (Expediente D-2252) considera que las normas demandadas de la Ley 443 de 1998 desconocen los artículos 6, 25, 53, 58, 90, 113, 115, 117, 119, 121, 124, 128, 130, 189, 208, 267, 268, numeral 10, y 272 de la Constitución Política.</p> <p>Afirma que el cargo de Inspector de Tránsito y Transporte no reúne los requisitos o las características propias de los empleos que llevan anexa autoridad o jurisdicción, ni tampoco implica cargo directivo, de manejo ni conducción u orientación institucional. Por tal razón, estima que no debe estar incluido este oficio en la lista de las excepciones que al régimen de la carrera establece el artículo 5 parcialmente acusado.</p> <p>El impugnante acusa parcialmente como inconstitucional el artículo 14 de la Ley 443 de 1998, pues alega que el Constituyente de 1991 sustrajo a la Rama Ejecutiva de la dirección y manejo de la carrera administrativa y, por tanto, la selección del personal de cada entidad u organismo de esta Rama del poder público debe estar a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>Por esta razón, manifiesta que el Ejecutivo no puede ejercer al tiempo dos funciones que son independientes, como la de seleccionar por concurso -la cual corresponde a la Comisión- y la de nominar o investir -que compete a cada entidad u organismo del Ejecutivo-, ya que de lo contrario se violan los artículos 113, 121,</p>
--	---

	<p>130 y 189 de la Constitución Política.</p> <p>Argumenta así el impugnador:</p> <p>"La norma legal acusada repite normas preconstitucionales, desconociendo que el Constituyente de 1991 sustrajo del Ejecutivo la administración de la carrera administrativa y su pilar central, cual es la selección del personal por oposición o concurso de méritos, cuya administración el artículo 130 Constitucional atribuyó a un nuevo organismo denominado COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.</p> <p>Así, la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, en el ejercicio de su función constitucional de administradora de la carrera administrativa, realiza los concursos de selección y el Ejecutivo debe investir o nombrar en período de prueba, en riguroso orden de mérito".</p> <p>A juicio del demandante, el artículo 21 de la Ley 443 de 1998, acusado parcialmente, es contrario al 136 de la Carta, toda vez que, en su sentir, la atribución de reglamentar los concursos de mérito para la selección de personal de la carrera administrativa y de asignar valor a las distintas pruebas corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por mandato del artículo 130 del Estatuto Fundamental.</p> <p>Afirma el actor que la facultad legal otorgada por los artículos 26 y 27 atacados, en el sentido de permitir que las autoridades departamentales y las del Distrito Capital puedan llevar en su jurisdicción el registro de la carrera, el cual se entenderá integrado al Registro Nacional, viola los artículos 121 y 130 de la Constitución, ya que esta función debe adelantarla la Comisión Nacional del Servicio Civil y no los organismos del Ejecutivo. Recuerda el actor que la función del Registro es declarativa y no constitutiva.</p> <p>Acusa parcialmente como inconstitucional el literal k) del artículo 37 de la Ley 443, por hallarlo contrario al 125 de la Constitución, toda vez que las causales de retiro del servicio de los empleados de carrera sólo pueden estar previstas en el Texto Fundamental o en la ley, pero nunca en reglamento, ya que el Ejecutivo no tiene competencia para determinarlas.</p> <p>Considera que las expresiones acusadas del artículo 38 vulneran los principios consagrados en el 53 de la Carta Política, teniendo en cuenta que el deber constitucional de la Administración es proteger los derechos de las personas y con mayor razón tratándose de los trabajadores, y para ello la Administración debe cumplir las "formalidades legales", que sólo están atribuidas a ella como administradora de sus empleados.</p> <p>Dice el demandante:</p> <p>"Si es la Administración quien viola esas "formalidades legales" por Acción u Omisión, "formalidades" que ella misma es quien puede producir, la responsabilidad es de la Administración y no del Empleado y por ello la ley acusada no puede trasladarle la Responsabilidad de la Administración al empleado, como lo hace la</p>
--	--

	<p>norma Acusada, en sus efectos negativos".</p> <p>Sostiene el accionante, en cuanto a la inconstitucionalidad parcial de los artículos 44 y 48, que ésta proviene de la intromisión por parte de representantes de la Rama Ejecutiva en la conformación e integración de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de las comisiones departamentales y del Distrito Capital.</p> <p>Por esta razón, sostiene que no es lógica la acumulación simultánea de la función de vigilantes con la de vigilados. Y, para sustentar su acusación, presenta los siguientes caracteres del texto, que, en su opinión, demuestran el sentido inconstitucional de la normatividad demandada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La Comisión Nacional del Servicio Civil está integrada en forma mayoritaria y con poder de decisión -tres de cinco miembros cuentan con voto-, por representantes de la Rama Ejecutiva.</li> <li>-El parágrafo 2 del artículo 48 designa a un delegado, no de la Comisión Nacional como se establece en el numeral 1, sino un delegado del Presidente de la Comisión, es decir, un delegado del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.</li> </ul> <p>Sostiene que también son inconstitucionales los numerales 3 y 4 del artículo 44, por el hecho de haberle negado al Procurador General de la Nación así como al Defensor del Pueblo la posibilidad de votar en la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>Sobre el particular señala la demanda:</p> <p>"Adviértase en primer lugar la contradicción frente a las COMISIONES SECCIONALES del artículo 48, en la que el Defensor Regional y el Procurador Departamental, sí tienen voto.</p> <p>Además, el Procurador General de la Nación, como Director y el Defensor del Pueblo como parte del Ministerio Público, que es Representante de la Sociedad (C.P. Arts. 275, 277 y 281) no están inhabilitados Constitucionalmente para poder votar en la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, ya que si eventualmente se presentare Investigación Disciplinaria sobre decisiones de la Comisión, bien podrá el Senado y la Cámara, respectivamente, designar Procurador y Defensor Ad hoc para tal investigación disciplinaria".</p> <p>En cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 51 y 52 de la Ley 443, manifiesta el ciudadano VILLEGAS que resulta insólito el hecho de que un organismo de carácter constitucional –Comisión Nacional del Servicio Civil-, carezca de autonomía e independencia administrativa y financiera respecto de la Rama Ejecutiva (cuyos organismos y entidades resultan vigilados por la Comisión).</p> <p>Expresa que esa regla se traduce no sólo en la conformación mayoritaria y decisoria de sus miembros –representantes del Ejecutivo-, sino también en el suministro de apoyo financiero, de recursos físicos, tecnológicos y de personal necesarios para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p>Finalmente, en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 79 de la Ley 443 de 1998, a juicio del actor ella se</p>
--	---

	<p>presenta ya que dentro de las expresas excepciones al régimen constitucional de carrera (art. 130 C.P.) no están las contralorías territoriales y, por tanto, no se encuentran excluidas de la administración y vigilancia que, sobre la carrera administrativa ejerce la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>Es decir, en el sentir del accionante, la consagración de un régimen especial de carrera para la Contraloría General de la República (art. 268-10 C.P.) no determina un régimen especial de carrera para las contralorías territoriales.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-370/99
Fecha de la sentencia	mayo veintisiete (27) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Carlos Alberto Lozano Velásquez, Rubén Darío Díaz Rueda y otros
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5 parcial, 39 parcial, 41, 48-2 y 56 de la ley 443 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	<p>Primero. Declarar exequibles el artículo 41 y el parágrafo 3 del artículo 56 de la ley 443/98, pero únicamente por los cargos aquí analizados.</p> <p>Segundo. Declarar exequibles los apartes demandados de los artículos 39 y 48-2 de la misma ley.</p> <p>Tercero. Estarse a lo resuelto en la sentencia C-368 del 27 de mayo de 1999, que declaró inexequible la expresión “e Inspector de Tránsito y Transporte o el que haga sus veces” contenida en el artículo 5 de la ley 443 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. El ciudadano Carlos Alberto Lozano Velásquez considera que no existe justificación lógica ni razonable para excluir de la carrera administrativa el cargo de “<i>Inspector de Tránsito y Transporte o el que haga sus veces</i>”, tal como aparece en el artículo 5, materia de impugnación, pues éstos son empleos que “<i>no están ubicados en el nivel directivo ni realizan labores de dirección, conducción y orientación, ni asesoría institucional.</i>” Además, dicho empleo no tiene ninguna relación con el alcalde municipal puesto que depende del Secretario de Tránsito y Transporte, a quien le presentan sus informes.</p> <p>En cuanto al artículo 41 y el aparte acusado del artículo 56 de la misma ley, señala que violan el artículo 13 de la Carta, por que dan un trato discriminatorio a los empleados del orden territorial, al no “<i>requerírseles a las entidades de este orden, la aprobación de las modificaciones de las plantas de personal, ni el concepto previo y favorable de las modificaciones de las estructuras, adopción de los estatutos orgánicos y de las plantas de personal del Departamento Administrativo de la Función Pública, como sí se les exige a las</i></p>

	<p><i>entidades del orden nacional. La sola remisión de los estudios de justificación de reforma o modificación de plantas de personal, que impliquen supresión de cargos a las Comisiones Departamentales del Servicio Civil, para que éstas solamente las conozcan, no garantizan la estabilidad laboral de los empleados del nivel territorial, quedando éstos expuestos al arbitrio de los nominadores, que en cada período de gobierno suprimen cargos para colocar a sus seguidores políticos.”</i></p> <p>En lo que respecta al numeral 2 del artículo 48 de la ley 443 de 1998 dice el actor que viola el artículo 209 de la Constitución, pues <i>“la presencia e intervención de los Gobernadores o sus delegados, quienes son nominadores de las gobernaciones y presidentes de los entes descentralizados del orden departamental, en las Comisiones Departamentales del Servicio Civil, impide que aquellos, al intervenir y decidir sobre los asuntos de carrera administrativa que se presenten en estos entes territoriales, lo hagan de manera imparcial; serían juez y parte.”</i> Las comisiones citadas deben ejecutar acciones o dictar actos administrativos con base en los principios de igualdad, moralidad, celeridad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad.</p> <p>2. En la demanda presentada por el ciudadano Rubén Darío Díaz Rueda junto con otras personas, se dice que el artículo 41 de la ley 443 de 1998 viola el artículo 125 de la Constitución, pues como <i>“puede observarse las reformas de las plantas de personal de carrera administrativa, están condicionadas a un estudio técnico que también puede elaborar la entidad respectiva y para ello contará con personal subalterno. Dicho en otras palabras el jefe de la entidad materia de reforma, será autónomo al momento de decidir qué empleos elimina y cuáles no. Lo que atenta contra la estabilidad que debe tener el personal de carrera.”</i> (art. 125 C.P.)</p> <p>En cuanto al aparte acusado del artículo 39 de la misma ley, manifiestan que la indemnización que se autoriza en esa disposición, en caso de supresión de un cargo de carrera, es <i>“una verdadera miseria y limosna”</i>, lo cual es injusto pues el funcionario ha tenido que capacitarse y hacer un gran esfuerzo para cumplir con sus labores, lo cual se le desconoce.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las	NO APLICA



aclaraciones	
--------------	--

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-456/99
Fecha de la sentencia	diez (10) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Félix Hoyos Lemus
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el literal k) - parcial- del artículo 37 de la Ley 443 de 1998
Conoció en primera instancia	Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Decision	<p>Estar a lo resuelto en la Sentencia C-370 del 26 de mayo de 1999 que declaró INEXEQUIBLE la expresión “y los reglamentos”, consignada en el literal k) del artículo 37 de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Primero. Corregir la parte motiva de la sentencia C-456 del 10 de junio de 1999, de manera que cuando se hace mención a la sentencia C-370 del 26 de mayo de 1999, para efectos de declarar la cosa juzgada constitucional respecto de la expresión “y los reglamentos” contenida en el literal k) del artículo 37 de la Ley 443 de 1998 “por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”, debe entenderse que se hace referencia es a la sentencia C-372 del 26 de mayo de 1999.</p> <p>Segundo. Corregir la parte resolutive de la sentencia C-456 del día 10 de junio de 1999, la cual queda así:</p> <p>“Estar a lo resuelto en la Sentencia C-372 del 26 de mayo de 1999 que declaró INEXEQUIBLE la expresión “y los reglamentos”, consignada en el literal k) del artículo 37 de la Ley 443 de 1998.”</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Según el demandante, la preceptiva legal acusada quebranta directamente, el artículo 125 de la Constitución Política y de manera indirecta los artículos 113 y 150, numeral 23) de la Carta Fundamental.</p> <p>Lo anterior, por cuanto en su concepto con la expresión demandada, se extiende indebidamente lo establecido por el artículo 125 del ordenamiento superior, como quiera que este precepto contempla como las dos únicas fuentes formales legitimadas para definir las causales de retiro del servicio de los</p>

	<p>empleados de carrera, a la Constitución y a la ley.</p> <p>El actor considera que la intención del Constituyente de 1991 fue la de conferir esta potestad al poder legislativo y no a la rama ejecutiva, con el fin de impedir que a través de “reglamentos” expedidos en ejercicio de la función administrativa y no legislativa, se regulen aspectos de un derecho fundamental y político, como es el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (C.P. art. 40).</p> <p>De otro lado, el demandante considera que la expresión impugnada es violatoria del numeral 23) del artículo 150 de la Carta Política, en la medida en que otorga, a la administración en general, una atribución propia del Congreso de la República, cual es la de “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas...”, con lo cual también se desconoce el artículo 113 del ordenamiento constitucional que consagra la división y separación de poderes, dada la concentración de la facultad “de crear derecho (poder legislativo) y para reglamentarlo (poder ejecutivo)”, en cabeza de éste último.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-642/99
Fecha de la sentencia	primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Antonio Eduardo Bohórquez Collazos
Demandado	Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 443 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Declarar INEXEQUIBLE la expresión acusada del parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 443 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Según el demandante la disposición acusada vulnera los artículos 1, 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política. El concepto de la violación se expone de la siguiente manera:</p> <p>El texto acusado es equívoco porque da lugar a dos interpretaciones: que el empleado, una vez opte por la indemnización, o la reciba, no puede reclamar contra el monto de la misma, porque la ley le confiere a estos actos el valor de una conciliación; o bien que, al aceptar la indemnización, se descarta la posibilidad de que pueda ejercitar la correspondiente acción judicial contra el acto administrativo que suprimió el cargo.</p> <p>Las situaciones descritas tienen como consecuencia la vulneración del numeral 6º del artículo 40 de la Constitución, en virtud del cual todo ciudadano tiene derecho a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, así como el preámbulo en cuanto señala como elementos fundantes del orden constitucional, la justicia y la igualdad, la filosofía solidaria y social del Estado Social de Derecho, el principio de la efectividad y garantía de los derechos, el derecho al trabajo en condiciones de dignidad y de justicia y los principios mínimos protectores de este derecho.</p> <p>Igualmente considera el demandante que la norma acusada desatiende las directrices constitucionales del deber estatal de protección al trabajo, pretende convertir en renunciable lo que no es, y desconoce el principio de estabilidad en el empleo y de igualdad ante las cargas públicas.</p>

	<p>En efecto, expresa en algunos de los apartes de la demanda el actor:</p> <p>"En el ejercicio de sus funciones y competencias todas las estructuras estatales sin excepción, están obligadas a beber de la dignidad humana, que representa su principalísimo deber y la esencia de su finalidad última, y en consecuencia todas sus actuaciones deben dirigirse de manera inequívoca al respeto a ella. El actuar contrario a ese precepto, le hace merecedor de la necesaria sanción que el mismo ordenamiento jurídico ha dispuesto".</p> <p>(.....)</p> <p>"Pues resulta a todas luces indigno el que se ponga contra la pared a quien acaba de cercenársele su fuente de subsistencia y trascendencia, forzándole o a renunciar a recibir una indemnización –producto del estado solidario- por haber perdido su empleo, o a renunciar a una de las garantías de mayor trascendencia para la humanidad como lo es poder acudir a la autoridad jurídica a fin de buscar preservar o garantizar un derecho fundamental como el trabajo, que es mucha veces conculcado, por el patrono privado o público, gracias a artimañas irregulares y violatorias del orden jurídico".</p> <p>"Esto que ante una situación real de crisis económica no sólo no dota al ordenamiento de las herramientas jurídicas aptas para la defensa idónea del sagrado derecho a trabajar, sino que, mas grave aún niega su compromiso de ampararle al establecer lo que en últimas es una opción forzada contra el afectado: Renunciar a la herramienta judicial de defensa y restablecimiento del derecho superior cercenado, so pena de no recibir una modesta suma de dinero producto de la faz que debe mostrar un estado social de derecho, como tal solidario. Razón suficiente para que ya no figure en el ordenamiento</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECONOCE INDEMNIZACION Y CONCILIACION (Salvamento de voto)</p> <p>Señalar normativamente que los efectos del acto administrativo sean similares a los derivados de una conciliación, es distinto a establecer que el primero tenga exactamente ese carácter. El legislador positivo puede, en principio, atribuir consecuencias</p>

	<p>semejantes a situaciones que no son idénticas pero que bajo ciertos aspectos guardan determinada analogía. En segundo término, la indemnización sólo se reconoce como opción libre del empleado. La posibilidad de este pago constituye una oferta del Estado, que incorpora ciertas consecuencias legalmente previstas, como ocurre en otros ámbitos como en el tributario- declaración de renta- o en el penal- solicitud de sentencia anticipada. Sin embargo, el trabajador bien puede rechazar esta propuesta. La protección del trabajador no puede llegar hasta el punto de restarle firmeza a una opción libremente consentida por el trabajador estatal, cuando éste ha podido discernir y escoger entre distintas alternativas de acción, salvo que se presenten situaciones de engaño.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-746/99
Fecha de la sentencia	seis (6) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Demandante	Mauro Antonio Higuita Correa.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, parágrafo 1º, y 45, numerales 1, 6, 10.1, 10.2, 10.3 y 11.2 (parciales) de la ley 443 de 1998, "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones."
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	<p>Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-372 del 26 de mayo de 1999, en relación con las expresiones demandadas de los numerales 10.1, 10.2, 10.3 y 11.2 del artículo 45 de la ley 443 de 1998.</p> <p>Segundo: Decláranse EXEQUIBLES el parágrafo primero del artículo 4º de la ley 443 de 1998 y las expresiones demandadas: "a nivel nacional"; "empleados del Estado"; y, "y específicos" del artículo 45, inciso 1º, del numeral 1 y del numeral 6, respectivamente, del mismo artículo 45, de la ley mencionada.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante estima que las normas transcritas, en las expresiones demandadas, violan el artículo 130 de la Constitución Política, concretamente, en donde el mencionado artículo establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil separa de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, a las carreras que tengan carácter especial.</p> <p>El actor considera que las normas demandadas, al haber establecido que la mencionada Comisión tiene competencia sobre las entidades que tienen regímenes específicos, desconoció el mandato constitucional citado. En el inciso segundo del artículo 4º de la ley 443, se señala cuáles son las entidades que tienen esos regímenes especiales, y, en sus respectivos estatutos, se contemplan los recursos y las instancias que cada uno tiene. Por ello, la ley 443 no podía abordar estos asuntos, y, al hacerlo, violó la Constitución.</p> <p>c) Intervención del Departamento Administrativo de la Función</p>

	<p>Pública :</p> <p>La ciudadana que intervino en representación del Departamento Administrativo de la Función Pública, doctora Fabiola Obando Ramírez, expuso las razones para defender las normas demandadas. Señaló la interviniente :</p> <p>Para establecer la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es necesario ver, primero, las diferencias entre las carreras especiales, la carrera general y los llamados sistemas específicos de carrera. La interviniente menciona las normas que antes de la Constitución de 1991, reglaban cada una de estas carreras.</p> <p>Explica que a partir de 1991, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se logró dilucidar la competencia de la Comisión, en relación con los organismos que tienen regímenes específicos. Explicó que la diferencia entre los regímenes especiales y específicos se encuentra en su creación. Si el régimen tiene origen constitucional, se trata de un régimen especial, y si su origen es legal, se trata de uno específico. Sobre los primeros, la Comisión no tiene competencia. Este es el sentido de las sentencias C-391 de 1993, C-299 de 1994 y C-356 de 1994, de la Corte.</p> <p>No obstante, advierte la interviniente, el Consejo de Estado, en varias oportunidades ha sostenido que aquellos sistemas que la ley 443 ha denominado "específicos de carrera" son carreras especiales, sobre las que no tiene competencia la Comisión.</p> <p>Concluye la interviniente así: las únicas carreras especiales son las previstas en la Constitución, concretamente, la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Carrera Judicial y Fuerzas Militares y de Policía. Sin embargo, en la sentencia C-616 de 1996, de la Corte Constitucional, se decidió que la carrera diplomática y consular también es especial. No obstante, por no tener origen constitucional, no fue incluida en los órganos excluidos de la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>Explicadas estas diferencias, no le asiste razón al actor en solicitar la inexequibilidad de las normas demandadas, pues ellas se refieren a la competencia de la Comisión sobre los regímenes específicos</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA



Resumen aclarações	de las	NO APLICA
-----------------------	--------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-199/99
Fecha de la sentencia	abril siete (7) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Hubert Teller Fonseca Y Maria Luisa Mendez Abril
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 62 (parcial) de la Ley 443 de 1998, "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones"
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar la EXEQUIBILIDAD de la parte demandada del artículo 62 de la Ley 443 de 1998 bajo el entendido de que la expresión “la indemnización a que tendría derecho”, a la que se refiere la primera parte del tercer inciso del mencionado artículo, incorpora (1) la compensación por la totalidad de los salarios dejados de percibir en el interregno entre el retiro y la fecha del parto y, (2) el pago mensual, a la correspondiente entidad promotora de salud, de la parte de la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud que corresponde a la entidad pública en los términos de la ley, durante toda la etapa de gestación y los tres meses posteriores al parto.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los demandantes señalan que el artículo 62 de la Ley 443 de 1998 establece tres hipótesis diferentes de protección a la servidora pública que se encuentra en estado de embarazo: (1) cuando ocupa un cargo de carrera de manera provisional o en período de prueba; (2) cuando se encuentra inscrita en el régimen de carrera y obtiene una calificación de servicios no satisfactoria; y, (3) cuando ocupa un cargo de carrera que debe ser suprimido por razones de buen servicio y no puede ser ubicada en otro cargo igual o equivalente.</p> <p>A su juicio, el tratamiento que la norma antes anotada otorga a la servidora pública que se encuentra en la última de las situaciones mencionadas, consistente en el pago de una indemnización equivalente al valor de las doce semanas de descanso remunerado a que se tiene derecho como licencia de maternidad, es discriminatorio frente al tratamiento que la misma norma dispensa en las dos primeras situaciones. Consideran que la señalada indemnización es "insuficiente, inicua, irrisoria toda vez que sólo alcanza a cubrir o compensar el período de licencia de maternidad,</p>

	<p>en otros términos, el período de postparto, equivalente a tres meses; y no salvaguarda real y efectivamente los derechos inalienables y valores constitucionales que se arriesgan tales como la vida, la familia, el cuidado de los niños, la seguridad social entre otros; pues queda desprotegido el período de embarazo, que comprende desde el momento de la concepción hasta la fecha del parto". Agregan que "en los dos primeros casos las mujeres embarazadas reciben una mejor y especial protección que en el tercer caso, por cuanto las primeras han sido amparadas por la ley durante su período de embarazo y postparto, mientras que a la última sólo se le protege en el período del postparto". En estas circunstancias, estiman que la disposición acusada vulnera aquellas normas constitucionales que obligan al Estado y los particulares a brindar una especial protección a la mujer embarazada durante el embarazo y después del parto (C.P., artículos 13, 43, 44 y 53).</p> <p>Los actores indican que el hecho de que la servidora pública cuyo cargo es suprimido reciba una doble indemnización no desvirtúa el vicio de inconstitucionalidad que presenta la norma demandada. En su opinión, "la indemnización por servicios es una retribución a la que tiene derecho cualquier servidor público, hombre o mujer, inscrito en la carrera administrativa cuando su cargo le es suprimido y opta por la misma, de modo que en este caso la indemnización por servicios no es una retribución especial para la mujer en estado de embarazo".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-131/99
Fecha de la sentencia	tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Alfredo Pimiento Díaz.
Demandado	Normas acusadas: Artículo 1º (parcial) de la Ley 445 de 1998.

Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Estar a lo resuelto en la sentencia C-067 de 1999, que declaró exequible el inciso primero del artículo 1º de la Ley 445 de 1998, en el entendido que los incrementos que allí se establecen para las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, financiadas con recursos del presupuesto nacional comprenden también a las pensiones que hayan sido reconocidas por entidades del orden territorial, en el caso de acumulación de tiempos de servicio en el sector oficial, a prorrata de la cuota parte que corresponde a la Nación.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El actor considera que las expresiones acusadas violan el artículo 13 de la Constitución por cuanto excluyen del incremento previsto por la propia disposición “a las personas pensionadas pertenecientes a los órdenes departamentales y municipal”, con lo cual se crea “una situación de desigualdad entre los pensionados”, que es injustificada, ya que “todos fueron servidores públicos”
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-115/99
Fecha de la sentencia	veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Demandante	Ezequiel Jiménez Pinto
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° ( parcial ) de la Ley 445 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-067 de 1999, que declaró exequible el inciso 1° del artículo 1° de la Ley 445 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>Estima el demandante que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 1°, 2°, 4°, 13 y 53 de la Constitución Política.</p> <p><i>2. Fundamentos de la demanda.</i></p> <p>Para el demandante los apartes demandados del artículo 1° de la ley 445 de 1998 vulneran los artículos mencionados de la Carta Política, ya que excluyen de los beneficios que conlleva un incremento pensional, a los jubilados de los organismos descentralizados del servicio público nacional, de las entidades territoriales y del sector privado, sin tener en cuenta que estas personas se han supeditado a los requisitos legales para obtener el reconocimiento de su derecho pensional y se hallan en la misma situación fáctica y jurídica en que se encuentran los pensionados beneficiados por la norma demandada. Para el actor esta discriminación hace que las mesadas de los pensionados no favorecidos se vean afectadas por los efectos negativos de la inflación, y la diferencia de trato no tiene justificación objetiva ni razonable. Tras un recuento histórico de las últimas leyes relativas a reajustes pensionales, el demandante indica que la norma acusada desactualiza las pensiones de quienes no quedan cobijadas por ella.</p>

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-085/99
Fecha de la sentencia	febrero diecisiete (17) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Eduardo Alfonso Durán Alvarez
Demandado	Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1o. (parcial) de la Ley 445 de 1998, "por la cual se establecen unos incrementos especiales a las mesadas y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dra. MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Decision	Estar a lo resuelto en la Sentencia No. C-067 del 10 de febrero de 1999, que declaró exequible el inciso primero del artículo 1o. de la Ley 445 de 1998, con la precisión señalada en la parte resolutive de dicha sentencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor formula acusación contra el inciso primero del artículo 1o. de la Ley 445 de 1998 por quebrantar los artículos 2o., 13 y 150-19 de la Constitución Política.</p> <p>A su juicio, dicho precepto discrimina injustificadamente un sector de pensionados al excluirlos del incremento decretado en favor de las pensiones del sector público del orden nacional financiadas con recursos del presupuesto nacional, las del Instituto de Seguros Sociales, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Así, cuando el legislador decreta en la norma acusada el pago de unos incrementos a las pensiones allí enumeradas, desconoce la efectividad de los derechos constitucionales, como el de igualdad, puesto que deja por fuera de estos beneficios a los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden territorial y a los del sector privado.</p> <p>En consecuencia, estima que se legisló en favor de un grupo de pensionados, los del sector público del orden nacional, desconociéndose lo consagrado en el numeral 19, literales e) y f) del artículo 150 constitucional, pues este precepto consagra iguales garantías para todo el sector público. Esta atribución conferida al legislador, tiene la finalidad de darle un mismo tratamiento a los servidores de todos los niveles de la administración pública.</p>

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-672/99
Fecha de la sentencia	nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Hernán Darío Velásquez Gómez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 68, 82 a 88, 111 a 142, 146, 147 (p), 148 y 194 de la ley 446 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>Primero. En relación con los arts. 68, 82, 85 y 87 de la ley 446/98, ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia C-160/99.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 83, 84, 86, 111 a 142, 146 y 148, así como los apartes acusados de los arts. 57 y 147 de la ley 446/98, pero únicamente en relación con los cargos analizados en esta sentencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante ordena y formula los cargos de inconstitucionalidad contra las normas acusadas, agrupándolas según su afinidad material, así:</p> <p>- Artículo 57. Esta norma modificó el art. 194 del C.C.A., el cual regulaba el recurso extraordinario de súplica, que estaba concebido como un medio para evitar los cambios súbitos de jurisprudencia por las diferentes secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin la intervención de su Sala Plena.</p> <p>La nueva regulación que contiene la disposición acusada establece, en cambio, que el recurso procede contra cualquier sentencia ejecutoriada de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado por la violación directa de las normas sustanciales, en las modalidades de aplicación indebida, falta de aplicación, o interpretación errónea.</p> <p>De esta manera el recurso se transformó, porque pasó de fundamentarse en un motivo de ocurrencia ocasional, a originarse en tres causas de frecuente ocurrencia, lo cual implica que se</p>

	<p>genere un mayor número de controversias y a que se le reste eficiencia a la labor del Consejo de Estado, debido a la congestión que ahora debe producirse, con ocasión del mayor número de recursos extraordinarios de súplicas que la nueva disposición estimularía.</p> <p>Por lo anterior, la norma acusada es contraria a los propósitos de la ley 446 de 1998, como fueron los de lograr la "descongestión, eficiencia y acceso a la justicia", pues su aplicación "acarreará una indudable congestión de la Sala Plena y, de rebote una ineficiencia en la administración de justicia de grandes proporciones".</p> <p>En estas circunstancias, la norma cuestionada viola los artículos 158 y 169 de la Constitución, que regulan el principio de la unidad de materia, el cual exige que exista la debida correlación entre cada norma y el contenido general de la ley, pues del contenido de aquélla no se desprende la existencia de relación alguna con la descongestión ni con la eficiencia de la justicia.</p> <p>- Artículos 68, 82 a 87, 111 a 142, 146, 147 (parcial) y 148. Contra estas normas se formulan cargos de inconstitucionalidad dirigidos a establecer que sus regulaciones no podían adoptarse a través de una ley ordinaria sino mediante una ley estatutaria.</p> <p>Con respecto a los arts. 68, 82 a 87 señala el demandante que dada la sustancialidad o la esencia de las regulaciones contenidas en dichas normas, en cuanto tocan con la administración de justicia, en la medida en que condicionan la actividad judicial, laboral y de familia a la conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad, debieron ser expedidas por el mecanismo de una ley estatutaria. En efecto expresa:</p> <p>"No puede negarse que las normas que suprimen funciones judiciales al Estado a través de los jueces, para otorgárselas a las autoridades administrativas o a los particulares, son normas que tocan con la esencia de la administración de justicia. Más aún, son normas que trascienden del campo normal legislativo para entrar a la organización misma del Estado, ya que cambia uno de sus fines esenciales: administrar justicia. Siendo ello así, hay que admitir que normas de tal tipo sólo se pueden expedir mediante una ley estatutaria. (...) Es tan seria la desjudicialización, y de consecuencias tan enormes para el Estado Colombiano, que se cobija la esencia misma de la administración de justicia, su núcleo, su razón de ser. En consecuencia, cualquier norma que suprima la función judicial por parte del Estado para entregársela a los particulares, debe ser tramitada bajo las exigencias de la norma estatutaria".</p>
--	---

	<p>- Los artículos 111 a 129, según la demanda, "consagran el sistema arbitral, es decir, la justicia decidida por árbitros. La atribución de funciones judiciales tocan el alma, el nervio, la esencia de la administración de justicia. De una gratuita se está llegando a una onerosa. De una justicia preparada por naturaleza para serlo, se está pasando a una justicia no preparada para tal efecto, con intereses y objetivos diferentes. (...) Eso es algo tan serio, que afecta el núcleo esencial de la administración de justicia y exige la seriedad de una ley estatutaria".</p> <p>- La norma del artículo 130 consagra la amigable composición que, por las razones señaladas en el caso de la justicia arbitral, viola los artículos 152 y 153 de la Constitución.</p> <p>- Los artículos 131 a 142 y 146, "consagran todos ellos funciones judiciales a las Superintendencias Bancarias, de Sociedades y de Valores, entes que pertenecen a la Rama Ejecutiva. Se afecta el núcleo esencial de la administración de justicia. Por ello esa atribución debió hacerse mediante los trámites de una ley estatutaria. Muy especialmente violan el núcleo esencial de los artículos 133, 134 y 137 que desarrollan el Título I de la Parte IV de la ley 446, que expresamente habla "Del ejercicio de funciones jurisdiccionales por las Superintendencias", así como el 146 que expresamente le atribuye funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Bancaria".</p> <p>- En cuanto a los artículos 147 (parcial) y 148 dice el demandante:</p> <p>"Violan la Constitución las expresiones "la Superintendencia", "el Superintendente", contenidas en los incisos primero y segundo, respectivamente, del artículo 147. Es inconstitucional el inciso último del artículo 147. Las atribuciones jurisdiccionales que se le otorgan a prevención a las Superintendencias en el artículo 147, así como el procedimiento que se señala para las Superintendencias en el artículo 148, violentan la esencia de la administración de justicia, exigiendo, por lo tanto, el trámite de una ley estatutaria".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	SI DRES. CARLOS GAVIRIA DIAZ, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO PROCESO ARBITRAL-Regulación mediante ley estatutaria (Aclaración de voto)

	<p>La regulación del proceso arbitral, una forma de administrar justicia a la que se acude cada vez con más frecuencia y a la que se someten asuntos de tan marcada importancia, ha debido ser objeto de regulación mediante ley estatutaria. No obstante, la propia Corte Constitucional no lo estimó así (por unanimidad) al revisar el proyecto de Ley Estatutaria de la administración de justicia.</p> <p>CLAUSULA COMPROMISORIA (Aclaración de voto)</p> <p>Se percibe una fuerte tendencia a sustraer de la justicia ordinaria - mediante la estipulación de la cláusula compromisoria- el conocimiento de un sinnúmero de asuntos que quedan sometidos entonces a una administración de justicia costosa, a la que no tienen acceso todas las personas que requieren un pronunciamiento judicial, ni siquiera muchas de las que se ven precisadas a suscribir una cláusula compromisoria. Consideramos que no está del todo desorientado el actor cuando previene sobre el peligro de una creciente "privatización de la administración de justicia", fenómeno que no era pensable siquiera en la teoría del Estado gendarme, y que parece definitivamente exótico en la práctica de un Estado social de derecho.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-268/99
Fecha de la sentencia	abril veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Campo Elias Cruz Bermudez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 68 y 88 de la Ley 446 de 1998 "Por la cual se adoptan como Legislación Permanente algunas normas del decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia".
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-160 de 1999 y C-247 de 1999, en cuanto a los artículos 68 y 88 respectivamente, de la ley 446 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 2, 13, 16, 18, 20, 25 29, 53, 209, 228, 229 y 333 de la Constitución Política.</p> <p>B. Fundamentos de la demanda</p> <p>La demanda del actor esta dirigida contra dos de los artículos de la ley 446 de 1968, específicamente contra los artículos 68 y 88, que establecen, el primero la conciliación administrativa como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción laboral, y el segundo, en lo relacionado con asuntos de competencia de la jurisdicción de familia, la condición de que la conciliación administrativa deberá intentarse de manera previa a la iniciación del proceso judicial.</p> <p>De acuerdo con la interpretación del demandante, en ambos casos, esto es para los asuntos laborales y los de familia, el legislador impuso la conciliación administrativa como requisito de procedibilidad, es decir, que obliga a las partes en todos los casos, a recurrir a dicho procedimiento antes de acceder a la jurisdicción ordinaria correspondiente para proponer sus litigios, lo que a su</p>

	<p>entender no sólo desconoce el derecho a la defensa de las personas, que consagra el artículo 29 superior, sino que viola el derecho fundamental de libre acceso a la justicia, consagrado en el artículo 229 de la Carta Política, al condicionarlo y supeditararlo al cumplimiento de ese requisito.</p> <p>Manifiesta el actor, que condicionar el acceso libre a la administración de justicia imponiéndole a las partes la conciliación, que no es otra cosa que un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, desconoce también los mandatos del artículo 2 de la Carta, pues con ese tipo de disposiciones se niegan los derechos y garantías de que son titulares los ciudadanos y los principios rectores y fines esenciales del Estado social de derecho.</p> <p>La conciliación, agrega el demandante, dada su naturaleza tiene que surgir del consenso, de la voluntad libre y autónoma de las partes y no de la imposición que implica anteponerla como requisito obligatorio previo a la posibilidad de recurrir a los jueces para que éstos diriman los conflictos que las partes les proponen.</p> <p>La exposición del demandante, abunda en argumentos con los que pretende demostrar la inconstitucionalidad de lo que denomina la “conciliación forzosa” en asuntos propios de la jurisdicción de familia, dado que el legislador la impuso como requisito indispensable de cuyo cumplimiento depende que los jueces de familia admitan o no las correspondientes demandas; así por ejemplo, señala que al hacerla obligatoria, por las características mismas de los procesos de los que conoce esa jurisdicción (demanda ejecutiva de alimentos, divorcios, violencia intrafamiliar, entre otros), lo único que se logra es que las partes a las que se pretende demandar sean prevenidas y puedan éstas adoptar medidas con las cuales les será fácil evadir sus responsabilidades, transferir sus bienes a terceros para insolventarse, irse fuera del país, amenazar a la posible contraparte, e incluso recurrir a la violencia para evitar la acción, haciendo inoperantes e inocuas las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes.</p> <p>Tales efectos, anota el actor, son contrarios a las disposiciones de los artículos 42 y 44 de la Constitución, que garantizan la protección de la familia y elevan al carácter de prevalentes de los derechos de los niños. También contradicen el objetivo que se propuso el legislador al expedir las normas impugnadas, descongestionar los despachos judiciales, pues impiden la aplicación de instrumentos que brinda la misma ley, tales como los consagrados en los artículos 47 y 52 de la Ley 23 de 1991.</p> <p>Anota también, que otorgar a la conciliación administrativa el</p>
--	---

	<p>carácter de requisito de procedibilidad para incoar acciones ante la jurisdicción de familia, equivale a introducir a las personas en “...la imbricada red de [una] burocracia”, que como la del ICBF y los centros de conciliación, se caracteriza por la falta de personal y de recursos y que, en consecuencia, antes que contribuir a descongestionar los despachos judiciales, lo que hace es restringir el derecho de defensa y hacer más densa y dispendiosa la administración de justicia.</p> <p>En lo que se refiere a la conciliación administrativa como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción laboral, el demandante señala que “...ese mecanismo obtura...el pleno legado de derechos prevalentes que en favor del trabajador contiene el texto del artículo 53 de la Carta...”</p> <p>Finalmente, expresa que las normas impugnadas también vulneran el artículo 25 de la Constitución, que protege el derecho al trabajo, si se tiene en cuenta que los abogados y los funcionarios judiciales que prestan sus servicios en esas jurisdicciones, verán mermada su productividad, pues ya no contarán con los procesos a cuyo arreglo extrajudicial se obliga a las partes. En virtud de lo consignado anteriormente solicita a esta Corporación, la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones acusadas.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-248/99
Fecha de la sentencia	abril veintiuno (21) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Hernan Dario Velazquez Gomez y Otros.
Demandado	Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 18 (parcial), 30 (parcial), 68, 82 y 116 (parcial) de la Ley 446 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero.- DECLARAR la exequibilidad del primer inciso del artículo 18 de la Ley 446 de 1998.</p> <p>Segundo.- DECLARAR la constitucionalidad del inciso final del artículo 30 de la Ley 446 de 1998, artículo que modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.</p> <p>Tercero.- DECLARAR la exequibilidad del párrafo del artículo 116 de la Ley 446 de 1998.</p> <p>Cuarto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-160 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell, que declaró la inexequibilidad de los artículos 68 y 82 de la Ley 446 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano que demanda la inconstitucionalidad de este artículo afirma que no todos los procesos que ingresan al Despacho para ser fallados son de la misma naturaleza o de la misma complejidad. Expone que muchos procesos son fallados con “sentencias de cajón”, que son aquéllas que no requieren un mayor estudio y que, por lo tanto, pueden ser proferidas rápidamente.</p> <p>En consideración de lo anterior, manifiesta que el aparte demandado del artículo 18 vulnera el derecho de igualdad, en la medida en que coloca “en igualdad de condiciones a todos los procesos, sea cualquiera su naturaleza y su complejidad, lo que entraña una enorme injusticia so pretexto de establecer una igualdad aparente, ya que en el fondo lo que se crea es una gran desigualdad frente a las distintas condiciones en que se encuentran los diferentes procesos. Así, por ejemplo, ‘una sentencia de cajón’ que se profiere en pocos días tendrá que esperar meses o años</p>



	<p>para que se profiera si antes entraron al despacho varios procesos ordinarios de enorme complejidad. Lo que puede dictarse en media hora tendrá que esperar el turno de meses y años...”</p> <p>Expresa el demandante que el examen que se aplica a normas que consagran un tratamiento desigual para situaciones similares - con el objeto de establecer si el trato diferente se justifica -, debe aplicarse también a las normas que consagran un tratamiento igual para situaciones desiguales. Por eso, luego de referirse al test de igualdad que ha aplicado la Corte en distintas sentencias, lo aplica a la norma bajo estudio, con las siguientes conclusiones:</p> <p>“Si las anteriores directrices se aplican a la norma acusada, es fácil encontrar que: hay diferente situación de hecho, ya que los procesos en su naturaleza y complejidad son diferentes (1) el trato igual que se establece tiene una finalidad, como lo es la de evitar que algunos procesos se fallen sin razón antes que otros, por simples influencias o consideraciones extrañas a la correcta administración de justicia (2) la finalidad es razonable porque se busca evitar discriminaciones en la oportunidad de la sentencia, consagrando privilegios y preferencias que repugnan al principio de igualdad (3) hay coherencia entre la situación de hecho, la finalidad que se persigue y el tratamiento igual que se otorga (4).</p> <p>“Se cumplen, pues, cuatro requisitos. No se cumple, en cambio, el quinto. En efecto no hay proporcionalidad, ya que existe una enorme desproporción de la consecuencia jurídica- cumplimiento estricto del orden para proferir sentencias- con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican. El trato igual que se da a todos los procesos, sin importar su naturaleza o complejidad, es completamente desproporcionado frente a los valores constitucionales. No es justo que a quien su asunto se le puede resolver en un día tenga que esperar meses o años para que, previamente, se les resuelvan a otros. Si hay forma de administrar justicia en forma rápida a alguien, no existe justificación razonable que no se le administre Justicia prontamente argumentando que a otros, por circunstancias diferentes y en condiciones distintas, no se les ha administrado”.</p> <p>El demandante considera también que el trato igual que pretende la norma no es necesario, “ya que existen medios menos onerosos para alcanzar el fin buscado por el legislador, sin que entrañen un sacrificio tan grande para quien puede acceder fácilmente a la decisión del juez”. Asimismo, manifiesta que la homogeneidad en el trato que pretende la norma, sacrifica valores constitucionales de mayor peso - tales como lograr la efectividad de los derechos en los procesos que se pueden evacuar rápidamente, mantener un orden justo y la convivencia -, así como el acceso real a la administración</p>
--	--

	<p>de justicia.</p> <p>De otra parte, el actor sostiene que la norma también viola el principio de igualdad al establecer que el orden de emanación de las sentencias en la jurisdicción contenciosa administrativa puede modificarse, en atención a la naturaleza del asunto o a solicitud del agente del Ministerio Público. Esta excepción no se aplica a los asuntos civiles, laborales o penales, a pesar de que algunos casos dentro de ellas también pueden ser de gran relevancia social. Estima el actor que no existe razón alguna que justifique el trato diferente y que, por lo tanto, la norma vulnera el derecho de igualdad de los ciudadanos que acuden ante la administración de justicia.</p> <p>Considera el actor que la norma también vulnera el artículo 2 de la Constitución, puesto que impide la efectividad de los derechos al prescribir la igualdad absoluta entre los procesos; el 229, dado que impide el real acceso de las personas a la justicia; y el preámbulo de la Carta, ya que origina injusticia y desorden, en vez del orden justo que se proclama en él.</p> <p>Resalta el actor que su demanda no está dirigida a cuestionar la conveniencia de la norma, materia sobre la cual decide el Legislador, sino sobre su razonabilidad. Al respecto expresa que “las medidas irrazonables no se acompasan con la Constitución, ya que ésta las repele. Por ello, ni siquiera bajo la aseveración de que una medida es conveniente, puede obtenerse amparo constitucional cuando ella es en sus consecuencias irrazonable (...) La norma jurídica tiene efectividad en la medida en que es razonable... [por eso] la norma legal es inconstitucional cuando su contenido es abiertamente irrazonable.”</p> <p>Finalmente, el demandante propone que, en el caso de que no se acepte su tesis acerca de la inconstitucionalidad de la norma, se declare su constitucionalidad condicionada, en el sentido de que no se aplica a los casos en los que la naturaleza del asunto o sus circunstancias específicas ameritan que el orden no se lleve estrictamente. Ello implicaría que el juez debe justificar, en una forma razonable, la alteración del orden de fallo de los procesos. De esta manera, se mantendría la norma demandada, que en sí tiene un fin loable, pero se evitarían los peligros que ella entrañaría si se aplicara de manera irrestricta.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-247/99
Fecha de la sentencia	veintiún (21) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Bismarck Alemán Cabrera; Alberto de J. Villegas Muñoz, Alfonso Otálora Nájara y otros; Carlos A. Ballesteros; Carlos Fredy Navia Palacios; y, Jesús Parada Uribe.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 68, 82, 88 (parcial), 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 167 (parcial) de la ley 446 de 1998 "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia."
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	<p>Primero : Sobre los artículos 68 y 82 de la ley 446 de 1998, estarse a lo resuelto en la sentencia C-160 de 1999, que los declaró inexecutable.</p> <p>Segundo : Declárase EXEQUIBLE el artículo 167 de la ley 446 de 1998, en la parte demandada, en cuanto deroga el artículo 46 de la ley 23 de 1991.</p> <p>Tercero : Declárase EXEQUIBLE el artículo 88 de la ley 446 de 1998, bajo las condiciones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.</p> <p>Cuarto : Decláranse EXEQUIBLES los artículos 149, 150, 151, excepto los numerales 4 y 5, numerales que se declaran INEXECUIBLES, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de la ley 446 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>I.- a) Expedientes d-2165 y d-2167. Demandas contra los artículos 68, 82, 88, inciso primero, y 167, parcial.</p> <p>Los artículos 68 y 82 fueron declarados inexecutable en sentencia C-160 de 1999. Es decir, sobre ellos existe cosa juzgada. En consecuencia, en el presente proceso se examinarán los dos</p>

	<p>artículos restantes : 88 y 167. Dicen estas normas.</p> <p>"Artículo 88. Procedibilidad. La conciliación deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, ante el juez de Familia, el Defensor de Familia, el Comisario de Familia, o en su defecto ante el Juez Promiscuo Municipal de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del presente título.</p> <p>"Los Jueces de Familia, los Defensores de Familia y los Comisarios de Familia, podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4o. del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991."</p> <p>"Artículo 167. Derogatorias. Derógase :</p> <p>"1. Los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 33, 36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 68 a 71, 77, 78, 88, 92, 94, 96, 98 a 100, 104, 107, 108, 111, y 116 de la ley 23 de 1991.</p> <p>"2. (...)"</p> <p>a) Cargos :</p> <p>Expediente d-2165 : La exigencia contenida en los artículos 68 y 88, inciso primero, consistente en la conciliación como requisito de procedibilidad, contradice el derecho amplio y sin restricciones que tienen los ciudadanos de acceder a la justicia, consagrado en los artículos 229, 228, 84 y 4 de la Constitución.</p> <p>Expediente d-2167 : La exigencia contenida en los artículos 68, 82 y la derogatoria del artículo 46 (ley 23 de 1991), vulnera la Constitución, en el preámbulo y en los artículos 1, 2, 13, 23, 29, 53, 89, 228, 229, 25 y 48.</p> <p>Señala el demandante que la administración de justicia como función pública que es, no puede ser delegada ni privatizada en forma general, salvo las excepciones autorizadas por la ley, siempre y cuando la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos obedezca a la voluntad de las partes y no a una imposición legal.</p> <p>El demandante se remonta a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 23 de 1991, en donde se estableció la obligación de acudir a las autoridades administrativas del trabajo como requisito de procedibilidad para ejercer las acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral. Es decir, lo mismo que se consagra ahora en la ley 446. Sin embargo, en dicha ley se previó, en el artículo 46, que lo concerniente a este requisito de procedibilidad, sólo entraría a</p>
--	---

	<p>regir cuando se reestructurara el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, pues, era la única forma de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de conciliación obligatoria. Mientras esta situación se cumplía, el artículo 46, preveía que la conciliación seguiría siendo voluntaria. Pero, en el artículo 167 de la ley 446, al establecer la derogación del artículo 46 de la ley 23 de 1991, se tiene que suponer que el Ministerio del Trabajo ya se reestructuró y el requisito de procedibilidad es perfectamente exigible. Si no ha ocurrido tal cosa, el requisito hará más demorada y menos eficiente la justicia laboral, y, en consecuencia, debe ser declarado inexecutable.</p> <p>Al respecto, se debe tener en cuenta que no es argumento válido señalar que no sólo el Ministerio del Trabajo realiza conciliaciones, pues ellas, también se pueden lograr en los centros de conciliación del país, por las siguientes razones :</p> <p>Es un hecho notorio que en la mayoría de los municipios del país no existen tales centros, ni en todos los centros de conciliación se pueden adelantar conciliaciones laborales, por expresa disposición del artículo 98 de la ley 446. Por otra parte, los centros de conciliación, excepto los universitarios, cobran por el servicio prestado, lo que rompe el principio de gratuidad de la administración de justicia ; y, los centros universitarios no tienen presencia en todo el país.</p> <p>Existe, además, otra razón : las normas que consagran este requisito de procedibilidad, con carácter obligatorio, no resultan constitucionales si se tiene en cuenta que la Carta, en los artículos 25, 53 y 93, protege el crédito laboral de manera especial. Por tal razón, su solución debe ser oportuna e inmediata, pues, está de por medio la subsistencia de la persona y su familia, y el requisito establecido en las normas demandadas, constituye un obstáculo para lograr estos propósitos.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>JUICIO DE IGUALDAD-Grado de intensidad (Salvamento de voto)  Las disposiciones legales que establecen diferencias no deben ser sometidas, todas ellas, a un juicio de igualdad de la misma intensidad. En atención a la materia que regulen y a los criterios de diferenciación utilizados, pueden ser juzgadas conforme a parámetros diferenciales, más o menos estrictos. En la medida en que, en el presente caso, se trata de estudiar una norma que establece un requisito para poder ejercer una profesión, siguiendo</p>

	<p>la jurisprudencia de la Corte, debe aplicarse un juicio intermedio de igualdad. La tarea del juez, en estos casos, es la de determinar si el trato diferenciado obedece a una finalidad constitucionalmente importante; si es útil y necesario para alcanzar dicha finalidad; y, por último, si el costo, en términos de igualdad, es menor que el beneficio que se alcanza. De no superar este juicio, la norma estudiada debería ser declarada inexecutable por vulneración del principio de igualdad ante las cargas públicas. En mi criterio, la decisión de la que me aparto parcialmente, omite exteriorizar – en el asunto tratado y en algunos otros - el juicio de igualdad al que fueron sometidas las normas objeto de debate constitucional.</p> <p>SERVICIO LEGAL POPULAR-Remunerado y no remunerado (Salvamento de voto)</p> <p>En el presente caso, sobre un grupo de personas pesa la carga de laborar por un año en una serie de actividades, pero tiene el derecho de obtener la correspondiente remuneración. Otro grupo que, por el contrario, no será remunerado, tiene el beneficio de la reducción del término de la prestación. Pero un tercer grupo que realiza exactamente las mismas actividades que el primero y durante el mismo tiempo, carece de toda remuneración. En estos casos, la ortodoxia impone al juez constitucional tomar una decisión que excluya del ordenamiento jurídico la diferenciación arbitraria que ha sido advertida. Al excluirla, el grupo marginado quedará, necesariamente, ubicado en alguna de las otras dos opciones: la de laborar durante un año con la correspondiente remuneración o seis meses de manera gratuita. Nada de esto es extraño a la labor del juez constitucional. Los argumentos expuestos no se refieren exclusivamente a la aplicación rigurosa del test de igualdad. Aluden, adicionalmente, a realidades incontestables que la Corte no puede desconocer. En efecto, obligar a un estudiante a trabajar, durante un año, de manera gratuita mientras otro que tuvo mejor suerte podrá satisfacer la obligación, durante el mismo lapso pero en un cargo remunerado, confronta principios mínimos de justicia material, reconocidos no sólo en el artículo 13 sino en los artículos 1, 2 y 5 de la Constitución. Por lo demás, la renuncia a este tipo de análisis, en mi concepto, indispensable en un examen de constitucionalidad, impidió que la Corte entrara a ponderar la situación de los estudiantes que estudian en la jornada nocturna y que, además, están vinculados durante el día a un empleo del cual no podrían prescindir, en cuyo caso el sacrificio material que implica la carga pública resulta definitivamente más oneroso.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-160/99
Fecha de la sentencia	marzo diecisiete (17) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Benjamín Ochoa Moreno
Demandado	Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 68, 82, 85 y 87 de la Ley 446 de 1998 y artículo 25 (parcial) de la Ley 23 de 1991.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>Primero. Declararse INHIBIDA para fallar en relación con el art. 25 de la ley 23/91.</p> <p>Segundo. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 68, 82, 85 y 87 de la Ley 446 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En criterio del ciudadano demandante, las disposiciones acusadas quebrantan los artículos 13, 25, 29, 39, 53 y 229 de la Constitución. El concepto de violación lo expone de la siguiente manera:</p> <p>Las normas acusadas constituyen una sola unidad normativa, porque establecen el carácter obligatorio de la conciliación laboral prejudicial, administrativa o institucional, y le asignan a ésta el carácter de requisito de procedibilidad. Ello se deduce del texto de los arts. 85 y 87 de la ley 446/98, que regulan las diferentes hipótesis conforme a las cuales se entiende agotado el trámite previo de la conciliación prejudicial.</p> <p>Conforme al artículo 68 demandado, la conciliación deberá intentarse antes de instaurar cualquier tipo de proceso ante la jurisdicción laboral, por cuanto dicha norma no excluyó los procesos de fuero sindical ni los ejecutivos.</p> <p>El artículo 39 de la Constitución resulta infringido por las normas cuestionadas, al exigirse al actor en las acciones de fuero sindical a que se acuda a la instancia prejudicial de la conciliación, antes de presentar la correspondiente demanda, con lo cual se desnaturaliza la institución del fuero, en la medida en que éste no es un derecho negociable.</p> <p>En lo que hace relación al proceso ejecutivo laboral, las normas demandadas violan directamente el artículo 53 de la Constitución, por cuanto éste al consagrar la facultad que tienen los trabajadores de transigir y conciliar los derechos inciertos y discutibles no permitió, por exclusión, que se obligue al trabajador a conciliar o</p>



	<p>transigir derechos ciertos y discutibles.</p> <p>Pretender que antes de hacer efectivo judicialmente un derecho cierto e indiscutible, por ejemplo, el que emana de una sentencia o una conciliación incumplida, se intente conciliarlo y por lo tanto renunciarlo, así sea en parte, es violar la Carta en el principio mencionado, además de atentar contra la cosa juzgada material.</p> <p>Las normas demandadas resultan ser discriminatorias, porque la obligatoriedad de la conciliación solamente se exige en la jurisdicción laboral, en cambio, la misma es voluntaria en los asuntos administrativos, comerciales, civiles y agrarios.</p> <p>La conciliación prejudicial obligatoria tiene efectos negativos sobre la prescripción. Si bien el principio general es que la misma opera a los tres años, el régimen laboral consagra una serie de prescripciones especiales, como las previstas para las acciones de fuero sindical, donde los términos de prescripción son de dos meses.</p> <p>En los casos en que se presenten conflictos jurídicos entre los trabajadores oficiales y la administración o entre el Seguro Social y sus usuarios, es necesario, además de la conciliación prejudicial obligatoria, agotar la vía gubernativa.</p> <p>Las normas acusadas vulneran el libre acceso que tienen todas las personas para pretender la tutela de la justicia, según lo ordena el artículo 229 Superior, en cuanto imposibilita la entrada inmediata a la jurisdicción laboral, al depender de un tercero ajeno a las partes la decisión de acudir a la instancia ordinaria.</p> <p>La ley 446 de 1998 tiene como objetivo fundamental la descongestión de los despachos judiciales, lo cual es perfectamente ajustado a la Constitución y lo deseable por la comunidad. Nadie se puede oponer y no es el objeto de esta demanda, impugnar la conciliación como medio alternativo para la solución de conflictos jurídicos.</p> <p>El reparo constitucional radica principalmente en hacerla obligatoria, en establecerla solamente para la jurisdicción del trabajo y en establecer unas condiciones de diferenciación irracionales.</p> <p>No se puede, so pretexto de lograr un fin loable, de una ilusoria descongestión judicial, imponer un trato diferente ni sacrificar derechos constitucionales fundamentales.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-188/99
Fecha de la sentencia	
Demandante	Ana Maria Acosta, Juliana Gomez, Cristina Trujillo, Adriana Gomez, Catalina Roza Y Claudia Ochoa
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	<p>Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el segundo inciso del artículo 65 de la Ley 23 de 1991, tal como quedó redactado a partir de la vigencia del artículo 72 de la Ley 446 de 1998, salvo las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago" y "después de este último", las cuales se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Por unidad normativa, declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el inciso último del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), excepto las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término", que se declaran INEXEQUIBLES.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Consideran las impugnantes que la disposición parcialmente acusada vulnera el Preámbulo y los artículos 13 y 209 de la Constitución Política.</p> <p>Afirman que esta norma presenta una discriminación injusta y arbitraria, dándole una "patente de corso" a la Administración Pública para poder evadir el pago de los intereses moratorios cuando incumpla con las obligaciones que legalmente contrajo.</p> <p>Manifiestan las demandantes que indirectamente esta disposición incita al incumplimiento de los compromisos pactados, pues además de que la autoridad estatal desconoce el plazo fijado para cumplir con su obligación, no es objeto de ningún tipo de sanción adicional.</p> <p>Consideran que el inciso 2 del artículo 72 de la Ley 446 de 1998</p>

	<p>viola también el principio de proporcionalidad -expresión del derecho a la igualdad-, toda vez que no son congruentes los beneficios que tiene la Administración al exonerarla del pago de intereses moratorios, con los fines que establece la norma en sí, tales como llegar a un acuerdo conciliado en forma rápida y en igualdad de condiciones.</p> <p>Destacan que el principio de igualdad es objetivo y no formal, y que siendo así, únicamente sería razonable la desigualdad consagrada por la disposición demandada -la cual favorece a la Administración Pública-, en la medida en que existieran justificados motivos o situaciones que reportaran beneficio de interés general para la colectividad.</p> <p>A juicio de las accionantes, la igualdad tiene como fundamento material el criterio de justicia consagrado en el Preámbulo de la Carta Política. Por esta razón, consideran que resulta violado el marco general que le da sentido al contenido del texto constitucional.</p> <p>En opinión de las accionantes, la norma parcialmente acusada quebranta también el artículo 209 de la Constitución, pues desconoce el principio de celeridad.</p> <p>Finalmente, solicitan se aclare cuál es el verdadero interés general que legitima a la Administración, en este caso, para eludir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un acuerdo conciliatorio con los particulares.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-582/99
Fecha de la sentencia	once (11) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Germán Cavelier Gaviria y otro.
Demandado	Normas acusadas: Artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, por ausencia de cargo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio de los actores, las normas acusadas vulneran los artículos 42, 45 y 50 del “Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, que corresponde a un anexo del “Acuerdo de Marrakech”, con el que se crea la Organización Mundial del Comercio, los cuales fueron aprobados en Colombia por la Ley 170 de 1994.</p> <p>Conforme con el convenio, los Estados parte deben proteger los derechos de propiedad intelectual en asuntos comerciales a través de la adopción de un “procedimiento judicial civil” que definirá las conductas de competencia desleal. Pese a esto, los actores consideran que los artículos demandados consagran el procedimiento administrativo como único mecanismo tendiente a la protección de los derechos de la propiedad intelectual, por lo que el Legislador deroga un compromiso internacional y con ello “viola la obligación que nuestro país adquirió al ratificar el mencionado instrumento internacional”. Es por ello que, a juicio de los demandantes, la Corte Constitucional debe declarar la inexequibilidad de las disposiciones impugnadas.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, VLADIMIRO NARANJO MESA</p> <p>ACUERDO COMERCIAL-No es parámetro de constitucionalidad para</p>

	<p>examen de leyes (Aclaración de voto)</p> <p>La decisión adoptada parece acoger la llamada teoría monista constitucionalista, que, en el orden doméstico, sostiene la prevalencia del derecho interno sobre los tratados internacionales perfeccionados. A nuestro juicio, esta posición, que la jurisprudencia de esta Corte ha venido sosteniendo en algunos pronunciamientos, como en la Sentencia C-400 de 1998, constituye una errónea interpretación del artículo 4 de la Constitución Política y no se compadece con el artículo 9 de la misma, con base en el cual puede llegarse a la posición contraria. Si, en el sentir del Constituyente, en el orden interno la Constitución no podía modificar unilateralmente un Tratado Internacional, debe concluirse que mucho menos una ley ordinaria tiene la posibilidad de hacerlo.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-184/99
Fecha de la sentencia	marzo veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Norma Revisada: Ley 449 de agosto 4 de 1998, "Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias" hecha en Montevideo, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	Primero: Declarar EXEQUIBLE la "Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias" hecha en Montevideo, el 15 de julio de 1989.  Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 449 de agosto 4 de 1998. "Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias" hecha en Montevideo, el 15 de julio de 1989.  Tercero: Ordenar que se comuniquen la presente decisión a la Presidencia de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Norma Revisada: Ley 449 de agosto 4 de 1998, "Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias" hecha en Montevideo, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-253/99
Fecha de la sentencia	veintiún (21) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá', hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993)"
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Decláranse EXEQUIBLES el "Acuerdo sobre Asistencia Legal y Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá", hecho en la ciudad de Panamá el 19 de diciembre de 1993, y la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, que lo aprueba.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de constitucionalidad de la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá', hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993)"
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-187/99
Fecha de la sentencia	veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 451 del 4 de agosto de 1998 <i>“por medio de la cual se aprueba el “Convenio de cooperaci3n judicial en materia penal entre la Rep3blica de Colombia y el Reino de Espa1a”, suscrito en la ciudad de Santaf3 de Bogot3 D.C., el 29 de mayo de 1997.”</i>
Conoci3 en primera instancia	Dra. MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 451 de 1998, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio de cooperaci3n judicial en materia penal entre la Rep3blica de Colombia y el Reino de Espa1a” suscrito en la ciudad de Santaf3 de Bogot3 D.C., el 29 de mayo de 1997”.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio de cooperaci3n judicial en materia penal entre la Rep3blica de Colombia y el Reino de Espa1a” suscrito en la ciudad de Santaf3 de Bogot3 D.C., el 29 de mayo de 1.997.”.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional de la Ley 451 del 4 de agosto de 1998 <i>“por medio de la cual se aprueba el “Convenio de cooperaci3n judicial en materia penal entre la Rep3blica de Colombia y el Reino de Espa1a”, suscrito en la ciudad de Santaf3 de Bogot3 D.C., el 29 de mayo de 1997.”</i>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-404/99
Fecha de la sentencia	dos (2) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del "Acuerdo de Cooperaci3n judicial en materia penal entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica del Paraguay" hecho en Santaf3 de Bogot3 , D.C., el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) y de la Ley N3 452 de agosto 4 de 1998, por medio de la cual se aprueba dicho Acuerdo.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MART3NEZ CABALLERO
Decision	Declarar EXEQUIBLE el "Acuerdo de Cooperaci3n judicial en materia penal entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica del Paraguay" hecho en Santaf3 de Bogot3 , D.C., el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) y la Ley N3 452 de agosto 4 de 1998, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperaci3n judicial en materia penal entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica del Paraguay" hecho en Santaf3 de Bogot3 , D.C., el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional del "Acuerdo de Cooperaci3n judicial en materia penal entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica del Paraguay" hecho en Santaf3 de Bogot3 , D.C., el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) y de la Ley N3 452 de agosto 4 de 1998, por medio de la cual se aprueba dicho Acuerdo.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA

Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-224/99
Fecha de la sentencia	catorce (14) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	<i>Revisi3n constitucional de la ley 453 de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de asistencia judicial mutua en materia penal entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Francesa", suscrito en Par3s el 21 de marzo de 1997.</i>
Conoci3 en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE el "Convenio de asistencia judicial mutua en materia penal entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Francesa", suscrito en Par3s el 21 de Marzo de 1997.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLE la ley 453 de agosto 4 de 1998, aprobatoria del Acuerdo antes mencionado.</p> <p>Tercero. Enviar copia de la presente sentencia al Presidente de la Rep3blica y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el art3culo 241-10 de la Constituci3n.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	<i>Revisi3n constitucional de la ley 453 de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de asistencia judicial mutua en materia penal entre el Gobierno de la Rep3blica de Colombia y el Gobierno de la Rep3blica Francesa", suscrito en Par3s el 21 de marzo de 1997.</i>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	<i>Sentencia C-164/99</i>
Fecha de la sentencia	marzo diecisiete (17) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Abolición del requisito de Legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961.
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	<p>Primero. DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 455 de 4 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, y la Convención misma.</p> <p>Segundo. COMUNÍQUESE esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de constitucionalidad de la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Abolición del requisito de Legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-228/99
Fecha de la sentencia	catorce (14) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional de la ley 456 de agosto 4 de 1998, " <i>Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular</i> ", suscrito en Argel, el diez (10) de mayo de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Declarar EXEQUIBLES el <i>Acuerdo comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular</i> , suscrito en Argel, el diez (10) de mayo de 1997, como la ley 456 de 1998, por medio de la cual se aprueba dicho Acuerdo.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional de la ley 456 de agosto 4 de 1998, " <i>Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular</i> ", suscrito en Argel, el diez (10) de mayo de 1997.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-227/99
Fecha de la sentencia	
Demandante	
Demandado	Revisión de la Ley 457 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo modificadorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", suscrito en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE el "Protocolo modificadorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", suscrito en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), y de la Ley 457 de 1998 aprobatoria del tratado.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de la Ley 457 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo modificadorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", suscrito en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-154/99
Fecha de la sentencia	marzo diez (10) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Normas Revisadas: Ley 458 de agosto 4 de 1998. "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997)", hecho en la ciudad de Quito - Ecuador el día 25 de junio de (1997).
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997)", hecho en la ciudad de Quito - Ecuador el día 25 de junio de 1997.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 458 de agosto 4 de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997)", hecho en la ciudad de Quito - Ecuador el día 25 de junio de 1997.</p> <p>Tercero: Ordenar que se comunique la presente decisión a la Presidencia de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Normas Revisadas: Ley 458 de agosto 4 de 1998. "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997)", hecho en la ciudad de Quito - Ecuador el día 25 de junio de (1997).
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA



Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-405/99
Fecha de la sentencia	dos (2) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional del "Convenio Comercial entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y la Federaci3n de Rusia", hecho en Cartagena el 18 de octubre de 1995 y de la Ley 459 de agosto 4 de 1998, por medio de la cual se aprueba dicho Convenio.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Convenio Comercial entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y la Federaci3n de Rusia", hecho en Cartagena el 18 de octubre de 1995.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 459 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueba el "Convenio Comercial entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y la Federaci3n de Rusia", hecho en Cartagena el 18 de octubre de 1995.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídic3s	Revisi3n constitucional del "Convenio Comercial entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y la Federaci3n de Rusia", hecho en Cartagena el 18 de octubre de 1995 y de la Ley 459 de agosto 4 de 1998, por medio de la cual se aprueba dicho Convenio.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-229/99
Fecha de la sentencia	abril catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Ley 461 de agosto 4 de 1998. "Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (sic) en los países afectados por sequía grave o desertificación (sic), en particular Africa", hecho en París el 17 de junio de 1994.
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE la "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (sic) en los países afectados por sequía grave o desertificación (sic), en particular Africa", hecho en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 461 del cuatro (4) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio de la cual se aprobó la Convención referida en el numeral anterior.</p> <p>Tercero: Ordenar que se comuniquen la presente decisión a la Presidencia de la República, al Presidente del Congreso de la República y a los Ministros de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Agricultura y Desarrollo Rural, para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Ley 461 de agosto 4 de 1998. "Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (sic) en los países afectados por sequía grave o desertificación (sic), en particular Africa", hecho en París el 17 de junio de 1994.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-225/99
Fecha de la sentencia	catorce (14) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 462 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre mutua asistencia en materia penal', hecho en Londres, el once (11) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997)".
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Decláranse EXEQUIBLES el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre mutua asistencia en materia penal", hecho en Londres el 11 de febrero de 1997, y la Ley 462 de 1998, por medio de la cual se aprueba.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de constitucionalidad de la Ley 462 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre mutua asistencia en materia penal', hecho en Londres, el once (11) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997)".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-246/99
Fecha de la sentencia	veintiún (21) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisión oficiosa de la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueban el "TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes"
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL y Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declárase EXEQUIBLE la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueban el "TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de patentes".
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión oficiosa de la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueban el "TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes"
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, VLADIMIRO NARANJO MESA. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena de esta Honorable Corporación, salvamos nuestro voto en torno a la decisión adoptada en el asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes criterios, expuestos en su oportunidad por los suscritos magistrados durante el debate correspondiente.  Coincidimos con la mayoría de en lo referente a que los fines que se

	<p>persiguen al constituir la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes, consistentes en contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología, al perfeccionamiento de la protección legal de las invenciones, a la simplificación y la economía en el proceso de obtención de dicha protección, así como en la facilidad de acceso a las fuentes de información relativas al estado de la técnica, no se oponen a los principios y valores de la Carta, como tampoco a su normatividad. Antes bien, podrían considerarse su adecuado desarrollo.</p> <p>Sin embargo, al considerar el contenido del Tratado frente a las normas constitucionales que validan e imponen el respeto de los acuerdos supranacionales adquiridos por Colombia, y teniendo en cuenta los alcances jurídicos de dichos acuerdos y la preceptiva comunitaria adoptada en desarrollo de los mismos, los suscritos encontramos que la Ley aprobatoria del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), desconoce la normatividad constitucional referida, por las siguientes razones:</p> <p>1. En principio, la Constitución Política confiere al Congreso Nacional la facultad de regular mediante ley el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.<sup>5</sup> Sin embargo, como es sabido, la evolución del Derecho Internacional ha dado lugar a la aparición del llamado Derecho Comunitario, fruto del traslado de competencias normativas específicas de los países suscriptores de un convenio o acuerdo, a los órganos supranacionales creados en el mismo. Este traslado de competencias, al ser ejercidas, da lugar a un conjunto de regulaciones que constituyen propiamente la materia del derecho comunitario, respecto de las cuales se predica la preeminencia y la aplicación preferencial frente al derecho interno de cada país miembro.</p> <p>Nuestra Constitución Política, en su artículos 9°, 150 numeral 16 y 227, expresamente acoge estos principios del derecho comunitario al referirse a la promoción de la integración con los demás países, especialmente los de América Latina y el Caribe, que debe asumir el Estado. Estas normas son el soporte constitucional del llamado Pacto o Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina, cuyos órganos tienen facultades para expedir normas jurídicas de carácter comunitario.<sup>6</sup></p> <p>En relación con la naturaleza jurídica de los acuerdos supranacionales, la Corte tuvo oportunidad de resaltar el traslado de competencias soberanas que comporta, traslado expresamente</p>
--	---

<sup>5</sup> Artículo 150, numeral 24, Ibídem.

<sup>6</sup> Hoy en día las decisiones de la Comunidad Andina son adoptadas por la Comisión de la Comunidad Andina



	<p>autorizado por la Carta en el numeral 16 del artículo 150. Al respecto en Sentencia C-400 de 1998, sostuvo lo siguiente:</p> <p><i>“...la Constitución no sólo promueve las relaciones internacionales, sobre bases de equidad, igualdad, reciprocidad, y respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos (CP art. 9º y 226) sino que reconoce explícitamente la existencia de organizaciones o entidades internacionales (CP arts 150 ord 16 y 189 ord 3º). Es más, la Constitución incluso acepta la creación de organismos supranacionales de integración, a los cuales se pueden transferir determinadas atribuciones del Estado, para fortalecer la integración económica y promover la creación de una comunidad latinoamericana de naciones (CP arts 150 ord 16 y 227), lo cual significa que la Constitución distingue entre las organizaciones internacionales de simple cooperación -esto es, aquellas que buscan armonizar los intereses de los Estados miembros, pero sin afectar su condición de Estados soberanos- y las organizaciones de integración, a las cuales la Carta autoriza la transferencia de ciertas competencias originariamente residenciadas en el Estado. Por ello esta Corte había señalado que “el derecho comunitario se distingue por ser un derecho que apunta hacia la integración - y no solamente hacia la cooperación”<sup>7</sup>.</i></p> <p>El Acuerdo de Cartagena es, entonces, un convenio constitutivo de un sistema comunitario, en virtud del cual Colombia transfirió el poder regulador de ciertas materias a los organismos supranacionales competentes de la Comunidad Andina. A dichos órganos supranacionales compete, por lo tanto, dictar las normas relativas a las materias que fueron objeto de transferencia, entre las cuales se encuentra la concerniente al régimen de la propiedad industrial. En efecto, el artículo 27 del Tratado que creo el llamado Pacto Andino, hoy Comunidad Andina, dispuso:</p> <p><i>“...antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta aprobará y someterá a consideración de sus Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros, y entre otros, sobre marcas y patentes, licencia y regalías”.</i></p> <p>En desarrollo de la anterior disposición, la Comisión del Acuerdo de Cartagena profirió la Decisión 344, vigente desde el primero 1º de enero de 1994, en la cual se estableció el régimen común de propiedad industrial aplicable a los países miembros.</p> <p>2. De manera general la Decisión 344 regula expresamente la obligación de los países miembros de otorgar patentes de invención a las invenciones que cumplan con los requisitos de ser nuevas, tener nivel inventivo y ser susceptibles de aplicación industrial. De igual manera, contiene disposiciones relativas a la forma de obtener la patente, a su explotación económica, y a la posibilidad de conceder licencias sobre la misma. Se incluyen, además, normas referentes a la posibilidad de registrar marcas, así como lemas</p>
--	---

<sup>7</sup> Sentencia C-231 de 1997. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No 8.

	<p>comerciales, y se determina que el nombre comercial también será protegido sin que ello implique el pago de derechos por parte de su titular.</p> <p>En lo que concierne a la capacidad que conservan los Estados para regular en materia de protección a la propiedad industrial, los artículos 143 y 144 de la Decisión en comento, en su tenor literal indican lo siguiente:</p> <p><i>“Artículo 143. Los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la presente decisión. En estos casos, los países miembros se comprometen a informar a la comisión acerca de estas medidas.”</i> (subraya la Corte)</p> <p><i>“Artículo 144. Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por la legislación nacional de los países miembros.”</i></p> <p>3. La jurisprudencia de la Corte, relativa al tema de la competencia que pueda tener actualmente el legislador colombiano en materia de propiedad industrial, siempre se había orientado a señalar que, en principio, no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria. Podrá desarrollarla, pero esta facultad es excepcional y sólo es posible ejercerla cuando sea necesario para lograr la aplicación de aquella. En este sentido, la Sentencia C-228 de 1995 (M. P. doctor Antonio Barrera Carbonell), expresó lo siguiente :</p> <p><i>“El derecho comunitario, surgido como resultado del traslado de competencias en diferentes materias del quehacer normativo por los países miembros y las subsecuentes regulaciones expedidas por las autoridades comunitarias apoyadas justamente en tales competencias y atribuciones, ofrece la doble característica de un sistema preeminente o de aplicación preferencial frente al derecho interno de cada país miembro y con una capacidad de aplicación directa y eficacia inmediata, porque a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario, no es posible oponerles determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación, ni su eficacia puede condicionarse a la voluntad del país o de las personas eventualmente afectadas por una decisión.</i></p> <p><i>“De esta suerte, la capacidad de regulación por los países miembros sobre materias reservadas al derecho comunitario es muy restringida, limitándose apenas a la expedición de normas complementarias cuando el estatuto de integración lo autorice para reforzar las decisiones de las autoridades comunitarias o si fuere necesario para establecer instrumentos de procedimiento destinados a la aplicación de las sanciones, trámites y registros de derechos y, en fin, para la ejecución de medidas de carácter operativo que deban cumplirse ante las autoridades nacionales.”</i></p> <p>4. Los pronunciamientos llevados a cabo por el Tribunal Andino de</p>
--	--

	<p>Justicia, referentes a la competencia de los órganos legislativos nacionales de los países miembros para adoptar regulaciones en materia de propiedad industrial, apuntan a definir una competencia residual y subsidiaria. Así por ejemplo, en el contexto de la interpretación prejudicial que el Tribunal Andino de Justicia profirió a solicitud de esta Corporación dentro del trámite que condujo a la Sentencia C-228 de 1995 antes mencionada, dicho organismo supranacional expresó los siguientes conceptos:</p> <p><i>"2. El Régimen Común sobre propiedad Industrial adoptado libre y voluntariamente por los países miembros del Acuerdo a través de sus plenipotenciarios integrantes de la Comisión, tiene carácter de obligatorio cumplimiento por los 5 países signatarios del mismo, por imperio del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 2°, 3° y 5° del Tratado de Creación del Tribunal".</i></p> <p><i>"3. El Régimen sobre Propiedad Industrial actualmente vigente (Decisión 344), de conformidad con su artículo 143, podrá ser fortalecido por la legislación nacional o acuerdos internacionales de cualquier jerarquía, siempre que guarden interrelación y armonía jurídica con la norma comunitaria".</i></p> <p><i>"4. Al tenor del artículo 144 de Decisión vigente sobre Propiedad Industrial, los asuntos no comprendidos en esa Decisión deben ser regulados por la legislación nacional, la misma que sólo podrá hacerlo en los casos remitidos a su competencia y cuyos alcances estarán también inscritos, en la filosofía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente".</i></p> <p><i>"5. Por mandato de la Decisión final UNICA de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente es el organismo administrativo del Régimen de Propiedad Industrial. Será designado por cada uno de los países miembros, mediante legislación nacional, dándole a tal designación el carácter de exclusivo y excluyente de cualquier otro organismo administrativo nacional".</i></p> <p>Y en ese mismo pronunciamiento, expresó:</p> <p><i>"El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el de "complemento indispensable", según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas".<sup>8</sup></i></p> <p>También el referido Tribunal, en Sentencia de 9 de diciembre de</p>
--	--

<sup>8</sup> Tribunal Andino de Justicia. Sentencia de 17 de marzo de 1995, proceso N° 10-IP.

	<p>1996, proferida dentro del proceso 1-IP-96, sentó los siguientes conceptos relativos a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho internacional, cuando este es adoptado por los órganos supranacionales:</p> <p><i>“De la calidad de fuente del derecho que para el derecho comunitario ostenta el derecho internacional, no se deriva sin embargo que la comunidad quede necesariamente obligada por el mismo. En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros, para la regulación de determinadas actividades jurídico económicas, como la protección de la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asuma la competencia ratione materia para regular este aspecto de la vida económica, al derecho comunitario se vincula el tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario –por aplicación de sus características “existenciales” de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo”.</i></p> <p>5. Así las cosas, a partir del contenido normativo de los artículos de la Decisión 344 transcritos, y de los principios sentados por la jurisprudencia nacional y comunitaria, se extraen las siguientes conclusiones, válidas para definir la competencia que pueda asistir al Congreso Nacional para aprobar mediante ley el PCT, permitiendo así su incorporación a la legislación nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los países miembros, mediante acuerdos internacionales, pueden fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la decisión 344, siempre y cuando la normatividad contenida en los respectivos instrumentos guarde interrelación y armonía jurídica con la norma comunitaria.</li> <li>- La legislación nacional puede regular asuntos no comprendidos en la referida Decisión.</li> <li>- La competencia legislativa nacional es residual y subsidiaria, pues se limita al terreno del <i>“complemento indispensable”</i>. Es decir, no pueden expedirse normas nacionales sobre asuntos regulados por las disposiciones comunitarias, <i>“salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”</i>.</li> </ul> <p>Para los suscritos magistrados, con fundamento en los anteriores postulados ha debido estudiarse la competencia del Congreso Nacional para aprobar el PCT, toda vez que si el referido órgano</p>
--	---

	<p>legislativo obra por fuera de tal competencia, desconoce los compromisos supranacionales adoptados por Colombia al suscribir el Acuerdo de Cartagena y sus posteriores modificaciones, lo cual, de contera, implica la violación de las normas constitucionales que imponen al Estado la promoción y respeto de los referidos compromisos. Dicho análisis, omitido por la Sentencia, permite observar lo siguiente:</p> <p>A.) En lo que toca con el requisito exigido por el artículo 143 de la Decisión 344 emanada del Acuerdo de Cartagena, según el cual mediante tratados internacionales es posible fortalecer los derechos de propiedad industrial que confiere la referida Decisión, en principio el Tratado cumpliría con la mencionada exigencia. En efecto, aunque a la Unión creada mediante el PCT no compete otorgar patentes, facultad que el Tratado reserva a las oficinas nacionales de propiedad industrial que operen en los países miembros, el procedimiento para llevar a cabo la solicitud de protección, la cual puede referirse a un ámbito geográfico que sobrepasa el territorio nacional y aun el regional, las mejores condiciones para hacer efectivo el “derecho de prioridad”<sup>9</sup>, y sobre todo el mecanismo de verificación de la novedad de la invención, de su nivel inventivo y de su aplicabilidad industrial, conducen a que la patente concedida por la oficina nacional, entre nosotros la Superintendencia de Industria y Comercio, confiera un derecho más fuerte, al ser otorgado sobre la base de una búsqueda más completa, y de un conocimiento más cierto respecto del estado de la técnica, logrado con fundamento en una base de datos de ámbito internacional.</p> <p>De otra parte la regulación del PCT, en términos generales guarda interrelación con la regulación comunitaria y, a grandes rasgos, es armónica con ella, toda vez que persigue los mismos objetivos, esto es conceder protección a la propiedad industrial.</p> <p>B.) No obstante lo anterior, gran parte de la normatividad del Tratado crea un sistema normativo paralelo al supranacional. En especial las disposiciones relativas a la presentación de la solicitud, a su contenido y a la oficina competente para recibirla, regulan aspectos ya regulados por la Decisión 344. Resulta evidente que tanto el texto de esta última, como el texto del Tratado, contienen normas sobre los referidos asuntos.</p>
--	---

---

<sup>9</sup> El derecho de prioridad básicamente obliga a los miembros del convenio de París, aprobado por Colombia mediante la Ley 178 de 1995, ante una solicitud presentada en ante su oficina nacional, a aceptar como fecha de radicación de la misma, la fecha en la cual el solicitante radicó idéntica solicitud en cualquier otro Estado del Convenio.

	<p>No competía a la Corte verificar si dichas regulaciones existentes en uno y otro texto son contrarias o no, pero sí poner de presente que son normatividades distintas y paralelas; y que conforme a los principios orientadores del derecho supranacional, la competencia de los órganos legislativos internos es residual y subsidiaria, no pudiendo regular asuntos ya normados por las normas comunitarias.</p> <p>Si bien la manera concreta como se debe llevar a cabo la búsqueda para determinar la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial del descubrimiento no es definida por la Decisión 344, sí lo es, en cambio, la manera como debe presentarse la solicitud, los efectos que la misma produce, y la oficina receptora que debe tramitarla, aspectos todos que igualmente son definidos por el Tratado bajo examen. Para los suscritos resulta evidente que el PCT permite formular solicitudes de patentes respecto de Colombia, por un procedimiento que difiere del prescrito para el efecto por la normatividad supranacional.</p> <p>C.) Eventualmente podría pensarse que sería posible que Colombia adhiriera al PCT haciendo reserva respecto de aquellas disposiciones del Tratado que guardan paralelismo con disposiciones de la Decisión 344, como por ejemplo aquellas que acaban de transcribirse. Y así lo sugiere la Sentencia de la cual nos apartamos. Así, por ejemplo, Colombia podría adherir en todo lo referente a procedimiento de búsqueda internacional, no regulado expresamente por la normatividad comunitaria, y en lo concerniente a las posibilidades de acceso a la información tecnológica que confiere el tratado. La presentación de la solicitud de protección, sus formalidades, contenido, efectos en otros países, oficina receptora, etc., continuaría siendo regulado por la Decisión referida.</p> <p>En efecto, respecto del examen de fondo a nivel internacional, el artículo 28 de la Decisión 344 se limita a decir que la oficina nacional competente “cuando lo estime conveniente, podrá requerir información de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás países miembros o de terceros países”, por lo cual pareciera que la búsqueda internacional para determinar la patentabilidad de la invención, en principio no ha sido regulada por la normatividad supranacional y tampoco es rechazada por ella.</p> <p>Sin embargo, esta posibilidad de adherir al Tratado haciendo reserva respecto de aquellas normas paralelas relativas a la formulación y a los efectos de la solicitud, contraría el espíritu del mismo, que busca, justamente, constituir un sistema único de</p>
--	--

	<p>solicitud de patentes con efectos internacionales. Es decir, podría considerarse como elemento esencial del Acuerdo internacional, la unificación del sistema de solicitudes, las cuales, si bien pueden llevarse a cabo en cualquiera de los países signatarios, deben producir efectos internacionales en todos los países designados por el solicitante, y dar origen a un trámite único de búsqueda que determine la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial del invento respectivo. Adherir al Convenio bajo examen, haciendo reserva respecto de las normas relativas a la presentación de solicitudes, y a los efectos de la misma, priva al acto de su finalidad intrínseca. De esta manera, tal reserva parcial, se ubicaría en la hipótesis contemplada en el artículo 19 de la convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, norma según la cual, <i>“un Estado o una organización internacional podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse a él, a menos que... la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.”</i></p> <p>Por todo lo anterior, en sentir de los suscritos el Congreso Nacional carecía de competencia para aprobar mediante ley, permitiendo su incorporación al derecho interno, el Tratado de Cooperación en materia de patentes. En efecto, como se ha visto, de conformidad con lo autorizado por el numeral 16 del artículo 150 superior, el Estado colombiano transfirió a los órganos competentes de la Comunidad Andina de Naciones la facultad de regulación en lo relacionado con la protección de la propiedad industrial, facultad que fue ejercida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena al proferir la Decisión 344 de 1994. Esta Decisión reguló, entre otros temas, la manera de formular solicitudes para la protección de la propiedad industrial, los efectos de dichas solicitudes, y el trámite a que dan lugar, regulación que guarda paralelismo con la contemplada en el Tratado que se somete ahora a revisión de esta Corporación.</p> <p>En los anteriores términos salvamos nuestro voto respecto de la decisión de la referencia.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-200/99
Fecha de la sentencia	siete (7) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 464 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, hecho en Ginebra El 26 De Enero De 1994"
Conoci3 en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ.
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Convenio Internacional de Maderas Tropicales 1994", hecho en Ginebra el 26 de enero del mismo a1o.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 464 de 1998, por medio de la cual se aprueba el citado Convenio.</p> <p>Tercero: Enviar copia de esta decisi3n al Presidente de la Rep1blica y al Ministio de Relaciones Exteriores para los efectos previstos en el numeral 10 del art1culo 241 de la Carta.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur1dicos	Revisi3n constitucional de la Ley 464 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, hecho en Ginebra El 26 De Enero De 1994"
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-254/99
Fecha de la sentencia	veintiuno (21) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 465 del 4 de agosto de 1998, <i>“por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Cooperaci3n turística entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de Jamaica”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C. el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).”</i>
Conoci3 en primera instancia	Dra. MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 465 del 4 de agosto de 1.998 <i>“por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Cooperaci3n Turística entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de Jamaica”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C. el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).”</i></p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el <i>“Convenio de Cooperaci3n Turística entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de Jamaica”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C. el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).”</i></p> <p>Tercero.- Ordenar la comunicaci3n de la presente sentencia al Presidente de la Repùblica, al Congreso de la Repùblica, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro de Desarrollo Econ3mico.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídic	Revisi3n constitucional de la Ley 465 del 4 de agosto de 1998, <i>“por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Cooperaci3n turística entre el Gobierno de la Repùblica de Colombia y el Gobierno de Jamaica”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C. el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).”</i>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-270/99
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la ley 466 de agosto 4 de 1998, " <i>Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperaci3n Turística entre el Gobierno de la Repùblica de Chile y el Gobierno de la Repùblica de Colombia</i> ", suscrito en Santafé de Bogotá, el nueve (9) de mayo de 1995.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Declarar EXEQUIBLES el <i>Convenio de Cooperaci3n Turística entre el Gobierno de la Repùblica de Chile y el Gobierno de la Repùblica de Colombia</i> ", suscrito en Santafé de Bogotá, el nueve (9) de mayo de 1995, así como la ley 466 de 1998, por medio de la cual se aprueba dicho Convenio.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisi3n constitucional de la ley 466 de agosto 4 de 1998, " <i>Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperaci3n Turística entre el Gobierno de la Repùblica de Chile y el Gobierno de la Repùblica de Colombia</i> ", suscrito en Santafé de Bogotá, el nueve (9) de mayo de 1995.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-275/99
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 467 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba la Enmienda al art3culo octavo de la Convenci3n Internacional de 1966 sobre la Eliminaci3n de todas las formas de la Discriminaci3n racial" adoptada en Nueva York el 15 de enero de 1992.
Conoci3 en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Decision	Declarar EXEQUIBLES la "Enmienda al art3culo octavo de la Convenci3n Internacional de 1966 sobre la eliminaci3n de todas las formas de la Discriminaci3n Racial", adoptada en Nueva York el 15 de enero de 1992, as3 como la Ley 467 de 1998, por medio de la cual se aprueba dicho Acuerdo.
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur3dicos	Revisi3n constitucional de la Ley 467 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba la Enmienda al art3culo octavo de la Convenci3n Internacional de 1966 sobre la Eliminaci3n de todas las formas de la Discriminaci3n racial" adoptada en Nueva York el 15 de enero de 1992.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	<i>Sentencia C-185/99</i>
Fecha de la sentencia	veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n constitucional de la Ley 468 de 1998 y el Acuerdo Sobre Asistencia a la Niñez entre la Repùblica de Colombia y la Repùblica de Chile, celebrado en Santafé de Bogotá el 16 de Julio de 1991
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el "ACUERDO SOBRE ASISTENCIA A LA NIÑEZ ENTRE LA REPÙBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÙBLICA DE CHILE, hecho en Santafé de Bogotá, D.C., a los diez y seis (16) días del mes de Julio de mil novecientos noventa y uno (1991)".</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 468 de 1998 por medio de la cual se aprueba el "ACUERDO SOBRE ASISTENCIA A LA NIÑEZ ENTRE LA REPÙBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÙBLICA DE CHILE, hecho en Santafé de Bogotá, D.C., a los diez y seis (16) días del mes de Julio de mil novecientos noventa y uno (1991)".</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisi3n constitucional de la Ley 468 de 1998 y el Acuerdo Sobre Asistencia a la Niñez entre la Repùblica de Colombia y la Repùblica de Chile, celebrado en Santafé de Bogotá el 16 de Julio de 1991
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-156/99
Fecha de la sentencia	marzo diez (10) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n oficiosa de la Ley 469 del 5 de agosto de 1998, <i>“por medio de la cual se aprueba la “Convenci3n sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos”</i> .
Conoci3 en primera instancia	Dra. MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES la “Convenci3n sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro Protocolos : “Protocolo I. Sobre fragmentos no localizables”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la Convenci3n; “Protocolo II. “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el tres (3) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), en Ginebra; “Protocolo III. Sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la Convenci3n ; “Protocolo Adicional, considerado como IV, Sobre armas l1ser cegadoras”, aprobado en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), y la Ley 469 de agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y ocho (1998), mediante la cual se aprobaron estos instrumentos internacionales
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jur1dicos	Revisi3n oficiosa de la Ley 469 del 5 de agosto de 1998, <i>“por medio de la cual se aprueba la “Convenci3n sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos”</i> .

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-226/99
Fecha de la sentencia	abril catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES", hecha en M3xico, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Conoci3 en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	<p>Primero. DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES", hecha en M3xico, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y la Convenci3n misma.</p> <p>Segundo. COMUNÍQUESE esta decisi3n al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretarí General de la Presidencia de la Rep3blica, y envíesele copia aut3ntica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Polítca.</p>
Conoci3 en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídcos	Revisi3n de constitucionalidad de la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES", hecha en M3xico, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las	NO APLICA



aclaraciones	
--------------	--

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-305/99
Fecha de la sentencia	cinco (5) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	
Demandado	Revisión de constitucionalidad de la Ley 471 del 5 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero", hecha en New York, el veinte (20) de junio de mil novecientos cincuenta y seis (1956)
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declarar EXEQUIBLES la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, hecha en New York, el veinte (20) de junio de mil novecientos cincuenta y seis (1956), y la Ley 471 de 1998, que la aprueba.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión de constitucionalidad de la Ley 471 del 5 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero", hecha en New York, el veinte (20) de junio de mil novecientos cincuenta y seis (1956)
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-215/99
Fecha de la sentencia	catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante	Andrés de Zubiría Samper, Luis Enrique Cuervo Pontón y Armando Palau Aldana.
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12 (parcial) , 13, 27, 30, 33, 34 (parcial), 45, 46, 47, 48 (parcial), 50, 53 (parcial), 55, 65 (parcial), 70 (parcial), 71, 73, 85 y 86 de la Ley 472 de 1998, <i>“por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 472 de 1998 : los numerales 4) y 5) del artículo 12 ; los artículos 13 y 30 ; los apartes demandados del artículo 34 ; los artículos, 45, 46 y 47 ; los incisos segundos de los artículos 48 y 53 ; los artículos 50 y 55 ; el numeral 3) del artículo 65 ; y los artículos 71, 73, 85 y 86.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, salvo las expresiones <i>“Cuando dicha acción esté dirigida a volver las cosas al estado anterior, el término para interponerla será de cinco (5) años, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración”</i>, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, en el entendido de que la sentencia que aprueba el pacto de cumplimiento hace tránsito a cosa juzgada, salvo que se presenten hechos nuevos y causas distintas a las alegadas en el respectivo proceso, así como informaciones de carácter técnico que no fueron apreciadas por el juez y las partes al momento de celebrarse dicho pacto, evento en el cual la sentencia hace tránsito a cosa juzgada relativa.</p> <p>Así mismo, esa declaración se entiende en el sentido de que las expresiones <i>“partes involucradas”</i>, contenidas en el penúltimo inciso del artículo 27 de la Ley 472 de 1998, se refieren únicamente al infractor demandado por la violación de derechos e intereses colectivos.</p> <p>Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el literal c) del artículo 70 de la Ley 472 de 1998, salvo las expresiones <i>“... o cuando éste no concurriere a</i></p>

	<p><i>reclamarlo dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la sentencia ;", que se declaran INEXEQUIBLES.</i></p> <p>Quinto.- INHIBIRSE de fallar acerca del cargo de inconstitucionalidad formulado contra toda la Ley 472 de 1998, por las razones expuestas en la parte motiva.</p> <p>Sexto.- INHIBIRSE para resolver de mérito en relación con la constitucionalidad el artículo 33 de la Ley 472 de 1998, por lo señalado en las consideraciones del fallo.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Consideran los demandantes, que los artículos 11 y 47 de la Ley 474 de 1998 son inconstitucionales, en la medida que establecen términos de caducidad para incoar las acciones populares y de grupo, pues con ello se viola el derecho de acceso a la administración de justicia.</p> <p>En relación con el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, señalan los ciudadanos Andrés de Zubiría y Luis Enrique Cuervo, que tal disposición quebranta el artículo 29 de la Carta Política, por cuanto todo acto contrario a derecho, no solo debe ser evitado sino corregido, toda vez que estas acciones deben ir encaminadas a sancionar a quien ha atentado contra los intereses colectivos o los ha vulnerado. Agregan, que la protección de los intereses públicos no puede limitarse por razones procedimentales, puesto que cuando un hecho es contrario a derecho, el ordenamiento jurídico debe poder enmendarlo o eliminarlo en cualquier momento, es decir, que no puede someterse la acción popular a los límites de la caducidad.</p> <p>Con respecto al artículo 47, sostiene uno de los actores, que esta norma es contraria a los preceptos constitucionales consagrados en los artículos 1o., 29 y 229, ya que cuando los afectados por unos mismos hechos son varias personas, la acción de grupo tiene el propósito de garantizar la eficacia procesal al concentrar en un solo proceso el trámite de pretensiones de personas que se dirigen contra los mismos demandados, que pueden valerse de las mismas pruebas y a quienes puede impartirse justicia mediante una sola sentencia. Por ello, considera que un mecanismo procesal por excelencia, no tiene por qué afectar el término para hacer valer un derecho sustancial, pues si un particular actuando individualmente puede ejercer una acción durante el término de prescripción que le consagran las leyes ordinarias, resulta violatorio del debido proceso que cuando se acoge a un mecanismo de agilidad procesal, la ley le</p>

	reduzca el tiempo para hacer valer ese mismo derecho. En su sentir, la caducidad restringe el acceso a la administración de justicia cuando mediante la acción de grupo se debe pretender todo lo contrario.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

### SENTENCIAS DE 2000

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	<b>Sentencia C-531/00</b>
<b>Fecha de la sentencia</b>	diez (10) de mayo del año dos mil (2000).
<b>Demandante</b>	Silvia López de Mesa Eastman, Jorge Mauricio Gaviria Grajales
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1o. (parcial) y 2o., del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
<b>Decision</b>	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “<i>salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo</i>”, contenida en el inciso 1o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de</p>

	la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>Decision</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>Los demandantes manifiestan que los incisos 1o., en lo acusado, y 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 violan el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 16, 25, 47, 53, 54, 95 y 333 de la Carta Política, al permitir los despidos de personas con limitaciones mediante autorización de la oficina del Trabajo y, en caso de omitirse ésta, con la respectiva indemnización a cargo del patrono.</p> <p>En criterio de los actores, la norma en los apartes enjuiciados desconoce valores superiores relacionados con la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, que sustentan el Estado social de derecho colombiano, así como los principios de dignidad humana y solidaridad de las personas, impidiéndose la garantía estatal de la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos, de manera que éstos puedan atender la función que socialmente les corresponde (C.P., Preámbulo y arts. 1o., 2o.).</p> <p>Los accionantes expresan lo anterior, pues opinan que el legislador ignoró la obligación de proteger especialmente a las personas que por su condición física se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Por ello, indican que se produce una negativa a la garantía y ejercicio de derechos y libertades propios de esas personas. En efecto, señalan como vulnerados en forma específica los derechos a una personalidad jurídica y al libre</p>

	<p>desarrollo de la personalidad (C.P., arts. 14 y 16), a obtener trabajo permanente y a gozar de estabilidad en el mismo, a disfrutar de condiciones de progreso y desarrollo económico, en igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación (C.P., arts. 25, 53, 13 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Ley 16 de 1972), con lo cual, manifiestan, se desconocen, igualmente, los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente ratificados por Colombia (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1o., Carta de las Naciones Unidas, art. 55, y el Convenio 111 de la OIT, art. 2o.), con clara vulneración del artículo 53 superior.</p> <p>Por otra parte, los actores consideran que la preceptiva legal en lo censurado impide realizar políticas de rehabilitación e integración en favor de los disminuidos físicamente, contrariando de esta manera lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, en la medida en que resulta <i>“más fácil, rápido y menos costoso para un empleador despedir e indemnizar a un trabajador que ha sufrido una disminución en su capacidad laboral, que emprender un proceso de rehabilitación y de acondicionamiento a unas nuevas condiciones tanto físicas como laborales de ese trabajador”</i>. Para ellos, como consecuencia de esto se obtiene la afectación a la vigencia del principio de justicia en las relaciones laborales y la obstaculización del deber del Estado de propiciar la ubicación laboral de las personas minusválidas en edad de trabajar, en un trabajo acorde con sus condiciones de salud (C.P., art. 54).</p> <p>Por todo lo anterior, los demandantes afirman que el</p>
--	---

	<p>legislador olvidó “que el trabajo no sólo tiene una función retributiva sino que también debe cumplir una función social”, lo que, en su concepto, genera un desconocimiento de los artículos superiores 95 y 333, por no respetarse los derechos ajenos y abusar de los propios y por desconocer la función social que tiene la empresa como base del desarrollo socioeconómico del país.</p> <p>Y, por último, precisan que la expresión demandada del inciso 1o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, acusado, impide la aplicación del Decreto- Ley 1295 de 1994 (Manual Unico de Calificación de Invalidez) y del Decreto 917 de 1999, al autorizar la desvinculación de una persona que no tiene los requisitos para ser calificada como inválida.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	<b>C-1062 de 2000</b>
<b>Fecha de la sentencia</b>	dieciséis (16) de agosto de dos mil (2000).
<b>Demandante</b>	Néstor Raúl Correa Henao.
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) de la Ley 472 de 1998.
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.
<b>Decision</b>	Declarar EXEQUIBLES las expresiones “derivados de la vulneración de derechos e intereses colectivos” contenidas en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”, en el entendido de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente



	amparables por las acciones de clase o de grupo.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>El accionante considera que la norma demandada en la parte destacada, vulnera los artículos 2o., 13, 29, 88 y 228 de la Constitución Política, con base en las razones que a continuación se resumen:</p> <p>Como presupuesto básico de su argumentación, señala que las acciones de grupo buscan indemnizar a aquellas víctimas que se encuentren en condiciones uniformes, cuando quiera que se les vulnere “cualquier derecho”, es decir de primera, de segunda o de tercera generación, de orden constitucional o legal. Por lo tanto, aceptar que sólo proceden para reparar los perjuicios provenientes de la violación de un derecho colectivo, impide hacer efectivos los derechos en su conjunto, en aras de un inexplicable culto a la ley formal, lo que, adicionalmente, conlleva a una discriminación injustificada para acudir a la justicia mediante dicha acción, con el fin de obtener la correspondiente indemnización. Lo anterior, en su concepto viola los artículos 2o. y 13 de la Constitución.</p> <p>Además, para el accionante, aceptar tal inexactitud llevaría a producir una mayor protección en derechos que no presentan un rango fundamental, frente aquellos que si lo tienen. E ilustra esta hipótesis señalando que en el evento de que un grupo de personas llegase a sufrir un perjuicio en su salud al consumir un producto, podrían optar por la acción de grupo o por una acción ordinaria para obtener la correspondiente indemnización, mientras que los familiares de quienes fueron víctimas de una masacre, al pretender una indemnización, solamente podrían acudir a la justicia mediante la acción ordinaria.</p> <p>Precisa, además, que la situación cuestionada ya ocurrió en la práctica, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia rechazó una acción de grupo instaurada por razón de una masacre, señalando que la única acción procedente en ese caso era la acción de reparación directa. El actor considera esa interpretación absurda y peligrosa, en el evento de que haga carrera en el interior de la jurisdicción contenciosa, pues por esa vía se violan los artículos 29 y 228 superiores, ya que los jueces se declararían incompetentes y rechazarían las demandas sobre asuntos que son de su conocimiento, violando el debido proceso y negando el derecho de las personas a acceder a la administración de justicia. De la misma manera, estima que la norma demandada vulnera el artículo 88 de la Carta Política, pues restringe lo dicho en el inciso segundo (acciones de grupo) para los casos del inciso primero (acciones populares); los cuales versan exclusivamente sobre derechos e intereses colectivos.</p> <p>Para concluir, el demandante presenta tres consideraciones finales:</p>

	(i.) que la tesis de restringir las acciones de grupo a las indemnizaciones provenientes de la violación de derechos colectivos fue rechazada por el legislador, toda vez que los artículos 3o. y 46 de la Ley 472 de 1998 ampliaron el espectro de derechos que pueden protegerse por esta vía, quedando redactados de manera amplia; (ii.) que en Estados Unidos la <i>class action</i> permite reparar perjuicios provenientes de la violación de cualquier derecho y (iii.) que esta Corporación en sentencia C-215 de 1999 afirmó que la acción de grupo procede para la protección de cualquier derecho, por lo que lo anteriormente expuesto no es otra cosa que la conservación y reiteración de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-732 de 2000
<b>Fecha de la sentencia</b>	veintiuno (21) de junio de dos mil (2000).
<b>Demandante</b>	Raúl Eduardo Cendales Herrera
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 55 (parcial) y 65 numerales 2º, 3º y 4º de la Ley 472 de 1998.
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
<b>Decision</b>	Declarar EXEQUIBLE los numerales 2º y 4º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas.</p> <p>Estima el actor que la disposición acusada es violatoria del artículo 29 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p>

	<p>De manera general, el impugnante cuestiona el contenido material de los numerales 2° y 4° del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 en cuanto consagran “la posibilidad, dentro de las acciones llamadas de grupo, de que personas que no han intervenido en el proceso se beneficien de él”.</p> <p>Así, afirma el demandante que integra el debido proceso aquel principio que exige como presupuesto de condena el haber sido vencido en juicio por quienes ostenten la calidad de parte dentro del proceso. Por ello, so pretexto de proteger fines de interés general como lo sería la descongestión de los despachos judiciales, no puede el legislador permitir que una o varias personas se presenten a reclamar derechos litigiosos luego de proferida la sentencia que le pone fin a la actuación judicial de la que no fueron parte.</p> <p>Sostiene que, desde el punto de vista probatorio, aceptar que un tercero se beneficie de la sentencia dictada dentro del proceso iniciado mediante acción de grupo, “es abiertamente violatorio del derecho de contradicción, en cuanto el demandado no conoce los hechos que esta persona alega y, por consiguiente, no puede oponerse a ellos.” Considera que si bien la Ley 472 exige una serie de condiciones para hacer efectiva esta prerrogativa, es claro que los perjuicios reconocidos tiene un alcance individual y concreto y, en consecuencia, deben ser probados por las personas que hacen parte del grupo afectado, Esto último –afirma el actor- no ocurre con quienes se vinculan luego de dictada la sentencia ya que éstos sólo tienen que acreditar el interés que les asiste para hacerse merecedor al fallo, pudiendo, en consecuencia, resultar favorecidos sin ningún merecimiento.</p> <p>Argumenta también que las normas impugnadas rompen el equilibrio procesal, toda vez que la parte condenada “en ningún momento tiene la opción de contradecir, alegar y objetar las aspiraciones de quienes se presentan con posterioridad de la sentencia a reclamar resarcimiento de perjuicios.”</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA

Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
-----------------------------	-----------

Tipo de sentencia	<b>C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
Identificar la sentencia	C- 531 de 2000
Fecha de la sentencia	diez (10) de mayo del año dos mil (2000).
Demandante	Silvia López de Mesa Eastman, Jorge Mauricio Gaviria Grajales.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1o. (parcial) y 2o., del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	<p>Primero.- Declarar <b>EXEQUIBLE</b> la expresión “<i>salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo</i>”, contenida en el inciso 1o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.</p> <p>Segundo.- Declarar <b>EXEQUIBLE</b> el inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	
Decision de la Corte	
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA

<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA
------------------------------------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-427/00
Fecha de la sentencia	doce (12) de abril de dos mil (2000).
Demandante	Nestor Javier González Guatame.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 399 de 1997, “por la cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, ‘INVIMA’, su cobro”.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	UNICO. Abstenerse de emitir pronunciamiento sobre el artículo 9º de la Ley 399 de 1997, salvo en cuanto a su parágrafo el cual se declara EXEQUIBLE.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>0.1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>Estima el demandante que la norma demandada contraría los artículos 13 y 95, numeral 9º de la Carta.</p> <p>1.2. Fundamentos de la demanda</p> <p>El actor afirma en su demanda que la Ley objeto del presente pronunciamiento excluye a varias de “las personas naturales o jurídicas que en ejercicio de su actividad económica requieren de la expedición, modificación y renovación de sus registros sanitarios”. Ello se debe a que el legislador, en lugar de establecer categorías generales de productos que, por su similar naturaleza, deberían estar gravados con la tasa, pretendió determinar en concreto, con un carácter excesivamente casuístico, qué productos están gravados y cuáles no lo están. Al hacerlo, dice, pasó por lo alto varios productos que, en consecuencia, quedaron exonerados de pagar la tasa a la que se refiere tal ordenamiento. Dicha exoneración constituye, para el actor, una manifiesta e injustificada desigualdad.</p> <p>Para reafirmar su posición, el actor menciona algunos de los productos que, a pesar de pertenecer a las mismas categorías generales objeto de la competencia de registro del Invima, se encuentran excluidos de la norma demandada, ejemplificando, de este modo, el carácter injustificado de la alegada discriminación.</p>

	Por otra parte, el demandante manifiesta sus discrepancias respecto del concepto 009681 del 17 de septiembre de 1997, rendido por la directora de la oficina jurídica del Invima al director general de dicha entidad. Según tal concepto, alega el actor, se permite la interpretación analógica en la determinación de los productos que están obligados a pagar la tasa, criterio que contraría lo establecido por nuestra Constitución Política.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1708/00
Fecha de la sentencia	doce (12) de diciembre de dos mil (2000).
Demandante	Luis Manuel Ramos Perdomo. Eduardo Carmelo Padilla Hernández.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 7°, 8°, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30 y 33, de la Ley 333 de 1996 y contra la Ley 365 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal” y “ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente.” que hacen parte de los incisos segundo y tercero del artículo 7° de la Ley 333 de 1996 y los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 27 ibídem, respecto de los cargos formulados en las demandas que se resuelven.</p> <p>Segundo.- ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-409 del 28 de agosto de 1997 en relación con la expresión “La Fiscalía General de la Nación la iniciará de oficio”, que hace parte del artículo 8° de la Ley 333 de 1996.</p>

	<p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el vocablo “legítimos” contenido en el numeral 1° del artículo 12 de la Ley 333 de 1996 e INEXEQUIBLES las expresiones “por razones no atribuibles a su culpa o dolo” y “antes del fallo” que hacen parte parágrafo de la misma disposición.</p> <p>Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “hasta concurrencia del valor de aquellos” contenida en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Quinto.- ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-409 del 28 de agosto de 1997 en relación con las expresiones “Corresponderá a los funcionarios competentes para conocer de las actuaciones penales la declaración de extinción del dominio (..) y “Conocerán de la extinción del dominio los fiscales de la justicia regional en los asuntos penales de competencia y, en los demás casos la fiscalía adscrita a la unidad especializada, o la que determine el Fiscal General de la Nación.”, contenidas en el artículo 14 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Sexto.- ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-539 del 23 de octubre de 1997 en relación con las expresiones “Fiscal” y “cuando el trámite hubiere sido conocido por la fiscalía” que hacen parte de los literales a. y f. del artículo 15 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Séptimo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 17 y 18 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Octavo.- ESTESE A LO RESUELTO por la Sentencia C-539 del 23 de octubre de 1997 respecto del artículo 21 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Noveno.- ABSTENERSE de realizar pronunciamiento alguno respecto de los cargos formulados contra el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 333 de 1996, por vicios de forma, por caducidad de la acción.</p> <p>Décimo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “dolo o culpa grave” que hace parte del artículo 28 de la Ley 333 de 1996 con el entendido dado en el numeral 4.6, de la parte motiva de esta providencia.</p> <p>Undécimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley 333 de 1996.</p>
--	---

	Duodécimo.- ESTESE A LO RESUELTO por la Sentencia C-539 del 23 de octubre de 1997 respecto del artículo 33 de la Ley 333 de 1996 - excepto su párrafo que no fue demandado y se declaró exequible en la Sentencia C-374 de 1997-.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Demanda instaurada por el ciudadano Luis Manuel Ramos Perdomo</p> <p>El ciudadano Luis Manuel Ramos Perdomo invoca la declaración de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 27 de la Ley 333 de 1996 porque considera que la disposición desconoce los artículos 2º, 29, 58 y 83 de la Constitución Política.</p> <p>Afirma que los cargos que formula contra la disposición en estudio se fundamentan en aspectos sustanciales y formales, los que se sintetizan como sigue:</p> <p>Sostiene que si el Estado decide averiguar la procedencia de los bienes que integran un patrimonio no puede hacer extensivos a dicha investigación los principios que rigen la investigación penal, porque al hacerlo quebranta el derecho de los titulares de dichos bienes a someterse a un debido proceso y su derecho a ser amparados con la presunción de inocencia.</p> <p>Aduce que como se trata de una acción real, su investigación no tiene carácter sancionatorio. Afianza este planteamiento con el argumento de que el artículo 30 de la misma ley permite al juzgador acudir a las disposiciones de los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Contencioso Administrativo, compatibles con su naturaleza y que en la exposición de motivos del Proyecto que le dio origen a la Ley se dijo al respecto:</p> <p>“Tal y como lo afirmo el ponente del proyecto, en su momento, Doctor Germán Vargas Lleras, "... el artículo 34, abre, es una enorme posibilidad para que a través de una figura novedosa, de naturaleza civil, tiene una connotación muy distinta (sic), si reformáramos el simple procedimiento penal para poderle dar curso a la misma, esa es una acción novedosísima, civil y cometeríamos un enorme error en el momento en que entendamos o la miremos o viéramos el efecto o la consideremos como una acción penal.....".</p>



	<p>Concluye que se trata de una acción real “ubicada dentro del ámbito del derecho civil” (...). Considera que los motivos de economía procesal que llevaron al Congreso Nacional a determinar que el implicado pueda atender en el mismo proceso su responsabilidad penal y lo concerniente al proceso de extinción del dominio, habida cuenta que algunas causales tienen que ver con conductas delictivas, no transforman la naturaleza de la acción, porque el trámite se dirige a determinar el origen de unos bienes y no la responsabilidad penal de su titular.</p> <p>Que como el artículo 27, en comento, es una de las disposiciones que conforman el procedimiento especial previsto para tramitar la acción de extinción de dominio, resulta inconstitucional el inciso segundo del mismo artículo, por cuanto dispone que en una investigación que no tiene naturaleza sancionatoria se adelante investigación preliminar, propia del proceso penal, debido a que los bienes incautados quedan a disposición del ente acusador vulnerando de manera directa el derecho de propiedad y el derecho al debido proceso.</p> <p>Que debido a la naturaleza real y civil de la acción de extinción de dominio la Ley 333 de 1996, la somete a un trámite especial - transcribe los artículos 15.-Del trámite-, 16.-Protección de derechos-, 17.-Del procedimiento-, - 18.-De la demanda-, 19.-De las medidas preventivas-, 20.-De la perentoriedad de los términos-, 21.-De la sentencia-, 22.-De la entrega-, 23. -De la persecución de bienes-; para concluir afirma que es evidente que el Congreso Nacional estableció un procedimiento especial con el objeto de “no someter a los afectados a la rigurosidad propia de un proceso penal”, pero que el inciso que controvierte, hace extensivos a un trámite de diferente naturaleza los principios propios del Procedimiento Penal, violando, ostensiblemente, el debido proceso y el derecho de defensa del investigado.</p> <p>Transcribe apartes de decisiones que dice son de esta Corporación, para afirmar que durante la etapa de la investigación previa se restringen las garantías del procesado, en razón de la necesidad de investigar la comisión de un delito cuya realización perjudicó a la sociedad, empero que tal restricción no quebranta el derecho del sindicado a su defensa porque terminada la investigación ese derecho se restituye plenamente. Aduce que como el procedimiento previsto para tramitar la acción de extinción de dominio carece de las garantías procesales propias del proceso</p>
--	--

	<p>penal, la suspensión de las mismas, dentro de la etapa de investigación previa, vulnera el artículo 29 constitucional y pone al investigado en desventaja, porque le restringe sus garantías procesales, como si se tratara de investigar la comisión de un delito y, terminada la etapa de investigación, no se las restablece.</p> <p>Para concluir este aparte de su demanda sostiene que el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 333 de 1996 es “típico del procedimiento penal y por tanto debe ser declarado inconstitucional ya que vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso de quien se encuentra vinculado a un proceso, por el ejercicio de la acción de extinción del dominio, teniendo en cuenta (sic.) que no corresponde a una acción penal.”</p> <p>Dice apoyarse en sendos pronunciamientos de esta Corporación, de los cuales trae apartes, relativos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la reserva dentro del proceso penal, para sostener que el debido proceso se constituye en pilar fundamental de los procedimientos judiciales, por cuanto las partes requieren estabilidad y seguridad en sus actuaciones y quien es investigado debe conocer que se lo investiga para poder contradecir lo que se le imputa, lo cual no se logra cuando se aplica a una acción que no tiene naturaleza sancionatoria, como la que se dirige a declarar extinguido el dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, los principios de la investigación penal, dentro de la cual la reserva es válida por los bienes sociales que se protegen.</p> <p>Se detiene en el artículo 58 constitucional y en el artículo 669 del Código Civil, para afirmar, que el derecho de propiedad faculta a las personas naturales y jurídicas, para usar y disponer de su derecho, todo ello con arreglo a las leyes que lo regulan y limitan. Empero, que la garantía constitucional respecto del mismo se condiciona a que el derecho de propiedad haya sido adquirido conforme a la ley, porque de haberse obtenido ilícitamente, el Estado, que en este caso esta representado por la Fiscalía, debe hacer uso de la acción para que pueda proceder, mediante sentencia, a declarar la extinción del patrimonio ilícitamente adquirido.</p> <p>Se apoya en las sentencias C-176-94, M.P. Alejandro Martínez Caballero, -revisión constitucional de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas” Ley 67 de 1993-, C-389-94 M.P. Antonio Barrera Carbonell, y otras no identificadas, de las cuales trae apartes, para</p>
--	---

	<p>concluir que el inciso segundo del artículo 27 de la ley en estudio desconoce el artículo 58 constitucional porque, en la etapa de la investigación previa, permite la incautación preventiva de los bienes del imputado, en aras de establecer si éstos provienen de actividades ilícitas, privando al titular del disfrute de los bienes que se presume adquirió en forma lícita y desconociendo la obligación del Estado de garantizarle el ejercicio de su derecho, hasta tanto no se dicte una sentencia que declare la procedencia ilícita de los mismos.</p> <p>Resalta el perjuicio que representa la anterior vulneración para el sistema económico porque si los bienes pueden ser incautados en cualquier momento, dentro de una investigación preliminar, sin conocimiento de su titular, así éste sea un tercero de buena fe ajeno a la investigación, se afecta sensiblemente el mercado debido a que se pierde la confianza y la seguridad que le son propias.</p> <p>Igualmente afirma que la norma controvertida desconoce el principio de la buena fe, para el efecto cita sendas providencias de esta Corporación de las cuales trae apartes.</p> <p>Para concluir advierte, previo análisis del trámite que el Proyecto de Ley cumplió ante el Congreso Nacional, que el inciso 2° del artículo 27 de la Ley 333 de 1996, en estudio, debe declararse inconstitucional por vicios de forma, porque i) el texto del artículo 41 -luego 27- del Proyecto de Ley 019 de 1996, no contemplaba el inciso segundo -demandado-, ii) se introduce el inciso en mención, por primera vez, en el texto final aprobado por el Senado de la República, empero, la disposición no aparece en el texto definitivo aprobado por la Cámara de Representantes.</p> <p>Así las cosas, conceptúa que con la expedición del inciso segundo de la Ley 333 de 1996 se desconocieron los artículos 157, 160 de la Constitución Política y 147 de la Ley 5a de 1992, porque la disposición en mención no tuvo la contradicción necesaria al no haberse discutido en los debates relativos a la adopción de la Ley, según se puede confirmar en las Gacetas del Congreso que reseñan su trámite.</p> <p>2. Demanda instaurada por el ciudadano Eduardo Carmelo Padilla Hernández</p> <p>El ciudadano Eduardo Carmelo Padilla Hernández considera que los artículos 7°, 8°, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 27, 28, 30 y 33, de la Ley 333</p>
--	---

	<p>de 1996 desconocen los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 13, 14, 16, 29, 34, 58, 60, 83, 85, 90, 93, 94, 113, 114, 116, 121, 122, 123, 124, 136 N. 1°, 150 N° 1 y 2, 228, 229, 230, 249, 250, 251, 252 y 253 de la Constitución Política; el numeral 7° del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (Ley 74 de 1968) y el numeral 4° del artículo 8°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) por cuanto:</p> <p>i) asignan a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de la acción de extinción del dominio, sin reparar en que su competencia está circunscrita a la investigación de delitos y que como no le compete proferir sentencias no puede conocer del trámite o procedimiento previo, ii) quebrantan el núcleo esencial del debido proceso y el derecho a la igualdad, iii) limitan el monto de la reparación del daño causado, por la actuación judicial a que da lugar la acción de extinción del dominio, al valor de los bienes y exigen la demostración del dolo o de la culpa grave del funcionario, iv) imponen una sanción de “aplicación prospectiva, restrictiva y específica y v) debido a que la demanda que da inicio al trámite de la acción de extinción del dominio no requiere relacionar los fundamentos de derecho.</p> <p>Así planteada su inconformidad sostiene que las disposiciones demandadas quebrantan el Preámbulo de la Constitución Política, del cual se desprende la unidad de la Nación y el respeto de los derechos fundamentales, el artículo 1° porque desconocen los principios que inspiran el Estado social de derecho, el artículo 2° en cuanto garantiza los principios, derechos y deberes que la misma normatividad consagra, el artículo 3° de conformidad con el cual la soberanía dimana el poder público, el artículo 4° que le otorga primacía a las disposiciones constitucionales, el artículo 5° del cual se deriva la primacía de los derechos fundamentales, el artículo 6° según el cual los particulares son responsables por infracción de la Constitución y de la Ley y los servidores públicos, además, por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, los artículos 13, 14 y 16 que consagran la igualdad real y efectiva y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el artículo 29 el cual dispone, dentro de las reglas del debido proceso, el derecho a ser juzgado por un juez natural, no permite aplicar una sanción por la ejecución de un supuesto de hecho que a tiempo de su realización no estaba proscrito y excluye la aplicación de leyes intemporales que implican el establecimiento de penas perpetuas, el artículo 34 de conformidad con el cual la extinción del dominio debe decretarse mediante sentencia judicial, el artículo 58 que impide la aplicación de una norma a situaciones jurídicas consolidadas porque se desconocerían los derechos adquiridos, el artículo 60 por cuanto es deber del Estado promover el acceso a la propiedad y no negarla en forma arbitraria, el artículo 83 que ordena presumir la</p>
--	--

	<p>buena fe, el artículo 113 que dispone la separación de las ramas del poder público, el artículo 116 que determina quienes administran justicia, el artículo 250 en cuanto asigna funciones precisas a la Fiscalía y “excluye la competencia de las que no son delictivas” y los artículos 113, 114, 116, 121, 122, 123, 136 N° 1°, 150 N° 1 y 2, 228, 229, 230, 249, 250, 251, 252 y 253, de conformidad con los cuales el Congreso Nacional debe respetar la división funcional del poder público, le está prohibido inmiscuirse en asuntos de competencia constitucional de otras autoridades y en particular en los atribuidos a la Rama Judicial, todo empleo público tendrá funciones detalladas en la ley, la administración de justicia es función pública con decisiones independientes, toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia, los jueces están sujetos al imperio de la ley y la Fiscalía General de la Nación no puede conocer sino de los asuntos expresamente confiados por la Constitución. Arguye además que en consonancia con las anteriores disposiciones se quebrantan los artículos 14 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos -Ley 74 de 1968- y 8° de la Convención Americana -Ley 16 de 1972-.</p> <p>Para fundamentar sus cargos el actor sostiene:</p> <p>1. Que entre “los artículos 7°, inciso segundo y tercero, 8°, 14, inciso 3°, 15, literal a) y 27, en cuanto asignan la competencia a la Fiscalía General de la Nación para iniciar y culminar la extinción de dominio”, existe unidad normativa por cuanto considera contrario a la Constitución Política asignarle a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de asuntos que, por su naturaleza, son extraños a la acción y a la responsabilidad penal y que no es dable atribuirle a dicha instancia la competencia de un asunto que debe culminar con sentencia, teniendo en cuenta que los fiscales, por no ser jueces, no la pueden proferir. Al respecto afirma:</p> <p>a) Que el ordenamiento constitucional divide el poder público en las Ramas Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional confiriendo competencias constitucionales precisas, en virtud de las cuales cada una ejerce funciones separadas, aunque colaboren armónicamente en la realización de los fines del Estado.</p> <p>Estima que la función jurisdiccional está confiada a los organismos enunciados en el artículo 116 de la Constitución Política, a los cuales, el artículo 113 ibídem, les asigna una competencia constitucional que no puede ser alterada, modificada o desconocida por el Organo Legislativo. Encuentra que dicha asignación fue corroborada por esta Corporación, en Sentencia C-174 de abril 12 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero, de la</p>
--	--

	<p>cual trae apartes.</p> <p>Recuerda que a la ley le corresponde el desarrollo concreto de las normas sobre competencia, como también dictar las normas procesales y modificarlas -artículos 29 y 150 numeral 1° C.P.-, atribución que, a su juicio, no implica la potestad de asignar funciones incompatibles o disímiles porque toda facultad emanada del Ordenamiento Superior debe desarrollarse en armonía con los demás disposiciones constitucionales -artículos 113 y 116 C.P.-; de tal manera que encuentra contrario a dichos preceptos asignarle a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de una acción civil como la de extinción del dominio. Para fundamentar su apreciación asimila la competencia que controvierte con la eventual asignación, a la misma entidad, del conocimiento de conflictos derivados de relaciones laborales o de asuntos patrimoniales y de la posible atribución al juez civil para el juzgamiento de conductas delictivas.</p> <p>Dice apoyarse en las sentencias T-431/92, C-105/93, T-450/93, C-250/94, C-351/94, C-394/94, C-416/94, C-418/94, T-465/94, T-190/95, T-347/95, C-078/97, C-407/97, C-411/97 y T-502/97, para afirmar que, no obstante el amplio poder de configuración normativa, que esta Corporación le ha reconocido al Órgano Legislativo, la facultad de asignar competencias entre los diferentes organismos que integran la Rama Judicial debe guardar coherencia con las disposiciones constitucionales (Arts 113 y 116 C.P.) y respetar los principios constitucionales de igualdad, debido proceso y garantía de acceso a la administración de justicia.</p> <p>Resalta que aunque la Fiscalía General de la Nación es parte de la Rama Judicial, la Constitución Política -artículos 250 y 252- y “la doctrina constitucional”, les han confiado a sus integrantes funciones especiales, que por ello no se les puede asignar el conocimiento de asuntos no comprendidos en dichas disposiciones, ni siquiera durante los estados de excepción.</p> <p>Para concluir sostiene que de conformidad con jurisprudencia reiterada de esta Corporación, de la cual trae apartes -C-374/97, C-409/97 y C-539/97, “la Corte estima la extinción del dominio como un aspecto distinto del delito y, si ello es así, la Fiscalía General de la Nación, constitucionalmente carece de competencia y atribución para la investigación de cuestiones extrañas al delito y, en cuanto, los textos acusados, se la asignan, resultan violatorios de la preceptiva constitucional (..)”.</p>
--	--

	<p>Se detiene en el artículo 21 de la Ley para afirmar que “es violatorio de la Constitución Política, porque desconoce los derechos de los titulares y terceros de buena fe, el derecho de crédito, el derecho de hipoteca y de prenda, los derechos reales accesorios desmembrados, la estabilidad y seguridad de las relaciones jurídicas contractuales e igualmente la competencia de la jurisdicción penal, la cual, no puede extenderse a aspectos diferentes del delito y menos a la definición de la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los contratos y, tampoco, a decretar la venta en pública subasta de los bienes, respecto de los cuales recaen los derechos reales accesorios desmembrados y la garantía legítimamente constituida, cuando se concluye su eficacia o licitud.”</p> <p>b) Que se quebranta el artículo 34 constitucional al disponer que la acción de extinción del dominio pueda ser conocida por una autoridad que no es Juez de la República, en virtud de la “necesidad de unidad y coherencia de la materia atribuida a cada organismo de la Rama Judicial, el respeto de la plenitud de las formas, el debido proceso y el derecho de defensa, puede asignar el conocimiento de un asunto a funcionarios que constitucionalmente carecen de la competencia para proferir las decisiones inherentes al mismo y, en consecuencia, cercenar la atribución de aquellos que si tienen esta competencia, para reducirla y plasmarla de manera residual.”.</p> <p>Sostiene que la sentencia, “implica un pronunciamiento definitivo y sólo pueden proferirse por los jueces competentes como conclusión del trámite o procedimiento conocido por éstos. El debido proceso, implica necesariamente, el juez natural, esto es, aquel que de acuerdo con la estructura política del Estado, tenga el poder, la facultad, atribución, función y competencia de iniciar y concluir el procedimiento mediante una decisión sobre el fondo del asunto. Así, se desprende del contenido racional y teleológico del preámbulo de la Constitución Política, de sus artículos 2, 29, 128, 116, 128, 228 y 229.”</p> <p>Para concluir este primer aparte de su exposición hace un recuento de los cargos considerados y de las decisiones tomadas en las diferentes sentencias en las cuales esta Corporación ha estudiado la constitucionalidad de la Ley 333 de 1996, con respecto de la competencia que la ley asigna a la Fiscalía General de la Nación, para sostener que dichas decisiones permiten a la Corporación pronunciarse sobre los cargos que ahora se formulan porque tienen efecto de cosa juzgada relativa.</p>
--	--

	<p>2. El actor considera que las normas demandadas quebrantan el núcleo esencial del debido proceso y el derecho a la igualdad. Respecto del primer cargo afirma:</p> <p>a) Que las disposiciones desconocen el debido proceso porque éste exige la existencia de una ley previa a la comisión del hecho punible que lo tipifique como tal, el conocimiento del proceso por el juez natural, el respeto a las formas propias del juicio, el derecho a un juicio previo a la condena, la aplicación de la ley más favorable, el derecho de defensa y contradicción, la publicidad del proceso, la posibilidad de interponer recursos y el principio de la doble instancia, el principio de non bis idem, la nulidad de pleno derecho de las pruebas ilegales, la reformatio in pejus, el derecho a no declarar contra sí mismo, la cosa juzgada y, en general, la sujeción al principio de legalidad. Y que el “El artículo 93 de la Constitución Política estatuye la primacía de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso en materia de derechos humanos y, el artículo 94, ibídem, establece el carácter enunciativo de los dispuestos en aquella y en éstos, los cuales, no se entenderán "como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”.</p> <p>Respecto del párrafo del artículo 12 conceptúa que se quebranta el artículo 29 de la Constitución Política si se condiciona la intervención del implicado, que no compareció oportunamente al proceso, a que la omisión no le sea atribuible a dolo o culpa.</p> <p>b) Que la ley en estudio contiene disposiciones que, en apariencia, protegen los derechos de las partes y de los terceros -las cuales cita-, pero que el numeral 1° del artículo 12 “al referirse a los titulares "legítimos" es manifiestamente contrario a la Constitución Política, desconoce el principio de igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Política, en la medida que todas las personas son iguales ante la ley y, todas gozan de la misma protección de las autoridades y de sus derechos (...),”</p> <p>Además estima que los artículos 17 y 30 de la Ley 333 de 1996 desconocen los derechos del debido proceso e igualdad, porque limitan la aplicación de las normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal, Civil y Contencioso Administrativo a los aspectos no contemplados en la Ley, circunstancia que implica un trato “injustificado, arbitrario y lesivo” para quienes se deben someter a dicho procedimiento.</p>
--	---



	<p>Se apoya en las sentencias C-543/92, T-001/93, T-458/94, C-632/95, y T-158/96, de esta Corporación, de las cuales trae apartes, para afirmar que el principio del debido proceso, se concreta en el asunto en estudio así: i) las causales por las cuales procede la acción de extinción del dominio son de aplicación restrictiva y conciernen a conductas delictivas, por ende el delito del que pende la extinción, debe estar plenamente demostrado, ii) no se podrá intentar la acción de extinción del dominio sin la previa declaración, por sentencia penal ejecutoriada, de las conductas delictivas en las cuales se sustenta. “Por ello, la iniciación de la extinción mientras esté en curso el proceso penal, esto es, mientras no haya concluido mediante providencia ejecutoriada, transgrede el derecho del debido proceso,” iii) no puede iniciarse ni proseguirse, ni tramitarse, en forma simultánea, actuación de extinción del dominio por los mismos hechos y respecto de los mismos bienes, iv) corresponde al Estado la demostración de las conductas y el dolo o culpa grave de los terceros adquirentes, iv) la investigación debe comprender los aspectos favorables y desfavorables v) el trámite de extinción, de oficio o por presentación de la demanda, se inicia con providencia interlocutoria indicativa de los hechos, bienes y pruebas pertinentes, sin que pueda iniciarse con base en anónimos ni basarse en imputaciones genéricas, vi) debe notificarse personalmente la providencia que da inicio a la actuación y vii) las partes pueden utilizar los mecanismos de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico, sin limitación.</p> <p>Concluye este aparte de la demanda afirmando que el debido proceso impone: i) que el juez que da inicio al trámite debe dictar la sentencia que corresponda, ii) que todas las causales que dan origen a la acción de extinción del dominio están vinculadas con hechos delictivos, iii) que declarada la ausencia material o la inocencia del imputado, respecto de alguna de estas conductas, no podrá promoverse actuación penal ni de extinción por los mismos hechos, iv) que no se pueden iniciar varias actuaciones simultáneas de extinción del dominio, v) que la acción de extinción del dominio no se puede sustentar en pruebas ilegalmente recogidas vi ) que no es procedente mantener indefinidamente al ciudadano y a sus bienes o derechos vinculados a causas de extinción de dominio, vii) que en la providencia que da inicio al proceso se debe indicar la causal o causales en las que se funda, individualizar los bienes respecto de los cuales se promueve y relacionar las pruebas, viii) que los titulares de los derechos controvertidos, causahabientes y terceros deben ser notificados personalmente desde la iniciación del trámite, ix) que al Estado le corresponde demostrar el dolo o la culpa grave del afectado y x) que se debe respetar el ejercicio del derecho de defensa, por ello considerada que las disposiciones controvertidas debe excluirse del ordenamiento jurídico.</p>
--	--

	<p>3. Acusa de inconstitucionalidad parcial los artículos 13 y 28 de la Ley 333 de 1996, por violación de los artículos 13 y 90 de la Constitución Política, en cuanto, a su juicio, limitan el monto de la reparación del daño causado, al titular de los bienes cuyo dominio se ha extinguido, al valor de éstos y disponen que la reparación de los perjuicios sufridos por la actuación judicial requiere la demostración del dolo o de la culpa grave del funcionario.</p> <p>Aduce que resulta violatorio del principio de igualdad ordenar que el perjuicio ocasionado con la acción de extinción del dominio se limite al valor del bien, al igual que ordenar una reparación parcial de los daños causados y considera que se quebranta la obligación del Organo Legislativo de determinar la responsabilidad de los servidores públicos y hacerla efectiva, con sujeción a la Constitución, por cuanto asegura que ésta, en ningún caso, limita la reparación del daño al valor de los bienes extinguidos ni exige la demostración del dolo o de la culpa grave del funcionario.</p> <p>4. Sostiene que, al tenor del artículo 1° de la Ley 333 de 1996, la extinción del dominio consiste en la "pérdida" del derecho, sin contraprestación ni compensación alguna, por las causales relacionadas en el artículo 2°, a su juicio descriptivas de conductas delictivas. Por ende concluye que se trata de una sanción de "aplicación prospectiva, restrictiva y específica".</p> <p>Para fundamentar su afirmación, relativa a la imposibilidad de extinguir el dominio aplicando retroactivamente una disposición, se apoya en salvamentos de voto a la Sentencia C- 374/97 de los magistrados Jorge Arango Mejía y Carlos Gaviria Díaz -de los cuales trae apartes-, para afirmar que:</p> <p>"Constituyendo la extinción del dominio la "pérdida" del derecho y, por ende, una "sanción", no existe en el mundo jurídico actual concepción doctrinaria o jurisprudencial que postule la aplicación de la sanción hacía el pasado cuando no existía la norma que la consagraba y, por tanto, sus supuestos fácticos necesarios para la aplicación de la consecuencia descrita en ella".</p> <p>Hace referencia a la decisión de esta Corporación, de conformidad con la cual la extinción del dominio no constituye una "sanción penal", para distinguir su cargo, puesto que asegura que éste</p>
--	--

	<p>pretende obtener un pronunciamiento de la Corporación en relación a la acción como “simple sanción”, porque considera que “nunca puede ser objeto de aplicación retroactiva y menos retrospectiva, porque, las sanciones presuponen una ley preexistente, una tipicidad legal expresa, restrictiva y no son ni pueden ser aplicables intemporalmente.” Agrega que, en la Sentencia C-374 de 1997 -trae apartes- esta Corte aplica un criterio “tan flexible (..) para aplicar una sanción antes del hecho que la genera y determina (..), no resiste, en verdad, un cuestionamiento serio y profundo.”.</p> <p>5. Acusa al artículo 18 de la Ley 333 de 1996 de quebrantar los artículos 1°, 2°, 13, 29, 58, 93 y 228 de la Constitución Política y los artículos 14, numeral 7 del Pacto Internacional del Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y 80, numeral 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.</p> <p>Para sustentar su cargo sostiene que la acción de extinción del dominio es una “acción judicial atípica o sui generis”, regulada en su estructura básica por la Ley 333 de 1996 y por una normatividad complementaria, constituida por tres ordenamientos disímiles - Códigos de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo. Por lo anterior conceptúa, “se trata de una acción real, como en derecho civil, por hecho derivado de un delito, como en derecho penal, que tiene al Estado como parte, como en derecho administrativo”. Circunstancia que, a su juicio ha desconcertado su práctica y exige la intervención de esta Corporación, “para dar claridad sobre el punto”.</p> <p>Agrega que el artículo en comento no dispone que la demanda que da inicio al trámite de la acción de extinción del dominio debe contener los fundamentos de derecho, omisión que considera violatoria de un verdadero Estado social de derecho, la vigencia de un orden justo, la igualdad, la propiedad privada, el debido proceso, los pactos internacionales y, en especial de la primacía de lo sustancial sobre lo formal en la administración de justicia, por cuanto, en los términos del artículo 228 constitucional, la acción de extinción del dominio solo podría iniciarse mediante una demanda “sustancial” que dé cuenta de los motivos de fondo, para que el demandado conozca porqué se debe defender.</p> <p>En subsidio de un fallo de inexequibilidad absoluta, solicita, con respecto del artículo 18 en estudio, la declaración de constitucionalidad condicionada, en el entendido de que la</p>
--	--

	<p>demanda que pretende la extinción del dominio deberá incluir “los fundamentos de derecho, en forma precisa, clara y motivada.”.</p> <p>Para concluir se refiere a la aplicación de la cosa juzgada constitucional realizando un recuento de las sentencias proferidas por esta Corporación para decidir respecto de las demandas de inconstitucionalidad presentadas, hasta la fecha de la demanda, contra la Ley 333 de 1996. Y solicita la intervención de la Corporación, con miras a que con un correcto entendimiento de las disposiciones en estudio, se impidan los abusos cometidos por las autoridades en las actuaciones a que da lugar la acción de extinción de dominio.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DRES. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, CARLOS GAVIRIA DIAZ, ALFREDO BELTRAN SIERRA, ALFREDO BELTRÁN SIERRA, JAIRO CHARRY RIVAS, CARLOS GAVIRIA DÍAZ, JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, MARTA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, CRISTINA PARDO SCHLESINGER, ALVARO TAFUR GALVIS, IVAN H. ESCRICERIA MAYOLO</p> <p>Aunque nuestro voto coincide con la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte en el proceso de la referencia, consideramos oportuno manifestar en esta oportunidad que los suscritos Magistrados nos vemos precisados a aclararlo, en razón de los argumentos expuestos en el salvamento de voto a la Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, que resolvió la demanda presentada por distintos ciudadanos contra algunos preceptos de la ley 333 de 1996 “por la cual se establecen las normas sobre extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita”. Ello, por cuanto discrepamos, como allí se dijo, de la naturaleza jurídica que se le ha pretendido dar a la extinción de dominio y por cuanto, de la misma manera, se desconocen las garantías procesales consagradas en el ordenamiento constitucional, por las razones que allí se expusieron.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-433/00

Fecha de la sentencia	del doce (12) de abril de dos mil (2000).
Demandante	Silvia Isabel Reyes Cepeda
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el párrafo del artículo 2 de la Ley 322 de 1996
Conoció en primera instancia	Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Decision	Declárase EXEQUIBLE el párrafo del artículo 2 de la Ley 322 de 1996
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Afirma la actora que la disposición parcialmente acusada vulnera los artículos 95, numeral 9, 158, 338 y 363, inciso 1, de la Constitución Política.</p> <p>Considera que la norma enjuiciada desconoce los principios de justicia y equidad, en los cuales se enmarca el deber constitucional de contribuir con las cargas del Estado (art. 95, numeral 9, de la Constitución), así como los principios de equidad, eficiencia y progresividad que rigen el sistema tributario (art. 363 C.P.).</p> <p>También asegura que el párrafo demandado no guarda ninguna relación con el texto del artículo que lo contiene, es decir, que no sólo es ajeno el párrafo al tema del cual se ocupa la norma en que está inserto, sino que rompe la unidad de ella y así, la del contenido en general de la ley, situación que conduce a la vulneración del artículo 158 de la Carta Política.</p> <p>Por lo anterior, manifiesta que no tiene vínculo alguno la fijación de una norma tributaria dentro del marco de una ley que regula la conformación y requisitos tanto del Sistema Nacional de Bomberos como de los cuerpos de bomberos.</p> <p>De otro lado, la demandante señala que la Ley 322 de 1996 adolece de un vicio formal, ya que según lo dispuesto por el artículo 154 de la Constitución, los proyectos de ley referentes a tributos deben iniciar su trámite en la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, y que para tales efectos la Ley 3 de 1992 señaló a la Comisión Tercera y no a la Sexta, como sucedió en el proceso legislativo que concluyó con la expedición de la Ley 322.</p> <p>Señala que la norma acusada presenta ausencia total de marcos o parámetros para que los municipios y distritos puedan establecer la</p>

	<p>sobretasa que allí impone, pues solamente se limita a indicar que los concejos tanto municipales como distritales la pueden establecer sobre cualquier tributo y respecto de determinadas actividades.</p> <p>Por tanto -continúa-, la Ley no señaló un rango tarifario prudencial. Tampoco tuvo en cuenta la capacidad contributiva de los posibles sujetos pasivos de la sobretasa, ni la base gravable para establecer el porcentaje del impuesto por pagar, motivo que genera la violación del artículo 338 de la Carta Política.</p> <p>En cuanto al concepto de tasa, la actora afirma que la disposición demandada desconoce la regla consagrada en el inciso 2 del canon constitucional antes mencionado, según la cual "la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen".</p> <p>En tal sentido -agrega- la Ley 322 de 1996 señala que el de Bomberos es un servicio público de carácter esencial y que, por tanto, la retribución de tal servicio es la tasa mas no el impuesto.</p> <p>Finalmente censura el hecho de que el legislador haya autorizado el cobro de tal sobretasa sobre tributos inexistentes, como es el caso de la telefonía móvil. Incluso alega la actora que actualmente no existe impuesto alguno a la telefonía móvil, sea celular o de cualquier otra índole.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-270/00
Fecha de la sentencia	ocho (8) de marzo de dos mil (2000).
Demandante	Hernando Alberto de la Espriella Burgos

Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra la primera parte del artículo 5 de la Ley 217 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 5 de la Ley 217 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los argumentos en los que se sustenta la demanda de inconstitucionalidad se pueden resumir de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Considera el actor que la disposición acusada viola el artículo 243 de la Constitución Política, en la medida en que desconoce los señalamientos hechos por la Corte Constitucional en la sentencia C-423 de 1995. A su juicio, el artículo 5 de la Ley 217 de 1995 no cumple con lo ordenado en la mencionada providencia, pues se limita a incorporar dentro del presupuesto nacional, como ingresos corrientes de la Nación, la fracción de los recursos generados por la concesión del servicio de telefonía móvil celular que no se hubiese ejecutado a la fecha de notificación de la sentencia, y no la totalidad de los mismos, como claramente se desprende del fallo judicial.</li> <li>2. Por tal circunstancia, se infringen también los artículos 356 y 357 del Estatuto Superior, así como el artículo 22 del Decreto 111 de 1996, que reproduce el contenido del artículo 15 de la Ley 179 de 1994 -Orgánica del Presupuesto-, puesto que el derecho de las entidades territoriales a participar de los ingresos corrientes de la Nación, surge desde el momento mismo en que éstos se generan y no a partir de la notificación de un fallo judicial -la sentencia C-423 de 1995-.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Resulta obvio entonces, afirmar que a través de una ley ordinaria como es la 217 de 1995 no se podía desconocer así sea de manera transitoria, lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto -Ley 179 de 1994", respecto a la participación de las entidades territoriales en la repartición de los ingresos corrientes de la Nación.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicita el demandante a la Corte Constitucional, que al establecer los efectos de la decisión judicial, ordene al Gobierno Nacional la inclusión en el presupuesto, de las transferencias y el situado fiscal que se hubiere ejecutado por parte de la Nación con anterioridad a la fecha de notificación de la sentencia C-423 de 1995.</li> </ol>

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-728/00
Fecha de la sentencia	junio veintiuno (21) del año dos mil (2000)
Demandante	Pedro Alfonso Hernández M.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40 (parcial), 41 (parcial) y 141 de la Ley 200 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE, pero solamente en relación con el cargo analizado, la expresión "así como la ejecución de las órdenes que puedan impartir, sin que en este caso queden exentos de la responsabilidad que les incumba por la que corresponda a sus subordinados", contenida en el numeral 10 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 13 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995, bajo el entendido de que la investigación disciplinaria acerca del reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones del servidor público sólo podrá iniciarse con base en sentencias proferidas por las respectivas jurisdicciones, en las que se declare que un servidor público ha incumplido sus obligaciones.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el aparte "Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses", contenido en el inciso primero del artículo 141 de la ley 200 de 1995.</p> <p>Cuarto. Declarar EXEQUIBLE la expresión "al vencimiento de este término perentorio el funcionario sólo podrá, o abrir investigación</p>



	o archivar definitivamente el expediente", consagrada en el inciso segundo del artículo 141 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Afirma el actor que la disposición acusada establece que "los servidores públicos, en los eventos en los que impartan órdenes, son responsables cuando los subordinados incurran en alguna conducta sancionable disciplinariamente." Estima que si bien es lógico que los servidores públicos "deben ser responsables por la debida ejecución de las órdenes que impartan, ello no significa que deban ser siempre responsables cuando sus subalternos incurran en alguna falta disciplinaria en ejercicio de tales órdenes."</p> <p>Por lo tanto, considera que el aparte demandado establece una modalidad de responsabilidad objetiva, que está prohibida para determinar cualquier especie de responsabilidad. Ello le permite concluir que el texto acusado vulnera los principios del debido proceso y de la presunción de inocencia consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>Con el acostumbrado respeto, me permito exponer mi discrepancia parcial con el criterio mayoritario. En mi concepto, la expresión "al vencimiento de este término perentorio el funcionario sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente", contenida en el inciso segundo del artículo 141 de la Ley 200 de 1995, habría debido declararse exequible bajo el condicionamiento de que el archivo definitivo del expediente implica solamente la prohibición de iniciar una nueva etapa de indagación preliminar y que, por lo tanto, el proceso podría reabrirse si aparecen pruebas que ameriten la apertura directa de una investigación disciplinaria.</p> <p>Considero que esa era la manera más acertada de armonizar el derecho del encartado a no permanecer indefinidamente <i>sub judice</i>, con la obligación del Estado de hacer justicia. Así lo expresé en el proyecto de sentencia, en el numeral 11 de las consideraciones y fundamentos sobre el mencionado artículo 141, numeral que me permito transcribir a continuación:</p> <p>"Una vez establecida la constitucionalidad del límite temporal para la realización de la indagación preliminar, cabe preguntarse ahora acerca de la constitucionalidad de la obligación de archivar</p>

	<p>definitivamente el expediente cuando, luego de vencido el plazo de la indagación, no se cuenta con los elementos necesarios para abrir la investigación. El Procurador encuentra que es irrazonable que se disponga que en el momento de la indagación preliminar debe archivar definitivamente el expediente si no hay elementos suficientes para abrir investigación, mientras que en la etapa de la investigación el archivo del expediente es provisional, cuando la evaluación de la etapa no ha terminado con un pliego de cargos. Ello significa que los procesos en los que se adelantó la etapa de la investigación pueden ser reabiertos si aparecen pruebas que permitan formular el pliego de cargos, al tiempo que aquéllos que no superaron la etapa de la indagación preliminar no podrán ser reexaminados, a pesar de que aparezcan pruebas que lo ameriten. Además, afirma que en el artículo 151 se señalan las causales para decretar el archivo definitivo de la investigación y que, por lo tanto, no se ajusta a la lógica que en la norma demandada se agregue otra causal, cual es la de que se puede archivar definitivamente el proceso cuando la indagación preliminar no permite abrir una investigación.</p> <p>"Estima la Corte que el legislador bien puede, dentro de su marco de libertad de configuración normativa, determinar que se debe cerrar definitivamente la indagación preliminar en aquellos procesos que, durante sus seis meses de averiguación, no han arrojado elementos suficientes para abrir la investigación respectiva. Ello, con el objeto de ofrecer garantías a los inculcados, o de no involucrar al Estado en investigaciones indefinidas, con todas las consecuencias que ello apareja.</p> <p>"Sin embargo, esta Corporación sí considera que es inconstitucional la determinación legal de que una vez transcurrido el término de los seis meses, sin que existan elementos suficientes para abrir la investigación, debe archivar definitivamente el expediente. En esta situación se presenta nuevamente una colisión entre el derecho a la justicia, y el derecho del encartado a no permanecer indefinidamente <i>sub judice</i> y el interés de la administración en ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente. No encuentra problema la Corte en que se disponga que una vez han transcurrido los seis meses ya no se puede reiniciar la etapa de indagación preliminar. Si bien este período puede ser corto, como ya se señaló, esta Corporación encuentra que en este punto debe acatarse la decisión del legislador de brindarle prevalencia a los derechos del acusado y al objetivo de colocarle límites a las investigaciones.</p> <p>"Con todo, sí se restringe de manera excesiva el derecho a la justicia cuando se dispone que el expediente debe archivar definitivamente, con independencia de si en un futuro cercano</p>
--	--

	<p>aparecen pruebas o evidencias que permitan iniciar en forma directa la investigación disciplinaria. En la ponderación entre estos derechos y fines en conflicto se puede aceptar que, en una situación concreta, alguno deba ser limitado en su vigencia. Pero ello no puede ocurrir de manera desproporcionada. Y esta sería la situación que se presenta si se determina que en ningún caso podrá reabrirse el expediente, luego de transcurridos los seis meses sin que se encontraran los elementos suficientes para abrir la investigación.</p> <p>"Si bien se puede admitir que en aras de garantizar el derecho al debido proceso del encartado se disponga que la indagación preliminar concluye indefectiblemente luego de cumplirse el período de los seis meses, considera esta Corporación que es inaceptable que en ningún caso la investigación se pueda reabrir posteriormente. Es posible que a partir de otras investigaciones o de quejas diferentes aparezcan, dentro de un plazo razonable - que en este caso sería el fijado por la ley para poder iniciar la acción disciplinaria -, pruebas que ameriten abrir directamente una investigación disciplinaria sobre los hechos o autores que no pudieron esclarecerse completamente en la frustrada indagación preliminar. En esta situación, el archivo definitivo del expediente, la imposibilidad de reabrir el proceso, tal como se dispone en la norma, vulnera en forma grosera el derecho de hacer justicia, de sancionar debidamente las faltas disciplinarias.</p> <p>"Por consiguiente, con el fin de armonizar los derechos y fines en conflicto, esta Corporación declarará que es constitucional el aparte que reza "al vencimiento de este término perentorio el funcionario sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente", pero bajo el entendido de que él hace relación a que luego de transcurridos los seis meses, sin hallar elementos suficientes para abrir investigación disciplinaria, no se podrá reabrir la etapa de indagación preliminar. Sin embargo, en el caso de que a partir de otras investigaciones o de quejas recibidas se encuentren pruebas idóneas para abrir directamente la investigación, las autoridades disciplinarias podrán, en procura de la realización del principio de la justicia, proceder a la apertura de esas investigaciones, siempre y cuando no haya prescrito la acción disciplinaria."</p> <p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO  SANCION DISCIPLINARIA A SERVIDOR PUBLICO-Incumplimiento de las propias obligaciones (Salvamento parcial de voto)  <i>El incumplimiento de las propias obligaciones tiene en el sistema jurídico su respectiva sanción, y no se ve la necesidad de añadir a ella la creación de una falta disciplinaria, a todas luces desproporcionada.</i></p> <p>1. Estimo que el numeral 13 del artículo 41 acusado ha confundido</p>
--	---

	<p>dos campos de la actividad de la persona y ha venido a castigar a ésta en su desempeño público -que en la hipótesis de la norma puede ser impecable y dar lugar, sin embargo, a la sanción- por conductas relacionadas con la vida privada del funcionario.</p> <p>El ordenamiento jurídico resulta, entonces, permitiendo que el Estado, contra toda regla de justicia, sancione a un servidor público que en el ejercicio de sus funciones no ha faltado, por situaciones externas al servicio, lo que, desde el punto de vista de la función pública como tal, es injusto, y por ende contrario a la Constitución Política.</p> <p>Ahora bien, el incumplimiento de las propias obligaciones tiene en el sistema jurídico su respectiva sanción, y no se ve la necesidad de añadir a ella la creación de una falta disciplinaria, a todas luces desproporcionada.</p> <p>2. Me aparto de la decisión adoptada por la Corte en lo concerniente a la exequibilidad de las palabras finales consignadas en el mismo numeral.</p> <p>En efecto, la salvedad que allí se contempla -que medie solicitud judicial- respecto de la falta consistente en el reiterado e injustificado incumplimiento de obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia del servidor público carece de todo sentido.</p> <p>Y, desde luego, interpretar esa excepción en el sentido de que los jueces pueden solicitar que se incumplan las obligaciones a las que se refiere la norma vulnera abiertamente la Constitución en cuanto desfigura el objeto y el papel de la administración de justicia.</p> <p>Si se entiende que es la persona incumplida la que formula solicitud judicial para exonerarse de responsabilidad por el incumplimiento, resulta contradicho el mismo precepto, que califica la conducta por su carácter "reiterado e injustificado". Si carece de justificación la actitud del servidor público, mal puede pensarse que la falta se elimine por el sólo hecho de dirigirse al juez.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-292/00
Fecha de la sentencia	marzo quince (15) de dos mil (2000).
Demandante	Franco Solarte Portilla.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”.
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia C-708 del 22 de septiembre de 1999, Magistrado Ponente Alvaro Tafur Galvis, que declaró EXEQUIBLE el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 <i>“Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”</i> .
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano Franco Solarte Portilla demanda el artículo 27 del Código Disciplinario Unico, en su integridad, por cuanto considera que dicha disposición vulnera la Carta Política al no determinar en forma clara y precisa cuáles son las faltas graves y cuáles las leves, atentando de esta manera en contra del principio de legalidad, del cual se deriva el de culpabilidad, ambos protegidos constitucionalmente por el artículo 29 Superior. Así mismo, en su opinión se quebranta el principio de reserva en la medida que defiere el establecimiento de las infracciones graves o leves al organismo de control disciplinario, el cual es potestad del legislador.</p> <p>En efecto, señala el demandante que en ningún caso puede el legislador dejar en manos de los jueces la misión de complementar tipos penales indeterminados “proponiendo como base vagas pautas valorativas”, pues de presentarse esta circunstancia se estaría adicionando al tipo penal un elemento de carácter subjetivo, donde debe primar exclusivamente el elemento objetivo.</p> <p>Manifiesta el actor, que el artículo 27 del Código Disciplinario Unico no expresa con claridad y precisión que clase de comportamientos son materia de reproche disciplinario, bien porque sea catalogado como falta grave, o bien considerada como falta leve. Por ello, a su juicio la “falta legislativa” consiste en ofrecer con demasiada amplitud una potestad interpretativa al juez disciplinario,</p>

	<p>presentándose un desprendimiento de la función estatal de tipificar comportamientos, lo cual es indelegable.</p> <p>Como sustento de sus afirmaciones, cita el demandante apartes de la sentencia C-280 de 1996, de la Corte Constitucional, en la cual se expresa que los principios orientadores del derecho penal, son aplicables al derecho disciplinario, en cuanto comparten la naturaleza de ser ejercicio del ius puniendi del Estado y, además, que tanto las faltas como las sanciones deben ser contempladas de manera taxativa por el legislador, lo cual ofrece seguridad jurídica.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-162/00
Fecha de la sentencia	febrero veintitrés (23) de dos mil (2000).
Demandante	Enrique José Arboleda
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 de la Ley 182 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 30 de la Ley 182 de 1995, salvo las expresiones "El afectado podrá presentar inmediatamente su reclamo ante la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, la cual decidirá definitivamente dentro de un término de tres (3) días hábiles" y " En este caso, no podrá solicitarse la valoración del testimonio de persona no identificada" del numeral 2) y "como de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión," del numeral 3) y los párrafos primero y segundo, que se declaran INEXEQUIBLES.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA

Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que la disposición acusada viola los artículos 20, 29, 73, 74, 86 y 229 de la Constitución Política.</p> <p>En su concepto, la norma impugnada desconoce el artículo 20 de la Constitución Política, por cuanto le otorga a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión la facultad de resolver sobre la controversia que se suscita entre el afectado por una información, que ha solicitado su rectificación, y el medio que decide mantenerse en la información transmitida. Considera que, por obra de la norma, el responsable de dicha información “queda sujeto al arbitrio de la referida Junta Directiva, con lo cual restringe el derecho a informar libremente”.</p> <p>Estima el actor que la disposición atacada desconoce las condiciones de equidad en las que debe ser garantizado el derecho a la rectificación, pues “ante el solo reclamo del que se considera lesionado por una información, se abre la puerta para que la dicha Junta Directiva pueda sin fórmula de juicio condenar al informante ‘definitivamente dentro de un término de tres días’. Esto, constituye una amenaza contra la libertad de información que pende, como la espada de Damocles, sobre la cabeza del informador”.</p> <p>Menciona el demandante algunos antecedentes del artículo 20 en la Asamblea Nacional Constituyente para afirmar que, en un principio, el Constituyente consideró la posibilidad de crear un Tribunal de Información, Rectificación y Réplica - que haría parte del Poder Jurisdiccional - para dirimir los conflictos que surgieran por violación al derecho a la información. Sin embargo, agrega, esta propuesta fue luego desechada, en vista del rechazo de los dirigentes de los medios de comunicación y de un sector de la Asamblea, que consideraban que ello atentaba contra la libertad de información y conduciría a que se impusiera siempre la opinión del Tribunal.</p> <p>Afirma que el artículo demandado le concede a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión funciones similares a las que se le querían encomendar a “ese tribunal desechado por el constituyente de 1991.” En su opinión, el encomendarle a la Junta que decida sobre las controversias que surjan entre el informador y las personas afectadas por su labor se traduce en la instauración de la censura, pues “está en juego la libertad, la autonomía para informar, que conllevan el que a una entidad administrativa no le sea dable determinar la objetividad de la información en orden a saber si fue falsa, injuriosa o calumniosa, etc. para ordenar o no la rectificación”. Añade también la mencionada atribución de la Junta Directiva de la CNTV tiene como resultado la limitación de la</p>

	<p>autonomía del informador para determinar “cuándo y cómo informa, qué opinión emite, qué acusaciones efectúa, qué hechos destaca y cuáles omite”.</p> <p>De igual forma, el actor considera que la norma acusada desconoce el artículo 229 de la Constitución Política. A su juicio, la decisión acerca de si una información es veraz o falsa, si es injuriosa o si produjo un perjuicio, es de competencia de la rama judicial y no de un ente típicamente administrativo como es la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Dice al respecto: “La falsedad, la injuria, la calumnia, son delitos y sobre ellos sólo pueden pronunciarse los respectivos jueces. Es preciso observar que cuando alguna persona se queja de habersele lesionado su buen nombre por un periodista o por un medio en una información o noticia, la acusa de falsa, injuriosa o calumniosa y lo que deberá decidir la Directiva de la Comisión de Televisión es si cometió uno de esos hechos ilícitos para ordenar su rectificación, arrebatándole a los jueces una función que les es propia”.</p> <p>La disposición acusada también vulneraría el artículo 86 de la Constitución Política. Dado que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión es quien dirige el conflicto surgido entre el medio televisivo y la persona que se siente afectada, se excluiría la posibilidad de acudir al juez de tutela para pedir que se garantice la vigencia de un derecho fundamental. Al respecto precisa el demandante que “la protección a un particular por un abuso o posible abuso de la prensa, y en nuestro caso de un informativo de televisión, es doble, pues no sólo puede acudir al juez ordinario como lo expusimos en el cargo anterior sino también al de tutela si se le violó un derecho fundamental.” A propósito de este punto, formula también la siguiente solicitud a la Corte: “solicitamos a la H. Corte Constitucional que <u>declare que el Juez de tutela no puede impedir que se divulgue una noticia o la información, pues en este caso se está convirtiendo en un censor</u> y ya expusimos que el constituyente excluyó expresamente toda intromisión de los poderes públicos en la actividad periodística, la cual es primeramente libre y luego sí, responsable”.</p> <p>Asimismo, el actor encuentra que la norma acusada desconoce los artículos 73 y 74 de la Constitución Política cuando le exige a los medios de comunicación que tengan pruebas sobre los hechos en que funda sus informaciones. Lo anterior, afirma, va en contra tanto de la esencia del derecho a informar, que exige mantener reservadas las fuentes, como de la inviolabilidad del secreto profesional. Expone que los periodistas “obtienen su información de fuentes a las que les dan mayor o menor crédito dependiendo de la confianza, seguridad, autoridad y demás circunstancias que rodean su labor comunicadora, pero en ningún caso recaudan pruebas”. A su juicio, obligarlos a entregar pruebas “implica</p>
--	--



	<p>desnaturalizar la función periodística y acabar de hecho con el secreto profesional, pues si quien dio la información pide reserva no se puede emitir la información ya que es objeto de rectificación”.</p> <p>De otro lado, el actor considera que el procedimiento descrito en los incisos 1 y 2 del artículo 30 demandado vulnera el artículo 29 de la Carta, pues carece “de reglas procesales definidas sobre producción de la prueba, contradicción de la misma, derecho de representación”. Afirma que la norma consagra “una especie de juicio sumario”, donde no existen las garantías debidas, tal como la de poder contradecir las pruebas. La Comisión Nacional de Televisión debe decidir en un término de 72 horas, término que no le permite a la Comisión averiguar la verdad o la realidad del contenido de la información.</p> <p>La violación de la norma constitucional sobre el debido proceso se presentaría también por causa de “la indefinición del sujeto obligado a realizar la rectificación”, y por cuanto “las sanciones se le imponen al concesionario que no necesariamente tiene la dirección ni es el responsable del programa que emitió”. Resalta que en el párrafo primero de la norma acusada la sanción por incumplimiento de una rectificación se le impone al medio, locución que parece implicar que es al concesionario, mientras que en el párrafo segundo estas sanciones se imponen al “operador”, “concesionario” o “contratista” de televisión.</p> <p>Por ello, concluye que se presenta una violación al debido proceso “por la ambigüedad de los sujetos obligados: debe rectificar el director del programa o el responsable, esto es el productor del mismo, y es sancionado el medio, el concesionario o el contratista. El emisor (concesionario, contratista etc.), carece en múltiples casos de las pruebas para aportarle a un peticionario de una rectificación, y puede ser sancionado por el contenido que no estuvo en capacidad de dirigir”. Al respecto añade que “[e]n la práctica ha habido casos en los cuales los periodistas deciden no rectificar una información porque la consideran veraz, pero que el concesionario, temeroso de las sanciones procede a rectificar, creándose así una nueva forma de censura, la de los estados financieros de las empresas que prefieren rectificar y no arriesgarse a una multa o la caducidad del contrato.”</p> <p>Finalmente, para ilustrar el problema que plantea la norma acusada, menciona que la ley de prensa - la Ley 29 de 1944 - hace responsable al director del periódico que publicó la noticia violatoria de los derechos de un tercero y no al dueño de la empresa que lo imprimió, con lo cual “se hace corresponder la libertad de informar que tiene el periodista, y en especial el</p>
--	---

	<p>director del informativo, con la responsabilidad por el ejercicio indebido de esa libertad, concentrándola en el director del periódico.” Por el contrario, plantea, en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995 “uno es el que dirige y otro el que responde, cercenándose la libertad de prensa pues la sujeta a los intereses económicos de la empresa”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ</p> <p>Con todo respeto, discrepo parcialmente del criterio mayoritario. En mi concepto, la norma examinada en su integridad ha debido declararse inexecutable. Además de los vicios identificados en la sentencia, creo que se vulneró la reserva de ley estatutaria, como lo sostuve en la ponencia que originalmente presenté a consideración de la Sala Plena, y que en este aspecto no fue acogida. Por ello, a continuación transcribo esa parte de la ponencia. La Corte ha sido reacia a reconocer la existencia de la reserva de ley estatutaria. Soy consciente de los motivos de conveniencia que motivan esta tradicional inhibición de la Corte, pero la circunstancia de que se trata de una garantía de la defensa de los derechos fundamentales y de una exigencia de la Carta, no puede continuar siendo soslayada por la Corte.</p> <p>"La Corte Constitucional con el objeto de impedir una indeseable petrificación del ordenamiento jurídico y, además, en aras de reservar el mayor ámbito posible a la democracia representativa que se sustenta en principio de la mayoría simple, ha limitado el alcance de las leyes estatutarias a la regulación de los aspectos estructurales y centrales de las materias sobre las que recaen. De este modo el legislador ordinario, respetando los principios medulares de la regulación – cometido propio de la respectiva ley estatutaria cuyo propósito es establecerlos -, puede determinar las políticas y los desarrollos normativos que en cada momento histórico considere más adecuados.</p> <p>Se ha sostenido con razón que el legislador estatutario complementa la obra del constituyente y que por ello el consenso que ha de soportar su decisión debe ser mayor que el ordinario, a lo que se agrega la revisión de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional. Esta función atribuida al legislador estatutario en verdad se desvirtuaría si trascendiera la fijación de las coordenadas básicas de un determinado derecho o de los procedimientos de garantía y se adentrara en el terreno de su regulación exhaustiva.</p>

	<p>De la misma manera, el legislador ordinario debe respetar la reserva de ley estatutaria y le está prohibido hacer caso omiso del procedimiento esencial de adopción de esta normativa cuando se proponga expedir el régimen básico de cada derecho fundamental. Las mayores exigencias y obstáculos institucionales que deben superarse para que el congreso dicte una ley estatutaria, se explican por su proximidad con la Constitución como que aquélla contribuye a delinear definitivamente su diseño y garantías. Desde luego la tarea del legislador estatutario no se asimila a la cumplida por el constituyente, pero por sus implicaciones requiere de un mayor consenso parlamentario y, aprobada la iniciativa, de un control previo de constitucionalidad. Estos requisitos no son ociosos, puesto que en ellos descansa una de las más importantes garantías de los derechos fundamentales.</p> <p>El examen atento de la norma acusada lleva a concluir que la ley ordinaria se ha ocupado de regular los elementos esenciales del derecho a la rectificación en condiciones de equidad, por lo que respecta a la televisión como medio de comunicación masiva. En efecto, el legislador ha concebido un completo régimen de protección de este derecho, que se encarga de definir en sus aspectos esenciales y que se garantiza a través de un procedimiento que configura de manera completa. La ley señala el ámbito esencial que integra el derecho, enuncia sus titulares, determina los sujetos pasivos y define un procedimiento administrativo de protección. Ningún aspecto estructural o esencial de este derecho, ha dejado de ser regulado en la norma acusada.</p> <p>Podría aducirse que la ley estatutaria debería tratar de la rectificación en general y, por su parte, la ley ordinaria hacerlo en relación con cada medio específico de comunicación masiva. La regulación del derecho a la rectificación en programas de televisión, por consiguiente, podría desarrollarse en una ley ordinaria. A juicio de la Corte, este hipotético reparto de competencias entre el legislador ordinario y el estatutario, sería puramente formal y podría conducir a la erosión de la reserva de ley estatutaria. Bastaría que por separado el legislador ordinario regulara el derecho a la rectificación en relación con los distintos medios de comunicación masiva, para que terminara por eludirse la exigencia constitucional que impone la reserva de ley estatutaria.</p> <p>También podría alegarse que la ley demandada articula como mecanismo de protección del derecho a la rectificación, un procedimiento administrativo, complementario de las acciones judiciales de rigor. La Constitución no descarta que la protección de un derecho fundamental, pueda combinar tanto mecanismos administrativos como judiciales; finalmente, la defensa de los derechos corresponde a un fin del Estado cuya efectividad requiere</p>
--	---

	<p>del concurso de la administración y de los jueces. Empero, la reserva de ley estatutaria se extiende a los “procedimientos y recursos” destinados a proteger los derechos fundamentales, sin hacer distinción alguna.</p> <p>En todo caso, la reserva de ley estatutaria, en este caso, se justifica en otra razón adicional. El derecho a la rectificación, representa frente a la libertad de expresión y a los derechos a informar y a ser informado, una limitación que se ha considerado legítima. Regular este derecho necesariamente comporta efectos directos y de enorme incidencia en los derechos fundamentales que se acaban de mencionar. Esto indica que así se trate de establecer un procedimiento de protección de un derecho fundamental, básicamente radicado en la administración, ello no es óbice para que se excluya de la reserva de ley estatutaria.</p> <p>La Corte, finalmente, observa que la primera fase del procedimiento no se ofrece como medio alternativo de defensa, que opere sin perjuicio de las acciones judiciales. Esto último sólo se presenta respecto de la segunda fase, la cual se contrae a reclamar ante la Comisión de Televisión el cumplimiento del derecho a la rectificación, en este evento en vista de que el medio o le ha negado dicho derecho o simplemente no ha dado respuesta al mismo".</p> <p>SI DRES. ANTONIO BARRERA CARBONELL, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, VLADIMIRO NARANJO MESA, ALVARO TAFUR GALVIS</p> <p>Los suscritos magistrados, aunque compartimos la decisión de la Corte en cuanto a la reivindicación de la facultad judicial para definir si cabe o no la rectificación, y también en lo referente a la exequibilidad de la primera fase del procedimiento administrativo referente a solicitudes de rectificación para obtener que el derecho fundamental correspondiente se desarrolle y ejerza en condiciones de equidad, como lo manda el artículo 20 de la Constitución, discrepamos de la inconstitucionalidad declarada respecto del párrafo primero del artículo 30 demandado.</p> <p>En efecto, consideramos que la previsión normativa de sanciones para ser aplicadas por la Comisión Nacional de Televisión en caso de que el medio incumpla las obligaciones surgidas del aparte normativo que se declara exequible, es también constitucional.</p> <p>A nuestro juicio, desaparecida -por virtud del fallo, en decisión que respaldamos- la posibilidad de que sea la Comisión Nacional de Televisión -ente administrativo- la que resuelva sobre si el medio, más allá del trámite mismo de la solicitud de rectificación, está obligado o no a rectificar (asunto que corresponde inicialmente a la evaluación del propio medio y, en caso de persistir la controversia,</p>
--	--

	<p>al juez de tutela), nada obsta para que el mencionado organismo, con miras a la efectividad de la norma, pueda sancionar al medio que ha omitido responder oportunamente al reclamante sobre la rectificación que pide. Como ya no lo sancionaría por no rectificar, sino por no responder, ello encaja sin dificultad en el ámbito propio de sus competencias, que no lesionan la Constitución, según lo admite la Corte al declarar exequible el artículo 30 en sus numerales 1 a 4.</p> <p>Es nuestro criterio el de que, al haber suprimido las sanciones -que, se repite, no son inconstitucionales en sí mismas, pues el legislador goza de atribuciones para preverlas-, se ha dejado la norma incompleta, y se ha convertido en inútil el valioso apoyo administrativo que ella preveía para asegurar la efectividad y oportunidad del auténtico ejercicio del derecho a pedir rectificación cuando una persona considera que con informaciones suministradas por medios de televisión se la calumnia, difama u ofende, afectando su derecho fundamental a la honra y al buen nombre.</p> <p>Al menos la posibilidad de multas habría sido valiosa para que el precepto no se quedara escrito, como en efecto ha ocurrido.</p> <p>Quizá habría sido más coherente la Corte Constitucional si hubiese declarado inexecutable toda la disposición, como lo pretendía la ponencia original, aunque tal opción no la compartimos. Pero, al haber dictaminado como executable su primera parte y como inconstitucional la segunda, ha incurrido en una insalvable contradicción.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1383/00
Fecha de la sentencia	once (11) de octubre de 2000
Demandante	Arleys Cuesta Simanca
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 505 (parcial) del Decreto 624 de 1.989 (Estatuto Tributario), modificado por el artículo 25 de la Ley 223 de 1.995
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Primero.- Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 505 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 25 de la Ley 223 de 1995
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que el aparte acusado viola los artículos 13, 95-9, y 363 de la Constitución, por cuanto lesiona el derecho a la igualdad, y desconoce los criterios de justicia y equidad en los cuales se funda el sistema tributario.</p> <p>Explica que, de conformidad con la norma, quienes estando inscritos en el régimen común del impuesto sobre las ventas deseen <i>cambiarse</i> al régimen simplificado, deben acreditar que sus ingresos no rebasaron cierto límite durante los tres años anteriores; por otra parte, en virtud del artículo 499 del Estatuto Tributario, quienes sin pertenecer al régimen común deseen <i>inscribirse</i> en el régimen simplificado, sólo deben acreditar el monto de sus ingresos durante el año inmediatamente anterior. Para el demandante, esta diferencia en el trato legal es discriminatoria, ya que <i>"para efectos tributarios el punto común esencial es que ambos se encuentran en igualdad de condiciones en cuanto sus ingresos netos no superan un determinado tope (ello sumado a las demás condiciones del artículo 499 del Estatuto Tributario) y por tal circunstancia sus obligaciones formales de carácter tributario han de ser las mismas"</i>.</p> <p>Considera, además, que el aparte acusado desconoce los principios de equidad y justicia tributaria, por cuanto <i>"no es admisible que la ley sea tan exigente en lo tocante al cambio del régimen común al simplificado, en cuanto a ingresos se refiere, cuando el mismo Estatuto Tributario establece en su artículo 508-1 la facultad oficiosa de reclasificar a quienes encontrándose en el régimen</i></p>

	<p><i>simplificado deban pertenecer al común"; esto, en la práctica se traduce en que, mientras que quienes han aumentado sus ingresos por encima del máximo legal para pertenecer al régimen simplificado, pueden ser reclasificados oficiosamente por la Administración tributaria en el régimen común, la situación de quienes han disminuido sus ingresos hasta estar por debajo de tal nivel no recibe similar tratamiento. Esta situación, al parecer del actor, es contraria a la justicia, "pues si alguien ha menguado sus ingresos en el año anterior por debajo del límite señalado por la ley, no debe mantenerse en el oneroso régimen común sino que debe pasarse al régimen simplificado que sería el acorde con las condiciones del contribuyente".</i></p> <p>La norma impugnada desconoce, entonces, el hecho de que <i>"los ingresos netos se causan dentro de una anualidad y en esa misma anualidad es que se contribuye con los gastos e inversiones del Estado (...). El tributo debe ser actual a los ingresos sobre los cuales se tributa, o sea año por año y por tal razón las condiciones para pertenecer a un determinado régimen deben ser tenidas en cuenta de la misma manera y no por trienios o periodos diferentes a un año".</i></p> <p>Por último, considera el actor que la norma acusada genera condiciones desiguales de competencia entre comerciantes que se encuentran en igual situación económica para efectos tributarios, en la medida en que quienes operan bajo el régimen común deben sumar el valor del impuesto al valor final de los bienes y servicios, mientras que quienes pertenecen al régimen simplificado no efectúan dicha adición, por lo cual los precios de los bienes que éstos últimos comerciantes ofrecen al consumidor son más bajos. Así, la disposición impugnada tiene implicaciones negativas sobre derechos fundamentales como el trabajo, por cuanto tal y como está formulada, impone exigencias económicas más gravosas a quienes están inscritos en el régimen común.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-637/00
Fecha de la sentencia	treinta y uno (31) de mayo de dos mil (2000).
Demandante	Bernardo Congote Ochoa.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 600, 601, 641 y 643 del Decreto Ley 624 de 1989 “Estatuto Tributario”.
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLES los incisos primero del artículo 600 y primero del artículo 601 del Decreto Ley 0624 de 1989, del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 31 y 32 de la Ley 223 de 1995.</p> <p>Segundo.- Declararse INHIBIDA, por ausencia de cargos, de considerar y pronunciarse respecto de la pretendida inconstitucionalidad de los incisos primero y segundo del Parágrafo del artículo 600 y segundo del artículo 601 del Decreto Ley 0624 de 1989, del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 31 y 32 de la Ley 223 de 1995.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del inciso primero del artículo 641 del Decreto Ley 0624 de 1989 que dice: “Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción” con la condición de que la Administración, en todo caso, permita al infractor ejercer su derecho de defensa.</p> <p>Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 641 del Estatuto Tributario, Decreto Ley 0624 de 1989, adicionado por la Ley 49 de 1990.</p> <p>Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 2°. del artículo 643 del Decreto Legislativo 0624 de 1989, con el entendimiento dado a la expresión “que determine la administración” el punto 6.4. de la parte motiva de esta providencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA



Hechos jurídicos	<p>Inicialmente el actor relaciona como hechos los principales aspectos normativos relativos al impuesto a las ventas para luego exponer los cargos, con argumentos que denomina “generales” y “focales” de inconstitucionalidad, concretar los apartes de las normas con la transcripción parcial de su texto y solicitar que la declaración de inconstitucionalidad afecte las disposiciones controvertidas desde su expedición y que, en consecuencia, se ordene restituir a los afectados lo pagado y recibido por la Administración, por concepto de sanciones, con posterioridad a la fecha de vigencia de la actual Constitución Política.</p> <p>El demandante desarrolla los que denomina “Argumentos Generales de Inconstitucionalidad” en relación a la naturaleza, a su juicio coincidente, de la venta y del Impuesto a las Ventas, como transacciones económicas; similitud que lo conduce a calificar de arbitrarias y contrarias al sentido común las sanciones impuestas a los responsables tributarios que no registren ventas como también las equivalencias para liquidar el monto de éstas, determinadas a partir de supuestos que nada tienen que ver con la generación del impuesto.</p> <p>El demandante conceptúa que no se puede liquidar la sanción por no declarar sobre los ingresos bancarios o brutos del contribuyente como tampoco sobre la última declaración de ventas presentada; con respecto a los primeros porque “se puede tratar de ingresos que nada tengan que ver con el impuesto de ventas” y en relación con los segundos porque la última declaración de ventas constituye una fuente de ingresos ya gravada e información suministrada por el contribuyente que no puede utilizarse en su contra, porque hacerlo contraría el imperativo constitucional de facilitar la participación ciudadana.</p> <p>Sostiene que el fenómeno de “no ventas”, difícil de experimentar respecto de bienes tangibles producidos y comercializados dentro del territorio nacional, es recurrente y fácilmente demostrable en la prestación de servicios profesionales e importación de bienes y servicios.</p> <p>Como argumentos “Focales de Inconstitucionalidad” aduce:</p> <p>Que los artículos 641 y 643 del Estatuto Tributario desconocen los artículos 29 y 13 de la Constitución Política porque, además de presumir la culpa del contribuyente, incumplen con el deber a cargo del Estado de promover una igualdad de los ciudadanos real y efectiva. Al respecto sostiene que se sanciona al contribuyente sin</p>
------------------	---

	<p>darle oportunidad de exponer posibles circunstancias atenuantes del hecho asumiendo, a favor del Estado y en su contra, que tiene ventas y que debe declarar y que no se promueve la igualdad real y efectiva porque a los contribuyentes que no generaron ventas no se les concede la oportunidad de manifestarlo sino que, por el contrario, se los sanciona "ex ante y a fortiori", en condiciones de igualdad con los que realizaron transacciones comerciales y no declararon.</p> <p>Que en los artículos acusados se desconoce la eficiencia, uno de los principios en que el artículo 363 de la Constitución Política fundamenta el sistema tributario; con respecto al Estado, aduce que las declaraciones bimensuales le generan gastos y no le reportan ingresos y en relación con el declarante porque se lo obliga a incurrir en expensas de trámite y a su personal contable, de secretaría y mensajería en trabajo improductivo.</p> <p>Que las normas acusadas al sancionar a quien no tiene ingresos, tomar como base montos que nada tienen que ver con la generación del impuesto a las ventas y gravar doblemente al declarante, por declarar sus ventas y por no hacerlo, desconocen los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2o. de la Constitución Política, de conformidad con los cuales se debe promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en la vida económica de la Nación,</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1545/00
Fecha de la sentencia	veintiuno (21) de noviembre de dos mil (2000).
Demandante	José Darío Forero Fernández
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 58 y 59 de la Ley 223 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLES el artículo 58, y el inciso primero y el parágrafo del artículo 59 de la Ley 223 de 1995 con respecto a los cargos formulados por el actor.</p> <p>Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES los incisos segundo y tercero del artículo 59 de la Ley 223 de 1995.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que las disposiciones acusadas violan los artículos 43 (transitorio), 333, 334, 336 y 359 de la Constitución por las razones que enseguida se resumen:</p> <p>El artículo 43 transitorio de la Constitución señala que <i>“Para financiar el funcionamiento de las nuevas instituciones y atender las obligaciones derivadas de la reforma constitucional que no hayan sido compensadas por la disminución de gastos o el traslado de responsabilidades, el Congreso podrá, por una sola vez, disponer ajustes tributarios cuyo producto se destine exclusivamente a la Nación”</i>. No es necesario un análisis profundo, para deducir que la norma analizada es contraria a derecho. Con la promulgación de la Ley 6 de 1992, el Congreso agotó su competencia. La autorización de la Constitución de 1991 fue expresa: <i>“por una sola vez”</i>.</p> <p>La Nación al agrupar y dar otra denominación a unos gravámenes – el impuesto global- para poder continuar recaudando unos impuestos indirectos derogados por la Constitución y ya cobrados por la estructura de precios de los combustibles (como son el impuesto al valor agregado y la sobretasa) <i>“fortalece la posición de ECOPEL en el mercado nacional e impide la libre competencia de los particulares que quisieran importar combustibles o intervenir en refinerías, porque el impuesto global se cobra al momento de la nacionalización o de la venta en refinería”</i>. Se configura así, una violación al artículo 333 de la Constitución Nacional.</p>

	<p><i>“Por el hecho de gravar unos bienes de primera necesidad para el desarrollo de la economía –como son los combustibles- y establecer una cadena de impuestos que alcanzan un porcentaje equivalente al 107% del precio de venta en refinería, el Estado está, en abierta contradicción con el artículo 334 Superior, deteriorando injustificadamente la capacidad adquisitiva y el nivel de vida de los habitantes, está coartando la libre competencia de los importadores y refinadores potenciales, y está restringiendo los beneficios del desarrollo”.</i></p> <p>Las normas acusadas también vulneran el artículo 359 de la Constitución Nacional, pues al disponer la manera de repartir los recursos recaudados como resultado del cobro del impuesto unificado, crea una renta de destinación específica que contraría lo dispuesto en la Carta Fundamental.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1112/00
Fecha de la sentencia	veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
Demandante	José Darismel Cortés Álvarez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 de la ley 228 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Declarar inexecutable el artículo 37 de la ley 228 de 1995
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El siguiente es el argumento en el que se sustenta la demanda presentada por el actor contra el artículo 37 de la Ley 228 de 1995:</p> <p>"El artículo 37 de la ley 228 de 1995, (...) deviene en inconstitucional, toda vez que prohíbe la acumulación de rebaja de penas para las contravenciones especiales, más allá de la mitad de la pena imponible; cuando para los delitos nuestro ordenamiento procesal penal no contiene límites en cuanto a la rebaja de penas, por lo que no se entiende cómo pueden acumularse rebajas de penas cuando se trata de delitos y negarse o limitarse cuando se trata de conductas o comportamientos de poca monta, de poca dañosidad social siendo ello desproporcionado e irrazonable, y no puede encontrar cabida en un derecho penal subsidiario, reductor, de última o extrema ratio, como debe ser el derecho penal de un Estado social y democrático de derecho, resultando vulnerados entre otros, los derechos que emanan de los artículos 13, 28, y 29 de la Constitución Nacional".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-392/00
Fecha de la sentencia	abril seis (6), de dos mil (2000)
Demandante	Pedro Pablo Camargo, Carlos Alberto Maya Restrepo, Augusto Francisco Bernal González y Carlos Mario Salazar Pineda
Demandado	Referencia: expediente D-2472 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 504 de 1999, "Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los Decretos-Leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Decision	<p>Primero. Declarar EXEQUIBLE la Ley 504 de 1999, en cuanto las normas en ella contenidas no requerían de la expedición de una ley estatutaria.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLES los arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 46, 49, 50, 51, 52 y 53 de la ley 504/99.</p> <p>Tercero. Declarar INEXEQUIBLES los arts.7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 37, 38, 43 y 44 de la Ley 504/99.</p> <p>Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE el art. 27 de la ley 504/99, salvo su parágrafo que se declara EXEQUIBLE.</p> <p>Quinto. Declarar INEXEQUIBLE los incisos 1 y 2 del art. 35 de la ley 504/99, y EXEQUIBLE el inciso 3 del mismo,</p> <p>Sexto. Declarar EXEQUIBLE el art. 36 de la ley 504/99, salvo la expresión "competentes conforme al art. 35 de esta ley" que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Septimo. Declarar INEXEQUIBLE el art. 40 de la ley 504/99, salvo la expresión "los funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentran vinculados a la justicia regional se integrarán en provisionalidad a los cargos correspondientes de los jueces penales del circuito especializados y de los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializado".</p> <p>Octavo. Declarar EXEQUIBLE el art. 42 de la ley 504/99 salvo la expresión "todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 158 de</p>

	<p>este Código” que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Noveno. Declarar EXEQUIBLE el art. 45 de la ley 504/99, salvo la expresión “dentro de esta jurisdicción especial” que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Decimo. Declarar EXEQUIBLE el art. 47 salvo la expresión “Santafé de Bogotá. D.C., o ante el Tribunal que cree la ley para” que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Decimo Primero. Declarar EXEQUIBLE el art. 48 de la ley 504/99, salvo la expresión “Superior de Santafé de Bogotá, D.C. o al Tribunal Superior que cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados” que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Decimo Segundo. La presente sentencia produce efectos a partir de su comunicación al Gobierno Nacional.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Demanda del ciudadano Pedro Pablo Camargo. (Expediente D-2472).</p> <p>En resumen, las acusaciones de inconstitucionalidad formuladas por el ciudadano Pedro Pablo Camargo en relación con la Ley 504 de 1999, son las siguientes:</p> <p>1.1. Afirma que la Ley 504 de 1999, en su integridad, quebranta los artículos 152 y 153 de la Constitución Política por cuanto las disposiciones contenidas en dicha ley modifican el artículo 205 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, norma esta en la cual se ordenó que "en todo caso, la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999", la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996.</p> <p>En la argumentación expuesta para sustentar la acusación así formulada, manifiesta el actor que el objeto de la Ley 504 de 1999 es el de extender "por ocho (8) años más (artículo 49) la justicia regional, denominada por la ley jurisdicción especial (artículo 45)".</p> <p>Como surge de los debates parlamentarios y de las intervenciones que durante el trámite de la ley realizaron ante el Congreso el Fiscal General de la Nación, el Ministro del Interior, el Presidente del Tribunal Nacional, y el Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para la expedición de la ley cuya</p>

	<p>inexequibilidad se pretende, se tuvo como propósito fundamental evitar el "colapso" de la justicia regional que conduciría, además a excarcelaciones de numerosos procesados, es decir que se persiguió prolongar la vigencia de la misma, "por encima de la prohibición del artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996".</p> <p>1.2. Tan cierto es lo anteriormente expuesto, -prosigue el actor-, que simultáneamente con la Ley 504 de 1999, se tramitó también el proyecto de Ley Estatutaria No. 138 -Senado-1998, 144 -Cámara 1998, para modificar la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, sujeta a revisión previa de la Corte Constitucional.</p> <p>Agrega el demandante que, el artículo 43 de la Ley 504 de 1999 parte del supuesto de que la Corte Constitucional encontrará ajustado a la Carta Política el referido proyecto de Ley Estatutaria en cuanto hace a la modificación del artículo 11 de la Ley 270 de 1996 mediante el cual se pretende crear el Tribunal Superior Nacional, pues, como se observa en el referido artículo 43 de la ley acusada, en él se dispuso que al entrar en vigencia la nueva ley, ese Tribunal asumirá el conocimiento de los procesos por los delitos de que trata el artículo 5º de la propia Ley 504 de 1999.</p> <p>Manifiesta igualmente el demandante que, si en cumplimiento del artículo 205 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la denominada "Justicia Regional" expiró el 30 de junio de 1999, prolongar su vigencia "por ocho años más", es asunto del que sólo podría ocuparse el legislador por medio de una ley estatutaria, y no a través de una ley ordinaria como lo hizo, pues de esta manera se quebrantan los artículos 152 y 153 de la Constitución Política.</p> <p>1.3. Asevera el demandante que el artículo 1º de la Ley 504 de 1999 mediante el cual se crearon los Juzgados Penales del Circuito Especializados, es igualmente inexequible por cuanto para el efecto debió previamente modificarse el artículo 11 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y, por consiguiente, es también inexequible la asignación de competencia a los Juzgados aludidos para que ellos conozcan de los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 5 de la ley demandada.</p> <p>1.4. Por otra parte, a juicio del ciudadano demandante la Ley 504 de 1999, en su artículo 45 establece una "jurisdicción especial" que entró en funcionamiento a partir del 1º de julio de 1999, con lo cual se quebrantan los artículos 116, 246 y 247 de la Constitución Política, conforme a los cuales además de la jurisdicción ordinaria, sólo existen como jurisdicciones especiales la indígena y la de equidad por conducto ésta última de los jueces de paz, lo que quiere decir que el Congreso de la República no puede establecer</p>
--	---



	<p>otra "jurisdicción especial" para reemplazar con ese nombre a la "justicia regional".</p> <p>1.5. De la misma manera, la Ley 504 de 1999, en cuanto prolonga la existencia de la "justicia regional", bajo otro nombre, "justicia especializada", quebranta los artículos 13 y 29 de la Carta Política, así como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) y los artículos 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como quiera que el juzgamiento de los delitos señalados en el artículo 5 de la ley acusada, establece para el efecto un procedimiento excepcional y distinto al de la justicia ordinaria, que, precisamente por ello, desconoce el derecho a la igualdad ante la ley y las garantías mínimas para el procesado, entre ellas la de ser juzgado por un "juez natural". En efecto, se observa que el artículo 27 de la Ley 504 de 1999 amplía los términos para la concesión de la libertad provisional en los delitos de conocimiento de los jueces especializados, así como el artículo 25 de dicha ley ordena que en tales delitos procederá siempre la detención preventiva, cuando "el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" expresamente dispone que dicha medida cautelar debe ser excepcional y no la regla general. (artículo 9 numeral tercero).</p> <p>1.6. En cuanto al artículo 7 de la Ley 504 de 1999, que autoriza al Ministro de Justicia para que, oficiosamente o a petición de parte procesal ordene el cambio de radicación del proceso de que conozcan los Jueces Penales del Circuito Especializados cuando existan motivos serios para temer sobre la integridad personal del juez o cuando se presenten circunstancias de excepción que puedan afectar el orden público o la administración de justicia, manifiesta el demandante que la norma en cuestión inicialmente formó parte del Decreto 2790 de 1990, expedido en ese entonces por el Presidente de la República haciendo uso de las facultades propias del Estado de Sitio a que se refería el artículo 121 de la Constitución anterior, y, agrega, que en un estado de derecho esa facultad de que ahora se inviste de manera permanente al ejecutivo por conducto del Ministerio de Justicia, resulta violatoria de los artículos 116, 152, 153 y 201 de la Constitución Nacional vigente, pues al Gobierno, en relación con la rama judicial, sólo le compete prestar a los funcionarios judiciales los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias, sin que pueda inmiscuirse en asuntos internos de la administración de justicia, como el cambio de radicación de un proceso penal.</p> <p>1.7. Los artículos 12, 13, 17 y 18 de la Ley 504 de 1999, violan los artículos 29, 152, 153 y 250 de la Constitución Política así como los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por</p>
--	---

	<p>cuanto, por una parte la reserva de identidad de testigos y fiscales que formaba parte de las instituciones de la "justicia regional", dejó de regir el 30 de junio de 1999, por expreso mandato del artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996; y, por otra parte, la facultad que el artículo 250 de la Constitución otorga a la Fiscalía General de la Nación para "velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal", no puede interpretarse como una autorización para desconocer el derecho a un "debido proceso público", garantizado por el artículo 29 de la Constitución que, es precisamente lo que ocurre con testigos cuya identidad se desconoce por el procesado, así como con fiscales que en la fase de instrucción del proceso, por su carácter secreto, afectan el derecho a la independencia e imparcialidad que respecto de ellos ha de mantener siempre el procesado.</p> <p>1.8. En relación con los artículos 25, 26 y 27 de la ley demandada, afirma el actor que vulneran los artículos 13, 152 y 153 de la Constitución, así como los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida en que en esas normas de carácter excepcional, se establece la detención preventiva como medida cautelar en todos los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados, así como se excluye a los procesados por estos delitos del beneficio de detención parcial en el lugar de trabajo o en su domicilio, y, además, se duplican los términos para resolver en relación con la libertad de los sindicados, todo lo cual pone de manifiesto un tratamiento discriminatorio no justificado, de carácter exceptivo, en desmedro del derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías mínimas, entre las cuales se encuentra la de la libertad como regla general y la detención como medida cautelar y no al contrario, como se establece en la ley objeto de acusación.</p> <p>1.9. El artículo 37 transitorio de la Ley 504 de 1999 a juicio del actor, quebranta los artículos 116, 152, 153 y 257 de la Constitución, en cuanto asigna competencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá en relación con los procesos de que antes conocía el Tribunal Nacional, durante la vigencia de la justicia regional. Ello resulta evidente, pues conforme al factor territorial de competencia la segunda instancia de dichos procesos, al desaparecer la justicia regional el 30 de junio de 1999, correspondía, entonces, a los Tribunales Superiores respectivos, por lo que el citado artículo 37 de la Ley 504 de 1999 viola el artículo 116 de la Constitución.</p> <p>Además, el artículo 37 de la ley acusada, que faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para crear una sala de descongestión en el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá,</p>
--	---

	<p>"para efectos del conocimiento de los procesos a que se refiere el artículo 5 de la presente ley", vulnera lo dispuesto por el artículo 257 de la Carta Política, pues este no autoriza al Consejo Superior de la Judicatura a crear salas de descongestión, sino que, en armonía con el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, se limita a indicar que el Consejo Superior de la Judicatura "podrá crear, con carácter transitorio, cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto", razón esta por la cual, se quebrantaron entonces los artículos 152 y 153 de la Constitución Política.</p> <p>1.10. El artículo 38 transitorio de la Ley 504 de 1999, en el cual se dispone que las actuaciones procesales que cumplía la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en segunda instancia "pasarán en el estado en que se encuentren a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Sala Penal Especial del Tribunal Superior de Bogotá", al decir del demandante es violatorio de los artículos 116, 152 y 153 de la Constitución Política, en primer término, porque la Sala Penal Especial del mencionado Tribunal, no puede ser creada sino por una ley estatutaria, ya que el artículo 19 de la Ley 270 de 1996, no la contempla; y, en segundo término, porque la Sala Penal Especial a que se alude, no puede asumir la competencia que corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de todo el país, conforme a lo previsto por los artículos 11 y 19 de la Ley 270 de 1996, ni siquiera de manera temporal hasta que se cree el Tribunal Superior Nacional de que trata el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que se tramitó simultáneamente con la Ley 504 de 1999, que es una ley ordinaria.</p> <p>1.11. Con respecto al artículo 40 transitorio de la Ley 504 de 1999 en el cual se dispone que los funcionarios y empleados que prestaban sus servicios a la "justicia regional" cuya vigencia por mandato del artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996 era temporal, es decir, hasta el 30 de junio de 1999, pasarán, "en provisionalidad a los cargos correspondientes de los Jueces Penales del Circuito Especializados" y de los Fiscales Delegados ante ellos, quebranta los artículos 152 y 153 de la Constitución, pues esa disposición forma parte de la prolongación de la justicia regional más allá del 30 de junio de 1999, y, en consecuencia, la decisión sobre el particular sólo podía ser objeto de una Ley Estatutaria.</p> <p>Por otra parte, el artículo 257 de la Constitución Política asigna al Consejo Superior de la Judicatura la función de "crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia", la que no puede ser ejercida entonces por el Congreso de la República.</p> <p>Además, por idénticas razones resulta inexecutable el parágrafo del artículo 40 transitorio de la Ley 504 de 1999, en el que se dispone</p>
--	--

	<p>que "mientras entra en vigencia la ley que crea el Tribunal Superior Nacional, los actuales magistrados y empleados del Tribunal Nacional y Fiscales de la Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional y los empleados de la misma, serán designados en provisionalidad ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá", pues, conforme al artículo 17 de la Ley 270 de 1996, a la Corte Suprema de Justicia se le asignó la función de elegir a los magistrados del Tribunal Nacional, Tribunal que desapareció el 30 de junio de 1999, por mandato expreso del artículo 205 transitorio de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Es decir, no existe norma aplicable al respecto, así pueda llegar a existir si finalmente se expide la nueva Ley Estatutaria a que se refiere el proyecto 138 de 1998 Senado y 144 de 1998 Cámara, actualmente sometidos a revisión previa de la Corte Constitucional.</p> <p>De esta suerte, la "integración provisional" de magistrados, jueces y empleados que prestaron sus servicios en la "justicia regional", es contraria a la Constitución. Resulta evidente que "no pueden ser designados en provisionalidad, pues ningún órgano jurisdiccional tiene la facultad de nombrarlos", ni el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 confiere tal potestad a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para efectuar respecto de aquellos magistrados, jueces y empleados de la justicia regional un "nombramiento temporal".</p> <p>1.12. El artículo 42 transitorio de la ley demandada, según el ciudadano demandante quebranta los artículos 6, 29, 116, 152 y 153 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición de la Ley 504 de 1999, tiene como único propósito prolongar la reserva de identidad tanto de los funcionarios como de los testigos secretos que actuaron en la llamada "justicia regional" hasta el 30 de junio de 1999, lo que no podía hacerse sino mediante una Ley Estatutaria, como quiera que el artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996, expresamente dispuso que la llamada justicia regional dejaría de funcionar "a más tardar el 30 de junio de 1999". Por ello, tanto a los particulares que hubieren actuado como testigos secretos, como a los funcionarios públicos que actuaron en la justicia regional, se les puede exigir responsabilidad ante las autoridades por infracción de la Constitución o de las leyes, o por omisión en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 6 de la Carta, sin que pueda ninguno ampararse en la reserva de identidad prolongada indebidamente por el artículo 42 de la ley demandada.</p> <p>1.13. Los artículos 43, 47 y 48 de la Ley 504 de 1999 que asignan competencia al Tribunal Superior Nacional cuya creación se prevé en el proyecto de Ley Estatutaria 138 Senado 1998, 144 Cámara 1998, resultan contrarios a la Constitución, como quiera que se</p>
--	---

	<p>refieren a un organismo judicial inexistente al momento de dictarse la ley acusada, y, por lo mismo, violatorios de la garantía al debido proceso y al juez natural, por lo que resulta manifiesto el quebranto del artículo 29 de la Carta, así como de los artículos 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.</p> <p>1.14. El artículo 49 de la Ley 504 de 1999 que prorroga "por ocho años más" las normas de lo que constituía la "justicia regional", es violatorio de la Carta, no sólo por establecer una "jurisdicción especial", sino, además, porque una decisión de esa naturaleza requeriría, a lo menos de una Ley Estatutaria.</p> <p>1.15. Por último, el ciudadano demandante expresa que el artículo 52 de la Ley 504 de 1999 mediante el cual se derogan algunas de las normas que conformaron la "justicia regional", es violatorio de los artículos 152 y 153 de la Constitución, por cuanto una ley ordinaria no puede derogar una ley estatutaria, por una parte; y, por otra, con respecto a los artículos 214 inciso tercero, 415 parágrafo y 457 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), en cuanto contenían normas aplicables en la justicia regional, dejaron de regir el 30 de junio de 1999, conforme al mandato contenido en el artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996.</p> <p>2. Demanda del ciudadano Carlos Alberto Maya Restrepo. (Expediente D-2481).</p> <p>El ciudadano Carlos Alberto Maya Restrepo, en resumen, solicita la declaración de constitucionalidad de la Ley 504 de 1999, por las siguientes razones:</p> <p>2.1. El artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996, -Estatutaria de la Administración de Justicia-, dispuso que "en todo caso, la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999".</p> <p>2.2. El conjunto normativo contenido en el articulado de la Ley 504 de 1999, constituye una prolongación de la denominada "justicia regional", lo que significa que fueron quebrantados entonces al expedirla los artículos 152 y 153 de la Constitución Nacional. Así mismo, resulta quebrantado el artículo 116 de la Carta, que establece quienes administran justicia sin incluir los organismos que conformaron, por excepción, la "justicia regional".</p> <p>2.3. Los artículos 13, 17 y 49 de la Ley 504 de 1999, mediante los cuales se establece o autoriza la reserva de identidad de algunos funcionarios, y la de los testigos que actúen en la ahora denominada "justicia especializada", resultan violatorios del artículo 29 de la Carta Política que establece el derecho a un debido</p>
--	--

	<p>proceso público. Por la misma razón, se quebrantan entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José -Ley 16 de 1972), que prevalecen en el orden interno por expreso mandato del artículo 93 de la Carta Política.</p> <p>3. Demanda del ciudadano Augusto Francisco Bernal González. (Expediente D-2487).</p> <p>El ciudadano Augusto Francisco Bernal González limita su demanda a impetrar que se declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 27 de la Ley 504 de 1999, en cuanto mediante dicho artículo se introducen modificaciones al numeral tercero y al parágrafo del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.</p> <p>Sostiene al respecto el ciudadano demandante de la norma citada que con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley 504 de 1999 al numeral tercero y al parágrafo del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, se quebrantan los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, por cuanto al regular lo atinente a las causales de libertad provisional, se establece como regla general que ella procede cuando se dicte en primera instancia providencia en la que se declare la preclusión de la investigación, la cesación del procedimiento o sentencia absolutoria, lo cual resulta acorde con el principio universalmente aceptado de la presunción de inocencia.</p> <p>Sin embargo, a continuación se dispone que en aquellos procesos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados, esa libertad provisional requiere, para ser concedida, que, además, "no se hubiere interpuesto recurso de apelación por parte del Fiscal Delegado o de la Agente del Ministerio Público" y que, cuando esos funcionarios interpongan tal recurso, la libertad provisional sólo podrá concederse "una vez confirmada la decisión de primera instancia por el superior", con la aclaración de que "si el recurso de no resuelve dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a partir del día en que entra al despacho del funcionario, se concederá la libertad provisional".</p> <p>Por otra parte, para la procedencia de la libertad provisional en los procesos de que conoce los Jueces Penales del Circuito Especializados, se duplican los términos aplicables para los demás procesos penales.</p> <p>Esas son, a juicio del actor, discriminaciones odiosas, insostenibles e injustificadas respecto de los procesados por delitos de que deban conocer los Jueces Penales del Circuito Especializados o la Fiscalía Delegada ante ellos, pues cuando el funcionario competente</p>
--	---

	<p>absuelve o desvincula en primera instancia a un procesado, si este lo es ante la justicia especializada no puede obtener de manera inmediata la libertad provisional como respuesta a la declaración de su inocencia, mientras los demás procesados sí la obtienen de manera inmediata.</p> <p>Así, frente a supuestos normativos idénticos (sentencia absolutoria, preclusión, cesación de procedimiento), las consecuencias son distintas sin razón que lo justifique.</p> <p>Por esto, a juicio del actor, se quebranta el artículo 13 de la Constitución Nacional, se desconoce la presunción de inocencia, se limita arbitrariamente la libertad y se vulnera el artículo 29 de la Carta "al inventar una presunción de responsabilidad penal en el procesado y presunción de error en el criterio del funcionario", sólo en atención a la naturaleza del delito de que conocen los Jueces Penales del Circuito Especializados.</p> <p>4. Demanda del ciudadano Carlos Mario Salazar Pineda. (Expediente D-2515).</p> <p>El ciudadano Carlos Mario Salazar Pineda, solicita a la Corte declarar inexecutable en su integridad la Ley 504 de 1999, por cuanto considera que mediante esta ley ordinaria se prolongó la existencia de la llamada "justicia regional" más allá del 30 de junio de 1999, fecha en la cual por haberlo dispuesto así el artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia, aquella justicia excepcional debería dejar de funcionar.</p> <p>Siendo ello así, fueron entonces quebrantados los artículos 152 y 153 de la Carta, pues la modificación a lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sólo podía llevarse a efecto por el Congreso de la República, con estricta sujeción a los preceptos constitucionales acabados de mencionar, pues, la nueva ley tan sólo le hizo unas leves modificaciones a la "justicia regional", "tiznadas de barniz, que en el fondo mantiene la misma estructura y filosofía" de la "justicia regional".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, VLADIMIRO NARANJO MESA, ALVARO TAFUR GALVIS</p> <p>CORTE CONSTITUCIONAL-Sujeción de decisiones a precisos parámetros de análisis jurídico (Salvamento de voto)</p> <p>DERECHOS CONSTITUCIONALES-No son absolutos/CONTROL DE</p>

	<p>CONSTITUCIONALIDAD-Alcance (Salvamento de voto)</p> <p><i>La Corte Constitucional, en numerosas oportunidades ha señalado que los derechos constitucionales no tienen carácter absoluto, sino que éstos contienen "estándares de actuación", de suerte que el legislador pueda armonizar los distintos derechos y valores constitucionales. Frente a ello, el control constitucional consiste en "controlar los virtuales excesos del poder constituido, o, en otras palabras, las limitaciones arbitrarias, innecesarias, inútiles o desproporcionadas de los derechos fundamentales".</i></p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Criterios de decisión que vinculan al juez (Salvamento de voto)</p> <p>PRECEDENTE JUDICIAL-Seguridad jurídica (Salvamento de voto)</p> <p>JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Alcance (Salvamento de voto)</p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Aseguramiento de intangibilidad del núcleo esencial de derechos constitucionales (Salvamento de voto)</p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Análisis a doble columna (Salvamento de voto)</p> <p>DERECHO A LA IGUALDAD-Análisis a doble columna/DEBIDO PROCESO-Existencia de régimen especial para ciertos tipos penales no constituye vulneración (Salvamento de voto)</p> <p>JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Análisis a doble columna (Salvamento de voto)</p> <p>NARCOTRAFICO Y TERRORISMO-Régimen punitivo y procedimental especial (Salvamento de voto)</p> <p>CAMBIO DE RADICACION DE PROCESO PENAL-Acto administrativo (Salvamento de voto)</p> <p><i>Modificar la radicación de ciertos procesos penales no constituye una medida de carácter jurisdiccional en cuanto no está encaminada a afectar el desarrollo de los juicios ni a interferir en las decisiones que les corresponde adoptar a los jueces y fiscales. Es, en realidad, un acto puramente administrativo que se concreta en el cambio de localización del despacho judicial, buscando así garantizar la integridad de sus funcionarios y, al mismo tiempo, mantener las condiciones de imparcialidad e independencia que se requieren para administrar una pronta y cumplida justicia.</i></p>
--	--



	<p>CAMBIO DE RADICACION DE PROCESO PENAL-Política criminal (Salvamento de voto)</p> <p>CAMBIO DE RADICACION DE PROCESO PENAL-Fundamento (Salvamento de voto)</p> <p>CAMBIO DE RADICACION DE PROCESO PENAL-Colaboración armónica entre órganos del Estado (Salvamento de voto)</p> <p>JUSTICIA REGIONAL-Reserva de identidad de jueces y testigos (Salvamento de voto)</p> <p>PRECEDENTE JUDICIAL-Cambio/JUEZ Y TESTIGO-Razonabilidad en mantenimiento de reserva de identidad/ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Independencia y seguridad (Salvamento de voto)</p> <p>PRINCIPIO DE IGUALDAD-Justificación de tratamiento diferenciado (Salvamento de voto)</p> <p>DETENCION PREVENTIVA POR JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Existencia de razón suficiente para exclusión del beneficio de cumplimiento en domicilio o lugar de trabajo (Salvamento de voto)</p> <p>PRESUNCION DE INOCENCIA-Alcance (Salvamento de voto)</p> <p><i>La presunción de inocencia, ha indicado la Corte, significa que la persona no puede ser considerada responsable, salvo que una sentencia condenatoria así lo indique. De ello se deriva que "el sindicado se presume inocente durante todo el desarrollo del proceso, ya que sólo mediante sentencia condenatoria se le puede considerar culpable", lo que excluye la posibilidad de que se prive a una persona de su derecho a obtener la libertad provisional, sobre la base de que su carácter de sindicado implique que va a volver a delinquir: "No puede, en consecuencia, el ejecutivo, desvirtuar la presunción de inocencia, interpretando la sindicación como índice de peligrosidad social y de culpabilidad individual."</i></p> <p>PRESUNCION DE INOCENCIA Y DETENCION PREVENTIVA-Compatibilidad (Salvamento de voto)</p> <p>PRESUNCION DE INOCENCIA Y PRINCIPIO DE LIBERTAD EN DETENCION PREVENTIVA-Verificación de vulneración (Salvamento de voto)</p> <p>PRESUNCION DE INOCENCIA EN DETENCION PREVENTIVA-Operancia como límite (Salvamento de voto)</p>
--	--

	<p>LIBERTAD PROVISIONAL EN JUSTICIA REGIONAL-Justificación de trato distinto (Salvamento de voto)</p> <p>JUSTICIA REGIONAL-Régimen especial de procesados (Salvamento de voto)</p> <p>LIBERTAD PROVISIONAL Y DETENCION PREVENTIVA-Sujeción de exequibilidad del régimen a la razonabilidad o criterios de decisión (Salvamento de voto)</p> <p>JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA Y JUSTICIA PENAL ORDINARIA-No vulneración de igualdad por tratamiento diferenciado de quienes son juzgados (Salvamento de voto)</p> <p>DETENCION PREVENTIVA-Término no puede ser igual al de condena (Salvamento de voto)</p> <p>DERECHO DE DEFENSA-Restricciones (Salvamento de voto)</p> <p>DERECHO DE DEFENSA EN ETAPA DE INSTRUCCION-Restricción desaparece en juzgamiento (Salvamento de voto)</p> <p>ETAPA DEL JUICIO-Ausencia de notificación del traslado para alegatos de conclusión se subsana en ésta (Salvamento de voto)</p> <p>TRIBUNAL NACIONAL-Concentración de competencia en segunda instancia (Salvamento de voto)</p> <p>JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Concentración de segunda instancia en un único Tribunal no vulnera el debido proceso (Salvamento de voto)</p> <p>SI DRES. ALFREDO BELTRÁN SIERRA, CARLOS GAVIRIA DÍAZ, JOSÉ GREGRIO HERNÁNDEZ GALINDO, ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO</p> <p>JUSTICIA ESPECIALIZADA-Permanencia de algunas instituciones propias de la regional (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>LEY ESTATUTARIA-Reforma mediante ley de la misma categoría (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>JUSTICIA REGIONAL-Normas excepcionales/LEY ORDINARIA-Improcedencia de prórroga de vigencia de normas especiales (Salvamento de voto y Aclaración de voto)</p> <p>LEY ESTATUTARIA-Regulación de la administración de justicia y modificación (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p>
--	--

	<p>JURISDICCION ESPECIAL-Creación por la Constitución (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>JURISDICCION ESPECIAL-Inconstitucionalidad de creación para ejercicio de función punitiva/JURISDICCION ORDINARIA-Ejercicio de función punitiva (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>JUEZ NATURAL-Legalidad del proceso (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>UNIDAD DE JURISDICCION-Parte integrante del debido proceso (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>JUEZ NATURAL-Garantía de realización del debido proceso y la igualdad (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>JUEZ ESPECIALIZADO-Inconstitucionalidad (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>ESTRUCTURA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Prohibición de modificación por ley ordinaria (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Creación por ley estatutaria (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO-Asignación de competencia a organismos de creación futura e incierta/DEBIDO PROCESO-Preexistencia del juez conforme a la ley/JUEZ-Preexistencia conforme a la ley (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>JUEZ DE CONOCIMIENTO-Trámite y decisión del proceso (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>JUEZ DE CONOCIMIENTO-Separación del proceso/JUEZ DE CONOCIMIENTO-Ejercicio de funciones libre de interferencias (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>CAMBIO DE RADICACION DE PROCESO PENAL-Trámite judicial (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>CAMBIO DE RADICACION DE PROCESO PENAL-Encargado de decidir (Salvamento y aclaración de voto)</p> <p>PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE RAMA JUDICIAL-Intromisión innecesaria del ejecutivo (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p>
--	--

	<p>DEBIDO PROCESO PUBLICO-Reserva de identidad de testigo (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>TESTIGO-Inconstitucionalidad de reserva de identidad y establecimiento de protección diferente (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>FISCAL-Inconstitucionalidad de reserva de identidad (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO PUBLICO-Identidad de funcionario/PROCESO PENAL-Identidad de funcionario/JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Identidad de funcionario (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>JURISDICCION ESPECIAL-Discriminación en tratamiento de sindicatos en relación con los demás (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>PRESUNCION DE INOCENCIA-Continuación privación de libertad por apelación de decisión judicial/PRESUNCION DE INOCENCIA-Prolongación indebida de privación de libertad (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>LIBERTAD PROVISIONAL EN PROCESO ANTE JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Duplicación de términos resulta discriminatorio (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>INFORMES DE POLICIA JUDICIAL-Inconstitucionalidad en cuanto a carencia de valor probatorio en todos los casos (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Inexistencia (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>JURISDICCION ESPECIAL A LA DE JUSTICIA ORDINARIA-Inconstitucionalidad y vulneración de Pacto y Convención Internacional (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUEZ-Asignación por ley (Salvamento de voto y aclaración de voto)</p> <p>SI DR. FABIO MORON DIAZ</p> <p>JUSTICIA REGIONAL-Temporalidad (Aclaración de voto)</p>
--	---

	<p>JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO Y FISCAL DELEGADO- Observancia del debido proceso (Aclaración de voto)</p> <p>ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DERECHO DE DEFENSA- Desaparición figura de fiscales o jueces sin rostro y testigos con reserva de identidad (Aclaración de voto)</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1267/00
Fecha de la sentencia	veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil (2.000).
Demandante	Eddy Lucía Rojas Betancourth y Franky Urrego Ortiz.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el párrafo del artículo 13 de la Ley 575 del año 2000 <i>“Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.”</i>
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Decision	Declarar EXEQUIBLE el párrafo del artículo 13 de la Ley 575 del año 2000, <i>“Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.</i>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Consideran los actores que el párrafo demandado viola el artículo 158 de la Constitución, por las siguientes razones :</p> <p>El artículo 158 de la Carta establece que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia. La Corte Constitucional ha señalado el sentido y los principios de la unidad de materia, en las sentencias C-025 de 1993, C-047 de 1994, C-055 de 1996, entre otras. Y ha dicho que para discernir cabalmente su contenido, las interpretaciones constitucionales constituyen fuentes obligatorias, sentencia SU-640 de 1998 de la Corte Constitucional.</p> <p>Señalan los demandantes que la conexidad entre el párrafo mencionado y el tema de la Ley 575 del 2000 no es clara ni razonable. La ley 575 se tituló <i>“por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996”</i>, Ley 294 que, a su vez, se expidió para desarrollar el artículo 42 de la Constitución, en aspectos relacionados con la violencia intrafamiliar. No hay, pues, ninguna relación entre el hecho de erigir a los Comisarios de Familia en funcionarios de carrera administrativa y el tema de la Ley. No encaja dentro de su título, ni guarda relación interna con el contenido global del articulado.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1372/00
Fecha de la sentencia	once (11) de octubre del año dos mil (2000).
Demandante	Jaime Durán Caballero
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 6, literal a) (parcial) de la ley 330 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las contralorías departamentales”
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Declárase INEXEQUIBLE la expresión “como encargado” del literal a) del artículo 6º de la ley 330 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En concepto del demandante, la norma transcrita, en el aparte acusado, desconoce los artículos 13, 25, 40, 53, y 272 de la Constitución. Las razones que esgrime el actor para sustentar su cargo, se pueden resumir de la siguiente forma:</p> <p>Si bien es cierto que el legislador está facultado para establecer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de ciertos cargos públicos, también lo es que no goza de absoluta autonomía para ejercer esta competencia, pues se encuentra limitado por los principios, valores y derechos fundamentales contenidos en la propia Constitución, como en los parámetros señalados directamente por el Constituyente, en relación con las inhabilidades para determinados servidores públicos. Es así como en relación con los contralores departamentales, el artículo 272 fija algunas de las inhabilidades para desempeñar este cargo, al tiempo que estableció que ningún contralor podría ser reelegido. Prohibición ésta que se constituye en una causal de inhabilidad.</p> <p>Sin embargo, el legislador adicionó esta causal, prohibiendo la elección para contralor departamental del ciudadano que en cualquier tiempo del período inmediatamente anterior a la elección, hubiese ejercido dicho cargo en calidad de encargado, equiparando la condición de éste con la del ciudadano que por elección y en propiedad, ha ejercido dicho empleo. Equiparación que resulta carente de razonabilidad y proporcionalidad, pues no existe razón que justifique que un ciudadano no pueda ser elegido</p>



	<p>contralor departamental, por haber ejercido temporalmente ese cargo en calidad de encargado en cualquier tiempo del período inmediatamente anterior.</p> <p>Se pregunta el demandante sobre la razón objetiva para que no pueda ser electo contralor departamental para el período inmediatamente siguiente, la persona que, por ejemplo, es encargada por tres días o un mes de una contraloría departamental en el primer año de los tres que constituyen el período de un contralor, cuando ninguno de los principios que rigen el ejercicio fiscal: transparencia, neutralidad, igualdad, entre otros, resultarían desconocidos por el hecho de la elección, como tampoco se desconoce el fundamento último de la prohibición de la reelección que contempla el Constituyente en el artículo 272, que no es otra que evitar la perpetuidad en el ejercicio de este cargo. Restricción ésta que, por el contrario, sí resulta desconociendo el derecho a desempeñar cargos públicos y el principio de igualdad, pues mientras un funcionario público del orden departamental o municipal puede aspirar a ser elegido contralor departamental, cuando hace dejación de su cargo un año antes de la elección, tal como lo impone la misma Constitución, a aquel que hubiese ejercido en calidad de encargado las funciones de contralor, se le aplica la inhabilidad sin tener en cuenta factor temporal alguno.</p> <p>Concluye el demandante “el legislador sobrepaso un causal diseñada por el Constituyente cual es la condición negativa de quien haya ejercido el cargo público en el respectivo departamento durante el año inmediatamente anterior a la elección. En efecto, en la norma acusada se amplía el año y puede convertirse en tres (período anterior) respecto de quien hubiere regentado “en encargo” durante ese lapso el destino de contralor.”</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1708/00
Fecha de la sentencia	doce (12) de diciembre de dos mil (2000).
Demandante	Luis Manuel Ramos Perdomo. Eduardo Carmelo Padilla Hernández.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 7°, 8°, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30 y 33, de la Ley 333 de 1996 y contra la Ley 365 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal” y “ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente.” que hacen parte de los incisos segundo y tercero del artículo 7° de la Ley 333 de 1996 y los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 27 ibídem, respecto de los cargos formulados en las demandas que se resuelven.</p> <p>Segundo.- ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-409 del 28 de agosto de 1997 en relación con la expresión “La Fiscalía General de la Nación la iniciará de oficio”, que hace parte del artículo 8° de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el vocablo “legítimos” contenido en el numeral 1° del artículo 12 de la Ley 333 de 1996 e INEXEQUIBLES las expresiones “por razones no atribuibles a su culpa o dolo” y “antes del fallo” que hacen parte parágrafo de la misma disposición.</p> <p>Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “hasta concurrencia del valor de aquellos” contenida en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Quinto.- ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-409 del 28 de agosto de 1997 en relación con las expresiones “Corresponderá a los funcionarios competentes para conocer de las actuaciones</p>

	<p>penales la declaración de extinción del dominio (..) y “Conocerán de la extinción del dominio los fiscales de la justicia regional en los asuntos penales de competencia y, en los demás casos la fiscalía adscrita a la unidad especializada, o la que determine el Fiscal General de la Nación.”, contenidas en el artículo 14 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Sexto.- ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-539 del 23 de octubre de 1997 en relación con las expresiones “Fiscal” y “cuando el trámite hubiere sido conocido por la fiscalía” que hacen parte de los literales a. y f. del artículo 15 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Séptimo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 17 y 18 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Octavo.- ESTESE A LO RESUELTO por la Sentencia C-539 del 23 de octubre de 1997 respecto del artículo 21 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Noveno.- ABSTENERSE de realizar pronunciamiento alguno respecto de los cargos formulados contra el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 333 de 1996, por vicios de forma, por caducidad de la acción.</p> <p>Décimo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “dolo o culpa grave” que hace parte del artículo 28 de la Ley 333 de 1996 con el entendido dado en el numeral 4.6, de la parte motiva de esta providencia.</p> <p>Undécimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley 333 de 1996.</p> <p>Duodécimo.- ESTESE A LO RESUELTO por la Sentencia C-539 del 23 de octubre de 1997 respecto del artículo 33 de la Ley 333 de 1996 - excepto su párrafo que no fue demandado y se declaró exequible en la Sentencia C-374 de 1997-.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Demanda instaurada por el ciudadano Luis Manuel Ramos Perdomo</p> <p>El ciudadano Luis Manuel Ramos Perdomo invoca la declaración de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 27 de la Ley 333 de 1996 porque considera que la disposición desconoce los</p>

	<p>artículos 2º, 29, 58 y 83 de la Constitución Política.</p> <p>Afirma que los cargos que formula contra la disposición en estudio se fundamentan en aspectos sustanciales y formales, los que se sintetizan como sigue:</p> <p>Sostiene que si el Estado decide averiguar la procedencia de los bienes que integran un patrimonio no puede hacer extensivos a dicha investigación los principios que rigen la investigación penal, porque al hacerlo quebranta el derecho de los titulares de dichos bienes a someterse a un debido proceso y su derecho a ser amparados con la presunción de inocencia.</p> <p>Aduce que como se trata de una acción real, su investigación no tiene carácter sancionatorio. Afianza este planteamiento con el argumento de que el artículo 30 de la misma ley permite al juzgador acudir a las disposiciones de los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Contencioso Administrativo, compatibles con su naturaleza y que en la exposición de motivos del Proyecto que le dio origen a la Ley se dijo al respecto:</p> <p>“Tal y como lo afirmo el ponente del proyecto, en su momento, Doctor Germán Vargas Lleras, "... el artículo 34, abre, es una enorme posibilidad para que a través de una figura novedosa, de naturaleza civil, tiene una connotación muy distinta (sic), si reformáramos el simple procedimiento penal para poderle dar curso a la misma, esa es una acción novedosísima, civil y cometeríamos un enorme error en el momento en que entendamos o la miremos o viéramos el efecto o la consideremos como una acción penal.....".</p> <p>Concluye que se trata de una acción real “ubicada dentro del ámbito del derecho civil” (...). Considera que los motivos de economía procesal que llevaron al Congreso Nacional a determinar que el implicado pueda atender en el mismo proceso su responsabilidad penal y lo concerniente al proceso de extinción del dominio, habida cuenta que algunas causales tienen que ver con conductas delictivas, no transforman la naturaleza de la acción, porque el trámite se dirige a determinar el origen de unos bienes y no la responsabilidad penal de su titular.</p> <p>Que como el artículo 27, en comento, es una de las disposiciones que conforman el procedimiento especial previsto para tramitar la</p>
--	---

	<p>acción de extinción de dominio, resulta inconstitucional el inciso segundo del mismo artículo, por cuanto dispone que en una investigación que no tiene naturaleza sancionatoria se adelante investigación preliminar, propia del proceso penal, debido a que los bienes incautados quedan a disposición del ente acusador vulnerando de manera directa el derecho de propiedad y el derecho al debido proceso.</p> <p>Que debido a la naturaleza real y civil de la acción de extinción de dominio la Ley 333 de 1996, la somete a un trámite especial - transcribe los artículos 15.-Del trámite-, 16.-Protección de derechos-, 17.-Del procedimiento-, - 18.-De la demanda-, 19.-De las medidas preventivas-, 20.-De la perentoriedad de los términos-, 21.-De la sentencia-, 22.-De la entrega-, 23. -De la persecución de bienes-; para concluir afirma que es evidente que el Congreso Nacional estableció un procedimiento especial con el objeto de “no someter a los afectados a la rigurosidad propia de un proceso penal”, pero que el inciso que controvierte, hace extensivos a un trámite de diferente naturaleza los principios propios del Procedimiento Penal, violando, ostensiblemente, el debido proceso y el derecho de defensa del investigado.</p> <p>Transcribe apartes de decisiones que dice son de esta Corporación, para afirmar que durante la etapa de la investigación previa se restringen las garantías del procesado, en razón de la necesidad de investigar la comisión de un delito cuya realización perjudicó a la sociedad, empero que tal restricción no quebranta el derecho del sindicado a su defensa porque terminada la investigación ese derecho se restituye plenamente. Aduce que como el procedimiento previsto para tramitar la acción de extinción de dominio carece de las garantías procesales propias del proceso penal, la suspensión de las mismas, dentro de la etapa de investigación previa, vulnera el artículo 29 constitucional y pone al investigado en desventaja, porque le restringe sus garantías procesales, como si se tratara de investigar la comisión de un delito y, terminada la etapa de investigación, no se las restablece.</p> <p>Para concluir este aparte de su demanda sostiene que el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 333 de 1996 es “típico del procedimiento penal y por tanto debe ser declarado inconstitucional ya que vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso de quien se encuentra vinculado a un proceso, por el ejercicio de la acción de extinción del dominio, teniendo en cuenta (sic.) que no corresponde a una acción penal.”</p>
--	---

	<p>Dice apoyarse en sendos pronunciamientos de esta Corporación, de los cuales trae apartes, relativos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la reserva dentro del proceso penal, para sostener que el debido proceso se constituye en pilar fundamental de los procedimientos judiciales, por cuanto las partes requieren estabilidad y seguridad en sus actuaciones y quien es investigado debe conocer que se lo investiga para poder contradecir lo que se le imputa, lo cual no se logra cuando se aplica a una acción que no tiene naturaleza sancionatoria, como la que se dirige a declarar extinguido el dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, los principios de la investigación penal, dentro de la cual la reserva es válida por los bienes sociales que se protegen.</p> <p>Se detiene en el artículo 58 constitucional y en el artículo 669 del Código Civil, para afirmar, que el derecho de propiedad faculta a las personas naturales y jurídicas, para usar y disponer de su derecho, todo ello con arreglo a las leyes que lo regulan y limitan. Empero, que la garantía constitucional respecto del mismo se condiciona a que el derecho de propiedad haya sido adquirido conforme a la ley, porque de haberse obtenido ilícitamente, el Estado, que en este caso esta representado por la Fiscalía, debe hacer uso de la acción para que pueda proceder, mediante sentencia, a declarar la extinción del patrimonio ilícitamente adquirido.</p> <p>Se apoya en las sentencias C-176-94, M.P. Alejandro Martínez Caballero, -revisión constitucional de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas” Ley 67 de 1993-, C-389-94 M.P. Antonio Barrera Carbonell, y otras no identificadas, de las cuales trae apartes, para concluir que el inciso segundo del artículo 27 de la ley en estudio desconoce el artículo 58 constitucional porque, en la etapa de la investigación previa, permite la incautación preventiva de los bienes del imputado, en aras de establecer si éstos provienen de actividades ilícitas, privando al titular del disfrute de los bienes que se presume adquirió en forma lícita y desconociendo la obligación del Estado de garantizarle el ejercicio de su derecho, hasta tanto no se dicte una sentencia que declare la procedencia ilícita de los mismos.</p> <p>Resalta el perjuicio que representa la anterior vulneración para el sistema económico porque si los bienes pueden ser incautados en cualquier momento, dentro de una investigación preliminar, sin conocimiento de su titular, así éste sea un tercero de buena fe ajeno a la investigación, se afecta sensiblemente el mercado debido a que se pierde la confianza y la seguridad que le son propias.</p>
--	--

	<p>Igualmente afirma que la norma controvertida desconoce el principio de la buena fe, para el efecto cita sendas providencias de esta Corporación de las cuales trae apartes.</p> <p>Para concluir advierte, previo análisis del trámite que el Proyecto de Ley cumplió ante el Congreso Nacional, que el inciso 2° del artículo 27 de la Ley 333 de 1996, en estudio, debe declararse inconstitucional por vicios de forma, porque i) el texto del artículo 41 -luego 27- del Proyecto de Ley 019 de 1996, no contemplaba el inciso segundo -demandado-, ii) se introduce el inciso en mención, por primera vez, en el texto final aprobado por el Senado de la República, empero, la disposición no aparece en el texto definitivo aprobado por la Cámara de Representantes.</p> <p>Así las cosas, conceptúa que con la expedición del inciso segundo de la Ley 333 de 1996 se desconocieron los artículos 157, 160 de la Constitución Política y 147 de la Ley 5a de 1992, porque la disposición en mención no tuvo la contradicción necesaria al no haberse discutido en los debates relativos a la adopción de la Ley, según se puede confirmar en las Gacetas del Congreso que reseñan su trámite.</p> <p>2. Demanda instaurada por el ciudadano Eduardo Carmelo Padilla Hernández</p> <p>El ciudadano Eduardo Carmelo Padilla Hernández considera que los artículos 7°, 8°, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 27, 28, 30 y 33, de la Ley 333 de 1996 desconocen los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 13, 14, 16, 29, 34, 58, 60, 83, 85, 90, 93, 94, 113, 114, 116, 121, 122, 123, 124, 136 N. 1°, 150 N° 1 y 2, 228, 229, 230, 249, 250, 251, 252 y 253 de la Constitución Política; el numeral 7° del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (Ley 74 de 1968) y el numeral 4° del artículo 8°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) por cuanto: i) asignan a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de la acción de extinción del dominio, sin reparar en que su competencia está circunscrita a la investigación de delitos y que como no le compete proferir sentencias no puede conocer del trámite o procedimiento previo, ii) quebrantan el núcleo esencial del debido proceso y el derecho a la igualdad, iii) limitan el monto de la reparación del daño causado, por la actuación judicial a que da lugar la acción de extinción del dominio, al valor de los bienes y</p>
--	---

	<p>exigen la demostración del dolo o de la culpa grave del funcionario, iv) imponen una sanción de “aplicación prospectiva, restrictiva y específica y v) debido a que la demanda que da inicio al trámite de la acción de extinción del dominio no requiere relacionar los fundamentos de derecho.</p> <p>Así planteada su inconformidad sostiene que las disposiciones demandadas quebrantan el Preámbulo de la Constitución Política, del cual se desprende la unidad de la Nación y el respeto de los derechos fundamentales, el artículo 1° porque desconocen los principios que inspiran el Estado social de derecho, el artículo 2° en cuanto garantiza los principios, derechos y deberes que la misma normatividad consagra, el artículo 3° de conformidad con el cual la soberanía dimana el poder público, el artículo 4° que le otorga primacía a las disposiciones constitucionales, el artículo 5° del cual se deriva la primacía de los derechos fundamentales, el artículo 6° según el cual los particulares son responsables por infracción de la Constitución y de la Ley y los servidores públicos, además, por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, los artículos 13, 14 y 16 que consagran la igualdad real y efectiva y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el artículo 29 el cual dispone, dentro de las reglas del debido proceso, el derecho a ser juzgado por un juez natural, no permite aplicar una sanción por la ejecución de un supuesto de hecho que a tiempo de su realización no estaba proscrito y excluye la aplicación de leyes intemporales que implican el establecimiento de penas perpetuas, el artículo 34 de conformidad con el cual la extinción del dominio debe decretarse mediante sentencia judicial, el artículo 58 que impide la aplicación de una norma a situaciones jurídicas consolidadas porque se desconocerían los derechos adquiridos, el artículo 60 por cuanto es deber del Estado promover el acceso a la propiedad y no negarla en forma arbitraria, el artículo 83 que ordena presumir la buena fe, el artículo 113 que dispone la separación de las ramas del poder público, el artículo 116 que determina quienes administran justicia, el artículo 250 en cuanto asigna funciones precisas a la Fiscalía y “excluye la competencia de las que no son delictivas” y los artículos 113, 114, 116, 121, 122, 123, 136 N° 1°, 150 N° 1 y 2, 228, 229, 230, 249, 250, 251, 252 y 253, de conformidad con los cuales el Congreso Nacional debe respetar la división funcional del poder público, le está prohibido inmiscuirse en asuntos de competencia constitucional de otras autoridades y en particular en los atribuidos a la Rama Judicial, todo empleo público tendrá funciones detalladas en la ley, la administración de justicia es función pública con decisiones independientes, toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia, los jueces están sujetos al imperio de la ley y la Fiscalía General de la Nación no puede conocer sino de los asuntos expresamente confiados por la Constitución. Arguye</p>
--	--



	<p>además que en consonancia con las anteriores disposiciones se quebrantan los artículos 14 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos -Ley 74 de 1968- y 8° de la Convención Americana -Ley 16 de 1972-.</p> <p>Para fundamentar sus cargos el actor sostiene:</p> <p>1. Que entre “los artículos 7°, inciso segundo y tercero, 8°, 14, inciso 3°, 15, literal a) y 27, en cuanto asignan la competencia a la Fiscalía General de la Nación para iniciar y culminar la extinción de dominio”, existe unidad normativa por cuanto considera contrario a la Constitución Política asignarle a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de asuntos que, por su naturaleza, son extraños a la acción y a la responsabilidad penal y que no es dable atribuirle a dicha instancia la competencia de un asunto que debe culminar con sentencia, teniendo en cuenta que los fiscales, por no ser jueces, no la pueden proferir. Al respecto afirma:</p> <p>a) Que el ordenamiento constitucional divide el poder público en las Ramas Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional confiriendo competencias constitucionales precisas, en virtud de las cuales cada una ejerce funciones separadas, aunque colaboren armónicamente en la realización de los fines del Estado.</p> <p>Estima que la función jurisdiccional está confiada a los organismos enunciados en el artículo 116 de la Constitución Política, a los cuales, el artículo 113 ibídem, les asigna una competencia constitucional que no puede ser alterada, modificada o desconocida por el Organo Legislativo. Encuentra que dicha asignación fue corroborada por esta Corporación, en Sentencia C-174 de abril 12 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero, de la cual trae apartes.</p> <p>Recuerda que a la ley le corresponde el desarrollo concreto de las normas sobre competencia, como también dictar las normas procesales y modificarlas -artículos 29 y 150 numeral 1° C.P.-, atribución que, a su juicio, no implica la potestad de asignar funciones incompatibles o disímiles porque toda facultad emanada del Ordenamiento Superior debe desarrollarse en armonía con los demás disposiciones constitucionales -artículos 113 y 116 C.P.-; de tal manera que encuentra contrario a dichos preceptos asignarle a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de una acción civil como la de extinción del dominio. Para fundamentar su apreciación asimila la competencia que controvierte con la eventual asignación, a la misma entidad, del conocimiento de conflictos derivados de</p>
--	---

	<p>relaciones laborales o de asuntos patrimoniales y de la posible atribución al juez civil para el juzgamiento de conductas delictivas.</p> <p>Dice apoyarse en las sentencias T-431/92, C-105/93, T-450/93, C-250/94, C-351/94, C-394/94, C-416/94, C-418/94, T-465/94, T-190/95, T-347/95, C-078/97, C-407/97, C-411/97 y T-502/97, para afirmar que, no obstante el amplio poder de configuración normativa, que esta Corporación le ha reconocido al Organo Legislativo, la facultad de asignar competencias entre los diferentes organismos que integran la Rama Judicial debe guardar coherencia con las disposiciones constitucionales (Arts 113 y 116 C.P.) y respetar los principios constitucionales de igualdad, debido proceso y garantía de acceso a la administración de justicia.</p> <p>Resalta que aunque la Fiscalía General de la Nación es parte de la Rama Judicial, la Constitución Política -artículos 250 y 252- y “la doctrina constitucional”, les han confiado a sus integrantes funciones especiales, que por ello no se les puede asignar el conocimiento de asuntos no comprendidos en dichas disposiciones, ni siquiera durante los estados de excepción.</p> <p>Para concluir sostiene que de conformidad con jurisprudencia reiterada de esta Corporación, de la cual trae apartes -C-374/97, C-409/97 y C-539/97, “la Corte estima la extinción del dominio como un aspecto distinto del delito y, si ello es así, la Fiscalía General de la Nación, constitucionalmente carece de competencia y atribución para la investigación de cuestiones extrañas al delito y, en cuanto, los textos acusados, se la asignan, resultan violatorios de la preceptiva constitucional (..)”.</p> <p>Se detiene en el artículo 21 de la Ley para afirmar que “es violatorio de la Constitución Política, porque desconoce los derechos de los titulares y terceros de buena fe, el derecho de crédito, el derecho de hipoteca y de prenda, los derechos reales accesorios desmembrados, la estabilidad y seguridad de las relaciones jurídicas contractuales e igualmente la competencia de la jurisdicción penal, la cual, no puede extenderse a aspectos diferentes del delito y menos a la definición de la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los contratos y, tampoco, a decretar la venta en pública subasta de los bienes, respecto de los cuales recaen los derechos reales accesorios desmembrados y la garantía legítimamente constituida, cuando se concluye su eficacia o licitud.”</p>
--	---

	<p>b) Que se quebranta el artículo 34 constitucional al disponer que la acción de extinción del dominio pueda ser conocida por una autoridad que no es Juez de la República, en virtud de la “necesidad de unidad y coherencia de la materia atribuida a cada organismo de la Rama Judicial, el respeto de la plenitud de las formas, el debido proceso y el derecho de defensa, puede asignar el conocimiento de un asunto a funcionarios que constitucionalmente carecen de la competencia para proferir las decisiones inherentes al mismo y, en consecuencia, cercenar la atribución de aquellos que si tienen esta competencia, para reducirla y plasmarla de manera residual.”.</p> <p>Sostiene que la sentencia, “implica un pronunciamiento definitivo y sólo pueden proferirse por los jueces competentes como conclusión del trámite o procedimiento conocido por éstos. El debido proceso, implica necesariamente, el juez natural, esto es, aquel que de acuerdo con la estructura política del Estado, tenga el poder, la facultad, atribución, función y competencia de iniciar y concluir el procedimiento mediante una decisión sobre el fondo del asunto. Así, se desprende del contenido racional y teleológico del preámbulo de la Constitución Política, de sus artículos 2, 29, 128, 116, 128, 228 y 229.”</p> <p>Para concluir este primer aparte de su exposición hace un recuento de los cargos considerados y de las decisiones tomadas en las diferentes sentencias en las cuales esta Corporación ha estudiado la constitucionalidad de la Ley 333 de 1996, con respecto de la competencia que la ley asigna a la Fiscalía General de la Nación, para sostener que dichas decisiones permiten a la Corporación pronunciarse sobre los cargos que ahora se formulan porque tienen efecto de cosa juzgada relativa.</p> <p>2. El actor considera que las normas demandadas quebrantan el núcleo esencial del debido proceso y el derecho a la igualdad. Respecto del primer cargo afirma:</p> <p>a) Que las disposiciones desconocen el debido proceso porque éste exige la existencia de una ley previa a la comisión del hecho punible que lo tipifique como tal, el conocimiento del proceso por el juez natural, el respeto a las formas propias del juicio, el derecho a un juicio previo a la condena, la aplicación de la ley más favorable, el derecho de defensa y contradicción, la publicidad del proceso, la posibilidad de interponer recursos y el principio de la doble instancia, el principio de non bis idem, la nulidad de pleno derecho de las pruebas ilegales, la reformatio in pejus, el derecho a no</p>
--	---

	<p>declarar contra sí mismo, la cosa juzgada y, en general, la sujeción al principio de legalidad. Y que el “El artículo 93 de la Constitución Política estatuye la primacía de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso en materia de derechos humanos y, el artículo 94, ibídem, establece el carácter enunciativo de los dispuestos en aquella y en éstos, los cuales, no se entenderán "como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”.</p> <p>Respecto del párrafo del artículo 12 conceptúa que se quebranta el artículo 29 de la Constitución Política si se condiciona la intervención del implicado, que no compareció oportunamente al proceso, a que la omisión no le sea atribuible a dolo o culpa.</p> <p>b) Que la ley en estudio contiene disposiciones que, en apariencia, protegen los derechos de las partes y de los terceros -las cuales cita-, pero que el numeral 1° del artículo 12 “al referirse a los titulares "legítimos" es manifiestamente contrario a la Constitución Política, desconoce el principio de igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Política, en la medida que todas las personas son iguales ante la ley y, todas gozan de la misma protección de las autoridades y de sus derechos (..),”</p> <p>Además estima que los artículos 17 y 30 de la Ley 333 de 1996 desconocen los derechos del debido proceso e igualdad, porque limitan la aplicación de las normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal, Civil y Contencioso Administrativo a los aspectos no contemplados en la Ley, circunstancia que implica un trato “injustificado, arbitrario y lesivo” para quienes se deben someter a dicho procedimiento.</p> <p>Se apoya en las sentencias C-543/92, T-001/93, T-458/94, C-632/95, y T-158/96, de esta Corporación, de las cuales trae apartes, para afirmar que el principio del debido proceso, se concreta en el asunto en estudio así: i) las causales por las cuales procede la acción de extinción del dominio son de aplicación restrictiva y conciernen a conductas delictivas, por ende el delito del que pende la extinción, debe estar plenamente demostrado, ii) no se podrá intentar la acción de extinción del dominio sin la previa declaración, por sentencia penal ejecutoriada, de las conductas delictivas en las cuales se sustenta. “Por ello, la iniciación de la extinción mientras esté en curso el proceso penal, esto es, mientras no haya concluido mediante providencia ejecutoriada, transgrede el derecho del debido proceso,” iii) no puede iniciarse ni proseguirse, ni tramitarse, en forma simultánea, actuación de extinción del dominio por los mismos hechos y respecto de los mismos bienes, iv)</p>
--	--

	<p>corresponde al Estado la demostración de las conductas y el dolo o culpa grave de los terceros adquirentes, iv) la investigación debe comprender los aspectos favorables y desfavorables v) el trámite de extinción, de oficio o por presentación de la demanda, se inicia con providencia interlocutoria indicativa de los hechos, bienes y pruebas pertinentes, sin que pueda iniciarse con base en anónimos ni basarse en imputaciones genéricas, vi) debe notificarse personalmente la providencia que da inicio a la actuación y vii) las partes pueden utilizar los mecanismos de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico, sin limitación.</p> <p>Concluye este aparte de la demanda afirmando que el debido proceso impone: i) que el juez que da inicio al trámite debe dictar la sentencia que corresponda, ii) que todas las causales que dan origen a la acción de extinción del dominio están vinculadas con hechos delictivos, iii) que declarada la ausencia material o la inocencia del imputado, respecto de alguna de estas conductas, no podrá promoverse actuación penal ni de extinción por los mismos hechos, iv) que no se pueden iniciar varias actuaciones simultáneas de extinción del dominio, v) que la acción de extinción del dominio no se puede sustentar en pruebas ilegalmente recogidas vi) que no es procedente mantener indefinidamente al ciudadano y a sus bienes o derechos vinculados a causas de extinción de dominio, vii) que en la providencia que da inicio al proceso se debe indicar la causal o causales en las que se funda, individualizar los bienes respecto de los cuales se promueve y relacionar las pruebas, viii) que los titulares de los derechos controvertidos, causahabientes y terceros deben ser notificados personalmente desde la iniciación del trámite, ix) que al Estado le corresponde demostrar el dolo o la culpa grave del afectado y x) que se debe respetar el ejercicio del derecho de defensa, por ello considerada que las disposiciones controvertidas debe excluirse del ordenamiento jurídico.</p> <p>3. Acusa de inconstitucionalidad parcial los artículos 13 y 28 de la Ley 333 de 1996, por violación de los artículos 13 y 90 de la Constitución Política, en cuanto, a su juicio, limitan el monto de la reparación del daño causado, al titular de los bienes cuyo dominio se ha extinguido, al valor de éstos y disponen que la reparación de los perjuicios sufridos por la actuación judicial requiere la demostración del dolo o de la culpa grave del funcionario.</p> <p>Aduce que resulta violatorio del principio de igualdad ordenar que el perjuicio ocasionado con la acción de extinción del dominio se limite al valor del bien, al igual que ordenar una reparación parcial de los daños causados y considera que se quebranta la obligación</p>
--	---

	<p>del Organo Legislativo de determinar la responsabilidad de los servidores públicos y hacerla efectiva, con sujeción a la Constitución, por cuanto asegura que ésta, en ningún caso, limita la reparación del daño al valor de los bienes extinguidos ni exige la demostración del dolo o de la culpa grave del funcionario.</p> <p>4. Sostiene que, al tenor del artículo 1° de la Ley 333 de 1996, la extinción del dominio consiste en la “pérdida” del derecho, sin contraprestación ni compensación alguna, por las causales relacionadas en el artículo 2º, a su juicio descriptivas de conductas delictivas. Por ende concluye que se trata de una sanción de “aplicación prospectiva, restrictiva y específica”.</p> <p>Para fundamentar su afirmación, relativa a la imposibilidad de extinguir el dominio aplicando retroactivamente una disposición, se apoya en salvamentos de voto a la Sentencia C- 374/97 de los magistrados Jorge Arango Mejía y Carlos Gaviria Díaz -de los cuales trae apartes-, para afirmar que:</p> <p>“Constituyendo la extinción del dominio la "pérdida" del derecho y, por ende, una "sanción", no existe en el mundo jurídico actual concepción doctrinaria o jurisprudencial que postule la aplicación de la sanción hacía el pasado cuando no existía la norma que la consagraba y, por tanto, sus supuestos fácticos necesarios para la aplicación de la consecuencia descrita en ella”.</p> <p>Hace referencia a la decisión de esta Corporación, de conformidad con la cual la extinción del dominio no constituye una “sanción penal”, para distinguir su cargo, puesto que asegura que éste pretende obtener un pronunciamiento de la Corporación en relación a la acción como “simple sanción”, porque considera que “nunca puede ser objeto de aplicación retroactiva y menos retrospectiva, porque, las sanciones presuponen una ley preexistente, una tipicidad legal expresa, restrictiva y no son ni pueden ser aplicables intemporalmente.” Agrega que, en la Sentencia C-374 de 1997 -trae apartes- esta Corte aplica un criterio “tan flexible (..) para aplicar una sanción antes del hecho que la genera y determina (..), no resiste, en verdad, un cuestionamiento serio y profundo.”.</p> <p>5. Acusa al artículo 18 de la Ley 333 de 1996 de quebrantar los artículos 1°, 2°, 13, 29, 58, 93 y 228 de la Constitución Política y los artículos 14, numeral 7 del Pacto Internacional del Derechos Civiles</p>
--	---

	<p>y Políticos de las Naciones Unidas y 80, numeral 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.</p> <p>Para sustentar su cargo sostiene que la acción de extinción del dominio es una “acción judicial atípica o sui generis”, regulada en su estructura básica por la Ley 333 de 1996 y por una normatividad complementaria, constituida por tres ordenamientos disímiles - Códigos de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo. Por lo anterior conceptúa, “se trata de una acción real, como en derecho civil, por hecho derivado de un delito, como en derecho penal, que tiene al Estado como parte, como en derecho administrativo”. Circunstancia que, a su juicio ha desconcertado su práctica y exige la intervención de esta Corporación, “para dar claridad sobre el punto”.</p> <p>Agrega que el artículo en comentario no dispone que la demanda que da inicio al trámite de la acción de extinción del dominio debe contener los fundamentos de derecho, omisión que considera violatoria de un verdadero Estado social de derecho, la vigencia de un orden justo, la igualdad, la propiedad privada, el debido proceso, los pactos internacionales y, en especial de la primacía de lo sustancial sobre lo formal en la administración de justicia, por cuanto, en los términos del artículo 228 constitucional, la acción de extinción del dominio solo podría iniciarse mediante una demanda “sustancial” que dé cuenta de los motivos de fondo, para que el demandado conozca porqué se debe defender.</p> <p>En subsidio de un fallo de inexequibilidad absoluta, solicita, con respecto del artículo 18 en estudio, la declaración de constitucionalidad condicionada, en el entendido de que la demanda que pretende la extinción del dominio deberá incluir “los fundamentos de derecho, en forma precisa, clara y motivada.”.</p> <p>Para concluir se refiere a la aplicación de la cosa juzgada constitucional realizando un recuento de las sentencias proferidas por esta Corporación para decidir respecto de las demandas de inconstitucionalidad presentadas, hasta la fecha de la demanda, contra la Ley 333 de 1996. Y solicita la intervención de la Corporación, con miras a que con un correcto entendimiento de las disposiciones en estudio, se impidan los abusos cometidos por las autoridades en las actuaciones a que da lugar la acción de extinción de dominio.</p>
--	---

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DRES. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, CARLOS GAVIRIA DIA, ALFREDO BELTRAN SIERRA, ALFREDO BELTRÁN SIERRA, JAIRO CHARRY RIVAS, CARLOS GAVIRIA DÍAZ, JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO</p> <p>ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, MARTA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, CRISTINA PARDO SCHLESINGER, ALVARO TAFUR GALVIS</p> <p>EXTINCION DE DOMINIO-Naturaleza (Aclaración de voto)</p> <p>Aunque nuestro voto coincide con la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte en el proceso de la referencia, consideramos oportuno manifestar en esta oportunidad que los suscritos Magistrados nos vemos precisados a aclararlo, en razón de los argumentos expuestos en el salvamento de voto a la Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, que resolvió la demanda presentada por distintos ciudadanos contra algunos preceptos de la ley 333 de 1996 “por la cual se establecen las normas sobre extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita”. Ello, por cuanto discrepamos, como allí se dijo, de la naturaleza jurídica que se le ha pretendido dar a la extinción de dominio y por cuanto, de la misma manera, se desconocen las garantías procesales consagradas en el ordenamiento constitucional, por las razones que allí se expusieron.</p>
	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-432/00
Fecha de la sentencia	doce (12) días del mes de abril del año dos mil (2.000).
Demandante	María Teresa Pardo Plata
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 21 (parcial) de la ley 344 de 1996, <i>"Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones."</i>
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 21 de la ley 344 de 1996 "por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones"</p> <p>Segundo: Declarar INEXEQUIBLES los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 21 de la ley 344 de 1996, y la expresión "o con fundamento en ingresos calculados sin atender lo establecido en el presente artículo", contenida en el párrafo 2º del mismo artículo.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Manifiesta la actora que la norma, en lo demandado, viola el artículo 151 de la Constitución, pues el legislador modificó el artículo 69 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ley 179 de 1994, y, según la disposición constitucional, el legislador debe sujetar, en esta materia, el ejercicio de su actividad, a lo dispuesto en normas de tal naturaleza. Explica así sus razones:</p> <p>"El artículo 21 de la ley 344 de 1996 contraría lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 179 de 1994 porque establece que la programación presupuestal de las instituciones prestadoras de salud y de las Empresas Sociales del Estado del orden Nacional o territorial, se realizará proyectando los recursos que se espera recaudar por concepto del valor de los servicios producidos, a las tarifas que determine el Gobierno Nacional ... mientras que la segunda norma dispone que esa programación se hará bajo un régimen de presupuestación (sic) basado en eventos de atención debidamente cuantificados, según la población que vaya a ser atendida.</p>

	<p>"En este orden de ideas, la norma acusada viola el precepto constitucional contenido en el artículo 151, toda vez que esta disposición establece que las normas sobre presupuesto deben sujetarse a la Ley Orgánica de Presupuesto, es decir ésta condiciona la expedición de otras leyes sobre la materia.</p> <p>"Esto quiere decir que el artículo 21 de la ley 344 de 1994 contraría el mandato constitucional referido, porque no se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto.</p> <p>"Sumado a lo anterior, la manera como debe realizarse la programación presupuestal de conformidad con la norma demandada, tiene un impacto negativo tal que hace que los Hospitales públicos no puedan atender a sus usuarios por falta de recursos. Es absurdo que la presupuestación (sic) dependa de los pagos le hagan a estas entidades por concepto de venta de servicios, cuando es de público conocimiento que hay morosidad en los mismos por parte de las diferentes aseguradoras, generando a su vez limitaciones para la adquisición de insumos necesarios en una adecuada prestación de servicios a cargo de las Instituciones Prestadoras de Salud.</p> <p>"Lo anterior lleva a dichas instituciones a serias dificultades de liquidez financiera, imposibilitando el cumplimiento de los pagos a sus proveedores y además ocasionando una deficiente prestación de sus servicios, y lo que es más grave, atentando contra los derechos que consagró nuestra Constitución Política como fundamentales, y por ende contra la filosofía del Estado social de derecho."</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-795/00
Fecha de la sentencia	junio veintinueve (29) de dos mil (2000).
Demandante	Gabriel Vanegas Torres
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7, numeral 2, parcial, de la Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 (1), y la Ley 3ª de 1991(2) y se dictan otras disposiciones”.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Decision	
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Para el demandante la norma acusada viola el Preámbulo y los artículos 1, 2, 7, 9 inciso primero, 13, 93, 286, 287, 288, 329, 330 y 333 inciso quinto, de la Constitución Política.</p> <p>Considera el demandante que se conculcan los valores y principios consagrados en el Preámbulo de la Carta, porque no se debe involucrar a los pueblos indígenas en un proceso de ordenamiento territorial y urbano y, dejarlos bajo las directrices de los departamentos sin que previamente se encuentren conformadas y definidas sus entidades territoriales, a través de una ley orgánica que establezca las competencias entre las comunidades indígenas y las demás entidades territoriales. Por ello, hasta tanto no se expida la ley orgánica que exige la Constitución, los pueblos indígenas estarán en condiciones de desigualdad frente a los departamentos y municipios, como quiera que no cuentan con reglas claras sobre su posición y situación dentro de los procesos de descentralización y ordenamiento territorial que en la actualidad se desarrollan en el país.</p> <p>Así pues, dadas las particularidades de los pueblos indígenas, su cosmovisión, sus principios, valores y derechos constitucionales, necesitan de un espacio y un tiempo especial para el ordenamiento territorial, que corresponda a su propia dinámica y a los planes de vida de sus pueblos.</p> <p>Manifiesta el demandante, que las acciones urbanísticas sobre el</p>

	<p>suelo, que pretende desarrollar la Ley 388 de 1997, acarrear intervenciones, acciones y políticas sobre la utilización y explotación de los recursos naturales y del suelo desde la óptica urbana y, bajo las perspectivas de la teoría de desarrollo que tiene la sociedad “mayoritaria”, pero no involucra las perspectivas y visión que sobre el suelo, los recursos naturales y el desarrollo tienen los pueblos indígenas, así las cosas, se viola el Estado Social de Derecho que rige el Estado Colombiano, en la medida, en que no se les permite su participación mediante una reglamentación adecuada que consulte sus intereses como grupo social diferenciado.</p> <p>Añade el actor, que la norma acusada, también pone en peligro la diversidad étnica y cultural de la Nación, por cuanto la integración que se pretende dar a los planes de ordenamiento territorial indígena, desconoce las garantías de respeto a las proyecciones y concepciones que sobre desarrollo tienen los pueblos indígenas, que por lo demás, se encuentra centrada en los derechos colectivos, en el derecho a la tierra y, a los recursos históricos, así como, a la organización cultural autónoma y a la identidad cultural.</p> <p>Siendo ello así, el Congreso de la República, muestra un manejo facilista al asunto indígena, al no expedir previamente la ley orgánica de ordenamiento territorial, lo que genera una desigualdad frente a las demás entidades territoriales, porque el trato normativo de los territorios indígenas no se puede realizar a través de una ley general y ordinaria, como la demandada, sino que requiere una reglamentación específica y concertada.</p> <p>De la misma manera, considera el actor, que el Gobierno Nacional, no ha cumplido con la obligación de consultar a los pueblos indígenas el contenido de la Ley 388 de 1997, violando el artículo 93 del Estatuto Superior y, el Convenio 169 de la OIT.</p> <p>Finalmente, agrega el demandante, que la ley acusada no delimita la libertad económica de los proyectos de ordenamiento territorial de los departamentos y municipios en los territorios indígenas y, para ese tipo de acciones, tales como la explotación económica de recursos naturales y la utilización del suelo, es preciso tener claridad sobre el manejo económico de esos recursos y, adicionalmente, bajo qué límites y condiciones se explotará la biodiversidad de esos territorios y quiénes serán los beneficiados; en tanto esto no se aclare y delimite, se está contrariando la obligación constitucional y los principios de justicia material que pone límites a la autonomía de la voluntad en el manejo y explotación del medio ambiente.</p>
--	---

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. ALFREDO BELTRÁN SIERRA VLADIMIRO NARANJO MESA</p> <p>RESERVA DE LEY ORGANICA-Interpretación amplia podría vaciar competencia de legislador ordinario (Salvamento de voto)</p> <p>Cada una de las leyes orgánicas de que trata el artículo 151 Superior, debe ser objeto de una detallada y cuidadosa limitación, en el entendido de que una interpretación muy amplia del ámbito que se reserva a las leyes orgánicas, podría vaciar la competencia del legislador ordinario y, en esa medida, restringir el principio democrático que orienta el Estado Social de Derecho que nos rige.</p> <p>AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES (Salvamento de voto)</p> <p>PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-Objetivos (Salvamento de voto)</p> <p>La elaboración de planes y programas de índole socio-económico que tiendan al bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos que hacen parte de una determinada porción del territorio de la Nación, con el propósito de optimizar los recursos existentes, elevar las condiciones de vida, estimular la actividad creadora del individuo, son objetivos que se pueden alcanzar mediante procesos de planificación, los cuales, en relación con la organización territorial, no pueden realizarse sin los parámetros que fija el Estado y, los fines que se pretenden.</p> <p>DERECHO A LA INTEGRIDAD DE COMUNIDAD INDIGENA-Preservación (Salvamento de voto)</p> <p>PARTICIPACION DEMOCRATICA EN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Salvamento de voto)</p> <p>DERECHO DE PARTICIPACION DE COMUNIDAD INDIGENA-Efectividad (Salvamento de voto)</p> <p>COMUNIDAD INDIGENA-Autonomía (Salvamento de voto)</p> <p>La autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas, entendida como la capacidad para gobernarse y ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito de su territorio, puede ser ejercida de conformidad con sus costumbres, siempre y cuando éstas no sean contrarias a la Constitución y a la ley, tal como lo disponen los artículos 246 y 330 de la Carta, pues, en relación con las comunidades indígenas, la propia Constitución consagra un</p>

	<p>régimen de conservación de la diversidad dentro del marco de la unidad.</p> <p>Con el debido respeto por las decisiones de la Corte, en relación con lo resuelto en la Sentencia C-795 de 29 de junio de 2000, mediante la cual se declaró inexecutable el artículo 7º de la Ley 388 de 1997, los suscritos magistrados salvamos nuestro voto, por las razones que a continuación se expresan:</p> <p>1ª. La Ley 388 de 1997, por medio de la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991, establece en su artículo 7º la distribución de competencias en materia territorial y, en el numeral 2º acusado parcialmente, atribuye al nivel departamental la elaboración de las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio.</p> <p>Teniendo en cuenta, que la reserva de ley orgánica se vulnera, en el evento en que una ley ordinaria entre a regular materias que por disposición de la Constitución Política corresponden al trámite de una ley orgánica, se impone, como cuestión previa al análisis de la disposición acusada, determinar si ésta, debió ser objeto de regulación mediante una ley orgánica.</p> <p>La Constitución Política, en sus artículos 151 y 288, establece que las leyes relativas al ordenamiento territorial y su distribución de competencias, ostentan la categoría de leyes orgánicas. Sin embargo, como lo ha dicho esta Corporación, cada una de las leyes orgánicas de que trata el artículo 151 Superior, debe ser objeto de una detallada y cuidadosa limitación, en el entendido de que una interpretación muy amplia del ámbito que se reserva a las leyes orgánicas, podría vaciar la competencia del legislador ordinario y, en esa medida, restringir el principio democrático que orienta el Estado Social de Derecho que nos rige.</p> <p>En efecto, en sentencia C-894 de 1999, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo lo siguiente: “A juicio de la Corte, en aquellos casos en los que resulte verdaderamente insuficiente la aplicación de los criterios hermenéuticos utilizados para identificar si una determinada materia tiene reserva de ley orgánica, la duda debe resolverse a favor del legislador ordinario. El aserto anterior se explica a partir de dos argumentos fundamentales. En primer lugar, la cláusula general de competencia se encuentra constitucionalmente adscrita al legislador ordinario y, por lo tanto, las cuestiones sometidas al legislador orgánico o estatutario deben ser objeto de interpretación restrictiva. En segundo término, -y en estrecha relación con el argumento anterior-, las leyes especiales constituyen un límite al proceso democrático al establecer mayorías cualificadas”.</p>
--	---

	<p>Señala el demandante que hasta tanto el Congreso no expida la correspondiente ley orgánica no se pueden establecer competencias a través de una ley ordinaria. No obstante, como lo ha señalado esta Corporación de acuerdo con la Constitución Política el contenido de la ley orgánica de ordenamiento territorial corresponde definirlo al legislador sobre las materias que al efecto señala la Constitución. Entonces, cabe preguntarse en el caso sub examine, si la distribución de competencias que realiza la norma acusada debe ser objeto de regulación mediante una ley orgánica o, si por el contrario, la disposición acusada puede estar contenida en una ley ordinaria.</p> <p>La respuesta en este caso, es que sí puede hacer parte de una ley ordinaria. En efecto, la Ley 388 de 1997, modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991, leyes ordinarias, mediante las cuales se reguló la problemática en el manejo de la tierra urbana, así como el uso del suelo; igualmente se reglamentaron los mecanismos para garantizar el acceso a la tierra, con el objeto de habilitar los terrenos ociosos o mal utilizados, y poder destinarlos a otro tipo de actividades más útiles al conglomerado social.</p> <p>Así las cosas, el artículo 7, numeral 2º, otorga al nivel departamental competencias para elaborar directrices y orientaciones, adopción de planes y programas para el desarrollo de la totalidad de su territorio o de porciones específicas de éste, en aras de establecer una adecuada planificación que abarque tanto las dimensiones urbana y rural, de manera que se puedan determinar las metas y, los instrumentos para alcanzarlas.</p> <p>Siendo ello así, a juicio de los suscritos magistrados, las competencias que se le asignan al nivel departamental, no son de aquellas que deben ser reserva de una ley orgánica, por cuanto, como lo ha dicho esta Corporación, “esta legislación orgánica toca con la estructura territorial y la organización de los poderes públicos en función del territorio, por lo cual, en principio, deben formar parte de ella la definición de las condiciones y requisitos de existencia de las entidades territoriales y de ciertas divisiones administrativas del territorio...” Sent. C-600 A de 1995, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero.</p> <p>2ª. En cuanto hace referencia a la acusación que se formula por el demandante y que se acoge por la Corte, según la cual los apartes del numeral 2 del artículo 7 de la Ley 388 de 1997, implican un desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como quiera que las acciones urbanísticas que pretende desarrollar la ley mencionada implicarían intervenciones, acciones y políticas sobre la explotación de los recursos naturales y del suelo, sin tener en</p>
--	---

	<p>cuenta, la perspectiva y visión que sobre estos aspectos tienen los pueblos indígenas.</p> <p>Sea lo primero señalar, que Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de las entidades territoriales (art. 1 C.P.), lo cual tiene una gran significación, por cuanto, las entidades territoriales cuentan con derechos y competencias propias que deben ser protegidos, dentro del marco de una república unitaria.</p> <p>Ahora bien, el objeto del ordenamiento del territorio municipal y distrital, no es otro, como lo señala la misma Ley 388 de 1997, que complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, de manera que se racionalicen las intervenciones sobre el territorio y se oriente en debida forma su desarrollo, con el propósito de una integración social que conduzca a un desarrollo armónico.</p> <p>Por lo tanto, la elaboración de planes y programas de índole socio-económico que tiendan al bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos que hacen parte de una determinada porción del territorio de la Nación, con el propósito de optimizar los recursos existentes, elevar las condiciones de vida, estimular la actividad creadora del individuo, son objetivos que se pueden alcanzar mediante procesos de planificación, los cuales, en relación con la organización territorial, no pueden realizarse sin los parámetros que fija el Estado y, los fines que se pretenden.</p> <p>De manera pues, que la formulación de planes y orientaciones a nivel departamental, de que trata la norma acusada, se constituye a nuestro juicio, en una herramienta fundamental para que el Estado cumpla con sus obligaciones, lo cual, lejos de perjudicar a los pueblos indígenas, los beneficia, en la medida en que el desarrollo armónico e integral de los territorios, reporta beneficios para todas las personas que de él hacen parte, independientemente de las diversidades étnicas que en el territorio confluyan.</p> <p>Sin embargo, es evidente que la elaboración de planes y programas a nivel departamental, con el fin de lograr un desarrollo integral y equilibrado, tanto en lo social como en lo territorial, no puede desconocer la protección que debe el Estado a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas. Por ello, es importante recordar en esta sentencia, la jurisprudencia de la Corte en ese tema específico : “La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su</p>
--	---



	<p>conservación, restauración o sustitución (art. 80 C.P.), y la de asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios, es decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social y que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia. Es decir, que debe buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país que exige la explotación de dichos recursos y la preservación de dicha integridad que es condición para la subsistencia del grupo humano indígena.</p> <p>“El Constituyente previó en el parágrafo del art. 330 una fórmula de solución al anotado conflicto de intereses al disponer:</p> <p>‘La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades’” Sent. SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.</p> <p>En cuanto a la participación que debe propiciar el Gobierno Nacional, la propia Ley 388 de 1997, consagra la participación democrática, al establecer que para el ejercicio de la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los diversos intereses, a saber, sociales, económicos y urbanísticos, mediante mecanismos de participación de los pobladores y sus organizaciones, concertación que tiene por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas, en relación con las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social, que se encuentran relacionados con el ordenamiento del territorio municipal.</p> <p>Dispone también la ley, que la participación ciudadana puede desarrollarse a través de varios mecanismos, entre los cuales se encuentran, el derecho de petición, la celebración de audiencias, el ejercicio de la acción de cumplimiento, intervención en la discusión y ejecución de los planes de ordenamiento, así como en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos que establezca la ley.</p> <p>Como se ve, esta participación democrática que contempla la Ley 388 de 1997, constituye uno de los fines esenciales del Estado, cual es la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (art. 2 C.P.).</p>
--	--

	<p>De manera pues, que no puede entenderse, como se hace en la Sentencia de la cual discrepamos, que con la norma acusada se produce un cercenamiento de los derechos o una exclusión de los pobladores de los territorios indígenas en asuntos que a ellos les interesan. Al contrario, como lo consagra la Constitución Política y, lo ha dicho la jurisprudencia “...A juicio de la Corte, la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho o la circunstancia observada en el sentido de que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige como un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. De este modo la participación no se reduce meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia ambiental (arts. 14 y 35 del C.C.A., 69, 70, 72 y 76 de la Ley 99 de 1993), sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades.</p> <p>“El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental (art. 40-2 C.P.), tiene un reforzamiento en el Convenio número 169, aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos. De este modo el citado Convenio, que hace parte del ordenamiento jurídico en virtud de los arts. 93 y 94 de la Constitución, integra junto con la aludida norma un bloque de constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer efectiva dicha participación”. Sent. SU-039 de 1997.</p> <p>En conclusión, la norma acusada no vulnera los derechos de los pueblos indígenas, al otorgar competencias a los departamentos para integrar los planes de vida de los resguardos indígenas, con los planes sectoriales de la región, porque como se dijo, Colombia es un Estado Unitario con autonomía de sus entidades territoriales (art. 1 C.P.) y, en ese orden de ideas, la autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas, entendida como la capacidad para gobernarse y ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito de su territorio, puede ser ejercida de conformidad con sus costumbres, siempre y cuando éstas no sean contrarias a la Constitución y a la ley, tal como lo disponen los artículos 246 y 330 de la Carta, pues, en relación con las comunidades indígenas, la propia Constitución consagra un régimen de conservación de la</p>
--	---

	<p>diversidad dentro del marco de la unidad.</p> <p>3. Obsérvese por otra parte que la disposición acusada de la Ley 388 de 1997, asigna al nivel departamental la facultad de elaborar las directrices y orientaciones, la adopción de planes y programas de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas del territorio, facultades que encuentran sustento en la propia Constitución Política.</p> <p>En efecto, el artículo 298 Superior, dispone que los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y, para la promoción y planificación del desarrollo económico y social dentro de su territorio, en los términos que establezca la Constitución; y, el artículo 300-2 señala entre otras funciones, que a las Asambleas Departamentales, les corresponde “Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación, y el desarrollo de sus zonas de frontera”.</p> <p>Así mismo, el Estatuto Fundamental en su artículo 311, al consagrar al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, dispone que le corresponde la prestación de “los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.</p> <p>De otro lado, el artículo 313-2 ibidem, señala que le corresponde a los Concejos “Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas”, norma esta que no es desconocida en manera alguna por el artículo 7º numeral segundo de la Ley 388 de 1997, sino que, precisamente en guarda de los intereses generales, incluidos desde luego los de los territorios indígenas, exige para su desarrollo normas como la que fue objeto de impugnación.</p> <p>Finalmente, a pesar de que el título del artículo 7 de la Ley 388 de 1997, se refiere a la distribución de competencias en materia de ordenamiento territorial, lo cierto es que el contenido de la norma acusada no corresponde propiamente a un reparto de competencias, sino que se limita a señalar el ejercicio de unas competencias asignadas directamente por la Constitución Política a los departamentos y municipios, que por lo demás, deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.</p>
--	---

	Así las cosas, no acogidos por la Sala los razonamientos anteriores para declarar la exequibilidad de la norma acusada, salvamos entonces nuestro voto, pues, se repite, a nuestro juicio, el artículo 7º numeral segundo de la Ley 388 de 1997, ha debido declararse ajustado a la Constitución.
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-739/00
Fecha de la sentencia	junio veintidós (22 ) de dos mil (2000).
Demandante	Douglas Velasquez Jacome
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 6º. de la Ley 422 de 1998, "Por la cual se modifica parcialmente la Ley 37 de 1993, y se dictan otras disposiciones."
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ.
Decision	<p>DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 6º de la Ley 422 de 1998, salvo los segmentos "u otro servicio de telecomunicaciones", "o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados" de su primer inciso, **que se declaran inexecutable.</p> <p>Así mismo se declaran inexecutable el inciso segundo y el inciso tercero de este artículo que dicen así:</p> <p>"La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados.</p> <p>"Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo."</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A. Normas constitucionales que se consideran infringidas.</p> <p>El actor considera que las disposiciones acusadas vulneran lo dispuesto en los artículos 29, 83, 158 y 169 de la Constitución Política.</p> <p>B. Fundamentos de la demanda.</p> <p>Las acusaciones concretas que presenta el actor de la demanda contra el artículo 6º de la Ley 422 de 1998 son las siguientes:</p> <p>Que el tipo penal que crea dicha norma, corresponde a uno de</p>

	<p>aquellos que la doctrina ha denominado “tipo penal en blanco”, dado que su contenido establece como punibles una serie de conductas relacionadas con temas técnicos, económicos y comerciales, que no tienen precedente de regulación ni en la ley ni en los reglamentos que produce la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), lo que hace que se genere un vacío significativo que se presta para el ejercicio arbitrario de sus funciones por parte de fiscales y jueces de la República.</p> <p>Que en consecuencia dicha norma viola el principio de legalidad, a través del cual se protege la libertad individual, se controla la arbitrariedad judicial y se asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal, dado que la inexactitud y la vaguedad del contenido de la norma impugnada le impide a los ciudadanos conocer con certeza y de manera previa, cuáles de sus actuaciones corresponderían a las conductas que la disposición en cuestión tipifica como delitos. El principio de legalidad, señala el demandante, contiene un doble mandato, pues de una parte le ordena a los jueces que sólo sancionen conductas previamente establecidas en la ley, y de otra al legislador que defina de manera inequívoca las conductas punibles, de manera tal que éstas sean empíricamente verificables, presupuestos que desconoció el legislador al expedir la norma impugnada, cuyo contenido vulnera entonces el artículo 29 de la C.P.</p> <p>Otra acusación del actor se dirige a demostrar la violación del principio de reserva legal, pues según él, si se tiene en cuenta que la definición de las conductas punibles, de acuerdo con los mandatos de la Constitución, le corresponde de manera exclusiva al legislador, la deficiente o equivocada redacción de un tipo penal, que no permita saber con certeza y claridad cuáles son las acciones u omisiones que se consagran como conductas delictivas para las cuales se establecen unas determinadas sanciones, se traduce en el traslado de dicha función, que el Constituyente le atribuyó directa y expresamente al Congreso, al juez en cada caso específico, lo que transgrede abiertamente ese principio superior; por eso, anota el demandante, reiteradamente ha dicho esta Corporación, que la mala redacción de una norma que define un hecho punible es un asunto que tiene relevancia constitucional, en la medida en que afecta el principio de legalidad penal estricta. El artículo 6º de la Ley 422 de 1998, concluye el actor, es un tipo penal ambiguo, dada la absoluta imprecisión en la descripción de las conductas punibles.</p> <p>El último cargo de inconstitucionalidad que presenta el demandante, se refiere a la presunta vulneración del principio de unidad de materia que consagran los artículos 158 y 169 de la Constitución Política, pues según él, el contenido de la norma demandada no guarda ninguna conexidad con el título de la ley a la</p>
--	---

	que pertenece, ni tiene una relación temática, sistemática o teleológica con la materia que dicha ley regula, que se concentra en aspectos técnicos, comerciales y económicos de la telefonía móvil celular, los cuales no admiten la creación de un tipo penal en cuanto es un asunto que les es totalmente extraño.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1043/00
Fecha de la sentencia	agosto diez (10) de dos mil (2000).
Demandante	Clemencia Parra de Villamizar
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° (parcial), 3° (parcial), 6°, 7°, 8°, 9°, 27, 41 y 43 de la Ley 428 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “establecer áreas comunes de servicios sociales necesarios bajo estándares mínimos nacionales” que hace parte del artículo 1° de la Ley 428 de 1998.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “espacios públicos” que hace parte del párrafo del artículo 3° de la Ley 428 de 1998, con el entendimiento dado en el numeral 3.3 de esta providencia.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 428 de 1998.</p> <p>Cuarto.- INHIBIRSE para fallar de fondo respecto de la inconstitucionalidad propuesta en contra del artículo 27 de la Ley 428 de 1998.</p> <p>Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 41 de la Ley 428 de 1998 en el entendimiento de que las zonas comunes y el espacio público interno, son bienes separables de los bienes privados y que la preferencia que permite la norma hace referencia a aquellos bienes que cumplen funciones urbanísticas, siempre que estén debidamente individualizados y se destinen al uso común, de conformidad con las normas de regulación urbana.</p> <p>Sexto.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 43 de la Ley 428 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA



Hechos jurídicos	<p>Estima la actora que las disposiciones acusadas desconocen los artículos 1°, 6°, 58, 82, 98, numeral 1° del 136, 158, 287, 294, numerales 4 y 7 del 313, 317 y 338 de la Constitución Política. A continuación se sintetizan los cargos formulados siguiendo el orden propuesto en la demanda.</p> <p>1. Solicita declarar inconstitucional la expresión “<i>y establecer áreas comunes de servicios sociales necesarios bajo estándares mínimos nacionales</i>”, contenida en el artículo 1° de la Ley 428 de 1998. Formula en su contra dos cargos:</p> <p>a. Considera que como la propiedad horizontal es una forma de dominio o propiedad privada, sin perjuicio de su función social, la expresión demandada desconoce el artículo 58 de la Constitución Política al imponer a las unidades inmobiliarias cerradas servicios sociales, porque confunde éste tipo de propiedad con la propiedad asociativa o solidaria.</p> <p>b. Afirma que el tema de la determinación de áreas comunes de servicios sociales, por estar relacionado con la reglamentación del uso del suelo, es competencia de los Concejos Municipales, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7° del artículo 313 de la Constitución Política.</p> <p>2. Estima que la Corporación debe declarar inconstitucional la expresión “<i>espacios públicos</i>”, que hace parte del parágrafo del artículo 3° de la Ley 428 de 1998. Fundamenta su inconformidad con la expresión en que, a su juicio, el dominio del espacio público de las unidades inmobiliarias cerradas no puede atribuirse a la persona jurídica que integra la copropiedad, porque está destinado a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas y es un bien social. Considera, que la norma acusada confunde los denominados bienes comunes de la propiedad horizontal, protegidos por el artículo 58 de la Constitución Política, con el espacio público, regulado por el artículo 82 del mismo ordenamiento.</p> <p>3. /4. /5. /6. Demanda la inconstitucionalidad de los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 428 de 1998 por contrariar los artículos 1°, 158 y el numeral 7° del artículo 313 de la Constitución Política. Formula contra las disposiciones acusadas similares cargos que se sintetizan como sigue:</p>
------------------	--

	<p>a. Que el artículo 6° no cumple con el principio de la unidad de materia, porque en una ley cuyo objeto es <i>“reglamentar las unidades inmobiliarias cerradas sometidas al régimen de propiedad horizontal”</i>, no es dable incluir disposiciones generales sobre aspectos urbanísticos.</p> <p>b. Que los artículos acusados incluyen temas de competencia exclusiva de los Concejos Municipales como son la reglamentación del uso del suelo y la regulación de la construcción de inmuebles.</p> <p>c. Que el artículo 7° contraría el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política, porque dispone que el uso de algunas áreas en las unidades inmobiliarias cerradas puede estar determinado no solo por las normas municipales, sino por los estatutos de las unidades inmobiliarias cerradas, desconociendo que estos reglamentos son los que deben someterse a las disposiciones municipales sobre usos del suelo y no al contrario.</p> <p>d.- Que el artículo 8° contraría el artículo 1° de la Constitución Política, porque al establecer que las normas municipales de urbanismo determinarán las tipologías de usos del suelo, <i>“atendiendo a condiciones de funcionalidad urbana y a las características de configuración de la unidad inmobiliaria cerrada</i>, subordina las normas municipales que son de interés general a las características de la unidad inmobiliaria cerrada, a su juicio, de interés particular.</p> <p>e.- Que el artículo 9° contraría el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política, porque alterna entre las autoridades municipales de urbanismo y planeación y la Asamblea de Copropietarios el establecimiento de requisitos o limitaciones para determinar el uso restringido del suelo y considera que esta facultad, en ningún caso, puede asignarse a la Asamblea de Copropietarios.</p> <p>7. Acusa el artículo 27 de la Ley 428 de 1998 de desconocer el artículo 6° de la Constitución Política porque es incomprensible y por tanto inaplicable. Aduce que no se puede obligar a los particulares a responder por la infracción de normas cuyo significado y alcance no comprenden. Agrega que las acciones urbanísticas están definidas en la Ley 388 de 1997 y que no se entiende como, una norma de carácter especial, pueda establecer conceptos incomprensibles como el texto transcrito, cuya cobertura</p>
--	---

	<p>debería limitarse a los conjuntos inmobiliarios cerrados sometidos al régimen de propiedad horizontal. Y, por último, acusa a esta disposición de involucrar temas ajenos a su motivación quebrantando el principio de unidad de materia.</p> <p>8. Solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 41 de la ley en comento, por infringir los artículos 1°, 13, 136, 158, 287, 294, numeral 4° del artículo 313, 317 y 338 de la Constitución Política. Fundamenta su petición en los siguientes cargos:</p> <p>a. Que se impone el pago del impuesto predial sobre las zonas comunes y el espacio público interno de las unidades inmobiliarias cerradas, se determinan los elementos del tributo y se permite aplicar tarifas menores que las aplicables a las unidades privadas, desconociendo que la Constitución Política asigna la competencia para establecer gravámenes sobre la propiedad inmueble a los municipios, que los entes territoriales tienen autonomía para administrar sus propios recursos y que no es dable al Congreso Nacional inmiscuirse en asuntos de otras autoridades.</p> <p>b. Que el artículo acusado desconoce el imperativo constitucional de la unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, porque en una ley cuyo objeto es <i>“adicionar y reglamentar lo relacionado con las unidades inmobiliarias cerradas sometidas al régimen de propiedad horizontal”</i>, no se pueden incluir artículos relativos al impuesto predial.</p> <p>c. Considera que se desconocen los principios de igualdad y equidad tributaria, consagrados en los artículos 13 y 363 de la Constitución Política, porque, sin justificación, a partir de la vigencia de la norma acusada, existen inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal con gravámenes diferentes; esto por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la misma ley, es facultativo de los conjuntos de casas, edificios y construcciones, constituirse en unidades inmobiliarias cerradas o no hacerlo.</p> <p>d. Que los bienes comunes, tanto bajo el régimen de la Ley 182 de 1948 como de la Ley 16 de 1985, mientras conservan ese carácter, son inalienables e indivisibles, separadamente, de los bienes privados.</p> <p>e. Que si el denominado espacio público es un bien social, éstas áreas no deberían ser objeto de impuesto predial, porque el</p>
--	--

	<p>municipio se gravaría así mismo.</p> <p>9. Solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 43 de la Ley 428 de 1998 porque, a su juicio, permitir que en los estatutos de las unidades inmobiliarias cerradas se definan <i>“los criterios y condiciones para impugnar los Actos Administrativos de las autoridades de planeación y urbanismo, que den aprobación y concedan licencias definitivas”</i>, desconoce el artículo 89 de la Constitución Política, de conformidad con el cual el establecimiento de las condiciones para impugnar los actos de la administración le corresponde al Congreso Nacional.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. ALVARO TAFUR GALVIS</p> <p>USO DEL SUELO-Competencia del Estado y del municipio/USO DEL SUELO-Regulación mediante ley orgánica (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>La Constitución Política asigna dos competencias sobre el suelo y una manera coordinada de ejercerlas: al municipio le concede la facultad de reglamentar su uso y al Estado lo autoriza para intervenir, por razones económicas, en su utilización; empero, a uno y a otro el mismo ordenamiento les impone la planeación de su gestión y los conmina a lograr las mismas metas. De tal suerte que el ejercicio de la competencia constitucional asignada al municipio para reglamentar el uso del suelo, al igual que el derecho a participar en la plusvalía que genere su acción urbanística, como también la obligación de velar por la integridad del espacio público son gestiones ambientales que deberán desarrollarse mediante instrumentos de planificación, elaborados en concordancia con la política económica del Estado, de la cual constituye parte integrante el desarrollo ambiental, con miras a garantizar un crecimiento armónico de las ciudades y el pleno y armónico empleo de los recursos naturales acorde con su desarrollo sostenible. Por consiguiente, resulta pertinente precisar que el uso del suelo es de aquellas competencias atribuidas por la Constitución Política a distintos niveles territoriales: Estado y municipio. En el primer caso por intermedio del órgano legislativo y en el segundo a cargo de los Concejos Municipales; de ahí que solo una ley orgánica pueda establecer reglas capaces de garantizar que los dos entes competentes ejecutarán su gestión acorde con los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, también es a una ley de este tipo a la que corresponde reglamentar lo relacionado con la elaboración de los instrumentos de planificación y disponer mecanismos que armonicen los planes</i></p>

	<i>estatales con los regionales de tal manera que los dos entes territoriales ejerzan su competencia.</i>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-560/00
Fecha de la sentencia	diecisiete (17) de mayo del año dos mil (2000).
Demandante	Andrés Acevedo Zabala.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 (parcial) de la ley 443 de 1998, "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones."
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Declárase EXEQUIBLE la expresión: <i>"al personal administrativo de las Instituciones de Educación Superior en todos los niveles, cuyos empleos hayan sido definidos como de carrera;"</i> contenida en el artículo 3º de la ley 443 de 1998, "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones", bajo el entendido de que en ella no quedan comprendidas las universidades estatales u oficiales organizadas como entes universitarios autónomos conforme a la Ley.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Estima el actor que la expresión demandada viola, en forma directa, el artículo 69 de la Constitución, que establece la autonomía universitaria. Además, también se violan los artículos constitucionales 27 y 67, que consagran la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Se resumen así sus razones:</p> <p>Para el demandante, según la ley 30 de 1992, la autonomía universitaria tiene las siguientes características: <i>"personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera, patrimonio independiente y la posibilidad de elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. Tienen las Universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativo académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar los correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional."</i> (folios 3 y 4) (lo resaltado está así en el texto).</p>

	<p>El actor advierte que lo anterior no quiere decir que los establecimientos universitarios estén exentos del cumplimiento de normas superiores, pues el orden constitucional, el orden público, el interés general y el bien común son los límites de tal autonomía. Para ello existen los reglamentos o los regímenes internos.</p> <p>Señala el actor que la inclusión de los entes universitarios a la ley 443 de 1998, es violatoria de la autonomía de estos entes, pues los sujeta en asuntos tales como en materia de concursos, a la vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo que, además de vulnerar la autonomía, " <i>lo que en cierta medida puede colisionar con las políticas propias que se tengan en la selección de personal, cuestión que además de vulnerar la autonomía, pondría en tela de juicio los criterios éticos y académicos que emanan de los órganos decisorios de la Universidad como institución científica y cultural (...)</i>" (folio 6).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-599/00
Fecha de la sentencia	mayo veinticuatro (24) de dos mil (2000).
Demandante	Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 443 de 1998 y el artículo 91 (parcial) de la Ley 489 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLES las expresiones “ Presidente; Director o Gerente; contenidas en los incisos 7º y 11º del literal a) del numeral 2º del artículo 5º de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión “de su libre nombramiento y remoción”, contenida en el artículo 91 de la Ley 489 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p><i>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</i></p> <p>Estima el actor que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 13, 25, 40, 53, 95, 125, 149, 189 numeral 13 y 210 de la Constitución Política de Colombia.</p> <p><i>2. Fundamentos de la demanda.</i></p> <p>A juicio del demandante, las expresiones acusadas del artículo 5º de la Ley 443 de 1998 contradicen el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, pues “al establecer sin hacer ninguna distinción que en la administración descentralizada nacional los cargos de presidente, gerente o director de entidad descentralizada son de libre nombramiento y remoción –del Presidente de la República –” olvidan que “el sector descentralizado incluye diversas entidades como las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta cualquiera que sea el capital estatal, empresas sociales del Estado, empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y las demás que se creen de acuerdo con el numeral 7º del artículo 150 constitucional”, en donde dicho</p>



	<p>nombramiento no es necesariamente facultad del presidente de la República. Con ello, afirma el demandante, convierten en regla general la excepción contenida en la primera de las citadas normas superiores, la cual, en su sentir, señala que solo excepcionalmente corresponde al presidente hacer tales nombramientos.</p> <p>Adicionalmente, el actor estima que la disposición parcialmente demandada impide hacer efectiva la descentralización por servicios predicada en los artículos 1°, 209 y 210 de la Constitución, así como el derecho de los ciudadanos a “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político en lo que tiene que ver con el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos como lo ordena el artículo 40 de la Carta.” En este sentido, para el actor “lo ajustado a la Carta debe ser que los presidentes, gerentes o directores de entidades descentralizadas diferentes de los establecimientos públicos sean designados por concurso público como lo permite el artículo 125 de la norma fundamental.”</p> <p>En cuanto a la parte demandada del artículo 91 de la Ley 489 de 1998, que establece que el gerente o presidente de las empresas industriales o comerciales del Estado es agente del presidente de la República de libre nombramiento y remoción, el demandante estima que los anteriores cargos de inconstitucionalidad le son igualmente predicables.</p> <p>De la misma manera, indica el demandante que “las disposiciones impugnadas desconocen el régimen de ciertas empresas que administran recursos parafiscales destinados a la seguridad social como el caso del ISS donde la ley 100 establece una forma diferente de designar a su Presidente como lo señala el artículo 275 y el de los hospitales públicos y empresas sociales del Estado que designan su director conforme a los artículos 192 y 195 de la misma ley 100”.</p> <p>Finalmente, a juicio del actor “las normas demandadas desconocen la libertad de configuración del Congreso en relación con la designación de los presidentes, gerentes o directores de entidades descentralizadas distintas de los establecimientos públicos, porque el Congreso está renunciando a una facultad que le otorga la Carta Política y la está atribuyendo en forma permanente al Gobierno Nacional”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA

Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1341/00
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de octubre de dos mil (2000)
Demandante	Federico Eduardo Bula Barreto
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º (parcial) del artículo 39 de la Ley 443 de 1998
Conoció en primera instancia	Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Decision	Declarar INEXEQUIBLE la segunda frase del parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, que dice “Los términos de caducidad establecidos en el Código Contencioso Administrativo para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se contarán a partir de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que originó la supresión del empleo.”
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>Estima el actor que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 2º, 89, 158, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia.</p> <p>Fundamentos de la demanda</p> <p>Señala primeramente el actor que la disposición acusada vulnera el principio de unidad de materia que dispone el artículo 158 fundamental. Indica que la Ley 443 debió limitarse a regular el sistema técnico de administración de personal, garantizar la eficiencia de la administración pública y regular todo aquello que se refiera al ingreso, permanencia y ascenso en los empleos de carrera administrativa, sin poder entrar a regular temas tratados en los códigos, como el término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el Código Contencioso Administrativo.</p> <p>El demandante sostiene que el aparte legal impugnado convierte en obligatoria la acción de nulidad del acto administrativo que reestructura la entidad y origina la supresión del cargo pues “solamente cuando se agote tal procedimiento y se obtenga la</p>

	<p>declaratoria de nulidad del acto de contenido general, se puede ejercer otra acción que de suyo es independiente”. Debido a lo anterior, aduce, se está contrariando el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) al menoscabar el carácter autónomo que tiene el ejercicio del derecho de acción y por ende vulnerar el derecho al debido proceso del sujeto pasivo de la norma.</p> <p>Por otra parte, según el demandante la independencia que debe caracterizar la función judicial, además de entenderse como autonomía respecto de las demás ramas del poder, se puede entender como la posibilidad de que se ejerzan autónomamente las diferentes acciones judiciales consagradas en nuestro ordenamiento.</p> <p>Finalmente, afirma que la norma atenta contra la economía procesal y contra la prevalencia del derecho sustancial, imponiendo al afectado la obligación de interponer dos acciones distintas para hacer valer su derecho. Igualmente, esta falta de economía procesal afecta la correcta administración de justicia, pues entorpece la función del juez como protector de los derechos de los administrados frente a la actividad de la administración</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. ANTONIO BARRERA CARBONELL</p> <p>Con el respeto debido por la decisión mayoritaria, adoptada por la Sala Plena de la Corporación en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi aclaración de voto a dicha decisión, en los siguientes términos:</p> <p>El artículo 39 de la Ley 443/98 regula los derechos de los empleados de carrera administrativa en caso de supresión de los cargos de que sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra o de modificación de planta, en el sentido de que podrán ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.</p> <p>El párrafo 2 de esta norma en su versión original estableció lo siguiente:</p> <p>“En el evento de que el empleado opte por la indemnización o la</p>

	<p>reciba, el acto administrativo en que ésta conste prestará mérito ejecutivo (y tendrá los mismos efectos jurídicos de una conciliación). <u>Los términos de caducidad establecidos en el Código Contencioso Administrativo para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se contarán a partir de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que originó la supresión del empleo</u>".</p> <p>Observa la Corte, que el aparte normativo que aparece entre paréntesis fue declarado inexecutable por la Corte mediante la sentencia C-642/99<sup>10</sup>, y que el segmento subrayado corresponde a lo que fue declarado inexecutable por la Corte en la sentencia objeto de mi aclaración de voto.</p> <p>Comparto lo decidido por la Corte en la parte resolutive, en cuanto declaró inexecutable la segunda frase del párrafo 2 del art. 39 de la ley 443/1998, en cuanto desconoció el derecho de las personas al acceso a la administración de justicia, así como el deber estatal de asegurar la protección especial al trabajo en sus diferentes modalidades.</p> <p>Pero no comparto la motivación de la sentencia, en relación con los siguientes aspectos:</p> <p>Se dice en la sentencia que la declaratoria de nulidad del acto de supresión de los empleos "puede tener origen en una demanda que haya interpuesto otro empleado o la administración".</p> <p>Al respecto conviene anotar, que los actos de supresión de empleos en una entidad pública pueden ser objeto de la acción pública de nulidad, instaurable por cualquier persona, en defensa del orden jurídico abstracto, o de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promueva la persona legitimada y lesionada directamente en su derecho.</p> <p>En concepto del suscrito, la expresión declarada inexecutable es una norma de carácter general que regulaba los términos de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en relación con actos administrativos derivados de los actos de supresión de empleos. Por lo tanto, no comparto los razonamientos contenidos en la parte motiva de la demanda en el sentido de que la norma se refería exclusivamente a los actos administrativos que reconocen y liquidan la indemnización a favor de los empleados.</p> <p>En los anteriores términos dejo consignada mi aclaración de voto a la aludida sentencia.</p>
--	--

<sup>10</sup> MP. Dr. Antonio Barrera Carbonell

Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-011/00
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil (2000).
Demandante	Felix Hoyos Lemus
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 136, numeral 10, literal e) del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Decision	Declarar EXEQUIBLE la expresión “interesada”, contenida en el literal e) del numeral 10) del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Afirma el impugnante que la disposición parcialmente acusada vulnera los artículos 1, 40, 85 y 270 de la Constitución Política.</p> <p>Sostiene que la expresión objeto de proceso -el vocablo “interesada”, aplicado a la persona que puede pedir la nulidad absoluta de un contrato estatal- limita el círculo de quienes tienen acceso a la administración de justicia en lo referente a asuntos de interés público.</p> <p>Considera entonces que lo conveniente sería que la norma señalara a “cualquier ciudadano” como titular de la legitimidad con miras a la impugnación del contrato, para que se realizaran así los postulados y fines del Estado consagrados en el artículo 1 de la Constitución. A su juicio, ello daría cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 Ibídem, referente al derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como al desarrollo de las formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública, según lo consagra el artículo 270 de la Carta.</p> <p>Manifiesta el demandante que, si el contrato estatal se encuentra bajo una causal de nulidad absoluta, la lesión al ordenamiento jurídico es continua y permanente, siendo natural que todos los miembros de la comunidad tengan interés en la declaración de nulidad.</p>

	<p>El actor señala:</p> <p>“... el legislador es soberano para determinar la titularidad de las acciones contenciosas. Empero, al hacerlo debe distinguir entre: 1) Aquellas acciones en las cuales está envuelto el interés público y la preservación del orden jurídico, objetivamente considerado, para las cuales se debe otorgar una <u>Acción Pública</u>, en donde el actor no pide nada para sí mismo, y 2) Aquellas en que hay un interés subjetivo de alguien afectado por el contrato, caso en el cual la acción deja de ser pública y para promoverla se exige un <u>Interés para Obrar</u>. Las normas demandadas no hacen tal distinción y exigen interés para obrar frente a una pretensión de nulidad absoluta en la cual está en juego el interés público y social”.</p> <p>Finalmente, el impugnante argumenta que las acciones públicas consagradas por el artículo 40, numeral 6, de la Constitución Política también se aplican al ámbito de la contratación estatal y que, según lo dispuesto por el artículo 270 Ibídem, la vigilancia de la gestión pública lleva implícita la facultad de controlar la contratación estatal en interés público, toda vez que no se entendería que esta facultad convirtiera a los ciudadanos en meros espectadores del quehacer público.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO</p> <p>DERECHO DE PARTICIPACION DE TODOS EN LAS DECISIONES QUE LOS AFECTAN-Exigencia de interés directo podrá demandar nulidad absoluta de contrato administrativo (Aclaración de voto)</p> <p>LEGISLADOR-No puede quitar al ciudadano derecho a controlar actividad contractual de la administración (Aclaración de voto)</p> <p>Referencia: expediente D-2439</p> <p>En mi condición de ponente en este caso, debo manifestar que, como lo expuse en salvamento de voto relativo a la Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999, considero inconstitucional la restricción en esa oportunidad demandada, que tiene el mismo sentido en la norma objeto del presente proceso.</p>



	<p>Dije entonces, junto con los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Carlos Gaviria Díaz, lo siguiente:</p> <p>"1. Mediante la nueva redacción que el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 imprimió al 87 del Código Contencioso Administrativo, la legitimación para impetrar que se decrete la nulidad absoluta de los contratos administrativos quedó restringida al Ministerio Público o a quien "acredite un interés directo", lo cual fue declarado exequible por la Corporación en la sentencia de que discrepamos, por considerar que las restricciones establecidas por el legislador para el efecto quedan comprendidas dentro de sus atribuciones para "hacer las leyes", y que, por lo tanto, la limitación allí impuesta no menoscaba el derecho de participación ciudadana en el control de la actividad contractual de la administración.</p> <p>2. A nuestro juicio, la exigencia de que para demandar la nulidad absoluta de un contrato administrativo se requiera interés específico para obrar, es decir, lo que allí se denomina "interés directo", desconoce por completo el deber del Estado de "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan" consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, pues es claro que en la actividad de la administración pública nacional, departamental, distrital o municipal y de las entidades descentralizadas de todos los niveles, se invierten o gastan dineros públicos, provenientes de los tributos recaudados por el Estado, lo cual justifica que al respecto exista el más estricto control por los asociados.</p> <p>3. Por otra parte, con la decisión de la cual nos apartamos y con la norma que en ella se respalda, también resulta desconocido el artículo 40 de la Constitución Política, ya que la norma acabada de mencionar, en plena armonía con lo preceptuado por el artículo 2º de la Carta, garantiza a todos los ciudadanos como un derecho suyo la participación en la "conformación, ejercicio y control del poder político", para lo cual le autoriza, expresamente a "6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley". A este efecto, si se tiene en cuenta que la nulidad absoluta de los contratos administrativos puede ser declarada por la jurisdicción competente cuando exista violación de la Constitución o de la ley, objeto o causa ilícitos, de la propia Carta surge entonces que a los ciudadanos se les garantiza por ella el ejercicio del derecho a controlar la actividad contractual de la administración pública, se repite, "en defensa de la Constitución y de la ley".</p> <p>4. Ello significa, sin duda alguna, que el legislador tiene facultades para regular la manera como se pueden ejercer dichas acciones, cuál el juez competente, cuáles los requisitos que han de cumplirse y el trámite respectivo. Pero de ahí no puede deducirse que resulte</p>
--	--

	<p>constitucionalmente legítimo arrebatarle al ciudadano su derecho a controlar la actividad contractual de la administración, a pretexto de la supuesta "libertad de configuración legislativa", pues ésta no existe para suprimir el derecho a interponer una acción que pretende defender la Constitución, la ley y la licitud de la causa y objeto de los contratos celebrados con dineros públicos, que, se supone, deben sujetarse a los intereses superiores del Estado y no apartarse jamás de lo previsto por el ordenamiento jurídico positivo.</p> <p>5. Así las cosas, la exigencia de un interés particular y concreto para demandar la nulidad absoluta de un contrato administrativo, quebranta la Constitución. No lo consideró así la mayoría y por eso declaró exequible la expresión demandada contenida en el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, que reformó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. Por ello, entonces, salvamos nuestro voto".</p> <p>No obstante, acogiéndome a la jurisprudencia de la Corte, he proyectado el fallo del que ahora se trata y he seguido, al hacerlo, los lineamientos trazados en la decisión referida.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-384/00
Fecha de la sentencia	abril cinco (5) de dos mil (2000).
Demandante	Humberto De Jesús Longas Londoño, Fernando Martínez Rojas y Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 52 parcial, 69, 79, 80 parcial, 81 parcial, 91 parcial, 101 parcial y 114 de la Ley 510 de 1999, “ por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades”.
Conoció en primera instancia	Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 510 de 1999, bajo el entendido de que no impide el ejercicio de la acción de tutela contra las providencia adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales, ni las acciones contencioso administrativas en caso que dichos entes actuaren excediendo sus competencias jurisdiccionales.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLES el artículo 69 y el inciso 1° del artículo 101.</p> <p>Tercero: Declarar INEXEQUIBLE el inciso 1° del artículo 91 de la Ley 510 de 1999.</p> <p>Cuarto: INHIBIRSE de hacer un pronunciamiento de fondo respecto del artículo 79 de la Ley 510 de 1999, por carencia actual de objeto.</p> <p>Quinto: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones, “<i>el monto de los mismos que se capitalizarían</i>”, contenida en el artículo 80 y “<i>de una menor capitalización de intereses o</i>” contenida en el artículo 81, así como el artículo 114 de la Ley 510 de 1999.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Respecto del aparte acusado de la disposición transcrita, el demandante, Humberto de Jesús Longas Londoño, considera que ella contraviene el artículo 29 superior por cuanto esta última norma, en su sentir, establece que toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley,

	<p>“pero no impide cualquier otra acción o recurso ante las autoridades judiciales, como lo estipula el demandado artículo 52 inciso 3° de la Ley 510 de 1999.” A juicio del actor, dicho inciso prohíbe la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares o colectivas y las demás a que se refiere el artículo 89 de la Constitución, cuando ellas se dirijan contra los actos de las mencionadas Superintendencias a los que se refiere el inciso acusado.</p> <p>El doctor, Manuel Guillermo Rueda Serrano, en representación de la Federación Nacional de Aseguradores (Fasecolda), intervino en el proceso dentro de la oportunidad prevista y solicitó a esta Corporación que se declare la inconstitucionalidad, en lo demandado, del artículo 52 transcrito. En sustento de su solicitud, afirma que esta Corporación ha sostenido reiteradamente que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, “dado que autoriza al legislador para indicar en qué casos no hay segunda instancia en cualquier tipo de procesos”, pero que no obstante lo anterior, la disposición acusada resulta ser inconstitucional en la medida en que, más allá de prohibir la doble instancia en los procesos adelantados por las Superintendencias, consagra una prohibición general de acudir a las vías judiciales que la propia Constitución permite, como lo son la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares o de grupo.</p> <p>Por su parte, ciudadano William López Leyton, actuando en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defendió la constitucionalidad del artículo en comento, expresando que dicha norma restringe “las posibilidades de ejercer la réplica mediante los recursos de Ley,”... “pues la intención del legislador no es otra que la de permitir que los especiales asuntos sometidos a conocimiento de estos organismos técnicos, no se prolonguen en el tiempo más allá de lo necesario.” Sostiene que el principio de la doble instancia al que se refiere el artículo 31 superior es un principio general que admite excepciones introducidas por el legislador, que es justamente lo que hace la disposición impugnada. Con argumentos similares la disposición es defendida por la ciudadana Gloria Isabel Sánchez García, quien intervino en representación de la Superintendencia Bancaria.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. CARLOS GAVIRIA DIAZ, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, ANTONIO BARRERA CARBONELL ALFREDO BELTRAN SIERRA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.</p> <p>AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Función jurisdiccional excepcional</p>

	<p>(Salvamento parcial de voto)</p> <p>UNIDAD NORMATIVA-Constitución (Salvamento parcial de voto)</p> <p>DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Proscripción de negación absoluta de controversia de decisiones (Salvamento parcial de voto)</p> <p>SUPERINTENDENCIA-Calificación de exceso en competencia jurisdiccional (Salvamento parcial de voto)</p> <p>ADMINISTRACION NACIONAL-Atribución amplia al Gobierno para modificación de estructura es inconstitucional/ADMINISTRACION NACIONAL-Modificación de estructura sin sujeción a principios y reglas que defina la ley es inconstitucional (Salvamento parcial de voto)</p> <p>SUPERINTENDENCIA DE VALORES-Atribución amplia al Gobierno para modificación de estructura es inconstitucional/SUPERINTENDENCIA DE VALORES-Modificación de estructura sin sujeción a principios y reglas que defina la ley es inconstitucional (Salvamento parcial de voto)</p> <p>FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Norma que la concede mientras produjo efectos es inconstitucional (Salvamento parcial de voto)</p> <p>NORMA AUTONOMA-No consagración de facultad extraordinaria (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Referencia: expedientes D-2559, D-2574 y D-2586</p> <p>Salvo mi voto en el asunto de la referencia por varias razones que me permito resumir:</p> <p>1) No estoy de acuerdo con lo resuelto en cuanto al inciso 3 del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el 52 de la Ley 510 de 1999.</p> <p>Tal precepto se declaró exequible, a pesar de que existen serios reparos sobre la constitucionalidad de las facultades jurisdiccionales de las superintendencias y glosas muy importantes formuladas por el actor, y no desvirtuadas en el Fallo, en relación con el cierre absoluto de las posibilidades de defensa de los ciudadanos respecto de lo que tales organismos decidan.</p>
--	--

	<p>En lo referente al primer aspecto, es suficiente recordar que las atribuciones judiciales de las autoridades y organismos administrativos son excepcionales, y por ello de interpretación restrictiva, en virtud de lo cual la norma legal que las consagre debe ser clara y contundente en la fijación de sus límites. El artículo 116 de la Carta dice al respecto:</p> <p>"...Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos".</p> <p>Claro está, no es la disposición acusada la que contempla el ámbito de dichas funciones, pero, precisamente por ese motivo, no ha debido entrar la Corte a adelantar un pronunciamiento de constitucionalidad en torno a la posibilidad abierta de dichas atribuciones y menos a respaldar, en la parte motiva, sin concreción en la resolutive, una norma no demandada (el artículo 51 de la Ley 510 de 1999), afirmando, sin sustento ni argumentación de fondo, y sin siquiera mencionar cuáles son, que las facultades jurisdiccionales atribuidas a la Superintendencia Bancaria se ajustan a la Constitución.</p> <p>No se constituyó la unidad normativa y, por tanto, nada se resolvió en realidad sobre la exequibilidad de tal precepto no demandado, pero ya se hizo explícito un concepto, o se avanzó en una especulación, que desde luego pueden variar -en cuanto no hay cosa juzgada constitucional- cuando se haga el estudio de fondo, poniendo así en peligro la coherencia de este Tribunal.</p> <p>En lo que hace al segundo aspecto, considero que, pese a la competencia del legislador para prever cuándo caben y cuándo no los recursos y las acciones, está proscrita en la Carta una negación absoluta de la posibilidad de controvertir decisiones judiciales, menos todavía si se trata de las adoptadas por entes de índole administrativa, ya que con ello puede resultar lesionado el artículo 229 de aquélla, que consagra como derecho fundamental el de acceso a la administración de justicia.</p> <p>Tal vez por ese motivo la sentencia de exequibilidad es condicionada en el sentido de que la norma "no impide el ejercicio de la acción de tutela contra las providencias adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales, ni las acciones contencioso administrativas en caso que dichos entes actuaren excediendo sus competencias jurisdiccionales".</p> <p>Ninguna glosa tengo sobre el aspecto relativo a la tutela, pero sí en lo referente a las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso</p>
--	--

	<p>administrativo:</p> <p>¿Quién califica si hubo o no exceso en el uso de las competencias jurisdiccionales? Nadie más que la autoridad judicial encargada de conocer sobre tales acciones. Siempre la Superintendencia que haya proferido un acto supuestamente cobijado por la disposición va a alegar que no incurrió en extralimitación alguna. Y el afectado dirá que sí. Por lo cual, en últimas, la Corte consagró la acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir ese punto; es decir, en el condicionamiento contempló lo contrario de lo que señala el precepto declarado exequible. Habría sido más lógica una sentencia de inexequibilidad.</p> <p>2) Menos todavía comparto la declaración de exequibilidad del artículo 69 acusado, por cuanto su texto es -y de manera protuberante- contrario al numeral 7 del artículo 150 de la Constitución. Y, por contera, en cuanto transfiere al Ejecutivo una función netamente legislativa que ha debido ser objeto de facultades extraordinarias, vulnera también el numeral 10 <i>Ibíd.</i></p> <p>En efecto, dice el citado numeral 7 que la función de modificar la estructura de la administración nacional es del Congreso y que se ejerce mediante leyes.</p> <p>El numeral 16 del artículo 189 de la Constitución, que permite al Presidente "modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley", supone una ley previa, como del mismo texto resulta.</p> <p>Una atribución amplia en la materia, es decir, la habilitación del Gobierno con invocación de tal numeral sin "sujeción a los principios y reglas generales que <u>defina</u> la ley" (subrayo), o sin principios ni reglas, es inconstitucional.</p> <p>Así lo manifestó la Corte en la Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999 (M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz).</p> <p>Ese es el problema de la norma acusada, que traspasa al Gobierno Nacional la competencia para modificar la estructura de la Superintendencia de Valores "con el propósito de efectuar las adecuaciones <u>que resulten indispensables</u> (subrayo) para cumplir las nuevas funciones que le señala la presente ley".</p> <p>¿Dónde están los límites, principios y reglas generales exigidos por el numeral 16 del artículo 189 de la Carta Política?</p>
--	---

	<p>La norma se presta para que el Gobierno, con base en la amplitud de la atribución consagrada, diga que es <u>indispensable</u>, para los fines de su adecuación a las nuevas funciones previstas en la ley, cualquier cambio en la estructura de la Superintendencia, inclusive uno de aquellos que están reservados, en los términos del artículo 150-7 de la Carta Política, al Congreso. Y ello -que, como no tiene límites en el tiempo, podrá repetirse indefinidamente respecto del organismo afectado- acontece por la imprecisión y subjetividad del mencionado concepto, dentro del cual cabe todo.</p> <p>3) Tampoco estoy de acuerdo con la resolución adoptada en relación con el artículo 79, objeto de demanda.</p> <p>Al respecto, la Corte Constitucional ha resuelto inhibirse, por carencia actual de objeto, fundada en que "la presente decisión ha perdido vigencia sin haber producido efectos jurídicos".</p> <p>El tenor del argumento es equívoco, a tal punto que, como puede verse, comienza atribuyendo la pérdida de vigencia al mismo Fallo de la Corte y termina justificándola en que no ha producido efectos jurídicos. Se entiende que en esta segunda parte alude a la disposición demandada, pero a tal conclusión únicamente llega el buen lector, pues la redacción es deficiente.</p> <p>Se basa la Corte, para arribar a la inhibición -que en realidad deja vigente todo el artículo-, en que "el plazo de seis meses que el artículo 79 concedió al Gobierno Nacional para ejercer las facultades extraordinarias otorgadas, expiró el día 6 de febrero del año en curso, sin que se hubiera hecho uso de las mismas".</p> <p>Aunque ello es cierto, debe hacerse un llamado a la coherencia que debe existir entre los fallos de la Corte, ya que la razón por la cual fueron declaradas inexecutable las normas del Decreto 663 de 1993 que estructuraban el abolido sistema UPAC fue precisamente la de haberse acudido a la figura de las facultades extraordinarias para dictar el marco correspondiente, contrariando así el Ejecutivo la tajante prohibición contenida en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución (Sentencia C-700 de 1999).</p> <p>Entonces, lo indicado en esta ocasión era declarar que, mientras produjo efectos, la norma que otorgaba facultades extraordinarias para el mismo fin previsto en las disposiciones del Decreto 663 de 1993 era inconstitucional.</p> <p>Pero, adicionalmente, el aludido motivo de la inhibición, aunque en gracia de discusión podía haber respecto del primer inciso, que otorgaba las facultades extraordinarias, y aun del segundo, que las complementaba respecto de la regulación de titularizaciones y</p>
--	---



	<p>mutuos hipotecarios ligados al índice de precios al consumidor, de ninguna manera podía extenderse al inciso 3, que estableció, a mi modo de ver, una norma autónoma.</p> <p>Allí, en efecto, no se consagró una facultad extraordinaria otorgada al Ejecutivo para legislar sino que el Congreso proveyó directamente el mandato: "Los sistemas de amortización que utilicen los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda deberán consultar la capacidad de pago de los deudores para efectos de determinar los incrementos en los saldos de la deuda, en las cuotas mensuales o en los plazos".</p> <p>Ese precepto, que fue demandado, ha debido ser objeto de análisis material por la Corte, la que estaba obligada a definir si es o no inexecutable.</p> <p>Claro está -y así lo entendió la Sala- la disposición autónoma en comento está vigente y obliga a las instituciones financieras.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-088/00
Fecha de la sentencia	febrero dos (2) de dos mil (2000)
Demandante	Ruby P. Rasmussen Paborn Ines Adriana Sanchez Leal Gloria Ines Muñoz Parada Olga E. Hoyos De Ordoñez
Demandado	Acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 40 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 472 de 1998, "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dr. FABIO MORON DIAZ
Decision	Declárase EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, en los términos de esta sentencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Las actoras consideran que el acusado inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998 quebranta los artículos 13, 29 y 83 de la Constitución Política.</p> <p>Expresan que el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, en cuanto dispone que el representante legal de la entidad contratante y el contratista responden solidariamente con los funcionarios responsables de las irregularidades en la contratación, viola el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta, pues, en su criterio, está tácitamente estableciendo una presunción de mala fe en contra de los primeros, sin tener en cuenta que es posible que estos no hayan intervenido en la celebración del contrato del que se deriva el detrimento patrimonial de la entidad pública, o no hayan tenido parte en su ejecución, pese a lo cual, son obligados a responder con su patrimonio, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso.</p> <p>Opinan que "... pareciera que el legislador buscó establecer una forma de responsabilidad objetiva, de la que ha debido ocuparse de manera expresa, consagrando las causas, circunstancias que la</p>

	<p><i>originan y los procedimientos a seguir ante su ocurrencia, como lo exige el inciso final del artículo 88 de la Carta, sobre el cual hasta el momento nada ha dicho el legislador.”</i></p> <p>Las accionantes manifiestan que, por otra parte, el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998 es, igualmente, violatorio del artículo 29 de la Carta Política, pues establece para el representante legal de la entidad pública y el contratista, la obligación de responder con su patrimonio, en forma solidaria con quienes dieron lugar a los sobrecostos o irregularidades en la contratación, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso por la entidad por él representada, “... <i>sin que medie juicio de responsabilidad en su contra dentro del cual pueda establecerse su participación en estos eventos, con garantía de su derecho de defensa.</i>”</p> <p>En resumen, estiman que “<i>la norma acusada, al imponer esta sanción, por el solo hecho de ostentar la calidad de representante legal de la entidad pública, desconoce los principios de legalidad de las conductas sancionables y de las sanciones mismas, la presunción de inocencia y la observancia de las formas propias de cada juicio, estableciendo como ya lo hemos afirmado una forma de responsabilidad objetiva, inadmisibles en un Estado Social de Derecho.</i>”</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

## SENTENCIAS DE 2001

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-404/01
Fecha de la sentencia	abril diecinueve (19) de dos mil uno (2001)
Demandante	Ramiro de Jesús Gallego García.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 2°, 7, 14 y 16 de la Ley 358 de 1997, y el artículo 2° del Decreto 696 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Decision	Declarar EXEQUIBLES los artículos 1°, 2°, 7, 14 y 16 de la Ley 358 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1.Según el actor, las disposiciones demandadas son violatorias de los artículos 2°, 20, 29, 90, 124, 150 numeral 19 literal a, 209, 298, 300 numerales 2° y 3°, 312 numeral 2°, 313 numeral 2°, 315 numeral 5°, 339 y 364 de la Constitución Política.</p> <p>2. En la primera parte de la demanda, luego de referirse a lo que en su sentir constituye el alcance y objetivo del artículo 364 de la Constitución Política, el actor analiza de manera global las causas de la inconstitucionalidad que detecta en las normas acusadas. A la base de este análisis está la consideración general según la cual la omisión o el análisis equivocado por parte de la ley, de los factores que determinan la capacidad de pago de una entidad territorial, o una metodología legal equivocada para establecer el monto máximo de los créditos nuevos que se pueden contratar en un período, genera un análisis incorrecto de dicha capacidad y por tal motivo causa una violación flagrante del artículo 364 superior.</p> <p>Dentro de este orden de ideas, el actor insinúa que si por culpa de las disposiciones legales el análisis de la capacidad de endeudamiento de las entidades públicas no es acertado, ello genera también un desconocimiento de las normas superiores relativas a la planeación económica, pues a su juicio los recursos que van a ser dedicados al “apalancamiento financiero”, deben ser resultado de una labor planeada y no consecuencia de la improvisación. Sobre esta base, aduce la violación de todas las normas superiores que se refieren a la planeación económica en el orden territorial.</p> <p>De otro lado, pone de presente que el prestamista, con fundamento en el artículo 20 superior, tiene derecho de analizar la verdadera situación financiera de la entidad pública con base en</p>

	<p>una información veraz e imparcial, asunto en el cual están comprometidos tanto los intereses generales como los particulares. Por ello, la metodología establecida en la ley para calcular la capacidad de pago real de las entidades territoriales, debe responder a este derecho e intereses constitucionales.</p> <p>3. En una segunda parte, el actor hace una explicación sobre algunos conceptos económicos que considera de carácter relevante para el estudio de la presente demanda, tales como la noción de capacidad de pago y capacidad de endeudamiento. Para ello empieza por indicar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Código Civil, las palabras técnicas de toda ciencia o arte, que utilice el legislador, se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han utilizado en sentido diverso. A continuación indica que “es indispensable aclarar el concepto de capacidad de pago desde el punto de vista económico como fuente de interpretación; porque la ley estableció una definición diferente de la capacidad de pago al concepto económico, realidad que lleva a indagar el alcance verdadero de lo que se entiende por capacidad de pago; y además estableció una metodología diferente para calcular y unos indicadores financieros para medir el nivel adecuado de endeudamiento equivocados en algunos aspectos... y estos son los principales motivos por el cual (sic) los entes territoriales registran el más alto nivel de endeudamiento, tanto la nación, como los departamentos y municipios; hasta el punto, que estamos a (sic) portas de una crisis fiscal de todos los entes territoriales...”. Después de estas consideraciones, el actor explica ampliamente lo que a su juicio es la definición verdadera de los conceptos económicos de capacidad de pago, disponibilidad neta de recursos, flujo de caja, ahorro operacional, y de la metodología para determinarlos. A partir de sus definiciones, extrae conclusiones como la siguiente: “lo anterior para resaltar que el análisis financiero establecido en la Ley 358 de 1997, con base en la ejecución presupuestal es un flujo neto de caja con muchas limitaciones, basado en el análisis de los ingresos y egresos programados por la administración y ejecutados durante la vigencia fiscal del año anterior, sin embargo, no implica que los compromisos y obligaciones adquiridos por ésta sean los mismos para el año siguiente.”</p> <p>4. En la tercera parte de la demanda, el actor analiza en forma particular la inconstitucionalidad de las normas que tacha de inexecutable. Considera inconstitucional el artículo 1° de la Ley 358 en la parte subrayada, porque en su sentir el ahorro operacional es la disponibilidad neta de recursos que resulta después de restarle a todos los ingresos los gastos, las obligaciones financieras y los demás conceptos que impliquen una erogación con los recursos de</p>
--	--

	<p>que la entidad puede disponer libremente para el cubrimiento de estas obligaciones o para darlos en garantía y atender el servicio de la deuda; así mismo, la capacidad de pago guarda una relación directa con el monto máximo de la deuda nueva que se puede contratar durante un período, y a su juicio es la disponibilidad de recursos propios que una persona o entidad puede utilizar para cumplir con las obligaciones adquiridas o que puede destinar libremente bien sea para apalancar los créditos durante un período, o para inversión.</p> <p>Así las cosas, en criterio del demandante la definición del artículo 1º de la mencionada Ley es inconstitucional, porque hace relación únicamente a la posibilidad de cumplimiento en el servicio de la deuda (que comprende la deuda contratada en vigencias anteriores y la deuda nueva), y no a la disponibilidad neta de recursos que pueden ser destinados a la inversión o para apalancar créditos nuevos, con lo cual se viola el artículo 364 de la Carta y sus normas concordantes.</p> <p>Igualmente, en criterio del actor la expresión “dejando un remanente para financiar inversiones”, del artículo 1º de la Ley 358 de 1997, es inconstitucional porque no guarda relación con la capacidad de pago, sino con la libre disposición de los entes territoriales para destinar el ahorro operacional.</p> <p>Respecto a los artículos 2º y 7º de la mencionada Ley, hace un análisis conjunto, previa explicación económica de los conceptos contenidos allí. Para el actor, la ley permite incluir en el cálculo de la capacidad de pago todos los ingresos que percibe un ente territorial, pero no diferencia cuáles se pueden destinar al servicio de la deuda; así mismo, considera que la ley genera problemas para calcular las verdaderas obligaciones de una entidad territorial y su capacidad de pago, toda vez que no permite conocer las cuentas por pagar que pasan de una vigencia a otra y que no se reflejan en la ejecución, no incluye las obligaciones generadas por contratos o por las transferencias de destinación específica, no incluye la amortización a capital o el pago de intereses a entidades financieras, así como tampoco relaciona los pagos originados por cuenta de los pasivos pensionales.</p> <p>Considera que el análisis de la capacidad de pago hecho exclusivamente con base en la ejecución presupuestal, como lo propone la Ley, corresponde a un análisis estático con base en el comportamiento de un año, que no permite cumplir las finalidades de la planeación contenidas en el artículo 339 y concordantes de la Constitución, olvidándose entonces que la planeación financiera exige un análisis dinámico para diferentes períodos de tiempo que permitan al prestamista analizar la situación financiera a futuro de</p>
--	---

	<p>la entidad.</p> <p>Según su parecer, las normas demandadas son inconstitucionales, porque no aseguran el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 364 de la Constitución, ya que la no inclusión de algunas obligaciones, hace que las entidades se endeuden por encima de su capacidad real. Respecto de la presunción del artículo 2º acusado, que considera inconstitucional, señala que el ahorro operacional es producto del análisis de los ingresos del período frente a los gastos y obligaciones que se generan, y no producto de un índice que estipula que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan el 40% del ahorro operacional.</p> <p>En relación con el artículo 13 de la Ley 358 de 1997, que establece que aquellas entidades públicas que en ejercicio de sus funciones soliciten información a las entidades territoriales sobre el estado de su endeudamiento deberán ajustar tales requerimientos a la metodología contenida en la ley, el actor indica que es inconstitucional por cuanto, de conformidad con el artículo 20 superior, toda entidad tiene derecho a recibir una información veraz e imparcial, por lo cual para conocer la verdadera capacidad de pago de una entidad, la entidad interesada no tiene por qué verse sometida a los requerimientos y metodología contenida en la ley.</p> <p>De otro lado, entiende que el artículo 14 de la Ley es inconstitucional, por cuanto la falta disciplinaria a que alude no está tipificada. Adicionalmente, el artículo 24 del Código Disciplinario Unico (Ley 200/95) califica las faltas disciplinarias en gravísimas, graves y leves, enumerándolas de manera taxativa, pero sin que allí aparezca tipificada la conducta a que se refiere el artículo 14 acusado. Así, opina que las conductas de los funcionarios que ocasionan el sobreendeudamiento y disminuyen a su vez la posibilidad de las entidades territoriales de generar desarrollo sostenible para sus regiones, con un costo social, político y económico muy alto, quedan sin ninguna sanción disciplinaria, desconociéndose entonces los artículos 29, 90 y 124 de la Constitución.</p> <p>Finalmente, el actor considera que el artículo 16 de la Ley que demanda es inconstitucional, ya que la tarea del Gobierno de demostrar su capacidad de endeudamiento, debe ser una función reglada por la ley y no dejada al libre arbitrio del Ejecutivo. Indica que la determinación de la capacidad de endeudamiento de la Nación debe corresponder a una metodología que analice los ingresos, los egresos y obligaciones de la misma, tanto en la contratación de empréstitos internos y externos como la emisión</p>
--	--

	<p>de títulos de deuda pública, lo cual no ocurre con la norma acusada porque las relaciones allí previstas no señalan criterios objetivos para regular la capacidad de pago ni el monto máximo de endeudamiento del Estado. La norma, además, crea un tratamiento diferencial con respecto a los demás entes territoriales, “por lo cual se violan todas las normas concordantes con el artículo 364 de la CN”.</p> <p>Anexo a la demanda, el actor adjunta un estudio elaborado por él, referente a la capacidad de pago del Departamento de Antioquia, del cual deduce que dicho Departamento tiene capacidad de endeudamiento desde el punto de vista legal, pero realmente, es decir desde un punto de vista económico, no la tiene.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>NACION Y ENTIDADES TERRITORIALES-No distinción en demostración de capacidad de pago (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>La Constitución no hace distinciones respecto de los requisitos que debe cumplir tanto la Nación como las entidades territoriales para demostrar su capacidad de pago, simplemente se limita a señalar en el artículo 364, que "el endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia". En consecuencia, ha de entenderse que tales exigencias deben ser reguladas por el legislador de una misma manera y no de manera distinta, además debe respetar todos los cánones constitucionales, entre ellos el que consagra el derecho a la igualdad.</i></p> <p>NACION Y ENTIDADES TERRITORIALES-Discriminación en requisitos de medición de capacidad de pago (Salvamento parcial de voto)</p> <p>IGUALDAD DE LOS MUNICIPIOS-Protección (Salvamento parcial de voto)</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-996/01
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de septiembre de dos mil uno (2001).
Demandante	Hugo Hernando Bernal Vallejo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 48, 49, 57 y 61, incisos primero y segundo de la Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Unico Disciplinario”
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Declarar EXEQUIBLES los artículos 48, 49, 57 y 61, incisos primero y segundo de la Ley 200 de 1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Para el ciudadano demandante las normas de la Ley 200 de 1995 demandadas, son violatorias del artículo 277 numeral 6 de la Constitución Política, porque la función disciplinaria se la ha conferido la Carta en forma exclusiva y excluyente al Procurador General de la Nación, directamente o por medio de sus delegados o agentes. Por ello, a su juicio, las normas acusadas al otorgar funciones disciplinarias a las Oficinas de Control Disciplinario Interno y a los jefes inmediatos para fallar disciplinariamente en las faltas leves, y a los jefes de la dependencia o de la seccional o regional para fallar las faltas graves o gravísimas, desconoce abiertamente la función que la Constitución otorga a la Procuraduría.</p> <p>Considera el actor que no existe fundamento constitucional para las Oficinas de Control Disciplinario Interno, porque el control interno que establece el artículo 209 Superior, invocado por el legislador como fundamento para expedir el Código Disciplinario Unico, se encuentra referido a las autoridades administrativas que deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, los cuales no se consiguen a través de una ley disciplinaria.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA

Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
-----------------------------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-013/01
Fecha de la sentencia	enero diecisiete (17) de dos mil uno (2001)
Demandante	José Rory Romero S.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 84, inciso segundo y 99 (parciales) de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Unico).
Conoció en primera instancia	Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Decision	<p>Primero.- ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia C-892/99, mediante la cual se declaró exequible entre otras disposiciones, el artículo 99 de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Unico).</p> <p>Segundo.- Declárase EXEQUIBLE por las consideraciones expuestas en esta sentencia, la expresión “la solicitud de ser oído en exposición espontánea o”, contenida en el artículo 84 de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Unico).</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que los segmentos normativos acusados violan el artículo 29 de la Constitución Política, en particular, en cuanto desconocen el derecho de defensa.</p> <p>En concepto del demandante, las expresiones demandadas restringen la posibilidad del investigado en un proceso disciplinario para presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, “al facultar al operador disciplinario para recepcionar o no la exposición espontánea solicitada por quien tenga conocimiento de la existencia de una indagación o investigación disciplinaria en su contra, con las consecuencias adversas que la negativa representa para quien se encuentra sujeto a la potestad disciplinaria del Estado”.</p> <p>El actor sustenta el cargo, en que el Código Disciplinario Unico, otorga a la persona que tenga conocimiento de la existencia de una investigación en su contra, de solicitar se le reciba exposición</p>

	<p>espontánea (art. 147); así mismo, tendrá acceso al expediente, a partir del momento en que sea escuchado en esa versión (art. 77-2), de modo que podrá aportar o pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes (arts. 73-c y 74).</p> <p>A lo anterior agrega, la disposición del artículo 80 del CDU, que establece a favor del disciplinado el derecho a “...conocer las diligencias tanto en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de pruebas. Por tanto, iniciada la indagación preliminar o la investigación disciplinaria se comunicará al interesado para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa...”.</p> <p>Adicionalmente, en la demanda se citan como antecedentes jurisprudenciales, las sentencias C-280/96, C-430/97 y C-892/99 de esta Corporación.</p> <p>En consecuencia, el demandante, concluye que el derecho de defensa del investigado se ve limitado por las normas acusadas, en la medida en que dejan a discreción del operador disciplinario, la recepción de la exposición espontánea.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-175/01
Fecha de la sentencia	febrero catorce (14) de dos mil uno (2001).
Demandante	Luis Carlos Marín Pulgarín
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 74, parcial, de la Ley 200 de 1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”.
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.

Decision	Declarar EXEQUIBLE la expresión “La negativa se resolverá mediante providencia interlocutoria contra la cual sólo cabe el recurso de reposición”, contenida en el artículo 74 de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Unico).
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano demandante considera vulnerados los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.</p> <p>Para el demandante resulta indiscutible que el defensor como representante del presunto inculpado está facultado para presentar las pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos que se investigan, pudiéndolo hacer en cualquier etapa del proceso, sólo de esa manera se garantiza el derecho al debido proceso, situación que está siendo conculcada por el aparte del artículo 74 de la Ley 200 de 1995 demandada, pues se niega la posibilidad de aportar las pruebas por intermedio de su apoderado, circunstancia que según el actor se desprende de una interpretación completa del artículo 74 ídem.</p> <p>Aduce así mismo, que la norma demandada se encuentra en contradicción con lo preceptuado por el artículo 80 del Código Disciplinario Unico, pues esa norma garantiza en forma permanente el derecho de contradicción probatoria.</p> <p>Considera que la norma acusada da la posibilidad de que la recepción de la versión espontánea sea discrecional del investigador, pues se otorga total autonomía al funcionario indagador para que a su arbitrio decida si toma o no la versión que se solicita por el apoderado del presunto inculpado, con lo cual se restringe notablemente el derecho de defensa, pues la exposición voluntaria en sí misma es un acto de defensa “al poderse en ella, presentar pruebas, solicitar la práctica de las mismas y controvertir las que se alleguen en contra del disciplinado”.</p> <p>Finalmente, luego de citar algunas sentencias proferidas por esta Corporación, en relación con la declaratoria de inexequibilidad de algunas normas del Código Disciplinario Unico y, que a su juicio, tienen conexión con el artículo 74 ahora demandado, solicita el actor que en aras de la seguridad jurídica se realice la estructuración de la unidad normativa y consecuentemente se ajuste a la Constitución la norma acusada de inexequibilidad.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA

<p>Tiene salvamento</p>	<p>SI DRES. RODRIGO ESCOBAR GIL, CARLOS GAVIRIA DIAZ, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO</p> <p>DEBIDO PROCESO SUSTANCIAL-Garantía constitucional/DEBIDO PROCESO SUSTANCIAL-Recursos necesarios para efectividad de garantías (Salvamento de voto)</p> <p>El debido proceso sustancial se debe garantizar, desde una perspectiva constitucional, asegurando que los procedimientos creados por el legislador otorguen a las partes los recursos y mecanismos necesarios para hacer efectivas las garantías que les confiere el ordenamiento. En particular, el procedimiento debe asegurar el principio de audiatur et altera pars, el derecho de contradicción y los principios de eficiencia y economía.</p> <p>DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-No restricción de garantías por legislador (Salvamento de voto)</p> <p>El legislador no puede restringir los mecanismos legales necesarios para hacer efectiva la garantía del debido proceso sin dilaciones injustificadas, consagrada explícitamente en la Constitución.</p> <p>INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO-Recurso (Salvamento de voto)</p> <p>El recurso de reposición contra el auto que niega las pruebas en la indagación preliminar disciplinaria no constituye un mecanismo idóneo, adecuado y suficiente para preservar el debido proceso imparcial y basado en fundamentos jurídicos objetivos en esta etapa.</p> <p>DEBIDO PROCESO-Alcance/DEBIDO PROCESO-Consagración legal previa de un procedimiento (Salvamento de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO-Recursos de acción, defensa e impugnación por legislador/DEBIDO PROCESO SUSTANCIAL-Recursos procedimentales por legislador/DEBIDO PROCESO SUSTANCIAL Y FORMAL-Correlación (Salvamento de voto)</p> <p>Si se pretende que este derecho fundamental tenga un contenido, el juez constitucional debe asegurar que la ley otorgue a las partes los recursos de acción, defensa e impugnación en medida suficiente para que se les permita hacer efectivas todas aquellas garantías consagradas en el ordenamiento jurídico. Si tales recursos procedimentales establecidos legalmente son insuficientes para materializar las garantías respectivas, se está rompiendo la correlación que debe existir entre el proceso formal, contenido en la ley, y el debido proceso sustancial, como derecho consagrado</p>
-------------------------	--

	<p>constitucionalmente, y se le está dando prioridad a una concepción arbitraria del poder público, y se está trastocando la jerarquía de valores inmanente a la Constitución. Por lo tanto, al fijar el conjunto de recursos y facultades procesales disponibles a las partes en un determinado procedimiento, el legislador está obligado a observar las garantías sustanciales establecidas explícitamente en la Constitución para el tipo de actuación que pretenda regular. Adicionalmente, tiene también restricciones que derivan ya no de los contenidos constitucionales explícitos del debido proceso, sino de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.</p> <p>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Rigurosidad atendiendo referente constitucional/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Grado de discrecionalidad del legislador/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTOS-Grado de discrecionalidad (Salvamento de voto)</p> <p>La labor del juez constitucional debe ser más rigurosa en la medida en que cuente con unos parámetros explícitos para llevar a cabo su función. Por otra parte, ante la ausencia de un referente constitucional explícito, el grado de discrecionalidad de la labor legislativa y, por consiguiente, el análisis constitucional de la razonabilidad y proporcionalidad de la norma depende del valor que la Carta le asigne a los bienes jurídicos que estén siendo ponderados, dándole siempre un margen más o menos amplio al legislador para que, como órgano de representación popular, pueda regular los procedimientos judiciales y administrativos.</p> <p>DEBIDO PROCESO-Ambito de aplicación de garantías explícitas (Salvamento de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO-Interpretación amplia de garantías penales/DEBIDO PROCESO-Interpretación amplia de garantías no determinadas (Salvamento de voto)</p> <p>La jurisprudencia de la Corte ha afirmado, desde sus inicios, que aun cuando las disposiciones constitucionales utilicen términos que parezcan restringir ciertas garantías procesales al ámbito penal, éstas deben interpretarse en un sentido amplio, y no puede entenderse que las mismas carezcan de asidero constitucional en otros procesos, en la medida en que sean compatibles. En aquellos casos en que la Carta no determina directa o indirectamente a qué procesos es aplicable una garantía en particular, debe entenderse que ésta se debe aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas.</p> <p>RECURSO DE APELACION-Finalidad (Salvamento de voto)</p>
--	---

	<p>El recurso de apelación está encaminado a asegurar que sobre las decisiones judiciales o administrativas exista un mayor grado de certeza jurídica.</p> <p>DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Alcance (Salvamento de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO SUSTANCIAL-Garantías (Salvamento de voto)</p> <p>INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO-Apelación de negativa de pruebas o versión voluntaria (Salvamento de voto)</p> <p>PROCESO DISCIPLINARIO-Principios (Salvamento de voto)</p> <p>PROCEDIMIENTOS-Derechos y garantías constitucionales (Salvamento de voto)</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-555/01
Fecha de la sentencia	treinta y uno (31) de mayo de dos mil uno (2001).
Demandante	Jorge Pino Ricci
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 80, 84, 130 y 147 parciales de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE la expresión se comunicará, contenida en el segundo inciso del artículo 80 de la Ley 200 de 1995, bajo el entendido que se refiere a la notificación personal y en subsidio a la notificación por edicto, cuando a pesar de las diligencias pertinentes, de las cuales se dejará constancia secretarial en el expediente, no se haya podido notificar personalmente.</p> <p>Segundo: En relación con el artículo 130 de la ley 200 de 1995, y con la expresión “aquel la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario negará la solicitud con auto de trámite” contenida en el</p>

	artículo 147 de la misma Ley, ORDENAR ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-430 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, las normas acusadas quebrantan los preceptos contenidos en los artículos 21 y 29 de la Constitución Política.</p> <p>Comienza la demanda por señalar que en el artículo 29 superior el Constituyente estableció las garantías que aseguran la observancia del debido proceso, las cuales tienen vigencia no sólo en el derecho penal, sino también en el administrativo. Continúa indicando que los derechos de defensa y de contradicción consignados en el artículo constitucional mencionado, consagran concretamente la garantía del sindicado de presentar y solicitar la práctica de pruebas y controvertir aquellas que se alleguen en su contra. Agrega que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, establecen en su articulado “el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías por un juez o tribunal imparcial, para la sustanciación de cualquier acusación que se formule contra ella”.</p> <p>Considera que los principios de celeridad y eficacia de los procedimientos no pueden “servir de título suficiente para sacrificar uno de los pilares del estado de derecho cual es la presunción de inocencia que solo puede desvirtuarse luego de una actividad probatoria concienzuda en la que se haya, no solo permitido, sino patrocinado la intervención del investigado solicitando pruebas y controvirtiendo las allegadas, contrainterrogando testigos, y aportando nuevos elementos de juicio para que se llegue a la verdad real.” En su sentir, esta actividad probatoria a que hace referencia, es especialmente importante dentro de los procesos disciplinarios, toda vez que en este caso la potestad sancionadora “se erige sobre tipos legales más abiertos y discrecionales que los del derecho penal... Por esa razón, la observancia del debido proceso debe ser absolutamente estricta... porque el riesgo de arbitrariedad y abuso del poder está más latente que en el proceso penal que se adelanta ante un juez imparcial.”</p> <p>Por lo anterior, encuentra contraria a los postulados que sustentan el Estado de Derecho, una norma que, como la contenida en el artículo 147 de la Ley 200 de 1995, “faculta al funcionario investigador para negarse a recibir el testimonio de la persona a la cual investiga antes de la formulación de cargos, sin ninguna justificación valedera.” Esta situación es especialmente grave,</p>



	<p>arguye la demanda, pues una vez formulados los cargos la presunción de inocencia desaparece dando lugar a la presunción de culpabilidad que el disciplinado deberá desvirtuar.</p> <p>En relación con la inconstitucionalidad de los artículos 80 y 130, advierte que el Código Disciplinario Único contempla la notificación personal únicamente respecto del auto de cargos, el que niega pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos. Esto hace que durante la actividad probatoria que se lleva a cabo con anterioridad a la expedición del pliego de cargos y que es absolutamente fundamental para definir la culpabilidad del investigado, no haya garantía para su intervención, pues la Ley 200 de 1995 “no establece el deber de notificarlo personalmente del inicio de la indagación preliminar, ni de la apertura de la investigación disciplinaria.” Por ello, al decir el artículo 80 que al investigado solamente se le “comunicarán” las averiguaciones que se estén adelantando en su contra, desconoce el derecho de defensa y de contradicción.</p> <p>En relación con lo anterior, estima el demandante que “las comunicaciones y los avisos son mecanismos procesales de información que las entidades públicas utilizan sin formalidad o ritualidad, incapaces de dar la más mínima certeza de que el destinatario de la comunicación efectivamente fue enterado de lo que se pretendía informar.”</p> <p>Finalmente, el demandante afirma que al permitir la ley que la vinculación del funcionario al proceso se realice mediante una simple comunicación o aviso, patrocina la vulneración del derecho a la honra, puesto que en la mayoría de los casos, el disciplinado sólo tiene conocimiento de la investigación que se sigue en su contra a través de los medios masivos de comunicación. Con ello, a su juicio, “se permite que la honra de una persona sea puesta en entredicho mucho antes de haber sido condenada.”</p> <p>Concluye entonces, que el mecanismo de la “comunicación” consagrado en el Código Disciplinario Único para que el implicado se entere de una investigación en su contra, constituye un mecanismo exiguo que le impide defenderse y controvertir las pruebas que lo inculpen, y que desconoce la presunción de inocencia.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA

Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
-----------------------------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-556/01
Fecha de la sentencia	treinta y uno (31) de mayo del año dos mil uno (2001).
Demandante	Carlos Enrique Roa Montoya
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 36 (parcial) de la Ley 200 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	Declarar EXEQUIBLE el aparte <i>“vencido el cual sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procede decisión distinta a la declaratoria de la prescripción”</i> contenido en el artículo 36 de la Ley 200 de 1995, “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que la norma enjuiciada vulnera los artículos 15 y 21 de la Constitución Política.</p> <p>Partiendo de las regulaciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal en materia de presunción de inocencia (art. 2 y 445 C.P.P.) y renuncia a la prescripción de la acción penal (art. 42 C.P.P.), así como de la cita de diversos autores en relación con derecho a la honra, el actor analiza el contenido del artículo cuyo aparte se ataca en esta demanda para concluir que “Indudablemente todo asomo de duda con respecto a si sí o no el disciplinado es responsable de la conducta que se le endilga, deja una impresión desagradable, por cuanto no es lo mismo ser absuelto, que haber sido beneficiado (sic), favorecido por una prescripción que deja abierta la posibilidad de la responsabilidad del disciplinado, y que simplemente queda impune su conducta por</p>

	<p>negligencia del operador disciplinario”.</p> <p>El demandante considera que el derecho que se le concede al disciplinado de renunciar al término prescriptivo no es otra cosa que permitirle escoger entre la prescripción y el ser absuelto.</p> <p>Para el actor no es lógico que a pesar de la renuncia a la prescripción no se logre un “fallo real” que ponga fin al proceso de manera ordinaria dejando totalmente definida la responsabilidad o no del procesado..</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-653/01
Fecha de la sentencia	junio veinte (20) de dos mil uno (2001).
Demandante	Roberto Augusto Serrato Valdés y Juan Carlos Hincapié Mejía.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del párrafo del artículo 26 de la Ley 200 de 1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.”
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Decision	Declárase INEXEQUIBLE el párrafo del artículo 26 de la Ley 200 de 1995 “Por medio del cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>El actor estima que el parágrafo del artículo 26 de la ley 200 de 1995, desconoce el artículo 13 de la Constitución. El cargo de la demanda puede sintetizarse, así:</p> <p>La norma acusada es inconstitucional, porque no es explicable que el legislador incluya únicamente a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, como susceptibles de sanción disciplinaria de mala conducta por violar el debido proceso, pues a juicio del actor, tal sanción debe ser predicable de cualquier servidor público, sin tener en consideración la entidad para la cual laboran, sino el daño que causan al derecho fundamental protegido por la norma.</p> <p>Por tanto, es evidente el trato discriminatorio que se da en un proceso disciplinario por violación al debido proceso, seguido contra un servidor público de la Procuraduría General de la Nación y otro que se adelante frente a cualquier otro funcionario estatal que tenga competencia disciplinaria.</p> <p>Concluye afirmando que aunque sería factible demandar únicamente el acápite del parágrafo de la norma demandada, tal acción conduciría al error de ampliar por vía de la interpretación constitucional una sanción que el legislador omitió consagrar.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. ALFREDO BELTRÁN SIERRA, JAIME ARAUJO RENTERÍA, RODRIGO ESCOBAR GIL ALVARO TAFUR GALVIS</p> <p>DEBIDO PROCESO POR FUNCIONARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL-Finalidad legítima (Salvamento de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO POR PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Exigencia mayor de cumplimiento/PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Exigencia mayor de protección de garantías constitucionales (Salvamento de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Exigencia mayor de protección por Procuraduría (Salvamento de voto)</p> <p>PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Materialidad/PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Exigencia mayor de protección por Ministerio Público (Salvamento de voto)</p> <p>RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Determinación legislativa (Salvamento de voto)</p>

	<p>CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Ambito de acción (Salvamento de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO EN MATERIA DISCIPLINARIA-Observancia en todas las actuaciones/DEBIDO PROCESO POR PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Observancia en todas las actuaciones disciplinarias (Salvamento de voto)</p> <p>DEBIDO PROCESO-No constituye vulneración cualquier irregularidad (Salvamento de voto)</p> <p>Los suscritos magistrados, con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corporación, nos vemos precisados a salvar nuestro voto en relación con la sentencia C-653 de 20 de junio de 2001, en la cual se declaró inexecutable el parágrafo del artículo 26 de la ley 200 de 1995 <i>“Por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único,”</i> por las razones que a continuación se exponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Como se sabe, el parágrafo del artículo 26 de la ley 200 de 1995 establece como “causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”, la violación del debido proceso por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, norma esta que demandada como inconstitucional, se declaró inexecutable por la Corte en la sentencia respecto de la cual salvamos nuestro voto.</li> <li>2. La inconstitucionalidad de la norma aludida fue declarada por la Corte bajo la consideración de que ella viola el principio de igualdad consagrado en la Carta Política y porque, además, a juicio de la mayoría quebranta también el principio de legalidad en materia disciplinaria.</li> <li>3. En cuanto hace a la supuesta violación del principio de igualdad y los argumentos en que la sentencia se funda para el efecto, no los compartimos y ello nos lleva a discrepar de la sentencia aludida.</li> </ol> <p>3.1. En primer término, se observa que en el texto mismo de esa providencia se afirma, como nosotros lo sostuvimos en la Sala, que el fin de preservar el respeto al debido proceso por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación es constitucionalmente legítimo; se acepta también por la sentencia, que el legislador puede establecer distinciones entre los funcionarios públicos en orden a garantizar el debido proceso en las actuaciones disciplinarias, punto este que de igual manera se sostuvo por los suscritos magistrados durante el debate del proyecto de sentencia inicial.</p>
--	---

	<p>3.2. No obstante ello, se asevera en el fallo que elevar a “mala conducta” la actuación de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación cuando violan el debido proceso no es el medio “adecuado para alcanzar el fin buscado por la norma”, premisa esta que es la que finalmente conduce a la mayoría de la Corte a la conclusión de que se vulnera el derecho a la igualdad, porque se excluye a los demás funcionarios del Estado de ese tratamiento, por una parte; y porque se incluyen en tal conducta “todas las actuaciones realizadas por los funcionarios de la Procuraduría”.</p> <p>Respecto a la supuesta inconstitucionalidad por excluir a los demás funcionarios del Estado de la causal de “mala conducta” por violación al debido proceso, salta a la vista que el legislador, en ejercicio de su potestad de “hacer las leyes”, en ese punto, en principio, puede establecer, de manera legítima y conforme a la Constitución esa causal teniendo en cuenta que no todos los funcionarios desempeñan la misma labor, ni tienen la misma categoría, por lo que, bien puede, como lo hizo, establecer que a quienes forman parte de la Procuraduría General de la Nación, organismo de control de las actividades oficiales de todos los demás servidores públicos, se les debe exigir, en mayor grado y cuando se trata de los procesos disciplinarios, el máximo respeto por la intangibilidad de las garantías del debido proceso pues ellos como depositarios últimos de esa función conforme al artículo 277 numeral 6 de la Constitución deben, con mayor rigor que los demás encausar sus actividades oficiales en esa materia a la protección efectiva de los derechos humanos, uno de los cuales es el del debido proceso y asegurar su efectividad como lo exige el artículo 278 numeral 2 de la Carta Política.</p> <p>En manera alguna puede aceptarse que esa misión específica que asigna al Ministerio Público la Constitución “<i>lo es sólo en un sentido formal</i>”, como se afirma finalmente en la sentencia (párrafo segundo página 6), pues, precisamente, de lo que se trata es de la efectividad de los derechos fundamentales, que no puede detenerse en “<i>un sentido formal</i>”, sino que ha de ser <u>material, sustancial, y de mayor exigencia al Ministerio Público, dada la delicada función que le asigna la Constitución.</u></p> <p>Agregase a lo dicho que no extender la causal de “mala conducta” a que se ha hecho referencia a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a los Personeros Municipales, no significa que por tal razón sea contrario a la Carta el parágrafo del artículo 26 de la ley 200 de 1995, pues pretender lo contrario es tanto como indicarle al legislador que por no haberlos incluido en esa norma para ese efecto no puede hacerlo en el futuro y, además, ha de tenerse en cuenta que en ese punto se impone el respeto a la decisión</p>
--	--

	<p>democrática del legislador pues ni los personeros ni el defensor del pueblo tienen el poder disciplinario preferente que la Constitución asigna a la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>3.3. El párrafo que se demanda se encuentra ajustado a la Constitución ya que no es más que desarrollo del artículo 124 de la misma que permite al legislador determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.</p> <p>Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación no sólo tienen como los otros funcionarios, una potestad disciplinaria, dentro de su respectiva entidad, sino que la tienen también sobre todos los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; sobre los miembros de la fuerza pública, y como si fuera poco sobre los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria y sobre las personas que administran los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución.</p> <p>3.4. De otro lado, se afirma en la sentencia que no incluir como causal de mala conducta “todas las actuaciones realizadas dentro de la Procuraduría” quebranta el principio de igualdad, argumento que no compartimos, pues resulta evidente que la ley 200 de 1995 - Código Disciplinario Único- no tiene como objeto regular todas las actuaciones de la Procuraduría, ni como ámbito de aplicación todas las actuaciones de todos los funcionarios públicos, sino, única y exclusivamente lo atinente al régimen disciplinario de los servidores públicos, lo que, de manera ineludible lleva a concluir que el argumento a que ahora nos referimos se desvió por completo del asunto concreto a consideración de la Corte, pues una interpretación sistemática y teleológica del párrafo del artículo 26 de la ley mencionada, impone su análisis dentro del preciso marco del derecho disciplinario y del código de que trata la ley en mención. De esta suerte, la extensión de la norma fuera de ese ámbito que la sentencia le endilga a ese párrafo para dolerse luego de que incluiría aun actividades ajenas al campo disciplinario, carece por completo de fundamento lógico jurídico.</p> <p>4. Con respecto a la supuesta violación del principio de legalidad en materia disciplinaria, se afirma en la sentencia que el legislador ha de definir de manera previa, taxativa e inequívoca las conductas que constituyan faltas disciplinarias, señalando, además, las sanciones respectivas y las reglas para la investigación y decisión sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios investigados, lo que, según la sentencia, no se cumple por el párrafo del artículo 26 de la ley 200 de 1995, porque la conducta descrita en él “es excesivamente indeterminada”, ya que no se</p>
--	--

	<p>precisa “cuáles son los elementos del debido proceso que debe respetar un funcionario de la Procuraduría en sus actuaciones”, por lo que se considera violado el artículo 29 de la Constitución.</p> <p>4.1. En relación con la garantía constitucional a la definición previa e inequívoca por la ley de las conductas constitutivas de delitos o, en este caso, de faltas disciplinarias no hay ninguna discrepancia, pues ello obedece a una conquista de carácter democrático que siempre hemos defendido y continuaremos defendiendo, como soporte indispensable para restringir eventuales abusos de autoridades arbitrarias y para rodear de esa garantía infranqueable la libertad del ciudadano.</p> <p>Con todo, ese no es el asunto objeto de la discusión en esta oportunidad ante la Corte, pues, en esta ocasión en el párrafo acusado se encuentra cumplido a cabalidad por el legislador el principio de legalidad. En efecto, queda claro que en ese párrafo, de manera inequívoca, se define quién es el sujeto de esa conducta, a saber: “el funcionario de la Procuraduría General de la Nación”; además, se indica cuál es la falta, al definir que en ella incurre ese sujeto calificado cuando “viole el debido proceso”, con lo cual se cumple con la carga de la tipificación de la falta, cara al principio de legalidad.</p> <p>La discrepancia se pone de manifiesto en cuanto a la afirmación contenida en la sentencia de no haberse establecido con precisión “cuáles son los elementos del debido proceso que debe respetar un funcionario de la Procuraduría en sus actuaciones”. Para nosotros, la respuesta es clara: <u>en todas las actuaciones disciplinarias cuando se ejerza esa potestad por el Ministerio Público en procesos de esta índole, debe respetarse el debido proceso</u>. Y, en cuanto hace a la supuesta indeterminación de este concepto, obsérvese que la Constitución no lo define, pero existen unos elementos fundamentales universalmente aceptados que indican claramente que no es violación del debido proceso cualquier irregularidad, sino el quebrantamiento de garantías básicas fundamentales que lo estructuran, como sucede con la existencia del juez natural, la competencia del funcionario previamente establecida por la ley, el derecho a la prueba, el derecho de defensa, a presentar alegatos en forma oportuna, el derecho a impugnar las providencias ya sea proponiendo nulidades o interponiendo recursos, que, precisamente, por su trascendencia, a quienes no puede excusarse su quebrantamiento es a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA



Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
-----------------------------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1172/01
Fecha de la sentencia	ocho (8) de noviembre de dos mil uno (2001).
Demandante	Felipe Chalela Arango
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 parcial, de la Ley 182 de 1995 <i>“Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para la contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Primero : Declarar EXEQUIBLE la expresión <i>“en cualquier momento”</i> contenida en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995, bajo el entendido de que la intervención del Presidente de la República en la televisión, será personal, y sobre asuntos urgentes de interés público relacionados con el ejercicio de sus funciones.  Segundo : Declarar INEXEQUIBLE la expresión <i>“y sin ninguna limitación”</i> contenida en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Considera el ciudadano demandante que el aparte del artículo 32 de la Ley 182 de 1995, viola los artículos 20, 77 y 16 de la Constitución Política, al permitir que el Presidente de la República pueda utilizar los servicios de televisión en cualquier momento y sin ninguna limitación. Aclara que el reproche de constitucionalidad no se encuentra dirigido contra la facultad que tiene el Jefe de Estado de dirigirse al país a través de la televisión, sino en la potestad ilimitada de esa facultad que el legislador le confiere, lo que a su juicio transgrede el derecho fundamental a informar.

	<p>En efecto, señala que son dos los aspectos relevantes de la norma que vulneran el derecho a informar; en primer lugar, la implantación legal de una potestad absoluta para utilizar los canales de televisión; y, en segundo lugar, la posibilidad de que esa potestad limite sin ninguna justificación el derecho a informar. Aduce que las expresiones acusadas implican una irrestricta facultad, tanto en los días y horas de utilizar el servicio de televisión, como en la utilización de todos o algunos de los canales, la duración de la intervención y la determinación del tipo de tecnología para el enlace de los canales a utilizar.</p> <p>Agrega que mientras exista la facultad consagrada en el acápite demandado, el derecho a la información que se ejerce a través del medio televisivo, siempre deberá ceder ante la ilimitada potestad del Presidente para utilizar dicho medio.</p> <p>Por otra parte, manifiesta el actor que de conformidad con el primer inciso del artículo 77 superior la regulación del servicio de televisión que realice el legislador, debe respetar integralmente las libertades y los derechos reconocidos en la Constitución Política, porque cualquier disposición legal que desconozca esas libertades y derechos vulnera la disposición constitucional citada. Así las cosas, considera que en relación con el derecho a la información, las únicas limitaciones que la Carta contempla para su ejercicio, son las encaminadas a lograr que la información sea veraz e imparcial, por ello, considera que cualquier limitación injustificada a ese derecho (información) deviene en una clara vulneración de la Constitución Política.</p> <p>En su concepto, no existe una proporcionalidad entre la limitación del derecho a informar y la finalidad que pudo llevar al legislador a consagrar el acápite demandando del artículo 32 de la Ley 182 de 1995, por cuanto la facultad ilimitada al Presidente de la República para utilizar los servicios de televisión, que introduce el precepto acusado, se convierte en un instrumento de restricción del derecho a informar, pues no existe <i>“obstáculo alguno para que aquél utilice los servicios de televisión sin ningún tipo de medida o control”</i>.</p> <p>Finalmente, el demandante considera que el precepto acusado viola el artículo 16 de la Carta, porque en el ámbito de la televisión el derecho al libre desarrollo de la personalidad se manifiesta en la posibilidad de escoger libremente los programas que se quieren ver. No obstante, con la norma demandada se permite que el Jefe de Estado, sin ningún condicionamiento cuente con la prerrogativa legal para imponer la programación o información que los televidentes deben ver, puesto que el Presidente puede utilizar sin límite alguno todos los canales de televisión quedando el televidente obligado a ver la alocución presidencial.</p>
--	---

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. MARCO GERARDO MONROY CABRA</p> <p>INFORMACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR TELEVISION- Derecho deber sobre asuntos de trascendencia nacional (Salvamento parcial y aclaración de voto)</p> <p>INFORMACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR TELEVISION- No limitación (Salvamento parcial y aclaración de voto)</p> <p><i>La falta de límites a que se refería la norma, por razones de la propia dignidad presidencial derivada de su altísima responsabilidad, hacía relación a la imposibilidad de que cualquier otra autoridad constituida, perteneciente a la Administración Pública, a otra rama del Poder Público o a organismos autónomos de control, fijara límites temporales al ejercicio del mencionado derecho-deber del Presidente. Era de la esfera de la libertad de configuración del legislador dejar en cabeza del primer mandatario la evaluación de las circunstancias de razonabilidad y proporcionalidad antedichas, y más propio de la naturaleza y dignidad de la función presidencial, que el someter dicha evaluación al criterio de otras autoridades de inferir rango, cuya designación en ningún caso tiene la misma base democrática y popular que sí soporta a la investidura presidencial. Los permisos o autorizaciones previas a la intervención del Presidente, con fijación de límites temporales, se revelan contrarios a su natural superioridad jerárquica y al principio de buena fe. Adicionalmente, por razones de tipo fáctico, no es posible que la facultad presidencial de intervención pública a través de la televisión sea enmarcada de manera general y para todas las ocasiones dentro de parámetros temporales preestablecidos por la ley y fijos, pues la duración de tales intervenciones debe acomodarse a la naturaleza de las circunstancias que las motivan, por lo cual en cada oportunidad debe ser evaluada de manera diferente.</i></p> <p>INFORMACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR TELEVISION- Presentación en cualquier momento (Salvamento parcial y aclaración de voto)</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	SI DR MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

	<p>INFORMACION PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR TELEVISION-Tensión entre interrupción de programación y derechos de ciudadanos/INFORMACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR TELEVISION-Alocución presidencial de carácter urgente (Aclaración de voto)</p> <p>INFORMACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR TELEVISION-Tensión entre interrupción de programación y derechos de canales y operadores privados (Aclaración de voto)</p> <p>INFORMACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR TELEVISION-Tensión entre temas de controversia pública y pluralismo político medular (Aclaración de voto)</p> <p>SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION POR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Ejercicio de poder (Aclaración de voto)</p> <p><i>Cuando el Presidente usa la televisión más que cumplir un deber ejerce un poder; más que ejercerlo de manera objetiva lo hace según las necesidades y conveniencias que él mismo aprecia de manera subjetiva y a partir de criterios dentro de los cuales no están siempre excluidos los personales; más que transmitir información comunica un mensaje, defiende unas políticas, responde a unas críticas; más que enterar a los ciudadanos de lo que está pasando para que éstos se formen libremente una opinión trata de influir en la opinión pública para que ésta sea favorable a su gestión gubernamental lo cual es legítimo no sólo en la política sino en la democracia.</i></p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-783/01
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de julio de dos mil uno (2001).
Demandante	Miguel Hernando González Rodríguez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 15 (parciales) de la ley 226 de 1995
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Decision	<p>Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-384 de 1996, que declaró EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 14 de la Ley 226 de 1995, en el entendido de que las medidas que puede adoptar el Gobierno en virtud de ellas son de carácter puramente administrativo.</p> <p>Segundo. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-343 de 1996, que declaró EXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 226 de 1995, con excepción de las expresiones "sólo", de la primera parte de su primer inciso; "sólo" y "cuando el órgano público vendedor así lo solicite", de la primera parte de su segundo inciso, y "por ser de carácter procedimental", de su inciso tercero, las cuales se declararon INEXEQUIBLES.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que el legislador no puede otorgar al Gobierno la posibilidad de establecer restricciones o limitaciones a la negociabilidad de acciones, porque ello no corresponde a una correcta interpretación del artículo 60 de la Constitución. Advierte que si bien es cierto que la Carta permite fijar condiciones especiales para el acceso y la democratización de la propiedad, no es dable inferir la facultad de limitación a los derechos de goce y disposición de un derecho como la propiedad.</p> <p>Según su parecer, el artículo 14 de la ley 226 de 1995 hace una interpretación errónea de la Constitución al establecer una supuesta limitación a la propiedad mediante restricciones injustificadas a los derechos de sus titulares.</p> <p>Para el demandante, el inciso 1º del artículo 15 acusado desconoce el artículo 229 Superior, toda vez que legislador no puede</p>

	<p>condicionar la titularidad de la acción de nulidad absoluta, so pena de vulnerar los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia. Indica lo siguiente:</p> <p><i>“Ante la presencia de un acto desprovisto de toda eficacia jurídica, por causa de un vicio que lo afecta de manera total y que por ende le consume su existencia jurídica, no es justificable que el legislador imponga una restricción de tal talante, ya que con ello no sólo afecta los intereses legítimos de terceros, sino que permite que un acto espúreo se oculte bajo el manto de la legalidad, máxime cuando el contrato viciado recae sobre un derecho que como el de la propiedad merece una especial protección”.</i></p> <p>En cuanto tiene que ver con el segundo inciso del artículo 15 de la ley 226 de 1995, el actor lo considera violatorio del derecho a la igualdad, en tanto permite solicitar la restitución de acciones únicamente a una de las partes, esto es, al Ministerio Público. Así mismo, concluye que la actividad del juez se ve menoscabada puesto que se le impide ordenar las restituciones mutuas como consecuencia de una eventual nulidad.</p> <p>Finalmente, el demandante solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de las normas acusadas con efectos retroactivos a la sentencia, pues, en su sentir, la segunda década de los años 90 fue prolífica en los procesos de privatización, pero con ello se causó un detrimento al sector solidario.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-057/01
Fecha de la sentencia	enero veinticuatro (24) de dos mil uno (2001)
Demandante	Jaime Enrique Lozano
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 34 de la Ley 228 de 1995 "por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones".
Conoció en primera instancia	Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Decision	<p>Primero.- Declárase INHIBIDA para conocer del segmento del artículo 34 de la Ley 228 de 1995, que corresponde a las expresiones “entre autoridades de policía y entre fiscales o”, por la derogación tácita que del mismo hiciera el artículo 114, numeral 3 de la Ley 270 de 1996.</p> <p>Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES las expresiones del artículo 34 de la Ley 228 de 1995, “Todo conflicto de competencias que se suscite (...) entre fiscales y jueces, será resuelto por los jueces del circuito del lugar donde se cometió el hecho.”</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor, que la disposición acusada es contraria al artículo 256, numeral 6 de la Constitución Política, que señala expresamente la autoridad competente para resolver las colisiones de competencia entre autoridades de distinta jurisdicción. Así, a la luz de la Constitución, la función de dirimir conflictos de competencia está asignada al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso, de manera que no puede el legislador desconocer tal competencia y atribuírsela a autoridades diferentes, tal como lo hace en el artículo acusado.</p> <p>En el mismo sentido, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en los artículos 112 y 114 regula lo concerniente a los conflictos de competencia, sin que de ellos se desprenda que el juez penal del circuito tenga competencia para dirimir las colisiones suscitadas entre las autoridades de policía y los jueces y fiscales. En este sentido, la norma acusada no sólo desconoce la Constitución sino también la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.</p> <p>Igualmente, observa el actor, del contenido de la disposición acusada se desprenden una serie de incongruencias, pues su</p>

	<p>aplicación hará que en determinados casos, un juez del circuito quede facultado para resolver un conflicto de competencia en el que una de las autoridades involucradas sea un funcionario de su misma jerarquía, como lo sería el caso de un fiscal seccional, evento en el cual esa función corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En otros términos, la norma acusada también desconoce la competencia asignada a este máximo órgano de la jurisdicción, pues los conflictos que se susciten entre fiscales y jueces deben ser resueltos por esa corporación.</p> <p>Por lo anterior, se solicita a la Corte declarar la inexecutable de la norma acusada o determinar su alcance mediante una sentencia modulativa.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-060/01
Fecha de la sentencia	veinticuatro (24) de enero de dos mil uno (2001).
Demandante	Rigoberto Amaya Neira
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el tercer inciso del párrafo del artículo 19 de la Ley 182 de 1.995, tal y como fue modificado por el artículo 4 de la Ley 335 de 1.996.
Conoció en primera instancia	Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Decision	Declarar INEXEQUIBLE, el inciso tercero del párrafo del artículo 19 de la Ley 182 de 1.995, tal y como fue modificado por el artículo 4 de la Ley 335 de 1.996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA



Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que la disposición acusada es violatoria del artículo 116 de la Constitución Política por las siguientes razones:</p> <p>En su criterio, el arbitraje sólo está permitido por el artículo 116 Superior cuando los árbitros hayan sido habilitados expresamente por las partes de la controversia; y la norma acusada, si bien <i>“establece en forma mandatoria, como mecanismo de solución de la controversia y la convocatoria del tribunal de arbitramento, tal estipulación se torna inaplicable en la práctica ya que en virtud de la misma, ninguna de las partes está dotada de la fuerza vinculante suficiente para obligar a la otra a comparecer ante un tribunal de arbitramento con el propósito de dirimir una eventual controversia, ya que ello sólo es posible, por mandato de la Carta, mediante la existencia de la cláusula compromisoria, cuya estipulación hace suponer la preexistencia de un contrato. Pero, para el caso sub-júdice, se trata precisamente del ‘evento de no presentarse acuerdo entre las partes’”</i>.</p> <p>Estos mismos argumentos permiten afirmar que la norma demandada establece un procedimiento que la práctica hace nugatorio, y <i>“contribuye a la dilación en la definición de los asuntos que deben someterse al arbitraje, a la frustración de las partes, a la indefinición jurídica y a la congestión de las instancias judiciales</i></p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

<b>Tipo de sentencia</b>	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
<b>Identificar la sentencia</b>	Sentencia C-410/01
<b>Fecha de la sentencia</b>	veinticinco (25) de abril del año dos mil uno (2001).
<b>Demandante</b>	Amed Antenor Abasolo Urresta.
<b>Demandado</b>	<i>Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 60, parcial, de la Ley 361 de 1997.</i>
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.
<b>Decision</b>	Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión <i>“conducidos por una persona con limitación”</i> , contenida en el artículo 60 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que la norma se refiere simplemente a los vehículos que transportan a alguna de las personas destinatarias de dicha Ley.

<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>El actor considera que el aparte “<i>conducidos por una persona con limitación</i>” contenido en el artículo 60 de la Ley 361 de 1997, no obstante “<i>tener una finalidad garantista</i>”, desconoce el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 13, 16, 24, 47, 58 y 60 de la Constitución Política.</p> <p>Para fundamentar su petición expone los argumentos que se sintetizan como sigue:</p> <p>Conceptúa que la gestión estatal debe estar encaminada a garantizar a todas las personas condiciones mínimas de dignidad y que, en un orden social justo, tal gestión presupone la aplicación de instrumentos y mecanismos capaces de lograr la rehabilitación e integración de quienes se encuentran en estado de debilidad manifiesta, con miras a que, por sí mismos, puedan satisfacer sus aspiraciones –artículos 1º y 2º C. P.-.</p> <p>Basándose en el anterior marco conceptual, indica que el aparte demandado desconoce el derecho a la igualdad de aquellos que por sus circunstancias físicas, mentales o económicas ameritan un trato especial, puesto que les exige unas condiciones que no pueden cumplir para acceder a los medios materiales que requieren para vivir con dignidad –artículo 13 C. P.-.</p> <p>Por lo anterior, demanda la intervención de ésta Corporación con miras a lograr una “<i>solución compensada</i>”, que haga efectivo el reconocimiento de los derechos de las personas con limitación, regulados a lo largo del articulado de la misma Ley -361 de 1997-, por cuanto estima que contraría la Constitución Política negar a quienes no pueden conducir el vehículo que los transporta, el derecho a estacionar en sitios señalados para tal fin, como lo hace la expresión en comentario.</p> <p>Agrega que la frase cuestionada quebranta el artículo 24 de la Constitución Política porque restringe el derecho de movilizarse de quienes adolecen, como él, de limitación física severa, en razón de que, como no pueden conducir se les impide estacionar el vehículo que los transporta y acceder con facilidad a los lugares en los que pueden integrarse a la sociedad.</p> <p>De otra parte, aunque el actor reconoce la necesidad de que la ley regule el uso de los lugares específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para minusválidos, de tal manera que sean realmente utilizados por las personas con limitación, considera que, so pretexto de regular, no es dable</p>

	<p>excluir a una parte considerable de la población discapacitada del beneficio que representa tener un lugar acorde con su situación para estacionar, porque tal exclusión contradice los objetivos que el artículo 1º de la misma ley pregona, en cuanto deja sin protección a la población con limitación severa y profunda.</p> <p>Afirma que al Estado le corresponde crear las condiciones que hagan realidad las previsiones de la Constitución Política y las recomendaciones hechas en la “<i>Conferencia de Viena de 1986</i>”, sobre legislación para minusválidos, de tal suerte que como la frase demandada, aunque proteccionista, discrimina a quienes por sufrir una discapacidad más severa requieren ser asistidos en la conducción de su vehículo, quebranta el Ordenamiento Superior – artículos 13 y 93-.</p> <p>Para concluir, el demandante indica que el aparte demandado también vulnera los artículos 58 y 60 constitucionales, en cuanto impide a las personas que sufren de limitación física severa disfrutar del vehículo de su propiedad, por estar físicamente imposibilitados para conducirlo</p>
<b>Decision de la Corte</b>	NO APLICA
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-741/01
Fecha de la sentencia	julio once (11) de dos mil uno (2001)
Demandante	Hernán Guillermo Aldana Duque
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 de la Ley 363 de 1997 “por la cual se reforma la Ley 132 de 1994, Estatuto Orgánico de los Fondos Ganaderos”.
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Decision	Primero.- INHIBIRSE para decidir sobre la constitucionalidad del artículo 23 de la Ley 363 de 1997 por inepta demanda.
Conoció en segunda	NO APLICA

instancia	
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En opinión del actor, el artículo 23 de la Ley 363 de 1997 vulnera los artículos 1, 2, 13, 38, 150 numeral 7, 298 y 300 de la Constitución Política. Estos son los argumentos en los que se sustenta la acusación presentada:</p> <p>1. El artículo acusado señala que para los efectos pertinentes previstos en la Ley 363 de 1997, la representación nacional de los Fondos Ganaderos estará en cabeza de una entidad denominada: Federación Nacional de Fondos Ganaderos (Fedefondos). La disposición supone “que para que la representación opere, es requisito necesario que los Fondos Ganaderos se asocien en aquella”<sup>11</sup>. Esto significa “que un Fondo Ganadero Departamental deberá necesaria y forzosamente integrarse como socio de la Federación de Fondos Ganaderos, so pena de no tener acceso a las líneas de crédito, que es uno de los aspectos establecidos en el artículo 17 de la Ley 363 de 1997”<sup>12</sup>.</p> <p>En este orden de ideas, añade que: “no existe un motivo razonable que justifique que los Fondos, no obstante ser personas jurídicas de derecho privado, y por lo tanto, gozar de plena capacidad de goce y de ejercicio, se vean obligados a transitar por la Vía de la Federación Nacional de Fondos Ganaderos para tramitar y obtener los recursos de crédito que, como servicio público que es, debiera ofrecerse por el Estado en las condiciones más sencillas y directas posibles, en aplicación del principio de celeridad y economía que rige la función administrativa”<sup>13</sup>. Así, se viola el artículo 38 de la Constitución, “al transmutarse, por la voluntad del legislador, el derecho de asociación en el deber de asociación”<sup>14</sup>.</p> <p>2. En consecuencia, la norma impugnada también infringe el derecho a la igualdad garantizado por la Carta Política, pues sólo reconoce a los Fondos Ganaderos como beneficiarios del crédito agropecuario a través de las líneas de crédito que refiere la Ley 363 de 1997. Señala el actor que “otros sujetos eventualmente beneficiarios del crédito agropecuario a través de la línea de crédito citada [por ejemplo, las personas naturales o jurídicas], se ven tratados de modo diferente a como lo son los Fondos Ganaderos, lo cual introduce, dada la similitud de situaciones entre aquellos y éstos, un trato discriminatorio injustificado y desigual que atenta</p>

---

<sup>11</sup> Cfr. folio 4 del expediente.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Cfr. folio 5 y siguientes del expediente.

<sup>14</sup> Cfr. folio 7 del expediente.

	<p>contra el principio establecido en el artículo 13 de la Constitución, según el cual los sujetos de derechos se deben tratar en condiciones de igualdad”<sup>15</sup>.</p> <p>3. “Como ocurre que muchos de los Fondos Ganaderos no son, a términos del artículo 97 de la Ley 498 de 1999, sociedades de economía mixta, por ser la participación de capital de origen público inferior al 50% del capital social, resulta que el legislador, adicionalmente, ha intervenido en el campo de la autonomía de la voluntad de las personas privadas, lo cual lesiona igualmente el citado precepto constitucional, en relación con el artículo 150, numeral 7. En efecto, esta norma le permite al legislador intervenir en materia de estructuración de la administración pública y en la creación de sociedades de economía mixta, o mediante la autorización para constituir las, pero no en las sociedades que no tienen tal naturaleza”<sup>16</sup>.</p> <p>4. Existe, además, una clara vulneración del principio de autonomía de los entes territoriales a los que se hace referencia en los artículos 1, 298 y 300 de la Constitución Política. Sobre el particular se señala que: “[l]a creación de los Fondos Ganaderos Departamentales es competencia exclusiva de las Asambleas Departamentales y manifestación del poder autónomo del manejo de sus bienes y rentas”<sup>17</sup>. Así, “al disponer el artículo acusado que los citados Fondos y por ende sus bienes, serán representados por una Federación de Fondos a la cual, se debe llegar por vía obligada y no por la espontánea voluntad de los Fondos Ganaderos Departamentales, si quieren beneficiarse de los servicios y bienes que ofrece y regula esta ley,..., la autonomía en el manejo de los bienes y rentas de los Departamentos se ve afectada en el grado territorial indicado y destruido el núcleo central de la estructura conceptual de la autonomía administrativa y fiscal de esos entes territoriales”<sup>18</sup>.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Cfr. folio 8 del expediente. Esta es la transcripción del cargo presentado; no existe en el documento de la demanda ninguna otra referencia que desarrolle o explique la idea aquí presentada.

<sup>17</sup> Cfr. folio 9 del expediente.

<sup>18</sup> Ibid.

Resumen aclarações	de las	NO APLICA
-----------------------	--------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-869/01
Fecha de la sentencia	<i>agosto dieciséis (16) de dos mil uno (2001)</i>
Demandante	<i>Manuel Armando González Cañón y otro</i>
Demandado	<i>Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 de la Ley 383 de 1997.</i>
Conoció en primera instancia	<i>Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA</i>
Decision	Declararse INHIBIDA para llevar a cabo un pronunciamiento de fondo respecto del artículo 23 de la Ley 383 de 1997, salvo en relación con las expresión “Interprétase con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley”, contenida en dicho artículo, respecto de la cual ordena ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-806 de 2001.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los impugnantes advierten en primera instancia que el propósito de la norma acusada es el de derogar el doble beneficio fiscal que venían obteniendo las donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas y que se encontraba incorporado en los artículos 125 y 249 del Estatuto Tributario (Decreto 624/89). Este doble beneficio consistía, a su juicio, en que dichas donaciones podían ser deducidas y, a la vez, descontadas del impuesto sobre la renta.</p> <p>Los demandantes sostienen que los antecedentes normativos del doble beneficio por donación se encuentran en el artículo 44 de la Ley 7ª de 1979, en el que se permitió deducir las donaciones realizadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en la Ley 58 de 1985, que permitió descontar del monto del impuesto sobre la renta el 20% de las donaciones que se hicieran a los establecimientos públicos descentralizados.</p> <p>Aunque la Ley 6ª de 1992 derogó tal beneficio, la Ley 223 de 1995 se encargó de revivirlo, permitiendo que ese mismo hecho económico, el de la donación efectuada en favor de otras entidades, recibiera de nuevo ese tratamiento fiscal favorable.</p> <p><i>El artículo 23 demandado, dicen, al derogar nuevamente el doble beneficio fiscal que venían recibiendo las donaciones, vulneró la</i></p>

	<p><i>Carta Política, pues al ser una norma interpretativa que se entiende incorporada a la norma interpretada, adquiere efectos retroactivos, limitando las posibilidades de recibir dicho beneficio en tratándose de las donaciones que se hicieron antes de su vigencia.</i></p> <p><i>Esta retroactividad quebranta los artículos 338 y 363 de la Carta Política porque al tenor del Estatuto Constitucional, la ley tributaria tiene efectos hacia el futuro, y la ley demandada, al incorporarse a norma anterior pretendiendo interpretarla, rige situaciones de hecho anteriores a su vigencia.</i></p> <p><i>Como la disposición acusada fue expedida en el mes de julio de 1997, es del criterio de los demandantes que su vigencia debe empezar a contarse a partir del año gravable de 1998, sin que pueda regir situaciones acaecidas en 1997.</i></p> <p><i>En resumen, dicen los actores, “con la reforma tributaria de 1997, el querer del legislador fue el de eliminar, al ‘limitar’, el doble beneficio fiscal concurrente; pero que al consagrar que se trataba de aquellas como de interpretarse con autoridad, el efecto siguiente fue el de derogar el doble beneficio en forma retroactiva pues afecta las situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su promulgación.”</i></p> <p>Finalmente, para los demandantes la norma acusada también vulnera el artículo 83 constitucional, en cuanto desconoce el principio de la buena fe que debe guiar las actuaciones administrativas: se desconoce el derecho de quienes efectuaron donaciones con anterioridad a la vigencia de la disposición atacada, pues se les impuso una carga tributaria no prevista.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-806/01
Fecha de la sentencia	agosto 1° de dos mil uno (2001)
Demandante	<i>Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 383 de 1997, "Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando "</i>
Demandado	<i>Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 383 de 1997, "Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando "</i>
Conoció en primera instancia	Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Decision	<p>Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones "Interprétase con autoridad" contenidas en inciso primero del artículo 23 de la Ley 383 de 1997.</p> <p>Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones "a partir de la vigencia de la presente ley" contenidas en inciso primero del artículo 23 de la Ley 383 de 1997, bajo la condición de que se entienda que para su aplicación debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 338 de la Constitución Política.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p><i>El actor considera que el fragmento acusado del artículo 23 de la Ley 383 de 1997, infringe el inciso tercero del canon 338 de la Carta Política, que prescribe que las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.</i></p> <p><i>En síntesis, estas son las razones en las que fundamenta su pretensión: El artículo 23 parcialmente demandado se refiere, fundamentalmente, al impuesto sobre la renta. El Consejo de Estado reconoció que antes de la vigencia de la Ley 383 de 1997, existía la posibilidad para los sujetos pasivos de dicho gravamen de aplicar beneficios tributarios en forma concurrente.</i></p> <p><i>Siendo el artículo 23 una disposición interpretativa, su mandato se entiende incorporado a las normas interpretadas, es decir que tendría efectos retroactivos en el tiempo. Sin embargo, como una norma de</i></p>

	<p><i>este carácter viola el principio de irretroactividad de la ley impositiva contemplado en el artículo 363 del Ordenamiento Superior, el legislador decidió que su aplicación tendría lugar a partir de su vigencia con el fin de cobijar los hechos futuros generadores del tributo.</i></p> <p><i>Según la jurisprudencia, el artículo 338 del Estatuto Superior elevó a rango constitucional la noción de período como instrumento para regular la aplicación de los tributos, de modo que las nuevas regulaciones tributarias sólo pueden afectar los hechos generadores que ocurran en el período fiscal siguiente al de su vigencia. Igualmente, se ha precisado que este principio constitucional está orientado a evitar que en forma intempestiva se le aumenten las cargas fiscales a los contribuyentes.</i></p> <p><i>El principal tributo de período es el impuesto de renta, como quiera que el artículo 26 del Estatuto Tributario prescribe que su base impositiva está constituida por los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año gravable; por ello resulta claro que conforme al artículo 338 Fundamental, las normas tributarias relativas a este impuesto no pueden ser aplicadas sino a partir del siguiente período gravable.</i></p> <p><i>Sucede que la Ley 383 de 1997, comenzó a regir desde el 14 de julio de ese año que es la fecha de su entrada en vigencia, según lo dispone el artículo 74 ibidem; luego en lo que concierne al impuesto de renta, el artículo 23 que se acusa parcialmente debe ser aplicado desde el siguiente período fiscal que comenzó el 1° de enero de 1998.</i></p> <p><i>Entonces, la orden de interpretar que a partir de la vigencia de la Ley 383 de 1997 no se pueden aplicar beneficios fiscales en forma concurrente, es contraria al artículo 338 Constitucional, en la medida en que afecta los hechos generadores del impuesto de renta ocurridos entre el 14 de julio de 1997 y el 31 de diciembre del mismo año, época para la cual no había concluido el respectivo período fiscal.</i></p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. ALFREDO BELTRÁN SIERRA</p> <p>JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO</p> <p>ADHIERO AL ANTERIOR SALVAMENTO DE VOTO</p> <p>ALVARO TAFUR GALVIS</p> <p>LEY INTERPRETATIVA-Potestad y permanencia/INTERPRETACION</p>

	<p>AUTENTICA DE LEY-Potestad y permanencia (Salvamento parcial de voto)</p> <p>UNIDAD NORMATIVA-Integración sin relación de conexidad (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Con el acatamiento debido a las sentencias de la Corte Constitucional, nos vemos precisados a salvar parcialmente nuestro voto en relación con lo decidido en la Sentencia C-806 de 1º de agosto de 2001, pues nos separamos de la decisión contenida en el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia aludida, por las razones que a continuación se expresan:</p> <p>1ª. El primer inciso del artículo 23 de la Ley 383 de 1997, en su texto expresa que: “interpretase con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley, que un mismo hecho económico no podrá generar más de un beneficio tributario para el mismo contribuyente”.</p> <p>2ª. <i>La expresión demandada fue “a partir de la vigencia de la presente ley, cuya exequibilidad condicionada se declaró por la Corte en el numeral segundo de la parte resolutive de la Sentencia C-806 de 1º de agosto de 2001, decisión esta que compartimos.</i></p> <p>3ª. <i>Con todo, se decidió por la Corte realizar una unidad normativa con la expresión “interpretase con autoridad” con la cual comienza el inciso primero de la norma mencionada, la cual se declaró inexecutable, lo que nos lleva a discrepar, en ese punto, de la sentencia a la que se refiere este salvamento parcial de voto.</i></p> <p>En efecto, para los suscritos magistrados, es absolutamente claro que al legislador le asiste, de manera permanente y en virtud de su potestad de configuración de la ley, la atribución de interpretar normas expedidas por él, fenómeno jurídico que desde antaño ha sido conocido como la “interpretación auténtica de la ley”. Y, siendo ello así, si el propio legislador consideró indispensable para precisar el alcance de la legislación precedente realizar una interpretación de ella en cuanto hace a los beneficios fiscales concurrentes con la autoridad de que se encuentra investido, no puede la Corte, en manera alguna, considerar que la expresión a que hacemos referencia es inexecutable y declararlo así como lo declaró, pues en nada se vulnera el artículo 150 de la Constitución que le asigna al Congreso de la República la potestad de hacer e interpretar y modificar las leyes preexistentes.</p> <p>Por otra parte, observamos que la unidad normativa que aquí se hizo sin que estuviera demandada la expresión “interpretase con autoridad”, no resulta indispensable para la declaración de</p>
--	---

	<p>exequibilidad del segmento normativo cuya constitucionalidad se verificó por la Corte y se declaró en la sentencia aludida, máxime si se tiene en cuenta que tal unidad normativa se realizó sin que ella guarde ninguna relación con la exequibilidad declarada en el punto segundo de la parte resolutive de esta sentencia.</p> <p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p><i>Me permito salvar parcialmente el voto en relación con el ordinal primero que declara la inexequibilidad de las expresiones "Interprétase con autoridad" por las siguientes razones:</i></p> <p><i>Por que esas expresiones no habían sido demandadas y en consecuencia no existía la necesidad de realizar la denominada "integración normativa". La Corte debe ser muy prudente al hacer interpretación normativa ya que cuando se falla sobre normas que no han sido demandadas, se impide la intervención tanto del ministerio público, como de los ciudadanos y esto es mucho más grave en un sistema como el nuestro donde se quiere que los ciudadanos participen en el control de constitucionalidad, por algo desde el acto legislativo número 3 de 1910 tenemos un sistema de acción pública de inconstitucionalidad, que permite a los ciudadanos tanto iniciar el control como intervenir en el proceso de inconstitucionalidad.</i></p> <p><i>En materia de interpretación de las normas jurídicas, no sólo interpreta los autores (doctrinal), los jueces (judicial), sino también el propio creador de la ley, o sea el legislador; esta última interpretación es la que se denomina interpretación con autoridad por que expresamente está consagrado en el numeral primero del artículo 150 de la Constitución. No se entiende entonces como teniendo el congreso al facultad constitucional de interpretar una ley anterior, mediante otra posterior, se pueda decir que esta segunda es inconstitucional.</i></p> <p><i>No sobra recordar que en este caso existió una calificación legal, del propio legislador que definió como interpretativa a la ley que expedía; fue entonces voluntad del legislador la de determinar como interpretativa a esta ley y esa voluntad no puede ser suplantada por la Corte Constitucional.</i></p> <p><i>Fue también voluntad del legislador de que esta norma interpretativa no se incorporara automáticamente a la norma que interpretaba, sino que se integrara a ella, a partir de su vigencia. Precisamente por ser norma interpretativa hubiera quedado incorporada a la norma interpretada, de no haberse dicho nada sobre su vigencia, ya que este es el efecto natural de las normas que interpreta; pero nada impide que el legislador modifique la vigencia</i></p>
--	--

	<i>de la norma interpretativa; esto no hace inconstitucional a la norma.</i>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1194/01
Fecha de la sentencia	noviembre quince (15) de dos mil uno (2001)
Demandante	Antonio Eduardo Bohórquez Collazos
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8, parcial, y el artículo 9, parcial, de la Ley 393 de 1997, “por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, respecto de los cargos analizados, salvo la expresión “para el accionante” que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la primera frase del inciso primero del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, por los cargos analizados.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor solicita a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de algunas expresiones contenidas en el artículo 8, inciso 2º y en el artículo 9, inciso 1º de la Ley 393 de 1997 por considerar que tales preceptos vulneran los artículos 4, 86 y 87 de la Constitución. Los cargos que sirven de sustento a su demanda son los siguientes:</p> <p>1. En primer lugar, el demandante estima que las expresiones demandadas del inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 contrarían lo dispuesto en los artículos 4 y 87 de la Carta Política, pues “no describe la norma fundamental desoída, procedimiento alguno que permita determinar la existencia de renuencia para el cumplimiento de la norma y mucho menos que ello sea absolutamente necesario para poder ejercitarle”<sup>19</sup>. Así, “el imponer como requisito la demostración previa de la renuencia para poder ejercitar esta garantía es, además de crear una obligación no estipulada por la norma Superior que hace más demorado el ejercicio de la acción, el reconocer que las autoridades pueden</p>

---

<sup>19</sup> Cfr. folio 2 del expediente.

	<p>olvidar el respeto por el ordenamiento que han jurado acatar, respetar y hacer cumplir”<sup>20</sup>.</p> <p>2. Respecto de la expresión: “un perjuicio irremediable para el accionante”, también contenida en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 se afirma que “teniendo en cuenta que cualquier persona está legitimada para interponer la acción de cumplimiento sin importar el que sufra afectación particular o no frente al incumplimiento, no tiene razón de ser el que se introduzca la figura de la existencia del perjuicio irremediable, para que medie o no la posibilidad del ejercicio de la acción”<sup>21</sup>.</p> <p>3. De otra parte, la presunta violación de los artículos 86 y 87 de la Carta por parte de la fracción demandada del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, que dispone la improcedencia de la acción de cumplimiento para la protección de derechos que pueden ser garantizados mediante la acción de tutela, se sustenta en que “ninguno de esos cánones constitucionales reza la posibilidad de exclusión de una acción frente a la otra, además de que no se encuentra establecida restricción alguna para el ejercicio de una u otra acción, tal como se ha atrevido el legislador a hacerlo”<sup>22</sup>.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

---

<sup>20</sup> Cfr. folio 3 del expediente.

<sup>21</sup> Ibid. folio 3 del expediente.

<sup>22</sup> Ibid. folio 3 del expediente.

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-047/01
Fecha de la sentencia	veinticuatro (24) de enero de dos mil uno (2001).
Demandante	Bolívar Andrés Bernal Toro
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9º, y algunos segmentos normativos contenidos en los artículos 16 y 46 de la Ley 418 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Decision	<p>Primero. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 9º de la Ley 418 de 1997.</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión "siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho", contenida en el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, bajo el entendido de que el término de un año fijado por el Legislador para acceder a la ayuda humanitaria, comenzará a contarse a partir del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron presentar oportunamente la solicitud.</p> <p>Tercero. INHIBIRSE para pronunciarse de fondo en relación con la expresión "y sin intermediario", contenida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, por ineptitud de la demanda.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, el artículo 9º de la Ley 418 de 1997, vulnera los artículos 3º, 260, 261 y 263 de la Constitución. Según su criterio, la designación de miembros de las corporaciones públicas de elección popular no puede realizarse por decisión del Presidente de la República, como quiera que estos cargos públicos sólo pueden proveerse por determinación directa del pueblo. Así, afirma el demandante, "la Carta Magna es muy clara al señalar que la integración de esos cuerpos colegiados se hace a través del sufragio, con la decidida y directa participación del pueblo como constituyente primario, quien tiene el legítimo derecho de elegir a sus representantes: derecho que no puede ser usurpado por el Ejecutivo, ni siquiera por ministerio de ley".</p> <p>Así las cosas, el ciudadano dice que si bien es cierto el Presidente de la República tiene la misión constitucional de conservar y</p>



	<p>restablecer el orden público, para lo cual puede adelantar procesos de paz, no es menos cierto que debe respetar la integridad de la Carta y debe garantizarle al pueblo el respeto por su derecho a elegir a sus representantes. Por lo tanto, el actor afirma que si el Legislador considera necesario continuar con la facultad que se demanda, debe aprobarlo por medio de reforma constitucional y no por medio de una ley ordinaria.</p> <p>3.2. De otra parte, el ciudadano sostiene que la disposición acusada contenida en el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, viola los artículos 1º, 2º, 5º, 11, 12, 22, 29, 44, 47, 51, 90 y 94 de la Constitución. Según su criterio, el Legislador estableció un plazo excesivamente corto para solicitar ante las autoridades competentes, la ayuda humanitaria que el Estado Colombiano otorga a las víctimas del conflicto armado.</p> <p>En efecto, afirma el actor, que el plazo de un año para pedir la asistencia humanitaria no se compadece con la situación real de guerra que se desarrolla en el territorio nacional, en donde se presenta un alto grado de desplazamiento de campesinos. De igual manera, sostiene el demandante, el Legislador no tuvo en cuenta que los destinatarios de la ayuda carecen de conocimiento para saber de su existencia, y que además, desconocen cuales son los trámites que deben adelantar y ante qué autoridad deben dirigirse para elevar dicha solicitud. Al respecto dijo:</p> <p><i>“Es que un término de un año para reclamar los perjuicios sufridos, se convierte en un término perentorio demasiado corto en el tiempo que más bien hace nugatoria e inocua la aplicación de la ley, distorsionando el objetivo teleológico de la norma, el que al consagrar esta atención para las familias de las víctimas de los hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, lo que ha querido es mitigar los perjuicios sufridos por la población civil a través de una ayuda humanitaria, la que se concede por vía administrativa con cargo al presupuesto nacional</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Por todo lo anterior, considero que el término para reclamar debe ser el de la vigencia de la ley, retroactiva a la fecha en que se expidió la ley 104 de 1993, si no es que los Honorables Magistrados en su infinita sabiduría lo equiparen a los 20 a/os de prescripción consagrada en nuestro Código Civil para las acciones ordinarias”</i></p> <p>3.3. En cuanto a la expresión "y sin intermediarios", contenida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, el demandante opina que aquella contradice los artículos 13, 25 y 26 superiores.</p>
--	---

	Así, luego de estudiar el concepto de representación, el actor considera que la disposición impugnada debe ser interpretada en un sentido más amplio, puesto que los abogados no son intermediarios, sino representantes o mandatarios de las personas que han otorgado dicha facultad. En tal virtud, la hermenéutica de la disposición acusada debe facilitar la intervención de abogados.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1178/01
Fecha de la sentencia	ocho (8) de noviembre del año dos mil uno (2001).
Demandante	Jorge Luis Pabón Apicella
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 69 parcial del Código de Procedimiento Civil
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, los incisos primero, segundo y tercero del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil y las expresiones <i>“pero el poder podrá ser revocado por los herederos y sucesores”</i> y <i>“mientras no sea revocado por quien corresponda”</i>, que hacen parte de los incisos 5º y 6º respectivamente, de la misma disposición, vulneran los artículos 2º, 13, 25, 53 y 83 de la Constitución Política, razón que lo lleva a solicitar a esta Corporación su retiro del ordenamiento jurídico o que de resolver su permanencia se señale su sentido y alcance, por las razones que a continuación se resumen:</p> <p>Inicialmente pone de presente que los incisos y apartes que se demandan, contenidos en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, fueron expedidos en vigencia de la Constitución Política de 1886.</p> <p>Enseguida se pregunta si la facultad <i>“omnímoda y unilateral”</i> de revocar el <i>“mandato”</i>, que la norma en estudio confiere <i>“al mandante”</i>, consulta los mandatos constitucionales de la buena fe, de no abuso del derecho propio, y de igualdad de trato –artículos 13, 83 y 95C.P.–, habida cuenta que el contrato de mandato es una <i>“relación bilateral y productora normalmente de obligaciones entre pactantes; ‘ley entre partes’; palabra dada y asistida por la confianza, seguridad, credibilidad que otorgan las partes a ella (así sea en los comienzos)”</i>.</p> <p>Y a continuación el mismo responde apoyándose en la sentencia T-</p>

	<p>475 de 1992, de la que trae apartes, diciendo que las expresiones demandadas conculcan los anteriores mandatos, porque de antemano debe rechazarse que los actos propios <i>“venire contra factum proprium”</i> puedan ser tenidos como medios objetivos, razonables y proporcionados para desconocer <i>“ (...) la palabra otorgada y (...) los vínculos jurídicos constituidos”</i>.</p> <p>De ahí que, a su juicio, no resulte constitucional que la ley permita gozar al “mandante” <i>“de la atribución unilateral de revocar o terminar el poder procesal (...) sin que exista acreditado –ante el juez que dirige el proceso- un motivo real que justifique –desde el punto de vista de la objetividad, razonabilidad y proporcionalidad- la revocación o terminación”</i>; por cuanto tal facultad, asevera, <i>“no puede ser usada para abusos de poder o de derecho, ni el juez está habilitado para patrocinar tales ejercicios”</i> –artículo 2 C.P.-.</p> <p>Además, en opinión del actor, los apartes demandados también vulneran los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, en razón de que los abogados, en uso del poder que les ha sido conferido, mientras ejercen su profesión desarrollan un trabajo que el Estado está obligado a proteger impidiendo su terminación <i>“omnímoda (...) unilateral”</i>, e injustificada.</p> <p>Estima que, <i>“el abogado que actúa procesalmente como poderhabiente, en defensa de intereses de parte, tiene derecho a una relativa ESTABILIDAD; reluctante a la revocatoria injustificada y/o fraudulenta, infundamentada –al menos esencialmente-, y libre totalmente de la evaluación judicial que la califique (al menos inicialmente o en forma sumaria) en el proceso, en busca de un control sobre la objetividad, razonabilidad y proporcionalidad de la revocatoria de poder que puede ejercer el poderdante; control que tiene profunda base constitucional y que toca a las atribuciones de los particulares y hasta a los funcionarios públicos (T-475/92)”</i>.</p> <p>Ejemplifica la violación del derecho al trabajo del abogado, que endilga a las expresiones en estudio, analizando el caso de la revocatoria del poder que persigue liberar al obligado del pago de los honorarios debidos <i>–“retribución efectiva, apoyada y justificada en el trabajo especializado de asistencia profesional”</i>–.</p> <p>Sin embargo, señala que aunque la aplicación de los preceptos que protegen el derecho al trabajo debe ser modulada, según se trate de trabajadores dependientes o independientes, el derecho del abogado a percibir los honorarios causados se puede asimilar al que tiene el trabajador respecto del pago de su salario, similitud que impone al legislador prever que no se eluda o se frustre su pago, de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 53 constitucionales.</p>
--	--

	<p>Refuerza su argumento de similitud poniendo de presente que el Código de Procedimiento Laboral asigna al juez ordinario laboral la competencia para conocer de <i>“los juicios sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación jurídica o motivo que les haya dado origen (...)”</i>, lo que considera <i>“un principio de asimilación modulada”</i>.</p> <p>De otro lado, asevera que la regulación para el cobro de honorarios prevista en la disposición en estudio -inciso segundo artículo 69 C. de P.C.- quebranta el derecho a la igualdad de los abogados que por haber renunciado del poder terminan su labor estando en curso un proceso, en cuanto considera que éstos se encuentran en la misma situación que afrontan aquellos profesionales del derecho a quienes les ha sido revocado el poder, respecto de la determinación de sus honorarios.</p> <p>De ahí que no encuentre justificado, proporcional y razonable que solo algunos de los abogados que no concluyen el proceso, puedan pedir la regulación de sus honorarios, dentro del mismo asunto y mediante trámite incidental –artículo 13 C.P.-.</p> <p>Finalmente, al referirse a la competencia de esta Corte para proferir una decisión de constitucionalidad condicionada i) transcribe apartes de la Sentencia C-004 de 1993, ii) considera aceptable, en virtud del control que le ha sido asignado a esta Corporación, que ésta en sus decisiones fije el <i>“sentido constitucional admisible”</i> de las disposiciones que luego de un examen de constitucionalidad pueden permanecer en el ordenamiento, y iii) recuerda que la ley debe ser clara y congruente en cuanto a las competencias asignadas a los servidores públicos, con el objeto de evitar que abusen de su poder limitando los derechos de los asociados –en éste punto se apoya en la sentencia C-337 de 1993, de la que transcribe un aparte-.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-094/01
Fecha de la sentencia	treinta y uno ( 31) de enero de dos mil uno(2001).
Demandante	Julián Alberto Arias Martínez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2o. parcial del artículo 39 de la Ley 443 de 1.998.
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	<p>ESTAR A LO RESUELTO en la sentencia C-370/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz, en relación con la expresión <i>“en el evento de que el empleado opte por la indemnización o la reciba”</i> contenida en el parágrafo 2º del artículo 39 de la ley 443 de 1998.</p> <p>Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la expresión <i>“el acto administrativo en que esta conste prestará mérito ejecutivo”</i> contenida en el parágrafo 2º del artículo 39 de la ley 443 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El accionante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de la parte subrayada de la norma transcrita, pues considera que la misma es violatoria de los artículos 13, 29, 53, 89, 93 y 229 de la Constitución Política, con base en las razones que se resumen a continuación:</p> <p>El libelista manifiesta que el artículo 39 de la Ley 443 de 1.998, cuyo parágrafo ha sido demandado en forma parcial, establece en favor de los empleados de carrera administrativa, en caso de supresión de sus cargos, el derecho a optar entre la incorporación en un cargo de igual categoría y recibir una indemnización. Pero, indica que la frase demandada, al otorgarle al acto que contiene la indemnización mérito ejecutivo y los mismos efectos jurídicos de una conciliación, impide al empleado atacar ante la jurisdicción contencioso administrativa el acto que suprimió su cargo.</p>

	<p>En efecto, define los efectos reales de tal disposición manifestando que la misma, excluye a los empleados públicos de carrera administrativa de la posibilidad de hacer uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C.C.A., art. 85), pues el carácter de conciliación prejudicial dado al acto que reconoce la indemnización que recibe el funcionario lo inhabilita para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.</p> <p>Igualmente, señala que las opciones dadas por el artículo 39, acusado parcialmente, van en contravía de la realidad socio económica colombiana, pues el alto índice de desempleo obliga a aceptar la indemnización que se ofrece, en vez de acudir a la justicia para reclamar los posibles perjuicios que la supresión del cargo produzca. A su vez, manifiesta que la equiparación del acto que contiene la indemnización con una conciliación contradice la naturaleza de ésta última, ya que en aquel no existe acuerdo de voluntades, discusión, o forma de contradecir sus consideraciones y, en cambio, es la administración la que unilateralmente las impone. Por último, considera que se vulnera la protección dada por la Constitución y la ley a la estabilidad de los empleados de carrera administrativa y, en esa forma, se impide el ejercicio del único medio de defensa de éstos contra los abusos de la clase dirigente, pues ningún acto administrativo está exento de errores y si el mismo causa perjuicios, el afectado debe mantener la posibilidad de acudir a la justicia.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, concluye que la norma acusada transgrede el derecho a la igualdad de los empleados de carrera, al excluirlos de la posibilidad, de todos los ciudadanos, de acceder a la justicia; al debido proceso, pues desnaturaliza la figura procesal de la conciliación; así como al derecho irrenunciable de los trabajadores de acudir a las instancias judiciales y a participar en las decisiones de la administración que los afecten (C.P., art. 53); finalmente, señala que cercena el acceso a los medios de defensa (C.P., art. 89), limita el libre ejercicio de derechos consagrados en tratados internacionales (C.P., art. 93) y no garantiza el acceso de los ciudadanos a la justicia (C.P., art. 229).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	

Resumen aclarações	de las	NO APLICA
-----------------------	--------	-----------



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1253/01
Fecha de la sentencia	noviembre veintiocho (28) de dos mil uno (2001)
Demandante	Jorge Alirio Chaparro Sanchez, Jose Manuel Sierra Camargo, Jaime Villamarin Eslava
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 1º de la Ley 445 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Decision	ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-067 de 1999, que declaró exequible el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 445 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Los demandantes solicitan a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del aparte subrayado del artículo 1º de la Ley 445 de 1998 por infringir los artículos 1, 3, 4, 5, 13, 46, 48, 53 y 58 de la Constitución. Pese a las diversas disposiciones constitucionales que se aducen violadas, el cargo contra la norma demandada es uno sólo: con su expedición el legislador habría discriminado y violado el derecho a la igualdad, al reconocer un derecho al incremento de la mesada pensional a los pensionados del sector público del orden nacional, cuyas pensiones son financiadas con recursos del presupuesto nacional, sin reconocer el mismo derecho a los pensionados del sector público del orden nacional, cuyas pensiones no son financiadas con recursos del presupuesto nacional. A juicio de los demandantes, dos de ellos pensionados de la Caja de Vivienda Militar – hoy llamada Caja Promotora de Vivienda Militar –, carece de toda justificación objetiva y razonable que el legislador haya discriminado entre los pensionados sólo por efecto de la proveniencia de los recursos económicos necesarios para la cancelación de sus exiguas mesadas pensionales. Consideran con ello que se vulnera, además, la protección de la familia así como los derechos a la pensión, a la protección de las personas de la tercera edad, al trabajo y a la propiedad privada.

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-832/01
Fecha de la sentencia	<i>ocho (8) de agosto de dos mil uno (2001)</i>
Demandante	<i>Andrés Caicedo Cruz.</i>
Demandado	<i>Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.</i>
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	<i>Declarar EXEQUIBLE la expresión “contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.</i>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. <i>Normas constitucionales que se consideran infringidas</i></p> <p><i>Considera el actor que la disposición acusada es violatoria de los artículos 2, 13, 29 y 95 de la Constitución Política de Colombia.</i></p> <p>2. <i>Fundamentos de la demanda</i></p> <p><i>Para el actor, la norma acusada viola el derecho de defensa, porque no basta que se produzca la sentencia en contra de la entidad pública para que empiece a correr el término de caducidad sino que es necesario que la autoridad pública pague, lo cual toma algún tiempo y depende de la decisión de la propia administración y de sus recursos económicos.</i></p> <p><i>Así las cosas, advierte el actor que quien ha sido servidor público puede, después de haber transcurrido un tiempo indeterminado, verse de repente sometido a una acción de repetición. Tiempo en el cual han desaparecido los elementos necesarios para que pueda defenderse de manera efectiva.</i></p>

	<p><i>Lo anterior es más grave a juicio del accionante, si se tiene en cuenta el desequilibrio que entre la entidad pública y el antiguo servidor, pues la entidad es quien tiene en su poder todos los elementos de convicción en relación con el hecho.</i></p> <p><i>Argumenta también, que el artículo 29 de la Constitución Política establece el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, que no debe entenderse referido exclusivamente a que iniciado el proceso el mismo deba adelantarse en un breve lapso sino que cualquier controversia que se pueda presentar debe ser decidida sin dilaciones injustificadas. Señala que en este caso cuando se inicia un proceso en el cual se puede plantear la responsabilidad del servidor público a través de la acción de repetición, a dicho servidor no se le define su situación en un término razonable y debe esperar que se produzca una sentencia y adicionalmente que la administración pague.</i></p> <p><i>Implica lo anterior, según el mencionado ciudadano, que cuando la administración es demandada por un hecho que puede dar lugar a la repetición contra el servidor público, la misma debe llamarlo en garantía y no esperar a demandar posteriormente.</i></p> <p><i>Afirma el demandante en relación con éste punto, que si se tiene en cuenta que una acción de reparación directa contra el Estado puede demorar bastantes años y transcurrir otros tantos para que la administración pague y dos para demandar a su servidor o antiguo servidor y el proceso contra éste puede durar diez años, resulta claro que se viola el mencionado principio del debido proceso, pues desde que se cuestiona la actuación en que el servidor o antiguo servidor participó hasta cuando el mismo es condenado pueden transcurrir 20 años.</i></p> <p><i>A éste respecto, recuerda el actor, que la Corte Constitucional ha considerado que la caducidad tiene como uno de sus fundamentos la falta de colaboración con la administración de justicia, lo cual implicaría que el término de caducidad se debe contar desde cuando dicha colaboración es posible.</i></p> <p><i>Finalmente, a su juicio, el artículo mencionado viola el principio de igualdad porque existe un tratamiento desigual entre el que se da a la acción contra el servidor público que es objeto de la acción de repetición y las demás acciones judiciales, sin que exista para ello un fundamento razonable.</i></p> <p><i>Por regla general, aduce el demandante, nuestro ordenamiento dispone que los términos de caducidad y prescripción corren a partir del momento en que se puede ejercer la acción. Estas reglas según</i></p>
--	--

	<i>dice, obedecen a que tanto la caducidad como la prescripción son sanciones a la inactividad de quien tiene el derecho. Por tanto, es apenas lógico entonces que el término de caducidad se cuente desde el momento en que se puede ejercer la acción, que en este caso es desde el momento en que puede llamar en garantía al servidor o antiguo servidor y no como lo establece la norma impugnada que el punto de partida de dicho término quede en manos de la administración cuya inactividad se trata de sancionar.</i>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-709/01
Fecha de la sentencia	cinco (5) de julio de dos mil uno (2001).
Demandante	Luis Eduardo Montoya Medina
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, numeral 10, literal e), de la Ley 446 de 1998 <i>“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 44, numeral 10, literal e) de la Ley 446 de 1998, bajo el entendido de que si se produce modificación o adición del contrato inicialmente celebrado, la caducidad se contará, en cuanto a ellas, a partir de la fecha de las mismas.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano demandante considera que el aparte de la disposición demandada, conculca los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 90, 150 in fine, 121, 122, 209 y 228 de la Constitución Política, quien luego de realizar un extenso análisis del principio de legalidad, sintetiza los cargos de la siguiente manera:</p> <p>Considera el actor, que el legislador al establecer un término de caducidad para la acción de nulidad de los contratos estatales, subordina la supremacía de las normas imperativas y relativiza el principio de legalidad. Ello implica, a su juicio, que transcurrido el término de dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato o, cinco siguientes al mismo evento, si su duración es superior a los dos años, primarían las disposiciones de los particulares sobre los intereses generales, desconociendo de suyo el principio de legalidad e impidiendo la vigencia plena de la Constitución Política, vulnerando en consecuencia los artículos 1, 4 y 150 in fine, pues permite la existencia de un acto jurídico contrario al interés general, y atentatorio de normas superiores.</p>

	<p>En ese orden de ideas, si quien determina la duración del contrato es la Administración o las partes de mutuo acuerdo o, puede depender del objeto contratado y del término requerido para su cumplimiento, el plazo de caducidad de la acción contractual fundada en la nulidad absoluta, sería determinado por las partes o por el objeto del contrato, ni siquiera por la ley, circunstancia que vulnera el artículo 29 de la Carta.</p> <p>Añade igualmente, que señalar los cinco años como plazo máximo de la acción de nulidad contractual, viola la Constitución, pues después de ese lapso la supremacía de las normas constitucionales y legales imperativas cesa, imponiéndose la voluntad de los particulares o de la administración o de ambos sobre las del constituyente.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-649/01
Fecha de la sentencia	junio veinte (20) de dos mil uno (2001)
Demandante	Carlos Andrés Perilla Castro
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1.998.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
Decision	Declarar EXEQUIBLES los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, únicamente por los cargos estudiados en esta providencia, y CONDICIONANDO la exequibilidad a que se entienda que las funciones allí atribuidas a la Superintendencia de Industria y Comercio tienen la naturaleza, el alcance y las características señalados en la parte motiva de esta sentencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que las normas acusadas son lesivas de los artículos 13, 209 y 333 de la Constitución, por las razones que se señalan a continuación.</p> <p>En su criterio, los actos de competencia desleal dan lugar a <i>"conflictos de interés entre categorías o grupos específicos, llamados a ser resueltos por el juez"</i>. Es decir, se trata de actos que generan conflictos entre intereses particulares, y sólo excepcionalmente afectan el interés público, por lo cual la función de decidir sobre su licitud, esto es, de resolver ese conflicto específico, es de naturaleza jurisdiccional: <i>"de acuerdo con la teoría de la tridivisión de poderes, los jueces están instituidos como funcionarios del Estado encargados de administrar justicia, mediante la resolución de conflictos de intereses, sea que se susciten entre particulares, o entre estos y las autoridades defensoras del interés público"</i>.</p> <p>Los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, explica el demandante, atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio funciones de tipo administrativo en materia de competencia desleal; ello, por cuanto el artículo 143 establece que en relación con los actos que constituyen ésta última conducta, la Superintendencia tendrá las mismas atribuciones que le asisten en materia de promoción de la competencia y prácticas comerciales</p>



	<p>restrictivas, las cuales son netamente administrativas; el artículo 144 del mismo ordenamiento, asimismo, prevé la aplicación de un mismo procedimiento y de una misma normatividad, para ambos tipos de funciones. Para el actor, el carácter administrativo de estas facultades se confirma al observar que el Legislador, en la Ley 446/98, fue muy cuidadoso en señalar expresamente cuáles eran las funciones jurisdiccionales que estaba otorgando, como hizo en los Títulos I y V de la Parte IV. De lo anterior, el ciudadano accionante extrae dos conclusiones: <i>"1. La aplicación de la normatividad de competencia desleal es una función jurisdiccional. 2. Las normas acusadas, artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1.998, otorgaron funciones administrativas en materia de competencia desleal a la Superintendencia de Industria y Comercio"</i>. A partir de lo anterior, formula los cargos concretos contra las normas acusadas.</p> <p>El artículo 333 Superior consagra el derecho colectivo a la libre competencia económica, el cual impone al Estado una obligación específica de protección. No obstante, señala el actor que en la Asamblea Nacional Constituyente se delimitó claramente el alcance de la noción de libre competencia, distinguiéndola de otros dos conceptos diferentes: a) la leal competencia, y b) la justa competencia. El único de estos tres conceptos que fue catalogado por el Constituyente como un derecho de todos, fue el de la libre competencia; por lo mismo, ésta garantía superior no incluye la protección contra los actos de competencia desleal. Es decir, la única atribución constitucional del Estado en virtud del artículo 333 de la Carta, es la de proteger la libre competencia mediante el ejercicio de ciertas funciones administrativas, pero no la de fomentar la competencia leal. Lo anterior se sintetiza en los siguientes tres puntos: <i>"(i) Para el constituyente, la expresión 'libre competencia económica' no fue una expresión amplia e indefinida, bajo la cual se incluyeran los diversos elementos de protección en la competencia económica (libertad, lealtad y justicia), y que por el contrario, claramente distinguió unos de otros. (ii) Adicionalmente, restringió la obligación estatal a la protección de la libre competencia, excluyendo los temas de leal y justa competencia. (iii) El constituyente fue enfático en la adopción de estatutos de prohibición de prácticas comerciales restrictivas y abusos de posición dominante"</i>.</p> <p>La justificación del hecho de haber restringido la labor de protección estatal a las prácticas comerciales restrictivas, sin ampliarla a los actos de competencia desleal, estriba, para el demandante, en que las prácticas comerciales restrictivas, al contrariar la libre competencia, lesionan la estructura misma del sistema de competencia económica, mientras que los actos de competencia desleal sólo implican la realización de un</p>
--	---

	<p>comportamiento inadecuado en el mercado: <i>"la disciplina de competencia desleal defiende los intereses de los partícipes del mismo, y siempre bajo una perspectiva de corrección y lealtad, y no la estructura misma del sistema de competencia. (...) sin libertad no puede existir competencia, pero esta última sí puede darse a pesar de estar aquejada de vicios de deslealtad"</i>. Asevera el demandante que ello ha sido confirmado la Corte Constitucional, la cual, en sentencia C-535 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), estableció que la protección contra los actos de competencia desleal no está comprendida dentro del derecho a la libertad de empresa que garantiza el ordenamiento constitucional.</p> <p>Adicionalmente, la limitación que impone la Constitución al ejercicio de funciones administrativas por el Estado, en lo tocante al tema específico de la libre competencia, encuentra sustento en el hecho de que <i>"la función administrativa de protección de la libre competencia conlleva el ejercicio de facultades y prerrogativas estatales que significan para el administrado, una disminución en su libertad de actividad económica, surgida por las tareas de vigilancia e inspección; así como una afectación a su patrimonio, concretada en la sanción de multa; junto con una restricción a su ejercicio empresarial, ocasionado por las órdenes de prohibición y modificación de las conductas ilegales. Por ello, la Constitución de 1991, que garantiza la libertad personal y la libre empresa, y que reconoce en el mercado la base de la actividad económica, limita la intervención estatal de una manera racional, buscando la menor intromisión en las actividades privadas"</i>. Así, en primer lugar, la norma demandada vulnera este esquema, al incluir dentro de las funciones administrativas del Estado una que constitucionalmente no le puede corresponder, a saber, la resolución de los conflictos particulares de intereses generados por la competencia desleal, lo cual <i>"acarrea una indebida intromisión estatal en temas económicos, lesionando la libertad consagrada en la misma Carta Política, y una vulneración a la asignación de funciones prevista en el artículo 333 constitucional"</i>.</p> <p>En segundo lugar, las normas acusadas violan el artículo 209 de la Constitución. Este dispone que las competencias asignadas a las autoridades públicas deben recaer sobre asuntos de interés general, ya que la protección de éste es la que justifica la <i>"preponderancia de las potestades públicas"</i>. Por lo mismo, no se puede asignar a dichas autoridades competencias que recaigan sobre asuntos de interés particular, los cuales deberán ser protegidos por su respectivo titular, puesto que de lo contrario habría una extralimitación del poder público. <i>"Esto último es lo que ocurre con las funciones administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, ya que, como se expuso desde un principio, la legislación sustantiva</i></p>
--	---

	<p><i>colombiana en la materia, que prima sobre la procesal, considera que estos asuntos constituyen conflictos entre grupos particulares y determinados de intereses (...) y por lo mismo, su decisión corresponde a los jueces de la especialidad".</i> Las prerrogativas con las que cuenta la Superintendencia en materia de promoción de la competencia y limitación de las prácticas comerciales restrictivas, resultan desproporcionadas al aplicarse al tema de la competencia desleal, según dispone la norma acusada.</p> <p>Finalmente, considera que los artículos acusados desconocen el principio constitucional de igualdad, ya que en virtud de ellos, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer sanciones pecuniarias por violación de normas sobre competencia desleal, así como multas a los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren actos de esa índole. Sin embargo, en el proceso jurisdiccional por actos de competencia desleal que prevé la Ley 256 de 1996 no existe la posibilidad de imponer tales sanciones; esta diferencia constituye una violación del artículo 13 Superior, puesto que se trata, en últimas, de examinar una misma conducta, y lo único que varía es la autoridad competente para decidir sobre su legalidad. En ese sentido, es una diferenciación irrazonable, puesto que lo único que determina cuál autoridad conocerá de los hechos, de conformidad con el artículo 147 de la Ley que se demanda, es la voluntad del afectado, dado que el juez y la Superintendencia son competentes a prevención.</p> <p>El actor precisa, por último, que en la sentencia C-582 del 11 de agosto de 1999, la Corte se declaró inhibida para conocer de una demanda presentada contra las mismas normas que se acusan en esta oportunidad, por no existir cargos de inconstitucionalidad; por ello, en este caso no existe cosa juzgada constitucional.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

## SENTENCIAS DE 2002

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1078/02
Fecha de la sentencia	cinco (5) de diciembre de dos mil dos (2002).
Demandante	: Luis Eduardo Forero Medina
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13, 18 parcial y 60 parcial de la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte.
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 13 de la Ley 336 de 1996 y de la expresión “e intransferible” contenida en el artículo 18 de la misma ley, en relación con los cargos analizados en la parte motiva de esta Sentencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El accionante considera que los artículos del Estatuto Nacional de Transporte respecto de los cuales se admitió la demanda vulneran los artículos 58 y 63 de la Constitución Política.</p> <p>Inicia su argumentación con un breve recuento sobre el contexto legal de las disposiciones acusadas, para señalar que de acuerdo con el régimen de la Ley 336 de 1996 las empresas de transporte público necesitan habilitación oficial para operar y que la prestación del servicio está sujeta a la expedición de un permiso o contrato de concesión u operación por parte de la autoridad competente.</p> <p>En criterio del demandante, los artículos 13 y 18 de la Ley 336 de 1996 limitan el derecho de propiedad que tienen los empresarios del transporte público en relación con la autorización o habilitación para prestar el servicio público de transporte y con el permiso para operar que se les expide por la autoridad competente. Expresa que cuando la ley declara que la habilitación y el permiso son intransferibles, se vulnera el derecho a la libre y voluntaria disposición de la propiedad protegido por el artículo 58 de la Carta Política.</p> <p>El accionante considera que el acto administrativo que concede la</p>

	<p>habilitación para la prestación del servicio público otorga un derecho de propiedad que hace parte de la esfera patrimonial del beneficiario, quien, por consiguiente, puede disponer libremente sobre la autorización o habilitación, la cual puede ser enajenada o traspasada, puesto que una de las cualidades inherentes a la propiedad es "... su carácter traslativo".</p> <p>Expresa que cuando la norma acusada dispone que tal habilitación es intransferible, viola el régimen constitucional de la propiedad, por cuanto la Constitución de 1991, en su artículo 63, hizo un catálogo de los bienes que tienen la condición de inalienables, esto es, según cita del diccionario de la Academia, "que no se puede enajenar" (pasar o transmitir a otro el dominio de una cosa o algún otro derecho sobre ella), catálogo dentro del cual no cabría la habilitación para operar el servicio de transporte, porque sólo resulta aplicable a los bienes públicos, no a los privados.</p> <p>Luego de hacer un recuento del tratamiento constitucional que se le ha dado en Colombia a la figura de la inalienabilidad de los bienes, concluye que la imposición de este tipo de restricción constituye, en este caso, un "capitis deminutio" o una pérdida de capacidad de un derecho que pertenece al patrimonio de una persona privada. Argumenta que al convertir un derecho en inalienable, se restringe el principio de la libre empresa, limitando la iniciativa privada por haber sustraído del comercio ese derecho que se encuentra dentro de la esfera patrimonial. También señala que la posibilidad de transferir la habilitación permite el mejoramiento del servicio de transporte público en beneficio de los usuarios.</p> <p>Finalmente manifiesta que el principio de la libertad de empresa contenido en la Ley 105 de 1993 declara que las únicas restricciones a la iniciativa privada pueden estar encaminadas a evitar la competencia desleal y el abuso de posiciones dominantes en el mercado.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

Identificar la sentencia	Sentencia C-1007/02
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de noviembre de dos mil dos (2002).
Demandante	
Demandado	Revisión constitucional del Decreto legislativo 1975 del 3 de septiembre de 2002 “Por medio del cual se suspende la Ley 333 de 1996 y se regulan la acción y el trámite de la extinción del dominio”.
Conoció en primera instancia	Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Decision	<p>1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2º del Decreto 1975 de 2002, bajo el entendido que las actividades ilícitas deben ser conductas relacionadas con las causas que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana realizadas por personas que hacen parte de grupos al margen de la ley, así como las causales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del mismo artículo.</p> <p>3. Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>4. Declarar EXEQUIBLE el artículo 4º del Decreto 1975 de 2002, bajo el entendido que en estos casos la acción siempre debe dirigirse contra quien aparezca como el titular de derechos reales principales o accesorios y que debe respetarse la adquisición por acto entre vivos de las personas de buena fe exenta de culpa.</p> <p>5. Declarar EXEQUIBLE el artículo 5º del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>6. Declarar EXEQUIBLE el artículo 6 º del Decreto 1975 de 2002</p> <p>7. Declarar EXEQUIBLE el artículo 7º del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>8. Declarar EXEQUIBLE el artículo 8º del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>9. Declarar EXEQUIBLE el artículo 9º del Decreto 1975 de 2002, excepto las siguientes expresiones del mismo artículo “Quienes con ocasión de la acción de extinción del dominio ejerciten sus derechos deberán presentar personalmente el poder ante la autoridad judicial que esté conociendo de la acción y estar a su disposición en cualquier momento que se les requiera. La presentación y disponibilidad personal no podrá ser suplida a través de apoderados especiales o generales, judiciales o extrajudiciales, sino por circunstancias que a juicio de la autoridad de conocimiento hagan imposible su comparecencia” que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>10. Declarar EXEQUIBLE el artículo 10 del Decreto 1975 de 2002,</p>

	<p>excepto las siguientes expresiones del mismo artículo “Si pasados tres (3) meses de efectuado el emplazamiento, el afectado no se hace presente, se entenderá consumada la negativa a cumplir los deberes que le impone la función social de la propiedad respecto de los bienes en los cuales concurre alguna de las causales del artículo 2° del presente Decreto siendo objeto de la acción de extinción del dominio. En tal caso, el fiscal deberá remitir el expediente al juez para que reconozca el abandono de los mismos en favor del Estado, transfiriéndolos a la Dirección Nacional de Estupefacientes y dando por concluido el proceso.” que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>11. Declarar EXEQUIBLE el artículo 11 del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>12. Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 del Decreto 1975 de 2002, bajo el entendido que exista algún elemento de prueba de los presupuestos que darían lugar a la extinción del dominio. Asimismo, bajo el entendido que los terceros afectados por las medidas cautelares podrán hacer valer su derecho en esta fase inicial.</p> <p>13. Declarar EXEQUIBLE el artículo 13 del Decreto 1975 de 2002, excepto la expresión “esta noticia hará las veces de la notificación” del numeral 2° del mismo artículo que se declara INEXEQUIBLE. Declarar asimismo, la EXEQUIBILIDAD del numeral 11 del mismo artículo 13 será bajo el entendido de que este no se aplica a los terceros de buena fe.</p> <p>14. Declarar EXEQUIBLE el artículo 14 del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>15. Declarar EXEQUIBLE el artículo 15 del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>16. Declarar EXEQUIBLE el artículo 16 del Decreto 1975 de 2002, excepto la expresión “únicas” que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>17. Declarar EXEQUIBLE el artículo 17 del decreto 1975 de 2002 en los términos del numeral 17 de la parte motiva, excepto las expresiones “se propondrán en la oportunidad dispuesta para alegar de conclusión” que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>18. Declarar EXEQUIBLE el artículo 18 del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>19. Declarar EXEQUIBLE el artículo 19 del Decreto 1975 de 2002.</p> <p>20. Declarar EXEQUIBLE el artículo 20 del Decreto 1975 de 2002, en los términos del numeral 20 la parte motiva de esta sentencia.</p> <p>21. Declarar EXEQUIBLE el artículo 21 del Decreto 1975 de 2002.</p>
--	---

	<p>22. Declarar EXEQUIBLE el artículo 22 del Decreto 1975 de 2002, bajo el entendido que las actividades ilícitas deben ser conductas relacionadas con las causas que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia ciudadana realizadas por personas que hacen parte de grupos al margen de la ley.</p> <p>23. Declarar EXEQUIBLE el artículo 23 del Decreto 1975 de 2002.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Revisión constitucional del Decreto legislativo 1975 del 3 de septiembre de 2002 “Por medio del cual se suspende la Ley 333 de 1996 y se regulan la acción y el trámite de la extinción del dominio”.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>Es necesario hacer algunas precisiones sobre la diferencia entre privar, suspender y limitar un derecho. Respecto de la privación de un derecho, afirmo que sólo puede hacerse de manera concreta, personal, como consecuencia de una sanción, que sólo puede ser impuesta por un juez. En cuanto a la suspensión de un derecho, observo que la suspensión permite que el derecho pueda ejercerse ante otras personas que no sean el Estado (por ejemplo, frente a otros ciudadanos) y el derechos suspendido se rodea de ciertas garantías para evitar que haya abusos o suspensión sin requisitos. La tercera posibilidad es la de limitar un derecho que tiene como supuesto fundamental la posibilidad de ejercer el derecho; el derecho aun con un gravamen puede ser ejercido; a contrario sensu no puede impedirse su ejercicio. El sistema colombiano es el de la limitación de un derecho, según el cual se ejerce el derecho, pero con ciertas condiciones. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 137 de 1994, existen unos derechos que son intocables, aún en el estado de excepción, como también han de tenerse en cuenta las limitaciones impuestos por los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Estatutaria, que aluden al respeto del núcleo esencial de los derechos fundamentales, lo cual es distinto de la intangibilidad. Existen unos derechos que no se pueden tocar y otros, los que se pueden tocar, no se puede tocar su núcleo esencial. Según los principios de concordancia y complementariedad, en caso de incompatibilidad, prima el tratado internacional que prohíbe la limitación de los derechos fundamentales en los estados de excepción y tratándose de los derechos que sí pueden ser tocados – como el derecho de propiedad- debe respetarse su núcleo esencial.</p>



	<p>Considero que en este caso no se puede hablar de la función social de la propiedad con el tema del conflicto entre el interés general y el interés particular, puesto que en la acción de extinción del dominio se trata de bienes de origen ilícito o del uso ilícito de bienes lícitos. Igualmente, me refiero de manera particular, a dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos que precisaron el alcance de la intangibilidad del debido proceso, que indicó, debe corresponder a una forma democrática de gobierno. Finalmente, afirmo que las normas jurídicas no pueden ser fuente o causa de la conmoción interior (sentencia C-300/94).</p> <p>Sobre el punto de los tratados internacionales, reitero que en caso de incompatibilidad entre tratados, como lo prevé el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, debe aplicarse de preferencia aquél que prohíbe la restricción de los derechos en los estados de excepción. Los derechos no nacen con limitaciones, sino que nacen como el constituyente lo quiere así y en caso de que no lo señale, debe tenerse presente el efecto expansivo de la libertad.</p> <p>El cumplimiento de un deber jurídico, como el de colaborar con la justicia no se puede condicionar al pago de una recompensa o retribución. Este tipo de disposiciones obedecen a una concepción utilitarista (hago el bien por la retribución que recibo) que se impuso en nuestro país a comienzos de la década de los años 90, como una innovación en el sistema jurídico colombiano que no establecía ese tipo de recompensas, acorde con la tesis kantiana (hago el bien por el bien).</p> <p>Bajo el pretexto de defender el debido proceso, se invierte la carga de la prueba y se abandona la presunción de inocencia, aunque no se trate de una acción penal. En mi criterio, debe conservarse el esquema tradicional de defensa: quien demanda debe probar los hechos y de no ser así, se atenta contra el Estado democrático, en el que se debe garantizar un verdadero debido proceso. Advierto, que la regla general es la de que los bienes son lícitos, por lo que el Estado es el que debe probar que son ilícitos.</p> <p>Observo que si se trata de una acción real, como lo ha señalado la Corte Constitucional, debería ser competencia de los jueces ordinarios, además de que no creo que a través de una medida de excepción se pueda variar transitoriamente la competencia, que toca directamente con el debido proceso.</p> <p>Estimo que al no haberse trabado la relación procesal no es posible decretar medidas cautelares, toda vez que se desconoce el derecho de defensa de los afectados.</p> <p>1. El debido proceso es una de las garantías intangibles que por lo</p>
--	---

	<p>mismo no pueden ser tocadas durante el estado de excepción y así lo ha dejado claramente establecido en varias opiniones consultivas la Corte Interamericana de Derechos Humanos.</p> <p>2. La Corte Constitucional ha sostenido en su jurisprudencia que las leyes y su aplicación no pueden ser nunca causa de alteración del orden público; dicho de otra manera, el orden jurídico no es perturbador del propio orden jurídico y mucho menos subversivo, por esa razón ya se estimo inconstitucional la declaratoria de conmoción que hizo un Gobierno y los fundamentos de esa posición se encuentran en la sentencia C-300 de 1994.</p> <p>En relación con el tema de la extinción de dominio es necesario hacer un estudio sistemático del artículo 34 de la Constitución Política en armonía con el artículo 29 de la Carta y con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad si bien es cierto el artículo 34 permite extinguir el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social, no menos cierto es que el artículo 29 establece la presunción de inocencia de las personas, mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Si el estado de derecho consagra la presunción de inocencia, el investigado no tiene que demostrar que es inocente, no tiene que probar que es inocente sino que el Estado es quien tiene que probarle que es culpable. El numeral segundo del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” Esta norma forma parte del bloque de constitucionalidad y tiene en consecuencia la misma jerarquía de la Constitución; queda claramente establecido que es el Estado quien tiene que demostrar y probar la culpabilidad de las personas investigadas, de tal manera que nunca un inculpado tiene que probar su inocencia ya que la Constitución y los Tratados Internacionales consagran una presunción a su favor, que debe ser desvirtuada por el Estado; por esa razón es que consideramos que toda inversión de la carga de la prueba (para relevar al Estado de su deber de probar y obligar al sindicado a probar su inocencia) constituye una violación del debido proceso, de la Constitución y de los Tratados Internacionales. En mi sentir, tanto la ley original como este decreto con fuerza de ley que regula la extinción de dominio viola el derecho fundamental a la presunción de inocencia y en consecuencia son inconstitucionales.</p> <p>SI DR. ALFREDO BELTRÁN SIERRA</p> <p>Son razones de este salvamento de voto, en resumen, las</p>
--	---

	<p>siguientes:</p> <p>1ª. El Decreto Legislativo No. 1975 de 2002, fue expedido por el Gobierno Nacional en virtud de la declaración del Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional, que se hizo mediante Decreto Legislativo No. 1837 de 11 de agosto de 2002.</p> <p>2ª. Significa entonces lo anterior, que ese Decreto que ahora se controla por la Corte, se encuentra sometido a lo dispuesto por los artículos 213 y 214 de la Constitución Política, así como a las normas contenidas en la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción, y a los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos que obligan a Colombia.</p> <p>3ª. Conforme se expresa luego de su número, por medio del Decreto Legislativo No. 1975 de 2002, “se suspende la Ley 633 de 1996 y se regulan la acción y el trámite de la Extinción del Dominio”.</p> <p>Acorde con esa síntesis del objeto del Decreto, nuevamente se define la Extinción de Dominio y, en su artículo 1º se precisa que ella “es autónoma en los términos del presente Decreto”; en el artículo 2º se establecen las causales para extinguir el dominio mediante sentencia judicial; el artículo 3º señala cuáles son los bienes que podrían ser objeto de esa extinción de dominio; el capítulo II (artículos 4º a 7º) regula lo atinente a esta acción y, para ello precisa cuál es su naturaleza jurídica, determina lo pertinente a su iniciación, establece una retribución para los particulares que contribuyan de manera eficaz a la obtención de pruebas para la prosperidad de la acción y define, además, lo concerniente a su autonomía; el capítulo III fija reglas para el adelantamiento del proceso, creando una etapa nueva que denomina “fase inicial” durante la cual faculta al Fiscal para decretar medidas cautelares, y señala los modos de notificación, las formalidades para el emplazamiento del ausente, las consecuencias por su no comparecencia dentro del plazo allí indicado, el término probatorio, la resolución de acusación o la improcedencia de la misma, la supresión del recurso de apelación, lo pertinente a la devolución de los bienes, la concentración para decidir sobre nulidades, las causas de éstas, la prohibición de proponer excepciones o incidentes salvo la objeción al peritaje por error grave, el contenido de la sentencia y, por último, lo concerniente al pago de los gastos procesales y de administración de los bienes cuya extinción de dominio se pretende.</p> <p>Por último, en el Capítulo V, se dictan normas aplicables a los procesos en curso; sobre cooperación judicial; se dispone la suspensión de la Ley 633 de 1996, y se indica que el Decreto rige a</p>
--	---

	<p>partir de la fecha de su publicación.</p> <p>4ª. Como no es difícil advertirlo, el Decreto Legislativo No. 1975 de 2000, a pretexto de que “la legislación vigente resulta insuficiente e ineficaz” para sancionar “el lavado de activos” proveniente de actividades ilícitas con las cuales se financian “organizaciones delincuenciales”, regula de nuevo y de manera íntegra la acción y el trámite de la extinción de dominio a que se refiere la Ley 633 de 1996.</p> <p>No queda duda alguna sobre el objeto y el contenido del Decreto Legislativo en mención. Pero, aún en la hipótesis de que fuere cierta la insuficiencia e ineficacia de la Ley 633 de 1996 en relación con la extinción de dominio de bienes provenientes de actividades ilícitas, lo cierto es que adelantar la revisión de esa legislación para enmendar sus yerros, o para sustituirla por una nueva, no es asunto que corresponda al Presidente de la República mediante un Decreto Legislativo dictado al amparo de la declaración de Conmoción Interior, pues es esa una materia que queda dentro de la órbita del legislador ordinario, vale decir del Congreso de la República, en ejercicio de las atribuciones que para hacer las leyes le señala el artículo 150 de la Carta Política.</p> <p>No puede el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones de que se halla investido por los artículos 213 y 214 de la Constitución cuando se declara la Conmoción Interior, asumir todas las atribuciones del Congreso de la República. Solamente puede dictar decretos legislativos sobre las materias directamente relacionadas con las causas que declaran ese estado excepcional, y con observancia de los principios de necesidad, conexidad, proporcionalidad y motivación expresa de la incompatibilidad con las leyes vigentes si decide suspender algunas de estas, en forma total o parcial.</p> <p>Por el contenido del Decreto Legislativo No. 1975 de 3 de septiembre de 2002, es claro que el Gobierno Nacional procedió como si no tuviera los límites indicados, tanto por la Constitución como por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Optó por asumir, por completo, la función legislativa y por ello, luego de un juicio sobre la insuficiencia e ineficacia de la Ley 333 de 1996 para alcanzar los fines que con su expedición se perseguían, decidió regular íntegramente la materia y suspender la ley mencionada, lo que se pone en evidencia especialmente en cuanto el artículo 20 del Decreto Legislativo objeto de control por la Corte señala normas para el tránsito de legislación. Es claro, entonces, que de lo que se trata es de sustituir la legislación anterior por una nueva que, de antemano, se afirma que superará la insuficiencia e ineficacia de la antigua.</p>
--	---

	<p>5ª. Tanto es ello así, que en la Sentencia C-1007 de 19 de noviembre de 2002 de la cual discrepo en este salvamento de voto, resolvió declarar la constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 1975 de 3 de septiembre de 2002, en el entendido que sólo se aplica a los hechos ilícitos que ocurran con posterioridad a su vigencia y que se encuentren relacionados con las causas en virtud de las cuales se declaró el Estado de Conmoción Interior.</p> <p>6ª. Es decir que, como una consecuencia obligada de la decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia a que se ha hecho referencia, quedan entonces en pie dos regímenes distintos para regular la acción y el trámite de la extinción de dominio, a saber: Uno para los hechos acaecidos antes de la expedición del Decreto Legislativo 1975 de 3 de septiembre de 2002; y otro para los ocurridos después.</p> <p>Pero ello contraría la expresa voluntad del legislador extraordinario y excepcional que dictó el Decreto objeto de control haciendo uso, según dijo, de atribuciones propias de este Estado de Excepción. En este caso la Corte Constitucional para conservar en el ordenamiento jurídico el Decreto Legislativo sometido a su control, sustituyó con la suya la decisión del Presidente de la República y sus Ministros cuando lo dictaron. Ello habría podido evitarse declarando la inexequibilidad total del Decreto Legislativo No. 1975 de 3 de septiembre de 2002. Así se habría respetado la decisión del Gobierno Nacional, al propio tiempo que el imperio de la Constitución. No se hizo así por la Corte. Por ello salvo mi voto.</p> <p>SI DRA. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ</p> <p>1. La quinta causal de extinción de dominio</p> <p>Si bien compartí la decisión mayoritaria de declarar exequible, bajo determinadas condiciones, el artículo 5 del decreto legislativo 1975, referente a las causales de procedencia de la acción de extinción de dominio, considero que la Corte debió haber condicionado la exequibilidad de la causal quinta, por los siguientes motivos.</p> <p>Le correspondía a la Corte establecer la constitucionalidad de una norma según la cual, tratándose de bienes lícitos mezclados con otros de procedencia ilícita, el Estado puede extinguir o no el derecho de propiedad sobre los primeros, sin tener como límite “el monto del provecho ilícito”.</p> <p>Sobre el particular, la Corte, en sentencia C-374 de 1997, había ya considerado contraria a la Constitución una afectación ilimitada al</p>
--	--

	<p>derecho de propiedad, en sede de acción de extinción de dominio, de bienes lícitos mezclados con ilícitos, en los siguientes términos:</p> <p>“La norma enjuiciada cobija tanto los bienes muebles e inmuebles, como los frutos, productos y rendimientos de ellos, lo cual parece lógico si se tiene en cuenta el carácter ilegítimo de la propiedad, aunque debe aclararse, como lo hace el legislador, que, si se mezclan bienes de procedencia ilícita con otros que fueron adquiridos lícitamente, la extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito, distinción razonable y necesaria, porque el fundamento de la extinción del dominio está en la adquisición, no ajustada a Derecho, o contraria a la moral pública, del bien correspondiente. Resultaría opuesto a la seguridad jurídica y altamente lesivo del artículo 6 y del mismo 34 de la Constitución un precepto general e indiscriminado que llevara a aplicar tan grave sanción a una persona sobre la totalidad de su patrimonio sin introducir diferenciación alguna entre los bienes según su origen.”</p> <p>En este caso, la Corte debió de igual manera considerar contraria a la Constitución no limitar a la extinción del derecho de dominio sobre bienes de procedencia lícita, que aparecen mezclados con bienes de origen ilícito, al monto del provecho ilícito.</p> <p>En efecto, si bien es cierto que el derecho a la propiedad no es de aquellos que hacen parte del llamado núcleo duro de protección o intangibles, esto es, aquel conjunto de normas de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que reconocen determinados derechos fundamentales, y sus respectivas garantías judiciales (habeas hábeas y acción de tutela) y que no admiten ninguna clase de suspensión bajo estados de excepción, también lo es que las limitaciones que puede imponerse a este derecho bajo un régimen de anormalidad jurídica no son ilimitadas, por cuanto, según la Ley Estatutaria de Estados de Excepción no se puede vulnerar el núcleo esencial de estos derechos. En efecto, las limitaciones de que pueden ser objeto, bajo estados de excepción, los derechos que no hacen parte de la categoría de los intangibles, como es el caso del derecho a la propiedad, deben ser conformes con los principios de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad.</p> <p>En este orden de ideas, bajo el amparo de la conmovión interior, permitir la extinción del derecho de dominio sobre un bien lícito que aparece mezclado con otro de proveniencia ilícita sin limitante alguna, desconoce el contenido esencial del derecho a la propiedad. A decir verdad, si bien es cierto que la Constitución consagra la extinción de dominio sobre bienes adquiridos mediante</p>
--	---

	<p>enriquecimiento ilícito, cuando estos se mezclen con bienes lícitos, dicha potestad no puede extenderse sin más a la extinción de dominio de todos los bienes incluidos los lícitos pues éstos últimos gozan de protección constitucional. La interpretación de la causal 5ª de extinción de dominio que se hizo en la sentencia de la que me aparto, en mi criterio vulnera el art. 58 de la Carta Política. Dicha causal solo se ajusta a la Constitución si la extinción de dominio se limita al monto del provecho ilícito, para lo cual era necesario condicionarla en este sentido.</p> <p>En este orden de ideas, a mi juicio, la Corte debió haber declarado la exequibilidad condicionada del numeral quinto del artículo 2 del decreto legislativo 1975 de 2002, en el entendido de que si se mezclan bienes de procedencia ilícita con otros que fueron adquiridos lícitamente, la extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito.</p> <p>2. La inconstitucionalidad de los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 12 del decreto legislativo 1975 de 2002.</p> <p>El decreto legislativo introdujo una modificación en el trámite de la acción de extinción de dominio al incluir una nueva etapa procesal que se denomina “fase inicial”, cuya finalidad es la de “identificar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción”.</p> <p>La existencia de esta fase preliminar, con el mencionado propósito explícito, no ofrecía reparo alguno de constitucionalidad. De todas formas, el reenvío que el inciso primero del artículo 12 de la normatividad de excepción realizaba al artículo 2 de la misma, quedaba sometida a todos los condicionamientos que la Corte realizó, en su momento, a las causales de extinción de dominio.</p> <p>Ahora bien, las medidas adoptadas en la denominada “fase inicial” presentan las siguientes características.</p> <p>2.1. Unas medidas cautelares reales ilimitadas en cuanto a los bienes sobre los que recae y las personas afectadas con las mismas.</p> <p>Sin lugar a dudas, las nuevas medidas cautelares son de carácter real, como quiera que recaen sobre bienes que a ser objeto de un litigio entre un particular y el Estado. No obstante, como dicha etapa, en mi criterio, es preliminar al proceso pues su finalidad es apenas la de identificación de bienes y por ende de su propietario o poseedor, no se encuentra justificación a que en dicha etapa además se permita la práctica de medidas cautelares. En efecto, con base en informaciones que pueden provenir de autoridades públicas o de particulares, la norma permite que un fiscal sin más vaya imponiendo sobre un bien o un grupo de éstos, gravámenes</p>
--	--

	<p>que incluso van más allá de los clásicos embargo y secuestro del Código de Procedimiento Civil, sin que mediante una providencia se haya determinado contra quien se dirigirá la acción y la determinación precisa de los bienes objeto del proceso. En efecto, una vez adoptada la medida cautelar, algunos bienes se colocan a disposición del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado de la Dirección Nacional de Estupefacientes otros pueden ser vendidos o depositados en encargos fiduciarios, sin que realmente este determinado en dicha etapa contra quien se dirige la medida.</p> <p>En un Estado Social y Democrático de Derecho, la práctica de medidas cautelares implica que previamente se encuentren determinados de manera concreta y específica los bienes que serán objeto del proceso y por ende susceptibles de cautelas, y además, la persona legitimada para la vinculación al mismo, que es justamente contra la que se decreta dicha medida cautelar, a el fin de trazar la línea divisoria exacta entre los derechos de quienes son terceros en la relación procesal a oponerse a la práctica de dichas medidas cautelares y los derechos de quien será parte en el proceso, quien si bien puede ejercer su derecho de defensa, no tiene la posibilidad de oponer a la práctica de dichas medidas.</p> <p>Nótese además, que estas normas no establecen límite alguno a la facultad de que dispone el funcionario judicial para imponer gravámenes de tal entidad sobre los bienes, lo cual, de entrada, afectaba el derecho constitucional fundamental de defensa y del mínimo vital de los afectados, lo que permite advertir una violación a las normas constitucionales sobre el debido proceso y el respeto por los derechos fundamentales de los afectados.</p> <p>Estas son las razones por las cuales, en estos dos casos concretos, no compartí la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1065/03
Fecha de la sentencia	once (11) de noviembre de dos mil tres (2003).



Demandante	: Edgar Saavedra Rojas
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20 y 24, parciales, de la Ley 793 de 2002 “Por medio de la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las normas que regulan la extinción de dominio.”
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>- El constituyente sólo consagró la extinción del dominio para los bienes adquiridos ilícitamente.</p> <p>El artículo 34 de la Constitución estableció que la acción corresponde a los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, por ello resulta inexecutable que se pretenda hacer extensiva la acción para los bienes utilizados o destinados con finalidades ilícitas.</p> <p>Considera que las causales del artículo 2 de la Ley 793, que extienden la acción para los bienes utilizados o destinados con finalidades ilícitas o que provengan indirectamente de una actividad ilícita desbordan el límite previsto en el artículo 34 de la Carta.</p> <p>Respecto del párrafo primero del artículo 2, considera que se está ante la inversión de la carga de la prueba. Y en cuanto al párrafo 2 del mismo artículo, estima que el legislador excluyó determinados delitos, por lo que pide que en torno a este párrafo se dé un fallo de exequibilidad condicionada en el sentido de que es constitucional “siempre y cuando se entienda que podrá ser objeto de la acción de extinción de dominio cualquier bien o patrimonio que haya sido adquirido por medio de actividades ilícitas profesionalizadas, o realizadas con ánimo de lucro, sin importar su género o especie.” (página 150)</p> <p>- Las funciones constitucionales de la Fiscalía son las de investigar y acusar, y no puede el legislador asignarle funciones que no sean complementarias y concordantes con aquella.</p> <p>Afirma que hay una desnaturalización legal de las funciones constitucionales atribuidas a la Fiscalía General de la Nación. El legislador en las normas de la Ley 793 de 2002 incluyó atribuciones</p>

	<p>que la Constitución no estableció en el artículo 250 de la Constitución. La Ley 793 le asignó a la Fiscalía funciones que nada tienen que ver con la represión del delito y la persecución de delincuentes, pues la acción es administrativa y de origen constitucional, que tiene que ver con las consecuencias que algunos delitos producen: el enriquecimiento ilícito y el crecimiento injustificado de sus patrimonios. Prueba de ello se encuentra en que el mismo legislador se encargó de definir esta acción como real y totalmente independiente del delito y del proceso penal, lo que también surge de su propia naturaleza.</p> <p>Declarar, pues, la procedencia sobre la extinción del dominio sobre bienes de ilícita procedencia no tiene ninguna relación con las atribuciones constitucionales de la Fiscalía General de la Nación.</p> <p>En consecuencia, se debe declarar la inexequibilidad de las normas de la Ley 793 de 2002 que radiquen tal competencia en la Fiscalía, como son los apartes acusados de los artículos 4, 5, 11, 1214, 17 de la mencionada Ley.</p> <p>- La presunción de inocencia y la carga de la prueba. La imposibilidad de que la misma sea invertida.</p> <p>El actor se remite al contenido del artículo 29 de la Constitución y a lo consagrado en el Pacto Universal de Derechos Humanos (Ley 74 de 1968), artículo 14, numeral 2, y a la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), artículo 8. Se remonta a los orígenes y a los conceptos relativos al principio de la presunción de inocencia. Recuerda que la Corte Constitucional ha reconocido que en el ejercicio de esta acción de extinción de dominio debe respetarse la presunción de inocencia, principio que debe aplicarse con mayor razón dentro de este proceso. Proceso en el que además debe imperar la carga de la prueba a cargo del Estado, quien a través de sus funcionarios, está obligado a demostrar la existencia de un crecimiento patrimonial injustificado y sobre cuáles bienes específicamente individualizados, que fueron obtenidos por medios ilícitos. Cita algunas providencias de la Corte Constitucional para apoyar sus argumentos: sentencias C-374 de 1997, C-176 de 1994.</p> <p>Considera que la Corte para declarar la exequibilidad de los tres primeros numerales del artículo 9 del Decreto Legislativo 1975 de 2000 olvidó que una de las primeras formas de interpretación es la literal. Hace esta afirmación porque tiene la convicción de que en este Decreto se quiso invertir la carga de la prueba al consagrarlo como un derecho del demandado. En esta Ley 793 de 2002, se deja en evidencia que la voluntad del gobierno y del legislador es invertir la carga de la prueba, pues, claramente se indica que es el demandado quien debe justificar o probar la procedencia lícita de</p>
--	--

	<p>sus bienes. Afirma que “estamos frente a una verdadera triquiñuela del legislador que hace aparecer como un derecho (el de probar) cuando en realidad de verdad lo que está buscando es desconocer la presunción de inocencia y como consecuencia de la misma invertir la carga de la prueba.”</p> <p>Señala que como la disposición contenida en el Decreto de excepción fue declarada exequible por la Corte y ahora se encuentra en la Ley 793 de 2002, en las partes demandadas de los artículos 2, 9 y 13, solicita sean declarados inexecutable por las razones que expuso.</p> <p>En este punto, el actor hace la siguiente precisión respecto del contenido del numeral 7 del artículo 2, que dice: “7. Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen ilícito del bien perseguido en el proceso.” Señala que dentro de la lógica debe aludir al origen lícito y no ilícito.</p> <p>- Extinción de dominio sobre bienes respecto de los cuales no se ha demostrado la procedencia ilícita : artículo 2, numeral 5. Se establecen causales de extinción de dominio diferentes a la única que estableció el Constituyente que es la adquisición ilícita de los mismos. Si a pesar de haber estado los bienes involucrados en el proceso penal y no se investigó su origen, utilización o destinación, o a pesar de haberlo hecho no se tomó ninguna determinación al respecto, es una falta del Estado cuyas consecuencias negativas no pueden recaer sobre el ciudadano.</p> <p>Debe declararse la inexecutable del numeral 5 del artículo demandado.</p> <p>- Extinción de dominio sobre bienes de procedencia lícita utilizados en actividades o destinados a ocultar o mezclar bienes de procedencia ilícita: artículo 2, numeral 6.</p> <p>Considera que se debe declarar la inexecutable de este numeral, pues de manera grosera se pretende modificar la Constitución, pues si la única causal de extinción de dominio autorizada por la Carta es respecto de los bienes adquiridos ilícitamente es obvio que la acción no puede comprender bienes de procedencia lícita.</p> <p>- Extinción de dominio sobre bienes equivalentes que no fueren de procedencia ilícita. Artículo 3 inciso 2.</p> <p>Considera que si el Estado no pudo ubicar los bienes o no pudo decretar su extinción esto corresponde a una ineficiencia del Estado que no debe asumir el ciudadano. En esta hipótesis ni siquiera se estaría invirtiendo la carga de la prueba, sino que frente a su propia</p>
--	--

	<p>ineficacia el Estado acude a buscar bienes equivalentes. Se violan los principios de la presunción de inocencia, la carga de la prueba, el artículo 34 de la Carta, que expresa que la acción debe recaer sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Se viola también el derecho de defensa.</p> <p>Sobre la extinción de dominio respecto de bienes equivalentes existen las siguientes sentencias: C-176 de 1994, C-374 de 1997 y C-1007 de 2002, que sin poder considerarse como cosa juzgada sirven para fundamentar una decisión sobre esta norma en forma similar. Además, en esta última sentencia, la decisión correspondió a un pronunciamiento en un estado de excepción.</p> <p>- La exclusión injustificada de ciertas garantías inherentes al debido proceso y de otras garantías procesales creadas para hacer posible el ejercicio de los derechos de contradicción y de defensa.</p> <p>Señala que en el párrafo 5 del artículo 5 aparece una expresión que no tiene sentido con el contexto de la ley pero sí en el Proyecto que fue discutido. Se trata de una proposición jurídica incompleta, pues la norma alude a un fenómeno jurídico que finalmente no fue objeto de ataque y que por lo tanto es imposible que pudiera producirse una declaratoria de extinción de dominio por un presunto abandono de los bienes.</p> <p>- En cuanto a la demanda de la expresión “Contra esta resolución no procederá recurso alguno” contenida en el artículo 13, considera el actor que persiste en el artículo 13 una tendencia de suprimir o restringir las garantías y derechos, que también se observa en lo demandado de los numerales 6, 9 y 10 del mismo artículo.</p> <p>Explica que no es entendible que en tiempos de normalidad y por tiempo indefinido se produzca una eliminación o restricción de derechos y garantías sólo para quienes aparezcan como sindicados de haber obtenido sus bienes con dineros de procedencia ilícita. Se violan los principios de igualdad, presunción de inocencia, además, pretender darles a sentencias efectos erga omnes es un desface a la democracia, que afecta a terceros de buena fe y a los inocentes que se hubieren visto perjudicados por tales decisiones, que pudieren llegar a demostrar que por múltiples razones no tuvieron oportunidad de intervenir en el proceso de extinción.</p> <p>Señala que es sabido que la acción de revisión es una garantía de trascendental importancia para corregir fallos injustos. No se entiende la razón por la que el legislador quiere quitar esta garantía en perjuicio de los eventuales ciudadanos afectados con fallos manifiestamente injustos en este tipo de procesos.</p>
--	---

	<p>- Respecto del artículo 7, el demandante considera que se establecen restricciones de ciertas garantías que evidencian el propósito de extinguir el dominio de los bienes demandados en el proceso en el menor tiempo posible. Se establece un procedimiento restrictivo de ciertas garantías que no se compadece con el tipo de acción que se ejerce, ni con la presunción de inocencia, ni igualdad. La restricción de ciertas garantías se hace con el único propósito de que la decisión final tomada en el proceso sea de carácter negativo para el ciudadano demandado. Se prohíbe que el ciudadano pueda acudir a las garantías consagradas del Código de Procedimiento Penal, al remitir en casos de vacío normativo, en primer lugar, al Código de Procedimiento Civil, se establece la imposibilidad de alegar la prejudicialidad y la de solicitar acumulación de procesos.</p> <p>No se entiende, tampoco, la razón para se les imponga a los servidores públicos dar prelación a estos procesos por encima de los que tienen procesado detenido.</p> <p>Se trata de una grave inversión de los valores, ya que para el Gobierno y el legislador tienen mayor importancia la solución pronta de los procesos donde se decida el dominio sobre unos bienes que los procesos donde ciudadanos colombianos protegidos por la presunción de inocencia, se encuentren detenidos. Considera que se trata de una grave inversión de valores.</p> <p>- Sobre la enumeración taxativa de las nulidades contenida en el artículo 16, dice el demandante que se trata de una clara vulneración de las garantías del debido proceso y de otras garantías constitucionales.</p> <p>Considera que la disposición daría la posibilidad de una exequibilidad condicionada en el sentido de que se debe entender que habrá lugar a declarar nulidades en éste proceso además de las del artículo 16 y todas las que impliquen una vulneración de cualquier derecho o garantía contemplados en las normas integradoras del bloque de constitucionalidad.</p> <p>- Respecto del artículo 8 señala como una verdadera paradoja pretender que el debido proceso depende de aspectos nominativos. Se trata de menoscabar algunas de las más importantes garantías del concepto constitucional. Para ello basta mirar el contenido del artículo 9.</p> <p>- Dentro de este propósito de afectar derechos y garantías de los sometidos a este especial procedimiento, se encuentra la negativa de presentar excepciones e incidentes, de la misma manera que la única objeción posible es del peritazgo por error grave, como lo</p>
--	---

	<p>consagra el artículo 17 de la Ley 793. Se trata de una celeridad injustificada. Se legisla con fundamento en la presunción de culpabilidad y de mala fe.</p> <p>- Los principios de legalidad material y procesal, de favorabilidad y la imposibilidad de imponer efectos retroactivos a una ley de contenido perjudicial y restrictivo son vulnerados cuando la ley dispone que la nueva norma se aplicará a los procesos en curso en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, excepto los términos y recursos que hubieran comenzado a correr, como lo dispone el artículo 20. No se respetan estos principios constitucionales ni la normatividad internacional, pues en tal caso la nueva ley hubiere comenzado a aplicarse para los procesos que se inicien con posterioridad de la nueva ley.</p> <p>- Imposibilidad de aplicación retroactiva de las normas restrictivas o sancionatorias. El artículo 24 debe declararse inexecutable. Considera el demandante que no puede aceptar los argumentos de algunas sentencias de la Corte Constitucional, sentencia C-374 de 1997, en el sentido de que se puedan imponer sanciones de carácter administrativo con indudables efectos penales. Señala el actor que no puede olvidarse que la propiedad protegida por la Constitución es la lícitamente adquirida y por tanto al establecerse la sanción administrativa por parte del Constituyente, el legislador puede hacer retroactiva tal sanción. Donde el Constituyente no distinguió no puede el interprete hacerlo. La Corte creó un peligroso precedente. Afirma que con este precedente se está creando jurisprudencia para las futuras dictaduras.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-128/02
Fecha de la sentencia	veintiséis (26) de febrero de dos mil dos (2002).
Demandante	María Soledad Castrillón Amaya
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 7 de la Ley

	324 de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda”.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Decision	<p>Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 324 de 1996.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el aparte final del artículo 1º de la Ley 324 de 1996, que literalmente dice: “Intérprete para Sordos. Personas con amplios conocimientos de la Lengua Manual Colombiana que puede realizar interpretación simultánea del español hablado en la Lengua Manual y viceversa.”, en el entendido de que también son intérpretes para sordos aquellas personas que realicen la interpretación simultánea del castellano hablado a otras formas de comunicación de la población sorda, distintas a la Lengua Manual, y viceversa.</p> <p>Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 324 de 1996, en el entendido de que ese auspicio estatal no excluye el apoyo estatal a la investigación, la enseñanza y la difusión de otras formas de comunicación de la población sorda, como la oralidad.</p> <p>Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 7º de la Ley 324 de 1996, bajo el entendido de que el apoyo estatal a los intérpretes idóneos en la lengua manual colombiana sólo es legítimo si el Estado no excluye el apoyo a las otras opciones de educación y rehabilitación de la población con limitaciones auditivas, como la oralidad, y que la lengua manual es una técnica de comunicación, que no constituye idioma oficial en Colombia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En criterio de la demandante, la disposición acusada viola los artículos 2, 5, 10, 13, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 67, 68, y 93 de la Carta Política.</p> <p>Explica la actora, en primer lugar, que el lenguaje de señas no es el propio de los sordos, sino de quienes no pueden acceder al lenguaje oral por diferentes factores, es decir, mudos. Siendo así, los sordos tienen derecho a hablar y entender el lenguaje de sus padres y familia cercana a través de la oralidad. De otro lado, la lengua Manual Colombiana no puede ser reconocida por el Estado como idioma oficial propio de la comunidad sorda de Colombia, porque esta comunidad no está determinada como grupo étnico con territorio propio, la lengua oficial propia de los sordos es el castellano. Para sustentar tal afirmación la demandante hace un estudio sobre lo que significa étnico, para concluir que los sordos no reúnen esas características y por tanto no puede decirse que la</p>

	<p>lengua Manual Colombiana sea oficial o propia.</p> <p>Continúa su argumentación afirmando que las normas acusadas violan el artículo 2 de la Constitución que consagra como fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar los derechos constitucionales y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Indica que durante el trámite de la ley sólo hubo consultas con los interesados en que la misma culminara su trámite, no se consultó a personas y entidades especializadas en la rehabilitación de sordos.</p> <p>Posteriormente la demandante alega que los artículos acusados violan también el artículo 13 de la Constitución, ya que estas normas han restringido la posibilidad de adquirir el lenguaje oral para los sordos, lo cual fomenta su aislamiento y marginamiento de la sociedad y de su propia familia, pues la ley en estudio anula la opción oral, haciendo obligatorio el aprendizaje de señas. Además porque no todas las personas tienen la capacidad económica para pagar la rehabilitación en un centro privado, pues “como consecuencia de una aplicación sesgada de la ley, las entidades públicas están dejando de lado a las entidades educativas que propenden la enseñanza dentro del oralismo (...) porque es obligatorio darle prioridad al lenguaje de señas”. Así, las disposiciones violan también el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos sordos, pues eliminan la opción de acudir a una rehabilitación oral dejando en pie sólo la posibilidad del lenguaje de señas.</p> <p>Respecto al artículo 15, referente al derecho a la intimidad personal, la actora considera que la imposición de un intérprete para las personas sordas es una violación de este derecho, pues además de aislar e impedir la comunicación directa del individuo sordo con sus congéneres, genera la dependencia del sordo, lo que limita su libre desarrollo y lo inhibe en la cotidianidad. Para la demandante es más viable que el interlocutor de turno vocalice y hable pausadamente para facilitar la lectura de los labios durante una conversación directa con el individuo sordo, que imponer la lengua de señas.</p> <p>Considera la actora que las normas acusadas violan el derecho libre al desarrollo de la personalidad, pues con éstas los sordos no pueden optar entre el lenguaje de señas y la posibilidad de una rehabilitación oral. De esta manera, restringen también el derecho a la educación mínima pues, para la demandante, el sistema de señas no permite que los sordos interactúen con los miembros de su ambiente familiar, escolar y social.</p> <p>La actora además critica el lenguaje de señas, por considerarlo</p>
--	--



	<p>pobre y limitador del conocimiento y arguye que los sordos que se educan dentro del oralismo, pueden llegar a niveles superiores de educación, en contraste con las personas sordas que sólo reciben instrucción en el lenguaje de señas.</p> <p>En cuanto al supuesto cargo por violación del artículo 25, considera la actora que los artículos demandados llevan a que se reduzca notablemente la posibilidad de conseguir empleo para una persona sorda que sólo sepa el lenguaje de señas, pues es evidente que los empleadores preferirían a una persona que se comunique a través de la oralidad. En ese sentido debe existir la opción, pues de lo contrario las personas sordas que sólo manejan el lenguaje señas, aunque estén bien preparadas, sólo conseguirán trabajos inferiores a sus talentos y con ello se viola su dignidad. De otro lado, considera que con estas normas, disciplinas como la fonoaudiología y la terapia del lenguaje pierden terreno, pues ellas se ocupan de rehabilitar oralmente a personas sordas. Agrega también que existe violación del derecho a la libre asociación, ya que las normas acusadas obligan a estos profesionales a asociarse al grupo de quienes se comuniquen a través del lenguaje de señas, que son los que necesitan intérpretes. Reitera además la violación al derecho de los sordos a escoger libremente su profesión u oficio, por las razones ya explicadas.</p> <p>Respecto al artículo 27, el Estado garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en el artículo 67 garantiza el derecho a la educación, y por tanto, considera la actora que al contener ésta una gran componente lingüístico debe darse oportunidad de impartir una rehabilitación oral para los sordos, pues con la imposición del lenguaje de señas se vulnera la libertad de aprendizaje y enseñanza. Enfatiza que con los avances tecnológicos actuales para mejorar la audición y las pedagogías para sordos, es irracional que a través de la ley 324 éstas sean limitadas por la carencia de recursos económicos.</p> <p>De otro lado, los artículos demandados violan el artículo 67 de la Constitución ya que no se presenta una educación integral, pues está demostrado que las personas sordas que sólo aprenden el lenguaje de señas tienen problemas de lectura y escritura. La lengua manual impide el progreso intelectual limitando a los sordos y disminuyendo la calidad de su educación y la oportunidad de alcanzar un nivel elevado, ya que “no hay modo de tener intérprete para cada sordo todo el tiempo”.</p> <p>También considera la actora que los artículos demandados son contrarios al artículo 44 de la Constitución pues no puede existir derecho a la familia si se impide a los sordos la posibilidad de comunicarse con ella a través de su lenguaje natural, generando su</p>
--	---

	<p>aislamiento e impidiendo su desarrollo armónico e integral, ya sea como infantes o adolescentes.</p> <p>Para la demandante, el artículo 47 de nuestra Constitución Política establece la posibilidad de que los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos reciban atención especializada y las normas demandadas niegan la posibilidad de una rehabilitación oral ignorando las tecnologías de ayudas auditivas, amplificadores e implantes, que son desplazados por el lenguaje de señas. La actora encuentra además que estas normas violan el artículo 54 de la Constitución ya que a través de la lengua Manual no se brinda real capacitación laboral para los sordos.</p> <p>La señora Castrillón ataca a la Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL), al Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y otras organizaciones de sordos a quienes considera las únicas beneficiarias de esta ley, pues le dan privilegio al lenguaje de señas sobre la rehabilitación oral y por tanto reciben los recursos que ya no son otorgados a las entidades que se encargaban de enseñar a los sordos a hablar, y argumenta que tienen poca seriedad académica y que por tanto no son una ayuda para las personas sordas. En ese sentido encuentra que existe una violación al artículo 68 de la Constitución porque las normas demandadas desplazan a las instituciones educativas que tienen el sistema del oralismo como método pedagógico, a través de una malintencionada interpretación de la ley, para darle prevalencia a una asociación sobre entidades educativas de comprobada eficiencia, con lo cual aumenta el analfabetismo en las personas sordas, o por lo menos su bajo nivel educativo.</p> <p>Finaliza la actora con su defensa de las metodologías del lenguaje oralista para sordos, por considerar que éstas abren espacios nuevos para el desarrollo de estas personas, lo que no ocurre con el lenguaje de señas que a través de estas normas se está imponiendo. Así, considera que los padres tienen derecho a escoger la educación que darán a sus hijos sordos: el lenguaje de señas, o la oralidad, y reitera que con esta demanda no pretende que se elimine el lenguaje de señas, sólo que se deje abierta la posibilidad que tienen los sordos para aprender a hablar y entender el lenguaje de las personas que los rodean.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, la ciudadana solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas acusadas o, si ello no ocurre, se declare la constitucionalidad condicionada porque en la práctica las normas lesionan gravemente los postulados constitucionales que se analizaron. Además solicita la práctica de pruebas con los profesionales que se dedican a la rehabilitación de los sordos, instituciones educativas, sordos rehabilitados en ambas corrientes,</p>
--	--

	padres de familia con hijos sordos y colegios regulares que hayan integrado alumnos sordos.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, JAIME CORDOBA TRIVIÑO, EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.</p> <p>IDIOMAS OFICIALES-Objetivo (Salvamento parcial de voto)</p> <p>IDIOMAS OFICIALES-No prohibición del reconocimiento de otras lenguas (Salvamento parcial de voto)</p> <p>POBLACION SORDA-Aceptación de lengua manual no vulnera la Constitución/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Aplicación/POBLACION SORDA-Reconocimiento de lengua manual no excluye otras formas de enseñanza como la oralidad (Salvamento parcial de voto)</p> <p>Del contenido del artículo 10 de la Constitución se deriva que el reconocimiento de un idioma como “propio” de una comunidad no puede equipararse con su consagración como “oficial”. Ese carácter oficial significa que todas las relaciones del Estado con los ciudadanos deben darse en ese idioma, inclusive a través de los medios de comunicación utilizados por los órganos estatales. Más aún, cuando un idioma es oficial las relaciones jurídicas y todos los actos que de ellas se derivan, y por supuesto aquellos donde participe el Estado, deben adelantarse en ese idioma. La lengua manual se constituye entonces en un apoyo para las personas sordas que por diversos motivos no acceden a la oralidad, sin que pueda afirmarse que se desplaza el carácter oficial del castellano.</p> <p>IDIOMAS OFICIALES-Reconocimiento de idioma propio no equiparable como oficial/IDIOMAS OFICIALES-Significado/POBLACION SORDA-Reconocimiento de lengua manual (Salvamento parcial de voto)</p> <p>POBLACION SORDA-Validez del reconocimiento de la lengua de señas/POBLACION SORDA-Apoyo igualitario a otras opciones como la oralidad (Salvamento parcial de voto)</p> <p>El reconocimiento de la lengua de señas como un mecanismo importante e idóneo para favorecer a aquella parte de la comunidad sorda formada en esa metodología, excluyendo una interpretación inconstitucional. El problema surgió del hecho de que algunos operadores jurídicos consideraron que el reconocimiento de la lengua manual como propia de la comunidad</p>

	<p>sorda implicaba que esas personas se expresan exclusiva o esencialmente en ese lenguaje (es como si la ley hubiera asumido que la Lengua Manual Colombiana tiene tal difusión e importancia que distingue a esta población con limitaciones auditivas, a pesar de que un gran número de sordos se expresa a través del español hablado). No obstante, los suscritos magistrados consideramos que el reconocimiento de la lengua de señas es constitucionalmente válido, pero la definición de ese lenguaje como idioma "propio" de dicho grupo social debía ser excluida del ordenamiento, indicando en todo caso que el Estado debe mantener un apoyo igualitario a las otras opciones de educación y rehabilitación de la población con limitaciones auditivas, como la oralidad. Es una lengua que los caracteriza y los hace un grupo con identidad propia frente a una mayoría oyente que los margina.</p> <p>POBLACION SORDA-Políticas de apoyo a través de la lengua manual (Salvamento parcial de voto).</p> <p>SI DR. MARCO GERARDO MONROY CABRA.</p> <p>IDIOMAS OFICIALES-Inconstitucionalidad de expresión "idioma propio" en lengua de señas/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Aplicación sobre el resto de la disposición acusada (Salvamento parcial de voto)</p> <p>NORMA ACUSADA-Admisión de interpretaciones (Salvamento parcial de voto)</p> <p>POBLACION SORDA-Condicionamiento del reconocimiento de la lengua manual (Salvamento parcial de voto)</p> <p>POBLACION SORDA-Lengua manual como método de comunicación/POBLACION SORDA-Lengua manual no implica que apoyo estatal se restrinja a promoverla (Salvamento parcial de voto)</p> <p>POBLACION SORDA-Protección especial a través del reconocimiento de la lengua manual (Salvamento parcial de voto)</p> <p>DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA-Capacidad como atributo (Salvamento parcial de voto)</p> <p>DISCAPACIDAD RELATIVA-Efectividad de garantías constitucionalmente reconocidas (Salvamento parcial de voto).</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-181/02
Fecha de la sentencia	doce (12) de marzo de dos mil dos (2002).
Demandante	Carlos Mario Isaza Serrano
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9° (total), 20, 25, 27, 29, 30, 44 (parciales), 65 (total), 116, 131, 146, 151 y 157 (parciales) de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 9° de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión “y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional”, contenida en el artículo 20 de la ley 200 de 1995.</p> <p>Tercero: Del artículo 25, numeral 5º, literal a) de la Ley 200 de 1995, declarar EXEQUIBLE la expresión “que con intención”, pero en relación con los cargos analizados en el acápite correspondiente de esta providencia. Por el contrario, las expresiones “grave” y “ejecutado en asalto” del mismo literal se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el literal b) del numeral 5º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, pero exclusivamente por las razones expuestas en el acápite correspondiente de esta providencia.</p> <p>Quinto: ESTARSE A LO RESUELTO en las Sentencias C-708 de 1999 y C-292 de 2000, respecto de la exequibilidad de las expresiones acusadas del artículo 27 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Sexto: Declarar EXEQUIBLE la expresión “Para la selección o graduación de las sanciones se tendrán en cuenta la gravedad de la falta” del artículo 29 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Séptimo: Declarar EXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 30 de la Ley 200 de 1995, en relación con los cargos analizados en el aparte correspondiente de esta Sentencia.</p> <p>Octavo: Declarar EXEQUIBLE el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 200 de 1995, condicionado a que se entienda que la sanción accesoria en él contemplada no procede frente a faltas</p>

	<p>disciplinarias graves ni leves.</p> <p>Noveno: Declarar EXEQUIBLE la expresión “desde el momento de su elección”, contenida en el artículo 44 de la Ley 200 de 1995, e INHIBIRSE de fallar en relación con la expresión “ y hasta cuando esté legalmente terminado el período”, contenida en la misma norma, por ausencia de cargos en la demanda.</p> <p>Décimo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 65 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Undécimo: Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 131 de la Ley 200 de 1995.</p> <p>Duodécimo: Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 146 de la Ley 200 de 1995, excepto la expresión, “provisional, sin perjuicio de que si con posterioridad aparece la prueba para hacerlo, se proceda de conformidad siempre que no haya prescrito la acción disciplinaria”, que se declara INEXEQUIBLE. Así mismo, se declara INEXEQUIBLE la expresión “provisional o definitivo” contenida en el inciso segundo del artículo 151 de la misma ley.</p> <p>Decimotercero: Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 157 de la Ley 200 de 1995, pero exclusivamente en relación con los cargos de la demanda. Adicionalmente, el inciso declarado exequible se condiciona a que en el trámite de la segunda instancia, se entienda que el procesado conserva la facultad de controvertir las pruebas decretadas de oficio por la autoridad disciplinaria.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Según el demandante el artículo 9º es inconstitucional porque el predicado de la aplicación inmediata de la ley no puede hacerse extensivo a la ley disciplinaria, en la medida en que, atendiendo a los principios de favorabilidad y ultractividad, la ley aplicable a la comisión de una falta es la que se encuentra vigente al momento de realización de la conducta.</p> <p>Al sentir del demandante, la norma acusada quebranta el artículo 29 de la Constitución porque el principio de que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes se aplica tanto para normas sustantivas como adjetivas</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. ALVARO TAFUR GALVIS, EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT</p> <p>Respecto de la primera norma, el artículo 65 de la ley 200 de 1995 señala lo siguiente:</p>

	<p><i>“Artículo 65. COMPETENCIA PREFERENTE. La falta por incremento patrimonial no justificado será de competencia exclusiva de la Procuraduría General de la Nación tanto en la instrucción como en el fallo en aquellos casos en que la cuantía exceda de mil (1000) salarios mínimos mensuales.”</i></p> <p>Para el demandante, la norma desconocía el principio del juez natural y desplazaba a su vez al Consejo Superior de la Judicatura de la facultad otorgada por el artículo 256 de la Carta para examinar la conducta de los funcionarios de la rama judicial. Sin embargo, la Corte concluyó que el artículo en mención no versaba sobre la competencia preferente de la Procuraduría, sino que era el resultado del libre ejercicio de la potestad de configuración del Congreso para diseñar mecanismos sobre el ejercicio de la potestad disciplinaria, que no contravenía expresas restricciones constitucionales. Además, consideró que ello no significaba disminuir la competencia del Procurador General de la Nación para investigar y desvincular de su cargo al funcionario que derive evidente e indebido provecho patrimonial en ejercicio de su cargo o de sus funciones, según el artículo 278-1 de la Constitución. Y de otro lado precisó que la norma no modificaba las competencias disciplinarias funcionales del Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>No obstante lo anterior, considero que las apreciaciones de la mayoría no son conducentes. En primer lugar, fácilmente puede observarse cómo la norma demandada, aún cuando hace referencia a la competencia preferente de la Procuraduría, lo que en realidad señala es una <i>atribución exclusiva</i> en cabeza del Ministerio Público. Pero si el Constituyente señaló que el Procurador tiene un poder preferente para adelantar una investigación disciplinaria (CP. art. 276-6), significó precisamente que tiene la facultad de desplazar a quien en principio corresponde promover dicha investigación.</p> <p>En materia disciplinaria, en principio, el encargado de adelantar los procesos es el superior jerárquico de la entidad, pero bien puede el Ministerio Público asumir el conocimiento de ciertos asuntos sin que ello implique violación al principio del juez natural. Sin embargo, esa potestad se adquiere únicamente en virtud del poder preferente que confiere la Carta y no de una competencia directa que no fue prevista constitucionalmente. Para que las atribuciones de la Procuraduría se activen en el ámbito disciplinario, es apenas lógico que debe existir alguien que pueda ser desplazado, porque de otra manera no podría predicarse una competencia preferente sino exclusiva, que como fue señalado, la Constitución no le asignó al Ministerio Público.</p> <p>Con todo, lo anterior no significa que esté prohibido asignar al Procurador ciertas competencias directas, pero ellas únicamente podrán hacerse de manera restrictiva y en casos especiales, como por ejemplo cuando no existe un superior jerárquico encargado de adelantar la investigación, o cuando por la estructura de la entidad no hay posibilidad de adelantar un control interno disciplinario.</p>
--	--

	<p>Pero el artículo 65 de la ley no corresponde a una de esas hipótesis, sino que se limita a asignar una competencia exclusiva atendiendo únicamente la cuantía del incremento patrimonial no justificado, con lo cual se afecta el principio del juez natural y del debido proceso. Es por ello que considero que la norma debió ser retirada del ordenamiento jurídico.</p> <p>De otro lado, la Corte advierte que la norma demandada no disminuye la competencia de la Procuraduría, lo cual es claro porque si la competencia es exclusiva no se afecta el poder preferente, pero olvida que el asunto versaba sobre la disminución de las atribuciones del superior jerárquico de la entidad, a quien efectivamente se le restringen sus facultades.</p> <p>Ahora bien, la declaratoria de inexequibilidad del artículo 65 de la ley dejaba a salvo la competencia del Ministerio Público, pues en todo caso aquel conservaba la potestad de asumir un control preferente en el curso de la investigación disciplinaria, por cuanto ella se deriva de la propia Constitución.</p> <p>Finalmente, la Corte consideró que el legislador tenía libertad de configuración para diseñar el ejercicio de la potestad disciplinaria mientras no desconociera las restricciones constitucionales, apreciación ésta con la cual estoy de acuerdo. El error de la Corte radica en el siguiente punto, cuando concluye que no existen limitaciones para asignar una competencia directa al Procurador pues, en su sentir, deja a salvo el poder preferente. Empero, olvida que sí hay una restricción, la cual precisamente radica en el carácter preferente y no exclusivo y directo de la potestad disciplinaria (con las excepciones anteriormente señaladas). Más aún, la propia Corte entra en contradicción cuando señala que la norma no hace referencia al poder preferente, sino a una aplicación concreta del artículo 277-6 Superior, pues olvida (i) que ese artículo es el que establece el poder preferente del Ministerio Público y, (ii) deja de lado la denominación “a rúbrica” hecha por el propio legislador cuando tituló como “<i>Competencia preferente</i>” el artículo 65 demandado. En estos términos expreso mi desacuerdo con esa decisión.</p> <p>- También discrepo de la decisión adoptada en relación con el inciso tercero del artículo 146 de la ley 200 de 1995. La mencionada norma disponía lo siguiente (subrayo el aparte demandado):</p> <p><i>“ARTÍCULO 146. TÉRMINO. Cuando la falta que se investigue sea grave el término será hasta de nueve (9) meses y, si la falta es gravísima, será hasta de doce (12) meses prorrogable hasta doce (12) meses más contados a partir de la notificación de los cargos, según la complejidad de las pruebas.</i></p> <p><i>En el caso de concurrencia de faltas en una misma investigación el término será el correspondiente a la más grave y cuando fueren dos o más los disciplinados, el término se prorrogará hasta en la mitad del que le corresponda.</i></p> <p><u>Cumplido este término y el previsto en el artículo 152 si no se</u></p>
--	--



	<p><u>hubiere realizado la evaluación mediante formulación de cargos se ordenará el archivo provisional, sin perjuicio de que si con posterioridad aparece la prueba para hacerlo, se proceda de conformidad siempre que no haya prescrito la acción disciplinaria.”</u></p> <p>La mayoría consideró que la figura del archivo provisional de las diligencias es contraria a los principios que inspiran las garantías del debido proceso. Para llegar a esa conclusión, la Sala precisó que el derecho a una pronta y oportuna decisión de las autoridades constituye un elemento del derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas, e igualmente destacó la importancia de diseñar etapas claramente parceladas y delimitadas por términos razonables. Así mismo, la Corte hizo referencia a la sentencia C-728 de 2000, en cuya oportunidad declaró que el archivo definitivo del expediente en la etapa de investigación preliminar se justificaba para evitar la indefinida sumisión al procedimiento disciplinario.</p> <p>Aún cuando comparto las tesis expuestas, especialmente sobre la necesidad de etapas procesales perentorias y términos razonables para adelantar una investigación sin dilaciones injustificadas, considero sin embargo que la Corte omitió un análisis respecto de la proporcionalidad de la medida, tal y como ocurrió con el artículo 141 del CDU, en la mencionada sentencia C-728 de 2000. De esta última es necesario destacar los siguientes planteamientos, los cuales fueron citados en la sentencia de la que ahora discrepo parcialmente:</p> <p>a) La libertad de configuración que tiene el legislador para establecer procedimientos judiciales y administrativos tiene ciertos límites, representados fundamentalmente en la obligación de atender los principios y fines del Estado y la de velar por el respeto de los derechos fundamentales. (fundamento jurídico No. 8).</p> <p>b) En este tipo de controversias se trata de establecer si prevalece el derecho a la justicia (determinar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas) o el derecho del procesado a que se resuelvan las investigaciones que se le adelantan, así como el interés del Estado por señalar términos perentorios (fundamento jurídico No.9).</p> <p>c) Debe acudirse a la ponderación de los intereses en conflicto como técnica para superar controversias de esta naturaleza, sin que el juez pueda subrogar al legislador, sino solamente controlar los excesos de aquel (fundamentos jurídicos No. 10 y 11).</p> <p>Así, para declarar la inexequibilidad de la expresión acusada del artículo 146 de la ley (“provisional, sin perjuicio de que si con posterioridad aparece la prueba para hacerlo , se proceda de conformidad siempre que no haya prescrito la acción disciplinaria”), la Corte se limitó a trasladar la conclusión a la que llegó en la sentencia C-728 de 2000, haciendo una aplicación analógica y explicando las razones por las cuales consideraba válida esa similitud, pero olvidó la necesidad de acudir a la ponderación como técnica para la resolución de estos conflictos. Pues bien, de haberlo</p>
--	--

	<p>hecho hubiere decretado la constitucionalidad condicionada de la norma por las razones que me permito explicar a continuación.</p> <p>En mi concepto, surge una tensión entre normas constitucionales, pues mientras de un lado existe el derecho a una investigación sin dilaciones injustificadas como garantía del debido proceso (CP. art. 29), por el otro, existe también el derecho a la justicia (determinar los hechos, sancionar a los responsables y reparar los daños), la efectividad del derecho material y la obligación de atender los principios y fines del Estado, uno de los cuales es garantizar el correcto ejercicio de las funciones públicas como expresión del interés general (CP. art. 1, 122 y siguientes)<sup>23</sup>. En estos eventos era preciso recurrir a principios como la armonización concreta, la concordancia práctica, la conservación del derecho y el respeto al principio democrático, sin conferir carácter absoluto al derecho a una investigación sin dilaciones injustificadas.</p> <p>Si bien es cierto que la necesidad de conocer una decisión de manera pronta y oportuna exige términos perentorios, también lo es que no puede imponerse al Estado una carga tan gravosa como la pérdida de competencia para el cumplimiento de sus fines, cuando cuenta con los elementos necesarios para adoptar una decisión pero falta un formalismo como el auto de formulación de cargos.</p> <p>Precisamente por lo anterior, considero que para ordenar el archivo definitivo del proceso disciplinario se requería la concurrencia de dos circunstancias: (i) de un lado, el vencimiento del periodo previsto por el legislador y, por el otro, (ii) que no se hubiere recaudado la prueba necesaria para formular pliego de cargos. En el evento de existir esa prueba, pero ante la falta del formalismo, resultaría desproporcionado que el Estado perdiera por ese simple hecho su potestad sancionadora; de otra manera, el archivo sí debería ser definitivo. Creo que con ello se respetaba en mejor forma la voluntad del legislador, acudiendo al principio de conservación del derecho y armonizando las normas en tensión y, por lo mismo, me veo en la obligación de salvar mi voto en este punto.</p> <p>SI DR. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.</p> <p>Con el respeto por la posición mayoritaria de la Corte, me permito expresar mi disenso sobre las consideraciones y conclusiones adoptadas en relación con el inciso final del artículo 146 de la Ley 200 de 1995, en cuanto se declaró su inconstitucionalidad.</p> <p>El argumento central de la Corte es que la institución del archivo provisional en materia disciplinaria menoscaba la garantía del debido proceso, particularmente el derecho a que las autoridades adopten pronta y cumplidamente sus decisiones y que aquí se traduce en la necesidad de que las etapas procesales no sólo estén</p>
--	---

<sup>23</sup> Cfr., entre otras, las sentencias C-728 de 2000 y C-475 de 1997.

	<p>debidamente demarcadas, sino también sometidas a términos razonables.</p> <p>Compartiendo como comparto el valor constitucional del derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, debe insistirse en el hecho de que la Corte no abordó el tema desde el punto de vista de la proporcionalidad de la medida regulada en la norma jurídica que tiene objeto del control constitucional.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-391/02
Fecha de la sentencia	veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2002).
Demandante	Vladimir Ariza Cardozo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25, numeral 10, de la Ley 200 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Decision	Declarar EXEQUIBLE, en lo demandado, el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor solicita la declaratoria de inexequibilidad de la regla de derecho demandada por vulneración de los artículos 1, 2, 4, 5, 29 y 238 de la Carta. Los fundamentos del cargo formulado son los siguientes:</p> <p>1. El juez competente para determinar en cada caso la concurrencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para el ejercicio de funciones públicas es la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no la Procuraduría General de la Nación.</p>

	<p>2. En virtud de la regla de derecho demandada, actuar en la función pública a pesar de estar inhabilitado implicaría la iniciación de dos procedimientos excluyentes: Por una parte la nulidad del nombramiento o de la elección ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y por otra la determinación de responsabilidad disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación. No obstante, la concurrencia de estos procedimientos vulnera el principio <i>non bis in idem</i> pues se estaría investigando a una persona dos veces por el mismo hecho.</p> <p>3. Existe la posibilidad de decisiones contradictorias pues la Procuraduría puede ordenar la destitución del cargo por infracción del régimen de inhabilidades y luego la jurisdicción de lo contencioso administrativo declarar que el servidor no se encontraba inhabilitado. Con ello se plantea la posibilidad de cuestionar ante esa jurisdicción la legalidad del proceso disciplinario adelantado y de la sanción impuesta y de generar luego responsabilidad estatal.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-155/02
Fecha de la sentencia	cinco (5) de marzo de dos mil dos (2002)
Demandante	Carlos Mario Isaza Serrano
Demandado	<i>Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único".</i>
Conoció en primera instancia	Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 “ <i>por la cual se adopta el Código Disciplinario Único</i> ”.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En criterio del demandante la norma acusada desconoce el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, por las siguientes razones:</p> <p>En materia punitiva el legislador obra con un espacio relativamente autónomo pero demarcado por las finalidades propias de la axiología superior. Es así como a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes se tipifican conductas prohibidas y se fijan las sanciones acorde con las distintas filosofías imperantes en cada momento histórico.</p> <p>Frente a la configuración y punición de los tipos sancionatorios, el Estado tiene el deber de interpretar restrictivamente la ley penal y en esta labor debe procurar dar los elementos suficientes de su definición para hacer que el principio de legalidad cumpla, a través de la tipicidad, su función principal de controlar el poder punitivo estatal.</p> <p>Así los tipos penales y disciplinarios serán las descripciones de las conductas relevantes para el derecho punitivo y si lo que éstos describen son acciones y éstas implican siempre un elemento subjetivo, el tipo siempre implicará necesariamente un aspecto objetivo y otro subjetivo.</p> <p>Por lo anterior, si bien la diversidad de formas de aparición que adoptan los comportamientos antijurídicos impone la búsqueda de una imagen conceptual lo suficientemente abstracta para poder englobar en ella todos los comportamientos que tengan características esenciales comunes, siempre la definición legal de la desviación y su evaluación en sede de culpabilidad se debe producir no con referencia a figuras de comportamiento empíricas y objetivas, sino conforme a la máxima <i>nulla poena sine culpa</i> y para ello el legislador debe suministrar todas las herramientas legales para que en el escenario del proceso disciplinario esta labor no quede al arbitrio del operador jurídico.</p> <p>El artículo 14 de la Ley 200 de 1995 viola el debido proceso en cuanto respecta al principio de legalidad concretado en la tipicidad y en la exigencia de culpabilidad, porque se limita únicamente a proscribir en materia disciplinaria toda forma de responsabilidad objetiva y a establecer que las faltas sólo son sancionables a título de dolo y culpa, omitiendo consignar elementos consustanciales al principio de culpabilidad como son las indicaciones de cuál es el</p>

	<p>género de las consagradas en el Código Disciplinario Único y cuál es la excepción.</p> <p>Operar con la exigencia de culpabilidad en el proceso de tipificación de las faltas disciplinarias nos sitúa en las previsiones del artículo 18 del CDU sobre prevalencia de las normas del Código Penal y de Procedimiento Penal, en la interpretación y aplicación de dicho ordenamiento. Dicha norma dictamina la necesidad de acudir a las construcciones dogmáticas que por remisión ofrece el derecho penal, en cuanto a la definición de las conductas punibles dolosas y culposas (artículos 22 y 23 del C.P.)</p> <p>El CDU no incluye norma alguna que disponga sobre el carácter general o excepcional de las conductas culposas y su consecuente sanción como sí lo hace el Código Penal y en este sentido habilita al operador jurídico para que vulnerando la Carta Política considere indistintamente la solución al problema desde la alternativa de dos formas conductuales (el dolo y la culpa) con el agravante que hasta la formulación de cargos el disciplinado no tendrá ninguna certeza sobre como debe defenderse. Esta concepción legal desfasa la naturaleza falible del ser humano.</p> <p>De modo, que sólo puede ajustarse a la Carta Política la culpabilidad concebida en materia disciplinaria bajo las pautas de una declaratoria de una constitucionalidad condicionada, que hiciera extensiva a la ley disciplinaria el régimen excepcional de punición para las conductas culposas que trae el Código Penal.</p> <p>Por ende, el tipo consagrará una conducta culposa cuando asuma la forma de negligencia, impericia, imprevisión o imprudencia como elemento subjetivo y la exigencia de que el resultado típico se dé por violación del deber objetivo de cuidado y por la falta de previsión del resultado previsible o porque a pesar de haberlo previsto confió en poder evitarlo. En los demás casos el comportamiento será doloso.</p> <p>Es decir, que cuando el tipo disciplinario admita expresamente la culpa como una de las formas conductuales o como la única, la constitucionalidad solicitada debe consistir en una imputación de tipo culposo y no doloso. Se trata de reconocer un tercer estadio que relativiza la tesis de la conducta dolosa como regla y la culposa como excepción para efectos de punibilidad y que se explica por el carácter neutro que en materia de culpabilidad observa un número considerable de conductas disciplinarias y que hace imperativo analizar su estructura fáctica para establecer si se imputa a título de dolo o de culpa.</p>
--	---

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-390/02
Fecha de la sentencia	veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2002).
Demandante	María Carolina Rodríguez Ruiz y Ernesto Rey Cantor
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° parcial de la Ley 242 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Decision	Declarar EXEQUIBLES las expresiones “ <i>multas</i> ” y “ <i>en la expedición de normas por parte del Gobierno Nacional y las Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales</i> ”, contenidas en el artículo 1° de la Ley 242 de 1995, solamente por los cargos analizados en esta sentencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los demandantes consideran que la norma acusada viola los artículos 1, 3, 4, 6, 28, 29, 121, 123 inciso 2°, 133 y 150 inciso 1° de la Constitución Política, por las siguientes razones:</p> <p>Luego de una hacer una extensa referencia a los orígenes y la evolución histórica del principio de legalidad y a los textos normativos que lo reconocen, así como a la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema, los demandantes resaltan que dicho principio hace parte integrante del debido proceso y que, en un Estado democrático de derecho, sólo el legislador ordinario tiene competencia para establecer limitaciones o restricciones a los derechos y libertades de las personas.</p>

	<p>Así mismo, los actores citan un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que el tribunal interpreta la expresión “leyes” contenida en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de lo cual concluyen lo siguiente:</p> <p>“En primer lugar, las <i>limitaciones o restricciones</i> a los derechos fundamentales deben establecerse por medio de leyes.</p> <p>“En segundo lugar, el término <i>leyes</i> se debe entender en sentido formal, es decir, como norma jurídica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo.</p> <p>“En tercer lugar, como corolario de lo anterior, se imponen los principios de <i>legalidad y reserva de ley</i>, en materia de <i>limitaciones o restricciones</i> a los derechos humanos.</p> <p>“En cuarto lugar, el principio de legalidad, en una sociedad democrática, está vinculado inseparablemente al principio de <i>legitimidad</i>, es decir, que los órganos que expiden las normas jurídicas han de ser elegidos por el pueblo, lo cual constituye la esencia de la <i>democracia representativa</i>, contenida en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.</p> <p>“En quinto lugar, los órganos legislativos ordinarios, (Congresos, Parlamentos, Asambleas legislativas), son los competentes para establecer mediante ley las <i>limitaciones o restricciones</i> a los derechos fundamentales.</p> <p>“En sexto lugar, no obstante lo anterior puede darse la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia (del legislativo al ejecutivo), siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la propia Constitución, y que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella.</p> <p>“En séptimo lugar, la interpretación de los tratados internacionales que reconocen derechos humanos ha de hacerse de buena fe, conforme al sentido corriente que ha de atribuirse a los términos empleados por el tratado en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin.”</p> <p>A su juicio, estas conclusiones permiten demostrar la inconstitucionalidad de la disposición demandada, por cuanto el Congreso delegó en autoridades administrativas la facultad de reajustar las multas, violando los principios de legalidad y de reserva de ley y desconociendo, además, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado colombiano.</p>
--	---



	<p>Afirman los demandantes que, a diferencia del Congreso, el Gobierno Nacional no representa al pueblo y, por tanto, aquél es el órgano competente para establecer los delitos y las penas, incluyendo las multas.</p> <p>Con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia nacional, así como en los artículos 28, inciso 1° y 29, inciso 2° de la Constitución, “metodológicamente se puede apreciar el principio de legalidad en un doble enfoque, a saber: el principio de legalidad sustantivo y el principio de legalidad procesal,” de los cuales los demandantes sólo explican el primero de ellos, según el cual “el <i>hecho</i> ilícito (el tipo) y la sanción (la pena) deben ser definidos por ley preexistente, es decir, con anterioridad a la ocurrencia de la conducta reprochable.”</p> <p>Agregan los actores que en virtud del principio de reserva de ley, el Congreso no tiene competencia para delegar en el ejecutivo la <i>potestad sancionatoria</i> y, en el caso sub júdice, se delegó tal potestad para reajustar multas en el Gobierno Nacional y las Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales.</p> <p>De igual forma, dicha ley también es inconstitucional pues reguló limitaciones que son propias de las leyes estatutarias, de conformidad con el artículo 152 literal a) de la Carta Política, porque si los derechos fundamentales “son regulables por medio de leyes estatutarias, con mayor razón a través de estas leyes podrán ser objeto de limitaciones o restricciones y con menor razón podrá el Gobierno Nacional” establecer tales limitaciones a través de decretos con fuerza de ley.</p> <p>Asimismo, la definición de un hecho ilícito (el tipo) y el establecimiento de la sanción (la pena), los debe regular la ley expedida formalmente por el Congreso, según el artículo 29 inciso 2°, en concordancia con el artículo 150 inciso 1° de la Constitución.</p> <p>En síntesis, sostienen los demandantes que no es de competencia del ejecutivo definir la infracción y mucho menos establecer o reajustar las sanciones, como la multa, toda vez que es una competencia indelegable del Congreso quien, en consecuencia, al expedir la ley demandada parcialmente ejerció funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA

<p>Tiene aclaraciones</p>	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>A pesar de compartir en su integridad la decisión adoptada por la Corte en la parte resolutive de la sentencia C-390/02, con el debido respeto procedo a aclarar mi voto, por las razones que se exponen a continuación:</p> <p>Siendo que, por mandato legal, el Banco de la República define la meta de inflación con base en una estimación futura, es preciso señalar que tal criterio puede llegar a vulnerar, en determinados casos, el principio de justicia material que propugna la Constitución Política, como se pasa a demostrar:</p> <p>Predecir significa, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “anunciar por revelación, ciencia o conjetura, algo que ha de suceder.” Por su parte, la teoría del conocimiento enseña que una predicción, entendida como un hecho que se estima que va a ocurrir en el futuro, puede ser refutado o desmentido por los hechos que en realidad acaecen. Estos últimos, al constituir una materia cognoscible, sirven de fundamento para verificar si la predicción hecha fue acertada o, por el contrario, desatinada.</p> <p>Así pues, desde el punto de vista lógico, no es lo mismo un hecho pasado que, por definición, es siempre cierto y como tal verificable, que un hecho futuro, el cual constituye una mera probabilidad y por ende puede no coincidir con la realidad.</p> <p>Es claro entonces que cuando se hace el reajuste de un determinado valor con fundamento en la inflación pasada, se tiene la certeza de cuánto fue esta última, a diferencia de cuando se hace con base en la inflación proyectada o futura, sobre la cual no existe certeza alguna.</p> <p>Lo anterior puede conducir a la vulneración del principio de justicia material en la medida en que las personas deben asumir, sin justificación alguna, los efectos de la eventual discordancia existente entre la estimación futura de la inflación y la que en realidad se presenta.</p> <p>En materia sancionatoria son evidentes estas consecuencias, en el caso en que a la persona sancionada se le impone una multa cuyo valor se reajusta con base en la meta de inflación futura y esta proyección no coincide con la inflación real. Si el Banco de la República calcula, por ejemplo, que la meta de inflación será del 20% pero en realidad resulta del 2% (evento que no ha sido extraño en Colombia), la persona deberá asumir ese sobrecosto sin razón alguna, lo cual constituye una medida abiertamente injusta en su</p>
---------------------------	--

	<p>contra. Según lo anterior, el ciudadano estará pagando el 1000% de más, siendo una multa desproporcionadamente superior a lo que en efecto le corresponde, lo cual configura un problema de justicia material. Lo justo, entonces, es que la multa a pagar no quede sujeta al vaivén de las probabilidades y, por tanto, la persona sancionada deba pagar solamente el valor real de la sanción.</p> <p>En los anteriores términos, respetuosamente dejo consignada mi aclaración de voto sobre el asunto de la referencia.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-560/02
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) de julio de dos mil dos (2002).
Demandante	Jorge Enrique Sánchez Oviedo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1°, parcial, de la Ley 258 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Decision	Declarar EXEQUIBLE, en lo demandado, el artículo 1° de la Ley 258 de 1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor solicita la declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado del artículo 1° de la Ley 258 de 1996 por vulnerar los artículos 5,13, 42, 44 y 51 de la Carta. Los fundamentos de la demanda son los siguientes:</p> <p>1. Tal como está redactado el artículo 1° de la Ley 258, la afectación a vivienda familiar se presenta en relación con el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges y destinado a la habitación de la familia, afectación que obra de pleno derecho para los inmuebles adquiridos después de la vigencia de la ley y mediante escritura pública otorgada por ambos cónyuges en el caso de inmuebles adquiridos con anterioridad. Sin embargo, tal afectación de la vivienda familiar no opera en relación con el bien inmueble adquirido por los dos cónyuges y destinado a ese mismo fin.</p> <p>2. De esa manera, la protección de inalienabilidad e inembargabilidad sobre el bien inmueble destinado a la habitación de la familia sólo recae sobre ese inmueble si ha sido adquirido por uno de los cónyuges pero no si ha sido adquirido conjuntamente por ellos pese a que en tal caso concurre la misma necesidad de protección.</p> <p>Este tratamiento vulnera el artículo 5° de la Carta porque en este último evento no ampara a la familia como institución básica de la</p>

	sociedad; desconoce el derecho de igualdad por establecer un tratamiento diferenciado no justificado; contraría el artículo 42 porque desconoce la obligación del Estado de brindar protección integral a la familia; vulnera el artículo 44 porque propicia la inasistencia y desprotección de los niños y desconoce el artículo 51 porque atenta contra el derecho de todos los colombianos a tener una vivienda digna.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-158/02
Fecha de la sentencia	marzo cinco (5) de dos mil dos (2002).
Demandante	Billy Andric Torres Cortés
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 98 de la Ley 388 de 1997 <i>“por la cual se modifica la Ley 9a de 1989, y la Ley 3a de 1991 y se dictan otras disposiciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	Declarar INEXEQUIBLES las expresiones: “Para los efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política”, “de equidad” y “sin indemnización” contenidas en el inciso primero del artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, y la expresión “siendo, entendido que no habrá lugar a indemnización alguna” del párrafo del artículo 98 de la Ley 388 de 1997; y, EXEQUIBLE el resto del contenido normativo del citado artículo 53 de la Ley 9ª de 1989 y su párrafo, con el cual fue adicionado por el artículo 98 de la Ley 388 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	Para el ciudadano demandante la totalidad del artículo 98 de la Ley 388 de 1997 que se refiere a la figura de la expropiación por motivos de equidad o expropiación sin indemnización, figura jurídica que fue suprimida del artículo 58 de la Constitución Política mediante el Acto Legislativo No. 01 de 1999, resulta inexecutable por presentarse la figura de la inconstitucionalidad sobreviniente, como quiera que a partir de la modificación del artículo superior citado, toda expropiación legalmente declarada es procedente siempre y cuando se pague una indemnización.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-870/02
Fecha de la sentencia	quince (15) de octubre de dos mil dos (2002)
Demandante	Carlos Mario Isaza Serrano
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 28, parcial, de la Ley 393 de 1997 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Decision	<p>PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “<i>autoridad competente</i>” contenida en el artículo 28 de la Ley 393 de 1997.</p> <p>SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “<i>disciplinarias o</i>” contenida en el artículo 28 de la Ley 393 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En opinión del actor, las expresiones demandadas contraría los artículos 29 y 256, numeral tercero, de la Constitución por las siguientes razones:</p> <p>“Cuando el artículo 28, del cual hace parte la expresión demandada, establece que en los casos de actuaciones temerarias por parte de los abogados en la presentación de varias acciones de cumplimiento respecto de las mismas normas y hechos, éstos se harán acreedores por la autoridad competente a la sanción de suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos (2) años y en caso de reincidencia, a la sanción de suspensión por cinco (5) años, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y penales a que haya lugar, viola en relación con la salvedad que realiza respecto de las acciones disciplinarias, el principio estructural del debido proceso, <i>non bis in idem</i>, referido a la potestad sancionadora del Estado, el cual es concebido como una garantía política que prohíbe el juzgamiento y la imposición de más de una sanción por un mismo hecho. Lo anterior porque con la cuestionada fórmula legal se estaría habilitando (...) a la jurisdicción disciplinaria para castigar dos veces por la misma conducta, desde la misma perspectiva ético profesional, por cuanto con la sanción al profesional del derecho por la actuación temeraria, bien inicialmente o bien por</p>

	<p>reincidencia, previo el agotamiento necesario de un debido proceso, según sea el caso, se agotaría la posibilidad de intervención punitiva del Estado; lo cual torna innecesaria la salvedad sin perjuicio de la sanción disciplinaria a la que haya lugar y adicionalmente”<sup>24</sup>.</p> <p>El demandante también afirma que la expresión “autoridad competente” crea un espacio de ambigüedad según el cual el juez que conoce de la acción de cumplimiento podría “arrogarse la potestad de punir disciplinariamente dichas conductas, desplazando al Consejo Superior de la Judicatura”. Por lo tanto, solicita la exequibilidad de la expresión “autoridad competente”, condicionada a que por esta se entienda que la autoridad que debe imponer la sanción de suspensión de la tarjeta profesional es la “Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.<sup>25</sup></p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

---

<sup>24</sup> Cfr. folios 2 y 3 del expediente.



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-311/02
Fecha de la sentencia	treinta (30) de abril de dos mil dos (2002).
Demandante	Efrain Olarte Olarte
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 257 (parcial) de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Decision	<p>Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-739 de 2000 y en consecuencia, DECLARAR INEXEQUIBLES las expresiones "u otro servicio de comunicaciones", "o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados" contenidas en el primer inciso del artículo 257 de la Ley 599 de 2000 y los incisos segundo y tercero del artículo 257 de la Ley 599 de 2000 que dicen así:</p> <p>“La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados.</p> <p>“Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo.”</p> <p>Segundo.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-739 de 2000 y, en consecuencia, declarar EXEQUIBLE la expresión “o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas”, contenida en el inciso primero del artículo 257 de la Ley 599 de 2000, en relación con los cargos de la presente demanda.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que los apartes subrayados del artículo 257 de la Ley 599 de 2000, <i>por la cual se expide el Código Penal</i>, vulneran lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.</p> <p>Para el actor, dada la similitud existente entre el texto del artículo 257 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 6º de la Ley 422 de 1998, el cual fue declarado parcialmente inexecutable por la Corte en la</p>

	<p>sentencia C-739 de 2000, los apartes reproducidos por el artículo demandado deben ser declarados inexecutable en el presente proceso de inconstitucionalidad.</p> <p>Afirma el actor que las pequeñas modificaciones introducidas en el artículo 257 del nuevo Código Penal, no desvirtúan las deficiencias de ambigüedad, falta de precisión e inexactitud señaladas por la Corte en la sentencia C-739 de 2000 y, por lo tanto, es necesario declarar la inexecutable de las expresiones "<i>u otro servicio de comunicaciones</i>", "<i>o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizado</i>", contenidas en el inciso primero del artículo 257 y en los incisos 2 y 3 del mismo.</p> <p>Así mismo, señala el actor que la norma cuestionada establece "penas de prisión y multas para servicios difíciles de precisar, prestadas por un sector económico con demasiadas normas inorgánicas", con lo cual se configura "una legislación ambigua, sin precisión ni exactitud jurídica" que desconocen el principio de tipicidad y de legalidad consagrados en el artículo 29 de la Carta.</p> <p>Finalmente, resalta el actor que los rápidos avances tecnológicos que se producen constantemente en el mundo de las telecomunicaciones "no ofrecen garantía técnica suficiente para evitar que personas naturales o jurídicas tengan acceso a ellas sin autorización, motivadas por diferentes razones: (i) mala fe comercial, (ii) simple curiosidad, (iii) investigación científica; (iv) desconocimiento jurídico del mundo de las telecomunicaciones".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-873/02
Fecha de la sentencia	quince (15) de octubre de dos mil dos (2002).
Demandante	Alfonso Gómez Lugo.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra las siguientes Leyes: Ley 026 de 1990; Ley 085 de 1993; Ley 093 de 1993; Ley 122 de 1994; Ley 289 de 1996; Ley 334 de 1996; Ley 348 de 1997; Ley 367 de 1997; Ley 382 de 1997; Ley 426 de 1998; Ley 440 de 1998; Ley 538 de 1999; Ley 542 de 1999; Ley 561 de 2000; Ley 634 de 2000; Ley 645 de 2001; Ley 648 de 2001; Ley 654 de 2001; Ley 656 de 2001; Ley 662 de 2001; Ley 663 de 2001; Ley 664 de 2001; Ley 665 de 2001; Ley 666 de 2001; y, Ley 669 de 2001.
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA
Decision	<p>Primero : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-538 de 2002, en lo relacionado con las Leyes 662; 663; 654; 656; 664; 666; y, 669, todas del año 2001.</p> <p>Segundo : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-227 de 2002, respecto de la Ley 645 de 2001.</p> <p>Tercero : Estarse a lo resuelto en las sentencias C-089 de 2001 y 538 de 2002, en relación con la Ley 648 de 2001.</p> <p>Cuarto : Declarar exequibles por los cargos analizados, las Leyes 26 de 1990; 085 de 1993; 093 de 1993; 289 de 1996; 348 de 1997; 367 de 1997; 542 de 1999; 634 de 2000; y, 666 de 2001, en su integridad.</p> <p>Quinto : Declarar exequible por los cargos analizados, la Ley 122 de 1994 en su integridad, salvo el párrafo del artículo 3º, que se declara inexequible.</p> <p>Sexto : Declarar exequible por los cargos analizados la Ley 334 de 1996, en su integridad, salvo el párrafo del artículo 3º y la expresión “en sus distintas modalidades”, contenida en el artículo 8º que se declaran inexequibles.</p> <p>Séptimo : Declarar exequible por los cargos analizados la Ley 382 de 1997, en su integridad, salvo el párrafo del artículo 3º, que se declara inexequible.</p>

	<p>Octavo : Declarar exequible por los cargos analizados la Ley 426 de 1998, en su integridad, salvo el párrafo del artículo 4º, que se declara inexecutable.</p> <p>Noveno : Declarar exequible por los cargos analizados la Ley 440 de 1998, en su integridad, salvo el párrafo del artículo 3º, que se declara inexecutable.</p> <p>Décimo : Declarar exequible por los cargos analizados la Ley 538 de 1999, en su integridad, salvo el párrafo del artículo 3º y la expresión “en sus distintas formas de recaudo”, contenida en el artículo 8º, que se declaran inexecutables.</p> <p>Undécimo : Declarar exequible por los cargos analizados la Ley 561 de 2000, en su integridad, salvo el párrafo 1º del artículo 2º, que se declara inexecutable.</p> <p>Duodécimo : Declarar exequible por los cargos analizados la Ley 665 de 2001, en su integridad, salvo el párrafo 1º del artículo 3º, que se declara inexecutable.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que las Leyes acusadas violan los artículos 150, numeral 11; 13; 29; 157, numeral 1; 294; y, 338 de la Constitución. Pone de presente que todas estas Leyes tienen como común denominador la autorización del legislador a las asambleas departamentales para que ordenen la emisión de un tributo, denominado “estampilla”. El concepto de violación, dada la extensión del escrito de demanda, habrá de resumirse así :</p> <p>1. Violación al principio de legalidad del tributo, consagrado tanto en los artículos 150, numerales 11 y 12, como en el artículo 338 de la Constitución. El actor dice que “tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han señalado de manera reiterada que el Congreso de la República es el único organismo competente, en tiempos de paz, para fijar los elementos fundamentales de los impuestos de carácter nacional, cuales son los siguientes : sujeto activo y pasivo, el hecho gravable, la base gravable, y, la tarifa.” (fl. 58). “En este orden de ideas, es fácil apreciar que todas las leyes demandadas carecen de los denominados elementos estructurales del tributo, por cuanto ellas se limitan a dar una simple autorización a las Asambleas Departamentales para que sean éstas quienes los establezcan, con clara violación del artículo 338, puesto que si son las leyes demandadas las que están creando el tributo, es a esas mismas leyes a las que les corresponde –y no a las Asambleas</p>

	<p>Departamentales- señalar con suficiente claridad y precisión los elementos de los que consta el tributo creado.” (fl. 60).</p> <p>En su opinión, si la creación del tributo nace en la ley, la ordenanza o el acuerdo, el mismo hecho creador debe contener los elementos del tributo, y, a esta circunstancia es a la que se refiere el inciso segundo del artículo 338 en mención, con la expresión <i>directamente</i>, allí contenida.</p> <p>2. Afirma el actor que el Congreso de la República expidió algunas de las leyes demandadas con intención discriminatoria, pues, en unas, autorizó abiertamente la creación y destinación del tributo, y, en otras, restringió esa posibilidad, al fijar porcentajes concretos. Esto afecta a cada uno de los beneficiarios del tributo. Además, la determinación de porcentajes constituye una función propia de las entidades territoriales y no del Congreso de la República, tal como lo establece el artículo 287, numeral 3º de la Carta.</p> <p>De esta forma, también se violó el artículo 13 de la Constitución. Explica que el Congreso “discriminó algunas leyes de la posibilidad de autorizar a las asambleas departamentales la fijación de las tasas aplicables al tributo, y de modo contrario, les permitió a otras dicha fijación, lo que afecta flagrantemente a las entidades beneficiarias del mismo.” (fl. 64) Así mismo, en algunas se concede la posibilidad de exenciones, mientras que en otras, esa posibilidad está tácitamente cerrada. La ley es <i>pleonástica</i> cuando otorga estas autorizaciones en cabeza de Ciertas Asambleas Departamentales, pues, la Constitución autoriza en el artículo 294, a las Corporaciones conceder exenciones. Violan el principio de igualdad al establecer en algunas de las Leyes acusadas, la creación de juntas especiales para el manejo de los fondos que produzca la estampilla y en otras Leyes no se prevén tales juntas.</p> <p>Todo esto significa desbordamiento de la competencia del legislativo en asuntos que son de la injerencia de las entidades territoriales.</p> <p>De otro lado, el actor analiza la violación de la Constitución, en algunas Leyes acusadas en particular, así :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Ley 26 de 1990, en cuanto que sólo determina uno de los elementos del tributo : la tarifa, y delega a la Asamblea Departamental la determinación de los demás elementos. Lo mismo ocurre con la Ley 85 de 1993.</li> <li>- La Ley 93 de 1993, el párrafo 4 del artículo 4, facultó a la Asamblea para imponer el uso obligatorio de la estampilla no sólo sobre los documentos de las entidades públicas departamentales y</li> </ul>
--	---

	<p>municipales, sino en las entidades descentralizadas del orden nacional que operen en el Cesar, lo que viola la Constitución, al carecer las asambleas departamentales de competencia sobre las entidades del orden nacional.</p> <p>- La Ley 348 de 1997 omite señalar con precisión y claridad los elementos del impuesto. No establece cuáles son el hecho gravado, la base gravable, ni la tarifa gravable. El artículo 8 ni siquiera especifica cuáles hechos y actividades económicas quedan comprendidas dentro del impuesto, lo hace sólo de manera vaga e indeterminada. Deja a la asamblea y de los concejos municipales la fijación de esta materia. Se pregunta el actor si por la redacción de esta norma, se está ante un impuesto sobre documentos, o sobre la actividad de correos, o un gravamen ¿qué pasa, entonces, con los juegos de azar de carácter nacional?</p> <p>Finalmente, señala el demandante que existieron vicios de procedimiento en la formación de las siguientes leyes : Ley 85 de 1993; Ley 367 de 1997; Ley 382 de 1997; Ley 656 de 2000; y Ley 665 de 2001.</p> <p>Sobre este último punto (vicios en el procedimiento en la formación de algunas de las leyes acusadas), en auto de 6 de marzo de 2002, el magistrado sustanciador antes de admitir la demanda, dentro de las varias decisiones que allí constan, se encuentra que rechazó este cargo respecto de algunas Leyes y condicionó la admisión contra la Ley 665 de 2001, si el actor corregía la acusación. (fl. 78).</p> <p>Una vez corregida la demanda en varios aspectos, incluido el correspondiente a la Ley en mención, se admitió el cargo de vicios de procedimiento sólo en relación con la Ley 665 de 2001.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. RODRIGO ESCOBAR GIL, EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT</p> <p>Con el acostumbrado respeto, manifestamos nuestro disenso con la posición mayoritaria adoptada por la Corte en la sentencia de la referencia.</p> <p>Fundamentamos nuestra posición con base en los argumentos que exponemos a continuación:</p> <p>A través de la normas demandadas, el legislador autorizó a las Asambleas Departamentales de los Departamentos del Valle, Santander, Cesar, Antioquia, Tolima, Bolívar, Caldas, Huila, Córdoba, Quindío, Nariño, Meta, Magdalena, Sucre, Atlántico,</p>

	<p>Boyacá, Valle del Cauca, y al Concejo Distrital de Santafé de Bogotá D.C. para la emisión de estampillas con el objeto de captar recursos propios, determinando la destinación del recaudo.</p> <p>La Corte reiteró su posición conforme a la cual, es constitucional que las asambleas y concejos fijen dentro del marco de la ley los elementos constitutivos del respectivo tributo, pues a su juicio cuando se trata de recursos propios de las entidades territoriales, no es necesario que el legislador delimite cada uno de los elementos del tributo, pues tal acción vulnera la autonomía fiscal concedida por la Carta a las entidades territoriales</p> <p>Así mismo, para la mayoría de esta Corporación, la Constitución no concede a las respectivas asambleas o concejos de manera exclusiva, las facultad de determinar la destinación del recaudo pudiendo el Congreso hacerlo en la ley habilitante, siempre que no implique una intervención injustificada que afecte la autonomía de los entes territoriales.</p> <p>Frente a las anteriores consideraciones, reiteramos nuestra posición conforme a la tesis planteada en salvamentos de voto hechos a otras decisiones proferidas por esta Corporación<sup>26</sup>, según la cual son inconstitucionales, como en el caso en cuestión, las normas que establezcan la creación de tributos del orden territorial con ausencia tanto de una ley orgánica que fije las condiciones generales de su desarrollo, como de los elementos mínimos que permitan garantizar el principio de legalidad y el principio de identidad del tributo.</p> <p>Lo anterior como consecuencia de la interpretación sistemática que se debe realizar a partir de lo consagrado por los artículos 150-12, 151 y 287-3, frente a los artículos 317 y 338 de la C.P. a través de los cuales se reconoce a las entidades territoriales competencia para crear tributos y fijar sus elementos, y de los artículos 287, 300-4 y 314-4 del mismo ordenamiento que habilitan al Congreso para regular la normatividad de los entes territoriales en materia fiscal. En virtud de esta interpretación, para que un ente territorial pueda establecer un tributo tiene que existir una ley orgánica que regule la materia y fije los derroteros esenciales del tributo.</p> <p>En consecuencia, nos apartamos de la decisión mayoritaria adoptada por esta Corporación dentro del presente fallo, y nos remitimos íntegramente a lo expuesto en los salvamentos de voto a las sentencias C-1097 de 2001 y C-227 de 2002.</p>
--	--

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1038/02
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de noviembre de dos mil dos (2002).
Demandante	Andrés Felipe Ospina
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998; contra el artículo 15 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, y cuyos numerales 3º y 4º fueron modificados por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998; y contra los artículos 119, 121 y 122 de la Ley 446 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Decision	<p>Primero: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-592 de 1992, respecto del artículos 13 y de los ordinales 1º, 2º, 5º y 6º del artículo 15 del Decreto No. 2651 de 1991, adoptados como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998</p> <p>Segundo. Declarar EXEQUIBLE el numeral 3º del artículo 15 del Decreto No. 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, y cuyo contenido fue modificado por la Ley 446 de 1998, en el entendido que, en desarrollo del principio de habilitación (CP art. 116), la expresión “en caso contrario el Centro designará a los árbitros” es aplicable si las partes lo han autorizado previa y expresamente.</p> <p>Tercero. Declarar EXEQUIBLE el numeral 3º del artículo 15 del Decreto No. 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, y cuyo contenido fue modificado por la Ley 446 de 1998, en el entendido que, en desarrollo del principio de habilitación (CP art. 116), la expresión “El Centro hará las designaciones que no hagan las partes” es aplicable si ha sido prevista en el compromiso o en la cláusula compromisoria.</p> <p>Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “Previo a la instalación del tribunal de arbitramento” y el parágrafo del artículo 121 de la Ley 446 de 1998. El resto de ese artículo 121 de la Ley 446 de 1998 es declarado EXEQUIBLE, en el entendido que corresponde realizar este trámite inicial al tribunal arbitral, después de su instalación.</p>

	Quinto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 446 de 1998, excepto la expresión “y fracasada la conciliación a que se refiere el artículo anterior de la presente ley, o si ésta fuere parcial” que se declara INEXEQUIBLE.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El actor considera que las disposiciones demandadas violan el artículo 116 de la Constitución. El demandante explica que, conforme a esas normas, existe una fase en el proceso arbitral, llamada la “ <i>etapa prearbitral</i> ”, que es desarrollada básicamente por el Centro de Arbitraje, pues el Decreto 2651 de 1991 le confió a estos centros la organización de toda esta fase. Ante dichos centros deben las partes interesadas presentar la solicitud de convocatoria para que el tribunal sea integrado. El centro, explica el actor, da traslado de la demanda y recepciona su contestación, así como las excepciones previas o de mérito y la contrademanda, si la hubiere. Igualmente el centro lleva a cabo la audiencia pre-arbitral. El demandante concluye entonces que el centro de conciliación, al adelantar esa fase prearbitral, desarrolla funciones judiciales, sin ser un árbitro designado por las partes, con lo cual viola el artículo 116 de la Carta, que sólo permite que los particulares administren justicia como árbitros o conciliadores. Para sustentar su argumento, el actor cita el auto del 7 de diciembre de 2000, de la Sección Primera del Consejo de Estado, que señala que las funciones que cumplen los centros de arbitraje en esa etapa prearbitral son de naturaleza judicial.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT</p> <p>COSA JUZGADA FORMAL-Alcance/COSA JUZGADA MATERIAL-Alcance (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>Como esta Corte lo ha explicado, existe cosa juzgada constitucional formal cuando la decisión previa de exequibilidad recae sobre la misma disposición que aquella que ha sido demandada en el presente proceso. Y existe cosa juzgada material, cuando las disposiciones son formalmente diversas, pero tienen idéntico contenido normativo.</i></p> <p>COSA JUZGADA FORMAL-Inexistencia por cuerpo normativo de vigencia transitoria (Salvamento parcial de voto)</p> <p>NORMA LEGAL TRANSITORIA-No igual sentido normativo cuando se</p>

	<p>convierte en ley permanente (Salvamento parcial de voto)</p> <p>COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN NORMA LEGAL TRANSITORIA-Inexistencia ante adopción como legislación permanente (Salvamento parcial de voto)</p> <p>1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, me veo obligado a salvar parcialmente el voto en la presente sentencia, pues no estoy de acuerdo con la parte de la providencia referida a la existencia de cosa juzgada constitucional respecto del artículo 13 y de los ordinales 1°, 2°, 5° y 6° del artículo 15 del Decreto No. 2651 de 1991, adoptados como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998. La Corte llega a esa conclusión basada en el hecho de que la sentencia C-592 de 1992 había declarado la exequibilidad de esos artículos del decreto 2651 de 1991, que la Ley 446 de 1998 simplemente adoptó como legislación permanente. La Corte considera entonces que esa decisión implicaba cosa juzgada, pues en este caso era irrelevante que el decreto 2651 de 1991, que fue estudiado por la sentencia C-592 de 1992, tuviera vigencia transitoria, mientras que la Ley 446 de 1998 le confiere a esa normatividad carácter permanente, pues se trata de la misma regulación. No puedo compartir esa argumentación, por las razones que a continuación explico.</p> <p>2. El primer interrogante que surge es si estamos frente a una eventual cosa juzgada formal o a una cosa juzgada material. Como esta Corte lo ha explicado, existe cosa juzgada constitucional formal cuando la decisión previa de exequibilidad recae sobre la misma disposición que aquella que ha sido demandada en el presente proceso. Y existe cosa juzgada material, cuando las disposiciones son formalmente diversas, pero tienen idéntico contenido normativo.</p> <p>Según mi criterio, en este caso no existía cosa juzgada formal, pues el decreto 2561 de 1991, cuando fue estudiado por la sentencia C-592 de 1992, era un cuerpo normativo de vigencia transitoria, pues regía desde el 10 de enero de 1992, hasta el 10 de julio de 1995. Esas disposiciones fueron adoptadas como legislación permanente por la Ley 446 de 1998. Pero lo cierto es que la adopción de ese decreto como legislación permanente implica una modificación formal y sustantiva de sus disposiciones, pues obviamente no tiene el mismo sentido normativo un decreto con vocación transitoria, que ese mismo decreto, cuando es convertido en ley permanente.</p> <p>Esas normas son distintas no sólo por su contenido material sino incluso por su fuente formal de vigencia. Así, esas disposiciones tienen un contenido material diverso pues no posee el mismo significado normativo una disposición A que establece una</p>
--	---

	<p>regulación pero transitoriamente, que una disposición B que consagra esa misma regulación pero de manera permanente, pues el efecto temporal de los mandatos es diverso. Pero incluso las disposiciones son distintas formalmente; así, los artículos 13 y 15 del Decreto No. 2651 de 1991, cuando fueron estudiados por la sentencia C-592 de 1992, tenían como base un decreto con fuerza de ley expedido por el Presidente al amparo de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 5º transitorio de la Carta. En cambio, en la presente oportunidad, a pesar de que se sigue hablando de los mismos artículos, en realidad éstos son distintos, pues la base de su vigencia es la Ley 446 de 1998. Sin esa última ley, dicho decreto, que era de vocación transitoria, se encontraría hoy sin efectos, por lo que en el fondo esta Corte debía estudiar era la constitucionalidad del artículo 162 de la Ley 446 de 1998, en la medida en que dicha norma había adoptado como permanentes los artículos 13 y 15 del Decreto 2651 de 1991. Y eso explica que incluso el fundamento de la competencia de la Corte fuera distinto en ambos casos. Así, la base del examen de fondo del decreto original 2651 de 1991 por la sentencia C-592 de 1992 fue el artículo 10 transitorio de la Carta, en concordancia con el numeral 5º del artículo 241 superior, tal y como lo precisó esa providencia, pues se trataba de examinar una demanda contra un decreto con fuerza de ley expedido en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º transitorio de la Constitución. En cambio, en el presente caso, y tal como lo explicó el fundamento 1º de esta sentencia, la base de la competencia de la Corte es el artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de una ley de la República, que en parte modificaron y convirtieron en legislación permanente los mandatos de un decreto ley de vigencia transitoria.</p> <p>3. La Corte rechaza el anterior análisis, para lo cual se basa en la doctrina desarrollada por la sentencia C-804 de 2000, MP Carlos Gaviria Díaz, según la cual, si una disposición legal de vigencia transitoria ha sido declarada exequible, y es posteriormente convertida en norma permanente, ese hecho no altera la cosa juzgada, salvo si la constitucionalidad de la norma dependía sólo de su vocación transitoria. Y por ello considera que en este caso existe cosa juzgada, pues la declaratoria de exequibilidad de las normas sobre arbitramento por la sentencia C-592 de 1992 no dependió de la vocación transitoria del decreto 2651 de 1991. Pero ese argumento no es aceptable, por las siguientes dos razones:</p> <p>4. De un lado, el tema de la temporalidad era relevante en el presente caso, aunque sea por el siguiente hecho: la fuente de las facultades para el Presidente para expedir el decreto 2651 de 1991 fue el artículo 5 transitorio de la Constitución, que lo autorizó a</p>
--	---

	<p><i>“expedir normas <u>transitorias</u> para descongestionar los despachos judiciales”</i> (subrayas más). Por consiguiente, si el Presidente hubiera dictado una regulación permanente, ésta hubiera sido inconstitucional. Y precisamente la sentencia C-592 de 1992 examinó el punto, pues señaló al respecto lo siguiente:</p> <p>“Las facultades extraordinarias de que se ocupa ahora la Corporación contienen dos elementos de precisión dispuestos en la Carta, el uno, referente a la TRANSITORIEDAD de las normas que se expidan, y el otro, a la finalidad impuesta a las mismas de DESCONGESTIONAR los despachos judiciales.</p> <p>Dícese transitorio de lo que pasa, de lo momentáneo, de lo contrario a lo indefinido. Se tratará entonces de normas con una existencia limitada en el tiempo, de acuerdo con la racionalización que de los efectos normativos y de su permanencia, hubiese hecho el Presidente de la República o la Comisión Legislativa respectivamente. De suerte que cuando estas autoridades públicas decidieron que el decreto tendría una vigencia de cuarenta y dos (42) meses (artículo 1o. del Decreto), acataron la exigencia constitucional de expedir las normas por un término, o con carácter transitorio. En sentir de la Corte, al no contener el decreto una vigencia indefinida, resulta por este aspecto constitucional la normatividad revisada, en razón del amplio poder discrecional que confirió el constituyente al Presidente de la República para determinar la transitoriedad de las normas”.</p> <p>5. Esto muestra que incluso con la doctrina desarrollada por la sentencia C-804 de 2002, en el presente caso no existía cosa juzgada, por cuanto la temporalidad de la regulación contenida en el decreto 2651 de 1991 era un elemento necesario para su declaratoria de exequibilidad por la sentencia C-592 de 1992, por la sencilla razón que si ese decreto no hubiera tenido vocación temporal, el Presidente hubiera incurrido en una extralimitación en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5° transitorio de la Constitución.</p> <p>Sin embargo, la anterior no es mi objeción central al análisis de la Corte. Mi reparo básico tiene que ver con el hecho de que la adopción de una disposición A por una ley B posterior implica que estamos frente a una disposición formalmente distinta, aunque ambas puedan tener un idéntico contenido normativo. Y eso es todavía más evidente, si la disposición A tenía vigencia transitoria, como sucede con el decreto 2651 de 1991, pues esta hubiera dejado de regir, de no haber sido adoptado por la ley B. Y por ello es claro que formalmente la disposición vigente es la ley B, y no la disposición originaria A, por lo que una sentencia de exequibilidad sobre la disposición A no implica cosa juzgada formal sobre la ley B,</p>
--	--

	<p>que la reproduce y le confiere vigencia permanente.</p> <p>6. Para mostrar el error del argumento de la Corte, realicemos el siguiente experimento mental. Supongamos que una disposición A, de vigencia transitoria, establece la regulación X. Supongamos que esa disposición A es declarada exequible por la sentencia I. Ahora imaginemos que una ley B establece lo siguiente: <i>“Adóptese como norma permanente la disposición A”</i>. En esta hipótesis, conforme a la doctrina desarrollada en la presente sentencia, y de la cual discrepo, la Corte no podría examinar la ley B pues existiría cosa juzgada formal, debido a la sentencia I, que recayó sobre la disposición A.</p> <p>Supongamos ahora que una ley C, sin hacer referencia a la disposición A, adopta permanentemente la regulación X, que estaba contenida en la disposición A. Ahora bien, en estos casos, la Corte ha dicho que no existe cosa juzgada formal, y por ello entra a analizar si existe o no cosa juzgada material, o procede a estudiar directamente la constitucionalidad de la ley C. Un ejemplo reciente es la sentencia C-311 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa, que estudió la constitucionalidad de la expresión <i>“o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas”</i>, contenida en el inciso primero del artículo 257 de la Ley 599 de 2000. Este artículo reproduce en forma idéntica ese elemento normativo del artículo 6° de la Ley 422 de 1998, que había sido declarado exequible, en este punto, por la sentencia C-739 de 2000. Sin embargo, no por ello la Corte consideró que existía cosa juzgada formal, sino que procedió a analizar la existencia o no de cosa juzgada material, y declaró la exequibilidad de ese aparte.</p> <p>7. No entiendo entonces por qué existe cosa juzgada formal si una nueva ley adopta una disposición anterior, que había sido declarada exequible, pero no existe cosa juzgada formal si la nueva ley reproduce el contenido de la anterior disposición, pero no la menciona. Esa distinción me parece irrelevante, y por ello concluyo que no existía cosa juzgada formal respecto del artículo 13 y de los ordinales 1°, 2°, 5° y 6° del artículo 15 del Decreto No. 2651 de 1991, adoptados como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.</p> <p>8. No existiendo cosa juzgada formal, la pregunta que subsiste es entonces si existía una cosa juzgada material, que impidiera un nuevo examen constitucional de esas disposiciones. Y mi respuesta es claramente negativa, por las siguientes dos razones: (i) el contenido normativo de las regulaciones no es el mismo, por lo que no se cumple uno de los presupuestos básicos para la existencia de la cosa juzgada material; y, de otro lado, (ii) incluso si ese contenido</p>
--	--

	<p>fuera idéntico, esa situación no impediría un nuevo examen de constitucionalidad. Veámoslo.</p> <p>9. De un lado, el contenido normativo no es idéntico, precisamente porque la regulación originaria contenida en el decreto 2651 de 1991 es transitoria, mientras que aquella que fue adoptada por la Ley 446 de 1998 tiene vocación permanente, lo cual implica una diferencia sustantiva del alcance de las dos regulaciones, como ya lo expliqué anteriormente. Pero eso no es todo. Además, la Ley 446 de 1996 modificó algunos de los incisos del artículo 15 del decreto 2651 de 1995, con lo cual alteró parcialmente la estructura general de la fase prearbitral. Ahora bien, como lo explica la presente sentencia, esta fase prearbitral tiene un sentido orgánico y sistemático, lo cual significa que las distintas normas que la componen son interdependientes. Por consiguiente, una modificación de algunas de sus partes tiene efectos normativos sobre las otras partes, incluso si éstas no fueron formalmente modificadas. Y por ello creo que las disposiciones no son idénticas, y no se presenta entonces el presupuesto básico de la cosa juzgada material.</p> <p>10. De otro lado, incluso si hubiéramos concluido que las disposiciones tenían el mismo contenido, no por ello la Corte debió dejar de lado su estudio, por la sencilla razón de que la cosa juzgada material no impide un nuevo examen de constitucionalidad de un contenido normativo que ya había sido declarado exequible, tal y como lo señaló la sentencia C-311 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa, en donde la Corte reformuló y precisó el alcance de la doctrina de la cosa juzgada material en estos casos. Dijo entonces esta Corporación:</p> <p><i>“De esta forma, la Corte clarifica los alcances y las consecuencias de la llamada cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad: El fallo anterior constituye un precedente respecto del cual la Corte tiene diversas opciones, ya que no queda absolutamente autovinculada por sus sentencias de exequibilidad (Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero). La primera, es seguir el precedente, en virtud del valor de la preservación de la consistencia judicial, de la estabilidad del derecho, de la seguridad jurídica, del principio de la confianza legítima y de otros valores, principios o derechos protegidos por la Constitución (Sobre la aplicación del concepto de precedentes en sistemas no anglosajones y su relación con el concepto de cosa juzgada, en especial en Alemania, España, Francia e Italia, ver Neil MacCormick y Robert Summers (Ed) <u>Interpreting precedents</u>. París, Ashgate Dartmouth, 1997). y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte (Sentencias C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-083 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-123 de 1995 M.P. Eduardo</i></p>
--	---

	<p><i>Cifuentes Muñoz, SU-047 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, SU-168 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.). En esta primera opción la Corte decide seguir la ratio decidendi anterior, mantener la conclusión que de ella se deriva, estarse a lo resuelto y, además, declarar exequible la norma demandada. Otra alternativa es apartarse del precedente, esgrimiendo razones poderosas para ello que respondan a los criterios que también ha señalado la Corte en su jurisprudencia, para evitar la petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores (Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.). También puede la Corte llegar a la misma conclusión de su fallo anterior pero por razones adicionales o diversas. En conclusión, los efectos de la cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad son específicos y no se asimilan a los del derecho procesal general. Se inscriben dentro de la doctrina sobre precedentes judiciales en un sistema de tradición romano germánica, son los propios del proceso constitucional y responden a la interpretación de una Constitución viviente”.</i></p> <p>Ahora bien, en el presente caso, incluso si aceptáramos que los contenidos normativos demandados en la presenta oportunidad eran idénticos a los estudiados por la sentencia C-592 de 1992, un nuevo examen de su constitucionalidad era esencial, puesto que era necesario precisar el alcance de la doctrina sobre el régimen constitucional del arbitramento establecida en la sentencia de 1992.</p> <p>Por todo lo anterior, considero entonces que no existía ninguna cosa juzgada constitucional que impidiera que la Corte examinara la constitucionalidad del artículo 13 y de los ordinales 1°, 2°, 5° y 6° del artículo 15 del Decreto No. 2651 de 1991, adoptados como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>Sin entrar en las distinciones que ha hecho la propia Corte o la doctrina, respecto del tema de la cosa juzgada constitucional y que tiene que ver con los conceptos de cosa juzgada relativa, aparente, absoluta, formal, material; quiero llamar la atención sobre el hecho de que en realidad la única cosa juzgada absoluta que existe es aquella que se presenta cuando el Tribunal Constitucional declara contraria a la Constitución una norma de inferior jerarquía a ella. En realidad, la única cosa juzgada absoluta que se produce es la del fallo de inexequibilidad que saca del orden jurídico la norma demandada. Las demás sentencias del Tribunal Constitucional que declaran exequible una norma, aún cuando sea de manera</p>



	<p>condicionada (sentencia interpretativa), en estricto sentido no tienen el valor de cosa juzgada absoluta ya que el Tribunal Constitucional puede volver sobre ellas, bien porque existan otras razones o motivos; o aún en el evento de que las causas invocadas sean las mismas, porque encuentro más razonable otra interpretación de las normas constitucionales o de la ley demandada; o porque cambió la composición del Tribunal Constitucional y los nuevos miembros encuentran que existe otra interpretación de las normas constitucionales.</p> <p>En síntesis, la única sentencia con fuerza de cosa juzgada absoluta que existe es la que declara la inexecuibilidad de una norma; en cambio la que declara la norma jurídica ajustada a la constitución es siempre relativa, pues el Tribunal Constitucional puede volver sobre ella.</p> <p>Sistema normativo.</p> <p>El tema anterior se encuentra íntimamente ligado al concepto de sistema jurídico.</p> <p>La moderna teoría del derecho e interpretación constitucional distingue los conceptos de sistema jurídico y orden jurídico. En términos simples, se entiende por orden jurídico el conjunto de normas vigentes en un momento y en un lugar determinado. Forman parte de este orden jurídico no sólo las normas expresamente promulgadas sino también aquéllas que sin haber sido expresamente promulgadas puedan derivarse o deducirse lógicamente de las primeras; en consecuencia, hacen parte del orden jurídico, normas promulgadas y normas no promulgadas</p> <p>Se entiende por sistema jurídico, la sucesión de ordenes jurídicos. De tal manera que forma parte del sistema jurídico las normas que una vez estuvieron vigentes y que ahora se encuentran derogadas. El concepto de sistema jurídico es mucho más amplio que el de sistema normativo, ya que éste último sólo comprende las normas vigentes mientras que el primero comprende las vigentes y las derogadas. Este concepto de sistema jurídico es muy útil para explicar temas como el de la ultractividad de la ley y hace comprensible el fenómeno de normas derogadas que siguen, sin embargo, produciendo efectos jurídicos.</p> <p>El orden jurídico varía bien porque se agrega una norma, se suprime una norma (explícita o implícita) de ese orden jurídico o se modifica una norma del orden jurídico. Basta entonces, que una sola norma (o más exactamente una parte de una norma) cambie para que varíe todo el orden jurídico; y es importante tener claro esto en el control de constitucionalidad ya que basta con que se</p>
--	--

	<p>haya modificado una sola norma del orden jurídico anterior para que el Tribunal Constitucional pueda volver sobre la norma demandada, aunque ya haya sido juzgada y encontrada acorde con la Constitución. Basta con una pequeña modificación del orden jurídico (porque se agrega, deroga o modifique una norma) para que el juez constitucional pueda volver ha pronunciarse sobre la norma, pues esta norma pertenece a un orden jurídico diverso y por pertenecer a un orden jurídico diverso ya no es la misma norma sino una norma diferente aunque sea textualmente idéntica.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-415/02
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de mayo de dos mil dos (2002)
Demandante	Claudia Elena Soto Escobar
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso tercero parcial del artículo 148 de la Ley 446 de 1998 modificado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Decision	Declarar EXEQUIBLE el inciso 3º parcial del artículo 148 de la ley 446 de 1998 modificado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999, bajo el entendido que la expresión " <i>ante las mismas</i> " se refiere a las autoridades judiciales en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que la norma parcialmente acusada, viola los artículos 13 y 29 de la Constitución. Según su parecer, la disposición desconoce el debido proceso al estipular que las decisiones de las superintendencias dictadas en ejercicio de la función jurisdiccional, sean apelables "<i>ante las mismas</i>". Aduce que la apelación tiene por objeto permitir que una persona, jerárquicamente superior y distinta a la que tomó la decisión en primera instancia, estudie ese dictamen. Cosa contraria a lo que sucede en el presente caso, en donde es la misma superintendencia quien debe resolver el recurso. Indica que la situación sería distinta si aún dentro de las mismas superintendencias hubiera sido establecida esa jerarquía. Pero como el que resuelve es el propio jefe del organismo, no existe un funcionario superior a él que pueda resolver la apelación. Por tal razón, asegura que la expresión en comento hace que la norma en su conjunto pierda su efecto útil, por lo cual estima que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, debe ser retirada del ordenamiento.</p> <p>Aduce que las normas vulneran el derecho a la igualdad, porque cuando la misma materia es planteada ante un juez en la jurisdicción ordinaria, que es competente a prevención con las superintendencias, la apelación sí debe efectuarse ante un</p>

	<p>funcionario distinto. Por tanto, considera que para garantizar este derecho, debe preverse que el recurso pueda surtirse en las mismas condiciones .</p> <p>Por medio de auto del 27 de agosto de 2001, fue rechazada la presente demanda. El magistrado sustanciador consideró que respecto del precepto, ya existía un pronunciamiento por parte de la Corte, en el cual éste había sido declarado exequible en la sentencia C-384 de 2000. Al no haberse limitado los efectos de cosa juzgada en esa providencia, consideró que sobre el punto existía cosa juzgada absoluta, por lo cual la Corte no podría pronunciarse de nuevo sobre ese mismo punto.</p> <p>La accionante elevó recurso de suplica dentro de la oportunidad procesal. Alegó que en el caso presente no existe cosa juzgada absoluta, porque en el fallo que declaró exequible la norma, la Corte no analizó si procedía el recurso de apelación ante las superintendencias. Afirma que no puede existir cosa juzgada cuando el tema jurídico del debate no ha sido abordado previamente, tal y como ocurre en este caso respecto de la expresión "<i>ante las mismas</i>".</p> <p>Por medio de auto del 10 de octubre de 2001, la Sala Plena de la Corte resolvió el recurso de súplica interpuesto. Consideró que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, existen notables diferencias entre la cosa juzgada relativa, absoluta y aparente. En el caso bajo estudio, considera que la sentencia C-384 de 2000 no estudió lo relacionado con la expresión "<i>ante las mismas</i>", por lo cual si bien esa sentencia no limitó el alcance de la cosa juzgada, debe entenderse que ésta no cubre el aparte actualmente demandado. Por consiguiente, fue revocado el artículo primero del auto del 27 de agosto y en consecuencia, fue admitida la demanda contra la expresión "<i>ante las mismas</i>".</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

### SENTENCIAS DE 2003

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1065/03
Fecha de la sentencia	once (11) de noviembre de dos mil tres (2003).
Demandante	: Edgar Saavedra Rojas
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20 y 24, parciales, de la Ley 793 de 2002 “Por medio de la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las normas que regulan la extinción de dominio.”
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>- El constituyente sólo consagró la extinción del dominio para los bienes adquiridos ilícitamente.</p> <p>El artículo 34 de la Constitución estableció que la acción corresponde a los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, por ello resulta inexecutable que se pretenda hacer extensiva la acción para los bienes utilizados o destinados con finalidades ilícitas.</p> <p>Considera que las causales del artículo 2 de la Ley 793, que extienden la acción para los bienes utilizados o destinados con finalidades ilícitas o que provengan indirectamente de una actividad ilícita desbordan el límite previsto en el artículo 34 de la Carta.</p> <p>Respecto del párrafo primero del artículo 2, considera que se está ante la inversión de la carga de la prueba. Y en cuanto al párrafo 2 del mismo artículo, estima que el legislador excluyó determinados delitos, por lo que pide que en torno a este párrafo se dé un fallo de exequibilidad condicionada en el sentido de que es constitucional “siempre y cuando se entienda que podrá ser objeto de la acción de extinción de dominio cualquier bien o patrimonio que haya sido adquirido por medio de actividades ilícitas profesionalizadas, o realizadas con ánimo de lucro, sin importar su</p>

	<p>género o especie.” (página 150)</p> <p>- Las funciones constitucionales de la Fiscalía son las de investigar y acusar, y no puede el legislador asignarle funciones que no sean complementarias y concordantes con aquella.</p> <p>Afirma que hay una desnaturalización legal de las funciones constitucionales atribuidas a la Fiscalía General de la Nación. El legislador en las normas de la Ley 793 de 2002 incluyó atribuciones que la Constitución no estableció en el artículo 250 de la Constitución. La Ley 793 le asignó a la Fiscalía funciones que nada tienen que ver con la represión del delito y la persecución de delincuentes, pues la acción es administrativa y de origen constitucional, que tiene que ver con las consecuencias que algunos delitos producen: el enriquecimiento ilícito y el crecimiento injustificado de sus patrimonios. Prueba de ello se encuentra en que el mismo legislador se encargó de definir esta acción como real y totalmente independiente del delito y del proceso penal, lo que también surge de su propia naturaleza.</p> <p>Declarar, pues, la procedencia sobre la extinción del dominio sobre bienes de ilícita procedencia no tiene ninguna relación con las atribuciones constitucionales de la Fiscalía General de la Nación.</p> <p>En consecuencia, se debe declarar la inexequibilidad de las normas de la Ley 793 de 2002 que radiquen tal competencia en la Fiscalía, como son los apartes acusados de los artículos 4, 5, 11, 1214, 17 de la mencionada Ley.</p> <p>- La presunción de inocencia y la carga de la prueba. La imposibilidad de que la misma sea invertida.</p> <p>El actor se remite al contenido del artículo 29 de la Constitución y a lo consagrado en el Pacto Universal de Derechos Humanos (Ley 74 de 1968), artículo 14, numeral 2, y a la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), artículo 8. Se remonta a los orígenes y a los conceptos relativos al principio de la presunción de inocencia. Recuerda que la Corte Constitucional ha reconocido que en el ejercicio de esta acción de extinción de dominio debe respetarse la presunción de inocencia, principio que debe aplicarse con mayor razón dentro de este proceso. Proceso en el que además debe imperar la carga de la prueba a cargo del Estado, quien a través de sus funcionarios, está obligado a demostrar la existencia de un crecimiento patrimonial injustificado y sobre cuáles bienes específicamente individualizados, que fueron obtenidos por medios ilícitos. Cita algunas providencias de la Corte Constitucional para apoyar sus argumentos: sentencias C-374 de 1997, C-176 de 1994.</p>
--	--

	<p>Considera que la Corte para declarar la exequibilidad de los tres primeros numerales del artículo 9 del Decreto Legislativo 1975 de 2000 olvidó que una de las primeras formas de interpretación es la literal. Hace esta afirmación porque tiene la convicción de que en este Decreto se quiso invertir la carga de la prueba al consagrarlo como un derecho del demandado. En esta Ley 793 de 2002, se deja en evidencia que la voluntad del gobierno y del legislador es invertir la carga de la prueba, pues, claramente se indica que es el demandado quien debe justificar o probar la procedencia lícita de sus bienes. Afirma que “estamos frente a una verdadera triquiñuela del legislador que hace aparecer como un derecho (el de probar) cuando en realidad de verdad lo que está buscando es desconocer la presunción de inocencia y como consecuencia de la misma invertir la carga de la prueba.”</p> <p>Señala que como la disposición contenida en el Decreto de excepción fue declarada exequible por la Corte y ahora se encuentra en la Ley 793 de 2002, en las partes demandadas de los artículos 2, 9 y 13, solicita sean declarados inexecutable por las razones que expuso.</p> <p>En este punto, el actor hace la siguiente precisión respecto del contenido del numeral 7 del artículo 2, que dice: “7. Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen ilícito del bien perseguido en el proceso.” Señala que dentro de la lógica debe aludir al origen lícito y no ilícito.</p> <p>- Extinción de dominio sobre bienes respecto de los cuales no se ha demostrado la procedencia ilícita : artículo 2, numeral 5. Se establecen causales de extinción de dominio diferentes a la única que estableció el Constituyente que es la adquisición ilícita de los mismos. Si a pesar de haber estado los bienes involucrados en el proceso penal y no se investigó su origen, utilización o destinación, o a pesar de haberlo hecho no se tomó ninguna determinación al respecto, es una falta del Estado cuyas consecuencias negativas no pueden recaer sobre el ciudadano.</p> <p>Debe declararse la inexecutable del numeral 5 del artículo demandado.</p> <p>- Extinción de dominio sobre bienes de procedencia lícita utilizados en actividades o destinados a ocultar o mezclar bienes de procedencia ilícita: artículo 2, numeral 6.</p> <p>Considera que se debe declarar la inexecutable de este numeral, pues de manera grosera se pretende modificar la Constitución, pues si la única causal de extinción de dominio autorizada por la Carta es respecto de los bienes adquiridos ilícitamente es obvio que</p>
--	--

	<p>la acción no puede comprender bienes de procedencia lícita.</p> <p>- Extinción de dominio sobre bienes equivalentes que no fueren de procedencia ilícita. Artículo 3 inciso 2.</p> <p>Considera que si el Estado no pudo ubicar los bienes o no pudo decretar su extinción esto corresponde a una ineficiencia del Estado que no debe asumir el ciudadano. En esta hipótesis ni siquiera se estaría invirtiendo la carga de la prueba, sino que frente a su propia ineficacia el Estado acude a buscar bienes equivalentes. Se violan los principios de la presunción de inocencia, la carga de la prueba, el artículo 34 de la Carta, que expresa que la acción debe recaer sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Se viola también el derecho de defensa.</p> <p>Sobre la extinción de dominio respecto de bienes equivalentes existen las siguientes sentencias: C-176 de 1994, C-374 de 1997 y C-1007 de 2002, que sin poder considerarse como cosa juzgada sirven para fundamentar una decisión sobre esta norma en forma similar. Además, en esta última sentencia, la decisión correspondió a un pronunciamiento en un estado de excepción.</p> <p>- La exclusión injustificada de ciertas garantías inherentes al debido proceso y de otras garantías procesales creadas para hacer posible el ejercicio de los derechos de contradicción y de defensa.</p> <p>Señala que en el párrafo 5 del artículo 5 aparece una expresión que no tiene sentido con el contexto de la ley pero sí en el Proyecto que fue discutido. Se trata de una proposición jurídica incompleta, pues la norma alude a un fenómeno jurídico que finalmente no fue objeto de ataque y que por lo tanto es imposible que pudiera producirse una declaratoria de extinción de dominio por un presunto abandono de los bienes.</p> <p>- En cuanto a la demanda de la expresión “Contra esta resolución no procederá recurso alguno” contenida en el artículo 13, considera el actor que persiste en el artículo 13 una tendencia de suprimir o restringir las garantías y derechos, que también se observa en lo demandado de los numerales 6, 9 y 10 del mismo artículo.</p> <p>Explica que no es entendible que en tiempos de normalidad y por tiempo indefinido se produzca una eliminación o restricción de derechos y garantías sólo para quienes aparezcan como sindicados de haber obtenido sus bienes con dineros de procedencia ilícita. Se violan los principios de igualdad, presunción de inocencia, además, pretender darles a sentencias efectos erga omnes es un desface a la democracia, que afecta a terceros de buena fe y a los inocentes que se hubieren visto perjudicados por tales decisiones, que</p>
--	---



	<p>pudieren llegar a demostrar que por múltiples razones no tuvieron oportunidad de intervenir en el proceso de extinción.</p> <p>Señala que es sabido que la acción de revisión es una garantía de trascendental importancia para corregir fallos injustos. No se entiende la razón por la que el legislador quiere quitar esta garantía en perjuicio de los eventuales ciudadanos afectados con fallos manifiestamente injustos en este tipo de procesos.</p> <p>- Respecto del artículo 7, el demandante considera que se establecen restricciones de ciertas garantías que evidencian el propósito de extinguir el dominio de los bienes demandados en el proceso en el menor tiempo posible. Se establece un procedimiento restrictivo de ciertas garantías que no se compadece con el tipo de acción que se ejerce, ni con la presunción de inocencia, ni igualdad. La restricción de ciertas garantías se hace con el único propósito de que la decisión final tomada en el proceso sea de carácter negativo para el ciudadano demandado. Se prohíbe que el ciudadano pueda acudir a las garantías consagradas del Código de Procedimiento Penal, al remitir en casos de vacío normativo, en primer lugar, al Código de Procedimiento Civil, se establece la imposibilidad de alegar la prejudicialidad y la de solicitar acumulación de procesos.</p> <p>No se entiende, tampoco, la razón para se les imponga a los servidores públicos dar prelación a estos procesos por encima de los que tienen procesado detenido.</p> <p>Se trata de una grave inversión de los valores, ya que para el Gobierno y el legislador tienen mayor importancia la solución pronta de los procesos donde se decida el dominio sobre unos bienes que los procesos donde ciudadanos colombianos protegidos por la presunción de inocencia, se encuentren detenidos. Considera que se trata de una grave inversión de valores.</p> <p>- Sobre la enumeración taxativa de las nulidades contenida en el artículo 16, dice el demandante que se trata de una clara vulneración de las garantías del debido proceso y de otras garantías constitucionales.</p> <p>Considera que la disposición daría la posibilidad de una exequibilidad condicionada en el sentido de que se debe entender que habrá lugar a declarar nulidades en éste proceso además de las del artículo 16 y todas las que impliquen una vulneración de cualquier derecho o garantía contemplados en las normas integradoras del bloque de constitucionalidad.</p> <p>- Respecto del artículo 8 señala como una verdadera paradoja</p>
--	---

	<p>pretender que el debido proceso depende de aspectos nominativos. Se trata de menoscabar algunas de las más importantes garantías del concepto constitucional. Para ello basta mirar el contenido del artículo 9.</p> <p>- Dentro de este propósito de afectar derechos y garantías de los sometidos a este especial procedimiento, se encuentra la negativa de presentar excepciones e incidentes, de la misma manera que la única objeción posible es del peritazgo por error grave, como lo consagra el artículo 17 de la Ley 793. Se trata de una celeridad injustificada. Se legisla con fundamento en la presunción de culpabilidad y de mala fe.</p> <p>- Los principios de legalidad material y procesal, de favorabilidad y la imposibilidad de imponer efectos retroactivos a una ley de contenido perjudicial y restrictivo son vulnerados cuando la ley dispone que la nueva norma se aplicará a los procesos en curso en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, excepto los términos y recursos que hubieran comenzado a correr, como lo dispone el artículo 20. No se respetan estos principios constitucionales ni la normatividad internacional, pues en tal caso la nueva ley hubiere comenzado a aplicarse para los procesos que se inicien con posterioridad de la nueva ley.</p> <p>- Imposibilidad de aplicación retroactiva de las normas restrictivas o sancionatorias. El artículo 24 debe declararse inexecutable. Considera el demandante que no puede aceptar los argumentos de algunas sentencias de la Corte Constitucional, sentencia C-374 de 1997, en el sentido de que se puedan imponer sanciones de carácter administrativo con indudables efectos penales. Señala el actor que no puede olvidarse que la propiedad protegida por la Constitución es la lícitamente adquirida y por tanto al establecerse la sanción administrativa por parte del Constituyente, el legislador puede hacer retroactiva tal sanción. Donde el Constituyente no distinguió no puede el interprete hacerlo. La Corte creó un peligroso precedente. Afirma que con este precedente se está creando jurisprudencia para las futuras dictaduras.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-740/03
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de agosto de dos mil tres (2003).
Demandante	Pedro Pablo Camargo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 793 de 2002 “por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio”.
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Decision	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRIMERO. Declarar exequible la Ley 793 de 2002, en relación con el cargo formulado por no haberse sometido al trámite de una ley estatutaria.</li> <li>- SEGUNDO. Declarar exequible el artículo 1º de la Ley 793 de 2002 en relación con los cargos formulados por violación de las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 29 de la Constitución y del artículo 34 de la Carta Política en cuanto se refiere a la naturaleza y autonomía de la acción.</li> <li>- TERCERO. Declarar exequible el inciso primero del artículo 2º de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- CUARTO. Declarar exequible el numeral 1) del artículo 2 de la Ley 793 de 2002</li> <li>- QUINTO. Declarar exequible el numeral 2) del artículo 2 de la Ley 793 de 2002</li> <li>- SEXTO. Declarar exequible el numeral 3) del artículo 2 de la Ley 793 de 2002</li> <li>- SÉPTIMO. Declarar exequible el numeral 4) del artículo 2 de la Ley 793 de 2002</li> <li>- OCTAVO. Declarar exequible el numeral 5) del artículo 2 de la Ley 793 de 2002</li> <li>- NOVENO. Declarar exequible el inciso primero del numeral 6) del artículo 2 de la Ley 793 de 2002</li> <li>- DÉCIMO. Declarar exequible el numeral 7) del artículo 2 de la Ley 793 de 2002, salvo la expresión “ilícito” contenida en este numeral, que se declara inexecutable.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UNDÉCIMO. Declarar exequible el párrafo 1º del artículo 2 de la Ley 793 de 2002</li> <li>- DUODÉCIMO. Declarar exequible el párrafo 2º del artículo 2 de la Ley 793 de 2002, en el entendido que esta disposición gobierna todas las causales previstas en el artículo 2º de esta ley.</li> <li>- DECIMOTERCERO. Declarar exequible el artículo 3º de la Ley 793 de 2002</li> <li>- DECIMOCUARTO. Declarar exequibles las expresiones “Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen”, contenidas en el inciso primero del artículo 4º de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- DECIMOQUINTO. Declarar exequible el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- DECIMOSEXTO. Declarar exequible el inciso primero del artículo 5º de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- DECIMOSEPTIMO. Declarar exequible el inciso segundo del artículo 5º de la Ley 793 de 2002 en el entendido que los tratados deben haber sido ratificados por el Estado colombiano.</li> <li>- DECIMOOCCTAVO. Declarar exequible el párrafo del artículo 5º de la Ley 793 de 2002, en los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.</li> <li>- DECIMONOVENO. Declarar exequible el artículo 6º de la Ley 793 de 2002 en los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.</li> <li>- VIGESIMO. Declarar exequible el artículo 7º de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- VIGESIMOPRIMERO. Declarar exequible el artículo 8º de la Ley 793 de 2002 salvo la expresión “que le es propio” contenida en esta disposición, que se declara inexecutable.</li> <li>- VIGESIMOSEGUNDO. Declarar exequible el artículo 9º de la Ley 793 de 2002 .</li> <li>- VIGÉSIMOTERCERO. Declarar exequible el artículo 11 de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- VIGÉSIMOCUARTO. Declarar exequible el artículo 12 de la Ley</li> </ul>
--	---

	<p>793 de 2002 por los cargos examinados en esta sentencia.</p> <p>- VIGÉSIMOQUINTO. Declarar exequibles el inciso primero y los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 7), 10) y 11) del artículo 13 de la Ley 793 de 2002 salvo la expresión “contra esta resolución no procederá recurso alguno” contenida en el numeral 1), que se declara inexecutable.</p> <p>Declarar executable el inciso primero del numeral 6) del artículo 13 de la Ley 793 de 2002 en el entendido que la negativa de decretar pruebas es impugnabile cuando se trate de pruebas solicitadas por el afectado.</p> <p>Declarar executable el numeral 8) del artículo 13 de la Ley 793 de 2002 en el entendido que la resolución de procedencia de la extinción del dominio puede ser impugnada por el afectado.</p> <p>Declarar executable el numeral 9) del artículo 13 de la Ley 793 de 2002 en el entendido que el término de cinco (5) días es para aportar o solicitar pruebas y que los quince (15) días allí previstos comienzan a correr cuando venza el término que razonablemente fije el juez para la práctica de pruebas.</p> <p>- VIGÉSIMOSEXTO. Declarar executable el artículo 14 de la Ley 793 de 2002, salvo la expresión “ninguna decisión adoptada por el fiscal es susceptible de recursos” contenida en este artículo que se declara inexecutable.</p> <p>- VIGÉSIMOSEPTIMO. Declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 15 de la Ley 793 de 2002.</p> <p>- VIGÉSIMOOCOTAVO. Declarar executable el artículo 16 de la Ley 793 de 2002, en el entendido que también configura causal de nulidad cualquier violación a las reglas del debido proceso consagradas en el artículo 29 de la Constitución, salvo la expresión “sin causa que lo justifique” contenida en el numeral 3) de este artículo, que se declara inexecutable.</p> <p>- VIGESIMONOVENO. Declarar executable el artículo 17 de la Ley 793 de 2002.</p> <p>- TRIGÉSIMO. Declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 18 de la Ley 793 de 2002.</p> <p>- TRIGÉSIMOPRIMERO. Declarar executable el artículo 19 de la Ley 793 de 2002.</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TRIGÉSIMOSEGUNDO. Declarar exequible el artículo 20 de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- TRIGÉSIMOTERCERO. Declarar exequible el artículo 21 de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- TRIGÉSIMOCUARTO. Declarar exequible el artículo 22 de la Ley 793 de 2002.</li> <li>- TRIGÉSIMOQUINTO. Declarar exequible el artículo 24 de la Ley 793 de 2002.</li> </ul>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor solicita la declaratoria de inexequibilidad de la totalidad de la Ley 793 de 2002, fundamentalmente por no habersele dado trámite de ley estatutaria y por vulneración de los artículos 29, 34 y 58 de la Constitución Política. Los cargos los apoya en los siguientes planteamientos:</p> <p>1. Toda la Ley 793 es inexequible por vulneración de los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, pues, de acuerdo con ellos, la regulación de los derechos y deberes fundamentales de las personas y de los recursos para su protección debe hacerla el Congreso de la República mediante ley estatutaria y no mediante ley ordinaria. No obstante, la ley demandada, que es una ley ordinaria, regula tres derechos fundamentales: El derecho a la no confiscación de la propiedad, consagrado en el artículo 34 de la Carta; el derecho a la propiedad privada, amparado por el artículo 58 de la Constitución y por el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene prelación en el orden interno por lo dispuesto en el artículo 93 superior, y el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8 de la Convención Americana.</p> <p>2. El inciso segundo del artículo 34 de la Carta fue introducido por el constituyente con la intención de combatir la corrupción de los servidores públicos y por ello la extinción de dominio es una pena adicional al enriquecimiento ilícito de servidores públicos, no de particulares. Por ello, para que proceda la extinción de dominio contra servidores públicos debe existir una sentencia judicial en la que se haya establecido que el servidor público se enriqueció a expensas del tesoro público o con grave deterioro de la moral social.</p> <p>Pese a ello, afirma el demandante, el artículo 1° de la Ley 793</p>

	<p>consagra la acción de extinción de dominio como una acción autónoma con el propósito de establecer una institución sui géneris diferente a la expropiación. Por lo tanto, esa norma viola los artículos 34, 58 y 374 de la Carta y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos pues desconoce la naturaleza de esa acción fijada por el constituyente, viola el régimen constitucional del derecho a la propiedad y contraría el procedimiento fijado para modificar el Texto Constitucional. No debe perderse de vista, dice el actor, que la única acción de dominio prevista en el derecho civil colombiano es la reivindicatoria y que el Estado no puede reivindicar una propiedad que no tiene, pues eso equivale a una confiscación.</p> <p>3. Las causales de extinción de dominio consagradas en el artículo 2° son inexequibles porque prescinden de la existencia de una sentencia judicial previa en la que se haya impuesto una condena por la actividad generadora del enriquecimiento ilícito, violando así la presunción de inocencia como manifestación del debido proceso. Además, desconocen que la extinción de dominio sólo procede por el enriquecimiento ilícito de servidores públicos, invierten la carga de la prueba al exigir demostración de la lícita procedencia de los bienes y vulneran el non bis in ídem al propiciar una sanción adicional al decomiso de los bienes dispuesto en el proceso penal.</p> <p>4. El artículo 3º, que regula los bienes contra los que procede la extinción de dominio y su viabilidad contra bienes equivalentes, implica consagrar una pena de confiscación y por ese motivo vulnera el artículo 34 constitucional.</p> <p>5. El artículo 4º es inexequible porque desconoce que sólo hay lugar a la extinción de dominio con base en una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, consagra la confiscación de los bienes de los herederos del causante, desconoce el carácter personal de la responsabilidad penal y vulnera los derechos de la familia y los derechos de los menores.</p> <p>6. El artículo 5º vulnera el artículo 250 constitucional, pues éste no faculta a la Fiscalía General para conocer de la extinción de dominio y, de ser así, debería seguirse el procedimiento acusatorio. Además, la atribución de funciones a la Dirección Nacional de Estupefacientes para intervenir como parte en el proceso, viola el artículo 277.7 en cuanto usurpa funciones propias del Procurador General de la Nación, y el artículo 29, que garantiza al acusado la igualdad de armas frente a la parte acusadora.</p> <p>7. El artículo 6º, al consagrar una retribución para el particular que denuncie de manera eficaz o que de forma efectiva contribuya a obtener evidencias para extinguir el dominio o las aporte, viola el</p>
--	--

	<p>artículo 95.7 de la Carta, pues el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia debe cumplirse sin esperar recompensa alguna.</p> <p>8. El artículo 7º vulnera el artículo 29 de la Constitución, pues si los códigos procesales se aplican sólo para llenar vacíos, no se observa la plenitud de las formas propias de cada juicio. Además, si la extinción de dominio es una acción civil, el Código de Procedimiento Civil debe aplicarse de preferencia sobre el Código de Procedimiento Penal. Finalmente, la imposibilidad de prejudicialidad o acumulación viola el derecho de defensa, pues son instituciones tradicionales de este estatuto.</p> <p>9. El artículo 8º vulnera el artículo 29 de la Corte porque excluye del debido proceso aplicable a la extinción de dominio principios como la legalidad del delito y de la pena, el in dubio pro reo, el non bis in ídem, la presunción de inocencia, la favorabilidad, la doble instancia, el juicio oral y público y la no retroactividad.</p> <p>10. Los derechos de los afectados consagrados en el artículo 9º desconocen el principio de presunción de inocencia e invierten la carga de la prueba y con ello se vulneran el artículo 29 de la Carta y el artículo 83 de la Ley 190 de 1995. Afirma que tales principios se aplican a la extinción de dominio por tratarse de una pena y que existen precedentes de la Corte, como la Sentencia C-176-94, en los que se ha hecho una rigurosa defensa de ellos.</p> <p>11. La asignación de competencia que el artículo 11 hace a la Fiscalía General - inciso primero- y a los jueces penales de circuito especializados - inciso segundo- para conocer de la acción de extinción de dominio, viola el artículo 29 superior porque el competente para tramitar y fallar la acción real de dominio o reivindicatoria es el juez civil; porque el ejercicio de la acción reivindicatoria corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa (Art. 950 C.C.) y no al Estado pues éste sólo es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Art. 332 C.P.); porque al asignar competencia a jueces penales y legitimar al Estado, se consagra una forma de confiscación y se violan los artículos 34 y el 58 superiores; porque los artículos 250 y 251 de la Carta no facultan a la Fiscalía para conocer de la extinción de dominio; porque se presenta una contradicción insalvable, pues si la ley dice que la acción es civil, la Fiscalía no puede conocer de ella ya que se desconoce el juez natural que es el juez civil y porque los jueces especializados son temporales (Ley 504 de 1999) y no se les puede asignar una competencia permanente.</p> <p>12. Los poderes que el artículo 12 confiere a la Fiscalía General de</p>
--	---



	<p>la Nación vulneran el artículo 29 superior por cuanto tal entidad puede conocer de procesos penales pero no civiles. Además, las facultades que se le confieren a la Dirección Nacional de Estupefacientes desconocen el derecho del titular de los bienes a que se le nombre depositario mientras concluye el proceso y por ello vulneran los artículos 29, 58 y 248 de la Carta; es decir, el debido proceso, el derecho de propiedad y el derecho a ser despojado de los bienes únicamente con base en una sentencia que ordene la extinción.</p> <p>13. El artículo 13 viola el artículo 29 constitucional, porque restringe el derecho de defensa, no consagra recursos contra las resoluciones del fiscal y permite, por vía de la consulta, la reforma en perjuicio del procesado. Considera que sobre este punto se debe aplicar el precedente sentado en la Sentencia SU-1772-00.</p> <p>14. El artículo 14, en cuanto establece la improcedencia de recursos contra las decisiones del fiscal, vulnera el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Carta y desconoce los recursos que, de acuerdo con el artículo 250 superior, proceden ante el juez de control de garantías.</p> <p>15. El artículo 15, que dispone que no habrá nulidades de previo pronunciamiento sino que todas se resolverán en la Sentencia, vulnera gravemente el derecho de defensa.</p> <p>16. El artículo 16, al consagrar únicamente tres causales de nulidad aplicables al proceso de extinción de dominio, vulnera el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 constitucional, pues limita las causales de nulidad previstas en los regímenes de procedimiento penal y civil y, en razón de ello, circunstancias como la violación del derecho a la defensa o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso no invalidarían la actuación.</p> <p>17. El artículo 17, que prohíbe el trámite de excepciones previas e incidentes salvo el de objeción al peritazgo por error grave, vulnera el artículo 29 pues viola el debido proceso y el derecho de defensa en cuanto priva a las partes y a los terceros de buena fe, de mecanismos orientados a la defensa de sus derechos.</p> <p>18. El artículo 18, relativo a las decisiones que se deben tomar en la sentencia, vulnera el artículo 29 de la Constitución por cuanto debe ser dictada por un juez civil y no por un juez penal.</p> <p>19. Las reglas de derecho consagradas en el artículo 19 vulneran el artículo 248 de la Carta, pues, de acuerdo con éste, la administración de justicia es una función pública y si ello es así</p>
--	--

	<p>debe operar con los fondos del Estado aprobados por el Congreso. Además, vulneran también el artículo 267, pues éste le atribuye a la Contraloría General de la República la vigilancia de la gestión fiscal de quienes manejan fondos o bienes de la nación.</p> <p>20. El artículo 20, según el cual los términos y recursos que hubieren empezado a correr se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación y en todo lo demás se aplicará la Ley 793, es inexecutable porque las normas procesales anteriores, por ser de efectos sustanciales, deben aplicarse por favorabilidad. Además, desconoce el principio de legalidad por cuanto la nueva disposición se aplica retroactivamente.</p> <p>21. El artículo 21 viola el artículo 39 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Ley 32 de 1985), que dispone que un tratado sólo puede ser enmendado por acuerdo entre las partes, sin que pueda ser aplicado sin el consentimiento de las demás. Viola también el artículo 226 superior, que consagra el principio de reciprocidad, pues los demás países no contemplan la acción de extinción de dominio, por el contrario, consagran sin excepciones la no confiscación de la propiedad.</p> <p>22. El artículo 22 promueve la coexistencia de tres regímenes en materia de extinción de dominio. El primero, constituido por la Ley 333 de 1996, que -al tiempo de presentación de la demanda- recobraría vigencia al levantamiento del estado de conmoción interior; el segundo, constituido por el Decreto 1975 de 2002, vigente en tanto se mantenga ese estado de excepción, y la Ley 793 de 2003. En ese marco, la coexistencia de tres regímenes viola el derecho de igualdad y el debido proceso pues las personas quedan sometidas a regímenes diferentes y no tienen certeza con base en qué legislación pueden defender sus derechos.</p> <p>23. El artículo 24 de la Ley 793 de 2002, que regula la vigencia de la ley, vulnera la Carta Política por múltiples razones. Por una parte, la extinción de dominio es una sanción penal y por ello no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia, pues ello desconoce el principio de legalidad. Por otra parte, con la aplicación retroactiva de la ley lo que se hace es consagrar la pena de confiscación, ignorar que la Constitución de 1991 eliminó el justo título como requisito para la protección constitucional del derecho a la propiedad privada y adicionar el artículo 58 superior pero sin seguir el procedimiento fijado en los artículos 374 y 375 de la Carta. Por lo tanto, concluye el actor, tal disposición debe ser declarada inexecutable.</p>
--	---

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>1. La ley en su integridad debió ser declarada inconstitucional.</p> <p>Toda la ley debió ser declarada inconstitucional, pues de conformidad con el artículo 152 de la Constitución literal a), los derechos fundamentales de las personas necesitan de leyes estatutarias y deben ser regulados por esa categoría de leyes y no por leyes ordinarias.</p> <p>La propiedad privada de los instrumentos y medios de producción, es una institución fundamental del sistema capitalista, que es el que protege nuestra Constitución en el artículo 58. Este derecho de propiedad es tan importante, que si desapareciera y fuera reemplazado por la propiedad social de instrumentos y medios de producción, habríamos pasado de estado capitalista al estado socialista o comunista. Siendo la propiedad un derecho tan fundamental, que caracteriza no solo las relaciones entre el individuo y el Estado, sino también el tipo de Estado (capitalista o comunista), todo lo que afecte su núcleo esencial, debe ser regulado por una ley estatutaria y no por ley ordinaria. La extinción del dominio, no es más que la privación total de la propiedad de una persona. Privar a alguien de su propiedad, no es limitar la propiedad sino sustraérsela. Cuando a mi se me quita mi propiedad, se me ha afectado el núcleo esencial de ella, pues, ahora, carezco de propiedad. Estas afectaciones del núcleo esencial sólo pueden hacerse, en nuestro sistema constitucional por mandato del artículo 152 de la Constitución, mediante ley estatutaria y esta prohibido hacerlas mediante ley ordinaria. La ley 793 de 2002 que es la que se juzga, es una ley ordinaria y no estatutaria.</p> <p>2. La definición de la naturaleza de la ley hecha por el legislador es contradictoria.</p> <p>De un lado la define como de carácter real, pero al mismo tiempo la asigna, no al juez natural estas acciones, que sería el juez civil, sino al juez penal. Sin embargo, después de haberla asignado al juez penal, no le da a los ciudadanos todas las garantías que hay que darle frente a un juez penal y, al contrario, los priva de los derechos más caros que tiene un ciudadano, cuando concurre frente al juez penal: presunción de inocencia; in dubio pro reo; carga de la prueba a cargo del Estado; el Estado es quien tiene que demostrar mi culpabilidad y correlativamente yo no tengo la necesidad de probar mi inocencia; etc.</p>

	<p>Bajo el pretexto de defender el debido proceso, se invierte la carga de la prueba y se abandona la presunción de inocencia, aunque no se trate de una acción penal. En mi criterio, debe conservarse el esquema tradicional de defensa: quien demanda debe probar los hechos y de no ser así, se atenta contra el Estado democrático, en el que se debe garantizar un verdadero debido proceso. Advierto, que la regla general es la de que los bienes son lícitos, por lo que el Estado es el que debe probar que son ilícitos.</p> <p>3. En relación con el tema de la extinción de dominio es necesario hacer un estudio sistemático del artículo 34 de la Constitución Política en armonía con el artículo 29 de la Carta y con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad si bien es cierto el artículo 34 permite extinguir el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social, no menos cierto es que el artículo 29 establece la presunción de inocencia de las personas, mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Si el estado de derecho consagra la presunción de inocencia, el investigado no tiene que demostrar que es inocente, no tiene que probarlo, sino que el Estado es quien tiene que probarle que es culpable. El numeral segundo del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” Esta norma forma parte del bloque de constitucionalidad y tiene en consecuencia la misma jerarquía de la Constitución; queda claramente establecido que es el Estado quien tiene que demostrar y probar la culpabilidad de las personas investigadas, de tal manera que nunca un inculpado tiene que probar su inocencia ya que la Constitución y los Tratados Internacionales consagran una presunción a su favor, que debe ser desvirtuada por el Estado; por esa razón es que consideramos que toda inversión de la carga de la prueba (para relevar al Estado de su deber de probar y obligar al sindicado a probar su inocencia) constituye una violación del debido proceso, de la Constitución y de los Tratados Internacionales.</p> <p>4. Tal como está redactada la ley, todas las conductas que son causa de la privación del derecho de propiedad son de naturaleza penal o delictual. Estando estructurada la ley de esa manera, no es posible afirmar que sea absolutamente independiente esta acción de otra de naturaleza penal; pues si dentro del proceso penal la persona es absuelta mal puede, después privársele de los bienes que habían sido objeto de investigación dentro del proceso penal. Tampoco puede el Estado estar sometiendo los mismos bienes a procesos penales, acciones de extinción de dominio, y nuevas acciones de extinción de dominio indefinidamente, pues esto</p>
--	---

	<p>afectaría el principio constitucional del non bis in idem, que en mi sentido, también es aplicable al proceso que sigue el juez penal en el caso de acciones de extinción de dominio.</p> <p>5. En relación con el párrafo del artículo 5 que da a la Dirección General de Estupefacientes la facultad de ser parte, se viola el debido proceso si a las otras partes y especialmente al titular del derecho de dominio, no se le hace efectivo el principio constitucional de la igualdad de partes y de armas para los sujetos del proceso. La intervención como parte de Dirección General de Estupefacientes, desquicia, cualquier esquema procesal, ya que esta parte tiene más facultades y derechos que el propio sindicado, teniendo además, una posición privilegiada ya que los bienes quedan bajo su disposición, configurándose así que una parte, sea, parte y secuestre al mismo tiempo.</p> <p>6. En relación con el artículo 6 de la ley, debemos señalar lo siguiente: El cumplimiento de un deber jurídico como el de colaborar con la justicia no se puede condicionar al pago de una recompensa o retribución. Este tipo de disposiciones obedecen a una concepción utilitarista (hago el bien por la retribución que recibo) que se impuso en nuestro país a comienzos de la década de los años 90, como una innovación en el sistema jurídico colombiano que no establecía ese tipo de recompensas, acorde con la tesis kantiana (hago el bien por el bien).</p> <p>SI DR. ALFREDO BELTRÁN SIERRA</p> <p>1ª. En la sentencia acabada de mencionar se declaró la constitucionalidad de la Ley 793 de 2002 “por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio”, en relación con el cargo formulado por no haberse sometido al trámite de una Ley Estatutaria, así como se declaró también la constitucionalidad de los artículos 1º, 2º, 3º, 21, 22 y 24 de la misma ley, en relación con los cargos formulados por el demandante, decisiones estas que comparto.</p> <p>2ª. En la misma sentencia la Corte declaró su inhibición para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 15 y 18 de la Ley 793 de 2002, decisiones que igualmente voté favorablemente.</p> <p>3ª. Con respecto a las demás normas demandadas de la Ley 793 de 2002 en este proceso, es decir sobre los capítulos II, III, IV y V salvo el voto.</p> <p>Como lo expresé en las sesiones de la Sala Plena en las cuales se estudió el proyecto que se convirtió en la Sentencia C-740 de 2003,</p>
--	--

	<p>la Ley 793 de 2002 fue expedida el 27 de diciembre de ese año, razón esta por la cual resulta aplicable para analizar su validez constitucional el acto legislativo No. 03 de 19 de diciembre de 2002, mediante el cual se reformó la Constitución Política en cuanto a las funciones de la Fiscalía General de la Nación, así como las funciones especiales del Fiscal General de la Nación y se dictaron normas de carácter transitorio.</p> <p>De acuerdo con la reforma constitucional introducida a la Carta Política por el acto legislativo No. 3 de 2002, la Fiscalía General de la Nación, aunque pertenece a la rama judicial en adelante cumple funciones de persecución del delito y de acusación en un proceso penal cuando los hechos que revistan características delictuales lleguen a su conocimiento ya sea por denuncia, petición especial, querrela de parte, o de cualquier otra manera para proceder de oficio, “cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo (acto legislativo No. 03 de 2002, artículo 2º, nuevo texto del artículo 250 de la Constitución Política)”.</p> <p>Precisamente en desarrollo de ese marco constitucional y para esa finalidad, el mismo artículo 250 de la Carta priva a la Fiscalía General de la Nación de las funciones jurisdiccionales de las que antes era titular, pues su función se limita a la de actuar como órgano acusador dentro del proceso penal.</p> <p>Por ello no podrá en adelante ordenar capturas para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, sino que ha de limitarse a formular al juez que ejerza las funciones de control de garantías, la solicitud pertinente para que sea éste quien adopte las medidas necesarias para que el imputado comparezca al proceso, así como aquellas pertinentes para la conservación de la prueba y la protección de la comunidad o de las víctimas.</p> <p>Del mismo modo el citado artículo 250 de la Carta, reformado por el acto legislativo No. 03 de 2002, sólo le permite a la Fiscalía General de la Nación “realizar excepcionalmente capturas”, pero en virtud de la ley, en la cual se habrán de fijar los límites y eventos en que ella proceda, con el control del juez de garantías que “habrá de pronunciarse sobre el particular dentro de las 36 horas siguientes”.</p> <p>Por la misma razón de actuar como acusador en el proceso penal, a la Fiscalía se le autoriza para adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones, pero sujeta al control de garantías por el juez, “a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al sólo efecto de determinar su validez”.</p>
--	---

	<p>Por idéntica razón el inciso 3º del artículo 250 de la Constitución, ya reformado por el acto legislativo No. 3 de 2002, dispone que la Fiscalía puede adoptar medidas pertinentes cuando se trate del aseguramiento de materiales probatorios para garantizar la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción, y agrega que, cuando se requiera de medidas adicionales para ese efecto que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse previamente autorización del juez que ejerza las funciones de control de garantías.</p> <p>Porque en adelante la Fiscalía General de la Nación cumple funciones acusadoras dentro del proceso penal, el numeral 4º del artículo 250 de la Carta, ya reformado, le impone la función de presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento; el numeral 5º la faculta para solicitar al juez de conocimiento la preclusión de investigaciones cuando no hubiere mérito para acusar, lo que significa que la Fiscalía General de la Nación no podrá entonces dictar resoluciones de preclusión; el numeral 6º la faculta para solicitar al juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, así como aquellas que dispongan el restablecimiento del derecho y la reparación integral a las víctimas.</p> <p>Lo anterior demuestra, claramente, que el acto legislativo No. 03 de 2002 introdujo una reforma de gran magnitud a la Fiscalía General de la Nación. Ella continúa perteneciendo a la rama judicial del Estado. Pero eso no significa que tenga las funciones jurisdiccionales, las que corresponden a los jueces. Sólo de manera excepcional y, en todo caso sometida al control judicial, puede ejercer aquellos actos jurisdiccionales específicamente previstos en el numeral 1º inciso 3º, en el numeral 2º y en el numeral 3º del citado artículo 250 de la Carta, conforme a la redacción que a ellos les imprimió el acto legislativo citado, que rige a partir de su publicación, es decir desde el 20 de diciembre de 2002, fecha esta en la cual fue publicado en el Diario Oficial.</p> <p>4ª. En virtud de lo expuesto anteriormente, para el suscrito magistrado resulta de claridad meridiana que si la acción de extinción de dominio conforme al artículo 4º de la Ley 793 de 2002 “es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial”; y si, además, “es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen,” la consecuencia ineludible no puede ser distinta a la de deducir que conforme a lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución, con la redacción que a él corresponde según el acto legislativo No. 03 de 2002, la Fiscalía General de la Nación carece, en absoluto, de competencia para darle iniciación a la acción de</p>
--	--

	<p>extinción de dominio, que es, según se vio de carácter patrimonial y jurisdiccional. Ello es así, por cuanto el artículo 250 de la Carta no le atribuye a la Fiscalía General de la Nación esa función.</p> <p>Por la misma razón carece la Fiscalía General de competencia para adelantar la que la ley denomina “fase inicial” del procedimiento, máxime si se tiene en cuenta que decretar medidas cautelares, por ejemplo, es función jurisdiccional.</p> <p>Así mismo, si la acción es de carácter patrimonial, jurisdiccional y real, no puede la Fiscalía General de la Nación proferir la llamada “resolución de sustanciación”, ni disponer el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos reales principales o accesorios, ni ordenar su fijación por edicto, ni decretar pruebas, ni surtir traslados para alegar de conclusión, ni tampoco tiene competencia para dictar “una resolución en la cual decidirá respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio”, pues como se advierte sin dificultad alguna todas las actuaciones a que se ha hecho referencia son propias de los jueces en ejercicio de funciones jurisdiccionales; y la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, reformado por el acto legislativo No. 03 de 2002 es un organismo del Estado creado con la finalidad de adelantar el ejercicio de la acción penal, para perseguir el delito y acusar a los presuntos responsables de hechos punibles ante los jueces competentes.</p> <p>5ª. De otro lado, si la competencia de la Fiscalía General de la Nación para iniciar la acción de extinción de dominio y realizar los actos procesales a que se refiere el numeral precedente se fundamenta, como finalmente lo hace la Sentencia C-740 de 28 de agosto de 2003, en que las causales señaladas en el artículo 2º de la Ley 793 de 2002 para declarar la extinción de dominio, se relacionan en definitiva con actos delictuales, entonces la sentencia resulta contradictoria. En efecto, en ella se afirma que la acción de extinción de dominio no es de carácter penal, sino patrimonial, real y jurisdiccional; que mediante ella se declara extinguido el derecho de propiedad y que, como consecuencia de ello, no se aplican las reglas propias del procedimiento penal, ni las garantías que en tal caso otorga la Constitución en procesos penales.</p> <p>No se entiende cómo para afirmar la competencia de la Fiscalía General de la Nación en la etapa instructiva del proceso de extinción de dominio, se asevera que las causales para declararla guardan estrecha relación con hechos punibles, y sin embargo, a renglón seguido, para no otorgar las garantías penales previstas en la Constitución, de manera simultánea se predica que la acción recae sobre el derecho de propiedad, que es de carácter real y patrimonial, razón por la cual nada tiene que ver con el proceso</p>
--	--



	<p>penal y, en consecuencia, se declara que no se vulnera el debido proceso.</p> <p>O la acción es penal con todas sus consecuencias de garantía procesal para aquél contra quien se ejerce, y en ese caso tendría competencia la Fiscalía General de la Nación para la instrucción del proceso; o la acción es civil y, en tal caso, la Fiscalía General de la Nación carece de competencia para actuar como instructora.</p> <p>No obstante semejante palmaria contradicción, en la Sentencia C-740 de 28 de agosto de 2003, se pasó por alto sobre ella para declarar que las normas contenidas en los capítulos II, III, IV y V de la Ley 793 de 2002, son constitucionales. Es decir, en la sentencia se afirma y se niega al mismo tiempo la naturaleza civil y autónoma de la acción de extinción de dominio, a la par que la ilicitud penal de las causales para declararla y, de esta manera, se arriba a la conclusión de la exequibilidad de las normas contenidas en los citados capítulos de la ley acusada como inconstitucional.</p> <p>Para el suscrito magistrado, no puede afirmarse, como se hace en la sentencia, que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 250 de la Carta Política, reformado por el acto legislativo No. 03 de 2002, la contradicción desaparece.</p> <p>6ª. En verdad, ese numeral 9º del artículo 250 de la Constitución establece que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde “cumplir las demás funciones que establezca la ley”. Pero es claro que la ley puede atribuirle otras funciones diferentes a las expresamente señaladas en el artículo 250 a la Fiscalía General de la Nación, pero siempre y cuando se relacionen con el ejercicio de la acción penal, la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, para acusar a los presuntos responsables ante los jueces competentes. De ello se ocupará, como es lógico la ley procesal penal, esto es el Código de Procedimiento Penal y las normas que lo complementen o modifiquen.</p> <p>Pero es absolutamente inadmisibles desde el punto de vista constitucional aceptar que la ley le puede asignar a la Fiscalía General de la Nación cualquier función, así ella le sea extraña a la finalidad para la cual fue creada esta institución. De aceptarlo así, habría igualmente que admitir como ajustado a la Constitución que, a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, se le asignaran funciones propias de la Contraloría General de la República, porque el artículo 235 numeral 7º de la Constitución autoriza que a la Corte Suprema de Justicia se le otorguen como función “las demás atribuciones que señale la ley”, lo que resultaría absurdo; de la misma manera, sería admisible que al Consejo de Estado se le</p>
--	---

	<p>atribuyeran funciones propias de la Procuraduría General de la Nación, alegando para ello que el artículo 237, numeral 6º de la Carta autoriza que entre otras atribuciones tenga el Consejo de Estado “las demás funciones que determine la ley”; o, con igual fundamento, podría entonces haberse atribuido cualquier función extraña a su finalidad constitucional al Consejo Superior de la Judicatura, bajo la errónea consideración según la cual el artículo 256 numeral 7º de la Constitución permite que entre sus atribuciones tenga “las demás que señale la ley”.</p> <p>Puestas así las cosas, sólo emerge como forzosa conclusión que todas las atribuciones asignadas por la Ley 793 de 2002 a la Fiscalía General de la Nación son abiertamente contrarias al artículo 250 de la Carta Política y, por consiguiente, violatorias de la garantía que al debido proceso tienen derecho los habitantes del territorio nacional, a tenor de lo preceptuado por el artículo 29 de la Constitución Política.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1096/03
Fecha de la sentencia	diecinueve (19) de noviembre de dos mil tres (2003).
Demandante	Julián Rivera Loaiza.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 14, 15 y 27 de la ley 333 de 1996 y contra los artículos 5, 9, 11, 12, 13 y 17 de la ley 793 de 2002.
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Decision	1. Estar a lo resuelto en sentencia C-740 de 2003, en la que la Corporación decidió declarar exequible el artículo 9 de la ley 793 de 2002.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que el artículo 9 de la ley 793 de 2002 vulnera los artículos 29 y 83 de la Constitución. Al respecto afirma:</p> <p>- Las presunciones contenidas en los artículos 29 y 83 de la Carta Política impiden que el Estado se desprenda de su función de</p>

	<p>demostrar la responsabilidad de una persona o su mala fe a través de normas como la acusada. Resulta paradójico que en el artículo 9 se disponga que la protección de los derechos de una persona se realice imponiéndole la carga de probar la legítima adquisición de los bienes que hacen parte de su patrimonio. Esto es un absurdo jurídico.</p> <p>- En virtud del artículo 83 superior, según lo registra la Corte, es al Estado a quien le corresponde a través de un proceso judicial, con las garantías propias del debido proceso, desvirtuar la buena fe de una persona y demostrar que la adquisición de los bienes que conforman su patrimonio se produjo en forma ilícita. Lo contrario, es decir, asignarle a la persona la carga de probar la licitud de sus bienes, es partir de la presunción de que éstos fueron adquiridos mediante alguna de las conductas ilícitas previstas en la ley. De este modo se invierte la carga de la prueba y se reforman a través de ley ordinaria los artículos 29 y 83 de la Constitución, pues, de una parte, no se puede estimar como debido proceso aquel procedimiento en que un particular es sometido a un desequilibrio de los extremos, ya que tendría que demostrar la lícita adquisición de bienes; y de otro, se desconoce que el artículo 83 se aplica a toda clase de actuaciones de los particulares ante el Estado, incluyendo las actuaciones de carácter judicial.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-150/03
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de febrero de dos mil tres (2003).
Demandante	Humberto de Jesús Longas Londoño
Demandado	Los numerales 2.6, 2.7 y 2.9 del artículo 2, el numeral 3.9. (parcial) del artículo 3, los numerales 6.3. (parcial) y 6.4. (parcial) del artículo 6, el parágrafo y el numeral 9.4. del artículo 9, el numeral 11.8 (parcial) del artículo 11, los numeral 14.10 (parcial) y 14.11 del artículo 14, el artículo 16 (parcial), el artículo 18 (parcial), el artículo 20 (parcial), el artículo 21, el artículo 23 (parcial), el artículo 28

	(parcial), el artículo 31 (parcial), el inciso segundo y los numerales 34.1 a 34.6. del artículo 34, el artículo 35 (parcial), el numeral 36.6 (parcial) del artículo 36, el artículo 37 (parcial), el numeral 39.4 (parcial) y el párrafo del artículo 39, los párrafos 1 y 2 del artículo 40, los numerales 44.1. (parcial), 44.2 (parcial) y 44.3 (parcial) del artículo 44, el artículo 45 (parcial), el artículo 48 (parcial), el artículo 52 (parcial), el artículo 66 (parcial), el numeral 67.1 (parcial) del artículo 67, el artículo 68 (parcial), el artículo 70 (parcial), el artículo 73, el artículo 74, el artículo 85 (parcial), el numeral 86.1. (parcial) del artículo 86, el inciso 1° (parcial), los numerales 87.1., 87.2. (parcial), 87.4., 87.7., 87.8. (parcial) y párrafos 1° y 2° del artículo 87, el inciso primero (parcial) y los numerales 88.1., 88.2. y 88.3. del artículo 88, el inciso primero y los numerales 89.1 (parcial), 89.2. (parcial), 89.4 (parcial) y 89.5 (parcial) del artículo 89, el inciso primero y los numerales 90.1 (parcial), 90.2. (parcial) y 90.3 (parcial) del artículo 90, el artículo 92, el artículo 94 (parcial), el inciso tercero del artículo 96, el artículo 98, el artículo 124, el artículo 125, el artículo 126, el artículo 127, el inciso tercero del artículo 128, el inciso tercero del numeral 133.26 del artículo 133, el párrafo del artículo 146, el artículo 160 (parcial), el numeral 162.2. (parcial) del artículo 162, el artículo 163 y el artículo 164 de la Ley 142 de 1994; el artículo 1° de la Ley 286 de 1996, el artículo 2° y el artículo 3° de la Ley 632 de 2000; y el párrafo del artículo 18, el artículo 19 y el artículo 23 de la Ley 689 de 2001.
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Decision	<p>Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-272 de 1998 que declaró EXEQUIBLE el artículo 68 de la Ley 141 de 1994.</p> <p>Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-066 de 1997 que declaró EXEQUIBLE la frase "En estos casos, y en los de otros contratos de las empresas, las comisiones de regulación podrán exigir, por vía general, que se celebren previa licitación pública, o por medio de otros procedimientos que estimulen la concurrencia de oferentes" del artículo 35, y los artículos 31 y 37 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-444 de 1998 que resolvió declarar EXEQUIBLES los literales c) y d) del numeral 74.3 del artículo 74 de la Ley 142 de 1.994.</p> <p>Cuarto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1162 de 2000 que declaró EXEQUIBLE el artículo el artículo 128 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>Quinto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-389 de 2002 que declaró EXEQUIBLES los numerales 1, 2 y 3 del artículo 88, el</p>

	<p>inciso 3° del artículo 96 y el artículo 125 de la Ley 141 de 1994.</p> <p>Sexto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-041 de 2003 que declaró EXEQUIBLE el numeral 90.2 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>Séptimo.- Por las razones expuestas en esta providencia, INHIBIRSE de pronunciarse respecto de las siguientes normas:</p> <p>a.- El numeral 3.9. (parcial) del artículo 3, los numerales 6.3. (parcial) y 6.4. (parcial) del artículo 6, el parágrafo del artículo 9, el numeral 11.8 (parcial) del artículo 11, el numeral 14.10 (parcial) del artículo 14, el artículo 16 (parcial), el artículo 18 (parcial), el artículo 20 (parcial), el artículo 21, el artículo 23 (parcial), el artículo 28 (parcial), el artículo 31 (parcial), el artículo 35 (parcial), el numeral 36.6 (parcial) del artículo 36, el artículo 37 (parcial), el numeral 39.4 (parcial) del artículo 39, los párrafos 1 y 2 del artículo 40, los numerales 44.1. (parcial), 44.2 (parcial) y 44.3 (parcial) del artículo 44, el artículo 45 (parcial), el artículo 48 (parcial), el artículo 52 (parcial), el artículo 66 (parcial), el numeral 67.1 (parcial) del artículo 67, el artículo 68 (parcial), el artículo 70 (parcial), el artículo 73, el artículo 74, el inciso primero (parcial), los numerales 85.1 (parcial), 85.2 (parcial), 85.3 (parcial), 85.5 (parcial) y los párrafos 1 y 2 del artículo 85 (parcial), el numeral 87.8. (parcial) del artículo 87, el inciso primero y los numerales 89.1 (parcial), 89.2. (parcial), 89.4 (parcial) y 89.5. (parcial) del artículo 89, el inciso primero y los numerales 90.2. (parcial) y 90.3 (parcial) inciso último del artículo 90, el artículo 92, el artículo 96 (parcial), el artículo 127, el inciso tercero del artículo 128, el numeral 133.26 (parcial) del artículo 133, el parágrafo del artículo 146, el artículo 160 (parcial), y el numeral 162.2. (parcial) del artículo 162 de la Ley 142 de 1994; el artículo 1° de la Ley 286 de 1996; el artículo 2° y el artículo 3° de la Ley 632 de 2000; y el artículo 23 de la Ley 689 de 2001, por el primer cargo que presenta el accionante.</p> <p>b.- Los numerales 2.7 y 2.9 del artículo 2°, el inciso segundo del parágrafo del artículo 39, los numeral 87.2 (parcial) y 87.8 (parcial) del artículo 87, los párrafos 1° y 2° del artículo 87, las expresiones mencionadas del artículo 89; el inciso segundo del artículo 90 al igual que el numeral 90.1 (parcial) y el numeral 90.2 (parcial) del mismo artículo; el artículo 163 y el artículo 164 todos de la Ley 142 de 1994, y el artículo 23 de la Ley 689 de 2001, por el segundo cargo que presenta el accionante.</p> <p>c.- La expresión "y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas" del inciso segundo, al igual que los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001, por el tercer cargo que presenta el accionante.</p>
--	---

	<p>Octavo.- Declarar EXEQUIBLES, únicamente en relación con los cargos analizados, el numeral 2.6 del artículo 2, el inciso segundo y los numerales 34.1 a 34.6. del artículo 34, el numeral primero (parcial) del artículo 86, el inciso 1° (parcial) el numeral 87.1., del artículo 87, el artículo 94 (parcial) y el artículo 98, todos de la Ley 142 de 1994.</p> <p>Noveno.- Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con los cargos analizados, el numeral 14.11 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, en el entendido de que la información debe ser enviada previamente a la comisión de regulación competente y que ésta debe garantizar oportunamente a los usuarios el derecho de participación directa y efectiva.</p> <p>Décimo.- Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con los cargos analizados, el numeral 87.4 del artículo 87 y el numeral 90.3 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>Décimo primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión "expansión", contenida en el numeral 87.4 del artículo 87 y en el numeral 90.3 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994 en el entendido de que al considerar los costos de expansión se incluirá un criterio expreso para hacer efectivo el principio de solidaridad y asegurar que los beneficiarios de la misma serán, de manera prioritaria, las personas de menores ingresos.</p> <p>Décimo segundo.- Declarar INEXEQUIBLE la primera frase del numeral 87.7 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 que dice: "Los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario".</p> <p>Décimo tercero.- Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la segunda frase del numeral 87.7 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>Décimo cuarto.- Declarar EXEQUIBLES, únicamente en relación con los cargos analizados, las siguientes normas en tanto que éstas no impiden la realización de un procedimiento administrativo que garantice que las organizaciones de usuarios que cumplan las condiciones constitucionales puedan participar de manera previa directa y efectiva en la adopción de la decisión de definición o modificación de la fórmula tarifaria, de tal forma que el numeral 124.2 del artículo 124 es EXEQUIBLE en el entendido de que la actuación también pueda ser iniciada a petición de los usuarios; el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 es EXEQUIBLE en el entendido de que el procedimiento excepcional para el cambio de las fórmulas tarifarias también pueda ser iniciado a petición de los usuarios; y el</p>
--	--

	<p>artículo 127 de la Ley 142 de 1994 es EXEQUIBLE en el entendido de que las comisiones de regulación también darán a conocer a los usuarios las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determinar las fórmulas del periodo siguiente.</p> <p>Décimo quinto.- Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con los cargos analizados, el parágrafo del artículo 130 de la Ley 142 adicionado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001 y el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001, en el entendido de que se respetarán los derechos de los usuarios, en los términos del apartado 5.2.3 de esta sentencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor fundamenta la demanda con base en tres cargos diferentes, cada uno de los cuales cubre varios artículos, a saber:</p> <p>1. El demandante solicita que se integre lo que él llama una "proposición jurídica completa para el mismo cargo [...]. Todas las normas demandadas corresponden a funciones de las Comisiones de Regulación" .</p> <p>Afirma que el numeral 3.9. (parcial) del artículo 3, los numerales 6.3. (parcial) y 6.4. (parcial) del artículo 6, el parágrafo del artículo 9, el numeral 11.8 (parcial) del artículo 11, el numeral 14.10 (parcial) del artículo 14, el artículo 16 (parcial), el artículo 18 (parcial), el artículo 20 (parcial), el artículo 21, el artículo 23 (parcial), el artículo 28 (parcial), el artículo 31 (parcial), el artículo 35 (parcial), el numeral 36.6 (parcial) del artículo 36, el artículo 37 (parcial), el numeral 39.4 (parcial) del artículo 39, los parágrafos 1 y 2 del artículo 40, los numerales 44.1. (parcial), 44.2 (parcial) y 44.3 (parcial) del artículo 44, el artículo 45 (parcial), el artículo 48 (parcial), el artículo 52 (parcial), el artículo 66 (parcial), el numeral 67.1 (parcial) del artículo 67, el artículo 68 (parcial), el artículo 70 (parcial), el artículo 73, el artículo 74, el inciso primero (parcial), los numerales 85.1 (parcial), 85.2 (parcial), 85.3 (parcial), 85.5 (parcial) y los parágrafos 1 y 2 del artículo 85 (parcial), el numeral 87.8. (parcial) del artículo 87, el inciso primero y los numerales 89.1 (parcial), 89.2. (parcial), 89.4 (parcial) y 89.5. (parcial) del artículo 89, el inciso primero y los numerales 90.2. (parcial) y 90.3 (parcial) del artículo 90, el artículo 92, el artículo 96 (parcial), el artículo 127, el inciso tercero del artículo 128, el numeral 133.26 (parcial) del artículo 133, el parágrafo del artículo 146, el artículo 160 (parcial), y el numeral 162.2. (parcial) del artículo 162 de la Ley 142 de 1994; el artículo 1° de la Ley 286 de 1996; el artículo 2° y el artículo 3° de la Ley 632 de 2000; y el artículo 23 de la Ley 689 de 2001, vulneran los artículos 6°, 115, 122, 124, 150 numerales 7 y 23, 189 numerales 14, 16, 17 y 22, 209, 211 y 370 de la Constitución porque</p>

	<p>contemplan una "indebida asignación por la Ley de las funciones del Presidente de la República a las Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos, e indebida regulación de las funciones y condiciones de la delegación" .</p> <p>En efecto, "[l]a Ley 142 de 1994, y sus modificaciones parciales, se preocupó, de entrada, en darle la primacía en el ejercicio de las funciones de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios a las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos relegando al Presidente de la República, en este aspecto, a un segundo plano" , lo cual se hace particularmente evidente en el inciso 2° del artículo 68 de esta ley.</p> <p>No obstante, en virtud de lo prescrito en el artículo 211 de la Constitución, es necesario que primero se señalen en la ley las funciones que el Presidente puede delegar y luego que se fijen las condiciones para que dichas funciones puedan ser delegadas.</p> <p>Así, la Ley 142 de 1994 "no señaló primeramente las funciones que el Presidente de la República podía delegar [... ni] fijó, debiendo hacerlo, las condiciones para que el Presidente de la República pudiera delegar en las Comisiones de Regulación" .</p> <p>De esta forma, hay una inexequibilidad por omisión toda vez que el legislador asignó directamente a la comisiones de regulación la función de señalar las políticas generales de administración y control de los servicios públicos en lugar de establecer las condiciones bajo las cuales dichas funciones podrían ser delegadas a tales comisiones por el Presidente de la República.</p> <p>Dice también que hay una vulneración directa a la Carta Política por parte de las demás normas acusadas. Ello obedece a que mientras que el artículo 370 de la Constitución radica "la titularidad de la función de señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios" en el Presidente de la República, los artículos acusados lo hacen, de manera directa, en las comisiones de regulación. La vulneración de los numerales 7 y 23 del artículo 150 y de los numerales 14, 16, 17 y 22 del artículo 189 de la Carta obedece a la misma razón.</p> <p>"En cuanto a los artículos 122 y 124 de la Constitución Política de Colombia –señala el actor–, la ley o el reglamento deben asignar las funciones de todo empleo público, y la responsabilidad de los servidores públicos debe ser determinada por la ley para hacerla efectiva. Pero la asignación de funciones y responsabilidad deben respetar el artículo 6° de la Constitución Política de Colombia en cuanto a que los servidores públicos son responsables por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Siendo privativa del</p>
--	---



	<p>Presidente de la República la función de señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, en virtud del artículo 370 de la Constitución Política de Colombia, las Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos sólo podían recibir por delegación estas funciones y responsabilidad del Presidente de la República, pero no podían recibirlas directamente de la ley como ocurrió con las normas demandadas de la Ley 142 de 1994 y de sus modificaciones parciales. La Ley 142 de 1994 y sus modificaciones se debieron limitar a la creación de las Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos, facultándolas a recibir por delegación las funciones y responsabilidades que el Presidente de la República, según la ley, trasladara de sus funciones constitucionales. Es decir, que las funciones de las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos se debían recibir y ejercer por delegación y no por asignación directa de la Ley, como ocurrió con las normas demandadas de la Ley 142 de 1994 y sus modificaciones parciales" .</p> <p>Por último señala que, "el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece como principio de la función administrativa la delegación, pero al no haberse cumplido efectivamente el artículo 211 de la misma, este principio se vio vulnerado por las normas demandadas de la Ley 142 de 1994 y sus modificaciones parciales" .</p> <p>2. El demandante solicita que se integre una "proposición jurídica completa para el mismo cargo [...]. Las normas demandadas se refieren a las reglas, fórmulas y régimen tarifario de los servicios públicos" .</p> <p>Sostiene que los numerales 2.6, 2.7 y 2.9 del artículo 2, el numeral 14.11 del artículo 14, el inciso segundo y los numerales 34.1 a 34.6. del artículo 34, el parágrafo del artículo 39 (parcial), el art. 86, 1 (parcial), el inciso 1° (parcial) y los numerales 87.1., 87.2. (parcial), 87.4., 87.7., 87.8. (parcial) y párrafos 1° y 2° del artículo 87, el inciso primero (parcial) y los numerales 88.1., 88.2. y 88.3. del artículo 88, el inciso primero y los numerales 89.1 (parcial), 89.2. (parcial), 89.4 (parcial) y 89.5 (parcial) del artículo 89, el inciso primero (parcial) y los numerales 90.1 (parcial), 90.2. (parcial) y 90.3 (parcial) del artículo 90, el artículo 92, el artículo 94 (parcial), el artículo 96 (parcial), el artículo 98, el artículo 124, el artículo 125, el artículo 126, el artículo 127, el artículo 163 y el artículo 164 de la Ley 142 de 1994; y el artículo 23 de la Ley 689 de 2001 contravienen los artículos 1°, 2°, 58, 333, 334, 365, 366 y 367 de la Constitución porque "[e]l Estado debe ejercer la intervención en la regulación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios por encima de la libertad económica [y porque] las tarifas de los servicios públicos no pueden incrementarse por encima del Índice de Precios al Consumidor IPC. Calidad de vida de los habitantes" .</p>
--	---

	<p>El actor considera que la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos (art. 2° de la Ley 142 de 1994), la posibilidad de determinar libremente las tarifas de los servicios aplicables a medianos y pequeños consumidores (art. 14.11. de la Ley 142 de 1994), la protección a la competencia y a la libertad económica (arts. 34 y 39 de la Ley 142 de 1994), la ponderación de las reglas que regulan el régimen tarifario (art. 86 de la Ley 142 de 1994), los principios con base en los cuales se fija dicho régimen (art. 87 de la Ley 142 de 1994) responde a la necesidad de proteger la libertad de empresa y de mercado y no los intereses públicos, lo cual vulnera el artículo 365 de la Constitución pues de esta forma el Estado se deshace de su obligación de intervenir en la prestación de los servicios públicos. Existe también una vulneración del Estado social de derecho porque bajo el régimen de libertad que contemplan las normas acusadas no se puede aplicar el principio de la solidaridad.</p> <p>En efecto, sostiene que "[l]a regulación de los servicios públicos domiciliarios se hizo en la ley con miras a proteger la libertad económica de las empresas por encima de los derechos de los usuarios. Se protegió con las normas demandadas los derechos de libertad de la actividad económica e iniciativa privada por encima del bien común y por encima de la función social de la empresa. Se protege el mercado, el capital, así sea necesario violentar los derechos colectivos" .</p> <p>Estima que las reglas relativas a la retribución de los accionistas (art. 87 de la Ley 142 de 1994), el régimen de regulación de las tarifas (art. 88 de la Ley 142 de 1994), los elementos que conforman las fórmulas tarifarias (art. 90 de la Ley 142 de 1994), los incentivos que se dan para una mayor productividad de las empresas (art. 92 de la Ley 142), la inclusión en la tarifa de costos tales como los de administración, operación y mantenimiento del servicio de agua potable, de niveles de pérdida aceptables, del costo de protección de las fuentes de agua, así los de recolección, transporte y disposición de desechos (arts. 163 y 164 de la Ley 142 de 1994, respectivamente) y los de reposición de los cilindros en la tarifa del gas licuado petróleo (art. 23 de la Ley 689 de 2001), se rigen por los criterios de eficiencia económica y rentabilidad del capital, y no según los principios del Estado social de derecho.</p> <p>Así pues, observa que "[l]os servicios públicos domiciliarios son servicios básicos, y no se puede garantizar el acceso efectivo a ellos, a través de tarifas a precios de mercado para proteger la libertad económica y de competencia. [...] No se puede menoscabar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de la población en aras de proteger la libertad</p>
--	---

	<p>económica, la libertad de empresa y la competencia. La solidaridad de las personas que integran la República de Colombia es un principio fundamental pregonado por el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia, y es un principio fundamental en la fijación del régimen tributario, como lo exige el artículo 367 de la misma Constitución. No es un principio fundamental el mercado en el régimen tarifario de los servicios públicos". Agrega que, en virtud del artículo 58 de la Constitución, los conflictos entre las necesidades públicas y los derechos de los particulares, deben resolverse a favor de las primeras.</p> <p>Sin embargo, cuando el Estado no sigue tales criterios, su actuar se aparta de la Constitución. "Tal es el caso de las normas demandadas: el Estado con una indebida intervención económica o con una mal entendida intervención económica estableció el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios protegiendo la libertad económica, la libertad de competencia, el mercado, los precios del mercado, los derechos individuales económicos de los accionistas, y desprotegiendo los derechos colectivos de los usuarios, desmejorando el bienestar general y la calidad de vida de la población [...]. El sacrificio de la intervención económica deben sufrirlo el Estado y los particulares que explotan los servicios públicos domiciliarios y no la población ni los habitantes del territorio nacional".</p> <p>Afirma que la aplicación de ese régimen tarifario genera que el incremento de los servicios públicos pueda ser superior al aumento del costo de vida, de manera que las tarifas de hacen inalcanzables para muchos usuarios, lo cual conduce a que, en la práctica, se imponga una carga a los usuarios más pobres.</p> <p>Considera que el procedimiento administrativo que describen los artículos 124 a 127 de la Ley 142 de 1994 "se rige por las reglas establecidas en los artículos 86, 87 y 88 de la Ley 142 de 1994; esto es, la eficiencia económica y la suficiencia financiera como postulados de libertad de mercado y libertad económica", en perjuicio de las necesidades de la población. En efecto, estima que "[n]o se trata de proteger sólo al inversionista, al mercado: se deben proteger los derechos colectivos de los usuarios de los servicios públicos". Considera así que los artículos 124 a 127 de la Ley 142 de 1994 contemplan un procedimiento para la fijación de las tarifas de los servicios públicos que responde a los intereses de las empresas y no a los derechos y a las necesidades de los usuarios.</p> <p>3. 1. El demandante solicita que se integre una "proposición jurídica completa por el mismo cargo [...]. Las normas demandadas se refieren a la suspensión del servicio a los usuarios de los servicios</p>
--	--

	<p>públicos domiciliarios" .</p> <p>Considera que el párrafo del artículo 18 y el artículo 19 de la Ley 689 de 2001 vulneran los artículos 13, 42, 44, 49, 52, 67, 334 y 365 y 366 de la Constitución porque "[l]a suspensión de los servicios públicos domiciliarios implica el desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de la población, en los términos de los artículos 334 y 366 de la Constitución Política de Colombia. Este deterioro de la calidad de vida implica necesariamente que no se satisfacen las necesidades de salud, educación, recreación, desmejorando los derechos de los menores, perdiéndose la garantía integral de la familia, y violándose el derecho a la igualdad. Es que los servicios públicos domiciliarios corresponden a la responsabilidad del Estado y son inherentes a la finalidad del Estado. La prestación de los servicios públicos domiciliarios no se puede mirar con la lupa de los servicios privados porque el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado" .</p> <p>Considera que la suspensión de los servicios públicos por falta de pago no es una medida que se ajuste a la Constitución "porque el sacrificio que ello conlleva para el usuario proviene de la violación de sus derechos fundamentales. Otras medidas para hacer efectivo el pago se encuentran en el derecho privado, de las cuales puede hacer uso la entidad prestadora de los servicios, pero no transgrediendo los derechos fundamentales de los usuarios, protegidos por la Constitución" .</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRES. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Y CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.</p> <p>En relación con la Sentencia C-150 de 25 de febrero de 2003, los suscritos magistrados nos vemos precisados a salvar parcialmente nuestro voto, en relación con lo resuelto sobre la inexequibilidad parcial del artículo 87.7 de la Ley 142 de 1994 declarada por la Corte, pues a nuestro juicio ha debido declararse la inexequibilidad total de la norma acabada de mencionar.</p> <p>Fundamos nuestro salvamento de voto en las consideraciones que a continuación se expresan:</p> <p>1ª. El artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece los “criterios para definir el régimen tarifario” de los servicios públicos, entre los cuales incluye los de “eficiencia económica y suficiencia financiera”.</p> <p>2ª. En el numeral 7º de dicho artículo 87, se señala que “los</p>

	<p>criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario. Si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberá tenerse en cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán teniendo en cuenta la suficiencia financiera”.</p> <p>3ª. Conforme al artículo 365 de la Constitución Política, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y es un deber de este “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.</p> <p>De manera que en un Estado Social de Derecho, como el que proclama el artículo 1º de la Constitución Política, la prestación de los servicios públicos no queda supeditada a la rentabilidad que ofrezca esa actividad a quien a ella se dedique. No es, en manera alguna, un negocio. Ni puede entenderse que la prestación de los servicios públicos ha de examinarse bajo ese criterio.</p> <p>Por expreso mandato de la Constitución, los servicios públicos deben asegurarse a todos los habitantes del territorio nacional, no solo por que así lo dispone el artículos 365 de la Carta, como ya se dijo, sino porque en el ordenamiento constitucional vigente el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, “son finalidades sociales del Estado”, conforme a lo dispuesto por el artículo 366 de la Constitución Política, norma esta que guarda estrecha relación con el artículo 2º del Estatuto Superior, en el cual se asigna, entre otros, como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar a todos la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, lo cual incluye, como es obvio la solución de necesidades básicas como la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable, es decir, lo que resulta indispensable para que el “bienestar general” a que alude el artículo 366 de la Constitución, es decir, “la prosperidad general” a que se refiere el artículo 2º de la Carta, no sean puramente ilusorios, ni se tornen en el bienestar de algunos o la prosperidad del menor número, sino que, por el contrario, se extienda cada vez a mayor cantidad de colombianos, mediante la prestación eficiente de los servicios públicos para ese efecto, hasta que ellos se presten a todos los habitantes del territorio patrio.</p> <p>De esta suerte, no es la eficiencia económica, ni la suficiencia financiera lo que ha de tener prioridad para definir el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos, sino un criterio de carácter social, que propenda por la extensión del servicio, y por su prestación oportuna, aunque para ello sea necesario que el Estado intervenga directamente en esa actividad de interés público, o que, llegado el caso, se asuma parcialmente el costo que demande esa</p>
--	--

	<p>prestación del servicio con cargo a los recursos públicos para que los sectores sociales de menores ingresos tengan derecho a tales servicios pagándolos en proporción a sus menguados recursos económicos.</p> <p>Lo anteriormente dicho, no significa, en manera alguna, que a las empresas prestadoras de servicios públicos se les obligue a desarrollar su actividad con detrimento patrimonial. No. Lo que ello quiere decir es que el Estado, en desarrollo del principio de solidaridad ha de idearse mecanismos que le permitan cubrir en todo el territorio nacional y para todos sus habitantes la necesidad que estos tienen de que les sean atendidos los servicios públicos como requisito para acceder al bienestar general. Por ello, si es del caso, por razones de interés social, podrá incluso el Estado, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 365 de la Constitución y mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara “reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos”.</p> <p>Así las cosas, la inexequibilidad del artículo 87, numeral 7º de la Ley 142 de 1994 no puede limitarse a la expresión “los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario”, como se declaró en el numeral décimo segundo de la Sentencia C-150 de 25 de febrero de 2003, sino que ha debido extenderse a todo lo preceptuado en ese numeral pues, lo que no se declaró contrario a la Constitución, es exactamente lo mismo que se declaró inconstitucional.</p> <p>En efecto, con lo resuelto en la sentencia queda en pie la expresión “si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera deberá tenerse en cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera”. Esto, en definitiva, conduce a lo mismo que se declaró inconstitucional. El régimen tarifario no debe tener en cuenta criterios de orden social sino la eficiencia en términos económicos y la suficiencia financiera. Dicho de otra manera el criterio social queda como subalterno del criterio económico. Las ganancias importan más que el hombre. Los servicios públicos no se prestan cuando no sean rentables. Quienes no los puedan pagar de manera que la empresa genere utilidades no tienen derecho a la satisfacción de la necesidad de los mismos. Y, como es evidente, ello se opone a la concepción del Estado Social de Derecho. Lo que la sentencia hizo fue intentar darle cabida a criterios contradictorios sobre una misma disposición y en el mismo fallo. Por eso salvamos nuestro voto.</p> <p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p>
--	--

	<p>Con el debido respeto me permito salvar el voto en relación con los numerales décimo y undécimo de la parte resolutive de la sentencia que declaro exequibles, dentro de las tarifas a los usuarios de servicios públicos, los costos y gastos de expansión de la prestación de los servicios públicos.</p> <p>1. El concepto de estado social de derecho, que es el que acoge para Colombia nuestra Constitución, se proyecta en un tipo de Estado que tiene unas características especiales, cuyo elementos podemos resumir así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Propiedad privada con función social y ecológica;</li> <li>b. Separación del poder político (legislativo, ejecutivo, judicial); separación del poder civil del religioso; separación del poder civil del poder militar y sepremacía del primero sobre el segundo; distribución territorial del poder (su máxima expresión es el Estado Federal).</li> <li>c. Un Estado fundado en la libertad y la igualdad (no sólo formal sino también material) de las personas;</li> <li>d. Un concepto especial de ley, donde la ley se hace con la intervención y consentimiento del gobernado y por eso es como dijera Rousseau, expresión de la voluntad general; siendo además la ley genérica, abstracta e impersonal.</li> <li>e. Toda la actividad administrativa se encuentra sometida a la ley; y</li> <li>f. La independencia de los jueces.</li> </ul> <p>Es además, el estado social de derecho un estado interventor que interviene a favor de los más débiles y que pone el acento en la igualdad de las personas, tratando de que se de una igualdad real y no meramente formal; que busca poner al alcance de las amplias masas no sólo una gran cantidad de bienes materiales, sino también espirituales o culturales (salud, educación, vivienda, recreación, arte, cultura para todos, etc.).</p> <p>La intervención del Estado en el terreno económico y social se ha proyectado fundamentalmente en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Redistribución de la riqueza buscando garantizar a todas las personas un ingreso mínimo.</li> <li>b. Realización del derecho a la vivienda y especialmente la construcción de vivienda para las amplias masas populares.</li> <li>c. Una organización del trabajo dirigida a tutelar los derechos de los trabajadores y mitigar su estado de inferioridad ente los patronos.</li> <li>d. Introducción de un sistema fiscal fundado en el principio del impuesto directo y progresivo.</li> <li>e. Protección de los trabajadores ancianos, mediante</li> </ul>
--	---

	<p>pensiones de jubilación para darles una seguridad después de la terminación de su vida laboral y para los trabajadores jóvenes seguros para el desempleo cuando cesan en su trabajo y mientras consiguen otra ocupación.</p> <p>f. La gestión económica tiene como fin el pleno empleo para garantizar a todas las personas un trabajo y en consecuencia una fuente de ingresos.</p> <p>g. Expansión constante de los servicios públicos de salud, educación, seguridad social, asistencia pública.</p> <p>De lo anterior se infiere que es obligación del estado social de derecho la expansión constante de los servicios públicos, hasta llegar a cubrir a todos los ciudadanos, para que los servicios sean en verdad universales (principio de la universalidad). En un sistema mixto como el nuestro, donde los particulares pueden prestar servicios públicos, y estos no quieren prestarlos o no pueden prestarlos, debe prestarlos el Estado; el Estado no puede eludir su obligación de prestar los servicios públicos a los ciudadanos y expandirlos donde no lo prestan los particulares y tiene el Estado que prestarlos aunque su prestación no constituya un gran “negocio” para él.</p> <p>Cuando una empresa privada prestadora de servicios públicos quiera expandirse o aumentar su negocio, debe hacer como hace todo empresario privado: guardar algo de sus utilidades ahorrándolas y acumulando capital para invertirlo en el nuevo ciclo económico; o los dueños del negocio aportan más capital u obtienen el capital de terceros (prestamos, emisiones de bonos, etc.). Lo que no puede esperar el empresario de servicios públicos es que el usuario del servicio le financie su expansión y no pueden las tarifas encarecerse, pagando más de lo que legalmente debe y un sobre costo que implica el pago de una tarifa mayor de la que le corresponde, lo que atenta contra el valor constitucional de la justicia. Las tarifas no deben incluir nunca ni un costo ni un gasto de expansión, ya que esto ha contribuido de manera notable a que todos los colombianos que no tienen para comer, estén trabajando única y exclusivamente para pagar las tarifas de los servicios públicos y financiando a los propietarios de las empresas de servicios públicos.</p> <p>No es cierto como lo afirma la sentencia, que se busca hacer efectivo el principio de solidaridad, ya que la solidaridad en materia de servicios públicos se hace entre usuarios para que los usuarios de mayores ingresos ayuden a los de menores ingresos; pero lo que no contempla la Constitución ni podría contemplarlo, es una solidaridad entre los usuarios, que son la parte débil de la relación jurídica y el dueño de la empresa que hace el negocio; ya que este último debe acudir como los demás empresarios privados a los</p>
--	--



	<p>mecanismos de financiación que antes señale u otros que ofrezca el mercado; pero lo que no puede hacer nunca es cobrar una tarifa mayor para expandirse.</p> <p>No es cierto como afirma la mayoría, que la única manera de expandir los servicios públicos es permitir que la tarifa incluya un sobre precio abusivo e ilegal que lleva a los trabajadores a trabajar sólo para pagar servicios públicos, ya que los empresarios de servicios públicos tienen otras formas de financiación a las que deben acudir y donde no quieran o no puedan llegar (aún por razones económicas) el Estado tiene el deber de prestar el servicio público, ya que es consustancial al estado social de derecho la expansión constante de la cobertura de los servicios públicos</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-206/03
Fecha de la sentencia	once (11) de marzo de dos mil tres (2003).
Demandante	Augusto Gutiérrez Arias
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la Ley 269 de 1996 “Por medio de la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público”.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Decision	Declararse INHIBIDA para fallar en el presente proceso, por demanda inepta.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El actor manifiesta que el inciso acusado viola el artículo 13 de la Constitución por cuanto dispone que la jornada de trabajo del personal que cumple funciones asistenciales en instituciones prestadoras del servicio de salud del sector público puede ser hasta de doce horas diarias sin exceder 66 semanales. Considera el demandante que ello constituye una discriminación frente a otros servidores públicos e incluso empleados del sector privado que desempeñan funciones iguales o similares y tienen jornadas considerablemente inferiores. Así, el sector privado se rige por las

	<p>disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, que estatuye que el máximo de horas de jornada laboral es de ocho diarias y 48 semanales. En el sector público nacional (artículo 33 del decreto 1042 de 1978) el horario de labor semanal máximo es de 44 horas. Por su parte, el Decreto - ley 85 de 1986, modificatorio de la norma precitada, establece un máximo de 48 horas semanales de trabajo y 8 diarias para el personal que presta sus servicios al Estado, por el sistema de turnos de manera discontinua e intermitente.</p> <p>De otro lado el actor acude a argumentos jurisprudenciales y cita la sentencia C-1063 de 2000 en la cual la Corte Constitucional declaró inexecutable una norma similar ya que establecía una discriminación al permitir máximos laborales distintos entre categorías de empleados. Por lo anterior, el demandante solicita que la Corte declare la inconstitucionalidad del inciso acusado ya que, en su opinión, establece un trato discriminatorio.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DRA. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ</p> <p>Respetuosamente discrepo de la decisión mayoritaria adoptada en el fallo de la referencia, pues considero que respecto del segmento impugnado del artículo 2° de la Ley 269 de 1996, la Corte no ha debido inhibirse por ineptitud sustantiva de la demanda sino, por el contrario, efectuar un pronunciamiento de fondo, ya que se encontraban satisfechos los presupuestos materiales para el ejercicio de la acción de inexecutable.</p> <p>La inhibición se fundamenta en que la supuesta infracción al artículo 13 de la Carta parte de una interpretación equivocada que el actor hace de la norma que se demanda, la cual no regula la jornada máxima laboral del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud, sino únicamente la de ese mismo personal que desempeña más de un empleo en entidades de derecho público.</p> <p>Si bien comparto en lo fundamental la interpretación que de la norma acusada hace la mayoría, en mi parecer el actor formuló adecuadamente su demanda por cuanto la norma efectivamente está consagrando una jornada máxima laboral del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud, aunque para la Corte dicha jornada únicamente sea aplicable para ese mismo personal que desempeñe más de un empleo en entidades públicas.</p> <p>Acepto que esta Corporación como Juez de la Carta en algunos casos deba previamente al examen de fondo entrar a fijar el</p>

	<p>alcance de las normas sujetas al control constitucional. Pero no estoy de acuerdo en que so pretexto de este ejercicio hermenéutico se llegue al extremo, como sucede en el presente caso, de adoptar una decisión inhibitoria argumentando que no existe proposición normativa sobre la cual fallar, porque el entendimiento que el actor tiene de la disposición impugnada no coincide con el que ha fijado la Corte.</p> <p>Pienso que en situaciones como la planteada lo procedente es adelantar el examen de fondo, pues de entrada se advierte que existe duda sobre el significado del precepto demandado. De hecho, así ha procedido la Corte en anteriores oportunidades, como por ejemplo en la Sentencia C-389 de 1996 donde antes de examinar la constitucionalidad de las expresiones acusadas del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, dijo:</p> <p>2- Según el actor, la expresión acusada viola el principio de igualdad, tanto en su consagración genérica (CP art. 13) como en su desarrollo específico en materia de familia (CP art. 43), pues consagra un .privilegio injustificado en favor de las personas que hubieren procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido, pues éstas podrían desplazar en la sustitución pensional a quienes demuestran una efectiva convivencia con el titular del derecho pensional. Esto, según su criterio, desnaturaliza la figura de la pensión de sobreviviente, que busca beneficiar a quien realmente convivía con el pensionado fallecido, y constituye por ende un privilegio irrazonable en favor de quienes hubieren procreado uno o más hijos con el causante. Por el contrario, la Vista Fiscal considera que la norma es exequible ya que la acusación del actor se funda en una inadecuada interpretación del alcance de la expresión impugnada. Según el Ministerio Público, la expresión demandada "salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido" no desprotege al cónyuge sobreviviente, pues no es un requisito adicional que le impone la ley sino que es una condición alternativa en relación con las exigencias ordinarias para acceder a la sustitución.</p> <p>“Como vemos, el problema a ser resuelto en este caso es si las exigencias establecidas por la ley para que el cónyuge o compañero supérstite accedan a la sustitución pensional violan la igualdad. Sin embargo, como existe una diferencia interpretativa entre el actor y el Ministerio Público sobre el alcance mismo de la expresión impugnada, debe la Corte comenzar por precisar el sentido de la disposición legal acusada. Esto no significa que esta Corporación esté limitando la autonomía funcional de los jueces ordinarios, que es a quienes compete la determinación del sentido de estas normas legales frente al caso concreto. Por ello, la Corte tiene bien establecido que no es a ella a quien compete, como regla general,</p>
--	--

	<p>establecer cual es el sentido autorizado de las normas legales pues la Constitución consagra una separación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria. Sin embargo, un proceso de control de constitucionalidad implica siempre un juicio relacional que busca determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales. Este juicio no es entonces posible si no se establece previamente el significado de la norma legal, por lo cual ningún tribunal constitucional puede entonces eludir la interpretación de las normas legales, lo cual provoca una constante interrelación de los asuntos legales y constitucionales . Entra entonces la Corte a determinar el alcance de la expresión impugnada”.</p> <p>Por lo anterior, estimo que en el presente caso la Corte habría podido realizar un examen de fondo partiendo de la interpretación hecha al artículo 2º de la Ley 269 de 1996 y teniendo en cuenta, además, que existía un cargo de constitucionalidad debidamente fundamentado y referido a la norma demandada.</p> <p>SI DR. ALFREDO BELTRÁN SIERRA</p> <p>Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, salvo mi voto en relación con la Sentencia C-206 de 11 de marzo de 2003, mediante la cual esta Corporación se declaró inhibida para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad incoada contra el segundo inciso del artículo 2º de la Ley 269 de 1996.</p> <p>En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, a los ciudadanos que demanden la declaración de inconstitucionalidad de una norma de rango legal, ha de exigírseles el señalamiento de las normas acusadas como constitucionales, su transcripción literal o el acompañamiento de un ejemplar de la publicación oficial de las mismas, la indicación de las normas constitucionales que se consideren infringidas y las razones por las cuales dichos textos constitucionales se estiman violados, los vicios de trámite en que se hubiere incurrido en la expedición de la ley cuando fuere el caso y la afirmación de las razones por las cuales es la Corte competente para conocer de la demanda respectiva.</p> <p>Conforme a lo expresado en el resumen de la demanda que aparece en la Sentencia C-206 de 11 marzo de 2003, el actor cumplió, efectivamente, con cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Así, de manera expresa indicó que demanda la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2º, inciso segundo de la Ley 269 de 1996; manifestó que considera que dicha norma quebranta el artículo 13 de la Constitución Política por establecer regímenes laborales de</p>
--	--

	<p>excepción al comparar las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto - Ley 85 de 1986, con la jornada excepcional que la Ley 269 de 1996 en la disposición acusada impone, a su juicio, a quienes cumplan funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicio de salud cuando desempeñen más de un empleo en entidades de derecho público.</p> <p>Ello era suficiente, entonces, para que la Corte decidiera de fondo sobre la demanda aludida, presentada, como es públicamente conocido, en ejercicio del derecho de controlar el poder político que a los ciudadanos confiere el artículo 40 de la Carta Política en armonía con el artículo 241 de la misma.</p> <p>La Corte, en la Sentencia de la cual respetuosamente discrepo, opta primero por señalar lo que denomina “alcance del inciso segundo del artículo 2º de la Ley 269 de 1996”, para señalar a continuación que como el demandante no se ajusta a ese criterio hermenéutico, la demanda adolece de ineptitud y, por consiguiente, en tal aseveración apoya la decisión inhibitoria.</p> <p>Una simple lectura de los razonamientos de la Corte en la motivación del fallo, indican que con la misma argumentación, en lugar de la inhibición habría podido dictarse un fallo de mérito. No se hizo así por la Corporación y por ello, salvo mi voto.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	tres (3) de junio de dos mil tres (2003).
Fecha de la sentencia	Sentencia C-452/03
Demandante	Humberto de Jesús Longas Londoño
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9º nl. 10 de la Ley 32 de 1979; 95 nls. 1 y 2 del Decreto 663 de 1993; 79.3 de la Ley 142 de 1994; 5º de la Ley 174 de 1994; 86 nl. 1 de la Ley 222 de 1995; 4º literales a), b), e), g), h) y l) (parciales) de la Ley 298 de 1996; 36 nl. 3 de la Ley 454 de 1998, y 38 de la Ley 510 de 1999.
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Decision	<p>Primero. Declarar exequibles, en lo demandado y en los términos de esta sentencia, los apartes los literales a), b), e), g), h) y l) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996.</p> <p>Segundo. Declarar exequibles, en lo demandado y en los términos de esta sentencia, los artículos 9º nl. 10 de la Ley 32 de 1979; 95 nls. 1 y 2 del Decreto 663 de 1993 y la subrogación efectuada por el artículo 38 de la Ley 510 de 1999; 79.3 de la Ley 142 de 1994; 5º de la Ley 174 de 1994; 86 nl. 1 de la Ley 222 de 1995 y 36 nl. 3 de la Ley 454 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante solicita a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de los apartes subrayados de las normas antes transcritas. Los cargos de inconstitucionalidad los formula en dos grupos que, en su criterio, integran proposiciones jurídicas completas.</p> <p>El primer grupo lo conforma con los artículos 9º nl 10 de la Ley 32 de 1979; 95 nls 1 y 2 del Decreto 663 de 1993; 79.3 de la Ley 142 de 1994; 5º de la Ley 174 de 1994; 86 nl 1 de la Ley 222 de 1995; 36 nl 3 de la Ley 454 de 1998 y 38 de la Ley 510 de 1999.</p> <p>En contra de estas normas propone el siguiente cargo de inconstitucionalidad: “Las normas demandadas le atribuyen la función de dictar, establecer, determinar, fijar y unificar las normas generales en materia contable a las Superintendencias de Valores, de Servicios Públicos Domiciliarios, Bancaria, de Sociedades, de Economía Solidaria y entidades de control, cuando tal función le corresponde constitucionalmente al Contador General de la Nación” . Es decir, “sólo el Contador General de la Nación, en virtud del artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, tiene la atribución de determinar las normas contables que deben regir en el país” . Por ello, infiere, las normas acusadas vulneran los artículos 4, 6, 113, 115, 121, 150 nl 7, 189 nls 22 y 24, y 354 de la Constitución Política.</p> <p>El segundo grupo lo integra con las expresiones “para todo el sector público”, “pública”, “del sector público”, “del sector público”, “por la Nación” y “del Estado” contenidas, respectivamente, en los literales a), b), e), g), h) y l) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996.</p> <p>Considera el actor que los preceptos demandados restringen la función atribuida constitucionalmente al Contador General de la Nación para determinar las normas contables que deben regir en el país (CP art. 354). La Ley no podía separarse de este principio constitucional y señalar que las normas de contabilidad se referirían</p>

	<p>única y exclusivamente al sector público, puesto que la Carta Política no sectoriza ni separa entre sector lo público y lo privado para efectos del cumplimiento a esta función. La Ley 298 deja de lado en su regulación al sector privado, sin considerar que el país es uno solo, compuesto por ambos sectores.</p> <p>Agrega que “Las normas de los diferentes literales demandados parcialmente del artículo 4º de la Ley 298 de 1996, son todas normas contables de aplicación tanto al sector público como al sector privado, y reúnen las políticas, principios y normas sobre la contabilidad, normas técnicas generales y específicas, sustantivas y procedimentales para unificar, centralizar y consolidar la contabilidad, el señalamiento y definición de los estados financieros e informes contables, anexos contables y notas explicativas de los estados financieros, la determinación de los libros de contabilidad que deben llevar las diferentes entidades y los documentos de soporte de ellos y las operaciones realizadas, la expedición de normas sobre contabilización de obligaciones contingentes, y la expedición de normas y procedimientos para elaborar, registrar y consolidar los inventarios de bienes. Todas estas normas contables están reguladas por el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, aplicables tanto al sector público como al sector privado, para los entes contables obligados a llevar contabilidad” .</p> <p>Por lo anterior, concluye, las normas acusadas vulneran los artículos 4, 151 nl 7, 189 nl 14 y 354 de la Constitución Política.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>La recta interpretación del artículo 354 de la Constitución, es que el Contador General dicta normas sobre la contabilidad pública e impone esas normas a las entidades públicas; sin embargo, no dicta normas sobre contabilidad privada ni puede imponerlas a los particulares.</p> <p>Distinta es la situación de organismos de control, vigilancia e inspección; por ejemplo, las Superintendencias quienes en desarrollo de esta función pueden imponer normas contables a los particulares vigilados o inspeccionados.</p> <p>Tema diverso es el de si el Contador General del Estado puede imponer normas de contabilidad a las Superintendencias, para que le rindan su contabilidad de una cierta manera; considero que sí,</p>

	pues siendo las Superintendencias personas jurídicas públicas están sometidas a las reglas contables que fije el Contador.
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-072/03
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de febrero de dos mil tres (2003).
Demandante	Nicolás Tirado T.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 33, parcial, de la Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Decision	Declarar EXEQUIBLE la expresión “ni suspensión” contenida en el artículo 33 de la Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones” por los cargos estudiados.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el actor que la norma demandada vulnera el principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución, lo mismo que los principios de solidaridad y eficiencia propios del sistema de seguridad social, de que trata el artículo 48 de la Carta, por las razones se resumen así :</p> <p>a) Se viola el artículo 13 de la Carta, porque si el fundamento de la Ley 361 de 1997 está constituido en materializar el principio de igualdad real, otorgando la protección especial que debe brindarse a las personas que tienen alguna limitación, y que por ello, deben gozar por parte del Estado de un tratamiento preferencial cuando se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, no resulta lógico que si estas personas ingresan al servicio público o privado continúen percibiendo el pago de la mesada pensional. Explica el demandante :</p> <p>“En este mismo sentido, lo que no resulta lógico desde el punto de vista constitucional es que este ingreso al servicio público o privado de una persona en las condiciones mencionadas, no implique la suspensión del pago de la mesada pensional, toda vez que tal ingreso significa que esta personal no se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, sino que, por el contrario, goza de las oportunidades laborales que se ofrecen en el mercado, en las mismas condiciones que cualquier otra persona que no tenga la calidad de limitado, de conformidad con lo establecido en la Ley 361 de 1997.</p>

	<p>De lo anterior se desprende entonces que esta protección especial no debe operar de manera automática en relación con las personas que tengan la calidad de limitado, sino que la misma es procedente en la medida en que estas personas se encuentren en situación de debilidad manifiesta, hipótesis que no se presenta cuando la persona limitada que ha obtenido su derecho pensional, obtiene un ingreso adicional como consecuencia de su relación laboral en el sector público o privado.” (fls. 2 y 3)</p> <p>Aclara el actor que la suspensión de la mesada laboral cuando se da esta circunstancia de la vinculación laboral, no afecta el derecho pensional reconocido constitucional y legalmente.</p> <p>Considera que de esta manera adquiere mucho más sentido el artículo 33 de la Ley 361 de 1997, si se lo interpreta de acuerdo con el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-531 de 2000, según el cual las personas con limitaciones gozan de una estabilidad laboral reforzada similar a la de las mujeres embarazadas, y sólo pueden ser desvinculados con la previa autorización de la autoridad del Ministerio de Trabajo. Así no obstante que a la persona limitada se le suspenda el pago de la mesada pensional por ingresar a la actividad laboral, está garantizada su estabilidad laboral reforzada.</p> <p>También hay una clara violación del principio de igualdad en la situación de las personas limitadas que gozan de pensión e ingresan al servicio público o privado, frente a las también limitadas que ingresan a laborar pero no tienen ningún derecho pensional a su favor, en quienes se justificaría la protección reforzada de la Ley. De la misma manera se crea una situación de privilegio entre quienes han obtenido una pensión de invalidez que no provenga del erario público frente a quienes la han obtenido del erario público. Para éstos últimos sí hay suspensión de la mesada.</p> <p>Observa que</p> <p>“[P]ara que una persona que se encuentre percibiendo una pensión de invalidez, ésta debió estar afiliada al Sistema de Seguridad Social, bien en el subsistema de Riesgos Profesionales o bien en el de Pensiones, los cuales pueden ser administrados tanto por entidades de carácter público como de carácter privado. No obstante lo anterior, en todo caso, tal como lo ha reconocido la Honorable Corte Constitucional en infinidad de sentencias, los recursos que manejan las entidades administradoras de estos Subsistemas son siempre de carácter público, por ello la aplicación práctica de la previsión que declarar incompatible esta pensión cuando proviene del erario público, cuando el salario proviene igualmente del esta fuente,</p>
--	--

	<p>resultará de muy difícil aplicación y dará lugar a múltiples procesos judiciales.” (fl. 5)</p> <p>Hace una mera mención del Decreto 583 de 1985, sobre los eventos de la reincorporación de un pensionado al servicio público.</p> <p>b) La violación del artículo 48 de la Carta, el actor la ubica en que si los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social son escasos, guarda concordancia con el principio de solidaridad contenido en la disposición en mención, que el pago de la pensión se suspenda cuando la persona limitada obtiene un salario producto del ingreso a la actividad laboral, salario que le permite satisfacer sus necesidades básicas, en forma digna.</p> <p>Señala que la utilización eficiente de los recursos y la universalidad propia del Sistema implica que tales recursos se destinen a la mayor parte de los eventuales beneficiarios, evitando gastos ajenos a las contingencias que se pretenden cubrir. Pone de presente que en sentencia C-617 de 2001, la Corte Constitucional se pronunció sobre el carácter de seguros de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, pronunciamiento que si bien se refiere a la pensión de sobreviviente, resulta pertinente, dado que el esquema es igual para ambas pensiones.</p> <p>En su concepto, la disposición, en lo acusado, desconoce, además, el carácter de mutable del estado de invalidez y de resarcitorio o indemnizatorio.</p> <p>A modo de conclusión, finaliza el actor su escrito así :</p> <p>“Pero si la persona ya se ha reincorporado a la fuerza laboral y se encuentra devengando un salario, se estarán utilizando las reservas de los Sistemas de pensiones y de Riesgos Profesionales para propósitos ajenos a los fines de la seguridad social, es decir no se utilizarían para reemplazar la capacidad económica de quien no puede obtener un salario porque su capacidad médica se lo impide, sino para procurar provecho económico adicional a quien si se encuentra laborando, en detrimento de quienes sí requieren tal soporte económico.” (fl. 10)</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-474/03
Fecha de la sentencia	diez (10) de junio de dos mil tres (2003).
Demandante	Bibiana Patricia Ortegón Amador
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9° (parcial) de la Ley 397 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Decision	<p>Primero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión acusada “que será reglamentado por el Gobierno Nacional” contenida en el inciso tercero del párrafo primero del artículo 9° de la Ley 397 de 1999.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada “éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas”, contenida en el inciso tercero del párrafo primero del artículo 9° de la Ley 397 de 1999, en el entendido de que el porcentaje a que tiene derecho el denunciante, no puede ser pagado, total o parcialmente, con las especies náufragas que integran el patrimonio arqueológico y cultural nacional.</p> <p>1.- Corregir el fundamento 12 de la sentencia C-474 de 2003 por cuanto no se trata de la ley 397 de 1999, es la ley 397 de 1997.</p> <p>2.- Corregir los dos numerales de la parte resolutive de la sentencia C-474 de 2003 pues no se trata de la ley 397 de 1999, es la ley 397 de 1997.</p> <p>3.- Corregir los fundamentos 1 y 4 del salvamento parcial de voto del Magistrado ponente - Eduardo Montealegre Lynett - a la sentencia C-474 de 2003, ya que no se trata de la ley 397 de 1999, es la ley 397 de 1997</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	La demandante considera que la expresión acusada viola los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución. Para la ciudadana, cuando el artículo acusado estipula que el denunciante del hallazgo de especies naufragas tiene derecho a un porcentaje de su valor bruto, desconoce que estas especies son parte del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, que son bienes culturales con protección Estatal, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Según su

	<p>parecer, el aparte acusado permite que estos bienes sean disponibles, pues faculta a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, autorizada previamente para la exploración y remoción del patrimonio cultural, a que denuncie el hallazgo, y si se produce el rescate de las especies náufragas, tenga derecho a un porcentaje del valor bruto de las mismas.</p> <p>Para la demandante, el Patrimonio Cultural de la Nación es parte de los bienes y valores culturales reflejo de la idiosincrasia e identidad de la sociedad colombiana. Por tanto, no puede crear ni satisfacer intereses particulares, pues su destinación es de carácter general y de beneficio común. Para la ciudadana, el aparte demandado no está enmarcado dentro del mandato constitucional del artículo 71, el cual establece el deber del Estado de crear incentivos y estímulos especiales para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia, la tecnología y las demás manifestaciones culturales, pues la ley parcialmente acusada no tiene como motivación el fomento o desarrollo cultural. La hipótesis establecida por la norma, es que, si con ocasión de una exploración y remoción del patrimonio cultural, son halladas y rescatadas especies naufragas, puede generarse el derecho a un porcentaje del valor bruto de éstas. Lo anterior viola los artículos 72 y 63 de la Carta, pues los bienes que pertenecen al Estado no son disponibles.</p> <p>La actora argumenta que el patrimonio cultural de la nación, al ser parte integral de los bienes del Estado, es testimonio de la identidad cultural de la Nación y tiene una especial destinación hacia la comunidad. Por tanto, según su parecer, permitir que las personas que denuncian un hallazgo y tengan derecho a un porcentaje respecto de las mismas es inconstitucional, pues desdibuja la especial destinación de interés social y cultural que tiene este patrimonio, ya que se estaría satisfaciendo y beneficiando intereses privados, violando el especial carácter de patrimonio cultural, inalienable, inembargable e imprescriptible, establecido por la Constitución Nacional en sus artículos 63 y 72.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. ALVARO TAFUR GALVIS</p> <p><i>En efecto considero que las expresiones “que será reglamentada por el Gobierno Nacional” contenidas en el inciso tercero del párrafo primero del artículo 9° de la Ley 397 de 1999 debieron ser declaradas exequibles, por cuanto su contenido no contraría la Constitución.</i></p> <p><i>La decisión mayoritaria, parte de la consideración según la cual la</i></p>

	<p><i>regulación específica del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación por cláusula general de competencia corresponde al Congreso. Sin embargo, también se afirma que “ello no significa que la ley deba regular detalladamente toda la materia pues la Carta no establece una estricta reserva legal, por consiguiente algunos aspectos de la regulación de esas actividades que no se han desarrollado directamente por la ley pueden entonces ser reglamentados por la autoridad administrativa y en especial por el Gobierno”.</i></p> <p><i>También se afirma que “lo que no puede el legislador es atribuir integralmente la reglamentación de la materia al Gobierno, pues el Congreso se estaría desprendiendo de una competencia que la Carta se ha atribuido. Por ello esta Corte ha señalado que el desarrollo de la potestad reglamentada por el Gobierno, exige que la ley haya previamente configurado una regulación básica o materialidad legislativa a partir de la cual el Gobierno puede ejercer la función de reglamentar la ley con miras a su debida aplicación que es de naturaleza administrativa y está entonces, sujeta a la ley. Y es que si el legislador no define esa materialidad legislativa estaría delegando en el Gobierno lo que la Constitución ha querido que no sea materia de reglamento sino de ley”. “Ahora bien en el presente caso la Corte constata que la expresión acusada atribuye al Gobierno la facultad de reglamentar la recompensa que tendrá derecho a recibir el denunciante, pero sin que la ley establezca unos criterios básicos o parámetros para que el Gobierno concrete el contenido y monto de esa recompensa. La ley señala únicamente que se tratará de un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas pero no precisa los criterios que el Gobierno deberá tener en cuenta para concretar ese porcentaje. La expresión acusada “que será reglamentada por el Gobierno Nacional termina entonces por transferir al ejecutivo la reglamentación integral del tema del contenido y monto de las recompensas con lo cual vulnera la cláusula general de competencia del Congreso y el sentido de la finalidad de la potestad reglamentaria gubernamental pues no existe ninguna materia legislativa sobre la cual puede recaer dicha potestad reglamentaria”.</i></p> <p><i>Al respecto se debe mencionar, que si bien es cierto, en el parágrafo del cual forma parte el segmento acusado no se dan bases para la fijación del porcentaje por parte del Gobierno Nacional, es también cierto, que esa disposición no puede interpretarse en forma aislada ni de las propias disposiciones de la Ley 397 de 1997, ni de las disposiciones del Código Civil que se refieren a la materia, y menos aún, sin tener en cuenta disposiciones de convenios y tratados que haya celebrado el Estado Colombiano en el marco de organizaciones internacionales de las que forman parte el Estado Colombiano.</i></p>
--	--

*En ese sentido, no es válida para el caso, la afirmación que se hace en la sentencia de la cual me separo, de que la Ley 397 de 1997 prácticamente delega en el Gobierno Nacional una regulación que corresponde por cláusula general al legislador. En efecto, la propia ley expresa, por ejemplo, que la participación a que tiene derecho quien haya denunciado la existencia de las especies náufragas o del patrimonio cultural sumergido, siempre y cuando se produzca el rescate en las coordenadas geográficas indicadas por él no puede consistir en las mismas especies náufragas, total o parcialmente, sino en su equivalente en dinero como bien se expresa en la sentencia al resolver sobre ese derecho que asiste al denunciante.*

*Por ello, en la propia ley que se reglamenta hay elementos que deben ser observados por el Gobierno, elementos que evidentemente constituyen materialidad legislativa que debe servir de fundamento y referente para la reglamentación por parte del Gobierno. Además, en este caso, no puede omitirse la circunstancia de que el Código Civil regula lo atinente a la gratificación por el salvamento de especies naufragas y dispone que la autoridad publica competente fijará dicha gratificación según las circunstancias y fija el monto máximo de esa gratificación. Esta disposición legal no solo constituye fundamento sino también límite que habría de tenerse en cuenta por el Gobierno al efectuar la reglamentación tomando la materialidad legislativa de manera sistemática.*

*En esas condiciones estimo que la disposición declarada inexecutable no solo no contrariaba la Constitución, sino que se hacía necesaria, toda vez que el legislador, habida cuenta de las características especiales de los objetos materia de la regulación, no puede prever todas las “circunstancias” de la aplicación del mandato del legislador y por ello aparece necesario que el Presidente de la República en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y para asegurar la cumplida ejecución de las leyes expida las disposiciones que den la concreción indispensable a los mandatos generales de extirpe legal.*

SI DR. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

1- Con el debido respeto por las decisiones de la Corte, el suscrito magistrado se permite salvar parcialmente el voto en la sentencia de la referencia. Considero que la Corte tuvo razón en declarar executable en forma condicionada la expresión acusada “éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas”, contenida en el inciso tercero del párrafo primero del artículo 9° de la Ley 397 de 1999. Sin embargo, me aparto de la decisión de declarar inexecutable la expresión “que será reglamentado por el

	<p>Gobierno Nacional” contenida en esa misma disposición.</p> <p>2- La sentencia argumenta que esa expresión es inconstitucional, por cuanto la definición de los incentivos para recuperar el patrimonio arqueológico y cultural de la Nación es un asunto que corresponde primariamente desarrollar al Legislador, y por ello la ley debía haber establecido los criterios básicos que orientan la concesión de esos incentivos. Según la Corte, como la ley no estableció dichos criterios, la expresión “que será reglamentado por el Gobierno Nacional” es inconstitucional, pues transfiere “al Ejecutivo la reglamentación integral del tema del contenido y monto de las recompensas, con lo cual vulnera la cláusula general de competencia del Congreso y el sentido de la finalidad de la potestad reglamentaria gubernamental, pues no existe ninguna materia legislativa sobre la que pueda recaer dicha potestad reglamentaria”.</p> <p>3- Como vemos, la inconstitucionalidad de esa expresión está construida de manera silogística. La premisa mayor es el mandato constitucional, según el cual, la ley debe definir los elementos básicos del régimen de incentivos que se pueden dar a los particulares para recuperar el patrimonio arqueológico sumergido, por lo que la ley no puede transferir integralmente esa reglamentación al Gobierno. La premisa menor es la afirmación de que el ordenamiento legal no establece esos elementos básicos. Y la conclusión es la inexequibilidad de la expresión “que será reglamentado por el Gobierno Nacional”. Comparto la premisa mayor de la argumentación de la sentencia, pero juzgo equivocada la premisa menor y la conclusión, por la sencilla razón de que considero que el ordenamiento legal prevé un régimen básico de incentivos para los particulares que recuperen el patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, y que por ende, bien podía la ley permitir que el Gobierno reglamentara el tema, obviamente dentro del respeto del régimen básico fijado por la ley.</p> <p>4- En mi opinión, el problema de la sentencia es que no interpreta el artículo 9° de la Ley 397 de 1999 en forma sistemática sino aislada, y por ello concluye que la ley no establece ningún régimen de incentivos en este campo. Y si ese artículo fuera la única norma del ordenamiento que regula esa materia, la conclusión sería acertada. Sin embargo eso no es así, pues el artículo 711 del Código Civil regula también los incentivos para el rescate de las especies náufragas y establece un criterio básico pero suficiente en este campo. Así, esa norma señala que la gratificación no podrá superar la mitad del valor de las especies, con lo cual establece un límite a la potestad reglamentaria del Gobierno.</p> <p>Por ello estimo que la expresión debió haber sido declarada</p>
--	---



	<p>exequible.</p> <p>SI DR. RODRIGO ESCOBAR GIL</p> <p>Con el acostumbrado respeto, manifiesto mi disentimiento parcial con la posición mayoritaria adoptada por la Corte en la Sentencia C-474 de 2003, únicamente en lo que hace referencia a la declaratoria de inexequibilidad de la frase <i>“que será reglamentado por el Gobierno Nacional”</i> contenida en el art. 9º de la Ley 397 de 1997, por las siguientes razones:</p> <p>El Presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del art. 189 de la Constitución, puede establecer el porcentaje del valor bruto de las especies náufragas a que tiene derecho el denunciante, lo que constituye el complemento del contenido normativo consagrado en la norma acusada, sin que ello suponga una extralimitación del desarrollo de esa potestad.</p> <p>Por consiguiente, la expresión no debió haber sido retirada del ordenamiento jurídico invocando la ausencia de los parámetros legislativos básicos para el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno, como quiera que en el art. 9º de la Ley 397 de 1997, en la Ley 80 de 1993 e incluso en el artículo 711 del Código Civil, se encuentran previstas las bases que permiten complementar la regulación del porcentaje del valor bruto de las especies náufragas que debe ser reconocido al denunciante.</p> <p>En efecto, la Ley 80 de 1993 que regula los contratos estatales, ofrece el marco suficiente para la regulación por la vía de la potestad reglamentaria de la remuneración a la que tiene derecho el denunciante de un patrimonio cultural sumergido. De ahí, que en la reglamentación que le corresponde al Presidente de la República del porcentaje a favor del denunciante, se le deben reconocer los costos en que haya incurrido para la prestación de sus servicios (arts. 4º num. 8 y 9, 5 num. 1º, 14 num. 1º, 27 y 28 entre otros de la Ley 80 de 1993), como también una utilidad razonable por la realización de esa actividad (art. 3º de la Ley 80 de 1993).</p> <p>Los anteriores parámetros básicos se complementan con el art. 711 del Código Civil aplicable por analogía, en el que se establece que la gratificación por salvamento de especies náufragas será fijada por la autoridad competente sin que supere la mitad del valor de las especies salvadas en cada caso.</p> <p>Por lo tanto, de conformidad con los argumentos anteriores, considero que la frase <i>“que será reglamentado por el Gobierno Nacional”</i> contenida en el art. 9º de la Ley 397 de 1997 debió haber sido declarada exequible, como quiera que el ordenamiento</p>
--	---

	<p>jurídico prevé el marco legislativo básico para el ejercicio de la potestad reglamentaria contenida en la disposición demandada. SI DR. MARCO GERARDO MONROY CABRA</p> <p>POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO-Sí existían parámetros legales que suponían la existencia de criterios jurídicos para enmarcar la actividad (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>Sí existían parámetros legales -consignados en normas de orden interno e internacional- que permitían suponer la existencia de criterios jurídicos suficientes para delimitar y enmarcar la actividad reglamentaria del Ejecutivo. En segundo término, considero que, incluso ante la ausencia de tales disposiciones, la expresión acusada no ha debido ser retirada del ordenamiento jurídico, sino, a lo sumo, condicionada en su exequibilidad.</i></p> <p>ESPECIES NAUFRAGAS-Monto de la recompensa no puede ser fijado a su arbitrio por la autoridad competente (Salvamento parcial de voto)</p> <p>ESPECIES NAUFRAGAS-Gratificación se fijará conforme a las reglas del Código Civil ante ausencia de regulación (Salvamento parcial de voto)</p> <p>CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR-Criterios generales para el tratamiento de hallazgos de patrimonio cultural sumergido (Salvamento parcial de voto)</p> <p>NORMA ACUSADA-Existencia de disposiciones suficientes para reglamentación gubernamental (Salvamento parcial de voto)</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-161/03
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de febrero de dos mil tres (2003).
Demandante	Germán Antonio Cepeda Vargas
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5, parcial, de la Ley 443 de 1998 “por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	<p>Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-506 de 1999, en relación con el literal a), del numeral 2° del artículo 5, de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Segundo: Declarar EXEQUIBLE el inciso 5° del numeral 2, literal b) del artículo 5, de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Tercero: Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 443 de 1998, por las razones expuestas en esta providencia.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano demandante considera que la disposición acusada vulnera los artículos 1, 4, 13, 25, 26, 53, 125 y 209 de la Constitución Política.</p> <p>Manifiesta el demandante que el artículo 125 superior como una forma de garantizar la seguridad jurídica y la claridad de derechos de todas las personas, en especial del derecho al trabajo, particularmente de quienes ejercen funciones públicas para el mejor desarrollo de los fines del Estado, ha establecido cómo se clasifican los servidores públicos y su forma de vinculación a los órganos y entidades del Estado, disponiendo para ello la carrera administrativa como una forma de garantizar la estabilidad e igualdad de los trabajadores, con las excepciones que contempla el mismo artículo superior citado y, dejando abierta la posibilidad de que la ley determine que otros cargos pueden ser excluidos de la regla general de carrera administrativa.</p> <p>Añade que con el fin de regular la carrera administrativa se expidió por el legislador la Ley 443 de 1998, estableciendo sus objetivos,</p>

	<p>principios rectores y campo de aplicación (arts. 1, 2 y 3 de la ley). Así mismo, el artículo 5 de la citada ley clasifica los empleos que quedan excluidos de la carrera, coincidiendo en sus numerales 1 y 2 con las excepciones que contempla la Carta Política.</p> <p>Sin embargo, expresa que la ley al hacer referencia a los empleos de libre nombramiento y remoción, hace relación a ciertos criterios que deben ser tenidos en cuenta para que un cargo pueda ser considerado de libre nombramiento y remoción, cuales son: que tengan que ver con la dirección y con la conducción y orientación institucional. Es decir, que no excluye de forma simple los cargos de libre nombramiento y remoción como lo hace la Constitución, sino que “hace una división de este tipo de cargos, según correspondan o no a determinados criterios excluyendo unos y manteniendo otros”, criterios que se refieren a empleos que su ejercicio implique la adopción de “políticas o directrices”, lo que a su juicio genera una diferenciación no contemplada en el artículo 125 de la Constitución.</p> <p>Por otra parte, expresa que la ley en el aparte demandado del artículo 5, numeral 2, literal b), excluye de carrera administrativa los cargos adscritos a las divisiones de inteligencia y comunicaciones en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en razón a la necesaria confianza <i>intuitu personae</i> de quienes lo ejercen, circunstancia que crea una discriminación que viola el derecho a la igualdad, al hacer una clasificación excluyente por el solo hecho de trabajar en una o en otra parte, sin que medie una razón justificada, desconociendo también el derecho a la estabilidad en el cargo y el ascenso en condiciones justas que predicen la Constitución y la Ley 443 de 1998 “respaldándose en el simple hecho de la confianza, que de por sí es elemento necesario para el ejercicio de un empleo en el Estado, por la calidad de los temas que en él se tratan”.</p> <p>Finalmente, manifiesta el accionante que el parágrafo 1° del artículo 5 de la ley demandada, continúa con la discriminación por el sólo hecho de prestar sus servicios en ciertas dependencias de una institución, sin que medie razón justificada.</p> <p>Por las razones que expone, solicita a la Corte Constitucional que los apartes del artículo 5, numeral 2, de la Ley 443 de 1998, sean declarados inexecutable.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-942/03
Fecha de la sentencia	quince (15) de octubre de dos mil tres (2003).
Demandante	Marcela Patricia Jiménez Arango
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6, 8, 9, 11, 16, 22, 23, 24, 39, parciales, de la Ley 443 de 1998 “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.”
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Decision	<p>Primero: Declarar exequible del inciso primero del artículo 6 de la Ley 443 de 1998 la expresión “superior”, bajo el entendido de que si esta expresión implica el ingreso a un cargo de nivel de mayor jerarquía, debe el empleado de carrera cumplir el procedimiento previsto en la ley para los ascensos, como se explicó en la parte motiva de esta sentencia.</p> <p>Segundo: Declarar exequibles las expresiones acusadas de los artículos 8, 9 y 11 de la Ley 443 de 1998, por los cargos estudiados.</p> <p>Tercero: Declarar inexecutable la expresión “sin que se le puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó al momento de tomar posesión de aquel cargo”, contenida en el artículo 16 de la Ley 443 de 1998.</p> <p>Cuarto: Declarar exequibles las expresiones acusadas del inciso segundo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998, por los cargos estudiados.</p> <p>Quinto: Declarar exequible el párrafo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998, por lo expuesto en esta providencia.</p> <p>Sexto: Declarar exequible la parte acusada del inciso segundo del artículo 23 de la Ley 443 de 1998, salvo la expresión “Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba;” que fue declarada exequible en la sentencia C-368 de 1999.</p> <p>Séptimo : Declarar exequibles las partes acusadas de los artículos 24 y 39 de la Ley 443 de 1998 por los cargos examinados, salvo la expresión “de la Rama Ejecutiva”, del numeral 1.4 del artículo 39,</p>

	que fue declarado exequible en la sentencia C-994 de 1999.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La demandante considera que las disposiciones acusadas son contrarias a la Constitución, en los artículos 125; el numeral 7 del artículo 40, el principio de igualdad, artículo 13; el preámbulo en cuanto busca un orden social justo, y, en algunos casos, se viola el principio de dignidad humana contenido en el artículo 1º y el derecho de defensa y debido proceso, artículo 29 de la Constitución. Las razones de la demanda de inexecuibilidad se resumen así:</p> <p>- <u>Cargos contra el numeral primero del artículo 6 de la Ley 443 de 1998</u>: para la actora al disponer esta norma que el empleado de carrera que desempeña un cargo que se declara de libre nombramiento y remoción, deba ser trasladado a otro cargo de carrera “superior” viola los artículos 125 y 40, numeral 7, de la Constitución, pues significa un nombramiento automático en carrera por ascenso y sin mediar concurso. Recuerda que la Corte en la sentencia C-266 de 2002, declaró inexecuibles el concurso cerrado y el ascenso automático.</p> <p>Esto impide que los ciudadanos que están por fuera de la carrera administrativa puedan ascender por concurso público de méritos.</p> <p>De otro lado, se viola el artículo 125, inciso primero, de la Constitución, al permitir que un servidor público de carrera continúe con los derechos de carrera en un cargo de libre nombramiento y remoción.</p> <p>Considera que al empleado de carrera que se le varíe la naturaleza del cargo a uno de libre nombramiento y remoción sólo tendrá derecho a la indemnización.</p> <p>- <u>Cargos contra el inciso 2º y la expresión del inciso 5 del artículo 8 de la Ley 443 de 1998</u>: la actora considera que la norma al establecer que mientras se surte el proceso de selección de un cargo de carrera vacante, se deba proveer el encargo con los empleados de carrera, quienes tendrán derecho preferencial, se está constituyendo un privilegio sin justificación, lo que infringe directamente el artículo 13 de la Carta. Señala que no habría tal vulneración de esta disposición si “en estos casos el encargo pudiese ser provisto por personas ajenas a la institución o al servicio público, inclusive que pueda ser provisto por persona que se encuentre en lista para elegibles para ese cargo o para cargos</p>

	<p>similares.” (fl. 22)</p> <p>- <u>Cargos contra el aparte del artículo 9 de la Ley 443 de 1998</u>: la actora considera que este aparte también consagra un privilegio a favor de los empleados de carrera que viola el principio de igualdad, pues frente a una separación temporal de un cargo, debería poderse nombrar a personas ajenas a la institución o que se encuentren en lista de elegibles. Además se viola el numeral 7 del artículo 40 de la Carta.</p> <p>- <u>Cargos contra el aparte acusado del artículo 11 de la Ley 443 de 1998</u>: para la demandante se establece igualmente un trato preferencial a favor de los empleados inscritos en carrera. Además, durante el tiempo que dure el cargo de carrera vacante y por 3 años no es posible proveerlo por el sistema de concurso, lo que vulnera los artículos 125 y 40, numeral 7, de la Carta.</p> <p>- <u>Cargos contra el aparte del artículo 16 de la Ley 443 de 1998</u>: según la actora el aparte demandado consagra un trato preferencial y odioso al disponer que no se puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó el empleado nombrado en provisionalidad, al momento de tomar posesión del cargo. Lo que quiere decir que unos concursantes tienen que presentarse con todos los requisitos exigidos para el cargo y, quien lo ocupó en provisionalidad, no está obligado a cumplirlos. Esto vulnera el principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta y es injusto.</p> <p>La actora trae el siguiente ejemplo para ilustrar este reproche: “piénsese en el caso para un cargo para el que no era necesaria la calidad de abogado, pero ahora la ley exige como condición previa que ese cargo sea provisto con una persona que sea abogado; entonces, según la norma demandada, quien está en provisionalidad puede concursar así no ostente la calidad de abogado, mientras que los demás sí están obligados a aportar y cumplir con dicho requisito.” (fl. 27)</p> <p>- <u>Cargos contra apartes del inciso 2º del artículo 22 de la Ley 443 de 1998</u>: señala la actora que los apartes acusados consagran ni más ni menos un artilugio y un sofisma de distracción en la convocatoria, en perjuicio de quienes concursaron para determinado cargo y, más aún, elimina la expectativa de quienes no se presentaron a concurso, tal como se puede deducir en el ejemplo que propone : si la convocatoria se hace para el cargo de escribiente (cargo de superior entidad), pero todavía no se convoca a concurso para notificador o citador, que es de menor entidad, resulta que de la lista de elegibles de escribiente se puede nombrar en propiedad en cargos de notificador. Es decir que “a pesar de no convocarse</p>
--	--



	<p>públicamente para el cargo de notificador o citador, sin embargo, las vacantes pueden proveerse total y absolutamente.” (fl. 29). Se violan, de esta manera, los artículos 125 y 40, numeral 7, de la Constitución, dado que los cargos se pueden proveer por personas que no concursaron para el respectivo cargo. Además, se vulnera el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta.</p> <p>- <u>Cargos contra el parágrafo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998</u>: la actora explica que este parágrafo al prever la exclusión o eliminación de una persona en el trámite de convocatoria por aspectos que quedan “reservados” a la institución, infringe el principio de la dignidad humana, artículo 1º, el derecho de defensa, artículo 29, la posibilidad de acceder a cargos públicos, artículo 40, numeral 7, y, obviamente, el artículo 125, pues el concurso ya no será público, sino privado y reservado.</p> <p>Además, la persona no puede controvertir las pruebas que contra ella se esgrimieron, lo que es inadmisibile en un Estado de derecho.</p> <p>- <u>Cargos contra el aparte del artículo 23 de la Ley 443 de 1998</u>: para la actora, esta disposición al establecer un trato preferencial y de privilegio a favor del servidor público inscrito en carrera está discriminando el derecho de los particulares o de quienes no ostenten la calidad de inscritos en carrera de acceder a la administración. Además, se privilegia al servidor al garantizársele que conserva los derechos de carrera en el cargo anterior, aunque hubiere aceptado y se hubiere posesionado en propiedad en un cargo superior. Es un privilegio odioso, que infringe el artículo 13 de la Constitución.</p> <p>Señala la actora que si una de las causales de retiro del servicio público, según el inciso 4 del artículo 125 de la Carta, es la calificación no satisfactoria, lo que procede es el retiro y que se permita el ingreso a los demás ciudadanos.</p> <p>De otra parte, considera la actora, que por 4 meses el servidor público está inscrito en 2 cargos de carrera administrativa, lo que es inaudito.</p> <p>- <u>Cargos contra el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 443 de 1998</u>: la demandante considera que la norma al contemplar la posibilidad de que las listas de concurso sean utilizadas para la provisión de empleos con funciones y requisitos generales o similares en la respectiva convocatoria, está estableciendo un sofisma de distracción, porque permite que se provean cargos que no se sometieron a concurso inicial. Estima que esta actuación es un acto de mala fe, que infringe el artículo 83 de la Constitución y se limita la expectativa de quienes no participaron en la</p>
--	--

	<p>convocación y tienen la posibilidad de concursar para cargos no convocados.</p> <p>Afirma la actora que el inciso tercero del artículo 24 permite la posibilidad de dualidad de convocatorias para un mismo cargo, lo que viola el principio de igualdad de oportunidades, artículo 13 de la Carta.</p> <p>- <u>Cargos contra apartes del artículo 39 de la Ley 443 de 1998</u>: la actora opina que si se suprime un cargo de carrera lo procedente es la indemnización y no la opción al servidor público cuyo cargo ha sido suprimido de ser incorporado a otro equivalente, pues, esta posibilidad no consulta el espíritu de la Carta, artículo 125, que consagra que la única forma de acceso a cargos públicos es mediante el concurso público y abierto de méritos.</p> <p>Considera que no se puede decir que de esta forma se respetan los derechos del servidor cuyo cargo fue suprimido, pues, en todo caso el servidor tendrá derecho a la indemnización correspondiente y la posibilidad de concursar en el nuevo cargo.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-837/03
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003).
Demandante	Marcela Patricia Jiménez Arango.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 15 parcial de la Ley 443 de 1998 “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
Conoció en primera instancia	Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Decision	Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 443 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En concepto de la demandante, la norma transcrita desconoce el preámbulo de la Constitución, los artículos 40 y 125 de la Carta, así como los principios de igualdad, razonabilidad y reserva legal.</p> <p>Para sustentar su demanda, la ciudadana cita la sentencia C-266 de abril 16 de 2002 de la Corte, en donde se declaró inexecutable la norma (decreto 262 de 2002) que consagraba una especie de concurso cerrado (fl5).</p> <p>Afirma que consagrar la modalidad del concurso cerrado únicamente circunscrito a funcionarios de carrera y según “el reglamento” de la entidad, contraria además el principio de igualdad de oportunidades, pues con tal norma se impide que ciudadanos que no están previamente vinculados en carrera administrativa puedan acceder a los “cargos públicos.”</p> <p>Explica que : “La discriminación y el trato desigual para aquellos que no ostenten la calidad de funcionarios <i>“de carrera”</i> no es razonable y por ende contraria la Carta Magna.</p> <p>Observa que:</p> <p>“Si el funcionario de carrera puede inscribirse en la modalidad de concurso abierto, no se ve razón alguna para que se discrimine a las personas ajenas a la carrera administrativa y limitarles las oportunidades en favor de aquellas que ya cuentan con vinculación</p>

	<p>laboral para efecto de convocatorias a concurso. La modalidad de concurso abierto consulta la justicia, la equidad y la razón y más tratándose de entidades estatales que por su misma naturaleza deben brindar amplias oportunidades a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, para acceder a los cargos de carrera (art 40 – 7 C.P.)”.</p> <p>“El artículo 125 de la Carta consagra como principio para acceder a la carrera el nombramiento por concurso público (incisos 1 y 2, art 125 C.P), y se exceptúan expresamente <i>“los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”</i>, es decir, que en modo alguno a través de <i>“un reglamento”</i> interno de la entidad de derecho público se puede indicar cuales cargos se pueden proveer a través del concurso público de méritos. Esa facultad está reservada a la Ley y no la tiene el director del órgano directivo de la entidad. Por tanto, pueden presentarse exámenes de ascenso para promover funcionarios ya vinculados a la entidad en un concurso abierto y que brinde iguales oportunidades a los vinculados y a los no vinculados, esto es un concurso mixto y, además, en los casos que determine la ley más no el reglamento interno de la entidad de derecho público”.</p> <p>Concluye considerando que la norma objeto de demanda permite que una misma persona por el solo hecho de estar inscrita en carrera administrativa presente dos veces un examen: el concurso de ascenso o cerrado y si lo pierde, el concurso abierto; entonces se desmejora por no brindar iguales oportunidades a quien no este vinculado laboralmente con una entidad oficial o de derecho público.</p> <p>Por ello, solicita a la Corte que se declare la inexequibilidad de los apartes acusados, aplicando los conceptos emitidos en la sentencia C-266 de 2002, <i>“pues donde hay una misma situación de hecho debe existir una misma situación de derecho”</i> (fl 12).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

## SENTENCIAS DE 2004

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-512 de 2004
<b>Fecha de la sentencia</b>	veinticinco (25) de mayo dos mil cuatro (2004).
<b>Demandante</b>	Camilo Hiroshi Emura Álvarez.
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34, 39, parcial, y 40, parcial, de la Ley 472 de 1998.
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA.
<b>Decision</b>	<p><b>PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO</b> en la sentencia C-459/04 con respecto a la exequibilidad de los artículos 39 y 40, inciso primero.</p> <p><b>SEGUNDO.- DECLARAR EXEQUIBLE</b> el aparte demandado del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 que consagra que <i>“Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.”</i></p>
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>En primer lugar, el actor señala que si bien en un comienzo, con su consagración en el Código Civil, las acciones populares eran civiles y tenían un tinte de derecho privado tendente a la satisfacción de intereses particulares, ahora estas acciones se clasifican dentro del grupo de las acciones públicas de raigambre constitucional que buscan la satisfacción del interés general. Por tanto, si bien dentro de un régimen de derecho privado tenía razón de ser el establecimiento de una recompensa, ésta no se justifica en el ámbito del derecho público.</p> <p>Al ser la acción popular vigente de naturaleza pública constitucional, debe enmarcarse en el principio de solidaridad. Indica el actor, que la solidaridad o deber de las personas de actuar en interés general no es compatible con la existencia de incentivos. Sin embargo, hoy en día el ciudadano que interpone una acción popular ya no lo hace con miras a satisfacer el interés general al evitar la vulneración de los derechos colectivos, sino</p>

	<p>buscando un buen negocio.</p> <p>Afirma el demandante que si bien se podría pensar que de no otorgarse el incentivo no se estaría reconociendo la labor del actor popular, esto no es cierto, toda vez que él, al pertenecer a la colectividad, se ve beneficiado como miembro de ésta con la protección de los derechos colectivos. Por otro lado, no se le causaría detrimento alguno a su patrimonio, pues en todo caso se le reconocen las expensas procesales, según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998.</p> <p>Como segundo cargo, el actor señala que el artículo 40 que regula los incentivos para las acciones públicas tendentes a proteger la moral administrativa es contrario al derecho a la igualdad, toda vez que si bien la recompensa en términos generales se reconoce a favor de los actores populares en un monto entre diez y ciento cincuenta salarios mínimos, el monto recibido por quien interponga la acción en beneficio de la moral administrativa es de 15% del valor que se recupere a favor de la entidad pública. Juzga el demandante que no existe razón suficiente para que exista un trato diferencial dentro del grupo de actores populares.</p> <p>Por último, el actor considera grave e ilógico que el artículo 40 obligue a pagar el incentivo del 15% mencionado a la entidad pública beneficiada con la recuperación de los dineros. Si tanto la entidad beneficiada como el actor tienen el interés de protección a la moralidad administrativa, el incentivo debe estar a cargo del demandado. Imponer el pago de tal dinero a la entidad pública es condenar al Estado y, consecuentemente, a la comunidad. Esto riñe con la naturaleza de la acción popular.</p> <p>En consecuencia, el actor solicita se declaren inexecutable los artículos demandados, en los apartes señalados.</p> <p>Dentro de la demanda se solicitó su acumulación con el expediente D-4910, puesto que los casos presentaban alta semejanza de normas acusadas y cargos. Tal solicitud fue negada mediante auto del veinticuatro (24) de noviembre de 2003, puesto que no se encuadraba en las posibilidades de acumulación</p>
--	--

	<b>expuestas en el artículo 47 del Acuerdo 05 de 1992.</b>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	Si Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	<p>Con el acostumbrado respeto, aclaro el sentido de mi voto con el fin de manifestar que voté de manera concurrente con la Sala, en la medida que existe cosa juzgada constitucional absoluta sobre los normas acusadas, debiendo estarse a lo resuelto en la sentencia C-459 de 2004.</p> <p>No obstante lo anterior, mantengo la posición que expresé en dicha ocasión, cuando sostuve que los incentivos económicos desconocen el valor de solidaridad como fundamento del Estado Social de Derecho y de la organización social (artículo 1º de la Constitución), el parámetro de conducta que deben observar los ciudadanos ante situaciones que pongan en peligro los derechos de la colectividad (artículos 95 numeral 2º de la Constitución) y el fin constitucional de las acciones populares que no es otro que la protección de los derechos e intereses colectivos que afecta, finalmente, al accionante como integrante de la comunidad (artículo 88 de la Constitución).</p> <p>Considero que la contraprestación obligatoria a la que <i>“tendrán derecho”</i> los actores de una acción popular aparece como una remuneración económica por el ejercicio de un deber impuesto constitucionalmente. Como consecuencia de ello, el ejercicio de estas acciones se convierte en un negocio lucrativo y oneroso, en el que el demandante actúa motivado por el ánimo de obtener una remuneración económica que satisfaga su interés privado y personal, y no por el propósito de prestar un servicio a la colectividad y de adecuar su comportamiento al deber constitucional de responder solidariamente ante la amenaza de derechos colectivos, con actuaciones que pretendan conjurar el peligro al que están expuestos los integrantes de la comunidad, y el actor mismo como parte de la colectividad.</p> <p>Por lo demás, me remito integralmente a los argumentos expresados en el salvamento de voto a la sentencia C-459 de 2004.</p>

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
--------------------------	---

Identificar la sentencia	C-459 de 2004
Fecha de la sentencia	once (11) de mayo de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Ramiro Bejarano.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 39 y 40 inciso 1º de la ley 472 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Decision	Declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículo 39 y 40 de la ley 472 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano RAMIRO BEJARANO GUZMÁN presentó demanda contra los artículos 39 y 40 inciso 1º de la ley 472 de 1998.</p> <p>Considera el demandante que los artículos 39 y 40 inciso 1º de la ley 472 de 1998 contravienen los artículos 1, 4, 13, 83 y 95 numerales 2, 5, 7, 8 y 9 de la Constitución. Sin embargo, el actor sólo formuló cargos en relación con los artículos 1 y 13, en los siguientes términos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con la consagración de las acciones populares en el plano constitucional se presentaron varios fenómenos, a saber: de una parte dejaron de ser acciones civiles para convertirse en acciones públicas; y de otra, su campo de acción se amplió en búsqueda de la protección de todos los derechos e intereses colectivos y no sólo el de unos pocos. Asimismo se extendió la legitimidad a cualquier persona para demandar, sin importar su interés particular. Por tanto, habiendo perdido la acción popular la condición de instrumento civilista para transformarse en una acción pública de estirpe constitucional, lo mismo debió haber ocurrido con el incentivo o recompensa fijado a favor del actor popular, el cual se justificaba en el Código de Andrés Bello, pero no en el régimen del Estado Social de Derecho adoptado en la Carta de 1991, apoyado entre otros principios, en el de la solidaridad de los ciudadanos con el bien común.</li> <li>- La circunstancia de que las acciones populares se hubiesen elevado a rango constitucional no fue simplemente un movimiento diseñado para maquillarlas, sino una decisión política que ha de generar consecuencias importantes, entre otras la de que el ejercicio de las mismas no tiene por qué ser premiado con incentivos o recompensas, porque tales dispositivos son propios del actuar ejercido al amparo de la normatividad privada.</li> <li>- Con la fijación del mencionado incentivo se contraviene la</li> </ul>



	<p>Constitución, ya que ésta ha dispuesto como principio la solidaridad de las personas que integran la Nación y su deber de buscar el interés general. Dicho incentivo desnaturaliza el verdadero sentido constitucional de la acción popular, convirtiéndola en un negocio de muchos particulares, que no la ven como una oportunidad para hacer un bien a la comunidad evitando la vulneración o amenaza de los derechos colectivos, sino como la oportunidad de enriquecerse. Lo cual está en contravía con los postulados de la Carta Política, conforme a los cuales el principio de solidaridad se desarrolla como aquel deber de conducta desinteresado, en el cual el ciudadano actúa en la búsqueda del beneficio general, olvidándose de sus intereses generales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El asunto, pues, no deja duda alguna. El actor popular que obtiene sentencia favorable en beneficio de la comunidad, reporta también provecho como miembro de esa colectividad con el fallo proferido, pero no puede aspirar a recompensas o incentivos por su gestión, porque ésta se ejecutó en cumplimiento del deber de solidaridad que ha de advertir con los fines del Estado. Además, en lo que tiene que ver con las expensas judiciales causadas en el proceso, éstas, en todo caso, le serán reembolsadas de obtener sentencia favorable. Es decir, el actor popular que vence en su litigio se beneficia como miembro de la comunidad, sin que pierda los costos asumidos en el litigio, que le son reembolsados por la contraparte condenada al pago de las costas.</li> <li>- De otra parte, los dispositivos demandados violan el derecho a la igualdad en virtud de la incongruencia que media entre los dos. En efecto, pues mientras en el artículo 39 se indica que en una acción popular el demandante tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales, en el artículo 40 se establece que en aquellas acciones populares que se generen por la violación al derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el 15% del valor que recupere la entidad pública en razón de esta acción. Con tal diferenciación se vulnera el derecho a la igualdad de las personas que actúan en ejercicio de la acción popular, pues no se justifica establecer diferencia alguna por virtud del derecho o interés colectivo que se considera quebrantado o amenazado, y finalmente protegido por una sentencia.</li> <li>- Adicionalmente, y aún más grave es que en el artículo 40 de la ley 471 de 1998 se obliga a pagar el incentivo a la entidad pública que sea beneficiada con las resultas de la acción popular; es decir, el ente estatal que participa del mismo interés del actor es quien debe en últimas recompensarlo por su gestión, lo que deviene ilógico, dado que quien debe recompensar al actor es la persona demandada, como quebrantadora o amenazadora de los derechos e intereses colectivos. Lo cual, indirectamente, implica condenar al Estado, y por ende a la comunidad.</li> <li>- Lo que recupere la entidad estatal como consecuencia de un fallo</li> </ul>
--	---

	de acción popular por violación a la moralidad administrativa ha de ser sólo para ella, y no para compartirlo en un 15% con el actor popular, pues por ese camino se termina gravando al erario a propósito de su protección, entronizando además una protuberante desigualdad entre los diferentes juicios de acción popular.
Tiene salvamento	Si Dr. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Resumen del mismo	<p>Con el acostumbrado respeto, manifiesto mi disenso con la posición mayoritaria adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia de la referencia que declaró exequibles los artículos 39 y 40 inciso 1º de la Ley 472 de 1998, pues considero que dichas disposiciones debieron ser retiradas del ordenamiento jurídico por las razones que expongo a continuación.</p> <p>El problema jurídico planteado por el accionante cuestiona si el reconocimiento de un derecho de contenido patrimonial y económico a favor del demandante de una acción popular, desconoce la solidaridad y la finalidad constitucional de las acciones populares. Para fundamentar mi oposición a la sentencia de la referencia, considero pertinente resaltar el significado jurídico que tiene en nuestro ordenamiento el valor de solidaridad, así como la finalidad perseguida con las acciones populares, para luego entrar a justificar la inconstitucionalidad de los incentivos económicos controvertidos.</p> <p>La solidaridad en la Constitución de 1991</p> <p>1.1. Como fue sustentado en la sentencia de la cual me aparto, el concepto genérico de solidaridad prohija diversos modelos éticos. Caracterizado antiguamente por partir del individuo mismo, con matices religiosos o propios de una ética laica, la noción de solidaridad ha evolucionado para orientarse actualmente hacia una concepción cívica de organización social.<sup>27</sup> Esta visión moderna comporta un significado de fraternidad y unión entre los hombres, de amistad y de hermandad, de ayuda mutua y de contribución a la colectividad según las capacidades y facultades de cada cual. Se caracteriza por el sentimiento de unidad hacia un mismo objetivo y por el hecho de asumir como propios los intereses de terceros y los intereses colectivos, pues las actuaciones consideradas solidarias actúan al servicio de la colectividad y del individuo como componente de la misma.</p>

---

<sup>27</sup> PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio, *Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General*, Universidad Carlos III, Madrid, 1999, p. 263-268.

	<p>Se tiene, entonces, que el egoísmo, el interés propio, el ánimo de lucro, el espíritu utilitarista y de provecho personal son la antítesis del concepto de solidaridad. Estas concepciones fundadas en el individualismo filosófico y el liberalismo económico, fueron el soporte del Estado Liberal de Derecho frente al cual se presentó una importante reacción política que supuso la transformación del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, modelo que se sustenta, entre otros valores, en la solidaridad.</p> <p>1.2. Y es en este punto en el que difiero de la posición mayoritaria de la Corte, pues a mi juicio, la solidaridad sí tiene un sentido jurídico en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que no se le considere como una virtud de perfeccionamiento individual privilegiada, sino de un valor superior cuyo significado ha sido desarrollado por esta misma Corporación.</p> <p>En efecto, el constituyente de 1991 adoptó la solidaridad como valor fundante del Estado Social de Derecho y de los derechos constitucionales consagrados en la Carta Política (artículo 1º Superior). Su inclusión no fue simbólica, pues como finalidad de la organización política y como deseo de la comunidad en un momento determinado de su historia, dicho valor ha de ser observado y respetado en el desarrollo de las actuaciones estatales y particulares.</p> <p>Así mismo, la solidaridad fue establecida como un deber de la persona y del ciudadano, quien debe responder con acciones humanitarias ante situaciones que representen peligro para la vida o la salud de los demás miembros de la sociedad (numeral 2 del artículo 95 Superior). La jurisprudencia constitucional ha interpretado esta disposición como la exigencia de realizar actuaciones positivas en favor de las personas que se encuentren en condiciones de inferioridad y frente a intereses colectivos que se consideren están siendo amenazados. La exigibilidad de este parámetro de conducta se funda en la pertenencia de toda persona a una comunidad, lo que lejos de una ética individualista, le impone a todos los miembros del cuerpo social el deber de poner sus esfuerzos al servicio de la colectividad y de sus integrantes.</p> <p>Esta misma Corporación ha señalado que la solidaridad es:</p> <p><i>“un deber impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo.”</i> (sentencia T-550 de 1994)<sup>28</sup></p>
--	---

<sup>28</sup> En este mismo sentido, T-434 de 2002.

	<p>Y es que a pesar de su textura abierta, no puede sostenerse que la solidaridad carece de un contenido jurídico en el ordenamiento colombiano. Esta Corporación ha identificado su alcance y su significado como: i) una regla de comportamiento del Estado y de los particulares frente a ciertas situaciones sociales; ii) un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares y iii) un criterio de integración del derecho.<sup>29</sup></p> <p>1.3. Por consiguiente, si bien es cierto que la solidaridad en nuestro ordenamiento no guarda relación con una virtud de perfección individual o la exigencia de un modelo ético privilegiado -como se sostiene en la sentencia de la que disiento- no puede desconocerse que, como valor y deber constitucional, tiene un contenido jurídico que irradia toda la organización política, que impone deberes al Estado y fija los parámetros de actuación de los particulares en tanto miembros de la colectividad.</p> <p>La finalidad de las acciones populares</p> <p>2.1. Las acciones populares previstas por el artículo 88 de la Constitución, y desarrolladas en la Ley 472 de 1998, buscan la protección de derechos de naturaleza colectiva, es decir, de derechos que se relacionan con el interés de un conjunto de personas que integran una comunidad. En esta medida, lo que pretende el demandante de una acción popular es detener la amenaza o el riesgo al que está expuesto un bien o interés colectivo, en razón de los fines públicos que lo inspiran.</p> <p>Esta Corporación se expresó sobre el carácter público de la acción popular, diciendo que:</p> <p><i>“supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad, pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea, la protección de su propio interés.”</i> (C-215 de 1999)</p> <p>2.2. No cabe duda, entonces, que la finalidad del actor de una acción popular es la obtención de una protección judicial a un interés colectivo que pertenece a toda la comunidad, y que a su vez afecta individualmente a todos los integrantes de la sociedad.</p>
--	---

---

<sup>29</sup> C-332 de 2001, C-1064 de 2001, T-1337 de 2001, T-149 de 2002, T-434 de 2002, T-667 de 2002, T-520 de 2003, T-469 de 2004, entre otras.

	<p>III. La inconstitucionalidad de los incentivos para quienes adelanten acciones populares</p> <p>3.1. Los artículos 39 y 40 inciso primero de la Ley 472 de 1998 controvertidos, consagran incentivos económicos a favor de los demandantes de las acciones populares. En efecto, dichas disposiciones señalan que el juez les reconocerá un incentivo contentivo entre diez y ciento cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes o el quince por ciento del valor recuperado en el proceso, cuantía que será consignada en el Fondo de Defensa de Intereses Colectivos en los eventos en que el demandante sea una entidad pública.</p> <p>3.2. A mi juicio, esta contraprestación obligatoria a la que <i>“tendrán derecho”</i> los actores de una acción popular aparece como una remuneración económica por el ejercicio de un deber impuesto constitucionalmente. Como consecuencia de ello, el ejercicio de estas acciones se convierte en un negocio lucrativo y oneroso, en el que el demandante actúa motivado por el ánimo de obtener una remuneración económica que satisfaga su interés privado y personal, y no por el propósito de prestar un servicio a la colectividad y de adecuar su comportamiento al deber constitucional de responder solidariamente ante la amenaza de derechos colectivos, con actuaciones que pretendan conjurar el peligro al que están expuestos los integrantes de la comunidad, y el actor mismo como parte de la colectividad. En este mismo sentido, enfatizo que el derecho a recibir una contraprestación económica por el hecho de solicitar la protección de un bien o un interés en cabeza de la comunidad, se opone a la benevolencia que subyace a la finalidad pública de la interposición de una acción popular.</p> <p>Atendiendo las consideraciones anteriores, considero que los incentivos económicos desconocen el valor de solidaridad como fundamento del Estado Social de Derecho y de la organización social (artículo 1º de la Constitución), el parámetro de conducta que deben observar los ciudadanos ante situaciones que pongan en peligro los derechos de la colectividad (artículos 95 numeral 2º de la Constitución) y el fin constitucional de las acciones populares que no es otro que la protección de los derechos e intereses colectivos que afecta, finalmente, al accionante como integrante de la comunidad (artículo 88 de la Constitución). Por ello, salvo mi voto con la convicción jurídica que los artículos 39 y 40 inciso primero de la Ley 472 de 1998 debieron ser declarados inexequibles por esta Corporación.</p>
Tiene aclaraciones	Si Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Resumen de las aclaraciones	<p>Con el acostumbrado respeto aclaro mí voto para resaltar los siguientes aspectos del margen de configuración que tiene el legislador en la materia objeto de este proceso.</p> <p>El margen de configuración del legislador para determinar el incentivo económico en las acciones populares comprende una gama de alternativas en lo atinente a los siguientes elementos: (i) el monto, (ii) la base para calcularlo, (iii) las condiciones para hacerse acreedor a dicho incentivo, (iv) la determinación del obligado a pagarlo.</p> <p>La Constitución no ordena que dicho incentivo siempre sea a cargo del demandado. Bien podría el legislador establecer que corresponde al Estado pagar dicho incentivo. Ello puede ser especialmente relevante (i) en caso de insolvencia del demandado y (ii) para asegurar que el demandante en realidad recibirá una suma básica suficiente para estimular la presentación de acciones populares.</p> <p>Adicionalmente, me aparto de los párrafos de la parte motiva que aluden a cuestiones éticas para advertir que la sentencia no acoge ningún modelo ético. Sin embargo, de la lectura del apartado cuarto sobre egoísmo, altruismo y benevolencia se deduce claramente que en ello se refleja una determinada postura ética que no se deriva de la Constitución ni se sustenta en ella. Estimo que las afirmaciones de este apartado requerirían un sustento mucho más cuidadoso para alcanzar a pasar por el rasero de las críticas justificadas de quienes se dedican a la filosofía moral.</p> <p>En mí opinión la Corte debe cuidarse de sustentar sus fallos en la visión ética de uno o varios de sus magistrados. Esta puede plasmarse en una aclaración de voto, si se estima relevante.</p> <p>Ahora bien, los argumentos de filosofía moral que sean incluidos en una sentencia para justificar lo resuelto con la voz de la institución han de estar referidos a conceptos constitucionales pertinentes para resolver los problemas jurídicos del caso, y no ser meros agregados para adornar una sentencia que, en realidad, no se embellece con un par de citas de filósofos, por respetables e influyentes que sean.</p>
-----------------------------	---

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-352/04

Fecha de la sentencia	Veinte (20) de abril de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Karin Irina Kuthfeldt Salazar.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 2° de la Ley 403 de 1997 y el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003.
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	<p>PRIMERO.- En relación con las expresiones “<i>y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de participación constitucionalmente autorizados</i>”, contenida en el artículo 2° de la Ley 403 de 1997, y “<i>o eventos de participación ciudadana directa</i>”, que hace parte del numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003, ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-041 de 2004, que las declaró INEXEQUIBLES.</p> <p>SEGUNDO.- En relación con la expresión “<i>buenos</i>”, que hace parte del numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003, ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-224 de 2004, que declaró inexecutable todo el texto del precepto citado.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>1. Normas constitucionales que se consideran infringidas</p> <p>Estima el actor que las disposición acusada es violatoria del Preámbulo y de los artículos 1°, 2°, 13°, 18°, 40°, 170°, 376°, 377° y 378° de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda.</p> <p>Según la actora, los mecanismos de participación directa no electorales representan una profundización de la democracia participativa y tienen una regulación constitucional y legal distinta, entre ellas, la condición de un mínimo de votación para su validez y el valor jurídico concreto de la abstención.</p> <p>Así mismo, señala que tratándose de mecanismos de participación directa diferentes a las elecciones, el Estado que incentiva la participación de los abstencionistas mediante los estímulos para los votantes, limita sin fundamento alguno la libertad de conciencia, pues aún cuando dichos estímulos no imponen una obligación jurídica de votar, sí rompen el equilibrio del libre juego democrático y hacen más atractiva una de las alternativas a la hora de decidir, es entonces cuando la persona deja de ser libre para tomar sus decisiones.</p>

	Advierte que la expresión “buenos ciudadanos”, implica una toma de posesión del Estado descalificando la inasistencia a los certámenes como conducta de un mal ciudadano. A su juicio, mal puede determinar una ley cuáles son los “buenos” ciudadanos, lo que presupone que quienes no cumplen con las condiciones determinadas para entrar a tal categoría serían “malos” ciudadanos. Destaca, que la condición de ser bueno o malo, la aplicación de valoraciones a las conductas de los ciudadanos es ajena a la lógica pluralista que sustenta el andamiaje jurídico.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-224/04
Fecha de la sentencia	ocho (8) de marzo de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Marcela Patricia Jiménez Arango.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003.
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	<p>PRIMERO -. En relación con la expresión “<i>o eventos de participación ciudadana directa</i>”, contenida en el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003, ESTESE a lo resuelto en la Sentencia C-041 del 27 de enero de 2004, que a su vez la declaró INEXEQUIBLE.</p> <p>SEGUNDO -. DECLARAR INEXEQUIBLE el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003, que señala:</p> <p><i>“6. Como una contribución a la formación de buenos ciudadanos, las universidades no oficiales podrán establecer, dentro de sus estrategias de mercadeo, un descuento en el valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado y postgrado que acrediten haber sufragado en las ultimas elecciones.</i></p> <p><i>Parágrafo. Las universidades que voluntariamente establezcan el descuento en la matrícula no podrán trasladar a los estudiantes el valor descontado ni imputarlo como costo adicional en los reajustes periódicos legalmente autorizados. El Gobierno otorgará reconocimientos especiales e incentivos a las universidades que den aplicación al estímulo electoral previsto en este numeral.”</i></p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA



Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La demandante considera que las expresiones acusadas vulneran el preámbulo y lo dispuesto en los artículos 1,2, 13 y 112 de la Constitución Política, por las razones que se explican a continuación.</p> <p>1. Fundamentos de la demanda</p> <p>Respecto de las dos expresiones sometidas a juicio -“<i>buenos</i>” y “<i>o eventos de participación ciudadana directa</i>”-, la demandante formula distintos cargos de inconstitucionalidad, claramente separables.</p> <p>1.1. En relación con la expresión “<i>buenos</i>”, considera que la misma viola los principios de dignidad humana e igualdad.</p> <p>A su juicio, se ofende la dignidad ya que calificar como “<i>buenos</i>” ciudadanos a los que participan en las elecciones, conlleva a que por oposición se consideren “<i>malos</i>” ciudadanos a todos aquellos que no participan con su voto. Con ello, el legislador ignora que el voto no es obligatorio en nuestro ordenamiento y que la abstención es una conducta legítima, la cual se puede deber precisamente a la búsqueda de objetivos cívicos personales que merecen respeto.</p> <p>Aduce que cuando la ley establece la diferencia entre buenos y malos ciudadanos, también discrimina negativamente al grupo de nacionales que por razón de sus creencias y formación política no votan. Sobre el particular, se reafirma en sostener que la “abstención es una forma de manifestación política que merece respeto y no el rechazo estigmatizante de la ley cuando califica al ciudadano abstencionista como ‘<i>malo</i>’”.</p> <p>Con apoyo en la doctrina, sostiene la demandante que el derecho no tiene como objetivo hacer al hombre bueno, pues no se utiliza como instrumento de moralización o de perfeccionamiento espiritual, sino como medio para llegar a la paz social.</p> <p>1.2. Respecto de la expresión “<i>o eventos de participación ciudadana directa</i>”, manifiesta que por su intermedio se desconoce el preámbulo y los artículos 2° y 112 de la Carta Política, los cuales promueven el pluralismo y las distintas formas de participación política.</p> <p>Según la demandante, el reconocimiento de estímulos educativos sólo para quienes acrediten haber sufragado en “<i>eventos de participación ciudadana directa</i>”, impide la manifestación legítima y pacífica de una forma de oposición política constitucionalmente reconocida como es el abstencionismo.</p>

	<p>Sostiene que para determinados mecanismos de participación como el referendo y la asamblea constituyente, “se requiere la efectiva participación ciudadana en un <i>mínimum</i> determinado para su validez”; es decir, la intervención de una determinada parte del censo electoral, lo cual demuestra que el hecho de que un grupo de personas se abstenga de sufragar es una forma de oposición activa, pues esa abstención tiene efectos jurídicos y constitucionales importantes que son los buscados por el ciudadano abstencionista.</p> <p>En ese sentido, la abstención es sin duda participación y, por lo tanto, no es justo que se estimule únicamente a quien sufrague en los eventos de participación democrática distintos de las elecciones, en perjuicio de aquel que no lo hizo, si finalmente ambos buscan ciertos efectos jurídicos y consecuencias constitucionales importantes.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>Por cuanto se hizo unidad normativa sin que estuvieran dadas las condiciones jurídicas para ello. No sobra recordar que la unidad normativa impide oír el criterio del Ministerio Público y de los ciudadanos, cuando lo optimo es que estos sean escuchados antes de adoptarse una decisión de constitucionalidad o de inconstitucionalidad sobre una norma jurídica. Lo más grave es que en este caso se hizo la unidad normativa sobre la base, no de un problema jurídico sino de aplicación práctica, y se hizo la integración sobre un argumento de aplicación pero no sobre un argumento de inconstitucionalidad. Mi posición sobre el estímulo al voto es clara: puede hacerse en todos aquellos casos donde la Constitución o la ley no exijan umbrales o quórum de participación.</p> <p>En relación con la parte motiva, no estoy de acuerdo con lo señalado en la página 17 de la sentencia al calificar el derecho al voto como un derecho prestacional, por las implicaciones que eso trae, pues podría no ser otorgado a ciertas categorías de personas.</p> <p>El derecho al voto es, por antonomasia, el ejemplo de derecho político y como tal un derecho fundamental.</p> <p>SI DR. RODRIGO ESCOBAR GIL</p> <p>1. Con el debido respeto hacia las decisiones adoptadas por la Sala Plena, procedo a explicar las razones que me llevaron a salvar el voto en el proceso de la referencia, precisando que mi disenso es parcial, circunscrito únicamente al hecho de haberse integrado oficiosamente la unidad normativa con la</p>

	<p>totalidad del numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003.</p> <p>2. Ciertamente, aun cuando en el presente caso actué como Magistrado Ponente, y en términos generales comparto la decisión de declarar inexecutable el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003, no estuve de acuerdo con la decisión parcial de haberse extendido el juicio de constitucionalidad a la totalidad del precepto en cuestión.</p> <p>3. Como tuve oportunidad de manifestarlo en el curso de los debates, no había lugar a integrar la unidad normativa con el resto de la norma parcialmente acusada, toda vez que no se cumplían los presupuestos que la jurisprudencia constitucional ha fijado para que, de manera excepcional y restrictiva, el juez constitucional pueda acudir a ese expediente. En efecto, conciente que el control constitucional de las leyes se activa -por regla general- a través del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, esta Corporación ha estimado que la posibilidad de adelantar un control oficioso, vinculando al proceso apartes normativos o preceptos no demandados, solo es admisible en los siguientes casos: (i) cuando se busque impedir que la decisión por tomar no resulte inocua; y (ii) cuando la disposición jurídica acusada se encuentre íntima e inescindiblemente ligada a fragmentos o textos no impugnados.</p> <p>4. Dando aplicación a tales criterios, se recuerda que a través del numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003, el Legislador se ocupó de regular un estímulo para los sufragantes, consistente en permitir que las universidades no oficiales establezcan, dentro de sus estrategias de mercadeo, un descuento en el valor de la matrícula a los estudiantes de pregrado y postgrado que acrediten haber votado en las últimas elecciones, aclarando en el mismo precepto que dicho estímulo se reconocerá <i>“Como una contribución a la formación de <u>buenos</u> ciudadanos”</i>. Respecto de dicha norma, el actor se limitó a cuestionar la expresión <i>“buenos”</i> al considerar que, por su intermedio, se estaba creando una odiosa diferencia entre buenos y malos ciudadanos, clasificando en este último grupo a quienes por razones políticas, ideológicas, filosóficas o religiosas deciden abstenerse y no participar en la elección.</p> <p>5. Una detenida lectura del precepto en cuestión y del cargo esgrimido en su contra, permite arribar a la conclusión que, para efectos del juicio de inconstitucionalidad planteado, la norma distingue claramente entre el propósito que inspira el estímulo, esto es, contribuir a la formación de <u>buenos</u> ciudadanos, y el estímulo propiamente dicho, consistente en la posibilidad de que las universidades privadas puedan reconocer descuentos en el valor de la matrícula para los alumnos sufragantes. En ese orden, el análisis sobre la existencia de una discriminación por calificarse de <u>buenos</u> ciudadanos solo a quienes participan activamente en una</p>
--	--

	<p>elección, sin duda ninguna compromete el referido propósito, pero en ningún caso el contenido del precitado estímulo, toda vez que dicha acusación no se dirige contra este último ni es predicable de su texto el cual goza de sentido propio.</p> <p>6. Que se cuestione el adjetivo calificativo “<i>buenos</i>”, por odioso y discriminatorio, en nada afecta los términos en que fue concebido el estímulo que lo precede. De hecho, el retiro de tal expresión sólo trae como consecuencia que el incentivo electoral previsto en la norma se conceda, ya no como una contribución a la formación de “<i>buenos</i>” ciudadanos, sino como una contribución a la formación de ciudadanos.</p> <p>7. De este modo, a partir del cargo que había sido formulado en su contra, la expresión “<i>buenos</i>” conformaba por sí misma una proposición jurídica completa, de manera que no existía razón para ampliar el juicio de inconstitucionalidad al resto de la disposición parcialmente acusada, respecto de la cual no se formulo cargo alguno. Para el suscrito, el hecho de que se hubiera procedido a declarar inexecutable únicamente la citada expresión, como en efecto se propuso en la ponencia inicial, no le restaba eficacia a la decisión ni tampoco comprometía el verdadero sentido y alcance de la norma a la cual pertenecía, ya que, tanto el aparte inicialmente acusado como el resto de la disposición, gozaban cada uno de contenido propio, autónomo y claramente separable.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-041/04
Fecha de la sentencia	veintisiete (27) de enero de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Marcela Patricia Jiménez Arango
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º (parcial) de la Ley 403 de 1997 <i>"por la cual se establecen estímulos para los sufragantes"</i> y el artículo 216 del Decreto 262 de 2000 <i>"por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría"</i>

	<i>General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos".</i>
Conoció en primera instancia	Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Decision	<p>Primero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "<i>y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de participación constitucionalmente autorizados</i>", contenida en el artículo segundo de la Ley 403 de 1997.</p> <p>Segundo. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "<i>o del día en que deba realizarse un evento de participación ciudadana de carácter nacional o territorial</i>", contenida en el artículo sexto de la Ley 403 de 1997.</p> <p>Tercero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "<i>o eventos de participación ciudadana directa</i>", contenida en el artículo segundo de la Ley 403 de 1997.</p> <p>Cuarto. Declara EXEQUIBLE la expresión "<i>y si el empate persiste, en quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones públicas inmediatamente anteriores</i>", contenida en el quinto inciso del artículo 216 del Decreto 262 de 2000, en el entendido de que dicho estímulo sólo rige cuando se vota para elegir gobernantes.</p> <p>Quinto. Declarar EXEQUIBLE la expresión "<i>si no se puede dirimir el empate, el nominador escogerá discrecionalmente</i>", contenida en el quinto inciso del artículo 216 del Decreto 262 de 2000.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Para la actora, las expresiones demandadas, en cuanto establecen estímulos a quienes hayan sufragado en los eventos relacionados con los mecanismos de participación ciudadana, son contrarias al preámbulo y a los artículos 2º, 13, 29 y 112 de la Constitución Política.</p> <p>Explica que el aparte demandado del Decreto 262 de 2000 establece un deber de participar en las elecciones para poder tener derecho a que, a favor del sufragante, se dirima el empate en caso de concursos públicos de méritos; en tanto que la expresión acusada del artículo 2º de la Ley 403 de 1997 consagra estímulos para quienes ejerzan el derecho al voto en forma legítima en las elecciones y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de participación constitucionalmente autorizados.</p> <p>Partiendo de lo anterior, señala que si bien las normas pretenden incentivar la participación ciudadana, establecer estímulos para quienes sufraguen con ocasión de la convocatoria a un mecanismo</p>

	<p>de esta naturaleza, distintos a las elecciones de quienes aspiran a ocupar un cargo público, es contrario a la Constitución.</p> <p>Lo anterior, por cuanto existen ciertos de los mencionados mecanismos, tales como la convocatoria a una asamblea constituyente y a un referendo, para cuya validez se requiere alcanzar una determinada porcentaje del censo electoral. Así, el artículo 376 Superior dispone para la convocatoria a Asamblea Constituyente la aprobación de por lo menos <i>"una tercera parte de los integrantes del censo electoral"</i>; el artículo 377 constitucional, en relación con el referendo derogatorio, establece como requisito el voto negativo de la mayoría <i>"siempre que en la votación hubiere participado cuando menos la cuarta parte del censo electoral"</i>; y, el artículo 378 Superior, respecto al referendo aprobatorio, exige además del voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, <i>"que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral"</i>.</p> <p>A su juicio, para los casos enunciados, a diferencia de las elecciones de los alcaldes, gobernadores, miembros del Congreso y demás corporaciones públicas, la abstención es activa, toda vez que produce efectos jurídicos. En este sentido explica que el ciudadano puede abstenerse de participar con el fin de que no se cumpla el mínimo de sufragantes indicado.</p> <p>Así las cosas, considera que no responde al orden justo y al valor justicia, que pregonan tanto el preámbulo como el artículo 2º de la Constitución, que se estimule a quien participe en dichas actividades democráticas en perjuicio de aquel que no lo hace, sólo con el fin de que no se logre la cuota parte mínima como presupuesto de validez de la elección que contempla la misma Carta.</p> <p>De otra parte, aduce que tanto los estímulos como la causal para dirimir empates en los concursos públicos de la Procuraduría vulnera el derecho de oposición contenido en el artículo 112 de la Constitución Política, pues para el caso de los mecanismos de participación referenciados se puede ejercer oposición mediante actos de abstención. Afirmar que no es garantía constitucional que se castigue tal comportamiento en esas elecciones cuando se impide al abstencionista acogerse a los beneficios legales ( Ley 403/97 ) como tampoco es estímulo que en casos de empate en concursos públicos de mérito se prefiera a quien sufragó en esos otros mecanismos de participación ciudadana ( Dto. 262 de 2000).</p> <p>En su sentir, tal diferenciación <i>"discrimina al no elector, en perjuicio de aquél que si lo hizo"</i>, lo que constituye una vulneración al principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.</p> <p>Así mismo, manifiesta que el artículo 216 del Decreto 262 de 2000, al permitir que el Procurador General, a su discreción, decida en casos de empate, es inconstitucional. A su parecer, si bien es cierto que se debe dirimir el empate entre las personas que obtienen</p>
--	--

	<p>igual puntaje, el mecanismo no puede ser la discrecionalidad, pues se infringen las reglas objetivas de acceso al servicio público ( art. 125 C.P. ), los principios mínimos de contradicción ( art. 29 C.P. ) y el valor justicia propio de un Estado social y democrático de Derecho.</p> <p>Por todo lo anterior, solicita se declare la inexecutable de las expresiones demandadas de los artículos 2º de la Ley 403 de 1997 y 216 del Decreto 262 de 2000.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>ACTO ELECTORAL-Quórum (Aclaración de voto)</p> <p>ACTO ELECTORAL-No estímulo de votantes cuando se exigen umbrales o quórum de participación (Aclaración de voto)</p> <p><i>En todos los casos en que se exigen umbrales o quórum de participación, entendido este último, como la cantidad mínima de electores que deben emitir su voto necesariamente (participación electoral), para que el proceso electoral llevado a cabo pueda ser considerado como válido; nunca se puede estimular a los votantes. A contrario sensu, cuando el constituyente o el legislador no establecen umbrales o más exactamente quórum de participaciones, si se puede estimular el voto.</i></p> <p>SI DRES. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Y JAIME CORDOBA TRIVIÑO</p> <p>MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA-Legislator hacia el futuro puede prever estímulos adecuados a cada mecanismo (Aclaración de voto)</p> <p>ABSTENCION EN ELECCIONES DE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA-No carece de eficacia jurídica (Aclaración de voto)</p> <p>REFERENDO-Distinción entre aprobatorio y derogatorio (Aclaración de voto)</p> <p>DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-Estímulos electorales (Aclaración de voto)</p> <p>ABSTENCION EN MATERIA DE ELECCIONES-Alcance/DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-Participación activa de ciudadanos (Aclaración de voto)</p> <p><i>La abstención puede ser una estrategia legítima de la oposición y puede tener efectos jurídicos que la Corte debe preservar. Sin embargo, estimamos que en una democracia participativa no se puede sostener que la participación activa de los ciudadanos no es ni deseable ni estimable</i></p>

Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
-----------------------------	-----------

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-996/04
Fecha de la sentencia	doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004).
Demandante	José Malgoni Moya Rubiano Walter Albeiro Ipia Renfigo Andrés José Arboleda López
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 217 de 1995 “Por la cual se decretan unos traslados en la Ley de Apropiaaciones para la vigencia fiscal de 1995”.
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada contra las expresiones “En consecuencia, para la Vigencia Fiscal de 1995 se incorporará un valor de \$34.141.3 millones, iguales al derecho que tienen las entidades territoriales sobre una octava parte de dichos recursos. En los próximos siete años el saldo se continuará incorporando al presupuesto por octavas partes, dándole la participación correspondiente a las entidades territoriales”, contenidas en el artículo 5º de la Ley 217 de 1995 “Por la cual se decretan unos traslados en la Ley de Apropiaaciones para la vigencia fiscal de 1995”, por carencia actual de objeto.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los demandantes afirman que la disposición acusada vulnera los artículos 346, 349, 356, 357 y 358 constitucionales.</p> <p>Los actores expresan que el artículo 5º acusado, al disponer que el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación sobre los recursos de la telefonía móvil celular ordenada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-423 de 1995, solamente se efectuará sobre los recursos no ejecutados a la fecha de notificación de la referida sentencia, incurrió en graves equívocos frente a la implementación de los principios y las reglas presupuestales.</p> <p>Consideran que la norma acusada vulneró lo dispuesto por los artículos 357 y 358 constitucionales que implementaron una regla directa sobre la distribución de las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, a través de las</p>



	<p>transferencias cuyo destino y provisión reglamentó posteriormente la Ley 60 de 1993, así como lo ordenado por la Corte en la sentencia C-423 de 1995 al referirse a la prevalencia de las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre el contenido de las leyes ordinarias que desarrollan la materia, toda vez que al ordenarse que los \$34.141.3, millones de pesos se distribuyan en octavas partes, pagaderas a los municipios a través de apropiaciones anuales, se disfrazó nuevamente la naturaleza de los recursos que no son nuevos, repentinos ni mucho menos el resultado de un influjo extraordinario generado en los ingresos de la Nación, ni que pudiese causar trastornos macroeconómicos, sino que son recursos de exclusiva y clara destinación establecida por el régimen constitucional y el régimen orgánico del presupuesto.</p> <p>Recuerdan que en materia presupuestal la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de conformidad con lo ordenado por el artículo 346 constitucional y en consecuencia los considerandos y motivaciones de carácter técnico macroeconómico que hicieran compatibles el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales con el plan de desarrollo y los programas definidos por las autoridades competentes no se efectuó en el trámite de la Ley 217 de 1995 que fue presentada como una ley dispositiva de traslados presupuestales donde se indicó como único antecedente lo dispuesto por la Corte Constitucional en el sentido que la entrega de las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación que debieron ser liquidados y girados como trasferencias a los municipios del país.</p> <p>En ese sentido advierten que lo relativo al marco técnico que estableciera el criterio para aprobar la inclusión en el presupuesto anual de ciertas rentas y la destinación de otras al fondo de superávit con el fin de garantizar la normal evolución de la economía, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 179 de 1995, no fue materia de la discusión, ni de la exposición de motivos que al efecto debió presentar el Gobierno.</p> <p>Aducen que la disposición acusada vulneró los principios generales del sistema presupuestal previstos en la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 349 constitucional, especialmente los principios de coherencia macroeconómica y homeóstasis presupuestal, en la medida en que el artículo 5° de la Ley 217 de 1995 careció de una exposición de motivos fundamentados principalmente en los considerandos de especialidad técnica que ordenó la sentencia C-423 de 1995 y además no fue precedida de los debates que amerita no como una simple ley de apropiaciones sino considerando que establecía la creación del Fondo del Superávit de la Nación en relación con su cuantía y la forma y proporciones en que dicho excedente entraría a realimentar la</p>
--	---

	<p>economía nacional.</p> <p>Finalmente manifiestan que si con fundamento en el principio de homeóstasis presupuestal se justificó la expedición del artículo 15 de la Ley 179 de 1994, esa situación no es aplicable en el caso del artículo 5° de la Ley 217 de 1995, toda vez que los recursos allí previstos no tienen la naturaleza de adicionales para proveer en el respectivo presupuesto de la anualidad de 1995, sino que se trata de unos bienes que tienen una destinación específica reglada por la Constitución Nacional, con el objeto de desarrollar unos fines concretos dentro del marco constitucional general e igualmente dar aplicación efectiva al principio de coherencia macroeconómica.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-246/04
Fecha de la sentencia	dieciséis (16) marzo de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Andrée Viana Garcés
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4° y 6° (parciales) de la Ley 18 de 1970; parágrafo 2° (parcial) del artículo 41 de la Ley 80 de 1993; parágrafo del artículo 7° y artículo 24 (parcial) de la Ley 185 de 1995; y artículo 38 de la Ley 344 de 1996.
Conoció en primera instancia	Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Decision	<p>Primero. Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 4° de la Ley 18 de 1970, salvo las expresiones “<i>en su condición de asesora del Gobierno</i>” y “<i>con el fin de obtener su consejo</i>”, de ésta disposición, que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD de los segmentos normativos impugnados de los artículos 6° de la Ley 18 de 1970; parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993; parágrafo del artículo 7° y artículo 24 de la Ley 185 de 1995; y artículo 38 de la Ley 344 de</p>

	1996.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Sostiene la accionante que las normas acusadas vulneran los artículos 113, 136 numeral 1, 150 numeral 9 y 209 de la Constitución.</p> <p>En su parecer la Ley 5ª de 1992 mantuvo la Comisión Interparlamentaria asesora en materias de crédito público, creada a la luz de la Constitución anterior, conservando las mismas funciones que se le adjudicaron en ese entonces, incluso algunas otorgadas por la Ley 18 de 1970, y que consisten en asesorar al Gobierno sobre los empréstitos que esté gestionando, y en proferir concepto desfavorable obligatorio en los casos en los que éste pretenda realizar una operación de crédito público sin contar con los correspondientes recursos internos sanos en moneda colombiana, necesarios para complementar los gastos en dólares.</p> <p>Señala que el legislador, en desarrollo de lo prescrito en el artículo 150 numeral 9 de la Constitución, mediante la Ley 80 de 1993, estableció los requisitos y procedimientos con cuya observancia y agotamiento el Gobierno queda autorizado para realizar operaciones de crédito público, y condicionó la celebración de las operaciones de crédito público externas de la Nación y de las garantizadas por ésta con plazo mayor de un año a la obtención de concepto favorable de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.</p> <p>Agrega que la Ley 185 de 1995, detalló el procedimiento ante dicha comisión haciendo obligatoria la emisión de un doble concepto, uno para autorizar el inicio de las negociaciones y otro para la celebración de cada empréstito en concreto. Además, aduce que la Ley 344 de 1996 reitera la necesidad de contar con los conceptos mencionados.</p> <p>En su parecer, la función que atribuye el artículo 6º de la Ley 18 de 1970, a la que remite al artículo 65 de la Ley 5ª de 1992, así como lo establecido en parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, desarrollada por los artículos 7 y 24 de la Ley 185 de 1996 y el artículo 38 de la Ley 344 de 1996, desconoce lo dispuesto en el artículo 150 numeral 9 de la Carta, según el cual las autorizaciones para contratar y negociar empréstitos deben ser otorgadas por el Congreso mediante leyes, y no por una Comisión Permanente mediante actos que, por su contenido y finalidad, además por el contexto en que se expiden, son de naturaleza administrativa.</p>

	<p>Indica que la expedición de dichos actos, así como el asesoramiento al Gobierno en el proceso previo a la toma de decisión de negociar o contratar un empréstito, constituye una intromisión en los asuntos propios y privativos del ejecutivo, lo cual desconoce la prohibición prevista en el artículo 136- 1 de la Constitución.</p> <p>Advierte que como además se trata funciones administrativas propias del Gobierno que son ejercidas por parte del legislativo, se desconoce el principio de la tridivisión del poder público consagrado en el artículo 113 Superior. En su opinión, de esta forma se desnaturaliza el ejercicio del control político sobre ese tipo de operaciones, generando un exceso de procedimientos que termina afectando los principios rectores de la función pública consagrados en el artículo 209 Superior.</p> <p>Argumenta que el concepto que profiere la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público constituye una autorización que otorga el Congreso por vía diferente a la de la ley, por lo que, en su sentir, las regulaciones contenidas en cada una de las disposiciones acusadas, vulneran el artículo 150 numeral 9 de la Constitución en virtud del cual corresponde al órgano legislativo conceder mediante ley autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.</p> <p>Al respecto, argumenta que con la reforma constitucional de 1991 se mantuvo el espíritu de la Constitución de 1886, en el sentido de que el Gobierno debe solicitar autorizaciones al Congreso para celebrar contratos y negociar empréstitos, autorización que, a su juicio, bien puede ser general o bien para un caso determinado y que de ser procedente debe estar contenida en una ley.</p> <p>Asegura que la Constitución atribuyó al Congreso la facultad de autorizar la celebración de contratos y la negociación de empréstitos mediante leyes. Por ello, afirma que el Congreso al expedir la Ley 18 de 1970, la Ley 80 de 1993, la Ley 185 de 1996 y la Ley 344 de 1994, excedió las atribuciones otorgadas por la norma constitucional, modificándose de esta forma su contenido, lo que no puede hacerse mediante una simple ley, sino por medio de los mecanismos consagrados para tal efecto.</p> <p>Considera que el artículo 150 numeral 9 de la Carta sólo exige para que el Gobierno pueda contratar y negociar empréstitos, la existencia de una ley de autorizaciones que lo habilite para esos fines. A su juicio, la norma no impone al Ejecutivo ningún requisito adicional para iniciar la gestión de un empréstito o para celebrar los contratos respectivos. Advierte que sin embargo las normas acusadas imponen unos requisitos adicionales a los que exige la</p>
--	--

	<p>Constitución, como la necesidad de obtener un consejo o un concepto vinculante proferido por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con lo cual el legislador convierte a dicha Comisión en un organismo protagónico y decisivo en el proceso administrativo de gestión y contratación de empréstitos públicos.</p> <p>Sostiene que tanto el artículo 6° de la Ley 18 de 1970, que otorga a la Comisión la facultad de expedir un concepto que si es desfavorable obliga al el Gobierno en caso de que éste quisiera realizar operaciones de crédito público sin contar con recursos sanos suficientes para soportarlos, como el parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 7 y 24 de la Ley 185 de 1995y el 38 de 1996, que establecen que las operaciones de crédito público externo de la Nación y las garantizadas por ella, con plazo mayor de un año, requieren concepto de la Comisión, modifican el artículo 150 numeral 9 de la Carta, pues esta norma superior indica que las autorizaciones para negociar y contratar empréstitos las otorga el Congreso mediante ley, y no un grupo de seis parlamentarios mediante acto de diferente naturaleza.</p> <p>Afirma que si se tiene en cuenta que el Gobierno sólo puede negociar y celebrar contratos de crédito público previa autorización legal, entonces, en ausencia de ésta y ante la prohibición expresa del legislador, no son procedentes dichas negociaciones y celebración de empréstitos. Por ello, considera que resulta inconstitucional e inocuo el concepto vinculante de la Comisión, pues, en su sentir, con o sin él, el Gobierno no podría gestionar y suscribir créditos externos mientras subsistan las comentadas circunstancias.</p> <p>Manifiesta que si bien es cierto que el Congreso de la República tiene la potestad de hacer las leyes, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Carta Política, no lo es menos que ella ha de ejercerse dentro de los límites que consagra la propia Constitución, y agrega que el otorgar facultades administrativas propias del Ejecutivo a una comisión permanente, desborda las funciones constitucionales del Congreso.</p> <p>Dice la accionante que la asesoría previa que trata el artículo 4° de la Ley 18 de 1970, así como el concepto de que trata el artículo 6° de la misma, al igual que aquél previsto en el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 185 de 1995 y 344 de 1996, son fruto del ejercicio de una función administrativa que, pese a ser típica del ejecutivo, le fue atribuida a dicha comisión contraviniendo los principios de la separación de poderes y la colaboración armónica consagrada en el artículo 113 de la Constitución y desnaturalizando la función de control político.</p>
--	---

	<p>En su criterio, la facultad que la Constitución otorga al Congreso para conceder autorizaciones al Gobierno para contratar y negociar empréstitos, se refiere a funciones de carácter administrativo, es decir, aquellas que se encuentran en la esfera propia del Gobierno, pero respecto a éstas, la Constitución prescribe cierta participación del legislador.</p> <p>Considera que la colaboración armónica entre las ramas legislativa y ejecutiva es evidente en el tema de la contratación de empréstitos públicos, pues, la primera, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, está encargada de proferir las leyes marco para señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para organizar el crédito público, y también, mediante ley, de manera previa autorizar al ejecutivo con el fin de adelantar los trámites y actuaciones administrativas para obtener crédito, debiendo posteriormente el legislativo ejercer el control político sobre el uso de esas autorizaciones con base en los informe que debe rendirle el Gobierno. Explica que por su parte la rama ejecutiva se encarga de todo el proceso de evaluación técnica y financiera previa negociación, suscripción y ejecución de los empréstitos, ya que dicho proceso es de naturaleza administrativa debiendo ceñirse a lo prescrito en la respectiva ley de autorizaciones.</p> <p>Señala que la Carta habilita al Congreso para que permita al Gobierno establecer vínculos jurídicos y para obligarse en el campo contractual, pero en su parecer no lo autoriza para reemplazar o sustituir, mediante conceptos vinculantes, o complementar, mediante consejos o asesorías al Ejecutivo, la decisión y el acto mismo de celebrar un contrato, pues este acto es de naturaleza administrativa.</p> <p>En su sentir, las normas impugnadas al asignarle a la Comisión las funciones de aconsejar al Gobierno y aprobar o improbar la gestión y celebración de algunos contratos de empréstitos y de otras operaciones de crédito público, la convierten en una entidad coadministradora, en el primer evento porque se hace partícipe del proceso decisorio de cada caso en particular y, en el segundo, porque de ella depende la decisión de negociar y contratar, cuando la adopción de dicha resolución corresponde a la esfera propia del Gobierno.</p> <p>Aduce que de acuerdo con las normas acusadas el Gobierno, aún después de la expedición de la correspondiente ley de autorizaciones, no es libre de negociar un empréstito o abstenerse de hacerlo, ni de celebrar el contrato, sino que debe consultar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y someterse a la decisión que ella adopte, por lo que es ésta última la verdadera</p>
--	--

	<p>adjudicataria de la potestad gubernamental referida quedando la administración reducida a un ejecutor obediente del criterio de seis parlamentarios que conforman la mencionada Comisión.</p> <p>Para la demandante resulta claro que el legislador al expedir cada una de las normas acusadas, atribuyó una potestad propia y exclusiva del Ejecutivo a una Comisión Permanente del Congreso de la República, afectando el principio de la separación de funciones de las ramas del poder público, elemento de legitimación de un régimen democrático.</p> <p>A su juicio, esto supone una abierta violación del artículo 113 de la Constitución, pues no es posible la simultánea y concurrente asignación de las mismas competencias entre el legislador y el ejecutivo, o que se permita que cada uno de los dos órganos las ejerza a discreción sin que se considere límites a sus competencias.</p> <p>Concluye que las dos situaciones no queridas por el constituyente, tienen ocurrencia en virtud de las disposiciones atacadas. Sobre éste punto concluye que “ a) Tiene lugar la simultánea y concurrente asignación de las mismas competencias entre el legislador y el ejecutivo: tanto al ejecutivo como la Comisión les ha sido asignada la función de decidir sobre la negociación y celebración de empréstitos y, b) se permite que uno de los dos órganos ejerza funciones a discreción, sin considerar límite alguno de competencias: el Ejecutivo depende, en la adopción de la decisión definitiva de la Comisión, y dado que ésta pertenece al órgano Legislador titular del control político de ese tipo de actos, el ejercicio de dicha potestad en cabeza de la Comisión es, casi, ilimitada.”</p> <p>Considera que la violación del artículo 113 superior genera la imposibilidad de satisfacer la finalidad buscada por el Constituyente, que es en últimas permitir, en el marco de la colaboración armónica entre el Gobierno y el Congreso, el ejercicio sano y eficiente del control político, y agrega que si quien asesora al Gobierno o decide sobre la negociación y celebración de un contrato u otro tipo de operación de crédito público es un grupo de parlamentarios, el control político, cuyo presupuesto fundamental es buscar el equilibrio de poderes, resulta viciado y desnaturalizado, para dar una absoluta preponderancia del legislador.</p> <p>En su concepto, la Comisión coadministra, incluso con mayo autoridad que el Gobierno, y éste no será sujeto de control posterior por el Congreso, pues la decisión no fue suya sino de éste último mediante una Comisión Interparlamentaria.</p>
--	---

	<p>De otro lado, sostiene que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se inmiscuye en las funciones propias del Gobierno desconociendo la prohibición expresa contenida en el artículo 136 numeral 1 de la Constitución.</p> <p>Al respecto, explica que en ejercicio de la facultad de aconsejar y/o decidir si es procedente o no la negociación y suscripción de contratos de empréstito público, la Comisión se intromete en asuntos propios de la esfera del Ejecutivo, ya que es ella quien finalmente toma la decisión, interviniendo directa e indebidamente en asuntos de privativa competencia del Gobierno. Agrega que en los casos en que el concepto no es obligatorio, de todas formas los consejos o asesorías al Gobierno suponen la participación directa en el proceso administrativo de toma de decisiones exclusivas de la órbita del ejecutivo.</p> <p>Señala que, adicionalmente, tal concepto, obligatorio o no, en la medida en que es fruto del ejercicio de funciones diferentes a las del legislativo y que, por eso mismo, es gestado en una reunión de parlamentarios efectuada al margen del ordenamiento constitucional, carece de toda validez de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la Carta.</p> <p>Finalmente, indica que el procedimiento que se ha diseñado a raíz de la obligatoriedad del concepto previsto en el párrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 185 de 1995 y en la Ley 344 de 1996 supone trámites adicionales a los que podrían derivarse de un desarrollo adecuado de la Constitución, lo cual propicia el aprovechamiento de cargos, exceso de poderes personales y, en general, prácticas corruptas que vulneran los principios de la administración pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución.</p> <p>En este sentido argumenta que la obligación de consultar a una Comisión pese a la existencia de una ley de autorizaciones, vulnera los principios de economía, celeridad y eficacia, consagrados en el artículo 209 Superior, los que igualmente pueden predicarse de la función legislativa, como se deduce de los preceptos constitucionales.</p> <p>En su parecer, la capacidad del Estado para cumplir su fin de servicio a la sociedad resulta disminuida si los planes de Gobierno, aprobados mediante leyes, quedan sometidos al capricho de unos pocos miembros del Congreso que deciden su procedencia en reuniones y mediante decisiones huérfanas de amparo constitucional.</p> <p>Aduce que a raíz de que el legislador impuso la obligatoriedad de</p>
--	--



	<p>los conceptos de la Comisión, se ha debido diseñar un proceso previo a la negociación y suscripción de las operaciones de crédito público en el cual se consulta dos veces a dicha Comisión: previo el inicio de las gestiones de negociación y previa la suscripción del contrato, lo que, según la demandante, supone un exceso de trámites, la legalización de escenarios propicios para que seis parlamentarios ejerzan el poder de decidir sobre los ingresos que necesita el Gobierno para cumplir con las finalidades propias del Estado Social de Derecho.</p> <p>Indica que la concentración de semejante poder en seis personas genera un riesgo, en el sentido de que la decisión este precedida de transacciones, negociaciones e intercambios de favores que no consultan la moral pública y que comprometerán intereses particulares, con lo cual se desconoce el deber estatal de prevenir la corrupción y adoptar y promover los mecanismos necesarios para prevenirla, detectarla, sancionarla y erradicarla. Afirma que, por el contrario, se crea un foco de poder concentrado y sin control que genera prácticas corruptas.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-124/04
Fecha de la sentencia	diecisiete (17) de febrero de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Sofía Posada López
Demandado	<i>Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo (parcial) del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 1º de la Ley 186 de 1995).</i>
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “salvo los aportes al régimen de seguridad social que serán pagados por el Congreso” contenidas en el Parágrafo del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, tal

	como fue modificado por el artículo 1º de la Ley 186 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La demandante solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de la expresión <i>“salvo de los aportes al régimen de seguridad social que serán pagados por el Congreso”</i> contenida en el párrafo del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 tal como quedó modificada por el artículo 1º de la Ley 186 de 1995 por considerar que vulnera los artículos 13 y 209 constitucionales.</p> <p>Afirma la actora que la expresión acusada viola el artículo 13 superior, toda vez que permite a los contratistas de las Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas reclamar al Congreso, a modo de reembolso, los dineros pagados por ellos como aportes al régimen de seguridad social, sin que ello sea así para los demás contratistas del Estado vinculados mediante contrato de prestación de servicios.</p> <p>Recuerda que el párrafo del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, establece que en el caso de los asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo del Congreso, la vinculación puede darse mediante contrato de prestación de servicios, evento en el que no se considerarán prestaciones sociales en el valor del contrato celebrado, y se prohíbe a la Administración su reconocimiento y al contratista su reclamación. Advierte que sin embargo en la norma se establece <i>“una excepción que permite a tales contratistas reclamar del Congreso, como reembolso, los aportes pagados y destinados al régimen de Seguridad Social...”</i> cuando se señala que no habrá lugar al reconocimiento o reclamación de prestaciones sociales <i>“salvo de los aportes al régimen de seguridad social que serán pagados por el Congreso”</i>.</p> <p>Aduce que la regulación así establecida es extraña al contrato de prestación de servicios a que alude el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, norma que en ninguna parte establece ese derecho al reembolso de los aportes pagados al sistema de seguridad social.</p> <p>En ese sentido precisa que: <i>“...Como quiera que los contratos estatales de prestación de servicios no generan relación laboral ni prestaciones sociales, resulta obligado concluir que no tienen derecho al reembolso de los aportes parafiscales que pagan como independientes...”</i>. Afirma así mismo que la expresión acusada al permitir ese reembolso desvirtúa la naturaleza del contrato de prestación de servicios, por cuanto <i>“los emolumentos recibidos dejan de ser honorarios y se convierten en sueldo”</i>.</p>

	<p>Indica que en cuanto se impone así al Congreso -sin que exista justificación alguna-, la obligación de pagar o reembolsar el valor de los aportes a la seguridad social de los Asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo, que sean vinculados mediante contrato de prestación de servicios, se establece un trato discriminatorio en relación con los demás contratistas del Estado que no gozan del mismo privilegio.</p> <p>Explica al respecto que: <i>“...La frase acusada establece una diferencia de trato arbitraria e injustificada desde un punto de vista jurídico, esto es, no se funda en motivos objetivos y razonables, y además resulta desproporcionada en su alcance o contenido, pues mientras todos los trabajadores del Estado, e incluso los particulares, deben hacer un esfuerzo y colocar aportes para el pago de los parafiscales, los asesores de la UTL están exentos de ese esfuerzo...”</i>.</p> <p>La demandante considera así mismo que la expresión acusada vulnera el principio de imparcialidad establecido en el artículo 209 de la Constitución.</p> <p>Al respecto señala que la contratación estatal -en este caso la contratación de asesores para la Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas-, es una actividad de tipo administrativo y en consecuencia debe respetar los preceptos establecidos en el artículo 209 superior para la función administrativa y dentro de ellos el principio de imparcialidad enunciado igualmente en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.</p> <p>Advierte al respecto que: <i>“...el privilegio que la norma acusada concede a los contratistas de las UTL en el sentido de poder reclamar del Congreso, como reembolso, los aportes pagados y destinados al régimen de Seguridad Social, genera una discriminación en relación con los demás contratistas de las entidades estatales a quienes no se les asigna dicha prerrogativa, y en este sentido se genera un tratamiento parcializado para los contratistas del Estado...”</i>, lo que resulta contrario al referido principio superior. Cita como sustento de sus aseveraciones apartes de la sentencia T-297 de 1997.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA

	<p>PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE-Precisión lógica del concepto (Aclaración de voto)</p> <p>PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE-Alcance del concepto (Aclaración de voto)</p> <p><i>El principio de razón suficiente, creado por Leibniz hace referencia a verdades contingentes o no necesarias y no a verdades necesarias (que se basan en otro principio que es el de no contradicción). Si por otro lado recordamos que el control de constitucionalidad debe verificar que el medio empleado (la ley que distingue) sea necesario, ya que si existe otro medio menos gravoso hay que utilizarlo; no se comprende porque se habla de que existe una razón suficiente. Cuando se habla de razón suficiente lo que se quiere decir, en realidad, es que ese medio no es necesario y si no es necesario debe ser declarado inconstitucional.</i></p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-570/04
Fecha de la sentencia	ocho (8) de junio de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Diana María Méndez
Demandado	<i>Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 6, 8, 9, 23, 24, 26, 27, 31 - literales c) y d)-, 32 - literales d), e) y h)-, 33 - literales a), b) y c)-, 35 - literal a)-, 37 - literal c)-, 38 - literales e) y f)-, 39 - literal a)-, 41-literal b)-, 42 - literales b) y c) -, 43 - literal b)-, 44 - literal a)-, 45 - literal b)-, y 78 de la Ley 842 del 2003.</i>
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 4, 8 y 24 de la Ley 842 del 2003, por el cargo analizado.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 6 y 9 de la Ley 842 del 2003, en el entendido de que los profesionales de disciplinas relacionadas con la ingeniería que cuenten con consejos profesionales propios deberán inscribirse y obtener la matrícula ante estos consejos, después de pagar los derechos respectivos, mientras estos consejos no sean eliminados o modificados por el Legislador, a iniciativa del Gobierno. La declaración se restringe al cargo analizado.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 23 de la Ley 842 del 2003, salvo la primera oración de su parágrafo primero, en el entendido de que los profesionales titulados y domiciliados en el exterior en disciplinas relacionadas con la ingeniería y que deseen obtener un permiso temporal para trabajar deberán acudir al COPNIA, siempre y cuando su especialidad no cuente con un consejo profesional propio encargado de esa función. La declaración se restringe al cargo analizado.</p> <p>Cuarto.- Declarar INEXEQUIBLE la primera oración del parágrafo primero del artículo 23 de la Ley 842 de 2003, que reza: “Los requisitos y el trámite establecidos en este artículo se aplicarán para todas las ramas de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, aunque tengan reglamentación especial y será otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, exclusivamente.”</p> <p>Quinto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-649 de 2003,</p>

	<p>que declaró la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, en relación con el cargo analizado. De esta declaración se exceptúa el literal n) del artículo 26, el cual será declarado INEXEQUIBLE.</p> <p>Sexto.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 27 de la Ley 842 del 2003,</p> <p>Séptimo.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 78 de la Ley 842 del 2003, en el entendido de que la derogación de normas que allí se ordena no comprende las relacionadas con la creación y asignación de funciones a los consejos profesionales existentes para especialidades de la ingeniería y las profesiones afines y auxiliares de esa disciplina.</p> <p>Octavo.- Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 78 de la Ley 842 del 2003.</p> <p>Noveno.- Declarar INEXEQUIBLES los literales c) del artículo 31, e) del artículo 32, a), b) y c) del artículo 33, a) del artículo 35, b) del artículo 41, b) del artículo 42 y b) del artículo 43 de la Ley 842 del 2003.</p> <p>Décimo.- Declarar EXEQUIBLE el literal c) del artículo 37 de la Ley 842 del 2003, en el entendido de que, para efectos disciplinarios, al definir si la retribución es justa y adecuada en cada caso la autoridad deberá tener como único parámetro de juicio todas las normas jurídicas vigentes, aplicables a la relación que se examina.</p> <p>Decimoprimer.- Declarar INEXEQUIBLE el literal d) del artículo 31 de la Ley 842 del 2003.</p> <p>Decimosegundo.- Declarar EXEQUIBLE el literal d) del artículo 32 de la Ley 842 del 2003, en el entendido de que las conductas descritas no son sancionables cuando se cometan respecto de un colega o socio en un contexto ajeno al ámbito profesional.</p> <p>Decimotercero.- Declarar INEXEQUIBLE el literal h) del artículo 32 de la Ley 842 del 2003, por el cargo analizado.</p> <p>Decimocuarto.- Declarar INEXEQUIBLE el literal c) del artículo 42 de la Ley 842 del 2003.</p> <p>Decimoquinto.- Inhibirse para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los literales e) y f) del artículo 38, literal a) del artículo 39, literal a) del artículo 44 y literal b) del artículo 45 de la Ley 842 de 2003, por ineptitud sustantiva de la demanda.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA

Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Manifiesta la demandante que, de acuerdo con los artículos 150, numeral 7, y 154 de la Constitución las leyes que se proponen reformar la estructura de la administración nacional deben ser expedidas por el Congreso, a iniciativa del Gobierno Nacional. Adicionalmente, el numeral 14 del artículo 189 dispone que es el Presidente de la República quien debe definir las funciones especiales de los empleos que demande la administración nacional.</p> <p>Desde esta perspectiva, afirma que los artículos 4, 6, 8, 9, 23, 24, 26, 27 y 78 de la Ley 842 de 2003 son inconstitucionales, puesto que con ellos se está modificando la estructura de la administración nacional y que el proyecto que se convertiría en la Ley 842 fue de iniciativa parlamentaria, concretamente del senador José Jaime Nicholls. Por eso, concluye: “Ahora, el denominado Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, cuyas funciones y estructuras se modificaron con la expedición de la Ley 842, es un órgano del nivel central del orden nacional, tal como lo estableció la Corte Constitucional mediante la sentencia C-078 de 2003, motivo por el cual la ley demandada no podía señalar nuevas funciones al COPNIA ni modificar su estructura orgánica por no haber sido ésta de iniciativa gubernamental.”</p> <p>A continuación, la demandante se ocupa de los distintos artículos comprendidos dentro de este punto, de la siguiente manera:</p> <p>- Artículos 4, 6, 8 y 9: Expone que la Ley 64 de 1978, derogada por la Ley 842, establecía como funciones del COPNIA <i>la expedición y vigilancia</i>, y el otorgamiento de permisos para ejercer la ingeniería. En la nueva ley, los artículos 3 y 4 crean las profesiones auxiliares y afines de la ingeniería, mientras que los artículos 6, 8 y 9 establecen los requisitos para ejercer esas profesiones y la ingeniería misma. Pues bien, de acuerdo con estos artículos el COPNIA “será el encargado de expedir los permisos para el ejercicio de esas profesiones, tal como lo reafirma el artículo 26 de la misma Ley.” De esta forma, la Ley 824 modifica los objetivos del COPNIA – con lo cual amplía su radio de acción y, por consiguiente, modifica su estructura orgánica interna -, puesto que le asigna la inspección y vigilancia de las profesiones afines a la ingeniería y la expedición de los permisos para el ejercicio de ellas.</p> <p>Por lo anterior, considera que “debe declararse la inexequibilidad de los artículos 4, 6, 8 y 9 de la Ley 842 en lo que respecta a las profesiones afines de la Ingeniería.”</p> <p>- Artículo 23: En este artículo se establece que los ingenieros extranjeros que desean laborar en el país por un lapso no superior a un año deben tramitar un permiso temporal ante el COPNIA. De</p>

	<p>esta manera, el COPNIA concedería todos estos permisos, independientemente de la rama de la ingeniería de que se trate. Ello desconoce la existencia de otros consejos profesionales de ingeniería que, anteriormente, eran los encargados de conceder el mencionado permiso especial, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 18 de 1976 – de acuerdo con la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de ingeniero químico en el país; 20 de 1984, por la cual se reglamenta el ejercicio de la Ingeniería de Petróleos; y 51 de 1986, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de las Ingenierías Eléctrica, Mecánica, Electrónica y Profesiones Afines.</p> <p>Por eso, afirma: “el artículo 23 de la Ley 842 quebranta la Constitución Política al otorgarle al COPNIA una función (expedir permisos temporales para ingenieros extranjeros) que las Leyes 18 de 1976, 20 de 1984 y 51 de 1986 otorgaban a otras entidades (consejos profesionales) (...) Al señalarle la Ley 842 al COPNIA la función de expedir los permisos temporales para todos los ingenieros extranjeros (sin importar su especialidad) se modifica la estructura de la administración nacional...”</p> <p>- Artículo 24: Este artículo introduce la actual denominación del Consejo, que ahora se llama Consejo Profesional nacional de Ingeniería. Expresa la demandante que “al modificarse la denominación del COPNIA se está modificando la estructura de la administración nacional, por cuanto la nueva denominación y la sigla adoptada conlleva el ejercicio de nuevas funciones (...) el legislador no es autónomo para modificar la denominación de una entidad del orden nacional, ya que para ello requiere de la iniciativa gubernamental. Más aún cuando esta modificación en la denominación conlleva la asunción de nuevas funciones, tal como sucede con el COPNIA, el cual a partir de la Ley 842 asume funciones diferentes a las señaladas en la Ley 64 de 1978.”</p> <p>- Artículo 26: Este artículo señala las funciones y objetivos del COPNIA “y como se ha dicho, cuando una ley modifica los objetivos de una entidad del orden nacional del nivel central (rama ejecutiva del poder público), la misma debió ser de iniciativa gubernamental. (...) A pesar de que la Ley 842 no señala de manera expresa los objetivos del COPNIA, es claro que las funciones que la misma ley le asigna determinarán su razón de ser, esto es, sus objetivos, motivo por el cual la norma demandada es inconstitucional. Además, la variación en sus objetivos conllevan la modificación de sus estructura orgánica, puesto que la ejecución de nuevas implica una variación en la administración interna de la entidad.”</p> <p>La actora también demanda expresamente varios literales del artículo 26. Acerca del literal I) manifiesta que él establece que el</p>
--	--



	<p>COPNIA aprobará y ejecutará en forma autónoma su presupuesto y el de los Consejos Regionales o Seccionales. Afirma, entonces, que este precepto vulnera el artículo 352 de la Constitución, “puesto que la Ley Orgánica del Presupuesto (decreto 111 de 1996) no les da dicha facultad a los organismos del nivel central nacional que carecen de personería jurídica y que no gozan de autonomía administrativa y financiera como el COPNIA, el cual – como lo ha sostenido la Corte Constitucional – es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte.”</p> <p>De la misma manera, expone que el literal n) modifica la estructura de la administración nacional, pues pretende que el COPNIA pueda crear, reestructurar o suprimir sus consejos regionales o seccionales, lo cual es facultativo de la ley a instancias del Gobierno Nacional. También considera que el literal o) transgrede el numeral 14 del artículo 189, pues determina que el COPNIA adoptará su propia planta de personal, facultad que es propia del Presidente de la República para todos los organismos del nivel nacional.</p> <p>- Artículo 27: Este artículo faculta al COPNIA para crear, fusionar o suprimir consejos regionales o seccionales. Esta atribución es inconstitucional, pues como ya se ha dicho, el gobierno es el único que tiene iniciativa de ley para determinar la estructura de la administración nacional. Agrega que, si bien es cierto que los consejos seccionales o regionales son entidades del orden departamental o regional, “es claro que hacen parte de la administración nacional y que su creación, supresión o fusión está sujeta a leyes de iniciativa gubernamental.”</p> <p>- Artículo 78: Este artículo deroga las Leyes 20 de 1971, 14 de 1975, 64 de 1978, 28 de 1989, 33 de 1989, 211 de 1995, 392 de 1997 y 435 de 1998, cada una de las cuales creó consejos profesionales u organismos administrativos del orden nacional encargados de ejercer la inspección y vigilancia de diferentes ramas de la ingeniería o de profesiones auxiliares o afines a ésta, y de expedir la correspondiente matrícula profesional.</p> <p>El mencionado artículo 78 suprime varias entidades del orden nacional al derogar las leyes mencionadas. De esta manera, vulnera los arts. 150, numeral 7, y 154 de la Constitución. También el parágrafo de este artículo es inconstitucional, “ya que el Congreso - <i>motu proprio</i>- no puede trasladar funciones de una entidad del orden nacional a otra, ya que se viola el artículo 154 de la Carta Política.”</p>
--	--

Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. RODRIGO ESCOBAR GIL</p> <p>CODIGO DE ETICA DEL PROFESIONAL-Prohibición de ejecutar el lugar de ejercicio de la profesión actos contra la moral y las buenas costumbres (Salvamento parcial de voto)</p> <p>MORAL SOCIAL EN EL DERECHO DISCIPLINARIO-Aspectos que desconoce la jurisprudencia constitucional/MORAL SOCIAL-Referente jurídico válido (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>Tal y como lo manifesté en el salvamento de voto a la Sentencia C-431 de 2004, considero equivocado el tratamiento que dentro del campo del derecho disciplinario ha venido dando la Corte a la moral social, desconociendo implícitamente dos aspectos básicos y relevantes: (i) su valor como referente jurídico válido y, en ese contexto, (ii) su plena identificación en el ámbito del ordenamiento jurídico.</i></p> <p>MORAL SOCIAL-Valor medular del ordenamiento y bien jurídico objeto de tutela (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>Conforme a la Carta Política de 1991 y a la propia jurisprudencia constitucional, la moral social, entendida como el comportamiento ético que es aceptado por el conjunto de una sociedad dentro de las reglas del verdadero pluralismo democrático y que impone a sus miembros actuar de cierta manera, constituye en realidad un valor medular del ordenamiento y un bien jurídico objeto de tutela, cuyos criterios de interpretación se encuentran claramente definidos, resultando así constitucionalmente admisible, no solo para consolidar situaciones jurídicas concretas, sino también como parámetro evaluativo al que puede acudir el legislador y los operadores jurídicos, específicamente el juez constitucional, cuando se trata de juzgar la exequibilidad de una disposición que propugna por la defensa de un principio de moralidad.</i></p> <p>MORAL SOCIAL-Relación con el derecho/MORAL SOCIAL-Carácter de objeto jurídico determinado/MORAL SOCIAL-Reconocimiento e interpretación constitucional en el ámbito de las garantías del debido proceso (Salvamento de voto)</p> <p>JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DISCIPLINARIA RELATIVA A LA MORA SOCIAL-No es aislado/JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DISCIPLINARIA RELATIVA A LA MORAL SOCIAL-Realización a partir de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico</p>

	<p><i>El juicio de constitucionalidad de las normas que sancionan disciplinariamente los comportamientos contrarios a la moral social no puede ser aislado; esto es, circunscrito únicamente al texto que describe la sanción, como erradamente lo viene asumiendo la Corte. Por el contrario, atendiendo al alcance muy particular que las garantías del debido proceso tienen en el derecho disciplinario y a la connotación del concepto de moral social en este ámbito, el mismo debe llevarse a cabo a partir de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, sobre la base del reconocimiento de la moral social o moral pública como la conducta social generalmente aceptada por la comunidad, con la cual se busca garantizar la plena convivencia y el verdadero orden institucional.</i></p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-509/04
Fecha de la sentencia	veinticinco (25) de mayo de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Jorge Alonso Garrido Abad
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la Ley 232 de 1995 <i>“Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Decision	Declarar EXEQUIBLE el literal c. del artículo 2 de la ley 232 de 1995, únicamente por los cargos estudiados en esta oportunidad y en el sentido que también deberá exigirse el comprobante de pago en aquellos casos en que los autores acojan formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o realicen sus reclamaciones en forma individual.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano considera que el aparte demandado viola el derecho a la igualdad al establecer una clara discriminación en contra de los titulares de derechos de autor distintos a los derivados de la autoría de obras musicales, pues los primeros no podrían hacer efectivos sus derechos con las mismas prerrogativas que tienen los autores de obras musicales. Esta situación se genera porque el comprobante de pago exigido a los establecimientos comerciales abiertos al público facilita el recaudo de las sumas correspondientes. Así, los titulares excluidos deben adoptar otras medidas para hacer valer sus derechos.</p> <p>De otro lado, según su parecer, el literal c) también viola el derecho a la igualdad de los autores de obras musicales no afiliados a asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor, pues sólo ellas son reconocidas por el Ministerio del Interior para expedir el paz y salvo de derechos de autor a que alude la norma. Para el ciudadano, debe permitirse el ejercicio individual de los derechos de autor.</p> <p>Finalmente el demandante considera que el fragmento acusado también viola el artículo 61 de la Constitución pues la norma sólo protege a un reducido grupo de autores por las razones expuestas</p>

	<p>anteriormente. En escritos presentados posteriormente (9 de diciembre de 2003 y 23 de enero de 2004) el demandante se refiere a la injustificada inmediatez en la protección del derecho a favor de los autores de obras musicales, en detrimento de los autores de otro tipo de obras. El actor explica que, la inexequibilidad del aparte demandado no dejaría desprotegidos los derechos de los músicos, pues existen diferentes normas supranacionales que amparan a los titulares de derechos de autor.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1145/04
Fecha de la sentencia	diecisiete (17) de noviembre de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Germán Medina Franco
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 11 del artículo 30 y artículo 63 (parcial) de la Ley 454 de 1998 <i>“por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones”</i>
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	<p>Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “los” contenida en el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 454 de 1998.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, las expresiones “Organizar (...) procesos de inducción y educación en la práctica de la Economía Solidaria y expedir certificados de acreditación sobre educación en teoría y práctica de Economía Solidaria”, contenidas en el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 454 de 1998 y las expresiones “Para el registro de acto de constitución, será condición previa la presentación del certificado de acreditación sobre educación solidaria expedido por el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria”, contenidas en el artículo 63 de la Ley 454 de 1998, en el entendido que la función de acreditación que se asigna al Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria no comporta la posibilidad para el Estado de determinar una única y exclusiva concepción de la economía solidaria que deba ser acatada y difundida en los procesos de formación en este campo.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante afirma que las disposiciones acusadas vulneran el artículo 27 de la Constitución Política.</p> <p>Para el actor, por la forma como está redactado el numeral 11 del</p>

	<p>artículo 30 acusado, se entiende que todos los procesos de educación en economía solidaria son facultad exclusiva y excluyente de Dansocial, así como la expedición de los certificados de acreditación de dichos procesos en detrimento de la libertad de enseñanza de los particulares y de la norma superior que la garantiza.</p> <p>Así mismo, a su juicio, el artículo 63 acusado condiciona de forma irregular el registro del acto de constitución de las entidades del sector solidario, con fundamento en el monopolio de educación otorgado de manera arbitraria a Dansocial en materia de economía solidaria.</p> <p>Estima que las normas acusadas vulneran la libertad de enseñanza elevada a rango de derecho fundamental: <i>“... como está incorporada en el capítulo I del Título II de la Carta que consagra los derechos humanos civiles y políticos, también llamados de primera generación, y la vulneran por cuanto riñen con su alcance y contenido que se refiere a la potestad que se reconoce a los particulares no solo de constituir centros docentes, de dirigirlos, de elegir profesores, de fijar un ideario, sino de impartir en ellos la educación y proyección filosófica que estimen conveniente acorde con su plan educativo institucional (PEI)...”</i>.</p> <p>En ese sentido señala que las normas acusadas vulneran el núcleo esencial del derecho fundamental establecido en el artículo 27 superior al pretender convertir la enseñanza de la economía solidaria en doctrina oficial agenciada por Dansocial, conculcando de esa forma a los particulares la libertad de difundir el conocimiento de una materia cuya socialización es una necesidad sentida de las comunidades locales, de las regiones y del país.</p> <p>Al respecto cita la sentencia T-092 de 1994.</p> <p>Manifiesta que las normas acusadas no se ajustan a lo señalado en la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación y sus Decretos Reglamentarios, que establecen entre otras las modalidades de educación no formal y educación informal dentro de la oferta del servicio público educativo que pueden prestar los particulares en cuyo objeto cabe perfectamente la capacitación en economía solidaria y cuya tutela está radicada en cabeza de las Secretarías de Educación departamentales, municipales y distritales en todo el territorio nacional.</p> <p>Finalmente considera que con fundamento en las disposiciones acusadas Dansocial ha expedido varios actos administrativos, entre otros: i) Resolución No. 0194 de mayo 30 de 2001 (arts. 3 y 4) y ii) Resolución No. 602 del 5 de diciembre de 2003 (art. 2), que</p>
--	---

	deberán quedar sin piso como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 11 del artículo 30 y del artículo 63 de la Ley 454 de 1998.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-569/04
Fecha de la sentencia	ocho (8) de junio de dos mil cuatro (2004).
Demandante	Manuel Leonidas Palacios Córdoba.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 46 y 48 de la ley 472 de 1998 <i>“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO UPRIMNY YEPES
Decision	<p>Primero.- En relación al inciso segundo del artículo 46 de la Ley 472 de 1998 y al inciso segundo del artículo 48 de esa misma ley, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-215 de 1999, que declaró la exequibilidad de esas disposiciones.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “Son aquellas acciones interpuestas por un número plural de personas o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales a dichas personas” contenida en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 472 de 1998 e INEXEQUIBLE la expresión “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad” contenida en ese mismo inciso.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas” contenida en el inciso primero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998 e INEXEQUIBLE la expresión “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad” contenida en ese mismo inciso.</p> <p>Cuarto.- Inhibirse, por ausencia de cargo de constitucionalidad, para conocer sobre la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 3º, del inciso tercero del artículo 46, y del inciso primero y del parágrafo del artículo 48, todos de la Ley 472 de 1998.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA

Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que la interpretación de las disposiciones acusadas vulnera las normas contenidas en los artículos 2, 5, 13, 14, 16, 29, 38, 84, 88 inc 2º, 89, 229 y 243, de la Constitución Política.</p> <p>Antes de exponer las razones por las cuales considera que las disposiciones acusadas son contrarias a la Carta, el actor aclara que, conforme a lo dicho por la Corte en la Sentencia C-1436 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-426 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), es posible plantear juicios de inconstitucionalidad contra interpretaciones que de las normas jurídicas hagan los operadores jurídicos, cuando las mismas involucran un problema de carácter constitucional.</p> <p>Señala que el caso que somete a consideración de la Corte no es sólo similar al que originó las Sentencias C-1436 de 2000 y C-426 de 2002, sino que es <i>“más patente y de más graves consecuencias”</i>. Por tanto, solicita no que la Corte declare la inexequibilidad de las disposiciones, sino que pronuncie decisión de fondo con el fin de fijar el alcance y entendimiento a que deben someterse tales disposiciones legales. Indica que la inconstitucionalidad de las disposiciones demandadas (artículos 3, 46 y 48 de la ley 472 de 1998), se origina en la interpretación que el Consejo de Estado ha hecho de su texto, en cuanto ha introducido un condicionamiento para la procedibilidad de la acción de grupo, consistente en que el grupo como entidad, debe existir antes de la ocurrencia del hecho dañino.</p> <p>Sobre el punto, cita apartes de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado contenida en los expedientes AG-002 auto del 1 de febrero de 2002, AG-064 auto del 11 de diciembre de 2002 y AG-021 auto del 18 de octubre de 2001, en los que se consideró:</p> <p><i>“Que no es la causa del daño la que agrupa, sino que con relación a esta misma causa el grupo debe persistir conformado de hecho o de derecho.</i></p> <p><i>Que el objeto de la Constitución Política en la creación de las acciones de grupo fue la de institucionalizar el derecho de defensa de las personas que integran el grupo - conformado de hecho o de derecho- para proteger hacia el futuro los intereses de condiciones uniformes para todos los miembros del grupo, individualmente.</i></p> <p><i>Que cuando la causa dañina sobre un grupo fue la misma causa dañina frente a una persona no agrupada - natural o jurídica- la ley indica que lo procedente es el ejercicio de la acción individual correspondiente. Por eso, las personas no agrupadas previamente a</i></p>
------------------	---

*la ocurrencia del hecho dañino - dañadas o lesionadas- no puede utilizar alternativamente a la acción individual, las acciones de grupo. Las personas no agrupadas con anterioridad al daño pueden si entrar al proceso promovido por un grupo - preexistente al daño- antes de la apertura a prueba; así lo enseña el Art. 55 ibidem y*

*Que el conjunto de personas que pueden acceder a este mecanismo procesal debe de ser uno de aquellos cuyos miembros compartan determinadas características debe de ser predicables de esas personas sólo en cuanto todas ellas se han colocado - con antelación a la ocurrencia del daño- en una situación común, y sólo frente a aquellos aspectos relacionados con tal situación. Así las cosas, es claro que la condición de damnificados no podría constituir, en ningún caso, la condición uniforme que unifique a unas personas como miembros de un grupo.”*

De otro lado, indica que la postura de la Corporación no ha sido unánime ni tampoco uniforme. Para ello cita un salvamento de voto del Consejero Jesús María Carrillo Ballesteros, contenido en el expediente AG-17001-23-31-000-2002-0079-01, en donde se afirmó que:

*“No sobra recordar que el elemento común al grupo es el daño y por esto el hecho de que el grupo sea o no preexistente constituye un aspecto que no configura la procedencia de las acciones de grupo, por lo tanto en conclusión, el grupo puede ser o no preexistente, lo que determina la configuración del grupo es el daño, que constituye la génesis del grupo, el momento de evaluar la procedencia de esta acción.”*

Así mismo, indica el actor que la sección segunda, en providencia del 24 de mayo de 2001, expediente AG-011, Consejera Ponente Ana Margarita Olaya, el Consejo de Estado consideró que *“resulta indiferente si el grupo existía con anterioridad al daño causado, pues el Legislador en manera alguna indicó esta condición para la existencia de la acción.”*

Concluye el actor, indicando que con la adopción del nuevo reglamento interno del Consejo de Estado, Acuerdo No. 58 de 2003, en el que se dispuso que la competencia para resolver sobre los asuntos relacionados con las acciones de grupo quedaría radicada en la sección tercera, se ha terminado por imponer en la práctica jurisprudencial la llamada *“teoría de la preexistencia del grupo”*.

Frente a esta situación el actor formula los siguientes cargos:

*Vulneración del principio de legalidad y del debido proceso sustantivo.*

Para el actor, las disposiciones contenidas en los artículos 3 y 47 de la ley 472 de 1998 no exigen la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad de la acción de grupo. Lo que implica que los jueces en este asunto han traspasado los confines de la ley para adoptar una posición restrictiva respecto de la procedibilidad. Para el actor, si el legislador hubiese querido introducir excepciones o prohibiciones en esta materia lo habría hecho de manera expresa.

De otro lado, afirma el actor que al no existir una norma jurídica que indique que los perjuicios causados a una serie de personas no preagrupadas previamente al hecho generador del daño, implica también una vulneración al principio de legalidad, pues de intentarse cualquier vía procesal, los jueces estarían en la obligación de declarar la nulidad por trámite inadecuado.

Señala también el actor, que la jurisprudencia del Consejo de Estado, desconoce la prohibición del artículo 84 de la Constitución *“cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permiso licencia o requisitos adicionales para su ejercicio”*

*Vulneración del principio de igualdad.*

Para el demandante, el Consejo de Estado desconoce el principio de igualdad, ya que limita el derecho de las personas no preagrupadas, y que han sufrido perjuicios con ocasión de un hecho dañino común, de acceder directamente a la administración de Justicia mediante la acción de grupo; limitación que introduce el Consejo de Estado sin que exista un *“fundamento constitucional ni legal”* para ello, o un *“argumento objetivo”*; o que sea necesario por la existencia del *“interés jurídico general”*; e incluso *“sin que la acción de los no preagrupados perjudique un interés ajeno.”* Acerca del alcance del principio de igualdad, el actor cita apartes de la sentencia C-371 de 2000 (sobre acciones afirmativas) y C-410 de 2001 (sobre el test de igualdad y la justificación del trato diferente).

Según el actor, la doctrina de la *“preexistencia del grupo”* no tiene carácter remedial, ni compensador, sino que por el contrario margina a las personas no preagrupadas y perpetúa su situación de desigualdad, ya que jamás podrían presentar acciones de grupo. De otro lado, negar la posibilidad de perseguir la indemnización por esta vía implica que las personas no preagrupadas deberán esperar el tiempo que tarde un proceso ordinario para ver satisfechas sus pretensiones (10 a 12 años), mientras que los preagrupados podrán

	<p>conseguir su propósito por la vía de la acción de grupo en un año aproximadamente.</p> <p><i>Vulneración del derecho fundamental a la libre asociación.</i></p> <p>Según el demandante, exigir el requisito de la preexistencia del grupo implica para esas personas el reconocimiento de la obligación de estar asociados. Esto en el fondo entraña una vulneración al derecho a la libre asociación, pues la improcedencia ante la no preexistencia del grupo, equivale a la negación de un privilegio por el hecho de no estar agrupados. Al respecto, cita apartes de la sentencia C-606 de 1992 que afirma que <i>“el derecho de libre asociación contiene el derecho de no asociarse. En efecto, el derecho de asociación... incluye también un aspecto negativo, nadie puede ser obligado directa o indirectamente a formar parte de una asociación determinada.”</i></p> <p><i>Vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia.</i></p> <p>Para el actor, el artículo 88 de la Constitución, que consagra las acciones populares y de grupo, estableció un criterio de preferencia de la acción de grupo como acción indemnizatoria respecto de las acciones ordinarias. En esta medida afirma que, la introducción de diferenciaciones a partir de la preexistencia o no del grupo, desconoce la voluntad del constituyente. Para el actor el <i>“derecho de preferencia”</i> indica que el aspecto de la existencia del grupo deba ser interpretado de manera amplia y no de manera limitada. Indica que <i>“entender que la preexistencia del grupo y su entidad social es lo que legitima a sus miembros cuando son afectados por un mismo hecho para acceder a un proceso preferente y sumario de reparación implicaría convertirlo en un derecho de -élites-”,</i> lo que según él, implicaría <i>“que sólo podría ser ejercido por las organizaciones y no por las personas de cultura –atrasadas- o del común, quienes se distinguen por actividades individuales e independientes.”</i> Concluye el actor indicando que, si la interpretación del Consejo de Estado logra consolidarse, esto podría conducir a que en la práctica <i>“la gran mayoría del pueblo colombiano (los no pertenecientes a organizaciones) jamás podría acceder a ese instrumento constitucional.”</i></p> <p>Violación del principio de cosa juzgada constitucional</p> <p>El actor afirma que la interpretación del Consejo de Estado desconoce algunos apartes de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellos señala contenidos de las sentencias T-528 de 1992, T-542 de 1992, SU-067 de 1993, C-473 de 1994, C-309 de 1997, C-215 de 1999 y C-1062 de 2000. No obstante, el actor se limita a referir algunos apartes de la jurisprudencia, sin que</p>
--	--

	<p>los mismos estén sucedidos por un análisis del caso.</p> <p><i>Violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.</i></p> <p>Por último, el actor afirma que la doctrina de la preexistencia del grupo impide que las personas no preagrupadas puedan constituirse como parte procesal en ejercicio de la acción constitucional de grupo. Para el actor, tal teoría desconoce la autorización del artículo 48 de la ley 472 de 1998, que permite a las personas que fueron dañadas, perseguir su indemnización mediante el ejercicio de la acción de grupo.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

### SENTENCIAS DE 2005

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	C-898 de 2005
Fecha de la sentencia	treinta (30) de agosto de dos mil cinco (2005).
Demandante	John Jairo Torres Poveda
Demandado	<p>Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 56; las expresiones “<i>El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente</i>”, contenidas en el numeral 2° del artículo 65; y contra el artículo 66 de la Ley 472 de 1998, “<i>Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones</i>”.</p>
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra del numeral 2 del artículo 65 y los artículos 56 y 66 de la Ley 472 de 1998 por ineptitud sustancial de la demanda.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El demandante afirma que las normas acusadas vulneran los

	<p>artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política.</p> <p>El actor pretende que se declare la inexequibilidad de los artículos y expresiones demandadas, como quiera que éstas: <i>“...violan flagrantemente el derecho de defensa, el derecho de igualdad, el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia, (...) porque en ellas se permite que la conformación del grupo sea establecida y definida en la sentencia, coartando la posibilidad jurídica para quienes finalmente queden incluidos en el grupo de excluirse, así como de ejercer a lo largo del proceso todos sus derecho como sí pueden hacerlo quienes sean incluidos en el grupo en la oportunidad prevista en la ley...”</i>.</p> <p>1.1. Artículo 65, numeral 2°</p> <p>El actor considera que la norma referida vulnera el derecho al debido proceso al disponer que la sentencia que ponga fin al proceso, en la medida en que acoja las pretensiones, debe contener entre otros elementos, el señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso con el fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 472 de 1998, pues de tal señalamiento: <i>“... se desprende una atribución al juez competente en materia de acciones de grupo, de individualizar a las personas que conforman el grupo hasta el momento de la sentencia, fijando para tal fin los requisitos con que deben contar los mismos. Siendo ello así, se hace imposible ejercer los derechos constitucionales y legales por el momento procesal en que son definidos los integrantes del grupo...”</i>.</p> <p>A su juicio, con la individualización de los integrantes del grupo en la sentencia, se obliga a quienes no se hicieron parte en el proceso a acogerse a lo decidido y probado en el mismo, situación que se puede presentar tanto cuando las personas no tienen conocimiento de la existencia del proceso, como en el caso en el que dichas personas pese a conocer el proceso, no consideraron estar incluidas en la definición del grupo establecido en la demanda”, de suerte que con tal definición posterior de las calidades de los individuos, se dificulta el ejercicio del derecho de defensa, pues éstos pierden la oportunidad procesal para manifestar sus pretensiones, participar en la definición del abogado que habrá de representarlos al integrarse el Comité a que alude el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, y fijar las directrices de su defensa técnica. Lo que en consecuencia apareja el desconocimiento del derecho al debido proceso. Así mismo, el actor señala que si en la sentencia se define quiénes son los beneficiarios de la indemnización, no puede hacerse obligatoria su aceptación por ese simple hecho, pues la persona puede considerar que esa indemnización es en realidad insuficiente.</p>
--	---

	<p>Señala que si bien el artículo 52 de la Ley 472 de 1998 prevé que en la demanda se deben expresar los criterios para identificar los individuos y definir el grupo, lo cierto es que el numeral 2 del artículo 65 permite la variación de esos criterios, así que es probable que sólo hasta el momento de la sentencia sea posible tener la certeza de pertenecer o no al grupo, especialmente si se considera que en la demanda misma se puede excluir a determinadas personas que por sus condiciones especiales considere el demandante que no son beneficiarias de la indemnización, de forma tal que: <i>“... los inicialmente excluidos del grupo pierden el derecho de participar activamente en el proceso, ejerciendo sus derechos fundamentales de igualdad y debido proceso, entendiendo que sobre esos hechos se configurará cosa juzgada por lo que tendrán, quieran o no, que adherirse a lo dispuesto en la sentencia, teniendo en cuenta que para ese estado de las cosas ya habrá prescrito su posibilidad de excluirse del grupo...”</i>.</p> <p>De otra parte, considera que la disposición acusada vulnera el derecho a la igualdad, en la medida en que la facultad del juez para determinar la configuración del grupo en la sentencia, <i>“restringe las oportunidades y derechos de las personas que entran a conformar el grupo, una vez concluido el proceso, en cuanto no gozaron de las mismas oportunidades ni derechos de asumir su defensa, actitudes y posturas frente al supuesto de la acción de grupo, de lo que sí pudieron hacer uso quienes tuvieron la certeza de pertenecer al grupo desde un comienzo”</i>.</p> <p>En ese entendido, manifiesta que es clara la discriminación injustificada en que incurre la norma acusada, pues: <i>“... las personas constituidas como parte del grupo desde el comienzo del proceso cuentan con más herramientas procesales que aquellos que se definen con posterioridad a la sentencia. Esto es así porque al tener la certeza de que se tienen las condiciones uniformes respecto de las cuales se generaron perjuicios, se está investido de la facultad de presentar todos los mecanismos que la ley provee para el ejercicio del derecho de defensa en los términos y condiciones que se permite por el ordenamiento jurídico, y de tal forma se asumen diversas actitudes que hacen que la sentencia se dirija en un determinado sentido. Lo que no sucede con quienes se vinculan al dictarse la decisión, puesto que ya se han evacuado todas las etapas del proceso y han precluido los términos para ejercer las diversas modalidades que reviste el derecho de defensa...”</i>.</p> <p>1.2. Artículo 56</p> <p>Considera el accionante que el artículo 56 vulnera los derechos al</p>
--	---



	<p>debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia, en la medida en que en dicha disposición incurre en varios errores, a saber: <i>“En primer lugar, nuevamente se permite al juez determinar en la sentencia quién es parte del grupo, con las consecuencias antes señaladas. En segundo lugar, se exige a quien no participó en el proceso una carga adicional que vulnera el principio de igualdad, entendiendo que por ser vinculado de manera intempestiva en la sentencia, debe iniciar un proceso con el fin de que se declare una indebida representación, ya que de lo contrario quedará vinculado a los efectos de la sentencia. Con un agravante violatorio a todas luces del debido proceso y a la igualdad, y es que no hay término para ejercer el derecho de exclusión en estos eventos, ya que es inaplicable el consagrado en el inciso primero del artículo 56, y adicionalmente existe un vacío respecto del juez competente para conocer esta acción de indebida representación...”</i>.</p> <p>En esos términos, afirma que la indebida representación de intereses no es el único evento en el cual las personas que integran finalmente el grupo pueden verse afectadas en sus derechos, pues también puede suceder que el representante efectivamente logre una indemnización para el grupo mala o buena, pero no por ello deja de ser un agravio para la persona que no tuvo oportunidad para actuar directamente en el proceso, ejercer su derecho pleno de acceso a la justicia, a través de su influencia en la determinación del abogado o la conformación del Comité que represente sus intereses, ya que lo que sucede es que queda vinculado para unos efectos jurídicos finales, pero no a consecuencia de cómo él pudo haber actuado directamente en el proceso, sino por lo que se le impone en virtud de la actuación del representante escogido por otros, por el simple hecho de compartir unas determinadas circunstancias con otras personas que conforman el grupo, contrariando además lo previsto en el artículo 49 de la Ley 472 de 1998.</p> <p>Hace énfasis en que la disposición acusada vulnera el derecho a la igualdad, pues establece una discriminación, dado que: <i>“... las personas definidas en el grupo desde el comienzo tienen la posibilidad de excluirse del mismo, si así lo desean, mientras que la persona vinculada por una sentencia, pero que no participó en el proceso, debe demostrar que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante, con lo que se ve de manera ostensible una desigualdad en las oportunidades y formas que tienen unas personas y otras personas de excluirse del grupo, ya que los definidos desde el principio con el mero hecho de precisar su voluntad de desvincularse así lo lograrán, mientras que los vinculados una vez proferido el fallo tendrán la difícil carga de la prueba en la que acrediten la indebida representación de sus</i></p>
--	--

*intereses, lo cual no tiene razón de ser, ya que unas y otras personas comparten igualdad de condiciones y características por lo cual no se justifica un trato diferenciado...”.*

De otra parte, considera que el inciso final del artículo 56 comporta una omisión legislativa de tipo relativo, pues si bien regula la posibilidad de ejercer el derecho de exclusión, omite fijar el término para efectos de su ejercicio cuando en la sentencia resulte vinculado un nuevo miembro, y en consecuencia obliga a éste de manera imperativa a acogerse a los resultados de la misma, pese a la voluntad que tiene la persona de ser excluido, pero cuyo derecho legítimo no pudo ejercer por no contar un término legal para esos fines.

### 1.3. Artículo 66

A juicio del actor, el referido artículo vulnera los mandatos constitucionales, toda vez que: *“... No es posible desde ningún punto de vista que la sentencia individualice las personas que van a ser beneficiarias de la indemnización y, por tanto, ellas sin tener conocimiento del proceso o conociéndolo –con la seguridad por ejemplo de que no estaban cobijadas por la definición de grupo-, queden vinculadas a la sentencia, con los efectos de cosa juzgada. Lo anterior se traduce en que no es posible para un ‘beneficiario’ de una acción de grupo instaurar de manera individual un proceso singular, por cuanto, haya recibido o no la indemnización, se entiende cobijado en la sentencia...”.*

En ese entendido, manifiesta que al vinculado en la sentencia se le restringe la posibilidad de demandar en acción individual, en tanto queda vinculado a lo dispuesto en un fallo, pero no por lo que él pudo aducir en su defensa a través de la designación del apoderado o en la participación en la integración del Comité, ni por las pruebas que pudo haber presentado, sino que de manera automática se le impone de forma unilateral una decisión en la que no tuvo ningún tipo de intervención y que por lo tanto le fue totalmente ajena.

Sobre el particular cita apartes de las sentencias C-540 de 1997 y C-893 de 2001.

En esos términos, considera entonces que: *“...es necesario, para la debida y efectiva aplicación de este derecho, que quien resulte beneficiado de la sentencia debe tener la oportunidad de actuar de manera directa y efectiva en pro de su defensa, ello se logra teniendo la real, mas no formal, oportunidad para ejercerlo, designando su abogado, o de conformidad con la Ley 472 de 1998, participando en la conformación del Comité presentando y solicitando diversos medios de prueba, y ejerciendo si es del caso su*

	<p><i>legítimo derecho de exclusión, es decir participando de manera activa en el procedimiento de administración de justicia...”.</i></p> <p>1.4. Cosa Juzgada</p> <p>El actor advierte que no existe cosa juzgada constitucional en relación con el numeral 2° del artículo 65 acusado, pues aun cuando la Corte en sentencia C-732 de 2000 se pronunció en relación con dicha norma, a su juicio, en aquella oportunidad esa Corporación se limitó a estudiar la constitucionalidad de los numerales 2° y 4° del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 a la luz de lo previsto en el artículo 29 superior, y de acuerdo con el cargo expuesto en esa oportunidad.</p>
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1236/05
Fecha de la sentencia	veintinueve (29) de noviembre de dos mil cinco (2005)
Demandante	: Jorge Alonso Garrido Abad
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el literal C del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 y el artículo 25 (parcial) de la Ley 44 de 1993.
Conoció en primera instancia	Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Decision	<p>Primero.- Inhibirse de emitir pronunciamiento sobre el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995</p> <p>Segundo.- Inhibirse de emitir pronunciamiento sobre la frase “y ejercer las atribuciones que la ley señale” contenida en el artículo 25 de la Ley 44 de 1993.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad presentó demanda de inconstitucionalidad contra el literal C del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 y contra la expresión “y ejercer las atribuciones que la ley

	<p><i>señale,</i>" contenida en el artículo 25 de la Ley 44 de 1993. El demandante considera que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 vulnera los artículos 13, 38, 61 y 93 de la Constitución y que el artículo 25 (parcial) de la Ley 44 de 1993 vulnera los artículos 13, 58 y 333 de la Constitución.</p> <p>1. Cargos presentados contra el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995.</p> <p>El demandante considera que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 incurre en una omisión legislativa relativa, ya que <i>"ha regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional y legal"</i> y según su apreciación esto conduce a una violación al derecho a la igualdad. Dicha violación es sustentada ya que, en el sentir del demandante, la norma excluye a los titulares derivados de una obra musical <i>"privándolos injustamente de explotar económicamente el derecho o los derechos que han adquirido sobre la obra musical"</i><sup>30</sup>. Igualmente, el demandante indica que la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 9 dispone la posibilidad de que una persona natural o jurídica distinta del autor, pueda ostentar la calidad de titular de derechos patrimoniales de autor.</p> <p>El demandante señaló que la norma acusada hace referencia a un requisito de funcionamiento en el que los alcaldes deben exigir a los establecimientos comerciales, dentro de los cuales se ejecutan públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor, la presentación del comprobante de pago de tales derechos, expedidos por las autoridades legalmente reconocidas. El alcance de la expresión <i>"autoridades legalmente reconocidas"</i>, contenida en la norma acusada, fue definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-509 de 2004. Dicha sentencia declaró la exequibilidad de la expresión en el entendido de que el comprobante de pago por derechos de autor puede ser expedido no sólo por las sociedades de gestión colectiva, sino además por los autores que acojan otras formas asociativas distintas a las sociedades de gestión o de manera individual.</p> <p>Para el demandante, tanto el texto de la norma como la interpretación condicionada de la Corte Constitucional excluye a los titulares derivados ya que <i>"según se infiere del texto acusado solo concede la posibilidad de expedir el comprobante de pago de derechos de autor a los titulares originales de los derechos</i></p>
--	---

	<p><i>patrimoniales, esto es a los autores</i>"<sup>31</sup> y lo anterior <i>"viola el derecho de igualdad que posee el titular derivado de los derechos de Autor, frente a los titulares originarios de las obras y que le ha sido otorgado por el artículo 13 Superior de la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena de 1993; para explotar dentro de las mismas condiciones legales esos derechos patrimoniales que le han sido cedidos."</i><sup>32</sup> Por lo tanto, considera necesario que la Corte Constitucional modifique su pronunciamiento.</p> <p>Adicionalmente, el demandante señala que el texto demandado viola el artículo 93 de la Carta Política pues vulnera los artículos 9 y 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, <i>"por estar integrada a nuestro Bloque de Constitucionalidad por sentencia C-1490 de 2000, de esa Corte Constitucional"</i> asegurando que:</p> <p>El texto nuevamente impugnado hace nugatorio el derecho de un Titular Derivado para ejercer las prerrogativas exclusivas que le fueron concedidas por las normas Comunitarias Superiores, como quiera que dentro de un establecimiento comercial abierto al público, se pueden estar utilizando, ejecutando o comunicando públicamente, obras musicales cuya titularidad derivada le pertenece, la cual no podrá hacer efectiva patrimonialmente en el acto, porque no puede utilizar este expedito mecanismo para la cobranza de derechos patrimoniales de autor establecido en el texto demandado.<sup>33</sup></p> <p>El demandante considera que la norma impugnada también lesiona el derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución, ya que se <i>"obliga a un titular derivado de derechos patrimoniales de autor a afiliarse a una asociación que gestione estos derechos de autor, para poder explotar económicamente las prerrogativas patrimoniales que adquirió el titular originario."</i><sup>34</sup></p> <p>La norma, según el actor, también viola el artículo 61 de la</p>
--	--

	<p>Constitución ya que restringe el ejercicio de la propiedad intelectual del titular derivado de derechos patrimoniales de autor cuando no existe ninguna discriminación legal entre los titulares originarios y los derivados sobre la explotación de los derechos patrimoniales.</p> <p>En la corrección de la demanda el actor adicionó a la misma que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 viola el derecho a la igualdad ya que <i>"se excluye a los Titulares Derivados de derechos patrimoniales de derechos de autor de la posibilidad de beneficiarse del expedito mecanismo de cobranza de esos derechos patrimoniales, establecida en la norma demanda"</i>. Adicionalmente, el demandante anota que la redacción de la norma acusada excluye inconstitucionalmente del ejercicio de ese derecho patrimonial de autor de autorización, al titular derivado o persona natural o jurídica porque según se desprende de la misma, ese titular no puede expedir el documento al que alude el literal c de la Ley 232 de 1995. Esto lo afirma teniendo en cuenta que <i>"la interpretación jurisprudencial que hizo la Corte en sentencia C-509 de 2004, de la frase "autoridades legalmente reconocidas", la cual hace parte del texto demandado; privilegió para tal autorización de derecho patrimonial solamente a las sociedades de gestión colectiva y al autor, es decir, a los Titulares Originarios de las obras musicales, dejando por fuera de tal posibilidad a los derivados."</i></p> <p>2. Cargos contra la expresión <i>"y ejercer las atribuciones que la ley señale"</i> contenida en el artículo 25 de la Ley 44 de 1993</p> <p>El demandante sostiene que la expresión acusada viola el derecho a la igualdad pues otorga un privilegio inconstitucional a las sociedades de gestión colectiva:</p> <p>La restricción impuesta por el texto demandado para que solamente unas personas jurídicas como son las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, puedan ejercer ciertas atribuciones propias de un titular original o derivado de derechos patrimoniales de autor; constituyen una irrazonable, desproporcionada e incoherente desigualdad a favor de unas personas jurídicas que legalmente solo pueden ser administradores de derechos de autor y en detrimento de otras personas jurídicas que son verdaderos titulares de esos derechos de explotación económica.<sup>35</sup></p> <p>Para el demandante, la expresión acusada viola el artículo 58 de la Constitución ya que <i>"vulnera la propiedad intelectual privada que</i></p>
--	--

	<p><i>tiene ese titular derivado porque le impide explotarla ejerciendo las atribuciones que normalmente ejercería como titular cualquier persona jurídica que adquiriera esos derechos patrimoniales de autor.</i>"<sup>36</sup></p> <p>Finalmente, considera que el texto objeto de examen debe ser declarado inexecutable por cuanto también viola el artículo 333 de la norma superior, pues limita el libre ejercicio de las actividades económicas a los titulares derivados. Al respecto expone que:</p> <p>La frase acusada, impide de manera inconstitucional que las atribuciones establecidas de los numerales 2, 3, 4 y 6 del artículo 13 de la Ley 44 de 1993, puedan ser ejercidas por quien adquirió derivadamente los derechos patrimoniales de autor con el objeto de convertirse en un empresario que explote legítimamente esas prerrogativas o bien, por quien simplemente desee comercialmente dedicarse a la administración de las mismas a cambio de un estipendio económico por tal servicio"<sup>37</sup></p> <p>En el escrito presentado para corregir la demanda el actor manifestó que la expresión acusada vulnera el artículo 333 de la Constitución <i>"en consideración a que le impide a la persona jurídica, Titular Derivado de derechos patrimoniales de autor ejercer libremente la actividad económica de explotación económica de las obras adquiridas o la de crear una empresa dedicada a la administración de derechos patrimoniales de autor"</i><sup>38</sup>. Igualmente, advierte que <i>"la redacción del texto demandado implica que esa persona jurídica o titular derivado de derechos patrimoniales de autor, no pueda ejercer libremente su actividad empresarial porque algunas de las atribuciones inherentes a dicho ejercicio, solo pueden ser realizadas por las sociedades de gestión colectiva."</i><sup>39</sup></p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA

Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1187/05
Fecha de la sentencia	veintidós (22) de noviembre de dos mil cinco (2005).
Demandante	Néstor Raúl Correa Henao
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial), 9 (parcial) y 17 de la Ley 4 de 1992, 14 (parcial) y 279 de la Ley 100 de 1993, y 1 de la Ley 238 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Decision	Declararse INHIBIDA para pronunciarse respecto de la constitucionalidad de los artículos 2 (parcial), 9 (parcial) y 17 de la Ley 4 de 1992, 14 (parcial) y 279 de la Ley 100 de 1993, y 1 de la Ley 238 de 1995, en consideración a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Para el demandante, las disposiciones impugnadas, al consagrar la existencia de regímenes pensionales especiales, vulneran el principio de igualdad, contemplado en el artículo 13 de la Carta Política.</p> <p>En dicho sentido, manifiesta que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el sistema pensional colombiano era un completo caos originado en la multiplicidad de regímenes pensionales que existían y señala que precisamente dicha desorganización intentó ser resuelta mediante la promulgación de la mencionada ley.</p> <p>Sin embargo, aduce que después de que la misma entrara en vigencia, el régimen pensional en Colombia continuó siendo dual, ya que de una parte se encuentra el denominado sistema general de pensiones, regulado por la Ley 100 de 1993 y, por la otra, existen distintos regímenes pensionales especiales o excluidos, que son avalados por la propia Ley 100 de 1993 y se encuentran reglamentados por diversas normas y convenciones colectivas.</p> <p>En este orden de ideas, pone de presente que la Ley 100 de 1993 adolece falencias de diverso orden, las cuales no son cosa distinta que las implicaciones que, tanto a nivel administrativo como a nivel fiscal, se derivan de las distintas reglas de transición y de las</p>

	<p>diferentes excepciones al sistema general.</p> <p>En su concepto, existen cuatro grandes problemas en el sistema pensional colombiano que la Ley 100 de 1993 no logró resolver, estos son:</p> <p>La fragmentación del sistema pensional: Afirma que la existencia de una pluralidad de regímenes pensionales especiales, con reglas heterogéneas, pone de presente una diversidad de requisitos y condiciones para acceder a la pensión que resulta intolerable, verbigracia las distintas edades para pensionarse, las diferentes las bases salariales y los diversos tiempos de cotización. Al respecto, señala que dicha situación no sólo no fue corregida por la Ley 100 de 1993, sino que, por el contrario, fue avalada por ella, dando lugar al establecimiento perpetuo de los regímenes pensionales especiales, excluidos del sistema general de pensiones.</p> <p>La inequidad del sistema: Por otra parte, alega que existe una desproporción evidente entre el porcentaje que las personas cotizan y lo que reciben como pensión, situación que resulta mucho más notoria en los regímenes pensionales especiales, puesto que quienes pertenecen a éstos no hacen aportes para pensiones o los hacen en un porcentaje muy inferior al que realizan quienes integran el sistema general. Ahora bien, dado que dichos regímenes deben pagar pensiones más altas, necesariamente deben recibir un mayor subsidio, es decir, debe haber una mayor transferencia de recursos por parte de todos los contribuyentes hacia ciertos grupos privilegiados en particular.</p> <p>La baja cobertura: Con relación a este problema indica que de cada cien personas de la tercera edad, setenta y cuatro se encuentran sin pensión.</p> <p>La insostenibilidad financiera: Finalmente, advierte que, si bien, el Decreto 3041 de 1966 estableció una financiación tripartita y escalonada del régimen pensional a cargo del Instituto de los Seguros Sociales, con recursos del Estado, del empleador y del afiliado, ello nunca se cumplió, razón por la cual no se conformaron las reservas necesarias para afrontar los requerimientos del futuro. Así las cosas, para el año 2005 tuvieron que financiarse pensiones con recursos del presupuesto nacional, lo cual actualmente es conocido como la “bomba pensional”. Por otra parte, hace notar que existe un desequilibrio flagrante entre las cotizaciones y los beneficios que se reciben, sobretodo en los regímenes pensionales especiales, razón por la cual las soluciones fiscales se tornan insuficientes, de modo que de continuar las actuales características del sistema, de manera indefectible se producirá un colapso de las finanzas públicas. En dicho sentido, añade que es claro que la</p>
--	--

	<p>verdadera protección de los derechos de los asociados se logra a través del equilibrio financiero del sistema y no por medio de la consagración de determinados privilegios que benefician a unos pocos.</p> <p>En ese orden de ideas, el ciudadano Correa Henao expone sus cargos en contra de las normas acusadas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El aparte acusado del literal a), artículo 2 de la Ley 4 de 1992, al avalar el hecho de que puedan existir regímenes pensionales especiales, alternos al sistema general de pensiones, infringe el principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 constitucional, puesto que el derecho a la seguridad social en pensiones, dada su estrecha relación con el derecho a la vida digna, se torna en un derecho fundamental, y no pueden haber derechos fundamentales de diversas clases, esto es, pensionados tipo A y pensionados tipo B. No se trata de lograr un igualitarismo matemático, puesto que es razonable que quienes coticen mayor tiempo o sobre una base salarial más alta, reciban una superior pensión, lo que es inconstitucional, a su juicio, es que existan regímenes pensionales especiales que contengan requisitos preferenciales para un determinado grupo poblacional, verbigracia que se les exija una menor edad para pensionarse o un menor tiempo de cotización.</li> </ul> <p>La existencia de diversas modalidades de regímenes pensionales no supera la realización de un test de igualdad, ya que establecer pensiones sin el requisito de la edad, con montos exorbitantes, sin haber cotizado o habiendo cotizado muy poco resulta abiertamente inconstitucional.</p> <p>Por otra parte, el subsidio que a través del presupuesto nacional se hace a las pensiones, se ha convertido en un tema de interés general, puesto que agotadas las reservas del Instituto de los Seguros Sociales, es el erario público el que entra a contribuir con el financiamiento de las mismas, por medio de transferencias fiscales directas, lo cual implica una disminución en otros gastos de contenido social que podrían llevarse a cabo, cosa distinta sería si los regímenes exceptuados fueran autosostenibles, o que el mayor porcentaje de su sostenimiento lo aportaran los cotizantes y no el Estado. Aquí la cuestión radica simplemente en lograr la aplicación del principio de la justicia redistributiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En dicho sentido, el literal II) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, al señalar que para la fijación del régimen salarial y prestacional de la Rama Legislativa, se tendrá en cuenta el reconocimiento de los gastos de representación y de salud y de las primas de localización, vivienda y transporte, cuando las circunstancias lo justifiquen, contraría el principio de igualdad, ya que establece prerrogativas</li> </ul>
--	---

	<p>desproporcionadas en favor de un sector en particular, en desmedro de los otros que componen el conjunto de servidores del Estado.</p> <p>- Por su parte, el segmento impugnado del artículo 9 de la Ley 4 de 1992, al estipular que los representantes legales de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta o asimiladas observarán con relación a las <i>negociaciones colectivas</i>, las directrices y políticas señaladas por las <i>Juntas y Consejos Directivos de las mismas</i> y las pautas generales fijadas por el <i>Conpes</i>, vulnera el principio de igualdad, pues a través de las convenciones colectivas se han establecido regímenes especiales exorbitantes que resultan discriminatorios. Así mismo, infringe lo establecido por los literales e) y f), numeral 19, del artículo 150, y los artículos 55, 115, y 211 de la Carta Fundamental, ya que otorga a órganos incompetentes la facultad de trazar directrices, políticas y pautas generales a los representantes legales de las empresas estatales para efectos de realizar convenciones colectivas.</p> <p>- El artículo 17 de la Ley 4 de 1992, al señalar que las pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores, no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista, también quebranta el principio de igualdad, pues estipula ciertas prerrogativas en favor de los parlamentarios, que no son acordes con las otorgadas a quienes pertenecen al sistema general de pensiones, en dicho sentido, se reitera que no pueden existir pensionados de tipo A y pensionados de tipo B, es decir, unos a los que se les conceden privilegios y otros a los que no. En este caso en particular, la sola condición de parlamentario no es un motivo que constitucionalmente justifique consagrar una diferenciación en tan extremas condiciones, como por ejemplo, el hecho de que se les liquide la pensión de acuerdo a lo devengado en el último año de servicios o que se les tenga en cuenta lo que perciben por todo concepto.</p> <p>- El artículo 14 de la Ley 100 de 1993, al disponer que con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o de sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, infringe el principio de igualdad, pues construye un igualitarismo matemático sobre realidades absolutamente diferentes, pues no es lo mismo el reajuste anual de una pensión derivada del sistema general de pensiones, que una</p>
--	---

	<p>pensión que tenga su origen en un régimen especial, por lo cual las pensiones que sobrepasen el máximo legal deben ser congeladas hasta que dicha cifra las alcance, y así puedan aumentar por igual.</p> <p>- El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, cuyo parágrafo 4 es adicionado por el artículo 1 de la ley 238 de 1995, que también se demanda, al contemplar la existencia de regímenes pensionales especiales, verbigracia el de los miembros no remunerados de las corporaciones públicas, el de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el de los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, vulnera el principio de igualdad, en la medida en que establece privilegios a favor de determinados sectores, en discriminación de quienes pertenecen al sistema general de pensiones.</p> <p>Lo mismo ocurre con otros regímenes pensionales especiales como el que corresponde a los magistrados de las Altas Cortes, al Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Registrador Nacional, el cual se asimila al de los Congresistas, el régimen que vincula a los funcionarios que se benefician de las convenciones colectivas y otros más como el aplicable al Banco de la República, a los funcionarios del sector salud dispersos en el país y con vinculación laboral periódica, a un desconocido grupo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidades estatales ya desaparecidas (Ferrocarriles Nacionales, la Caja Agraria, etc), entidades privatizadas y universidades entre otros, los son objeto de la presente demanda por extensión.</p> <p>No se demandan el régimen especial correspondiente a las Fuerzas Armadas, el de los servidores beneficiados con el régimen de transición y el régimen de los funcionarios de alto riesgo cuyo tratamiento excepcional si se encuentra justificado, según lo manifestado por el demandante.</p> <p>- Por otra parte, en consideración a las razones anteriormente expuestas, las normas acusadas, al avalar el hecho de que existan regímenes pensionales especiales que se apartan de lo dispuesto por el sistema general de pensiones, desconocen las siguientes disposiciones constitucionales: las finalidades últimas del pacto social entre los colombianos, consagradas en el preámbulo, los principios de solidaridad, trabajo, dignidad humana y prevalencia del interés general, (artículo 1), los fines esenciales del Estado, especialmente el de lograr un orden justo, (artículo 2), el derecho al trabajo (artículo 25), el derecho a acceder a cargos públicos (Artículo 40), los principios de igualdad y solidaridad que deben inspirar el sistema de seguridad social (artículo 46), la igualdad de oportunidades para los trabajadores y extrabajadores (artículo 53), el respeto de los derechos adquiridos (artículo 48), los pactos</p>
--	---

	internacionales de derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT (artículo 93), la armonía entre las ramas del poder público (artículo 113), la igualdad de los servidores públicos (artículo 123) y la igualdad, economía y coordinación de la Administración Pública (artículo 209).
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-059/05
Fecha de la sentencia	primero (1º) de febrero de dos mil cinco (2005).
Demandante	Javier Alejandro Acevedo Guerrero
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 1º y el artículo 5º (parcial) de la Ley 575 de 2000 <i>“Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996”</i> .
Conoció en primera instancia	Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Decision	Declarar EXEQUIBLES el parágrafo 1º del artículo 1º, y las expresiones <i>“deberá presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a su acaecimiento”</i> del artículo 5º de la Ley 575 de 2000.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A manera de introducción, el actor describe en su demanda el fenómeno de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista social y legal, partiendo de las estrategias jurídicas empleadas por el estado colombiano para sancionar este tipo de violencia (sicológica, sexual y física), que en su parecer se reducen a <i>“la creación y puesta en marcha de mecanismos legales internos”</i> y a <i>“la adopción de múltiples instrumentos de derechos humanos”</i>.</p> <p>Así mismo, identifica los tipos de interrelaciones que se presentan en torno a la violencia intrafamiliar: <i>“la primer (sic) de ellas es la afectación del uso y disfrute de los derechos de la familia en su conjunto; la segunda es la afectación de los derechos de los cónyuges; la tercera es la afectación de los derechos de la niñez; y la cuarta es la afectación de los derechos de la mujer”</i>.</p> <p>Hechas estas observaciones, expresa que el parágrafo del artículo 1º de la Ley 575 de 2000 es violatorio de los artículos 42, 43, 44 y 247 de la Constitución Política, por cuanto las figuras de los jueces de paz y los conciliadores en equidad no son medidas eficaces e integrales para atacar el fenómeno de la violencia intrafamiliar, pues su competencia como regla general se limita a conocer pequeñas causas, teniendo limitaciones para actuar jurídicamente conforme al derecho internacional de los derechos humanos.</p>

	<p>Agrega que el hecho de que sus actuaciones se basen en el criterio de equidad para solucionar estos conflictos, desconoce los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sobre medidas legales para resolver tales violaciones.</p> <p>Al respecto, considera que <i>“dentro de una legislación democrática y respetuosa de los derechos humanos, las medidas que se establezcan para dar cuenta de su violación, deben tener como constante dicha gravedad, por lo cual es inaceptable que este tipo de violencia se equipare a la proscrita (sic) el derecho policial o problemas de pequeñas causas”</i>.</p> <p>Para el efecto, se ampara en la sentencia C-536/95 de la Corte Constitucional, en la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 77 del Código de Procedimiento Penal, que atribuía competencia a los jueces de paz para conocer de las contravenciones, advirtiendo que existen ciertas conductas que no pueden ser sancionadas con criterios de equidad, pues sólo admiten juicios jurídicos.</p> <p>Señala el accionante, que en el caso de violaciones a los derechos humanos como es el caso de la violencia intrafamiliar, las consideraciones sentadas por la Corte deben aplicarse con mayor rigor, pues no sólo se deberá administrar justicia con conocimientos jurídicos, sino aplicando los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Sobre el particular, expone como premisa que <i>“mal haría, entonces, un sistema legislativo (sic) declarar constitucional una función de administrar justicia sin conocimiento jurídico cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, pero declararla inconstitucional cuando se trata de problemas querellables”</i>.</p> <p>Por otra parte, advierte que los problemas de violencia intrafamiliar -donde la constante es la falta de reconocimiento de uno de los miembros del grupo familiar sobre la condición de igualdad del otro y la consecuente relación de subordinación-, no permiten ser resueltos por las figuras señaladas pues su presupuesto fundamental es precisamente la condición de igualdad y voluntariedad de las partes para obtener una solución que dirima un conflicto.</p> <p>Por esta razón, considera que la solución al problema de la violencia intrafamiliar, <i>“sin perjuicio de las medidas psicológicas y de prevención, deberá estar fundamentada en derecho, tanto el concerniente al orden interno como al externo”</i>.</p> <p>Respecto a la violación del artículo 247 de la Constitución Política, por parte del parágrafo del artículo 1° de la Ley 575 de 2000, explica que teniendo en cuenta lo allí prescrito sobre la</p>
--	---



	<p>competencia de los jueces de paz para <i>“conocer y solucionar problemas de carácter individual o comunitario”</i>, debe observarse que una violación a los derechos humanos no puede asimilarse o equipararse a un problema de tal carácter, <i>“en la medida que, según la normatividad internacional y la jurisprudencia nacional, dichos actos superan la esfera de lo particular, influyendo en el mismo referente de sentido y finalidad del Estado”</i>, y su legitimidad en cuanto a la justiciabilidad de los derechos humanos.</p> <p>En cuanto a la expresión demandada del artículo 5° de la Ley 575 de 2000, considera que es inconstitucional, por cuanto vulnera los artículos 42, 43, 44 y 229 de la Constitución Política.</p> <p>Al respecto, explica que en respeto de los artículos constitucionales citados que protegen la familia, la mujer y la niñez, las medidas adoptadas para salvaguardarlos deben ser eficaces, pues el simple desarrollo formal de tal protección mediante un <i>“aparte normativo que, fácticamente sea incapaz de cumplir con el compromiso adquirido”</i>, es insuficiente. De ésta manera afirma que <i>“uno de los indicadores que deben usarse para analizar la eficacia o ineficacia de una norma, es la posibilidad real de su uso, dentro del cual el tiempo, por ejemplo, es uno de sus factores determinantes”</i>.</p> <p>Para el actor, la violación contenida por la norma acusada, <i>“consiste en la restricción que impuso el legislador para que la persona afectada pudiera acceder a un mecanismo eficaz que impida que el autor de la violación siga atacando y afectando a la víctima. Mecanismo que, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, es condicionado en la Convención [para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer] a un modo, tiempo o lugar, en tanto se entiende que el fenómeno de la violencia intrafamiliar tiene particularidades que lo hacen diferentes a otros, dentro de las cuales se destacan su carácter oculto y silencioso pero, a la vez, extremadamente sistemático”</i>.</p> <p>En concordancia con lo anotado, expresa que en este tipo de violación de los derechos humanos al interior de la familia, es difícilmente determinable el momento o fecha del suceso, así como el hecho mismo. El actor considera que ello se debe a dos razones: i) el carácter sistemático de la violación, por lo que <i>“la víctima no posee la capacidad de determinar el lugar o fecha de la misma, en tanto la convivencia de la víctima y victimario convierte la violencia en un acontecer rutinario, apartándose de la regla general en cuanto a violaciones a los derechos humanos se trata: el carácter especial, particular y sobresaliente que tiene sobre la realidad cotidiana un hecho violatorio”</i> y ii) la conceptualización de la violación, pues para la víctima es difícilmente determinable este tipo de agresiones, en tanto los imaginarios y representaciones sociales, tienen como característica en la mayoría de los casos, la</p>
--	---

	<p>aceptación de este tipo de conductas, por ejemplo, como obligaciones de pareja.</p> <p>Con base en lo expuesto, estima que <i>“no se puede permitir dentro de nuestra legislación interna, normas que, tan sólo dotadas de eficacia simbólica, pretendan responder a los fenómenos negativos que se dan en nuestra sociedad y obviar el contenido de los derechos consagrados en nuestra carta”</i>.</p> <p>Finalmente, manifiesta que <i>“la jurisprudencia nacional e internacional ha sido enfática en afirmar que los términos de prescripción y/o caducidad en cuanto a violaciones a los Derechos Humanos debe ser, por lo menos, sumamente amplia”</i>.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Razonabilidad del plazo para solicitarlas (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>El problema jurídico de fondo que debía resolverse al examinar la constitucionalidad de dicha expresión no era la facultad del Legislador de establecer un plazo para solicitar las medidas de protección previstas en la Ley 294 de 1996, sino si el plazo de treinta días era razonable y proporcional o resultaba contrario para la protección de los principios, derechos y valores constitucionales en juego.</i></p> <p>MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Importancia de los bienes jurídicos constitucionales que pretenden salvaguardar (Salvamento parcial de voto)</p> <p>HECHO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Dificultades para su interpretación (Salvamento parcial de voto)</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Exclusión de las víctimas de procesos continuados de agresión (Salvamento parcial de voto)</p> <p><i>Mi principal reproche a la opinión mayoritaria es que esta parece desconocer una terrible realidad de la violencia intrafamiliar, cual es que cuando un sujeto ha sido víctima de un proceso continuado de agresión, al cabo de cierto tiempo puede terminar por modificar sus patrones de conducta sin que el agresor deba someterlo a nuevos</i></p>

	<p><i>actos o hechos de violencia, y precisamente estas graves situaciones, que mi juicio caben perfectamente dentro del concepto de violencia intrafamiliar, estarían excluidas de las medidas de protección en virtud de la expresión acusada.</i></p> <p>MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Plazo para solicitarlas establece obstáculos para la defensa de los principios y valores constitucionales (Salvamento parcial de voto)</p> <p>VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Naturaleza/VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Efectos en las víctimas/PERSONA EN CONDICION DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Imposibilidad de acudir dentro del término legal para la defensa de sus intereses (Salvamento parcial de voto)</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-668/05
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de junio de dos mil cinco (2005)
Demandante	Alvaro José Rodríguez Vargas
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión <i>“Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otra entidades”</i> contenida en el inciso final del párrafo 1º del artículo 9º de la Ley 397 de 1997 <i>“Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Decision	Declarar INEXEQUIBLES las expresiones <i>“Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otra entidades”</i> , contenida en el inciso final del párrafo 1º del artículo 9º de la Ley 397 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante afirma que el último inciso del párrafo primero del artículo 9 de la Ley 397 de 1997 vulnera los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política.</p> <p>Afirma el actor que el inciso acusado viola el artículo 63 constitucional, toda vez que si todos los bienes que integran el patrimonio arqueológico sumergido pertenecen por derecho propio e inalienable a la Nación, es inconstitucional que la expresión acusada establezca la posibilidad de su oferta al Estado mismo o a cualquier entidad pública o privada, pues ello implica una evidente contradicción frente a lo previsto por el Constituyente, que calificó dichos bienes con el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que implica que es imposible disponer de su propiedad, incluso por el Estado mismo, puesto que son parte de la cultura y de la identidad nacional, y sin que exista posibilidad alguna de que sean sustraídos de tal destino específico.</p>

	<p>En esos términos, considera que: <i>“...La preservación de la integridad del patrimonio arqueológico sumergido, en todas las etapas de su localización y rescate es parte integral de la formación de la identidad nacional, por ello permitir que parte de ese patrimonio pueda ser ofrecido por el denunciante a otras entidades, que pueden ser públicas o privadas, cuando la Nación, es indiscutiblemente dueña del mismo, por derecho superior, (...), conduce por lo menos eventualmente, a un detrimento del bien cultural inalienable, vulnerando consigo el artículo 70 de la Constitución...”</i>.</p> <p>Así mismo, estima que el inciso acusado es ambiguo, pues contiene conceptos “etéreos”, no definidos por la misma norma y que por ausencia de interpretación legal <i>“generan incertidumbre dentro del régimen jurídico que regula el patrimonio cultural y arqueológico sumergido en Colombia”</i>.</p> <p>Advierte que no se explica: <i>“... ¿por qué razón el legislador extendió la participación de la figura del ‘denunciante’ al desarrollo de la etapa del contrato de rescate? más aún, no se entiende ¿por qué, para los contratos de rescate, el legislador le estipuló al denunciante –como obligación legal- que debe ofrecer?, y ¿por qué no debe ofrecer el rescatista?, y lo anterior no tiene sustento en tanto que el ‘denunciante’, al ser reconocido por un acto administrativo, y al poner en conocimiento de la autoridad competente las coordenadas dentro de las cuales puede hallarse un naufragio, -sus derechos y efectos jurídicos- de conformidad con el régimen normativo aplicable, queda condicionado a que se rescate dicho patrimonio sumergido dentro de las coordenadas por él suministradas, pero no se extiende más allá de eso...”</i>.</p> <p>En ese entendido, señala que el inciso acusado es inconstitucional al extender los derechos del denunciante, permitiendo que por medio del contrato de rescate se haga propietario de unos objetos que conforman el patrimonio cultural sumergido de la Nación. Para fundamentar esta afirmación, el actor cita apartes de la sentencia C-474 de 2003.</p> <p>Considera que se puede dar otra posible interpretación a la expresión acusada, en cuyo caso las razones de la inconstitucionalidad de la norma serían otras, pues se fundamentarían en las respuestas a las siguientes preguntas: <i>“... ¿Qué es lo que debe ofrecer el denunciante?, más aún ¿Cuál es la razón objetiva, de orden constitucional o legal? por qué el denunciante debe ofrecer a la Nación objetos que por derecho le corresponden?, es decir, de conformidad con la lógica común, el denunciante, al ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, ¿recibe algo a cambio o en retribución de</i></p>
--	---

	<p><i>ese ofrecer?, y lo anterior, es razonable en el sentido de pensar que si cualquier persona ofrece a otra, cualquier bien o servicio, necesariamente debe recibir una contraprestación o ¿qué sentido tendría para el oferente –que en este caso, por mandato de la ley es el denunciante- hacer el ofrecimiento?...”.</i></p> <p>En esos términos, el demandante manifiesta que de entenderse el tenor literal del precepto acusado en el sentido de que para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y luego a otras entidades, para así obtener a cambio o en contraprestación los gastos causados y sufragados por el denunciante, para la localización, ubicación, recuperación y rescate del patrimonio cultural y arqueológico sumergido, se vulneraría igualmente lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Nacional.</p> <p>Precisa que el patrimonio cultural sumergido, no es una categoría autónoma, sino que de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 397 de 1997: <i>“...‘Pertenece al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de la Cultura’, ello implica necesariamente, que el patrimonio cultural sumergido, está supeditado a los efectos jurídicos señalados expresamente por el Constituyente y por el legislador, a las categorías del Patrimonio Cultural de la Nación, si estamos en presencia del Patrimonio Cultural Sumergido, por su valor histórico, determinado por el Ministerio de la Cultura, o al Patrimonio Arqueológico de la Nación, si estamos en presencia del Patrimonio Arqueológico Sumergido, por su valor arqueológico, determinado por el Ministerio de Cultura...”.</i></p> <p>Recuerda que de conformidad con lo previsto en el artículo 72 constitucional, el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, tal como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 2000, y como lo prevé el artículo 5º de la Convención sobre Tráfico Ilícito del Patrimonio Cultural.</p> <p>Así mismo, manifiesta que de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 333 de la Constitución Nacional, es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación, y además anota el demandante que el alcance de la libertad económica lo determina la ley cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-624 de 1998.</p> <p>Finalmente el demandante afirma que esta Corporación en la sentencia C-474 de 2003, incurrió en un error en su parte motiva,</p>
--	---

	<p>en la medida en que equiparó las categorías de Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Arqueológico de la Nación, como si se tratara de dos categorías de bienes que fueran sinónimas, con el mismo régimen de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad, efectos jurídicos que por disposición expresa del Constituyente de 1991 y de conformidad con lo previsto en el artículo 72 superior, se reservaron únicamente a las categorías constitucionales del Patrimonio Arqueológico de la Nación, y a los demás bienes culturales que conforman la identidad nacional. Al respecto cita el aparte pertinente del citado fallo.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-928/05
Fecha de la sentencia	seis ( 6 ) de septiembre de dos mil cinco (2005).
Demandante	Yaneth Amparo Anaya Estévez
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 19 (parcial) de la Ley 782 de 2002
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Decision	DECLARAR EXEQUIBLE en forma condicionada, por el cargo examinado, el inciso 2o del Art. 50 de la Ley 418 de 1997, modificado por el Art. 19 de la Ley 782 de 2002, en el entendido de que el indulto a los nacionales que individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley únicamente podrá concederse por los delitos políticos y los delitos conexos con aquellos
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>La demandante considera que la norma parcialmente demandada quebranta los Arts. 150, Num. 17, y 201, Num. 2, de la Constitución, con los fundamentos que se exponen enseguida:</p> <p>Afirma que conforme a lo dispuesto en los Arts. 150, Num. 17, y 201, Num. 2, superiores, el indulto y la amnistía sólo pueden concederse por delitos políticos y que la norma demandada amplía el primero a los delitos comunes, por lo cual la oposición entre esta última y los citados preceptos constitucionales es manifiesta. Agrega que el legislador debe respetar la voluntad del constituyente pues de lo contrario trastoca los presupuestos del Estado de Derecho e impide la paz y la convivencia sociales.</p> <p>Señala que la Corte Constitucional ha expuesto de modo uniforme este criterio y transcribe apartes de la Sentencia C-695 de 2002.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA



Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

## SENTENCIAS DE 2006

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-193/06
Fecha de la sentencia	marzo quince (15) de dos mil seis (2006).
Demandante	Jorge Alberto Gómez Montoya
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 9º, 24, 32 y 41 del artículo 4º y contra los artículos 26, 33 y 35 de la Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes”
Conoció en primera instancia	Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Decision	Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la sentencia, el artículo 4º, numerales 9º, 24, 32 y 41 y los artículos 26, 30, 33, y 35 de la Ley 400 de 1997 <i>“Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes.”</i>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante Jorge Alberto Gómez Montoya considera que los numerales 9, 24, 32 y 41 del artículo 4º así como los artículos 26, 30, 33 y 35 de la Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes” vulneran el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Nacional, el derecho a elegir libre oficio y profesión establecido en el artículo 26 de la Constitución Nacional y el derecho al trabajo contenido en el artículo 25 superior. A continuación, se hace una síntesis de las razones que expone el actor para sustentar su demanda.</p> <p>El actor estima que quienes elaboraron la Ley 400 de 1997 no tuvieron en cuenta la profesión de constructor en arquitectura e ingeniería ni otras muchas profesiones con base en el estudio de las cuales se obtiene un perfil profesional adecuado para desempeñar las funciones de constructor, interventor, revisor de diseños, supervisor técnico, como las previstas en la mencionada Ley. A juicio del actor, resulta inequitativo que personas preparadas académicamente “para asumir la construcción de todo tipo de proyectos, cuya responsabilidad cubre diferentes fases de procesos constructivos, tales como la planeación, organización y ejecución así como los servicios posteriores a la entrega de la obra” no sean considerados en la realización de proyectos de construcción y, por el contrario, profesionales como los ingenieros civiles y los arquitectos si lo sean .</p> <p>El accionante dedica una parte de su escrito a describir el concepto y alcances de la igualdad e indica cómo el juicio de igualdad implica</p>

	<p>la elección de un criterio, de un <i>tertium comparationis</i>, con base en el cual bien se equipara una situación con otra, o bien se distingue una situación de otras. Opina que esos criterios relevantes para realizar equiparaciones o diferenciaciones no pueden ser indiferentes al derecho. En este orden de ideas, es el Legislador el único competente para establecer tales criterios al ser la expresión misma de la voluntad general. Ahora bien, de conformidad con lo indicado por el demandante, el Legislador no puede pasar por alto la necesidad de ajustarse al principio de igualdad y no puede “establecer entre los ciudadanos diferencias que no resulten del libre juego de las fuerzas sociales. Entendida la sociedad civil como un hecho natural, ajeno al Estado, no hay obstáculo alguno para considerar naturales, y en consecuencia jurídicamente relevantes, las diferencias que la sociedad establece.”</p> <p>A lo anterior se suma, en opinión del actor, lo dispuesto en el artículo 26 superior, según el cual, “toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La Ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes u oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. (Énfasis marcado por el actor fuera de texto).//Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.” (Énfasis marcado por el actor fuera de texto).</p> <p>Si bien el Legislador está autorizado para establecer distinciones y exigir títulos de idoneidad para efectos de regular el ejercicio de ciertas profesiones que impliquen riesgo social, afirma el demandante, es preciso mirar “cuándo se está ante una diferenciación irrelevante y, por tanto frente a un trato discriminatorio,” agrega, no obstante, que con las disposiciones demandadas incurrió el Legislador en una diferenciación injustificada desde el punto de vista constitucional y por consiguiente solicita a esta Corporación declarar la inexecutable de los preceptos demandados.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-716/06
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) de agosto de dos mil seis (2006)
Demandante	Miguel Ángel González Ocampo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 103 del Código de Comercio (parcial), modificado por el artículo 2° la Ley 222 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA.
Decision	Declarar INEXEQUIBLE la expresión <i>“Para el aporte de derechos reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111”</i> contenida en el segundo inciso del artículo 103 del Código de Comercio, modificado por el artículo 2° la Ley 222 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del demandante, la norma que acusa desconoce los artículos 1°, 2°, 13 y 58 de la Constitución Política. Para explicar las razones por las cuales se produciría la violación de las citadas normas superiores, expone esta argumentación:</p> <p>Inicialmente vierte unas consideraciones generales relativas a la protección que la legislación hace del patrimonio de los incapaces, dentro de la cuales menciona que los artículos 483 y 484 del Código Civil, referentes a la enajenación de bienes inmuebles de esta clase de personas, exigen una autorización judicial de tal acto jurídico, a fin de proteger sus intereses. La autorización judicial se produce dentro de un proceso de jurisdicción voluntaria, en el cual el juez debe tener conocimiento de la causa de la enajenación y, además, la venta debe producirse en pública subasta.</p> <p>Esta protección especial dispensada por las normas comentadas obedece, dice, a la misma filosofía de la Constitución Política, que en su artículo 13 dispone que, en virtud del principio de igualdad, las personas en situación de debilidad manifiesta deben ser objeto de especial protección.</p> <p>En sentido contrario, prosigue la demanda, el artículo 103 del</p>

	<p>Código de Comercio, al decir en la expresión acusada que para el aporte en sociedad de derechos reales de incapaces que recaigan sobre inmuebles <i>“basta el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111”</i>, desconoce las exigencias constitucionales de protección a los más débiles. Lo anterior, por cuanto el artículo 111 del Código de Comercio dispone que <i>“(c)uando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes, o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y lugar previstos en el Código Civil, para los actos relacionados con la propiedad inmueble.”</i> Así, dice el demandante, la remisión al artículo transcrito da a entender que sólo debe cumplirse con los requisitos que allí se mencionan, relativos al registro, desconociendo las exigencias concernientes a la autorización judicial con conocimiento de causa y a la venta en pública subasta (aunque por la naturaleza de las cosas, explica, este último requisito no debe exigirse tratándose de aportes en sociedad).</p> <p>Recalca entonces el demandante, que el procedimiento que contemplaba el Código de Comercio antes de la reforma introducida por la Ley 222 de 1995 exigía para el aporte en sociedad de derechos reales de los menores incapaces, ejercidos sobre inmuebles, la autorización judicial con conocimiento de causa; por lo cual, encuentra inexplicable que bajo la vigencia de la Constitución de 1991 se haya dado tal cambio legislativo, que en forma clara erradicó el procedimiento de protección, extendiendo la norma, además, a todos los incapaces y no sólo a los menores.</p> <p>Concretando las razones de la violación del artículo 13 superior, señala que al producirse la reforma legislativa explicada, <u>“se desconoce el pilar constitucional de igualdad real y especial protección a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.”</u></p> <p>Completa la anterior explicación, indicando que la naturaleza jurídica del aporte en sociedad no es otra que la de una transferencia de la propiedad, que aunque confiere el derecho a percibir utilidades, sin embargo implica tan solo un “crédito eventual”. Por ello, dice, el derecho del socio es aleatorio. Así las cosas, encuentra inconstitucional que se haya desprotegido el patrimonio de los menores permitiendo que se vincule a negocios donde el azar o la incertidumbre sobre la ganancia o las pérdida es la regla general.</p> <p>Agrega entonces, que aunque posiblemente la reforma del artículo 103 del Código de Comercio pretendió satisfacer el principio de</p>
--	--

	<p>agilidad del tráfico mercantil, no era constitucionalmente posible arriesgar el patrimonio de los incapaces, en aras de realizar el referido postulado comercial.</p> <p>Por otro lado, recuerda que el artículo 44 superior impone importantes deberes a la familia, la sociedad y el Estado, para el logro del desarrollo de los menores de edad. De modo que la norma acusada, al desproteger el derecho prevalente de los menores sobre la propiedad, desconoce también la aludida norma constitucional.</p> <p>Finalmente, señala que “de la aplicación del artículo 103 del Código de Comercio, se ha derivado un abandono a los fines del Estado (artículo 2 C.P.) pues en la medida en que no sean cumplidas las disposiciones constitucionales mencionadas anteriormente, no se estaría, como lo dispone el texto constitucional, garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma.”</p> <p>En síntesis, el demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma que parcialmente acusa, por cuanto “de su aplicación surge una desprotección a los derechos del menor, al evadirse un trámite que por el contrario la garantiza, de contera violándose disposiciones constitucionales que exigen un tratamiento especial con ciertas personas como desarrollo y concreción del principio de igualdad...”.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JAIME ARAÚJO RENTERÍA</p> <p>En mi concepto, la declaración de inexequibilidad de la norma demandada, implica que se petrifique las opciones que tiene el legislador para proteger los derechos de las personas incapaces, pues las reduce o restringe a la exigencia de autorización judicial previa para que la persona incapaz pueda realizar aportes a sociedades de derechos reales sobre inmuebles, por intermedio de sus representantes o con su autorización. En mi criterio, dicha autorización no garantiza la protección de los derechos del incapaz, ni elimina el riesgo para éstos, quienes al realizar un aporte a la sociedad, deben asumir tanto las utilidades como las pérdidas, como cualquiera de los socios. En este caso se trata, a mi juicio, de una decisión propia de la libertad de configuración del legislador.</p> <p>En razón a lo expuesto, salvo mi voto a esta sentencia.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA

Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-029/06
Fecha de la sentencia	veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006)
Demandante	Jorge Enrique Osorio Reyes
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2º del literal b del párrafo 20 del artículo 23 de la Ley 352 de 1997
Conoció en primera instancia	Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Decision	PRIMERO. DECLARAR INEXEQUIBLE el numeral 2, del literal b, del párrafo 2º, del artículo 23 de la Ley 352 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Señala el ciudadano Jorge Enrique Osorio Reyes que el aparte demandado desconoce el derecho a la igualdad, el amparo especial a la familia y el derecho al acceso a los servicios de salud. Los sujetos presuntamente discriminados son los hijos e hijas beneficiarios de los afiliados sometidos al régimen de cotización en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, puesto que la norma obstaculiza la constitución de una familia por vínculo natural o jurídico antes de cumplir los veinticinco años de edad con el fin de no perder la atención en materia de salud como beneficiarios de sus padres.</p> <p>Igualmente, estima que se desconoce el libre desarrollo de la personalidad de los individuos que queriendo contraer nupcias o adquirir el status de compañero o compañera permanente se abstienen de hacerlo para no perder el subsidio.</p> <p>Además, indica el demandante que la Corte ya ha considerado contrario a la Constitución la discriminación por el estado civil de la persona. Cita como ejemplos la Sentencia C-309/96, C-588/92 y C-870/99.</p> <p>Por tanto, solicita la inexequibilidad del aparte acusado.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA



Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-340/06
Fecha de la sentencia	tres (3) de mayo de dos mil seis (2006).
Demandante	Carlos Alberto Marmolejo Giraldo
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 24 de la Ley 435 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Decision	Primero: Declarar INEXEQUIBLE, el parágrafo del artículo 24 de la Ley 435 de 1998 <i>“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones auxiliares, se dicta el código de ética profesional, se establece el régimen disciplinario para estas profesiones, se estructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones”</i> .
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano demandante considera que la norma acusada infringe los artículos 150 numeral 2° y 26 de la Constitución, por las siguientes razones:</p> <p>Formula un primer cargo consistente en que la potestad de expedir códigos en todos los ramos de la legislación, y de reformar sus disposiciones es privativa del Congreso de la República, conforme al numeral 2° del artículo 150 de la Constitución. En consecuencia, la facultad que la norma acusada adscribe al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura para que expida mediante acuerdo <i>“el Código de Procedimiento Disciplinario que debe tener fuerza de ley”</i> es violatoria del mencionado precepto superior.</p> <p>Manifiesta, con apoyo en la doctrina, que el derecho procesal es un derecho público en cuanto se refiere a una de las funciones esenciales del Estado, sus normas son de orden público, por lo que corresponde a la ley señalar cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso, o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que le sea permitido a los particulares derogar dichas normas.</p>

	<p>3. Propone un segundo cargo fundado en que conforme al artículo 26 de la Constitución corresponde al legislador establecer los controles debidos a las profesiones legalmente reconocidas, con mayor razón respecto de aquellas cuyo ejercicio involucre riesgo social como es el caso de la arquitectura. Aduce que un órgano administrativo como es el Consejo Profesional Nacional, puede ejercer la inspección y vigilancia de la profesión de arquitectura, pero los controles debidos sólo podrán ser establecidos por el legislador, y una forma de establecer tales controles es mediante la expedición de normas básicas sobre procedimiento disciplinario. En criterio del actor, el legislador se extralimitó en su función constitucional al delegar en el Consejo mencionado la facultad de <i>“establecer los debidos controles a la profesión de arquitectura, es decir expedir la normatividad básica relacionada con el procedimiento disciplinario”</i>.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-892/06
Fecha de la sentencia	primero (1) de noviembre de dos mil seis (2006).
Demandante	Santiago Guijò Santamaría.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 de la Ley 472 de 1998, <i>“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”</i>
Conoció en primera instancia	Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Decision	INHIBIRSE de proferir un fallo de fondo respecto del artículo 35 de la Ley 472 de 1998, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante solicita a la Corte <i>“que declare la constitucionalidad condicionada del artículo 35 de la Ley 472 de 1998, bajo el entendido de que la sentencia que conceda el amparo de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda hace tránsito a cosa juzgada absoluta y tiene efectos ‘erga omnes’, mientras que las sentencias que nieguen el amparo de los derechos colectivos invocados en la demanda hacen tránsito a cosa juzgada relativa, es decir siempre y cuando no surjan nuevos hechos o circunstancias que los amenacen o vulneren, o que se presenten pruebas que demuestren que real y efectivamente se amenazan o vulneran los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda inicial y a las cuales no tuvo acceso el juez al momento de decidir la demanda de acción popular.”</i></p> <p>La demanda empieza por aclarar los estudios adelantados en esta materia por la Fundación Ombudsman Colombia, que dirige el actor lo cual no se opone a la presentación de la acción de inconstitucionalidad en calidad de ciudadano en ejercicio. Adicionalmente, manifiesta que el objetivo particular de la demanda <i>“es ajustar la ley (general y abstracta) de acciones populares a la Constitución Nacional”</i>, indicando que dicha Fundación como el actor representan los intereses de la señora Laura Díaz Herrera dentro de la acción popular 2002-2018, que se tramita en la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuyas pretensiones fueron negadas en primera instancia por el Tribunal</p>

	<p>Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en virtud <i>“de la excepción de cosa juzgada. Esta declaración con el objetivo de darle la seriedad que le corresponde al asunto”</i>.</p> <p>Inicia su exposición de la demanda refiriendo a la jurisprudencia constitucional sobre la cosa juzgada en materia de acciones populares, para lo cual trae a colación la sentencia C-215 de 1999. Señala que en dicha oportunidad se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 27 de la Ley 472 de 1998, en el entendido que <i>“la sentencia que aprueba el pacto de cumplimiento hace tránsito a cosa juzgada, salvo que se presenten hechos nuevos y causas distintas a las alegadas en el respectivo proceso, así como informaciones de carácter técnico que no fueron apreciadas por el juez y las partes al momento de celebrarse dicho pacto, evento en el cual la sentencia hace tránsito a cosa juzgada relativa.”</i></p> <p>Indica que la Corte ha debido extender el alcance de dicho fallo de exequibilidad condicionada al artículo que ahora se demanda, en virtud del principio de unidad normativa, pues, el efecto de cosa juzgada de la sentencia que se profiere en las acciones populares no se predica sólo de aquélla que aprueba el pacto de cumplimiento, sino de cualquiera otra que pone fin al proceso, en especial cuando se deniegan las pretensiones de la demanda. Aduce que <i>“como dicho pronunciamiento no se produjo, se hace necesario demandar la inconstitucionalidad del artículo 35 de la Ley 472 de 1998”</i>. Y agrega que <i>“si de acuerdo con la sentencia mencionada en un pacto de cumplimiento en el que se acuerda la protección de determinado derecho colectivo el carácter de cosa juzgada de la sentencia que lo aprueba es relativo con más veras lo será el de una sentencia que niega su protección.”</i></p> <p>Luego de citar algunos apartes de la sentencia C-215 de 1999, el actor pasa a referirse a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la cosa juzgada en las acciones populares. Señala que los precedentes más importantes sobre dicho tema están contenidos en las sentencias del 7 de noviembre de 2002 (expediente 2002-0002) y del 11 de septiembre de 2003 (expediente 2001-09257), los cuales son reiterados en otros fallos del 11 de diciembre de 2003 (expediente 2002-9257), 12 de febrero de 2004 (expediente 2002-1700) y 2 de junio de 2005 (expediente 2004-00814), proferidas por la Sección Tercera de dicha corporación. Añade que como estos fallos no son obligatorios para otros jueces conforme al artículo 230 superior, se han proferido decisiones en los cuales se ha aplicado literalmente el artículo 35 de la Ley 472 de 1998, en clara violación de la Constitución, <i>“sin que necesariamente se tenga que dar una interpretación de la misma, ya que la norma es clara”</i>.</p> <p>A continuación, cita apartes de las sentencias del 7 de noviembre</p>
--	--

	<p>de 2002, 11 de septiembre de 2003 y 12 de febrero de 2004, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, para referir a la sensibilidad de la cosa juzgada en las acciones populares y que uno de los especiales lineamientos trazados es la identidad de los demandados en uno y otro proceso, para así significar que <i>“aunque no se exige identidad de los demandantes o actores populares, sí se requiere que exista una identidad en los accionados, es decir que no habrá cosa juzgada si los demandados son diferentes”</i>.</p> <p>En relación con las normas constitucionales consideradas violadas, el demandante indica que la norma acusada desconoce el artículo 2 de la Constitución, en cuanto al principio de efectividad de los derechos, pues, establece que la sentencia hace tránsito a cosa juzgada absoluta, sin diferenciar los casos concedidos de los que niegan las pretensiones de la demanda en los cuales sólo debería producirse la cosa juzgada relativa al no protegerse los derechos e intereses colectivos. Considera así que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda no puede tener efecto de cosa juzgada absoluta, ya que es posible que el interés colectivo continúe afectado, sólo que quizá en el proceso no se pudo probar dicha circunstancia. Se harían intangibles los fallos que niegan la protección del interés colectivo, así aparezcan pruebas que permitan demostrar su quebrantamiento o <i>“porque se vea enfrentada a una nueva vulneración de los derechos colectivos sobre los que versó la sentencia, ya sea por causas distintas o hechos nuevos”</i>, por lo que se <i>“despoja a la comunidad de ejercer una nueva acción popular para corregir una nueva situación de vulneración de esos derechos colectivos o para demostrar que en efecto existió y ha existido una vulneración a sus derechos.”</i></p> <p>Respecto al desconocimiento del artículo 29 de la Constitución, anota que la titularidad de la acción popular es difusa y, en esa medida, puede darse que el demandante no pertenezca a la comunidad afectada, no cuente con la idoneidad suficiente para demandar, no tenga acceso a la información relevante para sacar adelante la acción, no cuente con el apoyo técnico que el caso requiere, no solicite pruebas o, simplemente, obre de mala fe a partir de una demanda que de antemano quiere llevar a su fracaso. Por tanto, en tales casos, el artículo 35 de la Ley 472 de 1998 vulnera el derecho al debido proceso <i>“tanto de la comunidad como de un posterior actor que quiera demandar la protección de determinado derecho colectivo, después de que ya había cursado sin éxito un proceso con el mismo objeto.”</i> En esa medida <i>“la norma acusada priva a potenciales actores populares y a la comunidad misma del ejercicio de una nueva acción popular en virtud de un anterior pronunciamiento desfavorable impidiendo que hagan ejercicio del derecho de defensa y por lo tanto desconociéndoseles el derecho al debido proceso”</i>, por lo que resultan aplicables los</p>
--	---

	<p>mismos lineamientos que sentó la Corte en la sentencia C-215 de 1999, en relación con la providencia que aprueba el pacto de cumplimiento.</p> <p>En cuanto a la vulneración del artículo 229 de la Constitución, el demandante recogiendo lo expuesto anteriormente señala que teniendo en cuenta el carácter permanente de los derechos e intereses colectivos en cabeza de la comunidad cuya protección no se agota ni se satisface con un solo pronunciamiento judicial especialmente cuando niega el amparo solicitado, así como el carácter difuso de su titularidad, no se puede limitar el acceso a la administración de justicia de la comunidad cuando persiga defenderlos de nuevos hechos que lo amenacen o vulneren o de situaciones anteriores prolongadas en el tiempo que no pudieron demostrarse en el proceso que concluyó con fallo negativo. Indica que la disposición acusada <i>“limita el acceso a la justicia de la comunidad afectada y se aparta de los elementos de permanencia del derecho colectivo, de su titularidad difusa y de la legitimación popular para demandar su protección y establece la cosa juzgada de manera absoluta, inclusive para los fallos de acción popular en los que se niega la protección del interés colectivo...”</i>.</p> <p>Señala que el quebrantamiento del artículo 229 superior, también se presenta por <i>“darle prevalencia a las formalidades sobre el derecho sustancial”</i>, en la medida que se establece un formalismo excesivo <i>“en detrimento de la realización material y efectiva de los derechos e intereses colectivos”</i>, ya que todos los fallos se protegen con el efecto de intangibilidad, sin importar si se ha resguardado o no el interés de la comunidad</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. ÁLVARO TAFUR GALVIS</p> <p>La cosa juzgada en el marco de las garantías constitucionales.</p> <p>El principio de seguridad jurídica del que se deriva la institución de la cosa juzgada, se cimienta en la necesidad de decidir con carácter definitivo las controversias llevadas ante los jueces, como mecanismo concluyente de pacificación de los conflictos<sup>40</sup>, que le permite a las personas ordenar sus expectativas de vida, en el entendido que aquéllos derechos reconocidos en la sentencia lo serán con carácter definitivo, en cuanto atribución de un bien</p>

	<p>jurídico que le es debido a quien triunfa en el proceso. En tal sentido, se ha señalado que la cosa juzgada no mira tanto el proceso en que se dicta la sentencia, como los futuros que puedan intentarse, pues evita decisiones contradictorias sobre situaciones jurídicas ya definidas y desgastes innecesarios de la jurisdicción del Estado.<sup>41</sup></p> <p>Tradicionalmente la cosa juzgada se ha estructurado alrededor de la triple identidad sujetos (partes), objeto (pretensiones) y causa (hechos), que permite determinar en que eventos la jurisdicción debe rechazar aquellas acciones dirigidas contra un asunto ya resuelto, pues de permitirse un nuevo juzgamiento se dejaría sin respaldo la confianza de quienes participaron en el proceso, así como la depositada por la colectividad en sus autoridades judiciales para la solución regular, eficaz y definitiva de los conflictos sometidos a su consideración y decisión.<sup>42</sup></p> <p>Pero, como lo indica el Ministerio Público, si alguno de estos tres elementos varía (por ejemplo si los hechos son distintos, las pretensiones cambian o el conflicto se da entre sujetos diferentes), la autoridad de la cosa juzgada no afectará el nuevo proceso y, en esa medida, la jurisdicción del Estado no se habrá agotado para decidir de fondo la controversia que este último plantea.</p> <p>Esa triple identidad que estructura la cosa juzgada y que excluye nuevos procesos sobre situaciones jurídicas ya definidas, ha sido entendida por la Corte Constitucional de la siguiente manera:</p> <p><i>“Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:</i></p> <p><i>Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente;</i></p> <p><i>Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la</i></p>
--	--



	<p><i>demanda y la decisión que hizo transito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa;</i></p> <p><i>Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.”<sup>43</sup></i></p> <p>Ahora bien, la seguridad jurídica que se deriva de la sentencia no constituye un valor absoluto, ya que a la sociedad le interesa igualmente la defensa de la justicia material y la protección real y efectiva de ciertos derechos constitucionales de rango superior, como garantías que también son debidas a la persona y a la colectividad, en la medida que forman parte de los elementos esenciales del Estado Social de Derecho previsto en la Constitución.</p> <p>Por tanto, si bien la cosa juzgada se ha integrado a las garantías propias del debido proceso<sup>44</sup>, no lo ha sido como un poder absoluto, en tanto que el carácter definitivo e irrevisable de las sentencias puede tener límite en valores, principios o derechos constitucionales de superior jerarquía que hacen ceder el interés individual de quien se ve protegido por ella.</p> <p>Así, por ejemplo, en la Sentencia C-252 de 2001, al revisar la constitucionalidad de algunos aspectos del recurso extraordinario de casación, la Corte señaló que <i>“ese principio no es absoluto pues el legislador está facultado para remover la cosa juzgada, en algunos casos extraordinarios y excepcionales, como sucede por ejemplo, con la acción de tutela por vía de hecho o la acción de revisión en materia penal.”</i><sup>45</sup></p> <p>En armonía con lo anterior, si bien <i>“existe un derecho constitucional</i></p>
--	--

	<p><i>fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada”<sup>46</sup>, ello no obsta para que bajo precisas circunstancias y en presencia de valores y derechos constitucionales de mayor entidad, el interés individual que subyace a esta institución deba ceder y se puedan revisar situaciones que formalmente estarían cobijadas por ella, para permitir la “efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (art.2 C.P).<sup>47</sup></i></p> <p>Así, por ejemplo, la Corte ha marcado un límite a las sentencias que constituyen vías de hecho y que, por tanto, representan un atentado contra los derechos fundamentales de las personas, frente a las cuales ha señalado que si bien <i>“la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judiciales son principios fundantes de los Estados democráticos”, éstos no pueden “ser empleados para blindar decisiones exclusivamente basadas en el capricho, en la saliente negligencia o en la arbitrariedad de los jueces.”<sup>48</sup></i></p> <p>Igualmente, la necesidad de proteger el valor de la justicia material, inherente a la escala de valores constitucionales, ha justificado en las diferentes jurisdicciones la existencia de la acción o recurso extraordinario de revisión contra sentencias ejecutoriadas, de manera que <i>“A pesar de la importancia de la cosa juzgada, es claro que esa figura no puede ser absoluta pues puede entrar a veces en colisión con la justicia material del caso concreto. Para ello basta suponer la existencia de una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, pero contiene una clara injusticia. Precisamente para enfrentar estas situaciones, la mayoría de los ordenamientos prevén la acción de revisión, que permite, en casos excepcionales, dejar sin valor una sentencia ejecutoriada, cuando hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial permiten concluir que ésta es injusta. Esta acción, al privar de efecto la cosa juzgada que ampara la sentencia, permite que pueda repetirse el proceso y pueda llegarse a una decisión acorde al ordenamiento.”<sup>49</sup></i> Por ello, acierta la intervención ciudadana al recordar que, como establece por</p>
--	---

	<p>ejemplo el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, la cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.</p> <p>Así mismo, en materia penal, la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho resulta inoponible frente a los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad, pues existe una protección especial y reforzada en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos, que se imponen sobre categorías jurídicas tradicionales que impedirían la revisión de las sentencias absolutorias proferidas a favor de los autores de dichas conductas. La razón, ha precisado la Corte, <i>“es que una prohibición absoluta de reiniciar esas investigaciones obstaculiza la realización de un orden justo e implica un sacrificio en extremo oneroso de los derechos de las víctimas”</i>, de manera que en los casos de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, <i>“la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in ídem, y por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza de cosa juzgada no debe impedir una reapertura de la investigación de esos comportamientos, si aparecen hechos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates.”</i><sup>50</sup></p> <p>Por ello, aún en el campo penal, donde la seguridad jurídica de la cosa juzgada se refuerza con la garantía constitucional del principio <i>non bis in ídem</i><sup>51</sup>, la intangibilidad de las sentencias debe ceder ante valores superiores, pues <i>“lo cierto es que el principio de non bis in ídem no es absoluto, y puede ser limitado (...) el principio del non bis in ídem supone la inmutabilidad e irrevocabilidad de la cosa juzgada en beneficio del procesado, pero ‘esto no significa de modo alguno que este postulado tenga carácter absoluto, puesto que la efectividad de los valores superiores de la justicia material y de la seguridad jurídica hacen necesaria la existencia de excepciones a la cosa juzgada.”</i><sup>52, 53</sup></p>
--	--

	<p>En consecuencia, para el caso que se somete a estudio en esta oportunidad, habrá de partirse del fundamento constitucional de la cosa juzgada en materia de garantías judiciales derivadas del debido proceso (art.29 C.P), pero, adicionalmente, también de su relatividad y de la posibilidad de que sea afectada o modulada en favor de derechos de mayor entidad dentro del mismo marco constitucional, especialmente cuando existe un deber especial del Estado en su protección. Por ello, será necesario determinar si la protección constitucional de los derechos colectivos impone alguna cesión o limitación a la regla general de <i>la cosa juzgada</i> de las sentencias, aún con el sacrificio que pueda representar para los demandados por el hecho de ser llevados a juicio en más de una oportunidad, siempre que persista una vulneración o riesgo de amenaza de un derecho o interés colectivo.</p> <p>Además, deberá tenerse en cuenta que la cosa juzgada no tiene necesariamente la misma proyección en todos los ámbitos del derecho procesal, pues en cada uno de ellos su regulación dependerá del tipo de derechos en discusión (públicos o estrictamente privados), así como del compromiso que el Estado tenga frente a cada uno de ellos.</p> <p>Por ejemplo, tratándose de acciones públicas como la de nulidad de los actos administrativos, el Código Contencioso Administrativo advierte que las sentencias denegatorias apenas tienen efecto de cosa juzgada relativa, esto es, <i>“en relación a la cosa petendi juzgada”</i>. Este mismo efecto se presenta, en ciertas condiciones, en las acciones públicas de inconstitucionalidad, frente a las cuales se ha indicado que <i>“en principio debe entenderse que toda sentencia de constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta, salvo que la propia Corporación, bien de manera explícita en la parte resolutive, o bien de manera implícita en la parte motiva, restrinja el alcance de su decisión a los cargos analizados en la sentencia”</i><sup>54</sup>, en cuyo caso se admite que la norma sea nuevamente demandada por cualquier persona, incluso por quien actuó como demandante en el proceso inicial.<sup>55</sup></p> <p>Por su parte, en materia penal la figura de la cosa juzgada debe tener en cuenta que está en juego la libertad de la persona y que</p>
--	---

	<p>existe un refuerzo adicional derivado del principio <i>non bis in idem</i>, de forma que <i>“El principio de la cosa juzgada se proyecta, complementa y realiza en materia sancionatoria en un postulado de singular importancia en la determinación de los límites al ejercicio desproporcionado e irrazonable de la potestad punitiva del Estado”<sup>56</sup>: la prohibición de doble incriminación o principio non bis in idem, conforme al cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, de explícita consagración en la Constitución (inciso 3° Art. 29) y en los tratados de derechos humanos que regulan las garantías judiciales.”<sup>57</sup></i></p> <p>Por tanto, la “cosa juzgada” puede reclamar un alcance distinto en razón del ordenamiento procesal donde se encuentre ubicada y, en esa medida, no se tratará tan sólo de una extrapolación automática de los conceptos tradicionales de dicha figura procesal, normalmente basados en la discusión de intereses privados que no trascienden la esfera de los derechos individuales de las partes en juicio y frente a los cuales cada una de éstas tiene libertad de disposición tanto procesal como sustantiva, que les permite incluso, por su cuenta y riesgo, renunciar o actuar con negligencia frente a su propia defensa.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

## SENTENCIAS DE 2007

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	<b>Sentencia C-338/07</b>
<b>Fecha de la sentencia</b>	nueve (9) de mayo de dos mil seis (2007).
<b>Demandante</b>	Luis Alejandro Campuzano García y otros.
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 67 (parcial) de la Ley 361 de 1997, <i>“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”</i>
<b>Conoció en primera instancia</b>	Dr. NILSON PINILLA PINILLA.
<b>Decision</b>	INHIBIRSE de fallar de fondo sobre las expresiones <i>“de interés cultural e informativo”</i> y <i>“El Ministerio de Comunicaciones en un término de seis meses a partir de la promulgación de esta ley deberá expedir resolución que especifique los criterios para establecer qué programas están obligados por lo dispuesto en este artículo”</i> , contenidas en el inciso 1° del artículo 67 de la Ley 361 de 1997.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>Sostienen los actores que los apartes acusados del inciso 1° del artículo 67 de la Ley 361 de 1997, desconocen normas de rango superior, contenidas en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Ley 74 de 1968 y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificado por la Ley 16 de 1972, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 superior, <i>“se encuentran vigentes en el derecho interno”</i>. También consideran infringidos el Preámbulo y los artículos 13, 20 y 47 de la Constitución Política.</p> <p>Estiman que lo impugnado vulnera el Preámbulo de la Carta, que consagra la igualdad como principio fundante del Estado Social de Derecho, igualdad que debe ser real, entendida <i>“como concesiones merecidas a personas que se encuentran en condiciones de desigualdad por su limitación física”</i>.</p> <p>Consideran que la ley debe tratar <i>“indistintamente”</i> a las personas con limitación auditiva, por lo cual el Estado debe propiciarles</p>

	<p>todos los medios para que tengan una vida digna, <i>“derecho que se encuentra estrechamente ligado con el principio de igualdad, que en este caso puntual la ley está menoscabando y limitando, porque las personas con discapacidad, tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y estos derechos, incluido el de no verse sometido a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanar de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”</i>.</p> <p>Expresan que el Estado, al no permitir que las personas con discapacidad auditiva elijan de manera autónoma el tipo de programación a la cual quieren acceder, a diferencia de las personas que no tienen esa limitación, viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política y los mencionados tratados ratificados por Colombia.</p> <p>Afirman que en el Estado Social de Derecho las personas con limitación auditiva son iguales ante la ley, igualdad que <i>“se da no solo por la condición de ser persona sino por el hecho de ser sujetos de especial protección.”</i></p> <p>En su opinión, la norma demandada viola este derecho fundamental cuando un grupo de personas puede <i>“acceder solamente a dos géneros televisivos (culturales e informativos), en tanto que, el resto de la población tiene el acceso total a las programaciones establecidas tanto por canales públicos como privados”</i> y agregan que si una persona con limitación auditiva <i>“desea ver televisión, debe acogerse a la hora y al género televisivo que posea subtítulos (closed caption), de acuerdo a lo que la ley establece; mientras que si una persona sin limitación auditiva desea ver televisión, puede hacerlo sin restricciones de géneros y horarios”</i>.</p> <p>En su sentir, la protección y trato hacia esas personas con discapacidad auditiva también se ve afectada, al asignarse al Ministerio de Comunicaciones la competencia para indicar a qué programas pueden acceder, más no los que deseen, <i>“infringiendo así el derecho a la igualdad”</i>.</p> <p>Manifiestan que, de tal manera, lo acusado también vulnera el artículo 20 de la Constitución, restringiendo <i>“el acceso a la información de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y que gozan de especial protección por parte del Estado, ya que su limitación es en el tiempo y en el espacio respecto al medio masivo de televisión”</i>. Al respecto expresan que <i>“la información no se limita solamente a los géneros culturales e informativos, sino a los distintos tipos de programas que generen vivencias que producen un acercamiento a la realidad”,</i> y que <i>“el</i></p>
--	--

	<p><i>hecho de tener limitaciones auditivas no puede constituir un impedimento para tener acceso a la información”.</i></p> <p>En su criterio los segmentos impugnados violan igualmente el artículo 47 superior, ya que al merecer especial protección quienes padecen limitaciones auditivas, el Estado debe integrarlos socialmente, lo cual implica “<i>que puedan tener acceso a todo tipo de programación</i>”.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	SI MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
<b>Resumen del mismo</b>	<p>Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la decisión adoptada en la presente sentencia, ya que considero que no obstante la disposición demandada, el artículo 67 de la Ley 361 de 1997, fue derogado tácitamente por parte del artículo 13 de la Ley 982 de 2005, en este caso procedía un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte, pues es probable que la norma acusada siga produciendo efectos jurídicos.</p> <p>Así mismo, me permito manifestar que el hecho que no se haya expedido una resolución del Ministerio de Comunicaciones sobre este tema, no quiere decir que la disposición que la ordena no esté rigiendo. De otra parte, me permito expresar que tanto el Ministerio de Comunicaciones como la Comisión Nacional de Televisión se encuentran sujetas a la Constitución y a la ley, como todas las entidades y autoridades públicas, y por tanto debió proceder un examen de constitucionalidad del aparte demandado.</p> <p>Con fundamento en las razones expuestas, salvo mi voto a la presente decisión.</p>
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-810/07
Fecha de la sentencia	tres (3) de octubre de dos mil siete (2007).
Demandante	Rocío Johana Barreto Jurado y Jully Maritza Higuabita Suárez



Demandado	: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 32 (parcial) de la Ley 361 de 1997, <i>“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 361 de 1997, <i>“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”</i> , en el entendido que dichos talleres tienen por objeto actividades formativas, de integración social o de rehabilitación sin ánimo de lucro para el organizador del taller, de personas con diversidad funcional severa y que la relación existente entre ellas y el taller no corresponde a una relación laboral.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Las demandantes consideran que el artículo parcialmente acusado vulnera los artículos 1, 13, 25, 47, 53 y 54 de la Constitución y en sustento de esta afirmación aducen que la parte cuestionada desconoce la dignidad de las personas con limitación, pues comporta “una reducción porcentual de sus derechos” y particularmente de la remuneración que reciben por su actividad laboral, con menoscabo de sus necesidades básicas.</p> <p>En criterio de las actoras, la preceptiva demandada también viola el derecho a la igualdad, porque discrimina a las personas con algún tipo de limitación, en tanto las hace víctimas de una disminución salarial en razón de su estado y permite un trato denigrante en contra de ellas.</p> <p>Señalan las libelistas que, a su vez, el derecho al trabajo de las personas con limitación resulta desconocido, ya que el artículo demandado las deja expuestas “al capricho de otro, en lo que se tornaría justo recibir”, siendo que su condición no puede ser fuente de un tratamiento que menoscabe sus derechos.</p> <p>Añaden las actoras que disposiciones como la demandada incumplen el artículo 47 de la Carta, especialmente en lo que se refiere a la obligación estatal de adelantar políticas pertinentes para la integración social de los disminuidos, y estiman probable que “una persona con limitación se sienta menospreciada para ejercer cualquier labor cotidiana y, por consiguiente, busque aislarse de la sociedad que lo tilda como un ser diferente...”.</p> <p>Finalmente, expresan las ciudadanas demandantes que todos los trabajadores tienen derecho a los beneficios mínimos e</p>

	irrenunciables contemplados en el artículo 53 de la Carta, por cuya virtud, ningún empleador puede pagar a un trabajador menos del valor fijado anualmente por el Gobierno y que, en contra de ese mandato, el precepto cuestionado, “bajo un lenguaje virtuoso, que aparenta protección”, faculta para reducir el salario mínimo legal vigente en un 50% o en un 25%, según el caso.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JAIME ARAÚJO RENTERÍA</p> <p>TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Régimen laboral/TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Existencia de contratos de trabajo, al margen de los beneficios que representa el trabajo para las personas con limitaciones (Salvamento de voto)</p> <p>TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Labores constituyen trabajo con el estándar de un salario mínimo legal vigente (Salvamento de voto)</p> <p><i>En esos talleres se realizan labores productivas y de rehabilitación que no pueden desnaturalizar el trabajo, pues las modalidades del contrato no desnaturalizan la relación laboral. Mi propuesta es la de que no sólo no se les pague por debajo del 50% del salario mínimo legal, ni menos del 75% del salario mínimo legal vigente, sino que incluso sostengo que no se les debe pagar sólo el mínimo, sino que la remuneración que se les reconozca debe ser la misma que se le reconoce a otras personas por el mismo trabajo. En ningún caso la remuneración salarial puede ser menor del salario mínimo legal.</i></p> <p>PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Aplicación (Salvamento de voto)</p> <p><i>De acuerdo con el artículo 53 de la Carta Política, la ambigüedad de la norma debe ser interpretada en favor del trabajador y en el presente caso, cualquiera de las dos interpretaciones viola a mi entender la Constitución Política.</i></p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-076/07
Fecha de la sentencia	siete (7) de febrero de dos mil siete (2007).
Demandante	Alejandro Buitrago.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 53 de la Ley 383 de 1997, <i>“por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	Declarar INEXEQUIBLE el artículo 53 de la Ley 383 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p><i>Normas constitucionales que se consideran infringidas</i></p> <p>El accionante considera que la disposición acusada vulnera los artículos 4º, 150-1 y 338 de la Constitución Política.</p> <p><i>Fundamentos de la demanda</i></p> <p>Según el accionante, el Congreso de la República tiene la potestad de expedir disposiciones de estirpe interpretativa que permitan aclarar la aplicación de otras normas jurídicas que puedan resultar confusas. No obstante, afirma que según esta Corporación, el ejercicio de dicha función debe someterse al cumplimiento de ciertos requisitos constitucionales<sup>58</sup>, entre los cuales se destaca, la obligación de que la norma interpretativa señale expresamente cual es la disposición cuyo entendimiento se va a aclarar.</p> <p>En este sentido, el demandante manifiesta que, de la lectura del artículo 53 de la Ley 383 de 1997, se deduce que es una norma de carácter interpretativo, pues inicia con la palabra <i>“interpretase”</i>, lo cual le otorga a la disposición un carácter especial y le exige cumplir con los requisitos propios de esta clase de normas. Sin embargo, el</p>

	<p>actor sostiene, que en el contenido de la norma acusada no se evidencia ningún tipo de interpretación, pues no se hace referencia alguna a la disposición que esté siendo objeto de aclaración. En esta medida, considera que el precepto bajo estudio no cumple con los requisitos constitucionales que condicionan el ejercicio de la citada función, por lo que, en su opinión, la norma demandada debe declararse inexecutable al constituir un uso indebido del numeral 1° del artículo 150 de la Constitución Política.</p> <p>Por otro lado, en la demanda se arguye que, con la apariencia de una norma de carácter interpretativo, el artículo se ocupó de reformar el régimen tributario, toda vez que <i>“(...) busca que los descuentos originados en la enajenación de títulos de obligaciones fiscales y cambiaria no se consideren costo de deducción en el impuesto de renta (...) con lo cual se está utilizando el fin de una norma interpretativa para reformar las deducciones en el impuesto de renta (...)</i>”. Así las cosas, el accionante considera que el artículo 53 de la Ley 383 de 1997 vulnera el artículo 388 de la Carta Fundamental, en la medida en que modificó el régimen del impuesto de renta a través de una disposición de carácter interpretativo, cuando para tal efecto es necesario tramitar una ley con destinación tributaria.</p> <p>Con fundamento en las anteriores consideraciones, el accionante solicita que se retire del ordenamiento jurídico la norma acusada, por contravenir las disposiciones constitucionales previamente mencionadas.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO</p> <p>INTERPRETACION DE LA LEY POR EL LEGISLADOR-Alcance (Salvamento de voto)</p> <p><i>De conformidad con el artículo 150.1 corresponde al Congreso interpretar las leyes, pero el alcance de esa función no se reduce a precisar el sentido de una norma cuando ha sido objeto de interpretaciones que le confieren un contenido jurídico distinto al originalmente proyectado sino que va mucho más allá. El Congreso no sólo puede interpretar las leyes supuestamente dudosas o susceptibles de distintas disposiciones sino que puede interpretar cualquier disposición del ordenamiento jurídico vigente. Con un simple argumento a fortiori respaldo la anterior afirmación, si el Congreso como órgano representativo de la voluntad popular puede</i></p>

	<p><i>crear nuevas normas o sustituir, modificar o derogar las ya existentes, puede hacer lo menos, esto es fijar los alcances de las leyes que previamente ha expedido.</i></p> <p>LEY INTERPRETATIVA-Posibilidad de interpretar disposiciones que han sido objeto de entendimiento unívoco (Salvamento de voto)</p> <p><i>El aserto que la ley sólo tiene una interpretación válida -aquél contenido normativo predeterminado por el Legislador- desconoce (i) que los preceptos jurídicos en su mayoría son susceptibles de distintos enunciados interpretativos según los criterios e intereses del intérprete, (ii) que el Legislador incluso puede decidir interpretar disposiciones que hayan sido objeto de un entendimiento unívoco cuando por razones de distinta índole lo considere conveniente.</i></p> <p>LEY INTERPRETATIVA-Motivación (Salvamento de voto)</p> <p>LEY INTERPRETATIVA-Posibilidad de derogar, reformar y modificar leyes anteriores (Salvamento de voto)</p> <p><i>En realidad la atribución constitucional del numeral 1º del artículo 150 es una y en esa medida una ley interpretativa puede derogar, reformar y modificar leyes anteriores porque la actividad legislativa no tiene distintas propiedades o alcances. La categoría de leyes interpretativas sólo se justifica a partir de ciertas peculiaridades de este tipo de leyes –por ser un excepcional ejercicio de la interpretación auténtica- y no a partir de la supuesta naturaleza diferente de la función legislativa en estos casos.</i></p> <p>LEY INTERPRETATIVA-Excepción al principio de irretroactividad de la ley (Salvamento de voto)</p> <p><i>El artículo 14 del Código Civil y el artículo 58 del Código de Régimen Político y Municipal no establecen un efecto retrospectivo de las leyes interpretativas sino que señalan una excepción al principio de irretroactividad de la ley. En efecto, las disposiciones en comento prevén expresamente el carácter de retroactivo de la ley posterior, la cual se incorpora a la ley anterior para precisar sus alcances, y de esta manera la ley interpretativa afecta tanto las situaciones jurídicas en curso –esto si propio del efecto retrospectivo- como aquellas que se hayan definido bajo la ley anterior, con excepción de las situaciones jurídicas resueltas mediante una sentencia judicial en firme.</i></p> <p>INTERPRETACION AUTENTICA E INTERPRETACION JUDICIAL-Distinción (Salvamento de voto)</p> <p><i>La postura mayoritaria termina por desnaturalizar la interpretación</i></p>
--	--

	<i>auténtica y por confundirla con la interpretación judicial, ésta si sujeta a los requisitos de racionalidad mínima y de respeto a la seguridad jurídica y confianza legítima de los asociados. Cabe recordar que el único intérprete auténtico de la ley es el Legislador – pues este concepto hace referencia precisamente a la interpretación de la ley por su autor- y que incluso la labor que realiza el juez constitucional no puede ser equiparada a la actividad de un órgano representativo de la voluntad popular del pueblo colombiano.</i>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-278/07
Fecha de la sentencia	dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007).
Demandante	José Humberto Gómez Herrera, Lyda Esperanza Martín Martín y Blanca Irene López Garzón
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15 (parágrafo) y 18 (parágrafo) de la Ley 387 de 1997, <i>“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia de la República de Colombia”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Decision	<p>Primero. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones <i>“máximo”</i> y <i>“excepcionalmente por otros tres (3) más”</i>, contenidas en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y EXEQUIBLE el resto del parágrafo, en el entendido que el término de la atención humanitaria de emergencia previsto en esa disposición será prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su autosostenimiento.</p> <p>Segundo. Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 18 de la Ley 387 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En un acápite preliminar titulado <i>“hechos”</i>, los demandantes se refieren a la situación que padecen los desplazados en nuestro país, quienes, según exponen, provienen en su gran mayoría de zonas rurales y conforman hogares con mujeres, niños y adultos mayores que necesitan en forma inmediata la ayuda humanitaria de emergencia, pero que debido a su falta de preparación no pueden adaptarse a la nueva situación, lo cual hace imperioso que dicha ayuda <i>“se les extienda hasta que las entidades responsables de su atención les faciliten los mecanismos que les permitan su autonomía definitiva”</i>.</p> <p>Expresan que el artículo 15 de la Ley 387 de 1997, en lo acusado, que impone un límite temporal de tres meses, prorrogable por otro período igual, para la entrega de la ayuda de emergencia a los desplazados, establece un condicionamiento que, en su parecer,</p>

	<p><i>“ha generado problemas gravísimos en la comunidad víctima de desplazamiento, especialmente en los niños y adultos mayores, quienes padecen entre otros problemas, de desnutrición severa, hacinamiento, enfermedades infectocontagiosas, afecciones pulmonares etc.”.</i></p> <p>Señalan que tal limitante somete a las familias desplazadas a pasar penalidades, pues es impensable que puedan superar este flagelo con tan solo tres entregas de ayuda humanitaria.</p> <p>En relación con lo acusado del artículo 18 de la Ley 387 de 1997, manifiestan que la exigencia hecha al desplazado para que coopere en el mejoramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación es inconcebible, pues se le está trasladando la responsabilidad de conseguir recursos y de aceptar, sin objetar, las condiciones y auxilios que caprichosamente quieran imponer las instituciones responsables, desconociendo así la realidad, pues la población desplazada, por falta de respaldo, no puede cumplir con los requisitos para acceder a los créditos que les ofrece el Estado y si los cumple recibe préstamos irrisorios en períodos muy distantes, lo cual les impide <i>“realizar una inversión y cimentar una nueva opción de vida”</i>.</p> <p>Al respecto manifiestan que es importante tener en cuenta que para las entidades comprometidas con la solución del problema la cooperación, que no debe significar obediencia, es tomada sin embargo como una condición de sumisión y abnegación absoluta por parte del desplazado, siendo así imposible obtener el reconocimiento real de sus necesidades.</p> <p>Hechas estas reflexiones, pasan a explicar el concepto de violación en lo que hace al segmento acusado del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, que al fijar un límite de 3 meses para la ayuda humanitaria, prorrogable excepcionalmente por otro periodo igual, desconoce, en su criterio, las siguientes disposiciones constitucionales:</p> <p>El artículo 1°, puesto que la solidaridad como fundamento del Estado Social de Derecho debe centrarse en personas que, como los desplazados por situaciones ajenas a su voluntad, se encuentran en estado de debilidad manifiesta y, por lo tanto, no pueden ser desprotegidas ni condicionadas a recibir una ayuda mínima por concepto de alimentación y alojamiento durante un lapso tan corto.</p> <p>El artículo 2°, por cuanto el Estado al establecer un limite temporal de 3 meses a la ayuda humanitaria que reciben los desplazados, omite el cumplimiento de los fines esenciales establecidos en esta norma superior.</p>
--	---



	<p>El artículo 5°, ya que al no garantizar a las familias una prórroga en la ayuda humanitaria que se acomode a sus necesidades básicas, se violan sus derechos inalienables.</p> <p>El artículo 11, que consagra el derecho a la vida, ya que al desplazado no se le asegura la base esencial para la subsistencia como es la alimentación básica, el alojamiento, el acceso a los servicios públicos domiciliarios y las condiciones mínimas de higiene, necesarias para que tengan una calidad de vida mínima en condiciones dignas.</p> <p>El artículo 13, por cuanto se incumple el mandato referente a la protección especial de personas que por su condición económica, física o mental están en circunstancias de debilidad manifiesta, lo que anteriormente había censurado como trato frente a sus victimarios, <i>“sean reinsertados o desmovilizados”</i>, a quienes la ayuda se extiende por dos años, pudiendo realizar un proyecto productivo con capital semilla no reembolsable, el cual supera los 19 salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>El artículo 21, pues la honra es uno de los derechos más vulnerados de la población desplazada, debido a que en su mayoría se trata de personas que vienen del campo luego de ser desalojados de sus viviendas y de su trabajo, quedando así en condiciones de miseria absoluta, por lo que tienen que mendigar para suplir sus necesidades básicas.</p> <p>El artículo 22, que consagra el derecho a la paz, la cual se seguirá violando si el gobierno no garantiza a los desplazados una ayuda real, de modo que <i>“no tengan necesidad de acudir al hurto”</i> u <i>“otros delitos que generarían más violencia”</i> para subsistir.</p> <p>El artículo 42, pues el Estado desprotege a las familias que han sido víctimas de desplazamiento forzado, al ofrecerles una atención precaria con una ayuda humanitaria y unas prórrogas irrisorias de emergencia, que no alcanzan para satisfacer sus necesidades.</p> <p>Artículo 43, pues sin importar el número de integrantes de cada familia se brinda la misma ayuda humanitaria, cuando debería evaluarse sus necesidades reales y, en particular, tener en cuenta la atención de las mujeres en estado de embarazo.</p> <p>Artículo 44, pues como consecuencia del conflicto armado la mujer desplazada ha asumido el rol de cabeza de hogar y es a ella a quien le corresponde atender la familia, con la ayuda exigua que le da el Estado.</p> <p>Artículo 45, pues el joven desplazado está en situación de</p>
--	---

	<p>desprotección, al no hallar una ayuda oportuna y suficiente, que cubra sus necesidades integrales.</p> <p>Artículo 46, ya que el desplazamiento forzado afecta también a los adultos mayores, que por su avanzada edad y condiciones especiales, no tienen acceso a un trabajo que les garantice alimentación, vivienda y salud, necesidades que no alcanzan a ser cubiertas con la ayuda humanitaria de emergencia.</p> <p>El artículo 47, por cuanto esa ayuda humanitaria tampoco alcanza para atender a los desplazados que sean disminuidos físicos, sensoriales o síquicos.</p> <p>El artículo 48, en razón de que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que no se cumple en su totalidad por ser insuficiente la ayuda a los desplazados.</p> <p>El artículo 49, pues a través de la ayuda humanitaria no se garantiza efectivamente el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud de la población desplazada.</p> <p>El artículo 50, porque suele suceder que después de transcurrir los 3 meses de haber recibido una escasa e interrumpida ayuda humanitaria, los desplazados tienen que movilizarse en largos trayectos a pie, para encontrar que los menores no reciben los servicios básicos de salud.</p> <p>El artículo 51, ya que la precaria asistencia que da el Gobierno no alcanza para el arriendo, de modo que se vulnera a los desplazados el derecho a una vivienda digna.</p> <p>El artículo 93, pues de acuerdo con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la víctima del desplazamiento debe ser acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación, lo cual no se procura para personas a quienes está quebrantado el derecho fundamental al mínimo vital.</p> <p>Por lo que hace al parágrafo el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, que estatuye que el desplazado debe cooperar en el mejoramiento, restablecimiento y estabilización de su situación, los demandantes consideran que desconoce el deber que la Constitución impone al Estado de protección integral de la familia y agregan que la ley debió dedicarse a garantizar la estabilización y consolidación socioeconómica del desplazado, la cual es responsabilidad directa del Estado y no de las víctimas del conflicto.</p> <p>En su criterio, la norma acusada se presta para una interpretación</p>
--	--

	<p>ambigua, pues las entidades responsables de proteger a los desplazados evaden sus obligaciones y terminan por establecer, “<i>de una manera autocrática y excluyente</i>” la solución para el desplazado, quien si se muestra renuente a recibirla es excluido del registro, con lo cual estiman vulneradas las siguientes disposiciones constitucionales:</p> <p>Los artículos 1° y 2°, porque el condicionamiento que se le impone a la víctima para que coopere con el mejoramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación, desconoce los fines esenciales del Estado Social de Derecho que estas normas proclaman.</p> <p>El artículo 5°, pues la norma acusada desconoce todos los derechos inalienables de las personas y de la familia como institución básica de la sociedad, los cuales consideran que no podrán volver a ser restablecidos debido al daño que es causado por una violación sistemática de los derechos humanos, que el Estado debe proteger.</p> <p>El artículo 11, ya que el desplazado, que pierde todos sus bienes, no puede cooperar en la solución de su problema, conllevándole ser excluido en forma arbitraria del registro oficial de población desplazada, lo cual pone en peligro su vida y la de su familia al quedar totalmente desamparado por el Estado.</p> <p>El artículo 25, porque el Estado debe garantizar el derecho al trabajo de los desplazados, con el fin de que puedan poner en marcha una unidad productiva, de modo que con los recursos que perciban logren llevar a su casa alimentos y procurar el sostenimiento de su familia.</p> <p>De igual manera acusan esa norma de vulnerar el derecho fundamental al mínimo vital de grupos especiales, al que se refieren los artículos 43, 44, 46 y 47 superiores, pues los desplazados que padecen esa condición no van a tener la posibilidad de acceder a una estabilización socioeconómica.</p> <p>También consideran que lo acusado desconoce el artículo 90 de la Constitución, que consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos, pues como no brindó protección adecuada que evitara el desplazamiento forzado en cada una de las regiones donde ocurre este fenómeno, surge el derecho de las víctimas a que se les responda patrimonialmente por sus bienes y por los seres queridos fallecidos a consecuencia del conflicto armado.</p> <p>Por último, los demandantes reafirman los cargos y la petición de inexequibilidad en los dos casos y efectúan unas consideraciones finales sobre la aplicación práctica de las normas acusadas a</p>
--	---

	algunos sucesos particulares, en los cuales personas desplazadas fueron excluidas del registro, perdiendo los beneficios por no haber cooperado a superar su situación.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	<p>SI DR. JAIME ARAÚJO RENTERÍA</p> <p>En primer término, considero que si bien la presente decisión busca aliviar la situación de la población desplazada por la violencia y en este sentido está guiada por buenas intenciones, no aborda el problema fundamental de la obligación del Estado colombiano respecto de la atención integral a los desplazados víctimas de la violencia.</p> <p>En mi concepto, lo mismo ocurre con la sentencia T-025/04, a la cual se hace alusión en la presente decisión, la cual tiene en mi criterio una dificultad esencial de construcción jurídica, referida al tema y concepto de la obligación jurídica, en cuanto las obligaciones jurídicas no pueden depender de la voluntad del obligado, sino que por el contrario, la esencia de la obligación jurídica es precisamente su obligatoriedad independiente o incluso en contra de la voluntad del obligado, siendo esta característica esencial de la noción de derecho y de obligación jurídica. Aceptar lo contrario, desvirtúa a mi juicio el concepto de obligación jurídica, que pasa a depender de la voluntad del obligado. En el tema de la atención del desplazamiento forzado es el Estado el obligado, no obstante lo cual, en la sentencia T-025 del 2004 se acepta que haya excusa para no cumplir con dicha obligación por insuficiencia de recursos económicos, cuando lo cierto es que no hay un país que tenga recursos suficientes para atender de forma completa e integral todas las necesidades de su población. A mi juicio, ese es precisamente el arte de la economía, esto es, organizar el manejo eficiente de recursos limitados e insuficientes para necesidades ilimitadas.</p> <p>A mi juicio, este defecto de construcción jurídica relacionado con la falta de claridad respecto a la exigencia de cumplimiento de la obligación del Estado de atender de manera integral a toda la población desplazada, se traslada a esta sentencia, por lo cual no me encuentro de acuerdo con ésta. Así mismo, considero que en las salas de revisión de esta Corte y los consiguientes fallos de tutela se viene reiterando esta misma tesis, según la cual, de un lado, se reconocen los derechos de la población desplazada, pero de otro lado, se la envía a una fila de espera para la atención y protección efectiva de sus derechos, fila que cada día crece más, haciendo en la realidad nugatorios los derechos de los desplazados, no obstante</p>

	<p>que el Estado tiene la obligación jurídica de atender a todos y cada uno de los desplazados, y ello de una manera integral, desde la ayuda humanitaria de emergencia hasta la recuperación y estabilización socio-económica del desplazado y su núcleo familiar.</p> <p>En este sentido, considero que la garantía del goce efectivo de los derechos de los desplazados debe ser completa y en el mínimo que reconoce la Corte, para lo cual ni siquiera se viene cumpliendo con la asignación presupuestal necesaria para atender el fenómeno del desplazamiento, agravado por el hecho de que cada día hay menos recursos y más personas desplazadas. En mi criterio, esta Corte debe declarar en forma clara y expresa que el Estado y el Gobierno Nacional tienen la obligación jurídica de garantizar el presupuesto necesario para atender a toda la población afectada por el desplazamiento forzado, y ello independientemente de su voluntad, pues es obvio que el problema de la atención a esta población es un problema esencialmente presupuestal.</p> <p>Por esta razón, estimo que la decisión adoptada en esta sentencia no es suficiente, ya que la eliminación de los términos máximos para la atención al desplazado no es una solución para que el Estado cumpla con sus deberes. De otra parte, considero que al afectado no se le puede exigir una cooperación en algo que le corresponde al Estado, en relación con los derechos de estas personas.</p> <p>En este orden de ideas, manifiesto mi negativa a seguir votando a favor de enviar a las personas desplazadas a una fila de espera para que las atiendan después de varios años. Sostengo por el contrario que el Estado y el Gobierno colombiano son responsables de la atención integral a la población desplazada, y ello tanto por acción como por omisión, pues deben apropiarse el presupuesto necesario y suficiente para la atención integral, adecuada y oportuna de dicha población y de no hacerlo, se debe iniciar en contra de las entidades responsables un incidente de desacato.</p> <p>Por consiguiente, en mi concepto debe esta Corte expresar claramente que el principio rector es que el Estado tiene la obligación de garantizarle a los desplazados el goce efectivo de todos sus derechos. En forma contraria a esto, el Consejo Noruego de Refugiados clasifica a nuestro país como el segundo con más número de desplazados después de Sudán, número que en vez de haber disminuido va en aumento. Así mismo, el Estado no está cumpliendo con su obligación jurídica de atención integral a TODOS los desplazados, lo cual no se soluciona, en mi criterio, simplemente ampliando los plazos de atención, lo cual reitero, no hace sino distraer el problema esencial que es el cumplimiento efectivo de la obligación jurídica del Estado de atender de forma</p>
--	--

	<p>integral a esta población y protegerle en forma efectiva sus derechos.</p> <p>Por las razones expuestas, discrepo de la presente decisión.</p>
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-622/07
Fecha de la sentencia	catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007)
Demandante	Santiago Guijò Santamaría
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 de la Ley 472 de 1998, <i>“por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	Declarar EXEQUIBLE el artículo 35 de la Ley 472 de 1998, en el entendido que las sentencias que resuelven los procesos de acción popular hacen tránsito a cosa juzgada respecto de las partes y del público en general, salvo cuando surjan con posterioridad a la sentencia desestimatoria, nuevas pruebas trascendentales que pudieran variar la decisión anterior.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Preliminarmente, el demandante señala que el 3 de mayo de 2006 había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la misma norma, la cual fue resuelta mediante fallo inhibitorio bajo la consideración de que no se pretendía la inconstitucionalidad del artículo acusado, sino la declaratoria de una exequibilidad condicionada a una específica interpretación que atendía a intereses del actor dentro de un proceso de acción popular por él promovido. Sobre el particular, el actor señaló que aquella demanda, así como la que presenta en esta oportunidad, no obstante estar basada en el estudio de casos concretos, pretende el control abstracto de la norma para ajustarla a la Constitución.</p> <p>De otra parte, refirió la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la cosa juzgada en materia de acciones populares. En efecto, señaló que en Sentencia C-215 de 1999 la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 27 de la ley 472 de 1998, en el sentido de que la sentencia que aprueba el pacto de cumplimiento tiene efectos de cosa juzgada relativa, en el evento en que se presenten hechos nuevos y causas distintas a las alegadas en el respectivo proceso. Refiere</p>

	<p>igualmente providencias del Consejo de Estado en las que se precisa que la sentencia que ampara la protección de derechos colectivos hace tránsito a cosa juzgada absoluta, pero que aquella que la niega, sólo adquiere el carácter de cosa juzgada relativa, respecto de los hechos que motivaron la solicitud.</p> <p>Una vez consignadas las consideraciones previas, el demandante identifica los cargos que eleva contra el artículo 35 de la Ley 472 de 1998, en los siguientes términos:</p> <p>Desconocimiento del artículo 2º de la Constitución Política de Colombia por la vulneración del principio de efectividad de los derechos.</p> <p>El accionante señala que el carácter de cosa juzgada absoluta de las sentencias proferidas en el marco de procesos promovidos mediante acciones populares, con independencia de que en ellas se hubieran negado las pretensiones, desconoce el principio de efectividad de los derechos, como quiera que permite que un fallo desfavorable se convierta en un pronunciamiento intangible, de suerte que la comunidad no puede, ulteriormente, promover un nuevo proceso a pesar de que con posterioridad al fallo se logre demostrar el efectivo quebrantamiento del interés colectivo, bien con base en nuevos elementos probatorios o con fundamento en hechos y pruebas que no fueron puestos a consideración del juez.</p> <p>Desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia por vulneración del derecho fundamental al debido proceso.</p> <p>El accionante refiere que por el carácter público de las acciones populares y dado que su objeto radica en la protección de intereses colectivos, puede suceder que el accionante en un proceso de esta naturaleza no haga parte de la comunidad afectada, por lo que carecería de la información relevante que daría vocación de prosperidad a la acción instaurada. Igualmente puede ocurrir que el demandante no se encuentre debidamente asesorado, no solicite pruebas pertinentes, o ejercite la acción de mala fe, de suerte que conduzca el proceso al fracaso de sus pretensiones.</p> <p>De esta forma, el efecto de cosa juzgada de las sentencias de procesos populares, consagrado en la norma demandada, vulnera el derecho al debido proceso de la comunidad, en general, y particularmente de un actor posterior, como quiera que no se garantiza su derecho de defensa y se priva de promover una nueva acción con base en información y pruebas que no fueron presentadas previamente al juez de conocimiento.</p>
--	---



	<p>Desconocimiento de los artículos 88 y 89 de la Constitución Política de Colombia por el desconocimiento del esquema constitucional de las acciones populares.</p> <p>El demandante señala que el carácter de cosa juzgada absoluta de las sentencias proferidas en los procesos populares no se ajusta al esquema y contenido que la Constitución otorga a las acciones populares, toda vez que no es admisible a la luz de los artículos 88 y 89 Superiores que se impida a los miembros de la comunidad promover un nuevo proceso, por la existencia de un fallo desestimatorio previo, aun cuando se cuente con nuevos elementos de juicio o se pretenda presentar elementos probatorios preexistentes que no fueron expuestos por el actor popular cuyas pretensiones fueron despachadas desfavorablemente.</p> <p>Desconocimiento del artículo 228 de la Constitución Política de Colombia por otorgarle prevalencia a las formalidades sobre el derecho sustancial.</p> <p>El actor precisa que el carácter de cosa juzgada absoluta de las sentencias, otorgado de manera general sin reparar en el sentido del fallo, constituye un excesivo formalismo que hace nugatoria la realización material y efectiva de los derechos e intereses colectivos. En este sentido precisa que, si bien el principio de cosa juzgada propende por la seguridad jurídica, en materia de acciones populares éste se torna relativo en atención al carácter difuso de su titularidad, la permanencia de los derechos colectivos en cabeza de la comunidad y la legitimación pública para demandar.</p> <p>Desconocimiento del artículo 229 de la Constitución Política de Colombia por la limitación al acceso a la justicia.</p> <p>En consideración de que los derechos colectivos permanecen en cabeza de la comunidad, que su protección no se agota ni satisface con un solo pronunciamiento judicial, que su titularidad es de carácter difuso y que existe legitimación pública para demandar su amparo en cualquier tiempo, la limitación en el acceso a la administración de justicia que se deriva del artículo 35 de la Ley 472 de 1998, deviene inconstitucional, porque impide plantear de nuevo el debate procesal sobre la vulneración de derechos e intereses colectivos, independientemente de que se trate de nuevas situaciones que los vulneren o amenacen o de circunstancias anteriores que se han prolongado en el tiempo y que por determinada razón no se pudieron demostrar en el proceso que concluyó con fallo negativo.</p> <p>De esta forma, el demandante solicita a esta Corporación que se declare la inconstitucionalidad del artículo demandado, por cuanto</p>
--	---

	el efecto de cosa juzgada absoluta sólo debe predicarse de las sentencias favorables a las pretensiones del actor, y no de aquellas desfavorables que deben hacer tránsito a cosa juzgada relativa.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

### SENTENCIAS DE 2008

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-388/08
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) de abril de dos mil ocho (2008).
Demandante	Andrés Eduardo Dewdney Montero
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1131 (parcial) del Código de Comercio y contra el artículo 4º. (parcial) de la Ley 389 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.
Decision	<p>Primero: Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, las expresiones “<i>En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro...</i>” y “<i>Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.</i>”, contenidas en el artículo 1131 del Código de Comercio, modificado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990.</p> <p>Segundo: Declararse INHIBIDA para fallar en relación con el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 389 de 1997.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	El ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demanda la inconstitucionalidad de los señalados enunciados contenidos en el artículo 1131 del Código de Comercio y en el artículo 4º. de la Ley

	<p>389 de 1997, por considerar que los mismos vulneran el artículo 13 de la Constitución Política.</p> <p>Señala el actor que la distinción entre la definición del surgimiento del siniestro para la víctima y para el asegurado, contenida en el artículo 1131 del Código de Comercio y, por ende, la diferencia entre la fecha a partir de la cual comienza a correr el término de prescripción de la acción para cada uno de ellos contra la aseguradora, comporta la violación del derecho a la igualdad que tiene el asegurado en relación con la víctima.</p> <p>Agrega que la aludida situación hace posible que, con base en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 389 de 1997, asegurado y asegurador pacten una cobertura temporal de la póliza que sea inferior al tiempo de prescripción de la acción que tiene el asegurado contra la aseguradora, situación que comporta igualmente la violación del derecho de igualdad del asegurado en relación con la víctima, ya que estando supeditado el nacimiento del siniestro a la reclamación de la víctima, puede suceder que tal reclamación de la víctima tenga lugar por fuera de la cobertura temporal pactada entre asegurado y asegurador (compañía de seguros).</p> <p>En consecuencia, al no tener cobertura el siniestro en caso de que la víctima reclame por fuera del límite temporal de cobertura pactado y dado que, en relación con el asegurado, el término de prescripción de su acción contra el asegurador empieza a correr a partir de dicha reclamación, al pactarse la cobertura temporal de la póliza por un término mínimo de dos años, la prescripción de la acción del asegurado no tendría efectos prácticos, quedando entonces el asegurado con acción pero sin cobertura del siniestro, situación evidentemente perjudicial para su patrimonio.</p> <p>A diferencia de la situación planteada, en el caso de la víctima, ésta sí se encuentra protegida en forma integral, por cuanto no está obligada a reclamar al asegurado dentro del término de cobertura de la respectiva póliza y dispone de acción directa contra el asegurador durante cinco años contados a partir de la ocurrencia del hecho externo.</p> <p>Alude luego a lo dicho por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 29 de junio de 2007, en relación con la especialidad de la disposición contenida en el artículo 1131 del Código de Comercio, atinente en particular al seguro de responsabilidad, frente al carácter genérico de la disposición contenida en el artículo 1081 del mismo ordenamiento, que regula lo pertinente a la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro.</p>
--	---

	<p>Con base en lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, asevera el demandante que, en relación con la acción que tiene la víctima contra la aseguradora, opera la prescripción extraordinaria de cinco años contados a partir de la ocurrencia del hecho imputable al asegurado, en tanto que, en relación con la acción que tiene el asegurado contra la aseguradora, opera la prescripción ordinaria de dos años, que por ser de naturaleza subjetiva se cuentan a partir del momento en que el interesado haya tenido o haya debido tener conocimiento del hecho generador de la acción.</p> <p>Se pregunta el demandante si la diferencia establecida por el legislador en relación con el momento en que debe entenderse que empieza a correr el término de prescripción, según se trate de la víctima o del asegurado, amén de la diferencia en el término señalado para la prescripción en cada caso, es constitucional o comporta la violación del derecho de igualdad que tiene el asegurado.</p> <p>Se pregunta igualmente el demandante si permitir que asegurado y asegurador pacten límites temporales de cobertura inferiores al término señalado para la prescripción de la acción del asegurado contra la aseguradora, constituye una violación del derecho a la igualdad que tiene el asegurado en relación con la víctima y señala que tanto la víctima como el asegurado tienen un interés asegurable.</p> <p>Agrega que la diferencia establecida en relación con el término de prescripción de cada una de las acciones, así como la diferencia en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de prescripción de la acción de cada uno de ellos, resulta más inaceptable aún si se tiene en cuenta que es el asegurado el contratante del seguro y quien asume el costo de la respectiva prima para proteger su patrimonio y reitera que tal diferencia se torna inconstitucional, máxime si se tiene en cuenta que, de otra parte, se está dejando a la voluntad discrecional de la víctima la posibilidad de presentar o no su petición dentro del término pactado entre asegurado y asegurador, con evidente perjuicio para el asegurado ya que, si la reclamación se hace fuera de dicho término, el asegurado ya no contará con la respectiva cobertura.</p> <p>Manifiesta que la potestad que se confiere en el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 389 de 1997 de pactar coberturas temporales en las que el siniestro tiene cobertura sólo si la reclamación judicial o extrajudicial se realiza dentro de los límites temporales de la póliza, que no podrán ser inferiores a dos años en pólizas de seguros de responsabilidad, se torna perjudicial y discriminatoria para el asegurado, ya que el surgimiento del siniestro para el</p>
--	--

	<p>asegurado depende de un hecho subjetivo y discrecional de la víctima, mientras que para la víctima el siniestro equivale al acaecimiento del hecho dañoso imputable al asegurado.</p> <p>Señala que si se unifica el surgimiento del siniestro tanto para la víctima como para el asegurado a partir del hecho externo imputable al asegurado y se establece que el término de cobertura que se pacte en la póliza nunca pueda ser inferior al término de prescripción de la acción del asegurado contra la aseguradora, no será relevante la reclamación judicial para efectos de la determinación del nacimiento del siniestro y se superará la serie de situaciones desfavorables para el asegurado en relación con las prerrogativas con las que actualmente cuenta la víctima dentro del marco del contrato de seguros.</p> <p>En razón de la inadmisión de la demanda, el actor complementó su argumentación aludiendo a los elementos propios del test de igualdad, insistiendo en la falta de razonabilidad que caracteriza a las diversas diferenciaciones que se hacen, según se trate de la víctima o del asegurado para reiterar que, mientras subsistan las disposiciones acusadas, se estará vulnerando el derecho de igualdad del asegurado, razón por la cual las mismas han de ser retiradas del ordenamiento.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	SENTENCIA C-468/08
Fecha de la sentencia	catorce (14) de mayo de dos mil ocho (2008)
Demandante	Juan Ricardo Giraldo Acosta
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 163 (parcial) de la Ley 136 de 1994, tal como fue modificado por el artículo 9º de la Ley 177 de 1994.
Conoció en primera instancia	Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Decision	Declarar INEXEQUIBLE la expresión "o del concejo que deba hacer la elección," contenida en el artículo 9º de la Ley 177 de 1994, que modificó el artículo 163 de la Ley 136 de 1994.

Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor sostiene que el artículo 272 de la Constitución Política prescribe que no podrá ser elegido contralor municipal quien "sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia". No obstante, en abierta contradicción con la norma constitucional - dice el demandante- la disposición acusada amplía el término de duración de la inhabilidad.</p> <p>En efecto, el demandante afirma que la "inhabilidad constitucional de un año para que un miembro del Concejo pudiera ser elegido contralor, fue ampliada a tres años por las normas acusadas. De esa manera las normas legales estarían modificando el artículo 272 inciso séptimo de la C.P. violando el ordenamiento jurídico colombiano que establece el procedimientos diferentes para realizar cambios o modificaciones de las normas constitucionales".</p> <p>Sostiene que en esta materia el constituyente no defirió en la ley la definición de la inhabilidad, como sí lo hizo en las inhabilidades de candidatos, por lo que debe entenderse que dicha disposición es de aquellas que la doctrina llama cerradas, es decir, no abiertas a la regulación del legislador.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	SENTENCIA C-1083/08
Fecha de la sentencia	
Demandante	Jorge Alonso Garrido Abad.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad: del literal c) del artículo 2 de la Ley 232 de 1995, <i>"por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales"</i> .
Conoció en primera instancia	
Decision	Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del literal c) del artículo 2 de la Ley 232 de 1995.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA

Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>2.1. El ciudadano Jorge Garrido Abad afirma que el literal c) del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 es violatorio de los artículos 2 y 334 de la Constitución Política.</p> <p>2.2. Vulneración del artículo 334 de la Constitución Política, por omisión legislativa relativa: ausencia de regulación legal, integrada en la disposición demandada, sobre valor del derecho de autor por ejecución de una obra musical, en ausencia de acuerdo entre usuario y autor.</p> <p>- La norma censurada -al establecer el pago de derechos de autor por ejecución pública de obras musicales como uno de los requisitos de funcionamiento de los establecimientos de comercio-, debe involucrar necesariamente la intervención estatal a través de normas de orden público que concilien los múltiples intereses que se encuentran en juego respecto del pago del derecho patrimonial de autor, en los términos de las sentencias C-509 de 2004<sup>59</sup> y C-833 de 2007<sup>60</sup> de esta Corporación. Entre los intereses en juego, alega, se encuentran los del establecimiento de comercio y del titular del derecho de autor, y especialmente los intereses de los usuarios, que requieren de la intervención del Estado para no ser objeto de arbitrariedades y abusos en esa cobranza, por parte de particulares.</p> <p>- Como la expedición del comprobante de pago al que alude la disposición atacada no le permite al Estado conciliar los intereses usuario-autor cuando éstos no se ponen de acuerdo sobre el precio a pagar por ese concepto (tarifa), se viola según el actor el artículo 334 de la Carta, ya que ello implica una imperfección del régimen de pago de derechos de autor que genera censura constitucional.</p> <p>- El desconocimiento de la Carta se concreta en una aparente <i>“omisión legislativa relativa”</i> que desconoce el Orden Económico Social establecido por el artículo 334 de la Constitución, porque <i>“la disposición acusada no incluye dentro de su mandato la intervención estatal a la que está sometida la actividad de recaudo de derechos de autor por ejecución pública que regula ese texto constitucional”</i>, en la medida en que el legislador dejó de integrar al texto legal impugnado la posibilidad de que el requisito de funcionamiento también <i>“se [pueda] cumplir a través del Régimen</i></p>

	<p><i>de pago supletorio por intervención estatal al señalamiento de la tarifa a pagar por ese concepto”.</i><sup>61</sup></p> <p>- De este modo, el actor solicita el retiro de la norma del ordenamiento jurídico, no sin antes precisar que estima que su retiro efectivo no implica la desprotección de los derechos de autor como podría suponerse, en la medida en que existe todavía una norma similar a la acusada en el Decreto Ley 2150 de 1995.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-1188/08
Fecha de la sentencia	tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008).
Demandante	Hugo Hernán Riveros Duarte
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 5º (parcial) de la Ley 447 de 1998
Conoció en primera instancia	Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Decision	DECLARARSE INHIBIDA para adoptar decisión de fondo sobre los cargos formulados contra el Art. 5º, Parágrafo 1º, de la Ley 447 de 1998, por la supuesta vulneración del principio de igualdad y del deber estatal de otorgar protección a la familia, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera vulnerados los Arts. 5, 13, 42 y 44 de la Constitución Política, con los siguientes argumentos:</p> <p>Afirma que la expresión normativa demandada quebranta el principio de igualdad, al exigir que los beneficiarios de la pensión vitalicia prevista en el Art. 1º de la misma ley, o sea los parientes y la cónyuge o la compañera permanente de la persona vinculada a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por razón del servicio militar obligatorio, con motivo de la muerte de dicha persona ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, en el momento de serles reconocida dicha pensión tengan una edad mínima de cincuenta (50) años, cuando la Ley 100 de 1993 y el Decreto ley 1211 de 1990 no exigen edad alguna a los beneficiarios de las pensiones de sobrevivientes en ellos contempladas.</p> <p>Sostiene que tal segmento normativo vulnera también el deber estatal de otorgar protección a la familia, particularmente a la madre cabeza de familia. Agrega que el reconocimiento de la pensión vitalicia debe producir efectos a partir de la muerte del soldado, cuando más la necesitan sus familiares, y no a partir de los 50 años de edad de los beneficiarios, por ser incierto el cumplimiento de dicha edad y ser, en cambio, cierta y perjudicial</p>

	para los familiares la desaparición de aquel.
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-116/08
Fecha de la sentencia	
Demandante	Nelly Julieth Arias Escobar y Néstor Ricardo Ortiz Lozano
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 (parcial), <i>“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”</i>
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	Declarar EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, en el entendido de que para la legitimación activa en las acciones de grupo no se requiere conformar un número de veinte personas que instauren la demanda, pues basta que un miembro del grupo que actúe a su nombre señale en ella los criterios que permitan establecer la identificación del grupo afectado.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los demandantes consideran que el aparte acusado del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, comporta una vulneración de los artículos 1, 2, 13, 84, 88 inciso 2°, 89, 228 y 229 de la Constitución Política.</p> <p>2. Fundamentos de la demanda</p> <p>Los demandantes empiezan por señalar que la nueva concepción del Estado, de acuerdo con la cláusula “Social de Derecho”, hizo que éste asumiera un nuevo compromiso con la sociedad en relación con la garantía de los derechos del individuo; dicho compromiso se manifiesta, entre muchos otros ámbitos, en el establecimiento de acciones a través de las cuales los miembros de la comunidad pueden exigir la protección de intereses, ya no particulares, sino compartidos por una pluralidad de individuos.</p> <p>Partiendo de esa consideración, los actores señalan como razones de inconstitucionalidad del aparte acusado, las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En primer lugar, estiman que el hecho de que se limite la posibilidad de acudir a las acciones de grupo a la circunstancia de que éste se encuentre conformado por al menos 20 personas,</li> </ul>

	<p>comporta una vulneración de los artículos 1 y 2 constitucionales, ya que constituye una medida discriminatoria que condiciona a un “guarismo” la posibilidad de ejercer la acción, en contravía de los mandatos de la Carta que buscan facilitarle a los individuos las herramientas necesarias para hacer efectivas las garantías establecidas en el Texto Superior.</p> <p>- En segundo término, a juicio de los demandantes, el aparte acusado es inconstitucional por cuanto de acuerdo con el artículo 88 de la Carta estas acciones tienen operancia cuando quiera que se presente un daño que se le cause a un “número plural de personas”, por lo que debe entenderse que, de acuerdo con el mandato constitucional, esta acción podrá ejercerse cuando se reúnan dos o mas individuos que han sufrido un daño, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos para el efecto.</p> <p>Para los actores, una limitación como la acusada impide que aquellos grupos que no cumplen con el número mínimo requerido por el legislador acudan a la acción de grupo, lo que puede presentarse, según afirman, en el caso de minorías y grupos social y económicamente vulnerables, situación que se ve agravada si se considera que -en ocasiones- la difícil situación económica de estas personas les impide acudir individualmente a la jurisdicción en procura de sus derechos.</p> <p>Pero además, a su juicio, el constituyente no estableció que el legislador estuviera facultado para limitar a su arbitrio el ejercicio de la acción y, en esa medida, estiman que el aparte acusado modifica “la naturaleza y la esencia de esta herramienta colectiva (...) cambiando la noción que se tiene de grupo, que es entendido como la reunión de dos o más individuos que en estas condiciones sufren un perjuicio (...).”</p> <p>- Adicionalmente, los accionantes consideran que el aparte acusado vulnera el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), particularmente en relación con los siguientes elementos: (i) el principio general, según el cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato por parte de las autoridades; (ii) la prohibición de establecer discriminaciones arbitrarias e injustificadas que impliquen la negación del acceso a un beneficio o la restricción en el ejercicio de un derecho a determinado individuo o grupo de personas; (iii) el deber de establecer ventajas o prerrogativas a favor de grupos disminuidos o marginados y (iv) la especial protección de aquellos que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.</p> <p>En este orden de ideas, en su sentir, el aparte acusado “margina a las personas que por circunstancias especiales no cumplen con el</p>
--	---

	<p>número <i>arbitrariamente impuesto por el legislador, y perpetúa su situación de desigualdad</i><sup>62</sup>. De esta manera, la norma establece una diferencia de trato entre aquellos que logren conformar un grupo de 20 personas y quienes no, ya que mientras los primeros pueden acudir a la acción de grupo y solucionar su conflicto a través de un trámite expedito, los segundos deberán ejercer las acciones individuales para ver satisfechas sus pretensiones, a través de procesos que suelen ser mucho más extensos en el tiempo.</p> <p>A lo anterior se le suma el hecho de que el legislador no previó mecanismos que privilegiaran a los grupos marginados o discriminados que no pudieran cumplir con el requisito numérico impuesto, por lo que incurrió en una omisión al deber constitucional establecido en el inciso segundo del artículo 13 de la Carta, en consonancia con los artículos 88 y 89 del Texto Superior.</p> <p>En este escenario, sostienen que aplicado el <i>test de razonabilidad</i> a la diferenciación impuesta por el legislador en este asunto -lo que implica establecer (i) que exista un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual; (ii) la validez de ese objetivo a la luz de la Constitución y (iii) la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido-, se concluye que ésta vulnera el principio de igualdad; ello por cuanto, en primer lugar, no existe relación alguna entre la medida adoptada por el legislador y “<i>la pretendida reserva de las acciones de grupo, para la protección de grupos de especial entidad, o para la indemnización de daños de importantes repercusiones sociales (fin constitucional)</i>”<sup>63</sup> y, en segundo término, porque su inclusión no era necesaria para la consecución de un objetivo o fin de rango constitucional.</p> <p>Por tal razón, consideran que la medida parece satisfacer otros propósitos como, por ejemplo, restringir la posibilidad de ejercer la acción de grupo para aquellos eventos en los que los afectados se encontraran reunidos en alguna forma de organización con anterioridad a la ocurrencia del hecho dañoso.</p> <p>- Encuentran vulnerado, además, el artículo 84 de la Carta según el cual cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer</p>
--	---

	<p>ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio; así, en el presente caso, el legislador estableció una limitación que no se encuentra prevista en la norma constitucional correspondiente.</p> <p>- Finalmente, en criterio de los actores, el aparte acusado también viola los artículos 228 y 229 constitucionales, ya que establece una limitación injustificada a la posibilidad de acceder a la administración de justicia mediante el ejercicio de la acción de grupo, teniendo en cuenta que no existe ningún fundamento constitucional ni legal que justifique la limitación establecida por el legislador, así como tampoco un argumento objetivo -como podría ser la necesidad de protección de un interés jurídico general- que sustente la procedencia de una disposición en tal sentido.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-735/08
Fecha de la sentencia	veintitrés (23) de julio de dos mil ocho (2008).
Demandante	Rodrigo Ocampo Ossa.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) de la ley 472 de 1998 <i>“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Decision	Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, en relación con la constitucionalidad de la expresión <i>“y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes”</i> contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, respecto de los cargos formulados, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>En términos generales, el demandante solicita la inexequibilidad del artículo 55 de la Ley 472 de 1998 por vulnerar el Preámbulo y los artículos 88 y 229 de la Constitución Política.</p> <p>Para sustentar su ataque el actor tras hacer un recuento de la jurisprudencia constitucional respecto del artículo 1º Superior, concluye que el objeto de la acción pública y la función de la Corte Constitucional, además de decidir sobre la constitucionalidad de las normas que violan la Constitución, tiene que ser el de decidir sobre aquéllas que no la desarrollan adecuadamente o impiden de alguna manera conseguir sus objetivos (ver Preámbulo), así no parezca que la violan.</p> <p>A continuación relata el origen de las acciones colectivas en el derecho anglosajón y del debate y estudio sobre la inclusión de las mismas en la nueva carta Política que se dio en la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente elegida en 1.989, con base en el proyecto presentado por los delegatarios Guillermo Perry Rubio, Horacio Serpa Uribe y Eduardo Verano de la Rosa.</p>

	<p>Como razones de inconstitucionalidad basadas en el artículo 1º de la Constitución Política menciona que el principio de solidaridad es uno de los valores fundamentales de la nacionalidad, y que aquella se rompe siempre que hay desigualdad en el trato de situaciones idénticas como ocurriría si a un ciudadano que ha sufrido un perjuicio se le niega la indemnización que se le otorga a otro en las mismas condiciones por un simple razonamiento procedimental.</p> <p>Respecto del artículo 88 de la Carta fundamenta su vulneración en una apreciación que sobre el mismo hizo esta Corporación en providencia que el actor no identifica y de la cual concluye que “En la medida que la norma está restringiendo con una caducidad basada en el ejercicio temporal de la acción de una persona que está en igualdad de condiciones, pero que por otra parte está representada en el proceso por el demandante, se genera una inequidad ajena al querer de la Constitución”.</p> <p>En lo que toca con el artículo 229 Superior, asevera que el argumento central de la violación constitucional lo pone en boca de la Corte en sentencia que tampoco identifica, donde presuntamente la esta Corporación decidió, en un caso concreto, inaplicar el segmento atacado del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, al parecer en una decisión de Sala cuando, según transcribe el libelista, dijo: <i>“Encuentra la Sala que en oposición al contenido de todas estas normas, cuando se regula el derecho de quienes no intervinieron en el proceso, de acogerse a los efectos favorables de la sentencia, el aparte “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado” del artículo 55 de la Ley 472 impide efectivamente hacer uso de ese derecho. La frase señalada es abiertamente incompatible con la Constitución, pues una simple lectura del texto basta para advertir la oposición flagrante al mandato constitucional contenido en el artículo 229, por lo que el juzgador cuando se enfrenta a este precepto debe optar por inaplicarlo”</i>.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



## SENTENCIAS DE 2009

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-029/09
Fecha de la sentencia	veintiocho (28) de enero de dos mil nueve (2009)
Demandante	Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon Sanín, Marcela Sánchez Buitrago, Mauricio Albarracín Caballero, Alejandra Azuero Quijano y Luz María Sánchez Duque.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991; el artículo 24 - literales a, b y d del Decreto 1795 de 2000; los artículos 411 y 457 del Código Civil; el artículo 4 de la Ley 70 de 1931; los artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982; el artículo 7 de la Ley 3 de 1991; los artículos 283 - numeral 2 y 286 de la Ley 5 de 1992; el artículo 5 de la Ley 43 de 1993; el artículo 8 - numeral 1 literal g y numeral 2 literales c y d de la Ley 80 de 1993; el artículo 244 de la Ley 100 de 1993; los artículos 14 - numerales 2 y 8, y 52 de la Ley 190 de 1995; los artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996; el artículo 2 de la Ley 294 de 1996, el artículo 2 de la Ley 387 de 1997; los artículos 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999; los artículos 10 y 11 de la Ley 589 de 2000; los artículos 34, 104 - numeral 1, 170 - numeral 4, 179 - numerales 1 y 4, 188 b - numeral 3, 229, 233, 236, 245 - numeral 1 y 454 a de la Ley 599 de 2000; los artículos 40, 71 y 84 - numerales 1, 2, 3, 6, 7, y 9 de la Ley 734 de 2002; los artículos 8 - literal b, 282, 303, y 385 de la Ley 906 de 2004; el artículo 3 - numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de 2004; los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005; los artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005; los artículos 2 y 26 de la Ley 986 de 2005; el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007; los artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 - numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1152 de 2007; y el artículo 18 de la Ley 1153 de 2007.
Conoció en primera instancia	Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Decision	Primero.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familia” y “familiar” contenidas en el artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999 y en el artículo 1º de la Ley 258 de 1996, por ineptitud sustantiva de la demanda y declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de las expresiones “compañero o “compañera permanente” y “compañeros permanentes cuya unión haya perdurado por lo menos dos años” contenidas en artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999 y en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996, en el entendido de que esta protección patrimonial se extiende en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen.

	<p>Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil, en el entendido de que también comprende, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen.</p> <p>Tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañeros permanentes” contenida en el artículo 5º de la Ley 43 de 1993, en el entendido de que la misma se aplica también, en igualdad de condiciones, a los integrantes de parejas del mismo sexo.</p> <p>Cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de las expresiones “unión singular, permanente y continua”, “compañera permanente” y “unión permanente” contenidas en los artículos 2º y 3º del Decreto 2762 de 1991, en el entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo.</p> <p>Quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de las expresiones “compañero permanente” y “compañero o compañera permanente” de los artículos 8-b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004, 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 y 71 de la Ley 734 de 2002 en el entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo.</p> <p>Sexto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 34 de la Ley 599 de 2000 en el entendido de que la misma incluye, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo.</p> <p>Séptimo.- En relación con el artículo 18 de la Ley 1153 de 2007, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-879 de 2008, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 1153 de 2007.</p> <p>Octavo.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “grupo familiar” contenida en el numeral 1º del artículo 179 de la Ley 599 de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda y declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del numeral 1º del artículo 104, el numeral 4º del artículo 170, los numerales 1º y 4º del artículo 179, el numeral 3º del artículo 188-B y el numeral 1º del artículo 245 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que sus previsiones también comprenden a los integrantes de las parejas del mismo sexo.</p>
--	--

	<p>Noveno.- En relación con los cargos referidos a las expresiones “compañero” y “compañera permanente”, y “al hombre y la mujer” contenidas en el artículo 1° de la Ley 1181 de 2007, por medio de la cual se modificó el artículo 233 del Código Penal, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-798 de 2008, en la que se declaró la inexequibilidad de la expresión “únicamente” contenida en el párrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1181 de 2007, y la exequibilidad del resto de esta disposición, en el entendido que las expresiones “compañero” y “compañera permanente” comprenden también a los integrantes de parejas del mismo sexo.</p> <p>Décimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, de la expresión “durante un lapso no inferior a dos años” contenida en el párrafo 1° del artículo 233 del Código Penal.</p> <p>Décimo primero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1° del artículo 457 del Código Civil, en el entendido de que, para los efectos allí previstos, la misma también comprende a los compañeros permanentes, y, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo.</p> <p>Décimo segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que este tipo penal comprende también a los integrantes de las parejas del mismo sexo</p> <p>Décimo tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del artículo 236 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que este tipo penal comprende también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.</p> <p>Décimo cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañeros permanentes” contenida en literal a) del artículo 2° de la Ley 294 de 1996 en el entendido de que, para los efectos de las medidas administrativas de protección previstas en esa ley, la misma también se aplica, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo, e inhibirse en relación con las expresiones “familia” contenidas en el mismo artículo.</p> <p>Décimo quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 454A del Código Penal, en los términos de los considerandos de esta providencia, en el entendido de que este tipo penal también comprende las amenazas, en igualdad de condiciones, en contra de los integrantes de las parejas del mismo sexo que actúen como testigos.</p>
--	---

	<p>Décimo sexto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de los artículos 5, 7 y 15 de la Ley 975 de 2005, 11 de la Ley 589 de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2º de la Ley 387 de 1997, siempre que se entienda que, cuando corresponda, sus previsiones, en igualdad de condiciones, se aplican también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.</p> <p>Décimo séptimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de los artículos 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que los mismos se aplican también al cónyuge, compañero o compañera permanente y, en las mismas condiciones, a los integrantes de la pareja del mismo sexo.</p> <p>Décimo octavo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en los artículos 10 de la Ley 589 de 2000 y 26 de la Ley 986 de 2005, en el entendido de que la misma, en igualdad de condiciones, se aplica también a los integrantes de las parejas del mismo sexo, y la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del artículo 2º de la Ley 986 de 2005, siempre que se interprete que el mismo no excluye a las parejas del mismo sexo de las medidas de protección consagradas en la Ley 986 de 2005.</p> <p>Décimo noveno.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de las expresiones “el compañero o la compañera permanente”, “la compañera o compañero permanente”, “la compañera permanente” “un compañero o compañera permanente” “Compañero (a) permanente” y “compañero o compañera permanente” contenidas en los artículos 3º de la Ley 923 de 2004 y 24 del Decreto 1795 de 2000 en el entendido de que, en igualdad de condiciones, las mismas también se aplican en relación con los integrantes de parejas del mismo sexo.</p> <p>Vigésimo.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familiar” contenida en el literal d) del artículo 24 del decreto 1795 de 2000 y “grupo familiar” contenida en el numeral 3.7 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.</p> <p>Vigésimo primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Para el caso del compañero(a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años”, contenida en el literal a) del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000.</p> <p>Vigésimo segundo.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familiar” y “familia” contenidas en los artículos 1º y 27 de la Ley 21</p>
--	---

	<p>de 1982, por ineptitud sustantiva de la demanda.</p> <p>Vigésimo tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 21 de 1982, en el entendido de que, en las mismas condiciones, comprende también a los integrantes de la pareja del mismo sexo.</p> <p>Vigésimo cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, del artículo 7º de la Ley 3 de 1991, en el entendido de que el subsidio familiar de vivienda allí previsto se aplica también a los integrantes de las parejas homosexuales, en las mismas condiciones que a los compañeros o compañeras permanentes.</p> <p>Vigésimo quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de las expresiones compañeros o compañeras permanentes”, contenidas en los artículos 61, 62, 159, 161 y 172 de la Ley 1152 de 2007, en el entendido que en el ámbito de esa ley, estas disposiciones también comprenden a los integrantes de las parejas del mismo sexo e INHIBIRSE en relación con las expresiones “familia”, “familiar”, y “familiares” contenidas en los artículos 80, 159, 161 y 172 de la Ley 1152 de 2007.</p> <p>Vigésimo sexto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 244 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que, en las mismas condiciones, comprende también a los integrantes de la pareja del mismo sexo.</p> <p>Vigésimo séptimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de las expresiones demandadas de los artículos 14 y 52 de la Ley 190 de 1995, 1º de la Ley 1148 de 2007, 8º de la Ley 80 de 1993, 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 286 de la Ley 5ª de 1992, en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo.</p> <p>Vigésimo octavo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de las expresiones demandadas del numeral 2º del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 en el entendido de que, en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo.</p> <p>Primero.- NEGAR la solicitud de corrección de la Sentencia C-029 de 2009, presentada por los ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon Sanín, Marcela Sánchez Buitrago, Mauricio Albarracín Caballero, Alejandra Azuero Quijano y Luz María Sánchez.</p> <p>Segundo.- Ordenar a la Relatoría de esta Corporación, que adjunte</p>
--	--

	<p>copia del presente auto a la Sentencia C-029 de 2009, con el fin de que sea incluido en la publicación que, por cualquier medio, se haga de la misma.</p> <p>Tercero.- Ordenar a la Secretaría General de la Corte, que envíe copia del presente auto al archivo de esta Corporación, para que sea adjuntado al expediente correspondiente.</p> <p>Cuarto. Ordenar a la Secretaría General de la Corte, que envíe copia del presente auto a todas las autoridades a las que se les comunicó la Sentencia de la referencia.</p> <p>Quinto.- Contra este pronunciamiento no procede recurso alguno.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los accionantes señalan que las normas acusadas excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales y sus miembros, de manera que, todas en general, vulneran el preámbulo y los artículos 1, 13 y 16 de la Carta Política y algunas en particular, violan los artículos 2, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 29, 40, 48, 49, 51, 58, 64, 66, 93, 95, 100, 123, 126, 209, 229, 250 numerales 6 y 7 de la Constitución Política, según se ilustra en la demanda en cuatro secciones relativas a (i) aspectos generales, (ii) análisis de constitucionalidad de las normas acusadas, (iii) competencia de la Corte Constitucional, y (iv) consideraciones técnicas, en los términos que a continuación se sintetizan.</p> <p>1. Sección preliminar</p> <p>En este acápite de la demanda se explican aspectos generales del precedente constitucional que le sirve de base, de la justificación de la presentación de la demanda en bloque de todas las normas acusadas y del esquema general que seguirá el análisis de fondo de la demanda.</p> <p>1.1. Precedente constitucional aplicable</p> <p>En la sección preliminar de la demanda, los accionantes señalan que la Corte Constitucional realizó un giro jurisprudencial en materia de reconocimiento de derechos a las parejas homosexuales, materializado en las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008, con lo que se pasó de la garantía del derecho a la igualdad y de la prohibición de discriminación de personas homosexuales en el plano individual, a la extensión de dicha protección a las parejas conformadas por estas personas.</p>

	<p>El origen de este nuevo precedente, según indican los accionantes, se encuentra en la sentencia C-075 de 2007 en la que se declaró la constitucionalidad condicionada de la Ley 54 de 1990, en el entendido de que el régimen de protección de las uniones maritales de hecho allí consagrado a favor de los compañeros permanentes es aplicable a las parejas del mismo sexo.</p> <p>No obstante los efectos limitados de la providencia referida, ésta dispuso que si bien pueden existir diferencias entre las parejas heterosexuales y homosexuales, ambas representan un mismo valor y una misma dignidad, de lo que derivan unos requerimientos análogos de protección, en relación con los cuales se definió un test estricto de proporcionalidad para el caso de tratamiento diferenciado de parejas homosexuales, de manera que si de su aplicación se constata la ausencia de reconocimiento jurídico de la realidad de las parejas homosexuales y un consecuente vacío legal de protección de las mismas, tal situación constituye una violación del deber constitucional de otorgar un mínimo de protección a esas parejas.</p> <p>Los accionantes señalan que el precedente fijado en la providencia C-075 de 2007 fue reiterado y ampliado en las sentencias (i) C-811 de 2007 que, en relación con una norma sobre beneficiarios del sistema de salud, cuyo alcance se encontraba determinado por la protección especial de la familia, estableció que la inclusión de las parejas homosexuales en nada reduciría la protección de las familias y parejas heterosexuales; (ii) T-856 de 2007 que concluyó que la negativa de afiliar a un miembro de una pareja homosexual como beneficiario de su compañero en el régimen contributivo de salud resulta discriminatoria, con lo que se amplió el alcance del precedente, limitado inicialmente al régimen de la unión marital de hecho, a otras materias como la seguridad social en salud; y (iii) C-336 de 2008 en la que se declaró la constitucionalidad condicionada de los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993 en el entendido de que las parejas permanentes del mismo sexo también son beneficiarias de la pensión de sobreviviente allí consagrada.</p> <p>Los demandantes concluyen que el precedente referido es aplicable a las normas censuradas, en el sentido de que la exclusión de las parejas homosexuales de un régimen de protección o de obligaciones determinadas exige la aplicación del test estricto de proporcionalidad, incluso en el caso de que la exclusión se explique por la protección especial a la familia por cuanto dicha justificación carece de razonabilidad y proporcionalidad. Adicionalmente, los accionantes afirman que, según las sentencias T-856 de 2007 y C-075 de 2007, podría prescindirse de la aplicación del test de proporcionalidad en atención a la extensión de las figuras de unión</p>
--	---

	<p>marital de hecho y de compañeros permanentes a las parejas homosexuales.</p> <p>1.2. Presentación de la demanda en bloque</p> <p>Los demandantes señalan que, no obstante la diversidad de normas acusadas, todas ellas establecen un régimen de beneficios o de cargas que tienen como destinatarias a las parejas heterosexuales pero que excluyen a las parejas homosexuales, de suerte que la presentación de la demanda en bloque, si bien torna el estudio más dispendioso y complejo, representa mayor eficiencia, agilidad procesal, igualdad y seguridad jurídica.</p> <p>En efecto, los actores consideran que la demanda en bloque permite a la Corte establecer argumentos generales de reproche aplicables a todas las normas censuradas y extender el precedente a todas las materias relativas a derechos y obligaciones de parejas homosexuales, con lo que se garantizaría la igualdad y la seguridad jurídica en este tema.</p> <p>En el mismo sentido, los demandantes señalan que es relevante obtener un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la materia, en atención a la indiferencia que el Legislador y el Gobierno Nacional han demostrado en relación con los derechos de esta minoría evidenciada, en el primer caso, en la frustración del trámite legislativo de proyectos presentados por el movimiento colombiano de gays y lesbianas y, en el segundo, en la decisión de no tomar medidas específicas para cumplir un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el particular.</p> <p>Finalmente, los demandantes sugieren a la Corte Constitucional que el análisis no se restrinja a las normas demandadas, sino que en desarrollo del principio de unidad normativa se analicen todas aquéllas que representen un déficit de protección para las parejas homosexuales. En el mismo sentido, sugieren a esta Corporación fijar una doctrina general sobre la materia que sea aplicable a las normas jurídicas y decisiones judiciales que discriminan a las parejas del mismo sexo y que escapan de su control constitucional abstracto.</p> <p>1.3. Esquema general del análisis de constitucionalidad y síntesis del planteamiento jurídico</p> <p>Con fines de claridad expositiva y coherencia argumentativa, los demandantes agruparon las normas censuradas según consagraran (i) derechos civiles y políticos de las parejas heterosexuales, (ii) sanciones y prevenciones respecto de delitos y faltas, (iii) derechos</p>
--	---



	<p>para los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces, (iv) prestaciones, subsidios y medidas indemnizatorias de carácter social a favor de parejas heterosexuales, y (v) límites al acceso y ejercicio de la función pública y a la celebración de contratos con el Estado para las parejas heterosexuales, todas ellas con exclusión de las parejas homosexuales.</p> <p>A su vez, cada uno de los acápites referidos fue subdividido en otros grupos en atención a la similar naturaleza de ciertas normas que permite un estudio conjunto e, incluso, la formulación de un mismo cargo de inconstitucionalidad. Tras especificar cada subdivisión de la demanda, los actores señalan que la estructura de los cargos comporta la transcripción y subraya de las expresiones acusadas, la enunciación de las normas constitucionales que se estiman infringidas, la demostración de la procedencia del cargo (en relación con la ausencia de cosa juzgada), el análisis de fondo de las normas (con aplicación de un test estricto de proporcionalidad al tratamiento diferenciado), y la formulación concreta del cargo.</p> <p>2. Análisis de constitucionalidad de las normas acusadas</p> <p>2.1. Normas que consagran derechos civiles y políticos para las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales</p> <p>Para efectos de claridad expositiva, los demandantes clasificaron estas normas en dos acápites, en función de la naturaleza civil o política de los derechos que consagran y regulan.</p> <p>2.1.1. Cargos contra normas que consagran derechos civiles para las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales</p> <p>En este acápite se estudiarán las normas que regulan la constitución del patrimonio inembargable de familia, la afectación a vivienda familiar y la obligación civil de prestación de alimentos a los compañeros permanentes.</p> <p>2.1.1.1. Cargos contra las normas civiles que regulan la constitución del patrimonio inembargable de familia y la afectación a vivienda familiar</p> <p>Los demandantes consideran que el artículo 4 de la Ley 70 de 1931 y los artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996 infringen los artículos 1, 13, 16 y 51 de la Constitución Política.</p> <p>Previo al desarrollo del cargo, los accionantes señalaron que la Corte Constitucional no se había pronunciado respecto del artículo</p>
--	--

	<p>4 de la Ley 70 de 1931 por lo que frente a éste no había operado la cosa juzgada. De otro lado, refieren que en la Sentencia C-560 de 2002 la Corte se pronunció sobre el artículo 1 de la Ley 258 de 1996, declarándolo exequible en lo demandado, que trataba sobre la protección de los bienes adquiridos por los dos cónyuges, de manera que sólo se configuró una cosa juzgada constitucional relativa. Adicionalmente, señalan que dicha norma fue modificada por la Ley 854 de 2003 la cual no ha sido objeto de control constitucional.</p> <p>De acuerdo con la demanda, las normas acusadas contienen disposiciones tendientes a la protección del lugar de habitación de las familias, con exclusión de las parejas homosexuales, en atención a que sus efectos se restringen a las parejas heterosexuales al articularse en torno a la noción de familia que de acuerdo con la Carta Política sólo incluye las parejas formadas por un hombre y una mujer.</p> <p>Dado que la exclusión se basa en el criterio sospechoso de la orientación sexual, los demandantes desatan el test estricto de proporcionalidad así: (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que, si bien el fin de las normas acusadas es la protección de la familia, <i>“... dado que las normas que definen el ámbito de aplicación de ambas figuras señalan como beneficiarios a los compañeros permanentes, con independencia de que conformen o no familias más amplias, es posible afirmar que las mismas tienen también el propósito de proteger a las parejas casadas o en unión marital de hecho, sin importar que éstas conformen o no familias”</i>. Esa decisión del legislador se explicaría por el valor social que tienen los vínculos de solidaridad y afecto creados por estas parejas y resulta evidente que la finalidad de las normas incluye a las parejas homosexuales, que tienen lazos de afecto y solidaridad similares que los que existen en las parejas heterosexuales, y son dignas de protección, a pesar de no considerarse incluidas en la noción constitucional de familia; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión de las parejas homosexuales de los beneficios consagrados en las normas acusadas no guarda relación lógica o causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la exclusión, que se traducen en un déficit de protección para las parejas homosexuales, superan sus beneficios que, incluso, no se presentan.</p> <p>La demanda sostiene que las parejas homosexuales tienen</p>
--	---

	<p>requerimientos análogos de protección que consisten en la importancia del acceso a las instituciones de patrimonio de familia inembargable y afectación a vivienda familiar para la construcción de un proyecto de vida en común y para la protección del miembro económicamente más débil de la pareja. Por lo tanto, el déficit de protección en estos asuntos compromete los derechos a la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la vivienda digna de las parejas homosexuales. De esta forma, resulta claro que la exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios contenidos en las normas acusadas es inconstitucional.</p> <p>De otra parte, los demandantes consideran que la imposición de un término de dos años de convivencia para que la Ley 258 de 1996 pueda aplicarse a los compañeros permanentes, vulnera su derecho a la igualdad en la medida en que les impone un requisito que no tienen que cumplir las parejas unidas por matrimonio quienes no deben esperar un tiempo mínimo para afectar a vivienda familiar el inmueble de habitación.</p> <p>En este sentido, la Corte Constitucional, en Sentencias C-521 de 2007 y C-811 de 2007 consideró que la sujeción al término de dos años para que el compañero permanente del afiliado al sistema de salud pudiera ser incluido como beneficiario no se encontraba justificada por parámetros objetivos y razonables. En la misma línea, los demandantes consideran que no existe razón alguna para que los compañeros permanentes, incluidas las parejas del mismo sexo, tengan que esperar dos años para que opere la afectación a vivienda familiar de su inmueble de habitación, por cuanto la necesidad de protección surge desde el inicio de la unión.</p> <p>Conforme a lo anterior, los demandantes solicitan (i) que en relación con las disposiciones acusadas contenidas en las leyes 70 de 1931 y 258 de 1996 se declare inconstitucional que las expresiones “familia” “compañero o compañera permanente” y “familiar” sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de la posibilidad de gozar de los derechos y beneficios que de ellas se desprenden y, (ii) que se declare la inexequibilidad de la expresión “cuya unión haya perdurado por lo menos dos años” contenida en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996.</p> <p>2.1.1.2. Cargos contra la norma que consagra la obligación civil de prestar alimentos</p> <p>Los demandantes consideran que el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil viola los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los actores sostienen que en la Sentencia C-1033 de 2002, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la</p>
--	--

	<p>disposición demandada en el entendido de que era aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho, en relación con el cargo formulado en dicha oportunidad referido a la violación del principio de igualdad por el trato discriminatorio otorgado a las parejas que forman una unión marital de hecho frente a las parejas unidas en matrimonio. De esta forma, se configuró una cosa juzgada constitucional relativa, que permite a la Corte emitir pronunciamiento de fondo sobre cargos de naturaleza distinta, como ocurre en el presente caso en el que la violación del derecho a la igualdad se predica por el trato discriminatorio otorgado a las parejas homosexuales, en relación con aquéllas heterosexuales.</p> <p>Según se presenta en la demanda, las parejas homosexuales se encuentran excluidas de la obligación civil de prestar alimentos, lo cual representa una diferencia de trato entre ellas y los compañeros permanentes heterosexuales que, por basarse en el criterio sospechoso de la orientación sexual exige la aplicación del test estricto de proporcionalidad, así: (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada es la protección de la familia y de los estrechos vínculos propios de las parejas permanentes. De esta forma, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la obligación de alimentos, entra en tensión con la finalidad de protección de los vínculos de solidaridad y afecto de las parejas que cubre aquéllas del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación lógica o causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la exclusión, que se traducen en un déficit de protección para las parejas homosexuales, son considerables.</p> <p>La demanda sostiene que las parejas homosexuales tienen requerimientos análogos de protección que consisten en la necesidad del acceso a un mecanismo, derivado de los vínculos de solidaridad, que ofrece a los miembros de esas parejas la posibilidad de asegurar su subsistencia cuando no están en condiciones de garantizarla por sí mismos. Por lo tanto, el déficit de protección en estos asuntos compromete los derechos a la igualdad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las parejas homosexuales, en la medida en que obstaculiza y desestimula la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital, al tiempo que hace más gravoso para los homosexuales la elección de un proyecto de vida en pareja.</p>
--	---

	<p>La norma acusada resulta inconstitucional, no sólo por el déficit de protección que representa, sino en atención al tratamiento diferenciado entre los miembros de parejas heterosexuales y homosexuales en término de las obligaciones impuestas a unos y otros, como quiera que, a pesar de tener uniones permanentes basadas en vínculos de solidaridad y afecto similares, solo los miembros de las parejas heterosexuales tienen la obligación legal de prestar alimentos a sus compañeros permanentes.</p> <p>Conforme a lo anterior, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que la expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil sea interpretada como que excluye a las parejas homosexuales de la obligación alimentaria allí prevista para las parejas heterosexuales.</p> <p>2.1.2. Cargos contra normas que consagran derechos políticos de carácter migratorio para las parejas heterosexuales con exclusión de las homosexuales.</p> <p>En este acápite se analizan la norma que consagra el beneficio de reducción del tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción y la que regula el derecho de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</p> <p>2.1.2.1. Cargo contra la norma que reduce el tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción a favor de los compañeros permanentes</p> <p>Los demandantes consideran que el artículo 5 de la Ley 43 de 1993 viola los artículos 1, 13, 16, 24, 93 y 100 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los actores ponen de presente que la norma acusada fue objeto de control de constitucionalidad en la Sentencia C-832 de 2006, por el cargo de vicio en la conformación de la ley al vulnerar el principio de unidad de materia, de manera que al plantearse en la presente demanda un cargo sustancialmente distinto, sólo puede hablarse del fenómeno de la cosa juzgada en su faceta relativa implícita.</p> <p>De acuerdo con los demandantes, la norma acusada consagra la posibilidad de que el tiempo de residencia requerido para acceder a la nacionalidad colombiana por adopción se reduzca de cinco a dos años, en caso de que el extranjero interesado sea compañero permanente de un nacional colombiano. Dado que las parejas homosexuales se encuentran excluidas de este beneficio es necesario aplicar a dicho trato diferenciado el test estricto de proporcionalidad, por cuanto aquél atiende al criterio sospechoso de la orientación sexual.</p>
--	---

	<p>(i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada es la protección de la familia y de la unidad y estabilidad de las parejas, objetivos que implican la protección de las parejas del mismo sexo y de sus miembros, por lo que entran en tensión con el objetivo de la exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio consagrado en la norma demandada; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que la exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio aludido no produce un beneficio concreto y, en cambio, conduce a una grave afectación de los derechos de las personas homosexuales, que se traduce en un déficit de protección para estas parejas.</p> <p>En este caso, los requerimientos análogos de protección de las parejas heterosexuales y homosexuales consisten en la importancia que representa para la parejas conformadas por un colombiano y un extranjero que se establezcan condiciones de acceso a la nacionalidad de este último que busquen proteger la convivencia estable de sus miembros. Adicionalmente, se considera que el requerimiento de protección es superior en el caso de las parejas homosexuales por cuanto sus uniones sólo se pueden constituir de hecho y cualquier separación involuntaria conduciría al rompimiento del vínculo.</p> <p>Si bien puede argumentarse que los miembros extranjeros de parejas del mismo sexo pueden acceder a la nacionalidad por adopción cumpliendo los requisitos exigidos a los individuos que no conforman pareja con un nacional, dicho mecanismo no es igualmente eficaz al analizado, por lo que debería aplicarse la misma línea argumentativa planteada en la Sentencia C-075 de 2007, en la que se reconoció que si bien las parejas homosexuales contaban con otros mecanismos para lograr los propósitos del régimen de protección de los compañeros permanentes en la Ley 54 de 1990, tales mecanismos consistían en procedimientos mucho más engorrosos, lo cual imponía una carga adicional y discriminatoria con respecto a las parejas heterosexuales.</p> <p>Por otra parte, se aduce en la demanda que no es de recibo el argumento según el cual el trato diferenciado encuentra justificación en la facultad del Estado de regular la migración y de restringir el acceso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional, por cuanto dicha potestad encuentra límites en los</p>
--	--

	<p>derechos fundamentales y particularmente, en la libertad de circular y el derecho de igualdad.</p> <p>Así las cosas, el déficit de protección en esta materia compromete el derecho a la igualdad y la libertad de circulación, permanencia y residencia, por cuanto se establece una diferenciación injustificada no solo entre los extranjeros homosexuales frente a los extranjeros heterosexuales, sino también entre los extranjeros homosexuales frente a los nacionales tanto homosexuales como heterosexuales, por cuanto aquéllos ven obstaculizada la posibilidad de construir y mantener relaciones estables de pareja en Colombia.</p> <p>Según las consideraciones expuestas, en la demanda se solicita que se declare que es inconstitucional que la expresión “compañeros permanentes” contenida en el artículo 5 de la Ley 43 de 1993 sea interpretada como que excluye a las parejas homosexuales del beneficio consistente en la reducción del tiempo de residencia para solicitar la nacionalidad por adopción concedido a los compañeros permanentes extranjeros de nacional colombiano.</p> <p>2.1.2.2. Cargo contra las normas que regulan el derecho de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones demandadas de los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 violan los artículos 1, 13, 16, 24 y 93 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los actores sostienen que en la Sentencia C-530 de 1993, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 en relación con el cargo formulado en dicha oportunidad referido a la violación del principio de igualdad por el trato desventajoso y discriminatorio del resto de colombianos con respecto a los nacidos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En este sentido, se concluye que respecto de las normas acusadas solo ha operado el fenómeno de cosa juzgada relativa, que no impide que la Corte Constitucional estudie los nuevos cargos formulados.</p> <p>Por otra parte, previo al análisis de fondo de las normas acusadas, los accionantes señalan que si bien en la Sentencia T-725 de 2004 la Corte Constitucional señaló que la categoría de compañeros permanentes incluida en la disposición demandada no era aplicable a las parejas del mismo sexo y que la norma en cuestión tenía el propósito de proteger de manera especial a la familia heterosexual, lo que justificaba la exclusión de las parejas homosexuales, a la luz de las Sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-</p>
--	--

	<p>336 de 2008, es dado concluir que las reglas contenidas en aquella sentencia fueron modificadas, conforme al giro radical en materia del derecho a la igualdad y a la no discriminación de los homosexuales, referido en acápite anterior de la demanda.</p> <p>De acuerdo con los demandantes, la norma acusada consagra la posibilidad de que el tiempo de residencia requerido para acceder a la nacionalidad colombiana por adopción se reduzca de cinco a dos años, en caso de que el extranjero interesado sea compañero permanente de un nacional colombiano. Dado que las parejas homosexuales se encuentran excluidas de este beneficio es necesario aplicar a dicho trato diferenciado el test estricto de proporcionalidad, por cuanto aquél atiende al criterio sospechoso de la orientación sexual.</p> <p>(i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada es la protección de la familia y de la unidad y estabilidad de las parejas permanentes, objetivos que implican la protección de las parejas del mismo sexo y de sus miembros, por lo que entran en tensión con el objetivo de la exclusión de las parejas homosexuales del beneficio consagrado en la norma demandada; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que la exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio aludido no produce un beneficio concreto y, en cambio, conduce a una grave afectación de los derechos de las personas homosexuales, que se traduce en un déficit de protección para estas parejas.</p> <p>Los requerimientos análogos de protección se concretan en la necesidad de que las parejas homosexuales y heterosexuales fijen su residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, asunto relevante para el desarrollo y mantenimiento de un proyecto de vida en común.</p> <p>Si bien puede argumentarse que los miembros extranjeros de parejas del mismo sexo pueden lograr la fijación de su residencia en el Departamento referido a través de los mecanismos ordinarios conferidos a cualquier individuo para tal fin. Sin embargo, obtener la residencia a través de esos mecanismos resulta más gravoso, por lo que el escenario planteado es similar al resuelto en la Sentencia C-075 de 2007.</p>
--	--



	<p>Así las cosas, el déficit de protección en esta materia compromete el derecho a la igualdad y la libertad de circulación, permanencia y residencia, por cuanto la exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de protección de la norma acusada se traduce en una restricción a la posibilidad de las parejas homosexuales de los residentes del Archipiélago de escoger su lugar de residencia y en una severa afectación de los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad pues niega la existencia y valor de los proyectos de vida elegidos y contruidos por las parejas del mismo sexo.</p> <p>De esta forma, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones “unión singular, permanente y continua”, “compañera permanente” y “unión permanente” contenidas en los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de los beneficios consistentes en fijar residencia y en obtener el derecho a una residencia permanente allí consagrados a favor de las parejas heterosexuales.</p> <p>2.2. Normas sancionatorias y preventivas de delitos y faltas que excluyen a las parejas homosexuales de las garantías y cargas allí consagradas.</p> <p>Para claridad expositiva, los demandantes agruparon una serie de normas de naturaleza variada pero que tienen en común la exclusión de los miembros de las parejas del mismo sexo de las garantías y cargas en ellas consagradas y las clasificaron de la siguiente manera: normas penales, penales militares y disciplinarias que consagran la garantía de no incriminación y normas penales y preventivas de delitos respecto de los cuales la víctima es el compañero permanente.</p> <p>2.2.1. Cargo contra las normas que consagran la garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria</p> <p>Los actores señalan que las expresiones demandadas de los artículos 8-b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004, 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 y 71 de la Ley 734 de 2002 vulneran el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 18 y 29 de la Constitución Política.</p> <p>Previamente, se señala que con excepción de los artículos 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 y 8 de la Ley 906 de 2004, las normas demandadas no han sido objeto de control de constitucionalidad por parte de esta Corporación por lo que hay ausencia de cosa juzgada. En lo que guarda relación con los artículos indicados de la</p>
--	---

	<p>Ley 522 de 1999, nada impide a la Corte pronunciarse sobre los cargos formulados por cuanto sobre ellos sólo se configuró una cosa juzgada relativa, a propósito de una demanda contra la expresión “primero civil” en ellos contenida. A la misma conclusión se arriba respecto del artículo 8 de la Ley 906 de 2004, sobre el cual se pronunció la Corporación pero sólo en relación con la expresión “una vez adquirida la condición de imputado”.</p> <p>Las normas demandadas tienen en común la inclusión de la exoneración del deber de declarar, denunciar o formular queja contra el compañero permanente en los procesos de carácter penal, penal militar y disciplinario, con exclusión de las parejas permanentes constituidas por personas del mismo sexo, discriminación realizada en un criterio sospechoso por lo que es necesario desatar el test estricto de proporcionalidad.</p> <p>(i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada, según ha indicado la jurisprudencia constitucional, es la protección de la familia, objetivo que no puede invocarse como fundamento de la privación de un derecho a un segmento de la población. Si bien podría alegarse que el legislador tiene libertad de restringir la protección al ámbito de las relaciones familiares, con lo que se excluirían las relaciones homosexuales permanentes y singulares y las relaciones de estrecha amistad, es pertinente aclarar que no obstante que las relaciones homosexuales no caben en el concepto de familia, sí existe un punto en común entre las parejas heterosexuales que conforman una familia y las homosexuales que conviven en unión libre, cual es la existencia de una comunidad de vida permanente y singular de la que se derivan efectos civiles, morales y afectivos, que son precisamente los que pretenden ser resguardados con la garantía de no incriminación; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado.</p> <p>El trato diferenciado que se deriva de las normas acusadas genera un déficit de protección que se concreta en el hecho de que las parejas homosexuales no tienen derecho, como las heterosexuales, a abstenerse de declarar contra su compañero permanente en un proceso penal o penal militar o de formular queja en su contra por la eventual comisión de una falta disciplinaria. Por el contrario, estarían obligados a declarar en contra de su pareja, circunstancia</p>
--	---

	<p>que desconoce la necesidad análoga de protección, pues en este ámbito los miembros de parejas homosexuales y heterosexuales tienen idéntica necesidad de respetar y proteger los vínculos de afecto y solidaridad creados con quien comparten una comunidad de vida, a través de la posibilidad de no declarar en su contra.</p> <p>La exclusión de las parejas homosexuales de la garantía de no incriminación viola el derecho a la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el debido proceso, por lo que se solicita a esta Corporación que se declare que es inconstitucional que las expresiones “compañero permanente” y “compañero o compañera permanente” contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales del goce de la garantía de no incriminación allí consagrada.</p> <p>2.2.2. Cargos contra normas penales y preventivas de delitos respecto de los cuales la víctima es el compañero(a) permanente.</p> <p>En este acápite de la demanda se agruparon las normas relativas a disposiciones penales y preventivas de delitos en los que la víctima o el afectado del hecho punible es el compañero o la compañera permanente del sujeto activo del delito, de una persona en situación especial de riesgo o de un testigo.</p> <p>2.2.2.1. Cargo contra normas penales que consagran el beneficio de prescindir de la sanción penal</p> <p>Los demandantes consideran que algunas expresiones del artículo 34 de la Ley 599 de 2000 y del artículo 18 de la Ley 1153 de 2007 violan el preámbulo y los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los demandantes indican que las normas acusadas no han sido objeto de control de constitucionalidad, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.</p> <p>Las normas demandadas consagran el beneficio de prescindencia de la pena en los eventos en los que las consecuencias de una conducta constitutiva de contravención o delito culposo alcancen exclusivamente, entre otros, a los compañeros permanentes, con exclusión de las parejas del mismo sexo, como quiera que tal noción está articulada de cara a las relaciones familiares. Al estar fundado tal trato discriminatorio en el criterio sospechoso de la orientación sexual, debe aplicarse el test estricto de proporcionalidad.</p> <p>(i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se</p>
--	---

	<p>establece que el fin de las normas acusadas es la protección de la familia y del individuo que es procesado penalmente, respetando las garantías de quien es sometido a un proceso penal, según el principio de que el derecho penal debe ser la <i>ultima ratio</i>. Dentro de estas garantías se encuentra la de la aplicación del principio de la necesidad de la pena, consistente en la posibilidad de prescindir de ésta cuando las consecuencias de la conducta delictiva o contravencional recaigan exclusivamente, entre otros, en el compañero permanente, en atención a que el dolor producido merced al daño infligido sin intención a un ser cercano y querido es en sí mismo una pena que torna innecesaria la imposición de otra estatal.</p> <p>Esta justificación es igualmente predicable a las parejas homosexuales, cuyo proyecto de vida se sustenta en vínculos afectivos y morales que no se diferencian <i>per se</i> del carácter de la comunidad de vida entre compañeros permanentes heterosexuales. De esta forma, la protección de la familia es tan solo uno de los fines secundarios perseguidos por la norma, que no tiene la entidad suficiente para justificar el trato desigual que se presenta contra las parejas homosexuales.</p> <p>(ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión de las parejas homosexuales de los beneficios consagrados en las normas acusadas no guarda relación lógica o causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad por cuanto la disposición acusada representa costos negativos para las parejas homosexuales que se traducen en un déficit de protección en el marco de un proceso penal, por cuanto tales parejas se ven privada de un importante beneficio establecido para las parejas heterosexuales que se encuentran en la misma situación.</p> <p>Este déficit de protección compromete los derechos a la igualdad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los miembros de las parejas homosexuales.</p> <p>2.2.2.2. Cargo contra normas penales que establecen circunstancias de agravación punitiva</p> <p>Los actores aducen que las disposiciones consagradas en el numeral 1 del artículo 104, el numeral 4 del artículo 170, los numerales 1 y 4 del artículo 179, el numeral 3 del artículo 188-B y el numeral 1 del artículo 245 de la Ley 599 de 2000, son contrarias a los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.</p>
--	--

	<p>Preliminarmente, los demandantes indican que las normas acusadas no han sido objeto de control de constitucionalidad, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.</p> <p>Las disposiciones demandadas establecen como circunstancia de agravación punitiva que la conducta punible a la que se refieren sea cometida (i) contra el compañero permanente o un miembro del grupo familiar del sujeto activo del tipo penal o (ii) contra compañero permanente de una persona con las calidades descritas en la norma respectiva. El fundamento de la agravación punitiva radica en el mayor grado de reproche social que se tiene, en el primer caso, frente a las conductas delictivas cometidas contra personas con las que se tiene un lazo cercano y, en el segundo, respecto de delitos perfeccionados en contra de individuos que tienen relación con personas que, dada su connotación pública, se ubican en una particular situación de riesgo.</p> <p>Las circunstancias de agravación punitiva referidas no se aplican en los casos en que la víctima es una persona homosexual con relación permanente y singular con el sujeto activo o con una persona en situación de riesgo, de manera que existe un trato discriminatorio contra las parejas del mismo sexo que, por basarse en el criterio sospechoso de la orientación sexual, debe ser sometido al test estricto de proporcionalidad.</p> <p>(i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada es la protección de la familia y de los lazos afectivos y morales que surgen entre los miembros de las relaciones conyugales y de compañeros permanentes, con independencia de que las mismas conformen o no familias. Esta finalidad amplio de las normas acusadas incluye a las parejas homosexuales; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y aquéllos se traducen en un déficit de protección de las parejas homosexuales que tienen requerimientos análogos que las parejas heterosexuales, con lo que se vulneran los derechos a la igualdad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los miembros de las parejas del mismo sexo.</p> <p>Ahora, si bien podría argumentarse que el legislador goza de amplia libertad de configuración de los tipos penales, la Corte</p>
--	---

	<p>Constitucional ha establecido que el Congreso se somete, en la regulación de las materias de derecho penal, al contenido material de los derechos constitucionales, de suerte que al excluir del ámbito de regulación de los tipos penales acusados a los miembros de las parejas homosexuales, debe la Corte intervenir para procurar el respeto de los derechos fundamentales y, en particular, la prohibición de discriminación y la dignidad humana.</p> <p>Los demandantes refieren los criterios fijados por la Corte Constitucional para la procedencia de un fallo de exequibilidad condicionada en materia de tipos penales y hacen frente al eventual argumento de la imposibilidad de que la Corporación condicione los tipos acusados por cuanto tal condicionamiento implicaría la ampliación de los sujetos activo y pasivo del delito, con lo que se introduciría una modificación a un elemento estructural del tipo, bajo la consideración de que tal apreciación sería equivocada, ya que lo que se solicita no es la adición de nuevos sujetos del tipo sino la exclusión de una interpretación de las expresiones acusadas que no incluye a las parejas homosexuales, interpretación que por oponerse a la Carta Política debe ser retirada del ordenamiento jurídico.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan la constitucionalidad condicionada de las expresiones “compañero o compañera permanente”, “unión libre” y “grupo familiar” consagradas en las normas demandadas, de tal forma que las mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que las circunstancias de agravación punitiva previstas en ellas respecto de las parejas heterosexuales también son aplicables a las parejas homosexuales. Subsidiariamente se solicita (i) que se declare la inexequibilidad de la interpretación aludida en relación con las expresiones acusadas; (ii) que se exhorte al Congreso de la República para que adecue los tipos penales demandados a los mandatos superiores y a la interpretación que de ellos haga la Corte Constitucional, fijando un término preciso y razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la inexequibilidad de las expresiones acusadas.</p> <p>2.2.2.3. Cargos contra normas penales y preventivas sobre delitos que tienen por sujeto pasivo al compañero(a) permanente</p> <p>En este apartado se presentan los cargos de constitucionalidad formulados contra cuatro normas penales y una preventiva sobre delitos cuyo sujeto pasivo es, entre otros, el compañero permanente.</p> <p>2.2.2.3.1. Cargo contra la norma penal que consagra el delito de</p>
--	--

	<p>inasistencia alimentaria</p> <p>Los demandantes estiman que las expresiones acusadas del artículo 233 de la Ley 599 de 2000 transgreden los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, en la demanda se precisa que la Corte Constitucional se ha pronunciado en tres oportunidades sobre el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, pero por cargos diferentes, por lo que solo se ha configurado una cosa juzgada relativa. En efecto, en la Sentencia C-984 de 2002 se declaró la exequibilidad de la norma por los cargos de violación de los artículos 13 y 28 superiores, por el presunto desconocimiento de la prohibición constitucional de prisión por deudas y por el establecimiento de una diferencia de trato entre los deudores de la obligación alimentaria y los de otro tipo de obligaciones civiles. Por su parte, en la Sentencia C-247 de 2004 se declaró la inexequibilidad de la expresión “de catorce (14) años” consagrada en el inciso segundo del artículo referido y, finalmente, en Sentencia C-016 de 2004 la Corte Constitucional declaró exequible la expresión “cónyuge” por el cargo de violación del principio de igualdad al excluir a los compañeros permanentes. En dicha sentencia se exhortó al Congreso para que adecuara el tipo penal a los mandatos superiores, lo cual sucedió en la Ley 1181 de 2007, en la que se incluyó al compañero o compañera permanente como sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria.</p> <p>La norma demandada excluye de su ámbito de protección a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, discriminación que, por basarse en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad, antes de lo cual, los demandantes ponen de presente que la prosperidad del presente cargo depende de la de aquél formulado contra el artículo 411 del Código Civil como quiera que en éste se determina la obligación legal de prestar alimentos, fundamento del tipo penal de inasistencia alimentaria.</p> <p>(i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la protección de los vínculos de solidaridad, ayuda y socorro mutuos que surgen en una unión permanente de dos personas, razonamiento que no sólo resulta aplicable a las parejas heterosexuales, sino también a las del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución</p>
--	--

	<p>de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado.</p> <p>El trato desigual se traduce en un déficit de protección de los vínculos de solidaridad y afecto de los miembros de las parejas homosexuales, lo cual desconoce los derechos de igualdad, dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, en la medida en que se priva a los miembros de las parejas del mismo sexo de acciones penales para ir en contra de sus compañeros cuando estos no les suministren prestaciones alimentarias, con lo que se compromete la posibilidad de que accedan al mínimo de condiciones materiales para una existencia digna.</p> <p>Por otro lado, los demandantes consideran que el tiempo de dos años al que se sujeta la convivencia de los compañeros permanentes para que pueda aplicarse el delito de inasistencia alimentaria vulnera su derecho a la igualdad, en la medida en que impone un requisito que no tienen que cumplir las parejas unidas en matrimonio quienes son titulares de la acción penal en el delito aludido, sin tener que acreditar un tiempo mínimo de convivencia.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare la constitucionalidad condicionada de la expresión “compañero o compañera permanente” consagrada en la norma demandada, de tal forma que las mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que incluyen a las parejas homosexuales en su ámbito de aplicación. Subsidiariamente se solicita (i) que se declare la inexequibilidad de la interpretación de la expresión acusada que excluye a las parejas homosexuales de su ámbito de aplicación; (ii) que se exhorte al Congreso de la República para que adecue el tipo penal demandado a los mandatos superiores, fijando un término preciso y razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la inexequibilidad de la expresión demandada.</p> <p>Por otro lado, solicita que se declare la inexequibilidad de la expresión “durante un lapso no inferior a dos años” contenida en la norma acusada y que, si se juzga pertinente, se remita copia de esta demanda al expediente D-7177 para que, si se estima oportuna, se tengan en cuenta en ese proceso los argumentos de la demanda del presente trámite de constitucionalidad.</p> <p><b>2.2.2.3.2. Cargo contra la norma penal que consagra el delito de malversación y dilapidación de bienes familiares</b></p> <p>Los demandantes estiman que las expresiones acusadas de los</p>
--	--



	<p>artículos 457 del Código Civil y 236 de la Ley 599 de 2000 violan los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que las normas demandadas no han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.</p> <p>La norma censurada excluye de su ámbito de protección a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, discriminación que, por basarse en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad, antes de lo cual, los demandantes ponen de presente que la prosperidad del presente cargo depende de la de aquél formulado contra el artículo 457 del Código Civil como quiera que en éste se determina las personas llamadas a la tutela o curaduría legítima.</p> <p>(i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la protección de los vínculos de solidaridad y afecto de las parejas permanentes y de los intereses de quien está sujeto a una tutela o curaduría frente a los actos ilícitos cometidos por su compañero permanente en calidad de tutor o curador, fines que resultan aplicables a las parejas del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado.</p> <p>El trato desigual se traduce en un déficit de protección de los vínculos de solidaridad y afecto de los miembros de las parejas homosexuales, lo cual desconoce los derechos de igualdad, dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, en la medida en que se priva a los miembros de las parejas del mismo sexo de la posibilidad de acceder a la protección ofrecida tanto a las parejas como a sus miembros por las normas civil y penal objeto de análisis.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que la expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1 del artículo 457 del Código Civil sea interpretada como que excluye a los compañeros permanentes y a las parejas homosexuales permanentes de la posibilidad de ejercer tutelas y curadurías legítimas. Por otra parte</p>
--	---

	<p>solicitan que se declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones “familiares” y “compañero permanente” consagradas en el artículo 236 de la Ley 599 de 2000, de tal forma que las mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que incluyen a las parejas homosexuales en su ámbito de aplicación. Subsidiariamente se solicita (i) que se declare la inexequibilidad de la interpretación de la expresión acusada que excluye a las parejas homosexuales de su ámbito de aplicación; (ii) que se exhorte al Congreso de la República para que adecue el tipo penal demandado a los mandatos superiores, fijando un término preciso y razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la inexequibilidad de la expresión demandada.</p> <p>2.2.2.3.3. Cargo contra las normas penales y preventivas en materia del delito de violencia intrafamiliar</p> <p>Los demandantes estiman que las expresiones acusadas de los artículos 229 de la Ley 599 de 2000 y 2 de la Ley 294 de 1996 violan los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada respecto de ella. En relación con el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, si bien la Corte se pronunció sobre el mismo en la Sentencia C-674 de 2005, lo hizo por cargos referidos a la eliminación de la referencia al maltrato sexual como elemento de la violencia intrafamiliar, que resultan sustancialmente diferentes a los presentados en esta oportunidad, por lo que solo existe una cosa juzgada relativa.</p> <p>Las normas acusadas excluyen de su ámbito de protección a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, discriminación que, por basarse en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, finalidad que abarca a las parejas homosexuales, no solo por la discriminación histórica de la que han sido víctimas, sino también porque en su seno pueden darse graves formas de violencia entre quienes la conforman; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha</p>
--	---

	<p>protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado.</p> <p>El trato desigual se traduce en un déficit de protección, tanto de las parejas homosexuales contra formas de violencia que atacan sus formas de convivencia solidaria y pacífica, como de los miembros más débiles de las parejas homosexuales contra la violencia ejercida en su contra por su pareja. En esta materia, los requerimientos de protección de las parejas homosexuales y heterosexuales son análogos dado que para ambos tipos de familia es importante que existan mecanismos que garanticen la preservación de la paz dentro de sus espacios de convivencia. De esta forma, el trato discriminatorio desconoce los derechos de igualdad, dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad de los miembros de las parejas homosexuales.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones “familia” y “compañeros permanentes” contenidas en el artículo 2 de la Ley 294 de 1996, sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de su ámbito de aplicación. Por otra parte solicitan que se declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones “intrafamiliar” “familiar” y “familia” consagradas en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, de tal forma que las mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que incluyen a las parejas homosexuales en su ámbito de aplicación. Subsidiariamente se solicita (i) que se declare la inexecutable de la interpretación de la expresión acusada que excluye a las parejas homosexuales de su ámbito de aplicación; (ii) que se exhorte al Congreso de la República para que adecue el tipo penal demandado a los mandatos superiores, fijando un término preciso y razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la inexecutable de la expresión demandada.</p> <p><b>2.2.2.3.4. Cargo contra la norma penal que consagra el delito de amenazas a testigo</b></p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones acusadas del artículo 454-A de la Ley 599 de 2000 viola los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que la norma no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.</p> <p>Una de las conductas constitutivas del delito de amenazas a testigo</p>
--	--

	<p>es amenazar con ejercer violencia física o moral en contra del compañero permanente de una persona que ha sido testigo de un hecho delictivo, disposición que excluye de su ámbito de aplicación a los miembros de las parejas homosexuales por cuanto la interpretación tradicional de la expresión compañero permanente se circunscribe a las uniones heterosexuales. Al basarse esta discriminación en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la protección de la persona que ha sido testigo de un hecho delictivo, en la medida en que define un ámbito de protección amplio para el testigo, bajo la consideración de que las amenazas contra las personas con quien tiene vínculos cercanos en razón de la existencia de una comunidad de vida, tienen la capacidad de constreñirlo ilegalmente; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección de las personas homosexuales que carecen de la acción penal, otorgada a las parejas heterosexuales, por el delito de amenazas a testigo.</p> <p>La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de la norma acusada niega valor a los proyectos de vida que conforman con sus parejas, con lo que se violan sus derechos a la igualdad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare la constitucionalidad condicionada de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 454-A de la Ley 599 de 2000, de tal forma que la misma sea considerada constitucional solo en el entendido de que incluye a las parejas homosexuales en su ámbito de aplicación. Subsidiariamente se solicita (i) que se declare la inexequibilidad de la interpretación de la expresión acusada que excluye a las parejas homosexuales de su ámbito de aplicación; (ii) que se exhorte al Congreso de la República para que adecue el tipo penal demandado a los mandatos superiores, fijando un término preciso y razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la inexequibilidad de la expresión demandada.</p>
--	---

	<p>2.3. Normas que consagran derechos para los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces y que excluyen de su titularidad a las parejas del mismo sexo</p> <p>En este acápite se clasifican las normas que consagran derechos a los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces en dos secciones, en función del tipo de derechos que reconocen.</p> <p>2.3.1. Cargo contra normas que consagran los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes atroces</p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones acusadas de los artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005, 11 de la Ley 589 de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2 de la Ley 387 de 1997 violan el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 15, 16, 29, 93, 229 y 250, numerales 6 y 7, de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que las expresiones acusadas de los artículos 11 de la Ley 589 de 2000 y 2 de la Ley 387 de 1997 no han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada. Las expresiones demandadas contenidas en los artículos 5, 47 y 48 de la Ley 975 de 2005, fueron estudiadas en la Sentencia C-370 de 2006 con respecto a un cargo relativo a la presunta violación de la Carta Política por la exclusión de algunos familiares de la noción de víctima, que resulta diferente al presentado actualmente, por lo que solo ha operado el fenómeno de la cosa juzgada relativa.</p> <p>De otra parte, la constitucionalidad de las expresiones demandadas de los artículos 7, 15 y 58 de la Ley 975 de 2005 fue analizada en Sentencia C-575 de 2006, respecto de un cargo relativo a la presunta trasgresión de la Constitución por limitar el derecho a la verdad a los familiares o parientes de la víctima, que por ser diferente al actualmente formulado, sólo configura una cosa juzgada relativa.</p> <p>Finalmente las expresiones demandadas contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 ya fueron analizadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-473 de 2005, en desarrollo del control previo y automático que procedía en atención a que se trataba de una ley estatutaria. De esta forma respecto de estas disposiciones opera el fenómeno de la cosa juzgada absoluta, lo cual no obsta para que sean revisadas en relación con el cargo formulado, habida cuenta que la Corte ha establecido que las leyes estatutarias pueden reexaminarse excepcionalmente cuando el vicio de constitucionalidad de las mismas surja con posterioridad al control realizado, circunstancia que ocurre en el presente caso,</p>
--	--

	<p>como quiera que el marco constitucional relativo a los derechos de las parejas del mismo sexo ha cambiado.</p> <p>Las normas acusadas consagran diferentes expresiones de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a favor, entre otros, de los compañeros permanentes heterosexuales de las víctimas de los crímenes sobre los que versan, sin otorgar el mismo trato a las parejas del mismo sexo. Si bien los miembros de parejas homosexuales siempre podrán reclamar estos derechos probando el daño sufrido con motivo del crimen cometido contra su pareja, el eje central del cargo esgrimido consiste en que las parejas homosexuales de las víctimas de crímenes atroces no otorgan el beneficio de presumir su calidad de víctimas sin necesidad de que prueben el daño sufrido con motivo del crimen cometido contra su pareja, como sí ocurre para los miembros de parejas heterosexuales.</p> <p>Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende el reconocimiento y la valoración de los lazos de solidaridad y afecto construidos por los compañeros permanentes y la protección especial de sus miembros que sufren el crimen de su ser querido; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección en este asunto en el que tienen necesidades análogas de protección con las parejas heterosexuales, como quiera que el daño sufrido por las parejas del mismo sexo es equivalente al sufrido por las parejas heterosexuales dado que los crímenes atroces tienen un impacto equiparable en los planos moral, individual, social de la pareja y material.</p> <p>La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación, a la participación, a la información y a una protección especial de la población desplazada.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones</p>
--	--

	<p>“compañero o compañera permanente”, “parientes”, “familiares”, “familia” y “familiar” contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de la presunción de la calidad de víctima y de los derechos allí consagrados a favor de las parejas heterosexuales.</p> <p>2.3.2. Cargo contra normas que consagran medidas de protección de carácter civil ante la ocurrencia de ciertos crímenes atroces</p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones acusadas de los artículos 10 de la Ley 589 de 2000 y 2 y 26 de la Ley 986 de 2005, violan el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 16, 49, 93 y 95 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que las expresiones acusadas del artículo 26 de la Ley 986 de 2005 no han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada. La constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 fue estudiada en la Sentencia C-370 de 2006 con respecto a un cargo que cuestionaba la constitucionalidad de la restricción del beneficio consistente en que las víctimas de desaparición forzada sigan percibiendo su salario a los servidores públicos con exclusión de los particulares, cargo que resulta diferente al presentado actualmente, por lo que solo ha operado el fenómeno de la cosa juzgada relativa.</p> <p>De otra parte, esta Corporación analizó la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 986 de 2005 en la Sentencia C-394 de 2007, conforme a un cargo sobre una presunta omisión legislativa relativa por no incluir a las víctimas y familiares de los delitos de toma de rehenes y de desaparición forzada en los beneficios legales, cargo que por ser diferente al actualmente formulado, sólo configura una cosa juzgada relativa.</p> <p>Las normas acusadas consagran medidas de protección de carácter civil ante la ocurrencia de crímenes de desaparición forzada, secuestro y toma de rehenes a favor de las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas del mismo sexo. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende el reconocimiento de los vínculos de solidaridad formados por las parejas estables y la protección de sus miembros; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa</p>
--	---

	<p>ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, a pesar de los requerimientos análogos de protección que guardan relación con la importancia del reconocimiento del valor de los vínculos de solidaridad y afecto de las uniones permanentes y con las necesidades de protección económica que demuestran los miembros de esas parejas cuyos compañeros sufren una desaparición forzada, un secuestro o una toma de rehenes.</p> <p>La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad humana, a la salud, al mínimo vital y a la salud, además de lesionar el principio de solidaridad en que se funda el Estado Social de Derecho colombiano.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones “compañero o compañera permanente” y “familia” contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de las medidas de protección consagradas en dichas normas así como en la totalidad de la Ley 986 de 2005.</p> <p>2.4. Normas que consagran prestaciones, subsidios y medidas indemnizatorias de carácter social a favor de las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales</p> <p>Este acápite contiene los cargos formulados contra las normas que consagran beneficios sociales de diversa índole.</p> <p>2.4.1. Cargos contra normas que consagran prestaciones sociales</p> <p>En este acápite se analizan las normas que establecen el régimen de salud y pensiones de la fuerza pública y que regulan el subsidio familiar en servicios.</p> <p>2.4.1.1. Cargo contra normas que definen los beneficiarios del régimen especial de salud y pensiones para los miembros de la fuerza pública</p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones acusadas de los artículos 3 de la Ley 923 de 2004 y 24 del Decreto 1795 de 2000 violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 48 y 49 de la</p>
--	---



	<p>Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que las expresiones demandadas no han sido objeto de pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada. En efecto, por un lado, esta Corporación se ha declarado inhibida en dos oportunidades respecto de demandas formuladas contra los artículos 3.7.1 y 3.7.2. de la Ley 923 de 2004 y, de otro, declaró inexecutable el parágrafo del artículo 24 de la Decreto Ley 1795 de 2000, en sentencia C-479 de 2003, sin incluir el resto del artículo dentro del análisis desatado.</p> <p>Las normas acusadas definen la calidad de beneficiario(a) del régimen especial que en materia de seguridad social opera para los miembros de la fuerza pública, con exclusión de los miembros de las parejas homosexuales, como quiera que dicha categoría se articula en función de la noción de familia. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende el reconocimiento de los vínculos de solidaridad formados por las parejas estables y la protección de sus miembros; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales.</p> <p>Tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencias C-811 de 2007 y C-336 de 2008, en los ámbitos de regulación de las normas acusadas las parejas heterosexuales y homosexuales tienen necesidades análogas de protección que consisten en que se reconozca, dentro de los regímenes de seguridad social, el valor de los proyectos de vida de las parejas del mismo sexo. El trato discriminatorio al que se ven sometidas las parejas homosexuales afecta sus derechos a la igualdad, la dignidad humana y la seguridad social.</p> <p>Adicionalmente, los demandantes ponen de presente que en la actualidad existe una diferencia entre el régimen especial de seguridad social para la Fuerza Pública y el régimen general de</p>
--	---

	<p>seguridad social, derivada de la jurisprudencia constitucional que, para este último, determinó que los beneficios consagrados cubrían a las parejas del mismo sexo. Si bien, en principio, no es posible comparar las prerrogativas entre regímenes, la Corte Constitucional ha establecido que ello no excluye la posibilidad de que eventualmente se estudie si la regulación específica de una prestación en particular puede violar la igualdad, para lo cual ha fijado unos criterios, cuya aplicación al caso concreto conduce a la conclusión de que la exclusión de las parejas homosexuales como beneficiarias del régimen de seguridad social de la Fuerza Pública genera una discriminación con respecto a los afiliados al régimen general de seguridad social.</p> <p>De otra parte, los actores señalan que la expresión “solo cuando la unión permanente sea superior a dos años” contenida en el literal a del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000 impone una exigencia de tiempo mínimo para obtener la calidad de beneficiario del compañero permanente afiliado al régimen de seguridad social de la Fuerza Pública es violatorio del derecho a la igualdad, por cuanto no exige el mismo tiempo de convivencia a las parejas unidas en matrimonio.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones “grupo familiar” y las relativas a los compañeros permanentes contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales del acceso en calidad de beneficiarias al régimen especial de seguridad social en salud y pensiones para la Fuerza Pública.</p> <p>De igual forma se solicita que se declare la inexequibilidad de la expresión “para el caso del compañero(a) solo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años” contenida en el literal a del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000, de acuerdo con el precedente sentado en las sentencias C-521 de 2007 y C-811 de 2007.</p> <p><b>2.4.1.2. Cargo contra normas que consagran la prestación social del subsidio familiar en servicios</b></p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones acusadas de los artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982 violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16 y 48 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que las normas acusadas no han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.</p>
--	--

	<p>Las normas acusadas consagran el derecho del compañero permanente del trabajador a acceder al componente de servicios del subsidio familiar, con exclusión de las parejas homosexuales, por cuanto tales beneficios se enmarcan dentro de la concepción de familia. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la corrección de las desigualdades materiales a través de un mecanismo que pretende equilibrar las diferencias salariales y la protección de las parejas de los trabajadores a través de la garantía de acceso a ciertas obras y programas, fines que resultan aplicables a las parejas del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, a pesar de los requerimientos análogos de protección que guardan relación con la importancia del reconocimiento de su proyecto de vida y con la relevancia de que los compañeros permanentes de los trabajadores de ingresos medios y bajos puedan acceder a prestaciones especiales. Esta exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de las normas acusadas afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la seguridad social.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones “familiar”, “familia” y “compañero permanente” contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas del mismo sexo del subsidio familiar en servicios allí previsto para las parejas heterosexuales.</p> <p><b>2.4.2. Cargos contra normas que consagran subsidios para el acceso a bienes inmuebles</b></p> <p>En este acápite se presentan los cargos contra las normas que definen a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda y contra aquéllas del estatuto de desarrollo rural que establecen mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra en áreas rurales.</p>
--	---

	<p>2.4.2.1. Cargo contra la norma que define los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda</p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones acusadas del artículo 7 de la Ley 3 de 1991 violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16 y 51 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que la norma acusada no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.</p> <p>La norma demandada define a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda que, como su nombre lo indica, se articula alrededor de la noción de familia, con lo que excluye a las parejas homosexuales de su ámbito de aplicación. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la corrección de las desigualdades sociales a través del ofrecimiento de sistemas de financiación para la adquisición de vivienda de interés social, objetivo que cubre a las parejas del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, a pesar de los requerimientos análogos de protección que guardan relación con la importancia de que existan mecanismos de financiación que les permitan a las parejas, que han construido un proyecto de vida en común y tienen carencias económicas, hacerse a una vivienda.</p> <p>La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la vivienda digna.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones “familiar” y “hogares” contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales del subsidio familiar en vivienda allí previsto para las parejas heterosexuales.</p>
--	---

	<p>2.4.2.2. Cargo contra las normas que establecen mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra en áreas rurales</p> <p>Los demandantes aclaran previamente que la formulación de cargos contra el Estatuto de Desarrollo Rural por excluir de su ámbito de regulación a las parejas homosexuales no significa que se considere que dicha norma está conforme a la Constitución Política. Por el contrario, existen serios reparos tanto de forma como de fondo contra el Estatuto aludido, no obstante lo cual, como quiera que no han sido resueltos por la Corte Constitucional por lo que sus normas permanecen dentro del ordenamiento jurídico, resulta pertinente examinar la constitucionalidad de algunas de sus normas en términos de la afectación de los derechos de las parejas homosexuales.</p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones acusadas de los artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 de la Ley 1152 de 2007 violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 58, 64 y 66 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que las expresiones acusadas contenidas en la Ley 1152 de 2007 no han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.</p> <p>Las normas acusadas tienen el propósito de crear condiciones para garantizar el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios del país, con exclusión de las parejas permanentes del mismo sexo. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende el objetivo de facilitar a los hogares de escasos recursos el acceso a la propiedad de la tierra en zonas rurales, reconociendo y protegiendo los lazos existentes al interior de esos hogares, finalidad que incluye a las parejas homosexuales; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, a pesar de los requerimientos análogos de protección que guardan relación con la</p>
--	--

	<p>necesidad de las parejas campesinas que no son dueñas de tierras y que carecen de recursos para hacerse a las mismas, de contar con los mecanismos de acceso a la propiedad consagrados en las normas acusadas.</p> <p>La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, al acceso progresivo a la propiedad de la tierra, a la protección de la función social de la propiedad y al crédito del trabajador agrario.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones “compañero(a) permanente”, “compañeros permanentes”, “compañero permanente”, “compañero o compañera permanente”, “familiar”, “familia” y “familiares” contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales del acceso al subsidio para la compra de tierras y a la adjudicación de baldíos en áreas rurales para la conformación de Unidades Agrícolas Familiares allí previsto a favor de parejas heterosexuales.</p> <p>2.4.3. Cargo contra la norma que define los beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de tránsito</p> <p>Los demandantes consideran que la expresión acusada del artículo 244 de la Ley 100 de 1993 viola el preámbulo y los artículos 1, 13, 16 y 95 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que la norma demandada no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.</p> <p>La norma demandada indica los beneficiarios de las indemnizaciones por muerte en accidente de tránsito del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito con exclusión de los miembros de las parejas homosexuales. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la protección de las parejas permanentes, con independencia de que sean o no familias, por lo que resultaría necesaria la inclusión de las parejas homosexuales para cumplir con dicho propósito; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no</p>
--	--

	<p>guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, a pesar de los requerimientos análogos de protección que guardan relación con la relevancia que tiene para esas parejas que sus vínculos de solidaridad y afecto sean reconocidos y valorados y que, en consecuencia, se les atribuyan consecuencias jurídicas concretas.</p> <p>La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, así como el principio de solidaridad.</p> <p>De acuerdo con los anteriores argumentos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que la expresión “el compañero o compañera permanente” contenida en la norma demandada sea interpretada como que excluye a las parejas homosexuales de la calidad de beneficiarias de las indemnizaciones por muerte en accidente de tránsito propias del SOAT.</p> <p>2.5. Cargo contra normas de derecho público que establecen límites al acceso y ejercicio de la función pública y a la celebración de contratos estatales para las parejas heterosexuales más no para las parejas del mismo sexo.</p> <p>Como quiera que en el presente acápite los cargos se formulan contra normas que establecen prohibiciones y obligaciones, la demanda, en lugar de demostrar la lesión del derecho a la igualdad de las parejas homosexuales, buscará comprobar que, a pesar de beneficiar a los homosexuales al permitirles escapar de importantes restricciones para acceder a y ejercer la función pública y para participar en la contratación administrativa, tal exclusión contraría el interés general y los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad administrativas.</p> <p>Los demandantes consideran que las expresiones acusadas de los artículos 14 de la Ley 190 de 1995, 1 de la Ley 1148 de 2007, 8 de la Ley 80 de 1993, 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 283 y 286 de la Ley 5 de 1992, violan los artículos 13, 40, 95, 123, 126 y 209 de la Constitución Política.</p> <p>Preliminarmente, los accionantes señalan que el fenómeno de la cosa juzgada no opera frente a ninguna de las normas cuya constitucionalidad se cuestiona en este acápite de la demanda. En</p>
--	--

	<p>efecto, los artículos 14 de la Ley 190 de 1995, 1 de la Ley 1148 de 2007, 8 de la Ley 80 de 1993, 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 286 de la Ley 5 de 1992 no han sido objeto de pronunciamiento de fondo.</p> <p>En relación con el artículo 52 de la Ley 190 de 1995, se pone de presente que si bien la Corte Constitucional se pronunció sobre su constitucionalidad en la Sentencia C-082 de 1996, lo hizo en relación con cargos sustancialmente diferentes a los planteados en la presente demanda por lo que no opera la cosa juzgada. Similar conclusión se tiene respecto del artículo 283 de la Ley 5 de 1992 que fue analizado en la Sentencia C-985 de 1999 en la que se formularon cargos diferentes al actualmente estudiado, por lo que procede su estudio por parte de esta Corporación.</p> <p>Las normas demandadas consagran el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y las causales de impedimentos y recusaciones, como medidas de restricción al acceso y ejercicio de la función pública y la contratación estatal. Tras detallar los contenidos normativos de las disposiciones acusadas e ilustrar su importancia y justificación a la luz de la Carta Política, los demandantes concluyen que las razones para fundamentar las prohibiciones y obligaciones referidas resultan plenamente aplicables a las parejas del mismo sexo, que se caracterizan por basarse en vínculos de lealtad, solidaridad, proximidad, intimidad y simpatía y, como tal, pueden estar igualmente tentadas a favorecer a las personas con quienes los ostentan, tentación que debe limitarse en aras de preservar el interés general y los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia y selección objetiva.</p> <p>Por otra parte, la extensión de las restricciones al acceso y ejercicio de la función pública y la contratación administrativa a las parejas homosexuales se justifica en la teoría de la correlatividad entre derechos y deberes que ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional. Adicionalmente, resulta claro que la exclusión de las parejas del mismo sexo de las obligaciones y prohibiciones en referencia es contraria a los derechos de igualdad y al acceso a funciones y cargos públicos.</p> <p>Con base en los argumentos referidos, los demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones “compañero(a) permanente”, “compañeros permanentes”, “compañero o compañera permanente” contenidas en las normas acusadas, sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de las prohibiciones y obligaciones allí impuestas a las parejas heterosexuales.</p>
--	---



	<p>3. Competencia de la Corte Constitucional</p> <p>Los demandantes señalan que esta Corporación es competente para conocer la acción formulada, en virtud de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 241 de la Constitución Política, en atención a que las normas acusadas hacen parte de leyes o de decretos con fuerza de ley.</p> <p>4. Consideraciones de Técnica Constitucional</p> <p>En este acápite se pretenden enfrentar y resolver las complejidades de técnica constitucional que presenta la demanda.</p> <p>4.1. Cuestiones abiertas de técnica constitucional dejadas por el precedente constitucional en materia de derechos a las parejas del mismo sexo</p> <p>Si bien las últimas providencias en materia de derechos de las parejas homosexuales han arribado a la misma conclusión en el sentido de declarar la exequibilidad condicionada de las expresiones normativas que excluyen a estas parejas de su ámbito de aplicación, parecen apoyarse en consideraciones de técnica diferentes.</p> <p>En este sentido, se pone de presente que en la Sentencia C-075 de 2007, el fallo condicionado limitó sus efectos al régimen de protección de la Ley 54 de 1990 y explicó que para poder analizar los demás regímenes jurídicos que hacen alusión a la unión marital de hecho debía integrarse la proposición jurídica completa acusando tanto el artículo 1 de la Ley 54 como las normas pertinentes del régimen jurídico en cuestión. Sin embargo, en la Sentencia C-811 de 2007 se declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones “cobertura familiar” y “compañero o compañera permanente” del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, sin necesidad de integrar la proposición jurídica con el artículo 1 de la Ley 54.</p> <p>Por su parte, la Sentencia T-856 de 2007 estableció que a partir de la Sentencia C-075 de 2007, las figuras de unión marital de hecho y de compañeros permanentes debían ser interpretadas en el sentido de que incluyen a las parejas homosexuales, con independencia del régimen jurídico en el que se encuentran consagradas.</p> <p>Finalmente, en la Sentencia C-336 de 2008, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones “compañero o compañera permanente” contenidas en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia C-075 de 2007 en lo referente al artículo 1 de la Ley 54 de 1990, no obstante que esta última norma se demandó para integrar la</p>
--	---

	<p>proposición jurídica completa.</p> <p>Esta falta de claridad en materia de técnica constitucional, exige que se analicen las diferentes posibilidades abiertas por la Corte, en atención al sustento procedimental de las pretensiones como a la relación existente entre el artículo 1 de la ley 54 de 1990 y las expresiones acusadas.</p> <p>4.2. Sustento procedimental de las pretensiones de la demanda</p> <p>En esta sección se presentan las complejidades técnicas de las normas penales y de las demás demandadas.</p> <p>4.2.1. Pretensiones de los cargos relativos a las normas penales que consagran tipos penales</p> <p>Como se planteó en acápite previo, el análisis de constitucionalidad de las normas penales plantea problemas relativos a la competencia del juez constitucional de proferir fallos de inexequibilidad o exequibilidad condicionada respecto de tipos penales. En este sentido, la pretensión principal consiste en que se declare la constitucionalidad condicionada de las normas penales demandadas en el entendido de que no excluyen de su ámbito de regulación a las parejas homosexuales. La primera pretensión subsidiaria consiste en que se declare inexequible la interpretación de esas normas según la cual las parejas del mismo sexo se encuentran excluidas de su ámbito de aplicación. La segunda pretensión subsidiaria consiste en que se exhorte al Congreso de la República para que dentro de un término preciso y razonable adecue los tipos penales consagrados en las normas acusadas a los mandatos superiores. Finalmente, la tercera pretensión subsidiaria consiste en que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas.</p> <p>De otra parte, los demandantes solicitan a la Corporación que se aparte de la posición según la cual los ciudadanos que presentan acciones de inconstitucionalidad no pueden solicitar en ellas la declaratoria de exequibilidad condicionada de las normas acusadas, sino simplemente la declaratoria de inexequibilidad, ya que la Corte es la única competente para analizar si un condicionamiento tal procede o no. Consideran que si se admite que la Corte Constitucional es competente para proferir decisiones de constitucionalidad condicionada, es obvio que también se admita que el ciudadano pueda solicitárselo en aquéllos eventos en que lo considere pertinente.</p> <p>4.2.2. Pretensiones de los cargos relativos a las demás normas acusadas de esta demanda</p>
--	---

	<p>Los demandantes, en relación con las demás normas demandadas, solicitan que se declare la inconstitucionalidad de ciertos contenidos materiales asociados a las expresiones acusadas y a las disposiciones que las contienen, sin definir la técnica de exclusión de dichos contenidos. A tal declaratoria puede llegarse, bien a través de la constatación de la existencia de una interpretación que es admitida por el ámbito semántico de las expresiones demandadas pero que es inconstitucional, o bien por medio de la constatación de la existencia de una omisión legislativa relativa generada por las expresiones acusadas.</p> <p>4.2.2.1. Primera vía de técnica constitucional: Constatación de una interpretación inconstitucional admitida por el ámbito semántico de las expresiones demandadas</p> <p>La primera vía de técnica constitucional se justifica en atención a que si bien la Corte Constitucional ha realizado un giro en su jurisprudencia en relación con los derechos de las parejas homosexuales los efectos de sus fallos se han limitado a los regímenes jurídicos respecto de los cuales se pronuncia, de suerte que las expresiones compañero permanente se refieren a uniones heterosexuales, con lo que se excluye a las parejas del mismo sexo del ámbito de regulación de normas que consagren beneficios a favor o cargas sobre compañeros permanentes.</p> <p>Si esta vía fuera escogida por la Corporación, podría (i) declarar la exequibilidad condicionada de las expresiones demandadas de manera que sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que las disposiciones que las contienen incluyen en su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales, o (ii) declarar la inexequibilidad de la interpretación de las expresiones acusadas, de conformidad con la cual las disposiciones que las contienen excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales.</p> <p>4.2.2.2. Segunda vía de técnica constitucional posible: Omisión legislativa relativa generada por las expresiones acusadas</p> <p>La segunda vía de técnica constitucional implicaría la constatación de la existencia de una omisión legislativa relativa generada por las expresiones acusadas, generada por el hecho de que, al articularse en torno a la noción de familia, el ámbito semántico de tales expresiones excluye la posibilidad de que las disposiciones que las contienen sean aplicadas a las parejas homosexuales, a pesar de que existe un deber constitucional de protegerlas.</p> <p>Si esta fuera la vía elegida por la Corte Constitucional, la técnica de exclusión del contenido inconstitucional de tales contenidos</p>
--	---

	<p>materiales que resultaría más adecuada consistiría en la emisión de una sentencia integradora contentiva de una declaratoria de la existencia de una omisión legislativa relativa y de una fórmula tendiente a declarar que las expresiones en cuestión solo son constitucionales en el entendido de que las disposiciones que las contienen incluyen en su ámbito de aplicación a las parejas del mismo sexo.</p> <p>4.3. Relación entre el artículo 1 de la Ley 54 de 1990 y las expresiones acusadas en la demanda</p> <p>En esta acción de inconstitucionalidad no se demandó el artículo 1 de la Ley 54 de 1990 porque, si bien en la Sentencia C-075 de 2007 se estableció la necesidad de integrar al régimen jurídico concreto en el que se excluyen las parejas homosexuales dicha disposición, en providencias ulteriores parece haberse abandonado tal criterio. Sin embargo, si la Corte Considera que es necesario proceder como fue referido en la Sentencia aludida, se solicita que las normas acusadas se analicen en conjunto con dicha disposición</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	<p>SI DR. JAIME ARAUJO RENTERIA</p> <p>FAMILIA-Concepto/FAMILIA-Conformación/FAMILIA-Protección debe cubrir cualquiera de las formas que adopte (Aclaración de voto)</p> <p>La interpretación restrictiva de la norma constitucional contenida en el artículo 42 Superior, está erróneamente interpretada, cuando se interpreta en el sentido de que la familia siempre está integrada o tiene a su base a un hombre y a una mujer. Esta vía de conformación de la familia sólo se exige para el matrimonio, pero no se necesita para las otras clases de familia que se encuentran igualmente protegidas por nuestra constitución, de donde la protección constitucional de todos los derechos concedidos a la familia, en materia de matrimonio, adopción, seguridad social, sucesiones, como todas las demás materias y ámbitos jurídicos debe concederse no solo a las familias conformadas por el matrimonio de hombres y mujeres sino también a las uniones maritales de hecho, bien del mismo o de distinto sexo.</p> <p>LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Incompatibilidad con algunos tratados internacionales/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Vulneración de reserva de ley estatutaria (Aclaración de voto)</p>

	<p>La ley 975 de 2005 fue tramitada mediante vicios procedimentales, en cuanto ésta define el núcleo esencial de los derechos fundamentales de la víctimas a la verdad, justicia y reparación, teniendo por tanto un carácter estatutario, y sin embargo no se tramitó de conformidad con el artículo 152 del Constitución Nacional.</p> <p>TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Indebida tramitación de apelación acarrea la inconstitucionalidad de toda la ley/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Vulneración de normas sobre concesión de amnistía e indulto (Aclaración de voto)</p> <p>En el primer debate la Ley 975 de 2005 se tramitó de manera irregular en su integridad, ya que no se respetó el artículo 159 de la Constitución Política, pues no se apeló todo el proyecto de ley. Adicionalmente, se violaron las normas para la concesión de amnistías o indultos por delitos políticos, admitiendo en gracia de discusión, que en este caso se tratase de delitos políticos.</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-520/09
Fecha de la sentencia	cuatro (4) de agosto de dos mil nueve (2009).
Demandante	Javier Domínguez Betancur
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 (parcial) de la Ley 446 de 1998.
Conoció en primera instancia	Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Decision	Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión <i>“dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia”</i> , contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>A juicio del actor, mediante la disposición acusada se delimita el ámbito de ejercicio del recurso de revisión a las sentencias dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia. De ese modo, queda excluida la revisión de las providencias <i>“que profieren los diferentes jueces que conforman la jurisdicción de lo contencioso administrativo”</i>, como pueden ser las dictadas en primera instancia por parte de los juzgados o tribunales administrativos cuando no hayan sido apeladas. El legislador –dice el demandante- introduce así implícitamente, como requisito de procedibilidad del recurso de revisión, la interposición de la alzada.</p> <p>El demandante expone tres cargos de inconstitucionalidad contra la norma demandada que pueden sintetizarse así:</p> <p>En primer lugar, el actor aduce que la norma demandada vulnera el principio de justicia consagrado en el preámbulo y en el artículo 2º de la Constitución Política. Señala: <i>“caracteriza al recurso extraordinario de revisión el hecho de que su procedencia se presenta contra fallos ejecutoriados que han hecho tránsito a cosa juzgada material, sin que se requiera el agotamiento previo de los recursos ordinarios que frente a las sentencias proceden toda vez que no es un requisito connatural de la revisión (...). En este sentido, se tiene que el legislador al hacer depender la revisión de sentencias</i></p>

	<p><i>de primera instancia del oportuno ejercicio del recurso de apelación, desconoce flagrantemente el principio de la justicia que impera en nuestro ordenamiento jurídico, pues no se ve motivo justificable para ello”.</i></p> <p>Ahora bien, según el demandante, se aduce como razón de la norma acusada, el hecho de que contra una sentencia dictada en primera instancia no es posible interponer el recurso de revisión porque ésta tiene otros medios de impugnación. Pero, en su sentir, tal razonamiento es equivocado, porque las razones y finalidades de la apelación y la revisión son diferentes. En consecuencia, puede darse el caso que una persona no haya apelado la providencia de primera instancia, por no encontrar motivos para hacerlo, y que sin embargo encuentre motivos para solicitar su revisión posteriormente. Todo lo cual conduce a pensar que la restricción introducida por la norma demandada, implica convalidar decisiones de primera instancia injustas o producto del fraude.</p> <p>En segundo lugar, el actor indica que se vulnera la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política. Asegura que la exigencia de interponer el recurso de apelación para que proceda el recurso de extraordinario de revisión <i>“resulta ser un medio inadecuado e inconducente para garantizar el acceso a la justicia, pues las causales de revisión previstas por la ley, como se expuso, no pueden esgrimirse en la apelación debido a que, como el lógico ellas surgen cuando la sentencia ya ha hecho tránsito a cosa juzgada material. Entonces frente a las sentencias referidas, el Legislador ha consagrado unas causales de revisión que de ninguna forma pueden utilizarse, es decir, establece causales pero no es ‘recurso judicial efectivo’ del que habla la H. Corte Constitucional para materializarlas”.</i></p> <p>Finalmente, el actor expresa que la norma viola el derecho a la igualdad, tanto al interior de la jurisdicción contencioso administrativa, como en consideración a la jurisdicción ordinaria. Frente a lo primero, indica que no existe ninguna razón válida que justifique que las sentencias proferidas por juzgados o Tribunales Administrativos en primera instancia, no sean susceptibles de revisión cuando las mismas no hayan sido apeladas. Agrega que también se presenta una discriminación frente a los casos que son susceptibles del grado jurisdiccional de consulta, pues pese a que dichas sentencia no sean apeladas, sí es procedente el recurso de revisión, toda vez que <i>“el fallo que se profiere dentro de tal proceso [consulta] adquiere el carácter de segunda instancia”.</i></p> <p>Frente a la posible vulneración que se presenta del derecho a la igualdad en relación con la jurisdicción ordinaria, precisa el libelista</p>
--	---

	<p>que tanto en materia civil, desde la Sentencia C-269 de 1998, como en laboral y penal, el recurso de revisión puede hacerse valer contra todas las decisiones judiciales ejecutoriadas, sin la exigencia de haber utilizado los recursos ordinarios. Y, de ese modo, <i>“se tiene que existe una discriminación entre quienes acceden a la administración de justicia en la jurisdicción ordinaria con los que lo hacen en lo contencioso administrativo”</i>, sin que existan razones justificables para tal diferencia.</p> <p>El actor solicita a la Corte <i>“como petición principal que declare la inconstitucionalidad del artículo 57 (parcial) de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, y como petición subsidiaria la declaratoria de exequibilidad condicionada de la menciona norma para que en todo caso las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces o tribunales administrativos no apeladas, puedan ser objeto del recurso extraordinario de revisión”</i>.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA



Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-241/09
Fecha de la sentencia	primero (1°) de abril de dos mil nueve (2009).
Demandante	Ramiro Mejía Correa y otros.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) de la Ley 472 de 1998, <i>“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”</i> .
Conoció en primera instancia	Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Decision	DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión <i>“y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes,”</i> , contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Los demandantes formulan dos cargos específicos contra el texto demandado, el primero por su oposición material frente a varios preceptos constitucionales (citan los artículos 13, 29, 88, 228 y 229) y el segundo por las dificultades interpretativas que se causan al comparar la regla demandada con otras disposiciones de la Ley 472 de 1998 que regulan el trámite de la acción de grupo, lo que a su turno afecta el derecho constitucional de acceder a la administración de justicia, de que trata el artículo 229 superior.</p> <p>Al desarrollar el primer cargo, sostienen los actores que la regla demandada resulta inconstitucional por cuanto, al establecer la imposibilidad de acogerse a lo decidido en la sentencia para aquellas personas cuya acción individual haya prescrito o caducado, impone requisitos nuevos y adicionales para el ejercicio de la acción de grupo. Indica que esta decisión legislativa desconoce el mandato del artículo 88 de la Constitución, por el cual se quiso facilitar el acceso a la justicia de todas las personas individualmente afectadas por un mismo hecho dañoso, a través del ejercicio de una acción de carácter colectivo<sup>64</sup>. Añade que, por las mismas razones, el precepto demandado sería contrario también a la garantía de libre acceso a la justicia contenida en el artículo 229 de la Constitución Política.</p> <p>que se encuentran ante un supuesto análogo (el perjuicio) reciben tratamiento diferente.</p>

	<p>Finalmente añaden que la regla demandada viola el debido proceso (art. 29) de las víctimas del hecho dañoso ya que, reitera, el mandato del artículo 88 constitucional busca facilitar el acceso a la justicia mediante el ejercicio de las acciones colectivas, y no dificultarlo, como ocurre en este caso.</p> <p>En el segundo cargo los demandantes comparan la regla establecida en el segmento normativo acusado con el contenido de otras disposiciones (artículos 46, 48, 53, 55, 56, 65 y 66) de la misma Ley 472 de 1998, a partir de lo cual sostienen que se crea una contradicción interna. En este sentido, y a manera de ejemplo, resaltan los siguientes aspectos: la existencia de una doble caducidad para la acción de grupo (arts. 47 y 55); la regla según la cual el actor representa a todas las personas que hubieren sido individualmente afectadas por el mismo hecho (art. 48, parágrafo); las normas que establecen que únicamente quienes manifiesten su deseo de ser excluidos del grupo estarán al margen de los efectos de la sentencia (arts. 56 y 66); la inclusión como beneficiarios de personas que no hubieren sido expresamente designadas en la demanda (arts. 52 y 53), y las reglas sobre el contenido de la sentencia (art. 65). Reiteran que la regla demandada es la única que marcha en dirección contraria, pues como se observa, todas las demás apuntan a proyectar los efectos del proceso y de la sentencia de tal manera que todas las víctimas del hecho dañoso pueden beneficiarse del proceso promovido por uno de ellos.</p> <p>Finalmente, informan que en varias ocasiones la Sección Tercera del Consejo de Estado ha decidido inaplicar el segmento normativo demandado a partir de lo previsto en el artículo 4° constitucional, argumentando su inexequibilidad. Explican que las razones que el juez contencioso administrativo ha tenido para llegar a esa conclusión se refieren, de una parte, a que esta regla es contraria al propósito del artículo 88 constitucional, y de otra, a las contradicciones existentes entre su contenido y el de varias de las otras normas de la Ley 472 de 1998, citadas en el párrafo anterior.</p> <p>Por todo lo anterior, los actores concluyen reiterando que la regla demandada es contraria a varios preceptos constitucionales, particularmente los relacionados con el objetivo de la acción de grupo (art. 88) y el acceso a la administración de justicia (art. 229), por lo que solicitan a esta Corte declarar su inexequibilidad.</p> <p>Afirman los demandantes que <i>“la inconstitucionalidad de la norma acusada deviene, en que se le exige a todos los miembros del grupo actuar judicialmente y manifestar su interés individual, es decir, hacerse parte de la acción a efecto de evitar que les prescriba o caduque”</i>. Agregan que este hecho viola el artículo 13 de la</p>
--	--

	<p>Constitución Política, ya que distintas personas que se encuentran ante un supuesto análogo (el perjuicio) reciben tratamiento diferente.</p> <p>Finalmente añaden que la regla demandada viola el debido proceso (art. 29) de las víctimas del hecho dañoso ya que, reitera, el mandato del artículo 88 constitucional busca facilitar el acceso a la justicia mediante el ejercicio de las acciones colectivas, y no dificultarlo, como ocurre en este caso.</p> <p>En el segundo cargo los demandantes comparan la regla establecida en el segmento normativo acusado con el contenido de otras disposiciones (artículos 46, 48, 53, 55, 56, 65 y 66) de la misma Ley 472 de 1998, a partir de lo cual sostienen que se crea una contradicción interna. En este sentido, y a manera de ejemplo, resaltan los siguientes aspectos: la existencia de una doble caducidad para la acción de grupo (arts. 47 y 55); la regla según la cual el actor representa a todas las personas que hubieren sido individualmente afectadas por el mismo hecho (art. 48, parágrafo); las normas que establecen que únicamente quienes manifiesten su deseo de ser excluidos del grupo estarán al margen de los efectos de la sentencia (arts. 56 y 66); la inclusión como beneficiarios de personas que no hubieren sido expresamente designadas en la demanda (arts. 52 y 53), y las reglas sobre el contenido de la sentencia (art. 65). Reiteran que la regla demandada es la única que marcha en dirección contraria, pues como se observa, todas las demás apuntan a proyectar los efectos del proceso y de la sentencia de tal manera que todas las víctimas del hecho dañoso pueden beneficiarse del proceso promovido por uno de ellos.</p> <p>Finalmente, informan que en varias ocasiones la Sección Tercera del Consejo de Estado ha decidido inaplicar el segmento normativo demandado a partir de lo previsto en el artículo 4° constitucional, argumentando su inexequibilidad. Explican que las razones que el juez contencioso administrativo ha tenido para llegar a esa conclusión se refieren, de una parte, a que esta regla es contraria al propósito del artículo 88 constitucional, y de otra, a las contradicciones existentes entre su contenido y el de varias de las otras normas de la Ley 472 de 1998, citadas en el párrafo anterior. Por todo lo anterior, los actores concluyen reiterando que la regla demandada es contraria a varios preceptos constitucionales, particularmente los relacionados con el objetivo de la acción de grupo (art. 88) y el acceso a la administración de justicia (art. 229), por lo que solicitan a esta Corte declarar su inexequibilidad.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA

Resumen de las aclaraciones	NO APLICA
-----------------------------	-----------

### SENTENCIAS DE 2010

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	SENTENCIA C-886/10
Fecha de la sentencia	Noviembre 11 de 2010
Demandante	Jaime Luís Berdugo Pérez y Felipe Montoya Castro.
Demandado	contra el artículo 113 (parcial) del Código Civil y el inciso 1° (parcial) del artículo 2° de la ley 294 de 1996.
Conoció en primera instancia	Mauricio González Cuervo.
Decision	Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Pretensión: El señor Berdugo Pérez y otros, solicitan<sup>65</sup> se declare exequible la norma demandada en el entendido que también las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio. Afirman, que cualquier otra interpretación sería inexecutable.</p> <p>2.1.2. Cargos</p> <p>Los accionantes afirman que el artículo 113 del Código Civil vulnera los artículos 13, 16, 93 y 94 de la Constitución y los artículos 7 y 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para tal efecto esgrimen unos argumentos generales al respecto.</p> <p>- Se señala que uno de los derechos constitucionales fundamentales que la Carta Política no referencia directamente es el derecho a contraer matrimonio, que es lo mismo, que el derecho a vincularse jurídicamente en pareja, no solo por la mera cohabitación, sino por el consentimiento prestado ante y conforme la normatividad lo señala, sin embargo esa falta de consagración como derecho autónomo no ha sido óbice para que se le reconozca su naturaleza jurídica, ello puede verse en la sentencia C-507 de 2004, emitida por la Corte Constitucional.</p> <p>- El artículo 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enuncia “el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio...”, sin distinguir las circunstancias sexuales, raciales, de orientación sexual o cualquier otra de quien decide vincularse jurídicamente con su pareja. En aplicación de los artículos 93 y 94</p>

<sup>65</sup> Folios 31 al 35 del expediente.

	<p>de la Constitución Política se entiende que se está en presencia de un derecho fundamental inobjetable: a contraer matrimonio. Como derecho fundamental que es, reviste las calidades de inalienabilidad, inherencia, y esencialidad al ser humano, por ello, presenta una mayor importancia dentro del ordenamiento jurídico, dada su incidencia en el desarrollo existencial de las personas respecto de sus expectativas de vida, bien sea en forma individual, como ser autónomo, o en forma colectiva, dado su asocio natural con los demás congéneres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La norma demandada no prohíbe que el hombre o la mujer homosexual contraigan matrimonio, sino que si lo quieren o desean hacer, deben hacer caso omiso a su orientación sexual, o si es el caso, renunciar a la misma para ejercer a plenitud esta garantía. El artículo 12 constitucional señala que nadie puede ser sometido a tratos degradantes; dichos tratos se han entendido como aquellos que humillan gravemente al individuo frente a los demás, o le compele actuar en contra de su voluntad; la norma demandada trata a los colombianos homosexuales de una forma degradante, pues los cosifica, desconoce su dignidad humana y le obligan a renunciar a lo irrenunciable: la orientación sexual.</li> <li>- Se indica que al análisis jurídico esbozado, se le podría objetar que el artículo 42 de la Constitución Política determinó que el matrimonio nace de “la decisión libre de un hombre y una mujer de contraerlo”, lo que en principio significaría la exclusión de las personas con inclinaciones distintas a la heterosexual para suscribir ese contrato, sin embargo ello no es así, toda vez que lo que hace el texto constitucional es enunciar una realidad social: que la heterosexualidad es mayoritaria en nuestro país. No podría entenderse que la Carta enuncie que busca la igualdad en un marco pluralista y libre, tal como lo proclama su preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 24, y 28, y que después se ensaíe contra un grupo poblacional minoritario tradicionalmente discriminado y le suprima irrazonablemente determinados derechos. Precisamente para evitar esas contradicciones, el constituyente fue sabio al considerar en el artículo 94, que si bien para ese momento histórico no era posible reconocer todos los derechos inalienables a la persona humana, quedaba la puerta abierta para que en el futuro, solo con el hecho que una garantía tuviera ese grado bastaba para reconocérsele su naturaleza normativa.</li> <li>- Se podría oponer también que las parejas del mismo sexo ostentan el derecho a vivir en unión libre, lo que significaría que la acción presentada tendría carencia actual de objeto, ello tampoco sería así, el matrimonio y la unión marital de hecho son antológicamente distintas y sus consecuencias son diversas.</li> </ul>
--	--

	<p>2.2. Expediente D-7909.</p> <p>2.2.1. Pretensión: Respecto del artículo 113 del Código Civil se solicita que la Corte Constitucional declare inconstitucionales las expresiones “... un hombre y una mujer...” y “...de procrear...” contenidas en dicha norma. En relación con las expresiones “...familia...” y “... de un hombre y una mujer...”, contenidas en el inciso 1° del artículo 2° de la ley 294 de 1996, se solicita sean declarados inexecutable.</p> <p>2.2.2. Cuestión Previa. Señala el demandante que el artículo 113 del Código Civil no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera la cosa juzgada constitucional. Respecto del artículo 2° de la ley 294 de 1996, tampoco se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional toda vez que aunque la Corte se pronunció mediante sentencia C-029 de 2009, el fallo fue inhibitorio.</p> <p>2.2.3. Cargos.</p> <p>Se afirma que la Constitución colombiana protege a todos los grupos por igual, debiendo tomar medidas especiales de protección respecto a aquellos que sean especialmente vulnerados. No obstante dicha afirmación no siempre responde a la realidad. Uno de los ejemplos es la desigualdad de derechos de las personas homosexuales. Dicho grupo social, se ha visto vulnerado en sus más básicos derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la libre asociación, a la prohibición de tratos crueles e inhumanos, a la coartación de su libre desarrollo de la personalidad. Es normal que cuando se habla de la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan integrar un grupo familiar se incurra en error de confundir la noción de familia, en estricto sentido, con la institución religiosa del matrimonio y su particular concepción de la familia. Se debe afirmar que el matrimonio ya sea civil, católico o de cualquiera de las religiones legalmente establecidas en Colombia es tan sólo una de las muchas formas que el ordenamiento jurídico establece para conformar la institución familiar. Por lo tanto, la noción de familia es completamente diferente a la de matrimonio.</p> <p>La familia no es una comunidad de individuos, sino unos determinados sujetos que la constituyen en virtud de las relaciones que les unen. Antes que sociales, estas relaciones son personales, es decir, constituyen la intimidad de la persona. El deseo humano de constituir una familia no obedece al simple capricho de un individuo sea éste homosexual o heterosexual sino que obedece a la naturaleza humana y a la esencia intrínseca de las personas. Se indica que las normas demandadas al restringir sin fundamentos legales y razonables derechos fundamentales de las personas</p>
--	---

	<p>homosexuales contrarían el postulado básico anotado y han dado origen a un sistema legal discriminatorio con efectos adversos para todas las personas que, atraídas por individuos de su mismo sexo, ven irrazonablemente obstaculizado su plan de vida al no poder contraer matrimonio civil o integrar un núcleo familiar como consecuencia de un marco legal del que son claramente excluidos y en virtud del cual son discriminados.</p> <p>2.2.3.1 Análisis del artículo 2° de la ley 294 de 1996.</p> <p>Indica el demandante que la norma enunciada tiene su génesis en el texto constitucional contenido en el artículo 42<sup>66</sup>. Esta norma constitucional ha sido interpretada en forma tal que sólo se permite a las uniones de parejas heterosexuales conformar familia y para ello ha usado un criterio de interpretación original. Esta interpretación, en el sentido de restringir el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia, deviene de posiciones ortodoxas. Estas posiciones olvidan que nuestra sociedad no se rige por la moral sino por la Constitución y las leyes que consagran en forma clara que Colombia es un Estado Social de Derecho Pluralista donde se respeta la dignidad humana y en el que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos, sin lugar a hacer discriminaciones que puedan basarse en criterios como la opción sexual. En pleno siglo XXI y pese a que la homosexualidad ya no es catalogada como un delito o una enfermedad y que se ha reconocido como una opción válida de vida digna, tenemos claro que existe un prejuicio basado en estereotipos anacrónicos acerca de las personas homosexuales.</p> <p>- Se manifiesta que las normas demandadas constituyen una vulneración al principio de dignidad humana toda vez que limita la posibilidad de los homosexuales a tener un plan de vida y desarrollarse en forma plena, acorde es el deseo del espíritu humano. Se considera que no hay trato más cruel, inhumano y degradante que negar a una persona la posibilidad de materializar su proyecto de vida por razón de sus preferencias sexuales y esto claramente se observa en la naturaleza excluyente de las normas demandadas que, al restringir el derecho de las personas homosexuales a escoger autónomamente su modelo de realización personal y, si así lo prefieren, optar por conformar una familia o de contraer matrimonio civil, son claramente contrarias al espíritu de la Constitución. Esto deriva en vulneraciones a la integridad física y moral de las personas homosexuales. Vulneración que se concreta</p>
--	---

---

<sup>66</sup> ART. 42.—La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla

	<p>principalmente en que cuando un individuo se reconoce a sí mismo como homosexual y establece un proyecto de vida común con su pareja, el Estado no permite que su unión pueda concretarse en un contrato civil de matrimonio y constituir una familia; derechos a los que cualquier persona heterosexual puede acceder sin dificultad alguna.</p> <p>Se señala por parte del demandante que existe una coexistencia injustificada de líneas jurisprudenciales en las que por un lado se reconocen derechos de los homosexuales como individuos, pero por el otro se les somete a un trato diferencial nugatorio del pleno reconocimiento de sus derechos los cuales son inherentes a todo individuo de la especie humana por el simple hecho de existir. Es precisamente esta diferenciación excluyente y discriminatoria a la que han sido sometidos los homosexuales la que ha generado una visión de “anormalidad” frente a las uniones de parejas del mismo sexo.</p> <p>- Se expresa que el artículo 13 de la Constitución lleva implícita una cláusula de erradicación de las injusticias presentes, que debe ser aplicada a cada caso concreto. Si se mira en forma abstracta a una pareja, homosexual o heterosexual, veremos que está conformada por dos personas que voluntariamente deciden unirse para compartir su proyecto de vida y desarrollarlo en forma mancomunado sólo que respecto de la pareja heterosexual la ley brinda todas las garantías para tal fin, mientras que la pareja homosexual se ve limitada toda vez que la ley la ignora y, de hecho, la discrimina en forma abierta y pública. Es irrazonable, desproporcionado y ajeno que las personas homosexuales y demás integrantes de la población LGBT sean privados del derecho a constituir un núcleo familiar o a recurrir a un contrato civil de matrimonio como forma asociativa, pues resulta inconcebible que el núcleo esencial del artículo 13 haya sido restringido por el mismo constituyente en el artículo 42. Por el contrario, el artículo 42 de la Carta complementa lo prescrito por el artículo 13 al ofrecer toda una amplia gama de posibilidades para la integración de una familia, pasando desde el matrimonio, religioso o civil, a la voluntad responsable de conformarla.</p> <p>- El Estado social de derecho se ha encargado de reforzar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos a él y se ha convertido en el máximo garante de la libertad personal y la dignidad humana, gracias a la labor de protección de dichos derechos. Se pregunta el demandante ¿Qué le es debido al ser humano por el simple hecho de existir en un verdadero Estado Constitucional? Y se responde que resulta fundamental el reconocimiento de su humanidad, y por tanto, el acceso a aquellos derechos humanos básicos que requieren para vivir conforme a su</p>
--	---



	<p>dignidad, y cuyo descubrimiento es accesible a la razón y fruto de la evolución de los derechos humanos. El derecho no está al servicio del capricho arbitrario de ningún individuo, sino que debe responder a la razón. El Estado constitucional no puede permitir la reducción del contenido de un derecho fundamental al consenso de una mayoría, lo que lleva a la injusticia, tiranía y la represión, antítesis claras de lo que debe ser un verdadero Estado Constitucional nuestro.</p> <p>Cuando el contenido y alcance de uno o varios derechos fundamentales queda reducido a la voluntad de una mayoría, se condiciona enormemente la manera de entender lo que son la Constitución y los derechos fundamentales lo cual deriva en el desconocimiento de las mínimas garantías fundamentales que deben amparar a todo individuo y mayormente a un grupo poblacional altamente discriminado como lo es el homosexual. El que exista un grupo social mayoritario que considere como contrario a la “moral” que dos personas de un mismo sexo formen una pareja y tengan un proyecto de vida en común consistente en conformar una familia no debe constituirse en óbice para que dicho derecho, constitucionalmente protegido, les sea negado o desconocido ya que eso conlleva una clara afrenta a los derechos fundamentales que todo individuo posee bajo el marco de un Estado Constitucional y pluralista. Por lo tanto, se hace necesaria a toda costa la defensa de la dignidad humana, de la igualdad verdadera entre hombres y mujeres, de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad y del pluralismo y la tolerancia, pues son pilares fundamentales para la supervivencia del Estado constitucional.</p> <p>- La exclusión y discriminación hacia las personas homosexuales es explicable, más no justificable, a la luz de la segregación histórica a la que han sido sometidas por parte de grupos religiosos y facciones de ultra derecha. El rol de “ciudadano de segunda clase” dado al homosexual que formalmente es reconocido como “igual” a las personas con orientación heterosexual pero a la vez se ve restringido en derechos de carácter fundamental como los mencionados, lo que es una clara forma de violación a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución. La reclamación histórica que eleva la población homosexual sobre sus derechos a contraer matrimonio civil y a constituir una familia, es una pretensión de carácter esencial por parte de un grupo de la población que no ha tenido voz propia en la adopción de decisiones políticas que lo afectan. La discriminación consistente en el hecho de no poder acceder a dichos derechos es algo que escapa absolutamente al control de quien lo sufre pues no depende de su voluntad o deseo, infringiendo una grave vulneración de las condiciones mínimas esencial del concepto de igualdad y dignidad humana.</p>
--	---

	<p>- Es claro que el artículo 42 de la Constitución Política se refiere a la familia y señala los diversos caminos o vías que conducen a ella, de manera que no existe en nuestro sistema jurídico, un único camino que lleve a la organización familiar, sino que existen varios senderos y distintas clases de familia en nuestro sistema constitucional. El artículo 42 constitucional hace referencia en dos ocasiones a la voluntad (decisión libre – voluntad), separándolas con una “o” entendida como una conjunción de carácter disyuntivo, para referirse a dos clases de familia: a.) Una surgida del matrimonio, donde la voluntad (decisión libre) de un hombre y una mujer, que por mediación del matrimonio forman una familia. b.) A la surgida en la voluntad responsable de dos personas de conformarla, sin exigir que se trate de hombre y mujer, lo que, sin dudas, cobija también a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin necesidad de que ellas contraigan matrimonio. A existido una interpretación errada del artículo 2° de la ley 294 de 1996, que desarrolla el artículo 42 de la Constitución, ya que no es cierto que la familia siempre esté integrada o tenga en su base a un hombre y a una mujer. Se debe entender que la “o” que se usa entre la hipótesis matrimonial y la de voluntad responsable de conformarla, hace referencia a formas optativas de constituir una familia que pueden o no estar relacionadas entre ellas. Tratándose de un estado social y democrático de derecho no se puede afirmar que la heterosexualidad sea requisito sine qua non en todas las clases de familias existentes en el marco de la sociedad las cuales se encuentran igualmente protegidas por nuestra Constitución y que, con base en ello, se pueda vulnerar el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio y conformar una familia en pro de las creencias particulares de un grupo mayoritario pues, con esos mismos argumentos, otras prácticas discriminatorias como el racismo y el sexismo se han abierto campo en nuestra sociedad.</p> <p>- La abstención del Estado frente a la situación legal de las parejas del mismo sexo no tiene sustento democrático y carece de legitimidad. La inacción estatal frustra expectativas de bienestar y plenitud garantizadas constitucionalmente a todos los colombianos, sin lugar a ser discriminados salvo que existan razones objetivas y como se ha visto, no es ese el caso. Por tanto, verificada como está la situación de vulneración de derecho de un grupo poblacional, debe el juez constitucional entrar a poner fin a dichas limitaciones arbitrarias que son intolerables en un estado social de derecho. La pasividad y complicidad del Estado ante la marginación a la que son sometidas las parejas del mismo sexo, no se compadece con los deberes que impuso a las autoridades públicas la consagración de un orden constitucional justo. En consecuencia, con sujeción a los principios de aplicación integral de la Constitución y de armonización concreta, la Corte Constitucional debe reconocer el</p>
--	---

	<p>derecho de todas y todos los ciudadanos de Colombia a formar una familia y a recurrir al matrimonio, como contrato civil, para asociarse y desarrollar libremente su plan de vida independientemente de la orientación sexual que posean.</p> <p>2.2.3.2. Análisis del artículo 113 del Código Civil.</p> <p>Señala el demandante que en Colombia se distingue entre matrimonio religioso y matrimonio civil, siendo el primero una institución cultural derivada de los preceptos de una religión, y el segundo una figura jurídico contractual que indica un conjunto de deberes y derechos legalmente definidos. El contrato civil de matrimonio se rige por las disposiciones legales contenidas en el Código Civil. Por principio jurídico, las leyes tienen carácter general, impersonal y abstracto obligando o beneficiando de igual forma a todas las personas. Se debe hacer énfasis en que las parejas del mismo sexo son legalmente capaces, pueden emitir un consentimiento válido y su unión goza del objeto y causa lícita. No se puede afirmar legítimamente que sea razonable o constitucional excluir de la posibilidad de celebrar el contrato de matrimonio civil a las parejas del mismo sexo en razón de su opción sexual.</p> <p>- Uno de los argumentos con base en los cuales se suele negar a las parejas del mismo sexo la posibilidad de acudir al contrato de matrimonio civil como forma asociativa, es su incapacidad para procrear. Considera el actor que no se debe tener como una finalidad sine qua non del matrimonio la procreación en la forma como lo hace el artículo 113 del Código Civil. La procreación en el matrimonio es un acto facultativo de los contrayentes y no una obligación derivada de la figura contractual puesto que a ninguna se le puede obligar a ser madre y circunscribir su proyecto de vida a la maternidad, pues eso sería claramente nugatorio de sus derechos constitucionales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Sostener que por el hecho de no poder procrear las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio es carente de fundamento constitucional, en primer lugar porque es un requisito que no se puede exigir ni siquiera a las parejas heterosexuales y en segundo lugar, porque para procrear no se requiere de la celebración de un contrato. El reconocimiento de la capacidad de las parejas homosexuales para contraer matrimonio civil y para conformar una familia no implica crear esos vínculos sino reconocer su existencia social para darles la plena protección constitucional que un Estado pluralista y respetuoso del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad debe ofrecer.</p> <p>- El derecho al libre desarrollo de la personalidad, se ve vulnerado al desconocer la posibilidad de manifestar y proyectar esta visión por la discriminación ante el trato diferenciado y el reproche social</p>
--	---

	<p>al que son sometidos los integrantes de parejas homosexuales. Toda discriminación a las personas por razón de su orientación sexual resulta contraria a la dignidad humana; dignidad humana que resulta de la decisión de mostrar capacidad de elegir la opción de vida que se desee y que deviene de la autonomía de la persona. La conducta y el comportamiento homosexual son opciones válidas y legítimas por lo cual carece de sentido que la autodeterminación sexual quede por fuera de los linderos de la protección jurídica que se brinda a las personas heterosexuales.</p> <p>2.2.3.3. Test de Proporcionalidad.</p> <p>Indica el actor que la prohibición legal a los homosexuales de recurrir al contrato civil de matrimonio y a conformar una familia derivada de las normas demandadas, viola en forma flagrante el derecho a la igualdad y a la no discriminación por cuanto no se sustenta en motivaciones objetivas y razonables sino que, por el contrario, encarna prejuicios y estereotipos que no tienen cabida en un estado social de derecho como el Colombiano. Se agrega que es indispensable recurrir a un test estricto de proporcionalidad en que se establezca si las restricciones a las parejas del mismo sexo a conformar una familia y a acudir al contrato civil de matrimonio tiene asidero en argumentos razonables o en simples consideraciones de carácter moral sin asidero constitucional. Se puede afirmar, a partir de una racionalidad acorde a los valores y principios consagrados en la Constitución Política, que el ordenamiento jurídico o el operador judicial no pueden imponer limitaciones fundadas en razones que no sean objetivas y razonables. Así, una pareja, independientemente de la orientación sexual que posea, que toma la decisión de casarse y formar una familia para construir un proyecto de vida mancomunado, es digna merecedora de ser protegida constitucionalmente y legalmente.</p> <p>- El matrimonio entendido como un contrato civil y la familia, son por antonomasia dos de las formas más antiguas de asociarse. El código civil, al excluir del contrato civil de matrimonio a las parejas homosexuales y el artículo 2 de la ley 294 de 1996 que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política, al limitar la posibilidad de conformar una “familia” a las uniones heterosexuales vulneran, entre otros derechos fundamentales, el derecho de asociación de las personas homosexuales al negarles que hagan uso de dichas figuras para desarrollar su plan de vida. La unión en pareja, en sentido general, debe entenderse como la voluntad lícita de dos seres humanos de convivir y hacer un proyecto de vida común, en la que no hay distinciones de sexo y cuyos efectos jurídicos son la consecuencia del reconocimiento de los derechos de asociación, dignidad humana, igualdad y libre desarrollo de la personalidad; perspectiva esta desde la cual se debe indagar si existe o no</p>
--	--

	<p>justificación para el trato diferenciado que se da a las parejas homosexuales en la actualidad.</p> <p>- Características de la “pareja” como forma asociativa. La pareja tiene características comunes que pueden predicarse sin tener en cuenta la forma como se integre. (i) La libre voluntad de conformarla, dos personas deciden conformar una pareja, independientemente de su orientación sexual, lo hacen en forma libre. (ii) Perseguir fines lícitos, el homosexualismo no es un delito. (iii) La convergencia en una organización unitaria; la pareja homosexual conforma una organización unitaria y (iv) El libre ingreso y salida, cualquier persona en una relación homosexual puede dar por terminada esta cuando a bien lo tenga. Teniendo en cuenta que los elementos que define una pareja en forma asociativa están presentes en las parejas heterosexuales así como en las parejas homosexuales se pregunta ¿cuál es la diferencia objetiva y razonable que permita darles un trato diferencial?</p> <p>Reconocer que las personas homosexuales son iguales, libres, dignas y a su vez seguir restringiendo sus derechos fundamentales es falto de sindéresis, toda vez que la dignidad y la igualdad son derechos fundamentales que se deben reconocer en forma íntegra pues se es o no se es igual y se es o no se es digno; no puede catalogarse a una persona como medianamente igual o medianamente digna.</p> <p>2.2.3.4. Las normas demandadas implican una violación al principio de interpretación “pro homine” y al bloque de constitucionalidad.</p> <p>Manifiesta el demandante que el artículo 2 de la ley 294 de 1996 que desarrolla el artículo 42 de la Constitución incorpora una norma que, como ya vimos, admite dos interpretaciones, ambas respecto de la protección o desprotección de las parejas del mismo sexo. No es oportuno recurrir a la interpretación “originaria” que se ha hecho de la disposición contenida en el artículo 42 de la Carta. Por el contrario, es importante realizar la interpretación a la luz de los principios constitucionales y los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 2, 13, 38 de la Constitución Política y por lo tanto la Corte Constitucional debe acoger la interpretación que ampare los derechos de las parejas del mismo sexo declarando la inconstitucionalidad de las normas parcialmente demandadas.</p> <p>- Acorde con el desarrollo de la figura del bloque de constitucionalidad, el ordenamiento interno debe respetar los lineamientos fijados por los órganos de control de este tipo de tratados y tribunales internacionales, cuyas recomendaciones e interpretaciones hacen parte del bloque estricto de constitucionalidad. La normatividad internacional referida a la</p>
--	--

	<p>discriminación por razón del sexo y su consagración en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre y en el pacto internacional de derechos civiles y políticos, la determinan como una conducta contraria a los derechos humanos. Esta normatividad debe inspirar y guiar a todo aquel que vaya a interpretar las disposiciones contenidas en la Constitución.</p> <p>- El poder construir una familia es un derecho humano universal reconocido por la declaración americana de los derechos humanos y deberes del hombre en su artículo 6 al consagrar que toda persona tiene derechos a constituir una familia y a recibir protección de ella, sin consideración alguna a la necesidad de una pareja o a la heterosexualidad de la persona, que encuentra apoyo en la apertura semántica del artículo 42 de la Constitución. Se indica por parte del demandante, que haciendo una interpretación sistemática y coherente de la Constitución junto con el bloque de constitucionalidad bajo el principio de interpretación pro homine se llega a la conclusión de que se debe proteger el derecho fundamental de toda persona a tener una familia, cualquiera que sea el tipo de familia que se trate, y a edificar esta institución sobre la base de los principios de solidaridad, respeto, afecto y confianza. No resulta acorde con la Carta, negar la posibilidad de conformar una familia a los ciudadanos por su orientación sexual. Dicha interpretación carece de validez en Colombia ante la existencia de la Constitución de 1991. Las normas acusadas, se convierten entonces en inconstitucionales toda vez que la Constitución dice a las personas homosexuales que tiene los mismo derechos que cualquier otro ciudadano y a su vez, el ordenamiento jurídico le niega la posibilidad de realizarse en forma sentimental, afectiva, personal y familiar con su pareja por el hecho de pertenecer a un mismo sexo, criterio sospechoso de discriminación, si citar ninguna razón objetiva y razonable que justifique tal limitación a los derechos fundamentales.</p> <p>- Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se afirma por el actor que el espíritu de la declaración reconoce la plenitud de derechos a las personas homosexuales como una cuestión de respeto, pluralismo, tolerancia. Nada puede oponerse en una Estado Constitucional de Derecho entre la dignidad y el valor de la persona humana, hombre o mujer, homosexual o heterosexual, y el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano. No es posible afirmar simultáneamente, que Colombia es un estado pluralista respetuoso de la dignidad humanar, que prohíbe de manera absoluta cualquier discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica o cualquier otra condición social y en el que toda persona tiene derecho a constituir familia elemento fundamental de la sociedad y a recibir protección</p>
--	--

	<p>de ella; y a reglón seguido se diga que una familia solo puede ser conformada por un hombre y una mujer, excluyendo cualquier otra posibilidad y desconociendo el carácter dinámico que posee la sociedad.</p> <p>2.2.3.5. Las normas demandadas conllevan una desprotección de los derechos e intereses superiores de los (las) menores.</p> <p>Indica el actor que si bien la posibilidad de permitir la adopción a las parejas del mismo sexo no es una de las pretensiones de la demanda, aunque deviene como consecuencia necesaria de las posibilidad de celebrar contrato civil de matrimonio, debemos reconocer que uno de los grandes obstáculos que ha existido para que las parejas del mismo sexo puedan acudir al contrato civil de matrimonio como forma asociativa y se puedan constituir como una familia ha sido el hecho de permitirles adoptar hijos. Estos argumentos, fundados en el deseo de evitar la homosexualidad a toda costa, deben ser rechazados de plano.</p> <p>- Actualmente las parejas homosexuales adoptan hijos. Acorde con el código de la infancia y la adolescencia, para adoptar solo se exige que siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente.</p> <p>- Los derechos de los menores deben primar sobre cualquier otro derecho que resulte contrario por expreso mandato de la Constitución Política. La adopción es un derecho a favor de ellos y no de los padres, es decir, se debe defender el derecho a ser adoptado y no el derecho a adoptar.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	<b>Sentencia C-818/10</b>
Fecha de la sentencia	trece (13) de Octubre de dos mil diez (2010)
Demandante	Fernando Charria García.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo, numeral 6, artículo 1 de la ley 397 de 1997.
Conoció en primera instancia	Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Decision	Declarar exequible, por los cargos estudiados en la presente decisión, la expresión <i>El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y brindará especial protección a sus diversas expresiones</i> , contenida en el numeral sexto del artículo 1 de la Ley 397 de 1997.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El actor considera que la disposición demandada, al reconocer la especificidad de la cultura caribe y señalar la obligación estatal de brindar especial protección a sus diversas expresiones, vulnera el artículo 7 de la Constitución, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, el artículo 13 ídem, que reconoce el derecho a la igualdad, y el artículo 70 de la Carta, de conformidad con el cual el Estado Colombiano reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país.</p> <p>En lo relativo a la trasgresión del artículo 7 de la Carta Política sostiene que <i>“se presenta una violación a la consagración constitucional de la diversidad cultural (...) por cuanto al reconocer y brindar una protección especial a una de las culturas existentes en Colombia (...) se consolida el desmedro o la falta de atención de las demás existentes y por ende se pierde de óptica el principio que encierra la diversidad cultural”</i><sup>67</sup>. Añade que las prescripciones contenidas en la norma demandada <i>“van en claro detrimento de la diversidad en tanto se protege una con riesgo de que por tal protección se descuiden o no se puedan</i></p> <p><i>proteger debidamente las demás (...)”</i><sup>68</sup>. Es más, en opinión del demandante, los apartes acusados <i>“de plano niegan la posibilidad</i></p>



	<p><i>de brindar especial protección a las diversas expresiones de las demás culturas existentes en Colombia, y con ello, se viola de manera evidente el presupuesto del artículo 7 de nuestra Carta Fundamental cuando [prescribe] ‘El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana’, pues anula esa diversidad y privilegia una solamente, o en otros términos, no favorece a las demás”<sup>69</sup>.</i></p> <p>Para fundamentar la vulneración del artículo 13 de la Carta Política indica que <i>“se afecta el principio jurídico de la igualdad, en la medida en que la norma acusada privilegia especialmente a una cultura frente a las demás existentes, sin que la norma acusada indique que tal atención especial se efectúa por razones que permitan ponerla en igualdad frente a las demás culturas”<sup>70</sup>.</i> Agrega que el texto normativo demandado <i>“al reconocer la especificidad de la cultura Caribe y la especial protección que habrá de brindar a sus expresiones, está de manera expresa indicando por oposición, que existen otras culturas, comunidades indígenas, lingüísticas, etc., sobre las cuales no hace un expreso reconocimiento y lo más grave, el estado no les brindará especial protección a sus expresiones”<sup>71</sup>.</i></p> <p>Apoya su posición en la jurisprudencia constitucional – específicamente en la sentencia T-352 de 1997- al expresar que ella ha considerado que <i>“Para que una medida que establece un trato diferenciado en virtud de uno de los criterios constitucionales ‘sospechosos’ supere el juicio de igualdad y la presunción de inconstitucionalidad que la cobija, se requiere que se verifiquen los siguientes requisitos: (1) que persiga un objetivo constitucionalmente imperioso; (2) que obren datos suficientes para afirmar que resulta idónea para garantizar la finalidad perseguida; (3) que es indispensable para alcanzar tal propósito; (4) que el beneficio que se busca obtener es mayor que el daño que la causa; y (5) que el trato diferenciado se ajusta al grado de diferencia que existe entre las personas o grupos de personas involucradas. Si una</i></p>
--	--

	<p><i>medida de la naturaleza de la que se estudia, no cumple alguna de estas condiciones, compromete el derecho a la igualdad”<sup>72</sup>.</i></p> <p>En su opinión, la diferenciación hecha por la norma acusada no satisface los criterios reseñados por lo que deviene discriminatoria. Así, expresa que (1) <i>“los beneficios que se pretenden de manera especial a la cultura Caribe, lejos están de ser objetivo constitucionalmente imperioso, pues no existe artículo alguno en nuestra Constitución que así lo señale”</i>; (2) la ley 397 de 1997 no señala datos suficientes para afirmar que la medida resulte idónea para alcanzar la finalidad perseguida; (3) el propósito de la ley 397 de 1997, cual es el de desarrollar los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución se cumple igualmente sin el inciso demandado, (4) no es posible sostener que el beneficio que se busca obtener es mayor que el daño que causa ya que <i>“existiendo comunidades indígenas, negras y raizales y grupos étnicos y lingüísticos que en Colombia están en peligro de extinción o en situación de deterioro mayor que el de la cultura Caribe”</i> y (5) <i>“no existe claridad del grado de diferencia estructurado entre los demás grupos involucrados (...) por cuanto la Ley no los señala, ni se apoya en estudios efectuados al respecto”<sup>73</sup>.</i></p> <p>Finalmente, en lo atinente al cargo por violación del artículo 70 de la Constitución, afirma que en éste se reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país, lo que <i>“de plano acepta que hay diversidad de culturas en el territorio de Colombia, y así mismo, también de plano se indica que todas las culturas asentadas en Colombia tienen igual dignidad (...) ¿porqué (sic) entonces, la Ley General de Cultura o ley 397 de 1997, en su artículo 1, numeral 6, inciso segundo, reconoce la especificidad de la cultura Caribe? (...) Pero lo peor es que de manera expresa se favorece a la cultura Caribe frente a las otras, pues acto seguido de hablar sobre la cultura Caribe, contempla el texto demandado lo siguiente ‘y brindará especial protección a sus diversas expresiones’. Es decir, que efectivamente la Ley establece especial protección a las expresiones diversas de la cultura Caribe frente a las demás, o dicho de otra manera, en detrimento de las demás (...) reconocer una cultura en omisión de las demás contradice flagrantemente este enunciado constitucional”<sup>74</sup>.</i></p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA

<sup>73</sup> Folios 18-19, cuaderno principal.

<sup>74</sup> Folios 24-25, cuaderno principal.

<p>Tiene aclaraciones</p>	<p>SI DR. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA</p> <p>RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIFICIDAD DE LA CULTURA CARIBE Y ESPECIAL PROTECCION A SUS DIVERSAS EXPRESIONES-Es constitucional siempre y cuando sea comprendido como deber estatal de protección de las diversas manifestaciones culturales que integran la Nación (Aclaración de voto)</p> <p>RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIFICIDAD DE LA CULTURA CARIBE Y ESPECIAL PROTECCION A SUS DIVERSAS EXPRESIONES-Fórmula planteada por el legislador, aunque es enderezada por la sentencia para que resulte compatible con la Constitución, podía ser entendida en el sentido de otorgar un tratamiento más favorable para la cultura caribe (Aclaración de voto).</p> <p>Con el respeto acostumbrado hacia las decisiones de la Corte, procede el suscrito Magistrado a expresar las razones que sustentan la aclaración de voto a la sentencia C-818 del 13 de octubre de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), decisión en la que la Sala Plena decidió declarar exequible, por los cargos analizados, la expresión “El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y brindará especial protección a sus diversas expresiones,” contenida en el artículo 1º de la Ley 397 de 1997. Para ello, expreso los argumentos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Como lo expuse ante el Pleno, considero que el segmento normativo que confiere “especial protección” a las diversas expresiones de la cultura caribe, es constitucional siempre y cuando sea comprendido como un desarrollo del artículo 70 C.P, que prevé el deber estatal de protección de las diversas manifestaciones culturales que integran la Nación. En ese sentido, según se expone acertadamente en la sentencia, “... el enunciado acusado simplemente atribuye un cariz diferenciado a las manifestaciones de la cultura caribe sin que dicho reconocimiento implique un privilegio frente a otras manifestaciones culturales, las cuales a su vez se encuentran cobijadas por el deber de protección estatal señalado en el literal a del artículo 4 de la misma ley. Trato diferente no es sinónimo de trato privilegiado y la expresión demandada no supone una discriminación positiva que se materialice en acciones afirmativas, privilegios o en una prevalencia cultural. El precepto acusado encaja en mayor medida con el modelo de organización territorial plasmado en la Constitución de 1991, el cual contempla la posibilidad que las regiones conformen entidades territoriales y por lo tanto el legislador puede reconocer la diversidad cultural regional.”</li> <li>2. No obstante, considero que la fórmula planteada por el legislador, aunque es enderezada por la sentencia para que resulte</li> </ol>
---------------------------	--

	<p>compatible con la Constitución, podía ser entendida –y efectivamente así lo hizo demandante- en el sentido de otorgar un tratamiento más favorable para la cultura caribe. En efecto, la expresión “especial protección”, comprendida en el uso común del lenguaje, permite concluir válidamente que la intención de la regla legal es diferenciar entre diversas posiciones jurídicas, para otorgar determinados privilegios a una de ellas. Así por ejemplo, el artículo 13 de la Constitución identifica un grupo de sujetos que el Estado “protegerá especialmente” y es a partir de esa cláusula que la jurisprudencia ha construido una profusa doctrina sobre las discriminaciones inversas, las acciones afirmativas, la diferenciación entre diversos estándares para la exigibilidad de obligaciones jurídicas y, en general, los tratamientos diferenciados dirigidos a garantizar la igualdad de oportunidades. Si, de manera análoga a como lo hace la Corte en esta sentencia, la jurisprudencia hubiera concluido que tal condición de “especial protección” no configuraba en sí misma ninguna posición favorable o de privilegio, dicha doctrina no se habría producido.</p> <p>3. La decisión adoptada por la Corte, en suma, llega a la conclusión que la norma demandada contiene una disposición inane, en tanto no hace nada distinto que reafirmar el mandato constitucional de protección de la diversidad cultural. Advierto que esa interpretación, aunque necesaria y fundada en el principio de conservación del derecho, en realidad deforma una intención legislativa unívoca de privilegiar a la cultura caribe. Ello porque (i) es principio hermenéutico general que las normas jurídicas deben ser interpretadas de modo que se privilegie su genuino sentido; y (ii) dudo que la intención del legislador en el presente asunto hubiera sido insistir en lo que la Carta Política ya contiene.</p> <p>Los anteriores son los motivos para aclarar mi voto</p>
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	<b>Sentencia C-914/10</b>
Fecha de la sentencia	diez y seis (16 ) de noviembre de dos mil diez (2010).
Demandante	Doria Yanette Bautista Montañez, Rodrigo Uprimmy Yepes, Nelson Camilo Sánchez León, Luz María Sánchez Duque y otros.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 6º de la Ley 782 de 2002, y contra el artículo 49 de la Ley 418 de 1997.

Conoció en primera instancia	JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Decision	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos estudiados, el artículo 15 de la ley 418 de 1997, modificado por el artículo 6º de la ley 782 de 2002, en el entendido que también son destinatarios de los instrumentos de protección consagrados en dicha ley, las víctimas de los delitos de desaparición forzada y sus familias.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos estudiados, el artículo 49 de la ley 418 de 1997, en el entendido que también son destinatarios de la ayuda humanitaria de emergencia consagrada en dicho precepto, las víctimas de los delitos de desaparición forzada y sus familias.</p>
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Desde el propio resumen ejecutivo de la demanda, se observa que los actores estiman que los artículos 15 y 49 de la ley 418 de 1997, incurrir en omisión legislativa relativa, al discriminar a las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares, respecto de la categoría de víctimas de la violencia política. Lo anterior, no obstante encontrarse en situación asimilable.</p> <p>Esta conclusión la obtienen tras analizar las disposiciones acusadas y derivar de ello el “dejar a la discrecionalidad del intérprete el poder de definir si la alusión genérica a los atentados contra la libertad personal incluye la desaparición forzada” o no (folio 3).</p> <p>La exclusión mencionada, dicen los actores, carece de razón suficiente pues el delito de desaparición forzada es tan grave como los actos de violencia previstos en los preceptos que se acusan.</p> <p>En desarrollo de tal argumentación concreta, exponen la jurisprudencia de la Corte sobre las exigencias que impone argumentar la existencia e inconstitucionalidad de la omisión legislativa relativa.</p> <p>Así, explican cómo se cumple el requisito del precepto concreto sobre el cual se predica el cargo de omisión, a saber, los artículos 15 y 49 de la ley 418 de 1997, el primero cuando “define el concepto de víctima de la violencia para efectos de delimitar el abanico de beneficiarios de la atención humanitaria, y el artículo 49 (...) [cuando] establece quiénes pueden acceder a la ayuda humanitaria de emergencia” (folios 7-8).</p> <p>En entender de los demandantes, las disposiciones acusadas excluyen de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser</p>

	<p>asimilables, tendrían que estar contenidos en el texto normativo de acuerdo con la Constitución. Esto se explica a partir de una primera distinción, según la cual en la ley 418 de 1997 existen dos tipos de víctimas de la violencia política: i) unas son las personas de la población civil que sufren “perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno”, incluidos los desplazados y los menores de edad que tomen parte en las hostilidades; ii) el otro tipo es el constituido por quienes “sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza, [los cuales] serán beneficiados por una ayuda humanitaria de emergencia, tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos”.</p> <p>Y aunque se reconoce coincidencia entre unos y otros, también se destacan las diferencias: por un lado están las víctimas del art. 49, que son las de homicidios selectivos por motivos políticos, mientras que el artículo 15 incluye los desplazados y los menores que participan en las hostilidades. La importancia de esta distinción se encuentra en que según la categoría de víctimas, se reciben unos beneficios en materia de asistencia humanitaria. Las víctimas del art. 15, reciben la asistencia de la que trata el artículo 16, a saber asistencia en salud, subsidio familiar de vivienda, en materia crediticia, y beneficios educativos. Las víctimas del artículo 49 sólo reciben el otorgamiento de una ayuda humanitaria de emergencia.</p> <p>Lo anterior, no obstante que la Corte (sentencias T-417 de 2006 y C-1094 de 2007) ha señalado la necesidad de interpretar tales disposiciones del modo que resulte más favorable a la protección de las víctimas y en ese tanto, otorgue los beneficios dispuestos en el artículo 16 a las víctimas señaladas en el artículo 15, así como a aquellas del 49 de la ley en comento.</p> <p>Según esta interpretación, la omisión legislativa alegada se formula respecto de las dos disposiciones, pues la inclusión de los desaparecidos y sus familiares en alguna de ellas, implicaría su reconocimiento como víctimas de la violencia política y por tanto el ser beneficiarios de todas las medidas de atención humanitaria que la ley contempla.</p> <p>Precisa en cuanto a la exclusión de las víctimas y familiares de desaparición forzada, que en principio el art. 15 los comprende por ser miembros de la población civil y por haber recibido en la persona propia y de sus familiares atentado contra la integridad</p>
--	---

	<p>personal. En el caso de las desapariciones forzosas, es claro que la víctima del delito no puede ser el único sujeto pasivo de la acción, víctima directa, sino que también figuran las víctimas indirectas que sufren la afectación por haberla padecido personas que les son próximas. Así se ha reconocido, dice la demanda, en la jurisprudencia de la Corte (sentencias C-400 de 2003, C-370 de 2006, C-1094 de 2007) y en la “Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder” (Resolución 4034 de 1985 de la Asamblea de NU), art. 1º, y en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, art. 24.</p> <p>En consecuencia, el problema se presenta con respecto al tercer requisito que trae el art. 15 de la ley 418 de 1997, en donde se relacionan los actos de los cuales se derivan los perjuicios para que las víctimas y familiares adquieran la calidad de víctima de la violencia política y que son: 1. Atentados terroristas; 2. Combates; 3. Secuestros; 4. Ataques y 5. Masacres, cometidos en todos los casos, dentro del “marco del conflicto armado”. Y esta relación tiene carácter taxativo y no meramente enunciativo, como lo confirma en opinión de los actores, la modificación introducida por la ley 782 de 2002, al sustituir la expresión de actos “tales como” y por la cual se describía una relación abierta de las actuaciones del conflicto armado por cuya causa podrían reclamarse los beneficios previstos en la ley para sus víctimas, por la expresión de “atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres” que se presenten como parte del conflicto armado interno que vive Colombia, incluyendo a los desplazados y a los menores de edad que tomen parte en las hostilidades.</p> <p>Y aunque el caso de desaparición pueda subsumirse en otro tipo penal cuando las circunstancias así lo determinen, el delito tiene entidad autónoma y así debe ser protegido.</p> <p>“En síntesis, -concluyen los actores- el artículo 15 de la Ley 418 de 1997 excluyó a las víctimas de la desaparición forzada por cuanto: i) los cinco eventos descritos no agotan todas las circunstancias fácticas en las cuales se puede dar la desaparición, ii) la desaparición forzada es una conducta autónoma que ha sido recurrente en el marco del conflicto armado y que como tal es también fuente autónoma de perjuicios, por lo cual su inclusión sólo podía garantizarse a través de su mención expresa en el artículo” (folio 13).</p> <p>También se excluye de las víctimas protegidas por el artículo 49 de la ley 418 de 1997, a quienes han sufrido desaparición forzada y sus</p>
--	--

	<p>familiares, pues en este precepto se reconoce el beneficio de la ayuda humanitaria de emergencia a las personas que sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza. Esta disposición, contrario a lo predicado del artículo 15, no contiene una lista taxativa de casos, sino una enumeración abierta de posibles supuestos de hecho normativos, esto es, “categorías amplias y generales”. Por esto, admiten que en el precepto se deja “un margen de interpretación para determinar los actos concretos que podrían considerarse incluidos dentro de tales categorías” (folio 13).</p> <p>Lo anterior, por cuanto así se podría desprender de la definición del delito de desaparición forzada prevista en el Código penal, de modo que la privación de la libertad de la que allí se trata, pudiera servir para entender que el artículo 49 de la ley 418 incluye a las víctimas de ese delito “por tratarse de personas que han sufrido perjuicios a causa de un atentado contra la libertad personal” (folio 14).</p> <p>Con todo, observan que esa interpretación aunque es razonable, no representa garantía suficiente y en ese orden, no desdice la existencia de la omisión legislativa relativa, “porque en el caso de la desaparición forzada estamos ante la particular situación de una invisibilización histórica que impone al legislador específicos deberes tendientes a contrarrestar tal situación” (folio 14).</p> <p>La consideración que precede tiene además fundamento en las sentencias C-400 de 2003 y C-394 de 2007, donde, afirman los demandantes, la Corte declaró inexecutable el trato diferenciado ofrecido a las víctimas de secuestro, respecto de las víctimas de desaparición forzada. En estas decisiones además se destacó la constante histórica de la invisibilización de las víctimas de la desaparición forzada. Por ello, encuentran los actores que se hace necesario un reconocimiento expreso de tales víctimas, pues con la dimensión performativa del lenguaje jurídico se hacen visibles y dignas ante el Derecho. En definitiva, “tanto porque no cumple con el deber de visibilizar y reconocer expresamente a la desaparición forzada y a sus víctimas, como porque deja a la discrecionalidad del intérprete la determinación de la inclusión de esta dentro de la categoría de la violencia política, el artículo 49 incurre en una omisión legislativa relativa al no mencionar expresamente a las víctimas de la desaparición forzada” (folio 16).</p> <p>En cuanto al argumento de que los desaparecidos y sus familiares se encuentran en una situación asimilable a la de las víctimas que sí fueron incluidas en los preceptos acusados, observan que la ley 418</p>
--	--



	<p>de 1997 tuvo por objeto garantizar a las víctimas de la violencia política, la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, con la cual pudieren satisfacer los derechos menoscabados. Un predicamento que cabe para todas las víctimas que se hallaren en esta situación y que con amplias razones también habría de cubrir a quienes han sufrido desaparición forzada o sus familiares, como lo demuestra el reconocimiento de tal delito en los instrumentos internacionales relacionados con esta clase de violencia.</p> <p>Con respecto a la carencia de razón suficiente para excluir a las víctimas de desaparición forzada, se encuentra que no existe fundamento fáctico ni jurídico para la misma, menos aún cuando el constituyente consagró en el artículo 12 Constitución Política el rechazo expreso contra esta práctica.</p> <p>En adición, observan que durante los trece años de vigencia de la ley 418, se han producido cambios en el contexto normativo y jurisprudencial, por los cuales se ha admitido la importancia del delito y la necesidad de reconocer a las víctimas del mismo, en condiciones equiparables a las previstas para otros delitos y sus víctimas. Así, cuando mediante la ley 589 de 2000 se tipificó el delito de desaparición forzada y se adoptaron otras medidas destinadas a su registro y reconocimiento y a la persecución de quienes han incurrido en él. También cuando en la ley 707 de 2001 se aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en la cual los Estados firmantes se comprometen a tomar medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha práctica. Y finalmente, en las citadas sentencias C-400 de 2003 y C-394 de 2007, donde se reprochó el trato discriminatorio que el Estado ha dado a las víctimas de desaparición forzada respecto de las del secuestro.</p> <p>Por esto, es incomprensible y carente de razón que ni la ley 418 de 1997, ni su modificación prevista en la ley 782 de 2002, hubieren incluido a las víctimas de la desaparición forzada, dentro de las medidas de protección cuando en ésta última sí se incluyó a las víctimas del secuestro que no habían sido mencionadas en la versión original de la ley.</p> <p>El cuarto requisito para la prosperidad del cargo de omisión legislativa relativa también se cumple, afirman los actores, como quiera que la exclusión mencionada genera para las víctimas del delito de desaparición forzada y para sus familiares una “desigualdad negativa”. Esta, por un lado, refuerza su invisibilización histórica y, por otro, impide reconocerlos como beneficiarios de la atención humanitaria prevista en la ley 418, para otras víctimas del conflicto armado interno.</p>
--	---

	<p>Los beneficios contemplados en la ley están relacionados con la asistencia en salud, subsidio familiar de vivienda, asistencia en materia crediticia, beneficios educativos, además de una indemnización por daños irreparables.</p> <p>A ninguno de ellos acceden las víctimas de la desaparición forzosa, pues junto con el silencio de la ley, ni se mencionan en el Acuerdo 005 de 2004 ni en la Resolución 7381 de 2004, donde sólo se hace referencia a las víctimas por muerte, secuestro, amenazas y a los que perdieron bienes, sufrieron heridas o resultaron incapacitadas de modo permanente.</p> <p>Traen a cuento, en fin, el caso de funcionarios de Acción social que reconocen la solicitud de las víctimas de desaparición forzada, pero la supeditan al cumplimiento de lo previsto en la Resolución 7381 de 2004 para el caso de muerte, lo que les impone tramitar el proceso de declaración de muerte presunta. Esto se ilustra con un documento adjunto suscrito por funcionarios de Acción social en respuesta a un incidente de desacato en un proceso de tutela (folios 119-122), donde señalan que la solicitud de inclusión en el programa de beneficios para las víctimas del conflicto armado, a las de la desaparición forzada, debe estar acompañada de la sentencia declaratoria en mención. Esto, como requisito para ser tenido su caso como hecho victimizante de homicidio, que permite el reconocimiento de los derechos de reparación previstos en la ley 418 de 1997.</p> <p>Y con un estudio realizado sobre la prestación de la ayuda humanitaria en el municipio de Granada (Antioquia) , se dice poner en evidencia que el requisito de declaración de muerte presunta, se convierte en una carga desproporcionada desde el punto de vista económico para las víctimas que pretenden reclamar, por cuyos costos la mayoría de los familiares de desaparecidos se abstienen de iniciar el trámite ante los jueces (folio 21).</p> <p>No obstante la omisión denunciada, los actores precisan que las víctimas de la desaparición forzada sí fueron previstos en el Decreto 1290 de 2008, por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Mas el acceder a esta reparación no elimina el deber de prestación asistencial dirigido a mejorar las condiciones mínimas de existencia de las víctimas o de sus familiares.</p> <p>Como último requisito constitutivo de omisión legislativa en el caso del art. 15 de la ley 418 de 1997, relativo al incumplimiento de los deberes del legislador, observan que en efecto se verifica respecto</p>
--	---

	<p>de lo establecido en el artículo 13 C.P., con relación a la protección exigida en los artículos 12 y 95 C.P., así como en lo tocante al deber de respetar los tratados y convenios internacionales de Derechos humanos ratificados por Colombia (Convención interamericana sobre desaparición forzada, Estatuto de la Corte Penal Internacional, los artículos 3º, 5º y 9º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 5º, num 1 y 2 y 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos), según lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución.</p> <p>Precisan sobre este particular, que existe un deber contemplado en el art. 95 de la Constitución, que en nombre de la solidaridad impone a los particulares acciones humanitarias y al Estado el cumplimiento de lo previsto en el art. 2º CP, así como de lo previsto en los compromisos asumidos en el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional y a la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.</p> <p>En adición a lo anterior, también existe un deber de protección sobre las víctimas de desaparición forzada, por virtud de lo previsto en la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo cumplimiento da lugar a la provisión de ayuda humanitaria, como derecho social de la tercera generación, en desarrollo del principio de solidaridad social (sentencia C-255 de 2003 y T-1094 de 2007).</p> <p>Se expone también como fundamento del deber de protección de las víctimas y familiares de la desaparición forzada, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, art. 2º y 26, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1º, 2º y 24, en cuanto garantizan los derechos reconocidos conforme al principio de igualdad y no discriminación. Con mayor concreción la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, incorporada al ordenamiento colombiano mediante la ley 707 de 2001, por la cual el Estado se compromete a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de la personas.</p> <p>Por todo lo anterior, concluyen que resulta claro que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa en el art. 15 de la ley 418 de 1997, modificado por el art. 6º de la ley 782 de 2002 y en el art. 49 de la primera ley, los que al crear un trato discriminatorio, imponen a la Corte proferir una sentencia integradora que llene el vacío dejado por el legislador “y que establezca por tanto que para los efectos de la Ley 418 de 1997, las víctimas de desaparición forzada también se entenderán como víctimas de la violencia política (...) para acceder a las medidas de atención huma[nitaria]”</p>
--	--

(folio 28). Es decir que se declare que los artículos son exequibles, “pero únicamente en el entendido de que incluyen como víctimas directas de la violencia política ocasionada por grupos armados ilegales o agentes de Estado a los desaparecidos y sus familiares, y que por tanto los familiares tienen derecho a acceder a todas las medidas de atención humanitaria previstas en la ley 418 de 1997 y en las normas que la desarrollan, sin necesidad de adelantar procesos de declaración por muerte presunta”.

#### 4. Coadyuvancias

En escrito de coadyuvancia a la demanda presentada contra los artículos 15 y 49 de la ley 418 de 1997, se expone que la omisión legislativa relativa de tales preceptos frente a las víctimas de la desaparición forzada, los convierte en normas contrarias a la Constitución, dado que viola el derecho a la igualdad de aquellas y de sus familiares y además se refuerza la invisibilización a la que han estado sometidos. En ese sentido, señalan el deber de disponer de atención humanitaria equivalente a la que reciben las víctimas de delitos semejantes, porque así se desprende de lo previsto en los artículos 12 y 95 de la Constitución, y de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad por lo previsto en el art. 93 CP.

Cada escrito se suscribe individualmente por las siguientes personas: Ana María Téllez Luque, Rocío E. Bautista, Nilb Meneses, Reinaldo Villalba Vargas, Vicepresidente de la Corporación Colectivo Abogados CAJAR, Luís Napoleón Concha Morales, Ester Pretez Ríos, Marielen Ramírez Pacheco, María del Pilar Navarrete, Yeisson Ali Salamanca Peña, María Ema Jiménez, Alirio Jizcaino Gutiérrez, Luz Nelly Alfonso Riaño, Dolores Ricaño, Gloria Inés Alvarado, María Regía Gómez de Canquera, María Mercy Lee Rivera, Astrid E. Manríquez Carvajal, Luz Mila Jera, Jackeline Ramírez Sánchez, María Inés Caicedo Solís, Gersain Rodríguez Posada, Gyna Catalina Vizcano Bautista, Amparo Corral, María Carmelina Suárez Carrillo, José Ismael Villamil Ortiz, Noel Palomino Palomino, Aura Elisa Ledesma Gómez, (folio 35-88); Agustín Jiménez Cuello, Iván González Amado, Fundación Nydia Erika Bautista, Jesús Alberto Franco Giraldo, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Olga Amparo Sánchez Gómez, Fortalecimiento del Movimiento Femenino por la Paz: ruta pacífica de las Mujeres por la Negociación del Conflicto Armado, Rafael Barrios Mendivil, Corporación Colectivo de Abogados José Ivar Restrepo, Elizabeth Martínez Pineda, Tito Agustín Gaitán Restrepo, La Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, Ana María Restrepo Rodríguez, Natalia Paredes Hernández, Fernando Augusto Sarmiento Santander, Diego Fidel Quiroga Gómez, Víctor Andrés

	Barrera Ramírez, Joan Manuel Rodríguez Nieto, Carlos H. Fernández Niño, Yuly Andrea Guzmán López, Magda Beatriz López Cárdenas, Andrés Felipe Yépez, Margareth Alexandra Figueroa, Alejandro Cadena Benavides, Fabián Andrés Villarranga Peña, Luís Guillermo Guerrero Guevara, Luz Ángela Herrera Rivera, Camilo Andrés Hernández Barneta, Manuel Vladimir Caraballo Acuña, Andrés Mauricio Aunta Peña, Sergio Andrés Coronado Delgado, Corporación Casa de la Mujer, Jorge Julio Mejía, Centro de Investigación y educación Popular, Antonio José Madriaga Reales, Corporación Viva la Ciudadanía, Claudia María Mejía Duque, Sisma Mujer, fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Martha Yaneth Sandoval Salazar, William José Quijano Zea, Myriam Yolanda Rojas, Bárbara González Medina, Pedro Santana Rodríguez, María Angélica Hernández Guzmán, David Eduardo Hernández Díaz, Myriam Garzón Vargas, Mónica Rueda Molina, Diego Alexander Forero Higuera, Jessica Stephanía Pinzón Hernández, Diego Alejandro Ramos Pilacoca, Lina Lisette Macías Montaña, Álvaro Ortiz Ramos, Víctor Leonel Becerra, Libia Valencia Muñoz, Alexander Vargas, Andrea Solangie Torres Bautista, Fundación Nydia Erika Bautista, Carolina Aldana García, Reinaldo Villalba Vargas, Esther María Gallego Zapata (folios 123-251).
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	<b>Sentencia C-319/10</b>
Fecha de la sentencia	cinco (5) de mayo de dos mil diez (2010).
Demandante	Carlos Andrés Téllez Ramírez.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 145 (parcial) de la Ley 201 de 1995.
Conoció en primera instancia	Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Decision	Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 145 de la Ley 201 de 1995, en el entendido de que cuando se trate de proveer una vacante de grado igual, correspondiente a la misma denominación, el empleo de la lista de elegibles es un deber y no una facultad del nominador, e INEXEQUIBLE la expresión “o inferior” del mismo artículo.
Conoció en segunda	NO APLICA

instancia	
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El ciudadano comienza por explicar que la Ley 201 de 1995 organizó la estructura de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, el decreto ley 262 de 2000 derogó parcialmente la mencionada ley, es decir, sólo en relación con la primera entidad, quedando vigente respecto al régimen de carrera administrativa de la Defensoría del Pueblo. De tal suerte que, asegura, la norma acusada se encuentra produciendo efectos jurídicos aunque únicamente, se insiste, en relación con la segunda entidad estatal.</p> <p>Realizada la anterior precisión, el demandante alega que la expresión “podrá”, del artículo 145 de la Ley 201 de 1995, vulnera el derecho a la igualdad (art. 13 Superior), en la medida en que personas que se encuentran en igualdad de condiciones reciben un tratamiento discriminatorio por parte del Estado, por cuanto “una persona que concurre en la Procuraduría General de la Nación o en los concursos de que trata la Ley 909 de 2005, y haga parte de la lista de elegibles, tiene la oportunidad insoslayable de llenar las vacantes que se presenten respetando el orden descendente, mientras que en ejecución del aparte acusado esa misma persona no tendría la misma oportunidad en la Defensoría del Pueblo”. En lo que concierne al artículo 40.7 Superior, alega el ciudadano que esta norma constitucional se desconoce por cuanto una persona que haya participado en el concurso de méritos y haga parte de la lista de elegibles, no necesariamente llenará las vacantes que se presenten, pues el verbo “podrá”, conduce a que no exista una obligación de nombrar por el nominador. Así mismo, en relación con el artículo 83 constitucional, referente al principio de la confianza legítima, el demandante explica que, en la medida en que quien participó en el concurso de méritos para la provisión de cargos afirma para sí la posibilidad de llenar vacantes restantes, y correlativamente el deber de la autoridad de tenerlo como tal. Pero, “tal y como se prevé en la norma acusada, la facultad de llenarlas no resulta obligatoria sino discrecional del nominador, lo que puede llevar a pensar que puede llenar esas mismas vacantes con personas que ni siquiera han acudido al concurso de méritos”.</p> <p>Finalmente, el ciudadano alega la violación del artículo 125 Superior, según el cual los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los que determine la ley. Además, el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, “así pues y en la medida en que la decisión de llenar las vacantes con la lista de</p>

	elegibles no resulta obligatoria sino discrecional del nominador, la garantía real del acceso al servicio público se ve condicionada no por el resultado del concurso sino por una decisión discrecional del nominador, haciendo nugatorio el esfuerzo estatal (abrir el concurso y gestionar las etapas) y particular (participar en el concurso y aprobar sus etapas)".
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

## SENTENCIAS DE 2011

<b>Tipo de sentencia</b>	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
<b>Identificar la sentencia</b>	<i>Sentencia C-824/11</i>
<b>Fecha de la sentencia</b>	dos (2) de noviembre de dos mil once (2011).
<b>Demandante</b>	Sergio Andrés Duque Rodríguez y Silvia Consuelo Pardo Roa
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 361 de 1997 <i>“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”</i>
<b>Conoció en primera instancia</b>	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
<b>Decision</b>	PRIMERO.- Declarar <b>EXEQUIBLES</b> las expresiones <i>“severas y profundas”</i> contenidas en el artículo 1º de la Ley 361 de 1997.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>Los ciudadanos Sergio Andrés Duque Rodríguez y Silvia Consuelo Pardo Roa consideran que las expresiones <i>“severas y profundas”</i> contenidas en la norma acusada, son contrarias al Preámbulo de la Constitución y a los artículos 13, 25, 47, 48, 53 y 54 de la Carta Política, y vulneran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006 e incorporada al ordenamiento jurídico mediante la Ley 1346 de 2009. Para fundamentar lo anterior, utilizan los siguientes argumentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los accionantes consideran que las expresiones demandadas violan el Preámbulo de la Constitución, por cuanto indican que los principios constitucionales que inspiran dicha ley y que buscan la asistencia y protección necesarias, se dirigen en esta norma únicamente a las personas con limitaciones severas y profundas, olvidando que existen también personas con limitaciones clasificadas de leves y moderadas, las cuales según este artículo 1º de la Ley 361 de 1997, no serían receptoras de la asistencia y protección especial de la que habla dicha norma.</li> <li>2. Respecto de la violación del artículo 13 Superior, argumentan que las expresiones acusadas permiten la violación del principio de igualdad, dado que no tiene en cuenta que la clasificación real y de aplicación diaria, de personas con limitaciones no se reduce solamente a limitaciones severas y profundas, sino que también existen personas con limitaciones leves y moderadas que carecen de la asistencia y protección especial de la que habla el artículo 1º de la Ley 361 de 1997. Así, encuentran que el trato desigual se evidencia por cuanto la norma establece una protección especial a trabajadores con grado de limitación severa o profunda, es decir</li> </ol>



	<p>desde un 25% de discapacidad, y se deja sin protección a un trabajador que tenga por ejemplo un 24.5% de discapacidad, cuando en términos reales éste último es despedido sin autorización del Ministerio de Protección Social y le es difícil conseguir un nuevo empleo debido a su limitación.</p> <p>3. En relación con la violación del artículo 25 Superior alegada, consideran que las expresiones demandadas son inconstitucionales por cuanto no incluyen en los protegidos en la ley a las personas con limitación moderada, razón por la cual atentan de manera abierta contra el derecho al trabajo que tienen las personas con esta clase de limitación.</p> <p>Mencionan, que los jueces de la República vienen haciendo una interpretación y aplicación del artículo 1º de la Ley 361 de 1997, en concordancia con el artículo 26 de la misma normativa y el artículo 7º del Decreto 2463 de 2001, que define los grados de severidad de las limitaciones, para concluir que dado que la Ley 361 de 1997 le es aplicable a las personas con limitaciones severas y profundas, y el permiso ante el Ministerio de la Protección Social para despedir a un trabajador con limitaciones es para las personas con este tipo de limitaciones, entonces las personas con pérdida de capacidad laboral que se encuentren entre un 15% y el 24% que tienen limitaciones moderadas, pueden ser despedidas de su trabajo sin necesidad del permiso del Ministerio de la Protección Social.</p> <p>Por tanto, consideran que esta interpretación es grave ya que se está despidiendo a personas con limitaciones leves y moderadas, que tienen discapacidades entre un 5% y 25%, sin ninguna clase de indemnización ni autorización del Ministerio de la Protección Social, y que estas personas no pueden conseguir un nuevo trabajo ya que no pasan el examen médico de ingreso dada su limitación laboral. De esta manera considera, que se viene presentando una desprotección y desigualdad real de personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta dado su estado de discapacidad.</p> <p>4. En cuanto a la violación del artículo 47 de la Carta Política, argumentan que el artículo demandado al establecer que se debe dar asistencia y protección a las personas con limitaciones severas y profundas, transgrede el espíritu y deseo de este precepto superior, dado que contrario a desarrollar una política de integración social lo que hace es excluir de protección y por ende de atención en salud y otros aspectos, de los trabajadores con limitaciones leves y moderadas que van del 5% al 14.9% y del 15% al 24.9%, como indica el artículo 7 del decreto 2463 de 2001.</p> <p>5. Consideran igualmente, que se vulnera el artículo 48 Superior ya que cuando un empleador, despide a un trabajador por causa de su limitación física, la cual es clasificada en porcentaje de moderada, además de hacerle más difícil su vida laboral, dada la dificultad para ingresar nuevamente a un trabajo, también le impide el acceso a la seguridad social como consecuencia de su despido o terminación de contrato. De esta manera, encuentran que la aplicación del</p>
--	--

	<p>artículo 1º de la ley 361 de 1997 origina una sobreviviente desprotección y discriminación de las personas calificadas con limitaciones moderadas, razón por la cual, consideran que es evidente su inconstitucionalidad por violación del artículo 48 de la Constitución Política que protege el derecho a la seguridad social, teniendo en cuenta los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.</p> <p>6. Afirman que igualmente se contraria el artículo 53 de la Constitución Política, ya que al discriminar a la población con discapacidad laboral leve y moderada, no tiene en cuenta los principios a los que hace alusión el artículo 53 Superior, tales como (i) la igualdad de oportunidad para los trabajadores, porque discrimina de la protección especial a las personas con discapacidad leve y moderada; (ii) la estabilidad en el empleo de los trabajadores con grado de limitación moderada, cuyo despido no requiere permiso ante el Ministerio de la Protección Social; (iii) la primacía de la realidad sobre las formalidades; (iv) garantía de seguridad social, ya que las personas con grados leves y moderados de discapacidad, al no estar previstos en la norma demandada, pueden ser despedidos sin autorización del Ministerio de la Protección Social, y en consecuencia, dejados fuera del Sistema General de Seguridad Social, sin ningún tipo de indemnización; y (v) los convenios internacionales en relación con las personas con discapacidad.</p> <p>7. De otra parte, argumentan que las expresiones demandadas contrarían el artículo 54 Superior, ya que este precepto Superior consagra que el Estado debe garantizar a los minusválidos el derecho al trabajo, sin indicar que se les garantiza solo a los limitados severos y profundos, como lo hace el artículo 1º de la Ley 361 de 1997.</p> <p>8. Finalmente, consideran los demandantes que las expresiones acusadas son violatorias del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, e incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1346 de 2009, ya que es contrario a la protección, estabilidad y garantías que le son reconocidas en los literales b y e de la Convención, que consagran el deber del Estado de proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a los demás, y no establece ninguna clasificación porcentual entre esta población en estado de debilidad manifiesta.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
<b>Identificar la sentencia</b>	<b>Sentencia C-263/11</b>
Fecha de la sentencia	seis (6) de abril de dos mil once (2011).
Demandante	Andrés Julián Estrada Otálvaro.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el párrafo 2º del artículo 13 de la Ley 1101 de 2006 “por la cual se modifica la Ley 300 de 1996- Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones” y el literal g) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996 “por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones”
Conoció en primera instancia	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Decision	ÚNICO: Declarar EXEQUIBLES el párrafo 2º del artículo 13 de la Ley 1101 de 2006 “por la cual se modifica la Ley 300 de 1996- Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones” y el literal g) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996 “por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones”, únicamente frente a los cargos examinados en esta providencia.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>El demandante considera que las disposiciones acusadas son inconstitucionales, pues desconocen los principios de libertad económica y libertad de empresa consagrados en el artículo 333 de la Constitución Política. En particular, afirma que las normas acusadas, en tanto establecen que el Registro Nacional de Turismo es un requisito previo para el funcionamiento de los establecimientos turísticos, vulneran al núcleo esencial de los principios de libertad económica y libertad de empresa reconocidos y “(...) contravienen abiertamente las formas de limitación consagradas en el texto Constitucional a tales libertades”. El actor fundamenta este cargo en las siguientes razones:</p> <p>1.2.1 El actor indica que la jurisprudencia constitucional, entre las que destaca las sentencias C-524 de 1995, C-870 de 2003, C-070 de 2004, C-486 de 2009, C-352 de 2009, ha señalado que la libertad económica debe entenderse como “(...) la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio”. Respecto a la libertad de empresa, añade que esta Corporación ha sostenido que “(...) implica el derecho a ejercer y desarrollar una determinada actividad económica con vista a obtener un beneficio o ganancia, de acuerdo con el modelo económico u organización institucional (...)”.</p> <p>1.2.2 Con fundamento en estas definiciones, en el artículo 333</p>

	<p>superior y en las providencias citadas, el demandante asegura que dichas libertades no son absolutas y pueden ser limitadas por la Ley. Sin embargo, sostiene que los motivos por los cuales pueden limitarse son exclusivamente: el bien común, la función social de la propiedad, el medio ambiente, el interés social y el patrimonio cultural de la Nación.</p> <p>1.2.3 También explica que las “formas Constitucionalmente permitidas para fijar los límites” de dichas libertades son de dos tipos: “1) Mediante la exigencia de permisos previos, o 2) Mediante la imposición de requisitos”. Asegura que el Constituyente empleó el adjetivo “previo” para calificar que el “permiso” debía ser anticipado, mientras que la palabra “requisito” empleada en el texto no es calificada con dicho adjetivo. Es por ello que el demandante considera que al Legislador le está permitido limitar las garantías de la libertad económica y la libertad de empresa sólo mediante la exigencia de permisos previos o estableciendo requisitos, siempre y cuando éstos últimos no sean previos.</p> <p>1.2.4 En este orden de ideas, el demandante concluye que “(...) el Legislador excedió sus facultades al imponer un requisito con carácter previo que hace nugatorio el ejercicio de actividades turísticas mientras no se haga la inscripción previa en el referido Registro Público, forma de limitación que como se vio no es Constitucionalmente idónea para impedir el ejercicio de una actividad económica pues como se dijo esto solo es posible a través de la exigencia de permisos previos empero esta no fue la forma de limitación utilizada por el Legislador que habiendo podido imponerla optó por establecer esta limitante como requisito motivo por el cual no es viable su exigencia previa para el desempeño de la actividad económica” (negrilla original).</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

Tipo de sentencia	C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD
Identificar la sentencia	Sentencia C-789/11
Fecha de la sentencia	veinte (20) de octubre de dos mil once (2011).
Demandante	Álvaro Diazgranados de Pablo.
Demandado	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 420 de 1998, “ <i>Por la cual se adicionan unos artículos de los Decretos-leyes 1211, 1212, 1213 de 1990 y del Decreto 1091 de 1995</i> ”.

Conoció en primera instancia	JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Decision	Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados en esta providencia, las expresiones “y por tanto desaparecerá como bonificación”, contenidas en el artículo 1º de la Ley 420 de 1998.
Conoció en segunda instancia	NO APLICA
Decision	NO APLICA
Hechos jurídicos	<p>Considera el demandante que el precepto impugnado desconoce lo establecido en los artículos 1º, 4º, 48 y 58 de la Constitución Política. Para el actor, la bonificación por compensación tenida en cuenta en el momento de la liquidación de la asignación de retiro de las mesadas pensionales, correspondía a un derecho personalísimo de orden patrimonial, que una vez reconocido y pagado quedaba incorporado en los derechos del beneficiario. Esta bonificación fue reconocida inicialmente al personal en servicio activo de la Fuerza Pública mediante el Decreto 2072 del 21 de agosto de 1997, sin que su cobertura incluyera al personal que se encuentra en retiro; por esta razón, el Congreso de la República corrigió la omisión y expidió la Ley 420 de 1998.</p> <p>Según el actor, el aparte demandado estableció que si la bonificación por compensación se llegara a incorporar en las asignaciones básicas del personal</p> <p>en servicio activo de la Fuerza Pública, tendría el mismo comportamiento en el momento de liquidar las asignaciones de retiro y pensiones. Así, al efectuarse el retiro de la respectiva fuerza, desaparece la figura de la bonificación por compensación, quebrantando los principios del Estado social de derecho.</p> <p>Al demandante resume su planteamiento explicando que si a un sector de trabajadores como son los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo le son incorporados en sus asignaciones básicas la bonificación por compensación, siendo un ingreso que mejora sus condiciones, a otro sector de colombianos se les desfavorece al eliminarles una partida que fue conferida por el Estado colombiano.</p>
Decision de la Corte	NO APLICA
Tiene salvamento	NO APLICA
Resumen del mismo	NO APLICA
Tiene aclaraciones	NO APLICA
Resumen de las aclaraciones	NO APLICA

## SENTENCIAS DE 2012

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	<b>Sentencia C-606/12</b>
<b>Fecha de la sentencia</b>	primero (1º) de agosto de dos mil doce (2012)
<b>Demandante</b>	Hernán Cristóbal Vargas Galeano
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (Parcial) de la Ley 361 de 1997
<b>Conoció en primera instancia</b>	ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
<b>Decision</b>	<p><i>Primero.- DECLARARSE INHIBIDA para resolver la demanda contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 361 de 1997, en relación con el cargo por violación del Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 25, 47, 48, 53, 54, 93; los numerales 2 y 4 del artículo 95; el literal a) del artículo 52, 230 de la Constitución y los elementos del bloque de constitucionalidad.</i></p> <p><i>Segundo.- DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “Servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley” del artículo 5º de la Ley 361 de 1997.</i></p>
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>El demandante manifiesta que el aparte subrayado del artículo 5º de la Ley 361 de 1997 vulnera el Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 25, 29, 47, 48, 49, 53, 54, 93 y 230; los numerales 2 y 4 del artículo 95; y el literal a) del artículo 152 de la Constitución.</p> <p>Señala que la disposición cuestionada quebranta importantes disposiciones internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Indica como infringidos el Convenio 159 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Impedidos - Resolución 3447 de 1975 de la ONU-, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad- AG. 48796, del 20 de diciembre de 1993 de la ONU-, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad<sup>75</sup>.</p> <p>3.2. A juicio del actor, la disposición acusada confiere un valor probatorio superlativo a la calificación de pérdida laboral que aparece en el carné de afiliación individual al Sistema de Seguridad Social.</p>

---

<sup>75</sup> p. 6

	<p>3.3. Señala que la exclusiva forma probatoria de discapacidad que en este caso es la inscripción explícita en el mentado carné, establece una regla de discriminación negativa en perjuicio de quienes, aun padeciendo alguna discapacidad, no cuentan con dicha calificación<sup>76</sup>. La diferenciación jurídica que crea identifica, de un lado, a los titulares de los derechos conferidos por la Ley 361 de 1997, entre ellos, el de estabilidad laboral reforzada del artículo 26 <i>ejusdem</i> y, de otro, a quienes en similares condiciones objetivas de debilidad manifiesta no son favorecidos con tales garantías legales.</p> <p>3.4. Señala igualmente que la aplicación de la norma acusada desencadena un inevitable desamparo para aquellos que, no obstante presentar disminuciones físicas y mentales, aún no han obtenido el dictamen definitivo que les certifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.</p> <p>3.5. Explica que el oneroso y pesado curso de un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, operado bajo las deficientes dinámicas con que funciona el sistema de seguridad social en Colombia, a su parecer, se traduce en un prolongado e injusto período de desprotección legal a una persona con alguna limitación, pues la acreditación solo se surte siempre que las EPS mediante diagnóstico médico soliciten y verifiquen la información.</p> <p>3.6. Afirma que en el caso de los trabajadores existe un lapso de tiempo en donde el empleado discapacitado debe esperar para ser calificado como tal. Este período se cuenta desde el momento de origen de la patología hasta la verificación e inclusión de la inscripción en el carné individual por parte de la EPS. Para el demandante dicho período se cuenta como una desprotección por la falta de carné de afiliación individual al sistema de seguridad social.</p> <p>3.7. Aduce que de la norma acusada se infiere que los trabajadores al sufrir alguna enfermedad o accidente durante la vigencia del contrato laboral, quedan exceptuados de la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, hasta tanto no obtengan la inscripción y el carné. Igualmente alega que la demora considerable de protección-leyenda de la condición discapacitante-, frente a derechos como la estabilidad laboral reforzada de los</p>
--	--

---

<sup>76</sup> Dice la demandante que, “Esto no solamente contradice uno de los principios cardinales del derecho probatorio en materia laboral, que es el del libre convencimiento del juez al cual se llega a través del análisis no tarifado de los medios de prueba (art. 61 del C.P.T. y de la S.S), sino que establece una discriminación negativa inadmisibles entre sujetos de especial protección constitucional que se encuentran de forma objetiva en situación de debilidad manifiesta” (Ibíd., p. 2).

	<p>discapacitados, su rehabilitación integral y el acceso al sistema de seguridad social, vuelve inútil cualquier postulado de especial protección constitucional de estos sujetos.</p> <p>3.8. Por otro lado respecto de una eventual violación al artículo 29 de la C.P.<sup>77</sup>, manifiesta que la expresión demandada afecta gravemente el proceso de libre convencimiento del juez, basado en un sistema no tarifado de los medios de prueba. Esto, por cuanto el epígrafe en el carné de afiliación se ratifica como prueba unívoca para demostrar la titularidad de los derechos vertidos en la Ley 361 de 1997. Por ende, estima que la condición <i>ad substantiam actus</i> de la prueba “(...) <i>no resulta razonable, proporcionada y necesaria para que los cometidos de dicha normativa puedan cumplirse en la praxis jurídica y cotidiana (...)</i>”<sup>78</sup> pues otros medios de prueba válidos en un sistema no tarifado estarían vetados.</p> <p>Indica que de seguirse esta línea de razonamiento, la protección jurídica a personas con limitaciones que acrediten su condición por otros medios como testimonios, historias clínicas o recomendaciones de las EPS o ARP, acabaría anulada. Estima por tanto que la prueba del carné como único medio para certificar la condición de discapacidad evidencia la desproporción de la medida normativa frente a personas en igual situación de debilidad manifiesta.</p> <p>3.9. Para finalizar, señala que el aparte acusado promueve un trato discriminatorio en otros escenarios. Al respecto, puede pensarse en las personas que por oposición a las que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social y gozan de los beneficios de la Ley 361 de 1997, no están bajo el amparo del Sistema, requisito <i>sine qua non</i> para acceder a tales beneficios. También cita a quienes no tienen recursos para iniciar el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral y en consecuencia, no podrían, ni hipotéticamente, pretender amparo como sujetos de especial protección.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA

<sup>77</sup> “ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.*

<sup>78</sup> Folio 6.



## SENTENCIAS DE 2013

<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÒN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	C-066 DE 2013
<b>Fecha de la sentencia</b>	once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
<b>Demandante</b>	<b>Carlos Alberto Parra Dussan.</b>
<b>Demandado</b>	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3° y 36 (parciales) de la Ley 361 de 1997 <i>“por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”</i> .
<b>Conoció en primera instancia</b>	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
<b>Decision</b>	<b>PRIMERO.-</b> Declarar <b>EXEQUIBLE</b> la expresión <i>“la normalización social plena”</i> contenida en el artículo 3° de la Ley 361 de 1997, en el entendido que que refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social. <b>SEGUNDO.-</b> Declarar <b>EXEQUIBLE</b> , la expresión <i>“normalización de”,</i> contenida en el artículo 36 de la Ley 361 de 1997.
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	<p>El actor considera que la expresión acusada, según la cual el tratamiento de las personas en situación de discapacidad debe estar dirigido, entre otros asuntos, hacia su <i>normalización</i>, es contraria a los artículos 1°, 7°, 13, 47, 68 y 70 de la Constitución Política, al igual que a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional incorporado a la legislación interna por la Ley 1346 de 2009, y a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por Colombia mediante la Ley 762 de 2002, ambos tratados integrantes del bloque de constitucionalidad.</p> <p>3.1. El argumento central de la demanda consiste en señalar que a partir de los más recientes compromisos de derecho internacional que ha asumido el Estado colombiano en materia de tratamiento de las personas en situación de discapacidad, la <i>única</i> perspectiva de análisis admisible es el <i>enfoque de derechos</i>. Esto involucra que las personas en situación de discapacidad deben recibir por parte del Estado un trato basado en la eficacia de sus derechos, dentro de un marco de inclusión y reconocimiento de sus diferencias. Por ende, toda visión fundada en la protección mediante la normalización de esas personas, entendida como equiparación a la población no discapacitada, implica un tratamiento discriminatorio injustificado, al igual que el desconocimiento de los derechos reconocidos en los mencionados</p>

instrumentos internacionales.

Para ello, parte de una exposición sobre el contenido de las mencionadas Convenciones, así como de otros documentos internacionales sobre la definición de la discapacidad, para sostener que en esos instrumentos ha primado el *modelo social*, basado en la superación de las barreras contra la población discapacitada y con ello lograr su inclusión. Esa perspectiva, a su juicio, es contraria a las normas que al prever el modelo de la normalización, imponen esa carga a las personas en situación de discapacidad.

3.2. De igual manera, el valor semiótico del término *normalización* es contrario al pluralismo y el reconocimiento a la diferencia que prescribe la Constitución. Por esta razón, resalta cómo la Corte ha adoptado distintas sentencias en donde ha declarado la inexequibilidad de expresiones legales que, al tener esa carga de significado, son contrarias a la Carta Política. Agrega, en este mismo sentido, que el lenguaje jurídico tiene profunda incidencia en la eficacia de los derechos constitucionales. Por ende, el término *normalización* discrimina a la población discapacitada, en tanto refuerza la invisibilización y exclusión a la que cotidianamente es sometida. De forma correlativa, una modificación del lenguaje jurídico lleva, en criterio del actor, a un escenario proclive a la superación de dicha exclusión, puesto que “... *la mejor forma de expresar nuestra concepción del mundo y de reflejar cómo es nuestra sociedad, es a través del uso del lenguaje. Éste puede ser un instrumento de cambio, de transferencia de conocimiento y cultura, pero también puede ser una de las expresiones más importantes de desigualdad, ya que manifiesta por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad y cómo en ésta se invisibiliza, excluye y se discrimina a la través de la “anormalidad”.*”

3.3. En una segunda etapa de su análisis, el actor contrasta el *modelo social*, en el que considera que están insertas las normas constitucionales relativas a la discapacidad, y la cultural de la normalidad. Mientras el primero propugna por el reconocimiento e inclusión de las personas en situación de discapacidad, a través de la remoción de las barreras físicas, institucionales y jurídicas que impiden su acceso a los distintos derechos y posiciones jurídicas, la segunda se fundamenta en concebir a la discapacidad como una anomalía objeto de intervención clínica, en aras de lograr la readaptación del discapacitado, a partir de su incorporación al estándar de la población no discapacitada. Así, habida cuenta que tanto los instrumentos internacionales sobre discapacidad como las reglas constitucionales de derecho interno se basan en el modelo social, también denominado bio-psico-social, entonces el concepto jurídico *normalización* deviene inexecutable.

3.4. En tercer lugar, el actor explica cómo el concepto *normalización*

	<p>contradice el carácter pluralista y multicultural de la Constitución colombiana, que en su criterio no solo opera como ámbito de protección de las expresiones culturales, sino también de las personas en situación de discapacidad, en tanto población diferenciada que debe ser promovida mediante la inclusión social. En términos de la demanda, “[s]e trata de visibilizar los grupos excluidos, luchar contra la discriminación, empoderar los grupos socialmente excluidos y generar políticas sociales y económicas inclusivas, que garanticen el fortalecimiento de la democracia, la promoción de la solidaridad ciudadana y los derechos sociales.    La noción de inclusión hace referencia a involucrar, implicar, hacer parte, pertenecer conjuntamente a otros. Estar socialmente incluido implica el reconocimiento de sí, del otro, de su propia identidad, la libertad de participar en todos los aspectos de la vida en comunidad, la capacidad de elección, deliberación y toma de decisiones y la posibilidad de contar con diversas opciones y oportunidades que ayuden a desarrollar los proyectos de vida.    La inclusión aparece, entonces, como un proceso que garantiza que las personas en situación de riesgo y exclusión social lleguen a tener las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente y en igualdad de derechos en la vida económica, social y cultural, respetando su diversidad cultural e identidad.”</p> <p>3.5. Por último, el actor sostiene que los instrumentos internacionales en materia de discapacidad que ha ratificado el Estado colombiano hacen parte del bloque de constitucionalidad, pues cumplen con las condiciones exigidas por el artículo 93 C.P. Ello debido a que (i) se trata de tratados que reconocen derechos humanos; (ii) los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser desconocidos durante los estados de excepción, al estar relacionados con la cláusula general de libertad y la dignidad, entre otros derechos intangibles; (iii) los tratados desarrollan varios derechos fundamentales contenidos en la Constitución, en especial aquellos particularmente reconocidos a las personas en situación de discapacidad; y (iv) las Convenciones versan sobre derechos que hacen parte del <i>ius cogens</i>, particularmente el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, como la libertad y la prohibición de la esclavitud.</p> <p>En consecuencia, estas normas conforman el parámetro para la evaluación de la constitucionalidad de la expresión acusada. Así, como estas Convenciones adoptan el <i>modelo social</i>, incompatible con la pretensión de normalización de la personas con discapacidad, entonces el aparte acusado deviene inexecutable.</p>
<b>Tiene salvamento</b>	SI DRA. <b>MARIA VICTORIA CALLE CORREA</b> y DR. <b>LUIS ERNESTO VARGAS SILVA</b>
<b>Resumen del mismo</b>	<p>Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las razones que me llevan a aclarar el voto en la presente sentencia.</p> <p>En la solución del cargo, la posición mayoritaria consideró que aun</p>

cuando la expresión “*normalización*” reflejaba una visión de las personas con discapacidad como seres incompletos, o limitados y por esa vía se podía perpetuar la discriminación y marginación en contra de las personas con discapacidad, con base en el principio de conservación del derecho, optó por reinterpretar ese concepto.

A pesar de coincidir que el término “*normalización*” puede tener acepciones benévolas, cuando una palabra como esa, proyecta una imagen tan poderosa como discriminatoria de lo que es “*normal*” y lo que es “*anormal*”, debe procurar precisarse la comprensión del lenguaje que se utiliza en una norma que hace parte del ordenamiento.

Ello porque el lenguaje tiene un poder transformador o perpetuador de patrones de discriminación. El que se llame a alguien “*ciego*”, “*sordo*”, “*anormal*”, automáticamente trae una imagen negativa y de rechazo para quien es descrito con esos adjetivos, así esos adjetivos puedan ser leídos de manera “*bondadosa*” y científicamente exista una explicación sobre el factor biológico que ha generado un obstáculo para que alguien vea, oiga, o aprenda de determinada manera.

Bajo el enfoque social que se menciona, aún personas con talentos excepcionales, que a la luz científica o médica no son personas “*anormales*” que requieran ser “*tratadas*”, “*curadas*”, o “*rehabilitadas*,” bajo este enfoque pueden llegar a ser reconocidas como personas con discapacidad porque el entorno transforma esas habilidades excepcionales en discapacidades y obstáculos para garantizar sus derechos en igualdad de condiciones.

El término “*normalización*”, podría reproducir un patrón de discriminación frente a la discapacidad. Esto porque tanto la sociedad como los individuos con discapacidad han sido percibidos y se auto perciben bajo el enfoque “*normalización*” como personas que deben ser tratadas para llegar a ser “*normales*” y en esa medida, así las palabras tengan otros sentidos menos gravosos, si la ley, las autoridades y la sociedad mantienen en su imaginario esa visión, la palabra “*normalización*,” aún reinterpretada, mantendrá el patrón de discriminación. Si se le solicita a un arquitecto que diseñe accesos “*normales*” para subir de un piso a otro, tal término no generará automáticamente la idea de acceso universal ni de remoción de obstáculos para personas con discapacidad, porque lo “*normal*” para la mayoría, son las escaleras. El común de las personas asimila lo “*normal*”, a lo que es más común.

Sin embargo, hoy en día es inaceptable hablar de las personas con discapacidad como seres enfermos o incompletos, ese patrón de discriminación debe ser removido. Por eso contribuye al cumplimiento del deber constitucional que impone el artículo 13 de la Carta de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y

adoptar medidas a favor de quienes son discriminados o marginados, y remover los obstáculos que genera el lenguaje en contra de las personas con discapacidad.

Mantener el término normalización para traducirlo “*bajo una visión constitucional*” e imponerle una obligación particular al Estado frente a las personas con discapacidad, en este caso, permite que el lenguaje usado refleje a su vez, un cambio en la forma de pensar y de comprender la situación. Los límites deben desvanecerse, ante personas que son capaces de sobreponerse a los prejuicios. Para que el principio de igualdad sea realmente respetado, no basta con garantizar los mismo derechos a todas las personas de manera separada; La igualdad implica, necesariamente, el deber de no separar, marginar o de excluir a ninguna persona.

En gran medida el problema de las personas con discapacidad es el contexto social, pues los efectos negativos de los impedimentos físicos o síquicos derivan de la existencia de entornos sociales intolerantes, más que de las afectaciones síquicas o físicas. En cierto sentido, es la sociedad la que carece de la capacidad de integrar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. El gran cambio frente a la discapacidad de las ultimas décadas ha consistido precisamente en reconocer este hecho elemental, a saber, que un medio social negativo puede convertir la discapacidad en invalidez, y que por el contrario, un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con algún tipo de discapacidad. La conclusión obvia es que es entonces necesario transformar esos entornos sociales discriminatorios e intolerantes en ambiente favorables a la integración y al desarrollo con dignidad de los discapacitados.

Es por esta razón que se encontró que la expresión “normalización”, no tiene el significado discriminatorio que le atribuyó el demandante en este proceso al formular sus cargos, por cuanto no puede ser entendida como que se refiere a la persona con discapacidad, sino a la sociedad y a su entorno familiar, en aras de garantizar su inclusión real en la vida social. Hace alusión la palabra dentro del contexto de las normas que la contienen, al deber de los grupos sociales de crear las condiciones que faciliten la integración de las personas en situación de discapacidad sin barreras físicas, sociales y jurídicas, tal como se dijo en la sentencia.

*Fecha ut supra*, MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada

Con el respeto acostumbrado a las sentencias adoptadas por la Corte, manifiesto mi aclaración y salvamento parcial de voto frente a lo decidido por la Sala Plena en el fallo C-066 del 11 de febrero de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), en la cual la Corte declaró (i) exequible la expresión “*la normalización social plena*” contenida en el artículo 3°

de la Ley 361 de 1997, en el entendido que refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social; y (ii) exequible la expresión “*normalización de*”, contenida en el artículo 36 de la misma Ley.

1. El argumento central de mi desacuerdo con la ponencia consiste en considerar que el concepto “*normalización*” es contrario a la Constitución. Ello debido a que contiene elementos semánticos y de interpretación que comportan actos de discriminación. Por ende, debe resaltarse que el modelo social, que propone la inclusión de las personas en situación de discapacidad a través de la remoción de barreras, implica un mandato al Estado que debe ser de “*inclusión*” y no de “*normalización*”. Como dicho modelo social, según lo ha considerado la misma jurisprudencia constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, es el que mejor desarrolla y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, el concepto de “*normalización*” involucra un tratamiento discriminatorio injustificado contra el mencionado grupo.

2. Contrario a como lo decidió la mayoría, advierto que en el caso analizado no estaban presentes dos tipos de interpretación posible de las normas acusadas, uno fundado en considerar que la pretendida *normalización* opera como parámetro de comparación frente a las personas en situación de discapacidad y otro basado en advertir que la *normalización* refiere al ambiente en que se desenvuelve el discapacitado y la necesidad que no ofrezca barreras en su contra. En mi criterio, la *normalización* solo puede ser comprendida como un criterio discriminatorio, que apela necesariamente a la superación de la situación de discapacidad y, por ende, a su descalificación jurídica.

Los fundamentos jurídicos planteados en la sentencia son coincidentes en sostener que el lenguaje jurídico tiene una carga emotiva particular, que puede mostrarse por sí es discriminatoria, al margen de los esfuerzos hermenéuticos que realice el intérprete para hacerla compatible con la Constitución. En mi criterio, el concepto *normalización* no puede ser entendido de otra manera que con una obligada referencia al estándar óptimo, a lo arbitrariamente considerado como *normal*. Este parámetro se opone al tratamiento que la Constitución confiere a las personas que están en situación de discapacidad, el cual se basa precisamente en lo contrario: el reconocimiento de la persona en su diferencia y en sus particularidades.

Lo *normal* como deseable tiene una evidente carga valorativa, que discrimina a la persona en situación de discapacidad, quien injustamente es calificada como disminuida o incompleta. Precisamente, el paso del modelo rehabilitador al modelo social, como se explica en la sentencia, tuvo entre sus fundamentos la necesidad de dejar de considerar a la discapacidad como una anomalía, para

	<p>convertirla en una condición particular de los individuos, que los identifica en su individualidad y que, por ese mismo motivo, no puede ser objeto de censura o, menos aún, de superación o alivio.</p> <p>Las modalidades de discriminación contra las personas en situación de discapacidad son, por ende, complejas y van más allá que la simple imposición de barreras jurídicas y fácticas para el disfrute de los derechos fundamentales. A mi juicio, la simple consideración de un patrón calificado como deseable o como un punto de llegada para las personas en situación de discapacidad es, en sí misma y sin duda alguna, contraria a una concepción material del principio de igualdad. Esto debido a que la discapacidad, asumida desde el respeto de los derechos fundamentales, no es una situación superable o comparable, sino una particularidad de las personas, quienes deben ser incluidas sin calificar su diferencia, ni menos aún propender porque sea modificada hacia un parámetro tan irreal como arbitrario.</p> <p>3. El carácter parcial del salvamento de voto se explica en que comparto con la mayoría que (i) el modelo social es el que se muestra más adecuado para proteger los derechos de la persona en situación de discapacidad; y (ii) la Constitución ordena y propugna por la eliminación de las barreras físicas y jurídicas del entorno social, las cuales impiden el acceso a los derechos por parte de los discapacitados. Sin embargo, también advierto que no es acertado sostener simultáneamente la validez de estas premisas y la constitucionalidad del término <i>normalización</i>. De allí que en la ponencia original expresé que la solución para el caso analizado era adoptar una sentencia integradora sustitutiva,<sup>79</sup> la cual declarara la inexequibilidad de la expresión “<i>normalización</i>” y con el fin de evitar un vacío normativo, procediera a sustituirla por el término “<i>inclusión</i>”, concepto por entero compatible con el modelo social de la discapacidad y del mismo modo, justificado jurídicamente en los mandatos de la CDPD, los cuales propugnan por la eliminación de las barreras impuestas a la población con discapacidad y su correlativa integración y participación social, en tanto sujetos libres y autónomos. Como esta alternativa no fue acogida por el Pleno, ello justifica que me separe de la decisión adoptada.</p> <p>Estos son los motivos de mi disenso.</p> <p>Fecha <i>ut supra</i>, <b>LUIS ERNESTO VARGAS SILVA</b></p>
<b>Tiene aclaraciones</b>	SI DR. <b>LUIS ERNESTO VARGAS SILVA</b>
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	Contenida en el salvamento de voto transcrito.

---

<sup>79</sup> Esta alternativa de sentencia interpretativa ha sido utilizada por la Corte en varias ocasiones. *Vid.* Sentencia C-325/09.





<b>Tipo de sentencia</b>	<b>C REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD</b>
<b>Identificar la sentencia</b>	
<b>Fecha de la sentencia</b>	
<b>Demandante</b>	
<b>Demandado</b>	
<b>Conoció en primera instancia</b>	
<b>Decision</b>	
<b>Conoció en segunda instancia</b>	NO APLICA
<b>Decision</b>	NO APLICA
<b>Hechos jurídicos</b>	
<b>Tiene salvamento</b>	NO APLICA
<b>Resumen del mismo</b>	NO APLICA
<b>Tiene aclaraciones</b>	NO APLICA
<b>Resumen de las aclaraciones</b>	NO APLICA